ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

WT/DS241/R
22 de abril de 2003

(03-1961)

Original: inglés

ARGENTINA - DERECHOS ANTIDUMPING DEFINITIVOS SOBRE LOS POLLOS PROCEDENTES DEL BRASIL

Informe del Grupo Especial

El informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto Argentina - Derechos antidumping definitivos sobre los pollos procedentes del Brasil se distribuye a todos los Miembros, de conformidad con el *ESD*. El informe es objeto de distribución general a partir del 22 de abril de 2003 de conformidad con los Procedimientos para la distribución y la supresión del carácter reservado de los documentos de la OMC (WT/L/160/Rev.1). Se recuerda a los Miembros que, de conformidad con el *ESD*, sólo las partes en la diferencia podrán recurrir en apelación contra el informe de un grupo especial. La apelación tendrá únicamente por objeto las cuestiones de derecho tratadas en el informe del Grupo Especial y las interpretaciones jurídicas formuladas por éste. No habrá comunicaciones *ex parte* con el Grupo Especial ni con el Órgano de Apelación en relación con asuntos sometidos a la consideración del Grupo Especial o del Órgano de Apelación.

Nota de la Secretaría: El presente informe del Grupo Especial será adoptado por el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) dentro de los 60 días siguientes a la fecha de su distribución, a menos que una parte en la diferencia decida recurrir en apelación o que el OSD decida por consenso no adoptar el informe. En caso de que se recurra en apelación contra el informe del Grupo Especial, éste no será considerado por el OSD a efectos de su adopción hasta después de haber concluido el procedimiento de apelación. Puede obtenerse información acerca de la situación actual del informe del Grupo Especial en la Secretaría de la OMC.

ÍNDICE

Página

I. INTRODUCCIÓN 1

II. ELEMENTOS DE HECHO 2

III. CONSTATACIONES Y RECOMENDACIONES SOLICITADAS POR LAS PARTES 4

A. BRASIL 4

B. ARGENTINA 9

IV. ARGUMENTOS DE LAS PARTES 9

V. ARGUMENTOS DE LOS TERCEROS 10

VI. REEXAMEN INTERMEDIO 10

A. PROCEDIMIENTOS PREVIOS EN EL MARCO DEL MERCOSUR 10

B. RECLAMACIÓN 10 11

C. RECLAMACIÓN 11 11

D. RECLAMACIÓN 13 12

E. RECLAMACIÓN 17 12

F. RECLAMACIÓN 21 13

G. RECLAMACIÓN 22 13

H. RECLAMACIÓN 27 14

I. RECLAMACIONES 28 A 30 14

VII. CONSTATACIONES 14

A. CUESTIONES PRELIMINARES 14

1. Divulgación de posiciones escritas - Párrafo 2 del artículo 18 del *ESD* 15

a) Argumentos de las partes/de los terceros 15

b) Evaluación del Grupo Especial 16

2. Procedimientos previos en el marco del MERCOSUR 18

a) Argumentos de las partes/de los terceros 18

b) Evaluación del Grupo Especial 23

B. CUESTIONES DE CARÁCTER GENERAL 27

1. Norma de examen 27

2. Carga de la prueba 29

C. RECLAMACIONES RELATIVAS AL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN/SUPUESTAS INFRACCIONES DE CARÁCTER PROCESAL EN LA INVESTIGACIÓN 30

1. Suficiencia de las pruebas que justifican la iniciación de la investigación - Reclamaciones 2, 4, 6 y 8 30

a) Argumentos de las partes 30

i) Reclamación 2 30

Página

ii) Reclamación 4 ..... *31*
iii) Reclamación 6 ..... *32*
iv) Reclamación 8 ..... *32*
b) Evaluación del Grupo Especial 32
i) Reclamación 2 ..... *34*
ii) Reclamación 4 ..... *37*
iii) Reclamación 6 ..... *39*
iv) Reclamación 8 ..... *41*
c) Conclusión 41
2. Suficiencia de la solicitud - Reclamaciones 1 y 5 41
a) Argumentos de las partes 41
i) Reclamación 1 ..... *41*
ii) Reclamación 5 ..... *42*
b) Evaluación del Grupo Especial 43
3. Negativa a rechazar la solicitud - Reclamaciones 3, 7 y 31 44
a) Argumentos de las partes 44
i) Reclamaciones 3 y 7 ..... *44*
ii) Reclamación 31 ..... *44*
b) Evaluación del Grupo Especial 45
i) Reclamación 31 ..... *45*
ii) Reclamaciones 3 y 7 ..... *46*
c) Conclusión 47
4. Examen simultáneo de las pruebas y negativa a rechazar de la solicitud - Reclamación 9 47
a) Argumentos de las partes/de los terceros 47
b) Evaluación del Grupo Especial 48
c) Conclusión 50
5. Omisión de notificar a los exportadores conocidos - Reclamación 10 51
a) Argumentos de las partes 51
b) Evaluación del Grupo Especial 52
c) Conclusión 54
6. Omisión de dar un plazo de 30 días para responder al cuestionario/Omisión de facilitar el cuestionario relativo al daño - Reclamación 11 54
a) Argumentos de las partes 54
b) Evaluación del Grupo Especial 54

Página

c) Conclusión 57
7. Omisión de poner las pruebas inmediatamente a disposición de algunos exportadores brasileños - Reclamación 12 57
a) Argumentos de las partes 57
b) Evaluación del Grupo Especial 58
c) Conclusión 59
8. Derecho de la parte interesada a defender sus intereses - Reclamación 13 59
a) Argumentos de las partes 59
b) Evaluación del Grupo Especial 60
c) Conclusión 62
9. Omisión de facilitar oportunamente el texto completo de la solicitud escrita - Reclamación 14 62
a) Argumentos de las partes 62
b) Evaluación del Grupo Especial 62
c) Conclusión 65
10. Utilización de los hechos de que se tenga conocimiento - Reclamaciones 15, 17 y 19 65
a) Argumentos de las partes 65
i) Reclamación 15 65
ii) Reclamación 17 66
iii) Reclamación 19 66
b) Evaluación del Grupo Especial 67
i) Reclamación 15 67
ii) Reclamación 17 67
iii) Reclamación 19 69
c) Conclusión 73
11. Omisión de dar aviso público de la conclusión de una investigación - Reclamaciones 16, 18 y 20 73
a) Argumentos de las partes 73
i) Reclamación 16 73
ii) Reclamación 18 74
iii) Reclamación 20 74
b) Evaluación del Grupo Especial 74
c) Conclusión 75
12. Cálculo de un margen de dumping individual - Reclamación 22 75
a) Argumentos de las partes 75

Página

b) Evaluación del Grupo Especial 76
c) Conclusión 77
13. Hechos esenciales - Reclamación 21 77
a) Argumentos de las partes/de los terceros 77
b) Evaluación del Grupo Especial 77
c) Conclusión 80
D. REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y DETERMINACIÓN POSITIVA DEFINITIVA 80
1. No introducción de un ajuste por concepto de flete – Reclamación 23 80
a) Argumentos de las partes 80
b) Evaluación del Grupo Especial 81
c) Conclusión 83
2. No introducción de diversos ajustes para tener en cuenta diferencias comunicadas por JOX - Reclamación 24 83
a) Argumentos de las partes 83
b) Evaluación del Grupo Especial 84
c) Conclusión 85
3. Diferencias en las características físicas que justifican un ajuste - Reclamación 25 85
a) Argumentos de las partes 85
b) Evaluación del Grupo Especial 86
c) Conclusión 87
4. Período de recopilación de datos relativos al dumping - Reclamación 26 87
a) Argumentos de las partes/de los terceros 87
b) Evaluación del Grupo Especial 88
c) Conclusión 88
5. Muestreo de transacciones de venta en el mercado interno - Reclamación 27 88
a) Argumentos de las partes 88
b) Evaluación del Grupo Especial 88
c) Conclusión 90
6. Determinación de la existencia de daño - Reclamación 32 90
a) Argumentos de las partes 90
b) Evaluación del Grupo Especial 92
c) Conclusión 94

Página

7. Omisión de explicar por qué la CNCE examinó datos de 1999 respecto de determinados factores de daño pero no respecto de otros - Reclamación 33 95

a) Argumentos de las partes 95

b) Evaluación del Grupo Especial 95

c) Conclusión 95

8. No exclusión del efecto de las importaciones que no fueron objeto de dumping en la determinación de la existencia de daño - Reclamaciones 34 a 37 95

a) Argumentos de las partes/de los terceros 96

b) Evaluación del Grupo Especial 96

c) Conclusión 98

9. Omisión del examen de cada uno de los factores e índices de daño que influían en el estado de la rama de producción nacional - Reclamaciones 38 a 40 98

a) Argumentos de las partes/de los terceros 99

b) Evaluación del Grupo Especial 99

i) Productividad 100

ii) Factores que afectaban a los precios internos 100

iii) Magnitud del margen de dumping 102

iv) Efectos negativos reales o potenciales en el flujo de caja ("cash flow"), el crecimiento, la capacidad de reunir capital o la inversión 103

c) Conclusión 104

10. Rama de producción nacional - Reclamación 41 105

a) Argumentos de las partes/de los terceros 105

b) Evaluación del Grupo Especial 106

c) Conclusión 108

11. Establecimiento de derechos variables - Reclamaciones 28 a 30 108

a) Argumentos de las partes/de los terceros 109

b) Evaluación del Grupo Especial 110

c) Conclusión 116

E. INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO VI DEL GATT DE 1994 Y DEL ARTÍCULO 1 DEL *ACUERDO ANTIDUMPING* 117

a) Argumentos de las partes 117

b) Evaluación del Grupo Especial 117

c) Conclusión 117

Página

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 117

A. CONCLUSIONES 117

B. ANULACIÓN O MENOSCABO 119
C. RECOMENDACIÓN 120

LISTA DE ANEXOS

ANEXO A

Brasil

Índice		Página
Anexo A-1	Primera comunicación escrita del Brasil	A-2
Anexo A-2	Declaración oral del Brasil - Primera reunión con el Grupo Especial	A-120
Anexo A-3	Segunda comunicación escrita del Brasil	A-134
Anexo A-4	Respuestas del Brasil a las preguntas del Grupo Especial - Primera reunión	A-166
Anexo A-5	Segunda declaración oral del Brasil	A-199
Anexo A-6	Respuestas del Brasil a las preguntas del Grupo Especial - Segunda reunión	A-214
Anexo A-7	Observaciones del Brasil sobre las respuestas de la Argentina a las preguntas del Grupo Especial - segunda reunión	A-228

ANEXO B

Argentina

Índice		Página
Anexo B-1	Primera comunicación escrita de la Argentina	B-2
Anexo B-2	Primera declaración oral de la Argentina	B-70
Anexo B-3	Segunda comunicación escrita de la Argentina	B-83
Anexo B-4	Respuestas de la Argentina a las preguntas del Brasil - Primera reunión	B-98
Anexo B-5	Segunda declaración oral de la Argentina	B-124
Anexo B-6	Respuestas de la Argentina a las preguntas del Grupo Especial - Segunda reunión	B-142
Anexo B-7	Respuestas de la Argentina a las preguntas del Brasil - Segunda reunión	B-156
Anexo B-8	Observaciones de la Argentina sobre las respuestas del Brasil a las preguntas del Grupo Especial - segunda reunión - Segunda reunión	B-157
Anexo B-9	Observaciones de la Argentina sobre la Segunda declaración oral del Brasil	B-161

ANEXO C

Comunicaciones en calidad de tercero

Índice		Página
Anexo C-1	Comunicación de tercero presentada por el Canadá	C-2
Anexo C-2	Comunicación de tercero presentada por las Comunidades Europeas	C-5
Anexo C-3	Comunicación de tercera parte presentada por Guatemala	C-18
Anexo C-4	Comunicación de tercera parte presentada por Paraguay	C-22
Anexo C-5	Comunicación de tercero presentada por los Estados Unidos	C-24
Anexo C-6	Presentación de Paraguay	C-39
Anexo C-7	Intervención de Chile	C-32
Anexo C-8	Declaración oral de los Estados Unidos en la reunión de los terceros con el Grupo Especial	C-33
Anexo C-9	Comunicación oral del Canadá en calidad de tercero	C-35
Anexo C-10	Declaración oral de las Comunidades Europeas en calidad de tercero	C-36
Anexo C-11	Respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas del Grupo Especial	C-39
Anexo C-12	Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas del Grupo Especial a los terceros	C-41

I. INTRODUCCIÓN

1.1 El 7 de noviembre de 2001, el Brasil solicitó la celebración de consultas con la Argentina de conformidad con el artículo 4 del *Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias* (el "*ESD*"), el artículo XXII del *Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994* (el "*GATT de 1994*"), el artículo 17 del *Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994* (el "*Acuerdo Antidumping*"), incluido el párrafo 4 del artículo 17 de este último, y el artículo 19 del *Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994* (el "*Acuerdo sobre Valoración en Aduana*") con respecto a las medidas antidumping impuestas por la Argentina sobre las importaciones de pollos procedentes del Brasil.[1] La Argentina y el Brasil celebraron consultas el 10 de diciembre de 2001, pero no lograron solucionar la diferencia.

1.2 El 19 de noviembre de 2001, las Comunidades Europeas solicitaron, de conformidad con el párrafo 11 del artículo 4 del *ESD*, que se les asociara a las consultas.[2]

1.3 El 25 de febrero de 2002, el Brasil solicitó el establecimiento de un grupo especial de conformidad con el artículo XXII del *GATT 1994*, el artículo 17 del *Acuerdo Antidumping* y el artículo 6 del *ESD*.[3]

1.4 En su reunión de 17 de abril de 2002, el Órgano de Solución de Diferencias (el "OSD") estableció este Grupo Especial de conformidad con el artículo 6 del *ESD* para que examinara el asunto sometido al OSD por el Brasil en el documento WT/DS241/3. En esa reunión, las partes en la diferencia acordaron asimismo que el Grupo Especial se estableciera con el mandato uniforme. El mandato es, en consecuencia, el siguiente:

> "Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes de los acuerdos abarcados que ha invocado el Brasil en el documento WT/DS241/3, el asunto sometido al OSD por el Brasil en ese documento y formular conclusiones que ayuden al OSD a hacer las recomendaciones o dictar las resoluciones previstas en dichos acuerdos."

1.5 El 17 de junio de 2002, el Brasil pidió al Director General que estableciera la composición del Grupo Especial, de conformidad con el párrafo 7 del artículo 8 del *ESD*. Dicho párrafo dispone lo siguiente:

> "Si no se llega a un acuerdo sobre los integrantes dentro de los 20 días siguientes a la fecha del establecimiento del grupo especial, a petición de cualquiera de las partes, el Director General, en consulta con el Presidente del OSD y con el Presidente del Consejo o Comité correspondiente, establecerá la composición del grupo especial, nombrando a los integrantes que el Director General considere más idóneos con arreglo a las normas o procedimientos especiales o adicionales previstos al efecto en el acuerdo o acuerdos abarcados a que se refiera la diferencia, después de consultar a las partes en ella. El Presidente del OSD comunicará a los Miembros la composición del grupo especial así nombrado a más tardar 10 días después de la fecha en que haya recibido dicha petición."

---

[1] Documento WT/DS241/1.

[2] Documento WT/DS241/2.

[3] Documento WT/DS241/3.

1.6 El 27 de junio de 2002, el Director General procedió en consecuencia a establecer la composición del Grupo Especial, que es la siguiente[4]:

Presidente: Sr. Harsha V. Singh

Miembros: Sra. Enie Neri de Ross
Sr. Michael Mulgrew

1.7 El Canadá, Chile, las Comunidades Europeas, los Estados Unidos, Guatemala y el Paraguay se reservaron el derecho de participar en las actuaciones del Grupo Especial en calidad de terceros.

1.8 El Grupo Especial se reunió con las partes los días 25 y 26 de septiembre de 2002 y 26 de noviembre de 2002. El Grupo Especial se reunió con los terceros el 26 de septiembre de 2002.

1.9 El Grupo Especial presentó su informe provisional a las partes el 25 de febrero de 2003. El Grupo Especial presentó su informe definitivo a las partes el 8 de abril de 2003.

II. ELEMENTOS DE HECHO

2.1 La presente diferencia se refiere a la imposición por la Argentina de medidas antidumping a las importaciones de pollos procedentes del Brasil.

2.2 El 2 de septiembre de 1997, el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas ("CEPA") presentó a la Subsecretaría de Comercio Exterior ("SSCE"), que posteriormente se convirtió en la Subsecretaría de Industria, Comercio y Minería (la "SSICM") una solicitud de que se iniciara una investigación antidumping. El CEPA alegó que las importaciones argentinas de pollos procedentes del Brasil se estaban realizando a precios de dumping y que esas importaciones constituían una amenaza de daño importante para la rama de producción nacional.[5] El 23 de septiembre de 1997, la Comisión Nacional de Comercio Exterior (la "CNCE") emitió un dictamen acerca de la representatividad de la rama de producción nacional y, el 21 de noviembre de 1997, la SSCE aceptó la solicitud presentada por el CEPA.

2.3 El 7 de enero de 1998, el Área de Prácticas Comerciales Desleales y Salvaguardias (el "APCDS"), que posteriormente se convirtió en la Dirección de Competencia Desleal (la "DCD"), concluyó en su Informe de Viabilidad de Apertura (el "Informe de 7 de enero de 1998") que existían suficientes pruebas de la existencia de dumping para justificar la iniciación de una investigación.[6] En la misma fecha, la CNCE, en el Acta Nº 405, determinó que no existían suficientes pruebas de la existencia de daño o amenaza de daño que justificaran la iniciación de una investigación.[7] El 17 de febrero de 1998, el CEPA presentó a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería ("SICyM")[8] información nueva y actualizada. El 18 de junio de 1998, la Dirección General de Asuntos Jurídicos (la "DGAJ") del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (el "MEyOSP"), a solicitud de la Subsecretaría de Comercio Exterior, determinó que "… teniendo en cuenta que la información presentada por el … CEPA … no ha sido evaluada por la Comisión Nacional de Comercio Exterior al expedirse sobre la existencia de daño a la producción nacional mediante el Acta de Directorio 405/98,

[4] Documento WT/DS241/4.

[5] Brasil - Prueba documental 1.

[6] Brasil - Prueba documental 2.

[7] Brasil - Prueba documental 3.

[8] Brasil - Prueba documental 4.

esta Dirección General considera que correspondería, previo a todo trámite, solicitar la nueva intervención de la citada Comisión Nacional a fin de que se expida sobre los elementos aportados."[9] Tras el examen de las nuevas pruebas presentadas por el CEPA, la CNCE determinó, en el Acta Nº 464 de 22 de septiembre de 1998, que existían pruebas suficientes de amenaza de daño que justificaban la iniciación de la investigación.[10]

2.4 El 20 de enero de 1999, el Secretario de Industria, Comercio y Minería (el "Secretario") decidió iniciar la investigación antidumping respecto de los pollos procedentes del Brasil.[11] En el Boletín Oficial de 25 de enero de 1999 se publicó un aviso en el que se anunciaba la apertura de la investigación antidumping.

2.5 La CNCE y la DCD enviaron, los días 10 y 16 de febrero de 1999, respectivamente, cartas a cinco exportadores brasileños (a saber, Sadia S.A. ("Sadia"), Avipal S.A. Avicultura e Agropecuaria ("Avipal"), Frigorífico Nicolini Ltda. ("Nicolini"), Seara Alimentos S.A. ("Seara"), y Frangosul S.A. Agro Avícola Industrial ("Frangosul")) notificándoles, entre otras cosas, la apertura de la investigación.[12]

2.6 El 28 de junio de 1999, la CNCE formuló una determinación preliminar positiva de daño.[13] El 6 de agosto de 1999, la DCD formuló una determinación preliminar positiva de dumping.[14] El 20 de agosto de 1999, la SSCE formuló una determinación preliminar de la existencia de una relación causal entre las importaciones presuntamente objeto de dumping y el daño causado a la rama de producción nacional.[15] No se impusieron medidas provisionales.

2.7 El 15 de septiembre de 1999, la DCD se puso en contacto con varios exportadores brasileños, a saber, Cooperativa Central de Laticínios do Paraná ("CCLP"), Cooperativa Central Oeste Catarinense Ltda. ("Catarinense"), Chapecó Cia. Industrial ("Chapecó"), Cia. Minuano de Alimentos ("Minuano"), Perdigão Agroindustrial ("Perdigão") y Comaves Industria e Comércio de Alimentos Ltda. ("Comaves"), a los que se proporcionó el mismo cuestionario que la DCD había enviado a otros exportadores el 16 de febrero de 1999.[16]

2.8 El 23 de diciembre de 1999, la CNCE formuló su determinación definitiva positiva de la existencia de daño.[17] La DCD formuló una determinación definitiva positiva de la existencia de dumping el 23 de junio de 2000.[18] Los márgenes de dumping constatados para Sadia, Avipal y los demás exportadores fueron del 14,91 por ciento, el 15,48 por ciento y el 8,19 por ciento,

[9] Brasil - Prueba documental 5.

[10] Brasil - Prueba documental 6.

[11] Brasil - Prueba documental 7.

[12] Brasil - Pruebas documentales 8 y 9.

[13] Brasil - Prueba documental 10.

[14] Brasil - Prueba documental 11.

[15] Brasil - Prueba documental 12.

[16] Brasil - Prueba documental 13.

[17] Brasil - Prueba documental 14.

[18] Brasil - Prueba documental 15.

respectivamente. No se constataron márgenes de dumping con respecto a Nicolini y Seara. El 17 de julio de 2000, la SSICM formuló una determinación definitiva positiva de la existencia de una relación de causalidad entre las importaciones objeto de dumping y el daño causado a la rama de producción nacional.[19]

2.9 Sobre la base de las determinaciones definitivas de la existencia de dumping, de daño y de una relación de causalidad, el Ministerio de Economía (el "ME"), anteriormente el MEyOSP, dictó la Resolución Nº 574 de 21 de julio de 2000, por la que se imponían medidas antidumping definitivas a las importaciones de pollos procedentes del Brasil por un período de tres años.[20] Esas medidas consistían en la percepción de derechos antidumping específicos en una cuantía equivalente a la diferencia existente en términos absolutos entre un denominado "valor mínimo de exportación" f.o.b. y el precio f.o.b. facturado en cada envío, siempre que este último fuera inferior al primero. Un "valor mínimo de exportación" de 0,92 dólares EE.UU. por kilogramo se fijó en el caso de Sadia, y de 0,98 dólares EE.UU. por kilogramo en el caso de Avipal y de los demás exportadores. Se excluyó de la aplicación de medidas antidumping a los exportadores brasileños Nicolini y Seara por haberse constatado que esas empresas no exportaban pollos a precios de dumping. La Resolución N° 574 se publicó en el Boletín Oficial de 24 de julio de 2000.

2.10 El 30 de agosto de 2000, de conformidad con el artículo 2 del Protocolo de Brasilia del MERCOSUR, el Brasil solicitó la iniciación de negociaciones directas con la Argentina sobre la Resolución N° 574. El 24 de enero de 2001, el Brasil anunció su intención de iniciar el procedimiento arbitral previsto en el artículo 7 del Protocolo de Brasilia. El 21 de mayo de 2001, el Tribunal Arbitral Ad Hoc del MERCOSUR emitió su laudo. Conforme al artículo 22 del Protocolo de Brasilia, con posterioridad a la emisión del laudo, el Tribunal Arbitral emitió una aclaración del mismo con fecha 18 de junio de 2001.

III. CONSTATACIONES Y RECOMENDACIONES SOLICITADAS POR LAS PARTES

A. BRASIL

3.1 En su Primera comunicación escrita, el Brasil solicitó que el Grupo Especial:

a) constate que la Argentina ha actuado de forma incompatible con el *Acuerdo Antidumping* con arreglo a las siguientes reclamaciones:

- en la solicitud, el solicitante presentó un cálculo para ajustar el valor normal en función de las supuestas diferencias entre las características físicas de los pollos exportados a la Argentina y los pollos vendidos en el Brasil. Con la solicitud no se incluían pruebas pertinentes de tales diferencias, en contra de lo prescrito en el párrafo 2 del artículo 5 (Reclamación 1). Al aceptar el cálculo del ajuste realizado por el solicitante, la Argentina no examinó, conforme a lo prescrito en el párrafo 3 del artículo 5, la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas con la solicitud (Reclamación 2), ni rechazó la solicitud de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 8 del artículo 5 (Reclamación 3);

[19] Brasil - Prueba documental 16.

[20] Brasil - Prueba documental 17.

- la Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 3 del artículo 5 (Reclamación 4) al establecer los precios de exportación basándose exclusivamente en las transacciones de exportación realizadas a precios inferiores al valor normal;

- con la solicitud, el solicitante presentó datos sobre los precios de exportación y sobre el valor normal correspondientes a períodos diferentes. En concreto, la solicitud incluía datos sobre el valor normal correspondientes a un solo día de 1997 (el 30 de junio de 1997), lo que no puede considerarse una prueba pertinente para establecer el valor normal de conformidad con el párrafo 2 del artículo 5 (Reclamación 5). Al calcular un margen de dumping realizando una comparación entre el precio de exportación y el valor normal sobre la base de ventas no efectuadas en fechas lo más próximas posible y establecer el valor normal con respecto a un solo día de 1997, la Argentina no examinó, conforme a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 5, la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas (Reclamación 6) ni rechazó la solicitud de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 8 del artículo 5 (Reclamación 7);

- la Argentina, al comparar períodos diferentes de recopilación de datos a efectos del dumping y del daño, no examinó adecuadamente las pruebas presentadas con la solicitud, por lo que infringió el párrafo 3 del artículo 5 (Reclamación 8);

- la Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 7 del artículo 5 (Reclamación 9) al no examinar simultáneamente los datos recopilados con respecto al dumping y los datos recopilados con respecto al daño en el momento de decidir si se iniciaba o no la investigación;

- la Argentina no efectuó la notificación prescrita a siete exportadores brasileños cuando se cercioró de que existían pruebas suficientes para justificar la iniciación de la investigación antidumping. Al no efectuar tal notificación a esos exportadores cuando se inició la investigación, la Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 1 del artículo 12 (Reclamación 10);

- la Argentina no dio a los siete exportadores brasileños un plazo de 30 días como mínimo para dar respuesta a los cuestionarios sobre el dumping enviados por la DCD, lo que constituye *prima facie* una infracción del párrafo 1.1 del artículo 6 (Reclamación 11). Además, la CNCE nunca efectuó la notificación correspondiente a esos siete exportadores ni les facilitó el cuestionario sobre el daño;

- la Argentina, con infracción de lo dispuesto en el párrafo 1.2 del artículo 6, no puso inmediatamente a disposición de los siete exportadores brasileños las pruebas presentadas por escrito por las demás partes interesadas que intervenían en la investigación (Reclamación 12);

- al no dar a los siete exportadores el plazo prescrito para responder a los cuestionarios y no poner inmediatamente a su disposición las pruebas presentadas por escrito por las demás partes interesadas que intervenían en la investigación, no dio a esos exportadores plena oportunidad de defender sus intereses, como exige el párrafo 2 del artículo 6 (Reclamación 13);

- la Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 1.3 del artículo 6 (Reclamación 14) al no facilitar, tan pronto como se inició la investigación, a los exportadores brasileños y al Gobierno del Brasil el texto de la solicitud escrita;

- la Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 8 del artículo 6 y el Anexo II (Reclamación 15) al prescindir de las respuestas facilitadas por los exportadores brasileños con respecto a la descripción del producto exportado a la Argentina y del producto vendido en el Brasil y utilizar en lugar de ello el cálculo del ajuste del valor normal presentado en la solicitud por el solicitante;

- la Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 2.2 del artículo 12 (Reclamación 16) al no explicar adecuadamente en la determinación definitiva su decisión de prescindir de la información facilitada por los exportadores en relación con la descripción del producto y utilizar en lugar de ella el ajuste del valor normal propuesto por el solicitante;

- la Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 8 del artículo 6 y el Anexo II (Reclamación 17) al prescindir de los datos sobre el precio de exportación facilitados por los exportadores brasileños y utilizar la información sobre el precio de exportación facilitada por la Dirección de Ganadería de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Argentina;

- la Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 2.2 del artículo 12 (Reclamación 18) al no explicar adecuadamente en la determinación definitiva su decisión de prescindir de los datos sobre el precio de exportación facilitados por los exportadores brasileños y utilizar los datos sobre el precio de exportación facilitados por la Dirección de Ganadería de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Argentina;

- la Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 8 del artículo 6 y el Anexo II (Reclamación 19) al prescindir de toda la información sobre el valor normal presentada por dos exportadores brasileños y utilizar la información facilitada por el solicitante;

- la Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 2.2 del artículo 12 (Reclamación 20) al no explicar adecuadamente en la determinación definitiva su decisión de prescindir de toda la información sobre el valor normal presentada por dos exportadores brasileños y utilizar la información facilitada por el solicitante;

- la Argentina no informó a los exportadores brasileños de los hechos esenciales considerados que servirían de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas, lo que impidió a los exportadores brasileños defender adecuadamente sus intereses, en contra de lo prescrito en el párrafo 9 del artículo 6 (Reclamación 21);

- en el caso de dos exportadores brasileños, la Argentina no estableció el margen de dumping que correspondía a cada uno de ellos, como prescribe el párrafo 10 del artículo 6 (Reclamación 22);

- la Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 4 del artículo 2 (Reclamación 23) al no tener debidamente en cuenta, al establecer el valor normal para dos exportadores brasileños, las diferencias en los fletes;

- la Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 4 del artículo 2 (Reclamación 24) al no tener debidamente en cuenta, al establecer el valor normal para todos los demás exportadores, las diferencias de tributación, fletes y costos financieros;

- la Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 4 del artículo 2 (Reclamación 25) al efectuar indebidamente ajustes en el valor normal basados en las supuestas diferencias entre las características físicas del producto vendido en el Brasil y del producto exportado a la Argentina;

- la Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 4 del artículo 2 (Reclamación 26) al imponer una carga probatoria no razonable a tres exportadores brasileños, por no determinar el período de dumping objeto de investigación y permitir en consecuencia a esos exportadores que presentaran información sobre el dumping correspondiente a los años comprendidos entre 1996 y 1999, en tanto que posteriormente se determinó que el período de investigación a efectos del dumping era el comprendido entre enero de 1998 y enero de 1999;

- la Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 4.2 del artículo 2 (Reclamación 27) al establecer un margen de dumping sobre la base de una comparación incorrecta entre el precio de exportación y el valor normal en el caso de dos exportadores brasileños. Para establecer el valor normal la Argentina se basó únicamente en las transacciones efectuadas en el mercado interno de las que se presentaron facturas, en lugar de determinarlo basándose en todas las transacciones que se había notificado que se habían realizado en el mercado interno durante el período en cuestión. La DCD estableció los márgenes de dumping correspondientes a esos dos exportadores brasileños sobre la base de una comparación entre el promedio ponderado de una muestra estadística del valor normal y el promedio ponderado de los precios de todas las transacciones de exportación comparables;

- la Argentina ha actuado de forma incompatible con los párrafos 2 (Reclamación 28) y 3 (Reclamación 29) del artículo 9 al imponer un derecho antidumping variable, cuya cuantía puede exceder del margen de dumping establecido en la determinación definitiva;

- la Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 2.2 del artículo 12 (Reclamación 30) al no indicar en la determinación de imponer derechos antidumping definitivos cómo se estableció el "valor mínimo de exportación";

- la Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 8 del artículo 5 (Reclamación 31) al no rechazar la solicitud y poner fin a la investigación sin demora, una vez que la CNCE determinó en el Acta Nº 405 que no existían pruebas suficientes de daño o amenaza de daño que justificaran la iniciación de la investigación;

- al utilizar períodos diferentes para evaluar los factores e índices económicos pertinentes enumerados en el párrafo 4 del artículo 3, la Argentina no formuló una determinación definitiva de la existencia de daño que se basara en pruebas objetivas y comprendiera un examen objetivo, como prescriben los párrafos 1, 4 y 5 del artículo 3 (Reclamación 32);

- la Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 2.2 del artículo 12 (Reclamación 33) al no explicar en la determinación definitiva las razones por las que la CNCE examinó los factores e índices económicos pertinentes enumerados en el párrafo 4 del artículo 3 con respecto a períodos diferentes;

- en el análisis de daño de la determinación definitiva no se excluyeron las importaciones procedentes de dos exportadores brasileños, a pesar de que la DCD consideró que no se trataba de "importaciones objeto de dumping". La CNCE, al no excluir de las "importaciones objeto de dumping" las procedentes de esos dos exportadores, no examinó adecuadamente el volumen de las "importaciones objeto de dumping", el efecto de esas importaciones sobre los precios y su repercusión sobre la rama de producción nacional, como prescriben los párrafos 2 (Reclamación 34) y 4 (Reclamación 36) del artículo 3. De la evaluación viciada de las "importaciones objeto de dumping" se deduce que la determinación definitiva de la existencia de daño no se basó en pruebas positivas ni comprendió un examen objetivo, como exige el párrafo 1 del artículo 3 (Reclamación 35);

- al no excluir de las "importaciones objeto de dumping" las procedentes de esos dos exportadores brasileños, la Argentina no examinó adecuadamente el daño, como exige el párrafo 1 del artículo 3 y, en consecuencia, no demostró adecuadamente la existencia de una relación causal entre las "importaciones objeto de dumping" y el daño causado a la rama de producción nacional, como exige el párrafo 5 del artículo 3 (Reclamación 37);

- la Argentina actuó de forma incompatible con los párrafos 4 (Reclamación 38) y 1 (Reclamación 39) del artículo 3 al no evaluar todos los factores e índices económicos pertinentes enumerados en el párrafo 4 del artículo 3;

- la Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 2.2 del artículo 12 (Reclamación 40) al no exponer y examinar adecuadamente en la determinación definitiva la evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes enumerados en el párrafo 4 del artículo 3;

- la Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 1 del artículo 4 (Reclamación 41) al considerar que el 46 por ciento constituía una proporción importante de la producción nacional total de pollos de la Argentina, por lo que podría entenderse que constituía la rama de producción nacional;

- al determinar la existencia de dumping, de daño y de una relación causal de forma incompatible con las disposiciones del *Acuerdo Antidumping*, la Argentina ha actuado de forma incompatible con el artículo VI del *GATT de 1994* y el artículo 1 del *Acuerdo Antidumping*;

b) recomiende al OSD que pida a la Argentina que ponga esas medidas en conformidad con el *GATT de 1994* y el *Acuerdo Antidumping*;

c) sugiera la forma en que la Argentina podría aplicar las recomendaciones del Grupo Especial, de conformidad con lo previsto en el párrafo 1 del artículo 19 del *ESD*; y

d) sugiera, a la luz de las numerosas infracciones del *Acuerdo Antidumping*, generadoras de consecuencias, que la Argentina derogue inmediatamente la Resolución Nº 574/2000 por la que se imponen derechos antidumping definitivos a los pollos eviscerados procedentes del Brasil.[21]

B. ARGENTINA

3.2 En su Primera comunicación escrita, la Argentina solicitó que el Grupo Especial:

a) no se pronuncie sobre las 41 alegaciones de inconsistencias con diversas disposiciones del *Acuerdo Antidumping* presentadas por el Brasil.

Si el Grupo Especial decidiera no hacer lugar a la anterior petición, la Argentina solicitó que el Grupo Especial:

b) rechace las reclamaciones del Brasil en el sentido que la Resolución Nº 574/2000 del Ministerio de Economía de la República Argentina es inconsistente con:

- los artículos 5.2, 5.3, 5.7 y 5.8 del *Acuerdo Antidumping*;
- el artículo 12.1 del *Acuerdo Antidumping*;
- los artículos 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2 y 6.8, así como con los párrafos 3, 5, 6, y 7 del Anexo II, y con los artículos 6.9, y 6.10 del *Acuerdo Antidumping*;
- los artículos 2.4, 2.4.2, del *Acuerdo Antidumping*;
- los artículos 3.1, 3.2, 3.4 y 3.5 del *Acuerdo Antidumping*;
- el artículo 4.1 del *Acuerdo Antidumping*;
- los artículos 9.2, 9.3 del *Acuerdo Antidumping*;
- El artículo 12.2.2 del *Acuerdo Antidumping*.

c) rechace la petición de revocación inmediata de la Resolución Nº 574/2000 que impuso los derechos antidumping definitivos.[22]

IV. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

4.1 Los argumentos de las partes, tal como figuran en sus comunicaciones al Grupo Especial, se adjuntan como anexos (véase la Lista de anexos, página vii).

[21] Primera comunicación escrita del Brasil, párrafos 549 y 550.

[22] Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafo 322.

4.2 Las respuestas de las partes a las preguntas tanto del Grupo Especial y de la otra parte, al igual que las observaciones de cada parte sobre las respuestas de la otra parte, también se adjuntan como anexos (véase la Lista de anexos, página vii).

V. ARGUMENTOS DE LOS TERCEROS

5.1 Los argumentos de los terceros, el Canadá, Chile, las Comunidades Europeas, Guatemala, el Paraguay y los Estados Unidos, se exponen en sus comunicaciones al Grupo Especial y se adjuntan a este informe como anexos. Las respuestas de los terceros a las preguntas del Grupo Especial también se adjuntan como anexos (véase la Lista de anexos, página vii).

VI. REEXAMEN INTERMEDIO

6.1 De conformidad con el párrafo 1 del artículo 15 del *ESD*, el 20 de diciembre de 2002 el Grupo Especial dio traslado a las partes del proyecto de capítulos expositivos (hechos y argumentos) de su informe. Ambas partes presentaron el 13 de enero de 2003 observaciones escritas sobre el proyecto de capítulos expositivos. El Grupo Especial tomó nota de todas esas observaciones y enmendó, cuando lo estimó procedente, el proyecto de parte expositiva. El 25 de febrero de 2003, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 15 del *ESD*, el Grupo Especial dio traslado de su informe provisional a las partes. El 11 de marzo de 2003, ambas partes pidieron al Grupo Especial que reexaminara aspectos concretos del informe provisional. Ninguna de las partes solicitó que se celebrara una reunión de reexamen intermedio. El 18 de marzo de 2003, ambas partes presentaron observaciones por escrito sobre las solicitudes escritas de la otra parte respecto del examen intermedio. El Grupo Especial examinó cuidadosamente los argumentos formulados, que se abordan *infra*, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 15 del *ESD*.[23]

A. PROCEDIMIENTOS PREVIOS EN EL MARCO DEL MERCOSUR

6.2 La Argentina pidió al Grupo Especial que incluyera una referencia al procedimiento previo en el marco del MERCOSUR en la sección II (Elementos de hecho) del informe. El Brasil pidió al Grupo Especial que rechazase esa solicitud. Habiendo examinado cuidadosamente los argumentos de las partes, hemos incluido una referencia al procedimiento previo en el marco del MERCOSUR en la sección II (Elementos de hecho) del informe.

6.3 En cuanto a los párrafos 7.35 y 7.36 del informe provisional (párrafos 7.35 y 7.36 del informe definitivo), la Argentina se remitió al informe del Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Trato fiscal aplicado a las "Empresas de Ventas en el Extranjero"*[24] para invocar el "principio de buena fe respecto de la presentación objetiva de los hechos en una controversia".[25] Observamos que el Órgano de Apelación en ese asunto se refería a la obligación, tanto para el Miembro reclamante como para el Miembro demandado, de cumplir "las prescripciones del *ESD* (y las prescripciones conexas establecidas en otros acuerdos abarcados) de buena fe".[26] Sin embargo, habida cuenta de que la Argentina no ha alegado que el Brasil incumpliera alguna prescripción del *ESD* (ni prescripciones

[23] Por consiguiente, y de conformidad con el párrafo 3 del artículo 15 del *ESD*, la sección VI del presente informe, titulada "Reexamen intermedio", forma parte de las constataciones del informe definitivo del Grupo Especial.

[24] Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Trato fiscal aplicado a las "Empresas de Ventas en el Extranjero"* ("*Estados Unidos - EVE*"), WT/DS108/AB/R, adoptado el 20 de marzo de 2000.

[25] Observaciones de la Argentina sobre el informe provisional del Grupo Especial, párrafo 5.

[26] *Estados Unidos - EVE*, *supra*, nota 24, párrafo 166.

conexas establecidas en otros acuerdos abarcados) al plantear este asunto, el cumplimiento de esas prescripciones de buena fe no es una cuestión pertinente en el caso que nos ocupa. Por consiguiente, el informe del Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - EVE* no es pertinente en el presente asunto.

6.4 La Argentina presentó varias observaciones relativas a los párrafos 7.38 y 7.39 (párrafos 7.38 y 7.39 del informe definitivo). Sin embargo, no vimos nada en las observaciones de la Argentina que nos indujera a introducir algún cambio en el informe.

6.5 Como consecuencia de una cuestión planteada por la Argentina, hemos suprimido la nota 52 del informe provisional.

6.6 En cuanto al párrafo 7.41 del informe provisional (párrafo 7.41 del informe definitivo), la Argentina afirmó que debería tenerse en cuenta la resolución del MERCOSUR "a los efectos de la interpretación de la presente diferencia" (subrayado en el original). Sin embargo, la Argentina seguía sin señalar algún elemento de la resolución del MERCOSUR que obligase al Grupo Especial a interpretar disposiciones específicas de una manera concreta. La Argentina deseaba, efectivamente, que el Grupo Especial "interpretase" los Acuerdos de la OMC de tal manera que siguiese la resolución y las constataciones del MERCOSUR en contra del Brasil. Sin embargo, esto iría más allá de la simple interpretación de disposiciones específicas de la OMC: equivaldría a exigir al Grupo Especial que se pronunciase de una manera determinada. Este argumento ya fue abordado en el párrafo 7.41 del informe provisional.

B. RECLAMACIÓN 10

6.7 El Brasil formuló algunas observaciones relativas al alcance de las constataciones del Grupo Especial en el marco de esta reclamación. En particular, el Brasil afirmó que nuestras constataciones deberían incluir a Catarinense. Hemos modificado nuestras constataciones para resolver las cuestiones planteadas por estas observaciones.

C. RECLAMACIÓN 11

6.8 El Brasil sostiene que el Grupo Especial incurrió en error al señalar en el informe provisional que el Brasil inicialmente había alegado que la DCD notificó a Penabranca el 15 de septiembre de 1999 y que únicamente en un momento posterior el Brasil había afirmado que no había pruebas en el expediente que indicaran que la DCD contactara alguna vez con el exportador Penabranca o le notificara la existencia de la investigación. El Brasil se refiere a las notas 18 y 78 de su Primera comunicación escrita, donde se indica que "[e]l Brasil no ha podido encontrar la notificación de la DCD al exportador brasileño Penabranca entre los documentos de la investigación a los que ha tenido acceso". En consecuencia, hemos modificado nuestra descripción de la presentación de las pruebas del Brasil relativas a Penabranca.

6.9 La Argentina está en desacuerdo con determinadas opiniones expresadas por el Grupo Especial en el párrafo 7.143 del informe provisional. En primer lugar, entendemos que la Argentina alega que las solicitudes de información enviadas a determinados exportadores brasileños el 15 de septiembre de 1999 no pueden considerarse como "cuestionario[s]" en el sentido del párrafo 1.1 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping*. Si bien hemos modificado ligeramente el párrafo 7.143 del informe provisional, esto no afecta a nuestra conclusión de que esas solicitudes eran "cuestionarios" en el sentido del párrafo 1.1 del artículo 6. También entendemos que la Argentina aduce que nunca señaló "que el plazo total para las respuestas de los cuestionarios sea de 30 días junto con la extensión del plazo".[27] En consecuencia, introdujimos cambios en los párrafos 7.144 y 7.145 del informe

[27] Observaciones de la Argentina sobre el informe provisional del Grupo Especial, párrafo 17.

provisional. Los cambios mencionados *supra* dieron lugar a la supresión de la mayor parte de los párrafos 7.143, 7.144 y 7.145 del informe provisional. Lo que resta de estos párrafos figura en el párrafo 7.140 del informe definitivo.

D. RECLAMACIÓN 13

6.10 El Brasil señaló una incompatibilidad en el informe provisional entre el alcance de las constataciones del Grupo Especial relativas al párrafo 2 del artículo 6 y el enfoque del Grupo Especial con respecto a Penabranca en el marco de otras reclamaciones. Hemos resuelto esa incompatibilidad modificando el enfoque del Grupo Especial con respecto a Penabranca en las Reclamaciones 10, 11 y 12.

6.11 El Brasil también mostró preocupaciones de carácter general con respecto a la manera en que el Grupo Especial abordó una de sus reclamaciones relativas al párrafo 2 del artículo 6. Examinando detenidamente la solicitud del Brasil de establecimiento de un grupo especial, constatamos que la reclamación específica en cuestión relativa al párrafo 2 del artículo 6 es ajena a nuestro mandato. Hemos modificado nuestras constataciones en consecuencia.

E. RECLAMACIÓN 17

6.12 La Argentina señala una incompatibilidad en el examen del Grupo Especial del trato dado por la DCD a los datos presentados por Catarinense en el contexto de las Reclamaciones 17 y 19 (párrafos 7.189 y 7.190 del informe provisional/párrafos 7.187 y 7.188 del informe definitivo). La Argentina sostiene que, en la medida en que el Grupo Especial constató que la DCD tenía derecho a rechazar los datos sobre el valor normal facilitados por Catarinense porque este exportador no había cumplido el requisito de acreditación de personería, el Grupo Especial debería también constatar que la DCD tenía derecho a no tener en cuenta los datos sobre los precios de exportación de Catarinense por las mismas razones. El Brasil, por otra parte, nos pide que confirmemos la conclusión que figura en el párrafo 7.190 del informe provisional (párrafo 7.188 del informe definitivo).

6.13 Hemos examinado cuidadosamente las observaciones de la Argentina, y convenimos en que el incumplimiento por parte de Catarinense del requisito pertinente de acreditación de personería debe llevarnos a rechazar las Reclamaciones 17 y 19 relativas a ese exportador. Hemos modificado nuestras constataciones relativas a la Reclamación 17 en consecuencia (véase el párrafo 7.184 del informe definitivo).

6.14 El Brasil nos pidió que comprobemos si la autoridad investigadora había solicitado a Catarinense que facilitase la información para acreditar personería. Consideramos que la correspondencia a la que se refiere el Brasil en su Prueba documental 27 demuestra que la DCD informó a Catarinense de la necesidad de cumplir determinados procedimientos internos establecidos en la Ley Nº 19.549 y en los Decretos Nos 1759/72 y 1883/91.[28] Además, el Brasil sostiene que el argumento de la Argentina según el cual los datos de exportación de Catarinense no se tomaron en cuenta por la falta de acreditación de personería constituye una justificación *ex post*.[29] No estamos de

[28] El Brasil también alegó que no se había informado a Catarinense de que ésta era la razón por la que se rechazó su respuesta al cuestionario, contrariamente a lo establecido en el párrafo 6 del Anexo II. Sin embargo, observamos que el Brasil no invocó el párrafo 6 del Anexo II, en el contexto de la Reclamación 17, durante las actuaciones del Grupo Especial (véanse los párrafos 282 a 290 de la Primera comunicación escrita del Brasil).

[29] Entendemos que el Brasil formula esta petición con respecto a las Reclamaciones 17 y 19. (Observaciones del Brasil sobre la solicitud de la Argentina de reexamen del informe provisional, párrafo 32.) Consideramos que ésta es una observación que el Brasil debería haber formulado en su propia solicitud de reexamen del informe provisional, cosa que el Brasil no hizo. Consideramos que solamente por esta razón nos

acuerdo con el Brasil. A este respecto, observamos que en el informe de 4 de enero de 2000[30] y en la Determinación Final del Margen de Dumping[31] figuran declaraciones de que la autoridad investigadora informó a Catarinense de los requisitos previstos en la Ley 19.549 y en los Decretos 1759/72 y 1883/91 con respecto a las comunicaciones a la Administración.

6.15 El Brasil alega que, al utilizar los precios de exportación constatados para los demás exportadores en lugar de utilizar el precio de exportación individual constatado para Catarinense, la autoridad no actuó con especial prudencia al basar sus constataciones relativas a los precios de exportación en una fuente de información secundaria. Observamos que la Argentina no determinó un margen de dumping individual para Catarinense (contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 10 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping* (Reclamación 22)). Habida cuenta de que la Argentina no estaba autorizada a utilizar un tipo para "todos los demás exportadores" para Catarinense, no creemos necesario considerar si la Argentina actuó o no con especial prudencia al obrar de este modo.

F. RECLAMACIÓN 21

6.16 El Brasil pide al Grupo Especial que revoque sus constataciones que figuran en el párrafo 7.231 del informe provisional (párrafo 7.229 del informe definitivo). El Brasil fundamenta su petición en el hecho de que una parte necesita saber qué información no va a utilizar finalmente la autoridad investigadora en la determinación definitiva para poder aportar razones y argumentos en su defensa.[32] Sin embargo, no vemos nada en las observaciones del Brasil que nos induzca a cambiar nuestra interpretación del sentido corriente del párrafo 9 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping*.

G. RECLAMACIÓN 22

6.17 La Argentina sostiene que ninguno de los párrafos del Anexo II del *Acuerdo Antidumping* obliga a determinar un margen de dumping individual en los casos en que los exportadores no han cooperado en la investigación. Por esta razón, la Argentina sostiene que, cuando la autoridad investigadora debe recurrir a la aplicación de las normas del Anexo II en virtud de la falta de cooperación de una parte interesada, la regla general que establece el párrafo 10 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping* no resulta aplicable. En particular, la Argentina sostiene que la norma general impuesta por el párrafo 10 del artículo 6 no se aplica a Catarinense, un exportador respecto del cual el Grupo Especial constató que no había acreditado personería en el contexto de la investigación ante las autoridades argentinas. Con respecto a las observaciones de la Argentina, el Brasil sostiene que el hecho de que un exportador no haya presentado la información pertinente y adecuada para establecer el valor normal y los precios de exportación, no exime a la autoridad de la obligación que le impone el párrafo 10 del artículo 6 de calcular un margen de dumping individual.

6.18 Abordamos íntegramente la relación entre, por un lado, el párrafo 10 del artículo 6, y, por otro, el párrafo 8 del artículo 6 y el Anexo II del *Acuerdo Antidumping*, en los párrafos 7.217 y 7.218 del informe provisional (párrafos 7.215 y 7.216 del informe definitivo). No vemos nada en las

---

es imposible examinarla. En cualquier caso, observamos que en el párrafo 6.14 *supra* señalamos que en el informe de 4 de enero de 2000 y en la Determinación Final del Margen de Dumping figuran declaraciones de que la autoridad investigadora informó a Catarinense de los requisitos previstos en la Ley 19.549 y los Decretos 1759/72 y 1883/91 con respecto a las comunicaciones a la Administración.

[30] Brasil - Prueba documental 28, página 2795.

[31] Brasil - Prueba documental 15, página 3025.

[32] Observaciones del Brasil sobre el informe provisional del Grupo Especial, párrafo 44.

observaciones de la Argentina que nos induzca a modificar nuestras constataciones y conclusiones respecto de esta reclamación.

H. RECLAMACIÓN 27

6.19 La Argentina formuló varias observaciones sobre las constataciones del Grupo Especial relativas a la Reclamación 27. En resumen, la Argentina acepta la constatación del Grupo Especial "respecto de la obligación de considerar todas las transacciones realizadas en el curso de operaciones normales para calcular el valor normal", pero impugna la constatación de infracción formulada por el del Grupo Especial. La Argentina aduce que se tienen en cuenta todas las transacciones pertinentes realizadas en el mercado interno si se utiliza una muestra estadísticamente válida.

6.20 Si bien puede haber situaciones en que una autoridad investigadora considere útil utilizar muestras estadísticamente válidas de las transacciones de venta realizadas en el mercado interno a los efectos de establecer el valor normal, el sentido claro del párrafo 4.2 del artículo 2, interpretado a la luz del párrafo 2.1 del mismo artículo, no prevé un muestreo de esa índole. En consecuencia, no vemos motivo alguno para modificar nuestras constataciones sobre esta cuestión.

I. RECLAMACIONES 28 A 30

6.21 En cuanto a las Reclamaciones 28 a 30, el Brasil señaló que no alegaba que los derechos antidumping fuesen variables *per se* incompatibles con los párrafos 2 y 3 del artículo 9 del *Acuerdo Antidumping*. Hemos modificado nuestro informe en consecuencia.

6.22 El Brasil también presentó otros argumentos en apoyo de sus Reclamaciones 28 a 30. Si bien estos nuevos argumentos dieron lugar a cambios menores en el razonamiento del Grupo Especial, las constataciones y conclusiones del Grupo Especial no se modificaron.

6.23 Observamos que el Brasil pretende sugerir que nuestras constataciones permitirían a un Miembro "calcular un margen de dumping en la investigación y aplicar cualquier derecho que considerara conveniente".[33] Esto evidentemente no es así, puesto que la cuantía del derecho que se ha de percibir nunca debe ser superior al margen de dumping pertinente. El hecho de que el Grupo Especial constate que los derechos antidumping variables no necesitan limitarse al margen de dumping establecido en la investigación no significa que un Miembro pueda aplicar cualquier derecho antidumping variable que considere conveniente.

VII. CONSTATACIONES

7.1 El presente asunto plantea cuestiones relativas a la iniciación de la investigación antidumping sobre pollos procedentes del Brasil, el desarrollo de la investigación y la imposición de medidas definitivas. Antes de ocuparnos de las reclamaciones del Brasil, examinaremos en primer lugar dos cuestiones preliminares planteadas en estas actuaciones y luego consideraremos diversas cuestiones generales relacionadas con estas actuaciones.

A. CUESTIONES PRELIMINARES

7.2 La Argentina ha planteado dos cuestiones preliminares.[34] La primera se relaciona con la divulgación de posiciones escritas en el marco del párrafo 2 del artículo 18 del *ESD*. La segunda se

[33] Observaciones del Brasil sobre el informe provisional del Grupo Especial, párrafo 73.

[34] Podría entenderse que la Argentina ha planteado otra cuestión preliminar con respecto a la norma de examen, en los párrafos 9 a 15 de la sección II.1 de su Primera comunicación escrita. A diferencia de las dos cuestiones preliminares de las cuales sí nos ocupamos, no existe una solicitud de que nos pronunciemos sobre

refiere a los procedimientos de solución de diferencias previos en el marco del MERCOSUR con respecto a las medidas antidumping en cuestión.

1. Divulgación de posiciones escritas - Párrafo 2 del artículo 18 del *ESD*

a) Argumentos de las partes/de los terceros

7.3 Mediante carta de fecha 8 de agosto de 2002, el Brasil informó al Grupo Especial de que un Miembro que no era parte en la diferencia le había solicitado que se le facilitara un resumen no confidencial de la información contenida en su comunicación que pudiera hacerse público. El Brasil informó al Grupo Especial de que había clasificado como no confidencial el volumen en el que figuraba el texto de su Primera comunicación, en tanto que se trataría como confidenciales los cuatro volúmenes que contenían las pruebas documentales correspondientes a la Primera comunicación. El Brasil señaló que pondría a disposición del público el primer volumen (no confidencial) de su Primera comunicación escrita, una vez que hubiera dado a la Argentina la oportunidad de señalar si el mencionado volumen debía revisarse con el fin de excluir cualquier información considerada confidencial.

7.4 Mediante carta de fecha 15 de agosto, la Argentina objetó la decisión del Brasil de poner a disposición del público la totalidad de su Primera comunicación escrita (con exclusión de las pruebas documentales). La Argentina sostuvo que un Miembro sólo tiene el derecho, con arreglo al párrafo 2 del artículo 18 del *ESD*, a hacer públicas sus posiciones escritas. No tiene derecho a hacer pública la totalidad de sus comunicaciones escritas al Grupo Especial, ya que debe mantenerse la confidencialidad de las comunicaciones. A juicio de la Argentina, el párrafo 2 del artículo 18 del *ESD* establece una clara distinción entre "comunicaciones escritas" y "posiciones hechas públicas" ("*statements of […] positions*" en la versión inglesa). La Argentina no alegó que ninguna parte de la información que el Brasil proponía hacer pública fuera confidencial.

7.5 El 21 de agosto de 2002, el Brasil informó al Grupo Especial de que había puesto a disposición del público su Primera comunicación escrita (excluidos los volúmenes que contienen las pruebas documentales). El Brasil hizo notar que la Argentina no había planteado ninguna objeción con respecto a la confidencialidad de la información que el Brasil había propuesto inicialmente hacer pública. Respecto de la interpretación del párrafo 2 del artículo 18 del *ESD*, el Brasil sostuvo, entre otras cosas, que el *ESD* no define el límite o ámbito, la extensión, la configuración, la forma ni el contenido de las "posiciones" que una parte en una diferencia puede hacer públicas. El Brasil afirmó que en el presente asunto las "posiciones" pertinentes eran idénticas a la Primera comunicación del Brasil con exclusión de las pruebas documentales.

7.6 El 23 de agosto de 2002, el Canadá sostuvo que la interpretación de la Argentina del párrafo 2 del artículo 18 del *ESD* era incompatible con el espíritu de transparencia que informa el funcionamiento de la OMC y el mecanismo de solución de diferencias. El Canadá también afirmó, entre otras cosas, que la distinción establecida por la Argentina entre "comunicaciones escritas" y "posiciones hechas públicas" ("*statements of […] positions*" en la versión inglesa) era de carácter formal, dado que un Miembro puede considerar que la versión más autorizada de sus "posiciones" con respecto a una diferencia en el marco de la OMC se encuentra en sus comunicaciones escritas.

---

esa cuestión adicional en los petitorios expuestos en la sección IV de la comunicación de Argentina (en la sección IV solamente se solicita una resolución con respecto a los párrafos 23 a 25 de la sección II, que no corresponden a la cuestión planteada en la sección II.1). En consecuencia, consideramos que la Argentina no ha solicitado ninguna resolución con respecto a las observaciones sobre el estándar de revisión expuestas en los párrafos 9 a 15 de la sección II.1 de su Primera comunicación escrita.

7.7 El 27 de agosto de 2002, la Argentina afirmó que si el Grupo Especial entendiese que la expresión 'comunicaciones escritas' y el término "posiciones" ("*statements*" en la versión inglesa) que figuran en el párrafo 2 del artículo 18 del *ESD* tienen el mismo sentido, la Argentina aceptaría esa interpretación. En la misma fecha, la Argentina pidió al Grupo Especial que expresara su opinión sobre esta cuestión.

7.8 El 9 de septiembre de 2002, en su Comunicación de tercero, los Estados Unidos expresaron que el Grupo Especial no debe exponer opiniones sobre la interpretación apropiada del párrafo 2 del artículo 18 del *ESD*. Los Estados Unidos alegaron, entre otras cosas, que el párrafo 2 del artículo 18 del *ESD* excede del ámbito del mandato del Grupo Especial, y que en realidad el Grupo Especial estaría interpretando esa disposición, lo cual estaría en conflicto con la facultad exclusiva de interpretar el Acuerdo atribuida a la Conferencia Ministerial y al Consejo General por el párrafo 2 del artículo IX del *Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio* ("*Acuerdo sobre la OMC*").

7.9 El 26 de septiembre de 2002, durante la primera reunión sustantiva del Grupo Especial con las partes, la Argentina expresó que no se oponía al derecho del Brasil de poner a disposición del público su Primera comunicación escrita. Sin embargo, la Argentina consideró que el Brasil no debió haber hecho pública su Primera comunicación escrita en una etapa tan temprana de las actuaciones del Grupo Especial. La Argentina sostuvo que, de conformidad con el párrafo 11 de los procedimientos de trabajo del Grupo Especial (según el cual las comunicaciones de las partes deberán incluirse en el informe del Grupo Especial), la Primera comunicación escrita del Brasil sólo debió haberse hecho pública una vez publicado el informe del Grupo Especial.

7.10 Tras la declaración de la Argentina durante la primera reunión sustantiva del Grupo Especial con las partes, el Grupo Especial formuló la siguiente pregunta a la Argentina:

> "La Argentina dijo en la reunión de esta mañana que no se oponía, como cuestión de principio, a que el Brasil hubiera puesto a disposición del público su Primera comunicación escrita. Lo que le preocupaba más bien a la Argentina era el momento en que lo había hecho el Brasil. ¿Significa esto que la Argentina acepta que un Miembro pueda poner en algún momento a disposición del público sus comunicaciones escritas dirigidas al Grupo Especial sin infringir el párrafo 2 del artículo 18 del ESD? ¿Infringiría el Brasil el párrafo 2 del artículo 18 del ESD si pusiera sus comunicaciones escritas a disposición del público después de que el Grupo Especial emitiera su informe definitivo?"

7.11 La Argentina respondió "Sí, de conformidad con las disposiciones del párrafo 2 del artículo 18 del ESD" a la primera parte de la pregunta, y "No" a la segunda parte de la misma.[35]

b) Evaluación del Grupo Especial

7.12 Antes de ocuparnos del fondo de la cuestión preliminar planteada por la Argentina, examinaremos en primer lugar el argumento de los Estados Unidos de que no deberíamos pronunciarnos sobre la cuestión planteada por la Argentina. En virtud del párrafo 1 del artículo 1 del *ESD*, las disposiciones del *ESD* se aplican a todos los procedimientos de solución de diferencias de la OMC, con sujeción a determinadas normas y procedimientos especiales o adicionales en materia de solución de diferencias que se enuncian en el Apéndice 2 del *ESD*. Por consiguiente, las disposiciones del *ESD* se aplican en todos los casos, se mencionen o no en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por un Miembro. En realidad, no se nos solicita pronunciarnos sobre si la medida identificada en la solicitud de establecimiento de un grupo especial

[35] La Argentina respondió mediante fax el 22 de octubre de 2002.

es compatible con el párrafo 2 del artículo 18 del *ESD*. Más bien, se solicita que nos pronunciemos respecto del párrafo 2 del artículo 18 del *ESD* en la medida en que sea necesario para dirigir algunos aspectos procesales de estas actuaciones. Al pronunciarnos sobre el párrafo 2 del artículo 18 del *ESD*, sólo estamos actuando de conformidad con el párrafo 1 del artículo 1 del *ESD*.[36] No pretendemos adoptar una interpretación en el sentido del párrafo 2 del artículo IX del *Acuerdo sobre la OMC*. En consecuencia, rechazamos la alegación de los Estados Unidos de que el Grupo Especial no se pronuncie sobre la cuestión planteada por la Argentina.

7.13 Esta cuestión tiene relación con el párrafo 2 del artículo 18 del *ESD*, que establece:

> "Las comunicaciones por escrito al grupo especial o al Órgano de Apelación se considerarán confidenciales, pero se facilitarán a las partes en la diferencia. Ninguna de las disposiciones del presente Entendimiento impedirá a una parte en la diferencia hacer públicas sus posiciones. Los Miembros considerarán confidencial la información facilitada al grupo especial o al Órgano de Apelación por otro Miembro a la que éste haya atribuido tal carácter. A petición de un Miembro, una parte en la diferencia podrá también facilitar un resumen no confidencial de la información contenida en sus comunicaciones escritas que pueda hacerse público."

7.14 Sobre el fondo, coincidimos con el Canadá en que la interpretación de la Argentina[37] con respecto al párrafo 2 del artículo 18 del *ESD* establece una distinción de carácter formal entre "comunicaciones escritas" y "posiciones" ("*statements*" en la versión inglesa). Al hacerlo, la Argentina niega que las comunicaciones escritas de una parte a un grupo especial contengan necesariamente elementos de las posiciones de esa parte. A nuestro juicio, las dos primeras frases del párrafo 2 del artículo 18 del *ESD* no deben leerse como si estuvieran formalmente aisladas la una de la otra. Leer conjuntamente, y en el contexto de una respecto de la otra, las dos primeras frases del párrafo 2 del artículo 18 del *ESD* significa que, si bien una parte no hará públicas las comunicaciones de la otra parte, cada parte tiene el derecho de hacer públicas sus propias posiciones, con sujeción al requisito de confidencialidad establecido en la tercera frase del párrafo 2 del artículo 18 del *ESD*. Recordamos que las comunicaciones escritas de una parte a un grupo especial necesariamente incluyen las posiciones de esa parte. Por consiguiente, a nuestro juicio, la presentación de comunicaciones a un grupo especial es una de las formas en las que una parte hace públicas sus posiciones. Si una parte decide hacer pública la totalidad de su propia posición contenida en su comunicación escrita, tiene el derecho de hacerlo, siempre que se respete el requisito de confidencialidad que figura en la tercera frase del párrafo 2 del artículo 18 del *ESD*. Dado que la Argentina no ha alegado que el Brasil haya violado la obligación de confidencialidad, no consideramos que la decisión del Brasil de hacer pública la totalidad de su posición contenida en su

---

[36] Observamos que otros Grupos Especiales igualmente han adoptado resoluciones sobre cuestiones de procedimiento en el marco del *ESD*. Por ejemplo, el Grupo Especial que se ocupó del asunto *Estados Unidos - EVE (párrafo 5 del artículo 21 - CE)* se pronunció sobre el acceso de los terceros a los escritos de réplica a la luz del párrafo 3 del artículo 10 del *ESD* (Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Trato fiscal aplicado a las "empresas de ventas en el extranjero" - Recurso de las Comunidades Europeas al párrafo 5 del artículo 21 del ESD* ("*Estados Unidos - EVE (párrafo 5 del artículo 21 - CE)* "), WT/DS108/RW, adoptado el 29 de enero de 2002, sección VI.A). Si bien el Órgano de Apelación revocó el fondo de esa resolución del Grupo Especial, no se impugnó la facultad del Grupo Especial de adoptar resoluciones con respecto al párrafo 3 del artículo 10 del *ESD* (informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - EVE (párrafo 5 del artículo 21 - CE)*, WT/DS108/AB/RW, adoptado el 29 de enero de 2002, párrafo 252).

[37] Hacemos referencia a los argumentos presentados en la Comunicación de la Argentina de 15 de agosto de 2002.

Primera comunicación escrita al Grupo Especial (con exclusión de las pruebas documentales) sea incompatible con el párrafo 2 del artículo 18 del *ESD*.[38]

7.15 Además, observamos que, cuando se llevó a cabo nuestra primera reunión sustantiva con las partes, la Argentina ya no alegaba que el Brasil no tuviera derecho a poner a disposición del público la totalidad de sus comunicaciones escritas al Grupo Especial durante las actuaciones del Grupo Especial. Por lo tanto, de manera implícita, la Argentina finalmente aceptó que el Brasil tenía derecho a poner su comunicación a disposición del público de conformidad con el párrafo 2 del artículo 18 del *ESD*. Aunque la Argentina alegó que el Brasil no debió haberlo hecho hasta después de la publicación del informe del Grupo Especial, no constatamos que haya ningún fundamento para este argumento en el párrafo 2 del artículo 18 del *ESD*. El párrafo 2 del artículo 18 no establece límites temporales a los derechos y obligaciones de los Miembros en el marco de esa disposición. Tampoco encontramos ningún fundamento para este argumento en el párrafo 11 de los procedimientos de trabajo del Grupo Especial, que se refiere a la preparación de la parte expositiva del informe del Grupo Especial.[39] A nuestro juicio, nada en esa disposición impone algún límite a los derechos que corresponden a los Miembros en virtud del párrafo 2 del artículo 18 del *ESD*.

7.16 En conclusión, no consideramos que la decisión del Brasil de hacer pública la totalidad de su posición contenida en su Primera comunicación escrita al Grupo Especial (con exclusión de las pruebas documentales) sea incompatible con el párrafo 2 del artículo 18 del *ESD*.

2. Procedimientos previos en el marco del MERCOSUR

7.17 La Argentina ha planteado una cuestión preliminar relativa al hecho de que, antes de someter la medida antidumping de la Argentina al procedimiento de solución de diferencias de la OMC, el Brasil había impugnado esa medida ante un Tribunal Arbitral Ad Hoc del MERCOSUR. La Argentina solicita que, teniendo en cuenta el procedimiento previo en el marco del MERCOSUR, el Grupo Especial se abstenga de pronunciarse sobre las reclamaciones planteadas por el Brasil en el presente procedimiento de solución de diferencias. Subsidiariamente, la Argentina afirma que el Grupo Especial debería estar obligado a aplicar la decisión del Tribunal del MERCOSUR.

a) Argumentos de las partes/de los terceros

7.18 La Argentina entiende que la conducta del Brasil de plantear la diferencia en forma sucesiva en ámbitos diversos, primero en el MERCOSUR y luego, ante la OMC, configura un ejercicio de derecho que contraría el principio de buena fe y que *in casu* posibilita invocar el instituto del *estoppel*. La Argentina no invoca el principio de la cosa juzgada. Subsidiariamente, la Argentina sostiene que en función de la norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes

[38] Para respaldar su posición, el Brasil se basó también en la última frase del párrafo 2 del artículo 18 del *ESD*. Dado que rechazamos la cuestión preliminar planteada por la Argentina sobre la base de las dos primeras frases del párrafo 2 del artículo 18 del *ESD*, no es necesario que consideremos argumentos que corresponden a la última frase de esa disposición.

[39] El párrafo 11 de los procedimientos de trabajo del Grupo Especial establece que "[l]a parte expositiva del informe del Grupo Especial incluirá los antecedentes de procedimiento y fácticos de la presente diferencia. No habrá una descripción de los principales argumentos de las partes y de los terceros en cuanto tales. En lugar de ello, el Grupo Especial adjuntará a su informe las comunicaciones de las partes (incluidas la Primera y la Segunda comunicaciones escritas, las versiones escritas de la Primera y de la Segunda declaraciones orales, y las respuestas de cada parte a las preguntas de la otra parte y del Grupo Especial). A solicitud de una parte, las partes concretas de una comunicación a las que esa parte haya atribuido carácter confidencial en el momento de su presentación no se incluirán en la comunicación adjunta al informe del Grupo Especial."

conforme al párrafo 3 c) del artículo 31 de la *Convención de Viena sobre el derecho de los tratados* ("*Convención de Viena*")[40], a la luz del párrafo 2 del artículo 3 del *ESD* el Grupo Especial no puede soslayar, en la consideración y sustanciación del actual asunto presentado por el Brasil, los antecedentes de lo actuado en el ámbito del MERCOSUR.

7.19 La Argentina afirma que, en el ámbito del MERCOSUR, existe un práctica constante por parte de todos los miembros -incluido el Brasil- de aceptar las obligaciones derivadas del marco normativo vigente, incluidos el Tratado de Asunción del MERCOSUR y el Protocolo de Brasilia. En opinión de la Argentina, no procede conforme al principio de buena fe un Estado parte si en primer lugar recurre al mecanismo del proceso de integración para solucionar su controversia con otro Estado parte y, no satisfecho con el resultado, plantea la misma causa en forma sucesiva en un ámbito distinto, agravando aún más su conducta al omitir referencia alguna al anterior planteo y a su resultado.

7.20 La Argentina sostiene que los elementos esenciales del *estoppel* son "*i) a statement of fact which is clear and unambiguous; ii) this statement must be voluntary, unconditional, and authorized; iii) there must be reliance in good faith upon the statement … to the advantage of the party making the statement*" ("i) una afirmación de hecho clara y sin ambigüedades; ii) esta afirmación debe ser voluntaria, incondicional y autorizada; iii) debe haber confianza de buena fe en la afirmación […] en beneficio de la parte que hace la afirmación").[41] La Argentina sostiene que la conducta anterior del Brasil en materia de aplicación de laudos, confirmada mediante la firma del Protocolo de Olivos, tornan inoponible a la Argentina el reclamo que el Brasil pretende ahora articular en base al *ESD*. La Argentina sostiene que no hay provisión o disposición alguna que prohíba a un Grupo Especial examinar y, en el caso que lo juzgara pertinente, aplicar el principio del *estoppel*. La Argentina afirma que el *estoppel* es un principio del derecho internacional y, que, de conformidad con el Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Gasolina*, "[estas directrices] son en cierta medida consecuencia del reconocimiento de que no debe leerse el *Acuerdo General* aislándolo clínicamente del derecho internacional público".[42] La Argentina asevera que los grupos especiales de la OMC están llamados a aplicar derecho internacional público para resolver las disputas que se les someten, y que grupos especiales anteriores han abordado el principio del *estoppel*.

7.21 El argumento subsidiario de la Argentina se basa en el párrafo 3 c) del artículo 31 de la *Convención de Viena*. La Argentina sostiene que el párrafo 2 del artículo 3 del *ESD* propone una regla de interpretación para el Grupo Especial, y la práctica legal OMC ha consolidado la misma remitiendo a los artículos 31 y 32 de la *Convención de Viena*. La Argentina aduce que, conforme al párrafo 3 c) del artículo 31 de la *Convención de Viena*, la interpretación de un tratado debe tomar en cuenta todas las normas pertinentes del derecho internacional aplicables entre las partes en el momento de aplicación. A juicio de la Argentina, el marco normativo del MERCOSUR y las consecuencias legales derivadas de la aplicación del Protocolo de Brasilia por el Tribunal Arbitral Ad Hoc en el asunto en cuestión constituyen normas pertinentes de derecho internacional público en el sentido del párrafo 3 c) del artículo 31 de la *Convención de Viena*, de forma que el Grupo Especial está obligado a aplicar las resoluciones anteriores del MERCOSUR con respecto a la medida en cuestión.

---

[40] Hecha en Viena, 23 de mayo de 1969, 1155 U.N.T.S. 331; 8 *International Legal Materials* 679.

[41] I. Brownlie, *Principles of Public International Law* (Clarendon Press, 1990), página 641.

[42] Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional* ("*Estados Unidos - Gasolina* "), WT/DS2/AB/R, adoptado el 20 de mayo de 1996, página 20, DSR 1996.I, 29.

7.22 El Brasil sostiene que el principio del *estoppel* no es aplicable en el presente asunto, en parte porque la diferencia planteada ante el Tribunal del MERCOSUR se basó en un fundamento jurídico distinto de la diferencia planteada ante este Grupo Especial. En cualquier caso, el Brasil sostiene que el principio del *estoppel* significa que "*a party is prevented by his own acts from claiming a right to the detriment of other party who was entitled to rely on such conduct and has acted accordingly*" (una parte no puede, en razón de sus propios actos, alegar un derecho en perjuicio de otra parte que tenía derecho a contar con esa conducta y ha actuado en consecuencia).[43] Como estableció el Grupo Especial que se ocupó del asunto *CEE (Estados miembros) - Banano I*, el *estoppel* "sólo podía resultar del consentimiento expreso o, en casos excepcionales, implícito de dichas partes o de las PARTES CONTRATANTES".[44] De acuerdo con el Brasil, el simple hecho de que haya planteado una controversia similar ante el Tribunal del MERCOSUR no significa que el Brasil haya aceptado no plantear la actual controversia ante la OMC, especialmente cuando la controversia planteada ante ese Grupo Especial se basa en un fundamento jurídico distinto del de la diferencia planteada ante el Tribunal del MERCOSUR. El Brasil sostiene que el Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el MERCOSUR, firmado el 18 de febrero de 2002, no puede presentarse aquí como una aceptación implícita o expresa por el Brasil de abstenerse de plantear el caso presente en el sistema de solución de diferencias de la OMC, también en este caso porque el objeto de los procedimientos anteriores en el MERCOSUR era distinto del objeto del actual procedimiento en el marco de la OMC. Además, el Protocolo de Olivos no se aplica a las diferencias que ya se han concluido en el marco del Protocolo de Brasilia.

7.23 Con respecto a la referencia de la Argentina al párrafo 2 del artículo 3 del *ESD*, el Brasil alega que el párrafo 2 del artículo 3 se refiere exclusivamente a la aclaración de las disposiciones vigentes de los Acuerdos de la OMC y no dispone que una resolución previa de un tribunal internacional pone cortapisas a la interpretación que haga un grupo especial de la OMC acerca del Acuerdo sobre la OMC. De hecho, el párrafo 2 del artículo 3 exige que el Grupo Especial examine una reclamación planteada por un Miembro con respecto a la violación de un acuerdo abarcado, a fin de preservar los derechos de ese Miembro en el marco de dicho acuerdo.

7.24 Además, el Brasil hace notar que, contrariamente a las alegaciones de la Argentina, el Brasil no ha incurrido en un ejercicio abusivo de sus derechos en el marco de los Acuerdos de la OMC[45], ni su conducta ha sido contraria a la buena fe por no haber mencionado en su Primera comunicación la resolución del Tribunal del MERCOSUR.[46] El Brasil no hizo referencia a esa resolución simplemente porque cree que no es pertinente en el caso presente, ya que las alegaciones planteadas actualmente ante el Grupo Especial no son las mismas que las que se plantearon ante el Tribunal del MERCOSUR.

7.25 Chile, en calidad de tercero, sostiene que el Brasil tiene el derecho de someter el presente asunto ante la OMC dado que las cuestiones planteadas son diferentes de las cuestiones planteadas de manera previa en el procedimiento de solución de diferencias del MERCOSUR.

7.26 Las Comunidades Europeas, en calidad de tercero, afirman que el párrafo 2 del artículo 3 no es pertinente en este procedimiento dado que trata exclusivamente de la interpretación de los Acuerdos de la OMC, y no de las fuentes del derecho de la OMC. Las Comunidades Europeas sostienen que es difícil comprender cómo la interpretación de las disposiciones del ordenamiento

[43] *Black's Law Dictionary* (West Publishing Co., 1990), página 551.

[44] Informe del Grupo Especial sobre los regímenes de importación del banano de algunos Estados miembros de la CEE ("*CEE (Estados miembros) - Banano I*"), 3 de junio de 1993, no adoptado, DS32/R.

[45] Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafo 23.

[46] *Id.*, párrafo 16.

jurídico del MERCOSUR hecha por el Tribunal Arbitral Ad Hoc podría ser pertinente, de conformidad con las normas establecidas en los artículos 31 y 32 de la *Convención de Viena*, a la interpretación de las disposiciones del *Acuerdo Antidumping* en litigio en la presente diferencia.

7.27 Las Comunidades Europeas no consideran necesario pronunciarse sobre la cuestión de si un Miembro ejercitaría abusivamente su derecho a recurrir a un grupo especial de conformidad con el *ESD* y, por ende, actuaría de forma incompatible con el párrafo 10 del artículo 3, si solicitara el establecimiento de un grupo especial violando el principio de congruencia con los propios actos (*estoppel*).[47] En realidad, este Grupo Especial no necesita pronunciarse sobre esta cuestión porque, en cualquier caso, el comportamiento del Brasil no es contrario a ese principio. Como señaló el Grupo Especial en *CEE (Estados miembros) - Banano I*, la preclusión sólo puede "resultar del consentimiento expreso, o en casos excepcionales, implícito de [las partes reclamantes]".[48] Los hechos alegados por la Argentina no bastan para llegar a la conclusión de que el Brasil ha "consentido", expresa o implícitamente, en no plantear la presente diferencia ante la OMC. No hay en el Protocolo de Brasilia ninguna disposición que limite de algún modo el derecho de las partes a solicitar el establecimiento de un grupo especial de conformidad con los Acuerdos de la OMC con respecto a una medida que haya sido ya objeto de una controversia en el marco del Protocolo.[49] En consecuencia, el mero hecho de que el Brasil solicitara anteriormente el establecimiento de un tribunal arbitral *ad hoc* de conformidad con el Protocolo de Brasilia no equivale a una renuncia a ejercitar una acción de solución de diferencias de conformidad con los Acuerdos de la OMC. De forma análoga, no cabe interpretar el mero hecho de que el Brasil no considerara necesario ejercitar una acción en el ámbito de la solución de diferencias de conformidad con los Acuerdos de

---

[47] Las Comunidades Europeas observan que el Grupo Especial que se ocupó del asunto *India - Automóviles* sugirió la posibilidad de que la preclusión impidiera a un Miembro solicitar el establecimiento de un grupo especial con respecto a un asunto que hubiera sido objeto de una solución mutuamente convenida. (Informe del Grupo Especial, *India - Medidas que afectan al sector del automóvil* ("*India - Automóviles*"), WT/DS146/R, WT/DS175/R y Corr.1, adoptado el 5 de abril de 2002, nota 364.)

[48] Informe del Grupo Especial, *CEE (Estados miembros) - Banano I, supra*, nota **Error! Unknown switch argument.**, párrafo 361. Véase también el informe del Grupo Especial, *Guatemala - Medida antidumping definitivas aplicadas al cemento Portland gris procedente de México* ("*Guatemala - Cemento II*"), WT/DS156/R, adoptado el 17 de noviembre de 2000, nota 791: "es evidente que no cabe considerar que todo silencio implique un consentimiento".

[49] A diferencia del más reciente Protocolo de Olivos sobre la Solución de Controversias, que en el párrafo 2 de su artículo 1 establece lo siguiente:

> "Las controversias comprendidas en el ámbito de aplicación del presente Protocolo que puedan también ser sometidas al sistema de solución de controversias de la Organización Mundial de Comercio o de otros esquemas preferenciales de comercio de que sean parte individualmente los Estados Partes del MERCOSUR, podrán someterse a uno u otro foro a elección de la parte demandante. Sin perjuicio de ello, las partes en la controversia podrán, de común acuerdo, convenir el foro.
>
> Una vez iniciado un procedimiento de solución de controversias de acuerdo al párrafo anterior, ninguna de las partes podrá recurrir a los mecanismos establecidos en los otros foros respecto del mismo objeto …."

El Protocolo de Olivos se firmó el 18 de febrero de 2002 y no ha entrado aún en vigor. Según las Comunidades Europeas, puede plantearse la cuestión de si la solicitud del establecimiento de un grupo especial presentada por el Brasil el 25 de febrero de 2002, es decir después de la firma del Protocolo de Olivos, es compatible con la obligación que impone al Brasil el artículo 18 de la *Convención de Viena* de no frustrar el objeto y el fin de un tratado antes de su entrada en vigor. No obstante, del artículo 50 del Protocolo de Olivos parece desprenderse que el Protocolo no se aplica a controversias ya resueltas de conformidad con el Protocolo de Brasilia.

la OMC con posterioridad a los laudos arbitrales dictados en varios de los demás casos citados por la Argentina como una renuncia tácita del Brasil al derecho que le confieren los Acuerdos de la OMC a ejercitar tal acción en el presente caso.

7.28 El Paraguay, en calidad de tercero, considera que de conformidad con los principios generales del derecho internacional público, el caso en autos tiene carácter de *cosa juzgada*, al haber sido sometido con anterioridad al procedimiento de solución de diferencias establecido en el marco del MERCOSUR, en particular al desarrollado en el Protocolo de Brasilia. En este sentido, el Protocolo de Brasilia establece claramente en su artículo 21[50] el carácter inapelable y obligatorio de los laudos del Tribunal Arbitral Ad Hoc, al considerar que tienen fuerza de cosa juzgada, principio que debe prevalecer en el tratamiento del caso en cuestión.

7.29 El Paraguay también se refiere al Protocolo de Olivos del MERCOSUR que, aunque no está aún vigente, faculta a los miembros del MERCOSUR a elegir el foro en el cual desean dirimir las diferencias, con una limitación particular, que es la de cláusula excluyente en virtud de la cual, una vez iniciado un procedimiento en un foro, no se podrá recurrir a otro de los foros previstos en el Protocolo.

7.30 Los Estados Unidos, en calidad de tercero, sostienen que las normas de solución de controversias del MERCOSUR exceden del ámbito del mandato del Grupo Especial. El párrafo 1 del artículo 7 del *ESD* establece muy claramente que la función de un grupo especial en una diferencia es formular constataciones a la luz de las disposiciones pertinentes de los "acuerdos abarcados" de que se trate. El Protocolo de Brasilia no es un acuerdo abarcado, y la Argentina no ha alegado que los actos del Brasil en relación con el Protocolo infrinjan una disposición de un acuerdo abarcado, sino que lo que parece alegar es que los actos del Brasil pueden considerarse incompatibles con los términos del Protocolo. La alegación de una infracción del Protocolo excede del ámbito del mandato del Grupo Especial, y no hay razones para que éste examine esa cuestión, sin perjuicio de que la Argentina pueda plantear la reclamación correspondiente en el marco del sistema de solución de controversias del MERCOSUR.

7.31 Además, los Estados Unidos sostienen que el hecho de que la Argentina se base en el principio del *estoppel* parece referirse a las obligaciones del Brasil en el marco del MERCOSUR, y no a una disposición del *ESD* o a los demás acuerdos abarcados. En consecuencia, la cuestión no está comprendida en el ámbito del mandato del Grupo Especial, y éste carece de base para formular la constatación solicitada. Los Estados Unidos discrepan asimismo de la opinión de la Argentina de que el Grupo Especial puede aplicar lo que este país denomina el principio del *estoppel*. El hecho de que la Argentina no cite el texto de ninguna disposición en apoyo de su petición se debe a que los Miembros no han convenido en prever la aplicación de ese principio en el sistema de solución de diferencias de la OMC. El término en cuestión no aparece en ningún lugar del texto de ninguna disposición, ni la Argentina cita una disposición cuyo contenido le reconozca la posibilidad de recurrir al tipo de defensa que reivindica. Los Estados Unidos señalan además que la inexistencia de una base en los textos legales se refleja en el hecho de que hasta la fecha ningún grupo especial ha aplicado el principio del *estoppel*. Además, no existe ninguna base para trasladar al procedimiento de solución de diferencias de la OMC conceptos jurídicos que no tienen su fundamento en el *ESD*. La inexistencia de una descripción coherente del concepto en los casos en que los grupos especiales han tenido ocasión de analizarlo en el pasado es otro elemento más que pone de relieve que ese concepto carece

[50] El artículo 21 establece lo siguiente:

"1. Los Laudos del Tribunal Arbitral son inapelables, obligatorios para los Estados Partes en la controversia a partir de la recepción de la respectiva notificación y tendrán respecto de ello fuerza de cosa juzgada.
2. Los Laudos deberán ser cumplidos en un plazo de quince (15) días, a menos que el Tribunal Arbitral fije otro plazo."

de base en un texto legal. En el asunto *CEE (Estados miembros) - Banano I*, por ejemplo, el Grupo Especial manifestó que la preclusión (*estoppel*) sólo podía "resultar del consentimiento expreso o, en casos excepcionales, implícito de [las partes reclamantes]".[51] En cambio, en el asunto *CE - Amianto* y en el asunto *Guatemala - Cemento II*, los respectivos Grupos Especiales declararon que el principio es pertinente cuando una parte deposita una legítima confianza en seguridades dadas por otra parte y sufre luego las consecuencias negativas derivadas de un cambio de posición de la última.[52] A juicio de los Estados Unidos, esa falta de coherencia pone de relieve los riesgos que entraña el intento de identificar conceptos jurídicos supuestamente convenidos fuera de la única fuente *convenida* por todos los Miembros, el texto del propio *ESD*.

7.32 Por último, los Estados Unidos afirman que la remisión de la Argentina al párrafo 2 del artículo 3 del *ESD* en apoyo de su posición está fuera de lugar. Según se declara en él expresamente, el párrafo 2 del artículo 3 se refiere únicamente a las normas *de interpretación* utilizadas para aclarar las disposiciones vigentes de los Acuerdos de la OMC. La petición de la Argentina de que el Grupo Especial se abstenga de examinar las reclamaciones del Brasil no plantea una cuestión relativa a la interpretación adecuada de una disposición de los Acuerdos de la OMC.

b) Evaluación del Grupo Especial

7.33 Esta cuestión preliminar se refiere a los principios de buena fe y del *estoppel*. También se relaciona con el párrafo 2 del artículo 3 del *ESD* y el párrafo 3 c) del artículo 31 de la *Convención de Viena*.[53]

7.34 La Argentina sostiene que el Brasil no actuó de buena fe al impugnar la medida antidumping de la Argentina, primero ante un Tribunal Arbitral Ad Hoc del MERCOSUR y luego, después de haber perdido ese caso, iniciar un procedimiento de solución de diferencias ante la OMC contra la misma medida. Sin embargo, debido a las siguientes razones, constatamos que no se cumplen las condiciones previas para concluir que el Brasil no ha actuado de buena fe.

7.35 Recientemente el Órgano de Apelación declaró en el asunto *Estados Unidos - Ley de compensación (Enmienda Byrd)* que "existe un fundamento para que un grupo especial de solución de diferencias determine, cuando proceda, si un Miembro no ha actuado de buena fe".[54] Por consiguiente, existen circunstancias en las que un grupo especial puede constatar que un Miembro no ha actuado de buena fe. No obstante, es evidente para nosotros que tales constataciones no se

[51] Véase la Comunicación de tercero presentada por las Comunidades Europeas, en la que se cita el informe del Grupo Especial, *CEE (Estados miembros) - Banano I*, *supra*, nota **Error! Unknown switch argument.**, párrafo 361.

[52] Los Estados Unidos se refieren al informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto *Comunidades Europeas - Medidas que afectan al amianto y a los productos que contienen amianto* ("*CE - Amianto*"), WT/DS135/R y Add.1, adoptado el 5 de abril de 2001, modificado por el informe del Órgano de Apelación, WT/DS135/AB/R, párrafo 8.60 (se omiten las citas); informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto *Guatemala - Cemento II*, *supra*, nota **Error! Unknown switch argument.**, párrafos 8.23 y 8.24. Los Estados Unidos sostienen que cabría también afirmar que esos Grupos Especiales describen el concepto de "perjuicio derivado de la legítima confianza".

[53] La Argentina ha aclarado que no invoca el principio de la cosa juzgada. Aunque el Paraguay considera que este principio es pertinente a estas actuaciones, el Paraguay, en calidad de tercero, no tiene el derecho de determinar el alcance de ninguna de las cuestiones preliminares que hemos de examinar.

[54] Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Ley de compensación por continuación del dumping o mantenimiento de las subvenciones de 2000* ("*Estados Unidos - Ley de compensación (Enmienda Byrd)*"), WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R, adoptado el 27 de enero de 2003, párrafo 297.

deben hacer a la ligera. En el asunto *Estados Unidos - Ley de compensación (Enmienda Byrd)* el Órgano de Apelación constató que:

> "No obstante, nada en los acuerdos abarcados avala la conclusión de que, simplemente porque se haya constatado que un Miembro de la OMC ha infringido una disposición sustantiva de un tratado, éste no ha actuado de buena fe. A nuestro entender, sería necesario probar más que una simple infracción para respaldar tal conclusión."[55]

7.36 Sobre la base de la constatación del Órgano de Apelación citada *supra*, consideramos que se deben cumplir dos condiciones antes de que pueda concluirse que un Miembro no ha actuado de buena fe. En primer lugar, el Miembro debe haber infringido una disposición sustantiva de los Acuerdos de la OMC. Segundo, debe haber "más que una simple infracción". Con respecto a la primera condición, la Argentina no ha alegado que el Brasil haya infringido alguna disposición sustantiva de los Acuerdos de la OMC al plantear este asunto. Por consiguiente, aun sin examinar la segunda condición, no existe fundamento para que constatemos que el Brasil infringió el principio de buena fe al someter el presente procedimiento a la OMC.

7.37 La Argentina también ha alegado que el *estoppel* impide que el Brasil recurra a este procedimiento de solución de diferencias de la OMC. La Argentina sostiene que el principio del *estoppel* se aplica en circunstancias en las que i) hay una afirmación de hecho clara e inequívoca; que ii) es voluntaria, incondicional y autorizada y iii) suscita confianza de buena fe. Hemos solicitado a la Argentina que explicara exactamente cómo consideraba que estas tres condiciones se cumplían en este asunto. Particularmente, hemos pedido a la Argentina que identificara la "afirmación de hecho" pertinente hecha por el Brasil, y que describiera cómo se basó de buena fe la Argentina en ella.[56] La Argentina respondió:

> "En primer lugar, la República Argentina entiende que la conducta del Brasil de presentaciones sucesivas activando procedimientos de solución de controversias en ámbitos distintos, primero en el ámbito del MERCOSUR y en segundo término, en la OMC y aún más tomando en consideración los precedentes señalados en la Primera comunicación escrita de la Argentina[1], es decir el recurso a la solución de controversias previsto en el Protocolo de Brasilia para resolver los conflictos surgidos con otros Estados Partes del MERCOSUR, y el acatamiento del contenido y alcance de los laudos arbitrales en todas las disputas, la Argentina considera que están presentes en esta presentación del Brasil los argumentos de hecho y que los mismos reúnen los requisitos de ser claros, no ambiguos, voluntarios, incondicionales y autorizados, elementos esenciales del *estoppel* en los términos de la definición indicada en el párrafo 13 de la Réplica de la Argentina.
>
> En el párrafo 20 de su Réplica[2], la República Argentina puntualiza los elementos que en la actual presentación planteada por el Brasil en el ámbito de la OMC se encuentran presentes. Entre los mismos cabe mencionar el punto iii), *in fine*, de dicho párrafo en el cual se expresa "En consecuencia la conducta anterior del Brasil en materia de aceptación de laudos, confirmada mediante la firma del Protocolo de Olivos, tornan inoponible a la Argentina el reclamo que el Brasil pretende ahora articular en base al ESD".

---

[55] *Id*., párrafo 298.

[56] La pregunta 66 del Grupo Especial dice: "En cuanto al párrafo 13 de la Segunda comunicación de la Argentina, ¿cuál fue la "afirmación de hecho" (punto I) supuestamente formulada por el Brasil? Sírvanse explicar cómo se basó de buena fe la Argentina en esa supuesta afirmación (punto III)".

> Aún más, las conductas del Brasil de firmar el Protocolo de Olivos en fecha 18 de febrero de 2002 -en el cual el Brasil acepta expresamente la cláusula de opción de foro-, y siete días después, es decir el 25 de febrero de 2002, solicitar el establecimiento del grupo especial en la actual controversia, evidencia, a juicio de la Argentina, que existe una contradicción en la conducta del Brasil en la cual la Argentina depositó una legítima confianza en tanto que ambos son Estados Parte del MERCOSUR y de hecho ahora sufre las consecuencias negativas del cambio de posición por parte de Brasil.[3] Este hecho ha sido señalado también en las presentaciones de las CE[4] y el Paraguay[5] en calidad de terceras partes."[57]

[1] Primera comunicación escrita de la República Argentina, 29 de agosto de 2002, párrafos 18-22 y notas a pie correspondientes.

[2] Réplica de la República Argentina, 17 de octubre de 2002, párrafo 20.

[3] De hecho, la República Argentina ya ha aprobado el Protocolo de Olivos. El 9 de octubre de 2002 el Honorable Congreso Nacional aprobó el Protocolo de Olivos por Ley 25.663, que ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 2091/02 del 18 de octubre de 2002 y publicados en el Boletín Oficial de la República Argentina Nº 30008, el 21/10/2002.

[4] Comunicación de tercera Parte presentada por las Comunidades Europeas, 9 de septiembre de 2002, párrafo 17 y nota 17.

[5] Comunicación de tercera Parte presentada por Paraguay, 9 de septiembre de 2002, párrafo 8.

7.38 No consideramos que la respuesta de la Argentina sea suficiente para establecer que se cumplen en el presente asunto las tres condiciones que la Argentina identificó para la aplicación del principio del *estoppel*.[58] Con respecto a la primera condición establecida por la Argentina, no consideramos que el Brasil haya hecho una afirmación clara e inequívoca en el sentido de que, al haber sometido un asunto al marco de solución de controversias del MERCOSUR, no recurriría posteriormente al procedimiento de solución de diferencias de la OMC. A este respecto, observamos que el Grupo Especial que se ocupó del asunto *CEE (Estados miembros) - Banano I* constató que el *estoppel* sólo podía "resultar del consentimiento expreso o, en casos excepcionales, implícito de [las partes reclamantes]".[59] Estamos de acuerdo con esta opinión. No existen en el expediente pruebas de que el Brasil haya hecho una afirmación expresa de que no recurriría al procedimiento de solución de diferencias de la OMC respecto de medidas impugnadas previamente en el marco del MERCOSUR. Tampoco existen en el expediente circunstancias excepcionales que nos hagan inferir alguna afirmación en ese sentido. En particular, el hecho de que el Brasil haya preferido no invocar sus derechos en el marco de la solución de diferencias de la OMC después de otros procedimientos de solución de diferencias en el marco del MERCOSUR no significa, a nuestro juicio, que el Brasil haya renunciado de manera implícita a sus derechos en virtud del *ESD*. Esto se ve corroborado por el

[57] Respuesta de la Argentina a la pregunta 66 del Grupo Especial.

[58] Los Estados Unidos han alegado que no existe ninguna base para que un grupo especial de la OMC aplique el principio del *estoppel*. Dado que constatamos que no se reúnen las condiciones identificadas por la Argentina para la aplicación del principio del *estoppel*, no consideramos necesario determinar si tendríamos o no la autoridad de aplicar el principio del *estoppel* si se hubieran satisfecho las condiciones pertinentes. Tampoco consideramos necesario determinar si las tres condiciones sugeridas por la Argentina son suficientes para la aplicación de esa propuesta.

[59] Informe del Grupo Especial, *CEE (Estados miembros) - Banano I*, *supra*, nota **Error! Unknown switch argument.**, párrafo 361. Véase también el informe del Grupo Especial, *Guatemala - Cemento II*, *supra*, nota **Error! Unknown switch argument.**, nota 791: "es evidente que no cabe considerar que todo silencio implique un consentimiento".

hecho de que el Protocolo de Brasilia, en cuyo marco el Brasil planteó asuntos previos ante el MERCOSUR, no impone restricción alguna al derecho del Brasil de recurrir posteriormente al procedimiento de solución de diferencias de la OMC respecto de la misma medida. Observamos que el Brasil firmó el Protocolo de Olivos en febrero de 2002. El artículo 1 del Protocolo de Olivos establece que una vez que una parte decida presentar un asunto en el marco de los foros de solución de controversias del MERCOSUR o de la OMC, esa parte no podrá presentar un asunto posterior respecto del mismo objeto en el otro foro. No obstante, el Protocolo de Olivos no modifica nuestra valoración dado que ese Protocolo aún no ha entrado en vigor y, en cualquier caso, no se aplica respecto de controversias ya decididas de conformidad con el Protocolo de Brasilia del MERCOSUR.[60] En realidad, el hecho de que los miembros del MERCOSUR considerasen necesario adoptar el Protocolo de Olivos nos sugiere que reconocieron que (en ausencia de dicho Protocolo) un procedimiento de solución de controversias en el marco del MERCOSUR podía ser seguido de un procedimiento de solución de diferencias en la OMC respecto de la misma medida.

7.39 Con respecto a la tercera condición, observamos que la Argentina no citó la totalidad del texto del autor pertinente. Citada en su totalidad, la tercera condición dice que "debe haber confianza de buena fe en la afirmación, ya sea en detrimento de la parte que confía de esa forma en la afirmación o en beneficio de la parte que hace la afirmación".[61] Al citar al mismo autor, otro Grupo Especial afirmó con respecto al *estoppel* que "[l]a premisa de este principio es que cuando una parte ha sido inducida a actuar por las seguridades dadas por otra en una forma tal que resultaría perjudicada si la otra parte modificara posteriormente su posición, ese principio impide a esta última modificarla".[62] A nuestro juicio, el simple hecho de que supuestas afirmaciones del Brasil le causen inconvenientes, no es suficiente para que la Argentina demuestre que fue inducida a actuar por las seguridades de esas supuestas afirmaciones. No existe nada en el expediente que nos sugiera que la Argentina se basó activamente de buena fe en alguna afirmación hecha por el Brasil, ya sea en beneficio del Brasil o en perjuicio de la Argentina. Nada en el expediente sugiere que la Argentina hubiera actuado de forma diferente si el Brasil no hubiera hecho la supuesta afirmación de que no recurriría al presente procedimiento de solución de diferencias de la OMC. En su respuesta a la pregunta 66 citada *supra*, que se refiere específicamente a esta cuestión, la Argentina simplemente afirmó que ella "ahora sufre las consecuencias negativas del cambio de posición por parte de Brasil" (en relación con su práctica anterior de no someter los asuntos a la OMC después de que hubiera resoluciones del MERCOSUR respecto del mismo objeto), sin explicar más detenidamente el carácter de esas "consecuencias negativas". La afirmación vaga de la Argentina con respecto a las "consecuencias negativas" no es suficiente para demostrar que fue inducida a actuar por las seguridades de la supuesta afirmación del Brasil, y que ahora sufre las consecuencias negativas del supuesto cambio de posición por parte del Brasil. Por estos motivos, rechazamos la alegación de la Argentina de que el Brasil está impedido de recurrir al presente procedimiento de solución de diferencias de la OMC.

7.40 La Argentina alega subsidiariamente que si el Grupo Especial constata que el Brasil tiene el derecho de recurrir al presente procedimiento de solución de diferencias de la OMC, el Grupo Especial está entonces obligado a aplicar la resolución previa del MERCOSUR respecto de la medida impugnada en el presente asunto. La Argentina afirma que la resolución anterior del MERCOSUR es parte del marco normativo que ha de aplicar el Grupo Especial como resultado del párrafo 3 c) del

[60] El artículo 50 del Protocolo de Olivos establece que "[l]as controversias en trámite, iniciadas de acuerdo con el régimen del Protocolo de Brasilia, se regirán exclusivamente por el mismo hasta su total conclusión".

[61] Véase nota **Error! Unknown switch argument.**, *supra*.

[62] Informe del Grupo Especial, *Guatemala - Cemento II*, *supra*, nota **Error! Unknown switch argument.**, párrafo 8.23.

artículo 31 de la *Convención de Viena*, en virtud del cual habrá de tenerse en cuenta "toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes" a los efectos de la interpretación de tratados. La Argentina afirma que las disposiciones de la *Convención de Viena* son aplicables en el presente procedimiento en virtud del párrafo 2 del artículo 3 del *ESD*, que establece que el sistema de solución de diferencias de la OMC sirve para aclarar las disposiciones vigentes de los acuerdos abarcados "de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional público".

7.41 Observamos que el párrafo 2 del artículo 3 del *ESD* trata de las normas internacionales de interpretación de tratados. El párrafo 3 c) del artículo 31 de la *Convención de Viena* aborda también la interpretación de tratados. Sin embargo, la Argentina no ha pretendido basarse en ninguna norma jurídica que establezca que, respecto de las relaciones entre la Argentina y el Brasil, las disposiciones de los Acuerdos de la OMC deberían interpretarse de una forma determinada. En especial, la Argentina no se ha basado en ninguna afirmación o constatación de la resolución del Tribunal del MERCOSUR que sugiera que deberíamos interpretar de una forma determinada disposiciones específicas de los Acuerdos de la OMC. En lugar de ocuparse de la interpretación de los Acuerdos de la OMC, la Argentina en realidad alega que la resolución anterior del Tribunal del MERCOSUR exige que nos pronunciemos de una forma determinada. En otras palabras, la Argentina quisiera que apliquemos las disposiciones pertinentes de la OMC de una forma determinada en lugar de que las interpretemos de una forma determinada. Sin embargo, no existe fundamento en el párrafo 2 del artículo 3 del *ESD*, o en alguna otra disposición, que sugiera que estemos obligados a pronunciarnos de una forma determinada o a aplicar las disposiciones de la OMC de una forma determinada. Observamos que ni siquiera estamos obligados a aplicar las resoluciones que figuran en los informes adoptados de los grupos especiales de la OMC[63], por lo que no vemos absolutamente ninguna razón por la cual estaríamos obligados a aplicar las resoluciones de órganos de solución de diferencias ajenos a la OMC. En consecuencia, rechazamos los argumentos subsidiarios de la Argentina con respecto al párrafo 3 c) del artículo 31 de la *Convención de Viena*.[64]

7.42 Teniendo en cuenta lo expuesto *supra*, rechazamos la solicitud de la Argentina de que, a la luz de los procedimientos anteriores del MERCOSUR, el Grupo Especial se abstenga de pronunciarse sobre las reclamaciones planteadas por el Brasil en el presente procedimiento de solución de diferencias en el marco de la OMC. También rechazamos la solicitud subsidiaria de la Argentina de que nos consideremos obligados a aplicar la resolución del Tribunal del MERCOSUR.

B. CUESTIONES DE CARÁCTER GENERAL

1. Norma de examen

7.43 El párrafo 6 del artículo 17 del *Acuerdo Antidumping* establece la norma de examen especial aplicable a las diferencias en materia antidumping. Con respecto a las cuestiones de hecho, el párrafo 6 i) del artículo 17 dispone:

---

[63] Véase el informe del Órgano de Apelación, *Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas* ("*Japón - Bebidas alcohólicas II*"), WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adoptado el 1° de noviembre de 1996, página 14, DSR 1996.I, 125.

[64] Aun en el caso de que la Argentina se hubiera basado en la resolución del Tribunal del MERCOSUR para alegar que determinadas disposiciones del *Acuerdo sobre la OMC* deberían interpretarse de una forma determinada, no es completamente claro que sería aplicable el párrafo 3 c) del artículo 31 de la *Convención de Viena*. Particularmente, no resulta claro si una norma aplicable solamente entre varios de los Miembros de la OMC constituiría una norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las "partes".

> "[el grupo especial] al evaluar los elementos de hecho del asunto, determinará si las **autoridades han establecido adecuadamente los hechos** y si han realizado una **evaluación imparcial y objetiva de ellos**. Si se han establecido adecuadamente los hechos y se ha realizado una evaluación imparcial y objetiva, no se invalidará la evaluación, aun en el caso de que el grupo especial haya llegado a una conclusión distinta;" (sin negritas en el original)

7.44 Suponiendo que lleguemos a la conclusión de que el establecimiento de los hechos relativos a una reclamación particular en este asunto fue adecuado, podemos considerar si, sobre la base de las pruebas presentadas a las autoridades argentinas en el momento de la determinación, una autoridad investigadora imparcial y objetiva que evaluase esas pruebas podría haber llegado a las conclusiones a que llegaron las autoridades argentinas sobre esa cuestión.[65]

7.45 El párrafo 6 i) del artículo 17 nos exige evaluar los elementos de hecho para determinar si el establecimiento de los hechos realizado por las autoridades investigadoras fue adecuado, y analizar la evaluación de esos hechos por las autoridades investigadoras para determinar si fue imparcial y objetiva. Lo que se deduce con claridad de esto es que nos está impedido establecer hechos y evaluarlos -es decir, no podemos emprender un examen *de novo*-. Sin embargo, esto no limita nuestro examen de las cuestiones en litigio, sino sólo el modo en el cual realizamos ese examen. En este sentido, tenemos presente que el párrafo 5 ii) del artículo 17 del *Acuerdo Antidumping* establece que hemos de examinar el asunto sobre la base de "los hechos comunicados de conformidad con los procedimientos internos apropiados a las autoridades del Miembro importador".

7.46 Con respecto a las cuestiones de interpretación del *Acuerdo Antidumping*, el párrafo 6 ii) del artículo 17 establece:

> "[el grupo especial] interpretará las disposiciones pertinentes del Acuerdo de conformidad con las reglas consuetudinarias de interpretación del derecho internacional público. Si el grupo especial llega a la conclusión de que una disposición pertinente del **Acuerdo se presta a varias interpretaciones admisibles**, declarará que la medida adoptada por las autoridades está en **conformidad con el Acuerdo si se basa en alguna de esas interpretaciones admisibles**." (sin negritas en el original)

7.47 El párrafo 6 ii) del artículo 17 nos exige que apliquemos las reglas consuetudinarias de interpretación de los tratados, que se recogen en los artículos 31 y 32 de la *Convención de Viena*. El artículo 31 de la *Convención de Viena* establece que un tratado deberá interpretarse conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin. Esto no difiere de la tarea de todos los grupos especiales al interpretar los Acuerdos de la OMC de conformidad con el párrafo 2 del artículo 3 del *ESD*. Lo que añade el párrafo 6 ii) del artículo 17 del *Acuerdo Antidumping* es la norma de que, si este proceso de interpretación de tratados nos lleva a la conclusión de que la interpretación de la disposición en cuestión realizada por la parte demandada es admisible, debemos declarar que la medida está en conformidad con el Acuerdo si se basa en esa interpretación admisible.

---

[65] Observamos que esta es la norma aplicada por los Grupos Especiales que se ocuparon de los asuntos *Estados Unidos - Aplicación de medidas antidumping a las chapas de acero inoxidable en rollos y las hojas y tiras de acero inoxidable procedentes de Corea* ("*Estados Unidos - Acero inoxidable*"), WT/DS179/R, adoptado el 1° de febrero de 2001; y *México - Investigación antidumping sobre el jarabe de maíz con alta concentración de fructosa (JMAF) procedente de los Estados Unidos*, ("*México - Jarabe de maíz*"), WT/DS132/R y Corr.1, adoptado el 24 de febrero de 2000.

7.48 Finalmente, como se señala *infra*, la Argentina ha mencionado argumentos para respaldar las decisiones de las autoridades investigadoras que no pudimos encontrar en el expediente de la investigación que se nos ha presentado. Esto plantea la cuestión de si se debería tener en cuenta una justificación *ex post* para evaluar el cumplimiento por la Argentina de las disposiciones del *Acuerdo Antidumping*. Observamos que el Grupo Especial que se ocupó del asunto *Argentina - Baldosas de cerámica* expresó su opinión de que:

> "Con arreglo al párrafo 6 del artículo 17 del *Acuerdo Antidumping*, tenemos que determinar si la DCD estableció los hechos adecuadamente y si su evaluación de esos hechos fue imparcial y objetiva. En otras palabras, se nos pide que examinemos la evaluación hecha por la DCD en el momento de la determinación tal como figura en un aviso público o en cualquier otro documento de carácter público o confidencial. No creemos que, en tanto que grupo especial encargado de examinar la evaluación de la autoridad investigadora, tengamos que tener en cuenta argumentos y razones que no fueron parte del proceso de evaluación de esa Autoridad y representan en lugar de ello justificaciones *ex post facto* que no se expusieron en el momento de formularse la determinación."[66] (sin subrayar en el original, no incluye nota de pie de página)

7.49 Estamos de acuerdo con el enfoque adoptado por ese Grupo Especial. Por consiguiente, no creemos que, en calidad de grupo especial que examina la evaluación de la autoridad investigadora, debamos tener en cuenta cualquier argumento o razón que no se haya demostrado que haya formado parte del proceso de evaluación a cargo de la autoridad investigadora.

2. Carga de la prueba

7.50 En los procedimientos de solución de diferencias de la OMC, la carga de la prueba incumbe a la parte que afirma una determinada reclamación o defensa.[67] Por consiguiente, la parte reclamante debe establecer una presunción *prima facie* de infracción de las disposiciones pertinentes de los Acuerdos de la OMC, la cual debe ser refutada por el demandado.[68] En estas actuaciones del Grupo Especial observamos, por lo tanto, que incumbe al Brasil, que ha impugnado la compatibilidad de la medida de la Argentina, la carga de la prueba de demostrar que la medida no es compatible con las disposiciones pertinentes del *Acuerdo Antidumping*. Sin embargo, también observamos, que generalmente incumbe a cada parte que afirma un hecho, sea reclamante o demandado, presentar

---

[66] Informe del Grupo Especial, *Argentina - Medidas antidumping definitivas aplicadas a las importaciones de baldosas de cerámica para el suelo procedentes de Italia* ("*Argentina - Baldosas de cerámica*"), WT/DS189/R, adoptado el 5 de noviembre de 2001, párrafo 6.27.

[67] Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Medida que afecta a las importaciones de camisas y blusas de tejidos de lana procedentes de la India* ("*Estados Unidos - Camisas y blusas*"), WT/DS33/AB/R y Corr.1, adoptado el 23 de mayo de 1997, DSR 1997.I, 323, página 337 y siguientes.

[68] Observamos la afirmación del Órgano de Apelación en el asunto *Corea - Productos lácteos* de que: "No hay en el ESD o en el Acuerdo sobre Salvaguardias ninguna disposición que obligue a un grupo especial a formular una resolución expresa acerca de si el reclamante ha establecido una presunción *prima facie* de violación antes de pasar a examinar los medios de defensa y pruebas del demandado." (Informe del Órgano de Apelación, *Corea - Medida de salvaguardia definitiva impuesta a las importaciones de determinados productos lácteos* ("*Corea - Productos lácteos*"), WT/DS98/AB/R, adoptado el 12 de enero de 2000, párrafo 145.) El Órgano de Apelación confirmó esta opinión en el asunto *Tailandia - Derechos antidumping sobre los perfiles de hierro y acero sin alear y vigas doble T procedentes de Polonia* ("*Tailandia - Vigas doble T*"), WT/DS122/AB/R, adoptado el 5 de abril de 2001, párrafo 134: "En nuestra opinión, no es obligación de un grupo especial formular, en todos y cada uno de los casos, una constatación independiente y específica de que una parte ha satisfecho la carga de la prueba con respecto a una determinada alegación o de que una parte ha refutado una presunción *prima facie*."

pruebas del mismo.[69] A este respecto, por lo tanto, incumbe también a la Argentina la carga de presentar pruebas de los hechos que afirma. También recordamos que una presunción *prima facie* es aquella que, a falta de una refutación eficaz por la otra parte, exige que un grupo especial, como cuestión de derecho, se pronuncie en favor de la parte que ha establecido dicha presunción. No incumbe al Grupo Especial argumentar por ninguna de las partes, pero puede formular preguntas a las partes "para aclarar y extraer los argumentos jurídicos".[70] Además, consideramos que ambas partes tienen en general la obligación de cooperar en las actuaciones para ayudarnos a cumplir nuestro mandato, mediante la presentación de la información pertinente.[71] Debemos inferir conclusiones sobre la base de todos los hechos pertinentes que figuran en el expediente, incluido, por ejemplo, el hecho de que una parte se niegue a facilitar la información pertinente.[72]

C. RECLAMACIONES RELATIVAS AL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN/SUPUESTAS INFRACCIONES DE CARÁCTER PROCESAL EN LA INVESTIGACIÓN

1. Suficiencia de las pruebas que justifican la iniciación de la investigación - Reclamaciones 2, 4, 6 y 8

7.51 Estas reclamaciones se refieren a la decisión de la autoridad investigadora en el sentido de que existían pruebas suficientes, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 5 del *Acuerdo Antidumping*, que justificaban la iniciación de una investigación sobre las importaciones de pollos provenientes del Brasil. Habida cuenta de que la decisión de la autoridad investigadora de iniciar la investigación se basó en la información que figura en la solicitud, las reclamaciones del Brasil se refieren a la forma en que la autoridad investigadora trató la información contenida en esa solicitud.

a) Argumentos de las partes

i) Reclamación 2

7.52 El Brasil alega que no había pruebas suficientes para que la autoridad investigadora ajustase el valor normal a fin de que reflejase las diferencias en las características físicas entre los pollos vendidos en la Argentina y en el Brasil, respectivamente. El Brasil sostiene que no existían pruebas suficientes que sustentasen la reclamación del solicitante de que los pollos vendidos en el Brasil eran diferentes de los pollos vendidos en la Argentina porque los primeros se vendían con patas y cabeza y los vendidos en la Argentina no. El Brasil también arguye que el solicitante no demostró que la supuesta diferencia en las características físicas afectase la comparabilidad de los precios. Por último, el Brasil afirma que no existían pruebas en apoyo de la exactitud y pertinencia de las tasas de rendimiento utilizadas por la autoridad investigadora al iniciar la investigación para calcular la cuantía del ajuste por las supuestas diferencias en las características físicas.

---

[69] Véase nota **Error! Unknown switch argument.**, *supra*.

[70] Informe del Órgano de Apelación, *Tailandia - Vigas doble T*, *supra*, nota **Error! Unknown switch argument.**, párrafo 136.

[71] Informe del Órgano de Apelación, *Canadá - Medidas que afectan a la exportación de aeronaves civiles* ("*Canadá - Aeronaves civiles*"), WT/DS70/AB/R, adoptado el 20 de agosto de 1999, DSR 1999.III, 1377, párrafo 190.

[72] *Id*., párrafo 203; informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Medidas de salvaguardia definitivas impuestas a las importaciones de gluten de trigo procedentes de las Comunidades Europeas* ("*Estados Unidos - Gluten de trigo*"), WT/DS166/AB/R, adoptado el 19 de enero de 2001, párrafos 173 y 174.

7.53 La Argentina rechaza la reclamación del Brasil basándose en la constatación formulada por el Grupo Especial en el asunto *Guatemala - Cemento I*[73] donde se expresó que "el peso y la calidad de las pruebas que deben exigirse de una autoridad investigadora antes de iniciar una investigación necesariamente han de ser menores que las exigidas de esa autoridad en el momento de pronunciar una determinación definitiva". La Argentina alega que la autoridad investigadora efectuó los ajustes sobre la base de las pruebas presentadas por el solicitante en forma de información publicada por JOX Assessoria Agropecuaria S/C Ltda. ("JOX"), una empresa de consultores brasileña especializada en el sector agropecuario, respecto de las ventas de pollos en São Paulo. Según la Argentina, la información de JOX indicaba que los pollos enfriados se vendían en São Paulo con patas y cabeza. La Argentina expresa que JOX es una publicación especializada que refleja la situación del mercado de São Paulo, y que São Paulo es un gran centro urbano que refleja las pautas de consumo del mercado interno de todo el Brasil.

ii) Reclamación 4

7.54 El Brasil alega que la autoridad investigadora excluyó los precios de exportación que eran superiores al valor normal y que estableció el precio de exportación, a los efectos de iniciar la investigación, solamente sobre la base de aquellas transacciones cuyos precios eran inferiores al valor normal. Según el Brasil, al proceder así, la autoridad investigadora estableció erróneamente el precio de exportación, y en consecuencia, realizó una comparación sesgada entre el precio de exportación y el valor normal al determinar el margen de dumping. El Brasil sostiene que una autoridad investigadora debería decidir si inicia o no una investigación sobre la base de todas las pruebas presentadas en la solicitud. El Brasil alega que, de conformidad con el párrafo 4.2 del artículo 2 del *Acuerdo Antidumping*, las autoridades investigadoras deben comparar el promedio ponderado del valor normal con el promedio ponderado de los precios de todas las transacciones de exportación comparables, y no solamente con aquellas transacciones de exportación cuyos precios son inferiores al valor normal. El método utilizado por la autoridad investigadora tuvo como resultado la determinación de un precio de exportación erróneo y una comparación no equitativa entre el precio de exportación y el valor normal, en contravención de lo dispuesto en los párrafos 4 y 4.2 del artículo 2. Por último, el Brasil alega que la decisión de la Argentina de iniciar la investigación aplicando este método se basó en una evaluación parcial y no objetiva de los hechos que tuvo ante sí la autoridad investigadora.

7.55 La Argentina aduce que la autoridad investigadora analizó las transacciones de importación para tratar de establecer cuales se aproximaban más al producto objeto de investigación. La Argentina arguye que la autoridad investigadora actuó de esa manera con el único propósito de calcular el precio de exportación más adecuado y comparable posible en la etapa previa a la iniciación de la investigación. En otras palabras, la Argentina alega que solamente excluyó aquellas transacciones de exportación que no eran "similares" al producto objeto de investigación. Además, la Argentina afirma que la autoridad investigadora determinó un promedio de las transacciones adecuadas, sin efectuar en realidad ninguna selección que pudiera distorsionar la diferencia existente entre el precio de exportación y el valor normal. Según la Argentina, el informe del 7 de enero de 1998 contiene los márgenes de dumping determinados sobre la base del promedio del precio de las transacciones de exportación realizadas a la Argentina respecto del producto objeto de investigación.

[73] Informe del Grupo Especial, *Guatemala - Investigación antidumping sobre el cemento Portland procedente de México* ("*Guatemala - Cemento I*"), WT/DS60/R, adoptado el 25 de noviembre de 1998, modificado por el informe del Órgano de Apelación, WT/DS60/AB/R, DSR 1998.IX, 3797.

iii) Reclamación 6

7.56 El Brasil alega que las autoridades argentinas determinaron el valor normal a los efectos de la iniciación de la investigación sobre la base de la información correspondiente solamente a un día, mientras que los datos sobre el precio de exportación abarcaban varios meses. El Brasil afirma que el párrafo 3 del artículo 5, si se lo interpreta a la luz del párrafo 4 del artículo 2, exige que se efectúe una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal respecto de las ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible. El Brasil alega que, si la autoridad investigadora hubiese examinado la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas en la solicitud, habría pedido al solicitante que suministrase los datos sobre el valor normal correspondientes al período completo sujeto a examen a fin de realizar correctamente una comparación equitativa con los precios de exportación correspondientes al mismo período. Además, el Brasil sostiene que la autoridad investigadora rebasó el alcance de los datos presentados en la solicitud y extendió el período de las transacciones de exportación a los efectos de determinar el precio de exportación. Ello, a juicio del Brasil, indica claramente que la autoridad investigadora no se basó en la información presentada en la solicitud para determinar que existían pruebas suficientes de la existencia de dumping que justificasen la iniciación de la investigación. El Brasil concluye que, al no haber examinado con exactitud las pruebas presentadas en la solicitud y al agregar información sobre el precio de exportación que no había sido presentada en dicha solicitud para decidir la iniciación de la investigación, la Argentina no actuó de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 5 del *Acuerdo Antidumping*.

7.57 La Argentina alega que el párrafo 3 del artículo 5 no impone ninguna prescripción respecto de los períodos correspondientes a los datos disponibles sobre el precio de exportación y el valor normal. La Argentina arguye que la autoridad investigadora actuó en conformidad con el párrafo 4 del artículo 2. La Argentina afirma que la base para realizar la comparación se estableció a la luz de las pruebas que estaban razonablemente al alcance del solicitante y que fueron presentadas en la solicitud. La Argentina sostiene que no cabe requerir a la autoridad investigadora un grado de exigencia, respecto del examen previsto en el párrafo 3 del artículo 5, similar a la norma exigida una vez iniciada la investigación.

iv) Reclamación 8

7.58 El Brasil alega que, debido a los diferentes períodos de recopilación de datos correspondientes al dumping y al daño utilizados en la solicitud, la autoridad investigadora no pudo haber determinado que existían pruebas suficientes sobre la existencia de una relación causal entre las importaciones objeto de dumping de junio de 1997 y la amenaza de daño de junio de 1998. El Brasil afirma que, para verificar que existía una amenaza de daño proveniente de las importaciones objeto de dumping, los datos sobre el dumping recopilados y analizados deberían haber abarcado hasta junio de 1998.

7.59 La Argentina sostiene que no cabe requerir a la autoridad investigadora un grado de exigencia, respecto del examen previsto en el párrafo 3 del artículo 5, similar a la norma exigida una vez iniciada la investigación.

b) Evaluación del Grupo Especial

7.60 Estas reclamaciones plantean la cuestión de saber si la autoridad investigadora ha observado o no lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 5 del *Acuerdo Antidumping*, interpretado a la luz del artículo 2, cuando decidió iniciar una investigación sobre la base de la información que figura en la solicitud. Al abordar esta cuestión, adoptaremos un enfoque similar al de los grupos especiales precedentes que han examinado reclamaciones en el marco del párrafo 3 del artículo 5 del *Acuerdo*

Antidumping.[74] Por lo tanto, de conformidad con nuestra norma de examen, determinaremos si una autoridad investigadora objetiva e imparcial pudo haber determinado correctamente, a la luz de los hechos que tuvo ante sí, si existían pruebas suficientes sobre la existencia de dumping, daño y relación causal que justificasen la iniciación de una investigación antidumping. Para formular dicha determinación, el párrafo 3 del artículo 5 dispone que la autoridad investigadora examine la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas en la solicitud. Evidentemente, la exactitud y pertinencia de las pruebas es importante para la determinación de la autoridad investigadora respecto de si existen o no pruebas suficientes que justifiquen la iniciación de una investigación. Sin embargo, el criterio jurídico del párrafo 3 del artículo 5 no consiste meramente en la exactitud y pertinencia de las pruebas *per se*, sino en la *suficiencia* de esas pruebas. Al analizar la suficiencia de las pruebas, estamos de acuerdo con un Grupo Especial anterior que concluyó que las declaraciones y aseveraciones sin apoyo en prueba alguna no constituyen prueba suficiente en el sentido del párrafo 3 del artículo 5.[75]

7.61 Si bien las reclamaciones del Brasil se basan en el párrafo 3 del artículo 5 del *Acuerdo Antidumping*, también plantean cuestiones respecto de la relación existente entre el párrafo 3 del artículo 5 y otras disposiciones del *Acuerdo Antidumping*, en particular, el artículo 2.[76] Observamos que esta cuestión fue abordada por el Grupo Especial en el asunto *Guatemala - Cemento II* en los siguientes términos:

> "[A]unque en el párrafo 3 del artículo 5 no hay una referencia expresa a las pruebas de la existencia de dumping, puede interpretarse en conexión con el párrafo 2 del artículo 5, que en el párrafo 3 de dicho artículo se trata de las pruebas sobre los tres elementos necesarios para la imposición de una medida antidumping. Dicho de otro modo, el párrafo 2 del artículo 5 exige que la solicitud incluya pruebas suficientes de la existencia de dumping, de daño y de una relación causal entre uno y otro, mientras que el párrafo 3 de ese artículo obliga a la autoridad investigadora a cerciorarse de la exactitud y pertinencia de las pruebas con el objeto de determinar que son suficientes para justificar la iniciación de la investigación. Por consiguiente, si se interpreta el párrafo 3 del artículo 5 en conexión con el párrafo 2 del mismo artículo, las pruebas a que hace referencia el primero de esos preceptos han de ser pruebas de la existencia de dumping, de daño y de una relación causal entre uno y otro. Observamos además que la única aclaración que se hace en el *Acuerdo Antidumping* del término 'dumping' es la que figura en el artículo 2. En consecuencia, para determinar que existen pruebas suficientes de dumping, la autoridad investigadora no puede prescindir completamente de los elementos que configuran la existencia de esta práctica según se describen en el artículo 2. El objeto del presente análisis no es formular una determinación de que la iniciación de una investigación ha infringido el artículo 2, sino establecer criterios que nos sirvan de orientación en nuestro examen de la determinación del Ministerio de que existían pruebas suficientes de dumping que justificaban una investigación. Naturalmente, no pretendemos sugerir que la autoridad investigadora haya de contar en el momento en que inicia una investigación con pruebas de la existencia de dumping, en el sentido del artículo 2, en la cantidad y de la calidad que serían necesarias para apoyar una determinación preliminar o

---

[74] Informe del Grupo Especial en el asunto *México - Jarabe de maíz*, nota 65, párrafos 7.91-7.110; informe del Grupo Especial en el asunto *Guatemala - Cemento II*, *supra*, nota **Error! Unknown switch argument.**, párrafos 8.29-8.58.

[75] Informe del Grupo Especial en el asunto *Guatemala - Cemento II*, *supra*, nota **Error! Unknown switch argument.**, párrafos 8.51-8.53.

[76] Primera comunicación escrita del Brasil, párrafos 102-104 (Reclamación 4); párrafo 132 (Reclamación 6); y párrafos 149 y 155 (Reclamación 8).

> definitiva. Una investigación antidumping es un proceso en el que se llega gradualmente a la certidumbre de la existencia de todos los elementos necesarios para adoptar una medida, conforme avanza la investigación. No obstante, es necesario que las pruebas sean de tal calidad que una autoridad investigadora imparcial y objetiva pueda determinar que existen pruebas suficientes de dumping en el sentido del artículo 2 que justifican la iniciación de una investigación.[794]"[77]

---

[794] A este respecto coincidimos plenamente con el razonamiento del Grupo Especial que examinó el asunto *Guatemala - Cemento I*, que declaró lo siguiente:

> "En nuestra opinión, la referencia que en el párrafo 2 del artículo 5 se hace al 'dumping' ha de entenderse como una referencia al dumping tal como se define éste en el artículo 2. Esto no significa, desde luego, que la cantidad y la calidad de las pruebas presentadas en la solicitud hayan de ser los que serían necesarios para hacer una determinación preliminar o definitiva de la existencia de dumping. No obstante, a nuestro parecer se necesitan pruebas del **tipo** pertinente en un caso como el que se examina, en el que es evidente, a juzgar por la solicitud, que el valor normal y el precio de exportación alegados en la solicitud habrán de ser ajustados para poder efectuar una comparación equitativa. Como mínimo, se debería reconocer de algún modo que para hacer una comparación equitativa se requerirán tales ajustes." *Guatemala - Cemento I*, WT/DS60/R, párrafo 7.64. (las negritas figuran en el original)

7.62 Estamos completamente de acuerdo con las constataciones de ese Grupo Especial, y seguiremos el mismo enfoque en el caso presente. Para determinar si existen o no pruebas suficientes de la existencia de dumping, una autoridad investigadora no puede descartar por completo los elementos que configuran la existencia de esa práctica, como se establece en el artículo 2. Por supuesto que no es nuestra intención sugerir que la autoridad investigadora debe contar, en el momento de la iniciación de la investigación, con las pruebas de la existencia de dumping en el sentido del artículo 2, de la *cantidad* y *calidad* que serían necesarias para fundar una determinación preliminar o definitiva. Sin embargo, las pruebas deben ser tales que una autoridad investigadora imparcial y objetiva pudiera determinar que hay pruebas suficientes de la existencia de dumping, en el sentido del artículo 2, para justificar la iniciación de una investigación.

7.63 Teniendo en cuenta estas consideraciones, procederemos a examinar las reclamaciones presentadas por el Brasil.

i) Reclamación 2

7.64 La principal cuestión que se plantea en la Reclamación 2 es si se habían presentado o no, ante la autoridad investigadora en el momento de la iniciación de la investigación, pruebas suficientes que justificasen un ajuste por las diferencias en las características físicas entre los pollos eviscerados vendidos en la Argentina y los vendidos en el Brasil. Esta cuestión atañe a la esencia misma de la reclamación de que no existían pruebas suficientes que justificasen la iniciación de la investigación, ya que la autoridad investigadora no habría determinado la existencia de dumping si no hubiese efectuado el ajuste por las supuestas diferencias en las características físicas. En la reclamación del Brasil también se impugna la conclusión de la autoridad investigadora respecto de la cuantía del ajuste realizado.

---

[77] Informe del Grupo Especial en el asunto *Guatemala - Cemento II*, *supra*, nota **Error! Unknown switch argument.**, párrafo 8.35.

7.65 Recordamos que, para determinar si existen o no pruebas suficientes de la existencia de dumping, la autoridad investigadora no puede descartar por completo los elementos que configuran la existencia de esta práctica según lo dispuesto en el artículo 2. En una reclamación sobre ajustes, el párrafo 4 del artículo 2 reviste particular importancia. En su parte pertinente, esa disposición establece:

> "Se realizará una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal. Esta comparación se hará en el mismo nivel comercial, normalmente el nivel "ex fábrica", y sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible. Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias particulares, las diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios, entre otras las diferencias en (...) las características físicas ..."

7.66 Observamos asimismo que la cuestión planteada no es si la Argentina debía o no efectuar un ajuste por las diferencias en las características físicas al decidir sobre la iniciación de la investigación, sino si la Argentina tenía derecho a efectuarlo.

7.67 Procederemos ahora a analizar el primer argumento del Brasil. El Brasil alega que los datos sobre el valor normal que figuraban en la solicitud solamente se relacionaban con las ventas realizadas en São Paulo. Según el Brasil, si bien los datos indicaban que los pollos se vendían en São Paulo con cabeza y patas, ello no significaba que los vendidos en todo el Brasil también tenían cabeza y patas. La Argentina sostiene que São Paulo es un gran centro urbano, y que las ventas efectuadas en esa ciudad son, por lo tanto, representativas de las pautas de consumo de todo el Brasil. El Brasil no niega que São Paulo sea un gran centro urbano. Recordamos que, en el momento de la iniciación de la investigación, no es necesario que la autoridad investigadora deba contar con pruebas de la existencia de dumping en la cantidad (o calidad) que serían menester para fundar una determinación preliminar o definitiva. A nuestro juicio, basta con que una autoridad investigadora base su decisión de iniciar una investigación en las pruebas concernientes a las ventas internas en una de las ciudades más importantes del país exportador objeto de la investigación, sin que necesariamente deba contar con los datos correspondientes a las ventas en todo el país.

7.68 El Brasil también arguye que la autoridad investigadora aceptó en forma errónea una declaración realizada por JOX (adjunta a la solicitud) como prueba de que los pollos vendidos en São Paulo tenían cabeza y patas. Hemos examinado la declaración pertinente, y observamos que en ella se indica claramente que los datos sobre los precios internos publicados por JOX y facilitados por el solicitante, y en los que se basó la autoridad investigadora en el momento de la iniciación de la investigación, se referían a pollos vendidos en São Paulo, con cabeza y patas. Habida cuenta de que el Brasil no ha impugnado la aseveración realizada por la Argentina de que JOX era una publicación especializada que reflejaba las condiciones del mercado de São Paulo, entendemos que no hay motivo para considerar que la autoridad investigadora no tenía derecho a basarse en la declaración de JOX.

7.69 El Brasil alega asimismo que la autoridad investigadora no tenía pruebas suficientes de que las supuestas diferencias en las características físicas afectasen a la comparabilidad de los precios. Esta cuestión está estrechamente relacionada con la reclamación del Brasil que impugna la cuantía del ajuste efectuado por la autoridad investigadora. A la luz de nuestra constatación en la reclamación que figura *infra*, no consideramos necesario pronunciarnos sobre el argumento esgrimido por el Brasil respecto de la falta de pruebas sobre la comparabilidad de los precios.

7.70 Con respecto a la cuantía del ajuste, el Brasil observa que el ajuste del 9,09 por ciento efectuado por la autoridad investigadora en el momento de la iniciación de la investigación se calculó

sobre la base de las tasas de rendimiento[78] indicadas en la solicitud. El solicitante expresó que la tasa de rendimiento de los pollos vendidos en el Brasil (con cabeza y patas) era del 88 por ciento, mientras que la tasa de rendimiento de los pollos vendidos en la Argentina (sin cabeza ni patas) era del 80 por ciento. El Brasil sostiene que el solicitante no presentó prueba alguna en apoyo de esas tasas de rendimiento. Como respuesta a la pregunta 5 del Grupo Especial, la Argentina expresó que las pruebas que sustentan la utilización de tasas de rendimiento del 88 y el 80 por ciento figuran en un informe de JOX incluido en la solicitud.[79] Sin embargo, luego de realizar un detallado análisis constatamos que el informe de JOX no contiene prueba alguna en dicho sentido. De hecho, el informe de JOX no hace referencia a tasa de rendimiento alguna.

7.71 En respuesta a una pregunta adicional del Grupo Especial, la Argentina sostuvo que:

> "El ajuste efectuado por la Autoridad de Aplicación en virtud de las diferencias entre el pollo vendido en el Brasil y el que se vendía en la Argentina fue suministrado por la peticionante al momento de presentar la solicitud y aplicado por la Autoridad desde la apertura de la investigación, en el entendimiento de que dicha información era la que razonablemente tenía al alcance el peticionante y que la misma era razonable sin que estuvieran en conocimiento de la Autoridad de Aplicación elementos contrarios a su consideración. Evaluada dicha información la Autoridad no consideró necesario solicitar información adicional al respecto, teniendo en cuenta los estándares de información que han de ser considerados en dicha instancia de investigación."[80]

7.72 Esto sugiere que, según la Argentina, la autoridad investigadora estaba autorizada a efectuar un ajuste basándose en la información sobre la tasa de rendimiento incluida en la solicitud, sencillamente porque la información "era razonable sin que estuvieran en conocimiento de la Autoridad de Aplicación elementos contrarios a su consideración". No podemos aceptar este punto de vista porque, como se señaló *supra*, las declaraciones y aseveraciones sin apoyo en prueba alguna no constituyen prueba suficiente en el sentido del párrafo 3 del artículo 5. Dada la falta de pruebas que

---

[78] La tasa de rendimiento es la cuantía de pollo eviscerado que se obtiene del pollo vivo. Según el solicitante, de cada kilogramo de pollo vivo que se vende en el Brasil (incluidas la cabeza y las patas), se obtienen 880 gramos de pollo eviscerado (incluidos los menudos (corazón, estómago, cogote e hígado), cabeza y patas). Esto equivale a una tasa de rendimiento del 88 por ciento. Según el solicitante, la tasa de rendimiento del pollo exportado a la Argentina era menor, puesto que las ventas a la Argentina no incluían la cabeza y las patas. Por lo tanto, de cada kilogramo de pollo vivo exportado a la Argentina, se obtienen solamente 800 gramos de pollo eviscerado (incluidos los menudos, pero no así cabeza y patas). Esto arroja una tasa de rendimiento del 80 por ciento de los pollos exportados a la Argentina.

[79] Se desprende de la respuesta de la Argentina a la pregunta 6 del Grupo Especial que la información justificante correspondiente al ajuste figuraba en una publicación de Aves & Ovos, adjunta a la solicitud. Sin embargo, en su respuesta a la pregunta 68 del Grupo Especial, la Argentina asevera que esa publicación no suministra ninguna información respecto al ajuste realizado del 9,09 por ciento. También tomamos en cuenta la siguiente respuesta de la Argentina:

> "en lo que en materia de valor normal se refiere, fue considerada la prueba de la publicación JOX del 30 de junio de 1997 acompañada con la presentación de la solicitud, no existiendo requerimientos adicionales por parte de la Autoridad de Aplicación al respecto." (Respuesta de la Argentina a la pregunta 9 del Grupo Especial).

Esta declaración confirma nuestra constatación de que el APCDS no tenía en el momento de la iniciación ninguna otra prueba en apoyo de la solicitud distinta de la que hemos examinado. Recordamos que hemos examinado la solicitud y no hemos encontrado prueba alguna en apoyo de las supuestas tasas de rendimiento de los pollos eviscerados.

[80] Respuesta de la Argentina a la pregunta 11 a) del Grupo Especial.

apoyen las tasas de rendimiento incluidas en la solicitud, y en consecuencia , el ajuste que ha de realizarse, no comprendemos cómo una autoridad investigadora imparcial y objetiva pudo haber considerado suficiente la información sobre la tasa de rendimiento disponible en el momento de la iniciación para justificar un ajuste en el valor normal del 9,09 por ciento.

7.73 Habida cuenta de lo expuesto *supra*, constatamos que la autoridad investigadora no tenía la información suficiente en el momento de la iniciación de la investigación para efectuar el ajuste del 9,09 por ciento en el valor normal. En consecuencia, aunque hemos rechazado los argumentos esgrimidos por el Brasil respecto de la suficiencia de las pruebas que atañen a la necesidad de efectuar un ajuste en el valor normal para reflejar las diferencias en las características físicas entre los pollos vendidos en el Brasil y en la Argentina respectivamente, aceptamos la reclamación del Brasil respecto de la suficiencia de la información sobre la cuantía del ajuste. Por lo tanto, constatamos que la Argentina ha infringido el párrafo 3 del artículo 5 del *Acuerdo Antidumping* al determinar que existían pruebas suficientes de la existencia de dumping para iniciar una investigación, habida cuenta de que su determinación de la existencia de dumping se basó en un ajuste del valor normal para lo cual no contaba con pruebas suficientes.[81]

ii) Reclamación 4

7.74 El Brasil alega que la autoridad investigadora solamente tomó en cuenta los precios de exportación inferiores al valor normal al calcular el margen de dumping a los efectos de la iniciación de la investigación. El Brasil sostiene que este método no estaba de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 5, interpretado conjuntamente con el párrafo 4.2 del artículo 2 del *Acuerdo Antidumping*.

7.75 En el momento de la iniciación, el APCDS calculó cuatro márgenes de dumping.[82] En su Primera comunicación escrita, la Argentina expresó que la decisión de iniciar la investigación se basó en el segundo margen de dumping calculado por el APCDS, y que los tres márgenes restantes se utilizaron para análisis adicionales.[83] Como respuesta a una parte de la pregunta 18 del Grupo Especial, la Argentina declaró que "el período utilizado para la determinación del precio f.o.b. de exportación fue enero a junio de 1997 y agosto de 1997". Habida cuenta de que este fue el período utilizado por el APCDS para calcular el segundo margen de dumping, ello confirmaría la declaración de la Argentina en el sentido de que la decisión de iniciar la investigación se basó en el segundo de los cuatro márgenes calculados por el APCDS. En consecuencia, a los efectos de analizar la reclamación del Brasil, centraremos nuestra atención en el segundo margen de dumping calculado por el APCDS, dado que este fue el margen sobre el cual se basó la decisión de iniciar la investigación.

7.76 El punto de partida para el cálculo realizado por el APCDS del segundo margen de dumping fue la totalidad de las transacciones de exportación registradas en las estadísticas oficiales de importación correspondientes al período enero a junio de 1997 y agosto de 1997. En primer lugar, la autoridad investigadora descartó las transacciones de exportación que no concernían a los productos "similares" al producto objeto de la investigación.[84] En segundo lugar, la autoridad investigadora excluyó las transacciones de exportación cuyo precio era superior o igual al valor normal

[81] Señalamos la alegación del Brasil en el sentido de que no habría habido margen de dumping alguno si el ajuste pertinente no se hubiese efectuado. (Respuesta del Brasil a la pregunta 3 del Grupo Especial.)

[82] Brasil - Prueba documental 2, páginas 12 y 13.

[83] Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafo 80.

[84] Respuesta de la Argentina a la pregunta 19 del Grupo Especial.

(1,044 dólares EE.UU./kg).[85] En tercer lugar, el promedio ponderado del precio de exportación se calculó utilizando solamente las transacciones que tenían un precio inferior al valor normal. En consecuencia, el promedio ponderado del precio de exportación no se basó en la totalidad de las transacciones de exportación comparables.

7.77 Al examinar la compatibilidad de este método con el párrafo 3 del artículo 5, interpretado a la luz del párrafo 4.2 del artículo 2, observamos la siguiente declaración realizada por el Órgano de Apelación en el asunto *CE - Ropa de cama*:

> "[A]l 'reducir a cero' los 'márgenes de dumping negativos' las Comunidades Europeas *no* tuvieron plenamente en cuenta la totalidad de los precios de *algunas* transacciones de exportación, en concreto de las transacciones de exportación con modelos de ropa de cama de algodón en los que se constató la existencia de 'márgenes de dumping negativos', sino que trataron a esos precios de exportación como si hubieran sido menores de lo que eran en realidad, lo que, a su vez, incrementó artificialmente el resultado del cálculo del margen de dumping. En consecuencia, las Comunidades Europeas *no* establecieron 'la existencia de márgenes de dumping' para la ropa de cama de algodón basándose en una comparación entre el promedio ponderado del valor normal y el promedio ponderado de los precios de *todas* las transacciones de exportación comparables, es decir de *todas* las transacciones con *todos* los modelos o tipos del producto objeto de investigación. Además, consideramos que una comparación entre el precio de exportación y el valor normal en la que *no* se tengan plenamente en cuenta los precios de *todas* las transacciones de exportación comparables, como ocurre en la que se realiza cuando se sigue, como se ha seguido en la presente diferencia, la práctica de 'reducción a cero', *no* constituye una 'comparación equitativa' entre el precio de exportación y el valor normal, como exigen el párrafo 4 y el párrafo 4.2 del artículo 2."[86] (las comillas y las cursivas figuran en el original)

7.78 Estamos de acuerdo con el análisis realizado por el Órgano de Apelación. Observamos que el Órgano de Apelación abordaba principalmente la práctica de "reducir a cero". La práctica adoptada por la Argentina en el presente caso es más notoriamente desacertada que la de reducir a cero, ya que no solamente fija en cero el valor de las comparaciones que atañen a determinadas transacciones de exportación, sino que excluye totalmente determinados precios de exportación del promedio ponderado, de manera que el promedio ponderado del precio de exportación utilizado por la autoridad investigadora es incluso inferior al que se obtendría aplicando la reducción a cero. No nos cabe duda de que, si la reducción a cero es incompatible con el párrafo 4.2 del artículo 2, la práctica de la Argentina de descartar totalmente determinadas transacciones de exportación también sería incompatible con el párrafo 4.2 del artículo 2, puesto que no compara el promedio ponderado del valor normal de los precios de <u>todas</u> las transacciones de exportación comparables. A nuestro juicio, la utilización de dicha práctica no permitiría que una autoridad investigadora objetiva e imparcial llegase adecuadamente a la conclusión de que existían pruebas suficientes que justificasen la iniciación de una investigación.

---

[85] Respuesta de la Argentina a la pregunta 11 b) del Grupo Especial.

[86] Informe del Órgano de Apelación en el asunto *Comunidades Europeas - Derechos antidumping sobre las importaciones de ropa de cama de algodón originarias de la India* ("*CE - Ropa de cama*") WT/DS141/AB/R, adoptado el 12 de marzo de 2001, párrafo 55.

7.79 La Argentina alega que la metodología utilizada por el APCDS también ha sido utilizada por otros Miembros de la OMC.[87] Sin embargo, incluso si supusiésemos, en aras de la argumentación, que la postura Argentina es correcta, este argumento carece de trascendencia. En esta diferencia, debemos determinar la conformidad de la metodología utilizada por la Argentina (y no la de los otros Miembros de la OMC) a la luz de las disposiciones pertinentes del *Acuerdo Antidumping*.

7.80 La Argentina también alega que "[s]e requiere [al momento del inicio de la investigación] por lo tanto conocer que han existido operaciones con dumping que justifiquen desde este aspecto el inicio de una investigación."[88] Entendemos que la Argentina aduce que, para iniciar una investigación, una autoridad investigadora necesita solamente cerciorarse de que ha existido algún dumping, en el sentido de que ciertas transacciones fueron objeto de dumping. No estamos de acuerdo. Recordamos que, "para determinar que existen pruebas suficientes de dumping [a los efectos de la iniciación de la investigación], la autoridad investigadora no puede prescindir completamente de los elementos que configuran la existencia de esta práctica [dumping] según se describen en el artículo 2".[89] Una determinación de dumping debería formularse respecto de un producto en su totalidad, durante un período determinado, y no respecto de transacciones individuales relativas a ese producto. Por lo tanto, una autoridad investigadora no puede descartar transacciones de exportación en el momento de la iniciación de la investigación simplemente porque son iguales o superiores al valor normal. Al descartar dichas transacciones no se establece una base adecuada para determinar si existen o no pruebas suficientes de la existencia de dumping que justifiquen la iniciación de la investigación.

7.81 Habida cuenta de lo expresado *supra*, constatamos que la Argentina ha infringido el párrafo 3 del artículo 5 del *Acuerdo Antidumping* al iniciar la investigación sin contar con una base adecuada para concluir que existían pruebas suficientes de la existencia de dumping que justificasen el inicio de la investigación.

iii) Reclamación 6

7.82 El APCDS determinó el valor normal sobre la base de la publicación de JOX que establece los precios de los pollos correspondientes a un día -el 30 de junio de 1997-, mientras que el precio de exportación correspondía a un período de varios meses durante 1997.[90] La cuestión que se nos plantea gira en torno a saber si una comparación entre un valor normal correspondiente a un día y un precio de exportación correspondiente a un período de varios meses constituye una base adecuada para determinar si existen o no pruebas suficientes de la existencia de dumping que justifiquen la iniciación de la investigación.

---

[87] Ver nota 85, *supra*.

[88] *Ibid*.

[89] Informe del Grupo Especial en el asunto *Guatemala - Cemento II*, *supra*, nota **Error! Unknown switch argument.**, párrafo 8.35.

[90] Observamos que el APCDS calculó cuatro márgenes de dumping diferentes basándose en *cuatro* precios de exportación diferentes. También observamos que la determinación de la existencia de pruebas suficientes sobre la existencia de dumping se basó en una comparación entre el valor normal correspondiente al 30 de junio de 1997 y el precio de exportación correspondiente al período de enero a junio de 1997 y agosto de 1997, como se señaló en el párrafo 7.75 *supra*. Teniendo esto en cuenta, en lo que respecta a esta reclamación examinaremos si una comparación entre la información sobre el valor normal correspondiente al 30 de junio de 1997 y los datos sobre el precio de exportación correspondientes al período de enero a junio y agosto de 1997 cumplen o no lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping.

7.83 Recordamos que, para determinar que existen pruebas suficientes de la existencia de dumping, la autoridad investigadora no puede prescindir completamente de los elementos que configuran la existencia de esa práctica según se describen en el artículo 2. En particular, observamos que el párrafo 4 del artículo 2 exige que se realice una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal respecto de las ventas "efectuadas en fechas lo más próximas posible". Al interpretar la expresión "efectuadas en fechas lo más próximas posible" en el contexto del párrafo 4 del artículo 2, consideramos útil remitirnos a la siguiente constatación que el Grupo Especial formuló en el asunto *Estados Unidos - Acero inoxidable*:

> "[C]onsideramos que, en el contexto de las comparaciones entre un promedio ponderado y un promedio ponderado, el requisito de que se haga una comparación entre las ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible exige, *en general*, que los períodos sobre los que se calculen el valor normal medio ponderado y el precio de exportación medio ponderado sean los mismos." (las cursivas figuran en el original)[91]

7.84 La constatación precedente atañe a una determinación definitiva de un margen de dumping, mientras que la presente reclamación gira en torno a una determinación previa a la iniciación de la investigación, sobre si existen o no pruebas suficientes de la existencia de dumping. En el momento de la iniciación de la investigación, no es necesario que una autoridad investigadora cuente con la misma cantidad y calidad de pruebas que se necesitarían para fundar una determinación preliminar o definitiva sobre la existencia de dumping. Sin embargo, habida cuenta de que se exige el mismo *tipo* de pruebas en el momento de iniciar una investigación y en el momento de formular una determinación preliminar o definitiva, a nuestro juicio debería existir un grado sustancial de coincidencia entre los períodos examinados a fin de que la comparación entre el valor normal y el precio de exportación se realice de forma equitativa en el sentido del párrafo 4 del artículo 2. No obstante, consideramos que el párrafo 3 del artículo 5, analizado a la luz del párrafo 4 del artículo 2, no puede interpretarse en el sentido de que exige que los datos sobre el valor normal y el precio de exportación correspondan a períodos de tiempo idénticos. Si no fuese así, la cantidad de pruebas sobre la existencia de dumping exigidas para iniciar una investigación sería la misma que se exige para formular una determinación preliminar o definitiva sobre la existencia de dumping. Por lo tanto, consideramos que una autoridad investigadora cumpliría lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 5 aunque los períodos elegidos a los efectos de la comparación entre el promedio ponderado del valor normal y el promedio ponderado del precio de exportación no sean idénticos.

7.85 En lo que concierne a un producto como el pollo eviscerado, respecto del cual se realizan diariamente muchas transacciones, no estamos persuadidos de que los datos sobre las ventas internas correspondientes a un día ofrezcan una coincidencia suficiente con los datos sobre el precio de las exportaciones correspondientes a varios meses, a los fines del párrafo 3 del artículo 5. La Argentina alega que el precio del mercado interno correspondiente a un día era un indicio de la tendencia de los precios de los pollos vendidos en São Paulo durante un período de tiempo más prolongado. Si ello hubiese sido cierto, la utilización del valor normal correspondiente a un día podría haber sido compatible con el párrafo 3 del artículo 5. Sin embargo, la Argentina no ha señalado prueba alguna en el expediente que sugiriese que la autoridad investigadora consideró realmente las pruebas relativas al valor normal correspondientes a un día como indicio de la tendencia de los precios del pollo en el mercado interno. Además, observamos que las pruebas en que se basó la Argentina (para alegar que los datos sobre los precios correspondientes a un día eran un indicio de la tendencia de los precios) se referían a pollos vivos y no a pollos eviscerados.[92] Aunque la Argentina alegó en estas actuaciones

---

[91] Informe del Grupo Especial en el asunto *Estados Unidos - Acero inexorable*, *supra*, nota 65, párrafo 6.121.

[92] Véase la respuesta de la Argentina a la pregunta 12 del Grupo Especial: "puede leerse en el margen derecho de la misma [la publicación de JOX del 30 de junio de 1997] en su traducción aportada por CEPA que

que la estabilidad de los precios de un insumo (pollo vivo) tendría como consecuencia la estabilidad de los precios de producto terminado (pollo eviscerado), no señaló prueba alguna que sugiriese que, en el momento de la iniciación de la investigación, la autoridad investigadora consideró que un precio estable del pollo vivo daría lugar a un precio estable del pollo eviscerado. En consecuencia, el argumento de la Argentina debe ser rechazado.

7.86 Por lo tanto, aceptamos la reclamación del Brasil de que la Argentina ha infringido el párrafo 3 del artículo 5 del *Acuerdo Antidumping* al iniciar la investigación sin disponer de pruebas suficientes que justificasen su iniciación.

iv) Reclamación 8

7.87 El Brasil alega que los períodos utilizados a los efectos de las determinaciones de la existencia de dumping y de daño en el momento de la iniciación no coincidían, y por lo tanto, no se pudo haber establecido correctamente una relación causal.

7.88 A nuestro juicio, solamente sería necesario que examináramos esta reclamación si la autoridad investigadora hubiese contado con pruebas suficientes sobre la existencia de dumping y de daño -los dos elementos necesarios para poder formular una determinación sobre la existencia de una relación causal- que justificasen la iniciación de la investigación sobre los pollos eviscerados originarios del Brasil. Ahora bien, recordamos que, según nuestra opinión, la autoridad investigadora no tenía pruebas suficientes sobre la existencia de dumping que justificasen la iniciación de esa investigación. Habiendo llegado a esta conclusión, no es necesario que examinemos la reclamación del Brasil respecto de la relación causal.

c) Conclusión

7.89 Por las razones expuestas *supra*, consideramos que la Argentina ha actuado en forma incompatible con el párrafo 3 del artículo 5 del *Acuerdo Antidumping* al determinar que había pruebas suficientes de la existencia de dumping para justificar la iniciación de una investigación.

2. Suficiencia de la solicitud - Reclamaciones 1 y 5

a) Argumentos de las partes

i) Reclamación 1

7.90 El Brasil alega que la Argentina infringió el párrafo 2 del artículo 5 del *Acuerdo Antidumping* al iniciar una investigación sobre la base de una solicitud que no cumplía los requisitos fijados en esa disposición. El Brasil sostiene que el párrafo 2 del artículo 5 exige que una solicitud incluya "pruebas" de la existencia de dumping, de daño y de relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el supuesto daño. El Brasil además aduce que una alegación o una información contenida en la solicitud, sin la documentación justificante, no puede ser considerada como prueba en los términos del párrafo 2 del artículo 5. Según el Brasil, la solicitud que dio lugar a la iniciación de la investigación sobre los pollos eviscerados originarios del Brasil no contenía pruebas que justificaran el ajuste por diferencias en las características físicas que reclamó el solicitante. El Brasil reconoce que la solicitud contenía un informe de JOX de fecha 30 de junio de 1997, que supuestamente justificaba la solicitud del solicitante de que se efectuase un ajuste. El Brasil indica varios problemas

---

"... la producción del mercado paralelo del interior de São Paulo es nítidamente menor, lo que viene manteniendo el precio en terreno muy firme ...", lo que refleja que la cotización no variaba considerablemente, manteniéndose estable". (sin subrayar en el original)

planteados por el informe de JOX. El Brasil alega que ese informe no constituye una prueba que justifique el ajuste. También sostiene que no se presentó prueba alguna que demostrase que la comparabilidad de los precios se vería afectada y que la tasa de rendimiento propuesta por el solicitante estuviese justificada.

7.91 La Argentina aduce que el solicitante presentó todas las pruebas necesarias respecto del valor normal y los precios de exportación, como también las pruebas pertinentes en apoyo de los ajustes que era necesario efectuar a fin de realizar una comparación equitativa entre el valor normal y el valor de exportación. La Argentina alega también que el solicitante ofreció, en su solicitud, la documentación que tenía a su alcance. La Argentina arguye asimismo que quien solicita la iniciación de una investigación no está obligado a probar de forma indubitable la existencia de dumping, de daño y de relación causal, dado que la determinación definitiva de la existencia de esos elementos es competencia de la autoridad investigadora. Con respecto a la cuestión del ajuste, la Argentina alega que el solicitante presentó el informe de JOX con la información sobre los precios del mercado interno de los pollos eviscerados en el Brasil. Según la Argentina, las pruebas presentadas constituyen un valor representativo tomado de una publicación especializada, correspondiente a un período determinado. Teniendo en cuenta que en el informe de JOX se mencionó que el pollo eviscerado se vendía en el Brasil con cabeza y patas y que el pollo exportado a la Argentina no contenía dichas partes, la Argentina llegó a la conclusión de que era necesario efectuar un ajuste para tener en cuenta las diferencias en las características físicas.

7.92 El Brasil está de acuerdo con la Argentina en que la cantidad y la calidad de las pruebas exigidas en la etapa previa a la iniciación de una investigación necesariamente son inferiores a la cantidad y la calidad de las pruebas que se exigen para formular una determinación definitiva. Sin embargo, el Brasil alega que el "tipo" de pruebas pertinentes que se necesita para justificar la iniciación de una investigación es el mismo que el necesario para formular una determinación preliminar o definitiva de dumping, aunque la cantidad y la cantidad sean inferiores.

ii) Reclamación 5

7.93 El Brasil alega que los datos presentados por el solicitante en la solicitud, y utilizados para calcular el margen de dumping, eran incompatibles con el párrafo 2 del artículo 5 por dos razones. En primer lugar, el Brasil sostiene que, puesto que la información sobre el valor normal y el precio de exportación suministrada correspondía a transacciones que no se habían efectuado en fechas lo más próximas posible, la solicitud no aportó las pruebas suficientes sobre la existencia de dumping, como lo exige el párrafo 2 del artículo 5. Como, a juicio del Brasil, el momento en el que se efectuaron las ventas pudo haber influido en la comparabilidad de los precios de las transacciones del mercado de exportación y del mercado interno, el Brasil alega que la determinación del valor normal basado en un solo día (30 de junio de 1997) no puede constituir un parámetro para efectuar una comparación equitativa con el precio de exportación correspondiente a dos períodos de tiempo de más de 30 días cada uno (un período se extiende desde enero hasta junio de 1997 y el otro abarca todo el mes de agosto de 1997), ninguno de los cuales incluía el día que se utilizó para determinar el valor normal. En segundo lugar, el Brasil aduce que la información sobre el valor normal correspondiente a los años 1996 y 1997 estaba razonablemente al alcance del solicitante, habida cuenta de que el 26 de julio de 1999 el Brasil facilitó información actualizada sobre el valor correspondiente al período que se extiende desde 1998 hasta enero de 1999.

7.94 Además de las observaciones generales a las que se hizo referencia en el párrafo 7.92 *supra*, la Argentina alega que el párrafo 2 del artículo 5 no exige que el solicitante presente las pruebas relativas al valor normal respecto de todo el período respecto del cual se presentaron las pruebas correspondientes al valor de exportación. Según la Argentina, es claro y razonable que el solicitante no haya tenido a su alcance la misma cantidad y calidad de información sobre los precios del mercado del país exportador, que sobre el precio de exportación.

b) Evaluación del Grupo Especial

7.95 Recordamos que hemos llegado a la conclusión de que la determinación del APCDS de que existían pruebas suficientes sobre la existencia de dumping que justificaban la iniciación de una investigación no era compatible con el párrafo 3 del artículo 5. Por ello, no consideramos necesario pronunciarnos sobre las reclamaciones del Brasil relativas al párrafo 2 del artículo 5 respecto de la suficiencia de la solicitud.

7.96 Aunque no consideramos necesario pronunciarnos respecto de las reclamaciones del Brasil relativas al párrafo 2 del artículo 5, señalamos que en las comunicaciones de las partes se planteó la cuestión de saber en qué medida el párrafo 2 del artículo 5 impone obligaciones a los Miembros -si es que impone alguna-, y no a los solicitantes. Por lo tanto, preguntamos a las partes su opinión sobre esta cuestión. El Brasil respondió:

> "El párrafo 2 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping exige que la solicitud incluya pruebas de la existencia de dumping, daño y relación causal. Concretamente, la solicitud debe contener la información requerida en los apartados i) a iv) del párrafo 2 del artículo 5. Del texto del párrafo 2 del artículo 5 no podemos deducir que estas obligaciones se imponen al solicitante. La parte pertinente del párrafo 2 del artículo 5 establece:
>
> > "[...] No podrá considerarse que para cumplir los requisitos fijados en el presente párrafo basta una simple afirmación no apoyada por las pruebas pertinentes. [...]" (sin cursivas ni subrayado en el original)
>
> La **consideración** de que las pruebas son suficientes para cumplir los requisitos del párrafo 2 del artículo 5 está a cargo de la autoridad investigadora y no del solicitante. En efecto, no es el solicitante quien ha de considerar si la prueba presentada en la solicitud es suficiente para cumplir los requisitos del párrafo 2 del artículo 5.
>
> Además, la OMC y sus Acuerdos prevén obligaciones y derechos de los **Miembros** de la OMC. En consecuencia, el Acuerdo Antidumping también impone obligaciones a los **Miembros** de la OMC y no a determinadas partes interesadas en una investigación. Por lo tanto, no podemos deducir que las obligaciones previstas en el párrafo 2 del artículo 5 son obligaciones del solicitante y no de la autoridad investigadora.
>
> Con arreglo al párrafo 2 del artículo 5 del Acuerdo, la autoridad investigadora debe examinar la solicitud para determinar si incluye la información exigida en ese artículo. Para que una autoridad investigadora acepte una solicitud debe **considerar** si la información y las pruebas que contiene son suficientes para cumplir los requisitos establecidos en los apartados i) a iv) del párrafo 2 del artículo 5. En una etapa posterior, y después de que la autoridad haya considerado la solicitud y haya aceptado que reúne los requisitos del párrafo 2 del artículo 5, el párrafo 3 del mismo artículo del Acuerdo impone otra obligación a la autoridad investigadora. Esta obligación consiste en examinar la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas en la solicitud para determinar si son suficientes para justificar la iniciación de una investigación."[93] (las negritas y el subrayado figuran en el original)

7.97 La Argentina respondió:

[93] Respuesta del Brasil a la pregunta 2 del Grupo Especial.

> "Argentina entiende que el Acuerdo establece obligaciones para los Miembros. En ese sentido el párrafo 2 del artículo 5 en principio establece una obligación para los Miembros respecto a los requerimientos de información que deben ser presentados con la solicitud de inicio de investigación. Es decir, el párrafo 2 del artículo 5 establece los requisitos que debe acompañar con la petición de inicio de investigación el sector interesado al hacer una presentación solicitando la apertura de una investigación."[94]

7.98 Por lo tanto, ambas partes están de acuerdo en que el párrafo 2 del artículo 5 impone obligaciones a los Miembros. Sin pronunciarnos sobre esta cuestión, no excluimos la posibilidad de que el párrafo 2 del artículo 5 podría obligar a los Miembros a verificar que las solicitudes contengan las pruebas, y no una mera aseveración, de la existencia de dumping, de daño y de relación causal. En particular, en los casos en que los solicitantes proponen ajustes en el valor normal, el párrafo 2 del artículo 5 podría obligar a los Miembros a verificar que dichos ajustes son respaldados por pruebas, y no por meras aseveraciones. Una consecuencia de esta obligación quizás sería que las solicitudes que no cumplan los requisitos previstos en el párrafo 2 del artículo 5 deben ser rechazadas. Aunque los Miembros pueden optar por corregir cualquier deficiencia que contenga la solicitud[95], no están obligados a hacerlo.

3. Negativa a rechazar la solicitud - Reclamaciones 3, 7 y 31

7.99 Estas reclamaciones se formulan en el marco del párrafo 8 del artículo 5 del *Acuerdo Antidumping*. Las Reclamaciones 3 y 7 atañen a la cuestión de saber si la solicitud debería haber sido rechazada o no por falta de pruebas suficientes sobre la existencia de dumping. La Reclamación 31 gira en torno a la cuestión de si la solicitud debería haber sido rechazada por falta de pruebas suficientes respecto de la existencia de daño.

a) Argumentos de las partes

i) Reclamaciones 3 y 7

7.100 En las Reclamaciones 3 y 7, el Brasil alega que la solicitud no contenía ninguna prueba sustancial que apoyara el ajuste realizado por el APCDS por diferencias en las características físicas, o que respaldara la tasa de rendimiento utilizada para efectuar dicho ajuste. Tampoco contenía pruebas suficientes para determinar el valor normal. Habida cuenta de ello, el Brasil aduce que la solicitud debería haber sido rechazada porque no había pruebas suficientes sobre la existencia de dumping que justificasen iniciar la investigación. Según el Brasil, la negativa a rechazar la solicitud constituyó una violación del párrafo 8 del artículo 5 del *Acuerdo Antidumping*.

7.101 La Argentina asevera que, habida cuenta de que el solicitante había presentado toda la documentación que tenía a su alcance y de que la autoridad investigadora examinó dicha documentación para verificar su exactitud y pertinencia, no existía motivo alguno para que la autoridad de aplicación rechazase la solicitud.

ii) Reclamación 31

7.102 El Brasil alega que la CNCE formuló una determinación (Acta Nº 405) de fecha 7 enero de 1998 en la que se constató que la solicitud no contenía pruebas suficientes sobre la existencia de

---

[94] Respuesta de la Argentina a la pregunta 2 del Grupo Especial.

[95] Informe del Grupo Especial en el asunto *Guatemala - Cemento I*, *supra*, nota 73, párrafo 7.53.

daño que justificasen la iniciación de una investigación. El Brasil sostiene que, de conformidad con el párrafo 8 del artículo 5 del *Acuerdo Antidumping*, la solicitud debería haber sido rechazada en ese momento, puesto que ese fue el momento en que la autoridad investigadora "se cercioró" de que no existían pruebas suficientes de la existencia de daño que justificasen continuar con el procedimiento.

7.103 La Argentina alega que, después de la determinación formulada por la CNCE que figura en el Acta Nº 405, el solicitante presentó pruebas nuevas. La Argentina hace referencia al artículo 10 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, que dispone que el órgano competente intervenga nuevamente en las actuaciones si ocurriere o llegare a su conocimiento un hecho nuevo. La Argentina también se remite a un dictamen del Departamento Jurídico del MEyOSP que expresó que, previo a todo trámite, el Secretario debería haber solicitado a la CNCE que interviniera nuevamente a fin de que se expidiera sobre la suficiencia (desde el punto de vista del daño) de la nueva información presentada por el solicitante. Habida cuenta de lo expresado *supra*, la Argentina llega a la conclusión de que las autoridades argentinas no habrían actuado de conformidad con el derecho interno si hubiesen rechazado la solicitud luego de la determinación de la CNCE que figura en el Acta Nº 405 y por lo tanto, no hubiesen examinado las nuevas pruebas presentadas por el solicitante el 17 de febrero de 1998. La Argentina alega que, además de ser un acto contrario a derecho por parte de la administración, el rechazo de la solicitud y el archivo del expediente en enero de 1998 (de conformidad con las conclusiones que figuran en el Acta Nº 405) habrían lesionado los derechos subjetivos del peticionante con las consecuencias que un acto de tal naturaleza conlleva para la administración.

b) Evaluación del Grupo Especial

7.104 Comenzaremos con el análisis de la Reclamación 31.

i) Reclamación 31

7.105 Para pronunciarnos respecto de la Reclamación 31, debemos determinar si, tras la conclusión de 7 de enero de 1998 a la que llegó la CNCE y que consta en el Acta Nº 405, de que no existían pruebas suficientes sobre la existencia de daño que justificasen la iniciación de la investigación, la solicitud debería haber sido rechazada.

7.106 En el párrafo 8 del artículo 5 del *Acuerdo Antidumping* se establece, en su parte pertinente, que:

> "La autoridad competente rechazará la solicitud presentada con arreglo al párrafo 1 y pondrá fin a la investigación sin demora en cuanto se haya cerciorado de que no existen pruebas suficientes del dumping o del daño que justifiquen la continuación del procedimiento relativo al caso."

7.107 La Argentina tiene un sistema antidumping bifurcado, como se explica más detalladamente en el párrafo 7.122 *infra*. Por lo tanto, mientras la DCD (anteriormente el APCDS) investiga las cuestiones relativas al dumping, la CNCE investiga las cuestiones relativas al daño. Esta división de tareas se aplica en el examen de la solicitud (previo a la iniciación), y durante cualquier investigación subsiguiente. Aunque solamente el Secretario tiene competencia para decidir si se inicia o no una investigación[96], el Secretario no puede decidir la iniciación de una investigación si la CNCE o la DCD/APCDS han determinado que no existían pruebas suficientes de la existencia de daño o de dumping, respectivamente, que justificasen la iniciación de una investigación. En el presente caso, la CNCE emitió el Acta Nº 405 el 7 de enero de 1998 expresando que la solicitud no contenía pruebas

[96] Respuesta de la Argentina a la pregunta 70 del Grupo Especial.

suficientes de la existencia de daño que justificasen la iniciación de una investigación.[97] El Secretario recibió la determinación de la CNCE el 9 de enero de 1998.[98] Recordamos que, al recibir una evaluación negativa por parte de la CNCE respecto de la solicitud, el Secretario no puede iniciar una investigación. En consecuencia, desde el momento en que el Secretario recibió la evaluación negativa por parte de la CNCE respecto de la solicitud, el Secretario debería haber tenido la certeza de que no existían pruebas suficientes sobre la existencia de daño que justificasen la continuación del procedimiento relativo al caso.[99] Por lo tanto, de conformidad con el párrafo 8 del artículo 5, el Secretario debería haber rechazado la solicitud "tan pronto como" recibió el Acta Nº 405 de la CNCE de fecha 7 de enero de 1998. Sin embargo, en vez de proceder de esa manera, el Secretario no archivó el expediente, y, una vez que el solicitante presentó la información adicional, decidió iniciar la investigación. Por lo tanto, el Secretario no cumplió los requisitos del párrafo 8 del artículo 5 del *Acuerdo Antidumping*.

7.108 La Argentina alega que el rechazo de la solicitud "tan pronto como" se recibió la evaluación negativa de la CNCE habría sido un acto contrario al derecho de la administración interno y que hubiese lesionado los derechos subjetivos del peticionante con las consecuencias que un acto de tal naturaleza para la administración conlleva.[100] Esto no afecta a nuestra conclusión de que la Argentina, en el caso presente, actuó de forma incompatible con el párrafo 8 del artículo 5. Consideramos que el derecho interno de un Miembro de la OMC no exime al Miembro de cumplir sus obligaciones en el marco de los Acuerdos de la OMC. Al adherir a la OMC, la Argentina se comprometió a respetar las normas que figuran en el *Acuerdo Antidumping*, y nuestro mandato consiste en examinar el cumplimiento de esas normas por parte de la Argentina. No se puede justificar un incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 8 del artículo 5 basándose en que dicha norma es incompatible con disposiciones de derecho interno. El párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC dispone expresamente que cada Miembro "se asegurará de la conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con las obligaciones que le impongan los Acuerdos anexos". Observamos que el Grupo Especial que entendió en el asunto *Guatemala - Cemento II* [101], expresó una opinión similar. Respecto de la observación formulada por la Argentina en el sentido de que el rechazo de la solicitud en enero de 1998 habría lesionado los derechos subjetivos del peticionante, destacamos que no existe ninguna disposición en el *Acuerdo Antidumping* que habría impedido que el solicitante presentase una solicitud adicional luego de haberse rechazado la solicitud inicial. Por este motivo, rechazamos el argumento de que se habrían lesionado los derechos subjetivos del peticionante si se hubiese rechazado la solicitud de enero de 1998.

7.109 Habida cuenta de lo expuesto *supra*, consideramos que, al no haber rechazado la solicitud "tan pronto como" se recibió la evaluación negativa de la CNCE, el Secretario infringió el párrafo 8 del artículo 5 del *Acuerdo Antidumping*.

ii) Reclamaciones 3 y 7

7.110 Las Reclamaciones 3 y 7 del Brasil dependen de una constatación de infracción en el marco de las Reclamaciones 1, 2, 5 y 6. En otras palabras, el Brasil alega que, si el trato dado por la

[97] Brasil - Prueba documental 3.

[98] Véase nota **Error! Unknown switch argument.** *supra*.

[99] No existen pruebas en el expediente de que el Secretario haya recabado información adicional del solicitante en esta etapa, o incluso de que el Secretario tuviese atribuciones para hacerlo.

[100] Respuesta de la Argentina a la pregunta 16 del Grupo Especial.

[101] Informe del Grupo Especial en el asunto G*uatemala - Cemento II*, *supra*, nota **Error! Unknown switch argument.**, párrafo 8.83.

autoridad investigadora a la solicitud y a la decisión de iniciar la investigación infringen los párrafos 2 y 3 del artículo 5 del *Acuerdo Antidumping*, entonces, en primer lugar, nunca se debería haber iniciado la investigación, y en segundo lugar, se debería haber rechazado la solicitud de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 8 del artículo 5.

7.111 Recordamos que, en el párrafo 7.89 *supra*, hemos llegado a la conclusión de que la Argentina infringió el párrafo 3 del artículo 5 del *Acuerdo Antidumping* al decidir que existían pruebas suficientes de la existencia de dumping que justificaban la iniciación de una investigación. Habida cuenta de que el fundamento fáctico de las Reclamaciones 3 y 7 es idéntico al de las Reclamaciones 2 y 6, y, dado que ya hemos determinado que esas circunstancias fácticas constituyen una infracción del párrafo 3 del artículo 5, no es necesario que nos pronunciemos sobre las Reclamaciones 3 y 7 del Brasil.

c) Conclusión

7.112 A la luz de lo expuesto *supra*, consideramos que la Argentina actuó de manera incompatible con las obligaciones dimanantes del párrafo 8 del artículo 5 al no rechazar la solicitud "tan pronto como" el Secretario recibió la evaluación negativa de la CNCE (mediante el Acta Nº 405), el 9 de enero de 1998.

4. Examen simultáneo de las pruebas y negativa a rechazar de la solicitud - Reclamación 9

a) Argumentos de las partes/de los terceros

7.113 El Brasil alega que los períodos de tiempo a los que se refieren los datos utilizados a los efectos de determinar si existían pruebas suficientes de la existencia de dumping y de daño que justificasen la iniciación de la investigación eran diferentes. El Brasil alega que mientras que el período utilizado para recopilar las pruebas suficientes de la existencia de dumping incluía partes de 1996 y de 1997, el período tomado en cuenta para recopilar las pruebas suficientes de la existencia de daño finalizaba en junio de 1998. Según el Brasil, la utilización de diferentes períodos de recopilación de datos sobre el dumping y el daño para decidir si se iniciaba o no la investigación era incompatible con lo dispuesto en el párrafo 7 del artículo 5 del *Acuerdo Antidumping* por dos razones. En primer lugar, el Brasil alega que el período de recopilación de datos correspondientes al dumping debería haberse extendido hasta incluir todo el período considerado respecto de la existencia de daño, a saber, hasta junio de 1998. El Brasil estima que el hecho de que se consideraran diferentes períodos indica que las pruebas sobre la existencia de dumping y sobre la existencia de daño no se examinaron simultáneamente en la decisión de iniciar o no la investigación. En segundo lugar, el Brasil sostiene que la Argentina incumplió el párrafo 7 del artículo 5 al no examinar las pruebas del dumping y del daño simultáneamente en la misma decisión relativa a la iniciación de la investigación. El Brasil alega que el APCDS determinó que había pruebas suficientes sobre la existencia de dumping en su informe del 7 de enero de 1998. El Brasil alega que la CNCE determinó que había pruebas suficientes sobre la existencia de una amenaza de daño que justificaba la iniciación de la investigación el 22 de septiembre de 1998, luego de haber examinado la información adicional que presentó el solicitante El Brasil considera que esto demuestra que las pruebas sobre la existencia de daño fueron examinadas más de ocho meses después del examen de las pruebas sobre la existencia de dumping, lo que infringió el párrafo 7 del artículo 5 del *Acuerdo Antidumping*. El Brasil alega que, para que la Argentina cumpliese las prescripciones del párrafo 7 del artículo 5, el 22 de septiembre de 1998, fecha en la que la CNCE decidió que existían pruebas suficientes sobre la existencia de una amenaza de daño importante, se debería haber llevado a cabo una nueva determinación que tomase en cuenta la información adicional presentada por el solicitante el 17 de febrero de 1998.

7.114 La Argentina aduce que el hecho de que las fechas de los informes en los que el APCDS y la CNCE decidieron que existían pruebas suficientes de la existencia de dumping y de una amenaza

de daño sean diferentes no significa que, en el momento de decidir la iniciación de la investigación, las autoridades argentinas no examinaron simultáneamente las pruebas de la existencia del dumping y del daño.

7.115 Los Estados Unidos, en su calidad de tercero, alegan que el argumento del Brasil se basa en una interpretación errónea del término "simultáneamente" tal como se lo utiliza en el párrafo 7 del artículo 5. Según los Estados Unidos, cuando se analiza en su contexto, el término "simultáneamente" que figura en el párrafo 7 del artículo 5 está relacionado con la expresión "se examinarán", pero no con el término "pruebas". Por lo tanto, según los Estados Unidos, la obligación dimanante del párrafo 7 del artículo 5 consiste en examinar las pruebas de la existencia de dumping y de daño simultáneamente (por ejemplo, en investigaciones coincidentes), y no en examinar pruebas de la existencia de dumping y de daño recopiladas en períodos de tiempo simultáneos (o idénticos).

b) Evaluación del Grupo Especial

7.116 La cuestión que se nos plantea consiste en determinar si la Argentina ha infringido el párrafo 7 del artículo 5 por no haber examinado simultáneamente las pruebas de la existencia de dumping y de daño en la decisión relativa a la iniciación de la investigación. El Brasil esgrime dos argumentos principales en apoyo de su reclamación. En primer lugar, que los períodos correspondientes a los datos utilizados para determinar si existían o no pruebas suficientes de la existencia de dumping y de daño que justificasen la iniciación de la investigación antidumping eran diferentes. En segundo lugar, el Brasil alega que el requisito del párrafo 7 del artículo 5 no habría sido respetado porque las autoridades argentinas examinaron las pruebas de la existencia de daño y de dumping en momentos diferentes.

7.117 El párrafo 7 del artículo 5 dispone, en su parte pertinente:

> "Las pruebas de la existencia del dumping y del daño se examinarán simultáneamente: a) en el momento de decidir si se inicia o no una investigación ..."

7.118 A nuestro juicio, el párrafo 7 del artículo 5 impone a la autoridad investigadora la obligación de carácter procesal de examinar las pruebas que se le han presentado sobre la existencia de dumping y de daño simultáneamente, y no de forma consecutiva, entre otras cosas, al adoptar la decisión de iniciar o no una investigación. Consideramos que el párrafo 7 del artículo 5 no atañe al fondo de la decisión de iniciar una investigación, puesto que ello se trata en el párrafo 3 del artículo 5 del *Acuerdo Antidumping*. Hemos observado que un Grupo Especial anterior expresó una opinión similar respecto de esta cuestión.[102]

7.119 Nos ocuparemos ahora del primer argumento esgrimido por el Brasil. El Brasil alega que los períodos correspondientes a los datos utilizados para determinar si existían o no pruebas suficientes de la existencia de dumping y de daño que justificasen la iniciación de la investigación eran diferentes. En otras palabras, el Brasil alega por lo visto que el párrafo 7 del artículo 5 dispone que un Miembro debe asegurarse de que sus autoridades investigadoras examinen las pruebas sobre la existencia de dumping y de daño correspondiente a períodos simultáneos. No estamos de acuerdo con la interpretación del Brasil. De conformidad con la opinión que hemos expresado en el párrafo 7.118 *supra*, recordamos que el párrafo 7 del artículo 5 impone a las autoridades del Miembro importador

[102] El Grupo Especial que entendió en el asunto *Guatemala - Cemento II* expresó su opinión en el sentido de que "el párrafo 7 del artículo 5 obliga a la autoridad investigadora a examinar las pruebas de que disponga sobre la existencia del dumping y del daño simultáneamente y no de forma consecutiva" y no consideró que "el cumplimiento de esta prescripción dependa [en ningún sentido] del contenido sustantivo de esas pruebas." (sin comillas ni subrayado en el original) (informe del Grupo Especial en el asunto *Guatemala - Cemento II*, *supra*, nota **Error! Unknown switch argument.**, párrafo 8.67)

solamente una obligación de carácter procesal. Estimamos que el párrafo 7 del artículo 5 no impone obligaciones de carácter sustantivo. En esencia, el Brasil sostiene que las pruebas de la existencia de dumping y de daño deben corresponde a períodos simultáneos. Consideramos que este argumento atañe al contenido sustantivo de las pruebas examinadas por las autoridades para adoptar la decisión de iniciar o no una investigación, y no a la oportunidad en que debe realizarse dicho examen. Por lo tanto, el argumento del Brasil es ajeno al ámbito de aplicación de la obligación establecida en el párrafo 7 del artículo 5. Por consiguiente, rechazamos el primer argumento del Brasil.

7.120 El segundo argumento presentado por el Brasil es que el requisito del párrafo 7 del artículo 5 no se respetó porque las autoridades argentinas examinaron las pruebas de la existencia de daño y de dumping en momentos diferentes. Recordamos que la CNCE inicialmente resolvió en enero de 1998 que la solicitud no contenía pruebas suficientes de la existencia de daño, mientras que el APCDS resolvió que sí contenía pruebas suficientes de la existencia de dumping. Como consecuencia de la determinación de la CNCE, el solicitante presentó, en febrero de 1998, pruebas adicionales y actualizadas sobre la existencia de dumping y de daño. Si bien el Secretario remitió a la CNCE las pruebas adicionales y actualizadas sobre la existencia de daño, en cambio no remitió al APCDS las pruebas adicionales y actualizadas sobre la existencia de dumping. Por lo tanto, cuando la CNCE resolvió en septiembre de 1998 que las pruebas adicionales y actualizadas sobre la existencia de daño eran suficiente para justificar la iniciación de la investigación, esa constatación se basó en datos más recientes y no en la determinación que formuló el APCDS en enero de 1998 (basada en los datos sobre la existencia de dumping que figuraban en la solicitud inicial), de que había pruebas suficientes de la existencia de dumping. Dado que el argumento esgrimido por el Brasil atañe a la oportunidad del examen de las pruebas de la existencia de dumping y de daño, ello entra, en principio, en el ámbito de la obligación de carácter procesal que figura en el párrafo 7 del artículo 5. Ahora debemos determinar si la Argentina cumplió o no esa obligación. Al abordar esta cuestión, determinaremos en primer lugar qué se entiende por la expresión "decidir si se inicia o no una investigación", y luego examinaremos si las pruebas de la existencia de dumping y de daño fueron examinadas simultáneamente en dicha decisión.

7.121 El Brasil alega que existían, de hecho, dos decisiones a los efectos del párrafo 7 del artículo 5: una adoptada por el APCDS en enero de 1998, y la otra adoptada por la CNCE en septiembre de 1998. La Argentina sostiene que existió solamente una decisión sobre si se iniciaba o no una investigación, y que esta decisión fue adoptada por el Secretario el 20 de enero de 1999.[103] La Argentina reconoce que esta decisión se basó en las determinaciones sobre la existencia de dumping y de daño recibidas por el Secretario del APCDS y de la CNCE, respectivamente. Consideramos en primer lugar que la "deci[sión de] si se inicia o no una investigación" se debe adoptar antes, o en el mismo momento en que se inicia la investigación, porque el fin de la decisión es determinar si se inicia o no una investigación. Además observamos que el párrafo 7 del artículo 5 utiliza en la versión inglesa el término "decisión" en singular y no en plural. Creemos que esto significa que hay generalmente una decisión en la que la autoridad competente del Miembro importador determina si se inicia o no una investigación. Consideramos que es *solamente* en esa decisión, y *no* en otras, que la autoridad competente debe examinar simultáneamente las pruebas de la existencia de dumping y de daño.

7.122 Dicho esto, debemos examinar los hechos pertinentes de la presente diferencia. El argumento esgrimido por el Brasil es que la prescripción del párrafo 7 del artículo 5 no pudo ser observada porque las autoridades argentinas examinaron las pruebas de la existencia de daño y de dumping en momentos diferentes. Para comprender cómo funciona el sistema argentino, hemos formulado varias preguntas a la Argentina.[104] La Argentina explicó que tiene un sistema bifurcado, en el que el APCDS

[103] Brasil - Prueba documental 7.

[104] Preguntas 15, 22 y 23.

-actualmente la DCD- y la CNCE examinan el dumping y el daño, respectivamente. De conformidad con esta separación, en una etapa previa a la iniciación esos dos organismos examinan en forma separada las pruebas disponibles y determinan si existen pruebas suficientes de la existencia de dumping y de daño, respectivamente, que justifiquen la iniciación de una investigación. Ambos organismos envían estas determinaciones separadas a la autoridad encargada de decidir si se inicia o no una investigación, que es el Secretario. Teniendo en cuenta las explicaciones recibidas de las partes, nos parece claro que el Secretario es la autoridad facultada para decidir si se inicia o no una investigación antidumping en la Argentina. A este respecto, observamos que el artículo 37 del Decreto Nº 2121/94 dispone, en su parte pertinente, que "la Subsecretaría de Comercio Exterior y la Comisión Nacional de Comercio Exterior (...), eleva[rán] sus conclusiones al Secretario de Comercio e Inversiones, quien se pronunciará sobre la apertura de la investigación ...".[105] El Brasil reconoce que "el MEyOSP [es] la autoridad que dictó la decisión de iniciar la investigación".[106] Si el MEyOSP -por conducto del Secretario- es la autoridad encargada de decidir si se inicia o no una investigación, es entonces en relación con la decisión del Secretario de iniciar o no una investigación sobre los pollos originarios del Brasil que las pruebas de la existencia de dumping y de daño se deberían haber examinado simultáneamente. El argumento del Brasil de que la prescripción del párrafo 7 del artículo 5 no pudo ser observada porque el APCDS y la CNCE examinaron las pruebas sobre la existencia de daño y de dumping en momentos diferentes debe ser, por lo tanto, rechazado, puesto que las determinaciones del APCDS y de la CNCE no estaban sujetas a las prescripciones del párrafo 7 del artículo 5. Si el Secretario, que es la autoridad competente, examinó las pruebas de la existencia de dumping y de daño simultáneamente en su decisión de iniciar o no una investigación, la prescripción del párrafo 7 del artículo 5 fue respetada. El Brasil no alegó que el Secretario no cumpliese dicha prescripción.

7.123 Por último, el Brasil alega que, para que la Argentina observase la prescripción del párrafo 7 del artículo 5, se debería haber adoptado el 22 de septiembre de 1998, (fecha en la que la CNCE adoptó la determinación respecto de los datos adicionales sobre la existencia de daño presentados por el solicitante en febrero de 1998), una nueva determinación que tomase en cuenta la información actualizada presentada por el solicitante en febrero de 1998.[107] No estamos de acuerdo con el Brasil. Recordamos que el párrafo 7 del artículo 5 no impone obligaciones de carácter sustantivo. Por lo tanto, este argumento, en la medida en que atañe al fondo de la decisión, debe ser rechazado. Sin embargo, incluso si ese argumento fuese de carácter procesal, recordamos que el Secretario es *la* autoridad encargada de decidir si se inicia o no una investigación y, por lo tanto, es la decisión del Secretario -y no la de la CNCE ni la del APCDS- la que debe considerarse como la "deci[sión de] si se inicia o no una investigación" en el sentido del párrafo 7 del artículo 5. Habida cuenta de lo expuesto *supra*, consideramos que la Argentina no infringió el párrafo 7 del artículo 5 del *Acuerdo Antidumping* sólo por el hecho de que las determinaciones del APCDS y de la CNCE sobre la existencia de dumping y de daño, respectivamente, fueron formuladas en momentos diferentes.

c) Conclusión

7.124 Por las razones expuestas *supra*, rechazamos la reclamación del Brasil en el sentido de que la Argentina actúo de forma incompatible con el párrafo 7 del artículo 5 al no considerar

---

[105] Documento notificado por la Argentina que puede ser consultado en el sito Web de la OMC (http://www.wto.org) en la referencia G/ADP/N/1/ARG/1-G/SCM/N/1/ARG/1.

[106] Respuesta del Brasil a la pregunta 22 del Grupo Especial.

[107] *Ibid*.

simultáneamente, en la decisión de si se inicia o no la investigación, las pruebas de la existencia de dumping y de daño.

5. Omisión de notificar a los exportadores conocidos - Reclamación 10

a) Argumentos de las partes

7.125 El Brasil sostiene que el párrafo 1 del artículo 12 exige que, además del aviso público, las autoridades notificarán (a algunas partes interesadas y al Miembro exportador) cuando las autoridades se hayan cerciorado de que existen pruebas suficientes para justificar la iniciación de una investigación. El aviso público se efectuó cuando se publicó la resolución Nº 11 en la que anunció la iniciación de la investigación, el 25 de enero de 1999. El Brasil alega que se le notificó la iniciación el 1º de febrero de 1999. A cinco exportadores brasileños (Avipal, Frangosul, Nicolini, Sadia, y Seara) también se les notificó la iniciación mediante las comunicaciones enviadas por la CNCE y la DCD, de fecha 10 y 16 de febrero de 1999, respectivamente. El Brasil aduce que a otro grupo de siete exportadores (Catarinense, CCLP, Chapecó, Comaves, Minuano, Penabranca y Perdigão) se les notificó la iniciación en septiembre de 1999, a pesar de que al menos cinco de esos siete exportadores eran conocidos por la CNCE y el APCDS en enero de 1999. A este respecto, el Brasil observa que el informe del 7 de enero de 1999 contenía una lista de 10 exportadores brasileños, que incluía a Catarinense, Chapecó, Comaves, Minuano y Perdigão. El Brasil alega que la notificación de septiembre de 1999 dirigida a esos siete exportadores no cumplía el requisito del párrafo 1 del artículo 12, porque no se cursó "[c]uando las autoridades [se cercioraron] de que [existían] pruebas suficientes para justificar la iniciación de una investigación antidumping".

7.126 La Argentina sostiene que la Resolución Nº 11, por la que se inicia la investigación, se publicó en el Boletín Oficial el 25 de enero de 1999. La Argentina alega que notificó al Brasil la iniciación de la investigación mediante una Nota de fecha 1º de febrero de 1999 dirigida a la Misión del Brasil en la Argentina. En esta comunicación, la Argentina solicitó a las autoridades brasileñas que identificasen a los productores/exportadores interesados en la investigación. La Argentina alega que la DCD notificó a los exportadores Avipal, Frangosul, Nicolini, Sadia y Seara la iniciación de la investigación el 16 de febrero de 1999. La Argentina afirma asimismo que, mediante la respuesta de un importador al cuestionario, de fecha 21 de abril de 1999, tomó conocimiento de que otros siete exportadores brasileños tenían interés en la investigación. Esos exportadores eran Catarinense, CCLP, Chapecó, Comaves, Minuano, Penabranca y Perdigão. La Argentina asegura que el importador solicitó que las autoridades argentinas se pusieran en contacto con esos exportadores. Como resultado de esa solicitud, la DCD se puso en contacto con Catarinense, CCLP, Chapecó, Comaves, Minuano y Perdigão el 15 de septiembre de 1999, y les solicitó información. La Argentina alega que la autoridad investigadora observó la prescripción establecida en el párrafo 1 del artículo 12 respecto del aviso público y la notificación a las partes interesadas (exportador o productor extranjero) de cuyo interés tenía conocimiento, por ejemplo, el Gobierno del Brasil, y que habría sido imposible notificar a las partes de cuyo interés no tenía conocimiento. La Argentina sostiene que solicitó la asistencia del Gobierno del Brasil para notificar a las partes que pudieran estar interesadas la iniciación de la investigación. La Argentina alega que se debe notificar a aquellas partes que son consideradas partes interesadas en el sentido del párrafo 11 del artículo 6, y que sean conocidas y estén identificadas de una manera que permita su notificación e identificación como partes interesadas. Respecto de la afirmación del Brasil en el sentido de que la Argentina reconoció implícitamente que tenía conocimiento de ciertos exportadores por haberlos mencionado en el informe del 7 de enero de 1998, la Argentina sostuvo que esos exportadores nunca habían sido suficientemente identificados de manera tal que fuese posible enviarles los cuestionarios pertinentes.

7.127 El Brasil alega que el párrafo 1 del artículo 12 impone a las autoridades investigadoras del Miembro importador, y no a las autoridades del Miembro exportador, la obligación de notificar a las partes interesadas. Observa que la Argentina trata de hacer compartir al Brasil esta obligación cuando

afirma que había notificado a las autoridades del Brasil y había solicitado su colaboración para identificar a los productores y exportadores. El Brasil sostiene que nunca recibió una comunicación de las autoridades argentinas en la que se solicitara tal información respecto de esos cinco exportadores concretos identificados en el informe del 7 de enero de 1998. Además, el Brasil alega que el argumento esgrimido por la Argentina de que la autoridad debe notificar solamente a aquellas partes que se consideran a sí mismas partes interesadas en la investigación, en el sentido del párrafo 11 del artículo 6, es insostenible. El Brasil se pregunta: ¿cómo puede una parte presentarse como parte interesada si ni siquiera sabe que se ha iniciado una investigación? Según el Brasil, esa es precisamente la razón por la que el párrafo 1 del artículo 12 obliga a la autoridad a notificar a las partes de cuyo interés tenga conocimiento.

b) Evaluación del Grupo Especial

7.128 La cuestión que se nos plantea es saber si la Argentina cumplió o no su obligación de notificación establecida en el párrafo 1 del artículo 12 del *Acuerdo Antidumping* respecto de Catarinense, CCLP, Chapecó, Comaves, Minuano, Penabranca y Perdigão. Como siempre, comenzamos con la disposición pertinente del *Acuerdo Antidumping*, que en este caso es el párrafo 1 del artículo 12, que, en su parte pertinente, dispone:

> "Cuando las autoridades se hayan cerciorado de que existen pruebas suficientes para justificar la iniciación de una investigación antidumping con arreglo al artículo 5, lo notificarán al Miembro o Miembros cuyos productos vayan a ser objeto de tal investigación y a las demás partes interesadas de cuyo interés tenga conocimiento la autoridad investigadora, y se dará el aviso público correspondiente ..."

7.129 El párrafo 1 del artículo 12 dispone que las autoridades del Miembro importador deben notificar la iniciación de la investigación al Miembro o Miembros de la OMC cuyos productos sean objeto de la investigación. El párrafo 1 del artículo 12 establece también que esas autoridades notificarán "a las demás partes interesadas [en la investigación] de cuyo interés tenga conocimiento la autoridad investigadora". Respecto del momento en que debe cursarse dicha notificación, el párrafo 1 del artículo 12 establece que la notificación se cursará cuando las autoridades del Miembro importador se hayan cerciorado de que existen pruebas suficientes para justificar la iniciación de una investigación antidumping con arreglo al artículo 5.

7.130 Al abordar esta cuestión, en primer lugar debemos determinar si los exportadores pertinentes eran o no "partes interesadas" en el sentido del párrafo 1 del artículo 12. Si lo eran debemos examinar a continuación si la autoridad investigadora conocía o no sus intereses.

7.131 La expresión "partes interesadas" se define en el párrafo 11 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping*. Consideramos que es útil tomar como guía la definición del párrafo 11 del artículo 6, puesto que esa definición se refiere expresamente a la totalidad del *Acuerdo Antidumping*, incluido el párrafo 1 del artículo 12. De conformidad con el párrafo 11 i) del artículo 6, los exportadores o los productores extranjeros de un producto objeto de investigación son "partes interesadas". En el apéndice de la solicitud de la CEPA del 2 de septiembre de 1997, se incluía un cuadro suministrado por la Associação Paulista de Avicultura en el que figuraban Catarinense, CCLP, Chapecó, Comaves, Minuano, Penabranca y Perdigão como exportadores de pollos enteros a la Argentina.[108] En consecuencia, sobre la base de las pruebas que tuvo ante sí la autoridad investigadora en el momento de la iniciación, queda acreditado *prima facie* que esos exportadores eran "partes interesadas" en el sentido del párrafo 11 del artículo 6 y, por consiguiente, del párrafo 1 del artículo 12. Por definición, las "partes interesadas" tienen necesariamente un interés en la investigación.

[108] Brasil - Prueba documental 1, página 190.

Además, las pruebas que tuvo ante sí la autoridad investigadora en el momento de la iniciación demuestran *prima facie* que el interés de esos exportadores era conocido por la autoridad investigadora, puesto que en esas pruebas se identificaba expresamente a esos exportadores. Por consiguiente, existen pruebas *prima facie* de que esos exportadores eran "partes interesadas de cuyo interés [en la investigación] ten[ía] conocimiento la autoridad investigadora". En consecuencia, queda acreditado *prima facie* que esos exportadores deberían haber sido notificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 12.

7.132 La Argentina alega que no pudo notificar a esos exportadores porque sus autoridades no disponían de la información necesaria para ponerse en contacto con ellos. En apoyo de dicho argumento, la Argentina menciona una carta de fecha 1º de febrero de 1999 dirigida a la Embajada del Brasil en la Argentina, en la que las autoridades solicitaron la cooperación del Brasil "a efectos de identificar a los productores/exportadores interesados en la presente investigación, y facilitarles los requerimientos de información que se adjuntan a la presente, a fin de que los mismos remitan los datos solicitados respecto del producto objeto de investigación al Gobierno argentino".[109] A nuestro juicio, esta carta no puede sustentar el argumento de la Argentina de que no pudo llevar a cabo la notificación exigida por el párrafo 1 del artículo 12 a los exportadores mencionados *supra* porque no disponía de información necesaria para ponerse en contacto con ellos. En cambio, esta carta nos demuestra que las autoridades argentinas no trataron a los exportadores mencionados *supra* como partes "de cuyo interés [en la investigación] se tenga conocimiento". Si se les hubiese dado ese trato, la carta habría identificado a los exportadores en forma concreta, y se habría solicitado la información específica necesaria para ponerse en contacto con ellos. En cambio, en la carta figura solamente una solicitud de asistencia de carácter general, sin ninguna referencia a los exportadores concretos en cuestión. Aceptamos que pueden existir circunstancias en las que una autoridad investigadora no disponga de la información suficiente que le permita notificar a todas las partes interesadas de cuyo interés en la investigación tenga conocimiento. En este sentido, el hecho de que la autoridad investigadora "tenga conocimiento" de que un exportador tiene interés en la investigación no significa necesariamente que las autoridades dispongan de información suficiente que les permita realizar la notificación prescrita en el párrafo 1 del artículo 12. En otras palabras, el conocimiento del interés del exportador en una investigación no necesariamente supone el conocimiento de la información que permita ponerse en contacto con ese exportador. Sin embargo, consideramos que en tales circunstancias la naturaleza de la obligación de notificación prescrita por el párrafo 1 del artículo 12 indica que la autoridad investigadora debería realizar todos los esfuerzos razonables para obtener la información que le permita ponerse en contacto con el exportador. El enviar una carta con una solicitud general de asistencia, sin individualizar a los exportadores cuyos datos se necesitan para ponerse en contacto con ellos, no satisface el criterio de que es necesario realizar todos los esfuerzos razonables.

7.133 La Argentina también sostiene que "la apertura de investigación es un acto administrativo de carácter general, razón por la cual se publica en el Boletín Oficial y dicha publicación es notificación suficiente que reviste alcance general".[110] En otras palabras, la Argentina sugiere que, al cumplir la obligación de publicar un aviso de la iniciación de una investigación, ha cumplido la obligación de notificar. No estamos de acuerdo con ello. El párrafo 1 del artículo 12 impone en forma clara dos obligaciones distintas, una de notificar y otra de publicar un aviso. Ambas obligaciones deben ser observadas en cualquier investigación. Por lo tanto, rechazamos el argumento de la Argentina.

7.134 Hemos llegado a la conclusión de que Catarinense, CCLP, Chapecó, Comaves, Minuano, Penabranca y Perdigão deberían haber sido notificados de acuerdo con el párrafo 1 del artículo 12. Aunque se enviaron cuestionarios a algunos de esos exportadores el 15 de septiembre de 1999, no

[109] Argentina - Prueba documental III, páginas 729-730.

[110] Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafo 167.

comprendemos cómo la Argentina sostiene que esa comunicación constituye una notificación a los efectos del párrafo 1 del artículo 12. En cualquier caso, consideramos que una comunicación que se realizó aproximadamente ocho meses después de la iniciación de la investigación no cumpliría lo prescrito en el párrafo 1 del artículo 12. Dicha disposición establece que la notificación debe realizarse "cuando" las autoridades se hayan cerciorado de que existen pruebas suficientes para justificar la iniciación de una investigación. La palabra "cuando" se define, entre otras cosas, como "*as soon as*" (tan pronto como).[111] Por lo tanto, el párrafo 1 del artículo 12 dispone que la notificación se debe realizar tan pronto como las autoridades se hayan cerciorado de que existen pruebas suficientes para justificar la iniciación de una investigación. Una notificación que se realiza aproximadamente ocho meses después de la iniciación evidentemente no cumple esa prescripción de prontitud.

c) Conclusión

7.135 Habida cuenta de lo expuesto *supra*, concluimos que la Argentina ha infringido el párrafo 1 del artículo 12 del *Acuerdo Antidumping* al no notificar a Catarinense, CCLP, Chapecó, Comaves, Minuano, Penabranca y Perdigão la iniciación de la investigación.

6. Omisión de dar un plazo de 30 días para responder al cuestionario/Omisión de facilitar el cuestionario relativo al daño - Reclamación 11

a) Argumentos de las partes

7.136 El Brasil alega que la Argentina infringió el párrafo 1.1 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping* porque: i) la autoridad investigadora dio sólo 20 días a los exportadores CCLP, Catarinense, Chapecó, Comaves, Minuano, Perdigão y Penabranca para responder al cuestionario, y ii) estos exportadores nunca recibieron el cuestionario de la CNCE relativo al daño.

7.137 La Argentina reconoce que la DCD se puso en contacto con varios exportadores brasileños el 15 de septiembre de 1999.[112] En estas comunicaciones, la DCD pidió a esos exportadores brasileños que presentaran pruebas sobre, entre otras cosas, los precios de venta en el mercado interno, los precios de exportación y los costos.[113] La Argentina sostiene que la DCD envió los formularios de los cuestionarios al solo efecto de dar una forma de respuesta adecuada a los requerimientos generales y para permitir que los exportadores adjuntaran toda otra información considerada importante.[114] A juicio de la Argentina, sólo uno de esos siete exportadores, Catarinense, respondió al cuestionario. La Argentina alega que no sólo concedió a los exportadores brasileños un plazo de más de 30 días para responder a los cuestionarios sino que también aceptó sus solicitudes de prórroga, concediéndoles dicha prórroga cada vez que fue posible.[115]

b) Evaluación del Grupo Especial

7.138 Esta reclamación se refiere a las comunicaciones supuestamente enviadas a los siguientes siete exportadores: CCLP, Catarinense, Chapecó, Comaves, Minuano, Penabranca y Perdigão.

---

[111] *The Concise Oxford Dictionary of Current English* (Clarendon Press, 1995), página 1.595.

[112] Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafos 127, 133 y 134.

[113] Respuesta de la Argentina a la pregunta 28 del Grupo Especial.

[114] *Ibid*.

[115] Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafo 134.

Tenemos que analizar dos cuestiones. En primer lugar, hemos de determinar si la DCD no dio a varios exportadores brasileños un plazo de 30 días para responder al cuestionario sobre el dumping que se les envió.[116] La segunda cuestión es determinar si el cuestionario de daño de la CNCE debería también haberse enviado a los siete exportadores identificados por el Brasil.

7.139 Comenzamos nuestro análisis de la primera cuestión mediante el examen del texto del párrafo 1.1 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping*:

> "Se dará a los exportadores o a los productores extranjeros a quienes se envíen los cuestionarios utilizados en una investigación antidumping un plazo de 30 días como mínimo para la respuesta. Se deberá atender debidamente toda solicitud de prórroga del plazo de 30 días y, sobre la base de la justificación aducida, deberá concederse dicha prórroga cada vez que sea factible." (se ha omitido la nota de pie de página del original)

7.140 A simple vista, el párrafo 1.1 del artículo 6 resulta claro. De conformidad con la primera frase de esa disposición, se debe dar a los exportadores o a los productores extranjeros a quienes se envíen los cuestionarios utilizados en una investigación antidumping un plazo de 30 días *como mínimo* para la respuesta. Habida cuenta de que la segunda frase del párrafo 1.1 del artículo 6 prevé prórrogas del plazo de 30 días fijado en la primera frase del párrafo 1.1 del artículo 6, ese plazo de 30 días constituye un plazo mínimo absoluto que debe concederse a los exportadores desde el principio. En otras palabras, cualquier prórroga se añade al plazo inicial (mínimo) de 30 días previsto en la primera frase.

7.141 El Brasil alega que las solicitudes de información que recibieron Catarinense, CCLP, Chapecó, Comaves, Minuano y Perdigão el 15 de septiembre de 1999 constituyen cuestionarios que entran dentro del ámbito de aplicación del párrafo 1.1 del artículo 6, y que se infringió esa disposición porque sólo se dio a los exportadores 20 días para responder a esos cuestionarios. La Argentina no niega que el 15 de septiembre de 1999 solicitase información a esos exportadores. A juicio de la Argentina, la información solicitada "consist[ía], entre otros, en precios de venta en el mercado interno, precios de exportación […] [y] costos".[117] Tampoco niega la Argentina que enviara a esos exportadores una copia del cuestionario enviado a los otros exportadores/productores extranjeros al comienzo de su investigación. La Argentina afirma que hizo eso "al solo efecto de aportar una forma de respuesta adecuada a los requerimientos generales y para permitir que los exportadores adjuntaran toda otra información considerada importante".[118] Tan sólo uno de los exportadores contactados el 15 de septiembre de 1999 respondió a la solicitud de información de la DCD. Ese exportador lo hizo respondiendo a las 11 secciones del cuestionario que se adjuntaba a la solicitud de información de la DCD. Por consiguiente, ese exportador entendió claramente que se le había pedido que respondiese

---

[116] Con respecto a Penabranca, el Brasil afirmó que la DCD notificó a este exportador el 15 de septiembre de 1999 y que le dio 20 días para responder al cuestionario. No obstante, el Brasil afirmó que le era imposible encontrar, en los documentos de la investigación a los que había tenido acceso, la notificación de la DCD a Penabranca. Por consiguiente, el Brasil no facilitó copia de ninguna documentación enviada por las autoridades argentinas a Penabranca. Recordamos que el Brasil, en calidad de reclamante, está obligado a acreditar *prima facie* la existencia de una infracción. El Brasil no nos ha mostrado ningún documento del expediente, ni tampoco nos ha remitido a ninguna documentación del mismo, que pruebe que se diera a Penabranca únicamente 20 días para responder al cuestionario. Por consiguiente, consideramos que el Brasil no ha demostrado *prima facie* que la DCD no diera a Penabranca un plazo de al menos 30 días para responder al cuestionario de la DCD sobre el dumping.

[117] Respuesta de la Argentina a la pregunta 28 del Grupo Especial.

[118] Respuesta de la Argentina a la pregunta 28 del Grupo Especial. Véase también, Brasil - Prueba documental 13 y las secciones VII.3.1 a VII.3.6 de la Prueba documental 15 del Brasil.

al cuestionario de la DCD. En esas circunstancias, consideramos que las solicitudes de información enviadas a los exportadores brasileños el 15 de septiembre de 1999 tenían la forma de "cuestionario[s]" en el sentido del párrafo 1.1 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping*.

7.142 Con respecto al plazo dado a CCLP, Catarinense, Chapecó, Comaves, Minuano, y Perdigão para responder a los cuestionarios, debemos señalar que existe alguna incertidumbre respecto del argumento de la Argentina sobre esta cuestión. Por un lado, en la respuesta a la pregunta 31 del Grupo Especial, la Argentina indicó que los "exportadores tienen el derecho a los 30 días y ellos se otorgan. La diferencia analizada por el Grupo Especial en el sentido de un otorgamiento inicial por menos días y su ampliación mínima a 30 luego, no es el sistema aplicado por la Argentina. Lo que la Autoridad de Aplicación ha manifestado es que amén de los 30 días, se otorgaron las prórrogas solicitadas. Se entiende que los plazos deben otorgarse en las respuestas a los requerimientos en función del carácter y la complejidad de los mismos. Por esta razón es pertinente la base de 30 días para las respuestas al cuestionario total y base de la investigación a su inicio". Por otro lado, las comunicaciones enviadas a esos exportadores brasileños demuestran que se les dio un plazo de 20 días para que enviaran sus respuestas a la autoridad investigadora.[119] La Argentina no ha negado esto. Por consiguiente, basándonos en los hechos que tenemos ante nosotros, no tenemos duda de que la DCD dio un plazo inicial de sólo 20 días para las respuestas al cuestionario pertinente.

7.143 La Argentina también alega que el plazo dado para las respuestas pertinentes del cuestionario fue suficiente a los efectos del párrafo 1.1 del artículo 6 porque sólo uno de los exportadores contactados por la DCD el 15 de septiembre de 1999 (es decir, Catarinense) respondió al cuestionario; los otros, o bien no exportaban el producto de que se trata a la Argentina (es decir, CCLP y Chapecó) o bien no mostraron ningún interés en la investigación y no presentaron ninguna información (es decir, Comaves, Minuano, y Perdigão).[120] No vemos la pertinencia de ese hecho. El requisito establecido en la primera frase del párrafo 1.1 del artículo 6 consiste en que se dará a los exportadores o a los productores un plazo de 30 días como mínimo para responder al cuestionario, independientemente de si éstos en realidad deciden responder o no.

7.144 Habida cuenta de que la DCD no dio a los exportadores contactados el 15 de septiembre de 1999 un plazo inicial de 30 días como mínimo para responder a los cuestionarios que ésta les envió, la Argentina no cumplió el requisito establecido en la primera frase del párrafo 1.1 del artículo 6.

7.145 La segunda cuestión que tenemos que examinar es si el párrafo 1.1 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping* obligaba o no a la CNCE a enviar su cuestionario sobre el daño a los siete exportadores identificados por el Brasil.[121] Interpretamos la primera frase del párrafo 1.1 del artículo 6 en el sentido de que <u>si</u> se envían los cuestionarios a los exportadores o los productores extranjeros, se les dará un plazo de 30 días como mínimo para la respuesta. No obstante, la primera frase de ese artículo no indica <u>qué</u> cuestionarios deben enviarse a los exportadores o los productores extranjeros. Por

[119] Brasil - Prueba documental 13.

[120] Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafo 133 y Segunda declaración oral de la Argentina, párrafo 41.

[121] Observamos que en el párrafo 212 de su Primera comunicación escrita, el Brasil sostiene que "[l]a CNCE nunca notificó a esos siete exportadores la investigación …". Sin embargo, no entendemos por qué el Brasil alega que la Argentina infringió el párrafo 1.1 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping* por el hecho de que la CNCE nunca notificó la iniciación de la investigación a esos siete exportadores. A nuestro juicio, una reclamación de ese tipo carecería de fundamento puesto que está claro que la disposición del párrafo 1.1 del artículo 6 no se refiere a la notificación de la iniciación de una investigación.

consiguiente, el hecho de no enviar un cuestionario determinado a los exportadores o los productores extranjeros no constituye una infracción del párrafo 1.1 del artículo 6.

7.146 Por último, la Argentina sostiene que el Brasil no cuestionó durante la investigación las circunstancias que constituyen la base de la reclamación que se nos plantea.[122] Sin embargo, el hecho de que no se esgrimiera un argumento en el contexto de la investigación, en particular un argumento relativo a la infracción de una disposición procesal del *Acuerdo Antidumping*, no impide a una parte plantearlo en una etapa ulterior, en las actuaciones de un grupo especial en el marco de la OMC.[123] Observamos que la Argentina no ha alegado que esta cuestión se haya planteado de manera indebida ante este Grupo Especial, o que sea ajena a nuestro mandato.

c) Conclusión

7.147 A la luz de lo expuesto, concluimos que la Argentina infringió el párrafo 1.1 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping* porque no dio un plazo de 30 días como mínimo a Catarinense, CCLP, Chapecó, Comaves, Minuano, y Perdigão para responder al cuestionario sobre el dumping de la DCD. Además, concluimos que la Argentina no infringió el párrafo 1.1 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping* por no enviar el cuestionario de la CNCE sobre el daño a los exportadores identificados por el Brasil.

7. Omisión de poner las pruebas inmediatamente a disposición de algunos exportadores brasileños - Reclamación 12

a) Argumentos de las partes

7.148 El Brasil alega que, habida cuenta de que ni la DCD ni la CNCE informaron a Catarinense, CCLP, Comaves, Chapecó, Minuano, Penabranca y Perdigão de la iniciación de la investigación ni de la necesidad de presentar respuestas, las pruebas presentadas por escrito por las demás partes interesadas no se pusieron inmediatamente a disposición de esos siete exportadores. A juicio del Brasil, las pruebas no se pusieron sin demora o inmediatamente a disposición de esos exportadores porque la notificación para que participaran en la investigación se les efectuó ocho meses después de que se hubiera iniciado la investigación y de que se hubiera formulado una determinación preliminar de la existencia de dumping, de daño y de relación causal. Además, el Brasil alega que las empresas que saben que hay una investigación en curso pueden ser consideradas "partes interesadas que intervengan en la investigación", aunque no se muestren interesadas en la misma. El Brasil sostiene que Catarinense, CCLP, Comaves, Chapecó, Minuano, Perdigão y Penabranca *no* sabían que había

[122] Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafo 136 y Segunda declaración oral de la Argentina, párrafo 44.

[123] A este respecto, observamos que un argumento similar al planteado por la Argentina fue examinado por dos Grupos Especiales en el marco del GATT, a saber: *Estados Unidos - Salmón noruego: derechos antidumping* y *Estados Unidos - Salmón noruego: derechos compensatorios*. En ambos asuntos, los Grupos Especiales no encontraron ningún fundamento para poder negarse a examinar la reclamación de un signatario en un procedimiento de solución de diferencias simplemente porque el objeto de la reclamación no hubiera sido planteado previamente ante las autoridades investigadoras de conformidad con su legislación nacional. (Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a las importaciones de salmón del Atlántico, fresco y refrigerado, procedentes de Noruega* ("*Estados Unidos - Salmón noruego: derechos antidumping* "), adoptado el 27 de abril de 1994, IBDD S41/I/248, párrafo 349 e informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Imposición de derechos compensatorios a las importaciones de salmón del Atlántico, fresco y refrigerado, procedentes de Noruega* ("*Estados Unidos - Salmón noruego: derechos compensatorios*"), adoptado el 28 de abril de 1994, IBDD S41/II/644, párrafo 218).

una investigación en marcha hasta que fueron notificados por las autoridades ocho meses después de que se iniciara la investigación.

7.149 La Argentina responde que la DCD y la CNCE cumplieron el requisito establecido en el párrafo 1.2 del artículo 6 porque pusieron inmediatamente a disposición de las partes interesadas que intervenían en la investigación las pruebas presentadas por escrito por las demás partes interesadas. La Argentina sostiene que mal podrían la DCD y la CNCE haber puesto a disposición de esos siete exportadores brasileños las pruebas presentadas por escrito por las otras partes interesadas que intervenían en la investigación, no siendo aquéllos parte de la investigación. La Argentina tenía la obligación de poner inmediatamente a disposición de las demás partes interesadas que intervenían en la investigación las pruebas presentadas por escrito por una parte interesada, lo que, según la Argentina, hicieron la DCD y la CNCE.

b) Evaluación del Grupo Especial

7.150 La cuestión que se nos plantea es si la autoridad investigadora estaba obligada a poner a disposición de Catarinense, CCLP, Comaves, Chapecó, Minuano, Penabranca y Perdigão las pruebas presentadas por las demás partes interesadas.

7.151 El párrafo 1.2 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping* dispone lo siguiente:

> "A reserva de lo prescrito en cuanto a la protección de la información de carácter confidencial, las pruebas presentadas por escrito por una parte interesada se pondrán inmediatamente a disposición de las demás partes interesadas que intervengan en la investigación." (sin subrayar en el original)

7.152 Consideramos que el párrafo 1.2 del artículo 6 impone a la autoridad investigadora la obligación de poner las pruebas inmediatamente a disposición de las demás partes interesadas que intervengan en la investigación.

7.153 Observamos que el párrafo 1.2 del artículo 6 no se refiere a las "partes interesadas" sino a las "partes interesadas que intervengan en la investigación". Por consiguiente, la expresión "partes interesadas" está calificado por las palabras "que intervengan".[124] A nuestro juicio, si los redactores hubiesen tenido la intención de hacer extensiva la obligación impuesta por el párrafo 1.2 del artículo 6 a todas las partes interesadas, según se las define el párrafo 11 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping*, no habrían incluido las palabras "que intervengan". En primer lugar debemos determinar cuál es el sentido corriente de las palabras "que intervengan". Observamos que el párrafo 1.2 del artículo 6 utiliza las palabras "partes […] que intervengan en la investigación". El sentido corriente del término "*participate*" (intervenir) es "*share or take part (in)*"[125] (participar o tomar parte (en)). Esta definición de las palabras "que intervengan" nos sugiere que, para intervenir en una investigación, una parte debe realizar alguna acción.[126] Consideramos que el mero

[124] Teniendo en cuenta el texto del párrafo 1.2 del artículo 6, no podemos estar de acuerdo con una interpretación del párrafo 1.2 del artículo 6 que haga caso omiso de las palabras "que intervengan en la investigación".

[125] *The Concise Oxford Dictionary of Current English* (Clarendon Press, 1995), página 996.

[126] A los efectos del párrafo 1.2 del artículo 6, consideramos que la expresión "partes interesadas" debería interpretarse a la luz del párrafo 11 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping. Por consiguiente, constatamos que la expresión "partes interesadas" en el párrafo 1.2 del artículo 6 incluye a "los exportadores, los productores extranjeros (…) de un producto objeto de investigación", como los exportadores brasileños Catarinense, CCLP, Comaves, Chapecó, Minuano, Penabranca y Perdigão.

conocimiento que tenga una parte interesada de la existencia de una investigación en curso no la convierte en una parte interesada "que intervenga […] en la investigación" en el sentido del párrafo 1.2 del artículo 6, a menos que tome parte de manera activa en la investigación. Por consiguiente, debemos examinar a la luz del expediente que tenemos ante nosotros si los exportadores identificados por el Brasil estaban tomando parte de manera activa en la investigación. A este respecto, el Brasil sostiene que esos exportadores ni siquiera sabían que había una investigación hasta que la DCD se puso en contacto con ellos el 15 de septiembre de 1999.[127] Consideramos que, si ni siquiera sabían que había una investigación, era imposible que interviniesen en la misma en el sentido del párrafo 1.2 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping*.[128] Habida cuenta de que los exportadores pertinentes no estaban "interviniendo" en la investigación, la autoridad investigadora no estaba obligada a poner inmediatamente a su disposición las pruebas presentadas por escrito por las demás partes interesadas.

c) Conclusión

7.154 Por las razones precedentes, desestimamos la reclamación del Brasil de que la Argentina infringió el párrafo 1.2 del artículo 6 al no poner inmediatamente a disposición de Catarinense, CCLP, Comaves, Chapecó, Minuano, Penabranca y Perdigão las pruebas presentadas por escrito por las demás partes interesadas que participaban en la investigación.

8. Derecho de la parte interesada a defender sus intereses - Reclamación 13

a) Argumentos de las partes

7.155 El Brasil alega que Catarinense, CCLP, Comaves, Chapecó, Minuano, Penabranca y Perdigão no tuvieron plena oportunidad de defender sus intereses, lo que infringió el párrafo 2 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping*. El Brasil sostiene que sólo se dio a esos exportadores un plazo de 20 días para responder al cuestionario, incumpliendo así el párrafo 1.1 del artículo 6. Además, el Brasil afirma que la CNCE no notificó a esos exportadores la iniciación de la investigación, ni les entregó los cuestionarios sobre el daño. Por último, el Brasil alega que, habida cuenta de que no se notificó a esos exportadores la existencia de la investigación ni la necesidad de enviar las respuestas al cuestionario hasta ocho meses después de la iniciación de la investigación, no se pusieron

[127] "El Brasil reafirma que los exportadores brasileños CCLP, Catarinense, Chapecó, Minuano, Perdigão, Comaves y Penabranca **no conocieron** la investigación en curso hasta que fueron notificados por las autoridades, ocho meses después de su iniciación." (subrayado y negritas en el original) (Respuesta del Brasil a la pregunta 32 del Grupo Especial.) Recordamos que el Brasil no ha presentado ninguna prueba de que la DCD se pusiera en contacto con Penabranca el 15 de septiembre de 1999 (véase la nota 116 *supra*). Sin embargo, esto no es pertinente para la cuestión de saber si Penabranca estaba interviniendo o no en la investigación.

[128] El Brasil alega que si una autoridad investigadora no notifica a un productor extranjero o a un exportador la iniciación de la investigación, es imposible que se cumpla el requisito establecido en el párrafo 1.2 del artículo 6. No estamos de acuerdo con esto porque los beneficiarios de la obligación prevista en el párrafo 1.2 del artículo 6 son diferentes de los beneficiarios de la obligación establecida en el párrafo 1 del artículo 12. El párrafo 1.2 del artículo 6 se aplica a las partes interesadas "que intervengan en la investigación" mientras que el párrafo 1 del artículo 12 se aplica a las partes interesadas "de cuyo interés [en la investigación] tenga conocimiento la autoridad investigadora". Por consiguiente, una infracción del párrafo 1 del artículo 12 no conlleva automáticamente una infracción del párrafo 1.2 del artículo 6. El hecho de que partes interesadas no estuviesen interviniendo en la investigación porque no se les había notificado la iniciación de la misma, no modifica la circunstancia de que los beneficiarios de las obligaciones establecidas el párrafo 1 del artículo 12 y en el párrafo 1.2 del artículo 6 sean diferentes. Consideramos que los exportadores brasileños no tenían conocimiento de la investigación porque no habían sido notificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 12 del *Acuerdo Antidumping*. Recordamos que se han formulado constataciones separadas con respecto a esta cuestión al tratar la Reclamación 10 en el párrafo 7.135 *supra*.

inmediatamente a disposición de esos exportadores las pruebas presentadas por las demás partes interesadas.

7.156 La Argentina responde que, una vez que se inició la investigación, se puso a disposición de las partes interesadas, como los exportadores y las autoridades brasileñas, la documentación relativa a las actuaciones en cuestión. La Argentina sostiene que las partes interesadas autorizadas pudieron consultar el expediente y obtener una copia del mismo en todo momento. Aduce que cualquier otra parte que se considerara interesada podía presentarse en las oficinas de la autoridad investigadora y solicitar la consulta del expediente. En cuanto a la cuestión del envío de la notificación de la iniciación a determinados exportadores el 15 de septiembre de 1999, la Argentina alega que la obligación de dar aviso público y notificar a las partes interesadas se establece sólo para aquellas partes de cuyo interés se tenga conocimiento. La Argentina sostiene que hubiera resultado imposible notificar a partes cuyo interés en la investigación se desconocía. A este respecto, la Argentina afirma que la autoridad investigadora notificó al Gobierno del Brasil la iniciación de la investigación y le pidió su colaboración para identificar a los productores y exportadores interesados. La Argentina sostiene que las autoridades brasileñas no informaron a la autoridad investigadora del supuesto interés de los exportadores que fueron notificados el 15 de septiembre de 1999 y cuyo derecho de defensa, a juicio del Brasil, fue menoscabado. La Argentina concluye que es claro que la manera en que la autoridad investigadora previó el acceso de las partes interesadas al procedimiento, no cercenó el derecho de acceso a las actuaciones y menos aún su derecho de defensa.

b) Evaluación del Grupo Especial

7.157 El Brasil ha presentado tres reclamaciones relativas al párrafo 2 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping*. Una reclamación se refiere a la presunta omisión por parte de la CNCE de notificar a determinados exportadores y de facilitarles el cuestionario sobre el daño enviado a otros exportadores. Tras un examen más detenido, constatamos que no hay referencia alguna a esta reclamación en la solicitud del Brasil de establecimiento de este Grupo Especial.[129] En consecuencia, esta reclamación es ajena a nuestro mandato.

7.158 Con respecto a las dos reclamaciones relativas al párrafo 2 del artículo 6 que quedan dentro de nuestro mandato, la cuestión que se nos plantea es si Catarinense, CCLP, Comaves, Chapecó, Minuano, Penabranca y Perdigão no tuvieron plena oportunidad de defender sus intereses porque: a) la DCD no les dio un plazo de 30 días como mínimo para responder al cuestionario sobre el dumping; y b) la DCD y la CNCE no pusieron inmediatamente a disposición de esos exportadores las pruebas presentadas por las demás partes interesadas.

7.159 El párrafo 2 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping* dispone en la parte pertinente lo siguiente:

[129] La parte pertinente de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por el Brasil (documento WT/DS241/3, sección B.4) dice lo siguiente:

> La DCD no dio a algunos de los exportadores el plazo legalmente exigido para responder a los cuestionarios. Tampoco puso inmediatamente a disposición de esos exportadores brasileños las pruebas presentadas por escrito por las demás partes interesadas. Al no dar a esos exportadores tiempo suficiente para responder a los cuestionarios y no poner inmediatamente a su disposición las pruebas presentadas por las demás partes interesadas, la DCD no les dio plena oportunidad de defender sus intereses en la investigación de que se trata, con lo que infringió lo dispuesto en los **párrafos 1.1, 1.2 y 2 del artículo 6**. (las negritas figuran en el original)

"Durante toda la investigación antidumping, todas las partes interesadas tendrán plena oportunidad de defender sus intereses."

7.160 Las partes están de acuerdo en que, si bien el párrafo 2 del artículo 6 impone a las autoridades investigadoras un deber general de velar por que las partes interesadas tengan plena oportunidad de defender sus intereses durante toda la investigación antidumping, esa disposición no facilita orientaciones concretas en cuanto a las medidas que deben poner en práctica las autoridades investigadoras.[130] Estamos de acuerdo con esto.[131] También coincidimos con grupos especiales anteriores[132] y con el Órgano de Apelación[133] en que no consideramos necesario abordar reclamaciones relativas al párrafo 2 del artículo 6 cuando ya hemos formulado constataciones sobre la conducta que supuestamente infringe el párrafo 2 del artículo 6 en el marco de disposiciones más específicas del *Acuerdo Antidumping*.

7.161 Por consiguiente, únicamente examinaremos las reclamaciones del Brasil relativas al párrafo 2 del artículo 6 en la medida en que no hayamos formulado constataciones respecto de la situación de hecho en cuestión en el marco de alguna otra disposición del *Acuerdo Antidumping* que aborde específicamente esa situación. En cuanto al argumento del Brasil de que la DCD no dio un plazo de 30 días como mínimo a Catarinense, CCLP, Comaves, Chapecó, Minuano, Penabranca y Perdigão para responder al cuestionario sobre el dumping, recordamos que ya hemos formulado constataciones relativas al párrafo 1.1 del artículo 6.[134] También hemos formulado constataciones, en el marco del párrafo 1.2 del artículo 6, sobre la afirmación del Brasil de que ni la DCD ni la CNCE pusieron inmediatamente a disposición de los Catarinense, CCLP, Comaves, Chapecó, Minuano, Penabranca y Perdigão las pruebas presentadas por las demás partes interesadas.[135] En consecuencia, ya hemos formulado constataciones sobre las situaciones de hecho que constituyen la base de las reclamaciones del Brasil relativas al párrafo 2 del artículo 6 en el marco de otras disposiciones del *Acuerdo Antidumping* que abordan específicamente esas situaciones de hecho.

---

[130] Primera comunicación escrita del Brasil, párrafo 222, y Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafo 150.

[131] Observamos que en el asunto *Guatemala - Cemento II* el Grupo Especial opinó de manera similar. (Informe del Grupo Especial, *Guatemala - Cemento II*, *supra*, nota **Error! Unknown switch argument.**, párrafo 8.162.)

[132] Véase, por ejemplo, el informe del Grupo Especial en *Guatemala - Cemento II*, *supra*, nota **Error! Unknown switch argument.**, párrafo 8.162 y el informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916 - Reclamación presentada por las Comunidades Europeas* ("*Estados Unidos - Ley de 1916 (CE)*"), WT/DS136/R y Corr.1, adoptado el 26 de septiembre de 2000, confirmado por el informe del Órgano de Apelación, WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R, párrafo 6.76.

[133] El Órgano de Apelación señaló en el asunto *CE - Banano III (Ecuador)* que "[a]unque tanto el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 como el párrafo 3 del artículo 1 del *Acuerdo sobre Licencias* son aplicables, consideramos que el Grupo Especial debería haber aplicado en primer lugar el *Acuerdo sobre Licencias*, puesto que este Acuerdo se ocupa específicamente y de forma detallada de la administración de los procedimientos para el trámite de licencias de importación." (Informe del Órgano de Apelación, *Comunidades Europeas - Régimen para la importación, venta y distribución de bananos* ("*CE - Banano III (Ecuador)*"), WT/DS27/AB/R, adoptado el 25 de septiembre de 1997, DSR 1997.III, 1085, párrafo 204).

[134] Véanse los párrafos 7.138-7.146 *supra*.

[135] Véanse los párrafos 7.150-7.153 *supra*.

c) Conclusión

7.162 Por las razones antes mencionadas, consideramos que no es necesario que formulemos constataciones separadas respecto de las reclamaciones del Brasil relativas al párrafo 2 del artículo 6.

9. Omisión de facilitar oportunamente el texto completo de la solicitud escrita - Reclamación 14

a) Argumentos de las partes

7.163 El Brasil aduce que la autoridad investigadora no facilitó al Gobierno del Brasil ni a los exportadores el texto de la solicitud, con lo que se hizo imposible que los exportadores prepararan los argumentos en defensa de sus intereses y elaboraran una estrategia para defenderse contra las alegaciones hechas por el solicitante en la solicitud. El Brasil alega que el requisito que establece el párrafo 1.3 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping* respecto de los exportadores conocidos y las autoridades del país exportador, no puede cumplirse simplemente poniendo la solicitud a disposición de los exportadores y de las autoridades del país exportador. A juicio del Brasil, ese requisito sólo puede cumplirse si la autoridad investigadora facilita *activamente* el texto completo de la solicitud escrita al país exportador y a los exportadores que participan en la investigación. El Brasil sostiene que su interpretación de la obligación que impone el párrafo 1.3 del artículo 6 está confirmada por el hecho de que la misma disposición exige que el texto de la solicitud sea "puesto a disposición" de "las otras partes interesadas intervinientes". A juicio del Brasil, si se interpretara que el requisito impuesto a la autoridad investigadora es el mismo en el caso de los exportadores y el Miembro exportador que en el caso de las otras partes interesadas, no habría necesidad de utilizar un lenguaje diferente en el párrafo 1.3 del artículo 6 del Acuerdo. El Brasil también alega que, incluso aunque el término "*provide*" (facilitar) tuviera que interpretarse igual que "*make available*" (poner a disposición), la autoridad investigadora habría infringido el párrafo 1.3 del artículo 6 porque la notificación de que el texto completo de la solicitud escrita estaba disponible no se envió "tan pronto como se inició la investigación".

7.164 La Argentina responde que el párrafo 1.3 del artículo 6 no obliga a una autoridad investigadora a "enviar" el texto completo de la solicitud sino a "facilitar" el texto a los exportadores que se conozcan y a las autoridades del país exportador. La Argentina sostiene que, una vez que la investigación se inició, puso *las actuaciones a disposición de* las partes interesadas acreditadas. La Argentina señala que, al obrar de este modo, cumplió el requisito establecido en el párrafo 1.3 del artículo 6. La Argentina sostiene que, si se tiene en cuenta que la notificación a las autoridades brasileñas se efectuó el 1° de febrero de 1999 y que el aviso de iniciación de la investigación sobre los pollos procedentes del Brasil se publicó en el Boletín Oficial el 25 de enero de 1999, la notificación al Gobierno del Brasil tuvo lugar cinco días hábiles después de la fecha de iniciación de la investigación.

7.165 El Brasil sostiene que debe interpretarse que la palabra "facilitarán" en la versión española del párrafo 1.3 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping* significa "proporcionar o entregar", una definición que es enteramente compatible con la del verbo "*provide*" (facilitar) en la versión inglesa del *Acuerdo Antidumping*.

b) Evaluación del Grupo Especial

7.166 La cuestión que tenemos ante nosotros se refiere a la interpretación de la obligación que impone el término "*provide*" (facilitar) en la primera frase del párrafo 1.3 del artículo 6.

7.167 El texto del párrafo 1.3 del artículo 6 dispone lo siguiente:

> "Tan pronto como se haya iniciado la investigación, las autoridades facilitarán a los exportadores que conozcan y a las autoridades del país exportador el texto completo de la solicitud escrita presentada de conformidad con el párrafo 1 del artículo 5 y lo pondrán a disposición de las otras partes interesadas intervinientes que lo soliciten. Se tendrá debidamente en cuenta lo prescrito en cuanto a la protección de la información confidencial, de conformidad con las disposiciones del párrafo 5." (se ha omitido la nota de pie de página del original)

7.168 La obligación del párrafo 1.3 del artículo 6 es clara. La autoridad investigadora, a reserva de la disposición sobre la protección de la información de carácter confidencial, debe *facilitar* el texto de la solicitud escrita a los exportadores que conozca y a las autoridades del país exportador. También debe *ponerlo a disposición* de las otras partes interesadas que lo soliciten. Esta obligación se aplica tan pronto como se haya iniciado la investigación.

7.169 La Argentina opina que sus autoridades cumplieron "el requisito de "facilitar" [previsto en el párrafo 1.3 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping*] cuando pusieron las actuaciones a disposición de las partes interesadas acreditadas".[136] A juicio de la Argentina, el término "*facilitar*" significa "permitir el acceso a alguna cosa o elemento que es de interés de la otra parte".[137] En otras palabras, a juicio de la Argentina, el verbo "facilitar", en el párrafo 1.3 del artículo 6, tiene el significado de permitir el acceso a alguna cosa o elemento que es de interés de la otra parte. Observamos que el término "*provide*" (facilitar) se define como, entre otras cosas, "*supply; furnish*"[138] (suministrar; proveer). En consecuencia, el verbo "*provide*" (facilitar) podría interpretarse como suministrar o proveer el texto de la solicitud. Teniendo en cuenta esta definición, consideramos que el término "*provide*" (facilitar) exigiría una acción positiva por parte de la autoridad investigadora, semejante a la de suministrar o proveer algo (es decir, el texto completo de la solicitud) a alguien (es decir, a los exportadores conocidos y a las autoridades del país exportador). Por consiguiente, no podemos estar de acuerdo con la Argentina en que el término "*provide*" (facilitar) en el texto en inglés del *Acuerdo Antidumping* o "facilitarán" en su versión en español pueda interpretarse en el sentido de "permitir el acceso". A nuestro juicio, una autoridad investigadora *no puede* cumplir la obligación de "facilitar […] a los exportadores que conozca […] y a las autoridades del país exportador […] la solicitud" simplemente permitiéndoles el acceso a esa solicitud.

7.170 Nuestra interpretación se ve confirmada por las palabras elegidas por los redactores del párrafo 1.3 del artículo 6. A este respecto, observamos que el párrafo 1.3 del artículo 6 establece dos obligaciones diferentes, según sea la parte de que se trate. El párrafo 1.3 del artículo 6 dispone que las autoridades deben facilitar el texto completo de la solicitud escrita a los *exportadores que conozcan y a las autoridades del país exportador*. En cuanto a las otras partes interesadas intervinientes, esa disposición obliga a la autoridad investigadora a *poner la solicitud a disposición* de esas otras partes interesadas. A nuestro juicio, al utilizar verbos diferentes en la primera frase del párrafo 1.3 del artículo 6 ("facilitar" y "poner a disposición"), los redactores tuvieron la intención de imponer diferentes obligaciones a la autoridad investigadora según sea la parte interviniente. La primera obligación exige una acción positiva de la autoridad investigadora, mientras que la segunda sólo prevé una actuación pasiva.

7.171 Además, la Argentina alega que entiende que la expresión "facilitar", en el texto español del párrafo 1.3 del artículo 6, sobre la base del significado aceptado por ese idioma, es el de permitir el

---

[136] Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafos 164 y 165.

[137] Respuesta de la Argentina a la pregunta 37 del Grupo Especial.

[138] *The Concise Oxford Dictionary of Current English* (Clarendon Press, 1995), página 1102.

acceso a alguna cosa o elemento que es de interés de la otra parte.[139] El término "facilitar" se define, entre otras cosas, como "proporcionar o entregar"[140], es decir "dar". Por consiguiente, el término "facilitarán" en el texto español podría entenderse en el sentido de que exige dar el texto completo de la solicitud escrita a los exportadores conocidos y a las autoridades del país exportador. Esto es compatible con nuestra conclusión del significado del término "*provide*" (facilitar) en el texto inglés del *Acuerdo Antidumping*. Esta conclusión se ve corroborada por las palabras elegidas por los redactores en el texto español del párrafo 1.3 del artículo 6. Constatamos que la obligación que se impone a la autoridad investigadora respecto de los exportadores que conoce y las autoridades del país exportador es la de "facilitar" el texto completo de la solicitud. En cambio, en cuanto a las otras partes interesadas intervinientes, el párrafo 1.3 del artículo 6 dispone que "las autoridades (…) lo [el texto completo de la solicitud escrita] pondrán a disposición de las otras partes interesadas intervinientes que lo soliciten". Por consiguiente, el análisis del texto español del párrafo 1.3 del artículo 6 no respalda la posición de la Argentina. Por esta razón, el argumento de la Argentina debe desestimarse.

7.172 Debemos examinar a continuación si la Argentina "facilitó" activamente el texto completo de la solicitud a los exportadores que conocía y a las autoridades brasileñas. El Brasil sostiene que la autoridad investigadora nunca proporcionó a los exportadores brasileños que conocía ni a las autoridades brasileñas el texto completo de la solicitud.[141] La Argentina sostiene que "las autoridades argentinas cumplieron con el requisito de "facilitar" cuando pusieron <u>las actuaciones a disposición de</u> las partes interesadas acreditadas".[142] Mediante esta declaración, la Argentina reconoce que la autoridad investigadora simplemente puso el texto completo de la solicitud escrita a disposición de los exportadores que conocía y de las autoridades brasileñas. No obstante, esto no cumple el requisito de "facilitar" activamente la solicitud escrita en el sentido del párrafo 1.3 del artículo 6. Por último, hemos examinado el expediente de la investigación que se nos hizo llegar.[143] Constatamos que no hay

---

[139] Respuesta de la Argentina a la pregunta 37 del Grupo Especial.

[140] *Diccionario de la Lengua Española* (Espasa Calpe, 1992), página 943.

[141] Primera comunicación escrita del Brasil, párrafo 230. Véanse también las respuestas del Brasil a las preguntas 34, 35 y 36 del Grupo Especial.

[142] Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafo 164. De la misma manera, en el párrafo 165 se señala lo siguiente:

> "Se destaca que Argentina, una vez abierta la investigación <u>puso a disposición de las partes interesadas</u>, entre ellos exportadores, importadores y autoridades del país involucrado, las actuaciones que generaron el procedimiento que se cuestiona. De ese modo, las partes interesadas acreditadas tuvieron oportunidad de tomar vista del expediente y acceder a una copia del mismo en todo momento, no sólo de la solicitud sino de todas las actuaciones que lo integran." (sin subrayar en el original)

[143] En particular, hemos examinado una comunicación de 1° de febrero de 1999, enviada por la DCD a la Misión del Brasil en la Argentina (Prueba documental ARG-III), así como las comunicaciones enviadas por la CNCE y la DCD a los exportadores brasileños Avipal, Frangosul, Nicolini, Sadia y Seara los días 10 y 16 de febrero de 1999, respectivamente (Brasil - Pruebas documentales 8 y 9). Incluso aunque estas comunicaciones hubiesen incluido el texto completo de la solicitud escrita, cosa que no sucedió, se habría constatado que la Argentina infringió el párrafo 1.3 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping* porque, con respecto a *esos cinco exportadores conocidos*, la Argentina no habría facilitado el texto completo de la solicitud tan pronto como se hubiese iniciado la investigación, como exige el párrafo 1.3 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping*. Observamos que las comunicaciones se enviaron más de *15 días* después de la publicación de la iniciación de la investigación en el Boletín Oficial (25 de enero de 1999). Estamos de acuerdo con la siguiente opinión expresada por el Grupo Especial en el asunto *Guatemala - Cemento II*:

nada que indique que las autoridades argentinas facilitaran el texto de la solicitud a los exportadores que conocían ni a las autoridades del Brasil. Por consiguiente, consideramos que la Argentina no facilitó el texto completo de la solicitud a los exportadores brasileños que conocía ni a las autoridades del país exportador.

c) Conclusión

7.173 Al haber determinado que las autoridades argentinas no facilitaron activamente el texto completo de la solicitud escrita a los exportadores brasileños que conocían ni a las autoridades brasileñas, constatamos que la Argentina actuó de manera incompatible con la obligación que le impone el párrafo 1.3 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping*.

10. Utilización de los hechos de que se tenga conocimiento - Reclamaciones 15, 17 y 19

7.174 Estas reclamaciones se refieren a la utilización por parte de la DCD de los "hechos de que se tenga conocimiento" en el sentido del párrafo 8 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping*, y guardan relación con el hecho de que la DCD desestimara determinados datos que presentaron los exportadores.

a) Argumentos de las partes

i) Reclamación 15

7.175 El Brasil cuestiona la determinación de la DCD de que había diferencias en las características físicas de los pollos vendidos en el Brasil y los vendidos en la Argentina, a pesar de que Avipal, Frangosul y Sadia informaran a la DCD, mediante sus respuestas al cuestionario, de que los pollos vendidos a la Argentina eran idénticos a los vendidos en el Brasil. El Brasil sostiene que Catarinense sólo comunicó una diferencia respecto de los pollos broiler, en el sentido de que sus pollos broiler vendidos en la Argentina no incluían cabeza ni patas, mientras que sus pollos broiler vendidos en el Brasil incluían la cabeza pero no las patas. El Brasil afirma que los exportadores presentaron la información pertinente dentro de un plazo prudencial y que la DCD no preguntó a los exportadores acerca de esa información. El Brasil alega que en los cuestionarios no se indicaba que era preciso que la información relativa a la descripción del producto fuera acompañada de documentos que la respaldaran. Además, el Brasil sostiene que la DCD no solicitó en ningún momento de la investigación documentación justificante para verificar la descripción del producto comunicada por esos exportadores.

7.176 La Argentina sostiene que basó sus constataciones en toda la información que era verificable y que se presentó adecuadamente. La Argentina reconoce que los exportadores y las autoridades brasileñas presentaron escritos sobre la justificación del ajuste efectuado por las diferencias en las características físicas. Sin embargo, la Argentina sostiene que no se adjuntó a esos argumentos aval técnico alguno. La Argentina también afirma que de dichos escritos se desprende la pertinencia del citado ajuste, toda vez que no se cuestiona que el mismo debía ser efectuado. La Argentina también reconoce que la DCD recibió escritos relativos a la incidencia del congelado y/o enfriado al momento de la determinación del valor normal del producto en cuestión. Sin embargo, la Argentina alega que esos escritos tampoco estaban apoyados por pruebas.

"habida cuenta de la naturaleza de la obligación establecida en el párrafo 1.3 del artículo 6, el envío de la solicitud con un retraso aunque sólo sea de 8 días con respecto a la iniciación de la investigación no basta para cumplir el requisito de facilitar el texto "tan pronto como se haya iniciado la investigación"". (Informe del Grupo Especial, *Guatemala - Cemento II*, *supra*, nota 48, párrafo 8.104.)

7.177 El Brasil se refiere a la constatación del Grupo Especial en el asunto *Argentina - Baldosas de cerámica*, según la cual las autoridades investigadoras no pueden descartar información y recurrir a los hechos de que tengan conocimiento por el hecho de que una parte no haya proporcionado suficiente documentación justificante de la información solicitada, a no ser que las autoridades investigadoras hayan pedido claramente a la parte que proporcione esa documentación justificante. El Brasil, al examinar las instrucciones generales del cuestionario, no cree que la DCD facilitara suficiente información sobre la documentación justificante precisa que esperaba recibir de los exportadores relativa a la descripción del producto/diferencias del producto. El Brasil también sostiene que el hecho de presentar documentación justificante de toda la información facilitada en las respuestas al cuestionario impondría una carga no razonable a los exportadores y hubiera sido imposible que éstos respondiesen en el plazo de 30 días.

ii) Reclamación 17

7.178 Esta reclamación se refiere al rechazo por la DCD de los datos sobre los precios de exportación notificados por cuatro exportadores. El Brasil sostiene que Avipal, Catarinense, Frangosul y Sadia facilitaron información relativa a los precios de exportación en sus respuestas al cuestionario. El Brasil afirma que las dos últimas empresas facilitaron datos sobre los precios de exportación de transacciones individuales de exportación, con las correspondientes facturas. El Brasil alega que, al obrar de este modo, los cuatro exportadores facilitaron información en toda la medida de sus posibilidades y que nunca se negaron a cooperar con la autoridad investigadora. A pesar de lo indicado *supra*, el Brasil sostiene que la información relativa a los precios de exportación facilitada por esos exportadores fue rechazada y que en su lugar se utilizó información de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación como fuente para determinar sus precios de exportación.

7.179 La Argentina señala que cada vez que la información que le aportaron las partes cumplía con los plazos y formas establecidos por la normativa, ésta fue utilizada. Además, la Argentina sostiene que la DCD tuvo que recurrir a otras fuentes de información en aquellos casos en que no se cumplía algún aspecto de esas prescripciones. Con respecto a Frangosul y Catarinense, la Argentina afirma que la información no se utilizó, sencillamente porque en el caso de la primera, la información aportada fue insuficiente y fuera de los plazos que podrían haber permitido su uso[144], y en el caso de la segunda, porque la información aportada fue insuficiente.[145]

7.180 Según el Brasil, la Argentina "explica, por primera vez, que la información facilitada por Frangosul y Catarinense no se utilizó sencillamente porque en el caso de la primera la información aportada era insuficiente y se había presentado fuera de plazo y en el caso de la segunda porque la información se consideró insuficiente". El Brasil también alega que esta explicación de la Argentina parece estar en contradicción con la propia respuesta de la Argentina según la cual Frangosul presentó documentación justificativa de los precios de exportación comunicados en la investigación.

iii) Reclamación 19

7.181 Esta reclamación se refiere a la decisión de la DCD de no utilizar el valor normal presentado por dos exportadores. El Brasil sostiene que Catarinense y Frangosul facilitaron la información requerida para determinar el valor normal. Sin embargo, esta información no fue utilizada por la DCD. En la medida en que la Argentina alegue que no recibió la información dentro de los plazos establecidos por la autoridad, el Brasil sostiene que el plazo prudencial no coincidirá con los plazos preestablecidos si la autoridad investigadora no ha actuado de forma razonable, objetiva e imparcial. A este respecto, el Brasil sostiene que se impuso a Frangosul una "carga excesiva" al tener que

[144] Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafos 187-200.

[145] *Ibid*., párrafo 203.

presentar datos sobre el dumping correspondientes a los años 1996 a 1999. El Brasil también señala que Frangosul invitó a la autoridad investigadora a verificar la información facilitada en su respuesta. El Brasil afirma que la tardía respuesta al cuestionario por parte de Catarinense se debió al hecho de que se le notificó la existencia de la investigación aproximadamente ocho meses después de su iniciación. El Brasil tampoco está de acuerdo con el hecho de que el valor normal utilizado por la DCD correspondiera al de los pollos refrigerados *con* cabeza y patas. A juicio del Brasil esto era erróneo porque Catarinense y Frangosul habían notificado que habían vendido el producto en el mercado interno *sin* cabeza ni patas.

7.182 La Argentina sostiene que la DCD analizó y consideró toda la información obrante en las actuaciones que se ajustaba a los principios emanados del propio Acuerdo, es decir, aquélla que fue presentada en tiempo y forma y acompañada de los elementos probatorios adecuados. La Argentina alega que, como se indicó en el Informe de Determinación Final del Margen de Dumping, la información aportada por Catarinense se presentó en forma agregada y sin respaldo documental. Además, la Argentina afirma que Catarinense no acreditó personería. En cuanto a Frangosul, la Argentina sostiene que este exportador nunca presentó documentación respaldatoria de ventas de mercado interno y su última presentación fue efectuada fuera de término para permitir su análisis.

b) Evaluación del Grupo Especial

i) Reclamación 15

7.183 Observamos que los hechos relativos a la Reclamación 15 son substancialmente idénticos a los que constituyen el fundamento de nuestra constatación sobre la Reclamación 25. Habida cuenta de que en la Reclamación 25 concluimos que esos hechos infringían el párrafo 4 del artículo 2 del *Acuerdo Antidumping*, no es necesario que nos pronunciemos sobre esos mismos hechos en el contexto de la Reclamación 15.

ii) Reclamación 17

7.184 La cuestión que se nos plantea es si la DCD tenía derecho a descartar los datos sobre los precios de exportación presentados por Avipal, Catarinense, Frangosul y Sadia. Con respecto a Catarinense, constatamos en los párrafos 7.190 a 7.193 *infra*, que la DCD tenía derecho a rechazar los datos sobre el valor normal presentados por ese exportador porque no había cumplido la obligación de acreditar personería. Por la misma razón, constatamos que la DCD también tenía derecho a rechazar los datos sobre los precios de exportación presentados por ese exportador. Por consiguiente, desestimamos la Reclamación 17 del Brasil respecto de Catarinense.

7.185 Con respecto al trato dado por la DCD a los datos sobre los precios de exportación presentados por Avipal, Frangosul y Sadia, observamos en primer lugar que el párrafo 8 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping* regula la utilización de los "hechos de que se tenga conocimiento" por una autoridad investigadora en una investigación antidumping. Ese artículo dispone lo siguiente:

> "En los casos en que una parte interesada niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite dentro de un plazo prudencial o entorpezca significativamente la investigación, podrán formularse determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de los hechos de que se tenga conocimiento. Al aplicar el presente párrafo se observará lo dispuesto en el Anexo II."

7.186 Los párrafos 5 y 7 del Anexo II del *Acuerdo Antidumping* también son pertinentes para nuestro examen de esta reclamación. Estos párrafos disponen lo siguiente:

> "5. Aunque la información que se facilite no sea óptima en todos los aspectos, ese hecho no será justificación para que las autoridades la descarten, siempre que la parte interesada haya procedido en toda la medida de sus posibilidades.
>
> (…)
>
> 7. Si las autoridades tienen que basar sus conclusiones, entre ellas las relativas al valor normal, en información procedente de una fuente secundaria, incluida la información que figure en la solicitud de iniciación de la investigación, deberán actuar con especial prudencia. En tales casos, y siempre que sea posible, deberán comprobar la información a la vista de la información de otras fuentes independientes de que dispongan -tales como listas de precios publicadas, estadísticas oficiales de importación y estadísticas de aduanas- y de la información obtenida de otras partes interesadas durante la investigación. Como quiera que sea, es evidente que si una parte interesada no coopera, y en consecuencia dejan de comunicarse a las autoridades informaciones pertinentes, ello podría conducir a un resultado menos favorable para esa parte que si hubiera cooperado."

7.187 Al examinar el expediente que tenemos ante nosotros, constatamos que Avipal, Frangosul y Sadia facilitaron información sobre los precios de exportación.[146] La Argentina sostiene que estaba justificado que descartase la información que no se presentó cumpliendo con los plazos o las formas establecidos por la normativa.[147] La Argentina también adujo durante esas actuaciones que "[e]s obviamente imposible que sin la documentación respaldatoria susceptible de ser verificada, la autoridad de aplicación considere las alegaciones de las partes".[148] Pedimos a la Argentina que demostrase que la autoridad investigadora fundamentó en estos motivos su rechazo de los datos pertinentes sobre los precios de exportación. La Argentina contestó que la explicación se encontraba en el Informe de 4 de enero de 2000 y en el Informe de Determinación Final del Margen de Dumping, sin señalar ninguna declaración particular al respecto.[149] Por consiguiente, hemos examinado esos documentos, en particular las secciones V.3 (Presentaciones efectuadas por las firmas extranjeras), VII.3 (Análisis de las presentaciones efectuadas por la firmas exportadoras brasileñas con posterioridad a la apertura de la investigación) y VIII.2 (Elementos para la definición del precio f.o.b. de exportación) del Informe de Determinación Final. No pudimos encontrar en ninguna de esas secciones referencia alguna a los motivos mencionados por la Argentina que pudiese justificar la decisión de la DCD de descartar los datos sobre los precios de exportación recibidos de Avipal, Frangosul y Sadia.[150] A la luz de esas circunstancias, consideramos que los argumentos de la

---

[146] Brasil - Prueba documental 15, secciones V.3.1 (Sadia), V.3.2 (Avipal), V.3.5 (Frangosul) y VII.3.2 (Catarinense).

[147] En particular, observamos que la Argentina sostiene que los datos de Frangosul sobre la exportación eran insuficientes y se presentaron fuera de plazo.

[148] Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafo 178. Véase también la Segunda comunicación escrita de la Argentina, párrafos 54-56.

[149] Respuesta de la Argentina a la pregunta 40 del Grupo Especial.

[150] La única razón que pudimos encontrar en el Informe de Determinación Final del Margen de Dumping para desestimar los datos de los exportadores y utilizar en lugar de éstos los datos facilitados por la Dirección de Ganadería, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación es que la DCD consideró apropiado utilizar como valor FOB de exportación el proveniente de la Dirección de Ganadería porque provenía de la fuente más completa y detallada. (Brasil - Prueba documental 15, sección VIII.2.3.) No consideramos que esa justificación o razonamiento ofrecido por la DCD sea suficiente para cumplir los requisitos del párrafo 8 del artículo 6. En particular, ese razonamiento no indica que los exportadores pertinentes entorpecieran

Argentina relativos a los motivos por los que la DCD rechazó los datos sobre los precios de exportación presentados por Avipal, Frangosul y Sadia constituyen una justificación *ex post* que no deberíamos tener en cuenta a los efectos de determinar si las autoridades de la Argentina cumplieron las obligaciones que les impone el párrafo 8 del artículo 6.[151]

7.188 Habida cuenta de lo expuesto, aceptamos la reclamación del Brasil de que la Argentina infringió el párrafo 8 del artículo 6 al rechazar los datos sobre los precios de exportación presentados por Avipal, Frangosul y Sadia.

iii) Reclamación 19

7.189 Esta reclamación se refiere al rechazo por parte de la DCD de los datos sobre el valor normal presentados por Catarinense y Frangosul.

- *Catarinense*

7.190 Del expediente que tenemos ante nosotros se desprende que la DCD se puso en contacto con Catarinense el 15 de septiembre de 1999. La Argentina reconoce que envió a Catarinense una copia del cuestionario original, al que Catarinense respondió el 3 de noviembre de 1999. El Brasil sostiene que esa información sobre el valor normal presentada por Catarinense debería haberse utilizado como base para determinar el valor normal correspondiente a ese exportador. La Argentina aduce que la DCD tenía justificación para descartar los datos presentados por Catarinense porque: a) este exportador no acreditó personería de conformidad con la ley nacional[152], y b) la información sobre los precios internos se presentó en forma agregada y sin respaldo documental.[153]

7.191 Primero examinaremos el argumento de la Argentina según el cual Catarinense no acreditó personería de conformidad con la legislación nacional. La Argentina aduce que, de conformidad con el Régimen de Procedimientos Administrativos, Ley N° 19.549, una empresa debe acreditar personería para comparecer ante la DCD.[154] Observamos que la DCD informó a ese exportador el

---

significativamente la investigación. Tampoco indica que los exportadores pertinentes negaran el acceso a la información necesaria o no la facilitasen dentro de un plazo prudencial.

[151] De la misma manera, observamos que el Grupo Especial en el asunto *Argentina - Baldosas de cerámica*, al examinar una alegación planteada en el marco del párrafo 8 del artículo 6, constató lo siguiente:

> "(…) Con arreglo al párrafo 6 del artículo 17 del Acuerdo Antidumping, tenemos que determinar si la DCD estableció los hechos adecuadamente y si su evaluación de esos hechos fue imparcial y objetiva. En otras palabras, se nos pide que examinemos la evaluación hecha por la DCD en el momento de la determinación tal como figura en un aviso público o en cualquier otro documento de carácter público o confidencial. No creemos que, en tanto que grupo especial encargado de examinar la evaluación de la autoridad investigadora, tengamos que tener en cuenta argumentos y razones que no fueron parte del proceso de evaluación de esa Autoridad y representan en lugar de ello justificaciones *ex post facto* que no se expusieron en el momento de formularse la determinación." (subrayado en el original, no se incluye la nota de pie de página) (Informe del Grupo Especial, *Argentina - Baldosas de cerámica*, *supra*, nota 66, párrafo 6.27.)

[152] Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafo 202.

[153] *Ibid*., párrafo 189.

[154] Argentina - Prueba documental XIII y Brasil - Prueba documental 28, página 2795.

8 de noviembre de 1999 de que tenía que acreditar personería de conformidad con Ley N° 19.549.[155] No existen pruebas en el expediente que indiquen que Catarinense se ocupara de esta cuestión ante la DCD, ni que realizara ningún intento de cumplir la obligación de acreditar personería. Por consiguiente, la cuestión que se nos plantea es si la DCD tenía justificación para descartar los datos presentados por Catarinense basándose en que esta empresa no acreditó personería. No encontramos ninguna disposición en el *Acuerdo Antidumping* que prohíba de manera expresa a una autoridad investigadora imponer requisitos procesales básicos, como la acreditación de personería. Observamos que el párrafo 3 del Anexo II del *Acuerdo Antidumping* dispone que "[a]l formular las determinaciones deberá tenerse en cuenta toda la información (…) presentada adecuadamente de modo que pueda utilizarse en la investigación sin dificultades excesivas (…)". Consideramos que la referencia a los términos "presentada adecuadamente" está destinada a abarcar, entre otras cosas, la información que se presenta conforme a las disposiciones procesales pertinentes de la legislación nacional de los Miembros de la OMC. A nuestro juicio, el párrafo 3 del Anexo II del *Acuerdo Antidumping* puede interpretarse en el sentido de que la información que no sea "presentada adecuadamente" conforme a las disposiciones procesales pertinentes de la legislación nacional de los Miembros de la OMC puede descartarse. En las circunstancias de este caso, consideramos que la información presentada por Catarinense no fue "presentada adecuadamente" en el sentido del párrafo 3 del Anexo II del *Acuerdo Antidumping* porque Catarinense no cumplió el requisito de la Argentina en materia de acreditación de personería. En consecuencia, la DCD tenía derecho a rechazar esa información.

7.192 El Brasil, al citar una constatación del Grupo Especial en el asunto *Guatemala - Cemento II*, aduce que la DCD no actuó de forma razonable, objetiva e imparcial respecto de Catarinense. Estamos en desacuerdo, puesto que la DCD recordó de manera expresa a Catarinense la necesidad de cumplir el requisito de acreditación de personería. El Brasil también menciona los párrafos 5 y 7 del Anexo II del *Acuerdo Antidumping* en apoyo de su reclamación. Sin embargo, no comprendemos cómo puede alegarse que Catarinense ha "procedido en toda la medida de sus posibilidades" (Anexo II, párrafo 5), cuando no respondió de ninguna manera a la carta de la DCD de 8 de noviembre de 1999. Tampoco comprendemos la pertinencia del párrafo 7 del Anexo II puesto que el Brasil no ha explicado de qué manera el ejercicio de una "especial prudencia" por parte de la DCD habría remediado el hecho de que Catarinense no cumpliera el requisito de la Argentina en materia de acreditación de personería.

7.193 Tampoco podemos estar de acuerdo con el Brasil en que los datos sobre el valor normal facilitados por Catarinense eran más exactos que los datos sobre el valor normal facilitados por el solicitante, dadas las características particulares del producto. A nuestro juicio, cuando los datos facilitados por el exportador no pueden utilizarse, la autoridad investigadora tiene derecho, de conformidad con el párrafo 8 del artículo 6 y el Anexo II del *Acuerdo Antidumping*, a utilizar información procedente de otras fuentes, incluido el solicitante. El hecho de que, como aduce el Brasil, la información facilitada por el solicitante sobre el valor normal se refiera a un producto (pollos con cabeza y patas) que no es idéntico al exportado por Catarinense (pollos sin cabeza ni patas) no impide, a nuestro juicio, que la autoridad investigadora utilice la información facilitada por el solicitante, siempre y cuando se realice una comparación equitativa. El Brasil no ha aducido en esta reclamación que la comparación no fuese equitativa. Por esta razón, debemos desestimar el argumento del Brasil.

- *Frangosul*

7.194 Observamos que la DCD contactó por primera vez con Frangosul el 16 de febrero de 1999. Este exportador presentó su respuesta al cuestionario el 27 de abril de 1999, después del plazo dado

[155] Argentina - Prueba documental XIII.

inicialmente por la DCD. Con respecto al valor normal, Frangosul presentó información sobre las ventas realizadas mensualmente en el mercado interno en los años 1996, 1997, 1998 y los tres primeros meses de 1999.[156] El 12 de julio de 1999, la DCD solicitó información justificante sobre las ventas realizadas en el mercado interno. El 19 de agosto de 1999, Frangosul contestó que no era posible enviar copias de todas las facturas. Frangosul se remitió a la lista de facturas que había facilitado en su respuesta al cuestionario. El 12 de octubre de 1999, la DCD solicitó a Frangosul que presentase una lista de facturas que abarcasen todas las transacciones en el mercado interno durante el período objeto de investigación.[157] En esa comunicación, se indicó que la lista de facturas presentada en la respuesta al cuestionario era incompleta. Frangosul no respondió dentro del plazo aplicable.[158] El 18 de noviembre de 1999, la DCD reiteró su solicitud.[159] El 30 de diciembre de 1999, Frangosul presentó la lista solicitada, fuera del segundo plazo establecido en la comunicación de la DCD de 18 de noviembre de 1999.[160]

7.195 El Brasil sostiene que Frangosul no presentó la información "dentro de un plazo prudencial". Para apoyar esta reclamación, el Brasil cita el siguiente texto del informe del Grupo Especial en el asunto *Estados Unidos - Acero laminado en caliente*:

> "El *Acuerdo Antidumping* dispone que se puede utilizar información sobre los hechos de que se tenga conocimiento si no se facilita dentro de un plazo prudencial la información necesaria. Un "plazo prudencial" no corresponderá en todos los casos a unos plazos preestablecidos que se hayan fijado en reglamentaciones generales. Reconocemos que, para el buen funcionamiento de la administración, las autoridades investigadoras establecen, y de hecho tienen que establecer, tales plazos. Sin embargo, el rígido respeto de tales plazos no es suficiente en todos los casos para llegar a la conclusión de que la información no se presentó dentro de un plazo prudencial y de que, en consecuencia, se puede utilizar la información sobre los hechos de que se tenga conocimiento."[161]

7.196 A la luz de este informe, el Brasil sostiene que "el párrafo 8 del artículo 6 sugiere un grado de flexibilidad por parte de las autoridades, lo que supone la consideración de **todas** las circunstancias de un caso determinado". (Subrayado y negritas en el original.)[162] Estamos de acuerdo con el Brasil.

---

[156] No hay nada que indique que, en ese momento, Frangosul informara a la DCD de que el elevado número de facturas le impidiera presentar información más detallada y documentación justificante.

[157] Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafo 197, y respuesta del Brasil a la pregunta 41 del Grupo Especial.

[158] Señalamos el argumento de la Argentina según el cual, si no se especificó un plazo concreto en la comunicación enviada a Frangosul, se aplica el plazo general previsto en la Ley N° 19.549. Por consiguiente, el plazo para la presentación de la información solicitada en esa comunicación era de 10 días.

[159] Véase la nota 157.

[160] Argentina - Prueba documental XXX.

[161] Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Medidas antidumping sobre determinados productos de acero laminado en caliente procedentes del Japón* ("*Estados Unidos - Acero laminado en caliente*"), WT/DS184/R, adoptado el 23 de agosto de 2001 modificado por el informe del Órgano de Apelación, WT/DS184/AB/R, párrafo 7.54. El Órgano de Apelación confirmó las constataciones del Grupo Especial respecto del párrafo 8 del artículo 6 y el Anexo II del *Acuerdo Antidumping*. (Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Acero laminado en caliente*, WT/DS184/AB/R, adoptado el 23 de agosto de 2001, párrafo 240.)

[162] Respuesta del Brasil a la pregunta 41 del Grupo Especial.

Sin embargo, al examinar los hechos en este asunto estimamos que Frangosul no presentó "la información necesaria (…) dentro de un plazo prudencial".[163] Observamos en primer lugar que nada en el expediente indica que Frangosul informara a la DCD de las dificultades que tenía para presentar pruebas documentales relativas a todas las transacciones en el mercado interno hasta aproximadamente siete meses después de la iniciación de la investigación (19 de agosto de 1999). En cambio, otros exportadores, es decir, Avipal, Nicolini, Sadia y Seara, informaron a la autoridad investigadora de esas dificultades mucho antes en el curso de la investigación.[164] Consideramos que Frangosul podía y debería haber tenido conocimiento de ese problema mucho antes del 19 de agosto de 1999, y, por lo tanto, debería haber informado a la DCD mucho antes de esa fecha. El Brasil alega que un "plazo prudencial" para la presentación de datos a una autoridad investigadora no corresponderá en todos los casos a unos plazos preestablecidos que se hayan fijado en reglamentaciones generales. Estamos de acuerdo con esto. Sin embargo, recordamos que el *Acuerdo Antidumping* impone en el párrafo 10 del artículo 5 un plazo para la conclusión de una investigación. Consideramos que, si una investigación debe concluirse de conformidad con el marco temporal establecido en el párrafo 10 del artículo 5, los plazos son en efecto necesarios, como reconoció el Grupo Especial en el asunto *Estados Unidos - Acero laminado en caliente*. En el asunto que nos ocupa, observamos que el 12 de octubre de 1999 se solicitó una lista completa de todas las transacciones de venta en el mercado interno. El 18 de noviembre de 1999, al no recibir respuesta dentro del plazo fijado, la DCD reiteró esa solicitud. Reiteramos que no se facilitó la respuesta dentro del segundo plazo establecido por la DCD. Como reconoce el Brasil, la respuesta a la solicitud de 12 de octubre se presentó finalmente a la DCD el 30 de diciembre de 1999[165], es decir, más de dos meses después de que se hubiera solicitado la lista. El Brasil sostiene ante nosotros que "Frangosul tenía que volver a empezar y a reunir información específica correspondiente al período transcurrido entre enero de 1998 y enero de 1999, lo que en algunos casos significaba realizar una búsqueda manual de numerosas facturas (más de 320.000) para encontrar la información solicitada por la autoridad". En la medida en que el argumento del Brasil es que, a raíz de la solicitud de la DCD de 12 de octubre de 1999, Frangosul había informado a la DCD de que no podía presentar los datos solicitados por esa autoridad debido a la existencia de un elevado número de transacciones de venta en el mercado interno, consideramos que el argumento del Brasil se debe desestimar porque no hemos encontrado en el expediente que tenemos ante nosotros nada que indique que Frangosul formulara ese argumento en respuesta a la solicitud de la DCD de 12 de octubre. Sin embargo, observamos que un argumento similar al planteado por el Brasil figura en una comunicación de Frangosul enviada en respuesta a una solicitud de la DCD de 12 de julio de 1999 en la que la autoridad investigadora solicitaba a Frangosul que presentase "la documentación justificante de todas las transacciones de venta en el mercado interno…".[166] (sin subrayar en el original) Teniendo esto en cuenta, consideramos que la declaración de Frangosul a la que se refiere el Brasil es otra solicitud (anterior) de la DCD relativa a la presentación de *documentación justificante*, y no la solicitud de la DCD del 12 de octubre relativa a una lista de transacciones de venta en el mercado interno. Esta conclusión se ve reforzada por el hecho de que la declaración a la que se refiere el Brasil figura en un documento anterior a la solicitud de la DCD de 12 de octubre de 1999. Por consiguiente, consideramos que el argumento esgrimido por el Brasil no justifica el retraso de Frangosul en la presentación de la lista de transacciones de venta en el mercado interno. Habida cuenta de que el Brasil no ha aducido ningún

---

[163] Observamos que el Brasil no ha aducido ante este Grupo Especial que la información solicitada por la DCD no fuera "necesaria" en el sentido del párrafo 8 del artículo 6. Consideramos que lo era, puesto que la determinación del valor normal dependía de ella.

[164] Brasil - Prueba documental 28, páginas 2773 (Sadia), 2777 (Avipal), 2781 (Nicolini) y 2783 (Seara).

[165] Véase la nota 162.

[166] *Ibid*.

otro argumento para justificar el retraso en la presentación de esa información, y teniendo en cuenta todas las circunstancias de este asunto particular, consideramos que Frangosul no presentó la información necesaria dentro de un "plazo prudencial", como establece el párrafo 8 del artículo 6. Por las mismas razones, constatamos que la información no se facilitó "a tiempo" en el sentido del párrafo 3 del Anexo II.

7.197 Al igual que en el caso de Catarinense, el Brasil se remite a los párrafos 5 y 7 del Anexo II para apoyar su reclamación. Teniendo en cuenta los hechos descritos en el párrafo 7.198 *supra*, en particular el retraso por parte de Frangosul en responder a la solicitud de la DCD de 12 de octubre de 1999, no podemos considerar que Frangosul haya procedido en toda la medida de sus posibilidades en el sentido del párrafo 5 del Anexo II. Tampoco entendemos cómo el requisito de la "especial prudencia" previsto en el párrafo 7 del Anexo II, habría determinado que la DCD aceptase los datos de Frangosul sobre el valor normal debido a las circunstancias indicadas *supra*. El Brasil alega que los datos sobre el valor normal facilitados por Frangosul eran más exactos que los datos sobre el valor normal facilitados por el solicitante dadas las características particulares del producto. Se ha examinado un argumento idéntico en el párrafo 7.195 *supra* relativo a Catarinense. Por las razones establecidas en ese párrafo, desestimamos también este argumento.

c) Conclusión

7.198 Por las razones antes mencionadas, confirmamos la Reclamación 17 del Brasil de que la Argentina infringió el párrafo 8 del artículo 6 al rechazar los datos sobre los precios de exportación presentados por Avipal, Frangosul y Sadia. Desestimamos la Reclamación 19 del Brasil según la cual la Argentina infringió el párrafo 8 del artículo 6 y los párrafos 3, 5 y 7 del Anexo II del *Acuerdo Antidumping* al no utilizar los datos sobre el valor normal comunicados por Catarinense y Frangosul. No hemos formulado ninguna constatación relativas a la Reclamación 15 del Brasil.

11. Omisión de dar aviso público de la conclusión de una investigación - Reclamaciones 16, 18 y 20

7.199 Estas reclamaciones plantean cuestiones previstas en el párrafo 2.2 del artículo 12 del *Acuerdo Antidumping*. Se refieren a las supuestas omisiones por parte de la Argentina de dar aviso público de la conclusión de la investigación.

a) Argumentos de las partes

i) Reclamación 16

7.200 Según el Brasil, el párrafo 2.2 del artículo 12 dispone que en los avisos públicos de conclusión de una investigación figurará, o se hará constar de otro modo mediante un informe separado, toda la información pertinente sobre las cuestiones de hecho y de derecho y las razones que hayan llevado a la imposición de medidas definitivas. A juicio del Brasil, los márgenes de dumping establecidos, así como una explicación completa de las razones que justifican la metodología utilizada en la determinación y comparación del precio de exportación y el valor normal se consideran información pertinente. El Brasil sostiene que, a pesar de esta obligación, la DCD no dio ninguna explicación de por qué realizó un ajuste en el valor normal por las diferencias en las características físicas de los pollos vendidos en el Brasil y los vendidos en la Argentina, incluso aunque la descripción del producto facilitada por varios exportadores indicó que esas diferencias no existían.

7.201 La Argentina aduce que en el Informe de 4 de enero de 2000 y el Informe de Determinación Final del Margen de Dumping, "a lo largo de su contenido, desarrollado en diferentes tópicos", se particularizó en cada una de las presentaciones de los exportadores, para arribar a la conclusión

fundamentada de cuáles fueron los motivos por los cuales la autoridad investigadora descartó aquéllas que carecieron de respaldo documental o fueron presentadas fuera de término.

ii) Reclamación 18

7.202 El Brasil sostiene que, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 2.2 del artículo 12, en el aviso público de conclusión de la investigación no se dio ninguna explicación de las razones por las que la autoridad investigadora no estableció el precio de exportación sobre la base de la información facilitada por Sadia, Avipal, Frangosul y Catarinense.

7.203 Al igual que en lo que respecta a la Reclamación 16, la Argentina aduce que en el Informe de 4 de enero de 2000 y el Informe de Determinación Final del Margen de Dumping, "a lo largo de su contenido, desarrollado en diferentes tópicos", se particularizó en cada una de las presentaciones de los exportadores, para arribar a la conclusión fundamentada de cuáles fueron los motivos por los cuales la autoridad investigadora descartó aquéllas que carecieron de respaldo documental o fueron presentadas fuera de término.

iii) Reclamación 20

7.204 El Brasil alega que en el aviso público de conclusión de la investigación no se explicó de manera adecuada por qué la DCD no utilizó el valor normal presentado por Frangosul y Catarinense.

7.205 De la misma manera que con respecto a la Reclamación 16, la Argentina aduce que en el Informe de 4 de enero de 2000 y el Informe de Determinación Final del Margen de Dumping, "a lo largo de su contenido, desarrollado en diferentes tópicos", se particularizó en cada una de las presentaciones de los exportadores, para arribar a la conclusión fundamentada de cuáles fueron los motivos por los cuales la autoridad investigadora descartó aquéllas que carecieron de respaldo documental o fueron presentadas fuera de término.

b) Evaluación del Grupo Especial

7.206 El Grupo Especial en el asunto *Guatemala - Cemento II*, al examinar alegaciones similares, expresó lo siguiente:

> "la cuestión del cumplimiento por Guatemala de las obligaciones de transparencia derivadas de su decisión de imponer medidas antidumping definitivas a las importaciones de cemento procedentes de México sólo tendría trascendencia si la decisión de imponer la medida en sí misma hubiera sido compatible con el *Acuerdo Antidumping*. Así pues, tras haber constatado que Guatemala infringió las disposiciones sustantivas del *Acuerdo Antidumping* en su decisión de imponer una medida antidumping en el presente caso, consideramos que no es necesario que resolvamos acerca de si Guatemala cumplió las obligaciones de transparencia que establecen los párrafos 2 y 2.2 del artículo 12 en lo que respecta a la imposición de una medida que ya se ha constatado que no es compatible con las obligaciones que corresponden a Guatemala en la OMC".[167]

7.207 Estamos de acuerdo con ese Grupo Especial. A nuestro juicio, no es necesario determinar si un Miembro cumplió los requisitos de transparencia del párrafo 2.2 del artículo 12 al imponer una medida antidumping si ya se ha constatado que esa medida infringe varias disposiciones sustantivas

[167] Informe del Grupo Especial, *Guatemala - Cemento II*, *supra*, nota **Error! Unknown switch argument.**, párrafo 8.291.

del *Acuerdo Antidumping*. Habida cuenta de que ya hemos constatado que la medida antidumping de la Argentina es incompatible con varias disposiciones sustantivas del *Acuerdo Antidumping*, no es necesario que determinemos si la Argentina cumplió o no los requisitos de transparencia del párrafo 2.2 del artículo 12 al imponer esa medida.

c) Conclusión

7.208 Por las razones antes mencionadas, no consideramos necesario formular ninguna constatación relativa a las Reclamaciones 16, 18 y 20.

12. Cálculo de un margen de dumping individual - Reclamación 22

a) Argumentos de las partes

7.209 El Brasil sostiene que la autoridad investigadora no calculó un margen de dumping individual para Catarinense y Frangosul a pesar de que estas empresas presentaron datos sobre el valor normal y el precio de exportación dentro de un plazo razonable. El Brasil afirma que la autoridad investigadora no ofreció ninguna explicación, ni en la determinación definitiva ni en ningún otro documento del expediente de la investigación, de por qué, en este asunto, no determinó un margen de dumping individual para Catarinense y Frangosul. A juicio del Brasil, al no determinar un margen de dumping para cada uno de esos dos exportadores, y al aplicar en su lugar un tipo de dumping para "todos los demás", la Argentina actuó de manera incompatible con la norma general establecida en el párrafo 10 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping*.

7.210 La Argentina no está de acuerdo con la exposición de los hechos que hace el Brasil. Con respecto a Catarinense, la Argentina afirma que, como se señaló en el Informe de Determinación Final del Margen de Dumping, la información aportada por el exportador se presentó en forma agregada y sin respaldo documental. Según la Argentina, Catarinense no facilitó información sobre las ventas realizadas en el mercado brasileño. La Argentina sostiene que la única documentación respaldatoria que presentó Catarinense fue una lista de facturas de exportaciones a la Argentina. En el caso de Frangosul, la Argentina afirma que a través de diversas notificaciones se solicitó al exportador la remisión de los listados de notas fiscales (facturas) a fin de realizar un muestreo estadístico. La Argentina afirma que el 18 de noviembre de 1999 se reiteró la presentación de dicha información. Según la Argentina, en fecha posterior a la establecida se procedió a incorporar dos disquetes que contenían datos respecto de las ventas en el mercado interno, sin respaldo. La Argentina señala que, en el Informe de Determinación Final del Margen de Dumping, la DCD señaló lo siguiente:

> "[F]inalmente se destaca en el caso de la firma Catarinense Limitada, Frangosul, Comave, Da Granja Agroi, Sadia Concordia, Minuano de Alimentos, Acaua Industria, Felipe Avícola, Agroi, Veneto, Chapeco y Litoral Aliment, la Autoridad de Aplicación no ha contado con información adicional o con respaldo documental suficiente que la habilite a proceder a la determinación final individual del margen de dumping con la misma."[168]

7.211 El Brasil señala que la DCD tampoco tuvo en cuenta los datos sobre los precios de exportación presentados por los exportadores Sadia y Avipal. De todos modos calculó los márgenes de dumping individuales correspondientes a esos dos exportadores. El Brasil no entiende el motivo por el cual la DCD obró de manera diferente con respecto a la información facilitada por Frangosul y Catarinense. Además, el Brasil afirma que el hecho de que un exportador no haya facilitado la información pertinente y apropiada para establecer el valor normal y el precio de exportación no

[168] Respuesta de la Argentina a la pregunta 44 del Grupo Especial y Brasil - Prueba documental 15.

exime a la autoridad de la obligación que surge del párrafo 10 del artículo 6 de calcular un margen de dumping individual que corresponda a cada exportador.[169]

b) Evaluación del Grupo Especial

7.212 La cuestión que se nos plantea es si, a la luz de los hechos de la presente diferencia, el párrafo 10 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping* obligaba a la DCD a determinar márgenes de dumping separados para los exportadores Catarinense y Frangosul.

7.213 El párrafo 10 del artículo 6 dispone en la parte pertinente lo siguiente:

> "Por regla general, las autoridades determinarán el margen de dumping que corresponda a cada exportador o productor interesado del producto sujeto a investigación de que se tenga conocimiento." (sin subrayar en el original)

7.214 Coincidimos con la opinión expresada por el Grupo Especial en el asunto *Argentina - Baldosas de cerámica*, según la cual la primera frase del párrafo 10 del artículo 6 impone a la autoridad investigadora la obligación general de calcular el margen de dumping que corresponda a cada exportador o productor interesado del producto sujeto a investigación de que se tenga conocimiento.[170]

7.215 La Argentina alega que, para que sea aplicable el requisito del párrafo 10 del artículo 6, el exportador o productor interesado debería presentar la documentación necesaria para la determinación individual del margen de dumping.[171] No vemos que exista esa obligación en el texto del párrafo 10 del artículo 6. A nuestro juicio, el párrafo 10 del artículo 6 tiene un carácter meramente procesal, en el sentido de que impone al organismo investigador la obligación procesal de determinar el margen de dumping que corresponda a cada exportador o productor interesado del producto sujeto a investigación de que se tenga conocimiento. El párrafo 10 del artículo 6 *no* se refiere a cuestiones sustantivas relativas a la determinación de márgenes individuales, como la disponibilidad de los datos pertinentes. Esas cuestiones se abordan en otras disposiciones, como el artículo 2 y el párrafo 8 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping*. A este respecto, observamos que el Grupo Especial, que examinó el asunto *Argentina - Baldosas de cerámica* constató lo siguiente:

> "las disposiciones del artículo 2 sobre la determinación de la existencia de dumping y las disposiciones del párrafo 8 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping* sobre los hechos de que se tenga conocimiento tienen por finalidad permitir que la autoridad investigadora complete los datos relativos a un exportador dado a fin de determinar un margen de dumping en el caso de que la información presentada no sea fiable o de que sencillamente no se haya presentado la información necesaria. Precisamente el artículo 2 y el párrafo 8 del artículo 6, entre otras disposiciones, son los que permiten determinar un margen de dumping individual para cada exportador sobre la base de los hechos".[172]

7.216 Estamos de acuerdo con esto. El hecho de que una autoridad investigadora no reciba ninguna información de un exportador, o que sólo reciba una información parcial, o información que no sea

[169] Segunda declaración oral del Brasil, párrafo 59 y respuesta del Brasil a la pregunta 90 del Grupo Especial.

[170] Informe del Grupo Especial, *Argentina - Baldosas de cerámica*, *supra*, nota 66, párrafo 6.89.

[171] Respuesta de la Argentina a la pregunta 97 del Grupo Especial.

[172] Informe del Grupo Especial, *Argentina - Baldosas de cerámica*, *supra*, nota 66, nota 96.

útil o no sea fiable, no debe impedir el cálculo de un margen de dumping individual para ese exportador, puesto que las disposiciones sustantivas en el *Acuerdo Antidumping* mencionadas en el párrafo 7.217 *supra* permiten expresamente que la autoridad investigadora complete los datos respecto de un exportador concreto para determinar el margen de dumping en caso de que la información facilitada no sea fiable o cuando simplemente no se facilite la información necesaria. Por consiguiente, desestimamos el argumento de la Argentina según el cual "(…) la determinación individual del margen de dumping por exportador requiere como condici[ón] que el exportador (…) presente la documentación necesaria para posibilitar dicha determinación".[173]

c) Conclusión

7.217 A la luz de lo expuesto *supra*, concluimos que la Argentina infringió el párrafo 10 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping* al no determinar un margen de dumping individual para Catarinense y Frangosul.

13. Hechos esenciales - Reclamación 21

a) Argumentos de las partes/de los terceros

7.218 El Brasil alega que la Argentina infringió el párrafo 9 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping* al no informar a todas las partes interesadas de los hechos esenciales considerados que sirvieron de base para la decisión de que se debería imponer un derecho antidumping definitivo. En particular, el Brasil aduce que la autoridad investigadora no informó a las partes interesadas de que, a los efectos de determinar el valor normal y el precio de exportación, no se utilizarían determinados datos sobre los precios de venta en el mercado interno y en el mercado de exportación. El Brasil también aduce que la autoridad investigadora no informó a las partes interesadas de las razones por las que no se utilizó la información.

7.219 La Argentina sostiene que, mediante el informe de la DCD de 4 de enero de 2000, la autoridad investigadora informó a las partes de todos los hechos esenciales sobre los cuales basaría su decisión final.

7.220 Las Comunidades Europeas, en calidad de tercero, no se pronuncian sobre si, a la luz de los hechos del presente asunto, la medida es compatible o no con el párrafo 9 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping*. Las Comunidades Europeas alegan que el párrafo 9 del artículo 6 supone una acción positiva por parte de la autoridad investigadora, y obliga a la autoridad a facilitar activamente los hechos esenciales que sirvan de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas. Las Comunidades Europeas, refiriéndose al informe del Grupo Especial en el asunto *Guatemala - Cemento II*, sostienen que el mero acceso al expediente no basta, a no ser que el expediente contenga un documento informativo elaborado específicamente por las autoridades en el que se identifiquen claramente los "hechos esenciales".

b) Evaluación del Grupo Especial

7.221 En esta reclamación se plantea la cuestión de si varios supuestos "hechos esenciales" identificados por el Brasil deberían haber sido facilitados a las partes interesadas de conformidad con el párrafo 9 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping*.

7.222 El párrafo 9 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping* establece lo siguiente:

[173] Véase la nota 171 *supra*.

> "Antes de formular una determinación definitiva, las autoridades informarán a todas las partes interesadas de los hechos esenciales considerados que sirvan de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas. Esa información deberá facilitarse a las partes con tiempo suficiente para que puedan defender sus intereses."

7.223 Por consiguiente, la primera frase del párrafo 9 del artículo 6 obliga a la autoridad investigadora a informar a las partes interesadas de los hechos esenciales que sirvan de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas. Destacamos que la obligación del párrafo 9 del artículo 6 se aplica sólo respecto de 1) los "hechos esenciales" que 2) sirvan de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas. Consideramos que los hechos que no sirvan de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas no pueden considerarse "hechos esenciales" en el sentido del párrafo 9 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping*.[174]

7.224 El Brasil alega que la Argentina infringió el párrafo 9 del artículo 6 al no informar a las partes interesadas del "hecho esencial" de que determinados datos sobre el valor normal y el precio de exportación notificados por los exportadores no se iban a utilizar en la determinación definitiva. Sin embargo, a nuestro juicio, el hecho de que determinados datos sobre el valor normal y el precio de exportación no se van a tener en cuenta para formular una determinación definitiva no es un hecho que sirva de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas. Si bien aceptamos que los datos sobre el valor normal y el precio de exportación utilizados finalmente en la determinación definitiva son hechos esenciales que sirven de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas, no consideramos que el hecho de que determinados datos sobre el valor normal y el precio de exportación no se van a utilizar sea un hecho esencial. A este respecto, el hecho de que no se habría informado a las partes interesadas de que determinados datos sobre el valor normal y el precio de exportación no se iban a utilizar en la determinación definitiva, quizás, debería haber sido abordado por el Brasil en el contexto del párrafo 8 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping*.

7.225 El Brasil alega también que la Argentina infringió el párrafo 9 del artículo 6 al no informar a las partes interesadas de las razones por las que la autoridad investigadora no utilizó determinados datos sobre los precios de venta en el mercado interno y de exportación comunicados por los exportadores. Sin embargo, a nuestro juicio, el hecho de no informar a una parte interesada de una razón no equivale a no informar a una parte interesada de un hecho esencial. El término "*fact*" (hecho) se define, entre otras cosas, como "*a thing that is known to have occurred, to exist or to be true*" (una cosa que se sabe que ha sucedido, que existe o que es verdad) mientras que "*reason*" (razón) se define como "*motive, cause or justification*"[175] (un motivo, causa o justificación). No creemos que el sentido corriente del término "*fact*" (hecho) apoye una conclusión según la cual el párrafo 9 del artículo 6, cuando utiliza el término "*fact*" (hecho), se refiera no solamente a "*facts*" (hechos) en el sentido de "*things which are known to have occurred, to exist or to be true*" (cosas que se sabe que han sucedido, que existen o que son verdad), sino también a "*motives, causes or justifications*" (motivos, causas o justificaciones).

7.226 El Brasil afirmó, en su respuesta a la pregunta 95 del Grupo Especial, lo siguiente:

---

[174] Al examinar esta cuestión, tuvimos en cuenta la siguiente constatación del Grupo Especial en el asunto *Guatemala - Cemento II*, con la que coincidimos:

> "Una parte interesada no sabrá si un hecho particular es "importante" o no, a menos que la autoridad investigadora lo haya identificado expresamente como uno de los "hechos esenciales" que sirven de base para la decisión de la autoridad de imponer o no medidas definitivas." (Informe del Grupo Especial, *Guatemala - Cemento II*, *supra*, nota **Error! Unknown switch argument.**, párrafo 8.229.)

[175] *The Concise Oxford Dictionary of Current English* (Clarendon Press, 1995), página 482.

> "Es importante observar que el término "hechos" aparece también en el párrafo 6 i) del artículo 17 del Acuerdo. De conformidad con el párrafo 6 i) del artículo 17, "al evaluar los **elementos de hecho** del asunto, determinará si las autoridades han establecido adecuadamente los **hechos** y si han realizado una evaluación imparcial y objetiva de ellos (…)". En el marco de dicho artículo, los "hechos" no son meramente los datos establecidos y evaluados por la autoridad sino también el razonamiento que respalda una conclusión determinada al establecer un hecho.
>
> En consecuencia, entendemos que en el párrafo 9 del artículo 6 la expresión "hechos esenciales" abarca los datos recopilados y la justificación razonada de la conclusión a la cual llegó una autoridad al establecer los hechos. Dicha conclusión se relaciona con el establecimiento de los hechos por parte de la autoridad. Por ejemplo, no basta que una autoridad declare simplemente que ha descartado el valor normal facilitado por un exportador determinado basándose en el párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo. La autoridad debe informar, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 8 del artículo 6, las razones por las que descartó una información determinada." (subrayado y negritas en el original)

7.227 No consideramos que esta respuesta respalde la reclamación del Brasil. En primer lugar, el párrafo 6 i) del artículo 17 del *Acuerdo Antidumping* distingue entre 1) el establecimiento de los hechos y 2) la evaluación de los hechos. A nuestro juicio, una razón es parte de la evaluación de un hecho, y no el hecho en sí mismo. En segundo lugar, estamos de acuerdo con el Brasil en que una autoridad investigadora debe informar a las partes interesadas por qué no tiene en cuenta determinada información. Sin embargo, como señala el Brasil en las dos últimas frases del texto citado *supra*, esa obligación figura en el párrafo 8 del artículo 6 (a través del párrafo 6 del Anexo II)[176], y no en el párrafo 9 del artículo 6.

7.228 El Brasil también fundamenta su reclamación en el informe del Grupo Especial en el asunto *Argentina - Baldosas de cerámica*.[177] Consideramos que nuestra conclusión es totalmente compatible con la constatación del Grupo Especial en el asunto *Argentina - Baldosas de cerámica*. A nuestro juicio, ese Grupo Especial concluyó que la información fáctica -y no el razonamiento- constituye los "hechos esenciales" que sirven de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas. En particular, ese Grupo Especial constató que "la información procedente de los peticionarios y de fuentes secundarias, más que la información presentada por los exportadores, constituyó (en lo que se refiere a la existencia de dumping) los hechos esenciales que sirvieron de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas".[178] Esto demuestra claramente que ese Grupo Especial definió los "hechos esenciales" refiriéndose a la información fáctica y no al razonamiento.

7.229 Recordamos que el alcance de la obligación establecida en el párrafo 9 del artículo 6 se limita a 1) los "hechos esenciales" que 2) sirvan de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas.

---

[176] El párrafo 6 del Anexo II dispone lo siguiente:

> "Si no se aceptan pruebas o informaciones, la parte que las haya facilitado deberá ser informada inmediatamente de las razones que hayan inducido a ello y deberá tener oportunidad de presentar nuevas explicaciones dentro de un plazo prudencial, teniendo debidamente en cuenta los plazos fijados para la investigación. Si las autoridades consideran que las explicaciones no son satisfactorias, en cualesquiera determinaciones que se publiquen se expondrán las razones por las que se hayan rechazado las pruebas o las informaciones."

[177] Primera comunicación escrita del Brasil, párrafos 346-348.

[178] Informe del Grupo Especial, *Argentina - Baldosas de cerámica*, *supra*, nota 66, párrafo 6.127.

Habida cuenta de que algunos de los elementos identificados por el Brasil no son "hechos esenciales", y que el resto son hechos que no "sirv[e]n de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas", desestimamos la reclamación del Brasil de que la Argentina no informó a las partes interesadas de "los hechos esenciales considerados que sirvan de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas".

c) Conclusión

7.230 A la luz de lo expuesto, desestimamos la reclamación del Brasil de que la Argentina ha infringido el párrafo 9 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping*.

D. REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y DETERMINACIÓN POSITIVA DEFINITIVA

1. No introducción de un ajuste por concepto de flete – Reclamación 23

a) Argumentos de las partes

7.231 La Reclamación 23 del Brasil se refiere a la no introducción por la DCD de ajustes por concepto de flete en el valor normal de Sadia y de Avipal. El Brasil alega que la Argentina infringió lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 2 del *Acuerdo Antidumping* porque la DCD no introdujo en el valor normal de Sadia y Avipal ajustes por concepto de costos de flete comunicados por esos exportadores. El Brasil afirma que Sadia reclamó el ajuste por concepto de flete en el Anexo VIII, sección C de la respuesta que dio al cuestionario el 20 de abril de 1999. El Brasil afirma que Avipal reclamó un ajuste por concepto de flete en su respuesta de 21 de diciembre de 1999 al cuestionario complementario.

7.232 La Argentina afirma que la DCD no introdujo el ajuste por concepto de flete solicitado por Sadia porque ese ajuste no estaba suficientemente probado. Concretamente, los costos de flete no estaban estipulados en las muestras de facturas presentadas por el exportador ni estaban documentadas adecuadamente de otro modo. En cambio, Sadia se limitó a presentar una cifra que representaba el promedio de costos de flete durante un período prolongado, y no los costos de flete transacción por transacción. A este respecto, la Argentina dio la siguiente respuesta a la pregunta 81 formulada por el Grupo Especial:

> "La Argentina reafirma lo dicho en los párrafos 210 y 211 de su Primera presentación escrita. En ese sentido, se indica que SADIA contestó en el cuestionario el ítem referido a flete interno, pero en ningún momento presentó documentación respaldatoria de este ítem. Tampoco surge de las facturas presentadas el porcentaje y/o monto que correspondería a este ajuste.
>
> En otras palabras, si bien en el anexo X SADIA informó un valor correspondiente a $EE.UU./t a descontar en concepto de flete y lo mismo se hizo en el anexo VIII -ventas al mercado interno- cabe señalar que esos valores fueron presentados en forma anualizada, sin ningún tipo de documentación respaldatoria que permitiera a la Autoridad verificar que los valores allí consignados se correspondían con la realidad a fin de que la Autoridad procediera a efectuar tal ajuste.
>
> En este sentido, se acompaña nota fiscal de SADIA de la cual surge claramente que en el casillero correspondiente al valor del flete no aparece monto alguno. Y en el casillero que dice "frete por conta" aparece indicado "1" que se corresponde con "emitente".

> La documentación respaldatoria a la que hacemos referencia en este caso hubiera sido, por ejemplo, un contrato de SADIA con una empresa transportista u otra documentación de la empresa de la que surgiera fehacientemente el importe del flete a descontar. En este sentido insistimos en que la única documentación fueron notas fiscales en las cuales no se evidenciaba el monto indicativo del pretendido ajuste.
>
> (...)"

7.233 La Argentina afirma que la solicitud hecha por Avipal de un ajuste por concepto de flete se hizo en una etapa demasiado avanzada del procedimiento, no se acompañó de documentación respaldatoria y no se presentó con la correspondiente traducción al español.

b) Evaluación del Grupo Especial

7.234 La reclamación del Brasil se refiere a la no introducción por la DCD de ajustes por concepto de flete en el valor normal de Sadia y en el de Avipal. La reclamación del Brasil se basa en el párrafo 4 del artículo 2 del *Acuerdo Antidumping*, cuya parte pertinente dispone lo siguiente:

> "Se realizará una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal. Esta comparación se hará en el mismo nivel comercial, normalmente el nivel "ex fábrica", y sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible. Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias particulares, las diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios, entre otras las diferencias en las condiciones de venta, las de tributación, las diferencias en los niveles comerciales, en las cantidades y en las características físicas, y cualesquiera otras diferencias de las que también se demuestre que influyen en la comparabilidad de los precios." (no se reproduce la nota de pie de página)

7.235 Como señaló el Grupo Especial que examinó el asunto *Argentina - Baldosas de cerámica*, "el párrafo 4 del artículo 2 obliga a las autoridades investigadoras a tener debidamente en cuenta, en cada caso, según sus circunstancias particulares, las diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios ...".[179] La Argentina no ha aducido que no habría sido adecuado en principio introducir el ajuste por concepto de flete. Esto es completamente razonable, habida cuenta de que nos parece que en circunstancias normales es obviamente incompatible con el párrafo 4 del artículo 2 que una autoridad investigadora compare precios de exportación f.o.b. con precios internos de la mercancía "entregada", porque una comparación de esa índole no se haría en el mismo nivel comercial. Ahora examinaremos las razones por las que, según la Argentina, la DCD tenía derecho a no introducir el ajuste por concepto de flete.

7.236 Por lo que se refiere a Sadia, la Argentina afirma que tenía derecho a no hacer un ajuste por concepto de flete porque Sadia comunicó sus costos de flete en forma anualizada, sin documentación respaldatoria. No vemos nada en el cuestionario de la DCD que excluya formas específicas de comunicar información, incluida la "anualización". La Argentina tampoco ha señalado nada en el cuestionario que excluya esa forma de presentar la información. Habida cuenta de que el cuestionario no excluyó la comunicación de información "anualizada" y de que no hay nada en el expediente que explique por qué la comunicación de información "anualizada" podría considerarse no razonable, el hecho de que Sadia comunicara los costos de flete en forma "anualizada" no constituía un motivo suficiente para que la DCD no introdujera ningún ajuste por concepto de flete.

[179] *Id*., párrafo 6.113.

7.237 Por lo que respecta al argumento de la Argentina de que Sadia no presentó documentación respaldatoria respecto de ningún ajuste por concepto de flete, el Grupo Especial pidió a la Argentina que "indicar[a] exactamente (números de página, de párrafo y de línea) en qué parte de su determinación definitiva, o en cualquier otro documento preparado por la autoridad investigadora en el momento de formular su determinación, explicó la autoridad investigadora el motivo para rechazar la solicitud de Sadia".[180] La Argentina respondió que "[l]a explicación pertinente se encuentra en el punto VIII.1.3.3.1 del Informe de Relevamiento de lo Actuado. Sobre el particular, en el mencionado informe la DCD detalló cuál era la información que tomaría para la determinación del valor normal y de ella no surgía el ajuste por flete". Al examinar la sección pertinente de la determinación definitiva formulada por la DCD, no encontramos ninguna referencia a la supuesta no facilitación por Sadia de documentación respaldatoria. La explicación de la Argentina es, por consiguiente, una justificación *ex post* que estamos obligados a no tener en cuenta al examinar esta reclamación. Aunque la respuesta de la Argentina a la pregunta 82 parece sugerir que la ausencia de pruebas documentales debería inferirse del hecho de que la DCD no llevó a cabo el ajuste por concepto de flete solicitado por Sadia, no hay ninguna razón para que hagamos una inferencia de esa naturaleza. Pudo haber infinidad de motivos por los que la DCD no introdujese el ajuste solicitado por Sadia, y el propósito de esta reclamación es determinar si la DCD tenía o no derecho a no efectuar tal ajuste.

7.238 En cualquier caso, observamos que, en respuesta a la pregunta 81 formulada por el Grupo Especial, la Argentina reconoció[181] que al menos una factura de venta proporcionada por Sadia hacía referencia al flete cobrado al "emitente", esto es, al proveedor.[182] En consecuencia, Sadia había presentado algunas pruebas documentales en apoyo de su solicitud de que se hiciera un ajuste por concepto de flete, dado que la factura pertinente indicaba claramente que el proveedor, esto es, Sadia, y no el cliente, había realizado los gastos por concepto de flete. En vista de la prescripción establecida por el párrafo 4 del artículo 2 de que las autoridades investigadoras tengan debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias particulares, las diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios, consideramos que estas pruebas documentales deberían haber llevado a la DCD a recabar de Sadia una aclaración sobre esta cuestión. En cualquier caso, las pruebas documentales eran suficientes para impedir que la DCD llegara a la conclusión de que Sadia no había facilitado ninguna prueba respaldatoria del ajuste por concepto de flete solicitado por esa empresa. Antes bien, en el expediente obraban pruebas documentales de que Sadia efectivamente realizó gastos por concepto de flete respecto de sus ventas en el mercado interno. Por consiguiente, no nos convence la justificación de la Argentina para no aceptar la solicitud de Sadia de un ajuste por concepto de flete.

7.239 En lo que se refiere a Avipal, la Argentina sostiene que la solicitud que hizo esa empresa de un ajuste por concepto de flete fue rechazada porque no estaba respaldada por pruebas documentales, no estaba completamente traducida al español y fue tardía. En lo tocante a las cuestiones de la traducción y la tardanza, no encontramos ninguna referencia a esas consideraciones en la determinación definitiva de la DCD. La Argentina tampoco nos ha facilitado ninguna prueba que date de la fecha en que la DCD formuló su determinación, que sugiera que esos factores llevaron a la DCD a rechazar la solicitud de Avipal de un ajuste por concepto de flete. A falta de esas pruebas, los argumentos de la Argentina relativos a la traducción y la tardanza constituyen una justificación *ex post* y, por tanto, no proporcionan ninguna base para que adoptemos una decisión sobre la cuestión sometida a examen. En lo referente a la falta de documentación respaldatoria, observamos que el primer párrafo de la página 65 de la determinación definitiva del margen de dumping indica que

[180] Pregunta 82 del Grupo Especial.

[181] Véase el párrafo 7.232 *supra*.

[182] Véase la Brasil - Prueba documental 29, página 6.

la DCD sólo introdujo los ajustes que pudo comprobar. Entendemos que ello constituye una afirmación de la DCD de que sólo introdujo los ajustes para los que contó con documentación respaldatoria. Al examinar el fondo de la reclamación del Brasil constatamos que no hay nada en el expediente que sugiera que Avipal aportó pruebas documentales en apoyo de su solicitud de un ajuste por concepto de flete. Por consiguiente, hay una clara diferencia entre las circunstancias fácticas que rodearon a la solicitud de ajuste por concepto de flete formulada por Sadia y las que rodearon a la hecha por Avipal.[183] En consecuencia, constatamos que la DCD tenía derecho a rechazar el ajuste por concepto de flete solicitado por Avipal.

c) Conclusión

7.240 Para concluir, constatamos que la DCD infringió lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 2 del *Acuerdo Antidumping* al no introducir en el valor normal el ajuste por concepto de flete solicitado por Sadia.

2. No introducción de diversos ajustes para tener en cuenta diferencias comunicadas por JOX - Reclamación 24

a) Argumentos de las partes

7.241 Esta reclamación se refiere a la utilización por la DCD de datos sobre ventas en el mercado interno obtenidos de JOX, a los efectos de establecer el valor normal respecto de determinados exportadores brasileños. El Brasil alega que la Argentina infringió lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 2 del *Acuerdo Antidumping* porque la DCD comparó los datos de JOX (valor normal) con el precio de exportación sin introducir ajustes para tener en cuenta las diferencias comunicadas por JOX por lo que respecta a la tributación, los costos financieros, la comisión de ventas y los costos de flete.

7.242 En el curso de las presentes actuaciones, la Argentina ha formulado dos argumentos para defender la decisión adoptada por la DCD de no introducir los ajustes solicitados en el valor normal. En primer lugar, la Argentina afirmó que los datos de JOX sobre ventas en el mercado interno no fueron ajustados porque de este modo se garantizaba que el valor normal y el precio de exportación se comparaban en el mismo nivel comercial. Si se hubieran introducido los ajustes, la comparación se habría hecho -incorrectamente- entre un valor normal que habría sido un precio "ex fábrica" y un precio f.o.b. de exportación, porque no se contaba con información simétrica respecto de los descuentos que había que aplicar a los precios de exportación de la mercancía. En segundo lugar, la Argentina sostuvo que los detalles de los ajustes pertinentes fueron presentados por JOX en portugués, mientras que la Ley Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos y el artículo 28 del Decreto de Aplicación Nº 1759/72 disponen que las comunicaciones en lengua extranjera que se hagan a la autoridad investigadora deben estar traducidas al español por un traductor matriculado.

7.243 Por lo que respecta al argumento de la Argentina relativo al nivel comercial, el Brasil afirma que incluso la utilización de un valor normal f.o.b. (esto es, un nivel comercial igual al del precio f.o.b. de exportación) habría requerido ajustes/descuentos que tuvieran en cuenta las diferencias en materia de tributación y costos financieros, porque el precio f.o.b. de exportación no incluye ni la tributación ni los costos financieros.[184]

---

[183] Además, Avipal formuló su solicitud en una etapa muy avanzada del procedimiento, el 21 de diciembre de 1999 (aun cuando presentó su respuesta al cuestionario inicial en abril de 1999), con lo que se redujo el tiempo de que disponía la DCD para dirigirse nuevamente a Avipal en relación con esta cuestión.

[184] Véase la Respuesta del Brasil a la pregunta 93 formulada por el Grupo Especial.

7.244 En lo que se refiere a la presentación por JOX de datos en portugués, el Brasil afirma que la información pertinente fue presentada por JOX en respuesta a una solicitud formulada por la DCD, y no por los exportadores brasileños ni el solicitante.[185] JOX es una entidad privada, no relacionada con el Gobierno del Brasil ni con ninguno de los exportadores brasileños objeto de la investigación. En consecuencia, JOX no constituía una "part[e] interesad[a]" en el sentido del párrafo 11 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping* y, por lo tanto, no estaba obligada a responder a las autoridades argentinas, y mucho menos a facilitar una traducción al español de su respuesta.

b) Evaluación del Grupo Especial

7.245 Como se señala *supra*, la Argentina ha presentado dos argumentos (el del nivel comercial y el del idioma) en apoyo de la decisión adoptada por la DCD de no introducir determinados ajustes en los datos de JOX utilizados para establecer el valor normal respecto de determinados exportadores. No tenemos pruebas que sugieran que la DCD se basó en el primer argumento, relativo al nivel comercial, al adoptar su decisión. Por consiguiente, ese argumento constituye una justificación *ex post* que no podemos tomar en consideración.

7.246 Por lo que respecta al idioma elegido por JOX, observamos que los datos de JOX fueron por primera vez pertinentes para la investigación porque el solicitante se basó en ellos con el fin de establecer el valor normal en su solicitud. A continuación, la DCD recurrió a los datos de JOX con el fin de establecer el valor normal respecto de determinados exportadores cuando determinó que esos exportadores no habían presentado suficientes datos sobre ventas en el mercado interno para establecer el valor normal. El 25 de junio de 1999, la DCD solicitó a JOX una aclaración con respecto a la posible necesidad de ajustes. Aunque el idioma oficial en la investigación de la DCD era el español, JOX respondió a la DCD en portugués (respuesta recibida por la DCD el 3 de agosto de 1999). JOX informó a la DCD de que los datos de JOX sobre ventas en el mercado interno que estaban a disposición de la DCD incluían varios impuestos sobre las ventas (un 14,65 por ciento en total), costos financieros (según las condiciones de venta), comisiones de venta (del 0,5 al 1 por ciento) y costos de flete (según la ubicación geográfica).

7.247 Por consiguiente, observamos que JOX únicamente presentó detalles con respecto a los ajustes de los datos pertinentes sobre ventas en respuesta a una solicitud de la DCD. JOX no tenía ningún interés en el procedimiento. Nada en el expediente que tenemos ante nosotros sugiere que JOX fuera una "part[e] interesad[a]" en el sentido del párrafo 11 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping*. Tampoco hay ninguna prueba de que JOX tratara de intervenir en la investigación de la DCD en calidad de parte interesada. En esas circunstancias, no vemos por qué los exportadores brasileños deberían ser penalizados (dado que el valor normal no ajustado habría establecido un mayor margen de dumping) el hecho de que JOX no presentase la información pertinente en español o porque la DCD no obtuviese su propia traducción de esa información. La DCD recabó la información de JOX porque iba a utilizarla como base para determinar el valor normal, y porque sabía que probablemente sería necesario introducir ajustes en los datos de JOX. El hecho de que JOX, que no era una parte interesada ni tomaba parte en la investigación, no respondiera en español no exime a la DCD de las obligaciones que le incumben en virtud del párrafo 4 del artículo 2. En la medida en que la DCD recabó una aclaración a JOX para sus propios fines, consideramos que correspondía a la DCD la carga de obtener su propia traducción al español de la comunicación de JOX.

7.248 Observamos también que, como se demuestra entre otras cosas respecto de la Reclamación 25 *infra*, la DCD se basó en parte en el mismo documento de JOX -en portugués- para aumentar el valor normal a fin de reflejar las supuestas diferencias en las características físicas de los pollos vendidos en

[185] Véanse las Observaciones del Brasil sobre la respuesta de la Argentina a la pregunta 85 del Grupo Especial.

el Brasil y los vendidos en la Argentina.[186] En la medida en que la DCD pudo basarse en el documento en portugués de JOX para introducir en el valor normal un ajuste al alza, no vemos ninguna razón por la que la DCD no pudiera, de manera análoga, basarse en el mismo documento de JOX para efectuar en el valor normal otros ajustes a la baja. Tal conducta no sugiere la actuación de una autoridad investigadora objetiva e imparcial.

c) Conclusión

7.249 A la luz de lo que antecede, constatamos que la autoridad investigadora argentina infringió el párrafo 4 del artículo 2 del *Acuerdo Antidumping* al no introducir ajustes cuando comparó el precio de exportación con el valor normal establecido sobre la base de los datos de JOX sobre ventas en el mercado interno.

3. Diferencias en las características físicas que justifican un ajuste - Reclamación 25

7.250 Esta reclamación se refiere al ajuste al alza del 9,09 por ciento introducido en el valor normal por la DCD para reflejar supuestas diferencias en las características físicas de los pollos vendidos en el Brasil y los pollos exportados a la Argentina. La DCD constató que los pollos se vendían en el Brasil con cabeza y patas, mientras que los pollos se exportaban a la Argentina sin cabeza ni patas. La DCD llegó a la conclusión de que la tasa de rendimiento (por kilogramo) de los pollos vendidos en el Brasil era, en consecuencia, mayor que la de los pollos exportados a la Argentina. Dado que la supuesta diferencia entre las tasas de rendimiento era del 9,09 por ciento, la DCD aumentó el valor normal en ese margen.

a) Argumentos de las partes

7.251 El Brasil alega que el ajuste del 9,09 por ciento fue incompatible con el párrafo 4 del artículo 2 del *Acuerdo Antidumping* porque, en la mayoría de los casos, no hay ninguna diferencia entre los pollos vendidos en el Brasil y los exportados a la Argentina. Según el Brasil, la mayoría de los exportadores/productores venden en ambos mercados pollos eviscerados sin cabeza ni patas. El Brasil sostiene que este hecho se desprende claramente de las respuestas al cuestionario presentadas por los exportadores: Sadia, Avipal y Frangosul indicaron en sus respuestas al cuestionario que vendían el mismo pollo en la Argentina y en el Brasil, mientras que Catarinense comunicó diferencias únicamente respecto de los pollos broiler (y no respecto de los pollos griller). Catarinense comunicó que los pollos broiler se vendían en el Brasil sin patas pero con cabeza, mientras que los pollos broiler exportados a la Argentina no tenían ni cabeza ni patas.

7.252 La Argentina afirma que los exportadores brasileños no negaron expresamente durante la investigación la necesidad de introducir un ajuste para tener en cuenta las diferencias en las características físicas (aunque la Argentina reconoce que los exportadores criticaron la cuantía del ajuste). La Argentina afirma también que recibió pruebas de JOX según las cuales se vendían en el Brasil pollos con cabeza y patas. En particular, una nota recibida de JOX el 3 de agosto de 1999 dice lo siguiente: "Salvo que se indique lo contrario, el pollo refrigerado que se vende en São Paulo incluye las patas y la cabeza. El precio del (pollo refrigerado sin patas ni cabeza) debería ser un 10 por ciento más elevado."[187]

[186] La DCD también se basó en un segundo documento de JOX presentado por el solicitante, traducido del portugués al español.

[187] Brasil - Prueba documental 32.

b) Evaluación del Grupo Especial

7.253 La presente reclamación se refiere a la decisión de la DCD de aumentar los valores normales de los exportadores en un 9,09 por ciento para reflejar las supuestas diferencias en las características físicas de los pollos vendidos en el Brasil y los vendidos en la Argentina.[188] Habida cuenta de que el Brasil no discute que un ajuste de esa índole habría sido necesario si realmente hubiera habido diferencias entre los pollos vendidos en el Brasil y los vendidos en la Argentina, resolveremos esta cuestión examinando si la DCD constató adecuadamente que esas diferencias existían.

7.254 Para empezar, observamos que el expediente de la DCD contenía pruebas de que había diferencias entre los pollos vendidos en el Brasil y los exportados a la Argentina. La DCD se hallaba en posesión de un documento de JOX (recibido el 3 de agosto de 1999) que indicaba que determinados pollos vendidos en el Brasil incluían la cabeza y las patas.[189] En ese documento, JOX afirmaba que "[s]alvo que se indique lo contrario, el pollo refrigerado que se vende en São Paulo incluye las patas y la cabeza".

7.255 Sin embargo, en el expediente también había pruebas que indicaban que al menos algunos exportadores vendían un producto idéntico en el Brasil y en la Argentina. En particular, la sección A, anexo II de las respuestas de Sadia al cuestionario (esto es, tanto la respuesta inicial como la complementaria) describía el producto vendido en el Brasil y el vendido en la Argentina en términos idénticos (a saber, "pollo entero con menudos").[190] La descripción del producto en la sección equivalente de la respuesta de Avipal al cuestionario[191] tampoco distinguía entre ventas en el mercado interno y ventas de exportación. Por consiguiente, las respuestas de ambos exportadores al cuestionario sugerían que vendían el mismo producto en el Brasil y en la Argentina.

7.256 La sección A, anexo II de la respuesta inicial de Frangosul al cuestionario tampoco establecía ninguna distinción entre los productos vendidos en el Brasil y los exportados.[192] Además, la respuesta complementaria de Frangosul al cuestionario incluía un folleto del producto en el que se decía que ni los pollos broiler ni los griller tenían cabeza ni patas. En consecuencia, la respuesta de Frangosul al cuestionario no sólo indicaba que vendía los mismos productos en el Brasil y en la Argentina, sino que también demostraba que esos productos no incluían cabeza ni patas.

7.257 Sólo un exportador, Catarinense, informó de alguna diferencia entre los productos vendidos en el Brasil y los vendidos en la Argentina. La respuesta de Catarinense al cuestionario informaba de que los pollos broiler vendidos en el Brasil incluían la cabeza pero no las patas, mientras que los pollos broiler exportados a la Argentina no tenían ni cabeza ni patas.

7.258 Además, observamos que, en una carta de fecha 19 de enero de 2000, el Gobierno del Brasil impugnó el ajuste efectuado por la DCD para tener en cuenta las diferencias en las características

[188] A diferencia de la reclamación similar formulada al amparo del párrafo 3 del artículo 5 (Reclamación 2), la Reclamación 25 del Brasil sólo impugna la necesidad del ajuste introducido por la DCD durante la investigación, pero no la cuantía de ese ajuste.

[189] Véase la nota 187 *supra*.

[190] Brasil - Prueba documental 22.

[191] Brasil - Prueba documental 23.

[192] Brasil - Prueba documental 24.

físicas.[193] El Brasil afirmó que el ajuste era "absurdo", habida cuenta de que los pollos se vendían en el Brasil en las mismas condiciones que en la Argentina.

7.259 En vista de lo anterior, a nuestro juicio el expediente no proporcionó una base suficiente para que la DCD llegara a la conclusión de que había diferencias en las características físicas de todos los pollos vendidos en el Brasil y todos los vendidos en la Argentina. Sólo la respuesta de un exportador al cuestionario sugirió que podía ser necesario algún tipo de ajuste. Las respuestas de otros exportadores al cuestionario indicaron que tanto en el Brasil como en la Argentina se vendía el mismo producto. Pese a la posibilidad de introducir un ajuste aludida en el documento de JOX mencionado *supra*, lo esencial de las respuestas de los exportadores al cuestionario y las observaciones formuladas por el Gobierno del Brasil deberían haber impedido que una autoridad investigadora objetiva e imparcial llegara a la conclusión, únicamente sobre la base del documento de JOX, de que había diferencias en las características físicas de los pollos vendidos en el Brasil y los vendidos en la Argentina. Como mínimo, las pruebas contradictorias deberían haber inducido a la DCD a seguir tratando esta cuestión con los exportadores.

c) Conclusión

7.260 Por los motivos expuestos, constatamos que la DCD infringió lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 2 del *Acuerdo Antidumping* al aumentar en un 9,09 por ciento los valores normales de todos los exportadores para reflejar supuestas diferencias en las características físicas de los pollos vendidos en el Brasil y los vendidos en la Argentina.

4. Período de recopilación de datos relativos al dumping - Reclamación 26

a) Argumentos de las partes/de los terceros

7.261 El Brasil afirma que la DCD infringió lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 2 del *Acuerdo Antidumping* porque no informó a los exportadores del período objeto de la investigación antidumping hasta nueve meses después de la iniciación de la investigación, durante los cuales los exportadores soportaron la carga no razonable de presentar datos sobre ventas en el mercado interno y sobre ventas de exportación correspondientes al período 1996-1998 y a los meses de 1999 respecto de los que se disponía de datos.

7.262 La Argentina afirma que el *Acuerdo Antidumping* no regula el período respecto del cual pueden recopilarse datos. La Argentina niega que la DCD impusiera una carga no razonable a los exportadores solicitándoles una cantidad excesiva de datos. De hecho, la Argentina sostiene que calculó el valor normal sobre la base de una muestra limitada de facturas precisamente para que no fuera necesario que los exportadores presentaran un gran volumen de facturas.

7.263 Las Comunidades Europeas sostienen que el ámbito de aplicación del párrafo 4 del artículo 2 del *Acuerdo Antidumping* no abarca la reclamación del Brasil. Las Comunidades Europeas afirman que, como recordó recientemente en su informe el Grupo Especial que se ocupó del asunto *Egipto - Barras de refuerzo de acero*, el párrafo 4 del artículo 2 se refiere exclusivamente a la comparación entre el valor normal y el precio de exportación[194] y no se aplica a la determinación del valor normal y del precio de exportación. Las Comunidades Europeas indican que las disposiciones del *Acuerdo*

[193] Carta de la Embajada del Brasil en Buenos Aires a las autoridades argentinas (Brasil - Prueba documental 39).

[194] Informe del Grupo Especial en *Egipto - Medidas antidumping definitivas aplicadas a las barras de refuerzo de acero procedentes de Turquía* ("*Egipto - Barras de refuerzo de acero*"), WT/DS211/R, adoptado el 1º de octubre de 2002, párrafo 7.335.

Antidumping pertinentes para examinar la cuestión planteada por el Brasil son el párrafo 1 del artículo 6 y el primer párrafo del anexo II.

b) Evaluación del Grupo Especial

7.264 Esta reclamación se refiere a la fijación del período objeto de investigación por la autoridad investigadora. No se refiere a la comparación entre el valor normal y el precio de exportación. Recordamos la constatación del Grupo Especial que examinó el asunto *Egipto - Barras de refuerzo de acero*, según la cual:

> "En síntesis, el párrafo 4 del artículo 2, incluyendo su prescripción referente a la carga probatoria, alude a la garantía de una comparación equitativa, a través de los diversos ajustes convenientes, entre el precio de exportación y el valor normal."[195]

7.265 El informe del Grupo Especial que examinó el asunto *Egipto - Barras de refuerzo de acero* se adoptó mientras estaban en el curso de las actuaciones de este Grupo Especial. Estamos de acuerdo con la constatación de ese Grupo Especial de que el párrafo 4 del artículo 2 impone obligaciones respecto de la comparación entre el valor normal y el precio de exportación. En nuestra opinión, el párrafo 4 del artículo 2 no impone obligaciones respecto de la fijación del período objeto de investigación por la autoridad investigadora, que es el objeto de la Reclamación 26 del Brasil.

c) Conclusión

7.266 En vista de lo que antecede, rechazamos la Reclamación 26 del Brasil.

5. Muestreo de transacciones de venta en el mercado interno - Reclamación 27

7.267 Esta reclamación se refiere al método de comparación utilizado por la DCD para calcular los márgenes de dumping respecto de Sadia y Avipal.

a) Argumentos de las partes

7.268 El Brasil alega que la DCD infringió lo dispuesto en el párrafo 4.2 del artículo 2 porque, aunque Sadia y Avipal comunicaron todas las transacciones pertinentes de venta en el mercado interno, la DCD no tuvo en cuenta todas las ventas en el mercado interno al comparar el promedio ponderado del valor normal con el promedio ponderado del precio de exportación. En otras palabras, el Brasil alega que la DCD infringió lo dispuesto en el párrafo 4.2 del artículo 2 al comparar el promedio ponderado del precio de exportación únicamente con un promedio ponderado de una muestra estadística del valor normal.

7.269 La Argentina afirma que la muestra de transacciones de venta en el mercado interno utilizada por la DCD con el fin de establecer un promedio ponderado del valor normal fue estadísticamente válida y se basó en documentación facilitada por los exportadores.

b) Evaluación del Grupo Especial

7.270 El párrafo 4.2 del artículo 2 dispone lo siguiente:

> "A reserva de las disposiciones del párrafo 4 que rigen la comparación equitativa, la existencia de márgenes de dumping durante la etapa de investigación se establecerá

[195] *Ibid*.

> normalmente sobre la base de una comparación entre un promedio ponderado del valor normal y un promedio ponderado de los precios de todas las transacciones de exportación comparables o mediante una comparación entre el valor normal y los precios de exportación transacción por transacción. Un valor normal establecido sobre la base del promedio ponderado podrá compararse con los precios de transacciones de exportación individuales si las autoridades constatan una pauta de precios de exportación significativamente diferentes según los distintos compradores, regiones o períodos, y si se presenta una explicación de por qué esas diferencias no pueden ser tomadas debidamente en cuenta mediante una comparación entre promedios ponderados o transacción por transacción."

7.271 El párrafo 4.2 del artículo 2 dispone que la autoridad investigadora deberá normalmente calcular el margen de dumping comparando el valor normal y el precio de exportación, ya sea sobre la base de un promedio ponderado o bien transacción por transacción. En caso de que se utilice una comparación sobre la base de un promedio ponderado, el párrafo 4.2 del artículo 2 prevé la comparación entre "un promedio ponderado del valor normal" y un promedio ponderado de los precios de todas las transacciones de exportación comparables. El Brasil alega que la Argentina infringió lo dispuesto en el párrafo 4.2 del artículo 2 porque, en lugar de calcular promedios ponderados de los valores normales de Sadia y Avipal sobre la base de todas las transacciones de venta en el mercado interno llevadas a cabo por esos exportadores, la DCD calculó promedios ponderados de una muestra estadística de las transacciones en el mercado interno comunicadas por ellos. Esto plantea la cuestión de si un Miembro debe o no incluir todas las transacciones de venta en el mercado interno al establecer "un promedio ponderado del valor normal" a los efectos del párrafo 4.2 del artículo 2.[196]

7.272 Al examinar el significado de la expresión "un promedio ponderado del valor normal", atribuimos especial importancia al sentido de la expresión "valor normal". Observamos que el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo Antidumping* se refiere al valor normal como al "precio comparable, en el curso de operaciones comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo en el país exportador". Por tanto, el párrafo 1 del artículo 2 define el valor normal refiriéndose a transacciones de venta en el mercado interno realizadas en el Miembro exportador (aunque el párrafo 2 del artículo 2 dispone que, en determinadas circunstancias, pueden utilizarse métodos alternativos para establecer el valor normal).[197] Sin embargo, el párrafo 1 del artículo 2 no indica si es o no necesario incluir todas las transacciones de venta en el mercado interno. De esta cuestión se ocupa el párrafo 2.1 del artículo 2, que enuncia las condiciones que han de cumplirse para que las ventas en el mercado interno puedan considerarse no realizadas en "el curso de operaciones comerciales normales" y, por consiguiente, excluidas a los efectos de establecer el valor normal con arreglo al párrafo 1 del artículo 2. El párrafo 2.1 del artículo 2 dispone que las ventas en el mercado interno "podrán no tomarse en cuenta en el cálculo del valor normal únicamente si" se cumplen las condiciones pertinentes. Entendemos que esas disposiciones significan que las transacciones de venta en el mercado interno pueden excluirse del valor normal únicamente en circunstancias específicas.

---

[196] Observamos que el Grupo Especial que examinó el asunto *Egipto - Barras de refuerzo de acero* constató que el párrafo 4 del artículo 2 "alude a la garantía de una comparación equitativa […] entre el precio de exportación y el valor normal. Por lo tanto, constatamos que no se aplica a la determinación por la autoridad investigadora del valor normal en sí mismo" (véase la nota 194 *supra*). Aunque examinamos la presente cuestión a la luz de las disposiciones del artículo 2 por las que se rige el establecimiento del valor normal, no examinamos el establecimiento del valor normal *per se*. Antes bien, examinamos el promedio ponderado del valor normal establecido por la autoridad investigadora a los efectos de su comparación con el promedio ponderado del precio de exportación.

[197] Estos métodos no son pertinentes en las presentes actuaciones, habida cuenta de que la DCD estableció el valor normal sobre la base de las transacciones de venta en el mercado interno.

Consideramos que estas disposiciones constituyen el contexto pertinente para interpretar la expresión "un promedio ponderado del valor normal", ya que indican que "un promedio ponderado del valor normal" es un promedio ponderado de todas las ventas en el mercado interno distintas de las que podrán no tomarse en cuenta de conformidad con el párrafo 2.1 del artículo 2 del *Acuerdo Antidumping*.

7.273 No consideramos que nuestra interpretación pierda validez por el hecho de que el párrafo 4.2 del artículo 2 se refiera a un promedio ponderado del valor normal y no al promedio ponderado del valor normal. A nuestro juicio, la utilización de la palabra "un" quiere decir simplemente que existen varias formas de establecer un promedio ponderado.[198] No significa que haya varias formas de establecer el valor normal.

7.274 Tampoco consideramos que nuestra interpretación pierda validez simplemente porque el párrafo 4.2 del artículo 2 no se refiera al promedio ponderado del valor normal aludiendo a todas las transacciones de venta en el mercado interno, mientras que en el caso del promedio ponderado del precio de exportación el párrafo 4.2 del artículo 2 especifica que se incluirán todas las transacciones de exportación comparables. Creemos que las normas estrictas del artículo 2 relativas a la determinación del valor normal exigen que, en los casos habituales[199], el valor normal se establezca tomando como referencia todas las ventas del producto similar realizadas en el mercado interno en el curso de operaciones comerciales normales. No sería necesario estipular las circunstancias en las que las transacciones del mercado interno pueden quedar excluidas del valor normal si no hubiera una obligación general de incluir en el valor normal todas las transacciones realizadas en el mercado interno.

7.275 En el presente caso, la DCD estableció promedios ponderados de valores normales sobre la base de muestras estadísticas de transacciones de venta en el mercado interno. La DCD no estableció promedios ponderados de valores normales sobre la base de todas las transacciones de venta en el mercado interno distintas de aquellas que tenía derecho a excluir en virtud del párrafo 2.1 del artículo 2.

c) Conclusión

7.276 En vista de lo anterior, constatamos que la DCD infringió el párrafo 4.2 del artículo 2 al no comparar el promedio ponderado del precio de exportación con un promedio ponderado adecuado del valor normal.

6. Determinación de la existencia de daño - Reclamación 32

7.277 Esta reclamación se refiere a la compatibilidad de la determinación de la existencia de daño formulada por la CNCE con los párrafos 1, 4 y 5 del artículo 3 del *Acuerdo Antidumping*.

a) Argumentos de las partes

7.278 El Brasil alega que la CNCE formuló una determinación de la existencia de daño incompatible con el párrafo 1 del artículo 3 del *Acuerdo Antidumping* porque examinó determinados

[198] "*Weighted average*" (promedio ponderado) se define como "*an average in taking which each component is multiplied by a factor chosen to give it its proper importance*" (un promedio para cuyo cálculo cada componente se multiplica por un factor escogido a fin de darle la importancia que le corresponde" (http://www.oed.com). Por consiguiente, el promedio ponderado puede variar en función del factor escogido.

[199] Es decir, en los casos en que el valor normal se base en transacciones de venta en el mercado interno.

factores de daño sobre la base de datos correspondientes al período enero de 1996 a diciembre de 1998 y examinó otros factores de daño sobre la base de datos correspondientes al período enero de 1996 a junio de 1999. En otras palabras, algunos factores de daño fueron analizados teniendo en cuenta datos de 1999, que no se tuvieran en cuenta para examinar otros factores. El Brasil sostiene que una infracción de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 3 necesariamente da lugar a una infracción de los párrafos 4 y 5 de ese artículo. El Brasil aduce también que la Argentina infringió lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 3 porque el período objeto de examen a efectos del dumping finalizó en enero de 1999, mientras que el período objeto de examen a efectos del daño finalizó en junio de 1999. Según el Brasil, la autoridad investigadora no debería haber atribuido el daño que se constató que existía en junio de 1999 a las importaciones objeto de dumping realizadas en enero de 1999.

7.279 La Argentina afirma que la CNCE tuvo en cuenta datos sobre el daño correspondientes a 1999 porque la investigación se inició sobre la base de una amenaza de daño, y una investigación de una supuesta amenaza de daño requiere el examen de datos que sean lo más recientes posible. La Argentina afirma también que la vigencia de un acuerdo voluntario entre "las partes" durante el período comprendido entre octubre de 1998 y marzo de 1999 implicó la necesidad de analizar las importaciones sin los efectos de ese acuerdo, por lo cual se extendió dicho análisis hasta junio de 1999.

7.280 Además, la Argentina dio la siguiente respuesta a la pregunta 87 formulada por el Grupo Especial:

> "En el Acta Nº 576, de fecha 23 de diciembre de 1999, obrante en el Expediente CNCE Nº 43/1997 (fs. 7313), en su punto V ('Condición de la Industria Nacional'), segundo párrafo, líneas primera a sexta, se dijo claramente que:
>
> > "El 'período bajo análisis' corresponde al transcurrido entre enero de 1996 y diciembre de 1998. Para algunas variables como producción nacional, precios, importaciones, exportaciones nacionales y consumo aparente, se incluyen datos correspondientes al primer semestre de 1999. Se exponen los datos correspondientes al año 1995 a título de referencia. Las variaciones del primer semestre de 1999 se corresponden contra igual período del año anterior." (el subrayado es propio)
>
> No obstante ello, la Argentina reitera lo manifestado en sus dos presentaciones anteriores y a efectos de una mejor comprensión en el contexto total se reitera la réplica de la Argentina:
>
> > "En primer lugar, no resulta obligatorio el análisis de ningún indicador fuera del período establecido por las autoridades como período de investigación.
> >
> > Conforme prácticas internacionales llevadas a cabo por algunos países, la Argentina consideró algunas variables de acceso público con la finalidad de ratificar las tendencias observadas durante el período investigado. Pretender, como en este caso pareciera intenta el Brasil, una actualización constante durante la investigación de todos los indicadores, resultaría en una investigación sin final, lo cual por otra parte -se reitera- no es el objetivo del *Acuerdo Antidumping*, como tampoco la práctica de aquellos países que, como la Argentina, analizan ciertos indicadores pertinentes a título referencial."

Cabe señalar que la determinación de amenaza de daño se basó en el período enero de 1996 a diciembre de 1998. Los demás datos conforme se ha señalado en respuestas anteriores y en el Acta en cuestión fueron tomados a título referencial."[200]

7.281 El Brasil formuló las observaciones siguientes sobre la respuesta de la Argentina:

"Al responder a la pregunta del Grupo Especial, la Argentina no ha indicado en qué lugar la autoridad investigadora explicó por qué examinó los datos de 1999 con respecto a algunos factores de daño y no respecto de otros. El pasaje mencionado por la Argentina señala claramente que los datos correspondientes al año 1995 se utilizan a modo de referencia. Sin embargo, ese pasaje **no** establece que los datos correspondientes al primer semestre de 1999 se utilizan a modo de referencia. Lo que se indica en el pasaje es que los datos correspondientes a las variables de producción nacional, precio, importaciones, exportaciones nacionales y consumo aparente correspondientes al primer semestre de 1999 se incluyeron en el período de análisis de la existencia de daño. Si la autoridad hubiese tenido el propósito de utilizar los datos del primer semestre de 1999 sólo a modo de referencia, lo hubiera señalado claramente en la determinación definitiva, como lo hizo con respecto a los datos del año 1995. En la investigación, la autoridad argentina consideró un período determinado del análisis de la existencia de daño respecto de los factores de producción, precios, importaciones, exportaciones y consumo aparente, y otro período para el resto de los factores indicados en el párrafo 4 del artículo 3." (el subrayado y las negritas figuran en el original) (no se reproducen las notas).[201]

b) Evaluación del Grupo Especial

7.282 Los párrafos 1, 4 y 5 del artículo 3 disponen que:

"3.1 La determinación de la existencia de daño a los efectos del artículo VI del GATT de 1994 se basará en pruebas positivas y comprenderá un examen objetivo: a) del volumen de las importaciones objeto de dumping y del efecto de éstas en los precios de productos similares en el mercado interno y b) de la consiguiente repercusión de esas importaciones sobre los productores nacionales de tales productos.

3.4 El examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional de que se trate incluirá una evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes que influyan en el estado de esa rama de producción, incluidos la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el volumen de producción, la participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de las inversiones o la utilización de la capacidad; los factores que afecten a los precios internos; la magnitud del margen de dumping; los efectos negativos reales o potenciales en el flujo de caja ("cash flow"), las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir capital o la inversión. Esta enumeración no es exhaustiva, y ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva.

---

[200] Véase la respuesta de la Argentina a la pregunta 87 formulada por el Grupo Especial.

[201] Véanse las observaciones formuladas por el Brasil acerca de la respuesta de la Argentina a la pregunta 87 del Grupo Especial.

> 3.5 Habrá de demostrarse que, por los efectos del dumping que se mencionan en los párrafos 2 y 4, las importaciones objeto de dumping causan daño en el sentido del presente Acuerdo. La demostración de una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño a la rama de producción nacional se basará en un examen de todas las pruebas pertinentes de que dispongan las autoridades. Éstas examinarán también cualesquiera otros factores de que tengan conocimiento, distintos de las importaciones objeto de dumping, que al mismo tiempo perjudiquen a la rama de producción nacional, y los daños causados por esos otros factores no se habrán de atribuir a las importaciones objeto de dumping. Entre los factores que pueden ser pertinentes a este respecto figuran el volumen y los precios de las importaciones no vendidas a precios de dumping, la contracción de la demanda o variaciones de la estructura del consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y nacionales y la competencia entre unos y otros, la evolución de la tecnología y los resultados de la actividad exportadora y la productividad de la rama de producción nacional."

7.283 La Argentina no niega que la CNCE sólo examinó datos correspondientes a 1999 respecto de determinados factores de daño. El párrafo 1 del artículo 3 exige un examen "objetivo" del daño. A nuestro juicio, queda acreditado *prima facie* que una autoridad investigadora no ha realizado un examen "objetivo" si ha examinado diferentes factores de daño utilizando diferentes períodos. Esa acreditación *prima facie* puede quedar refutada si la autoridad investigadora demuestra que la utilización de diferentes períodos puede justificarse sobre la base de razones objetivas (porque, por ejemplo, los datos correspondientes a períodos más recientes no estaban disponibles respecto de determinados factores de daño). Habida cuenta de que la CNCE sólo examinó datos de 1999 por lo que respecta a determinados factores de daño, constatamos *prima facie* que la CNCE no realizó un examen objetivo del daño. A continuación consideraremos si la Argentina ha refutado o no esta acreditación *prima facie*.

7.284 La Argentina afirmó en respuesta a la pregunta 87 formulada por el Grupo Especial que se utilizaron datos de 1999 respecto de determinados factores de daño para "ratificar las tendencias". Sin embargo, aunque la determinación definitiva se refiere a la utilización de datos de 1995 "a título de referencia", no se refiere a la utilización de datos de 1999 a ese título. La Argentina adujo también ante el Grupo Especial que era necesario que la CNCE examinara datos de 1999 porque estaba analizando la existencia de una amenaza de daño. Sin embargo, no hay nada en la determinación definitiva de la CNCE, ni obra ninguna prueba en el expediente, que sugiera que estas explicaciones constituyen algo distinto de una justificación *ex post* que no podemos tomar en consideración. En cualquier caso, aun cuando hubiera buenas razones para que la CNCE examinara datos relativos al daño correspondientes a 1999, ello no explicaría por qué la CNCE consideró datos de 1999 respecto a determinados factores de daño únicamente y no respecto de todos ellos. La Argentina no ha ofrecido ninguna justificación de por qué se utilizaron datos de 1999 únicamente respecto de determinados factores de daño y no respecto de todos ellos. Aunque quizá cabría entender que la respuesta de la Argentina a la pregunta 87 formulada por el Grupo Especial significa que únicamente había disponibles datos de 1999 respecto de determinados factores de daño ("la Argentina consideró algunas variables de acceso público"), la determinación definitiva de daño formulada por la CNCE no contenía ninguna explicación de esa índole, como no la contenía ningún otro documento del expediente que tenemos ante nosotros. Además, el hecho de que el público pueda no haber tenido acceso a datos de 1999 por lo que respecta a los restantes factores de daño no significa necesariamente que la autoridad investigadora no tuviera acceso a esos datos. Por consiguiente, la Argentina no ha refutado la presunción de que la CNCE realizó un examen subjetivo de los factores pertinentes de daño.

7.285 A la luz de lo anterior, constatamos que la CNCE actuó de manera incompatible con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 3 del *Acuerdo Antidumping* al examinar únicamente datos de 1999 respecto de determinados factores de daño.

7.286 El Brasil afirma que la infracción mencionada *supra* del párrafo 1 del artículo 3 constituiría también una infracción de los párrafos 4 y 5 del artículo 3. A este respecto, el Brasil parece considerar que los párrafos 4 y 5 del artículo 3 exigen también que las autoridades investigadoras realicen un examen objetivo del daño y de la relación causal. La parte de la Reclamación 32 del Brasil referente a una supuesta infracción del párrafo 4 del artículo 3 está basada exactamente en los mismos hechos que sustentan nuestra constatación de infracción del párrafo 1 del artículo 3. En consecuencia, según la lógica de la reclamación del Brasil, si la Argentina pusiera su medida en conformidad con el párrafo 1 del artículo 3, también pondría su medida en conformidad con el párrafo 4 del artículo 3. Por consiguiente, no es necesario que examinemos la parte de la Reclamación 32 relativa al párrafo 4 del artículo 3 del *Acuerdo Antidumping*.

7.287 La parte de la Reclamación 32 relativa al párrafo 5 del artículo 3 no está basada en los mismos hechos que los argumentos del Brasil relativos a los párrafos 1 y 4 del artículo 3. Por lo tanto, es necesario que abordemos los argumentos del Brasil relativos al párrafo 5 del artículo 3. Los argumentos del Brasil se refieren al hecho de que los períodos de examen utilizados en las determinaciones separadas de la existencia del dumping y de la existencia del daño no finalizaron en el mismo momento. Sin embargo, señalamos que nada en el *Acuerdo Antidumping* sugiere que los períodos de examen a efectos de dumping y a efectos de daño deban necesariamente finalizar en el mismo momento. De hecho, habida cuenta de que puede haber un desfase temporal entre la entrada de las importaciones objeto de dumping y el daño causado por ellas, quizá no sea adecuado utilizar en todos los casos períodos idénticos de examen para el dumping y el daño. Además, observamos que el Comité de Prácticas Antidumping ha examinado la cuestión de los períodos de examen. Ha emitido una recomendación en el sentido de que, por regla general, "el período de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de daño deberá ser normalmente de tres años como mínimo, a menos que la parte respecto de la cual se recopilan datos exista desde hace menos tiempo, **y deberá incluir la totalidad del período de recopilación de datos para la investigación de la existencia de dumping**" (sin negritas en el original).[202] Por consiguiente, parecería que el período de examen a efectos del daño sólo debe "incluir" la totalidad del período de examen a efectos del dumping. No hay nada en la recomendación del Comité de Prácticas Antidumping que sugiera que no debería exceder (en el sentido de incluir datos más recientes) el período de examen a efectos del dumping.[203]

c) Conclusión

7.288 Por las razones que anteceden, aceptamos la Reclamación 32 del Brasil respecto de la infracción del párrafo 1 del artículo 3 del *Acuerdo Antidumping*. No formulamos ninguna constatación respecto del párrafo 4 del artículo 3 y rechazamos la parte de la Reclamación 32 del Brasil basada en el párrafo 5 del artículo 3 del *Acuerdo Antidumping*.

[202] Recomendación relativa a los períodos de recopilación de datos para las investigaciones antidumping, documento G/ADP/6, adoptado por el Comité de Prácticas Antidumping el 5 de mayo de 2000.

[203] Señalamos que, aun cuando se apliquen diferentes períodos de examen respecto del dumping y respecto del daño, el párrafo 5 del artículo 3 impone la obligación de establecer una relación causal entre el daño y las importaciones objeto de dumping.

7. Omisión de explicar por qué la CNCE examinó datos de 1999 respecto de determinados factores de daño pero no respecto de otros - Reclamación 33

7.289 La Reclamación 33 del Brasil relativa al párrafo 2.2 del artículo 12 del *Acuerdo Antidumping* está basada en las mismas circunstancias fácticas que la precedente Reclamación 32.

a) Argumentos de las partes

7.290 El Brasil sostiene que la Argentina infringió el párrafo 2.2 del artículo 12 del *Acuerdo Antidumping* porque la determinación definitiva de la existencia de daño formulada por la CNCE no explicó por qué este organismo examinó datos de 1999 respecto de determinados factores de daño pero no respecto de otros.

7.291 La Argentina sostiene que toda la información pertinente se hizo pública mediante resoluciones publicadas y estaba en el expediente a disposición de las partes interesadas.

b) Evaluación del Grupo Especial

7.292 En esencia, el Brasil alega que de la antedicha infracción del párrafo 1 del artículo 3 (Reclamación 32) se deriva automáticamente una infracción del párrafo 2.2 del artículo 12. En otras palabras, del mismo modo que la CNCE infringió el párrafo 1 del artículo 3 al no explicar por qué consideró datos de 1999 respecto de algunos factores pero no respecto de otros, la falta de una explicación de esa índole en la determinación definitiva constituye una infracción del párrafo 2.2 del artículo 12 del *Acuerdo Antidumping*.

7.293 Señalamos que dos informes adoptados de Grupos Especiales han examinado la aplicación de las disposiciones procesales del párrafo 2.2 del artículo 12 a circunstancias fácticas que ya se haya constatado que infringen disposiciones sustantivas del *Acuerdo Antidumping*.[204] Esos Grupos Especiales constataron que, cuando se daban esas circunstancias, no era necesario formular constataciones en el marco del párrafo 2.2 del artículo 12. Estamos de acuerdo con esos Grupos Especiales. Si el fondo de la determinación de la existencia de daño formulada por la CNCE era incompatible con las obligaciones jurídicas pertinentes, carece de importancia la idoneidad del aviso público de las constataciones de la existencia de daño formuladas por la CNCE.

c) Conclusión

7.294 Por las razones que anteceden, no consideramos necesario examinar la Reclamación 33 del Brasil.

8. No exclusión del efecto de las importaciones que no fueron objeto de dumping en la determinación de la existencia de daño - Reclamaciones 34 a 37

7.295 Estas reclamaciones se refieren al sentido de la expresión "importaciones objeto de dumping" que figura en los párrafos 1, 2, 4 y 5 del artículo 3 del *Acuerdo Antidumping*.

[204] Informe del Grupo Especial *Guatemala - Cemento II*, *supra*, nota 48, párrafo 8.291 e informe del Grupo Especial que examinó el asunto *Comunidades Europeas - Derechos antidumping sobre las importaciones de ropa de cama de algodón originarias de la India* ("*CE - Ropa de cama*"), WT/DS141/R, adoptado el 12 de marzo de 2001, modificado por el informe del Órgano de Apelación, WT/DS141/AB/R, párrafo 6.259.

a) Argumentos de las partes/de los terceros

7.296 El Brasil alega que la Argentina infringió los párrafos 1, 2, 4 y 5 del artículo 3 del *Acuerdo Antidumping* al incluir el efecto de importaciones que no habían sido objeto de dumping en su determinación de la existencia de daño. Estas importaciones fueron exportadas/producidas por Nicolini y Seara, y respecto de ellas la DCD había constatado que no eran objeto de dumping. Según el Brasil, el artículo 3 únicamente permite a los Miembros tener en cuenta los efectos perjudiciales de las importaciones objeto de dumping.

7.297 La Argentina sostiene que, al analizar la relación causal, la CNCE, en efecto, tuvo en cuenta el hecho de que las importaciones procedentes de Nicolini y Seara no eran objeto de dumping. Los precios medios f.o.b. de las citadas empresas eran sustancialmente superiores a los de otras exportaciones declaradas objeto de dumping. Además, el volumen de las importaciones procedentes de Nicolini y Seara se ubicó en niveles de participación que distaban mucho de los de la mayoría de las exportaciones del Brasil durante el período analizado por la CNCE. La CNCE constató que el precio era el factor decisivo en el mercado, y que la causa del descenso de los precios internos durante el período objeto de investigación había sido el precio de las importaciones objeto de dumping. Si la CNCE hubiera excluido las importaciones procedentes de Nicolini y Seara, los precios medios f.o.b. de las importaciones que la CNCE tuvo en cuenta habrían sido todavía más bajos, con lo que se habría acentuado la relación causal entre las importaciones y el daño a la rama de producción nacional. A este respecto, la Argentina presentó pruebas al Grupo Especial que demostraban que en 1997 y 1998 los precios medios f.o.b. de las importaciones procedentes de Nicolini y Seara habían sido un 13 por ciento superiores a los de otras importaciones investigadas. Además, el hecho de que las importaciones procedentes de Nicolini y Seara no fueran mayoritarias en ningún año del período investigado por la CNCE implicaba que no pudieran esperarse cambios sustanciales en el volumen y participación del resto de las importaciones investigadas. Las importaciones procedentes de exportadores/productores que se había constatado que habían practicado dumping representaban la mayoría de las importaciones, llegando en 1998 a casi 40.000 toneladas, frente a las 56.000 del total de importaciones del origen investigado, y las importaciones objeto de dumping crecieron más aceleradamente que el volumen del total de importaciones durante 1998. De esta forma, la participación en el consumo aparente de las importaciones objeto de dumping creció, desplazando a las ventas en el mercado interno del producto nacional similar.

7.298 Las Comunidades Europeas se opusieron a la interpretación que hace el Brasil del artículo 3. Las Comunidades Europeas sugirieron que una investigación antidumping se refiere a un país específico, y no a un exportador específico, por lo que una vez que se constata que determinadas importaciones procedentes de un país exportador son objeto de dumping, la autoridad investigadora tiene derecho a tratar todas las importaciones procedentes de ese país como importaciones objeto de dumping.

b) Evaluación del Grupo Especial

7.299 Las reclamaciones del Brasil están basadas en los párrafos 1, 2, 4 y 5 del artículo 3 del *Acuerdo Antidumping*. El Brasil afirma que la CNCE infringió estas disposiciones al incluir los efectos de importaciones que no habían sido objeto de dumping (esto es, importaciones procedentes de exportadores/productores extranjeros respecto de los cuales la DCD había constatado que no habían practicado dumping) en su análisis de la existencia de daño. Al examinar estas reclamaciones, en primer lugar debemos determinar si la expresión "importaciones objeto de dumping" que figura en las disposiciones pertinentes del artículo 3 del *Acuerdo Antidumping* excluye las importaciones procedentes de productores/exportadores que se ha constatado que no han practicado dumping. En caso afirmativo, debemos determinar si la CNCE excluyó o no las importaciones objeto de dumping procedentes de Nicolini y Seara al formular su determinación definitiva de la existencia de daño.

7.300 Consideramos que una determinación de la existencia de dumping se formula con respecto a un producto procedente de un productor/exportador concreto. Si se ha constatado respecto de un productor/exportador concreto que no ha practicado dumping, no vemos ninguna base para incluir las importaciones procedentes de ese productor/exportador en la categoría de las "importaciones objeto de dumping". Observamos que la expresión "importaciones objeto de dumping" fue interpretada por el Grupo Especial que se ocupó del asunto *CE - Ropa de cama* y posteriormente por el Grupo Especial que examinó el recurso de la India al párrafo 5 del artículo 21 del *ESD* con respecto a la aplicación por las CE de los resultados del procedimiento inicial.

7.301 El Grupo Especial que se ocupó del asunto *CE - Ropa de cama* constató que "todas las importaciones originarias de cualquier productor/exportador que se constate ha incurrido en dumping pueden considerarse importaciones objeto de dumping a efectos del análisis de la existencia de daño".[205] Si bien esta constatación no resuelve la cuestión de si las importaciones procedentes de productores/exportadores respecto de los que se ha constatado que no han practicado dumping pueden considerarse como "importaciones objeto de dumping", el Grupo Especial observó que:

> "Es posible que un cálculo realizado en forma compatible con el *Acuerdo Antidumping* llevara a la conclusión de que debía atribuirse a uno u otro productor de la India un margen de dumping cero o *de minimis*. En ese caso, nuestra opinión es que las importaciones atribuibles a ese productor/exportador no pueden considerarse, a los efectos del análisis de la existencia de daño, como importaciones 'objeto de dumping'."[206]

7.302 En el procedimiento sobre la aplicación iniciado en virtud del párrafo 5 del artículo 21 del *ESD*, el Grupo Especial "[estuvo] plenamente de acuerdo"[207] con la observación precedente formulada por el Grupo Especial que examinó el asunto *CE - Ropa de cama* y, a su vez, constató que:

> "la pregunta de qué importaciones han de considerarse objeto de dumping encuentra fácil respuesta: son 'importaciones objeto de dumping' todas las atribuibles a productores o exportadores para los que se haya calculado un margen de dumping superior a *de minimis*. Así lo decidió el Grupo Especial inicial en esta diferencia, rechazando el argumento de que las importaciones atribuibles a un solo productor que se había constatado incurría en dumping debían dividirse en dos categorías: transacciones de venta 'objeto de dumping' y 'no objeto de dumping'".[208]

7.303 Estamos de acuerdo con las constataciones de los Grupos Especiales que se ocuparon de los asuntos *CE - Ropa de cama* y *CE - Ropa de cama (párrafo 5 del artículo 21 - India)*, así como con la observación formulada por el Grupo Especial que examinó el asunto *CE - Ropa de cama* que figura *supra*. Sobre la base del sentido corriente del texto, constatamos que la expresión "importaciones objeto de dumping" se refiere a todas las importaciones atribuibles a productores o exportadores para los que se haya calculado un margen de dumping superior a *de minimis*. La expresión "importaciones

---

[205] *Id*, párrafo 6.137.

[206] *Id*, párrafo 6.138.

[207] Informe del Grupo Especial que examinó el asunto *Comunidades Europeas - Derechos antidumping sobre las importaciones de ropa de cama de algodón originarias de la India - Recurso de la India al párrafo 5 del artículo 21 del ESD* ("*CE - Ropa de cama (párrafo 5 del artículo 21 - India)*"), WT/DS141/RW, 29 de noviembre de 2002 (informes del Grupo Especial y del Órgano de Apelación aún sin adoptar), párrafo 6.131.

[208] Informe del Grupo Especial *CE - Ropa de cama (párrafo 5 del artículo 21 - India)*, *supra*, nota 207, párrafo 6.133.

objeto de dumping" excluye las exportaciones originarias de productores/exportadores respecto de los que, en el curso de la investigación, se haya constatado que no han incurrido en dumping.

7.304 Recordamos que la DCD constató que las importaciones originarias de Nicolini y Seara no eran objeto de dumping. Por consiguiente, nuestra constatación con respecto al sentido de la expresión "importaciones objeto de dumping" significa que la CNCE debería haber excluido las importaciones originarias de Nicolini y Seara al examinar los posibles efectos perjudiciales de las "importaciones objeto de dumping" en la rama de producción nacional. Examinaremos a continuación si la CNCE lo hizo o no.

7.305 No hay nada en el expediente que tenemos ante nosotros ni en la determinación definitiva de la existencia de daño formulada por la CNCE que sugiera que la CNCE excluyó las importaciones originarias de Nicolini y Seara de su análisis de la existencia de daño. En realidad habría sido improbable que la CNCE pudiera haber excluido las importaciones originarias de Nicolini y Seara (por no ser objeto de dumping) habida cuenta de que la CNCE formuló su determinación de la existencia de daño seis meses antes de que la DCD formulara su determinación según la cual Nicolini y Seara no estaban practicando dumping. En otras palabras, la CNCE no podría haber excluido las importaciones originarias de Nicolini y Seara de su análisis de la existencia de daño, ya que cuando realizó el análisis de la existencia de daño desconocía que las importaciones originarias de esos exportadores/productores no eran objeto de dumping.

7.306 Además, la Argentina no ha aducido que las importaciones originarias de Nicolini y Seara quedaran excluidas del análisis de la existencia de daño realizado por la CNCE. Antes bien, la Argentina se ha centrado en los efectos de la inclusión de las importaciones originarias de Nicolini y Seara en el análisis de la existencia de daño llevado a cabo por la CNCE, sugiriendo que la constatación de la existencia de daño se habría visto agravada si esas importaciones hubieran sido excluidas, porque el precio medio f.o.b. de las importaciones habría disminuido. Si bien la Argentina presentó argumentos al Grupo Especial con respecto a precios medios f.o.b. de las importaciones que excluían las importaciones originarias de Nicolini y Seara, no señaló nada en el expediente que indicase que la CNCE hubiera considerado esos argumentos durante su análisis de la existencia de daño. Lo mismo cabe decir de los argumentos presentados por la Argentina al Grupo Especial con respecto a la participación de Nicolini y Seara en las importaciones totales. Por consiguiente, aun cuando esos argumentos fueran pertinentes a los efectos de determinar si las importaciones pertinentes originarias de Nicolini y Seara fueron o no excluidas del análisis de la existencia de daño realizado por la CNCE -un hecho del que no estamos en absoluto convencidos-, esos argumentos constituirían una justificación *ex post* que no estamos obligados a tener en cuenta. En cualquier caso, consideramos que, de conformidad con una interpretación adecuada de la expresión "importaciones objeto de dumping", las importaciones originarias de Nicolini y Seara deberían haber sido totalmente excluidas del análisis de la existencia de daño realizado por la CNCE. Del expediente se desprende claramente que la CNCE no lo hizo.

c) Conclusión

7.307 A la luz de lo que antecede, constatamos que la CNCE infringió los párrafos 1, 2, 4 y 5 del artículo 3 del *Acuerdo Antidumping* al incluir las importaciones originarias de Nicolini y Seara en su análisis de la existencia de daño, aun cuando la DCD había constatado que esas importaciones no eran objeto de dumping.

9. Omisión del examen de cada uno de los factores e índices de daño que influían en el estado de la rama de producción nacional - Reclamaciones 38 a 40

7.308 Estas reclamaciones se refieren a la cuestión de si la CNCE examinó o no cada uno de los factores de daño enumerados en el párrafo 4 del artículo 3 del *Acuerdo Antidumping*. El Brasil

sostiene que la CNCE no lo hizo, por lo que infringió los párrafos 1 y 4 del artículo 3 y el párrafo 2.2 del artículo 12 del *Acuerdo Antidumping*.

a) Argumentos de las partes/de los terceros

7.309 El Brasil sostiene que la CNCE infringió los párrafos 1 y 4 del artículo 3 del *Acuerdo Antidumping* al no examinar cada uno de los factores e índices de daño enumerados en el párrafo 4 del artículo 3 que influían en el estado de la rama de producción nacional. En particular, el Brasil afirma que la CNCE no examinó la disminución real y potencial de la productividad, los factores que afectaban a los precios internos, la magnitud del margen de dumping, los efectos negativos reales o potenciales en el flujo de caja ("cash flow"), el crecimiento, la capacidad de reunir capital o la inversión. El Brasil afirma también que el hecho de no abordar cada uno de los factores de daño del párrafo 4 del artículo 3 también constituye una infracción de la prescripción en materia de avisos públicos establecida en el párrafo 2.2 del artículo 12, porque la determinación de la existencia de daño formulada por la CNCE no se refirió a todos los factores de daño enunciados en el párrafo 4 del artículo 3, ni los evaluó.

7.310 La Argentina sostiene que la CNCE efectivamente evaluó los factores de daño identificados por el Brasil. La Argentina se refiere a la inclusión de los factores relativos a la productividad en la determinación de la existencia de daño formulada por la CNCE y facilita un resumen de las características del mercado argentino del pollo, de los factores que afectan a los precios internos y de los efectos del margen de dumping. La Argentina explica también por qué no fue necesario que la CNCE analizara el flujo de caja ("cash flow") y la capacidad de reunir capital, alegando que, por el contrario, la CNCE se centró correctamente en la liquidez y en el "punto de equilibrio".

7.311 Los Estados Unidos afirman que una infracción del párrafo 4 del artículo 3 no constituiría necesariamente una infracción del párrafo 2.2 del artículo 12, por cuanto el párrafo 2.2 del artículo 12 sólo exige la publicación de constataciones y conclusiones sobre cuestiones de hecho y de derecho que la autoridad investigadora considere pertinentes. Por consiguiente, si determinados factores del párrafo 4 del artículo 3 no son pertinentes en un caso determinado, no es necesario incluirlos en la publicación prevista en el párrafo 2.2 del artículo 12, en la medida en que la falta de pertinencia pueda al menos deducirse implícitamente de la determinación definitiva.

b) Evaluación del Grupo Especial

7.312 En primer lugar examinaremos la Reclamación 38 del Brasil, relativa a la aplicación del párrafo 4 del artículo 3 del *Acuerdo Antidumping*. A continuación examinaremos las Reclamaciones 39 y 40, relativas al párrafo 1 del artículo 3 y al párrafo 2.2 del artículo 12, respectivamente.

7.313 El párrafo 4 del artículo 3 del *Acuerdo Antidumping* dispone lo siguiente:

> "El examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional de que se trate incluirá una evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes que influyan en el estado de esa rama de producción, incluidos la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el volumen de producción, la participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de las inversiones o la utilización de la capacidad; los factores que afecten a los precios internos; la magnitud del margen de dumping; los efectos negativos reales o potenciales en el flujo de caja ("cash flow"), las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir capital o la inversión. Esta enumeración no es exhaustiva, y ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva."

7.314 El procedimiento de solución de diferencias de la OMC establece claramente que una autoridad investigadora debe analizar cada uno de los factores enumerados en el párrafo 4 del artículo 3. Observamos que tanto el Grupo Especial que se ocupó del asunto *CE - Ropa de cama* como el Grupo Especial que examinó el asunto *México - Jarabe de maíz*, al cual el primero se remitió, constataron que el párrafo 4 del artículo 3 es una disposición obligatoria, que deben considerarse todos los factores enumerados en el párrafo 4 del artículo 3 y que la naturaleza del examen realizado por la autoridad investigadora debe hacerse patente.[209] Estamos de acuerdo y pasamos a examinar si la CNCE cumplió o no estas prescripciones respecto de los factores enumerados en el párrafo 4 del artículo 3 señalados concretamente por el Brasil, a saber, la disminución real y potencial de la productividad, los factores que afectaban a los precios internos, la magnitud del margen de dumping, los efectos negativos reales o potenciales en el flujo de caja ("cash flow"), el crecimiento, la capacidad de reunir capital o la inversión.

i) Productividad

7.315 La Argentina afirma que la CNCE hizo varias consideraciones con respecto a la productividad, incluida la siguiente afirmación en la determinación definitiva de la existencia de daño formulada por la CNCE:

> "En términos generales, la relativa estabilidad del número de empleados frente a los incrementos observados en la producción, estaría indicando una mayor productividad física de la mano de obra, probablemente debido a la incorporación de tecnología antes mencionada."[210]

7.316 A nuestro juicio, esta afirmación basta para demostrar que la CNCE consideró la productividad y constató que ésta había aumentado como consecuencia de la introducción de nueva tecnología. Por tanto, esta afirmación es por sí sola suficiente a los efectos del párrafo 4 del artículo 3 del *Acuerdo Antidumping*.[211] Por consiguiente, rechazamos la reclamación del Brasil de que la CNCE no consideró la productividad.

ii) Factores que afectaban a los precios internos

7.317 La Argentina afirma que la CNCE consideró los factores que afectaban a los precios internos al analizar la evolución de los índices de precios de los productos sustitutos, básicamente las carnes rojas, así como el nivel general de la actividad y los índices de precios de los sectores más importantes en este sentido. A este respecto, la Argentina dio la siguiente respuesta a una parte de la pregunta 59 formulada por el Grupo Especial:

> "En cuanto a que el Brasil no encuentra una evaluación sobre otros factores que afectaron el precio del pollo eviscerado entero durante el período investigado, dicha evaluación se efectuó tanto en el Acta CNCE Nº 576 como en el Informe Técnico. En efecto, sobre la evolución del precio de un producto sustituto -carnes rojas- en el Acta mencionada se señaló lo siguiente: "Se realizó un ejercicio econométrico que

---

[209] Véanse el informe del Grupo Especial *CE- Ropa de cama*, *supra*, nota 204, párrafo 6.159, y el informe del Grupo Especial *México - Jarabe de maíz*, *supra*, nota 65, párrafo 7.128.

[210] Brasil - Prueba documental 14, Acta Nº 576, página 13.

[211] Por esta razón, no consideramos necesario realizar un examen detallado de los otros casos en que la Argentina alega que la CNCE consideró la productividad. Sin embargo, observamos que en algunos casos la Argentina se ha referido a afirmaciones de la CNCE sobre la producción, que no es lo mismo que la productividad.

> muestra, para el período enero de 1995 a junio de 1999, que el precio del producto en el mercado interno es función del volumen de importaciones del mes anterior, del precio del producto importado y del precio de la carne vacuna. La inclusión del precio del maíz en el modelo mencionado no arrojó resultados satisfactorios, lo cual indica que la importante variabilidad del precio del pollo eviscerado entero no se condice con la evolución del precio del maíz. No obstante ambas variables presentan tendencias similares ... ." [Acta Nº 576, páginas 24 y 25] Este análisis se basó en los elementos presentados en el Informe Técnico a fs. 7371/2 y fs. 7491/507. En el Acta CNCE Nº 576 también se contempla el análisis de la evolución del nivel general de actividad señalándose que "La recesión económica no afectó mayormente el consumo de pollos eviscerados enteros, ya que el mismo continuó aumentando (en 1998 aumentó 14 por ciento)." [Acta Nº 576, página 25] Por último, con relación a los precios relativos en el Acta CNCE Nº 576 se menciona que "... respecto al precio del conjunto de bienes industriales y de la carne vacuna, representados, respectivamente, por el Índice de Precios Industrial Mayorista de Productos Manufacturados y por el promedio simple de los Índices de Precios al Consumidor para la carne vacuna fresca, cortes traseros y delanteros muestran la misma tendencia que la registrada en los ingresos por ventas descripta, aunque en el caso del segundo precio relativo, las variaciones anuales muestran una disminución de mayor intensidad en 1998, como consecuencia del incremento de los precios de la carne vacuna de ese año". [Acta Nº 576, página 14] El análisis anterior se sustentó en la información presentada en el Informe Técnico, en particular en el cuadro Nº 16 de fs. 7474 y su descripción a fs. 7410. Con relación al cuadro Nº 16 del Informe Técnico, llama la atención de la Argentina que el Brasil señalara que dicho cuadro solamente contiene el ingreso medio por ventas de pollos cuando además se presentan los precios relativos mencionados anteriormente."[212]

7.318 Además, la Argentina dio la siguiente respuesta a la pregunta 88 formulada por el Grupo Especial en relación con el cuadro 16 del Acta Nº 576:

> "El cuadro Nº 16, que pertenece al informe técnico GEGE/ITDF Nº 03/99 y forma parte integrante del Acta Nº 576, presenta el ingreso medio por ventas de un kg de pollo eviscerado fresco o refrigerado y los precios relativos del producto comparable, respecto al conjunto de bienes industriales y de la carne vacuna, representados, respectivamente, por el índice de precios industrial mayorista de productos manufacturados y por el promedio simple de los índices de precios al consumidor para la carne vacuna fresca, cortes traseros y delanteros.
>
> Al respecto, la comparación efectuada en relación con el Índice de Precios Industrial Mayorista de Productos Manufacturados responde a la necesidad de evaluar si el precio del producto en cuestión siguió la tendencia del resto de los productos manufacturados.
>
> Por otra parte, en relación al segundo índice, la República Argentina ha sido tradicionalmente un consumidor de carnes rojas, por lo que se consideró pertinente utilizar este índice para analizar los efectos que sus variaciones podrían tener sobre la carne de pollo, a partir de un cierto grado de sustitución entre la carne vacuna y la carne aviar.

[212] Véase la respuesta de la Argentina a la pregunta 59 formulada por el Grupo Especial.

> De esta manera, según surge de dicho cuadro en los dos precios relativos analizados se observa la misma tendencia que en los ingresos medios por ventas del producto en cuestión, aunque en el caso del precio relativo al promedio simple de la carne vacuna las variaciones anuales muestran una disminución de mayor intensidad en 1998 como consecuencia del incremento de los precios de la carne vacuna en ese año. En efecto, tal como se indica en la sección de mercado del informe técnico GEGE/ITDF Nº 03/99, punto VI.5 "Evolución reciente del mercado", fs. 7371, tercer párrafo "Durante 1998 se observó un incremento adicional en la demanda de pollo originado en el efecto sustitución que siguió a los fuertes incrementos observados en el precio de la carne vacuna, precio que alcanzó su pico a mediados del año 1998. Con la posterior caída de estas cotizaciones, no se observó una retracción en el consumo de pollo. Esta situación se debería a que la percepción del mercado es que el nivel de precios de los pollos es tan bajo que, incluso, estaría incidiendo en la disminución del precio de la carne vacuna."
>
> En consecuencia, resulta claro que la disposición del artículo 3.4 ha sido considerada respecto de lo que dispone en el sentido de que: "El examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional de que se trate incluirá una evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes que influyan en el estado de esa rama de producción, incluidos … los factores que afecten a los precios internos … ."[213]

7.319 A nuestro juicio, los pasajes que figuran *supra* pertenecientes a la determinación definitiva de la existencia de daño formulada por la CNCE (Acta Nº 576 y el Informe Técnico que la acompaña) indican claramente que la CNCE efectivamente consideró los factores que afectaban a los precios internos al considerar la evolución de los precios del pollo en relación con la evolución del precio de productos sustitutivos. Por consiguiente, rechazamos la reclamación del Brasil de que la CNCE no consideró los factores que afectaban a los precios internos.

iii) Magnitud del margen de dumping

7.320 Los únicos argumentos formulados por la Argentina en relación con la consideración por la CNCE de la magnitud del margen de dumping a los efectos del párrafo 4 del artículo 3 del *Acuerdo Antidumping* figuran en los dos párrafos siguientes, pertenecientes a la Primera comunicación escrita de la Argentina:

> "En un contexto de tipo de cambio fijo y recesión, sumado a las consideraciones ya expuestas respecto a las características del mercado argentino, los efectos de prácticas desleales como el dumping se potencian aún con márgenes poco significativos. Esto es, por otra parte, doblemente válido en *commodities* como el producto de referencia, donde la competencia se da primordialmente por la variable precio.
>
> En tal sentido, y recordando lo ya expuesto respecto a la potencialidad del Brasil en términos de volcar excedentes en condiciones de competencia desleal, márgenes entre el 8 por ciento y 14 por ciento son significativos y así fueron evaluados, por su impacto potencial sobre la producción argentina, por la autoridad investigadora."[214]

[213] Véase la respuesta de la Argentina a la pregunta 88 formulada por el Grupo Especial.

[214] Véase la Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafos 294 y 295.

7.321 Observamos que la Argentina no ha indicado en qué parte del Acta Nº 576 de la CNCE se exponen esos argumentos ni nos ha señalado ningún otro documento en que se alegue que la CNCE haya considerado esos argumentos. Por consiguiente, esos argumentos constituyen una justificación *ex post* que no podemos tener en cuenta. En cualquier caso, observamos que la Argentina, al mencionar los márgenes de dumping del 8 por ciento al 14 por ciento, se refiere a los márgenes calculados por el solicitante en su solicitud. No son los márgenes calculados por la DCD durante la investigación. Además, la CNCE concluyó su análisis de la existencia de daño (el 23 de diciembre de 1999) seis meses antes de que la DCD concluyera su investigación sobre la existencia de dumping (el 23 de junio de 2000), por lo que no vemos cómo pudo la CNCE haber tenido en cuenta la magnitud del margen de dumping en su análisis de la existencia de daño.

7.322 Por las razones que anteceden, aceptamos la reclamación del Brasil de que la Argentina infringió el párrafo 4 del artículo 3 del *Acuerdo Antidumping* porque la CNCE no consideró la magnitud del margen de dumping en su análisis de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional.

iv) Efectos negativos reales o potenciales en el flujo de caja ("cash flow"), el crecimiento, la capacidad de reunir capital o la inversión

7.323 La Primera comunicación escrita de la Argentina contenía los argumentos más detallados en relación con el supuesto análisis por la CNCE del flujo de caja ("cash flow"), el crecimiento, la capacidad para reunir capital y la inversión:

> "En primer lugar cabe señalar, a juicio de la Argentina, una consideración de contexto respecto a las modalidades de financiamiento de las empresas en nuestro país. En tal sentido, el mercado de capitales nunca ha sido una fuente de significación, con algunas esporádicas excepciones como ha sido parte de la década del 90, lo cual se refleja en gran medida en la normativa contable vigente.
>
> Normativamente, en virtud del artículo 299 de la Ley 19550 las empresas están obligadas a presentar el "Estado de Origen y Aplicación de Fondos" que, a diferencia del cash-flow en el sentido estricto de contabilidad financiera, no es una desagregación detallada del estado de flujo de efectivo sino meramente un detalle sintético de los conceptos que han aumentado o disminuido los fondos. En consecuencia, estas partidas no permiten concluir en ningún sentido respecto de la evolución del flujo de caja.
>
> En virtud de lo expuesto en el punto anterior, los indicadores que por aproximación permitirían efectuar algún tipo de análisis en términos de la variable de referencia serían los de liquidez y punto de equilibrio, los cuales han sido analizados en forma consistente en el Informe Técnico adjunto al Acta 576.
>
> Finalmente, y en consonancia con lo dicho en el párrafo 296 *supra*, así como respecto de los mecanismos de financiación del sector, ninguna de las empresas peticionantes cotiza en bolsa ni ha recurrido nunca al mercado de capitales, en virtud de lo cual e independientemente de las normas vigentes en la materia el requerimiento del análisis del cash-flow no es relevante ni tampoco factible de efectuar."[215]

7.324 En consecuencia, la Argentina alega que, a causa de las particulares circunstancias normativas y de mercado en que operan los productores argentinos de pollos, determinados factores del párrafo 4 del artículo 3 no eran pertinentes respecto del estado de la rama de producción nacional.

[215] *Id.*, párrafos 296-299.

Sin embargo, no encontramos ninguna referencia a esta explicación en ninguno de los documentos preparados por la CNCE o para ella (es decir, ni en la determinación definitiva de la existencia de daño formulada por la CNCE ni en el Informe Técnico adjunto a ésta). Por esta razón, debemos tratar estos argumentos como una justificación *ex post* que no podemos tener en cuenta. Dejando de lado esos argumentos, no hay nada en el expediente que nos sugiera que la CNCE haya considerado el flujo de caja, el crecimiento, la capacidad para reunir capital o la inversión. Además, recordamos que tanto el Grupo Especial que se ocupó del asunto *México - Jarabe de maíz* como el Grupo Especial que se ocupó del asunto *CE - Ropa de cama* constataron que "las autoridades, aunque pueden determinar que algunos factores no son pertinentes o no tienen un peso significativo en la decisión, no pueden simplemente pasar por alto esos factores, y están obligadas a explicar cómo han llegado a la conclusión de que no son pertinentes o carecen de importancia".[216] Estamos de acuerdo con esa constatación y señalamos que no hay nada en el expediente que sugiera que la CNCE excluyó esos factores porque había constatado que no eran pertinentes o carecían de importancia en su decisión sobre la existencia de daño. En consecuencia, constatamos que la CNCE no consideró esos factores, infringiendo el párrafo 4 del artículo 3 del *Acuerdo Antidumping*.

7.325 En la Reclamación 39, el Brasil aduce que la constatación que hemos formulado en el párrafo precedente de que la Argentina infringió el párrafo 4 del artículo 3 debería llevarnos necesariamente a la conclusión de que la Argentina infringió también el párrafo 1 del artículo 3 del *Acuerdo Antidumping*. La Argentina no responde a este argumento. A nuestro juicio, existe una relación obvia entre los párrafos 1 y 4 del artículo 3. El párrafo 1 b) del artículo 3 exige "un examen objetivo […] de la consiguiente repercusión de [las] importaciones sobre los productores nacionales" de los productos en cuestión. El párrafo 4 del artículo 3 dispone que "[e]l examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional de que se trate incluirá una evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes que influyan en el estado de esa rama de producción". Consideramos que "[e]l examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping" a que se refiere el párrafo 4 del artículo 3 es precisamente el mismo "examen objetivo […] de la consiguiente repercusión de [las] importaciones" a que se refiere el párrafo 1 b) del artículo 3. Por lo tanto, en la medida en que un Miembro no realice un "examen [adecuado] de la repercusión de las importaciones objeto de dumping" a los efectos del párrafo 4 del artículo 3, ese Miembro tampoco realiza un "examen objetivo […] de la consiguiente repercusión de [las] importaciones" en el sentido del párrafo 1 b) del artículo 3. Por consiguiente, habida cuenta de que hemos constatado que la Argentina infringió el párrafo 4 del artículo 3 del *Acuerdo Antidumping*, constatamos también que la Argentina infringió el párrafo 1 b) del artículo 3 de dicho Acuerdo.

7.326 El Brasil alega también (Reclamación 40) que una infracción del párrafo 4 del artículo 3 incumpliría automáticamente las prescripciones procesales establecidas en el párrafo 2.2 del artículo 12. Como se ha indicado *supra* respecto de la Reclamación 33, una vez que se constata que la determinación de la existencia de daño formulada por la CNCE es incompatible con las prescripciones jurídicas pertinentes, las constataciones relativas a la idoneidad del aviso dado por la CNCE carecen de importancia.[217] Por consiguiente, no es necesario ni procedente que examinemos esa reclamación.

c) Conclusión

7.327 Por las razones que anteceden, constatamos que la Argentina infringió los párrafos 1 b) y 4 del artículo 3 al no evaluar todos los factores e índices económicos enumerados en el párrafo 4 del artículo 3 del *Acuerdo Antidumping*. No consideramos necesario abordar la Reclamación 40 del Brasil.

---

[216] Véase el informe del Grupo Especial *CE - Ropa de cama*, *supra*, nota 204, párrafo 6.162, y el informe del Grupo Especial *México - Jarabe de maíz*, *supra*, nota 65, párrafo 7.129.

[217] Véase el párrafo 7.293 *supra*.

10. Rama de producción nacional - Reclamación 41

7.328 Esta reclamación se refiere a la definición de la expresión "rama de producción nacional" contenida en el párrafo 1 del artículo 4 del *Acuerdo Antidumping*.

a) Argumentos de las partes/de los terceros

7.329 El Brasil señala que el párrafo 1 del artículo 4 define la expresión "rama de producción nacional" como el conjunto de los productores nacionales de los productos similares, o aquellos de entre ellos cuya producción conjunta constituya "una proporción importante" de la producción nacional total de dichos productos. El Brasil sostiene que la referencia que se hace en el párrafo 1 del artículo 4 a "*a major proportion*" (una proporción importante) significa "*the majority*" (la mayoría), o la parte mayor en comparación con el todo (es decir, más del 50 por ciento). El Brasil sostiene que la Argentina infringió el párrafo 1 del artículo 4 porque la CNCE definió la rama de producción nacional como aquellos productores cuya producción conjunta constituía el 46 por ciento -y, en consecuencia, menos de la mayoría- del total de la producción nacional y recopiló datos sobre el daño relativos a ellos.

7.330 La Argentina argumenta que el párrafo 1 del artículo 4 omitió deliberadamente definir lo que se entiende por "una proporción importante". La Argentina niega que "una proporción importante" deba ser superior al 50 por ciento y señala que la práctica de otros Miembros corrobora su interpretación.

7.331 Los Estados Unidos afirman que el párrafo 1 del artículo 4 se limita a definir la "rama de producción nacional" y no impone ninguna obligación a los Miembros. Los Estados Unidos señalan también que "una proporción importante" no significa necesariamente "la mayoría", sino que también puede significar "*unusually important*, *serious*, *or significant*" (especialmente importante, considerable o significativo). Los Estados Unidos aducen también que los redactores del *Acuerdo Antidumping* fueron bastante explícitos cuando pretendieron establecer el requisito de la mayoría con respecto a una obligación determinada, como en el caso del requisito de una legitimación del 50 por ciento establecido en el párrafo 4 del artículo 5.

7.332 Según las Comunidades Europeas, la expresión "proporción importante" no significa la mayoría de la producción nacional, sino una parte importante de ella, que puede ser inferior al 50 por ciento. Las Comunidades Europeas se basan en la misma definición de "proporción importante" que los Estados Unidos. Las Comunidades Europeas señalan también que el párrafo 2 del artículo 4 se refiere a "una" proporción importante, y no a "la" proporción importante, sugiriendo que puede haber más de una proporción importante.

7.333 Las Comunidades Europeas afirman también que su interpretación está apoyada por el párrafo 4 del artículo 5, que establece que no se iniciará una investigación si las autoridades no han determinado que una solicitud ha sido hecha "por o en nombre de la rama de producción nacional". El párrafo 4 del artículo 5 expresa lo siguiente:

> "La solicitud de considerará hecha 'por la rama de producción nacional o en nombre de ella' cuando esté apoyada por productores nacionales cuya producción conjunta represente más del 50 por ciento de la producción total del producto similar producido por la parte de la rama de producción nacional que manifieste su apoyo o su oposición a la solicitud. No obstante, no se iniciará ninguna investigación cuando los productores nacionales que apoyen expresamente la solicitud representen menos del 25 por ciento de la producción total del producto similar producido por la rama de producción nacional."

7.334 Las Comunidades Europeas afirman que, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 5, podrá considerarse que una solicitud ha sido hecha "por o en nombre de la rama de producción nacional" aun cuando los productores que apoyen la solicitud representen menos del 50 por ciento de la producción nacional. La expresión "rama de producción nacional" tiene el mismo sentido en todo el *Acuerdo Antidumping*. Si en determinadas circunstancias puede considerarse que un número de productores que representan menos del 50 por ciento de la producción nacional constituyen "una proporción importante" de la producción nacional a los efectos del párrafo 4 del artículo 5, lo mismo puede considerarse también a los efectos de las demás disposiciones del *Acuerdo Antidumping*. Además, no sería lógico que se permitiera la iniciación de una investigación sobre la base de una solicitud presentada por productores que representaran menos del 50 por ciento de la producción nacional para que posteriormente sólo se pudiera llegar a la conclusión de que el daño sufrido por esos productores, debido al porcentaje de la producción nacional que representaban, no constituía un daño a la "rama de producción nacional".

7.335 Las Comunidades Europeas aducen también que, aun cuando "una proporción importante" efectivamente signifique la mayoría (es decir, más del 50 por ciento), ello no significa necesariamente que la determinación de la existencia de daño formulada por una autoridad investigadora deba evaluar datos correspondientes a la mayoría de los productores nacionales. En primer lugar, en caso de que un productor nacional que forme parte de la rama de producción nacional no coopere en la investigación, como de hecho ocurrió en el caso que examinamos, las autoridades, de conformidad con las disposiciones del párrafo 8 del artículo 6 y del Anexo II, pueden recurrir a los "hechos de que se tenga conocimiento" para determinar si ese productor ha sufrido daño. A tal fin, los "hechos de que se tenga conocimiento" pertinentes podría incluir los datos obtenidos de otros productores que hubieran cooperado en la investigación. En segundo lugar, al evaluar el estado de la rama de producción nacional, las autoridades pueden utilizar técnicas de muestreo. Dicho de otro modo, las autoridades investigadoras pueden considerar que los datos relativos a algunos productores nacionales son representativos del estado de toda la rama de producción nacional. La posibilidad de utilizar técnicas de muestreo está expresamente prevista en el párrafo 10 del artículo 6 con respecto a la determinación de la existencia de dumping. No hay ninguna razón para que no se permita utilizar también técnicas similares de muestreo a los efectos de la determinación de la existencia de daño, sin perjuicio del requisito general del párrafo 1 del artículo 3 según el cual la determinación de la existencia de daño debe basarse en "pruebas positivas" y comprender un "examen objetivo" de los hechos pertinentes.

7.336 El Brasil rechaza el argumento de los Estados Unidos de que el párrafo 1 del artículo 4 no impone ninguna obligación a los Miembros. El Brasil sostiene que el párrafo 1 del artículo 4 exige que los Miembros interpreten la expresión "rama de producción nacional" de manera compatible con la definición que figura en esa disposición. El Brasil rechaza también el argumento de las Comunidades Europeas relativo a los requisitos en materia de legitimación establecidos por el párrafo 4 del artículo 5, sobre la base de que no hay en el párrafo 4 del artículo 5 ninguna disposición que equipare los "productores que apoyen expresamente la solicitud" a la "rama de producción nacional".

b) Evaluación del Grupo Especial

7.337 La parte pertinente del párrafo 1 del artículo 4 dispone lo siguiente:

> "A los efectos del presente Acuerdo, la expresión 'rama de producción nacional' se entenderá en el sentido de abarcar el conjunto de los productores nacionales de los productos similares, o aquéllos de entre ellos cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la producción nacional total de dichos productos."

7.338 En primer lugar debemos determinar si el párrafo 1 del artículo 4 impone o no alguna obligación a los Miembros, es decir, si podría o no constatarse que la Argentina ha actuado de manera incompatible con el párrafo 1 del artículo 4 (y no con alguna otra disposición del *Acuerdo Antidumping*) al utilizar una definición de "rama de producción nacional" distinta de la prescrita en el párrafo 1 del artículo 4. Observamos que el párrafo 1 del artículo 4 dispone que la expresión "rama de producción nacional" "se entenderá" de una manera específica. A nuestro juicio, esto impone a los Miembros la obligación expresa de entender la expresión "rama de producción nacional" de esa manera específica. Por consiguiente, si un Miembro entendiera de manera diferente la expresión en el contexto de una investigación antidumping, ese Miembro incumpliría la obligación establecida en el párrafo 1 del artículo 4.

7.339 Tras haber constatado que el párrafo 1 del artículo 4 efectivamente contiene una obligación que la Argentina podría haber incumplido, debemos determinar si la incumplió o no al definir la "rama de producción nacional" como los productores del 46 por ciento de la producción nacional total. En particular, debemos considerar si la expresión "una proporción importante" significa o no que la "rama de producción nacional" debe incluir a productores nacionales cuya producción conjunta constituya la mayoría, es decir, más del 50 por ciento, de la producción nacional total.[218]

7.340 En lo que se refiere al sentido corriente de la expresión "*major proportion*" (proporción importante), el Brasil afirma que esa expresión es sinónima de "*major part*" (mayor parte) que, a su vez, se define como "*the majority*" (la mayoría).[219] El Brasil sostiene que por "*the majority*" (la mayoría) se entiende "*the greater number or part*" (el número o parte mayor). El Brasil sostiene que no puede considerarse que el 46 por ciento de la producción nacional total sea la parte mayor del 100 por ciento de la producción nacional total. Las Comunidades Europeas y los Estados Unidos afirman que la palabra "*major*" no significa necesariamente "*majority*" (mayoría), sino que también puede significar "*unusually important, serious, or significant*" (especialmente importante, considerable o significativo).[220, 221]

7.341 Al considerar las diferentes definiciones de diccionario, observamos que la palabra "*major*" se define también como "*important, serious, or significant*" (importante, considerable o significativo).[222] Por consiguiente, es admisible una interpretación que defina la rama de producción nacional como los

[218] Observamos que esta reclamación no se refiere a la cuestión de si una autoridad investigadora puede definir directamente la "rama de producción nacional" como los productores nacionales "cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la producción nacional total", sin tratar de incluir primero en la "rama de producción nacional" al conjunto de los productores nacionales de productos similares.

[219] El Brasil se basa en *The Concise Oxford Dictionary of Current English* (Clarendon Press, 1995).

[220] *The New Shorter Oxford English Dictionary* (Clarendon Press, 1993).

[221] Las Comunidades Europeas adujeron también que su interpretación estaba apoyada por el párrafo 4 del artículo 5 del *Acuerdo Antidumping*. Este argumento no nos resulta convincente porque la norma del párrafo 4 del artículo 5 se relaciona con la legitimación de los solicitantes y no con la definición de la rama de producción nacional. Además, lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 5 no significa que la solicitud esté presentada necesariamente "por" la rama de producción nacional cuando la apoyen productores nacionales que representen el 25 por ciento de la producción nacional. En tal caso, no puede excluirse la posibilidad de que la solicitud haya sido presentada simplemente "en nombre de" -y no "por"- la rama de producción nacional. No es lógico sugerir que una solicitud pueda haber sido presentada tanto "por" como "en nombre de" una única rama de producción nacional. En consecuencia, los productores nacionales que representen el 25 por ciento de la rama de producción nacional no constituyen necesariamente la "rama de producción nacional", contrariamente a la opinión expresada por las Comunidades Europeas.

[222] *The Concise Oxford Dictionary of Current English* (Clarendon Press, 1995), página 822.

productores nacionales de una proporción importante, considerable o significativa de la producción nacional total.[223] En realidad, este enfoque es totalmente compatible con la versión española del párrafo 1 del artículo 4, que se refiere a los productores que representen "una proporción importante" de la producción nacional. Además, el párrafo 1 del artículo 4 no define la "rama de producción nacional" como los productores de la proporción importante de la producción nacional total, sino que se refiere a los productores de una proporción importante de la producción nacional total. Si el párrafo 1 del artículo 4 se hubiera referido a la proporción importante, la prescripción habría sido claramente la de definir la "rama de producción nacional" como los productores que constituyan más del 50 por ciento de la producción nacional total.[224] Sin embargo, la referencia a una proporción importante sugiere que puede haber más de una "proporción importante" a los efectos de definir la "rama de producción nacional". Si hay múltiples "proporciones importantes", es inconcebible que cada una de las "proporciones importantes" pueda -o deba- exceder del 50 por ciento. Por tanto, esto apoya nuestra constatación de que es admisible definir la "rama de producción nacional" como los productores nacionales de una proporción importante, considerable o significativa de la producción nacional total. Por estas razones, constatamos que el párrafo 1 del artículo 4 del *Acuerdo Antidumping* no exige que los Miembros definan la "rama de producción nacional" como los productores nacionales que representen la mayoría, o más del 50 por ciento, de la producción nacional total.

7.342 No hay nada en el expediente que sugiera que, en las circunstancias del caso presente, el 46 por ciento de la producción nacional total no sea una proporción importante, considerable o significativa de la producción nacional total. Por consiguiente, rechazamos la reclamación del Brasil de que la Argentina infringió el párrafo 1 del artículo 4 del *Acuerdo Antidumping* al definir la "rama de producción nacional" como los productores nacionales que representaban el 46 por ciento de la producción nacional total.

7.343 Por último, el Brasil ha aducido que si el *Acuerdo Antidumping* no establece una pauta específica para determinar lo que constituye una proporción importante de la producción nacional total, las autoridades investigadoras están obligadas a aclarar expresamente las razones por las que han constatado que un porcentaje inferior al 50 por ciento puede considerarse una proporción importante.[225] Sin embargo, no encontramos ningún fundamento para una obligación de esa índole en el párrafo 1 del artículo 4 del *Acuerdo Antidumping*.

c) Conclusión

7.344 En vista de lo anterior, llegamos a la conclusión de que la Argentina no infringió el párrafo 1 del artículo 4 al definir la rama de producción nacional como los productores nacionales que representaban el 46 por ciento de la producción nacional total.

11. Establecimiento de derechos variables - Reclamaciones 28 a 30

7.345 El presente caso se refiere al establecimiento, mediante la Resolución Nº 574/2000 de derechos antidumping variables sobre los pollos procedentes del Brasil. Las Reclamaciones 28 a 30 se refieren principalmente a la compatibilidad de los derechos antidumping variables con el artículo 9 del *Acuerdo Antidumping*.

[223] Recordamos que, de conformidad con el párrafo 6 ii) del artículo 17 del *Acuerdo Antidumping*, si una interpretación es "admisible[…]", estamos obligados a aceptarla.

[224] Si el párrafo 1 del artículo 4 se hubiera referido a "la" proporción importante, quizá habríamos estado obligados a aceptar la interpretación que hace el Brasil del párrafo 1 del artículo 4.

[225] Primera declaración oral del Brasil, párrafo 87.

a) Argumentos de las partes/de los terceros

7.346 El Brasil alega que la Argentina infringió los párrafos 2 y 3 del artículo 9 al establecer un derecho antidumping variable que puede exceder del margen de dumping establecido por la DCD durante su investigación y que, por consiguiente, puede percibirse en una cuantía "inapropiada" (Reclamaciones 28 y 29). Ello se debe a que el derecho está basado en la diferencia entre el precio f.o.b. facturado y un "valor mínimo de exportación" calculado respecto de cada exportador del que se ha constatado que ha practicado dumping por lo que, dependiendo de la cuantía del precio f.o.b. facturado para una transacción de importación determinada, esa diferencia (y, por consiguiente, el derecho resultante) puede, en ocasiones, exceder del margen de dumping calculado durante la investigación respecto del exportador pertinente. El Brasil sostiene que los derechos antidumping no deben exceder del margen de dumping establecido durante la investigación (de conformidad con el artículo 2 del *Acuerdo Antidumping*). El argumento del Brasil se basa en la referencia que el párrafo 3 del artículo 9 hace al "margen de dumping establecido de conformidad con el artículo 2". El Brasil afirma que la única disposición del artículo 2 relativa al establecimiento de un margen de dumping es el párrafo 4.2 del artículo 2, que se refiere al margen de dumping establecido "durante la etapa de investigación". En consecuencia, según el Brasil, el "margen de dumping" a que se refiere el párrafo 3 del artículo 9 debe ser el margen de dumping establecido "durante la etapa de investigación". Según el Brasil, el "valor mínimo de exportación" determinado en la Resolución Nº 574/2000 no reúne las condiciones de un margen de dumping establecido de conformidad con el artículo 2, puesto que no refleja el valor normal y el precio de exportación conforme a la información facilitada por los exportadores y examinada por la autoridad investigadora en la investigación. El Brasil afirma que un Miembro no puede suponer que el valor normal establecido durante la investigación siga siendo el mismo en algún momento futuro en el que se perciban los derechos. El Brasil sostiene que es probable que las circunstancias del mercado conducentes a un cambio del precio de exportación lleven también a un cambio del valor normal. El Brasil afirma también que la Argentina infringió el párrafo 2.2 del artículo 12 porque no explicó en su decisión de establecer un derecho antidumping la forma en que estableció los "valores mínimos de exportación" ni las razones de haberlos establecido (Reclamación 30).

7.347 La Argentina sostiene que el *Acuerdo Antidumping* no regula el tipo de derechos antidumping que pueden establecer los Miembros. La Argentina afirma que, en la práctica, los Miembros han establecido tres tipos diferentes de derechos: derechos fijos *ad valorem*, derechos fijos específicos y derechos variables. La Argentina afirma que, cuando los derechos se establecen prospectivamente (como ha hecho la Argentina), el párrafo 3.2 del artículo 9 prevé la devolución de los derechos percibidos en exceso del margen de dumping. La Argentina observa que el hecho de que los exportadores brasileños no hayan solicitado ninguna devolución significa que no se ha percibido ningún derecho en exceso del margen de dumping. La Argentina afirma también que estableció un derecho variable precisamente para asegurar que la cuantía del derecho no excedería del margen de dumping: si los precios de exportación quedaban alineados con el valor normal, no se percibiría ningún derecho. La Argentina sostiene también que incluso la utilización de derechos fijos *ad valorem* -los que el Brasil habría deseado que estableciera la Argentina- en ocasiones puede hacer que los derechos excedan del margen de dumping, porque el margen real de dumping puede ser inferior al establecido durante la investigación. La Argentina afirma que cumplió lo dispuesto en el párrafo 2.2 del artículo 12 porque las diversas determinaciones publicadas se referían a las comunicaciones presentadas por los exportadores y porque todos los hechos esenciales se dieron a conocer a las partes interesadas.

7.348 El Canadá desearía que el Grupo Especial rechazara la reclamación del Brasil. En lo que se refiere a la relación entre los párrafos 2 y 3 del artículo 9, el Canadá afirma que una cuantía de un derecho admisible con arreglo al párrafo 3 del artículo 9 es "apropiada" a los efectos del párrafo 2 del artículo 9. El Canadá rechaza el argumento del Brasil de que un derecho no debe exceder del margen de dumping establecido durante la investigación. Según el Canadá, no hay nada que limite el margen

pertinente de dumping a una cuantía invariable constatada durante el período de investigación. El Canadá afirma que el enfoque del Brasil menoscabaría el objeto y fin del *Acuerdo Antidumping* y el artículo VI del *GATT*, que consiste en establecer un mecanismo para hacer frente a situaciones comerciales no equitativas en la que los productos se venden a precios inferiores a su valor normal. En particular, el enfoque del Brasil permitiría a los exportadores incurrir en dumping (tras el establecimiento de una medida antidumping) con márgenes incluso mayores que los que aplicaron en el curso de la investigación, sin que el Miembro importador pudiera establecer un nivel de derecho que excediera del margen de dumping constatado durante la investigación. El Canadá afirma que este menoscabo del objeto y fin del *Acuerdo Antidumping* y el artículo VI del *GATT* se evitaría si los Miembros estuviera facultados para imponer derechos acordes con el margen de dumping existente en el momento en que se percibieran los derechos. Según el Canadá, aunque los Miembros pueden optar por aplicar un derecho cuyo tipo equivalga al margen de dumping constatado en la investigación inicial, no hay ninguna disposición en el párrafo 3 del artículo 9 que les obligue a hacerlo.

7.349 Las Comunidades Europeas afirman que no es necesario que el margen de dumping a que se refiere el párrafo 3 del artículo 9 sea el calculado durante la investigación. Las Comunidades Europeas señalan que el párrafo 3 del artículo 9 permite la percepción de derechos de forma retrospectiva, lo que necesariamente comporta el cálculo de un margen de dumping fuera del período inicial de la investigación. Las Comunidades Europeas sostienen que la reclamación del Brasil significaría que la aplicación de derechos antidumping variables, o la aplicación de cualquier tipo de derechos específicos, es incompatible *per se* con el párrafo 2 del artículo 9. Las Comunidades Europeas discrepan del Brasil dado que, excepto a efectos de establecer si un margen de dumping es *de minimis* con arreglo al párrafo 8 del artículo 5, el *Acuerdo Antidumping* no requiere que los márgenes de dumping se expresen en un porcentaje del precio de exportación, ni prescribe un tipo determinado de derechos.

7.350 Las Comunidades Europeas sostienen que la percepción de derechos variables en cuantía equivalente a la diferencia entre el valor normal establecido para el período de investigación y los precios de exportación de los envíos realizados después del establecimiento de los derechos está expresamente prevista en el párrafo 4 del artículo 9 del *Acuerdo Antidumping*. El párrafo 4 ii) del artículo 9 establece reglas para calcular el tipo correspondiente a "todos los demás" cuando los derechos aplicados a los exportadores incluidos en la muestra se calculen sobre la base del valor normal prospectivo. Por consiguiente, se supone que la utilización de esos valores normales prospectivos no es incompatible *per se* con el *Acuerdo Antidumping*, incluidos los párrafos 2 y 3 de su artículo 9.

b) Evaluación del Grupo Especial

7.351 En primer lugar consideraremos las Reclamaciones 28 y 29 del Brasil, que están basadas en los párrafos 2 y 3 del artículo 9 del *Acuerdo Antidumping*, respectivamente. Según esas disposiciones:

> "9.2 Cuando se haya establecido un derecho antidumping con respecto a un producto, ese derecho se percibirá en la cuantía apropiada en cada caso y sin discriminación sobre las importaciones de ese producto, cualquiera que sea su procedencia, declaradas objeto de dumping y causantes de daño, a excepción de las importaciones procedentes de fuentes de las que se hayan aceptado compromisos en materia de precios en virtud de lo establecido en el presente Acuerdo. (…)
>
> 9.3 La cuantía del derecho antidumping no excederá del margen de dumping establecido de conformidad con el artículo 2."

7.352 Los apartados 3.1 a 3.3 del artículo 9 disponen que:

> "9.3.1 Cuando la cuantía del derecho antidumping se fije de forma retrospectiva, la determinación de la cantidad definitiva que deba satisfacerse en concepto de derechos antidumping se efectuará lo antes posible, normalmente en un plazo de 12 meses, y en ningún caso de más de 18 meses, a contar de la fecha en que se haya formulado una petición de fijación definitiva de la cuantía del derecho antidumping. Toda devolución se hará con prontitud y normalmente no más de 90 días después de la determinación, de conformidad con el presente apartado, de la cantidad definitiva que deba satisfacerse. En cualquier caso, cuando no se haya hecho la devolución en un plazo de 90 días, las autoridades darán una explicación a instancia de parte.
>
> 9.3.2 Cuando la cuantía del derecho antidumping se fije de forma prospectiva, se preverá la pronta devolución, previa petición, de todo derecho pagado en exceso del margen de dumping. La devolución del derecho pagado en exceso del margen real de dumping se efectuará normalmente en un plazo de 12 meses, y en ningún caso de más de 18 meses, a contar de la fecha en que el importador del producto sometido al derecho antidumping haya presentado una petición de devolución debidamente apoyada por pruebas. Normalmente la devolución autorizada se hará en un plazo de 90 días contados a partir de la decisión a que se hace referencia *supra*.
>
> 9.3.3 Cuando el precio de exportación se reconstruya de conformidad con las disposiciones del párrafo 3 del artículo 2, al determinar si se debe hacer una devolución, y el alcance de ésta, las autoridades deberán tener en cuenta los cambios que se hayan producido en el valor normal o en los gastos habidos entre la importación y la reventa y los movimientos del precio de reventa que se hayan reflejado debidamente en los precios de venta posteriores, y deberán calcular el precio de exportación sin deducir la cuantía de los derechos antidumping si se aportan pruebas concluyentes de lo anterior." (no se reproduce la nota de pie de página)

7.353 Al examinar las reclamaciones del Brasil, también consideramos necesario tener en cuenta el párrafo 4 del artículo 9 del *Acuerdo Antidumping*, que dispone lo siguiente:

> "9.4 Cuando las autoridades hayan limitado su examen de conformidad con la segunda frase del párrafo 10 del artículo 6, los derechos que se apliquen a las importaciones procedentes de exportadores o productores no abarcados por el examen no serán superiores:
>
> i) al promedio ponderado del margen de dumping establecido con respecto a los exportadores o productores seleccionados, o
>
> ii) cuando las cantidades que deban satisfacerse en concepto de derechos antidumping se calculen sobre la base del valor normal prospectivo, a la diferencia entre el promedio ponderado del valor normal correspondiente a los exportadores o productores seleccionados y los precios de exportación de los exportadores o productores que no hayan sido examinados individualmente,
>
> con la salvedad de que las autoridades no tomarán en cuenta a los efectos del presente párrafo los márgenes nulos y *de minimis* ni los márgenes establecidos en

> las circunstancias a que hace referencia el párrafo 8 del artículo 6. Las autoridades aplicarán derechos o valores normales individuales a las importaciones procedentes de los exportadores o productores no incluidos en el examen y que hayan proporcionado la información necesaria en el curso de la investigación, de conformidad con lo previsto en el apartado 10.2 del artículo 6."

7.354 Comenzamos examinando la reclamación del Brasil de que los derechos antidumping variables en cuestión son incompatibles con el párrafo 3 del artículo 9 porque se perciben tomando como referencia un margen de dumping establecido en el momento de la percepción (es decir, la diferencia entre un valor normal de referencia y el precio real de exportación). El Brasil alega que estos derechos no deben exceder del margen de dumping establecido durante la investigación. El Brasil afirma que "[d]esde el momento en que se impone el derecho antidumping hasta que se realiza un examen de la imposición de ese derecho, el único margen de dumping disponible, calculado de conformidad con el artículo 2, es el margen evaluado en la investigación, que figura en la determinación definitiva y se comunica a todas las partes interesadas mediante un aviso público, según lo establecido en el párrafo 2 del artículo 12 del *Acuerdo Antidumping*".[226]

7.355 Al analizar esta reclamación, observamos que no hay nada en el *Acuerdo Antidumping* que identifique explícitamente la forma que deben revestir los derechos antidumping. En particular, nada en el *Acuerdo Antidumping* prohíbe explícitamente la utilización de derechos antidumping variables. La Reclamación 29 del Brasil se basa en el párrafo 3 del artículo 9 del *Acuerdo Antidumping*. Tal como se indica en el párrafo 9 del *Acuerdo Antidumping*, el párrafo 3 del artículo 9 es una disposición relativa al establecimiento y percepción de derechos antidumping. El párrafo 3 del artículo 9 dispone que no se podrá percibir un derecho que exceda del margen de dumping establecido de conformidad con el artículo 2. Las modalidades para asegurar el cumplimiento de esta obligación figuran en los apartados 3.1, 3.2 y 3.3 del artículo 9, cada uno de los cuales aborda la fijación ("*assessment*") del derecho y la devolución de los derechos excesivos. El párrafo 3 del artículo 9, leído conjuntamente con los apartados 3.1 a 3.3, se centra principalmente en asegurar que los derechos antidumping definitivos no se fijen en exceso del margen de dumping pertinente y en velar por la devolución de los derechos en los casos en que, de no procederse a ésta, se percibirían derechos antidumping excesivos. Nuestra interpretación de que el párrafo 3 del artículo 9 se refiere principalmente a la fijación del derecho se ve corroborada por el hecho de que la disposición del *Acuerdo SMC* equivalente a dicho párrafo en términos generales, (a saber, el párrafo 4 del artículo 19) se refiere a la "perc[epción]" de derechos, y la nota 51 a esa disposición dice que "con el término 'percibir' se designa la **liquidación** ("*assessment*") **o la recaudación** definitivas de un derecho o gravamen" (sin negritas en el original).[227] A la luz de lo expuesto, no resulta obvio que -como aduce efectivamente el Brasil- el párrafo 3 del artículo 9 prohíba los derechos antidumping variables asegurando que los derechos antidumping no excedan del margen de dumping establecido durante "la etapa de investigación" de conformidad con el párrafo 4.2 del artículo 2. Ni el sentido corriente del párrafo 3 del artículo 9 ni su contexto (esto es, los apartados 3.1 a 3.3) apoyan esta opinión. Si el párrafo 3 del artículo 9 hubiera sido concebido para prohibir la utilización de derechos de aduana variables, cabe presumir que esa prohibición habría quedado claramente indicada.

---

[226] Segunda comunicación escrita del Brasil, párrafo 127.

[227] El *Acuerdo Antidumping* de la Ronda de Tokyo también es instructivo, habida cuenta de que el párrafo 3 de su artículo 8 decía que "[l]a cuantía del derecho antidumping no deberá exceder del margen de dumping determinado de conformidad con el artículo 2. **Por lo tanto**, si con posterioridad a la aplicación del derecho antidumping se concluye que el derecho percibido rebasa el margen real de dumping, la parte del derecho que exceda del margen será devuelta con la mayor rapidez posible" (sin negritas en el original). Esta disposición demuestra claramente que la prescripción general de que los derechos antidumping no excedan del margen de dumping se refiere a la fijación o liquidación del derecho antidumping.

7.356 El Brasil se basa en el párrafo 4.2 del artículo 2 del *Acuerdo Antidumping* para apoyar su argumento de que los derechos antidumping no pueden exceder del margen de dumping establecido durante la investigación. La parte pertinente del párrafo 4.2 del artículo 2 dispone que "la existencia de márgenes de dumping durante la etapa de investigación se establecerá normalmente sobre la base de una comparación entre un promedio ponderado del valor normal y un promedio ponderado de los precios de todas las transacciones de exportación comparables o mediante una comparación entre el valor normal y los precios de exportación transacción por transacción". El Brasil afirma que, como el párrafo 3 del artículo 9 se refiere al margen de dumping "establecido de conformidad con el artículo 2" y como la única disposición del artículo 2 que rige el establecimiento de un margen de dumping es el fragmento que figura más arriba del párrafo 4.2 del artículo 2, que se refiere a la "etapa de investigación", el margen de dumping pertinente a los efectos del párrafo 3 del artículo 9 es el establecido "durante la etapa de investigación". El Brasil sostiene que el margen de dumping se establece sobre la base de la información reunida y examinada durante la investigación y, en ese sentido, los márgenes de dumping se limitan al período de investigación, según se establece en el párrafo 4.2 del artículo 2 del *Acuerdo Antidumping*.

7.357 Consideramos que el argumento principal del Brasil interpreta erróneamente la referencia hecha en el párrafo 3 del artículo 9 al "margen de dumping". Sobre la base de ese texto, el Brasil se centra por completo en el párrafo 4.2 del artículo 2 y en la referencia que se hace en esa disposición a la "etapa de investigación". Sin embargo, el párrafo 3 del artículo 9 no se refiere al margen de dumping establecido "de conformidad con el párrafo 4.2 del artículo 2", sino al margen de dumping establecido "de conformidad con el artículo 2". A nuestro juicio, ello significa simplemente que, al asegurarse de que la cuantía del derecho no exceda del margen de dumping, un Miembro debería tomar como referencia el método que se expone en el artículo 2. Esto es completamente compatible con la cláusula introductoria del artículo 2, que establece una definición de dumping "[a] los efectos del presente Acuerdo". De hecho, no sería posible establecer un margen de dumping sin hacer referencia a los diversos elementos del artículo 2. Por ejemplo, no sería posible establecer un margen de dumping sin determinar el valor normal, conforme prevé el párrafo 2 del artículo 2, o sin introducir los ajustes pertinentes para garantizar una comparación equitativa, conforme prevé el párrafo 4 del artículo 2. Por consiguiente, el hecho de que el párrafo 4.2 del artículo 2, y únicamente esa disposición del artículo 2, esté relacionado con el establecimiento del margen de dumping "durante la etapa de investigación" no es determinante de la cuestión que tenemos ante nosotros, habida cuenta de que otras disposiciones del artículo 2 no contienen esa limitación.[228]

7.358 Nuestra opinión de que el Brasil interpreta erróneamente la referencia que se hace en el párrafo 3 del artículo 9 al "margen de dumping" se ve corroborada por el hecho de que la primera frase del párrafo 3 del artículo 8 del *Acuerdo Antidumping* de la Ronda de Tokio también hacía referencia al "margen de dumping determinado de conformidad con el artículo 2", aun cuando en el *Acuerdo Antidumping* de la Ronda de Tokio no había ninguna disposición equivalente al párrafo 4.2 del artículo 2 del *Acuerdo Antidumping*. En consecuencia, la referencia hecha en el *Acuerdo Antidumping* de la Ronda de Tokio al "margen de dumping determinado de conformidad con el artículo 2" debía referirse a las disposiciones del artículo 2 en general. No vemos ninguna razón por

[228] Considerado literalmente, el argumento del Brasil relativo al párrafo 4.2 del artículo 2 significaría que ese párrafo es la única disposición del artículo 2 que se aplica en el contexto del párrafo 3 del artículo 9. Ello es así porque el Brasil señala que el párrafo 3 del artículo 9 se refiere al "margen de dumping establecido de conformidad con el artículo 2" y que el párrafo 4.2 del artículo 2 es la única disposición del artículo 2 que se refiere al establecimiento de un "margen de dumping". Sin embargo, no podemos aceptar ese enfoque porque ello significaría que las disposiciones del artículo 2 que rigen las ventas no realizadas en el curso de operaciones comerciales normales, las comparaciones equitativas, etc. no se aplicarían en el contexto del párrafo 3 del artículo 9. Aunque el Brasil ha afirmado que su argumento no debería entenderse de esta forma (Segunda comunicación escrita del Brasil, párrafo 136), éste es el resultado inevitable de que el Brasil atribuya tal importancia a la expresión "margen de dumping" del párrafo 3 del artículo 9.

la que no quepa decir lo mismo de la disposición equivalente del *Acuerdo Antidumping*. Si los redactores del *Acuerdo Antidumping* hubieran tenido el propósito de referirse exclusivamente al párrafo 4.2 del artículo 2 en el contexto del párrafo 3 del artículo 9, el texto de esta última disposición habría sido "la cuantía del derecho antidumping no excederá del margen de dumping establecido de conformidad con el párrafo 4.2 del artículo 2". Esto no es lo que dice el párrafo 3 del artículo 9.

7.359 La interpretación del Brasil se ve también refutada por el contexto inmediato del párrafo 3 del artículo 9. Concretamente, al interpretar que el párrafo 3 del artículo 9 significa que los derechos antidumping no pueden percibirse en exceso del margen de dumping establecido durante la investigación inicial, el Brasil interpreta erróneamente el significado del párrafo 4 ii) del artículo 9 del *Acuerdo Antidumping*, que se refiere a los casos en que "las cantidades que deban satisfacerse en concepto de derechos antidumping se calculen sobre la base del valor normal prospectivo". A nuestro juicio, el párrafo 4 ii) del artículo 9 describe la utilización de derechos antidumping variables, que se calculan comparando el precio de exportación real (es decir, el del momento de la percepción) con un valor normal prospectivo. Dado que el párrafo 4 ii) del artículo 9 prevé expresamente la imposición de derechos antidumping variables, no hay ningún fundamento para que constatemos que el recurso de la Argentina a derechos variables (calculados sobre la base de valores mínimos de exportación utilizados como valores prospectivos) es forzosamente incompatibles con el párrafo 3 del artículo 9 del *Acuerdo Antidumping*.[229]

7.360 Observamos que el argumento del Brasil sostiene que el párrafo 4 ii) del artículo 9 "se refiere a los casos en que los derechos se fijan de forma retrospectiva".[230] Sin embargo, no vemos ninguna razón para llegar a la conclusión de que la fijación *retrospectiva* de derechos supone la utilización de un valor normal *prospectivo*. Al contrario, la fijación retrospectiva de derechos entraña la utilización de un valor normal real establecido en el momento de la fijación del derecho.

7.361 Otra confirmación contextual a nuestra interpretación del párrafo 3 del artículo 9 lo ofrece el apartado 3.1 del artículo 9, que prevé la percepción de derechos antidumping de forma retrospectiva. Por definición, la percepción retrospectiva de derechos supone calcular los márgenes de dumping sobre la base de información correspondiente a envíos individuales o períodos no comprendidos en el período inicial de investigación. Además, consideramos que, al destacar la importancia del margen de dumping establecido durante la investigación, el Brasil ha disminuido la importancia contextual del mecanismo de devolución previsto respecto de los derechos antidumping prospectivos. La primera frase del párrafo 3.2 del artículo 9 dispone que "[c]uando la cuantía del derecho antidumping se fije de forma prospectiva, se preverá la pronta devolución, previa petición, de todo derecho pagado en exceso del margen de dumping. La devolución del derecho pagado en exceso del margen **real** de dumping se efectuará normalmente en un plazo de 12 meses" (sin negritas en el original). En consecuencia, el párrafo 3.2 del artículo 9 prevé la devolución de los derechos antidumping percibidos en exceso del margen real ("*actual*" en la versión inglesa) de dumping. La palabra "actual" se define entre otras

[229] Observamos que la medida en cuestión calcula las cantidades que deben satisfacerse en concepto de derechos antidumping comparando el precio de exportación real con un "valor mínimo de exportación", que es ligeramente inferior al valor normal establecido durante la investigación. Por consiguiente, quizá no sea totalmente adecuado afirmar que el mecanismo argentino de percepción supone la utilización de un "valor normal" prospectivo. Sin embargo, sí entraña la utilización de un precio de referencia prospectivo, que a nuestro juicio es suficiente para incluirlo en el ámbito de aplicación del párrafo 4 ii) del artículo 9. Una conclusión distinta antepondría la forma al fondo, dado que significaría que se permite la percepción de derechos variables calculados con referencia a un valor normal prospectivo, y no la percepción de derechos inferiores calculados con referencia a un precio de referencia inferior al valor normal establecido durante la investigación.

[230] Segunda comunicación escrita del Brasil, párrafo 149.

cosas como "*existing now; current*" (que existe ahora; actual).[231] Por consiguiente, entendemos que el mecanismo de devolución previsto en el párrafo 3.2 del artículo 9 incluiría devoluciones de derechos antidumping pagados en exceso del margen de dumping vigente en el momento en que se percibe el derecho. En consecuencia, ello debilita aún más el argumento del Brasil de que el único margen de dumping pertinente hasta el momento en que se efectúe un examen con arreglo al párrafo 2 del artículo 11 es el margen establecido durante la investigación. Si la base para una devolución del derecho es el margen de dumping vigente en el momento de la percepción del derecho, no vemos ninguna razón por la que un Miembro no deba utilizar la misma base para la percepción del derecho. El Brasil ha señalado que las devoluciones no suponen la modificación del derecho y que sólo pueden obtenerse si las solicita el importador.[232] Si bien estos extremos pueden ser correctos, no cambian el hecho de que el mecanismo de devolución funcione con referencia al margen de dumping vigente en el momento de la percepción del derecho. Es este aspecto del mecanismo de devolución el que lo hace contextualmente pertinente para la cuestión que tenemos ante nosotros. En consecuencia, no vemos ninguna razón por la que no sea admisible[233] que un Miembro perciba derechos antidumping sobre la base del margen real de dumping vigente en el momento de la percepción del derecho.

7.362 El Brasil afirma también que la Argentina no estaba facultada para percibir derechos basándose en que el valor normal calculado durante la investigación permaneció constante después de la misma, omitiendo cualquier posible cambio de los precios en el mercado interno. Según el Brasil, no es improbable que los cambios en las condiciones del mercado o una mejora de la productividad del exportador creen una situación en la que el precio del producto disminuya, tanto en el mercado interno como en el mercado de exportación. En otras palabras, si se produce un cambio en el precio de exportación, puede también producirse un cambio en el valor normal. También en este caso discrepamos. En primer lugar, porque ya hemos indicado que el párrafo 4 ii) del artículo 9 se refiere a la utilización de un valor normal prospectivo. En segundo lugar, porque incluso los derechos fijos *ad valorem* percibidos de forma prospectiva se perciben sobre la base del supuesto de que ni el valor normal ni el precio de exportación (ni, por consiguiente, el margen de dumping) establecidos en la investigación variarán. En cualquier caso, un sistema de derechos variables concebido adecuadamente incluiría un mecanismo de devolución compatible con el párrafo 3.2 del artículo 9 y el examen por modificación de las circunstancias previsto en el párrafo 2 del artículo 11.

7.363 Por último, en apoyo de su argumento de que el margen de dumping a que se refiere el párrafo 3 del artículo 9 es el establecido durante el período de investigación, el Brasil preguntó cuál sería el propósito de establecer un margen de dumping en la investigación inicial si ese margen no delimitara la cuantía de los derechos que podrían percibirse con posterioridad.[234] Sin pretender dar una respuesta exhaustiva a esta pregunta, observamos que, de conformidad con el párrafo 8 del artículo 5 del *Acuerdo Antidumping*, se pondrá inmediatamente fin a la investigación cuando el margen de dumping sea *de minimis*. Por lo tanto, una de las principales razones para establecer un margen de dumping en la investigación es garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 8 del artículo 5.

7.364 Por los motivos que anteceden, constatamos que los derechos antidumping variables en cuestión no son incompatibles con el párrafo 3 del artículo 9, sólo porque se perciben tomando como referencia un margen de dumping establecido en el momento de la percepción (es decir, la diferencia

[231] *The Concise Oxford Dictionary of Current English* (Clarendon Press, 1995), página 14.

[232] Segunda comunicación escrita del Brasil, párrafo 141.

[233] Utilizamos este término refiriéndonos concretamente a la norma de examen del párrafo 6 ii) del artículo 17.

[234] Segunda comunicación escrita del Brasil, párrafo 133.

entre un 'valor mínimo de exportación', o valor normal de referencia, y el precio real de exportación).[235] Habida cuenta de que el Brasil no ha aducido que ninguno de los derechos antidumping realmente percibidos por las autoridades argentinas excedan del margen de dumping (vigente en el momento de la percepción del derecho), rechazamos la Reclamación 29 del Brasil.

7.365 En lo tocante a la Reclamación 28 del Brasil, que se basa en el párrafo 2 del artículo 9 del *Acuerdo Antidumping*, observamos que el Canadá ha afirmado que un derecho antidumping que esté en conformidad con el párrafo 3 del artículo 9 es necesariamente "apropiad[o]" en el sentido del párrafo 2 del artículo 9. El Brasil está de acuerdo con este criterio y aduce que "la infracción del párrafo 2 del artículo 9 depende enteramente de la infracción del párrafo 3 del artículo 9".[236] Observamos que el párrafo 3 del artículo 9 contiene una obligación específica con respecto a la cuantía del derecho antidumping que vaya a establecerse, mientras que el párrafo 2 del artículo 9 utiliza una redacción mucho más general al referirse a la percepción de derechos en la cuantía "apropiada". Concretamente, el párrafo 2 del artículo 9 no brinda ninguna orientación acerca de cuál puede ser la cuantía "apropiad[o]" de un derecho en un caso determinado. A falta de otra orientación con respecto a la idoneidad de la cuantía de los derechos antidumping, parecería razonable llegar a la conclusión de que un derecho antidumping que cumpla los requisitos del párrafo 3 del artículo 9 (es decir, que no exceda del margen de dumping) sería "apropiad[o]" en el sentido del párrafo 2 del artículo 9. Como ya hemos constatado que los derechos antidumping variables de la Argentina no son incompatibles con el párrafo 3 del artículo 9, y como el Brasil no ha aportado ninguna prueba adicional de que la cuantía de los derechos antidumping no era "apropiada", rechazamos la Reclamación 28 del Brasil.

7.366 El Brasil alega también (Reclamación 30) que la Argentina infringió el párrafo 2.2 del artículo 12 del *Acuerdo Antidumping* porque la Resolución Nº 574/2000 no explicó la forma en que la Argentina calculó los "valores mínimos de exportación". A nuestro juicio, una vez que se constata que una medida antidumping es incompatible con las disposiciones sustantivas del *Acuerdo Antidumping*, las constataciones relativas a la idoneidad del aviso de la DCD carecen de importancia.[237] Por consiguiente, habida cuenta de que hemos constatado que la Resolución Nº 574/2000 es incompatible con varias disposiciones sustantivas del *Acuerdo Antidumping*, no es necesario que examinemos esta reclamación.

c) Conclusión

7.367 A la luz de lo que antecede, llegamos a la conclusión de que la Argentina no infringió los párrafos 2 y 3 del artículo 9 del *Acuerdo Antidumping* al establecer derechos antidumping variables. Además, llegamos a la conclusión de que no es necesario que examinemos la Reclamación 30 del Brasil.

[235] Naturalmente, el alcance de esta constatación se limita a las circunstancias del asunto que nos ocupa, que se refiere al establecimiento inicial de derechos y no a la devolución prevista en el párrafo 3.2 del artículo 9 ni a los procedimientos de examen del artículo 11.

[236] Segunda comunicación escrita del Brasil, párrafo 124.

[237] Véase el párrafo 7.293 *supra*.

E. INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO VI DEL GATT DE 1994 Y DEL ARTÍCULO 1 DEL *ACUERDO ANTIDUMPING*

a) Argumentos de las partes

7.368 El Brasil considera que la Argentina ha actuado de forma incompatible con lo dispuesto en el artículo VI del *GATT de 1994* y el artículo 1 del *Acuerdo Antidumping*, que sólo permite aplicar medidas antidumping en las circunstancias previstas en el artículo VI y en virtud de investigaciones iniciadas y realizadas de conformidad con el *Acuerdo Antidumping*. El Brasil afirma que, como las reclamaciones expuestas en la sección III.A *supra* del presente informe indican la violación de varias disposiciones del *Acuerdo Antidumping*, se han infringido en consecuencia el artículo VI del *GATT de 1994* y el artículo 1 del *Acuerdo Antidumping*.

b) Evaluación del Grupo Especial

7.369 Al examinar esta cuestión, señalamos que un grupo especial "sólo necesita tratar las alegaciones que se deben abordar para resolver el asunto debatido en la diferencia".[238] Observamos que las reclamaciones del Brasil al amparo del artículo 1 del *Acuerdo Antidumping* y el artículo VI del *GATT de 1994* son reclamaciones dependientes, en el sentido de que dependen por completo de que se constate que la Argentina ha infringido otras disposiciones del *Acuerdo Antidumping*. No habría ninguna base para las reclamaciones del Brasil al amparo del artículo 1 del *Acuerdo Antidumping* y el artículo VI del *GATT de 1994* si no se constatara que la Argentina ha infringido otras disposiciones del *Acuerdo Antidumping*. A la luz del carácter dependiente de las reclamaciones formuladas por el Brasil al amparo del artículo 1 del *Acuerdo Antidumping* y el artículo VI del *GATT de 1994*, no vemos ningún propósito útil en adoptar una decisión a su respecto.[239] En particular, una decisión sobre esas reclamaciones dependientes no proporcionaría ninguna orientación adicional en cuanto a las medidas que ha de adoptar la Argentina para aplicar la recomendación que formulamos respecto a las infracciones de las que dependen.

c) Conclusión

7.370 A la luz de lo que antecede, no consideramos necesario examinar las reclamaciones formuladas por el Brasil al amparo del artículo VI del *GATT de 1994* y el artículo 1 del *Acuerdo Antidumping*.

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN

A. CONCLUSIONES

8.1 A la luz de las constataciones formuladas *supra*, llegamos a la conclusión de que:

a) La Argentina ha actuado de manera incompatible con las obligaciones que le incumben en virtud de las siguientes disposiciones:

---

[238] Informe del Órgano de Apelación *Estados Unidos - Camisas y blusas*, *supra*, nota 67, página 22.

[239] Señalamos que un enfoque similar fue seguido por los Grupos Especiales *Guatemala - Cemento II* (informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto *Guatemala - Cemento II*, *supra*, nota 48 párrafo 8.296) y *Estados Unidos - DRAM* (informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto *Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a los semiconductores para memorias dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) de un megabit como mínimo procedentes de Corea* ("*Estados Unidos - DRAM*"), WT/DS99/R, adoptado el 19 de marzo de 1999, DSR 1999.II, 521, párrafo 6.92).

i) párrafo 3 del artículo 5 del *Acuerdo Antidumping*, al determinar que había pruebas suficientes de dumping para iniciar una investigación (Reclamaciones 2, 4 y 6);

ii) párrafo 8 del artículo 5 del *Acuerdo Antidumping*, al no rechazar la solicitud y poner fin a la investigación sin demora en cuanto la autoridad en cuestión se cercioró de que no existían pruebas suficientes de daño o de amenaza de daño que justificaran la iniciación de la investigación (Reclamación 31);

iii) párrafo 1 del artículo 12 del *Acuerdo Antidumping*, al no efectuar la notificación prescrita a varios exportadores de cuyo interés en la investigación tenía conocimiento la autoridad investigadora, una vez que esa autoridad se cercioró de que existían pruebas suficientes para justificar la iniciación de una investigación antidumping (Reclamación 10);

iv) párrafo 1.1 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping*, al no conceder a varios exportadores un plazo de 30 días como mínimo para dar respuesta a los cuestionarios sobre el dumping enviados por la autoridad investigadora (Reclamación 11);

v) párrafo 1.3 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping*, al no facilitar a los exportadores conocidos y al Gobierno del Brasil el texto de la solicitud escrita tan pronto como se inició la investigación (Reclamación 14);

vi) párrafo 8 del artículo 6 y el Anexo II del *Acuerdo Antidumping*, al prescindir de los datos sobre el precio de exportación facilitados por determinados exportadores (Reclamación 17);

vii) párrafo 10 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping*, al no establecer, en el caso de dos exportadores, el margen de dumping que correspondía a cada uno de ellos (Reclamación 22);

viii) párrafo 4 del artículo 2 del *Acuerdo Antidumping*, al no tener debidamente en cuenta, al establecer el valor normal para un exportador, las diferencias en los fletes (Reclamación 23);

ix) párrafo 4 del artículo 2 del *Acuerdo Antidumping*, al no tener debidamente en cuenta, al establecer el valor normal para varios exportadores, las diferencias de tributación, fletes y costos financieros (Reclamación 24);

x) párrafo 4 del artículo 2 del *Acuerdo Antidumping*, al aumentar en un 9,09 por ciento los valores normales de todos los exportadores para reflejar supuestas diferencias en las características físicas de los pollos exportados a la Argentina y las de los vendidos en el Brasil (Reclamación 25);

xi) párrafo 4.2 del artículo 2 del *Acuerdo Antidumping*, al establecer un margen de dumping para dos exportadores sobre la base de un promedio ponderado inexacto del valor normal (Reclamación 27);

xii) párrafo 1 del artículo 3 del *Acuerdo Antidumping*, al no realizar un examen objetivo del daño por haber utilizado períodos diferentes para evaluar los factores e índices económicos pertinentes enumerados en el párrafo 4 del artículo 3 (Reclamación 32);

xiii) párrafos 1, 2, 4 y 5 del artículo 3 del *Acuerdo Antidumping*, al incluir en su análisis de la existencia de daño importaciones que no habían sido objeto de dumping procedentes de dos exportadores (Reclamaciones 34 a 37); y

xiv) párrafos 1 y 4 del artículo 3 del *Acuerdo Antidumping*, al no evaluar todos los factores e índices económicos pertinentes enumerados en el párrafo 4 del artículo 3 (Reclamaciones 38 y 39).

b) La Argentina no ha actuado de manera incompatible con las obligaciones que le incumben en virtud de las siguientes disposiciones:

i) párrafo 7 del artículo 5 del *Acuerdo Antidumping*, al no examinar simultáneamente las pruebas de la existencia del dumping y del daño en el momento de determinar si se iniciaba o no la investigación (Reclamación 9);

ii) párrafo 1.2 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping*, al no poner inmediatamente a disposición de determinados exportadores brasileños las pruebas presentadas por escrito por las demás partes interesadas que intervenían en la investigación (Reclamación 12);

iii) párrafo 8 del artículo 6 y el Anexo II del *Acuerdo Antidumping*, al prescindir de los datos sobre el valor normal facilitados por dos exportadores (Reclamación 19);

iv) párrafo 9 del artículo 6 del *Acuerdo Antidumping*, al no informar a los exportadores de los hechos esenciales considerados que servirían de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas (Reclamación 21);

v) párrafo 4 del artículo 2 del *Acuerdo Antidumping*, al fijar el período de investigación a efectos del dumping (Reclamación 26);

vi) párrafos 2 y 3 del artículo 9 del *Acuerdo Antidumping*, al percibir derechos antidumping variables sobre la base de "valores mínimos de exportación" (Reclamaciones 28 y 29);

vii) párrafo 1 del artículo 4 del *Acuerdo Antidumping*, al definir la rama de producción nacional como los productores nacionales que representaban el 46 por ciento de la producción nacional total de pollos en la Argentina (Reclamación 41).

c) Hemos llegado a la conclusión de que no es necesario que efectuemos constataciones respecto de las Reclamaciones 1, 3, 5, 7, 8, 13, 15, 16, 18, 20, 30, 33 y 40 del Brasil. Consideramos también innecesario examinar las reclamaciones formuladas por el Brasil al amparo del artículo VI del *GATT de 1994* y el artículo 1 del *Acuerdo Antidumping*.

B. ANULACIÓN O MENOSCABO

8.2 De conformidad con el párrafo 8 del artículo 3 del *ESD*, en los casos de incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de un acuerdo abarcado, se presume que la medida constituye un caso de anulación o menoscabo de las ventajas resultantes de ese acuerdo. Por consiguiente, llegamos a la conclusión de que, en la medida en que la Argentina ha actuado de manera incompatible con las

disposiciones del *Acuerdo Antidumping*, ha anulado o menoscabado las ventajas resultantes para el Brasil de ese Acuerdo.

C. RECOMENDACIÓN

8.3 El Brasil nos pide que, en ejercicio de las facultades discrecionales que nos otorga el párrafo 1 del artículo 19 del *ESD*, sugiramos formas en que la Argentina podría aplicar nuestra recomendación. Concretamente, el Brasil nos solicita que sugiramos, "a la luz de las numerosas infracciones del *Acuerdo Antidumping*, generadoras de consecuencias"[240], que la Argentina derogue la Resolución Nº 574/2000 por la que se imponen medidas antidumping definitivas sobre los pollos eviscerados procedentes del Brasil.

8.4 Al considerar la solicitud del Brasil, recordamos en primer lugar que la parte pertinente del párrafo 1 del artículo 19 del *ESD* dispone que:

> "Cuando un Grupo Especial o el Órgano de Apelación lleguen a la conclusión de que una medida es incompatible con un acuerdo abarcado, recomendarán que el Miembro afectado la ponga en conformidad con ese acuerdo. Además de formular recomendaciones, el grupo especial o el Órgano de Apelación *podrán sugerir la forma en que el Miembro afectado podría aplicarlas.*" (sin cursivas en el original; no se reproducen las notas de pie de página)

8.5 Por consiguiente, en virtud del párrafo 1 del artículo 19 del *ESD*, los grupos especiales están facultados ("podrán") para sugerir la forma en que un Miembro podría aplicar la recomendación pertinente. Sin embargo, es evidente que un grupo especial no está obligado a hacer una sugerencia si no lo considera apropiado.

8.6 Hemos determinado que la Argentina ha actuado de manera incompatible con las obligaciones que le incumben en virtud del *Acuerdo Antidumping* al imponer derechos antidumping sobre las importaciones de pollos eviscerados procedentes del Brasil. Hemos constatado que esas infracciones tienen un carácter fundamental y un alcance general.

8.7 En vista del carácter y el alcance de las infracciones constatadas en el presente asunto, no podemos concebir cómo podría la Argentina aplicar correctamente nuestra recomendación sin revocar la medida antidumping en cuestión en la presente diferencia. Por consiguiente, sugerimos que la Argentina derogue la Resolución Nº 574/2000 por la que se imponen medidas antidumping definitivas sobre los pollos eviscerados procedentes del Brasil.

_____

[240] Primera comunicación escrita del Brasil, párrafo 550.

ANEXO A

Brasil

	Índice	Página
Anexo A-1	Primera comunicación escrita del Brasil	A-2
Anexo A-2	Declaración oral del Brasil - Primera reunión con el Grupo Especial	A-120
Anexo A-3	Segunda comunicación escrita del Brasil	A-134
Anexo A-4	Lista de preguntas a las Partes - Primera reunión sustantiva - Respuestas del Brasil	A-166
Anexo A-5	Segunda declaración oral del Brasil	A-199
Anexo A-6	Segunda reunión sustantiva con las Partes - Preguntas - Respuestas del Brasil	A-214
Anexo A-7	Observaciones del Brasil sobre las respuestas de la Argentina a las preguntas del Grupo Especial - Segunda reunión	A-228

ANEXO A-1

PRIMERA COMUNICACIÓN ESCRITA DEL BRASIL

(8 de agosto de 2002)

ÍNDICE

Página

I. INTRODUCCIÓN A-6

II. ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS EN EL PRESENTE CASO A-10

III. ANTECEDENTES FÁCTICOS A-11

IV. ARGUMENTOS JURÍDICOS A-13

A. NORMA DE EXAMEN DEL ACUERDO ANTIDUMPING A-13

B. INICIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING A-15

1. Párrafos 2, 3, 7 y 8 del artículo 5 ..... A-15

a) Hechos A-16

i) Reclamación 1: Incompatibilidad con el párrafo 2 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping *A-22*

ii) Reclamación 2: Incompatibilidad con el párrafo 3 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping *A-25*

iii) Reclamación 3: Incompatibilidad con el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping *A-29*

iv) Reclamación 4: Incompatibilidad con el párrafo 3 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping *A-30*

v) Reclamación 5: Incompatibilidad con el párrafo 2 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping *A-32*

vi) Reclamación 6: Incompatibilidad con el párrafo 3 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping *A-35*

vii) Reclamación 7: Incompatibilidad con el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping *A-36*

viii) Reclamación 8: Incompatibilidad con el párrafo 3 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping *A-37*

ix) Reclamación 9: Incompatibilidad con el párrafo 7 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping *A-39*

x) Reclamación 31: Incompatibilidad con el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping *A-41*

C. REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING - REQUISITOS RELATIVOS A LAS PRUEBAS Y AL AVISO PÚBLICO A-43

1. Párrafo 1 del artículo 12 ..... A-43

a) Hechos A-43

Página

i) ***Reclamación 10: Incompatibilidad con el párrafo 1 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping*** *A-44*

2. Párrafos 1.1, 1.2, 1.3 y 2 del artículo 6 ..... **A-45**

a) Hechos A-46

i) ***Reclamación 11: Incompatibilidad con el párrafo 1.1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping*** *A-47*

ii) ***Reclamación 12: Incompatibilidad con el párrafo 1.2 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping*** *A-48*

iii) ***Reclamación 13: Incompatibilidad con el párrafo 2 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping*** *A-49*

iv) ***Reclamación 14: Incompatibilidad con el párrafo 1.3 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping*** *A-50*

3. Párrafos 8 y 10 del artículo 6, párrafo 2.2 del artículo 12 y Anexo II **A-52**

a) Hechos A-53

i) ***Reclamación 15: Incompatibilidad con el párrafo 8 del artículo 6 y el Anexo II del Acuerdo Antidumping*** *A-56*

ii) ***Reclamación 16: Incompatibilidad con el párrafo 2.2 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping*** *A-61*

iii) ***Reclamación 17: Incompatibilidad con el párrafo 8 del artículo 6 y el Anexo II del Acuerdo Antidumping*** *A-63*

iv) ***Reclamación 18: Incompatibilidad con el párrafo 2.2 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping*** *A-64*

v) ***Reclamación 19: Incompatibilidad con el párrafo 8 del artículo 6 y el Anexo II del Acuerdo Antidumping*** *A-66*

vi) ***Reclamación 20: Incompatibilidad con el párrafo 2.2 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping*** *A-68*

vii) ***Reclamación 22: Incompatibilidad con el párrafo 10 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping*** *A-69*

4. Párrafo 9 del artículo 6 ..... **A-71**

a) Hechos A-71

i) ***Reclamación 21: Incompatibilidad con el párrafo 9 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping*** *A-74*

D. REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING Y DETERMINACIÓN POSITIVA DEFINITIVA A-76

1. Párrafos 4 y 4.2 del artículo 2 ..... **A-76**

a) Hechos A-77

i) ***Reclamación 23: Incompatibilidad con el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping*** *A-85*

ii) ***Reclamación 24: Incompatibilidad con el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping*** *A-87*

Página

iii) ***Reclamación 25: Incompatibilidad con el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping*** *A-90*

iv) ***Reclamación 26: Incompatibilidad con el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping*** *A-92*

v) ***Reclamación 27: Incompatibilidad con el párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping*** *A-93*

2. Párrafos 1, 4 y 5 del artículo 3 y párrafo 2.2 del artículo 12 ..... A-94

a) Hechos A-95

i) ***Reclamación 32: Incompatibilidad con los párrafos 1, 4 y 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping*** *A-95*

ii) ***Reclamación 33: Incompatibilidad con el párrafo 2.2 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping*** *A-96*

3. Párrafos 1, 2, 4 y 5 del artículo 3 ..... A-97

a) Hechos A-98

i) ***Reclamación 34: Incompatibilidad con el párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping*** *A-98*

ii) ***Reclamación 35: Incompatibilidad con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping*** *A-100*

iii) ***Reclamación 36: Incompatibilidad con el párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping*** *A-101*

iv) ***Reclamación 37: Incompatibilidad con el párrafo 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping*** *A-102*

4. Párrafos 1 y 4 del artículo 3 y párrafo 2.2 del artículo 12 ..... A-103

a) Hechos A-103

i) ***Reclamación 38: Incompatibilidad con el párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping*** *A-104*

ii) ***Reclamación 39: Incompatibilidad con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping*** *A-107*

iii) ***Reclamación 40: Incompatibilidad con el párrafo 2.2 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping*** *A-108*

5. Párrafo 1 del artículo 4 ..... A-110

a) Hechos A-110

i) ***Reclamación 41: Incompatibilidad con el párrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo Antidumping*** *A-110*

E. ESTABLECIMIENTO Y PERCEPCIÓN DE DERECHOS ANTIDUMPING COMO RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING A-112

1. Párrafos 2 y 3 del artículo 9 y párrafo 2.2 del artículo 12 ..... A-112

a) Hechos A-112

i) ***Reclamación 28: Incompatibilidad con el párrafo 2 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping*** *A-114*

Página

ii) Reclamación 29: Incompatibilidad con el párrafo 3 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping *A-115*

iii) Reclamación 30: Incompatibilidad con el párrafo 2.2 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping *A-116*

V. CONCLUSIÓN Y PETICIONES A-117

A. CONCLUSIÓN A-117

B. PETICIONES A-118

I. INTRODUCCIÓN

1. En la presente comunicación se desarrolla la impugnación por el Brasil de la imposición por la Argentina de medidas antidumping definitivas sobre las importaciones de pollos procedentes del Brasil, clasificados en las líneas arancelarias 0207.11.00 y 0207.12.00 del MERCOSUR. Diversos actos relacionados con la iniciación y realización de la investigación y con la imposición de las medidas definitivas en cuestión son incompatibles con las obligaciones que imponen a la Argentina el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 ("GATT de 1994") y el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 ("Acuerdo Antidumping").

2. Las medidas antidumping sobre los pollos se impusieron tras una investigación y a raíz de determinaciones formuladas por la Comisión Nacional de Comercio Exterior ("CNCE") y la Dirección de Competencia Desleal ("DCD"). Esos dos organismos comparten la competencia para la aplicación de la legislación antidumping y la administración de los procedimientos de investigación en la Argentina: la DCD determina la existencia de dumping y calcula los márgenes de dumping y la CNCE determina si las importaciones objeto del supuesto dumping han causado daño a la rama de producción nacional.

3. En la investigación sobre el dumping realizada por la DCD y en la imposición de las medidas definitivas se han infringido los artículos 2, 5, 6, 9 y 12 y el Anexo II del Acuerdo Antidumping. Las reclamaciones del Brasil, en relación con la investigación sobre el dumping y la imposición de medidas definitivas, según se exponen en la presente comunicación, pueden resumirse de la siguiente forma:

- En la solicitud, el solicitante presentó un cálculo para ajustar el valor normal en función de las supuestas diferencias entre las características físicas de los pollos exportados a la Argentina y los pollos vendidos en el Brasil. Con la solicitud no se incluían pruebas pertinentes de tales diferencias, en contra de lo prescrito en el párrafo 2 del artículo 5 **(Reclamación 1)**. Al aceptar el cálculo del ajuste realizado por el solicitante, la Argentina no examinó, conforme a lo prescrito en el párrafo 3 del artículo 5, la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas con la solicitud **(Reclamación 2)**, ni rechazó la solicitud de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 8 del artículo 5 **(Reclamación 3)**.

- La Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 3 del artículo 5 **(Reclamación 4)** al establecer los precios de exportación basándose exclusivamente en las transacciones de exportación realizadas a precios inferiores al valor normal.

- Con la solicitud, el solicitante presentó datos sobre los precios de exportación y sobre el valor normal correspondientes a períodos diferentes. En concreto, la solicitud incluía datos sobre el valor normal correspondientes a un solo día de 1997 (el 30 de junio de 1997), lo que no puede considerarse una prueba pertinente para establecer el valor normal de conformidad con el párrafo 2 del artículo 5 **(Reclamación 5)**. Al calcular un margen de dumping realizando una comparación entre el precio de exportación y el valor normal sobre la base de ventas no efectuadas en fechas lo más próximas posible y establecer el valor normal con respecto a un solo día de 1997, la Argentina no examinó, conforme a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 5 la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas **(Reclamación 6)** ni rechazó la solicitud de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 8 del artículo 5 **(Reclamación 7)**.

- La Argentina, al comparar períodos diferentes de recopilación de datos a efectos del dumping y del daño, no examinó adecuadamente las pruebas presentadas con la solicitud, por lo que infringió el párrafo 3 del artículo 5 **(Reclamación 8)**.

- La Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 7 del artículo 5 **(Reclamación 9)** al no examinar simultáneamente los datos recopilados con respecto al dumping y los datos recopilados con respecto al daño en el momento de decidir si se iniciaba o no la investigación.

- La Argentina no efectuó la notificación prescrita a siete exportadores brasileños cuando se cercioró de que existían pruebas suficientes para justificar la iniciación de la investigación antidumping. Al no efectuar tal notificación a esos exportadores cuando se inició la investigación, la Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 1 del artículo 12 **(Reclamación 10)**.

- La Argentina no dio a siete exportadores brasileños un plazo de 30 días como mínimo para dar respuesta a los cuestionarios sobre el dumping enviados por la DCD, lo que constituye *prima facie* una infracción del párrafo 1.1 del artículo 6 **(Reclamación 11)**. Además, la CNCE nunca efectuó la notificación correspondiente a esos siete exportadores ni les facilitó el cuestionario sobre el daño.

- La Argentina, con infracción de lo dispuesto en el párrafo 1.2 del artículo 6, no puso inmediatamente a disposición de siete exportadores brasileños las pruebas presentadas por escrito por las demás partes interesadas que intervenían en la investigación **(Reclamación 12)**.

- Al no dar a siete exportadores el plazo prescrito para responder a los cuestionarios y no poner inmediatamente a su disposición las pruebas presentadas por escrito por las demás partes interesadas que intervenían en la investigación, no dio a esos exportadores plena oportunidad de defender sus intereses, como exige el párrafo 2 del artículo 6 **(Reclamación 13)**.

- La Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 1.3 del artículo 6 **(Reclamación 14)** al no facilitar, tan pronto como se inició la investigación, a los exportadores brasileños y al Gobierno del Brasil el texto de la solicitud escrita.

- La Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 8 del artículo 6 y el Anexo II **(Reclamación 15)** al prescindir de las respuestas facilitadas por los exportadores brasileños con respecto a la descripción del producto exportado a la Argentina y del producto vendido en el Brasil y utilizar en lugar de ello el cálculo del ajuste del valor normal presentado en la solicitud por el solicitante.

- La Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 2.2 del artículo 12 **(Reclamación 16)** al no explicar adecuadamente en la determinación definitiva su decisión de prescindir de la información facilitada por los exportadores en relación con la descripción del producto y utilizar en lugar de ella el ajuste del valor normal propuesto por el solicitante.

- La Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 8 del artículo 6 y el Anexo II **(Reclamación 17)** al prescindir de los datos sobre el precio de exportación facilitados por los exportadores brasileños y utilizar la información sobre el precio de exportación facilitada por el organismo argentino, la Dirección de Ganadería, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca ("Ganadería").

- La Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 2.2 del artículo 12 **(Reclamación 18)** al no explicar adecuadamente en la determinación definitiva su decisión de prescindir de los datos sobre el precio de exportación facilitados por los

exportadores brasileños y utilizar los datos sobre el precio de exportación facilitados por el organismo argentino, Ganadería.

- La Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 8 del artículo 6 y el Anexo II **(Reclamación 19)** al prescindir de toda la información sobre el valor normal presentada por dos exportadores brasileños y utilizar la información facilitada por el solicitante.

- La Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 2.2 del artículo 12 **(Reclamación 20)** al no explicar adecuadamente en la determinación definitiva su decisión de prescindir de toda la información sobre el valor normal presentada por dos exportadores brasileños y utilizar la información facilitada por el solicitante.

- La Argentina no informó a los exportadores brasileños de los hechos esenciales considerados que servirían de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas, lo que impidió a los exportadores brasileños defender adecuadamente sus intereses, en contra de lo prescrito en el párrafo 9 del artículo 6 **(Reclamación 21)**.

- En el caso de dos exportadores brasileños, la Argentina no estableció el margen de dumping que correspondía a cada uno de ellos, como prescribe el párrafo 10 del artículo 6 **(Reclamación 22)**.

- La Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 4 del artículo 2 **(Reclamación 23)** al no tener debidamente en cuenta, al establecer el valor normal para dos exportadores brasileños, las diferencias en los fletes.

- La Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 4 del artículo 2 **(Reclamación 24)** al no tener debidamente en cuenta, al establecer el valor normal para todos los demás exportadores, las diferencias de tributación, fletes y costos financieros.

- La Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 4 del artículo 2 **(Reclamación 25)** al efectuar indebidamente ajustes en el valor normal basados en las supuestas diferencias entre las características físicas del producto vendido en el Brasil y del producto exportado a la Argentina.

- La Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 4 del artículo 2 **(Reclamación 26)** al imponer una carga probatoria no razonable a tres exportadores brasileños, por no determinar el período de dumping objeto de investigación y permitir en consecuencia a esos exportadores que presentaran información sobre el dumping correspondiente a los años comprendidos entre 1996 y 1999, en tanto que posteriormente se determinó que el período de investigación a efectos del dumping era el comprendido entre enero de 1998 y enero de 1999.

- La Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 4.2 del artículo 2 **(Reclamación 27)** al establecer un margen de dumping sobre la base de una comparación incorrecta entre el precio de exportación y el valor normal en el caso de dos exportadores brasileños. Para establecer el valor normal la Argentina se basó únicamente en las transacciones efectuadas en el mercado interno de las que se presentaron facturas, en lugar de determinarlo basándose en todas las transacciones que se había notificado que se habían realizado en el mercado interno durante el período en cuestión. La DCD estableció los márgenes de dumping correspondientes a esos dos exportadores brasileños sobre la base de una comparación entre el promedio

ponderado de una muestra estadística del valor normal y el promedio ponderado de los precios de todas las transacciones de exportación comparables.

- La Argentina ha actuado de forma incompatible con los párrafos 2 **(Reclamación 28)** y 3 **(Reclamación 29)** del artículo 9 al imponer un derecho antidumping variable, cuya cuantía puede exceder del margen de dumping establecido en la determinación definitiva.

- La Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 2.2 del artículo 12 **(Reclamación 30)** al no indicar en la determinación de imponer derechos antidumping definitivos cómo se estableció el "valor mínimo de exportación".

4. En la investigación sobre el daño y en la determinación definitiva de la CNCE se infringieron los artículos 3, 4, 5 y 12 del Acuerdo Antidumping. Las reclamaciones del Brasil en relación con la investigación sobre el daño y la imposición de medidas definitivas, tal como se exponen en la presente comunicación, pueden resumirse de la siguiente forma:

- La Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 8 del artículo 5 **(Reclamación 31)** al no rechazar la solicitud y poner fin a la investigación sin demora, una vez que la CNCE determinó en el Acta Nº 405 que no existían pruebas suficientes de daño o amenaza de daño que justificaran la iniciación de la investigación.

- Al utilizar períodos diferentes para evaluar los factores e índices económicos pertinentes enumerados en el párrafo 4 del artículo 3, la Argentina no formuló una determinación definitiva de la existencia de daño que se basara en pruebas objetivas y comprendiera un examen objetivo, como prescriben los párrafos 1, 4 y 5 del artículo 3 **(Reclamación 32)**.

- La Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 2.2 del artículo 12 **(Reclamación 33)** al no explicar en la determinación definitiva las razones por las que la CNCE examinó los factores e índices económicos pertinentes enumerados en el párrafo 4 del artículo 3 con respecto a períodos diferentes.

- En el análisis de daño de la determinación definitiva no se excluyeron las importaciones procedentes de dos exportadores brasileños, a pesar de que la DCD consideró que no se trataba de "importaciones objeto de dumping". La CNCE, al no excluir de las "importaciones objeto de dumping" las procedentes de esos dos exportadores, no examinó adecuadamente el volumen de las "importaciones objeto de dumping", el efecto de esas importaciones sobre los precios y su repercusión sobre la rama de producción nacional, como prescriben los párrafos 2 **(Reclamación 34)** y 4 **(Reclamación 36)** del artículo 3. De la evaluación viciada de las "importaciones objeto de dumping" se deduce que la determinación definitiva de la existencia de daño no se basó en pruebas positivas ni comprendió un examen objetivo, como exige el párrafo 1 del artículo 3 **(Reclamación 35)**.

- Al no excluir de las "importaciones objeto de dumping" las procedentes de esos dos exportadores brasileños, la Argentina no examinó adecuadamente el daño, como exige el párrafo 1 del artículo 3 y, en consecuencia, no demostró adecuadamente la existencia de una relación causal entre las "importaciones objeto de dumping" y el daño causado a la rama de producción nacional, como exige el párrafo 5 del artículo 3 **(Reclamación 37)**.

- La Argentina actuó de forma incompatible con los párrafos 4 **(Reclamación 38)** y 1 **(Reclamación 39)** del artículo 3 al no evaluar todos los factores e índices económicos pertinentes enumerados en el párrafo 4 del artículo 3.

- La Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 2.2 del artículo 12 **(Reclamación 40)** al no exponer y examinar adecuadamente en la determinación definitiva la evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes enumerados en el párrafo 4 del artículo 3.

- La Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 1 del artículo 4 **(Reclamación 41)** al considerar que el 46 por ciento constituía una proporción importante de la producción nacional total de pollos de la Argentina, por lo que podría entenderse que constituía la rama de producción nacional.

5. Al determinar la existencia de dumping, de daño y de una relación causal de forma incompatible con las disposiciones del Acuerdo Antidumping, la Argentina ha actuado de forma incompatible con el artículo VI del GATT de 1994 y el artículo 1 del Acuerdo Antidumping.

6. A la luz de esas infracciones de la Argentina, que el Brasil demostrará detalladamente en la presente comunicación, el Brasil solicita al Grupo Especial que formule las constataciones y recomendaciones que se exponen en la Parte IV de la presente comunicación.

II. ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS EN EL PRESENTE CASO

7. El 7 de noviembre de 2001, el Gobierno del Brasil solicitó la celebración de consultas con el Gobierno de la Argentina de conformidad con el artículo 4 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias ("ESD"), el artículo XXII del GATT de 1994, el artículo 17 del Acuerdo Antidumping y el artículo 19 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994 ("Acuerdo sobre Valoración en Aduana"), con respecto a las medidas antidumping definitivas aplicadas a las importaciones de pollos procedentes del Brasil.[1]

8. El 10 de diciembre de 2001 se celebraron consultas en Ginebra. Aunque éstas hicieron posible una mejor comprensión de la cuestión, no se llegó en ellas a una solución mutuamente convenida.

9. El 25 de febrero de 2002 el Gobierno del Brasil solicitó el establecimiento de un grupo especial de conformidad con el artículo XXII del GATT de 1994, el artículo 6 del ESD y el artículo 17 del Acuerdo Antidumping, con el mandato uniforme previsto en el artículo 7 del ESD.[2]

10. En la reunión que celebró el 17 de abril de 2002, el Órgano de Solución de Diferencias ("OSD") estableció un Grupo Especial para que examinara las reclamaciones del Gobierno del Brasil. La composición del Grupo Especial se estableció el 27 de junio de 2002.[3]

---

[1] *Argentina - Derechos antidumping definitivos sobre los pollos procedentes del Brasil: Solicitud de celebración de consultas presentada por el Brasil*, WT/DS241/1 (12 de noviembre de 2001).

[2] *Argentina - Derechos antidumping definitivos sobre los pollos procedentes del Brasil: Solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por el Brasil*, WT/DS241/3 (26 de febrero de 2002).

[3] *Argentina - Derechos antidumping definitivos sobre los pollos procedentes del Brasil: Constitución del Grupo Especial establecido a petición del Brasil*, WT/DS241/4 (5 de julio de 2002).

11. El mandato del Grupo Especial, de conformidad con el artículo 7 del ESD, era el siguiente:

> "Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes de los acuerdos abarcados que ha invocado el Brasil en el documento WT/DS241/3, el asunto sometido al OSD por el Brasil en ese documento y formular conclusiones que ayuden al OSD a hacer las recomendaciones o dictar las resoluciones previstas en dichos acuerdos."

III. ANTECEDENTES FÁCTICOS

12. El 2 de septiembre de 1997, el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas ("CEPA")[4] presentó a la Subsecretaría de Comercio Exterior ("SSCE") una solicitud para que se llevara a cabo una investigación antidumping, alegando que se exportaban pollos del Brasil a la Argentina a precios de dumping y que las importaciones de esos productos constituían una amenaza de daño importante para la rama de producción nacional.[5] El 23 de septiembre de 1997, la CNCE emitió un dictamen acerca de la representatividad de la rama de producción nacional y, el 21 de octubre de 1997, la SSCE aceptó la solicitud presentada por el CEPA.

13. El 7 de enero de 1998, el Área de Prácticas Comerciales Desleales y Salvaguardias ("APCDS") alegó en su informe relativo a la viabilidad de la apertura de investigación que había una práctica desleal del comercio bajo la forma de dumping en la exportación al mercado argentino de pollos procedentes del Brasil.[6]

14. El 7 de enero de 1998, la CNCE, en el Acta Nº 405, determinó que no existían suficientes pruebas de daño o amenaza de daño que justificaran la iniciación de una investigación. En esa determinación, los datos considerados correspondían al período comprendido entre enero de 1994 y junio de 1997, y se tuvieron en cuenta datos correspondientes al año 1993 como año de referencia.[7]

15. El 17 de febrero de 1998, más de un mes después de que la CNCE determinara que no existían pruebas suficientes de daño o amenaza de daño que justificaran la iniciación de la investigación, el CEPA presentó a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería ("SICM")[8] información nueva y actualizada. El 18 de junio de 1998, la Dirección General de Asuntos Jurídicos ("DGAJ") envió a la SSCE una carta en la que manifestaba que la información nueva y actualizada presentada por el CEPA no había sido examinada cuando la CNCE publicó su determinación en al Acta Nº 405 y, en consecuencia, solicitaba a la CNCE que tuviera en cuenta la nueva información y formulara una nueva determinación.[9]

16. El 22 de septiembre de 1998, la CNCE determinó, en el Acta Nº 464, que existían pruebas suficientes de amenaza de daño que justificaban la iniciación de la investigación. En la nueva determinación sobre el daño se tomaba en consideración la información actualizada facilitada por

---

[4] En la presente comunicación se hace referencia también al CEPA como "el solicitante".

[5] *Véase* la Prueba documental BRA-1.

[6] *Véase* la Prueba documental BRA-2.

[7] *Véase* la Prueba documental BRA-3.

[8] *Véase* la Prueba documental BRA-4.

[9] *Véase* la Prueba documental BRA-5.

el CEPA respecto del período comprendido entre enero de 1994 y junio de 1998, teniendo en cuenta los datos correspondientes al año 1993 como año de referencia.[10]

17. El 20 de enero de 1999, el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos ("MEyOSP") dictó la Resolución Nº 11, un aviso público en el que anunciaba la apertura de la investigación antidumping respecto de las importaciones de pollos procedentes del Brasil.[11]

18. El 10 de febrero de 1999, la CNCE envió a los exportadores brasileños Sadia S.A. ("Sadia"), Avipal S.A. Avicultura e Agropecuaria ("Avipal"), Frigorífico Nicolini Ltda. ("Nicolini"), Seara Alimentos S.A. ("Seara") y Frangosul S.A. Agro Avícola Industrial ("Frangosul"), sendas cartas en las que les comunicaba la apertura de la investigación y les solicitaba que dieran respuesta al cuestionario de la CNCE, que era independiente del enviado por la SSCE.[12] El 16 de febrero de 1999, la SSCE envió sendas cartas a los cinco exportadores brasileños invitándoles a participar en una audiencia el 25 de febrero de 1999, en la que se procedería a evacuar consultas sobre la apertura de la investigación sobre el dumping y a la entrega del cuestionario.[13]

19. El 28 de junio de 1999, la CNCE formuló una determinación preliminar positiva de daño.[14] El 6 de agosto de 1999, la DCD formuló una determinación preliminar positiva de dumping.[15] El 20 de agosto de 1999, la SSCE formuló una determinación preliminar de la existencia de una relación causal entre las importaciones presuntamente objeto de dumping y el daño causado por esas importaciones a la rama de producción nacional.[16] No se impusieron medidas provisionales.

20. El 15 de septiembre de 1999, la DCD envió a siete exportadores brasileños (Cooperativa Central de Laticínios do Paraná ("CCLP"), Cooperativa Central Oeste Catarinense Ltda. ("Catarinense")[17], Chapecó Cía. Industrial ("Chapecó"), Cía. Minuano de Alimentos ("Minuano"), Perdigão Agroindustrial ("Perdigão"), Comaves Industria e Comércio de Alimentos Ltda. ("Comaves") y Penabranca S.A. ("Penabranca"))[18], a los que no se había notificado la investigación, sendas cartas en las que les invitaba a dar respuesta al cuestionario.[19] En dichas cartas, la DCD, establecía, por primera vez, como período de recopilación de datos para la investigación el comprendido entre enero de 1998 y enero de 1999.

---

[10] *Véase* la Prueba documental BRA-6.

[11] *Véase* la Prueba documental BRA-7.

[12] *Véase* la Prueba documental BRA-8.

[13] *Véase* la Prueba documental BRA-9. El Brasil no ha podido encontrar entre los documentos de la investigación a los que ha tenido acceso la notificación de fecha 16 de febrero de 1999 de la SSCE al exportador brasileño Sadia.

[14] *Véase* la Prueba documental BRA-10.

[15] *Véase* la Prueba documental BRA-11.

[16] *Véase* la Prueba documental BRA-12.

[17] Esta empresa es conocida también con el nombre de Aurora.

[18] El Brasil no ha podido encontrar entre los documentos de la investigación a los que ha tenido acceso la notificación de la DCD al exportador brasileño Penabranca.

[19] *Véase* la Prueba documental BRA-13.

21. El 23 de diciembre de 1999, la CNCE formuló una determinación definitiva de la existencia de daño.[20] El 23 de junio de 2000, seis meses después de que se hubiera formulado la determinación definitiva de la existencia de daño, la DCD formuló una determinación definitiva de la existencia de dumping.[21] El 17 de julio de 2000, la SSCE formuló una determinación definitiva de la existencia de una relación de causalidad entre las importaciones objeto del supuesto dumping y el daño causado por esas importaciones a la rama de producción nacional.[22]

22. Sobre la base de las determinaciones definitivas de la existencia de dumping, de daño y de una relación de causalidad, el MEyOSP dictó la Resolución Nº 574 de 21 de julio de 2000, por la que se imponían medidas antidumping definitivas a las importaciones de pollos procedentes del Brasil por un período de tres años.[23] Esas medidas consistían en la percepción de derechos antidumping específicos en una cuantía equivalente a la diferencia existente en términos absolutos entre un valor mínimo de exportación FOB y el precio FOB declarado en cada envío, siempre que éste último fuera inferior al primero. El "valor mínimo de exportación" fijado para cada uno de los exportadores era 0,92 dólares EE.UU. por kilogramo en el caso de Sadia, 0,98 dólares EE.UU. por kilogramo en el caso de Avipal y 0,98 dólares EE.UU. en el de todos los demás exportadores. Se excluyó de la aplicación de medidas antidumping a los exportadores brasileños Nicolini y Seara por haberse constatado que esas empresas no exportaban pollos a precios de dumping. En el aviso público se indicaban también los márgenes de dumping constatados para Sadia (14,91 por ciento), Avipal (15,48 por ciento) y todos los demás exportadores (8,19 por ciento).

IV. ARGUMENTOS JURÍDICOS

A. NORMA DE EXAMEN DEL ACUERDO ANTIDUMPING

23. En el párrafo 6 del artículo 17 del Acuerdo Antidumping se establece la norma de examen que han de aplicar los grupos especiales al examinar las diferencias planteadas en el marco de dicho Acuerdo. De forma más concreta, ese párrafo se ocupa de los aspectos relativos a la evaluación de los hechos en una investigación y a la interpretación del Acuerdo Antidumping.

24. Con respecto a los elementos de hecho, el párrafo 6 i) del artículo 17 establece lo siguiente:

> "al evaluar los elementos de hecho del asunto, [el grupo especial] determinará si las autoridades han establecido adecuadamente los hechos y si han realizado una evaluación imparcial y objetiva de ellos. Si se han establecido adecuadamente los hechos y se ha realizado una evaluación imparcial y objetiva, no se invalidará la evaluación, aun en el caso de que el grupo especial haya llegado a una conclusión distinta;"

25. El párrafo 6 i) del artículo 17 trata de la evaluación por parte del grupo especial del establecimiento y evaluación de los hechos por las autoridades. En él se establece una norma de examen que consta de dos partes y obliga al grupo especial a determinar: 1) si las autoridades han establecido adecuadamente los hechos; y 2) si han realizado una evaluación imparcial y objetiva de esos hechos.

---

[20] *Véase* la Prueba documental BRA-14.

[21] *Véase* la Prueba documental BRA-15.

[22] *Véase* la Prueba documental BRA-16.

[23] *Véase* la Prueba documental BRA-17.

26. En primer lugar, para evaluar si se han establecido adecuadamente los hechos es preciso determinar si las autoridades investigadoras han reunido información pertinente y fiable acerca de la cuestión sobre la que debe adoptarse la decisión. En este caso concreto, el Grupo Especial deberá determinar en primer lugar si el Gobierno de la Argentina reunió, evaluó y trató los elementos de hecho en el curso de la investigación de una forma compatible con las normas establecidas en el Acuerdo Antidumping y, en consecuencia, estableció "adecuadamente" los hechos.

27. En segundo lugar, el Grupo Especial deberá determinar si el Gobierno de la Argentina evaluó esos hechos de forma imparcial y objetiva. A este respecto, el Grupo Especial deberá considerar si sobre la base de las pruebas de que disponían las autoridades investigadoras de la Argentina en el momento de la determinación, una autoridad imparcial y objetiva que evaluara esas pruebas podría llegar a las mismas conclusiones a las que llegaron las autoridades investigadoras argentinas sobre la cuestión de que se trata. A tal efecto, el Grupo Especial deberá examinar si se tomaron en consideración todas las pruebas, incluidos los elementos de hecho que podrían estar en contradicción con la decisión a la que llegaron efectivamente las autoridades investigadoras.

28. El Gobierno del Brasil no pide al Grupo Especial que determine si de los hechos que se pusieron en conocimiento de las autoridades argentinas en la investigación correspondiente es posible inferir otra conclusión. Los argumentos fácticos en el presente caso se refieren directamente al establecimiento inadecuado de los hechos por el Gobierno argentino y a su evaluación no objetiva y parcial de esos hechos para favorecer los intereses de la rama de producción nacional de forma incompatible con las disposiciones del Acuerdo Antidumping.

29. Con respecto a las cuestiones de interpretación del Acuerdo Antidumping, el párrafo 6 i) del artículo 17 establece lo siguiente:

> "[el grupo especial] interpretará las disposiciones pertinentes del Acuerdo de conformidad con las reglas consuetudinarias de interpretación del derecho internacional público. Si el grupo especial llega a la conclusión de que una disposición pertinente del Acuerdo se presta a varias interpretaciones admisibles, declarará que la medida adoptada por las autoridades está en conformidad con el Acuerdo si se basa en alguna de esas interpretaciones admisibles."

30. La primera frase de esta disposición obliga al Grupo Especial a interpretar "las disposiciones pertinentes del Acuerdo de conformidad con las reglas consuetudinarias de interpretación del derecho internacional público". El Órgano de Apelación ha declarado reiteradamente que los grupos especiales deben examinar la interpretación de los Acuerdos de la OMC, incluido el Acuerdo Antidumping, de conformidad con los principios establecidos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados ("Convención de Viena"). En consecuencia, el Grupo Especial deberá atender en primer lugar al sentido corriente de la disposición de que se trate, en su contexto y teniendo en cuenta su objeto y fin. El Grupo Especial podrá tener en cuenta, como medios de interpretación complementarios, los trabajos preparatorios de la disposición, es decir, la historia de su negociación. El Grupo Especial deberá evaluar seguidamente si la interpretación de la Argentina es "admisible" a la luz de las reglas consuetudinarias de interpretación del derecho internacional. De no ser así, deberá rechazar la interpretación, y la medida impugnada habrá de considerarse incompatible con el Acuerdo Antidumping.

31. El Gobierno del Brasil sostiene que las medidas de la Argentina impugnadas en el presente caso no son admisibles con arreglo a las reglas de interpretación de la Convención de Viena. El Gobierno de la Argentina ha prescindido completamente de determinadas normas o disposiciones jurídicas del Acuerdo Antidumping, o ha actuado de forma incompatible con las disposiciones pertinentes, más allá de cualquier interpretación jurídica admisible. Esos aspectos de la práctica de la Argentina se basan en una interpretación del Acuerdo Antidumping que no responde a la buena fe y no puede considerarse admisible.

B. INICIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING

1. Párrafos 2, 3, 7 y 8 del artículo 5

32. De los hechos que se exponen a continuación y del texto legal del Acuerdo Antidumping se derivan diez reclamaciones:

> **Reclamación 1:** En la solicitud, el solicitante presentó un cálculo para ajustar el valor normal basado en las supuestas diferencias entre las características físicas de los pollos exportados a la Argentina y de los pollos vendidos en el Brasil. Según el solicitante, los pollos exportados a la Argentina no incluían cabeza y patas y los pollos vendidos en el Brasil, sí. El solicitante alegaba que, debido a esa diferencia, el rendimiento de los pollos eviscerados exportados a la Argentina era el 80 por ciento de los pollos vivos y el de los pollos eviscerados vendidos en el Brasil el 88 por ciento. El solicitante presentó un cálculo en el que se añadía el 9,09 por ciento al valor normal para compensar la diferencia entre los dos productos.

La infracción del párrafo 2 del artículo 5 se debe al hecho de que la solicitud presentada por el solicitante no incluía pruebas de que: 1) los pollos vendidos en el Brasil fueran diferentes físicamente del producto exportado a la Argentina; 2) esas supuestas diferencias físicas influyeran en la comparabilidad de los precios; y 3) el rendimiento alegado por el solicitante de los pollos vendidos en el Brasil y exportados a la Argentina, fuera exacto.

> **Reclamación 2:** La Argentina, al aceptar el cálculo del ajuste del valor normal realizado por el solicitante, que no estaba apoyado por pruebas pertinentes, no examinó la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas con la solicitud ni determinó que no existían pruebas suficientes que justificaran la iniciación, conforme a lo prescrito en el párrafo 3 del artículo 5.

> **Reclamación 3:** Con arreglo a las reclamaciones 1 y 2, la Argentina no rechazó la solicitud debido a la inexistencia de pruebas suficientes del dumping que justificaran la continuación del procedimiento relativo al caso, como prevé el párrafo 8 del artículo 5.

> **Reclamación 4:** La Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 3 del artículo 5 al establecer los precios de exportación basándose únicamente en las transacciones de exportación efectuadas a precios inferiores al valor normal.

> **Reclamación 5:** En la solicitud, el solicitante presentó datos sobre los precios de exportación y el valor normal correspondientes a períodos diferentes. En concreto, sólo se presentó en la solicitud el valor normal correspondiente a un día del período, el 30 de junio de 1997. Los datos sobre los precios de exportación presentados en la solicitud correspondían al período comprendido entre enero y mayo de 1997 y a agosto de 1997. El hecho de que los datos sobre los precios de exportación y el valor normal presentados en la solicitud no correspondieran a ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible y de que el valor normal presentado en la solicitud correspondiera únicamente a un solo día de 1997 no permite considerar que esos datos fueran pruebas pertinentes suficientes para cumplir las prescripciones del párrafo 2 del artículo 5.

> **Reclamación 6:** Calcular un margen de dumping mediante una comparación entre el precio de exportación y el valor normal respecto de ventas no efectuadas en el período más próximo posible y estableciendo el valor normal para un solo día de 1997, la Argentina no examinó la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas con la solicitud. En consecuencia, la Argentina actuó de manera incompatible con el párrafo 3 del artículo 5 al determinar que había pruebas suficientes para justificar la iniciación de la investigación.

Reclamación 7: Con arreglo a las reclamaciones 5 y 6, la Argentina no rechazó la solicitud debido a la inexistencia de prueba suficientes de dumping para justificar que se siguiera adelante con el asunto, como prevé el párrafo 8 del artículo 5.

Reclamación 8: A los efectos de la iniciación, los datos reunidos para el análisis del dumping correspondían al período comprendido entre enero y mayo de 1997 y los reunidos para el análisis del daño al período comprendido enero de 1994 y junio de 1998. La Argentina no examinó correctamente las pruebas presentadas con la solicitud al no examinar los datos adicionales sobre el dumping presentados por el solicitante para el período comprendido entre julio de 1997 y junio de 1998, infringiendo así lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 5.

Reclamación 9: La Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 7 del artículo 5 al no examinar simultáneamente los datos recopilados respecto del dumping y los recopilados respecto del daño en el momento de decidir si se iniciaba o no una investigación.

Reclamación 31: La Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 8 del artículo 5 al no rechazar la solicitud y poner fin a la investigación sin demora en cuanto la CNCE determinó, en el Acta Nº 405, que no existían pruebas suficientes de daño importante o de amenaza de daño importante que justificaran la iniciación de la investigación.

a) Hechos

33. El 7 de enero de 1998, la DCD publicó una determinación a efectos de la iniciación de la investigación antidumping sobre las importaciones de pollos procedentes del Brasil.[24] En dicha determinación, la DCD estableció el valor normal y el precio de exportación de la manera que se indica a continuación.

Valor normal

34. La DCD estableció el valor normal con arreglo a la información facilitada con la solicitud por el solicitante. Éste establecía el valor normal sobre la base de los precios de los pollos refrigerados, con cabeza y patas, en el mercado mayorista de São Paulo publicados por la empresa brasileña JOX Assessoria Agropecuária S/C Ltda. ("JOX")[25] el 30 de junio de 1997. Así pues, el valor normal se establecía sobre la base de los precios correspondientes a un solo día de 1997, el 30 de junio.[26]

35. Los precios publicados por JOX, y utilizados por el solicitante para establecer el valor normal correspondían a: 1) los pollos frescos vendidos en el mercado de distribución de São Paulo, cuyo precio era de 1,05 a 1,12 $R (promedio de 1,085 $R); 2) los pollos frescos vendidos en el mercado mayorista de São Paulo, cuyo precio iba de 1,00 $R a 1,077 $R (promedio de 1,0385 $R); y 3) los pollos frescos vendidos en el mercado grande mayorista de São Paulo, cuyos precios iban de 0,98 $R a 1,00 $R (promedio de 0,99 $R). El valor normal se obtenía hallando el promedio simple de esos precios (1,0378 $R), y convirtiéndolo a dólares estadounidenses (0,957 $EE.UU.).[27]

[24] *Véase* la Prueba documental BRA-2.

[25] JOX es una empresa privada dedicada a facilitar información básica sobre el mercado a la industria ganadera. JOX elabora informes sobre el comportamiento de los mercados de los siguientes productos: huevos, aves de corral, ganado porcino, carne de bovino, habas de soja y maíz. Ni el Gobierno del Brasil ni los exportadores brasileños objeto de investigación en el presente caso tienen ningún tipo de asociación con JOX o de participación en esa empresa.

[26] *Véanse* las páginas 7 y 8 de la Prueba documental BRA-2.

[27] *Véase* la página 9 de la Prueba documental BRA-2.

36. En el cuadro que se reproduce a continuación se indica la forma en que la DCD estableció el valor normal:

Producto	**$Real**	**$EE.UU.**
Pollo fresco distribución	1,085	1,00
Pollo fresco mayorista	1,0385	0,958
Pollo fresco grande mayorista	0,990	0,913
Promedio	**1,0378**	**0,957**

Fuente: Página 9 de la Prueba documental BRA-2.

Ajuste del valor normal

37. Sobre la base de los precios antes indicados, la DCD realizó un ajuste del valor normal, propuesto por el solicitante, en función de las diferencias entre las características físicas del producto vendido en el Brasil y del producto exportado a la Argentina.

38. Con arreglo al ajuste propuesto, el peso promedio de pollo vivo que se faena en el Brasil era de 2,250 kg. El solicitante alegó, sin presentar prueba alguna de su alegación, que el rendimiento del producto en el Brasil era del 88 por ciento y que, por consiguiente, de 1 kg de pollo vivo se obtenían 880 gramos de pollo eviscerado con menudos (corazón, panza, cogote e hígado), patas y cabeza. El solicitante alegó también que el rendimiento del producto exportado a la Argentina difería del obtenido en el Brasil. En la Argentina el rendimiento del producto era del 80 por ciento, considerando que las patas y la cabeza eran desechadas. El solicitante llegaba a la conclusión de que de un pollo vivo de 2,250 kg se obtenían 800 gramos por kilo de pollo eviscerado que podía venderse efectivamente en el mercado argentino. Según el solicitante, la diferencia de rendimiento se producía porque los pollos se exportaban a la Argentina sin cabeza ni patas y se vendían en el Brasil con cabeza y patas.[28]

39. El solicitante proponía el siguiente ajuste basado en esta alegación:

Peso de pollo vivo	**Rendimiento en el Brasil**	**Pollo eviscerado vendido en el Brasil**	**Rendimiento en la Argentina**	**Pollo eviscerado vendido en la Argentina**	**Diferencia**
(A)	**(B)**	**(C) = (A) x (B)**	**(D)**	**(E) = (A) x (D)**	**(F) = (C) - (E)**
2,250 kg	88%	1,980 kg	80%	1,800 kg	0,180 kg

Fuente: Página 9 de la Prueba documental BRA-2.

40. El solicitante alegaba que esta diferencia de rendimiento representaba un 9,09 por ciento menos de pollo que podía ser vendido a la Argentina y que, por lo tanto, debía efectuarse un ajuste equivalente en el valor normal.[29]

[28] *Véase* la página 9 de la Prueba documental BRA-2.

[29] *Véase* la página 9 de la Prueba documental BRA-2.

41. El cálculo del solicitante, que la DCD aceptó y utilizó, era el siguiente:

Diferencia de rendimiento	Pollo eviscerado vendido en el Brasil	Ajuste
(A)	**(B)**	**(C) = (A)/(B) x 100**
0,180 kg	1,980 kg	9,09%

Fuente: Página 9 de la Prueba documental BRA-2.

42. Para comparar el precio de los pollos vendidos en el Brasil (valor normal) con el precio de los pollos exportados a la Argentina (precio de exportación), la DCD tendría que añadir un 9,09 por ciento al precio de los pollos vendidos en el Brasil, para compensar el hecho de que en la Argentina los pollos se vendían sin cabeza ni patas, en tanto que en el Brasil se vendían con cabeza y patas. El solicitante no presentó ninguna prueba en apoyo de su alegación.

43. Sobre la base del cálculo del ajuste propuesto, la DCD estableció un valor normal de 1,044 $EE.UU. por kilogramo, con arreglo al cálculo que se indica a continuación.

Valor normal del pollo $EE.UU./kg	Ajuste	Ajuste del valor normal del pollo $EE.UU./kg	Valor normal ajustado del pollo $EE.UU./kg
(A)	**(B)**	**(C) = (A) x (B)**	**(D) = (A) + (C)**
0,957	9,09%	0,087	1,044

Fuente: Página 9 de la Prueba documental BRA-2.

Precio de exportación

44. La DCD determinó el precio de exportación del producto de que se trata vendido en la Argentina sobre la base de los datos presentados por el solicitante para el período comprendido entre enero y mayo de 1997 y para agosto de 1997.[30] La información sobre los precios de exportación presentada por el CEPA procedía de Sysdec y correspondía únicamente a los pollos congelados vendidos en la Argentina, dentro de la línea arancelaria 0207.12.00 del MERCOSUR[31], como se indica en el cuadro que figura a continuación:

Período	Volumen de las importaciones - toneladas	Valor de las importaciones - $EE.UU.	Promedio $EE.UU./tonelada
Enero de 1997	1.688,01	1.856.202,30	1.099,64
Febrero de 1997	1.351,76	1.420.448,69	1.050,81
Marzo de 1997	2.091,13	2.220.081,50	1.061,67
Abril de 1997	859,22	862.237,89	1.003,51
Mayo de 1997	40,00	40.600,00	1.015,00
Subtotal	6.030,12	6.399.570,38	1.061,27
Agosto de 1997	2.847,14	2.608.635,66	916,23
Total	**8.877,26**	**9.008.206,04**	**1.014,75**

Fuente: Página 10 de la Prueba documental BRA-2.

[30] *Véase* la página 10 de la Prueba documental BRA-2.

[31] *Véase* la Prueba documental BRA-1.

45. De la información presentada por el solicitante, la DCD dedujo que una parte importante de los pollos importados del Brasil entraban en el país a precios de dumping, es decir a precios inferiores a los de los pollos eviscerados vendidos en el mercado interno del Brasil (valor normal).[32]

46. La DCD consideró que esos precios de exportación, inferiores al valor normal, correspondían al 34,24 por ciento del volumen total de las importaciones realizadas entre enero y mayo de 1997 y al 28,86 por ciento del valor total de las importaciones realizadas en ese mismo período.[33]

47. Sin ofrecer ninguna justificación, la DCD presentó un cuadro en el que se indicaban los precios de exportación en el período comprendido entre enero y mayo de 1997 para las transacciones en las que el precio había sido inferior al valor normal establecido.[34]

Período	**Volumen - toneladas**	**Valor - $EE.UU.**	**Promedio ponderado $EE.UU./tonelada**
Enero de 1997	414,37	369.244,86	891,10
Febrero de 1997	376,99	307.233,77	814,97
Marzo de 1997	495,43	406.077,69	819,65
Abril de 1997	738,21	723.892,40	980,60
Mayo de 1997	40,00	40.600,00	1.015,00
Total	**2.065,00**	**1.847.048,72**	**894,45**

Fuente: Página 11 de la Prueba documental BRA-2.

48. En la determinación, la DCD aclaraba que el 97,97 por ciento de las importaciones efectuadas a los precios de exportación indicada para el mes de agosto de 1997 entraron en la Argentina a precios inferiores al valor normal promedio.[35]

49. Adicionando a las importaciones de pollos efectuadas a precios inferiores al valor normal en el período comprendido entre enero y mayo de 1997 las transacciones de exportación realizadas a precios inferiores al valor normal en el mes de agosto de 1997, la DCD llegó a la conclusión que el total de las importaciones de pollos procedentes del Brasil efectuadas a precios de dumping representaba el 54,68 por ciento del volumen de las importaciones (4.854,24 toneladas) y el 48,74 por ciento de su valor (4.390.836,38 $EE.UU.).[36]

Período	**Toneladas**	**Porcentaje de las importaciones totales**	**$EE.UU.**	**Porcentaje de las importaciones totales**	**Promedio ponderado $EE.UU./ tonelada**
	(A)		**(B)**		**(C) = (B)/(A)**
Enero a mayo y agosto de 1997	4.854,24	54,68%	4.390.836,38	48,74%	904,54

Fuente: Página 11 de la Prueba documental BRA-2.

[32] *Véase* la página 10 de la Prueba documental BRA-2.

[33] *Véase* la página 10 de la Prueba documental BRA-2.

[34] *Véase* la página 11 de la Prueba documental BRA-2.

[35] *Véase* la página 11 de la Prueba documental BRA-2.

[36] *Véase* la página 11 de la Prueba documental BRA-2.

50. La DCD utilizó también los datos facilitados por el organismo argentino Delegación II - Unidad Informática ("DUI") de la SSCE para establecer el precio de exportación. Los datos facilitados por la DUI correspondían al período comprendido entre agosto y octubre de 1996.[37]

51. A este respecto, la DCD consideró también que una porción importante de las importaciones realizadas en ese período ingresaron al país a precios de dumping, es decir a precios inferiores a los que se vendían los pollos eviscerados en el mercado interno del Brasil (valor normal).[38]

52. Según la DCD, correspondieron a importaciones a precios de dumping durante el período comprendido entre agosto y octubre de 1996 el 26,62 por ciento del volumen de las importaciones totales de ese producto y el 23,47 por ciento de su valor.[39]

Período	**Toneladas**	**Porcentaje de las importaciones totales**	**$EE.UU.**	**Porcentaje de las importaciones totales**	**Promedio ponderado $EE.UU./ tonelada**
Agosto a octubre de 1996	1.207,915	26,62%	1.162.809,10	23,47%	962,66

Fuente: Página 12 de la Prueba documental BRA-2.

Margen de dumping

53. Sobre la base del valor normal indicado por el solicitante y del precio de exportación indicado por el solicitante y por la DUI, la DCD calculó dos márgenes de dumping.

54. Para determinar el primer margen se consideró que el valor normal era el precio del pollo congelado, con cabeza y patas, vendido en el mercado mayorista de São Paulo el 30 de junio de 1997. En este valor normal se efectuó el ajuste antes mencionado, para tener en cuenta la alegación de que todos los pollos se vendían en el Brasil con cabeza y patas. A efectos de este margen se consideró que los precios de exportación eran los precios de las importaciones de pollos congelados procedentes del Brasil efectuadas a un precio inferior al valor normal en el período comprendido entre agosto y octubre de 1996.[40]

Valor normal $EE.UU./kg	**Precio FOB promedio $EE.UU./kg**	**Margen de dumping**
(A)	**(B)**	**(C) = (A)/(B)**
1,044	0,9627	8,45%

Fuente: Página 12 de la Prueba documental BRA-2.

55. A efectos del segundo margen se consideró que el valor normal era el precio de los pollos refrigerados, con cabeza y patas, vendidos en el mercado mayorista de São Paulo el 30 de junio de 1997. Asimismo se efectuó en este valor normal el ajuste antes mencionado, para tener en cuenta la alegación de que todos los pollos vendidos en el Brasil incluían cabeza y patas. Para este segundo margen, la DCD estableció como precio de exportación el precio de las importaciones de pollos

[37] *Véanse* las páginas 11 y 12 de la Prueba documental BRA-2.

[38] *Véase* la página 11 de la Prueba documental BRA-2.

[39] *Véanse* las páginas 11 y 12 de la Prueba documental BRA-2.

[40] *Véase* la página 12 de la Prueba documental BRA-2.

refrigerados procedentes del Brasil efectuadas a un precio inferior al valor normal en el período comprendido entre enero y mayo de 1997 y en agosto de 1997.[41]

Valor normal $EE.UU./kg	Precio FOB promedio $EE.UU./kg	Margen de dumping
(A)	**(B)**	**(C) = (A)/(B)**
1,044	0,904536	15,42%

Fuente: Página 12 de la Prueba documental BRA-2.

56. En la determinación relativa a la iniciación de la investigación antidumping se incluían además otros cálculos de márgenes, sin aclararlos ni indicar su objeto. En uno de ellos se consideraba el menor precio FOB de exportación en el mes de enero de 1997, según la información del solicitante, y el valor normal establecido para el 30 de junio de 1997, como se ha indicado antes.[42] En otro, se consideraba el menor precio FOB de exportación en los meses de agosto y septiembre de 1996, según la información facilitada por la DUI, y el valor normal establecido para el 30 de junio de 1997.[43]

Valor normal $EE.UU./kg	Menor precio FOB en enero de 1997 $EE.UU./kg	Margen de dumping
(A)	**(B)**	**(C) = (A)/(B)**
1,044	0,76512	36,45%

Fuente: Página 13 de la Prueba documental BRA-2.

Valor normal $EE.UU./kg	Menor precio FOB en agosto/septiembre de 1996 $EE.UU./kg	Margen de dumping
(A)	**(B)**	**(C) = (A)/(B)**
1,044	0,880	18,64%

Fuente: Página 13 de la Prueba documental BRA-2.

Daño

57. El 7 de enero de 1998, la CNCE determinó en el Acta Nº 405 que no existían pruebas suficientes de daño o amenaza de daño que justificaran la iniciación de una investigación.[44] El período con respecto al que se recopilaron datos a efectos del análisis del daño fue el comprendido entre enero de 1994 y junio de 1997, teniendo en cuenta los datos correspondientes al año 1993 como año de referencia.[45]

58. El 17 de febrero de 1998, más de un mes después de que la CNCE determinara que no existían pruebas suficientes de daño o amenaza de daño que justificaran la iniciación de una investigación, el CEPA presentó a la SICM información nueva y actualizada sobre el daño.[46] El 18 de

[41] *Véase* la página 12 de la Prueba documental BRA-2.

[42] *Véanse* las páginas 12 y 13 de la Prueba documental BRA-2.

[43] *Véase* la página 13 de la Prueba documental BRA-2.

[44] *Véase* la página 9 de la Prueba documental BRA-3.

[45] *Véase* la página 5 de la Prueba documental BRA-3.

[46] *Véase* la Prueba documental BRA-4.

junio de 1998, la DGAJ envió a la SSCE una carta en la que manifestaba que la información nueva y actualizada presentada por el CEPA no había sido examinada por la CNCE cuando formuló su determinación en el Acta Nº 405. La DGAJ solicitaba y encomendaba a la CNCE que tuviera en cuenta la nueva información y formulara una nueva determinación.[47]

59. El 15 de julio de 1998, la SSCE envió una carta a la CNCE para que la Comisión examinara la nueva información presentada por el CEPA y formulara una determinación sobre la base de dicha información.[48] El 24 de julio de 1998, la CNCE solicitó que se actualizara la información presentada el 17 de febrero de 1998, fijando como fecha límite para la presentación de la información actualizada el 10 de agosto de 1998.[49] El 14 de agosto de 1998, la CNCE envió una carta al CEPA concediéndole una prórroga del plazo para presentar la información solicitada hasta el 20 de agosto de 1998.[50] El 26 de agosto de 1998, la CNCE envió otra carta al CEPA en la que fijaba el 2 de septiembre de 1998 como nueva fecha límite para presentar la información solicitada en su carta de 24 de julio de 1998.[51] El 1º de septiembre de 1998, el CEPA presentó la información solicitada por la CNCE.

60. El 22 de septiembre de 1998, la CNCE determinó en el Acta Nº 464 que existían pruebas suficientes de amenaza de daño que justificaban la iniciación de la investigación.[52] El período de recopilación de datos para el nuevo análisis del daño era el comprendido entre enero de 1994 y junio de 1998, teniendo en cuenta los datos correspondientes al año 1993 como año de referencia.[53]

i) Reclamación 1: Incompatibilidad con el párrafo 2 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping

Texto del párrafo 2 del artículo 5

61. El párrafo 2 del artículo 5 regula el contenido de las solicitudes de iniciación de una investigación antidumping. En los sucesivos incisos del párrafo 2 del artículo 5 se enumeran determinados datos específicos sobre una serie de factores que debe incluir la solicitud. El texto del párrafo 2 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping establece, en la parte pertinente, lo siguiente:

> "Con la solicitud a la que se hace referencia en el párrafo 1 se incluirán pruebas de la existencia de: a) dumping; b) un daño en el sentido del artículo VI del GATT de 1994 según se interpreta en el presente Acuerdo y c) una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el supuesto daño. No podrá considerarse que para cumplir los requisitos fijados en el presente párrafo basta una simple afirmación no apoyada por las pruebas pertinentes. La solicitud contendrá la información que razonablemente tenga a su alcance el solicitante sobre los siguientes puntos:
>
> [...]

[47] *Véase* la Prueba documental BRA-5.

[48] *Véase* la Prueba documental BRA-18.

[49] *Véase* la Prueba documental BRA-18.

[50] *Véase* la Prueba documental BRA-18.

[51] *Véase* la Prueba documental BRA-18.

[52] *Véase* la Prueba documental BRA-6.

[53] *Véase* la página 8 de la "Actualización Informe Técnico Previo a la Apertura" en la Prueba documental BRA-6.

iii) datos sobre los precios a los que se vende el producto de que se trate cuando se destina al consumo en los mercados internos del país o países de origen o de exportación (o, cuando proceda, datos sobre los precios a los que se venda el producto desde el país o países de origen o de exportación a un tercer país o a terceros países, o sobre el valor reconstruido del producto) así como sobre los precios de exportación o, cuando proceda, sobre los precios a los que el producto se revenda por primera vez a un comprador independiente en el territorio del Miembro importador;

iv) datos sobre la evolución del volumen de las importaciones supuestamente objeto de dumping, el efecto de esas importaciones en los precios del producto similar en el mercado interno y la consiguiente repercusión de las importaciones en la rama de producción nacional, según vengan demostrados por los factores e índices pertinentes que influyan en el estado de la rama de producción nacional, tales como los enumerados en los párrafos 2 y 4 del artículo 3."

Argumento jurídico relativo a la Reclamación 1

62. En virtud del párrafo introductorio del párrafo 2 del artículo 5, una solicitud debe incluir "pruebas" de la existencia de dumping, de un daño y de una relación causal entre uno y otro.

63. Para evaluar el tipo de información que se consideran "pruebas" que han de incluirse con la solicitud de iniciar una investigación, hay que atender al sentido corriente del término "*evidence*" (pruebas). "*Evidence*" (pruebas) se define como "*the available facts, circumstances, etc. supporting or otherwise a belief, proposition, etc., or indicating whether or not a thing is true or valid*" (hechos, circunstancias, etc. de los que se disponga que apoyan o no una idea, proposición, etc. o indican si algo es o no verdadero o válido).[54] De forma más concreta, en un contexto jurídico, se entiende por "*evidence*" (pruebas) la "*information given personally or drawn from a document etc. and tending to prove a fact or a proposition*" (información facilitada personalmente o extraída de un documento, etc. y que tiende a demostrar un hecho o una proposición).[55]

64. De la interpretación del término expuesta, el Brasil deduce que una alegación o información facilitada en la solicitud, sin documentación que la apoye no reúne las condiciones necesarias para ser considerada una "prueba". Nuestra interpretación se basa en el texto del párrafo 2 del artículo 5 que precisa el tipo de información que es necesario que acompañe a una solicitud. Según el párrafo 2 del artículo 5 "no podrá considerarse que para cumplir los requisitos fijados en el presente párrafo basta una simple afirmación no apoyada por las pruebas pertinentes".

65. En consecuencia, el requisito que establece el párrafo 2 del artículo 5 para que una solicitud sea viable no se cumple con una afirmación o alegación del solicitante. La proposición o alegación que presenta el solicitante en una solicitud debe ir acompañada de documentación o información que la apoye para poder ser considerada una "prueba". De forma más concreta, el Brasil considera que el tipo de información que es precisa en una solicitud es la información extraída de un documento que tienda a demostrar un hecho o una proposición.

66. Con respecto a las pruebas del dumping, deben incluirse con la solicitud "pruebas" de los precios a los que se vende el producto de que se trate cuando se destina al consumo en los mercados internos del país o países de origen o de exportación.

---

[54] *The Concise Oxford Dictionary - Ninth Edition*, Oxford University Press, 1995, página 467.

[55] *The Concise Oxford Dictionary - Ninth Edition*, Oxford University Press, 1995, página 467.

67. En el asunto que estamos examinando, no se presentó con la solicitud ninguna "prueba" en apoyo: 1) de que los pollos vendidos en el Brasil eran diferentes físicamente de los pollos exportados a la Argentina; 2) de que las supuestas diferencias en las características físicas influían en la comparabilidad de los precios; y 3) de la supuesta diferencia de rendimiento expuesta por el solicitante entre los pollos vendidos en el Brasil y los pollos exportados a la Argentina.

68. En la solicitud, el solicitante alegó que los pollos vendidos en el Brasil eran diferentes físicamente de los pollos exportados a la Argentina. En apoyo de esa alegación, el solicitante adjuntaba un informe de la compañía brasileña JOX, en el que podían identificarse los precios de un kilogramo de pollo refrigerado en São Paulo. El solicitante afirmaba además que esos precios estaban expresados en reales (la moneda brasileña), se daban en tres alternativas y correspondían a los precios del "pollo con patas, cabeza y menudos" según el fax enviado por JOX que se adjuntaba a la solicitud.[56] El solicitante afirmaba a continuación que esta diferencia obligaba a realizar un cálculo para homogeneizar las comparaciones entre los precios de los pollos vendidos a la Argentina y vendidos en el Brasil y adjuntaba un cálculo del ajuste.

69. El informe sobre los precios de JOX se refería a los pollos refrigerados vendidos en São Paulo el 30 de junio de 1997. El fax de JOX incluía la siguiente aclaración sobre el precio de los pollos publicado por ella:

> "Con referencia a su carta de 30 de julio de 1997, le informamos que los precios del pollo que se indican en nuestro informe corresponden a los pollos refrigerados con patas, cabeza y menudos."[57]

70. La información facilitada por JOX se refería exclusivamente a los precios de los pollos refrigerados, vendidos en São Paulo, con cabeza, patas y menudos, un día de 1997. Esta información no establecía, ni se afirmaba en ella, que todos los pollos vendidos en el Brasil se vendieran con cabeza y patas, sino simplemente que los precios publicados por JOX correspondían a los pollos refrigerados con cabeza y patas. El solicitante no demostraba ni aportaba pruebas de que todos los pollos vendidos en el Brasil se vendieran con cabeza, patas y menudos. Así pues, no se incluyó con la solicitud información o pruebas respecto de los precios a los que el producto de que se trataba se vendía cuando se destinaba al consumo en el Brasil.

71. De hecho, la publicación de los precios de JOX se refería únicamente a los pollos refrigerados y no a los pollos congelados. La información sobre el valor normal facilitada en la solicitud por el solicitante correspondía a los pollos refrigerados, en tanto que la información facilitada en la solicitud para establecer el precio de exportación correspondía a los pollos congelados. El solicitante no facilitó ninguna aclaración ni presentó prueba alguna que pusiera de manifiesto que no se vendían pollos congelados en el Brasil y que, por consiguiente, los precios correspondientes a los pollos refrigerados eran los precios que debían utilizarse al establecer el valor normal y en un análisis basado en una comparación equitativa. Es evidente que la información sobre el valor normal facilitada en la solicitud no incluía pruebas en cuanto a los precios de los pollos congelados en el Brasil.

72. Además, y de conformidad con el razonamiento del solicitante para el cálculo del ajuste, el solicitante debería haber propuesto, y la autoridad investigadora debería haber examinado, un reajuste para compensar el hecho de que el precio de los pollos utilizado para establecer el valor normal fuera diferente (pollos refrigerados) del precio de los pollos que habían servido para establecer el precio de exportación (pollos congelados). No se propuso ningún ajuste de esa naturaleza y la autoridad investigadora no realizó ninguna averiguación acerca de esas diferencias.

---

[56] *Véase* la Prueba documental BRA-1.

[57] *Véase* la Prueba documental BRA-1.

73. Además, ni en la publicación de los precios de JOX ni en su explicación de los precios publicados en su informe se indicaba si había diferencias de precios entre los pollos vendidos con cabeza y patas y los pollos vendidos sin cabeza ni patas. El solicitante no presentó ninguna "prueba" para demostrar que la supuesta diferencia entre las características físicas influía en la comparabilidad de los precios y justificaba, por tanto, un ajuste del precio de los pollos en el Brasil (valor normal). En la solicitud, el solicitante hacía una simple afirmación, no apoyada por ninguna "prueba", según la cual las supuestas diferencias entre las características físicas afectaban a la comparabilidad de los precios y por lo que debía ajustarse el valor normal.

74. Además, el solicitante adjuntaba un cálculo del ajuste para compensar las diferencias entre las características físicas de los pollos vendidos a la Argentina y los pollos vendidos en el Brasil, en el que se daba por supuesto que el rendimiento de los pollos eviscerados vendidos en el Brasil era el 88 por ciento de los pollos vivos y el rendimiento de los pollos eviscerados exportados a la Argentina el 80 por ciento de los pollos vivos. El solicitante basaba su cálculo del ajuste en esas cifras sin presentar ninguna "prueba" en apoyo de las supuestas diferencias de rendimiento.

ii) Reclamación 2: Incompatibilidad con el párrafo 3 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping

Texto del párrafo 3 del artículo 5

75. El párrafo 3 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping impone una obligación a la autoridad investigadora en relación a la iniciación de la investigación. Dicho párrafo establece lo siguiente:

> "Las autoridades examinarán la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas con la solicitud para determinar si existen pruebas suficientes que justifiquen la iniciación de una investigación."

Argumento jurídico relativo a la Reclamación 2

76. Con arreglo al párrafo 3 del artículo 5, las autoridades investigadoras deben examinar la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas con la solicitud para determinar si existen pruebas suficientes que justifiquen la iniciación de una investigación.

77. Como se ha indicado, la información facilitada por JOX se refería exclusivamente a los precios de los pollos refrigerados, vendidos en São Paulo, con cabeza, patas y menudos, un día de 1997. El solicitante utilizó esta información como dato para establecer el valor normal, como si dicha información correspondiera al precio general de los pollos vendidos en el Brasil. La información facilitada en la publicación sobre precios de JOX no establecía, ni en ella se indicaba, que todos los pollos vendidos en el Brasil se vendieran con cabeza, patas y menudos. En consecuencia, los datos expuestos no correspondían a los precios a los que el producto de que se trata se vendía cuando se destinaba al consumo en el Brasil. El Brasil considera que la información sobre los precios facilitada por JOX no era prueba suficiente para efectuar un ajuste del precio de los pollos en el Brasil y, en consecuencia, no bastaba para justificar la iniciación de la investigación.

78. En lo que respecta a lo que puede considerarse que constituyen "pruebas suficientes" para justificar la iniciación de una investigación antidumping, el Brasil está de acuerdo con el criterio establecido por el Grupo Especial que se ocupó del asunto *México - JMAF*:

> En cuanto a la cuestión de si las pruebas pueden considerarse suficientes a efectos de la iniciación con arreglo al Acuerdo Antidumping, señalamos las constataciones del Grupo Especial que se ocupó del asunto *Guatemala - Cemento*, que tomó en cuenta el razonamiento del Grupo Especial que se ocupó del asunto *Estados Unidos - Madera Blanda*. Reconocemos que, como el Órgano de Apelación revocó la conclusión del Grupo Especial que se ocupó del asunto *Guatemala - Cemento* sobre la cuestión de si

la diferencia había sido debidamente sometida al Grupo Especial, las conclusiones del Grupo Especial a ese respecto carecen de valor normativo. No obstante, en el informe del Grupo Especial se establece un criterio que consideramos instructivo en este asunto:

> "7.54. El Acuerdo Antidumping no define qué debe entenderse por "pruebas suficientes" que justifiquen la iniciación de una investigación antidumping. Lógicamente, en el asunto que examinamos hemos de atenernos, como norma a nuestro examen de la decisión del Ministerio de iniciar la investigación, a las prescripciones del párrafo 6 i) del artículo 17 del Acuerdo Antidumping. El párrafo 6 i) del artículo 17 estipula lo siguiente:
>
> > "al evaluar los elementos de hecho del asunto, [el grupo especial] determinará si las autoridades han establecido adecuadamente los hechos y si han realizado una evaluación imparcial y objetiva de ellos. Si se han establecido adecuadamente los hechos y se ha realizado una evaluación imparcial y objetiva, no se invalidará la evaluación, aun en el caso de que el grupo especial haya llegado a una conclusión distinta"
>
> 7.55 El Grupo Especial que examinó el asunto *Estados Unidos - Medidas que afectan a las importaciones de madera blanda procedentes del Canadá*, analizó en gran parte la misma cuestión con la que nos enfrentamos, en una diferencia en la que se impugnaba la iniciación de oficio de una investigación en materia de derechos compensatorios, debido, entre otras cosas a que, según se alegaba, las pruebas eran insuficientes para justificar la iniciación. El Grupo Especial observó lo siguiente:
>
> > "Al analizar más a fondo el significado de la expresión "pruebas suficientes", el Grupo Especial observó que el peso y la calidad de las pruebas que deben exigirse de una autoridad investigadora antes de iniciar una investigación necesariamente han de ser menores que las exigidas de esa autoridad en el momento de pronunciar una determinación definitiva. Al mismo tiempo, pareció al Grupo Especial que "pruebas suficientes" debía significar claramente más que una mera alegación o conjetura y que tal expresión no podía interpretarse en el mero sentido de "cualquier prueba". En concreto, tenía que haber una base fáctica para la decisión de la autoridad investigadora nacional y esa base de hechos debía ser susceptible de examen en el marco del Acuerdo. Si bien el peso y la calidad de las pruebas exigidas en el momento de la iniciación eran menores que las exigidas para establecer, después de la investigación, los elementos prescritos de subvención, importaciones subvencionadas, daños y relación causal entre las importaciones subvencionadas y el daño, el Grupo Especial opinó que las pruebas requeridas en el momento de la iniciación tenían que

> ser sin embargo pertinentes para establecer esos mismos elementos del Acuerdo.""[58]

79. Aunque el peso y la calidad de las pruebas que deben exigirse de una autoridad investigadora antes de iniciar la investigación sean menores que las exigidas de esa autoridad en el momento de formular una determinación preliminar definitiva, las "pruebas suficientes" necesarias para justificar la iniciación de una investigación han de ser algo más que una mera alegación.

80. En el presente caso, el solicitante trató de convertir la aclaración de JOX de que el precio publicado en su informe era el precio correspondiente a los pollos refrigerados con cabeza y patas en prueba de que todos los pollos vendidos en el Brasil eran pollos refrigerados con cabeza y patas. La autoridad investigadora aceptó indebidamente la aclaración de JOX como prueba de que todos los pollos vendidos en el Brasil eran pollos refrigerados con cabeza y patas.

81. El solicitante alegó también que era necesario compensar esta diferencia en las características físicas y dio por sentado que esas diferencias influían en la comparabilidad de los precios. La autoridad investigadora aceptó como cierta la alegación del solicitante, a pesar de que no se había presentado ninguna prueba que apoyara la tesis de que las supuestas diferencias físicas influían en la comparabilidad de los precios.

82. Basándose en la alegación de que las diferencias físicas influían en la comparabilidad de los precios, el solicitante presentó un cálculo para el ajuste del valor normal basado en las diferencias de rendimiento de los pollos eviscerados vendidos en los mercados de que se trataba. El solicitante alegaba que el rendimiento de los pollos eviscerados vendidos en el Brasil era el 88 por ciento de los pollos vivos y el rendimiento de los pollos eviscerados exportados a la Argentina el 80 por ciento de los pollos vivos. La autoridad investigadora aceptó el cálculo del solicitante a pesar de que no se presentaban pruebas de los rendimientos indicados.

83. En el asunto que nos ocupa el Brasil no solicita que el Grupo Especial evalúe de nuevo las pruebas y la información de que dispusieron las autoridades investigadoras en el momento en el que decidieron iniciar la investigación. Coincidimos con el Grupo Especial que se ocupó del asunto *Guatemala - Cemento I* en que el Grupo Especial tiene que examinar:

> "[...] si las pruebas en que se había fundado el Ministerio eran suficientes, es decir, si una autoridad investigadora imparcial y objetiva que evaluase esas pruebas podía correctamente haber determinado que existían pruebas suficientes del dumping, del daño y de la relación causal que justificasen la iniciación de la investigación."[59]

84. En el presente caso, de la insuficiencia de las pruebas presentadas o de la inexistencia de pruebas se desprende que una autoridad investigadora imparcial y objetiva habría constatado que las alegaciones hechas por el solicitante en la solicitud no estaban apoyadas por pruebas suficientes que justificaran la iniciación de una investigación.

---

[58] *México - Investigación antidumping sobre el jarabe de maíz con alta concentración de fructosa (JMAF) procedente de los Estados Unidos*, 28 de enero de 2000, WT/DS132/R, párrafo 7.94 (informe adoptado el 21 de noviembre de 2001) ("*México - JMAF*"). Las constataciones del Grupo Especial sobre la alegación relativa al párrafo 3 del artículo 5 no fueron objeto de apelación.

[59] *Guatemala - Investigación antidumping sobre el cemento Portland procedente de México*, 19 de junio de 1998, WT/DS60/R, párrafo 7.57 (informe adoptado el 25 de noviembre de 1998) ("*Guatemala - Cemento I*"). El Órgano de Apelación revocó la conclusión del Grupo Especial que se ocupó del asunto *Guatemala - Cemento I* sobre la cuestión de si la diferencia le había sido adecuadamente sometida. *Guatemala - Investigación antidumping sobre el cemento Portland procedente de México*, 2 de noviembre de 1998, WT/DS60/AB/R, párrafo 90 (informe adoptado el 25 de noviembre de 1998) ("*OA - Guatemala - Cemento I*").

85. En *Guatemala - Cemento I* el Grupo Especial constató además lo siguiente:

> "A nuestro juicio, al evaluar si existen pruebas suficientes de dumping que justifiquen la iniciación de la investigación, la autoridad investigadora no puede hacer caso omiso de lo dispuesto en el artículo 2 del Acuerdo Antidumping. El párrafo 2 del artículo 5 del Acuerdo exige que la solicitud incluya pruebas de la existencia de "dumping", y el párrafo 3 del artículo 5 exige que se determine si existen pruebas "suficientes" que justifiquen la iniciación de una investigación. En el artículo 2 del Acuerdo Antidumping se indican los elementos técnicos del cálculo del dumping, incluyendo las prescripciones aplicables para determinar el valor real, el precio de exportación y los ajustes necesarios para poder hacer una comparación equitativa. En nuestra opinión, la referencia que en el párrafo 2 del artículo 5 se hace al "dumping" ha de entenderse como una referencia al dumping tal como se define éste en el artículo 2. Esto no significa, desde luego, que el volumen y la calidad de las pruebas presentadas en la solicitud hayan de ser los que serían necesarios para hacer una determinación preliminar o definitiva de la existencia de dumping. No obstante, a nuestro parecer, se necesitan pruebas del **tipo** pertinente en un caso como en el que se examina, en el que es evidente, a juzgar por la solicitud, que el valor normal y el precio de exportación alegados en la solicitud habrán de ser ajustados para poder efectuar una comparación equitativa. Como mínimo, se debería reconocer de algún modo que para hacer una comparación equitativa se requerirán tales ajustes."[60] (Las negritas son del Grupo Especial.)

86. La DCD debería haber exigido, para aceptar que estaba justificado un ajuste del valor normal, que se presentaran con la solicitud pruebas del tipo pertinente sobre los pollos vendidos en el Brasil y exportados a la Argentina. A este respecto, citamos de nuevo el informe del Grupo Especial en *Guatemala - Cemento I*:

> "[...] La naturaleza o tipo de las pruebas necesarias para justificar la iniciación son iguales a la naturaleza o **tipo** de las pruebas necesarias para hacer una determinación preliminar o definitiva [...], aunque la calidad y el volumen de aquellas pruebas sean menores. [...]"[61] (Las negritas son del Grupo Especial.)

87. En el asunto que nos ocupa, los precios de los pollos refrigerados vendidos en São Paulo con cabeza, patas y menudos el 30 de junio de 1997 publicados por JOX no eran representativos de los valores normales de los pollos congelados vendidos en el Brasil y, en consecuencia, no correspondían al tipo de pruebas necesarias para justificar la iniciación de una investigación. Además, el solicitante no aportó ninguna prueba de que el valor normal de los pollos en el Brasil fuera diferente del precio de exportación de los pollos brasileños vendidos a la Argentina. El ajuste del valor normal propuesto por el solicitante tenía en cuenta un rendimiento de los pollos eviscerados vendidos en los mercados en cuestión no apoyado por ninguna prueba. Por todo ello, las autoridades argentinas no examinaron la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas con la solicitud cuando decidieron que la solicitud incluía pruebas suficientes del valor normal para justificar la iniciación de una investigación.

88. A este respecto, el Grupo Especial que se ocupó del asunto *Guatemala - Cemento II* llegó a una conclusión apropiada en cuanto a la obligación que impone el párrafo 3 del artículo 5 a las autoridades investigadoras:

---

[60] *Guatemala - Cemento I*, párrafo 7.64.

[61] *Guatemala - Cemento I*, párrafo 7.77.

> "Deseamos destacar que no pretendemos que las autoridades investigadoras hayan de investigar concienzudamente en la etapa de iniciación todas las diferencias eventuales que pueden influir en la comparabilidad de los precios indicados en una solicitud y efectuar o exigir que se realicen complejos ajustes en esos precios. No obstante, cabe esperar que, cuando de los propios términos de una solicitud se desprenda que hay problemas sustanciales de comparabilidad entre el precio de exportación y el precio en el mercado interno entre los que se establece la comparación, la autoridad investigadora reconozca al menos que las diferencias en los precios plantean cuestiones acerca de su comparabilidad y tenga de algún modo en cuenta la repercusión de esas diferencias en la suficiencia de las pruebas de dumping o recabe la información complementaria necesaria para hacerlo."[62] (Sin subrayar en el original.)

89. En el presente caso, la autoridad investigadora no tuvo de ningún modo en cuenta la repercusión de las posibles diferencias en la suficiencia de las pruebas presentadas ni recabó nuevos datos como evidentemente era necesario hacer.

90. Además, el párrafo 3 del artículo 5 exige que la autoridad investigadora examine la exactitud y pertinencia de las pruebas que, de hecho, se presenten con la solicitud. En el presente caso, el solicitante no presentó ninguna prueba que apoyara las afirmaciones de que: 1) las supuestas diferencias entre las características físicas de los pollos exportados a la Argentina (sin cabeza ni patas) y los pollos vendidos en el Brasil (con cabeza y patas) influían en la comparabilidad de los precios, lo que justificaría un ajuste del precio de los pollos en el Brasil (valor normal); y 2) el rendimiento indicado por el solicitante y utilizado para calcular el ajuste del valor normal era exacto.

iii) Reclamación 3: Incompatibilidad con el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping

Texto del párrafo 8 del artículo 5

91. La parte pertinente del párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping establece lo siguiente:

> "La autoridad competente rechazará la solicitud presentada con arreglo al párrafo 1 y pondrá fin a la investigación sin demora en cuanto se haya cerciorado de que no existen pruebas suficientes del dumping o del daño que justifiquen la continuación del procedimiento relativo al caso [...]."

Argumento jurídico relativo a la Reclamación 3

92. Como hemos manifestado en el marco de los argumentos jurídicos relativos a las reclamaciones 1 y 2, el solicitante no aportó con la solicitud ninguna prueba sustancial que apoyara las alegaciones de que: 1) había diferencias entre las características físicas de los pollos exportados a la Argentina y de los pollos vendidos en el Brasil; 2) las supuestas diferencias entre esas características físicas influían en la comparabilidad de los precios; y 3) la diferencia de rendimiento alegada por el solicitante para calcular el ajuste del valor normal era exacta.

93. El solicitante basó su alegación en los precios de los pollos refrigerados, con cabeza y patas vendidos en el mercado mayorista de São Paulo publicados por la compañía brasileña JOX. La DCD aceptó el ajuste del valor normal propuesto por el solicitante sin examinar la exactitud y pertinencia

---

[62] *Guatemala - Medida antidumping definitiva aplicada al cemento Portland gris procedente de México*, 24 de octubre de 2000, WT/DS156/R, párrafo 8.40 (informe adoptado el 17 de noviembre de 2000) ("*Guatemala - Cemento II*").

de las pruebas presentadas con la solicitud. De hecho, la autoridad investigadora aceptó el cálculo del valor normal indicado por el solicitante a pesar de que no se presentó ninguna prueba que apoyara la alegación de que las diferencias físicas entre el producto vendido en el Brasil y el producto exportado a la Argentina influían en la comparabilidad de los precios y de que el rendimiento indicado por el solicitante y utilizado en el cálculo del ajuste era exacto.

94. Con arreglo a lo expuesto en las reclamaciones 1 y 2, la Argentina, al no rechazar la solicitud debido a la inexistencia de pruebas suficientes que justificaran la continuación del procedimiento relativo al caso, infringió el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping.

iv) Reclamación 4: Incompatibilidad con el párrafo 3 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping

Texto del párrafo 3 del artículo 5

95. El párrafo 3 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping establece lo siguiente:

> "Las autoridades examinarán la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas con la solicitud para determinar si existen pruebas suficientes que justifiquen la iniciación de una investigación."

Argumento jurídico relativo a la Reclamación 4

96. En la determinación de apertura de la investigación antidumping, la DCD calculó el precio de exportación basándose en los datos aportados por el solicitante para el período comprendido entre enero y mayo de 1997 y para agosto de 1997 y en los datos facilitados por la DUI para el período comprendido entre agosto y octubre de 1996.

97. Sobre la base de esos datos, la DCD consideró que una porción importante de los pollos importados del Brasil entraba en el país a precios de dumping, es decir a precios inferiores al precio de los pollos eviscerados en el mercado interno del Brasil (valor normal). Sin ninguna justificación, la DCD excluyó los precios de exportación correspondientes a las transacciones de importación que se efectuaron a precios superiores al valor normal y estableció el precio de exportación a efectos de la iniciación basándose únicamente en las transacciones efectuadas a precios inferiores al valor normal.

98. Al proceder así, la DCD estableció inadecuadamente el precio de exportación y, en consecuencia, realizó una comparación viciada entre el precio de exportación y el valor normal al establecer el margen de dumping.

99. De conformidad con el párrafo 3 del artículo 5, las autoridades deben examinar, sobre la base de las pruebas presentadas con la solicitud, si hay pruebas suficientes que indiquen la existencia de dumping y de daño a la rama de producción nacional para justificar la iniciación de una investigación. Así pues, para determinar si hay indicios de dumping y de daño, las autoridades deben basar su determinación en las pruebas presentadas con la solicitud.

100. Al seleccionar, del conjunto de las transacciones de exportación presentadas por el solicitante con la solicitud, determinadas transacciones de exportación, las autoridades no examinaron la exactitud y pertinencia de todas las pruebas presentadas con la solicitud, como exige el párrafo 3 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping.

101. El párrafo 3 del artículo 5 obliga expresamente a la autoridad investigadora a examinar la "exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas con la solicitud [...]". En esta reclamación, el Brasil no aduce que la Argentina no "examinara" pruebas no comprendidas en el ámbito de la solicitud. Lo que se aduce es que la Argentina, de conformidad con el Acuerdo, estaba obligada a

basar su determinación en su evaluación de los elementos de hecho del asunto que le había sido presentado.

102. Además, el párrafo 3 del artículo 5 obliga a las autoridades a examinar la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas con la solicitud para determinar si existen pruebas suficientes de dumping, de daño y de una relación causal que justifiquen la iniciación de una investigación. El examen de las pruebas de dumping, conforme a lo previsto en el párrafo 3 del artículo 5, remite al concepto de "dumping" en el sentido en que se define ese término en el artículo 2 del Acuerdo Antidumping.

103. En particular, el párrafo 4 del artículo 2 establece cómo debe realizarse una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal y el párrafo 4.2 de ese mismo artículo indica cómo deben establecerse los márgenes de dumping. El párrafo 4.2 del artículo 2 establece, en la parte pertinente, lo siguiente:

> "[...] la existencia de márgenes de dumping durante la etapa de investigación se establecerá normalmente sobre la base de una comparación entre un promedio ponderado del valor normal y un promedio ponderado de los precios de todas las transacciones de exportación comparables [...]" (Sin subrayar en el original.)

104. Con arreglo a este método, las autoridades están obligadas a comparar el promedio ponderado del valor normal con el promedio ponderado de los precios de todas las transacciones de exportación comparables, y no sólo con los de aquellas transacciones de exportación efectuadas a precios inferiores al valor normal.

105. Al excluir, a efectos de la determinación de la existencia de pruebas suficientes de dumping, las transacciones de exportación efectuadas a precios iguales o superiores al valor normal, la autoridad investigadora adoptó un método que dará siempre como resultado un margen de dumping. Este método adoptado por las autoridades argentinas tuvo por efecto el establecimiento de un precio de exportación incorrecto y la realización de una comparación no equitativa entre el precio de exportación y el valor normal, en contra de lo prescrito en los párrafos 4 y 4.2 del artículo 2.

106. Nuestra interpretación del párrafo 4.2 del artículo 2 se basa en el siguiente análisis del Órgano de Apelación en *OA - CE - Ropa de cama*:

> "[...] A este respecto, subrayamos que el párrafo 4.2 del artículo 2 habla de "todas" las transacciones de exportación comparables. Como se ha aclarado antes, al aplicar la práctica de "reducción a cero" las Comunidades Europeas asignaron un valor cero a los "márgenes de dumping" correspondientes a aquellos modelos en los que el "margen de dumping" era "negativo". Como señaló acertadamente el Grupo Especial, en el caso de esos modelos, las Comunidades Europeas atribuyeron al "promedio ponderado del precio de exportación una cuantía igual al promedio ponderado del valor normal [...] a pesar de que en realidad era más alto que el promedio ponderado del valor normal". En consecuencia, al "reducir a cero" los "márgenes de dumping negativos" las Comunidades Europeas no tuvieron plenamente en cuenta la totalidad de los precios de algunas transacciones de exportación, en concreto de las transacciones de exportación con modelos de ropa de cama de algodón en los que se constató la existencia de "márgenes de dumping negativos", sino que trataron a esos precios de exportación como si hubieran sido menores de lo que eran en realidad, lo que, a su vez, incrementó artificialmente el resultado del cálculo del margen de dumping. En consecuencia, las Comunidades Europeas no establecieron "la existencia de márgenes de dumping" para la ropa de cama de algodón basándose en una comparación entre el promedio ponderado del valor normal y el promedio ponderado de los precios de todas las transacciones de

> exportación comparables, es decir de todas las transacciones con todos los modelos o tipos del producto objeto de investigación. Además, consideramos que una comparación entre el precio de exportación y el valor normal en la que no se tengan plenamente en cuenta los precios de todas las transacciones de exportación comparables, como ocurre en la que se realiza cuando se sigue, como se ha seguido en la presente diferencia, la práctica de "reducción a cero", no constituye una "comparación equitativa" entre el precio de exportación y el valor normal, como exigen el párrafo 4 y el párrafo 4.2 del artículo 2."[63] (Sin subrayar en el original.)

107. De modo análogo a lo que ocurrió en ese asunto, en el presente caso las autoridades argentinas, al excluir los precios de exportación iguales o superiores al valor normal, no tuvieron plenamente en cuenta todos los precios de las transacciones de exportación y trataron las transacciones excluidas como si se hubieran realizado a un precio menor que aquél al que se efectuaron realmente. Con este método no sólo se incrementó artificialmente el margen de dumping, sino que se prescindió también de las pruebas presentadas con la solicitud.

108. La decisión de la Argentina de iniciar la investigación con arreglo a este método se basó en una evaluación parcial y no objetiva de los elementos de hecho que se le habían presentado, incompatible con la norma del párrafo 6 i) del artículo 17 del Acuerdo Antidumping.

109. Debido al método adoptado por las autoridades argentinas para establecer el precio de exportación, en la comparación entre el precio de exportación y el valor normal y en el establecimiento de un margen de dumping no se tuvieron plenamente en cuenta los precios de todas las transacciones de exportación comparables comunicadas en la solicitud, por lo que la Argentina infringió el párrafo 3 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping.

v) Reclamación 5: Incompatibilidad con el párrafo 2 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping

Texto del párrafo 2 del artículo 5

110. El texto de la parte pertinente del párrafo 2 del artículo 5 establece lo siguiente:

> "Con la solicitud a que se hace referencia en el párrafo 1 se incluirán pruebas de la existencia de: a) dumping; b) un daño en el sentido del artículo VI del GATT de 1994 según se interpreta en el presente Acuerdo y c) una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el supuesto daño. No podrá considerarse que para cumplir los requisitos fijados en el presente párrafo basta una simple afirmación no apoyada por las pruebas pertinentes. La solicitud contendrá la información que razonablemente tenga a su alcance el solicitante sobre los siguientes puntos: [...]."

Argumento jurídico relativo a la Reclamación 5

111. En la solicitud, el solicitante presentó datos sobre el precio de exportación y el valor normal correspondientes a períodos diferentes. El valor normal se basaba en el precio de los pollos refrigerados, con cabeza y patas, vendidos en el mercado mayorista de São Paulo un solo día de 1997, el 30 de junio. El precio de exportación se basaba en los datos de las estadísticas de Sysdec sobre los precios de exportación correspondientes al período comprendido entre enero y mayo de 1997 y a agosto de 1997. Los datos presentados en la solicitud por el solicitante y utilizados para calcular un margen de dumping eran incompatibles con el párrafo 2 del artículo 5 al menos en dos aspectos.

---

[63] *Comunidades Europeas - Derechos antidumping sobre las importaciones de ropa de cama de algodón originarias de la India*, 1º de marzo de 2001, WT/DS141/AB/R, párrafo 55, (informe adoptado el 12 de marzo de 2001) ("*OA - CE - Ropa de cama*").

112. En primer lugar, dado que la información sobre el valor normal y sobre el precio de exportación facilitada correspondía a transacciones no efectuadas en fechas lo más próximas posible, no se incluían con la solicitud pruebas suficientes de "dumping", como exige el párrafo 2 del artículo 5.

113. El párrafo 2 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping exige que con la solicitud se incluyan pruebas suficientes de la existencia de "dumping". La referencia al "dumping" del párrafo 2 del artículo 5 nos remite al concepto de "dumping" en el sentido definido en el artículo 2 del Acuerdo Antidumping. El artículo 2 es la disposición que establece los elementos técnicos del cálculo del dumping, con inclusión de las prescripciones relativas a la determinación del valor normal y el precio de exportación y a los ajustes necesarios para efectuar una comparación equitativa. El párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping da la siguiente definición del término "dumping":

> "A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que un producto es objeto de dumping, es decir que se introduce en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal, cuando su precio de exportación al exportarse de un país a otro sea menor que el precio comparable, en el curso de operaciones comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo en el país exportador." (Sin subrayar en el original.)

114. Las siguientes disposiciones del artículo 2 exponen detalladamente la información y las metodologías que deben utilizarse en la determinación de si existe "dumping". En particular, el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping indica cómo debe hacerse una comparación equitativa entre el valor normal y el precio de exportación. El texto de la parte pertinente de la introducción del párrafo 4 del artículo 2 es el siguiente:

> "Se realizará una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal. Esta comparación se hará en el mismo nivel comercial, normalmente el nivel "ex fábrica" y sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible. [...]" (Sin subrayar en el original.)

115. El párrafo 4 del artículo 2 exige que se haga una comparación equitativa "sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible". Del texto del párrafo 4 del artículo 2 se desprende claramente que el momento en que se realizan las transacciones de venta puede tener consecuencias con respecto a la comparabilidad de los precios de exportación y las transacciones efectuadas en el mercado interno.

116. En el caso que nos ocupa, el valor normal indicado en la solicitud correspondía a un solo día de 1997 (el 30 de junio), en tanto que los datos presentados sobre los precios de exportación abarcaban los precios de las transacciones de exportación realizadas en un período de seis meses de 1997 (de enero a mayo de 1997 y agosto de ese mismo año). El establecimiento de un valor normal sobre la base de un solo día (30 de junio de 1997) no puede utilizarse como parámetro para una comparación equitativa con el precio de exportación determinado respecto de dos períodos de más de 30 días cada uno (uno de ellos de enero a mayo de 1997 y otro agosto de 1997), en ninguno de los cuales estaba incluido el único día utilizado para establecer el valor normal.

117. Dado que los precios pueden variar en un determinado período, no cabe considerar que una comparación entre un promedio de los precios de exportación durante un período mucho más largo con un solo precio como valor normal constituya una comparación equitativa. Según el párrafo 4 del artículo 2, para realizar una comparación equitativa y establecer la existencia de "dumping" es preciso comparar el precio de exportación y el valor normal "sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible". Para cumplir la prescripción relativa a las pruebas del "dumping" del párrafo 2 del artículo 5, el solicitante debería haber aportado información sobre el valor normal respecto de un período equivalente al correspondiente a los datos referentes al precio de exportación.

118. Además, el párrafo 4.2 del artículo 4 del Acuerdo Antidumping indica la base de la comparación que ha de realizarse entre el valor normal y el precio de exportación al establecer la existencia de márgenes de "dumping". La parte pertinente del párrafo 4.2 del artículo 2 dispone lo siguiente:

> "[...] la existencia de márgenes de dumping [...] se establecerá normalmente sobre la base de una comparación entre un promedio ponderado del valor normal y un promedio ponderado de los precios de todas las transacciones de exportación comparables o mediante una comparación entre el valor normal y los precios de exportación transacción por transacción." (Sin subrayar en el original.)

119. Para entender el sentido del párrafo 4.2 del artículo 2 es preciso definir el término "comparables". Con arreglo a una interpretación del sentido corriente del término, "comparable" (comparables) significa "*be able to be compared*" (susceptibles de comparación), "*fit to be compared*" (aptos para ser comparados) o "*worth comparing*" (digno de comparación).[64] "*Compare*" (comparar) se define como "*express similarities in*" (exponer las similitudes en), "*estimate the similarity or dissimilarity of*" (evaluar la similitud o disimilitud de), o "*be equal or equivalent to*" (ser igual o equivalente a).[65]

120. En consecuencia, la comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal debe hacerse tomando como base transacciones comparables, es decir, transacciones aptas para ser comparadas o equivalentes.

121. No es posible evaluar la similitud o disimilitud de dos elementos o la relación entre ellos si no se determina la base sobre la que debe hacerse la comparación correspondiente. Esa base se establece en párrafo 4 del artículo 2, que exige que la comparación se haga "sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible".

122. La determinación del valor normal con arreglo a los precios de un solo día de 1997 no puede servir de base para realizar una comparación equitativa a los efectos de establecer si existe o no un margen de dumping.

123. El Brasil entiende que aun cuando las pruebas que han de presentarse con la solicitud no sean las mismas, tanto en lo que respecta a su volumen como a su calidad, que las necesarias para formular una determinación preliminar o definitiva de la existencia de dumping, en un caso en que el valor normal presentado en la solicitud se basa en un único precio en el año se requieren pruebas del tipo de información pertinente.

124. En segundo lugar, el párrafo 2 del artículo 5 requiere que la solicitud contenga la información sobre el valor normal y el precio de exportación "que razonablemente tenga a su alcance el solicitante". A este respecto, el Brasil entiende que el solicitante tuvo razonablemente a su alcance información sobre el valor normal correspondiente a la totalidad de los años 1996 y 1997, a pesar de lo cual sólo facilitó con la solicitud información sobre el valor normal correspondiente a un día de 1997 (el 30 de junio). El Brasil considera que el solicitante tuvo acceso a información sobre el valor normal correspondiente a los años 1996 y 1997, dado que el 26 de julio de 1999 facilitó información actualizada sobre el valor normal respecto del período comprendido entre 1998 y enero de 1999. En la planilla correspondiente se ofrecía información sobre el valor normal respecto de tres días de cada uno de los doce meses de 1998 y de dos días de enero de 1999.[66] La información sobre

---

[64] *The Concise Oxford Dictionary - Ninth Edition*, Oxford University Press, 1995, página 269.

[65] *The Concise Oxford Dictionary - Ninth Edition*, Oxford University Press, 1995, página 270.

[66] *Véase* la Prueba documental BRA-19.

el valor normal iba acompañada de una copia de las respectivas publicaciones diarias de precios de JOX.

125. Lo anterior pone de manifiesto que los precios de los pollos publicados por JOX estuvieron razonablemente al alcance del solicitante, y que con la solicitud debía haberse facilitado información sobre el valor normal para todo el período de los años 1996 y 1997, puesto que esa información estaba también razonablemente al alcance del solicitante. No obstante, éste optó por incluir únicamente información sobre el valor normal de un día de 1997, el 30 de junio.

126. Al no haberse presentado con la solicitud información que estaba razonablemente al alcance del solicitante, no se cumplió el requisito establecido en el párrafo 2 del artículo 5.

vi) Reclamación 6: Incompatibilidad con el párrafo 3 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping

Texto del párrafo 3 del artículo 5

127. Párrafo 3 del artículo 5:

> "Las autoridades examinarán la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas con la solicitud para determinar si existen pruebas suficientes que justifiquen la iniciación de una investigación."

Argumento jurídico relativo a la Reclamación 6

128. Con respecto a la reclamación 6, en el marco del párrafo 3 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping, el Grupo Especial debería examinar en primer lugar las prescripciones del párrafo 2 del artículo 5 relativas a las pruebas e información que debe incluir la solicitud de iniciación de una investigación antidumping.

129. Como se afirma en la reclamación 5 de la presente comunicación, con la solicitud el solicitante presentó datos sobre los precios de exportación y el valor normal correspondientes a períodos diferentes. El valor normal se basaba en el precio de los pollos refrigerados, con cabeza y patas, vendidos en el mercado mayorista de São Paulo el 30 de junio de 1997, y el precio de exportación se establecía con respecto al período comprendido entre enero y mayo de 1997 y al mes de agosto de ese mismo año.

130. En la determinación de apertura de la investigación antidumping, la DCD estableció el valor normal sobre la base de los datos sobre el valor normal presentados en la solicitud respecto de los pollos refrigerados, con cabeza y patas, vendidos en el mercado mayorista de São Paulo el 30 de junio de 1997. La DCD estableció el precio de exportación sobre la base de los datos presentados por el solicitante para el período comprendido entre enero y mayo de 1997 y para agosto de 1997 y de los datos sobre las exportaciones facilitados por la DUI argentina para el período comprendido entre agosto y octubre de 1996.

131. La DCD no examinó la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas con la solicitud cuando constató que había pruebas suficientes para establecer el valor normal y, en consecuencia, la existencia del dumping, que justificaban la iniciación de la investigación.

132. En primer lugar, al evaluar si en la solicitud hay pruebas suficientes de "dumping" que justifiquen la iniciación de la investigación, la autoridad investigadora no puede prescindir de las disposiciones del artículo 2 del Acuerdo Antidumping, que define el "dumping" y regula su determinación. En particular, el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping exige que se realice una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible.

133. Si hubiera examinado la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas con la solicitud, la DCD habría constatado que los datos sobre el valor normal de la solicitud correspondían a un solo día de 1997 (el 30 de junio) y que los datos sobre el precio de exportación correspondían a un período de seis meses de 1997 (de enero a mayo de 1997 y agosto de ese mismo año). Dado que los precios varían en el curso de un período, debe realizarse una comparación equitativa sobre la base de ventas efectuadas en las fechas lo más próximas posible. Los datos sobre el valor normal presentados con la solicitud correspondían a un período que no era equivalente al período al que correspondían los datos sobre los precios de exportación facilitados en ella.

134. Además, las autoridades no se limitaron a los datos presentados con la solicitud y ampliaron el período de las transacciones de exportación para establecer el precio de exportación. En la determinación de apertura de la investigación, la DCD estableció el precio de exportación sobre la base de datos que abarcaban un período de nueve meses (datos correspondientes a seis meses facilitados por el solicitante y datos correspondientes a tres meses facilitados por la DUI). En consecuencia, el valor normal se estableció de conformidad con la información presentada con la solicitud (precio de los pollos refrigerados el 30 de junio de 1997), pero el precio de exportación se estableció sobre la base de la información presentada por el solicitante (correspondiente al período de enero a mayo de 1997 y a agosto de 1997) y la información facilitada por la DUI (correspondiente al período comprendido entre agosto y octubre de 1996), lo que pone claramente de manifiesto que la autoridad investigadora no se basó en la información presentada con la solicitud para determinar que había pruebas suficientes de "dumping" que justificaban la iniciación de la investigación.

135. Además, la autoridad determinó que existían pruebas suficientes de dumping apoyándose en información sobre los precios de exportación y el valor normal correspondiente a ventas no efectuadas en las fechas lo más próximas posible.

136. El Brasil entiende que aun cuando las pruebas presentadas con la solicitud no sean las mismas, tanto en lo que respecta al volumen como a la calidad, que las necesarias para formular una determinación preliminar o definitiva de la existencia de dumping, en un caso en el que el valor normal presentado en la solicitud se basa en un solo precio del año se requieren pruebas que correspondan al tipo de información pertinente. Si hubieran examinado la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas con la solicitud, las autoridades habrían exigido que el solicitante indicara el precio de los pollos durante todo el período objeto de análisis, para realizar correctamente una comparación equitativa con los precios de exportación en ese mismo período.

137. En segundo lugar, dado que el solicitante sólo presentó información sobre el valor normal correspondiente a un solo día de 1997, las pruebas presentadas con la solicitud no cumplían el requisito del párrafo 2 del artículo 5, que exige que el solicitante presente con la solicitud la información que esté razonablemente a su alcance. Como se ha indicado en el argumento relativo a la reclamación 5, el solicitante podía haber presentado información sobre el valor normal para todo el período de los años 1996 y 1997, tomada de la publicación disponible de JOX. No obstante, el solicitante sólo presentó información sobre el valor normal correspondiente a un día del período.

138. Al no examinar adecuadamente las pruebas incluidas con la solicitud y tener además en cuenta información sobre el precio de exportación no presentada con la solicitud en la determinación de apertura de la investigación, la DCD actuó de forma incompatible con el párrafo 3 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping.

vii) Reclamación 7: Incompatibilidad con el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping

Texto del párrafo 8 del artículo 5

139. El párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping establece lo siguiente:

> "La autoridad competente rechazará la solicitud presentada con arreglo al párrafo 1 y pondrá fin a la investigación sin demora en cuanto se haya cerciorado de que no existen pruebas suficientes del dumping o del daño que justifiquen la continuación del procedimiento relativo al caso [...]."

Argumento jurídico relativo a la Reclamación 7

140. Con arreglo a lo expuesto en las reclamaciones 5 y 6 *supra*, el solicitante presentó con la solicitud pruebas insuficientes para establecer el valor normal. Esas pruebas eran necesarias para deducir la existencia de dumping. Basándose en las pruebas insuficientes presentadas sobre el valor normal por el solicitante, la DCD decidió de forma incorrecta iniciar la investigación sin examinar la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas con la solicitud.

141. La DCD no rechazó la solicitud ante la falta de pruebas que apoyaran el valor normal alegado por el solicitante en la solicitud y, por consiguiente, infringió el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping.

viii) Reclamación 8: Incompatibilidad con el párrafo 3 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping

Texto del párrafo 3 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping

142. Párrafo 3 del artículo 5:

> "Las autoridades examinarán la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas con la solicitud para determinar si existen pruebas suficientes que justifiquen la iniciación de una investigación."

Argumento jurídico relativo a la Reclamación 8

143. El dumping constatado en la determinación de apertura de la investigación se basó en: 1) el precio de los pollos vendidos en el Brasil el 30 de junio de 1997 (valor normal) y 2) el precio de los pollos importados en la Argentina procedentes del Brasil en los períodos comprendidos entre agosto y octubre de 1996 y enero y mayo de 1997 y en agosto de ese mismo año (precio de exportación).

144. El daño constatado en la determinación de apertura de la investigación se basó en datos correspondientes al período comprendido entre enero de 1994 y junio de 1998.

145. En lo que respecta al período de recopilación de datos a efectos del daño, la CNCE examinó inicialmente el daño, en el Acta Nº 405, basándose en los datos recopilados respecto del período comprendido entre enero de 1994 y junio de 1997. Sobre la base de los datos correspondientes a ese período, el Acta Nº 405 no constató la existencia de pruebas suficientes de daño o amenaza de daño a la rama de producción nacional. Cuando la CNCE rectificó su determinación en el Acta Nº 464, se amplió en un año el período de recopilación de datos a efectos del análisis del daño, que pasó a ser el comprendido entre enero de 1994 y junio de 1998. El Acta Nº 464 constató la existencia de pruebas suficientes de amenaza de daño que justificaban la iniciación de la investigación.

146. En la determinación sobre la existencia de la relación de causalidad a efectos de la iniciación de la investigación, la SICM explicó que el APCDS basó su determinación sobre el dumping en elementos incluidos en la solicitud que originalmente correspondían a información referida al período de enero a junio de 1997.[67] La SICM señalaba además que, con posterioridad a la determinación de dumping, el solicitante suministró información adicional actualizada que abarcaba datos

[67] *Véase* la página 2 de la Prueba documental BRA-20.

correspondientes a la totalidad del año 1997 y el primer semestre de 1998.[68] No obstante, los datos adicionales fueron suministrados por el solicitante[69] el 17 de febrero de 1998, más de un mes después de que el APCDS hubiera determinado la existencia de dumping, el 7 de enero de 1998.[70] La determinación sobre el dumping a efectos de la iniciación de la investigación nunca fue actualizada para tener en cuenta la nueva información presentada por el solicitante.

147. Los diferentes períodos de recopilación de datos a efectos del dumping y del daño considerados por las autoridades investigadoras en la decisión relativa a la iniciación indican que las autoridades argentinas no examinaron la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas con la solicitud en su determinación de que existían pruebas suficientes de una relación causal que justificaban la iniciación de la investigación.

148. El párrafo 3 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping obliga a las autoridades a examinar la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas con la solicitud para determinar si hay pruebas suficientes que justifiquen la iniciación de una investigación. De los hechos expuestos anteriormente se desprende claramente que el APCDS no tomó en consideración la nueva información presentada por el solicitante el 17 de febrero de 1998 y, por consiguiente, no actualizó su determinación sobre el dumping a efectos de la iniciación de la investigación. Así pues, las autoridades investigadoras no examinaron la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas con la solicitud.

149. El párrafo 3 del artículo 5 se refiere también a las "pruebas" suficientes (en la solicitud) necesarias para justificar la iniciación de una investigación. Las "pruebas" mencionadas en el párrafo 3 del artículo 5 son las indicadas en el párrafo 2 de ese mismo artículo, que dispone lo siguiente:

> "Con la solicitud [...] se incluirán pruebas de la existencia de: a) dumping; b) un daño [...] y c) una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el supuesto daño. [...]" (Sin subrayar en el original.)

150. Dado que el APCDS no actualizó su determinación sobre la existencia de dumping a efectos de la iniciación de la investigación en función de la nueva información facilitada por el solicitante el 17 de febrero de 1998, la SICM no podía constatar que había pruebas suficientes de una relación de causalidad entre las importaciones objeto de dumping en junio de 1997 y la amenaza de daño en junio de 1998.

151. En el Acta Nº 405, la CNCE no constató la existencia de pruebas suficientes de daño o amenaza de daño a la rama de producción nacional respecto del período comprendido entre enero de 1994 y junio de 1997. Dado que el Acta Nº 405 constató que no existían pruebas suficientes de daño o amenaza de daño, cabe lógicamente suponer que el dumping constatado por el APCDS, respecto del período comprendido entre enero y junio de 1997, no estaba causando daño o amenaza de daño a la rama de producción nacional en junio de 1997.

152. La nueva información suministrada por el solicitante el 17 de febrero de 1998 constituyó la base para la nueva determinación sobre el daño de la CNCE en el Acta Nº 464. Sobre la base del período de recopilación de datos comprendido entre enero de 1994 y junio de 1998, el Acta constató la existencia de pruebas suficientes de una amenaza de daño que justificaban la iniciación de la investigación. Sin embargo, la determinación sobre la existencia de dumping no había sido actualizada en función de la nueva información facilitada por el solicitante.

---

[68] *Véase* la página 4 de la Prueba documental BRA-20.

[69] *Véase* la Prueba documental BRA-4.

[70] *Véase* la Prueba documental BRA-2.

153. Al no considerar la nueva información facilitada por el solicitante en el análisis del dumping, ¿cómo podía determinar el APCDS que existía efectivamente dumping? Además, si el dumping constatado respecto del período comprendido entre enero y junio de 1997 no causaba un daño o amenaza de daño a la rama de producción nacional en junio de 1997, ¿cómo podía la SICM determinar que el dumping constatado respecto del período comprendido entre enero y junio de 1997 causaba una amenaza de daño en junio de 1998?

154. Para verificar la existencia de una amenaza de daño causado por las importaciones efectuadas a precios de dumping, habría sido preciso ampliar hasta junio de 1998 los datos sobre el dumping recopilados y analizados. La DCD no examinó si existía dumping en el segundo semestre de 1997 y/o en el primer semestre de 1998.

155. A estos efectos, el párrafo 7 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping proporciona una base adecuada para establecer los hechos y circunstancias que es necesario que concurran en relación con la existencia de una amenaza de daño importante.

> "La determinación de la existencia de daño importante se basará en hechos y no simplemente en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas. La modificación de las circunstancias que daría lugar a una situación en la cual el dumping causaría un daño deberá ser claramente prevista e inminente."

156. De forma más concreta, el párrafo 7 del artículo 3 indica que la modificación de las circunstancias que daría lugar a una situación en la cual el dumping causaría un daño ha de ser claramente prevista e inminente. En la nota 10 al párrafo 7 del artículo 3 se cita como ejemplo la existencia de "razones convincentes para creer que en el futuro inmediato habrá un aumento sustancial de las importaciones del producto a precios de dumping".

157. En el presente caso, el Acta Nº 405 estableció que hasta junio de 1997 no había pruebas suficientes de daño o amenaza de daño. Entre junio de 1997 y junio de 1998 no hubo una modificación prevista e inminente de las circunstancias que diera lugar a una situación en la que las importaciones objeto de dumping en junio de 1997 causaran una amenaza de daño a la rama de producción nacional en junio de 1998 (último mes del período de recopilación de datos a efectos del análisis del daño).

158. En contra de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 5, la DCD y la SICM no examinaron la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas con la solicitud, al no examinar los datos adicionales sobre el dumping facilitados por el solicitante para el período comprendido entre julio de 1997 y junio de 1998. Al comparar períodos diferentes para establecer la existencia del dumping y del daño, la SICM no examinó de forma correcta y adecuada las pruebas de la relación causal presentadas con la solicitud.

ix) Reclamación 9: Incompatibilidad con el párrafo 7 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping

Texto del párrafo 7 del artículo 5

159. El párrafo 7 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping establece lo siguiente:

> "Las pruebas de la existencia del dumping y del daño se examinarán simultáneamente: a) en el momento de decidir si se inicia o no una investigación y b) posteriormente, en el curso de la investigación, a partir de una fecha que no será posterior al primer día en que, de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo, puedan aplicarse medidas provisionales."

Argumento jurídico relativo a la Reclamación 9

160. La DCD estableció como períodos de recopilación de datos a efectos del dumping el 30 de junio de 1997 para el valor normal y los períodos comprendidos entre agosto y octubre de 1996 y entre enero y mayo de 1997 y agosto de 1997 para el precio de exportación. La CNCE estableció como período de recopilación de datos a efectos del daño el comprendido entre enero de 1994 y junio de 1998.

161. Con respecto al período de recopilación de datos a efectos del daño, la CNCE examinó inicialmente el daño en el Acta Nº 405 sobre la base de los datos recopilados respecto del período comprendido entre enero de 1994 y junio de 1997. Sobre la base de los datos correspondientes a ese período, el Acta Nº 405 no constató que existieran pruebas suficientes de daño o amenaza de daño a la rama de producción nacional. Cuando la CNCE rectificó su determinación en el Acta Nº 464, se amplió en un año el período de recopilación de datos para el análisis del daño, que pasó a ser el comprendido entre enero de 1994 y junio de 1998. En el Acta Nº 464 se constató que existían pruebas suficientes de una amenaza de daño que justificaban la iniciación de una investigación.

162. En la determinación sobre la relación de causalidad a efectos de la iniciación de la investigación, la SICM explicó que el APCDS basó su determinación sobre el dumping en elementos incluidos en la solicitud que correspondían originalmente a información sobre el período comprendido entre enero y junio de 1997. La SICM señalaba además que con posterioridad a la determinación sobre el dumping, el solicitante suministró información adicional actualizada que incluía datos correspondientes a la totalidad de 1997 y al primer semestre de 1998. No obstante, los datos adicionales fueron facilitados por el solicitante el 17 de febrero de 1998, más de un mes después de que el APCDS hubiera determinado la existencia de dumping, el 7 de enero de 1998. La determinación sobre el dumping a efectos de la iniciación de la investigación nunca fue actualizada en función de la nueva información facilitada por el solicitante.

163. La consideración por las autoridades argentinas, en la decisión de iniciar la investigación, de períodos diferentes de recopilación de datos para el dumping y para el daño fue incompatible con el párrafo 7 del artículo 5 al menos en dos aspectos.

164. En primer lugar, como se ha indicado antes, los datos recopilados para el análisis del dumping sólo llegaban hasta junio de 1997. La CNCE determinó que había pruebas suficientes de la existencia de una amenaza de daño a partir de los datos sobre el daño recopilados hasta junio de 1998.

165. El Acta Nº 405 de la CNCE estableció que no había daño importante o amenaza de daño importante a la rama de producción nacional en el período comprendido entre enero de 1994 y junio de 1997. En consecuencia, el dumping constatado en junio de 1997 no causaba daño o amenaza de daño en junio de 1997. Para verificar que existía una amenaza de daño en junio de 1998 causada por las importaciones efectuadas a precios de dumping, hubiera sido preciso ampliar hasta junio de 1998 el período de recopilación de datos para el análisis del dumping.

166. La nueva determinación sobre el daño de la CNCE recogida en el Acta Nº 464 constató la existencia de una amenaza de daño a la rama de producción nacional sobre la base de los nuevos datos presentados por el solicitante respecto del segundo semestre de 1997 y el primer semestre de 1998. En el período de dumping, examinado por la DCD a efectos de la iniciación, no se tomó en consideración la nueva información suministrada por el solicitante el 17 de febrero de 1998 y sólo se tuvieron en cuenta los precios hasta junio de 1997.

167. Los hechos expuestos plantean el interrogante de cómo pudo la SICM constatar la existencia de una amenaza de daño en junio de 1998 si las importaciones objeto de dumping en junio de 1997 no causaban daño o amenaza de daño en junio de 1997. Ello sólo podría haber sido posible si el APCDS

hubiera actualizado su análisis del dumping en función de la nueva información facilitada por el solicitante, lo que no hizo.

168. El hecho de que la DCD y la CNCE examinaran períodos diferentes al determinar si había pruebas suficientes de la existencia de dumping y de daño indica que las pruebas de la existencia del dumping y del daño no se examinaron simultáneamente en el momento de decidir si se iniciaba o no una investigación.

169. En segundo lugar, la Argentina incumplió lo dispuesto en el párrafo 7 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping al no examinar simultáneamente las pruebas de la existencia del dumping y del daño en la misma decisión de iniciar la investigación.

170. Como se desprende de los hechos, el APCDS determinó en su informe de 7 de enero de 1998 que existían pruebas suficientes de dumping en las transacciones de exportación de pollos del Brasil a la Argentina. El 22 de septiembre de 1998, la CNCE determinó en el Acta Nº 464 que existían pruebas suficientes de la existencia de una amenaza de daño que justificaban la iniciación de la investigación. El 20 de enero de 1999, el MEyOSP dictó la Resolución Nº 11, un aviso público en el que se anunciaba la apertura de una investigación antidumping en relación con las importaciones de pollos procedentes del Brasil.

171. Como se ha puesto de manifiesto en el párrafo anterior, las pruebas de la existencia del dumping y del daño se examinaron en momentos distintos. La existencia de pruebas suficientes de dumping se determinó el 7 de enero de 1998 y la de pruebas suficientes de la existencia de una amenaza de daño el 22 de septiembre de 1998, más de ocho meses después del examen del dumping. A este respecto, el párrafo 7 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping establece lo siguiente:

> "Las pruebas de la existencia del dumping y del daño se examinarán simultáneamente
> a) en el momento de decidir si se inicia o no una investigación [...]"

172. El párrafo 7 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping dispone que en el momento de decidir si se inicia o no la investigación, la autoridad investigadora examinará simultáneamente las pruebas de la existencia del dumping y del daño. Con arreglo a una interpretación basada en el sentido corriente del término, por "*simultaneous*" (simultáneamente) ha de entenderse "*occurring or operating at the same time*" (que se produce o actúa en el mismo momento).[71]

173. En el presente caso, las autoridades examinaron las pruebas de la existencia del daño más de ocho meses después de que hubieran sido examinadas las pruebas de la existencia del dumping, por lo que no cabe considerar que unas y otras fueran examinadas al mismo tiempo.

174. Como se ha puesto de manifiesto en los argumentos expuestos, la Argentina ha infringido el párrafo 7 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping al no examinar las pruebas de la existencia del dumping y del daño simultáneamente en el momento de decidir la iniciación de la investigación.

x) Reclamación 31: Incompatibilidad con el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping

Texto del párrafo 8 del artículo 5

175. La parte pertinente del párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping establece lo siguiente:

[71] *The Concise Oxford Dictionary - Ninth Edition*, Oxford University Press, 1995, página 1294.

> "La autoridad competente rechazará la solicitud presentada con arreglo al párrafo 1 y pondrá fin a la investigación sin demora en cuanto se haya cerciorado de que no existen pruebas suficientes del dumping o del daño que justifiquen la continuación del procedimiento relativo al caso [...]."

Argumento jurídico relativo a la Reclamación 31

176. El párrafo 8 del artículo 5 obliga a las autoridades investigadoras a rechazar la solicitud en cuanto se hayan cerciorado de que no existen pruebas suficientes del dumping o del daño.

177. De conformidad con el sentido corriente de la expresión "se hayan cerciorado" y con la interpretación del párrafo 8 del artículo 5, las autoridades rechazarán una solicitud cuando las pruebas presentadas con ella no "*adequately meet, fulfill or comply with conditions*" (cumplan, satisfagan o respondan suficientemente a las condiciones)[72] que indican que existe dumping o daño.

178. Cuando la CNCE publicó el Acta Nº 405, no cabía duda de que de las pruebas presentadas con la solicitud se deducía que no existía un daño o amenaza de daño que justificara la iniciación de la investigación. El Acta Nº 405 contenía un examen y un análisis de las razones por las que no concurrían las condiciones para que se cumplieran los criterios necesarios en relación con el daño.

179. El Brasil afirma que el momento en que la CNCE formuló la determinación negativa en relación con la existencia de daño del Acta Nº 405 fue el momento en que se "cercioró" de que no existían pruebas suficientes de daño o amenaza de daño que justificaran la continuación del procedimiento relativo al caso y que, por consiguiente, la CNCE debería haber rechazado la solicitud sin demora.

180. Más concretamente, no consideramos que el Acta Nº 405 constituyera simplemente una oportunidad ofrecida por la autoridad argentina al solicitante para que facilitara más información y modificara la solicitud. Si la CNCE deseaba que el solicitante facilitara más información, debería haber enviado una carta al solicitante para que lo hiciera, lo mismo que había hecho antes.[73] En lugar de ello, la CNCE publicó una determinación basada en las pruebas presentadas con la solicitud según la cual las importaciones de pollos no causaban o amenazaban causar daño a la rama de producción nacional.

181. En el momento en que determinó que no había pruebas suficientes que justificaran la iniciación de la investigación, la CNCE debería haber rechazado la solicitud y haber esperado a que la rama de producción nacional presentara una nueva solicitud con información revisada y actualizada tanto respecto del daño como del dumping.

182. Además, el párrafo 8 del artículo 5 obliga a la autoridad investigadora a rechazar la solicitud "sin demora en cuanto" se haya cerciorado de que no existen pruebas suficientes que justifiquen la continuación del procedimiento relativo al caso. A este respecto, el párrafo 8 del artículo 5 dispone que el rechazo de la solicitud se realice o lleve a cabo sin demora. No obstante, en lugar de rechazar la solicitud, como exige el párrafo 8 del artículo 5, se pidió a la CNCE que examinara la nueva información suministrada por el CEPA más de 30 días después de la publicación de la determinación negativa sobre el daño. Como se desprende de los hechos relativos a la presente reclamación, el Acta Nº 405 se formuló el 7 de enero de 1998 y el solicitante presentó información nueva y actualizada a la SICM el 17 de febrero de 1998, más de un mes después de que la CNCE hubiera formulado la determinación negativa en cuanto a la existencia de daño a efectos de la iniciación de la investigación.

---

[72] *The Concise Oxford Dictionary - Ninth Edition*, Oxford University Press, 1995, página 1226.

[73] *Véase* la Prueba documental BRA-18.

183. A este respecto, nos referimos al texto de la reglamentación antidumping de la Argentina (Decreto Nº 2121/94) que establece plazos para que las autoridades investigadoras rechacen una solicitud:

> "Artículo 38 - La Autoridad de Aplicación competente notificará al peticionante de cualquier error u omisión en la solicitud dentro de los TREINTA (30) días hábiles de haberse presentado. El peticionante tendrá QUINCE (15) días hábiles desde la fecha de la notificación para proporcionar las correcciones. Si el peticionante no suministra las correcciones requeridas dentro de este período, la solicitud será denegada sin más actuaciones posteriores."[74]

184. La reglamentación antidumping de la Argentina en vigor durante la investigación establecía que si el peticionante no suministraba las correcciones requeridas dentro del período de notificación, la solicitud debía ser denegada sin más actuaciones posteriores.

185. Según ponen de manifiesto los hechos a los que se refieren estas reclamaciones, la CNCE solicitó el 24 de julio de 1998 que el CEPA actualizara la información presentada el 17 de febrero de 1998. El CEPA presentó la información solicitada el 2 de septiembre de 1998, fecha posterior al plazo de 15 días establecido en el artículo 38 del Decreto Nº 2121/94.

186. El Brasil no considera que el Acta Nº 405 constituyera una notificación u oportunidad dada al solicitante de rectificar la solicitud. El momento en que se dictó el Acta Nº 405 fue el momento en que la CNCE llegó a la decisión o conclusión de que las pruebas presentadas con la solicitud no indicaban que hubiera daño o amenaza de daño a la rama de producción nacional. Una vez que la CNCE se hubo cerciorado de que no existían pruebas suficientes del daño que justificaran la iniciación de la investigación, debería haber rechazado la solicitud sin demora, como exige el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping.

187. Si la Argentina entiende que el Acta Nº 405 constituyó una notificación u oportunidad dada al solicitante para rectificar un error u omisión de la solicitud, las autoridades argentinas no cumplieron el plazo fijado en sus propias normas reglamentarias antidumping para rechazar la solicitud.

C. REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING - REQUISITOS RELATIVOS A LAS PRUEBAS Y AL AVISO PÚBLICO

1. Párrafo 1 del artículo 12

188. **Reclamación 10:** La Argentina no efectuó la notificación correspondiente a siete exportadores brasileños cuando se hubo cerciorado de que existían pruebas suficientes para justificar la iniciación de una investigación antidumping. Al no hacer la notificación a esos exportadores cuando se inició la investigación, la Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 1 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping.

a) Hechos

189. El 20 de enero de 1999, el MEyOSP dictó la Resolución Nº 11/1999 por la que se anunciaba la apertura de la investigación antidumping en relación con las importaciones de pollos procedentes del Brasil.[75] El 10 de febrero de 1999, la CNCE envió a cinco exportadores brasileños (Sadia, Avipal, Nicolini, Seara y Frangosul) sendas cartas en las que se les comunicaba la apertura de la investigación

[74] *Véase* la Prueba documental BRA-21.

[75] *Véase* la Prueba documental BRA-7.

y se les solicitaba que dieran respuesta al cuestionario enviado por la CNCE.[76] El 16 de febrero de 1999, la SSCE envió a esos mismos cinco exportadores brasileños sendas cartas en las que se les invitaba a participar en una audiencia el 25 de febrero de 1999 en las que se evacuarían consultas sobre la iniciación de la investigación antidumping y se entregaría un cuestionario.[77]

190. El 15 de septiembre de 1999, la DCD envió a los demás exportadores brasileños (CCLP, Catarinense, Chapecó, Minuano, Perdigão, Comaves y Penabranca) sendas cartas notificándoles la investigación y solicitándoles que dieran respuesta al cuestionario.[78] La CNCE nunca notificó la investigación ni envió su cuestionario a esos exportadores.

i) Reclamación 10: Incompatibilidad con el párrafo 1 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping

Texto del párrafo 1 del artículo 12

191. El párrafo 1 del artículo 12 establece lo siguiente:

> "Cuando las autoridades se hayan cerciorado de que existen pruebas suficientes para justificar la iniciación de una investigación antidumping con arreglo al artículo 5, lo notificarán al Miembro o Miembros cuyos productos vayan a ser objeto de tal investigación y a las demás partes interesadas de cuyo interés tenga conocimiento la autoridad investigadora, y se dará el aviso público correspondiente."

Argumento jurídico relativo a la Reclamación 10

192. El párrafo 1 del artículo 12 es una disposición de carácter general que exige un aviso público y la notificación a las partes interesadas de cuyo interés tenga conocimiento la autoridad investigadora.

193. La primera parte del párrafo 1 del artículo 12 se refiere al momento en que las autoridades deberán dar el aviso público correspondiente y notificar a los Miembros y partes interesadas. Este momento es aquél en el que las autoridades se hayan cerciorado de que existen pruebas suficientes para justificar la iniciación de la investigación.

194. El Brasil entiende que se dio un aviso público cuando se dictó la Resolución Nº 11/99 en la que se anunciaba la apertura de la investigación. No obstante, el párrafo 1 del artículo 12 exige que, además del aviso público, se efectúe una notificación cuando las autoridades se hayan cerciorado de que existen pruebas suficientes para justificar la iniciación de una investigación. La notificación de la iniciación de la investigación al Miembro cuyos productos iban a ser objeto de tal investigación se efectuó el 10 de febrero de 1999, cuando la CNCE envió las correspondientes cartas a los cinco exportadores brasileños mencionados y el 16 de febrero de 1999, cuando la SSCE envió las cartas en cuestión a esos cinco exportadores brasileños.

195. No obstante, la notificación a los siete exportadores de la iniciación y de la necesidad de facilitar respuestas al cuestionario se efectuó ocho meses después de que se hubiera iniciado la investigación. La notificación se efectuó el 15 de septiembre de 1999, cuando la DCD envió a los

[76] *Véase* la Prueba documental BRA-8.

[77] *Véase* la Prueba documental BRA-9.

[78] *Véase* la Prueba documental BRA-13. El Brasil no ha podido encontrar la notificación de la DCD al exportador brasileño Penabranca entre los documentos de la investigación a los que ha tenido acceso.

exportadores brasileños CCLP, Catarinense, Chapecó, Minuano, Perdigão, Comaves y Penabranca sendas cartas solicitándoles que dieran respuesta al cuestionario.

196. El Brasil considera que, debido a esa demora, la notificación efectuada a esos siete exportadores no se ajustó a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 12, por cuanto no se realizó cuando se inició la investigación.

197. En la segunda parte del párrafo 1 del artículo 12 se indica a quiénes ha de hacerse la notificación: los Miembros cuyos productos vayan a ser objeto de la investigación y las demás partes interesadas de cuyo interés tenga conocimiento la autoridad investigadora. Según el párrafo 11 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping se consideran "partes interesadas":

> "i) los exportadores, los productores extranjeros o los importadores de un producto objeto de investigación, o las asociaciones mercantiles, gremiales o empresariales en las que la mayoría de los miembros sean productores, exportadores o importadores de ese producto;
>
> ii) el gobierno del Miembro exportador; y
>
> iii) los productores del producto similar en el Miembro importador o las asociaciones mercantiles, gremiales o empresariales en las que la mayoría de los miembros sean productores del producto similar en el territorio del miembro importador" (sin subrayar en el original)

198. Así pues, la iniciación de una investigación debe notificarse a los exportadores o productores extranjeros de un producto objeto de investigación.

199. De forma más concreta, la segunda parte del párrafo 1 del artículo 12 obliga a la autoridad investigadora a efectuar una notificación a las demás partes de cuyo interés tenga conocimiento. En el momento en el que se inició la investigación, la autoridad investigadora tenía conocimiento al menos del interés de cinco (Comaves, Catarinense, Minuano, Chapecó y Perdigão) de los siete exportadores notificados por la DCD el 15 de septiembre de 1999. El Brasil tiene conocimiento de este hecho porque el 7 de enero de 1998, el APCDS, en su informe relativo a la viabilidad de la apertura de la investigación, llegó a la conclusión de que existía dumping en las operaciones de exportación a la Argentina de pollos procedentes del Brasil. En ese informe se daba una lista de diez exportadores brasileños, entre ellos Comaves, Catarinense, Minuano, Chapecó y Perdigão, cinco de los siete exportadores brasileños a los que se notificó la investigación ocho meses después de que hubiera sido iniciada.[79]

200. Además, las autoridades argentinas y los importadores argentinos de pollos procedentes del Brasil, que intervenían también en la investigación, sabían quiénes eran los exportadores brasileños de pollos en el período de investigación a efectos del dumping.

201. Dado que la investigación se notificó a siete exportadores brasileños ocho meses después de que hubiera sido iniciada y que esos exportadores eran partes interesadas de cuyo interés tenían conocimiento las autoridades investigadoras, la Argentina ha infringido *prima facie* el párrafo 1 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping.

2. Párrafos 1.1, 1.2, 1.3 y 2 del artículo 6

202. De los hechos que se describen más adelante se derivan las cuatro reclamaciones siguientes:

---

[79] *Véase* la página 5 de la Prueba documental BRA-2.

Reclamación 11: La Argentina no dio a los siete exportadores brasileños un plazo de 30 días como mínimo para responder al cuestionario relativo al dumping enviado por la DCD, lo que constituye *prima facie* una infracción del párrafo 1.1 del artículo 6. Además, la CNCE nunca efectuó una notificación a esos siete exportadores ni les envió el cuestionario sobre el daño.

Reclamación 12: La Argentina, infringiendo lo dispuesto en el párrafo 1.2 del artículo 6, tampoco puso inmediatamente a disposición de los siete exportadores brasileños las pruebas presentadas por escrito por las demás partes interesadas que intervenían en la investigación.

Reclamación 13: Al no dar a los siete exportadores el plazo prescrito para responder a los cuestionarios y no poner inmediatamente a disposición de esos exportadores las pruebas presentadas por las demás partes interesadas que intervenían en la investigación, la Argentina no dio a esos exportadores plena oportunidad de defender sus intereses, como exige el párrafo 2 del artículo 6.

Reclamación 14: La Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 1.3 del artículo 6 al no facilitar a los exportadores brasileños y al Gobierno del Brasil el texto de la solicitud escrita tan pronto como se inició la investigación.

a) Hechos

203. El 20 de enero de 1999, el MEyOSP dictó la Resolución Nº 11/1999, en la que se anunciaba la apertura de la investigación antidumping con respecto a las importaciones de pollos procedentes del Brasil.[80] El 10 de febrero de 1999, la CNCE envió a los exportadores brasileños Sadia, Avipal, Nicolini, Seara y Frangosul sendas cartas en las que se les comunicaba la apertura de la investigación y se les solicitaba que dieran respuesta al cuestionario enviado por la CNCE.[81] El 16 de febrero de 1999, la SSCE a esos cinco exportadores brasileños envió sendas cartas en las que les invitaba a participar en una audiencia el 25 de febrero de 1999 en la cual se evacuarían consultas sobre la iniciación de la investigación antidumping y se entregaría el cuestionario.[82] La DCD y la CNCE no facilitaron a los cinco exportadores y al Gobierno del Brasil el texto de la solicitud escrita tan pronto como se inició la investigación.

204. El 28 de junio de 1999, la CNCE formuló en el Acta Nº 531 una determinación preliminar de la existencia de daño.[83] El 6 de agosto de 1999, la DCD formuló una determinación preliminar de la existencia de dumping.[84] El 20 de agosto de 1999, la SSCE formuló una determinación preliminar de la existencia de una relación causal entre el dumping y el daño a la rama de producción nacional.[85]

205. El 15 de septiembre de 1999, ocho meses después de que se iniciara la investigación, la DCD envió a otros siete exportadores brasileños (CCLP, Catarinense, Chapecó, Minuano, Perdigão, Comaves y Penabranca) sendas cartas, en las que les notificaba la investigación y les solicitaba que dieran respuesta al cuestionario.[86] En las cartas enviadas por la DCD a los siete exportadores

[80] *Véase* la Prueba documental BRA-7.

[81] *Véase* la Prueba documental BRA-8.

[82] *Véase* la Prueba documental BRA-9.

[83] *Véase* la Prueba documental BRA-10.

[84] *Véase* la Prueba documental BRA-11.

[85] *Véase* la Prueba documental BRA-12.

[86] *Véase* la Prueba documental BRA-13.

brasileños se les solicitaba que dieran respuesta al cuestionario en relación con el período comprendido entre enero de 1998 y enero de 1999 en un plazo no mayor a los 20 días a partir de la recepción de la notificación.[87] La CNCE nunca efectuó una notificación a esos siete exportadores ni les envió el cuestionario sobre el daño. Además, la DCD y la CNCE no facilitaron nunca el texto de la solicitud escrita a esos exportadores.

i) Reclamación 11: Incompatibilidad con el párrafo 1.1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping

Texto del párrafo 1.1 del artículo 6

206. El párrafo 1.1 del artículo 6 establece lo siguiente:

> "Se dará a los exportadores o a los productores extranjeros a quienes se envíen los cuestionarios utilizados en una investigación antidumping un plazo de 30 días como mínimo para la respuesta. Se deberá atender debidamente toda solicitud de prórroga del plazo de 30 días y, sobre la base de la justificación aducida, deberá concederse dicha prórroga cada vez que sea factible."

Argumento jurídico relativo a la Reclamación 11

207. El párrafo 1.1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping es la única disposición en materia de pruebas del Acuerdo que establece un plazo específico para el cumplimiento de una obligación. La primera parte del párrafo 1.1 del artículo 6 exige que la autoridad investigadora dé a los exportadores o productores extranjeros un plazo de 30 días como mínimo para dar respuesta a los cuestionarios.

208. Como se ha aclarado en la presente comunicación, la administración de la legislación antidumping y de los procedimientos de investigación es en la Argentina competencia de dos organismos: la DCD se encarga de la investigación sobre el dumping y la CNCE de la investigación sobre el daño.

209. La investigación antidumping se inició el 20 de enero de 1999, cuando el MEyOSP dictó la Resolución Nº 11/1999. La investigación antidumping se refería a las importaciones de pollos procedentes del Brasil y, en consecuencia, afectaba a <u>todos</u> los productores y exportadores brasileños de la mercancía en cuestión. Sin embargo, sólo se notificó la iniciación de la investigación y la necesidad de dar respuesta a los cuestionarios a cinco productores/exportadores brasileños del producto en cuestión. Esas notificaciones a los cinco exportadores brasileños fueron enviadas por la CNCE el 10 de febrero de 1999 y por la DCD el 16 de febrero de 1999.

210. El 15 de septiembre de 1999, ocho meses después de que se hubiera iniciado la investigación, la DCD notificó la investigación y la necesidad de responder a los cuestionarios a CCLP, Catarinense, Chapecó, Minuano, Perdigão, Comaves y Penabranca, productores/exportadores brasileños del producto en cuestión, a los que se había ya incluido en la investigación sin que tuvieran conocimiento de ella.

211. En la notificación enviada por la DCD a esos siete exportadores brasileños se les pedía que dieran respuesta al cuestionario dentro de los 20 días siguientes a la recepción de la notificación. El plazo exigido por la DCD en la notificación estaba, por sus propios términos, en contradicción con el plazo prescrito de 30 días para responder a los cuestionarios, a tenor de la primera parte del párrafo 1.1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping.

---

[87] *Véase* la Prueba documental BRA-13.

212. La CNCE nunca notificó a esos siete exportadores la investigación y la necesidad de dar respuesta al cuestionario. De hecho, esos siete exportadores nunca recibieron el cuestionario sobre el daño.

213. Al no dar a esos siete exportadores brasileños un plazo de 30 días como mínimo para responder al cuestionario sobre el dumping y no facilitarles el cuestionario sobre el daño para responder al mismo, la Argentina incumplió lo dispuesto en el párrafo 1.1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping.

ii) Reclamación 12: Incompatibilidad con el párrafo 1.2 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping

Texto del párrafo 1.2 del artículo 6

214. El texto del párrafo 1.2 del artículo 6 establece lo siguiente:

> "A reserva de lo prescrito en cuanto a la protección de la información de carácter confidencial, las pruebas presentadas por escrito por una parte interesada se pondrán inmediatamente a disposición de las demás partes interesadas que intervengan en la investigación."

Argumento jurídico relativo a la Reclamación 12

215. El párrafo 1.2 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping dispone que las pruebas presentadas por una parte interesada "se pondrán inmediatamente a disposición" de las demás partes interesadas.

216. Sin tener conocimiento de ello, CCLP, Catarinense, Chapecó, Minuano, Perdigão, Comaves y Penabranca fueron parte en la investigación durante ocho meses antes de que se les notificara la investigación y la necesidad de dar respuesta al cuestionario.

217. Dado que la DCD y la CNCE no informaron a esos siete exportadores de la investigación y de la necesidad de facilitar respuestas, no se pusieron inmediatamente a su disposición las pruebas que fueron presentadas por escrito por otra parte interesada.

218. En lo que respecta a la expresión "se pondrán inmediatamente a disposición", coincidimos con la interpretación del Grupo Especial que se ocupó del asunto *Guatemala - Cemento II* en que, del propio texto del párrafo 1.2 del artículo 6 se desprende que ese precepto no exige necesariamente que se tenga acceso al expediente para que se cumpla esa disposición.[88] El Grupo Especial citó en ese caso ejemplos de cómo pueden ponerse a disposición de las partes en una investigación las pruebas sin que éstas tengan acceso al expediente. Por ejemplo, una autoridad investigadora puede pedir a cada parte interesada que dé traslado de sus comunicaciones a todas las demás partes interesadas, o la autoridad investigadora puede encargarse de facilitar copias de las comunicaciones de cada una de las partes interesadas a las demás.

219. No obstante, dado que siete exportadores habían sido incluidos en la investigación porque exportaban el producto de que se trataba a la Argentina en el período de investigación, pero no se les notificó la iniciación de la investigación ni se les facilitó el cuestionario para dar respuesta al mismo, esos exportadores ni siquiera tenían conocimiento de que las demás partes en la investigación hubieran presentado pruebas, ni mucho menos de que debían, o podían, haber tenido acceso a esas pruebas.

---

[88] *Guatemala - Cemento II*, párrafo 8.133.

220. Además, el párrafo 1.2 del artículo 6 obliga a las autoridades investigadoras a poner a disposición de las partes interesadas las pruebas "inmediatamente". Conforme a una interpretación literal, el término "*promptly*" (inmediatamente) hace referencia a "*to make or do readily or at once*" (hacer sin demora o al punto).[89] El Brasil considera que no puede entenderse que pusieran sin demora o inmediatamente las pruebas a disposición de esos exportadores si se tiene en cuenta que la notificación para que participaran en la investigación se les efectuó ocho meses después de que se hubiera ya iniciado la investigación y de que se hubiera formulado ya una determinación preliminar de la existencia de dumping, de daño y de una relación causal entre uno y otro.

iii) Reclamación 13: Incompatibilidad con el párrafo 2 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping

Texto del párrafo 2 del artículo 6

221. En la parte pertinente del párrafo 2 del artículo 6 se establece lo siguiente:

> "Durante toda la investigación antidumping, todas las partes interesadas tendrán plena oportunidad de defender sus intereses [...]."

Argumento jurídico relativo a la Reclamación 13

222. El párrafo 2 del artículo 6 impone a las autoridades investigadoras un deber general de velar por que las partes interesadas tengan plena oportunidad durante toda la investigación antidumping de defender sus intereses. Aunque el párrafo 2 del artículo 6 no facilita orientaciones concretas en cuanto a las medidas que deben poner en práctica las autoridades investigadoras, el Brasil considera que el hecho de notificar la investigación y de solicitar respuestas al cuestionario sobre el daño ocho meses después de que se hubiera iniciado la investigación constituye una infracción del párrafo 2 del artículo 6.

223. En primer lugar, en vez del plazo establecido de 30 días prescrito en el párrafo 1.1 del artículo 6 se dio a los siete exportadores un plazo de 20 días para dar respuesta al cuestionario sobre el dumping.

224. Además, la CNCE no notificó a ninguno de los siete exportadores la investigación ni les facilitó el cuestionario sobre el daño. En consecuencia, esos exportadores no tuvieron ninguna oportunidad de defender sus intereses.

225. En segundo lugar, dado que no se notificó la investigación ni la necesidad de dar respuesta al cuestionario sobre el dumping a los siete exportadores brasileños hasta ocho meses después de que se hubiera iniciado la investigación, no se pusieron inmediatamente a disposición de esos siete exportadores las pruebas presentadas por las demás partes interesadas.

226. De los hechos expuestos se desprende que los siete exportadores brasileños no tuvieron plena oportunidad de defender sus intereses, lo que constituye una clara violación del párrafo 2 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping.

---

[89] *The Concise Oxford Dictionary - Ninth Edition*, Oxford University Press, 1995, página 1096.

iv) Reclamación 14: Incompatibilidad con el párrafo 1.3 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping

Texto del párrafo 1.3 del artículo 6

227. El artículo 6 del Acuerdo Antidumping establece las prescripciones en materia de prueba en una investigación antidumping. En concreto, el párrafo 1.3 del artículo 6 establece lo siguiente:

> "Tan pronto como se haya iniciado la investigación, las autoridades facilitarán a los exportadores que conozcan y a las autoridades del país exportador el texto completo de la solicitud escrita presentada de conformidad con el párrafo 1 del artículo 5 y lo pondrán a disposición de las otras partes interesadas intervinientes que lo soliciten. Se tendrá debidamente en cuenta lo prescrito en cuanto a la protección de la información confidencial, de conformidad con las disposiciones del párrafo 5."

Argumento jurídico relativo a la Reclamación 14

228. El texto del párrafo 1.3 del artículo 6 indica el momento en que las autoridades han de facilitar a los exportadores que conozcan y a las autoridades del Miembro exportador el texto completo de la solicitud escrita. La Argentina no cumplió esa prescripción puesto que no facilitó nunca ni a los exportadores ni al Gobierno del Brasil el texto de la solicitud.

229. En relación con nuestra interpretación del párrafo 1.3 del artículo 6, el Brasil se remite al asunto *Guatemala - Cemento II*, en el que el Grupo Especial explicó el objeto y la función del párrafo 1.3 del artículo 6, aclarando que consideraba que:

> "[...] El acceso oportuno a la solicitud es importante para que los exportadores puedan preparar los argumentos en defensa de sus intereses ante las autoridades investigadoras."[90]

El Grupo Especial que se ocupó de ese asunto aclaraba además lo siguiente:

> "[...] Puesto que en el marco temporal de la investigación los plazos se computan a partir de la fecha de iniciación, es esencial que la autoridad investigadora facilite el texto de la solicitud "tan pronto como se haya iniciado la investigación" para que el exportador pueda elaborar una estrategia para defenderse de las alegaciones con las que se enfrenta." [91] (Sin subrayar en el original.)

230. En relación con la reclamación que nos ocupa, las autoridades argentinas nunca facilitaron ni al Gobierno del Brasil ni a los exportadores el texto de la solicitud escrita, con lo que hicieron imposible que los exportadores prepararan los argumentos en defensa de sus intereses y elaboraran una estrategia para defenderse contra las alegaciones hechas por el solicitante en la solicitud.

231. En el curso de las consultas, el Brasil formuló en su comunicación de 5 de diciembre de 2001 a la Argentina preguntas en relación con la investigación. En particular, se formuló la siguiente pregunta en relación con el párrafo 1.3 del artículo 6:

---

[90] *Guatemala - Cemento II*, párrafo 8.102.

[91] *Guatemala - Cemento II*, párrafo 8.102.

Pregunta 25:

Por qué las autoridades no proveyeron el texto completo de la presentación tan rápido como se inició la investigación.

La Argentina respondió el 11 de enero de 2002 lo siguiente:

> "Por medio de la nota ex-SSCE Nº 121 de fecha 1º de febrero de 1999 se notificó de la apertura de la investigación al Sr. Encargado de Negocios de Brasil en Argentina Ministro Consejero Pedro Motta, solicitándose en dicha oportunidad su colaboración para la identificación de los productores/exportadores interesados en la investigación y la consecuente entrega de los respectivos cuestionarios remitidos a tal fin por el área técnica.
>
> También se informó de la apertura de investigación al Subsecretario de Integración Económica Americana Embajador Alfredo Morelli por nota Nº ex-SSCE 122/99 y al ex Subsecretario de Negociaciones Económicas Internacionales Embajador Eduardo Sadous, ambas con fecha 1º de febrero de 1999.
>
> Argentina, una vez abierta la investigación puso a disposición de las partes interesadas, entre ellos exportadores y autoridades del país involucrado, las actuaciones que generaron el procedimiento que se cuestiona. En cualquier momento, las partes interesadas acreditadas tuvieron oportunidad de tomar vista del expediente y acceder a una copia el mismo, no sólo de la solicitud sino de todas las actuaciones que lo integran." (Sin subrayar en el original.)

232. Según la respuesta facilitada por la Argentina en el curso de las consultas, la solicitud se "puso a disposición" de las partes interesadas una vez abierta la investigación. El Brasil entiende que la respuesta de la Argentina según la cual "puso a disposición [...] las actuaciones" no corresponde al requisito establecido en el párrafo 1.3 del artículo 6, que obliga a la autoridad investigadora a facilitar la solicitud.

233. El párrafo 1.3 del artículo 6 obliga a las autoridades a facilitar el texto completo de la solicitud escrita. En este contexto, el verbo "*to provide*" (facilitar) es sinónimo de "*to supply*" (suministrar).[92] Entendemos que la Argentina estaba obligada a suministrar al Gobierno del Brasil y a los exportadores el texto completo de la solicitud escrita. La posición de la Argentina, según la cual podría entenderse que el verbo "facilitar" significa que las autoridades estaban obligadas únicamente a "poner a disposición" de los exportadores y las autoridades del país exportador el texto completo de la solicitud escrita una vez abierta la investigación, no es correcta. El párrafo 1.3 del artículo 6 diferencia cuidadosamente la obligación de las autoridades investigadoras con respecto a los exportadores y el Miembro exportador y la obligación de esas autoridades con respecto a las demás partes interesadas. En el primer caso, la autoridad investigadora debe "facilitar" de una forma activa el texto completo de la solicitud escrita al Miembro exportador y a los exportadores a los que afecta la investigación. En el segundo, las autoridades investigadoras deben "poner a disposición" de las demás partes interesadas que lo soliciten ese texto. El Brasil considera que si hubiera de entenderse que la obligación impuesta a la autoridad investigadora es la misma en el caso de los exportadores y el Miembro exportador que en el de las demás partes interesadas, no habría sido necesario recoger esa diferencia en el texto el párrafo 1.3 del artículo 6.

234. Además, y con arreglo asimismo a la respuesta dada por la Argentina en el curso de las consultas, aun en el caso de que el Grupo Especial pudiera entender que "facilitar" es sinónimo de "poner a disposición", cosa que no es posible en el presente caso, la respuesta de la Argentina según la

[92] *The Concise Oxford Dictionary - Ninth Edition*, Oxford University Press, 1995, página 1102.

cual notificó la iniciación de una investigación a las autoridades brasileñas el 1º de febrero de 1999 no significa que la Argentina "pusiera a su disposición" en ese momento el texto completo de la solicitud escrita.

235. Aun en el supuesto que, en virtud del texto de la notificación de iniciación se hubiera "puesto a disposición" de todas las partes interesadas el texto completo de la solicitud escrita, la notificación de la iniciación no se efectuó hasta el 1º de febrero de 1999, 12 días después de que se hubiera iniciado la investigación, y no "tan pronto" como se inició la investigación, como exige el párrafo 1.3 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping.

236. La interpretación del momento previsto con la expresión "tan pronto como" del párrafo 1.3 del artículo 6 se deriva de la conclusión del Grupo Especial en el asunto *Guatemala - Cemento II*. En ese caso, el Grupo Especial concluyó lo siguiente:

> "[...] Una vez que hemos determinado que Guatemala envió el texto completo de la solicitud no antes de 8 días después de la iniciación de la investigación, consideramos que habida cuenta de la naturaleza de la obligación establecida en el párrafo 1.3 del artículo 6, el envío de la solicitud con un retraso aunque sólo sea de 8 días con respecto a la iniciación de la investigación no basta para cumplir el requisito de facilitar el texto "tan pronto como se haya iniciado la investigación"".[93] (Sin subrayar en el original.)

237. El Brasil entiende que si en el caso *Guatemala - Cemento II* el Grupo Especial llegó a la conclusión de que un envío realizado ocho días después de la iniciación no bastaba para cumplir el requisito establecido en el párrafo 1.3 del artículo 6, en el presente caso el envío con un retraso de 12 días con respecto a la iniciación debe asimismo considerarse que no basta para cumplir el requisito establecido en el párrafo 1.3 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping.

3. Párrafos 8 y 10 del artículo 6, párrafo 2.2 del artículo 12 y Anexo II

238. De los hechos que se exponen a continuación y de las prescripciones legales del Acuerdo Antidumping se derivan siete reclamaciones:

> **Reclamación 15:** La Argentina prescindió de las respuestas facilitadas por los exportadores brasileños con respecto a la descripción del producto exportado a la Argentina y del producto vendido en el Brasil, y aplicó el ajuste del valor normal establecido por el solicitante en la solicitud. La utilización por la Argentina de los hechos adversos de que se tenía conocimiento fue incompatible con el párrafo 8 del artículo 6 y con los párrafos 3, 6 y 7 del Anexo II.
>
> **Reclamación 16:** La Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 2.2 del artículo 12 al no explicar de forma suficiente en la determinación definitiva su decisión de prescindir de la información facilitada por los exportadores con respecto a la descripción del producto y utilizar, en lugar de ella, el ajuste del valor normal propuesto por el solicitante.
>
> **Reclamación 17:** La Argentina prescindió de todos los datos sobre el precio de exportación facilitados por los exportadores brasileños, y utilizó a los datos sobre el precio de exportación facilitados por el organismo argentino *Ganadería*. La utilización por la Argentina de los hechos adversos de que se tenía conocimiento fue incompatible con el párrafo 8 del artículo 6 y los párrafos 3 y 5 del Anexo II.

[93] *Guatemala - Cemento II*, párrafo 8.104.

Reclamación 18: La Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 2.2 del artículo 2 al no explicar de forma suficiente en la determinación su decisión de prescindir de los datos sobre los precios de exportación facilitados por los exportadores brasileños y utilizar la información sobre el precio de exportación proporcionada por el organismo argentino *Ganadería.*

Reclamación 19: La Argentina prescindió de toda la información sobre el valor normal facilitada por Frangosul y Catarinense y utilizó la información facilitada por el solicitante. La utilización por la Argentina de los hechos adversos de que se tenía conocimiento fue incompatible con el párrafo 8 del artículo 6 y los párrafos 3, 5 y 7 del Anexo II.

Reclamación 20: La Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 2.2 del artículo 12 al no explicar de forma suficiente en la determinación definitiva su decisión de prescindir de toda la información sobre el valor normal facilitada por Frangosul y Catarinense y utilizar la información presentada por el solicitante.

Reclamación 22: La Argentina no estableció, como prescribe el párrafo 10 del artículo 6, márgenes individuales de dumping para Frangosul y Catarinense.

a) Hechos

Respuesta de los exportadores brasileños al cuestionario

239. El 7 de enero de 1998, la DCD formuló una determinación relativa a la apertura de una investigación antidumping sobre los pollos originarios del Brasil.[94] En ella, la DCD estableció el valor normal con arreglo a la información presentada con la solicitud y realizó un ajuste del valor normal, propuesto por el solicitante, para tener en cuenta las diferencias entre las características físicas del producto vendido en el Brasil y del producto exportado a la Argentina.[95]

240. El solicitante alegaba que el ajuste del valor normal estaba justificado porque en el Brasil los pollos eviscerados se vendían con menudos (corazón, panza, cogote e hígado) y con cabeza y patas, y en la Argentina se vendían sin cabeza ni patas.[96]

241. El solicitante alegaba también que para efectuar una comparación equitativa entre los precios de los pollos vendidos en el Brasil (valor normal) y los precios de los pollos vendidos en la Argentina (precio de exportación), la DCD había de adicionar el 9,09 por ciento al precio de los pollos vendidos en el Brasil para compensar el hecho de que los pollos se vendían en la Argentina sin cabeza ni patas y en el Brasil con cabeza y patas. El ajuste del valor normal propuesto por el solicitante se basaba en los precios de los pollos refrigerados, con cabeza y patas, en el mercado mayorista de São Paulo el 30 de junio de 1997 publicados por la compañía brasileña JOX.[97]

242. En el anexo II de la sección A del cuestionario sobre el dumping para productores/exportadores, se pedía a los exportadores una descripción completa del producto, con especificaciones técnicas de cada modelo/tipo/código de las mercaderías vendidas en el mercado interno y las exportadas a la Argentina.[98] En la pregunta 2 de la sección B (ventas a la Argentina) del

[94] *Véase* la Prueba documental BRA-2.

[95] *Véanse* las páginas 8, 9, 12 y 13 de la Prueba documental BRA-2.

[96] *Véanse* las páginas 7 y 8 de la Prueba documental BRA-2.

[97] *Véanse* las páginas 8 y 9 de la Prueba documental BRA-2.

[98] *Véanse* las Pruebas documentales BRA-22, BRA-23, BRA-24 y BRA-25.

cuestionario se pedía al productor/exportador que identificara por modelo/tipo/código si la mercadería exportada a la Argentina era idéntica o similar a la vendida en el mercado interno. Se pedía además que, en caso de que la mercadería no fuera idéntica, el productor/exportador indicara las diferencias técnicas y cómo éstas influían en los precios de exportación.

Sadia

243. El 20 de abril de 1999, Sadia presentó la respuesta al cuestionario, en la que facilitaba información sobre las ventas efectuadas en el mercado interno y a la Argentina en el período comprendido entre 1996 y 1998 y en los meses de enero y febrero de 1999.[99] En el anexo II de la sección A del cuestionario, Sadia describía el producto como pollo eviscerado entero con menudos congelado.[100] Más concretamente, Sadia informaba de que el producto para el mercado interno era el pollo eviscerado entero congelado, con menudos, en cajas de 18 kg, con un peso de 1,750 a 2,750 kg por pieza; y el producto destinado a la Argentina el pollo entero congelado, eviscerado, con menudos, en cajas de 18 kg, con un peso de 1,700 a 2,700 kg por pieza.[101] Con arreglo a la respuesta de Sadia, no había diferencias entre las características físicas del producto exportado la Argentina y del producto vendido en el Brasil.

244. El 28 de abril de 1999, Sadia remitió una respuesta complementaria al cuestionario.[102] En ella indicaba, en la información complementaria relativa al anexo V de la sección A, que en el período comprendido entre enero de 1996 y febrero de 1999 se habían vendido pollos eviscerados enteros congelados sin menudos en el mercado interno pero no se habían exportado a la Argentina.[103] La DCD nunca solicitó información específica adicional en relación con la descripción del producto exportado a la Argentina y del producto vendido en el Brasil.

Avipal

245. El 21 de abril de 1999, Avipal presentó un disquete con la respuesta al cuestionario, en la que se facilitaba información sobre las ventas en el mercado interno y a la Argentina en el período comprendido entre 1996 y 1998 y en los meses de enero y febrero de 1999.[104]

246. El 7 de mayo de 1999, Avipal facilitó una copia impresa de la información no confidencial contenida en la respuesta al cuestionario.[105] En el anexo II de la sección A de esa respuesta, Avipal describía el producto como pollo entero eviscerado congelado y dividía ese producto en dos tipos: i) broiler (con menudos), conteniendo en su cavidad abdominal una bolsa plástica con cuello sin cabeza, molleja e hígado y ii) griller (sin menudos).[106] En el anexo V de la respuesta, Avipal informaba que ambos tipos de pollos, broiler y griller, se exportaban a la Argentina y se vendían en el

[99] *Véase* la Prueba documental BRA-22.

[100] *Véase* la Prueba documental BRA-22.

[101] *Véase* la Prueba documental BRA-22.

[102] *Véase* la Prueba documental BRA-22.

[103] *Véase* la Prueba documental BRA-22.

[104] *Véase* la Prueba documental BRA-23.

[105] *Véase* la Prueba documental BRA-23.

[106] *Véase* la Prueba documental BRA-23.

Brasil.[107] Según la respuesta de Avipal, no había diferencias entre las características físicas del producto exportado a la Argentina y del producto vendido en el Brasil. La DCD nunca solicitó información específica adicional en relación con la descripción del producto exportado a la Argentina y del producto vendido en el Brasil.

Frangosul

247. El 27 de abril de 1999, Frangosul presentó la respuesta al cuestionario, en la que facilitaba información sobre las ventas en el mercado interno y las exportaciones a la Argentina en el período comprendido entre 1996 a 1998 y en los meses de enero a marzo de 1999.[108] En el anexo II de la sección A del cuestionario, Frangosul describía el producto como pollo eviscerado entero congelado con menudos (tipo broiler) y pollo eviscerado entero congelado sin menudos (tipo griller).[109] Ambos tipos de pollos, broiler y griller, se exportaban a la Argentina y se vendían en el Brasil.

248. El 19 de agosto de 1999, Frangosul adjuntó además a su respuesta un folleto del producto (en español e inglés), en el que se describían los tipos de productos producidos y vendidos.[110] Con arreglo a la descripción del folleto, el pollo de tipo griller es un pollo fresco, congelado, de piel blanca o amarillenta, totalmente eviscerado, sin cabeza ni patas y sin menudos; y el pollo de tipo broiler es un pollo fresco, congelado, de piel blanca, totalmente eviscerado, sin cabeza ni patas y con menudos.[111] Según la respuesta de Frangosul, el exportador no vendía pollos con cabeza y patas y no había diferencia entre las características físicas del producto exportado a la Argentina y del producto vendido en el Brasil. La DCD nunca solicitó información específica adicional en relación con la descripción del producto exportado a la Argentina y del producto vendido en el Brasil.

Catarinense

249. El 15 de septiembre de 1999, la DCD envió a Catarinense una carta en la que le notificaba la investigación y le solicitaba que facilitara respuestas al cuestionario destinado a productores/exportadores.[112]

250. El 20 de octubre de 1999, Catarinense solicitó una prórroga del plazo para presentar la respuesta al cuestionario.[113] El 3 de noviembre de 1999, Catarinense presentó la respuesta al cuestionario.[114] En el anexo II de la sección A del mismo, Catarinense describía el producto como pollo entero, congelado con (broiler) o sin (griller) menudos.[115] El pollo tipo broiler (con menudos) destinado al mercado de exportación incluía hígado, molleja y pescuezo. El pollo del tipo broiler (con

[107] *Véase* la Prueba documental BRA-23.

[108] *Véase* la Prueba documental BRA-24.

[109] *Véase* la Prueba documental BRA-24.

[110] *Véase* la Prueba documental BRA-26.

[111] *Véase* la Prueba documental BRA-26.

[112] *Véase* la Prueba documental BRA-13.

[113] *Véase* la página 38 de la Prueba documental BRA-28.

[114] *Véase* la Prueba documental BRA-25.

[115] *Véase* la Prueba documental BRA-25.

menudos) destinado al mercado interno incluía hígado, molleja, garras[116], cabeza y pescuezo. El pollo del tipo griller exportado a la Argentina o vendido en el Brasil no incluía menudos.[117] Catarinense informaba de que vendía pollos de los tipos broiler y griller en el mercado interno y de que el pollo de tipo broiler vendido en el mercado interno incluía cabeza pero no patas.[118] La DCD nunca solicitó información específica adicional en relación con la descripción del producto exportado a la Argentina y del producto vendido en el Brasil.

Determinación definitiva de la existencia de dumping

251. El 23 de junio de 2000, la DCD formuló la determinación definitiva de la existencia de dumping.[119]

Valor normal

252. En la determinación definitiva de la existencia de dumping, la DCD estableció los siguientes valores normales no ajustados para los exportadores brasileños: Sadia, 0,852 dólares EE.UU.; Avipal, 0,9988 dólares EE.UU. y, para Frangosul y Catarinense, los mismos aplicados a todos los demás exportadores, 0,9519 dólares EE.UU.[120] En esos valores constatados en la determinación definitiva de la existencia de dumping, la DCD efectuó un ajuste del 9,09 por ciento para que el valor normal ajustado compensara la supuesta diferencia consistente en que los pollos se vendían en el Brasil con cabeza y patas y se exportaban a la Argentina sin cabeza ni patas.[121] La DCD aceptó el cálculo del ajuste propuesto en la solicitud por el solicitante, que no se basaba en pruebas pertinentes, y prescindió de las respuestas de los exportadores.

Precio de exportación

253. La DCD estableció el precio de exportación sobre la base de la información sobre las importaciones facilitada por el organismo argentino *Ganadería* y prescindió de todos los datos sobre el precio de exportación presentados por los exportadores brasileños.[122]

i) Reclamación 15: Incompatibilidad con el párrafo 8 del artículo 6 y el Anexo II del Acuerdo Antidumping

Texto del párrafo 8 del artículo 6 y del Anexo II

254. El párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping regula la utilización por la autoridad investigadora de los "hechos de que se tenga conocimiento" en una investigación antidumping. Ese párrafo permite a las autoridades investigadoras recurrir a la utilización de los "hechos de que se tenga

[116] El término "paw" no equivale a "feet". En español, "paw" es "garra" y "feet" es "pata". Las "garras" son las extremidades inferiores de las "patas" de los pollos y no las propias "patas". *Véase* la Prueba documental BRA-34.

[117] *Véase* la Prueba documental BRA-25.

[118] *Véase* la Prueba documental BRA-25.

[119] *Véase* la Prueba documental BRA-15.

[120] *Véanse* las páginas 55, 63 y 65 de la Prueba documental BRA-15.

[121] *Véanse* las páginas 55, 63, 65, 67 y 69 de la Prueba documental BRA-15.

[122] *Véanse* las páginas 76, 77 y 104 de la Prueba documental BRA-15.

conocimiento" en determinadas circunstancias concretas. El texto del párrafo 8 del artículo 6 es el siguiente:

> "En los casos en que una parte interesada niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite dentro de un plazo prudencial o entorpezca significativamente la investigación, podrán formularse determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de los hechos de que se tenga conocimiento. Al aplicar el presente párrafo se observará lo dispuesto en el Anexo II."

En el Anexo II se establecen las condiciones y elementos adicionales pertinentes a la utilización de los hechos de que se tenga conocimiento en un asunto determinado.

La parte pertinente del párrafo 3 del Anexo II establece lo siguiente:

> "Al formular las determinaciones deberá tenerse en cuenta toda la información verificable, presentada adecuadamente de modo que pueda utilizarse en la investigación sin dificultades excesivas, facilitada a tiempo y, cuando proceda, en un medio o lenguaje informático que hayan solicitado las autoridades. [...]"

El párrafo 6 del Anexo II obliga a la autoridad investigadora a informar inmediatamente a la parte que haya facilitado pruebas o informaciones de las razones por las que se hayan rechazado las pruebas o informaciones. El párrafo 6 dispone lo siguiente:

> "Si no se aceptan pruebas o informaciones, la parte que las haya facilitado deberá ser informada inmediatamente de las razones que hayan inducido a ello y deberá tener oportunidad de presentar nuevas explicaciones dentro de un plazo prudencial, teniendo debidamente en cuenta los plazos fijados para la investigación. Si las autoridades consideran que las explicaciones no son satisfactorias, en cualesquiera determinaciones que se publiquen se expondrán las razones por las que se hayan rechazado las pruebas o las informaciones."

El párrafo 7 del Anexo II establece lo siguiente:

> "Si las autoridades tienen que basar sus conclusiones, entre ellas las relativas al valor normal, en información procedente de una fuente secundaria, incluida la información que figure en la solicitud de iniciación de la investigación, deberán actuar con especial prudencia. En tales casos, y siempre que sea posible, deberán comprobar la información a la vista de la información de otras fuentes independientes de que dispongan -tales como listas de precios publicados, estadísticas oficiales de importación y estadísticas de aduanas- y de la información obtenida de otras partes interesadas durante la investigación. Como quiera que sea, es evidente que si una parte interesada no coopera, y en consecuencia dejan de comunicarse a las autoridades informaciones pertinentes, ello podrá conducir a un resultado menos favorable para esa parte que si hubiera cooperado."

Argumento jurídico relativo a la Reclamación 15

255. Las condiciones que establece el párrafo 8 del artículo 6 para utilizar los "hechos de que se tenga conocimiento" son claras. La autoridad investigadora podrá formular determinaciones sobre la base de los hechos de que se tenga conocimiento si una parte interesada i) "niega el acceso" dentro de un plazo prudencial a la información necesaria, ii) "no facilita" la información necesaria dentro de un plazo prudencial o iii) "entorpece significativamente la investigación".

256. Como ponen de manifiesto los hechos relativos a estas reclamaciones, los exportadores Sadia, Avipal y Frangosul informaron de que los pollos exportados a la Argentina eran idénticos a los vendidos en el Brasil. El exportador brasileño Catarinense informó de que, respecto de los dos tipos de pollos vendidos (broiler y griller), había una diferencia entre los pollos de tipo broiler exportados a la Argentina y los pollos de ese tipo vendidos en el Brasil. Los pollos del tipo broiler exportador a la Argentina no incluían cabeza ni patas, y los pollos de ese tipo vendidos en el Brasil incluían cabeza, pero no patas.

257. Sadia, Avipal, Frangosul y Catarinense no negaron el acceso a la información o dejaron de facilitarla dentro de un plazo prudencial, ni entorpecieron significativamente la investigación. Sus respuestas se facilitaron como respuestas al cuestionario de la DCD sobre el dumping y se presentaron dentro de un plazo prudencial para que fueran evaluadas por la autoridad investigadora.

258. La DCD no tuvo en cuenta esas respuestas y aplicó el cálculo del ajuste del valor normal, a pesar de que, según las respuestas de los exportadores, ese ajuste no estaba justificado.

259. En particular, el párrafo 3 del Anexo II dispone que al formular las determinaciones deberá tenerse en cuenta toda la información verificable, presentada adecuadamente y facilitada a tiempo.

260. En el presente caso, no se tuvo en cuenta en la determinación definitiva la información relativa a la descripción del producto presentada adecuadamente y facilitada a tiempo por los exportadores.

261. En lo que respecta a la utilización de los hechos de que se tenga conocimiento y al párrafo 3 del Anexo II, el Brasil coincide con el razonamiento expuesto por el Grupo Especial que se ocupó del asunto *Estados Unidos - Acero laminado en caliente*, según el cual:

> "[...] El Acuerdo Antidumping dispone que se puede utilizar información sobre los hechos de que se tenga conocimiento si no se facilita dentro de un plazo prudencial la información necesaria. Un "plazo prudencial" no corresponderá en todos los casos a unos plazos preestablecidos que se hayan fijado en reglamentaciones generales. Reconocemos que para el buen funcionamiento de la administración, las autoridades investigadoras establecen, y de hecho tienen que establecer, tales plazos. Sin embargo, el rígido respeto de tales plazos no es suficiente en todos los casos para llegar a la conclusión de que la información no se presentó dentro de un plazo prudencial y de que, en consecuencia, se puede utilizar la información sobre los hechos de que se tenga conocimiento.
>
> A este respecto, señalamos que el párrafo 3 del Anexo II dispone, en la parte pertinente, que "Al formular las determinaciones deberá tenerse en cuenta toda la información verificable, presentada adecuadamente de modo que pueda utilizarse en la investigación sin dificultades excesivas, facilitada a tiempo [...]". Consideramos que la información, particularmente cuando se presenta efectivamente a tiempo de ser verificada y cuando efectivamente puede verificarse, debe generalmente aceptarse, a menos que al hacerlo se menoscabe la capacidad de la autoridad investigadora para completar la investigación dentro de los plazos establecidos por el Acuerdo. Tal podría ser el caso, por ejemplo, si la respuesta a la totalidad del cuestionario se presentase inmediatamente antes de la expiración del plazo fijado para la verificación. Sin embargo, en este asunto parece claro que se podría haber verificado y utilizado la información, pero que en vez de ello se decidió rechazarla porque se había presentado fuera de plazo. Del conjunto del Acuerdo Antidumping se desprende que uno de los principales elementos que rigen las investigaciones antidumping es el objetivo consistente en lograr que la adopción de decisiones sea objetiva y se base en los hechos. El párrafo 8 del artículo 6 y el Anexo II contribuyen a la consecución de ese

> objetivo al hacer que la autoridad investigadora, incluso cuando no pueda obtener la información óptima como base para adoptar su decisión, pueda basarse para tomar su decisión en hechos, aunque esos hechos tal vez no constituyan más que una segunda opción desde el punto de vista cualitativo. Sin embargo, esto no es razón para negarse a tomar en consideración una información dada simplemente porque se haya presentado fuera de un plazo predeterminado, si se presenta dentro de un plazo que sea prudencial en las circunstancias del caso, es decir, un plazo que permita utilizar la información y utilizarla para formular la determinación, teniendo debidamente en cuenta los plazos fijados en el Acuerdo Antidumping para completar la investigación y el tiempo necesario para que la autoridad investigadora así lo haga. En este asunto, consideramos importante que la información presentada fuera del plazo, pero antes de la verificación, no fuera información nueva sobre cuestiones tales como los precios, los costos o los ajustes que no se hubiera presentado nunca anteriormente y que exigiese una extensa verificación [...]."[123] (Sin subrayar en el original.)

262. En el caso que nos ocupa, Sadia, Avipal y Frangosul informaron de que no había diferencias entre las características físicas de los pollos exportados a la Argentina y de los pollos vendidos en el Brasil. Más concretamente, esas respuestas se presentaron en abril de 1999, más de un año antes de que la DCD formulara su determinación definitiva de existencia de dumping, el 23 de junio de 2000. La información facilitada por los exportadores podía haber sido verificada y utilizada, puesto que se presentó dentro de un plazo prudencial para que la autoridad investigadora así lo hiciera.

263. Catarinense informó de la diferencia existente entre los pollos del tipo broiler exportados a la Argentina y los pollos de ese mismo tipo vendidos en el Brasil el 3 de noviembre de 1999, siete meses aproximadamente antes de que se formulara la determinación definitiva de la existencia de dumping. El Brasil recuerda que la investigación no se notificó a Catarinense hasta el 15 de septiembre de 1999, ocho meses después de que hubiera sido iniciada.

264. Con respecto a la respuesta de Catarinense, el Brasil señala que el exportador informó de que vendía los dos tipos de pollos, griller (sin menudos) y broiler (con menudos) tanto a la Argentina como en el Brasil. No obstante, la DCD optó por aplicar el ajuste del valor normal a todas las ventas de pollos en el Brasil, aunque en el caso de algunas de esas ventas no estaba justificado el ajuste, por tratarse de ventas de pollos del tipo griller, es decir de pollos sin cabeza ni patas.

265. Además, el ajuste del valor normal realizado por la DCD tuvo en cuenta un rendimiento de los pollos eviscerados basado en la alegación de que los pollos se vendían en el Brasil con cabeza y patas. Según la información facilitada por Catarinense, los pollos del tipo broiler vendidos en el Brasil incluían cabeza pero no patas. En consecuencia, el rendimiento indicado en el cálculo del ajuste presentado por el solicitante respecto de los pollos vendidos en el Brasil no correspondía al rendimiento de los pollos vendidos en el Brasil por Catarinense. En el caso de Catarinense, la DCD debería haber tenido en cuenta esos hechos al establecer un ajuste del valor normal a efectos de la realización de una comparación equitativa.

---

[123] *Estados Unidos - Medidas antidumping sobre determinados productos de acero laminados en caliente procedentes del Japón*, 28 de febrero de 2001, WT/DS184/R, párrafos 7.54 y 7.55 ("*Estados Unidos - Acero laminado en caliente*"). El Órgano de Apelación confirmó las constataciones del Grupo Especial con respecto a la incompatibilidad de la utilización por los Estados Unidos de los hechos de que se tenía conocimiento con el párrafo 8 del artículo 6 y el Anexo II del Acuerdo Antidumping. *Estados Unidos - Medidas antidumping sobre determinados productos de acero laminados en caliente procedentes del Japón*, 24 de julio de 2001, WT/DS184/AB/R, párrafo 240 (informe adoptado el 23 de agosto de 2001) ("*OA - Estados Unidos - Acero laminado en caliente*").

266. La DCD no solicitó más información concreta a los exportadores sobre las supuestas diferencias entre las características físicas de los pollos exportados a la Argentina y de los pollos vendidos en el Brasil. La DCD se limitó a rechazar la información de los exportadores y aplicar el ajuste propuesto en la solicitud por el solicitante.

267. A este respecto, el Brasil se remite al análisis del Grupo Especial en *Guatemala - Cemento II* sobre la interpretación del párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping:

> "[...] No consideramos que el hecho de no cooperar equivalga necesariamente a entorpecer significativamente una investigación, ya que, a nuestro juicio el Acuerdo Antidumping no exige que las partes interesadas cooperen a cualquier precio. Si bien el hecho de no cooperar con una autoridad investigadora tiene ciertas consecuencias (en virtud del párrafo 8 del artículo 6) para las partes interesadas, opinamos que esas consecuencias sólo son posibles si la propia autoridad investigadora ha actuado de forma razonable, objetiva e imparcial [...]."[124]

268. El Brasil considera que en el presente caso la DCD no actuó de forma razonable, objetiva e imparcial. La DCD tuvo acceso a la información facilitada por los exportadores en relación con la descripción del producto mucho antes de que se formulara la determinación definitiva. Si la información facilitada por los exportadores suscitaba dudas a la DCD, ésta debería haberles planteado esas dudas en el curso de la investigación, pero no lo hizo. Los exportadores no se negaron a facilitar, y de hecho no dejaron de facilitar, a la DCD la información necesaria para analizar si estaba o no justificado un ajuste del valor normal. La DCD, sencillamente, descartó la información facilitada por los exportadores y prescindió de ella.

269. Conforme a lo dispuesto en el párrafo 6 del Anexo II, en caso de no aceptar pruebas o informaciones, la autoridad investigadora debe informar a la parte que las haya facilitado las razones por las que no han sido aceptadas y darle oportunidad de presentar nuevas explicaciones dentro de un plazo prudencial. Si las autoridades consideran que las explicaciones no son satisfactorias, en cualesquiera determinaciones que se publiquen se expondrán las razones por las que se hayan rechazado las pruebas o las informaciones.

270. No fue esto lo que ocurrió en el caso de Sadia, Avipal, Frangosul y Catarinense. La DCD no solicitó nunca información específica sobre la descripción de los pollos vendidos en el Brasil y de los pollos exportados a la Argentina. Si la información de esos exportadores le planteaba cuestiones o dudas que justificaran el rechazo de esas información, la DCD debería haber solicitado aclaraciones al respecto y haber dado a los exportadores la oportunidad de presentar explicaciones en el curso de la investigación. La DCD no lo hizo.

271. Dado que Sadia, Avipal, Frangosul y Catarinense facilitaron la información necesaria para que la DCD llegara a la conclusión de que no había necesidad de ajustar el valor normal en el caso de esos exportadores, la DCD no tuvo que basar su constatación con respecto al valor normal en los hechos de que se tenía conocimiento, que en este caso eran los facilitados en la información presentada por el solicitante en la solicitud.

272. Aun en el supuesto de que la DCD hubiera tenido que basar su constatación con respecto al valor normal en información de una fuente secundaria, lo que no es el caso, el párrafo 7 del Anexo II obliga a la autoridad investigadora a hacerlo con especial prudencia.

---

[124] *Guatemala - Cemento II*, párrafo 8.251.

273. El Brasil afirma que la DCD al formular su constatación de que estaba justificado el ajuste del valor normal no actuó con especial prudencia ni analizó cuidadosamente la información que figuraba en la solicitud. Si lo hubiera hecho, la DCD habría solicitado información y aclaraciones adicionales acerca del tipo del producto exportado a la Argentina y vendido en el Brasil y de sus características físicas, y habría contrastado la información que figuraba en la solicitud con información procedente de otras fuentes independientes. La DCD nunca planteó la cuestión durante la investigación.

ii) Reclamación 16: Incompatibilidad con el párrafo 2.2 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping

Texto del párrafo 2.2 del artículo 12

274. El artículo 12 regula el contenido de los avisos públicos emitidos en el curso de una investigación antidumping. En la parte pertinente, establece lo siguiente:

> "12.2 Se dará aviso público de todas las determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativas, de toda decisión de aceptar un compromiso en aplicación del artículo 8, de la terminación de tal compromiso y de la terminación de un derecho antidumping definitivo. En cada uno de esos avisos figurarán, o se harán constar de otro modo mediante un informe separado, con suficiente detalle, las constataciones y conclusiones a que se haya llegado sobre todas las cuestiones de hecho y de derecho que la autoridad investigadora considere pertinentes. Todos esos avisos e informes se enviarán al Miembro o Miembros cuyos productos sean objeto de la determinación o compromiso de que se trate, así como a las demás partes interesadas de cuyo interés se tenga conocimiento.
>
> 12.2.1 En los avisos públicos de imposición de medidas provisionales figurarán, o se harán constar de otro modo mediante un informe separado, explicaciones suficientemente detalladas de las determinaciones preliminares de la existencia de dumping y de daño y se hará referencia a las cuestiones de hecho y de derecho en que se base la aceptación o el rechazo de los argumentos. En dichos avisos o informes, teniendo debidamente en cuenta lo prescrito en cuanto a la protección de la información confidencial, se indicará en particular:
>
> i) los nombres de los proveedores o, cuando esto no sea factible, de los países abastecedores de que se trate;
>
> ii) una descripción del producto que sea suficiente a efectos aduaneros;
>
> iii) los márgenes de dumping establecidos y una explicación completa de las razones que justifican la metodología utilizada en la determinación y comparación del precio de exportación y el valor normal con arreglo al artículo 2;
>
> iv) las consideraciones relacionadas con la determinación de la existencia de daño según se establece en el artículo 3;
>
> v) las principales razones en que se base la determinación.
>
> 12.2.2 En los avisos públicos de conclusión o suspensión de una investigación en la cual se haya llegado a una determinación positiva que prevea la imposición de un derecho definitivo o la aceptación de un compromiso en materia de precios, figurará, o se hará constar de otro modo mediante un informe separado, toda la información pertinente sobre las cuestiones de hecho y de derecho y las razones que hayan llevado

> a la imposición de medidas definitivas o a la aceptación de compromisos en materia de precios, teniendo debidamente en cuenta lo prescrito en cuanto a la protección de la información confidencial. En el aviso o informe figurará en particular la información indicada en el apartado 2.1, así como los motivos de la aceptación o rechazo de los argumentos o alegaciones pertinentes de los exportadores e importadores, y la base de toda decisión adoptada en virtud del apartado 10.2 del artículo 6."

Argumento jurídico relativo a la Reclamación 16

275. La cuestión que se plantea al Grupo Especial es si en la determinación definitiva se hizo un análisis, suficiente para cumplir las prescripciones del párrafo 2.2 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping, en el que se explicaron las razones por las que la DCD no utilizó la información facilitada por Sadia, Avipal, Frangosul y Catarinense en relación con la descripción de los productos exportados a la Argentina y los productos vendidos en el Brasil.

276. En las respuestas al cuestionario presentadas por Sadia, Avipal y Frangosul se indicaba que no había ninguna diferencia entre los pollos exportados a la Argentina y los pollos vendidos en el Brasil. El exportador brasileño Catarinense informaba de que en relación con los dos tipos de pollos vendidos (broiler y griller), había una diferencia entre los pollos del tipo broiler exportados a la Argentina y los pollos de ese mismo tipo vendidos en el Brasil. Los primeros no incluían cabeza ni patas y los últimos incluían cabeza pero no patas.

277. En el curso de la investigación, la DCD no solicitó más información específica acerca de las características físicas del producto exportado a la Argentina y del producto vendido en el Brasil, ni acerca de si esas diferencias influían en la comparabilidad de los precios de los pollos vendidos en uno y otro mercado.

278. En la determinación definitiva, la DCD aplicó el cálculo del ajuste del valor normal presentado por el solicitante con la solicitud, sin explicar las razones por las que no se aceptó la información presentada por los exportadores sobre la descripción del producto exportado a la Argentina y del producto vendido en el Brasil y, en consecuencia, se descartó esa información.

279. El párrafo 2.2 del artículo 12 prescribe que, en caso de una determinación positiva que prevea la imposición de un derecho definitivo, figurará en los avisos de conclusión de la investigación, o se hará constar de otro modo mediante un informe separado, toda la información pertinente sobre las cuestiones de hecho y de derecho y las razones que hayan llevado a la imposición de medidas definitivas. La información pertinente incluye los márgenes de dumping establecidos y una explicación completa de las razones que justifiquen la metodología utilizada en la determinación y comparación del precio de exportación y del valor normal con arreglo al artículo 2.

280. Con arreglo a la determinación definitiva de la existencia de dumping, la DCD ajustó el valor normal, en función de las supuestas diferencias entre las características físicas de los productos exportados a la Argentina y de los productos vendidos en el Brasil, a efectos de realizar una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal. La DCD no facilitó ninguna explicación de las razones por las que no tomó en consideración la información de los exportadores sobre la descripción del producto, de la que se desprendía que no era necesario un ajuste del valor normal para realizar una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal y se limitó a aplicar el cálculo del ajuste del valor normal propuesto por el solicitante en la solicitud.

281. La Argentina, al no facilitar la información a que se ha hecho referencia, infringió *prima facie* el párrafo 2.2 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping.

iii) Reclamación 17: Incompatibilidad con el párrafo 8 del artículo 6 y el Anexo II del Acuerdo Antidumping

Texto del párrafo 8 del artículo 6

282. El párrafo 8 del artículo 6 establece lo siguiente:

> "En los casos en que una parte interesada niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite dentro de un plazo prudencial o entorpezca significativamente la investigación, podrán formularse determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de los hechos de que se tenga conocimiento. Al aplicar el presente párrafo se observará lo dispuesto en el Anexo II."

A continuación se reproducen las disposiciones pertinentes del Anexo II.

El párrafo 3 del Anexo II, establece en la parte pertinente, lo siguiente:

> "Al formular las determinaciones deberá tenerse en cuenta toda la información verificable, presentada adecuadamente de modo que pueda utilizarse en la investigación sin dificultades excesivas, facilitada a tiempo y, cuando proceda, en un medio o lenguaje informático que hayan solicitado las autoridades. [...]"

El texto del párrafo 5 del Anexo II es el siguiente:

> "Aunque la información que se facilite no sea óptima en todos los aspectos, ese hecho no será justificación para que las autoridades la descarten, siempre que la parte interesada haya procedido en toda la medida de sus posibilidades."

Argumento jurídico relativo a la Reclamación 17

283. En la determinación definitiva, la DCD estableció el precio de exportación para todos los exportadores brasileños basándose en la información sobre las importaciones facilitada por el organismo argentino *Ganadería*.

284. Sadia facilitó información sobre los precios de exportación de los pollos vendidos a la Argentina en el período comprendido entre 1996 y febrero de 1999.[125] Avipal facilitó información sobre los precios de exportación de los pollos vendidos a la Argentina en el período comprendido entre 1996 y marzo de 1999.[126] Frangosul facilitó información sobre los precios de exportación de transacciones individuales de exportación correspondientes a los pollos exportados a la Argentina en el período comprendido entre enero de 1996 y marzo de 1999, con las correspondientes facturas.[127] Catarinense facilitó información de los precios de exportación de transacciones individuales de venta de pollos a la Argentina en el período comprendido entre enero de 1998 y enero de 1999, con las correspondientes facturas.[128]

---

[125] *Véanse* la Prueba documental BRA-22 y las páginas 18 y 43 de la Prueba documental BRA-15.

[126] *Véanse* la Prueba documental BRA-23 y las páginas 22 y 45 de la Prueba documental BRA-15.

[127] *Véanse* la Prueba documental BRA-24 y las páginas 29 y 49 de la Prueba documental BRA-15.

[128] *Véanse* la Prueba documental BRA-25 y las páginas 38 y 39 de la Prueba documental BRA-15.

285. Como se ha indicado antes, el párrafo 8 del artículo 6 limita la utilización de los hechos de que se tenga conocimiento a los siguientes supuestos: i) los casos en que una parte interesada niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite dentro de un plazo prudencial o ii) los casos en que una parte interesada entorpezca significativamente la investigación.

286. En el caso que nos ocupa, los exportadores no negaron el acceso a la información sobre los precios de exportación ni dejaron de facilitarla dentro de un plazo prudencial. Frangosul y Catarinense facilitaron incluso la información sobre los precios de exportación de transacciones individuales de exportación a la Argentina con las correspondientes facturas.

287. El párrafo 3 del Anexo II obliga a las autoridades a tener en cuenta, al formular las determinaciones, toda la información verificable y presentada adecuadamente, y lo que es aún más importante, el párrafo 5 del Anexo II establece expresamente que aunque la información que se facilite no sea óptima en todos los aspectos, ese hecho no será justificación para que las autoridades la descarten, siempre que la parte interesada haya procedido en toda la medida de sus posibilidades.

288. Hay que señalar a este respecto que Sadia, Avipal, Frangosul y Catarinense facilitaron información en toda la medida de sus disponibilidades y nunca se negaron a cooperar con la DCD. Además, el Grupo Especial debería tener en cuenta que la DCD no determinó el período de investigación hasta después de transcurridos nueve meses desde la iniciación de la investigación. En el curso de esos nueve meses, Sadia, Avipal y Frangosul facilitaron información sobre el valor normal y sobre el precio de exportación que no se limitaba al período de investigación[129], que posteriormente fue definido como el período comprendido entre enero de 1998 y enero de 1999.[130] La DCD no estableció inicialmente el período de investigación a efectos de dumping y los exportadores tuvieron que presentar información sobre el precio de exportación y el valor normal correspondiente a los años 1996, 1997 y 1998 y a los meses de 1999 respecto de los que se disponía de datos.[131]

289. Los exportadores nunca se negaron a facilitar esa información, a pesar de que se les imponía una carga excesiva. Teniendo esto presente, hay que considerar aunque las respuestas quizá no se presentaran exactamente en la forma o con el contenido que preveía o deseaba la DCD, el hecho es que se presentaron. A este respecto, el Brasil recuerda que el párrafo 5 del Anexo II establece que el simple hecho de que la información que se facilite pueda no ser óptima en todos los aspectos no es justificación para que las autoridades la descarten.

290. La Argentina, al descartar completamente toda la información sobre el precio de exportación facilitada por los exportadores y utilizar, en lugar de ella, la información procedente de *Ganadería*, actuó de forma incompatible con el párrafo 8 del artículo 6 y los párrafos 3 y 5 del Anexo II del Acuerdo Antidumping.

iv) Reclamación 18: Incompatibilidad con el párrafo 2.2 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping

Texto del párrafo 2.2 del artículo 12

291. El párrafo 2.2 del artículo 12 indica la información que deben contener los avisos públicos de conclusión en el caso de una determinación positiva que prevea la imposición de un derecho definitivo. Ese párrafo establece, en la parte pertinente, lo siguiente:

---

[129] *Véanse* las Pruebas documentales BRA-22, BRA-23 y BRA-24.

[130] *Véanse* las Pruebas documentales BRA-13 y BRA-26.

[131] *Véanse* las páginas 18, 22 y 29 de la Prueba documental BRA-15.

> "12.2.2 En los avisos públicos de conclusión o suspensión de una investigación en la cual se haya llegado a una determinación positiva que prevea la imposición de un derecho definitivo o la aceptación de un compromiso en materia de precios, figurará, o se hará constar de otro modo mediante un informe separado, toda la información pertinente sobre las cuestiones de hecho y de derecho y las razones que hayan llevado a la imposición de medidas definitivas o a la aceptación de compromisos en materia de precios, teniendo debidamente en cuenta lo prescrito en cuanto a la protección de la información confidencial. En el aviso o informe figurará en particular la información indicada en el apartado 2.1, así como los motivos de la aceptación o rechazo de los argumentos o alegaciones pertinentes de los exportadores e importadores, y la base de toda decisión adoptada en virtud del apartado 10.2 del artículo 6."

Argumento jurídico relativo a la Reclamación 18

292. La cuestión que se plantea al Grupo Especial es si en la determinación definitiva se ha facilitado una explicación, suficiente para cumplir las prescripciones del párrafo 2.2 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping, de las razones por las que la DCD no utilizó la información sobre el precio de exportación facilitada por Sadia, Avipal, Frangosul y Catarinense.

293. En la determinación definitiva, la DCD estableció el precio de exportación para todos los exportadores brasileños basándose en la información sobre las importaciones procedente del organismo argentino *Ganadería* y descartó la información sobre los precios de exportación de Sadia, Avipal, Frangosul y Catarinense.

294. Para explicar la utilización de la información sobre el precio de exportación, la DCD se limitó a declarar lo siguiente:

> "Para esta instancia de las actuaciones, y atento a que proviene de la fuente más completa y detallada, esta Dirección considera apropiado utilizar como valor FOB de exportación el proveniente de la Dirección de Ganadería, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, discriminado por empresa [...]."[132]

295. No se facilitó ninguna otra explicación de las razones por las que no se aceptó la información sobre el precio de exportación comunicada por los exportadores.

296. El párrafo 2.2 del artículo 12 prescribe expresamente que en el aviso o informe figurará la información indicada en el apartado 2.1, así como los motivos de la aceptación o rechazo de los argumentos o alegaciones formulados por los exportadores e importadores. La información pertinente a que se refiere el párrafo 2.1 del artículo 12 incluye los márgenes de dumping establecidos y una explicación completa de las razones que justifiquen la metodología utilizada en la determinación y comparación del precio de exportación y el valor normal.

297. En contra de lo dispuesto en el párrafo 2.2 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping, no se facilitó ninguna explicación de las razones por las que la DCD no estableció el precio de exportación sobre la base de la información facilitada por los exportadores.

[132] *Véase* la página 76 de la Prueba documental BRA-15.

v) Reclamación 19: Incompatibilidad con el párrafo 8 del artículo 6 y el Anexo II del Acuerdo Antidumping

Texto del párrafo 8 del artículo 6

298. El párrafo 8 del artículo 6 establece lo siguiente:

> "En los casos en que una parte interesada niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite dentro de un plazo prudencial o entorpezca significativamente la investigación, podrán formularse determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de los hechos de que se tenga conocimiento. Al aplicar el presente párrafo se observará lo dispuesto en el Anexo II."

El párrafo 3 del Anexo II dispone lo siguiente:

> "Al formular las determinaciones deberá tenerse en cuenta toda la información verificable, presentada adecuadamente de modo que pueda utilizarse en la investigación sin dificultades excesivas, facilitada a tiempo y, cuando proceda, en un medio o lenguaje informático que hayan solicitado las autoridades. [...]"

En el párrafo 5 del Anexo II se dispone lo siguiente:

> "Aunque la información que se facilite no sea óptima en todos los aspectos, ese hecho no será justificación para que las autoridades la descarten, siempre que la parte interesada haya procedido en toda la medida de sus posibilidades."

El texto del párrafo 7 del Anexo II es el siguiente:

> "Si las autoridades tienen que basar sus conclusiones, entre ellas las relativas al valor normal, en información procedente de una fuente secundaria, incluida la información que figure en la solicitud de iniciación de la investigación, deberán actuar con especial prudencia. En tales casos, y siempre que sea posible, deberán comprobar la información a la vista de la información de otras fuentes independientes de que dispongan -tales como listas de precios publicados, estadísticas oficiales de importación y estadísticas de aduanas- y de la información obtenida de otras partes interesadas durante la investigación. Como quiera que sea, es evidente que si una parte interesada no coopera, y en consecuencia dejan de comunicarse a las autoridades informaciones pertinentes, ello podrá conducir a un resultado menos favorable para esa parte que si hubiera cooperado."

Argumento jurídico relativo a la Reclamación 19

299. Como ponen de manifiesto los hechos relativos a las presentes reclamaciones, Frangosul presentó las respuestas al cuestionario, incluidos los datos sobre el valor normal, el 27 de abril de 1999. El 19 de agosto de 1999, Frangosul explicó que el gran volumen de ventas realizadas en el mercado interno le hacía imposible facilitar copias de las facturas correspondientes a cada una de las transacciones. En esa respuesta, Frangosul invitaba a la DCD a realizar una verificación *in loco* o hacer una muestreo de transacciones, para que pudiera facilitar copias de las facturas de las transacciones seleccionadas.[133] El 12 de octubre de 1999, la DCD envió a Frangosul una carta en la que le solicitaba un nuevo listado de facturas para el período que abarcaba desde enero de 1998 a enero de 1999, para que la DCD pudiera realizar un muestreo estadístico y solicitar posteriormente la

[133] *Véase* la Prueba documental BRA-26.

documentación correspondiente.[134] El 30 de diciembre de 1999, Frangosul presentó un disquete con el listado de facturas.[135] El 5 de enero de 2000, la DCD envió a Frangosul una carta en la que le informaba del cierre de la etapa probatoria.[136] La DCD nunca seleccionó las transacciones respecto de las cuales deseaba que Frangosul facilitara copias de las facturas correspondientes.

300. Con respecto a las respuestas facilitadas por Catarinense, el Brasil recuerda que la DCD notificó la investigación al exportador el 15 de septiembre de 1999, ocho meses después de que se hubiera iniciado. El 20 de octubre de 1999, Catarinense solicitó una prórroga del plazo para presentar la respuesta al cuestionario. El 3 de noviembre de 1999, Catarinense presentó la respuesta al cuestionario con un listado de las transacciones efectuadas en el mercado interno en el período comprendido entre enero de 1998 y enero de 1999. El 8 de noviembre de 1999, la DCD envió a Catarinense una carta en la que le concedía la prórroga del plazo hasta el 8 de noviembre de 1999.[137] El Brasil observa que la DCD envió la carta en la que concedía la prórroga a Catarinense el mismo día en que finalizaba el plazo concedido. Posteriormente, la DCD no volvió a solicitar más información a Catarinense.

301. El 23 de junio de 2000, la DCD formuló la determinación definitiva de existencia de dumping sin tener en cuenta la información sobre el valor normal facilitada por Frangosul y Catarinense en la investigación y, en consecuencia, no estableció el valor normal para esos dos exportadores. En lugar de ello, la DCD aplicó a Frangosul y Catarinense el valor normal asignado a todos los demás exportadores sobre la base de la información presentada por el solicitante el 26 de julio de 1999.[138] El solicitante había presentado una planilla con un cálculo del valor normal actualizado para el período 1998-1999 basado en los precios publicados por JOX. En el cálculo del solicitante se utilizaban precios de tres fechas de referencia para cada uno de los meses del período comprendido entre enero de 1998 y enero de 1999. Los precios eran los correspondientes a los pollos refrigerados, con cabeza y patas, vendidos en el mercado mayorista de São Paulo.

302. El párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping delimita los supuestos en los que pueden utilizarse los hechos de que se tenga conocimiento. Se trata de los casos en que una parte interesada niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite dentro de un plazo prudencial o entorpezca significativamente la investigación. A lo largo de toda la investigación Frangosul y Catarinense cooperaron con la DCD facilitándole la información solicitada.

303. En caso de que la DCD considerara que la información sobre el valor normal no se presentó dentro de los plazos establecidos por la autoridad, y por consiguiente no se facilitó dentro de un plazo prudencial, el Brasil recuerda que el "plazo prudencial" no coincidirá, en todos los casos, con los plazos preestablecidos en reglamentaciones generales, especialmente si la autoridad investigadora no ha actuado de forma razonable, objetiva e imparcial.

304. A este respecto, el Brasil recuerda que se impuso a Frangosul una carga excesiva al tener que presentar datos sobre el dumping de 1996 a 1999, período que excedía del período de investigación, de enero de 1998 a enero de 1999. Por lo que atañe a la respuesta de Catarinense, el exportador facilitó la información solicitada por la DCD a pesar de que la investigación se le notificó ocho meses después de haber sido iniciada. Todos esos actos de la autoridad investigadora indican que la DCD no actuó de forma razonable, objetiva e imparcial.

---

[134] *Véase* la Prueba documental BRA-26.

[135] *Véase* la Prueba documental BRA-26.

[136] *Véase* la Prueba documental BRA-26.

[137] *Véase* la Prueba documental BRA-27.

[138] *Véanse* las páginas 55 y 104 de la Prueba documental BRA-15.

305. Además, en el caso de Frangosul, el exportador invitó a la DCD a verificar la información facilitada en su respuesta.

306. El párrafo 3 del Anexo II establece que al formular las determinaciones deberá tenerse en cuenta toda la información verificable, presentada adecuadamente de modo que pueda utilizarse en la investigación sin dificultades excesivas y facilitada a tiempo. Del hecho de que Frangosul facilitara información sobre el valor normal en un momento en que podía ser verificada, y de que esa información pudiera realmente ser verificada, se desprende que la DCD debería haber tomado en consideración y aceptado la información sobre el valor normal.

307. Según el párrafo 5 del Anexo II aunque la información que se facilite no sea óptima en todos los aspectos, ese hecho no debe ser justificación para que las autoridades la descarten si la parte interesada ha procedido en toda la medida de sus posibilidades.

308. Por último hay que señalar que la DCD no tenía que basar su conclusión con respecto al valor normal en el caso de Frangosul y Catarinense en la información facilitada por el solicitante, puesto que contaba con información presentada por esas empresas. El valor normal para todos los demás exportadores establecido por el solicitante se basaba en los precios de los pollos refrigerados, con cabeza y patas, vendidos en el mercado mayorista de São Paulo publicados por JOX. Según la respuesta de Frangosul y Catarinense, el valor normal comunicado en ellas correspondía a los pollos congelados, sin cabeza ni patas.[139] No cabe duda de que el valor normal indicado por los dos exportadores era más exacto que el facilitado por el solicitante.

309. A este respecto, el párrafo 7 del Anexo II obliga a la autoridad investigadora a actuar con especial prudencia al utilizar la información procedente de una fuente secundaria, incluida la información relativa al valor normal.

310. A pesar de que Frangosul y Catarinense habían presentado adecuadamente información sobre el valor normal, la DCD optó por utilizar la información sobre el valor normal presentada por el solicitante, que se basaba en el precio de pollos que tenían características diferentes de aquellos respecto de los que habían facilitado información los dos exportadores. En ese sentido, el Brasil considera que la DCD no actuó con especial prudencia cuando decidió aplicar el valor normal obtenido de una fuente secundaria.

vi) Reclamación 20: Incompatibilidad con el párrafo 2.2 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping

Texto del párrafo 2.2 del artículo 12

311. El párrafo 2.2 del artículo 12 establece lo siguiente:

> "12.2.2 En los avisos públicos de conclusión o suspensión de una investigación en la cual se haya llegado a una determinación positiva que prevea la imposición de un derecho definitivo o la aceptación de un compromiso en materia de precios, figurará, o se hará constar de otro modo mediante un informe separado, toda la información pertinente sobre las cuestiones de hecho y de derecho y las razones que hayan llevado a la imposición de medidas definitivas o a la aceptación de compromisos en materia de precios, teniendo debidamente en cuenta lo prescrito en cuanto a la protección de la información confidencial. En el aviso o informe figurará en particular la

[139] *Véanse* las Pruebas documentales BRA-24 y BRA-25. Observamos que el exportador brasileño Catarinense informaba de que el pollo de tipo broiler vendido en el mercado interno brasileño incluía la cabeza pero no las patas.

> información indicada en el apartado 2.1, así como los motivos de la aceptación o rechazo de los argumentos o alegaciones pertinentes de los exportadores e importadores, y la base de toda decisión adoptada en virtud del apartado 10.2 del artículo 6."

Argumento jurídico relativo a la Reclamación 20

312. La cuestión que se plantea al Grupo Especial es si en la determinación definitiva se dio una explicación, suficiente para cumplir las prescripciones del párrafo 2.2 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping, de las razones por las que la DCD no utilizó la información sobre el valor normal de Frangosul y Catarinense.

313. En la determinación definitiva, la DCD no estableció el valor normal para Frangosul y Catarinense. De hecho, la DCD no estableció un margen de dumping para cada uno de esos dos exportadores, a pesar de que éstos facilitaron información sobre el valor normal y el precio de exportación.

314. La única explicación dada por la DCD de la no utilización de la información facilitada por Frangosul y Catarinense fue que la autoridad no había contado con información adicional o con respaldo documental suficiente que la habilitara a proceder a la determinación final individual del margen de dumping.[140]

315. No se dio ninguna otra explicación de las razones por las que no se aceptó la información sobre el valor normal presentada por los exportadores.

316. El párrafo 2.2 del artículo 12 requiere expresamente que en el aviso o informe figure la información indicada en el párrafo 2.1, así como los motivos de la aceptación o rechazo de los argumentos o alegaciones pertinentes de los exportadores e importadores. La información pertinente a que se refiere el párrafo 2.1 del artículo 12 incluye los márgenes de dumping establecidos y una explicación completa de las razones que justifiquen la metodología utilizada en la determinación y comparación del precio de exportación y el valor normal.

317. En contra de lo dispuesto en el párrafo 2.2 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping, no se facilitó ninguna explicación de las razones por las que no se utilizó para establecer el valor normal ninguna de las informaciones facilitadas al respecto por Frangosul y Catarinense.

vii) Reclamación 22: Incompatibilidad con el párrafo 10 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping

Texto del párrafo 10 del artículo 6

318. El párrafo 10 del artículo 6 establece lo siguiente:

> "Por regla general, las autoridades determinarán el margen de dumping que corresponde a cada exportador o productor interesado en el producto sujeto a investigación de que se tenga conocimiento. En los casos en que el número de exportadores, productores, importadores o tipos de productos sea tan grande que resulte imposible efectuar esa determinación, las autoridades podrán limitar su examen a un número prudencial de partes interesadas o de productos, utilizando muestras que sean estadísticamente válidas sobre la base de la información de que

[140] *Véase* la página 76 de la Prueba documental BRA-15.

dispongan en el momento de la selección, o al mayor porcentaje del volumen de las exportaciones del país en cuestión que pueda razonablemente investigarse."

Argumento jurídico relativo a la Reclamación 22

319. Como ponen de manifiesto los hechos relativos a las presentes reclamaciones, Frangosul y Catarinense eran exportadores del producto sujeto a investigación de los que se tenía conocimiento. Ambos facilitaron la información solicitada sobre el valor normal y el precio de exportación, que fue descartada sin ninguna explicación por la DCD, que, en lugar de ella, optó por aplicar los hechos de que tenía conocimiento y utilizar la información relativa al valor normal presentada por el solicitante y la información relativa al precio de exportación facilitada por el organismo argentino SENASA[141], a fin de establecer el margen de dumping para todos los demás exportadores. Se aplicó a Frangosul y Catarinense el margen de dumping correspondiente a todos los demás exportadores, a pesar de que esos exportadores habían presentado adecuadamente los datos sobre el valor normal y el precio de exportación solicitados por la DCD dentro de un plazo prudencial. En virtud de esos hechos, la DCD estaba obligada a determinar un margen individual de dumping para Frangosul y Catarinense.

320. La primera frase del párrafo 10 del artículo 6 establece la regla general de que las autoridades deben determinar el margen de dumping que corresponda a cada exportador o productor del producto sujeto a investigación de que se tenga conocimiento.

321. La segunda frase del párrafo 10 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping permite a las autoridades investigadoras apartarse de esa regla general, y en los casos en que el número de exportadores, productores, importadores o tipos de productos de que se trate sea tan grande que resulte imposible efectuar esa determinación, las autoriza a "limitar su examen a un número prudencial de partes interesadas o de productos, utilizando muestras [...] o al mayor porcentaje del volumen de las exportaciones del país en cuestión que pueda razonablemente investigarse".

322. El Brasil señala que la segunda frase del párrafo 10 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping, que establece una excepción a la regla general de la primera parte de dicho artículo, sólo es aplicable cuando el número de exportadores, productores, importadores o tipos de productos a los que afecte una investigación sea tan grande que resulte imposible efectuar una determinación de un margen individual.

323. El Brasil afirma que no era esto lo que ocurría en el presente caso. La DCD nunca formuló durante la investigación el argumento de que el número de productores y exportadores brasileños de pollos de los que se tenía conocimiento que intervenían la investigación era tan grande que hacía imposible efectuar una determinación de un margen de dumping para cada uno de ellos. A este respecto, el párrafo 10.1 del artículo 6 establece que cualquier selección de esa naturaleza "se hará de preferencia en consulta con los exportadores, productores o importadores de que se trate y con su consentimiento". En ningún momento de la investigación, la DCD indicó a los productores/exportadores brasileños de que se trataba que haría una selección de exportadores de conformidad con el párrafo 10 del artículo 6, celebró consultas con ellos o requirió su consentimiento. De hecho, la DCD envió a Frangosul y Catarinense el cuestionario sobre el dumping para que dieran respuesta al mismo, lo que indicaba claramente que la autoridad investigadora tenía el propósito de examinar la información facilitada por esos dos exportadores.

324. Además, la DCD no facilitó ninguna explicación, en la determinación definitiva o en cualquier otro documento incorporado al expediente de la investigación, de las razones por las que, en el presente caso, no era posible determinar el margen correspondiente a Frangosul y a Catarinense. La DCD no hizo en el expediente una evaluación de los hechos que podrían haber servido de base

[141] *Véase* la página 104 de la Prueba documental BRA-15.

para llegar a esa conclusión, de lo que se desprende que la DCD no hizo una evaluación objetiva e imparcial de los hechos, aspecto éste que, con arreglo a la norma de examen aplicable en la esfera del dumping, el Grupo Especial está obligado a examinar.

325. La Argentina, al no determinar el margen de dumping que correspondía a Frangosul y a Catarinense y aplicar en lugar de ello el tipo de dumping establecido para todos los demás exportadores, actuó de forma incompatible con la regla general establecida en el párrafo 10 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping.

4. Párrafo 9 del artículo 6

326. **Reclamación 21:** En contra de lo prescrito en el párrafo 9 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping, la Argentina no informó a los exportadores brasileños de los hechos esenciales considerados que servirían de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas, con lo que impidió que los exportadores brasileños defendieran adecuadamente sus intereses.

a) Hechos

327. El 4 de enero de 2000, la DCD publicó el memorándum *Relevamiento de lo Actuado con Anterioridad al Cierre de la Etapa Probatoria*, el informe previo al cierre de la etapa probatoria de la investigación antidumping.[142] En el punto VIII de ese informe, la DCD hacía un análisis técnico de la información de la investigación antidumping, que incluía los elementos para la determinación del valor normal y los elementos para la definición del precio de exportación.[143] Todos esos elementos eran hechos considerados que servirían de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas.

Valor normal

Sadia

328. En el informe previo a la determinación definitiva, la DCD indicaba que el 26 de agosto de 1999 Sadia remitió listados de las facturas emitidas de 1996 a febrero de 1999 y fotocopia de una factura acompañada de la correspondiente traducción.[144] Debido al gran volumen de las facturas que habían de ser examinadas y de las que había de remitirse respaldo documental, la DCD realizó un muestreo estadístico para el período comprendido entre enero de 1998 y enero de 1999 inclusive.[145] Según la DCD, la muestra fue realizada aleatoriamente y se consideraron 372 operaciones.[146] La DCD solicitó posteriormente la documentación justificante respecto del muestreo efectuado. Según el informe, Sadia no había presentado hasta aquel momento la referida documentación.[147]

329. El 23 de junio de 2000, la DCD formuló la determinación definitiva de la existencia de dumping.[148] En ella, la DCD indicaba que el 13 de enero de 2000 Sadia presentó parte de la

[142] *Véase* la Prueba documental BRA-28.

[143] *Véase* la página 50 de la Prueba documental BRA-28.

[144] *Véanse* las páginas 60 y 61 de la Prueba documental BRA-28.

[145] *Véase* la página 61 de la Prueba documental BRA-28.

[146] *Véase* la página 61 de la Prueba documental BRA-28.

[147] *Véase* la página 61 de la Prueba documental BRA-28.

[148] *Véase* la Prueba documental BRA-15.

documentación justificante solicitada por la DCD (268 facturas).[149] La DCD calculó el valor normal para Sadia sobre la base de la muestra seleccionada, respecto de la cual Sadia presentó documentación justificante.[150]

Avipal

330. En el informe previo a la determinación definitiva se indicaba que el 12 de agosto de 1999 Avipal explicó que debido al gran número de notas fiscales/facturas (alrededor de 545 notas por día y 196.200 notas por año) no era viable enviar las copias de todas las notas fiscales.[151] El 1º de septiembre de 1999 Avipal presentó copia de las traducciones de los formularios de nota fiscal/factura.[152] El 21 de diciembre de 1999, Avipal remitió un disquete con el listado de notas fiscales, anexando planillas donde constaban las deducciones a realizar a los referidos listados.[153] La DCD señalaba que la mencionada información no había sido analizada hasta el momento.[154]

331. El 23 de junio de 2000, la DCD formuló la determinación definitiva de la existencia de dumping.[155] En ella, la DCD explicaba que, a partir de la información presentada por Avipal el 12 de agosto de 1999, había efectuado un cálculo basado en las transacciones respecto de las cuales Avipal había presentado copias de las correspondientes facturas (25 facturas).[156] La DCD añadía que la información presentada el 21 de diciembre de 1999 no estaba respaldada documentalmente y que la DCD sólo realizó los descuentos susceptibles de ser comprobados.[157] La DCD calculó el valor normal para Avipal basándose exclusivamente en la información de las transacciones respecto de las cuales Avipal remitió copia de las correspondientes facturas.[158]

Frangosul

332. Sorprendentemente, en el informe previo a la determinación definitiva publicado por la DCD no se hacía ninguna referencia a la información sobre el valor normal facilitada por Frangosul en el curso de la investigación.[159] A este respecto, es importante señalar que Frangosul invitó a la DCD a realizar una verificación *in loco* o a seleccionar una muestra de las transacciones a fin de que Frangosul pudiera facilitar las facturas correspondientes.[160] El 30 de diciembre de 1999, Frangosul presentó en un disquete un listado de facturas de transacciones efectuadas en el mercado interno en el

[149] *Véase* la página 62 de la Prueba documental BRA-15.

[150] *Véase* la página 63 de la Prueba documental BRA-15.

[151] *Véase* la página 62 de la Prueba documental BRA-28.

[152] *Véase* la página 62 de la Prueba documental BRA-28.

[153] *Véase* la página 62 de la Prueba documental BRA-28.

[154] *Véase* la página 62 de la Prueba documental BRA-28.

[155] *Véase* la Prueba documental BRA-15.

[156] *Véase* la página 64 de la Prueba documental BRA-15.

[157] *Véanse* las páginas 64 y 65 de la Prueba documental BRA-15.

[158] *Véase* la página 65 de la Prueba documental BRA-15.

[159] *Véase* la Prueba documental BRA-28.

[160] *Véase* la Prueba documental BRA-26.

período comprendido entre enero de 1998 y enero de 1999.[161] La DCD nunca seleccionó las transacciones respecto de las que se esperaba que Frangosul facilitara copias de las correspondientes facturas.

333. El 23 de junio de 2000, la DCD formuló la determinación definitiva de la existencia de dumping.[162] La DCD aplicó a Frangosul el valor normal constatado para todos los demás exportadores, que se basaba en la información presentada por el solicitante el 26 de agosto de 1999.[163]

Catarinense

334. En el informe previo a la determinación definitiva, la DCD indicaba que Catarinense remitió la respuesta al cuestionario sobre el dumping el 30 de noviembre de 1999.[164] Es importante señalar que hasta el 15 de septiembre de 1999 no se notificó la investigación a Catarinense y se le pidió que diera respuesta al cuestionario.[165] El informe de la DCD previo a la determinación definitiva reproducía el siguiente cuadro basado en los datos presentados por Catarinense.

VALOR NORMAL INFORMADO POR CATARINENSE

Año	Total kg	Total $EE.UU.	Precio por kg	Valor normal (+9,09%)
1998	52.528.211	47.068.340,55	0,8961	0,9775
1999*	43.475.875	24.424.618,28	0,5618	0,6129
Promedio ponderado	96.004.086	71.492.958,83	0,7447	0,8124

Fuente: Página 66 de la Prueba documental BRA-28.

335. La DCD indicaba que las cifras del cuadro surgían de la información presentada en forma agregada en los anexos V y VI del cuestionario para el exportador y correspondían a un período mayor que el de información.[166]

336. El 23 de junio de 2000, la DCD formuló la determinación definitiva de la existencia de dumping.[167] En ella, la DCD indicó que Catarinense no había presentado el respaldo documental de las ventas en el mercado interno incluidas en el listado y aplicó el valor normal constatado para todos los demás exportadores, que se basaba en la información presentada por el solicitante el 26 de agosto de 1999.[168]

[161] *Véase* la Prueba documental BRA-26.

[162] *Véase* la Prueba documental BRA-15.

[163] *Véanse* las páginas 54, 55, 103 y 104 de la Prueba documental BRA-15.

[164] *Véase* la página 66 de la Prueba documental BRA-28.

[165] *Véase* la Prueba documental BRA-13.

[166] *Véase* la página 66 de la Prueba documental BRA-28.

[167] *Véase* la Prueba documental BRA-15.

[168] *Véanse* las páginas 103 y 104 de la Prueba documental BRA-15.

Precio de exportación

337. En el informe previo a la determinación definitiva, la DCD indicaba que el 13 de septiembre de 1999, el Subdirector General de Operaciones Aduaneras del Interior remitió listados de operaciones de importación[169] y que el CEPA había facilitado también los días 17 de noviembre y 16 de diciembre de 1999 información respecto de las importaciones correspondientes al mes de octubre y al mes de noviembre de 1999.[170] En el curso de la investigación, los exportadores facilitaron también listados de facturas de las ventas a la Argentina. No obstante, el informe no hacía referencia a la información sobre el precio de exportación facilitada por los exportadores brasileños. La información que la DCD consideró más completa y detallada para establecer el precio FOB de exportación fue la facilitada por el organismo *Ganadería*.[171]

338. El 23 de junio de 2000, la DCD formuló la determinación definitiva de la existencia de dumping.[172] En ella, la DCD estableció el precio de exportación basándose en la información sobre las importaciones facilitadas por *Ganadería*.[173] Para establecer el precio de exportación para todos los demás exportadores, la DCD utilizó la información facilitada por SENASA.[174]

i) Reclamación 21: Incompatibilidad con el párrafo 9 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping

Texto del párrafo 9 del artículo 6

339. El párrafo 9 del artículo 6 establece lo siguiente:

> "Antes de formular una determinación definitiva, las autoridades informarán a todas las partes interesadas de los hechos esenciales considerados que sirvan de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas. Esa información deberá facilitarse a las partes con tiempo suficiente para que puedan defender sus intereses."

Argumento jurídico relativo a la Reclamación 21

340. El párrafo 9 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping obliga a las autoridades a informar a todas las partes interesadas de los hechos esenciales considerados que servirán de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas. Dicho párrafo establece además que esa información de los hechos esenciales deberá efectuarse con tiempo suficiente para que las partes defiendan sus intereses.

341. Hay que considerar que la información relativa al valor normal y al precio de exportación, que se utilizan para establecer los márgenes de dumping, constituyen hechos esenciales considerados en la determinación definitiva. Al no indicar en el informe previo a la determinación definitiva que no se utilizarían el valor normal y el precio de exportación comunicados por los exportadores y al no exponer las razones por las que se descartaría esa información, la DCD no informó de los hechos

---

[169] *Véase* la página 72 de la Prueba documental BRA-28.

[170] *Véanse* las páginas 72 y 73 de la Prueba documental BRA-28.

[171] *Véase* la página 72 de la Prueba documental BRA-28.

[172] *Véase* la Prueba documental BRA-15.

[173] *Véanse* las páginas 76 y 77 de la Prueba documental BRA-15.

[174] *Véase* la página 104 de la Prueba documental BRA-15.

esenciales considerados que se tendrían en cuenta en la decisión de aplicar o no medidas definitivas y no dio a los exportadores la oportunidad de defender sus intereses.

342. En concreto, el informe de la DCD previo a la determinación definitiva no indicaba: i) que no se utilizaría para establecer el valor normal la información recogida en los listados de facturas facilitados por Sadia que abarcaban el amplio período comprendido entre 1996 y febrero de 1999; ii) que la única información considerada para establecer el valor normal para Sadia en la determinación definitiva sería la correspondiente a las transacciones seleccionadas mediante el muestreo efectuado por la DCD respecto de los cuales se había proporcionado efectivamente respaldo documental; y iii) la razón por la que la DCD no tomaría en consideración la información facilitada por Sadia respecto de todas las ventas efectuadas en el mercado interno.

343. Además, no se indicaba en el informe que la única información que se tomaría en consideración para establecer el valor normal para Avipal sería la relativa a las transacciones con respecto a las cuales se había presentado a la DCD documentación justificante (25 facturas).

344. Con respecto a Frangosul y Catarinense, la DCD sencillamente descartó la información presentada por los dos exportadores y aplicó el valor normal constatado para todos los demás exportadores, basado en la información facilitada por el solicitante.

345. De forma análoga, el informe no indicaba las razones por las que no se consideró a efectos de la determinación del precio de exportación la información presentada por los exportadores, ni la DCD explicó por qué consideraba que la información facilitada por *Ganadería* era más completa y, de esta forma, privó a los exportadores del derecho de defender sus intereses.

346. Nuestra interpretación del párrafo 9 del artículo 6 se basa en el análisis del Grupo Especial que se ocupó del asunto *Argentina - Baldosas de cerámica*:

> "[...] la DCD se basó principalmente en pruebas presentadas por los peticionarios y obtenidas de fuentes secundarias, más que en la información proporcionada por los exportadores, como base fáctica para la determinación de la existencia de dumping. Así pues, la información procedente de los peticionarios y de fuentes secundarias, más que la información presentada por los exportadores, constituyó (en lo que se refiere a la existencia de dumping) los hechos esenciales que sirvieron de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas. En consecuencia, examinamos el expediente para determinar si la Autoridad argentina informó a los exportadores, mediante el acceso al expediente, de que esos eran los hechos en los que se basaría primordialmente para su determinación sobre la existencia de dumping."[175] (Sin subrayar en el original.)

347. Además, el Brasil coincide con la conclusión de ese Grupo Especial de que los exportadores no podían saber, simplemente examinando el expediente de la investigación, que la base primordial de la determinación de la existencia de dumping y del alcance del dumping serían las pruebas presentadas por los peticionarios y obtenidas de fuentes secundarias, en vez de los hechos comunicados por los exportadores.[176] El Brasil coincide con la conclusión del Grupo Especial que se ocupó de ese asunto, según el cual:

---

[175] *Argentina - Medidas antidumping definitivas aplicadas a las importaciones de baldosas de cerámica para el suelo procedentes de Italia*, 28 de septiembre de 2001, WT/DS189/R, párrafo 6.127 (informe adoptado el 5 de noviembre de 2001) ("*Argentina - Baldosas de cerámica*").

[176] *Argentina - Baldosas de cerámica*, párrafo 6.129.

> "[...] La DCD no informó a los exportadores de un hecho esencial considerado. En consecuencia, los exportadores no pudieron defender sus intereses en el sentido del párrafo 9 del artículo 6, por ejemplo aduciendo razones por las que no se debieran rechazar sus respuestas y sugiriendo fuentes alternativas de información en cuanto a los hechos de que se tenía conocimiento si no obstante se hacía caso omiso de sus respuestas. En estas circunstancias, constatamos que la DCD, al remitir a los exportadores al expediente completo de la investigación, no cumplió la obligación que le impone el párrafo 9 del artículo 6 de informar a los exportadores de los "hechos esenciales considerados que sirvan de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas."[177]

348. El Brasil considera que el análisis y las conclusiones del Grupo Especial en *Argentina - Baldosas de cerámica* son aplicables a la presente reclamación. La DCD no comunicó a los exportadores los hechos esenciales, que servirían de base para la aplicación de las medidas definitivas, ni que no se utilizaría la información presentada por los exportadores.

349. Al no explicar las razones por las que descartó esa información, la DCD privó a los exportadores de la oportunidad de defender sus intereses en el sentido del párrafo 9 del artículo 6, lo que constituye *prima facie* una infracción del párrafo 9 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping.

350. Además, el Brasil sostiene que, en la medida en que la Argentina, para justificar sus actos en la investigación, pudo obtener información o documentos no comunicados a los exportadores durante la investigación (especialmente con respecto a la Reclamación 39), puede considerarse asimismo que esa falta de comunicación de hechos esenciales constituye una infracción del párrafo 9 del artículo 6.

D. REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING Y DETERMINACIÓN POSITIVA DEFINITIVA

1. Párrafos 4 y 4.2 del artículo 2

351. De los hechos que se exponen a continuación y del texto legal del Acuerdo Antidumping se derivan cinco reclamaciones:

> **Reclamación 23:** La Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 4 del artículo 2 al no tener debidamente en cuenta en el valor normal establecido para Sadia y Avipal las diferencias en los fletes.
>
> **Reclamación 24:** La Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 4 del artículo 2 al no tener debidamente en cuenta en el valor normal establecido para todos los demás exportadores las diferencias de tributación, así como en los fletes y costos financieros.
>
> **Reclamación 25:** La Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 4 del artículo 2 al efectuar indebidamente ajustes en el valor normal en función de las supuestas diferencias entre las características físicas del producto vendido en el Brasil y del producto exportado a la Argentina.
>
> **Reclamación 26:** La Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 4 del artículo 2, por cuanto impuso a Sadia, Avipal y Frangosul una carga probatoria no razonable, al no determinar el período de investigación y permitir que los exportadores presentaran información sobre el dumping correspondiente a los años comprendidos entre 1996 y 1999, siendo así que posteriormente se estableció que el período de investigación a efectos del dumping era el comprendido entre enero de 1998 y enero de 1999.

[177] *Argentina - Baldosas de cerámica*, párrafo 6.129.

Reclamación 27: La Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 4.2 del artículo 2 al realizar inadecuadamente una comparación entre el precio de exportación y el valor normal establecido para Sadia y Avipal sobre la base exclusivamente de las transacciones efectuadas en el mercado interno respecto de las cuales se presentaron facturas, en lugar de establecer el valor normal sobre la base de todas las transacciones realizadas en el mercado interno durante el período en cuestión, incluidas en los listados y comunicadas a la DCD. La DCD estableció los márgenes de dumping para Sadia y Avipal sobre la base de una comparación entre un promedio ponderado del valor normal de una muestra estadística y un promedio ponderado de los precios de todas las transacciones de exportación comparables.

a) Hechos

352. El 23 de junio de 2000, la DCD formuló la determinación definitiva de la existencia de dumping.[178] El precio normal, el valor normal y el margen de dumping se establecieron en la determinación definitiva de la forma que a continuación se expone.

Precio de exportación

353. En la determinación definitiva de la existencia de dumping, la DCD estableció el precio de exportación basándose en la información sobre las importaciones facilitada por *Ganadería*.[179] La DCD utilizó para cada exportador un promedio ponderado de los precios FOB de exportación en el período comprendido entre enero de 1998 y enero de 1999. El cuadro utilizado por la DCD para establecer el precio de exportación es el siguiente:

Total por productor	**$EE.UU. FOB**	**kg netos**	**$EE.UU./kg**
Sadia S.A.	16216345	20049051	0,80883
Comaves	3015738	3380321	0,89215
Da Granja Agroi	1652300	1820106	0,90780
Sadia Concordia	1398960	1519560	0,92063
Minuano Alimentos	3139461	3390151	0,92605
Avipal	3554693	3767350	0,94355
Acaua Industria	39824	41920	0,95000
Felipe Avícola	306650	322000	0,95233
Nicolini - SIF	5172876	5397254	0,95843
Catarinense Ltd.	1163894	1158307	1,00482
Perdigão Agroin	1564110	1551753	1,00796
Seara Alimentos	11147872	11038851	1,00988
Ceval Alimentos	947993	917261	1,03350
Frangosul	2663240	2558914	1,04077
Veneto	67252	64050	1,04999
Chapecó CI	1445063	1363221	1,06004
Litoral Aliment	523440	482000	1,08598
TOTAL	**54019711**	**58822070**	**0,91836**

Fuente: Páginas 76 y 77 de la Prueba documental BRA-15.

[178] *Véase* la Prueba documental BRA-15.

[179] *Véanse* las páginas 76, 77 y 103 de la Prueba documental BRA-15.

Precio de exportación de todos los demás exportadores

354. En la determinación definitiva, la DCD calculó el precio de exportación de todos los demás exportadores sobre la base de la información facilitada por SENASA.[180] La DCD utilizó para establecer ese precio de exportación el siguiente cuadro:

PRECIO FOB DE EXPORTACIÓN 1998 - Enero de 1999

Productor	$EE.UU./kg	kg netos	$EE.UU. FOB
Comaves	0,89215	3.380.321,00	3.015.738,00
Da Granja Agroi	0,90780	1.820.106,00	1.652.300,00
Sadia Concordia	0,92063	1.820.106,00	1.652.300,00
Minuano Alimentos	0,92605	3.390.151,00	3.139.461,00
Acaua Industria	0,95000	41.920,00	39.824,00
Felipe Avícola	0,95233	322.000,00	306.650,00
Catarinense Ltd	1,00482	1.158.307,00	1.163.894,00
Perdigão Agroin	1,00796	1.551.753,00	1.564.110,00
Frangosul	1,04077	2.558.914,00	2.663.240,00
Veneto	1,04999	64.050,00	67.252,00
Chapecó CI	1,06004	1.363.221,00	1.445.063,00
Litoral Aliment	1,08598	482.000,00	523.440,00
TOTAL	**0,95992**	**17.952.849,00**	**17.233.272,00**

Fuente: Anexo "Precio FOB de exportación de las firmas brasileñas con escasa o sin participación en la investigación", Prueba documental BRA-15.

Valor normal

Sadia

355. El 20 de abril de 1999, Sadia presentó la respuesta al cuestionario, en la que facilitaba información sobre las ventas en el mercado interno y las exportaciones a la Argentina en el período comprendido entre 1996 y 1998 y en los meses de enero y febrero de 1999.[181] El 26 de agosto de 1999, Sadia envió a la DCD una carta en la que remitía un listado de las transacciones de venta en el mercado interno en el período comprendido entre 1996 y 1999 y explicaba que debido al gran volumen de ventas en el mercado interno le resultaba imposible facilitar notas fiscales/facturas de cada transacción. En esa carta, Sadia invitaba a la DCD a realizar una verificación *in loco* de las transacciones incluidas en el listado o a seleccionar una muestra de transacciones para que Sadia proporcionara las facturas correspondientes.[182] El 3 de diciembre de 1999, la DCD envió a Sadia una carta en la que solicitaba a esa empresa copias de las facturas correspondientes a 372 operaciones de venta en el mercado interno seleccionadas, y daba un plazo de cinco días para remitir las copias de las facturas.[183] El 4 de enero de 2000, la DCD publicó el memorándum *Relevamiento de lo Actuado con Anterioridad al Cierre de la Etapa Probatoria*, el informe previo al cierre de la etapa probatoria de la

[180] *Véase* la página 104 de la Prueba documental BRA-15.

[181] *Véanse* las páginas 18 y 19 de la Prueba documental BRA-15 y la Prueba documental BRA-22.

[182] *Véase* la Prueba documental BRA-29.

[183] *Véase* la Prueba documental BRA-30.

investigación antidumping.[184] El 13 de enero de 2000, Sadia presentó copia de las facturas solicitadas por la DCD.[185] El 23 de junio de 2000, la DCD formuló la determinación definitiva de la existencia de dumping.[186]

356. En su determinación, la DCD explicaba cómo había establecido el valor normal para Sadia. La DCD manifestaba que tomando como base la información presentada por Sadia el 26 de agosto de 1999, debido al gran volumen de información que había de ser analizada y para la que se necesitaba respaldo documental, optó por realizar un muestreo estadístico para el período comprendido entre enero de 1998 y 1999 inclusive.[187] La DCD no explicaba cómo se realizó ese muestreo. La única explicación facilitada era que la DCD determinó que el tamaño de la muestra fuera de 166, para un error tolerado del 2 por ciento y un intervalo de confianza del 95 por ciento.[188] La DCD, sin dar más explicaciones, manifestaba que había decidido elegir un tamaño muestral mayor para Sadia, de 372 transacciones.[189]

357. Sobre la base de esa muestra, la DCD solicitó a Sadia que presentara documentación justificante (copias de las facturas) respecto de la misma. La DCD manifestaba que Sadia solicitó una prórroga del plazo, que le fue concedida, y que el 13 de enero de 2000 presentó parte de la documentación respaldatoria solicitada (268 facturas).[190] La DCD indicaba además que con arreglo al memorándum previo a la determinación definitiva de 4 de enero de 2000, a efectos de la determinación final la autoridad investigadora consideraría la información presentada hasta la fecha de ese informe.[191] El valor normal de Sadia calculado por la DCD se basó en la información facilitada por esa empresa acerca de la muestra seleccionada por la DCD y respecto de la cual había presentado documentación justificante. El cálculo del valor normal para Sadia fue el siguiente:

MUESTREO ESTADÍSTICO
SADIA S.A.

Período	Promedio simple de los precios brutos $R	Promedio simple de los precios netos $R	Promedio simple de los precios brutos $EE.UU.	Promedio simple de los precios netos $EE.UU.	Valor normal (+9,09%)	Promedio ponderado de los precios brutos $EE.UU.	Promedio ponderado de los precios netos $EE.UU.	Valor normal (+9,09%)
Enero 98-enero 99	1,2409	1,1465	1,0527	0,9726	1,061	0,9222	0,852	0,9294

Fuente: Página 63 de la Prueba documental BRA-15.

[184] *Véase* la Prueba documental BRA-28.

[185] *Véase* la página 62 de la Prueba documental BRA-15.

[186] *Véase* la Prueba documental BRA-15.

[187] *Véase* la página 62 de la Prueba documental BRA-15.

[188] *Véase* la página 62 de la Prueba documental BRA-15.

[189] *Véase* la página 62 de la Prueba documental BRA-15.

[190] *Véase* la página 62 de la Prueba documental BRA-15.

[191] *Véase* la página 63 de la Prueba documental BRA-15.

Avipal

358. El 21 de abril de 1999, Avipal presentó su respuesta al cuestionario.[192] El 7 de mayo de 1999, Avipal presentó una copia impresa de la información no confidencial que contenía la respuesta.[193] El 12 de agosto de 1999, Avipal presentó un listado de transacciones de venta en el mercado interno en el período comprendido de 1996 a 1999, con una muestra de una factura para cada mes de 1997 y 1998, y explicó que el gran volumen de ventas en el mercado interno hacía imposible enviar una copia de la factura de cada transacción. En su carta, de fecha 12 de agosto de 1999, Avipal invitaba a la DCD a verificar *in loco* las transacciones incluidas en el listado o seleccionar una muestra de transacciones para que Avipal pudiera facilitar las correspondientes facturas.[194] El 1º de septiembre de 1999, Avipal presentó una traducción del portugués al español del formulario de factura.[195] El 21 de diciembre de 1999, Avipal presentó un disquete con un listado de facturas de las ventas de pollos en el mercado interno en el período comprendido entre enero de 1998 y enero de 1999, donde constaban las deducciones e impuestos.[196] La DCD nunca seleccionó las transacciones para que Avipal presentara, como había ofrecido, copias de las facturas. El 4 de enero de 2000, la DCD publicó el memorándum *Relevamiento de lo Actuado con Anterioridad al Cierre de la Etapa Probatoria*, el informe previo al cierre de la etapa probatoria de la investigación antidumping.[197] El 23 de junio de 2000, la DCD formuló la determinación definitiva de la existencia de dumping.[198]

359. En la determinación definitiva de la existencia de dumping, la DCD explicaba cómo había establecido el valor normal para Avipal. Partiendo de la información presentada por Avipal el 12 de agosto de 1999, la DCD realizó un cálculo basado en las transacciones respecto de las cuales Avipal había enviado copia de la factura (25 facturas).[199]

FACTURAS EN EL MERCADO INTERNO
AVIPAL S.A.

Año	Nº de facturas presentadas	Total kg	Promedio simple de los precios brutos $EE.UU.	Promedio simple de los precios netos $EE.UU.	Valor normal (+9,09%)	Promedio ponderado de los precios netos $R	Promedio ponderado de los precios brutos $EE.UU.	Promedio ponderado de los precios netos $EE.UU.	Valor normal (+9,09%)
1998	25	174.030,9	1,102	1,007	1,0985	1,2220	1,0806	1,0437	1,1385

Fuente: Página 64 de la Prueba documental BRA-15.

360. La DCD manifestaba además que el 1º de septiembre de 1999 Avipal presentó una traducción del formulario de factura e indicaba que el 21 de diciembre de 1999 esa empresa envió un disquete con el listado de facturas y que a las respuestas se adjuntaban planillas donde constaban las

[192] *Véase* la Prueba documental BRA-23.

[193] *Véase* la Prueba documental BRA-23.

[194] *Véase* la Prueba documental BRA-31.

[195] *Véase* la página 64 de la Prueba documental BRA-15.

[196] *Véase* la página 64 de la Prueba documental BRA-15.

[197] *Véase* la Prueba documental BRA-28.

[198] *Véase* la Prueba documental BRA-15.

[199] *Véase* la página 64 de la Prueba documental BRA-15.

deducciones que habían de realizarse a los referidos listados.[200] Analizando la información presentada, la DCD estableció el siguiente cuadro:

AVIPAL S.A.
Listados de venta del mercado interno

Período considerado	Total kg	Promedio simple de los precios brutos $R	Promedio simple de los precios netos $R	Promedio ponderado de los precios brutos $EE.UU.	Promedio ponderado de los precios netos $EE.UU.	Valor normal (+9,09%)
Enero 98 - enero 99 (inclusive)	126.828.110,36	1,2183	1,1358	1,011	0,9421	1,028

Fuente: Páginas 64 y 65 de la Prueba documental BRA-15.

361. La DCD indicaba que la información presentada el 21 de diciembre de 1999 no iba acompañada de documentos justificantes y que la DCD sólo efectuó los descuentos susceptibles de ser comprobados por ella.[201]

362. La DCD calculó el valor normal para Avipal sobre la base de la información de las transacciones que iban acompañadas de copias de las correspondientes facturas. Ese cálculo fue el siguiente:

FACTURAS MERCADO INTERNO
AVIPAL S.A.

Año	Nº de facturas presentadas	Total kg	Promedio simple de los precios brutos $EE.UU.	Promedio simple de los precios netos $EE.UU.	Valor normal (+9,09%)	Promedio ponderado de los precios netos $R	Promedio ponderado de los precios brutos $EE.UU.	Promedio ponderado de los precios netos $EE.UU.	Valor normal (+9,09%)
1998	25	174.030,9	1,102	0,986	1,0756	1,1695	1,0806	0,9988	1,0896

Fuente: Página 65 de la Prueba documental BRA-15.

Frangosul

363. El 27 de abril de 1999, Frangosul presentó su respuesta al cuestionario.[202] El 19 de agosto de 1999, Frangosul facilitó la traducción de cuatro facturas correspondientes a exportaciones realizadas a la Argentina, y la traducción de un folleto del producto, y explicó que el gran volumen de ventas en el mercado interno hacía imposible facilitar copias de las facturas correspondientes a cada transacción. En esta respuesta, Frangosul invitaba a la DCD a realizar una verificación *in loco* o a seleccionar una muestra de las transacciones para que Frangosul pudiera facilitar las correspondientes facturas.[203] El 30 de diciembre de 1999, Frangosul presentó un disquete con un listado de facturas correspondientes a las transacciones realizadas en el mercado interno en el período comprendido entre enero de 1998 y enero de 1999.[204] La DCD nunca seleccionó las transacciones para que Frangosul,

[200] *Véase* la página 64 de la Prueba documental BRA-15.

[201] *Véase* la página 65 de la Prueba documental BRA-15.

[202] *Véase* la Prueba documental BRA-24.

[203] *Véase* la Prueba documental BRA-26.

[204] *Véase* la Prueba documental BRA-26.

conforme había ofrecido, facilitara copias de las facturas. El 4 de enero de 2000, la DCD publicó el memorándum *Relevamiento de lo Actuado con Anterioridad al Cierre de la Etapa Probatoria*, el informe previo al cierre de la etapa probatoria de la investigación antidumping.[205] El 23 de junio de 2000, la DCD formuló la determinación definitiva de la existencia de dumping.[206]

364. En la determinación definitiva, la DCD no tuvo en cuenta la respuesta de Frangosul ni explicó las razones por las que no se utilizó la información facilitada.[207]

365. El 15 de septiembre de 1999 la DCD envió a Catarinense una carta en la que le notificaba la investigación y le solicitaba que diera respuesta al cuestionario. En su carta, la DCD establecía por primera vez como período de investigación a efectos de la recopilación de datos el comprendido entre enero de 1998 y enero de 1999.[208] El 13 de octubre de 1999, Catarinense solicitó una prórroga de 20 días para presentar las respuestas. El 3 de noviembre de 1999, Catarinense facilitó sus respuestas al cuestionario. En lo que respecta a las exportaciones a la Argentina, Catarinense facilitaba un listado de facturas acompañado de una copia de las facturas para 1998 y 1999. En cuanto a las ventas en el mercado interno, Catarinense facilitaba un listado de las operaciones de venta.[209] El 8 de noviembre de 1999, en relación con la petición de Catarinense de 13 de octubre de 1999, la DCD envió a esa empresa una carta en la que le concedía una prórroga del plazo hasta el 8 de noviembre de 1999.[210] Después de esta fecha, la DCD no solicitó más información a Catarinense. El 23 de junio de 2000, la DCD formuló la determinación definitiva de la existencia de dumping, sin tener en cuenta las respuestas presentadas por Catarinense en la investigación.[211]

366. En la determinación definitiva, la DCD presentaba el siguiente cuadro de la información facilitada por Catarinense el 3 de noviembre de 1999:

VALOR NORMAL INFORMADO POR CATARINENSE

Año	Total kg	Total $EE.UU.	Precio por kg	Valor normal (+9,09%)
1998	52.528.211	47.068.340,55	0,8961	0,9775
1999*	43.475.875	24.424.618,28	0,5618	0,6129
Promedio ponderado	96.004.086	71.492.958,83	0,7447	0,8124

Fuente: Páginas 69 y 70 de la Prueba documental BRA-15.

367. En la determinación definitiva, la DCD indicaba que las cifras del cuadro surgían de la información presentada en forma agregada en los anexos V y VI de la sección A de la respuesta de

[205] *Véase* la Prueba documental BRA-28.

[206] *Véase* la Prueba documental BRA-15.

[207] *Véanse* las páginas 103 y 104 de la Prueba documental BRA-15.

[208] *Véase* la Prueba documental BRA-13.

[209] *Véanse* las páginas 38 y 39 de la Prueba documental BRA-15 y la Prueba documental BRA-25.

[210] *Véase* la Prueba documental BRA-27.

[211] *Véanse* las páginas 103 y 104 de la Prueba documental BRA-15.

Catarinense al cuestionario y correspondían a un período mayor que el de investigación, y que la información de Catarinense no había sido respaldada documentalmente.[212]

Valor normal para todos los demás exportadores

368. En la determinación definitiva, la DCD calculó el valor normal para todos los demás exportadores sobre la base de la información facilitada por el solicitante el 26 de julio de 1999.[213] Éste había presentado una planilla de cálculo del valor normal en el mercado interno brasileño para el período comprendido entre 1998 y 1999, basada en los precios publicados por JOX.[214] El solicitante utilizó en el cálculo precios de tres fechas de referencia de cada uno de los meses del período comprendido entre enero de 1998 y enero de 1999.[215] Esos precios correspondían a los pollos refrigerados, con cabeza y patas, vendidos en el mercado mayorista de São Paulo. El cálculo del solicitante era el siguiente:

VALOR NORMAL
SÃO PAULO - POLLOS REFRIGERADOS

Fecha	Promedio $R	Tipo de cambio	Promedio $EE.UU.	Ajuste 9,09%
5/01/98	1,175	1,1161	1,0528	1,1485
14/01/98	1,065	1,1195	0,9513	1,0378
30/01/98	1,167	1,123	1,0392	1,1336
Enero				1,107
10/02/98	1,217	1,1261	1,0807	1,1790
16/02/98	1,235	1,1281	1,0948	1,1943
27/02/98	1,215	1,1301	1,0751	1,1729
Febrero				1,182
4/03/98	1,240	1,1311	1,0963	1,1959
17/03/98	1,203	1,1341	1,0608	1,1572
27/03/98	1,190	1,1361	1,0474	1,1427
Marzo				1,165
8/04/98	1,212	1,1319	1,0708	1,1681
17/04/98	1,183	1,1409	1,0369	1,1312
30/04/98	1,187	1,144	1,0376	1,1319
Abril				1,144
6/05/98	1,187	1,1445	1,0371	1,1314
11/05/98	1,187	1,145	1,0367	1,1309
18/05/98	1,132	1,1465	0,9874	1,0771
Mayo				1,113
4/06/98	1,017	1,1514	0,8833	0,9636
16/06/98	1,120	1,1538	0,9707	1,0589
24/06/98	1,032	1,1547	0,8937	0,9750

[212] *Véase* la página 70 de la Prueba documental BRA-15.

[213] *Véase* la página 54 de la Prueba documental BRA-15.

[214] *Véase* la Prueba documental BRA-19.

[215] *Véase* la Prueba documental BRA-19.

Fecha	Promedio $R	Tipo de cambio	Promedio $EE.UU.	Ajuste 9,09%
Junio				0,999
3/07/98	1,005	1,1566	0,8689	0,9479
14/07/98	1,078	1,1645	0,9257	1,0099
30/07/98	0,990	1,162	0,8520	0,9294
Julio				0,962
7/08/98	1,090	1,17	0,9316	1,0163
13/08/98	1,088	1,17	0,9299	1,0144
31/08/98	0,998	1,18	0,8458	0,9226
Agosto				0,984
4/09/98	1,07	1,18	0,9068	0,9892
16/09/98	1,052	1,18	0,8915	0,9726
29/09/98	0,987	1,19	0,8294	0,9048
Septiembre				0,956
5/10/98	0,97	1,19	0,8151	0,8892
14/10/98	1,092	1,19	0,9176	1,0011
29/10/98	1,007	1,19	0,8462	0,9231
Octubre				0,938
4/11/98	1,048	1,19	0,8807	0,9607
16/11/98	1,020	1,19	0,8571	0,9351
30/11/98	1,015	1,2	0,8458	0,9227
Noviembre				0,940
4/12/98	1,053	1,2	0,8775	0,9573
16/12/98	1,170	1,21	0,9669	1,0548
29/12/98	1,252	1,21	1,0347	1,1288
Diciembre			34,476	1,0470
Promedio 1998 VN			0,9577	1,0447
4/01/99	1,232	1,21	1,0182	1,1107
15/01/99	0,972	1,43	0,6797	0,7415
Enero			0,8490	0,9261
Total 98 y 99			**36,174**	**39,4620**
Promedio 98/99 VN			**0,9519**	**1,0385**

Fuente: Páginas 54 y 55 de la Prueba documental BRA-15 y Prueba documental BRA-19.

Margen de dumping

369. En la determinación definitiva, la DCD calculó el margen de dumping sobre la base del precio de exportación y el valor normal antes expuestos. En los cuadros siguientes se indica cómo se calcularon los márgenes de dumping:

SADIA S.A.

Valor normal $EE.UU./kg	Precio FOB promedio $EE.UU./kg	Margen de dumping %
A	**B**	**(A-B)/B**
0,9294	0,80883	14,91

Fuente: Página 102 de la Prueba documental BRA-15.

AVIPAL S.A.

Valor normal $EE.UU./kg	Precio FOB promedio $EE.UU./kg	Margen de dumping %
A	**B**	**(A-B)/B**
1,0896	0,94355	15,48

Fuente: Página 103 de la Prueba documental BRA-15.

TODOS LOS DEMÁS EXPORTADORES

Valor normal $EE.UU./kg	Precio FOB promedio $EE.UU./kg	Margen de dumping %
A	**B**	**(A-B)/B**
1,0385	0,95992	8,19

Fuente: Página 104 de la Prueba documental BRA-15.

370. La DCD indicaba además que en el caso de las empresas Catarinense, Frangosul, Comaves, Da Granja Agroi, Sadia Concordia, Minuano, Acaua, Felipe, Perdigão, Veneto, Chapecó y Litoral Aliment la autoridad investigadora no había contado con información adicional o con respaldo documental suficiente que la habilitara para proceder a la determinación final de un margen de dumping individual.[216]

i) Reclamación 23: Incompatibilidad con el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping

Texto del párrafo 4 del artículo 2

371. El párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping establece cómo se realizará una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal:

> "Se realizará una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal. Esta comparación se hará en el mismo nivel comercial, normalmente el nivel "ex fábrica" y sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible. Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias particulares, las diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios, entre otras las diferencias en las condiciones de venta, las de tributación, las diferencias en los niveles comerciales, en las cantidades y en las características físicas, y cualesquiera otras diferencias de las que también se demuestre que influyen en la comparabilidad de los precios. En los casos previstos en el párrafo 3, se deberán tener en cuenta también los gastos, con inclusión de los derechos e impuestos, en que se incurra entre la importación y la reventa, así como los beneficios correspondientes. Cuando, en

[216] *Véanse* las páginas 103 y 104 de la Prueba documental BRA-15.

> esos casos, haya resultado afectada la comparabilidad de los precios, las autoridades establecerán el valor normal en un nivel comercial equivalente al correspondiente al precio de exportación reconstruido o tendrán debidamente en cuenta los elementos que el presente párrafo permite tomar en consideración. Las autoridades indicarán a las partes afectadas qué información se necesita para garantizar una comparación equitativa y no les impondrán una carga probatoria que no sea razonable."

Argumento jurídico relativo a la Reclamación 23

372. El 20 de abril de 1999, Sadia presentó la respuesta al cuestionario, en la que facilitaba información sobre las ventas en el mercado interno y las exportaciones a la Argentina en el período comprendido entre 1996 y 1998 y en los meses de enero y febrero de 1999. En el anexo VIII, sección C de su respuesta al cuestionario, Sadia comunicaba los costos de fletes nacionales para las ventas realizadas en el mercado interno los años 1996, 1997 y 1998 y los meses de enero y febrero de 1999.

373. El 21 de abril de 1999, Avipal presentó la respuesta al cuestionario. El 12 de octubre de 1999 la DCD solicitó un listado de facturas de todas las ventas de pollos efectuadas en el mercado interno en el período comprendido entre enero de 1998 y enero de 1999. La DCD no fijó un plazo para que Avipal facilitara esta información. El 21 de diciembre de 1999, Avipal presentó un disquete con un listado de facturas correspondientes a las ventas de pollos efectuadas en el mercado interno en el período comprendido entre enero de 1998 y enero de 1999, al que adjuntaba una planilla en la que se indicaban los impuestos (ICMS/PIS/COFINS), comisiones, fletes y costos financieros incluidos en el valor normal que debían deducirse a efectos de una comparación "ex fábrica" con el precio de exportación.

374. En su determinación definitiva de la existencia de dumping, la DCD calculó el valor normal para Sadia sobre la base de la información facilitada por esta empresa que estaba acompañada de documentación justificante respecto de la muestra solicitada por la DCD. En su cálculo del valor normal, la DCD no efectuó las deducciones por fletes indicadas en la respuesta de 20 de abril de 1999 de Sadia al cuestionario.

375. Asimismo, en la determinación definitiva de la existencia de dumping, la DCD calculó el valor normal para Avipal sobre la base de las transacciones efectuadas en el mercado interno respecto de las cuales Avipal había facilitado copias de las correspondientes facturas. La DCD no hizo las deducciones por fletes indicadas por Avipal el 21 de diciembre de 1999.

376. El párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping obliga a tener debidamente en cuenta las diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios, entre otras las diferencias en las condiciones de venta, las de tributación, las diferencias en los niveles comerciales, en las cantidades y en las características físicas, y cualesquiera otra diferencias de las que también se demuestre que influyen en la comparabilidad de los precios.

377. Del requisito de tener debidamente en cuenta esas diferencias deriva, al menos, la obligación de la autoridad de evaluar las diferencias identificadas para comprobar si es necesario un ajuste a fin de mantener la comparabilidad de los precios y garantizar una comparación equitativa entre el valor normal y el precio de exportación, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 2. Una vez evaluadas las diferencias identificadas, las autoridades deben efectuar los ajustes que resulten necesarios.

378. De los hechos de la presente investigación se desprende que la DCD infringió el párrafo 4 del artículo 2 al no tener debidamente en cuenta los fletes, según lo demostrado por Sadia y Avipal en las respuestas que facilitaron durante la investigación.

ii) Reclamación 24: Incompatibilidad con el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping

Texto del párrafo 4 del artículo 2

379. El texto del párrafo 4 del artículo 2 establece en parte lo siguiente:

> "[...] Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias particulares, las diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios, entre otras las diferencias en las condiciones de venta, las de tributación, las diferencias en los niveles comerciales, en las cantidades y en las características físicas, y cualesquiera otras diferencias de las que también se demuestre que influyen en la comparabilidad de los precios. [...]"

Argumento jurídico relativo a la Reclamación 24

380. El 25 de junio de 1999, la DCD pidió a JOX que aclarara los impuestos incluidos en los precios publicados y que se habían utilizado en la determinación preliminar para establecer el valor normal.[217] El 27 de julio de 1999, la DCD reiteró su solicitud de aclaraciones a JOX.[218] El 3 de agosto de 1999, JOX envió a la DCD una carta en la que explicaba que los precios publicados por JOX incluían los siguientes impuestos: un 12 por ciento en concepto de ICMS (impuesto sobre el valor añadido) y un 2,65 por ciento en concepto de PIS/COFINS (contribución social sobre la renta). JOX aclaraba además que los precios publicados incluían: costos financieros, según las condiciones de venta; una comisión de ventas del 0,5 al 1 por ciento sobre el valor de la venta; y un flete variable de entrega, en función de la ubicación geográfica del vendedor y el comprador.[219] JOX facilitó esas respuestas en idioma portugués.

381. Con arreglo a los hechos relativos a las presentes reclamaciones, la DCD estableció el valor normal para todos los demás exportadores sobre la base de la información facilitada por el solicitante el 26 de julio de 1999. En ella se incluía una planilla con el valor normal calculado. El solicitante utilizaba en su cálculo los precios publicados por JOX para tres fechas de referencia de cada uno de los meses del período comprendido entre enero de 1998 y enero de 1999. Los precios publicados correspondían a los pollos refrigerados, con cabeza y patas, vendidos en el mercado mayorista de São Paulo.

382. Aun cuando decidió utilizar los precios de los pollos publicados por JOX para establecer el valor normal para todos los demás exportadores, la DCD no tuvo debidamente en cuenta los impuestos, los costos financieros, la comisión de venta y los fletes incluidos en los precios publicados, conforme a lo aclarado por JOX. La DCD se limitó a descartar la información que había solicitado de JOX y decidió no efectuar ningún ajuste del valor normal en función de elementos de los que se había demostrado que influían en la comparabilidad de los precios.

383. En la determinación definitiva, la DCD se limitaba a manifestar que JOX presentó la información en idioma portugués.[220]

---

[217] *Véase* la Prueba documental BRA-32.

[218] *Véase* la Prueba documental BRA-32.

[219] *Véase* la Prueba documental BRA-32.

[220] *Véase* la página 56 de la Prueba documental BRA-15.

384. El párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping obliga a tener debidamente en cuenta las diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios, entre otras las diferencias en las condiciones de venta, las de tributación, las diferencias en los niveles comerciales, en las cantidades y en las características físicas, y cualesquiera otras diferencias de las que también se demuestre que influyen en la comparabilidad de los precios. La DCD infringió el párrafo 4 del artículo 2 al no tener debidamente en cuenta las diferencias de tributación y otras diferencias que influían en la comparabilidad (costos financieros, comisión de ventas y fletes), como ponía de manifiesto JOX en la carta enviada el 3 de agosto de 1999 a la DCD.

385. En la etapa de consultas de la presente diferencia, el Brasil presentó el 5 de diciembre de 2001 preguntas a la Argentina acerca de la investigación. En particular, el Brasil solicitó las siguientes explicaciones.

Pregunta 39:

Explique por qué las autoridades desatendieron la información que solicitaron a JOX la cual clarifica que los precios publicados en esa lista incluían impuestos (ICMS y PIS/COFINS), flete y costo financiero.

La Argentina respondió el 11 de enero de 2002 lo siguiente:

"Con relación al ejemplar de la publicación JOX Assessoria Agropecuária, la Autoridad solicitó a la misma por medio de Nota DCD Nº 273-000788/99 que aclarase los impuestos incluidos en los precios especificados en la misma, como así también las condiciones generales a las que están sujetos. Se reiteró el pedido posteriormente con otra notificación.

Finalmente, el 28 de julio de 1999 y el 3 de agosto del mismo año, JOX Assessoria Agropecuária presentó información pero en idioma portugués, lo que no permitió a la Autoridad utilizarla atento que no cumplía con los requisitos formales exigidos por las leyes del Régimen de Procedimientos Administrativos."

Pregunta 40:

Si la autoridad no la consideró por falta de traducción, explique en qué momento la Autoridad solicitó dicha traducción y por qué la Autoridad no lo tradujo por su cuenta teniendo en cuenta que fue la misma quien lo solicitó.

La Argentina respondió el 11 de enero de 2002 lo siguiente:

"Se remite a la respuesta dada a la pregunta 39. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que le procedimiento de prácticas comerciales desleales se rige por la Ley de Procedimientos Administrativos que exige que la documentación presentada sea traducida, hecho este conocido por las partes intervinientes en el procedimiento."

386. El Brasil recuerda que la aclaración facilitada por JOX no fue solicitada por los exportadores brasileños ni por el CEPA, sino por las propias autoridades. De hecho, los precios de los pollos refrigerados vendidos en São Paulo y publicados por JOX no constituyeron una fuente de información utilizada por los exportadores brasileños. No obstante, el Brasil considera que si la DCD decidió utilizar la información de JOX para establecer el valor normal para todos los demás exportadores, debería haber tenido también en cuenta la aclaración de JOX acerca de los impuestos, los costos financieros, la comisión de ventas y los fletes incluidos en los precios publicados.

387. El Brasil recuerda además que JOX no era parte interesada en el presente procedimiento. A este respecto, según el párrafo 11 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping se consideran "partes interesadas":

> "i) los exportadores, los productores extranjeros o los importadores de un producto objeto de investigación, o las asociaciones mercantiles, gremiales o empresariales en las que la mayoría de los miembros sean productores, exportadores o importadores de ese producto;
>
> ii) el gobierno del Miembro exportador; y
>
> iii) los productores del producto similar en el Miembro importador o las asociaciones mercantiles, gremiales o empresariales en las que la mayoría de los miembros sean productores del producto similar en el territorio del miembro importador." (Sin subrayar en el original.)

388. JOX no está abarcada por la definición de "partes interesadas" del Acuerdo, por lo que esa entidad no estaba obligada, como ha indicado la Argentina, a cumplir la Ley de Procedimientos Administrativos.

389. Además, y como se expone en la nota 25 de pie de página de la presente comunicación, JOX es una entidad privada, no vinculada con el Gobierno brasileño ni con ninguno de los exportadores brasileños objeto de la investigación, por lo que no estaba obligada a responder a las autoridades argentinas, y mucho menos aún a presentar una traducción al español de su respuesta. Al atender la solicitud de la DCD, JOX hacía un favor a las autoridades argentinas.

390. El Brasil entiende que cuando la Argentina solicitó a JOX aclaraciones acerca de lo que estaba incluido en los precios publicados, estaba procediendo a comprobar los datos obtenidos del solicitante a la vista de la fuente de la información facilitada. En consecuencia, la DCD debía haberse hecho cargo de la traducción de la aclaración de JOX.

391. Además, la DCD nunca solicitó una traducción de la aclaración de JOX, lo que es una prueba más de que la autoridad investigadora no procedió de forma imparcial y objetiva al evaluar la información sobre el valor normal facilitada en la investigación.

392. Además, Sadia, Avipal, Frangosul, Nicolini y Seara expusieron el 26 de agosto de 1999 argumentos en relación con la comparación entre el precio de exportación y el valor normal.[221] Entre otros, se exponía el argumento de que del valor normal indicado por el CEPA debían deducirse los impuestos, el flete nacional y los costos financieros.[222] Los exportadores presentaron el siguiente cuadro para demostrar cuál debería ser el valor normal comparable con el precio de exportación ex fábrica:

[221] *Véase* la Prueba documental BRA-33.

[222] *Véase* la Prueba documental BRA-33.

PRECIO JOX

Precio JOX		**$EE.UU. 0,920**
Deducciones		
ICMS 12%	0,110	
PIS/COFINS 2,65%/$EE.UU. 0,92	0,024	
Flete nacional	0,055	
Costo financiero	0,016	
Total		**0,715**

Fuente: Prueba documental BRA-33.

393. A pesar de contar con la información facilitada por JOX y los exportadores en la que se solicitaba que se tuvieran debidamente en cuenta esas diferencias que afectaban al valor normal, la DCD no cumplió las prescripciones establecidas en el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping.

iii) Reclamación 25: Incompatibilidad con el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping

Texto del párrafo 4 del artículo 2

394. El texto del párrafo 4 del artículo 2 establece, en la parte pertinente, lo siguiente:

> "[...] Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias particulares, las diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios, entre otras las diferencias en las condiciones de venta, las de tributación, las diferencias en los niveles comerciales, en las cantidades y en las características físicas, y cualesquiera otras diferencias de las que también se demuestre que influyen en la comparabilidad de los precios. [...]"

Argumento jurídico relativo a la Reclamación 25

395. El 7 de enero de 1998, la DCD publicó un aviso de apertura de investigación antidumping respecto de las importaciones de pollos procedentes del Brasil. En ese aviso, la DCD decidió iniciar la investigación basándose en la información sobre el valor normal presentada por el solicitante con la solicitud, en la que se tenían en cuenta los precios de los pollos refrigerados, con cabeza y patas, vendidos en el mercado mayorista de São Paulo el 30 de junio de 1997 publicados por la compañía brasileña JOX. Sobre la base de los precios publicados por JOX, la DCD efectuó un ajuste del valor normal, propuesto por el solicitante, en función de las diferencias entre las características físicas de los pollos vendidos en el Brasil y de los pollos exportados a la Argentina.

396. Con arreglo al ajuste propuesto, el peso ponderado de los pollos vivos faenados en el Brasil era de 2,250 kg. El solicitante alegó, sin presentar ninguna prueba al respecto, que el rendimiento del producto en el Brasil era del 88 por ciento y, por consiguiente, de 1 kg de pollo vivo se obtenían 880 g de pollo eviscerado con menudos (corazón, panza, cogote e hígado), y con cabeza y patas. El solicitante alegó además que el rendimiento del producto vendido en la Argentina difería del rendimiento obtenido en el Brasil. En la Argentina, el rendimiento del producto era del 80 por ciento, teniendo en cuenta que cabeza y patas eran desechadas. El solicitante llegaba a la conclusión de que de un pollo vivo de 2,250 kg de peso, se obtenían 800 g por kilo de pollo eviscerado que podía venderse en el mercado argentino.

397. También según el solicitante, la diferencia de rendimiento se debía a que los pollos se exportaban a la Argentina sin cabeza ni patas, en tanto que en el Brasil se vendían con cabeza y patas.

La DCD añadió al precio de los pollos vendidos en el Brasil un 9,09 por ciento para compensar el hecho alegado de que los pollos se exportaban a la Argentina sin cabeza ni patas. No se presentó ninguna prueba en apoyo de la alegación del solicitante relativa a las diferencias en las características físicas.

398. En el curso de la investigación, los exportadores Sadia, Avipal y Frangosul informaron de que los pollos exportados a la Argentina eran idénticos a los pollos vendidos en el Brasil. El exportador brasileño Catarinense informó de que, en relación con los dos tipos de pollos que vendía (broiler y griller), había una diferencia entre los pollos del tipo broiler exportados a la Argentina y los pollos de ese tipo vendidos en el Brasil. Los pollos del tipo broiler exportados a la Argentina no incluían cabeza y patas, y los pollos de ese tipo vendidos en el Brasil incluían la cabeza pero no las patas.

399. El 23 de junio de 2000, la DCD formuló la determinación definitiva de la existencia de dumping. A efectos de la comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal, la DCD decidió tener en cuenta las supuestas diferencias entre las características físicas de los pollos exportados a la Argentina y de los pollos vendidos en el Brasil. La DCD realizó un ajuste del 9,09 por ciento en el valor normal, a pesar de que los exportadores habían informado en sus respuestas de que no había diferencias entre las características físicas de los productos vendidos en ambos mercados.

400. El párrafo 4 del artículo 2 obliga a realizar una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal. A fin de conseguir una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal, el párrafo 4 del artículo 2 obliga además a tener debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias particulares, las diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios. El párrafo 4 del artículo 2 enumera esas diferencias, pero esa enumeración no tiene carácter exhaustivo. Tales diferencia incluyen las diferencias en las condiciones de venta, las de tributación, las diferencias en los niveles comerciales, en las cantidades y en las características físicas, y cualesquiera otras diferencias de las que también se demuestre que influyen en la comparabilidad de los precios.

401. Dado que los exportadores brasileños presentaron información en la que se establecía que no había diferencias entre las características físicas de los pollos vendidos en el Brasil y de los pollos exportados a la Argentina, la DCD no debió tener en cuenta las diferencias relativas a las características físicas.

402. Es importante señalar que el párrafo 4 del artículo 2 obliga a tener debidamente en cuenta las diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios. El valor normal ajustado de la DCD se basaba en la alegación, no acreditada, del solicitante de que había diferencias entre las características físicas de los pollos exportados a la Argentina y de los pollos vendidos en el Brasil. Los exportadores presentaron respuestas, y pruebas que demostraban que no existían tales diferencias. Además sólo está justificado tener debidamente en cuenta las diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios. El solicitante no demostró que las supuestas diferencias influyeran en la comparabilidad de los precios, ni presentó pruebas en ese sentido.

403. El Brasil, basándose en la respuesta de los exportadores al cuestionario y que el solicitante no aportó pruebas que demostraran que existían diferencias entre las características físicas de los pollos exportados a la Argentina y de los pollos vendidos en el Brasil y que esas diferencias influían en la comparabilidad de los precios, sostiene que la Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping al tener indebidamente en cuenta esas diferencias al establecer el valor normal.

iv) Reclamación 26: Incompatibilidad con el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping

Texto del párrafo 4 del artículo 2

404. El texto de la parte pertinente del párrafo 4 del artículo 2 establece lo siguiente:

> "[...] Las autoridades indicarán a las partes afectadas qué información se necesita para garantizar una comparación equitativa y no les impondrán una carga probatoria que no sea razonable."

Argumento jurídico relativo a la Reclamación 26

405. El 20 de enero de 1999, el MEyOSP publicó un aviso en el que anunciaba la apertura de la investigación antidumping sobre las importaciones de pollos procedentes del Brasil. En ese aviso público, la Argentina no establecía el período de recopilación de datos a efectos de la investigación del dumping. El 16 de febrero de 1999, la SSCE envió a Sadia, Avipal, Frangosul, Nicolini y Seara sendas cartas en las que invitaba a esas empresas a participar el 25 de febrero de 1999 en una audiencia en la que se procedería a evacuar consultas acerca de la iniciación de la investigación antidumping y a la entrega del cuestionario sobre el dumping.

406. En el cuestionario sobre el dumping no se establecía el período de recopilación de datos a efectos de la investigación sobre el dumping. Los cinco exportadores presentaron información sobre el valor normal y el precio de exportación correspondiente a los años 1996, 1997, 1998 y a los meses de 1999 respecto de los que se disponía de datos. La DCD solicitó más información sin delimitar el período de investigación a efectos del dumping.

407. El 15 de septiembre de 1999, la DCD envió a CCLP, Catarinense, Chapecó, Minuano, Perdigão, Comaves y Penabranca sendas cartas en las que se notificaba a esos exportadores la investigación y se les invitaba a dar respuesta al cuestionario sobre el dumping. En esas cartas, la DCD establecía <u>por primera vez</u> en la investigación que el período de recopilación de datos a efectos del dumping era el comprendido entre enero de 1998 y enero de 1999.

408. El 12 de octubre de 1999, la DCD envió a Frangosul y Avipal sendas cartas en las que solicitaba a esos exportadores que facilitaran el listado de transacciones y las facturas correspondientes a las ventas efectuadas en el mercado interno desde enero de 1998 hasta enero de 1999. El 18 de octubre de 1999, la DCD envió a Sadia, Nicolini y Seara sendas cartas en las que les solicitaba que facilitaran el listado de operaciones y las facturas correspondientes a las ventas efectuadas en el mercado interno desde enero de 1998 hasta enero de 1999. La DCD optó por establecer el período de recopilación de datos a efectos de la investigación sobre el dumping nueve meses después de que se hubiera iniciado la investigación y después de que se hubiera formulado una determinación preliminar.

409. El párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping obliga a las autoridades a indicar a las partes afectadas qué información se necesita para garantizar una comparación equitativa y obliga además a las autoridades investigadoras a no imponer a esas partes una carga probatoria que no sea razonable.

410. Los datos sobre el precio de exportación y el valor normal forman parte de la información necesaria para realizar una comparación equitativa. No obstante, la solicitud de que se facilite información con respecto a un período de tiempo no determinado no está en conformidad con la prescripción del párrafo 4 del artículo 2. Este precepto dispone que las autoridades deben indicar qué información se necesita para garantizar una comparación equitativa. La información relativa a un período determinado puede ser diferente de la información relativa a otro, por lo que la delimitación

del período de investigación resulta esencial para los exportadores, que deben saber qué información han de facilitar para garantizar una comparación equitativa.

411. La petición de las autoridades a los exportadores de datos sobre el valor normal y el precio de exportación correspondientes a un período que exceda del período de investigación supone la imposición de una carga probatoria no razonable por la autoridad a los exportadores. Al no haberse indicado claramente a los cinco exportadores el ámbito del período de recopilación de datos, se impuso a los exportadores brasileños una carga probatoria excesiva y no razonable en virtud de la cual habían de presentar datos respecto de un período distinto del período de recopilación de datos a efectos del dumping. Esta carga probatoria no razonable, que se les impuso durante nueve meses de la investigación, hizo imposible a los exportadores facilitar respuestas completas, exactas y oportunas.

412. El Brasil considera que el establecimiento del período de recopilación de datos nueve meses después de la iniciación de la investigación y después de haberse formulado una determinación preliminar no se ajusta a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 2.

413. El Brasil considera además que se ha infringido la última parte del párrafo 4 del artículo 2, debido a que la Argentina estableció el valor normal (en el caso de Sadia y Avipal) basándose únicamente en las transacciones en el mercado interno respecto de las cuales los exportadores presentaron las correspondientes facturas.

414. Como se ha demostrado a lo largo de la investigación, el gran volumen de las ventas de pollos realizadas en el Brasil hacía imposible a los exportadores adjuntar todas las facturas correspondientes a esas transacciones. Los exportadores invitaron a la DCD a verificar *in loco* sus respuestas, así como a cerciorarse de que esas respuestas eran exactas y completas. La DCD optó por no verificar la información facilitada por esos exportadores, lo que no quiere decir que la misma no fuera verificable.

415. Teniendo en cuenta el gran volumen de las transacciones de venta de pollos en el Brasil y el hecho de que al establecer el valor normal sólo se tuvieron en cuenta las ventas respecto de las cuales los exportadores presentaron las correspondientes facturas, se impuso a los exportadores una carta probatoria no razonable e imposible de satisfacer, en contra de lo prescrito en el párrafo 4 del artículo 2.

v) Reclamación 27: Incompatibilidad con el párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping

Texto del párrafo 4.2 del artículo 2

416. El texto de la parte pertinente del párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping es el siguiente:

> "A reserva de las disposiciones del párrafo 4 que rigen la comparación equitativa, la existencia de márgenes de dumping durante la etapa de investigación se establecerá normalmente sobre la base de una comparación entre un promedio ponderado del valor normal y un promedio ponderado de los precios de todas las transacciones de exportación comparables o mediante una comparación entre el valor normal y los precios de exportación transacción por transacción [...]."

Argumento jurídico relativo a la Reclamación 27

417. El párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping prescribe cómo deben establecerse los márgenes de dumping. En la primera parte de esta disposición se establece, como regla general, que debe realizarse una comparación entre: 1) el promedio ponderado del valor normal y un promedio

ponderado de los precios de todas las transacciones de exportación comparables; o 2) el valor normal y los precio de exportación transacción por transacción.

418. En la determinación definitiva, la DCD estableció los márgenes de dumping para los exportadores Sadia y Avipal sobre la base de la información relativa al valor normal con respecto a la cual se presentaron facturas, y no de todas las transacciones de venta en el mercado interno comunicadas para ese período. El hecho de que la DCD no tuviera en cuenta todas las transacciones en el mercado interno para establecer el valor normal constituyó una infracción de la forma en que el párrafo 4.2 del artículo 2 exige que se realice la comparación a efectos de establecer la existencia de márgenes de dumping.

419. En la determinación definitiva, la DCD estableció los márgenes de dumping correspondientes a Sadia y a Avipal sobre la base de una comparación entre un promedio ponderado del valor normal de una muestra estadística y un promedio ponderado de los precios de todas las transacciones comparables.

420. El Brasil entiende que si la autoridad investigadora tuvo acceso a información relativa a todas las transacciones efectuadas en el mercado interno, aun cuando no se acompañaran las facturas correspondientes, no podía seleccionar mediante un muestreo, aun cuando ese fuera aleatorio, una parte limitada de esas transacciones y utilizarlas a los efectos del establecimiento del valor normal y de la realización de la comparación para establecer el margen de dumping. Un promedio ponderado de una muestra estadística del valor normal no es lo mismo que un promedio ponderado del valor normal de todas las transacciones comunicadas por los exportadores.

421. Como ponen de manifiesto los hechos expuestos, Sadia y Avipal informaron de que había un volumen excesivo de transacciones de venta en el mercado interno para que los exportadores pudieran presentar una factura de cada transacción de venta. Sadia y Avipal presentaron un listado de todas las transacciones efectuadas durante el período en el mercado interno. Sólo se presentaron las facturas de algunas transacciones, para que la DCD verificara la exactitud de los datos presentados en la respuesta en general y no sólo la de aquellos datos con respecto a los cuales se presentaban facturas. El Brasil entiende que aunque la magnitud de la información presentada pudo tener por consecuencia que no todos los datos fueran efectivamente examinados, ello no excluye la validez de los datos facilitados, especialmente si cabía la posibilidad de verificarlos.

422. Sadia y Avipal no sólo comunicaron sus transacciones en el período de investigación (enero 1998 - enero 1999), sino que también facilitaron información sobre ventas realizadas fuera del período de investigación (1996, 1997, 1998, así como los datos disponibles para 1999) que también comunicaron. El hecho de haber impuesto esta carga a los exportadores, para que posteriormente la autoridad investigadora utilizara solamente algunas de las transacciones efectuadas durante 1998 y enero de 1999 está en contradicción con la forma en que el párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping prescribe que deben establecerse los márgenes.

2. Párrafos 1, 4 y 5 del artículo 3 y párrafo 2.2 del artículo 12

423. De los hechos que se exponen a continuación se derivan las dos reclamaciones siguientes:

> **Reclamación 32:** La Argentina, al utilizar períodos diferentes para evaluar los factores e índices económicos pertinentes enumerados en el párrafo 4 del artículo 3, no formuló una determinación de la existencia de daño basada en pruebas positivas y que comprendiera un examen objetivo, como requieren los párrafos 1, 4 y 5 del artículo 3.
>
> **Reclamación 33:** La Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 2.2 del artículo 12 al no explicar en la determinación definitiva las razones por las que la CNCE

utilizó períodos diferentes para examinar los factores e índices económicos pertinentes enumerados en el párrafo 4 del artículo 3.

a) Hechos

424. El 23 de diciembre de 1999, la CNCE formuló la determinación definitiva de la existencia de daño.[223] En ella, la CNCE manifestaba que el período de análisis del daño correspondía al transcurrido entre enero de 1996 y diciembre de 1998, teniendo en cuenta los datos correspondientes al año 1995 como año de referencia.[224] La CNCE explicaba además que, para algunas variables, como producción nacional, precios, importaciones, exportaciones y consumo aparente, el período de análisis era el comprendido desde enero de 1996 hasta junio de 1999 y que para los demás factores el período de análisis era el transcurrido entre enero de 1996 y diciembre de 1998.[225]

i) Reclamación 32: Incompatibilidad con los párrafos 1, 4 y 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping

Texto del párrafo 1 del artículo 3

425. El párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping establece los requisitos generales de una determinación de la existencia de daño.

> "La determinación de la existencia de daño a los efectos del artículo VI del GATT de 1994 se basará en pruebas positivas y comprenderá un examen objetivo: a) del volumen de las importaciones objeto de dumping y del efecto de éstas en los precios de productos similares en el mercado interno y b) de la consiguiente repercusión de esas importaciones sobre los productores nacionales de tales productos."

Argumento jurídico relativo a la Reclamación 32

426. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping, la determinación de la existencia de daño ha de comprender un examen objetivo del volumen de las importaciones objeto de dumping, el efecto de éstas en el mercado interno y la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre los productores nacionales.

427. Con arreglo a una interpretación literal, "*objective*" (objetivo) significa "*not subjective*" (no subjetivo).[226] Con el término "*subjective*" (subjetivo) se hace referencia a algo "*imaginary*" (imaginario), "*partial*" (parcial) o "*distorted*" (distorsionado).[227] Así pues, para que haya un examen objetivo, es preciso que los factores objeto de examen se evalúen con arreglo a los mismos parámetros y no a parámetros distintos o distorsionados. Una vez dicho esto, hay que señalar que el párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping indica cuáles son los factores económicos que deben evaluarse al examinar la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional. Para que haya un examen objetivo, es preciso que los factores e índices económicos enumerados en el párrafo 4 del artículo 3 se examinen con arreglo a los mismos parámetros.

---

[223] *Véase* la Prueba documental BRA-14.

[224] *Véase* la página 9 de la Prueba documental BRA-14.

[225] *Véase* la página 9 de la Prueba documental BRA-14.

[226] *The Concise Oxford Dictionary - Ninth Edition*, Oxford University Press, 1995, página 938.

[227] *The Concise Oxford Dictionary - Ninth Edition*, Oxford University Press, 1995, página 1387.

428. Del hecho de que la CNCE evaluara los datos sobre la producción, los precios, las exportaciones y el consumo aparente con respecto al período comprendido entre enero de 1996 y junio de 1999 y los datos relativos a los demás factores e índices enumerados en el párrafo 4 del artículo 3 con respecto al período comprendido entre enero de 1996 y diciembre de 1998 se desprende que se utilizaron distintos parámetros de evaluación. En consecuencia, el examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre los productores nacionales no fue objetivo y, por lo tanto, fue contrario a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping.

429. El examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional afectada debe ser objetivo, puesto que el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping impone esta obligación en relación con todos los factores que han de examinarse en una determinación de la existencia de daño. El Grupo Especial, una vez que establezca que la determinación de la existencia de daño no se basó en un examen objetivo, debe establecer también que la Argentina infringió los párrafos 4 y 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping.

430. En lo que atañe al párrafo 5 del artículo 3, en el análisis de la existencia de daño se examinaron algunos de los factores con respecto a un período que llegaba hasta junio de 1999. Puesto que el dumping únicamente se determinó con respecto a un período que llegaba hasta enero de 1999, no había ninguna base que permitiera a las autoridades imputar el daño en junio de 1999 al dumping en enero de ese mismo año. Como mínimo, habría sido necesario que en la determinación definitiva sobre la existencia de una relación de causalidad se diera una explicación plenamente convincente de la existencia de esa relación.

ii) Reclamación 33: Incompatibilidad con el párrafo 2.2 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping

Texto del párrafo 2.2 del artículo 12

431. El texto del párrafo 2.2 del artículo 12 establece lo siguiente:

> "En los avisos públicos de conclusión o suspensión de una investigación en la cual se haya llegado a una determinación positiva que prevea la imposición de un derecho definitivo o la aceptación de un compromiso en materia de precios, figurará, o se hará constar de otro modo mediante un informe separado, toda la información pertinente sobre las cuestiones de hecho y de derecho y las razones que hayan llevado a la imposición de medidas definitivas o a la aceptación de compromisos en materia de precios, teniendo debidamente en cuenta lo prescrito en cuanto a la protección de la información confidencial. En el aviso o informe figurará en particular la información indicada en el apartado 2.1, así como los motivos de la aceptación o rechazo de los argumentos o alegaciones pertinentes de los exportadores e importadores, y la base de toda decisión adoptada en virtud del apartado 10.2 del artículo 6."

Argumento jurídico relativo a la Reclamación 33

432. La cuestión que se plantea al Grupo Especial es si en la determinación definitiva se ha facilitado una explicación, suficiente para satisfacer las prescripciones del párrafo 2.2 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping, de las razones por las que la DCD utilizó períodos diferentes para evaluar los factores e índices económicos pertinentes enumerados en el párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping.

433. El párrafo 2.2 del artículo 12 dispone que en el caso de una determinación positiva que prevea la imposición de un derecho definitivo, en los avisos públicos de conclusión de la investigación figurará, o se hará constar de otro modo pertinente mediante un informe separado, toda la información pertinente sobre las cuestiones de hecho y de derecho y las razones que hayan llevado a la imposición

de medidas definitivas. En particular, en el aviso público de conclusión debe figurar la información indicada en el apartado 2.1 del artículo 12. Entre la información exigida en ese apartado están las consideraciones relacionadas con la determinación de la existencia de daño según se establece en el artículo 3 del Acuerdo Antidumping.

434. En la Reclamación *supra* se ha puesto de manifiesto que el examen de los factores e índices económicos enumerados en el párrafo 4 del artículo 3 realizado por la CNCE no fue objetivo, porque para evaluar los factores se utilizaron parámetros distintos. Algunos factores se evaluaron teniendo en cuenta el período comprendido entre enero de 1996 y junio de 1999 y otros teniendo en cuenta el período comprendido entre enero de 1996 y diciembre de 1998.

435. En la determinación definitiva de la existencia de daño, la CNCE se limitó a declarar que el período analizado correspondía al transcurrido desde enero de 1996 hasta diciembre de 1998. La CNCE añadía que en el caso de algunas variables, como la producción nacional, los precios, las importaciones, las exportaciones nacionales y el consumo aparente se tuvieron también en cuenta datos correspondientes al primer semestre de 1999.

436. En la determinación definitiva no se facilitó ninguna explicación o análisis de las razones por las que la CNCE evaluó los datos relativos a la producción, los precios, las importaciones, las exportaciones y el consumo aparente correspondientes al período comprendido entre enero de 1996 y junio de 1999, que no estaba incluido en el período de investigación a efectos del daño.

437. Al no indicar en la determinación definitiva las consideraciones relacionadas con la determinación de la existencia del daño según se establece en el artículo 3, la Argentina infringió el párrafo 2.2 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping.

3. Párrafos 1, 2, 4 y 5 del artículo 3

438. De los hechos que se exponen a continuación se derivan las cuatro reclamaciones siguientes:

> **Reclamación 34:** En el análisis del daño de la determinación definitiva no se excluyeron las importaciones procedentes de Nicolini y Seara, a pesar de que la DCD consideró que no se trataba de "importaciones objeto de dumping". Al no excluir esas importaciones del volumen de las "importaciones objeto de dumping", la CNCE no tuvo en cuenta adecuadamente si había habido un aumento significativo de las "importaciones objeto de dumping", por lo que infringió el párrafo 2 del artículo 3.
>
> **Reclamación 35:** De la evaluación viciada de las "importaciones objeto de dumping" se deduce que la determinación de la existencia de daño no se basó en pruebas positivas y no comprendió un examen objetivo, como exige el párrafo 1 del artículo 3.
>
> **Reclamación 36:** Al no excluir las importaciones correspondientes a Nicolini y Seara del volumen de las "importaciones objeto de dumping", la CNCE no examinó adecuadamente la repercusión de las "importaciones objeto de dumping" sobre la rama de producción nacional, como exige el párrafo 4 del artículo 3.
>
> **Reclamación 37:** Al no excluir las importaciones correspondientes a Nicolini y Seara del volumen de las "importaciones objeto de dumping", la CNCE no examinó adecuadamente el daño conforme a lo prescrito en el párrafo 1 del artículo 3 y, en consecuencia, no demostró adecuadamente la existencia de una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño a la rama de producción nacional, como exige el párrafo 5 del artículo 3.

a) Hechos

439. El 23 de diciembre de 1999, la CNCE formuló la determinación definitiva de la existencia de daño.[228] El 23 de junio de 2000, la DCD formuló la determinación definitiva de la existencia de dumping.[229] En la determinación sobre el dumping, la DCD estableció que los exportadores brasileños Nicolini y Seara no exportaban la mercancía en cuestión a precios de dumping y que los pollos procedentes de Sadia, Avipal y todos los demás exportadores se exportaban a precios de dumping.[230]

440. El 17 de julio de 2000, la SSCE formuló la determinación definitiva sobre la existencia de una relación de causalidad entre las importaciones supuestamente objeto de dumping y el daño a la rama de producción nacional.[231]

i) Reclamación 34: Incompatibilidad con el párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping

Texto del párrafo 2 del artículo 3

441. El párrafo 2 del artículo 3 indica los factores que han de tenerse en cuenta en relación con el aumento del volumen de las "importaciones objeto de dumping" que debe examinarse de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3. El texto de la parte pertinente del párrafo 2 del artículo 3 establece lo siguiente:

> "En lo que respecta a las importaciones objeto de dumping, la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido un aumento significativo de las mismas, en términos absolutos o en relación con la producción o el consumo del Miembro importador. [...]"

Argumento jurídico relativo a la Reclamación 34

442. El texto de todas las disposiciones del artículo 3 del Acuerdo Antidumping es coherente: es necesario que el daño a la rama de producción nacional haya sido causado por las "importaciones objeto de dumping". El párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping define lo que constituye un producto objeto de dumping. A este respecto, el párrafo 1 del artículo 2 da la siguiente definición:

> "A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que un producto es objeto de dumping, es decir que se introduce en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal, cuando su precio de exportación al exportarse de un país a otro sea menor que el precio comparable, en el curso de operaciones comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo en el país exportador."

443. Del texto del párrafo 1 del artículo 2 se deduce que las importaciones se realizan a precio de dumping cuando se introduce un producto en el mercado de otro país a un precio inferior al precio del producto similar en el país exportador.

---

[228] *Véase* la Prueba documental BRA-14.

[229] *Véase* la Prueba documental BRA-15.

[230] *Véanse* las páginas 102, 103 y 104 de la Prueba documental BRA-15.

[231] *Véase* la Prueba documental BRA-16.

444. El Brasil entiende que la definición de la expresión "importaciones objeto de dumping" del párrafo 1 del artículo 2 es aplicable a todos los artículos del Acuerdo Antidumping.

445. En la determinación definitiva de la existencia de dumping, la DCD estableció que los exportadores brasileños Nicolini y Seara no estaban exportando la mercancía objeto de investigación a precio de dumping.

446. Como ya se ha indicado en la presente comunicación, la DCD estableció el precio de exportación en la determinación definitiva de la existencia de dumping basándose en la información sobre las importaciones de *Ganadería*. La DCD hizo un listado del volumen neto de las importaciones de pollos en kilogramos, el valor FOB total de las importaciones de pollos en dólares de los Estados Unidos y el precio unitario FOB en dólares de los Estados Unidos por kilogramo de las exportaciones de cada uno de los exportadores brasileños en el período comprendido entre enero de 1998 y enero de 1999.[232]

447. Según ese listado, en el período comprendido entre enero de 1998 y enero de 1999, Nicolini exportó a la Argentina 5.397.254 kilogramos del producto objeto de investigación, Seara 11.038.851 kilogramos, y el volumen total del producto exportado por todos los exportadores brasileños ascendió a 58.822.070 kilogramos.

448. Nicolini exportó el 9,18 por ciento y Seara el 18,77 por ciento del volumen total de las exportaciones efectuadas por los exportadores brasileños en el período de investigación.

Productor	**kg netos**	**Porcentaje del total**
Nicolini	5.397.254	9,18%
Seara	11.038.851	18,77%
Total	58.822.070	100%

Fuente: Páginas 76 y 77 de la Prueba documental BRA-15.

449. La suma de las exportaciones realizadas por Nicolini y Seara representó el 27,95 por ciento de las exportaciones totales brasileñas del producto objeto de investigación, es decir casi la tercera parte de las exportaciones brasileñas de pollos realizadas en el período. El Brasil entiende que esta cifra representa un volumen significativo y es un factor pertinente en el análisis del daño.

450. En el análisis del daño de la determinación definitiva de la existencia de daño no se excluyeron de las "importaciones objeto de dumping" analizadas en el examen del daño las procedentes de Nicolini y Seara.

451. El Brasil tiene conocimiento de este hecho debido a que la determinación definitiva de la existencia de daño, formulada el 23 de diciembre de 1999, fue anterior en seis meses a la determinación definitiva de la existencia de dumping, formulada el 23 de junio de 2000.

452. El párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping obliga a la autoridad investigadora a tener en cuenta si ha habido un aumento significativo de las "importaciones objeto de dumping", en términos absolutos o en relación con la producción o el consumo del Miembro importador. El Brasil sostiene que las autoridades investigadoras no tuvieron nunca en cuenta si había habido un aumento significativo de las "importaciones objeto de dumping", puesto que no se excluyó del volumen de las "importaciones objeto de dumping" el volumen significativo de importaciones procedentes de Nicolini y Seara.

[232] *Véase* la página 76 de la Prueba documental BRA-15.

453. Al no excluir del volumen total de las "importaciones objeto de dumping" las procedentes de Nicolini y Seara, la Argentina no tuvo en cuenta adecuadamente si había habido un aumento significativo de las "importaciones objeto de dumping", con infracción de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping.

ii) Reclamación 35: Incompatibilidad con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping

Texto del párrafo 1 del artículo 3

454. El párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping establece los requisitos generales de una determinación de la existencia de daño.

> "La determinación de la existencia de daño a los efectos del artículo VI del GATT de 1994 se basará en pruebas positivas y comprenderá un examen objetivo: a) del volumen de las importaciones objeto de dumping y del efecto de éstas en los precios de productos similares en el mercado interno y b) de la consiguiente repercusión de esas importaciones sobre los productores nacionales de tales productos."

Argumento jurídico relativo a la Reclamación 35

455. El párrafo 1 del artículo 3 prescribe que la determinación de la existencia de daño de la autoridad investigadora se basará en pruebas positivas y comprenderá un examen objetivo de tres factores: 1) el volumen de las "importaciones objeto de dumping"; 2) el efecto de las "importaciones objeto de dumping" en los precios de productos similares en el mercado interno; y 3) la consiguiente repercusión de las "importaciones objeto de dumping" sobre los productores nacionales de tales productos.

456. Como ponen de manifiesto los hechos expuestos, la Argentina, al establecer de forma inadecuada las "importaciones objeto de dumping", no basó su determinación definitiva de la existencia de daño en pruebas positivas ni realizó un examen objetivo de los factores indicados en el párrafo 1 del artículo 3.

457. Como se ha demostrado en la anterior reclamación, según el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping se considera que un producto es objeto de dumping cuando se introduce en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal.

458. Así pues, las "importaciones objeto de dumping" son aquellas importaciones que se introducen en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal. En la determinación definitiva sobre el dumping, la DCD constató que las importaciones de pollos a la Argentina procedentes de Nicolini y Seara no eran objeto de dumping.

459. No obstante, la determinación definitiva de la existencia de daño incluyó en las "importaciones objeto de dumping" examinadas de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 las procedentes de Nicolini y Seara.

460. Al no haber excluido la CNCE del total de las "importaciones objeto de dumping" las importaciones de pollos procedentes de Nicolini y Seara, no puede considerarse que el examen del daño, previsto en el párrafo 1 del artículo 3, haya sido objetivo.

iii) Reclamación 36: Incompatibilidad con el párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping

Texto del párrafo 4 del artículo 3

461. El párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping dispone que ha de examinarse la repercusión de las "importaciones objeto de dumping" sobre la rama de producción nacional. El párrafo 4 del artículo 3 establece lo siguiente:

> "El examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional de que se trate incluirá una evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes que influyan en el estado de esa rama de producción, incluidos la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el volumen de producción, la participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de las inversiones o la utilización de la capacidad; los factores que afecten a los precios internos; la magnitud del margen de dumping; los efectos negativos reales o potenciales en el flujo de caja ("*cash flow*"), las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir capital o la inversión. Esta enumeración no es exhaustiva, y ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva."

Argumento jurídico relativo a la Reclamación 36

462. El párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping exige que el examen de la repercusión de las "importaciones objeto de dumping" sobre la rama de producción nacional incluya una evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes que influyan en el estado de la rama de producción nacional. En concreto, lo que debe examinarse es la repercusión de las "importaciones objeto de dumping" sobre la rama de producción nacional.

463. La interpretación del texto de la primera frase del párrafo 4 del artículo 3 pone de manifiesto que la autoridad investigadora debe examinar las repercusiones sobre la rama de producción nacional de las importaciones que son objeto de dumping, y no de todas las importaciones procedentes de un determinado origen.

464. En la determinación definitiva sobre el dumping, se consideró que una parte significativa (casi el 30 por ciento) de las importaciones de pollos procedentes del Brasil no eran "importaciones objeto de dumping". No obstante, a efectos de la determinación de la existencia de daño no se excluyó del análisis del daño causado por las "importaciones objeto de dumping" a esas importaciones que se había considerado que no eran "importaciones objeto de dumping". Al no excluirlas de las importaciones totales de pollos, la CNCE no realizó un examen adecuado de la repercusión de las "importaciones objeto de dumping" sobre la rama de producción nacional.

465. Un Grupo Especial anterior del GATT planteó una cuestión análoga en *CE - Hilados de algodón*:

> "[...] el Grupo Especial señaló que la CE, en respuesta a una pregunta formulada por el Grupo, había dicho 'en cuanto al volumen que debe considerarse a los efectos de determinar la existencia de daño, la Comunidad tuvo en cuenta todas las importaciones, independientemente de que fueran objeto de dumping, o no, por los motivos mencionados *supra*'. Los artículos 3.2 y 3.4 del Acuerdo exigían que las autoridades investigadoras examinaran el volumen y los efectos de las importaciones "objeto de dumping". El Grupo Especial señaló que la CE había indicado en su respuesta que, a los efectos de su análisis de la existencia de daño, había tenido en cuenta los efectos de todas las importaciones procedentes del Brasil,

> independientemente de que fueran objeto de dumping o no. Puesto que el Brasil no había formulado una alegación en el sentido de que la CE hubiera actuado así de forma incompatible con el Acuerdo, el Grupo Especial no podía pronunciarse respecto de tal alegación."[233]

466. El Grupo Especial que se ocupó de ese asunto indicaba que si el Brasil hubiera alegado que la CE había actuado de forma incompatible con el Acuerdo al tener en cuenta en el análisis de la existencia de daño los efectos de todas las importaciones procedentes del Brasil y no sólo de las importaciones objeto de dumping, el Grupo Especial podría haberse pronunciado sobre esa alegación.

467. A diferencia de lo que ocurrió en el mencionado procedimiento de ese Grupo Especial del GATT en el presente caso, el Brasil alega que la determinación de la Argentina es incompatible con los párrafos 1, 2, 4 y 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping.

468. En lo que respecta a la reclamación de que se trata, la Argentina, al no excluir del total de las "importaciones objeto de dumping" las procedentes de Nicolini y Seara, no examinó adecuadamente la repercusión de las "importaciones objeto de dumping" sobre la rama de producción nacional de que se trata, en contra de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping.

iv) Reclamación 37: Incompatibilidad con el párrafo 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping

Texto del párrafo 5 del artículo 3

469. El párrafo 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping establece los requisitos del análisis de la relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño a la rama de producción nacional:

> "Habrá de demostrarse que, por los efectos del dumping que se mencionan en los párrafos 2 y 4, las importaciones objeto de dumping causan daño en el sentido del presente Acuerdo. La demostración de una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño a la rama de producción nacional se basará en un examen de todas las pruebas pertinentes de que dispongan las autoridades. Éstas examinarán también cualesquiera otros factores de que tengan conocimiento, distintos de las importaciones objeto de dumping, que al mismo tiempo perjudiquen a la rama de producción nacional, y los daños causados por esos otros factores no se habrán de atribuir a las importaciones objeto de dumping. [...]"

Argumento jurídico relativo a la Reclamación 37

470. El párrafo 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping aclara cómo ha de establecerse la relación causal entre el dumping y el daño a la rama de producción nacional.

471. En primer lugar, el párrafo 5 del artículo 3 exige que la demostración de una relación causal se base en el examen de todas las pruebas pertinentes. En segundo lugar, ese párrafo dispone que las autoridades examinarán cualesquiera otros factores de que tengan conocimiento, distintos de las "importaciones objeto de dumping", que al mismo tiempo perjudiquen a la rama de producción nacional. En tercer lugar, las autoridades deben cerciorarse de que los daños causados por esos factores no se atribuyan a las "importaciones objeto de dumping".

---

[233] *CE - Imposición de derechos antidumping a las importaciones de hilados de algodón procedentes del Brasil*, 4 de julio de 1995, ADP/137, párrafo 525 ("*CE - Hilados de algodón*").

472. La SSCE no realizó un análisis de la relación causal. Se limitó a reproducir los márgenes de dumping constatados en la determinación definitiva de la existencia de dumping, así como algunos de los factores examinados en la determinación definitiva de la existencia de daño, y concluyó que existía una relación causal entre unos y otros, sin explicar las razones por las que consideraba que existía esa relación. En la determinación definitiva de la existencia de una relación causal no se presentó ninguna demostración de la relación causal entre los dos elementos.

473. Además, el párrafo 5 del artículo 3 obliga a las autoridades a determinar que las "importaciones objeto de dumping" son la causa del daño a la rama de producción nacional. Como se ha indicado antes, las autoridades sabían antes de que se formulara la determinación sobre la relación causal que las importaciones procedentes de Nicolini y Seara no se habían considerado "importaciones objeto de dumping". No obstante, la determinación sobre la relación causal no evaluó ese factor ni excluyó de las "importaciones objeto de dumping" totales las procedentes de Nicolini y Seara.

474. El Brasil considera que, a falta de una constatación válida de la existencia de daño, que estuvo viciada por la inclusión en las "importaciones objeto de dumping" totales de las procedentes de Nicolini y Seara, no había base para una constatación de la existencia de una relación causal.

4. Párrafos 1 y 4 del artículo 3 y párrafo 2.2 del artículo 12

475. De los hechos que se exponen a continuación y de las prescripciones legales del Acuerdo Antidumping se derivan las tres reclamaciones siguientes:

> **Reclamación 38:** La Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 4 del artículo 3 al no evaluar todos los factores e índices económicos pertinentes enumerados en el párrafo 4 del artículo 3.
>
> **Reclamación 39:** Dado que la Argentina no evaluó en su determinación definitiva todos los factores e índices económicos pertinentes enumerados en el párrafo 4 del artículo 3, su determinación de la existencia de daño no se basó en pruebas positivas ni comprendió una evaluación objetiva, como exige el párrafo 1 del artículo 3.
>
> **Reclamación 40:** La Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 2.2 del artículo 12 al no incluir en su determinación definitiva una explicación adecuada ni una evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes enumerados en el párrafo 4 del artículo 3.

a) Hechos

476. El 23 de diciembre de 1999, la CNCE formuló su determinación definitiva de la existencia de daño.[234] El examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional no incluyó una evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes que influían en el estado de la rama de producción. En particular, la CNCE no evaluó la disminución real y potencial de la productividad; los factores que afectaban a los precios internos; la magnitud del margen de dumping; y los efectos negativos reales o potenciales en el flujo de caja, el crecimiento y la capacidad de reunir capital o la inversión.

[234] *Véase* la Prueba documental BRA-14.

i) Reclamación 38: Incompatibilidad con el párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping

Texto del párrafo 4 del artículo 3

477. El párrafo 4 del artículo 3 establece que ha de examinarse la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional. El examen debe incluir una evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes que influyan en el estado de la rama de producción, incluidos:

> "[...] la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el volumen de producción, la participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de las inversiones o la utilización de la capacidad; los factores que afecten a los precios internos; la magnitud del margen de dumping; los efectos negativos reales o potenciales en el flujo de caja ("*cash flow*"), las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir capital o la inversión."

Argumento jurídico relativo a la Reclamación 38

478. El párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping establece requisitos específicos para el examen del elemento b) del párrafo 1 del artículo 3. Obliga a las autoridades a evaluar, al examinar la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional todos los factores e índices económicos pertinentes que influyan en el estado de la rama de producción. El párrafo 4 del artículo 3 enumera, sin que esa enumeración tenga carácter exhaustivo, los factores que deben ser evaluados por la autoridad investigadora.

479. En su determinación definitiva de la existencia de daño, la CNCE no evaluó la disminución real y potencial de la productividad; los factores que afectaban a los precios internos; la magnitud del margen de dumping; y los efectos negativos reales o potenciales en el flujo de caja, el crecimiento y la capacidad de reunir capital o la inversión. La CNCE no se refirió a la disminución real y potencial de la productividad en el período analizado ni evaluó la productividad de la rama de producción nacional. De forma análoga, la autoridad investigadora no hizo referencia a otros factores que afectaban al precio interno ni los evaluó. En lo que respecta a la magnitud del margen de dumping, la CNCE no la evaluó, ni podía haberla evaluado, puesto que la determinación definitiva de la existencia de dumping, en el que se establecía el margen de dumping, se formuló el 23 de junio de 2000, seis meses después de que se hubiera formulado la determinación definitiva de la existencia de daño. Tampoco se incluyeron en la determinación definitiva de la existencia de daño un análisis de los efectos negativos reales y potenciales en el flujo de caja, el crecimiento y la capacidad de reunir capital o la inversión, ni datos concretos al respecto. Todos esos factores se enumeran en el párrafo 4 del artículo 3 y deberían haber sido examinados.

480. Nuestra interpretación de que la lista de factores enumerados en el párrafo 4 del artículo 3 es obligatoria, y no indicativa, se basa en el texto del párrafo 4 del artículo 3 y en la interpretación de esa disposición por varios grupos especiales.

481. De la frase del párrafo 4 del artículo 3 según la cual "el examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional de que se trate incluirá una evaluación de todos los factores [...] económicos pertinentes" se desprende claramente que la evaluación de los factores enumerados en esta disposición es obligatoria en todos los casos. El párrafo 4 del artículo 3 aclara además que en la evaluación de todos los factores económicos pertinentes que influyan en el estado de la rama de producción están incluidos la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el volumen de producción, la participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de las inversiones o la utilización de la capacidad; los factores que afecten a los precios internos; la magnitud del margen de dumping; los efectos negativos reales o

potenciales en el flujo de caja, las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir capital o la inversión. El término "incluidos" del párrafo 4 del artículo 3 indica sencillamente que puede haber otros factores económicos adicionales pertinentes que formen parte también de todos los factores que deben ser evaluados.

482. Además, varios grupos especiales de la OMC han llegado a la conclusión de que la evaluación de los factores e índices económicos enumerados en el párrafo 4 del artículo 3 es obligatoria. Por ejemplo, el Grupo Especial que se ocupó del asunto *Tailandia - Vigas doble T* interpretó que la frase del párrafo 4 del artículo 3 "incluirá una evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes que influyan en el estado de esa rama de producción nacional, incluidos [...]":

> "[...] introduce una lista preceptiva de los factores pertinentes que se deben evaluar en cada caso. Opinamos que el cambio que se introdujo en la redacción de la disposición pertinente durante la Ronda Uruguay (de "tales como" a "incluidos") respondía a alguna razón y que apoya una interpretación del texto actual del párrafo 4 del artículo 3 en el sentido de que establece una lista que no es simplemente indicativa o ilustrativa sino más bien preceptiva. [...]"[235]

483. El Grupo Especial mencionado declaró además lo siguiente:

> "opinamos que la redacción del párrafo 4 del artículo 3 deja claro que todos los factores enumerados en ese párrafo deben ser considerados en todos los casos. La disposición es específica y preceptiva a ese respecto. [...]"[236] (Sin subrayar en el original.)

484. Ese Grupo Especial declaró, por último, lo siguiente:

> "Sobre la base de este análisis del texto del párrafo 4 del artículo 3, opinamos, por tanto, que cada uno de los 15 factores individuales enumerados en la lista preceptiva de factores que figura en el párrafo 4 del artículo 3 debe ser evaluado por las autoridades investigadoras. [...]"[237]

485. El Órgano de Apelación confirmó las constataciones de ese Grupo Especial en lo que respecta a su interpretación de que el párrafo 4 del artículo 3 exige preceptivamente una evaluación de todos los factores enumerados en esa disposición.[238]

486. De forma análoga, el Grupo Especial que se ocupó del asunto *México - JMAF*, declaró, en relación con esta cuestión concreta, lo siguiente:

> "[...] El párrafo 4 del artículo 3 está redactado en forma imperativa:

---

[235] *Tailandia - Derechos antidumping sobre los perfiles de hierro y acero sin alear y vigas doble T procedentes de Polonia*, 28 de septiembre de 2000, WT/DS122/R, párrafo 7.225 ("*Tailandia - Vigas doble T*").

[236] *Tailandia - Vigas doble T*, párrafo 7.229.

[237] *Tailandia - Vigas doble T*, párrafo 7.231.

[238] *Tailandia - Derechos antidumping sobre los perfiles de hierro y acero sin alear y vigas doble T procedentes de Polonia*, 12 de marzo de 2001, WT/DS122/AB/R, párrafo 139 (informe adoptado el 5 de abril de 2001) ("*OA - Tailandia - Vigas doble T*").

> 'El examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional de que se trate **incluirá** una evaluación de **todos los factores** e índices **económicos** pertinentes que influyan en el estado de esa rama de producción, **incluidos** [...]'
>
> A nuestro parecer, ese texto establece claramente que, en todos los casos, deben examinarse los factores enumerados en el párrafo 4 del artículo 3. Puede haber, según las circunstancias de cada caso, otros factores económicos pertinentes, cuyo examen sea también necesario."[239] (Las negritas son del Grupo Especial.)

487. Esa interpretación fue apoyada también por el Grupo Especial que se ocupó del asunto *CE - Ropa de cama*, el cual llegó a la conclusión de que:

> "[...] las autoridades encargadas de la investigación, al examinar la repercusión de las importaciones objeto de dumping en la rama de producción nacional de que se trate, están obligadas a evaluar **cada uno** de los 15 factores enumerados en el párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping."[240] (Las negritas son del Grupo Especial.)

488. Además, no es posible reducir la naturaleza de la evaluación de los factores enumerados en el párrafo 4 del artículo 3 a una simple referencia a esos factores, sino que es preciso que los datos facilitados, se aborden, se sitúen en su contexto y se analicen. La evaluación de los factores enumerados en el párrafo 4 del artículo 3 requiere que la autoridad investigadora determine la importancia y el valor de la información, analizándola y estudiándola cuidadosamente.

489. La interpretación del Grupo Especial que se ocupó del asunto *Estados Unidos - Acero laminado en caliente*, según la cual no bastaría que la autoridad investigadora se limitara a mencionar datos sobre algunos de los factores del párrafo 4 del artículo 3 sin realizar una evaluación de los factores en cuestión, apoya lo anteriormente dicho. Según ese Grupo Especial:

> "[...] La evaluación de un factor exige situarlo en su contexto y evaluar los datos correspondientes, tanto en su evolución interna como con respecto a otros factores examinados. Solamente sobre la base de la evaluación de los datos de la determinación puede un grupo especial que examina un asunto evaluar si las conclusiones inferidas del examen son propias de una autoridad imparcial y objetiva."[241]

490. Esa interpretación encuentra también apoyo en el informe sobre *Tailandia - Vigas de doble T*, en el que el Grupo Especial expuso la siguiente opinión:

---

[239] *México - JMAF*, párrafo 7.128. El Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial cumplió la obligación, establecida en el párrafo 7 del artículo 12 del ESD de exponer "las razones en que se basen sus conclusiones" con respecto al párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping. *México - Investigación antidumping sobre el jarabe de maíz con alta concentración de fructosa (JMAF) procedente de los Estados Unidos*, 22 de octubre de 2001, WT/DS132/AB/RW, párrafo 135 (informe adoptado el 21 de noviembre de 2001) ("*OA - México - JMAF*").

[240] *Comunidades Europeas - Derechos antidumping sobre las importaciones de ropa de cama de algodón originarias de la India*, 30 de octubre de 2000, WT/DS141/R, párrafo 6.159 (informe adoptado el 12 de marzo de 2001) ("*CE - Ropa de cama*"). Las constataciones del Grupo Especial sobre la alegación relativa al párrafo 4 del artículo 3 no fueron objeto de apelación.

[241] *Estados Unidos - Acero laminado en caliente*, párrafo 7.232.

> "[...] En consecuencia, al determinar que el párrafo 4 del artículo 3 contiene una lista preceptiva de 15 factores que se han de examinar, con ello no queremos establecer un simple "criterio de verificación" que consistiría en un ejercicio mecánico de limitarse a verificar que la autoridad investigadora se refirió de alguna manera a cada factor enumerado. [...] Más bien, opinamos que el párrafo 4 del artículo 3 exige que las autoridades establezcan de manera adecuada si existe una base fáctica para respaldar un análisis válido y bien razonado del estado de la rama de producción y una constatación de la existencia de daño. Este análisis no se deriva de una simple calificación del grado de "pertinencia o impertinencia" de todos y cada uno de los factores individuales, sino que se basa más bien en una evaluación cabal del estado de la rama de producción y, a la luz de la última frase del párrafo 4 del artículo 3, debe contener una explicación convincente de la manera cómo la evaluación de los factores pertinentes desembocó en la determinación de la existencia de daño."[242]

491. De forma análoga, en el asunto *CE - Ropa de cama* el Grupo Especial declaró que:

> "En lo tocante a la naturaleza de la evaluación de cada factor requerida, el grupo [encargado del asunto *México - JMAF*] estableció que las autoridades, aunque pueden determinar que algunos factores no son pertinentes o no tienen un peso significativo en la decisión, no pueden simplemente pasar por alto esos factores, y están obligadas a explicar cómo han llegado a la conclusión de que no son pertinentes o carecen de importancia."[243]

492. Atendiendo a las consideraciones expuestas y a la determinación definitiva de la existencia de daño, el Grupo Especial comprobará no sólo que la autoridad investigadora no examinó todos los factores enumerados en el párrafo 4 del artículo 3, sino también que no todos los factores fueron evaluados adecuadamente, lo que constituye *prima facie* una infracción del párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping.

ii) Reclamación 39: Incompatibilidad con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping

Texto del párrafo 1 del artículo 3

493. El párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping establece la estructura general del análisis del daño que ha de realizar la autoridad:

> "La determinación de la existencia de daño a los efectos del artículo VI del GATT de 1994 se basará en pruebas positivas y comprenderá un examen objetivo: a) del volumen de las importaciones objeto de dumping y del efecto de éstas en los precios de productos similares en el mercado interno y b) de la consiguiente repercusión de esas importaciones sobre los productores nacionales de tales productos."

Argumento jurídico relativo a la Reclamación 39

494. El párrafo 1 del artículo 3 establece los requisitos generales de una determinación de la existencia de daño que había de basarse en el examen del volumen de las "importaciones objeto de dumping", sus efectos sobre los precios y la consiguiente repercusión de esas importaciones sobre la rama de producción nacional. En los siguientes párrafos del artículo 3 se facilitan orientaciones más

---

[242] *Tailandia - Vigas doble T*, párrafo 7.236.

[243] *CE - Ropa de cama*, párrafos 6.159 a 6.262.

concretas en relación con este tipo de determinaciones. El párrafo 4 del artículo 3 enumera los factores que han de tomarse en consideración al examinar la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional, conforme exige el párrafo 1 del artículo 3. Ese examen requiere una evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes, enumerados en el párrafo 4 del artículo 3, que influyan en la rama de producción nacional.

495. A este respecto, el requisito de una "evaluación de todos los factores [...] pertinentes" del párrafo 4 del artículo 3 debe interpretarse en conexión con los requisitos generales establecidos por el párrafo 1 del artículo 3 de "pruebas positivas" y "un examen objetivo" al determinar la existencia de daño.

496. En la determinación definitiva de la existencia de daño, la CNCE no evaluó la disminución real y potencial de la productividad; los factores que afectaban a los precios internos; la magnitud del margen de dumping; y los efectos negativos reales o potenciales en el flujo de caja, el crecimiento y la capacidad de reunir capital o la inversión. Para que la constatación de existencia de daño de la CNCE se hubiera basado en pruebas positivas y en un examen objetivo, habría sido necesario que las autoridades investigadoras se refirieran expresamente a todos los factores económicos pertinentes enumerados en el párrafo 4 del artículo 3 y los evaluaran, lo que no ocurrió.

497. La CNCE no hizo referencia a la disminución real y potencial de la productividad en el período analizado ni evaluó la productividad de la rama de producción nacional. De forma análoga, la autoridad investigadora no hizo referencia a otros factores que afectaban a los precios internos ni evaluó esos factores. Con respecto a la magnitud del margen de dumping, la CNCE no la evaluó ni podía haberla evaluado, puesto que la determinación definitiva de existencia de dumping, en la que se establecía el margen de dumping, se formuló el 23 de junio de 2000, seis meses después de que se hubiera formulado la determinación definitiva de la existencia de daño. Tampoco se incluyeron en la determinación definitiva de la existencia de daño un análisis y datos concretos sobre los efectos negativos reales o potenciales en el flujo de caja, el crecimiento y la capacidad de reunir capital o la inversión.

498. Estos factores forman parte de la lista preceptiva de factores que han de evaluarse al examinar la repercusión de las importaciones sobre la rama de producción nacional. Un examen objetivo basado en pruebas positivas de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre los productores nacionales requiere que se evalúen todos los factores enumerados en el párrafo 4 del artículo 3.

499. La Argentina, al no evaluar todos esos factores, actuó de forma incompatible con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping.

iii) Reclamación 40: Incompatibilidad con el párrafo 2.2 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping

Texto del párrafo 2.2 del artículo 12

500. El párrafo 2.2 del artículo 12 establece lo siguiente:

> "En los avisos públicos de conclusión o suspensión de una investigación en la cual se haya llegado a una determinación positiva que prevea la imposición de un derecho definitivo o la aceptación de un compromiso en materia de precios, figurará, o se hará constar de otro modo mediante un informe separado, toda la información pertinente sobre las cuestiones de hecho y de derecho y las razones que hayan llevado a la imposición de medidas definitivas o a la aceptación de compromisos en materia de precios, teniendo debidamente en cuenta lo prescrito en cuanto a la protección de la información confidencial. En el aviso o informe figurará en particular la información

> indicada en el apartado 2.1, así como los motivos de la aceptación o rechazo de los argumentos o alegaciones pertinentes de los exportadores e importadores, y la base de toda decisión adoptada en virtud del apartado 10.2 del artículo 6."

Argumento jurídico relativo a la Reclamación 40

501. La cuestión que se plantea al Grupo Especial es si en la determinación definitiva figuraban y se analizaban suficientemente todos los factores e índices económicos enumerados en el párrafo 4 del artículo 3 para cumplir las prescripciones del párrafo 2.2 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping.

502. El párrafo 2.2 del artículo 12 dispone que en el caso de una determinación positiva que prevea la imposición de un derecho definitivo, en el aviso público de conclusión de la investigación figure, o se haga constar de otro modo mediante un informe separado, toda la información pertinente sobre las cuestiones de hecho y de derecho y las razones que hayan llevado a la imposición de medidas definitivas. En el aviso público de conclusión debe figurar en particular la información indicada en el apartado 2.1 del artículo 12. La información indicada en ese apartado incluye las consideraciones relacionadas con la determinación de la existencia de daño según se establece en el artículo 3 del Acuerdo Antidumping.

503. Con arreglo a lo expuesto en las reclamaciones 28 y 29, en la determinación definitiva de la existencia de daño no se evaluaban todos los factores económicos pertinentes enumerados en el párrafo 4 del artículo 3, que deben incluirse en el examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional, ni se hacía referencia a ellos.

504. En particular, la CNCE no evaluó la disminución real y potencial de la productividad en el período ni hizo referencia a ella; la autoridad investigadora no mencionó ni evaluó otros factores que afectaban a los precios internos; y la determinación definitiva de la existencia de daño tampoco incluyó un análisis y datos específicos sobre los efectos negativos reales o potenciales sobre el flujo de caja, el crecimiento y la capacidad de reunir capital o la inversión. En lo que respecta a la magnitud del margen de dumping, la CNCE no la evaluó ni podía haberla evaluado ya que la determinación definitiva sobre el dumping, en la que se establecía el margen de dumping, no fue formulada hasta el 23 de junio de 2000, seis meses después de que se hubiera formulado la determinación definitiva de la existencia de daño.

505. Con respecto a lo que ha de ser objeto de consideración en la determinación escrita definitiva, el Brasil se remite a la interpretación del Grupo Especial que se ocupó del asunto *México - JMAF*. Ese Grupo Especial confirmó que en virtud del párrafo 4 del artículo 3:

> "[...] en la determinación definitiva de la autoridad investigadora debe hacerse patente que se ha considerado cada uno de los factores enumerados en el párrafo 4 del artículo 3."[244] (Sin subrayar en el original.)

506. De forma análoga, el Grupo Especial llegó a la conclusión en *CE - Ropa de cama* de que:

> "[...] La naturaleza de [la] consideración [de cada uno de los factores enumerados en el párrafo 4 del artículo 3], incluido si la autoridad encargada de la investigación tuvo en cuenta el factor pertinente en su análisis de la repercusión de las importaciones objeto de dumping en la rama de producción nacional, debe hacer patente en la determinación final."[245] (Sin subrayar en el original.)

---

[244] M*éxico - JMAF*, párrafo 7.128.

[245] *CE - Ropa de cama*, párrafo 6.162.

507. El Brasil entiende que debido a que en la determinación definitiva no se analizaron la productividad; los factores que afectaban al precio interno; la magnitud del margen de dumping; el flujo de caja, el crecimiento y la capacidad de reunir capital o la inversión ni se hizo referencia a estos factores, la Argentina infringió *prima facie* el párrafo 2.2 del artículo 12.

5. Párrafo 1 del artículo 4

508. **Reclamación 41:** La Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo Antidumping al considerar que el 46 por ciento constituía una proporción importante ("*the major proportion*") de la producción nacional total, por lo que reunía las condiciones para poder ser considerada la rama de producción nacional.

a) Hechos

509. El 23 de diciembre de 1999, la CNCE formuló la determinación definitiva de la existencia de daño.[246] En esa determinación, la CNCE declaraba que las empresas argentinas San Sebastián, Rasic Hnos, Granja Tres Arroyos, Avícola Roque Pérez, Domvil, F.E.P.A.S.A., Frigorífico de Aves Soychu, Miralejos, Las Camelias, Frigorífico Cumini, Industrial Avícola Cordobesa, Nestor Eggs y Super se habían adherido formalmente a la solicitud presentada por el CEPA.[247] Diez de las trece empresas enumeradas respondieron al cuestionario sobre el daño enviado por la CNCE a los productores nacionales.[248] Se verificaron las respuestas de sólo seis de los diez productores nacionales que respondieron al cuestionario sobre el daño de la CNCE.[249]

510. El examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional se basó en los datos facilitados por las diez empresas que respondieron al cuestionario. Esas empresas representaron el 45 por ciento de la producción nacional total de los productos similares en el período analizado (de enero de 1996 a diciembre de 1998) y el 46 por ciento de la producción total en 1998.[250]

i) Reclamación 41: Incompatibilidad con el párrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo Antidumping

Texto del párrafo 1 del artículo 4

511. En el texto de la parte pertinente del párrafo 1 del artículo 4 se establece lo siguiente:

> "A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "rama de producción nacional" se entenderá en el sentido de abarcar el conjunto de los productores nacionales de los

[246] *Véase* la Prueba documental BRA-14.

[247] *Véase* la página 61 del "Informe Técnico Previo a La Determinación Final" en la Prueba documental BRA-14.

[248] Los productores nacionales que respondieron al cuestionario de la CNCE fueron los siguientes: San Sebastián, Rasic Hnos, Granja Tres Arroyos, Avícola Roque Pérez, Domvil, F.E.P.A.S.A., Frigorífico de Aves Soychu, Miralejos, Las Camelias y Super. *Véase* la página 61 del "Informe Técnico Previo a La Determinación Final" en la Prueba documental BRA-14.

[249] La CNCE verificó las respuestas al cuestionario sobre el daño de San Sebastián, Rasic, Granja Tres Arroyos, Avícola Roque Pérez, Frigorífico de Aves Soychu y Las Camelias. *Véase* la página 61 del "Informe Técnico Previo a La Determinación Final" en la Prueba documental BRA-14.

[250] *Véase* la página 62 del "Informe Técnico Previo a La Determinación Final" en la Prueba documental BRA-14.

productos similares, o aquellos de entre ellos cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la producción nacional total de dichos productos."

Argumento jurídico relativo a la Reclamación 41

512. La cuestión que se plantea al Grupo Especial es si el 46 por ciento de la producción nacional total de pollos de la Argentina constituye una proporción importante ("major proportion") de la producción nacional total.

513. La definición de "rama de producción nacional" del párrafo 1 del artículo 4 obliga a las autoridades a considerar la rama de producción nacional en su conjunto o a aquellos productores cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la producción nacional total, y no un segmento de esa rama de producción. Para examinar la cuestión, el Grupo Especial ha de interpretar el sentido del término "major proportion" (proporción importante) del párrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo Antidumping.

514. Según una interpretación basada en el sentido corriente, se define el término "*major part*" (mayor parte)[251] se define como "*the majority*" (la mayoría).[252] Se entiende que "*majority*" (mayoría) significa "*the greater number or part*" (el número o parte mayor).[253] Partiendo de esas definiciones, puede entenderse que la expresión "major proportion" (proporción importante) significa la parte mayor en comparación con el todo. Si el todo en cuestión es el 100 por ciento de la producción nacional total del producto similar, el 46 por ciento no puede considerarse la parte mayor en relación con el todo.

515. Como se ha dicho, el párrafo 1 del artículo 4 define la "rama de producción nacional" como los productores nacionales que representen el conjunto de los productos similares o aquellos de entre ellos cuya producción conjunta de los productos en cuestión constituya una proporción importante de la producción nacional total de dichos productos.

516. El Brasil entiende que el párrafo 1 del artículo 4 establece que la rama de producción nacional puede estar representada por el 100 por ciento de los productores del producto similar o por aquellos de entre ellos cuya producción, considerada conjuntamente, constituya más de la mitad de la producción nacional total. Si la producción conjunta de los productores nacionales de que se trate, es inferior al 50 por ciento de la producción total, esos productores nacionales no cumplen las condiciones de la definición del párrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo Antidumping.

517. El establecimiento de la rama de producción nacional es importante, especialmente en relación con el análisis del daño. Dado que en el examen del daño se tiene en cuenta la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional, si la constitución de la rama de producción nacional no es adecuada, el examen de esa repercusión en el análisis del daño puede estar viciada.

518. En consecuencia, la obligación de formular una determinación de la existencia de daño a la rama de producción nacional, interpretada a la luz de la definición de la rama de producción nacional del párrafo 1 del artículo 4, implica que el daño debe analizarse con respecto al conjunto de los productores nacionales del producto similar o a aquellos de entre ellos cuya producción conjunta constituya una proporción importante, es decir la mayoría, de la producción nacional total de dichos

[251] Los términos "proportion" (proporción) y "part" (parte) se consideran sinónimos y son utilizados como tales. *Concise Oxford Dictionary - Ninth Edition*, Oxford University Press, 1995, páginas 995 y 1098.

[252] *Concise Oxford Dictionary - Ninth Edition*, Oxford University Press, 1995, página 822.

[253] *Concise Oxford Dictionary - Ninth Edition*, Oxford University Press, 1995, página 822.

productos. No puede evaluarse el daño en relación con un segmento o una parte de la rama de producción nacional.

519. La determinación de la CNCE según la cual el 46 por ciento de la producción nacional total del producto similar constituía una proporción importante de la producción conjunta de los productores nacionales es por sus propios términos incompatible con el párrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo Antidumping.

E. ESTABLECIMIENTO Y PERCEPCIÓN DE DERECHOS ANTIDUMPING COMO RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING

1. Párrafos 2 y 3 del artículo 9 y párrafo 2.2 del artículo 12

520. De los hechos que se exponen a continuación y de las prescripciones legales del Acuerdo Antidumping se derivan las tres reclamaciones siguientes:

> **Reclamación 28:** La Argentina ha actuado de forma incompatible con el párrafo 2 del artículo 9 al establecer un derecho antidumping variable que puede percibirse en una cuantía inapropiada.
>
> **Reclamación 29:** La Argentina ha actuado de forma incompatible con el párrafo 3 del artículo 9 al establecer un derecho antidumping variable que puede exceder del margen de dumping establecido en la determinación definitiva.
>
> **Reclamación 30:** La Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 2.2 del artículo 12 al no indicar cómo se estableció el "valor mínimo de exportación" en la determinación que preveía la imposición de derechos antidumping definitivos.

a) Hechos

521. El 23 de junio de 2000, la DCD formuló su determinación definitiva de la existencia de dumping.[254] En su determinación, la DCD calculó y determinó márgenes de dumping del 14,91 por ciento en el caso de las exportaciones de la mercancía en cuestión procedentes de Sadia[255], del 15,48 por ciento para las exportaciones de la mercancía en cuestión de Avipal[256], y del 8,19 por ciento para las exportaciones de la mercancía en cuestión de todos los demás exportadores.[257] La DCD determinó que los exportadores brasileños Nicolini y Seara no estaban exportando la mercancía en cuestión a precios de dumping.[258] Los márgenes de dumping se calcularon de la siguiente forma:

---

[254] *Véase* la Prueba documental BRA-15.

[255] *Véase* la página 102 de la Prueba documental BRA-15.

[256] *Véase* la página 103 de la Prueba documental BRA-15.

[257] *Véase* la página 104 de la Prueba documental BRA-15.

[258] *Véase* la página 103 de la Prueba documental BRA-15.

SADIA S.A.

Valor normal $EE.UU./kg	Precio FOB promedio $EE.UU./kg	Margen de dumping %
A	**B**	**(A-B)/B**
0,9294	0,80883	14,91

Fuente: Página 102 de la Prueba documental BRA-15.

AVIPAL S.A.

Valor normal $EE.UU./kg	Precio FOB promedio $EE.UU./kg	Margen de dumping %
A	**B**	**(A-B)/B**
1,0896	0,94355	15,48

Fuente: Página 103 de la Prueba documental BRA-15.

FRIGORÍFICO NICOLINI LTDA.

Valor normal $EE.UU./kg	Precio FOB promedio $EE.UU./kg	Margen de dumping %
A	**B**	**(A-B)/B**
0,8027	0,95843	----

Fuente: Página 103 de la Prueba documental BRA-15.

SEARA ALIMENTOS S.A.

Valor normal $EE.UU./kg	Precio FOB promedio $EE.UU./kg	Margen de dumping %
A	**B**	**(A-B)/B**
0,9104	1,00988	----

Fuente: Página 103 de la Prueba documental BRA-15.

TODOS LOS DEMÁS EXPORTADORES

Valor normal $EE.UU./kg	Precio FOB promedio $EE.UU./kg	Margen de dumping %
A	**B**	**(A-B)/B**
1,0385	0,95992	8,19

Fuente: Página 104 de la Prueba documental BRA-15.

522. El 21 de julio de 2000, sobre la base de las determinaciones definitivas de la existencia de dumping, de daño y de una relación de causalidad, el MEyOSP dictó la Resolución Nº 574/2000, por la que se imponían medidas antidumping definitivas por un período de tres años sobre las importaciones de pollos procedentes del Brasil.[259]

523. Las medidas en cuestión consistían en derechos antidumping específicos que se percibirían en una cuantía equivalente a la diferencia absoluta entre el precio FOB facturado en cada envío y un denominado "valor mínimo de exportación" también FOB, aplicable siempre que el primero fuera

[259] *Véase* la Prueba documental BRA-17.

inferior al segundo. El "valor mínimo de exportación" establecido era de 0,92 $EE.UU. por kilogramo para Sadia, de 0,98 $EE.UU. por kilogramo para Avipal y de 0,98 $EE.UU. por kilogramo para todos los demás exportadores.[260] En el aviso público de la decisión de imponer derechos antidumping no se explicó cómo se determinaron los "valores mínimos de exportación". No se aplicaron medidas antidumping a los exportadores brasileños Nicolini y Seara, ya que se constató que esos exportadores no exportaban pollos a precios de dumping.[261] En el aviso público se establecían también los márgenes de dumping constatados para Sadia (14,91 por ciento), Avipal (15,48 por ciento) y todos los demás exportadores (8,19 por ciento).[262]

i) Reclamación 28: Incompatibilidad con el párrafo 2 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping

Texto del párrafo 2 del artículo 9

524. El texto de la parte pertinente del párrafo 2 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping establece lo siguiente:

> "Cuando se haya establecido un derecho antidumping con respecto a un producto, ese derecho se percibirá en la cuantía apropiada en cada caso y sin discriminación sobre las importaciones de ese producto, cualquiera que sea su procedencia, declaradas objeto de dumping y causantes de daño [...]."

Argumento jurídico relativo a la Reclamación 28

525. El Brasil sostiene que los derechos antidumping variables impuestos respecto de las importaciones de pollos procedentes del Brasil, es decir la diferencia absoluta entre el precio FOB facturado en cada envío y un denominado "valor mínimo de exportación" también FOB, aplicable siempre que el precio FOB de exportación sea inferior al "valor mínimo de exportación", pueden exceder del margen de dumping establecido en la determinación definitiva y, en consecuencia, pueden percibirse en una cuantía inapropiada.

526. En la siguiente simulación se ofrece un ejemplo hipotético de este supuesto:

CUADRO 1

Exportador	**"Valor mínimo de exportación" en la Resolución Nº 574**	**Derecho *ad valorem* en la determinación definitiva**
Sadia	0,92 $EE.UU./kg	14,91%
Avipal	0,98 $EE.UU./kg	15,48%
Todos los demás	0,98 $EE.UU./kg	8,19%

[260] *Véase* la Prueba documental BRA-17.

[261] *Véase* la Prueba documental BRA-17.

[262] *Véase* la Prueba documental BRA-17.

CUADRO 2

Exportador	"Valor mínimo de exportación"	Ejemplo de precio FOB de exportación	Margen de dumping *ad valorem* %
	(A)	**(B)**	**(A) - (B)/(B) x100%**
Sadia	0,92 $EE.UU./kg	0,75 $EE.UU./kg	22,66%
Avipal	0,98 $EE.UU./kg	0,75 $EE.UU./kg	30,66%
Todos los demás	0,98 $EE.UU./kg	0,75 $EE.UU./kg	30,66%

CUADRO 3

Exportador	Derecho *ad valorem* en la determinación definitiva	Derecho *ad valorem* en la simulación	Diferencia
	(A)	**(B)**	**(B) - (A)**
Sadia	14,91%	22,66%	7,75%
Avipal	15,48%	30,66%	15,18%
Todos los demás	8,19%	30,66%	22,47%

527. En los cuadros anteriores, el Brasil ha simulado el cálculo de un margen de dumping, suponiendo que el precio FOB facturado en un envío sea 0,75 dólares EE.UU. por kilogramo y que el "valor mínimo de exportación" sea el determinado para cada una de las empresas en la Resolución Nº 574 (cuadro 2 *supra*).

528. En esta simulación hipotética, los derechos antidumping específicos que han de percibirse en una cuantía equivalente a la diferencia absoluta entre el precio FOB facturado en ese envío y el "valor mínimo de exportación" designado, fijado también como un precio FOB, tienen como resultado un derecho *ad valorem* del 22,66 por ciento en el caso de Sadia, el 30,66 por ciento en el de Avipal y el 30,66 en el de todos los demás exportadores (cuadro 2 *supra*).

529. Si comparamos los márgenes de dumping constatados en la determinación definitiva de la existencia de dumping de la DCD con los márgenes constatados en la anterior simulación, el Grupo Especial puede comprobar que el derecho antidumping aplicable en el supuesto hipotético excedería con mucho del margen de dumping establecido en la determinación definitiva (cuadro 3 *supra*).

530. Conforme a la simulación anterior, si los exportadores brasileños optaran por exportar a la Argentina pollos a un precio inferior determinado, se les impondrían derechos antidumping que se percibirían en una cuantía inapropiada, es decir en una cuantía superior al margen de dumping constatado en la investigación y establecido en la determinación definitiva.

531. Esta situación supondría una infracción de la prescripción del párrafo 2 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping con arreglo a la cual el derecho antidumping debe percibirse en la cuantía apropiada en cada caso.

ii) Reclamación 29: Incompatibilidad con el párrafo 3 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping

Texto del párrafo 3 del artículo 9

532. El texto de la parte pertinente del párrafo 3 del artículo 9 establece lo siguiente:

> "La cuantía del derecho antidumping no excederá del margen de dumping establecido de conformidad con el artículo 2."

Argumento jurídico relativo a la Reclamación 29

533. Después de que la Argentina estableciera derechos antidumping variables sobre las importaciones de pollos procedentes del Brasil, los exportadores brasileños no han exportado a la Argentina pollos a un precio inferior al "valor mínimo de exportación" para no pagar un derecho antidumping en cuantía superior al margen establecido de conformidad con el artículo 2.

534. El párrafo 3 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping prescribe expresamente que la cuantía del derecho antidumping no debe exceder del margen de dumping establecido de conformidad con el artículo 2. A tal fin, el párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping establece que "la existencia de márgenes de dumping durante la etapa de investigación se establecerá normalmente sobre la base de una comparación entre un promedio ponderado del valor normal y un promedio ponderado de los precios de todas las transacciones de exportación comparables o mediante una comparación entre el valor normal y los precios de exportación transacción por transacción".

535. En el presente caso, el margen de dumping establecido de conformidad con el artículo 2 del Acuerdo Antidumping es el establecido durante la etapa de investigación, sobre la base de los datos relativos al valor normal y el precio de exportación recopilados respecto del período comprendido entre enero de 1998 y enero de 1999. El "valor mínimo de exportación" determinado en la Resolución Nº 574 no reúne las condiciones de un margen de dumping establecido de conformidad con el artículo 2, puesto que no refleja el valor normal y el precio de exportación conforme a la información facilitada por los exportadores y examinada por la autoridad investigadora.

536. Además, como se refleja en la simulación hipotética presentada en la reclamación 28 *supra*, si los exportadores brasileños optaran por exportar a la Argentina pollos a un precio inferior determinado, se les impondrían derechos antidumping que se percibirían en una cuantía que excedería del margen de dumping constatado en la determinación definitiva.

537. La Argentina, al establecer una medida antidumping variable sobre las importaciones de pollos procedentes del Brasil, que puede exceder del margen de dumping establecido de conformidad con el artículo 2, ha actuado de forma incompatible con el párrafo 3 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping.

iii) Reclamación 30: Incompatibilidad con el párrafo 2.2 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping

Texto del párrafo 2.2 del artículo 12

538. El párrafo 2.2 del artículo 12 establece lo siguiente:

> "En los avisos públicos de conclusión o suspensión de una investigación en la cual se haya llegado a una determinación positiva que prevea la imposición de un derecho definitivo o la aceptación de un compromiso en materia de precios, figurará, o se hará constar de otro modo mediante un informe separado, toda la información pertinente sobre las cuestiones de hecho y de derecho y las razones que hayan llevado a la imposición de medidas definitivas o a la aceptación de compromisos en materia de precios, teniendo debidamente en cuenta lo prescrito en cuanto a la protección de la información confidencial. En el aviso o informe figurará en particular la información indicada en el apartado 2.1, así como los motivos de la aceptación o rechazo de los argumentos o alegaciones pertinentes de los exportadores e importadores, y la base de toda decisión adoptada en virtud del apartado 10.2 del artículo 6."

Argumento jurídico relativo a la Reclamación 30

539. La cuestión que se plantea al Grupo Especial es si en la determinación definitiva se ha proporcionado información suficiente para cumplir las prescripciones del párrafo 2.2 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping acerca de la forma en que la autoridad argentina calculó el "valor mínimo de exportación" establecido en la Resolución Nº 574/2000.

540. La Resolución Nº 574/2000 es el aviso público de conclusión que prevé la imposición de un derecho definitivo. En ella se impusieron medidas antidumping en forma de derechos antidumping específicos que se percibirían en una cuantía equivalente a la diferencia absoluta entre el precio FOB facturado en cada envío y un "valor mínimo de exportación" designado, fijado también como un precio FOB, aplicable siempre que el primero fuese inferior al último. En la Resolución Nº 574/2000 no se facilitó ninguna explicación acerca de la forma en que la Argentina calculó el "valor mínimo de exportación".

541. El párrafo 2.2 del artículo 12 exige que en los avisos públicos de una determinación que prevea la imposición de un derecho definitivo figure, o se haga constar de otro modo mediante un informe separado, toda la información pertinente sobre las cuestiones de hecho y de derecho y las razones que hayan llevado a la imposición de medidas definitivas.

542. La Argentina no facilitó información pertinente sobre las razones por las que no se aplicó el margen establecido en la determinación definitiva ni sobre la forma en que se calculó el "valor mínimo de exportación".

543. El Brasil considera que la aplicación de las medidas antidumping forma parte de la información pertinente que debe figurar en el aviso público de la determinación que prevea la imposición de un derecho definitivo. Un exportador tiene derecho a saber cómo ha considerado la autoridad investigadora la información y los argumentos presentados durante la investigación y cómo se ha utilizado esa información para llegar a una medida antidumping.

544. La Argentina, al no facilitar en el aviso público información pertinente sobre la forma en que la autoridad investigadora estableció un "valor mínimo de exportación" y las razones de haberlo establecido, ha incumplido lo dispuesto en el párrafo 2.2 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping.

V. CONCLUSIÓN Y PETICIONES

A. CONCLUSIÓN

545. En las reclamaciones expuestas en la Parte III de la presente comunicación se exponen los elementos de hecho y fundamentos jurídicos por los que el Brasil considera que la Argentina ha actuado de forma incompatible con el GATT de 1994 y con las diversas disposiciones del Acuerdo Antidumping. El Brasil considera que nunca debió haberse iniciado el procedimiento antidumping que llevó a la aplicación de medidas antidumping definitivas a las importaciones de pollos procedentes del Brasil (Parte III.B de la presente comunicación - Iniciación de la investigación antidumping). No sólo no se incluyeron con la solicitud pruebas pertinentes que pudieran considerarse suficientes para cumplir los requisitos de las pruebas necesarias en una solicitud, sino que además las autoridades argentinas no examinaron la exactitud y pertinencia de esas pruebas para justificar la iniciación de la investigación. Al no hacerlo, las autoridades argentinas no rechazaron la solicitud sobre la base de la inexistencia de pruebas suficientes de dumping y de daño.

546. Una vez iniciada indebidamente la investigación por la Argentina, las autoridades argentinas actuaron de forma incompatible con las normas sobre notificación, avisos públicos, pruebas y reglas generales de procedimiento establecidas en el Acuerdo Antidumping (Parte III.C de la presente comunicación - Realización de la investigación antidumping - Requisitos en materia de pruebas y

avisos públicos). El incumplimiento de esas disposiciones del Acuerdo ha menoscabado el derecho de los exportadores a la "plena oportunidad" de defender sus intereses en la investigación de que se trata. Además, en las determinaciones definitivas de la existencia de dumping y de la existencia de daño hay importantes errores en relación con el establecimiento del valor normal, los ajustes del valor normal, el precio de exportación, la comparación equitativa; el examen del daño, y sus elementos y el establecimiento de la rama de producción nacional (Parte III.D de la presente comunicación - Realización de la investigación antidumping y determinación positiva definitiva).

547. Al imponer medidas definitivas, la Argentina vició aún más el procedimiento al imponer derechos que pueden exceder del margen de dumping constatado en la determinación definitiva y que, por consiguiente, pueden ser percibidos en una cuantía inapropiada (Parte III.E de la presente comunicación - Establecimiento y percepción de derechos antidumping como resultado de la investigación antidumping).

548. Por último, el Brasil observa que, de conformidad con el párrafo 8 del artículo 3 del ESD, se presume que la medida constituye un caso de anulación o menoscabo de los beneficios derivados del Acuerdo abarcado. De conformidad con ello y con las reclamaciones expuestas en la presente comunicación, en la medida en que la Argentina haya actuado de forma incompatible con las disposiciones del Acuerdo Antidumping, ha anulado o menoscabado beneficios derivados para el Brasil del Acuerdo.

B. PETICIONES

549. Por las razones expuestas, el Brasil solicita respetuosamente al Grupo Especial que constate que la Argentina ha actuado de forma incompatible con el Acuerdo Antidumping con arreglo a lo expuesto en las reclamaciones formuladas, que se resumen de la siguiente forma:

- la iniciación por la Argentina del procedimiento antidumping contra los pollos procedentes del Brasil es incompatible con los párrafos 2, 3, 7 y 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping;

- la iniciación y realización por la Argentina de la investigación antidumping con respecto de los pollos procedentes del Brasil fue incompatible con el párrafo 1 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping;

- la realización por la Argentina de la investigación antidumping respecto de los pollos procedentes del Brasil fue incompatible con los párrafos 1.1, 1.2, 1.3, 2 y 8 del artículo 6, los párrafos 3, 5, 6 y 7 del Anexo II y los párrafos 9 y 10 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping;

- la determinación definitiva de la existencia de dumping de la Argentina respecto de los pollos procedentes del Brasil es incompatible con los párrafos 4 y 4.2 del artículo 2 y el párrafo 2.2 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping;

- la determinación definitiva de la existencia de daño de la Argentina respecto de los pollos procedentes del Brasil es incompatible con los párrafos 1, 2, 4 y 5 del artículo 3 y el párrafo 2.2 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping;

- la determinación definitiva de la existencia de daño y la imposición por la Argentina de medidas antidumping definitivas respecto de los pollos procedentes del Brasil son incompatibles con el párrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo Antidumping; y

- la imposición de las medidas antidumping definitivas por la Argentina respecto de los pollos procedentes del Brasil es incompatible con los párrafos 2 y 3 del artículo 9 y el párrafo 2.2 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping.

550. En consecuencia, el Brasil solicita respetuosamente que el Grupo Especial:

- recomiende al OSD que pida a la Argentina que ponga esas medidas en conformidad con el GATT de 1994 y el Acuerdo Antidumping;

- ejercite su derecho de sugerir la forma en que la Argentina podría aplicar las recomendaciones del Grupo Especial, de conformidad con lo previsto en el párrafo 1 del artículo 19 del ESD; y

- sugiera, a la luz de las numerosas infracciones del Acuerdo Antidumping, generadoras de consecuencias, que la Argentina derogue inmediatamente la Resolución Nº 574/2000 por la que se imponen derechos antidumping definitivos.

ANEXO A-2

DECLARACIÓN ORAL DEL BRASIL - PRIMERA REUNIÓN
CON EL GRUPO ESPECIAL

(25 de septiembre de 2002)

INTRODUCCIÓN

1. El Brasil agradece la oportunidad de comparecer ante el Grupo Especial para explicar su posición en la presente diferencia. Desearíamos manifestar al Grupo Especial y a la Secretaría nuestro reconocimiento por el tiempo y los esfuerzos que han consagrado a este asunto.

2. En la presente declaración, el Brasil no repetirá los argumentos que ya ha expuesto en su Primera comunicación y se limitará a ocuparse de algunas de las cuestiones fundamentales que se plantean al Grupo Especial a la luz de los argumentos expuestos por la Argentina en su Primera comunicación.

3. No obstante, antes de analizar los argumentos específicos de la Argentina, desearíamos tratar una cuestión que plantea en su Primera comunicación. Se trata de la pretensión de este país de que la diferencia sometida a este Grupo Especial ha sido previamente "debatida y resuelta" en un Tribunal Arbitral Ad Hoc del MERCOSUR. La Argentina indica que, por esta razón, el Grupo Especial debería desestimar la reclamación del Brasil.

EL TRIBUNAL AD HOC DEL MERCOSUR: *Res judicata*

4. Aunque no lo dice claramente en su Primera comunicación, la Argentina parece alegar que la resolución del Tribunal del MERCOSUR sobre la diferencia produce efectos de *res judicata*.[1] Conforme al principio de *res judicata*, la resolución definitiva de un tribunal o un órgano jurisdiccional competente sobre el fondo de un asunto es firme en lo que respecta a los derechos de las partes y de quienes les sucedan en su derecho, y les impide absolutamente ejercitar cualquier acción relativa a la misma reclamación, demanda o causa de acción. Dicho de otro modo, el principio de *res judicata* sólo es aplicable cuando la acción posterior concierne a las mismas partes, las mismas medidas y las mismas reclamaciones que la acción anterior.

5. Una vez dicho esto, hemos de subrayar que aunque en la presente diferencia las partes que intervienen ante el Grupo Especial (el Brasil y la Argentina) y la medida impugnada (la Resolución Nº 574/2000) son las mismas, no lo son las reclamaciones que se plantean en ella.

6. Dado que la Argentina ha expuesto detenidamente su argumento, quisiéramos explicar que el asunto sometido al Tribunal del MERCOSUR debería haberse decidido conforme a las normas antidumping del MERCOSUR para el comercio intrarregional. No obstante, el Tribunal del MERCOSUR consideró que las normas antidumping del MERCOSUR para el comercio intrarregional no estaban efectivamente en vigor. En ese contexto, el tribunal constató que los Estados miembros del MERCOSUR podían aplicar su legislación nacional antidumping con respecto al comercio regional. El Tribunal llegó además a la conclusión de que no debía adoptar ninguna decisión sobre ninguna de las cuestiones sustantivas concernientes a la investigación, como la existencia de dumping, de daño, a la rama de producción nacional y de una relación causal entre el dumping y el daño.

[1] Primera comunicación de la Argentina, párrafo 17.

7. El Brasil señala que los árbitros del MERCOSUR se ocuparon de la controversia en el marco del Protocolo de Brasilia, el mecanismo de solución de controversias que se aplica exclusivamente a los textos legales del MERCOSUR, es decir, al Tratado de Asunción y a todos los demás acuerdos y decisiones que forman el marco legal del MERCOSUR.

8. Las reclamaciones que el Brasil plantea al Grupo Especial no se refieren a la interpretación, aplicación o incumplimiento de las disposiciones de ninguno de los textos del MERCOSUR, sino a la compatibilidad de la investigación antidumping realizada por la Argentina y de la medida adoptada por ese país con las disposiciones del Acuerdo Antidumping y del artículo VI del GATT de 1994, cuestión que nunca abordaron los árbitros del MERCOSUR.

9. Tomamos nota especialmente de que el Paraguay aduce también, en su comunicación de tercero, que la resolución del Tribunal Arbitral Ad Hoc del MERCOSUR produce efectos de *res judicata*.[2] Al desarrollar su argumentación, el Paraguay considera pertinente hacer referencia al Protocolo de Olivos. A este respecto, el Brasil desea simplemente recordar que el Protocolo de Olivos no está aún en vigor.

10. En todos caso, lo que el Paraguay y la Argentina plantean al Grupo Especial es una situación en la que puede haber discrepancias entre los miembros del MERCOSUR en cuanto a sus derechos y obligaciones en virtud de los textos legales del MERCOSUR. Ahora bien, el artículo 1 del ESD limita la competencia de este Grupo Especial a las diferencias planteadas de conformidad con los "acuerdos abarcados" (los enumerados en el Apéndice 1 del ESD), el "Acuerdo sobre la OMC" y el ESD, tomados aisladamente o en combinación con cualquiera otro de los acuerdos abarcados. Ni el Protocolo de Brasilia ni el Protocolo de Olivos están enumerados en el artículo 1 del ESD.

11. Al formular ante el Grupo Especial esta alegación de *res judicata*, la Argentina no cita en apoyo de su pretensión ninguna disposición de los textos legales de la OMC. Se limita a hacer referencia al párrafo 2 del artículo 3 del ESD, sin indicar claramente en qué sentido esta disposición apoya el argumento basado en el principio de *res judicata*, lo que no es de extrañar, ya que el párrafo 2 del artículo 3 se refiere exclusivamente a la aclaración de las disposiciones vigentes del Acuerdo sobre la OMC y no concierne en absoluto a la relación entre resoluciones anteriores de un tribunal internacional y los derechos y obligaciones de los Miembros de la OMC en virtud de los "acuerdos abarcados", el "Acuerdo sobre la OMC" y el ESD.

12. Lo que el párrafo 2 del artículo 3 del ESD dice es que el sistema de solución de diferencias de la OMC "sirve para preservar los derechos y obligaciones de los Miembros en el marco de los acuerdos abarcados y para aclarar las disposiciones vigentes de dichos acuerdos de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional público". En realidad, el párrafo 2 del artículo 3 avala el derecho del Brasil a someter al Grupo Especial sus reclamaciones, con arreglo a las cuales la medida antidumping de la Argentina menoscaba derechos del Brasil en el marco de la OMC.

INICIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING

a) Párrafo 2 del artículo 5: Pruebas incluidas con la solicitud

13. Con respecto a las reclamaciones relativas a la infracción del párrafo 2 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping, la Argentina aduce que un solicitante no está obligado a probar de forma indubitable la existencia del dumping, pero reconoce que no basta la simple afirmación de la existencia de dumping, daño y relación causal si esa afirmación no se encuentra apoyada en pruebas

[2] Comunicación del Paraguay, párrafo 5.

pertinentes. Según la Argentina, las pruebas pertinentes que apoyan una solicitud están condicionadas a la información que "razonablemente tenga a su alcance" el solicitante.[3]

14. La Argentina afirma que hay dos niveles de exigencia en cuanto a la calidad y cantidad de las pruebas que deben ser aportadas. El primero corresponde a las pruebas presentadas con una solicitud de iniciación, que a tenor del Acuerdo son aquellas que "razonablemente tenga a su alcance" el solicitante. El segundo es el que corresponde a aquellas pruebas que deben aportarse una vez que se inicia la investigación. A este respecto, la Argentina cita varios informes anteriores de grupos especiales de la OMC que apoyan la idea de que el peso y la calidad de las pruebas exigidas antes de la iniciación necesariamente han de ser menores que las exigidas para una determinación definitiva.[4]

15. El Brasil comparte esa opinión. Sin embargo, lo que la Argentina no dice es que anteriores grupos especiales de la OMC han constatado también que **no obstante** las pruebas necesarias en el momento de la iniciación han de ser **pertinentes** a efectos de establecer los elementos prescritos en el Acuerdo, y que el **tipo** de pruebas necesarias para justificar la iniciación es **el mismo** que el de las pruebas necesarias para formular una determinación preliminar o definitiva de dumping, aun cuando su cantidad y calidad sean menores.

16. La existencia en la solicitud de pruebas pertinentes del tipo necesario para llevar a cabo una investigación reviste especial importancia cuando de los propios términos de la solicitud se desprende claramente la necesidad ineludible de efectuar ajustes en los datos relativos al valor normal y al precio de exportación.

17. Dicho esto, hay que señalar que la Argentina no ha expuesto argumentos ni ha indicado las pruebas presentadas con la solicitud para demostrar que: 1) los pollos vendidos en el Brasil eran diferentes físicamente de los exportados a la Argentina; 2) las supuestas diferencias en las características físicas influían efectivamente en la comparabilidad de los precios y 3) la diferencia de rendimiento alegada por el solicitante fuera correcta.

18. En la comunicación del Brasil hemos puesto de manifiesto que el solicitante, al proponer el ajuste del cálculo para compensar la supuesta diferencia entre los pollos vendidos en el Brasil y los pollos exportados a la Argentina, no presentó "pruebas" -es decir, datos extraídos de una fuente documental tendentes a probar un hecho o una proposición- que justificaran ese ajuste. De forma análoga, tampoco se presentó ninguna prueba que pusiera de manifiesto que la comparabilidad de los precios podía verse afectada o que justificara el rendimiento indicado por el solicitante.

19. El Brasil ha puesto asimismo de manifiesto que el valor normal indicado en la solicitud correspondía a un solo día de 1997 (el 30 de junio), en tanto que los datos relativos a las exportaciones abarcaban un período de seis meses de 1997 (los meses comprendidos de enero a mayo y el mes de agosto). Según el Acuerdo Antidumping, debe realizarse una comparación equitativa sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible. Con los datos facilitados en la solicitud, no sería posible realizar una comparación de ese tipo.

20. La Argentina argumenta repetidamente que las pruebas pertinentes en apoyo de una solicitud dependen de la información que el solicitante "tenga razonablemente a su alcance".[5] Hemos indicado ya que la información sobre el valor normal correspondiente a la totalidad de los años 1996 y 1997 estaba razonablemente al alcance del solicitante, aunque éste sólo presentara información sobre el

[3] Primera comunicación de la Argentina, párrafo 34.

[4] Primera comunicación de la Argentina, párrafo 37.

[5] Primera comunicación de la Argentina, párrafos 31, 32 y 39.

valor normal con respecto a un día de 1997.[6] El solicitante podía haber adjuntado los precios de los pollos en todos los meses de 1997 publicados por JOX, pero optó por facilitar los precios correspondientes a un solo día de ese año.

b) Párrafo 3 del artículo 5: Exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas con la solicitud

21. Con respecto a las reclamaciones relativas a la infracción del párrafo 3 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping, la Argentina aduce también que el nivel de pruebas suficiente para justificar la iniciación de una investigación es considerablemente inferior al necesario en una determinación de aplicar una medida provisional o definitiva. La Argentina cita en ese sentido algunas partes seleccionadas de anteriores informes de grupos especiales de la OMC.

22. Reiteramos que no ponemos en tela de juicio ese criterio. Lo que la Argentina no dice es que en esos mismos informes se concluye que "cuando de los propios términos de una solicitud se desprenda que hay problemas sustanciales de comparabilidad entre el precio de exportación y el precio en el mercado interno entre los que se establece la comparación, [cabe esperar] que la autoridad investigadora reconozca, al menos, que las diferencias en los precios plantean cuestiones acerca de su comparabilidad, y tenga de algún modo en cuenta la repercusión de esas diferencias en la suficiencia de las pruebas de dumping o recabe la información complementaria necesaria para hacerlo".

23. En el presente caso la autoridad investigadora no tuvo en cuenta la repercusión de las posibles diferencias en la suficiencia de las pruebas presentadas con la solicitud ni recabó más información, como evidentemente era necesario.

24. En relación asimismo con el párrafo 3 del artículo 5, el Brasil ha puesto de manifiesto en su Primera comunicación que la Argentina estableció los precios de exportación -y, consiguientemente, los márgenes de dumping- sobre la base exclusivamente de las transacciones de exportación efectuadas a un precio inferior al valor normal. A este respecto, nos limitamos a remitirnos a la Prueba documental BRA-2. En ella, el Grupo Especial puede comprobar que la autoridad investigadora, de los datos sobre las importaciones presentados con la solicitud, sólo tomó en consideración los correspondientes a las importaciones del producto que entraron en la Argentina a precios inferiores a los del producto vendido en el Brasil.[7]

25. Al seleccionar entre las exportaciones totales indicadas en la solicitud determinadas transacciones, en concreto aquellas que se efectuaron a un precio inferior al valor normal, la Argentina no sólo no examinó la exactitud y pertinencia de todas las pruebas presentadas con la solicitud, sino que incrementó además artificialmente el margen de dumping. Es evidente que la adopción de esta metodología dará lugar en todos los casos a un margen de dumping.

26. Al aclarar la metodología utilizada para establecer el precio de exportación, la Argentina ha dado en su Primera comunicación una explicación diferente de la que figura en la decisión de apertura de investigación. En su Primera comunicación, la Argentina manifiesta que la autoridad investigadora examinó las transacciones de importación "buscando precisar aquellas que más se adecuaban al producto objeto de la investigación, y lo hizo con el único objetivo de realizar un cálculo del precio de exportación lo más apropiado y comparable posible en esta etapa previa a la apertura".[8] Señalamos a la atención de los miembros del Grupo Especial que ésta es una forma retorcida de intentar explicar lo

[6] Primera comunicación del Brasil, párrafo 124.

[7] Páginas 10 y 11 de la Prueba documental BRA-2.

[8] Primera comunicación de la Argentina, párrafos 78 y 79.

que es en realidad una metodología de "reducción a cero". No podemos aceptar la afirmación de que el precio de exportación más apropiado y comparable es aquel que es inferior a los precios del producto vendido en el mercado interno.

27. Además, si la autoridad investigadora hubiera examinado adecuadamente la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas con la solicitud, habría comprobado que los datos sobre el valor normal de la solicitud se referían a un solo día de 1997 y los datos sobre el precio de exportación correspondían a un período de seis meses de ese año. Dado que los precios varían a lo largo de un período, debe realizarse una comparación equitativa sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible, incluso a efectos de la iniciación de una investigación. Es evidente que no es suficiente ni apropiado comparar el valor normal correspondiente a un solo día con precios de exportación correspondientes a un período de seis meses no consecutivos.

REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING: REQUISITOS RELATIVOS A LAS PRUEBAS Y AL AVISO PÚBLICO

a) Párrafo 1 del artículo 12: Notificación y aviso público de la iniciación

28. Con respecto a la reclamación relativa a la infracción del párrafo 1 del artículo 12 del Acuerdo, la Argentina aduce que fue imposible efectuar la notificación correspondiente a los siete exportadores, ya que el interés de esas partes se desconocía en el momento en que la autoridad investigadora se cercioró de que existían pruebas suficientes que justificaban la iniciación de la investigación.[9]

29. En primer lugar, es de suma importancia reafirmar que el párrafo 1 del artículo 12 obliga a la autoridad investigadora a efectuar la correspondiente notificación "al Miembro […] cuyos productos vayan a ser objeto de tal investigación **y** a las demás partes interesadas de cuyo interés tenga conocimiento la autoridad investigadora". Esa obligación recae exclusivamente en la autoridad investigadora. La Argentina trata de hacer compartir esa obligación al Brasil cuando afirma que notificó al Brasil la iniciación de la investigación y solicitó su colaboración a efectos de identificar a los productores y exportadores interesados en la investigación.[10]

30. En segundo lugar, sencillamente no es cierto que la Argentina no notificara la iniciación de la investigación a esos siete exportadores porque desconociera que se trataba de partes que tenían interés en ella. Como se expone en el párrafo 199 y se demuestra con la Prueba documental BRA-2 de la Primera comunicación del Brasil, al menos cinco (Comaves, Catarinense, Minuano, Chapecó y Perdigão) de los siete exportadores brasileños a los que no se notificó la iniciación figuraban en la lista de exportadores brasileños de la determinación de apertura de la investigación.[11]

31. A pesar de saber que esos siete exportadores eran partes interesadas en la investigación, la Argentina sólo les hizo la correspondiente notificación ocho meses después de que se hubiera iniciado la investigación.

[9] Primera comunicación de la Argentina, párrafo 110.

[10] Primera comunicación de la Argentina, párrafos 112 a 116.

[11] Prueba documental BRA-2, página 5.

b) Párrafo 1.1 del artículo 6: Plazos para la respuesta

32. Con respecto a la reclamación relativa a la infracción del párrafo 1.1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping, la Argentina afirma que dio a los exportadores un plazo de más de 30 días para dar respuesta al cuestionario.

33. Esa afirmación no es cierta. El Brasil ha aportado como Prueba documental BRA-13 las cartas dirigidas por la DCD a los siete exportadores brasileños en las que se les invita a dar respuesta al cuestionario en un plazo no superior a 20 días contados desde la fecha de recepción de la carta. Es evidente que, por sus propios términos, el plazo impuesto por la DCD en esas cartas era incompatible con el plazo de 30 días prescrito en el párrafo 1.1 del artículo 6 del Acuerdo.

34. En el párrafo 133 de su Primera comunicación, la Argentina confirma que remitió el cuestionario a los exportadores brasileños Catarinense, Chapecó, Minuano, Perdigão, Comaves y Penabranca el 15 de septiembre de 1999, pero no informa al Grupo Especial de que en esa comunicación del 15 de septiembre, la DCD concedía un plazo "no mayor a los 20 días a partir de la recepción de la [comunicación]".[12]

35. Reafirmamos también que la CNCE nunca notificó a esos siete exportadores la investigación y la necesidad de dar respuesta al cuestionario sobre el daño. De hecho, esos exportadores no recibieron nunca el cuestionario. La Argentina confirma que la CNCE remitió el cuestionario sobre el daño solamente a ocho exportadores; de hecho, sólo cinco lo recibieron.[13] Al no remitir el cuestionario sobre el daño a todos los exportadores intervinientes en la investigación, la Argentina menoscabó su derecho a defenderse, infringiendo además el párrafo 1.1 del artículo 6.

c) Párrafo 1.2 del artículo 6: Las pruebas presentadas … se pondrán inmediatamente a disposición …

36. Con respecto a la reclamación relativa a la infracción del párrafo 1.2 del artículo 6 del Acuerdo, el Brasil ha establecido ya que la Argentina sabía en el momento de la iniciación que esos exportadores eran partes interesadas en la investigación. Hemos aportado también pruebas de que la investigación y la necesidad de intervenir en ella se notificaron a esos exportadores ocho meses después de que se hubiera iniciado ya la investigación. Esas pruebas están recogidas en la Prueba documental BRA-13 de la comunicación del Brasil.

37. A este respecto, cabe preguntarse cómo podría considerarse que las pruebas presentadas por escrito por las demás partes interesadas en la investigación se pusieron "inmediatamente", como prescribe el párrafo 1.2 del artículo 6, a disposición de esos siete exportadores, siendo así que la notificación a efectos de su participación en la investigación se les hizo ocho meses después de que se hubiera iniciado la investigación y cuando se había formulado ya una determinación preliminar de la existencia de dumping, de daño y de la correspondiente relación causal.

d) Párrafo 1.3 del artículo 6: Facilitarán … el texto completo de la solicitud escrita

38. Con respecto a la reclamación relativa a la infracción del párrafo 1.3 del artículo 6 del Acuerdo, la Argentina aduce en primer lugar que en el texto de la versión española del Acuerdo, la palabra correspondiente al término inglés *to provide* es "facilitar". En consecuencia, basándose en la versión española del Acuerdo, la Argentina alega que las autoridades investigadoras cumplieron los requisitos del párrafo 1.3 del artículo 6 cuando pusieron la solicitud escrita a disposición de las partes interesados una vez iniciada la investigación.

[12] Prueba documental BRA-13.

[13] Primera comunicación de la Argentina, párrafo 135.

39. De hecho, conforme a una interpretación razonable del párrafo 1.3 del artículo 6, se impone la conclusión de que la Argentina estaba obligada a proporcionar al Gobierno del Brasil y a los exportadores el texto completo de la solicitud escrita. La tesis de la Argentina de que el verbo "facilitar" puede entenderse en el sentido de que las autoridades sólo estaban obligadas a poner a su "disposición" dicho texto es errónea.

40. En la primera frase del párrafo 1.3 del artículo 6 del Acuerdo se dispone que "tan pronto como se haya iniciado la investigación, las autoridades facilitarán a los exportadores que conozcan y a las autoridades del [Miembro] exportador el texto completo de la solicitud escrita presentada de conformidad con el párrafo 1 del artículo 5 y lo pondrán a disposición de las otras partes interesadas intervinientes que lo soliciten".

41. El párrafo 1.3 del artículo 6 del Acuerdo diferencia cuidadosamente la obligación de las autoridades investigadoras con respecto a los exportadores y al Miembro exportador de su obligación con respecto a las otras partes interesadas. En el primer caso, la autoridad investigadora debe "facilitar" de forma activa el texto completo de la solicitud escrita al Miembro exportador y a los exportadores intervinientes en la investigación; en el segundo, debe "poner a disposición" de las otras partes interesadas que lo soliciten ese texto. El Brasil entiende que si hubiera de considerarse que la obligación impuesta a la autoridad investigadora es la misma en el caso de los exportadores y del Miembro exportador que en el de las otras partes interesadas, no habría sido necesario que en el texto del párrafo 1.3 del artículo 6 se recogiera esta diferencia.

42. El mismo razonamiento es aplicable al texto de la versión española. La obligación impuesta a las autoridades investigadoras de "facilitar" (*to provide*) el texto completo de la solicitud escrita a los exportadores y el Miembro exportador es distinta de la obligación que se impone a esas autoridades de "poner a disposición" (*make available*) de las otras partes interesadas ese texto. Por último, el Diccionario de la Real Academia Española define "facilitar" como "proporcionar o entregar", definición enteramente compatible con el término "provide" utilizado en el texto de la versión inglesa.

e) Párrafo 8 del artículo 6: Los hechos de que se tenga conocimiento

43. Con respecto a las reclamaciones relativas a la indebida utilización por la Argentina de los hechos de que se tenía conocimiento, hay que señalar que la autoridad prescindió de las respuestas de los exportadores brasileños acerca de la descripción del producto exportado a la Argentina y del producto vendido en el Brasil, y aplicó en lugar de tenerlas en cuenta el ajuste del valor normal propuesto en la solicitud. La Argentina aduce que fue imposible tener en cuenta las alegaciones de los exportadores debido a la falta de respaldo documental que pudiera ser verificado.

44. Hemos puesto de manifiesto mediante la aportación de las Pruebas documentales BRA-22, BRA-23, BRA-24 y BRA-26, que los exportadores Sadia, Avipal y Frangosul informaron de que los pollos exportados a la Argentina eran idénticos a los pollos vendidos en el Brasil. Hemos demostrado también con la Prueba documental BRA-25 que el exportador brasileño Catarinense informó de que, en relación con los dos tipos de pollos (broiler y griller), había una diferencia entre los pollos de tipo broiler exportados a la Argentina y los pollos de ese mismo tipo vendidos en el Brasil: los pollos de tipo broiler exportados por Catarinense a la Argentina no incluían cabeza ni patas, y los vendidos en el Brasil incluían la cabeza, pero no las patas.

45. Aun cuando los exportadores aportaron esta importante información dentro de un plazo prudencial y la autoridad no formuló preguntas acerca de la misma a los exportadores -ni solicitó más aclaraciones-, la DCD optó por aplicar el arbitrario ajuste del valor normal propuesto en la solicitud por el solicitante.

46. La Argentina alega que la información comunicada en los cuestionarios no iba acompañada de respaldo documental que pudiera ser verificado.

47. Como puede observar el Grupo Especial, no sólo en los cuestionarios no se indicaba que era preciso que la información facilitada fuera acompañada de documentos que la respaldaran, sino que, además, la autoridad no solicitó en ningún momento de la investigación documentación justificante para verificar la descripción del producto hecha por esos exportadores. Las autoridades investigadoras tampoco informaron nunca a los exportadores, de conformidad con lo previsto en el párrafo 6 del Anexo II, de que las pruebas y la información facilitadas por ellos no habían sido aceptadas.

48. Además, la autoridad investigadora decidió que la información presentada por el solicitante con la solicitud, sin ningún respaldo documental, era más "exacta" y "verificable" que la información precisa facilitada por los exportadores acerca de su propio producto. Recordamos que la información utilizada por el solicitante en la solicitud para indicar que era necesario un ajuste del valor normal se basaba en información de JOX relativa a los pollos refrigerados, con cabeza y patas, vendidos en el mercado mayorista de São Paulo. Los datos de JOX correspondían a pollos refrigerados, con cabeza y patas, un producto distinto del producto objeto de la investigación, los pollos congelados con cabeza y patas.

49. Recordamos que los exportadores en cuestión invitaron a la autoridad investigadora a verificar *in loco* sus respuestas, pero las autoridades decidieron no llevar a cabo la correspondiente visita de verificación. El Brasil entiende que, en el presente caso, incluso la información presentada sin respaldo documental era, no obstante, información que podía ser verificada. La Argentina parece confundir información "verificable", es decir, información "que puede ser verificada" con información "que no ha sido aún verificada".

50. Además, el párrafo 7 del Anexo II obliga a la autoridad investigadora a actuar "con especial prudencia" si tiene que basar sus conclusiones, entre ellas las relativas al valor normal, en una fuente secundaria, incluida la información que figure en la solicitud de iniciación presentada por el solicitante. La Argentina no actuó con "especial prudencia" cuando descartó injustificadamente las respuestas facilitadas por los exportadores a que nos referimos y decidió aplicar el arbitrario ajuste del valor normal propuesto por el solicitante en la solicitud.

REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING: DETERMINACIÓN POSITIVA DEFINITIVA

a) Párrafo 4 del artículo 2: Comparación equitativa

51. Con respecto a la reclamación según la cual la Argentina no tuvo debidamente en cuenta los fletes en el valor normal en el caso de dos exportadores, la Argentina alega que la autoridad investigadora no podía haber efectuado el ajuste en función de los fletes, a pesar de que Sadia comunicó que había justificación para efectuarlo, porque las deducciones correspondientes no tenían el respaldo documental apropiado.

52. La Argentina, aunque considera que este ajuste tiene "un claro e importante impacto en la comparabilidad de precios"[14] estima, no obstante, que hubiera sido incorrecto por parte de la autoridad investigadora efectuar ese descuento específico. Según la Argentina, no se presentó ninguna prueba documental, y la información facilitada por el exportador era demasiado general para utilizarla.

53. La Argentina, a pesar de saber que ese ajuste estaba justificado y tenía "un claro e importante impacto" en la comparación de los precios, optó simplemente por no efectuarlo, en lugar de recurrir a una fuente secundaria de información para estimar esa deducción, como hizo en el caso del ajuste del valor normal para compensar las supuestas diferencias entre los pollos exportados a la Argentina y los pollos vendidos en el Brasil.

[14] Primera comunicación de la Argentina, párrafo 211.

54. En lo que respecta al hecho de que la Argentina no tuviera debidamente en cuenta las diferencias de tributación, ni las diferencias en los fletes y en los costos financieros en el valor normal establecido para todos los demás exportadores, es importante que el Grupo Especial no se deje confundir por los imprecisos argumentos de la Argentina.

55. En el curso de la investigación, la DCD pidió a JOX que aclarara los impuestos incluidos en los precios publicados y que se habían utilizado para establecer el valor normal en la determinación preliminar.[15] En la determinación definitiva, la DCD se limitó a manifestar que JOX facilitó la información en idioma portugués.[16] Destacamos que en la determinación definitiva las autoridades no facilitaron otra explicación aparte de señalar que la información de JOX estaba en portugués.

56. En la etapa de consultas de la presente diferencia, el Brasil solicitó una explicación de las razones por las que las autoridades investigadoras descartaron la información facilitada por JOX. La Argentina respondió que JOX presentó la información en idioma portugués, lo que no era conforme a los requisitos formales establecidos por las leyes y reglamentos administrativos de la Argentina para los procedimientos administrativos.

57. La Argentina da ahora, en su Primera comunicación, una respuesta totalmente diferente. Aduce que para que sea equitativa, la comparación debe hacerse en el mismo nivel comercial, y que ésa es la razón por la que no se tuvieron en cuenta las deducciones indicadas por JOX, ya que de haberlo hecho se habría establecido una comparación entre un precio ex fábrica para el valor normal y un precio FOB para el precio de exportación.

58. Hay que destacar que, a todos los demás efectos, incluido el ajuste del valor normal, la Argentina utilizó la información de JOX. Con respecto a las supuestas diferencias en las características, la DCD utilizó la información de JOX, a pesar de que los exportadores presentaron información en la que se indicaba y probaba que no había tales diferencias. Con respecto al valor normal de todos los demás exportadores, la DCD también utilizó toda la restante información facilitada por JOX al establecer el valor normal.

59. Un precio ex fábrica es el que no incluye ninguna carga, puesto que corresponde al precio en la fábrica. Un precio FOB incluye los fletes internos hasta el puerto de exportación, el seguro nacional y los gastos de manipulación y carga. Los precios FOB no incluyen los impuestos ni los costos financieros. Dicho esto, y teniendo en cuenta la información facilitada por JOX, la autoridad investigadora debería haber realizado en el valor normal deducciones correspondientes a los impuestos y a los costos financieros incluidos en los precios publicados por JOX. Esas deducciones habrían permitido hacer una comparación equitativa en el mismo nivel comercial.

60. Con respecto a la reclamación según la cual la Argentina ajustó indebidamente el valor normal en función de supuestas diferencias en las características físicas, las autoridades descartaron también en este caso toda la información presentada por los exportadores, aduciendo que no existía respaldo documental, Las autoridades nunca solicitaron la documentación justificante, ni tomaron la iniciativa de verificar la información facilitada.

61. En su reclamación relativa a la infracción del párrafo 4 del artículo 2, el Brasil sostiene que la Argentina impuso una carga probatoria no razonable a los exportadores Sadia, Avipal y Frangosul al permitir que los exportadores presentaran información sobre el valor normal y el precio de exportación correspondiente a los años 1996-1999, en tanto que posteriormente se fijó como período de investigación con respecto al dumping el comprendido entre enero de 1998 y enero de 1999.

[15] Prueba documental BRA-32.

[16] Prueba documental BRA-15.

62. La Argentina admite que se abstuvo deliberadamente de definir el período de recopilación de datos a efectos del dumping[17], y trata de justificar su modo de proceder afirmando que el Acuerdo no define el período de recopilación de datos. La Argentina añade que la autoridad tiene discrecionalidad para solicitar la documentación que considere necesaria a los efectos de la determinación de dumping, pudiendo requerir mayor información, en tanto la misma sea necesaria para garantizar el debido proceso.

63. El Brasil admite que el Acuerdo Antidumping no define el período de recopilación de datos ni establece cuál debe ser éste. No obstante, en el párrafo 2 de su artículo 4 se estipula que las autoridades investigadoras tienen la obligación de indicar a las partes qué información se necesita para garantizar una comparación equitativa y no pueden imponer a éstas una carga probatoria que no sea razonable.

64. Hasta octubre de 1999, nueve meses después de que se hubiera iniciado la investigación y una vez que ya se había formulado una determinación preliminar y Sadia, Avipal y Frangosul habían presentado sus respuestas al cuestionario con información sobre el valor normal y el precio de exportación respecto de los años 1996 a 1999, la DCD no estableció que el período de recopilación de datos a efectos del dumping sería el comprendido entre enero de 1998 y enero de 1999. El tiempo y los recursos dedicados por esos exportadores a reunir los datos correspondientes al valor normal y el precio de exportación de 1996 a 1999 representan una carga probatoria no razonable impuesta a los mismos.

65. Además, se impuso también una carga probatoria excesiva a los exportadores Sadia, Avipal y Frangosul cuando la autoridad investigadora pidió a esos exportadores que facilitaran una copia de la factura de cada una de las transacciones de venta realizadas en el mercado interno para establecer el valor normal, y, consecuentemente, hacer una "comparación equitativa".

66. Los exportadores citados enviaron a la DCD sendas cartas en las que manifestaban que debido al gran volumen de las ventas de pollos en el Brasil les resultaba imposible adjuntar todas las facturas correspondientes a esas transacciones. Los exportadores adjuntaban como muestra las facturas correspondientes a algunas transacciones e invitaban además a la autoridad investigadora a verificar *in loco* las respuestas facilitadas, así como a comprobar que éstas eran exactas y completas.[18] La DCD optó por no verificar las respuestas de estos exportadores.

b) Artículo 3: Determinación de la existencia de daño

67. Las reclamaciones del Brasil relativas a la infracción de los párrafos 1, 4 y 5 del artículo 3 y del párrafo 2.2 del artículo 12 del Acuerdo se refieren a la utilización de períodos diferentes para evaluar los factores e índices económicos pertinentes enumerados en el párrafo 4 del artículo 3 y a la inexistencia en la determinación definitiva de una explicación de las razones por las que la autoridad investigadora decidió examinar los factores e índices económicos pertinentes tomando como base para hacerlo períodos diferentes.

68. También a este respecto trata la Argentina de inducir a confusión al Grupo Especial, argumentando que en los casos de amenaza de daño, la normativa internacional y la práctica concordante prevén la posibilidad de analizar datos correspondientes a un período más largo que el

[17] Primera comunicación de la Argentina, párrafo 243.

[18] Pruebas documentales BRA-26, BRA-29 y BRA-31.

período de investigación a efectos de indagar la existencia o no de una tendencia creciente de las importaciones.[19]

69. Hay que subrayar que no es ésa la cuestión que se plantea al Grupo Especial. No impugnamos la posibilidad de que en un caso de amenaza de daño la autoridad investigadora analice o no datos correspondientes a un período mayor que el período de investigación. Lo que impugnamos es el hecho de que, en la investigación de que se trata, la autoridad tomara en consideración un determinado período de análisis del daño para unos factores y otro período para otros.

70. En la determinación definitiva, la CNCE declaró que el período analizado era el comprendido entre enero de 1996 y diciembre de 1998. No obstante, con respecto únicamente a algunas variables, como la producción nacional, los precios, las importaciones, las exportaciones y el consumo aparente, la autoridad incluyó datos correspondientes al primer semestre de 1999.

71. A este respecto, los Estados Unidos discrepan de la tesis del Brasil de que un análisis de períodos diferentes no puede ser objetivo, por lo que entraña una violación del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo. En apoyo de su opinión, los Estados Unidos citan el informe del Grupo Especial en el asunto *Estados Unidos - Acero laminado en caliente*. En la investigación realizada en ese caso, los Estados Unidos reunieron información sobre todos los factores a lo largo de todo el período de investigación de tres años, y evaluaron en varios casos los distintos factores a lo largo de ese período de tres años.

72. No profundizaremos más en el análisis del informe de ese Grupo Especial porque consideramos que los elementos de hecho de esa investigación y de la reclamación por infracción formulada por el Brasil en el presente caso son muy diferentes. En primer lugar, en el caso que ahora nos ocupa, la autoridad investigadora no reunió información sobre todos los factores a lo largo del mismo período, es decir, de enero de 1996 a diciembre de 1998. El período de análisis del daño para los factores producción nacional, precios, importaciones, exportaciones y consumo aparente fue el comprendido entre enero de 1996 y junio de 1999. En segundo lugar, las autoridades argentinas no evaluaron todos los factores enumerados en el párrafo 4 del artículo 3 en relación con el mismo período de análisis del daño.

73. Entendemos que lo que aducen los Estados Unidos es que, dentro de un determinado período de análisis del daño, la autoridad investigadora puede comparar los datos correspondientes a determinados años sin analizar expresamente los datos correspondientes a otros. No obstante, en ese supuesto todos los factores son analizados dentro de un período definido de análisis del daño. En el presente caso, a diferencia del citado por los Estados Unidos, las autoridades argentinas decidieron que para determinados factores el período de análisis de daño fuera el comprendido entre enero de 1996 y diciembre de 1998 y para otros el comprendido entre enero de 1996 y junio de 1999. Lo que las autoridades investigadoras no pueden hacer -y de ahí nuestra reclamación relativa a la infracción de los párrafos 1 y 4 del artículo 3 del Acuerdo- es establecer un determinado período de análisis del daño para unos factores y otro distinto para otros.

74. En relación con la reclamación según la cual el análisis del daño realizado por la CNCE en la determinación definitiva fue un análisis viciado, porque la CNCE no excluyó de las "importaciones objeto de dumping" analizadas las procedentes de los exportadores brasileños Nicolini y Seara, la Argentina aduce que en la determinación definitiva sobre la relación de causalidad, la autoridad tuvo en cuenta la determinación de inexistencia de dumping para las exportaciones efectuadas por Nicolini y Seara.[20] La afirmación de la Argentina no es cierta.

[19] Primera comunicación de la Argentina, párrafos 252 a 254.

[20] Primera comunicación de la Argentina, párrafo 266.

75. En primer lugar, como puede comprobar el Grupo Especial en la Prueba documental BRA-14, en ningún momento se hizo referencia en el análisis del daño de la determinación definitiva de la existencia de daño a la exclusión de las "importaciones objeto de dumping" totales analizadas de las procedentes de los exportadores brasileños Nicolini y Seara. Como se indica en el párrafo 450 de la Primera comunicación del Brasil, tenemos conocimiento de ese hecho porque la determinación definitiva de la existencia de daño se formuló el 23 de diciembre de 1999, y fue anterior en seis meses a la determinación definitiva de la existencia de dumping, formulada el 23 de junio de 2000. Fue en la determinación definitiva sobre el dumping donde la autoridad investigadora llegó a la conclusión de que los exportadores Nicolini y Seara no exportaban el producto objeto de investigación a precios de dumping.

76. En su Primera comunicación, la Argentina admite efectivamente que no excluyó del examen del daño las importaciones procedentes de Nicolini y Seara, lo que, en sí mismo, constituye una infracción patente de los párrafos 1, 2 y 4 del artículo 3. Después de todo, es en la determinación de la existencia de daño en la que las autoridades deben examinar el volumen de las importaciones objeto de dumping, sus efectos y su repercusión.

77. Para rectificar esta situación, la Argentina alega que el hecho de que esas importaciones no eran objeto de dumping se tuvo en cuenta al analizar la relación de causalidad.[21] Sin embargo, no hay en la determinación sobre la relación de causalidad indicación alguna de cualquier tipo de que se excluyeran de las "importaciones objeto de dumping" totales las procedentes de Nicolini y Seara. La determinación definitiva sobre la relación de causalidad se limita a reafirmar lo que ya había sido establecido en la determinación definitiva de la existencia de dumping.

78. Con respecto a la reclamación según la cual la Argentina no evaluó todos los factores e índices económicos pertinentes enumerados en el párrafo 4 del artículo 3, la Argentina trata de convencer al Grupo Especial de que esos factores fueron evaluados, citando a tal fin varias páginas de la determinación definitiva de la existencia de daño en las que pretende que se facilitó la información correspondiente. Demostraremos que la autoridad investigadora no ha evaluado esos factores.

79. En relación con la disminución real y potencial de la productividad, la Argentina cita las páginas 12 a 14 y 20 de la determinación definitiva y las páginas 26 a 30 y 95 del Informe Técnico con objeto de demostrar que se ha evaluado ese factor. Pedimos al Grupo Especial que consulte esas páginas y compruebe que los factores evaluados en ellas son los concernientes a la producción, la capacidad, la utilización de la capacidad, el empleo y los salarios, es decir, otros factores enumerados en el párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo distintos de la disminución real y potencial de la productividad. La Argentina cita también los anexos 1, 11, 12, 13 y 14 del Informe Técnico de la determinación definitiva. El Grupo Especial debe saber que esos anexos se refieren a la producción, el empleo, los salarios y la estructura de los costos, pero no a la productividad.

80. En lo que respecta a los factores que afectan a los precios internos, la Argentina alega que ha analizado la evolución de los índices de precios de los productos sustitutos, básicamente las carnes rojas, así como el nivel general de actividad y los índices de precios de los sectores más importantes.[22] No hemos encontrado esa evaluación. La Argentina cita además el cuadro 16 del Informe Técnico, en el que figuran los ingresos medios por ventas, por kilogramo de pollo fresco o refrigerado. El Brasil no entiende qué relación existe entre ese cuadro y los factores que afectan al precio interno.

[21] *Id.*

[22] Primera comunicación de la Argentina, párrafo 292.

81. Con respecto a la magnitud del margen de dumping, la Argentina, en lugar de citar la determinación definitiva para demostrar que se evaluó ese factor, trata de evaluarlo en su comunicación. A este respecto, reiteramos que la autoridad investigadora no evaluó el margen de dumping, ni podía haberlo evaluado, ya que la determinación definitiva de la existencia de dumping, en la que se establecía el margen de dumping, se formuló el 23 de junio de 2000, seis meses después de que se hubiera formulado la determinación definitiva de la existencia de daño.

82. En lo que atañe a los restantes factores, en relación con los efectos negativos reales o potenciales en el flujo de caja, el crecimiento y la capacidad de reunir capital o la inversión, la Argentina admite que no hizo una evaluación del flujo de caja y alega que esa evaluación resultaría imposible debido a determinadas peculiaridades del mercado argentino.[23] El Brasil señala que ninguna explicación del tipo de la que se ofrece en la Primera comunicación de la Argentina figura en la determinación definitiva, en la que ni siquiera se menciona esta cuestión. Con respecto a los demás factores (el crecimiento y la capacidad de reunir capital o la inversión), la Argentina no indica en su Primera comunicación si en el análisis del daño que figura en la determinación definitiva de la existencia de daño se evaluaron dichos factores, ni en que parte de ella se evaluaron.

83. Consideramos procedente abordar ahora las observaciones de los Estados Unidos sobre estas reclamaciones. En primer lugar, los Estados Unidos comparten la opinión de que el Acuerdo obliga a la autoridad investigadora a evaluar todos y cada uno de los factores enumerados en el párrafo 4 del artículo 3. En segundo lugar, los Estados Unidos no consideran que el hecho de que en la determinación publicada no se haga referencia a un factor indique necesariamente una infracción del párrafo 2.2 del artículo 12. Al defender esta posición, los Estados Unidos afirman que ese párrafo sólo obliga a las autoridades a exponer "de forma suficientemente detallada las constataciones y conclusiones a que se haya llegado sobre todas las cuestiones de hecho y de derecho que las autoridades investigadoras consideren pertinentes". Los Estados Unidos aducen que aunque es preciso evaluar todos los factores enumerados, no todos ellos han de ser necesariamente pertinentes en un caso determinado.

84. Hemos demostrado en nuestra comunicación que en la determinación definitiva la Argentina ni siquiera ha enumerado, y mucho menos aún ha evaluado, todos los factores del párrafo 4 del artículo 3. Además, de la determinación publicada no se desprende que las autoridades hayan evaluado todos los factores enumerados en el párrafo 4 del artículo 3, y, lo que es aún más importante, el Brasil recuerda que la evaluación de todos los factores del daño enumerados en el párrafo 4 del artículo 3 es obligatoria, por lo que se trata de una cuestión de hecho y de derecho pertinente por su propia naturaleza. Aun cuando un factor concreto no tenga efectos importantes en la determinación del daño, las autoridades no pueden considerar que la evaluación de ese factor no es pertinente. Por consiguiente, en la determinación definitiva debe necesariamente indicarse si se han evaluado todos los factores y cómo se han evaluado en la investigación correspondiente y deben, al menos, explicarse las razones por las que se consideró que un determinado factor no era pertinente.

c) Párrafo 1 del artículo 4: Proporción importante

85. Con respecto a la reclamación relativa a la infracción del párrafo 1 del artículo 4 coincidimos con la Argentina en que en el Acuerdo no se establece qué porcentaje exacto constituye "una proporción importante" de la producción nacional total. Esa es precisamente la cuestión que se plantea al Grupo Especial, si el 46 por ciento de la producción nacional total de pollos de la Argentina constituye una proporción importante de la producción nacional total.

[23] Primera comunicación de la Argentina, párrafos 297 a 299.

86. En este momento, el Brasil se limitará a reiterar lo expuesto en nuestra Primera comunicación. No obstante, el Brasil toma nota de los argumentos expuestos por algunos de los terceros y sostiene que en caso de que el Grupo Especial constate que por "una proporción importante" puede entenderse menos del 50 por ciento de la producción nacional, serían pertinentes las consideraciones que se exponen a continuación.

87. En primer lugar, en contra de lo que sugieren las CE, no hay en el párrafo 4 del artículo 5 ninguna disposición que equipare "los productores que apoyen expresamente la solicitud" a la "rama de producción nacional". En segundo lugar, si el Acuerdo no establece una pauta específica para determinar lo que constituye una proporción importante de la producción nacional total, las autoridades investigadoras están obligadas a aclarar expresamente las razones por las que han constatado que un porcentaje inferior al 50 por ciento puede considerarse una proporción importante.

IMPOSICIÓN Y PERCEPCIÓN DE DERECHOS ANTIDUMPING COMO RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING

88. Me permito señalar a la atención de los miembros del Grupo Especial que con respecto a las reclamaciones relativas a la infracción de los párrafos 2 y 3 del artículo 9 del Acuerdo debido al establecimiento de derechos antidumping vinculados a valores mínimos de exportación, el Brasil toma nota de los argumentos expuestos por la Argentina y algunos terceros. En este momento, el Brasil se abstendrá de exponer nuevos argumentos distintos de los expuestos en su Primera comunicación. El Brasil está evaluando aún los nuevos elementos aportados al debate y hará un análisis más sustantivo y sólido de esta cuestión en su Segunda comunicación. No obstante, se compromete, en caso necesario, a dar respuestas provisionales a las preguntas que pueda formular el Grupo Especial en la presente reunión.

89. Señor Presidente y miembros del Grupo Especial: en la presente declaración oral sólo se ha hecho referencia a algunas de las cuestiones planteadas en la Primera comunicación del Brasil. Hemos tratado de ofrecer al Grupo Especial una nueva visión de algunos de los argumentos y cuestiones relacionados con este caso, teniendo presentes algunas de las observaciones formuladas por la Argentina y los terceros en sus comunicaciones. No pretendemos haber agotado los argumentos que el Brasil puede exponer y expondrá en las etapas posteriores de este procedimiento. Cualquier omisión eventual no debe interpretarse como falta de interés por los aspectos que no se han abordado, ni como renuncia del Brasil a cualquiera de las reclamaciones planteadas en su Primera comunicación.

90. Permítanme que les agradezca de nuevo el tiempo y la atención que me han dedicado.

ANEXO A-3

SEGUNDA COMUNICACIÓN ESCRITA DEL BRASIL

(17 de octubre de 2002)

ÍNDICE

Página

INTRODUCCIÓN **A-136**

I. EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 18 DEL ESD **A-136**

II. NORMA DE EXAMEN DEL ACUERDO ANTIDUMPING **A-137**

III. EL LAUDO ARBITRAL DEL TRIBUNAL AD HOC DEL MERCOSUR **A-138**

IV. RECLAMACIONES RELACIONADAS CON LA INICIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING **A-143**

Párrafo 3 del artículo 5 ..... *A-143*

Reclamación 4 - Precio de exportación inferior al valor normal A-143

V. RECLAMACIONES RELACIONADAS CON LA REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING - REQUISITOS PROBATORIOS Y DE AVISO PÚBLICO **A-144**

Párrafo 1 del artículo 12, párrafos 1.1, 8 y 9 del artículo 6 y Anexo II *A-144*

Reclamación 10 - Omisión de notificar a siete exportadores brasileños A-144

Reclamación 11 - Omisión de dar un plazo de 30 días para responder al cuestionario A-146

Reclamación 15 - Prescindencia de la descripción del producto facilitada por los exportadores A-147

Reclamación 17 - Prescindencia de los datos sobre el precio de exportación facilitados por los exportadores A-150

Reclamación 21 - Falta de información de los hechos esenciales considerados A-151

VI. RECLAMACIONES RELACIONADAS CON LA REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING Y LA DETERMINACIÓN DEFINITIVA POSITIVA **A-152**

Párrafo 4 del artículo 2, párrafos 1, 4 y 5 del artículo 3 y párrafo 2.2 del artículo 12 ..... *A-152*

Reclamación 26 - Carga no razonable impuesta a los exportadores A-152

Reclamación 32 - No utilización del mismo período para evaluar los factores enumerados en el párrafo 4 del artículo 3 ..... A-154

Reclamación 38 - No evaluación de todos los factores enumerados en el párrafo 4 del artículo 3 ..... A-156

Reclamación 40 - Omisión de dar un aviso definitivo adecuado A-157

Página

VII. RECLAMACIONES RELACIONADAS CON LA IMPOSICIÓN Y RECAUDACIÓN DE DERECHOS ANTIDUMPING COMO RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING A-158

Párrafos 2 y 3 del artículo 9 y párrafo 2.2 del artículo 12 ..... A-158

Reclamaciones 28 y 29 - Derecho que excede del margen de dumping A-158

Reclamación 30 - Omisión de indicar el modo en que se estableció el "valor mínimo de exportación" A-164

VIII. CONCLUSIÓN Y PETICIONES A-165

A. CONCLUSIÓN A-165

B. PETICIONES A-165

INTRODUCCIÓN

1. El Brasil da las gracias al Grupo Especial por su constante atención y agradece esta oportunidad para replicar a los argumentos presentados por la Argentina en su Primera comunicación escrita y en sus declaraciones orales. Junto con la Segunda comunicación, el Brasil presenta también las respuestas escritas a la lista de preguntas del Grupo Especial, formuladas en la primera reunión sustantiva de 25 de septiembre de 2002. En lo esencial, la presente comunicación servirá para señalar más ampliamente las contradicciones fácticas y las interpretaciones erróneas de las disposiciones del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 ("Acuerdo Antidumping"), que no se abordaron en la Primera comunicación del Brasil ni en la respuesta escrita a las preguntas del Grupo Especial.

2. Para facilitar el examen, el Brasil ha dividido su réplica en ocho partes:

I. El párrafo 2 del artículo 18 del Entendimiento sobre Solución de Diferencias ("ESD");

II. La norma de examen del Acuerdo Antidumping;

III. El Laudo Arbitral del Tribunal Ad Hoc del MERCOSUR;

IV. Reclamaciones relacionadas con la iniciación de la investigación antidumping;

V. Reclamaciones relacionadas con la realización de la investigación antidumping - requisitos probatorios y de aviso público;

VI. Reclamaciones relacionadas con la realización de la investigación antidumping y la determinación definitiva positiva;

VII. Reclamaciones relacionadas con la imposición y recaudación de derechos antidumping como resultado de la investigación antidumping; y

VIII. Conclusión y peticiones.

3. Antes de formular consideraciones relativas a las reclamaciones concretas, el Brasil desearía abordar tres cuestiones planteadas por la Argentina. La primera de ellas se refiere a la alegación de la Argentina de que el Brasil ha actuado de forma incompatible con el párrafo 2 del artículo 18 del ESD. La segunda concierne a la norma de examen en asuntos antidumping, según lo establecido en el párrafo 6 del artículo 17 del Acuerdo Antidumping. La tercera cuestión es la alegación de la Argentina de que el asunto de la controversia que tiene ante sí este Grupo Especial ya ha sido "debatido y resuelto" en una decisión previa del Tribunal Arbitral Ad Hoc del MERCOSUR ("Tribunal del MERCOSUR").

I. EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 18 DEL ESD

4. El Brasil ha indicado que su Primera comunicación escrita no contenía ninguna información confidencial, con excepción de las pruebas documentales. En tal sentido, el Brasil ofreció a la Argentina, como una cortesía, la oportunidad de señalar toda parte de la Primera comunicación del Brasil que la Argentina pudiera considerar de carácter confidencial. La Argentina no ha señalado ninguna parte concreta de ese documento como confidencial.

5. No obstante, la Argentina ha alegado que, al calificar toda su Primera comunicación como no confidencial, el Brasil ha actuado de forma contraria a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 18 del ESD y ha menoscabado los derechos de la Argentina en virtud del ESD.[1]

6. En opinión de la Argentina, la primera frase del párrafo 2 del artículo 18 exige que las comunicaciones escritas sean tratadas siempre como de carácter confidencial, con independencia del hecho de que las comunicaciones escritas en algunos casos **no** incluyen información confidencial. La Argentina interpreta que la segunda frase del párrafo 2 del artículo 18 autoriza sólo a hacer públicas las posiciones ("*statements*" *of positions*) de las partes. El Brasil entiende que el ESD no limita el alcance, la forma, la extensión ni el contenido de las "*statements*" y que, en el caso presente, la Primera comunicación del Brasil, sin las pruebas documentales, es idéntica a las "*statements*" previstas en la segunda frase del párrafo 2 del artículo 18.

7. Esto se ajusta a la Regla 3 de los Procedimientos de trabajo de este Grupo Especial, que establece lo siguiente:

> *"[...] Cuando una parte en la diferencia facilite una versión confidencial de sus comunicaciones escritas al Grupo Especial, también facilitará, a petición de cualquier Miembro, un resumen no confidencial de la información contenida en esas comunicaciones que pueda hacerse público."* (Sin cursivas ni subrayado en el original.)

8. En el caso presente, no hubo una versión confidencial de la comunicación escrita del Brasil y, por lo tanto, el Brasil no estaba obligado a facilitar un resumen no confidencial de la información contenida en su Primera comunicación.

9. Recordamos que el propósito del párrafo 2 del artículo 18 es salvaguardar la protección de la información confidencial. Si la Primera comunicación no contiene ninguna información confidencial, nada hay que salvaguardar y la comunicación se puede hacer pública sin restricciones.

10. Como observación final, hacemos notar que la Argentina no ha demostrado de qué modo la divulgación de alguna información contenida en la Primera comunicación del Brasil "menoscaba" los derechos de la Argentina en virtud del ESD.

II. NORMA DE EXAMEN DEL ACUERDO ANTIDUMPING

11. En lo que respecta a la norma de examen del Acuerdo Antidumping, la Argentina alega que el Brasil ha expuesto un argumento de carácter genérico sin identificar aquellos aspectos de la investigación de la Argentina en los que, a juicio del Brasil, la Argentina no habría actuado de buena fe.[2] Según la Argentina, "[u]na imputación de carácter genérico carece de relevancia en un procedimiento OMC en el que en definitiva debe aplicarse el derecho a los hechos identificados del caso".[3]

12. El Grupo Especial debe tener en cuenta que la alegación de la Argentina no es correcta. En su Primera comunicación, el Brasil desarrolló argumentos que identificaron adecuadamente los diversos aspectos de la investigación argentina que se llevaron a cabo infringiendo el Acuerdo Antidumping. Concretamente, en los párrafos 3 y 4 de su Primera comunicación, el Brasil presentó un resumen de las 41 reclamaciones, identificando las medidas específicas adoptadas por las autoridades argentinas

[1] Carta de la Argentina al Grupo Especial, Nº 220/02, de fecha 15 de agosto de 2002.

[2] Primera comunicación de la Argentina, párrafo 11.

[3] *Idem*.

en la investigación. En los párrafos 11 a 544, el Brasil también presentó los argumentos, hechos y razones jurídicas relativos a cada una de las 41 reclamaciones. La identificación de estas reclamaciones, y los hechos y argumentos jurídicos conexos **no** son de carácter genérico y **no** carecen de relevancia en este procedimiento de la OMC.

13. Además, la Argentina alega que el Brasil no ha fundado su argumentación en ninguno de los párrafos correspondientes al punto relativo a la norma de examen del Acuerdo Antidumping y se ha limitado a incluir alegaciones que carecen de elaboración.[4]

14. El Brasil ha señalado que cada una de las transgresiones se demuestra detalladamente a lo largo de toda la Primera comunicación.[5] En consecuencia, hemos fundamentado todas nuestras alegaciones de infracción y entendemos que el Grupo Especial las examinará cuidadosamente a fin de determinar si las autoridades investigadoras argentinas han establecido correctamente los hechos y si la evaluación de esos hechos fue imparcial y objetiva.

15. Contrariamente a lo expresado por la Argentina, el Brasil **nunca** ha afirmado ni sugerido que el texto del párrafo 6 i) del artículo 17 del Acuerdo se dirige a las partes y no al Grupo Especial.[6] Por consiguiente, tampoco hemos alegado **nunca** en esta diferencia que la Argentina haya violado el párrafo 6 i) del artículo 17 del Acuerdo.

III. EL LAUDO ARBITRAL DEL TRIBUNAL AD HOC DEL MERCOSUR

16. En la sección II.2 de la Primera comunicación de la Argentina, este país alega que el Brasil no ha actuado de buena fe por no haber hecho referencia al laudo arbitral del Tribunal del MERCOSUR sobre la misma controversia, planteada ante el Mercado Común del Sur ("MERCOSUR").[7] La Argentina expresa asimismo que este caso ya ha sido "debatido y resuelto" en el marco del MERCOSUR y que, al omitir esa referencia, el Brasil ha incurrido en un ejercicio abusivo de los derechos que le corresponden en virtud de los Acuerdos abarcados de la OMC.[8]

17. Además, la Argentina parece concluir que, con el propósito de aclarar el alcance de las obligaciones en cuestión, el Grupo Especial debería tener en cuenta en el caso presente el marco normativo del MERCOSUR y las consecuencias derivadas de la aplicación del Protocolo de Brasilia.[9] Subsidiariamente, la Argentina concluye que se debería aplicar a esta controversia el principio del *estoppel* porque habría habido de parte del Brasil un comportamiento "constante e inequívoco" que creó una convicción en la Argentina en materia de resolución de las controversias comerciales entre ambos Miembros en el ámbito del MERCOSUR y del respeto del alcance de las decisiones.[10]

18. Aunque la Argentina ha manifestado que **no** invocó la aplicación de la *res judicata*[11], en los argumentos expuestos en su Primera comunicación (el caso habría sido "debatido y resuelto"), de

[4] Primera comunicación de la Argentina, párrafo 12.

[5] Primera comunicación del Brasil, párrafo 6.

[6] Declaración oral de la Argentina, párrafo 3.

[7] Primera comunicación de la Argentina, párrafo 16.

[8] Primera comunicación de la Argentina, párrafo 17.

[9] Primera comunicación de la Argentina, párrafo 22.

[10] Primera comunicación de la Argentina, párrafo 22.

[11] Declaración oral de la Argentina, párrafo 7.

hecho la Argentina parece sugerir que el Laudo del Tribunal del MERCOSUR tiene el efecto de *res judicata*. En el caso de que la Argentina efectivamente alegue la aplicación del principio de *res judicata*, desearíamos que el Grupo Especial tenga en cuenta las consideraciones siguientes.

19. La *res judicata* es una "*rule that a final judgment rendered by a court of competent jurisdiction on the merits is conclusive as to the rights of the parties and their privies, and, as to them, constitutes an absolute bar to a subsequent action involving the same claim, demand or cause of action*" (principio según el cual una sentencia firme dictada por un tribunal de jurisdicción competente sobre el fondo del litigio es definitiva en cuanto a los derechos de las partes y los interesados y, respecto de ellos, constituye una prohibición absoluta de toda acción posterior relativa a la misma reclamación, demanda o causa de acción).[12] Por lo tanto, para que un laudo o una decisión tenga el efecto de *res judicata* las reclamaciones planteadas en una nueva acción tienen que ser **las mismas** que las invocadas en la acción precedente, en la que se haya dictado una sentencia firme.

20. En cuanto a la aplicabilidad del principio de la *res judicata* en la solución de controversias en el marco de la OMC, nos remitimos al razonamiento del Grupo Especial que examinó el asunto *India - Automóviles*. En ese asunto, el Grupo Especial estimó adecuado considerar en primer lugar si las circunstancias fácticas para la aplicación del principio de la *res judicata* se daban en ese caso, antes de pronunciarse sobre la aplicabilidad de esta doctrina.[13] Al llevar a cabo dicho análisis el Grupo Especial identificó un punto de referencia en virtud del cual las diferencias podrían considerarse distintas o similares a los efectos de rechazar o aplicar la noción de *res judicata*.[14] El Grupo Especial estableció ese punto de referencia del modo siguiente:

> *"En el contexto de la solución de diferencias en la OMC, la noción de "asunto", a la que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 7 del ESD, determina el alcance de lo que se somete a la consideración de los grupos especiales y puede ser objeto de sus decisiones. Como confirmó el Órgano de Apelación en el caso* Guatemala - Cemento, *el asunto sometido al OSD está compuesto por dos elementos: las medidas específicas de que se trate y el fundamento jurídico de la reclamación (o las alegaciones). A juicio del Grupo Especial, este es el punto de referencia mínimo más adecuado para determinar si se darían las condiciones determinantes de la cosa juzgada en el caso de que esa noción fuera pertinente.*
>
> *En consecuencia, el Grupo Especial estima que para que el principio de* res judicata *sea de algún modo aplicable en la solución de diferencias en la OMC debe haber, como mínimo, una identidad fundamental entre el asunto anteriormente resuelto y el presentado al siguiente grupo especial. Esto exige que haya identidad tanto entre las medidas como entre las alegaciones relativas a ellas. También es imprescindible, a los efectos del principio de* res judicata, *la identidad de las partes [...]."*[15]
> (Sin cursivas ni subrayado en el original.)

21. El Brasil está de acuerdo con ese punto de referencia y considera que en el caso presente el Grupo Especial debería también aplicar ese criterio. A este respecto, reiteramos nuestra posición de

---

[12] *Black's Law Dictionary, sexta edición, Publisher's Editorial Staff, St. Paul, Minn., West Publishing Co. 1990*, página 1.305.

[13] *India - Medidas que afectan al sector del automóvil*, 21 de diciembre de 2001, WT/DS146/R y WT/DS175/R, párrafo 7.60 (adoptado el 5 de abril de 2002) (*India - Automóviles*). Las conclusiones del Grupo Especial relativas al principio de la *res judicata* no fueron apeladas.

[14] *India - Automóviles*, párrafo 7.61.

[15] *India - Automóviles*, párrafos 7.65 y 7.66.

que, aunque las partes y la medida que actualmente tiene ante sí este Grupo Especial son idénticas a las partes y las medidas planteadas ante el Tribunal del MERCOSUR, las alegaciones de la diferencia planteada ante este Grupo Especial **no** son las mismas que las que se plantearon ante el Tribunal del MERCOSUR.

22. A fin de que el Grupo Especial verifique lo expuesto, consideramos adecuado presentar información de antecedentes sobre el alcance de la aplicación del sistema de solución de diferencias del MERCOSUR.

23. El 17 de diciembre de 1991, los Estados miembros del MERCOSUR aprobaron el Protocolo de Brasilia, por el que se estableció el mecanismo de solución de diferencias del MERCOSUR. En ese Protocolo se determina el alcance del mecanismo de solución de diferencias, disponiéndose que "las controversias que surjan entre los Estados partes sobre la interpretación, aplicación o incumplimiento del Tratado de Asunción [y los acuerdos y decisiones integradas en su marco] serán sometidas a los procedimientos establecidos en el presente Protocolo".[16] Según el Protocolo, el ámbito de aplicación del mecanismo de solución de controversias se refiere a la interpretación, aplicación o incumplimiento de las disposiciones del Tratado de Asunción y los acuerdos y decisiones integrados en su marco.[17]

24. Es importante observar que las reclamaciones planteadas en la solicitud de establecimiento de un grupo especial de la OMC por el Brasil no guardan relación con la interpretación, aplicación o incumplimiento de las disposiciones del Tratado de Asunción y los demás acuerdos y decisiones que constituyeron el marco jurídico del MERCOSUR. El objeto de la reclamación del Brasil ante la OMC se refiere al incumplimiento por la Argentina de sus obligaciones en el marco de la OMC, y en particular del Acuerdo Antidumping y el GATT de 1994.[18]

25. El Tribunal del MERCOSUR se ocupó de la diferencia sobre la base del ámbito de aplicación establecido en el Protocolo, esto es, si las disposiciones que constituyen el marco del MERCOSUR fueron correctamente interpretadas, aplicadas o cumplidas en la investigación antidumping realizada por la Argentina sobre las importaciones de pollos procedentes del Brasil. El Tribunal **no** tuvo ante sí el examen y la decisión de si la Argentina cumplió sus obligaciones en el marco de la OMC al llevar a cabo e imponer medidas antidumping sobre los pollos procedentes del Brasil. El Brasil considera que este Grupo Especial tiene la jurisdicción adecuada para examinar tales reclamaciones.

26. A este respecto, el artículo 23 del ESD establece la jurisdicción exclusiva en favor del ESD con respecto a las infracciones de las normas de la OMC. La parte pertinente del artículo 23 establece:

> *"1. Cuando traten de reparar el incumplimiento de obligaciones u otro tipo de anulación o menoscabo de las ventajas resultantes de los acuerdos abarcados, o un impedimento al logro de cualquiera de los objetivos de los acuerdos abarcados, los Miembros recurrirán a las normas y procedimiento del presente Entendimiento, que deberán acatar.*

[16] *Véase* el artículo 1 del Protocolo de Brasilia.

[17] *Idem*.

[18] *Véase Argentina - Derechos antidumping definitivos sobre los pollos procedentes del Brasil*: *Solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por el Brasil*, WT/DS241/3 (26 de febrero de 2002).

> *2. En tales casos, los Miembros:*
>
> *a) no formularán una determinación de que se ha producido una infracción, se han anulado o menoscabado ventajas o se ha comprometido el cumplimiento de uno de los objetivos de los acuerdos abarcados, excepto mediante el recurso a la solución de diferencias de conformidad con las normas y procedimientos del presente Entendimiento, y formularán tal determinación de forma coherente con las constataciones que figuren en el informe del grupo especial o del Órgano de Apelación, adoptado por el OSD, o en el laudo arbitral dictado con arreglo al presente Entendimiento. [...]"* (Sin cursivas ni subrayado en el original.)

27. Por lo tanto, las alegaciones presentadas al Grupo Especial sobre la infracción por la Argentina de sus obligaciones dimanantes de la OMC autorizan al Brasil a activar y utilizar el mecanismo de solución de diferencias de la OMC, con exclusión de la competencia de cualquier otro mecanismo en el examen de las alegaciones de infracciones de las normas de la OMC.

28. La Argentina también alega que el principio del *estoppel* debería aplicarse a la presente diferencia porque la Argentina estaba convencida, sobre la base de anteriores laudos del Tribunal del MERCOSUR, que el Brasil renunciaría a su derecho de utilizar el sistema de solución de diferencias de la OMC siempre que un asunto fuese resuelto por el Tribunal del MERCOSUR. Sobre este particular, el Brasil afirma nuevamente que la diferencia planteada ante el Tribunal del MERCOSUR se basó en **un fundamento jurídico distinto** de la diferencia planteada ante este Grupo Especial.

29. No obstante, si el Grupo Especial considera pertinente el examen de este argumento, el Brasil observa que corresponde interpretar el principio del *estoppel* y dilucidar si dicho principio es aplicable en la solución de diferencias en el marco de la OMC.

30. *Estoppel* significa que "*a party is prevented by his own acts from claiming a right to detriment of other party who was entitled to rely on such conduct and has acted accordingly*" (una parte no puede, en razón de sus propios actos, alegar un derecho en perjuicio de otra parte que tenía derecho a contar con esa conducta y ha actuado en consecuencia).[19] Como hicieron notar las Comunidades Europeas ("CE") en su Comunicación de tercero[20], el Grupo Especial que examinó el asunto *CE - Bananos I* concluyó correctamente que el *estoppel* "sólo podía resultar del consentimiento expreso o, en casos excepcionales, implícito de dichas partes o de las PARTES CONTRATANTES".[21] Ese Grupo Especial estimó asimismo que:

> *"[...] Por tanto, no puede darse por supuesto razonablemente que la decisión de una parte contratante de no invocar un derecho frente a otra parte contratante en un momento determinado sea una decisión de liberar a esa otra parte contratante de las obligaciones que le corresponden en virtud del Acuerdo General. El Grupo Especial observó a este respecto que grupos especiales anteriores habían basado sus constataciones en medidas que habían permanecido sin impugnar durante largos períodos. Por consiguiente, el Grupo Especial constató que el mero hecho de que las partes demandantes no hubieran invocado en el pasado los derechos que les*

[19] *Black's Law Dictionary, sexta edición, Publisher's Editorial Staff, St. Paul, Minn., West Publishing Co. 1990*, página 551.

[20] Comunicación de tercero presentada por las CE.

[21] Informe del Grupo Especial sobre los regímenes de importación del banano de algunos Estados miembros de la CEE, 3 de junio de 1993, WT/DS32/R, párrafo 361 (no adoptado) (*CE - Bananos I*). La conclusión del Grupo Especial relativa al principio del *estoppel* no fue apelada.

> *otorga el Acuerdo General no había modificado esos derechos ni les impedía invocarlos en la actualidad*.[22] (Sin cursivas en el original.)

31. Lo mismo es válido en el caso presente. El simple hecho de que el Brasil haya planteado una controversia similar ante el Tribunal del MERCOSUR no significa que el Brasil haya aceptado no plantear la actual controversia ante la OMC. Especialmente cuando la controversia planteada ante ese Grupo Especial se basa en **un fundamento jurídico distinto** del de la diferencia planteada ante el Tribunal del MERCOSUR.

32. También señalamos a la atención del Grupo Especial que el Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el MERCOSUR, firmado el 18 de febrero de 2002, no puede presentarse aquí como una aceptación implícita o expresa por el Brasil de abstenerse de plantear el caso presente en el sistema de solución de diferencias de la OMC.

33. A ese respecto, cabe señalar que el Protocolo de Olivos dispone que "las controversias comprendidas en el ámbito de aplicación del presente Protocolo que puedan también ser sometidas al sistema de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio [...] podrán someterse a uno u otro foro a elección de la parte demandante".[23] El Protocolo establece asimismo que "una vez iniciado un procedimiento de solución de controversias de acuerdo al párrafo anterior, ninguna de las partes podrá recurrir a los mecanismos establecidos en los otros foros respecto del mismo **objeto**, definido en los términos del artículo 14 de este Protocolo".[24]

34. Observamos y reiteramos que el objeto planteado ante el Tribunal del MERCOSUR es **distinto** del objeto planteado ante este Grupo Especial. Además, el Protocolo de Olivos aún no ha entrado en vigor, e incluso si hubiese entrado en vigor y el objeto de la diferencia fuese el mismo, dicho Protocolo establece que "las controversias en trámite, iniciadas de acuerdo con el régimen del Protocolo de Brasilia, se regirán exclusivamente por el mismo hasta su total conclusión".[25] Además, el Protocolo dispone también que "mientras las controversias iniciadas bajo el régimen del Protocolo de Brasilia no se concluyan totalmente y hasta tanto se completen los procedimientos previstos en el artículo 49, continuará aplicándose, en lo que corresponda, el Protocolo de Brasilia [...]".[26] Por consiguiente, el Protocolo de Olivos no se aplica a las diferencias que ya han concluido bajo el régimen del Protocolo de Brasilia.

35. La Argentina también yerra en su interpretación de que la existencia del marco jurídico del MERCOSUR y las adjudicaciones ("*adjudications*") de su sistema de solución de controversias deben ser tenidas en cuenta por el Grupo Especial al desarrollar sus funciones conforme al ESD.[27] La Argentina formula esta afirmación de conformidad con el párrafo 2 del artículo 3 del ESD, con respecto a la aclaración de las obligaciones de los Acuerdos de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional público.[28]

---

[22] *CE - Bananos I*, párrafo 362.

[23] *Véase* el artículo 1.2 del Protocolo de Olivos.

[24] *Idem*.

[25] *Véase* el artículo 50 del Protocolo de Olivos.

[26] *Véase* el párrafo 2 del artículo 55 del Protocolo de Olivos.

[27] Primera comunicación de la Argentina, párrafo 18.

[28] *Idem*.

36. Recordamos que el párrafo 2 del artículo 3 se refiere exclusivamente a la aclaración de las disposiciones vigentes del Acuerdo sobre la OMC y **no** dispone que una resolución previa de un tribunal internacional pone cortapisas a la interpretación que haga un grupo especial de la OMC acerca del Acuerdo sobre la OMC.

37. En realidad, lo que el párrafo 2 del artículo 3 establece es lo siguiente:

> *"El sistema de solución de diferencias de la OMC es un elemento esencial para aportar seguridad y previsibilidad al sistema multilateral de comercio. [...] sirve para preservar los derechos y obligaciones de los Miembros en el marco de los acuerdos abarcados, y para aclarar las disposiciones vigentes de dichos acuerdos de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional público."* (Sin cursivas ni subrayado en el original.)

38. Basándose en esta disposición, el Brasil considera que el Grupo Especial debe examinar una reclamación planteada por un Miembro con respecto a la violación de un acuerdo abarcado, a fin de preservar los derechos de ese Miembro en el marco de dicho acuerdo.

39. Como observación final sobre esta cuestión, el Brasil hace notar que, contrariamente a las alegaciones de la Argentina, el Brasil no ha incurrido en un ejercicio abusivo de sus derechos en el marco de los Acuerdos de la OMC[29], ni su conducta ha sido contraria a la buena fe por no haber mencionado en su Primera comunicación la resolución del Tribunal del MERCOSUR.[30] El Brasil no hizo referencia a esa resolución simplemente porque cree que no es pertinente en el caso presente, ya que las alegaciones planteadas actualmente ante el Grupo Especial **no son las mismas** que las que se plantearon ante el Tribunal del MERCOSUR.

IV. RECLAMACIONES RELACIONADAS CON LA INICIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING

Párrafo 3 del artículo 5

Reclamación 4 - Precio de exportación inferior al valor normal

40. La Argentina ha afirmado que no es cierta la afirmación del Brasil de que, a los fines de establecer el precio de exportación, la selección de datos fue inapropiada y sesgada.[31] Para probar que la afirmación del Brasil no es correcta, la Argentina explicó que "la autoridad de aplicación analizó las operaciones de importación buscando precisar aquéllas que más se adecuaban al producto objeto de la investigación, y lo hizo con el único objetivo de realizar un cálculo del precio de exportación lo más ajustado y comparable posible en esta etapa previa a la apertura".[32] La Argentina expresó asimismo que "realizó un promedio de las mismas, sin realizar por ende elecciones que pudieran sesgar la diferencia entre el valor de exportación y el valor normal".[33]

41. El Brasil no puede aceptar esta respuesta como una descripción del modo en que se estableció el precio de exportación en la etapa de iniciación de la investigación. Hemos demostrado en la Primera comunicación que la DCD **sí** hizo una selección de las transacciones de exportación, es decir,

---

[29] Primera comunicación de la Argentina, párrafo 23.

[30] Primera comunicación de la Argentina, párrafo 16.

[31] Primera comunicación de la Argentina, párrafo 78.

[32] *Idem*.

[33] *Idem*.

las que tenían precios inferiores al valor normal, y esta selección **sí** distorsionó la diferencia entre el precio de exportación y el valor normal.

42. El Brasil demostrará esto nuevamente al Grupo Especial. En el cuadro que figura en la página 10 de la Prueba documental BRA-2 se ofrece la información total sobre el precio de exportación presentada por el solicitante en su solicitud. El promedio del precio de exportación que se desprende de esa información fue de **1.014 dólares EE.UU. por tonelada**. De esa información facilitada en la solicitud, la autoridad investigadora consideró que una parte significativa del producto que se importaba en la Argentina era objeto de dumping, es decir, que se importaba a precios inferiores a los que se vendía en el mercado interno del Brasil.[34] La DCD, pues, sólo consideró los precios de las transacciones de exportación que eran inferiores al valor normal.

43. En el cuadro que figura en la página 11 de la Prueba documental BRA-2 se indican el volumen y el valor de las transacciones de exportación inferiores al valor normal en el período transcurrido entre enero y mayo de 1997. Concretamente, la DCD estableció que la misma selección se realizara para el mes de agosto de 1997 (transacciones de exportación con precios inferiores al valor normal).[35] Posteriormente la autoridad añadió las transacciones de exportación inferiores al valor normal correspondientes a agosto de 1997 a las transacciones de exportación inferiores al valor normal del período transcurrido entre enero y junio de 1997.[36] Esto arrojó un importe de 4.390.836,38 dólares EE.UU. y un volumen 4.854,24 toneladas correspondientes a las exportaciones de pollos procedentes del Brasil con precios inferiores al valor normal en el período transcurrido entre enero y agosto de 1997.[37] Esto dio un promedio de precios de exportación FOB de **0,904536 dólares por kilogramo**, utilizado para iniciar la investigación, lo que se desprende de la página 12 de la Prueba documental BRA-2.

44. Obviamente, este método adoptado por la DCD distorsionó (y redujo) el precio de exportación y, en consecuencia, distorsionó el margen de dumping. La Argentina no sólo ha omitido examinar la exactitud y pertinencia de **todas** las pruebas que se presentaron en la solicitud, sino que además exageró el margen de dumping.

V. RECLAMACIONES RELACIONADAS CON LA REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING - REQUISITOS PROBATORIOS Y DE AVISO PÚBLICO

Párrafo 1 del artículo 12, párrafos 1.1, 8 y 9 del artículo 6 y Anexo II

Reclamación 10 - Omisión de notificar a siete exportadores brasileños

45. En lo que respecta a la alegación de infracción del párrafo 1 del artículo 12 del Acuerdo, el Brasil ha presentado documentación que corrobora el hecho de que las autoridades investigadoras habían reconocido e identificado a los exportadores brasileños Comaves, Minuano, Chapecó, Catarinense y Perdigão antes de la iniciación de la investigación.[38]

---

[34] *Véase* la página 10 de la Prueba documental BRA-2.

[35] *Véase* el párrafo 1 de la página 11 de la Prueba documental BRA-2.

[36] *Idem*.

[37] *Idem*.

[38] *Véanse* los anexos 1 y 2 de la Prueba documental BRA-4 y las páginas 4 y 5 de la Prueba documental BRA-2.

46. Las autoridades conocieron en primer lugar la existencia de estos productores/exportadores el 17 de febrero de 1998, cuando el peticionante presentó información adicional que incluía listas de importaciones de pollos procedentes del Brasil desglosadas por productor y exportador.[39] El nombre de esos exportadores brasileños aparecía en todas las listas presentadas por el solicitante. De hecho, la información contenida en esas listas procedía de dos organismos argentinos: *SENASA - Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria* (*"SENASA"*) y la *Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Dirección de Ganadería* ("*Ganadería*"). ¿Cómo, entonces, puede la Argentina alegar que esos exportadores le eran desconocidos en el momento de la iniciación, cuando la identificación de esos productores/exportadores procedía en realidad de dos organismos argentinos?

47. El 7 de enero de 1998, en un segundo tiempo, pero aún antes de la iniciación de la investigación, la DCD dio a conocer un informe relativo a la viabilidad de la iniciación de la investigación antidumping, en el que se identificó una vez más a los mismos exportadores.[40] Esta vez, la identificación de los exportadores fue llevada a cabo por las **propias** autoridades.

48. El Brasil también ha demostrado que esos cinco exportadores fueron notificados de la investigación y de la necesidad de presentar respuestas al cuestionario antidumping sólo el 15 de septiembre de 1999[41], casi ocho meses después de la iniciación y después de que se había emitido una determinación preliminar de la existencia de daño, dumping y relación causal.[42]

49. El momento en que se realizó esta notificación a esos exportadores prueba que las autoridades no cumplieron el requisito previsto en el párrafo 1 del artículo 12 del Acuerdo.

50. Es interesante observar que la Argentina trata de compartir con el Brasil la obligación prevista en el párrafo 1 del artículo 12, cuando afirma que solicitó la cooperación del Brasil para identificar a los productores/exportadores.[43] Aunque la Argentina formula esta afirmación, nunca solicitó la cooperación del Brasil para proporcionar la dirección o información de contacto de estos exportadores, a los que ya había identificado.

51. También resulta curioso cómo la Argentina trata implícitamente de equiparar la obligación de notificación con la obligación de publicación. En particular, la Argentina sostiene que "la apertura de investigación es un acto administrativo de carácter general, razón por la cual se publica en el Boletín Oficial y dicha publicación es **notificación** suficiente que reviste alcance general".[44]

52. No podemos estar de acuerdo con esta afirmación, especialmente a la luz de la distinción expresa de obligaciones establecida en el párrafo 1 del artículo 12. La parte pertinente de ese artículo establece lo siguiente:

> *"Cuando las autoridades se hayan cerciorado de que existen pruebas suficientes para justificar la iniciación de una investigación antidumping con arreglo al artículo 5, lo notificarán al Miembro o Miembros cuyos productos vayan a ser objeto de tal investigación y a las demás partes interesadas de cuyo interés tenga conocimiento la autoridad investigadora,* ***y*** *se dará el aviso público correspondiente."* (Sin negritas, cursivas ni subrayado en el original.)

---

[39] *Véase* la Prueba documental BRA-4.

[40] *Véanse* las páginas 4 y 5 de la Prueba documental BRA-2.

[41] *Véase* la Prueba documental BRA-13.

[42] *Véanse* las pruebas documentales BRA-10, BRA-11 y BRA-12.

[43] Primera comunicación de la Argentina, párrafos 112 a 116.

[44] Primera comunicación de la Argentina, párrafo 167.

53. Resulta claro que el párrafo 1 del artículo 12 exige que **además** de un aviso público, se realice una **notificación** cuando las autoridades se hayan cerciorado de que existen pruebas suficientes para justificar la iniciación de una investigación. Por lo tanto, el requisito de la notificación no se cumple simplemente con la emisión del aviso público.

Reclamación 11 - Omisión de dar un plazo de 30 días para responder al cuestionario

54. En su Primera comunicación, la Argentina afirma categóricamente que otorgó a los siete exportadores brasileños un **plazo de más de 30 días** para responder al cuestionario de la DCD y que también accedió debidamente a sus solicitudes de prórroga.[45]

55. El Brasil reafirma que esto simplemente **no** es cierto. La notificación de la investigación realizada por la DCD y la necesidad de presentar respuestas a los cuestionarios enviados a los exportadores brasileños CCLP, Catarinense, Chapecó, Minuano, Perdigão, Comaves y Penabranca **expresamente** indicaba que esos exportadores tenían **no más de 20** días para responder al cuestionario.[46] Es evidente que el plazo exigido por la DCD en esas cartas era a simple vista contrario al plazo de 30 días exigido por el párrafo 1.1 del artículo 6 para responder a los cuestionarios.

56. El requisito del párrafo 1.1 del artículo 6 reviste tal importancia que es la única disposición del artículo 6 que establece un plazo concreto para el cumplimiento de una obligación. Es obvio que si las autoridades no otorgaron al menos 30 días a los exportadores o productores extranjeros para responder a los cuestionarios, han infringido el párrafo 1.1 del artículo 6 del Acuerdo.

57. En virtud del párrafo 1.1 del artículo 6, simplemente **no** está permitido que las autoridades otorguen un plazo inicial inferior para responder aunque el plazo total concedido para la respuesta (incluida la prórroga) sea al menos de 30 días. Esta interpretación quitaría todo sentido a la obligación prevista en el párrafo 1.1 del artículo 6 del Acuerdo:

> *"Se dará a los exportadores o a los productores extranjeros a quienes se envíen los cuestionarios utilizados en una investigación antidumping un plazo de 30 días como mínimo para la respuesta. Se deberá atender debidamente toda solicitud de prórroga del plazo de 30 días y, sobre la base de la justificación aducida, deberá concederse dicha prórroga cada vez que sea factible."* (Sin cursivas ni subrayado en el original.)

58. El párrafo 1.1 del artículo 6 consta de dos frases. La primera de ellas se refiere concretamente al plazo original que las autoridades deben dar a los exportadores/productores para responder al cuestionario. La segunda frase se refiere a las prórrogas que las autoridades pueden otorgar para formular las respuestas. La primera frase es una **obligación** impuesta a las autoridades y se debe leer separadamente de la segunda frase, que **no es una obligación**. Si las autoridades pudieran simplemente dar cualquier plazo inferior a 30 días para que los exportadores/productores respondan al cuestionario y posteriormente conceder prórrogas por un plazo que en total alcanzara los 30 días, no habría ninguna necesidad de la segunda frase del párrafo 1.1 del artículo 6. No creemos que esa haya sido la intención del párrafo 1.1 del artículo 6 del Acuerdo.

59. Además, cuando los exportadores y productores reciben un cuestionario, toman como base ese plazo de 30 días para planificar y asignar los recursos necesarios a fin de formular la respuesta. El gran volumen de información solicitado en un cuestionario exige tiempo y personal disponible para reunir esa información y comunicarla. Si desde el comienzo esos exportadores/productores reciben un cuestionario con un plazo de respuesta inferior a 30 días, no tratarán ni siquiera de responder al

[45] Primera comunicación de la Argentina, párrafo 126.

[46] *Véase* la Prueba documental BRA-13.

cuestionario o bien proporcionarán respuestas incompletas o insuficientes. De algún modo, la oportunidad de defender sus intereses se ve menoscabada.

60. Esto se acentúa si el Grupo Especial considera que en el caso presente esos siete exportadores brasileños fueron notificados de la investigación casi ocho meses después de su iniciación y después de que se hubiese emitido una determinación preliminar de existencia de daño, dumping y relación causal. Esos exportadores ya habían visto menoscabado su derecho de defensa. Además, se veían ante la situación de tener que responder al cuestionario sobre dumping en **sólo** 20 días.

61. Como observación final, el Grupo Especial debería también tener en cuenta que el párrafo 1.1 del artículo 6 se refiere a las respuestas a los cuestionarios. En este caso, **ninguno** de los siete exportadores recibió el cuestionario sobre el daño y, por ende, ni siquiera se les concedió la oportunidad de responder.

Reclamación 15 - Prescindencia de la descripción del producto facilitada por los exportadores

62. El Brasil ha demostrado, en las Pruebas documentales BRA-22, BRA-23, BRA-24 y BRA-26 que Sadia, Avipal y Frangosul informaron en sus respuestas al cuestionario que no había diferentes características físicas entre los pollos vendidos a la Argentina y los vendidos en el Brasil. A pesar de ello, la autoridad investigadora no tuvo en cuenta esa información y utilizó el ajuste del valor normal propuesto por el solicitante en su solicitud.

63. El Brasil también demostró en la Prueba documental BRA-25 que Catarinense vendió pollos tipo griller (sin menudos) y pollos tipo broiler (con menudos) a la Argentina y en el Brasil. Sin embargo, la autoridad investigadora prefirió aplicar el ajuste del valor normal a todas las ventas de pollos realizadas en el Brasil, a pesar de que algunas de esas ventas no justificaban un ajuste porque se trataban de ventas de pollos tipo griller vendidos sin cabeza ni patas.

64. En la Primera comunicación, la Argentina parece justificar la no utilización de la información sobre la descripción del producto comunicada por los exportadores brasileños en sus respuestas al cuestionario, alegando simplemente la falta de documentación justificante.[47] Entendemos que en este caso la DCD no estaba autorizada a recurrir a los hechos de que se tenga conocimiento.

65. En virtud del párrafo 8 del artículo 6, la autoridad investigadora sólo está autorizada a recurrir a los hechos de que se tenga conocimiento cuando una parte niega el acceso a la **información necesaria** o no la facilita o entorpece significativamente la investigación. En la etapa de producción de pruebas de una investigación, la obligación básica de la autoridad investigadora es indicar la información que se requiere para la investigación. A ese respecto, el párrafo 1 del artículo 6 del Acuerdo establece:

> *"Se dará a todas las partes interesadas en una investigación antidumping aviso de la información que exijan las autoridades y amplia oportunidad para presentar por escrito todas las pruebas que consideren pertinentes por lo que se refiere a la investigación de que se trate."* (Sin cursivas ni subrayado en el original.)

66. El párrafo 1 del artículo 6 establece que las autoridades deben dar aviso de la información que exijan. Por lo tanto, si una autoridad investigadora no especifica claramente qué información exige, no puede sancionar a la parte interesada (utilización de los hechos de que se tenga conocimiento) por no presentar esa información.

[47] Primera comunicación de la Argentina, párrafos 176 a 185.

67. Además, el párrafo 1 del Anexo II del Acuerdo ratifica la obligación prevista en el párrafo 1 del artículo 6 al establecer lo siguiente:

> *"Lo antes posible después de haber iniciado la investigación, la autoridad investigadora deberá <u>especificar en detalle la información requerida</u> de cualquier parte interesada y la manera en que ésta deba estructurarla en su respuesta. Deberá además asegurarse de que la parte sabe que, <u>si no facilita esa información en un plazo prudencial</u>, la autoridad investigadora quedará en libertad para basar sus decisiones en los hechos de que tenga conocimiento, incluidos los que figuren en la solicitud de iniciación de una investigación presentada por la rama de producción nacional."* (Sin cursivas ni subrayado en el original.)

68. El párrafo 1 del Anexo II exige que la autoridad investigadora especifique **<u>en detalle</u>** la información requerida. Si esa información no se facilita dentro de un plazo razonable, la autoridad investigadora debe informar a la parte interesada que formulará una determinación basándose en los hechos de que tenga conocimiento. En consecuencia, la autoridad investigadora **<u>no está</u>** autorizada a recurrir a los hechos de que tenga conocimiento si la parte interesada no presenta determinada información porque la autoridad investigadora no indicó específicamente ese requerimiento.

69. Encontramos en el párrafo 6 del artículo 6 del Acuerdo un mayor respaldo a nuestra interpretación de que la DCD no estaba autorizada a recurrir a los hechos de que tuviera conocimiento ante la falta de documentación justificante. El párrafo 6 del artículo 6 establece lo siguiente:

> *"Salvo en las circunstancias previstas en el párrafo 8, las autoridades, en el curso de la investigación, se cerciorarán de la exactitud de la información presentada por las partes interesadas en la que basen sus conclusiones."* (Sin cursivas en el original.)

70. Del texto del párrafo 6 del artículo 6 se desprende que, a menos que las autoridades lo indiquen específicamente, los exportadores no están obligados a presentar documentación justificante de toda la información presentada a fin de demostrar la exactitud de esa información.

71. Esa fue también la conclusión del Grupo Especial que examinó el asunto *Argentina - Baldosas*:

> *"[...] concluimos que las autoridades investigadoras no pueden descartar información y recurrir a los hechos de que tengan conocimiento, invocando el párrafo 8 del artículo 6, por el hecho de que una parte no haya proporcionado suficiente documentación justificante de la información solicitada, a no ser que las autoridades investigadoras hayan pedido claramente a la parte que proporcione esa documentación justificante."*[48] (Sin cursivas en el original.)

72. A ese respecto, después de que Sadia, Avipal, Frangosul y Catarinense presentaran sus respuestas sobre la descripción del producto al cuestionario sobre el dumping, la autoridad investigadora en ningún momento durante el curso de la investigación pidió información/aclaraciones específicas ni documentación justificante sobre la descripción del producto facilitada por esos exportadores.

---

[48] *Argentina - Medidas antidumping definitivas aplicadas a las importaciones de baldosas de cerámica para el suelo procedentes de Italia*, 28 de septiembre de 2001, WT/DS189/R, párrafo 6.58 (adoptado el 5 de noviembre de 2001) (*Argentina - Baldosas*).

73. En realidad, ni siquiera en el cuestionario relativo al dumping se pidió concretamente que los exportadores presentaran documentación justificante sobre la descripción del producto.[49] En la sección "Instrucciones para completar el cuestionario por el productor/exportador", con el título de "Objeto y alcance", el cuestionario preveía que el productor/exportador respondiese al cuestionario con la mayor precisión posible, adjuntando la documentación justificante de sus respuestas o, en el caso de que no fuera posible, indicando la fuente de información.[50] De igual modo, en la sección "Instrucciones generales para completar el cuestionario" se establecía que el productor/exportador debía mencionar, en cada una de las hojas que presentase, el número del expediente, una respuesta detallada a cada pregunta, información sobre las fuentes utilizadas y la documentación adjunta correspondiente, como condición necesaria para acreditar la validez de la fuente.[51]

74. Examinando las instrucciones del cuestionario relativas a la necesidad de documentación justificante, no creemos que la autoridad haya facilitado información suficiente sobre la documentación justificante concreta que debían presentar los exportadores.

75. No podemos razonablemente suponer que el cuestionario pidiera documentación justificante de **toda** la información presentada por los exportadores en sus respuestas. Como mínimo, esto impondría una carga no razonable a los exportadores que respondieran al cuestionario. Además, hubiera sido **imposible** que los exportadores cumplieran lo solicitado dentro del plazo de 30 días para responder a los cuestionarios, según lo establecido por el párrafo 1.1 del artículo 6 del Acuerdo.

76. El hecho de que la DCD nunca pidiera aclaraciones ni documentación justificante sobre la información comunicada por los exportadores indicaba que la información que se había presentado sería aceptada. En ese sentido, el párrafo 6 del Anexo II establece:

> *"Si no se aceptan pruebas o informaciones, la parte que las haya facilitado deberá ser informada inmediatamente de las razones que hayan inducido a ello y deberá tener oportunidad de presentar nuevas explicaciones dentro de un plazo prudencial, teniendo debidamente en cuenta los plazos fijados para la investigación. Si las autoridades consideran que las explicaciones no son satisfactorias, en cualesquiera determinaciones que se publiquen se expondrán las razones por las que se hayan rechazado las pruebas o las informaciones."* (Sin cursivas en el original.)

77. Como se señaló anteriormente, la autoridad investigadora **nunca** informó a los exportadores de que la información sobre la descripción del producto comunicada por ellos era insuficiente o inaceptable. De este modo, la autoridad actuó de forma incompatible con el párrafo 6 del Anexo II del Acuerdo.

78. Además, la Argentina confirma que el ajuste se basó en el método de cálculo facilitado por el solicitante en su solicitud, y que la validez de ese método fue confirmada por la falta de objeción alguna por parte de los exportadores.[52] A ese respecto, se deben tener en cuenta las consideraciones siguientes.

79. En primer lugar, al presentar la información precisa sobre la descripción del producto, los exportadores ya indicaban que la necesidad del ajuste propuesto por el solicitante no estaba justificada. Además, la Embajada del Brasil en Buenos Aires envió una carta antes de la

[49] *Véanse* las páginas 19 y 21 de la Prueba documental BRA-22.

[50] *Véase* la página 19 de la Prueba documental BRA-22.

[51] *Véase* la página 21 de la Prueba documental BRA-22.

[52] Primera comunicación de la Argentina, párrafo 179.

determinación definitiva con sus consideraciones acerca del ajuste propuesto por el solicitante, y que sería utilizado por las autoridades en la determinación definitiva.[53] En esa carta, la Embajada del Brasil expresó que la autoridad investigadora, a fin de realizar una comparación equitativa, debía tener en cuenta, para **cada exportador**, las características del producto vendido a la Argentina y en el Brasil.[54] La Embajada del Brasil sostuvo asimismo que el ajuste del 9,09 por ciento correspondiente a la cabeza y patas era absurdo porque había exportadores que vendían en el mercado interno **los mismos** pollos que se vendían a la Argentina.[55] La Embajada también expresó otras consideraciones relativas a la metodología utilizada en el cálculo del ajuste, que no fueron tenidas en cuenta por la autoridad en su determinación definitiva.[56]

80. En segundo lugar, el solicitante no presentó, a los fines de la iniciación y durante la investigación, ninguna documentación justificante de que existieran diferencias en las características físicas de los pollos vendidos a la Argentina y los vendidos en el Brasil, de que tales supuestas diferencias afectaran a la comparabilidad de precios, y de que la diferencia de tasas de rendimiento presentada fuese correcta. Además, la información sobre el ajuste utilizada por el solicitante en su solicitud se había basado en información de JOX para los pollos refrigerados, con cabeza y patas, un producto diferente del producto objeto de la investigación: los pollos congelados con cabeza y patas. A pesar de ello, la autoridad investigadora consideró que la información de JOX era una prueba aceptable de que el ajuste se justificaba.[57]

81. Al considerar la información del solicitante en lugar de la de los exportadores, la autoridad investigadora no actuó con "especial prudencia" en su constatación sobre el valor normal y, por tanto, infringió también lo dispuesto en el párrafo 7 del Anexo II del Acuerdo.

Reclamación 17 - Prescindencia de los datos sobre el precio de exportación facilitados por los exportadores

82. Con respecto a la alegación de que la Argentina dejó de lado los datos sobre el precio de exportación facilitados por los exportadores brasileños y, en cambio, recurrió a la información sobre el precio de exportación facilitada por el organismo argentino *Ganadería*, hemos demostrado que Sadia, Avipal, Frangosul y Catarinense presentaron dicha información durante la investigación.

83. El 23 de abril de 1999, Sadia facilitó datos sobre el precio de exportación de los pollos vendidos a la Argentina en el período transcurrido entre 1996 y febrero de 1999.[58] El 7 de mayo de 1999, Avipal facilitó información sobre el precio de exportación de los pollos vendidos a la Argentina en el período transcurrido entre 1996 y marzo de 1999.[59]

[53] *Véase* la Prueba documental BRA-39.

[54] *Véase* la página 5 de la Prueba documental BRA-39.

[55] *Idem*.

[56] *Véase* la página 6 de la Prueba documental BRA-39.

[57] *Véase* la Primera comunicación de la Argentina, párrafo 50.

[58] *Véanse* la Prueba documental BRA-22 y las páginas 18 y 43 de la Prueba documental BRA-15.

[59] *Véanse* la Prueba documental BRA-23 y las páginas 22 y 45 de la Prueba documental BRA-15.

84. El 27 de abril de 1999, Frangosul facilitó datos sobre el precio de exportación de determinadas transacciones de exportación de pollos vendidos a la Argentina entre enero de 1996 y marzo de 1999, con la documentación justificante.[60] A pesar de que Frangosul presentó datos sobre el precio de exportación de cada transacción de venta a la Argentina en el período transcurrido entre 1996 y marzo de 1999, con la documentación justificante correspondiente, la autoridad investigadora no aceptó esa información alegando que las facturas no se habían traducido.[61] Hemos señalado en la Prueba documental BRA-26 que Frangosul presentó algunas facturas de ventas traducidas a la Argentina, como muestra de todas las facturas presentadas. Además, la mayor parte de la información contenida en las facturas de ventas a la Argentina ya estaba redactada en español.

85. El 3 de noviembre de 1999, Catarinense facilitó datos sobre el precio de exportación de determinadas transacciones de pollos vendidos a la Argentina entre enero de 1998 y enero de 1999, con la documentación justificante.[62] La DCD nunca solicitó la traducción de la documentación justificante correspondiente a los datos de los precios de exportación. Además, la mayor parte de la información contenida en las facturas de ventas a la Argentina ya estaba redactada en español.

86. En este caso, no sólo la autoridad solicitó información que excedía de la recopilación de datos correspondiente al período de dumping (enero de 1998 a enero de 1999), sino que también decidió que la información específica y la documentación justificante presentada por los exportadores no era tan completa y detallada como la información facilitada por el organismo argentino *Ganadería*.[63] No alcanzamos a comprender cómo la autoridad llegó a tal conclusión. Tampoco conocemos el fundamento en el que se basó la autoridad para utilizar la mejor información de que tuviera conocimiento conforme a lo dispuesto en el párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo.

Reclamación 21 - Falta de información de los hechos esenciales considerados

87. En la Prueba documental BRA-28 el Brasil ha presentado el informe anterior a la finalización de la etapa de producción de pruebas de la investigación antidumping ("Relevamiento de lo Actuado con Anterioridad al Cierre de la Etapa Probatoria"). En particular, el Brasil ha expresado que este informe no indicaba:

1) que la información sobre el valor normal en la lista de facturas presentada por Sadia, que abarcaban el período transcurrido entre enero de 1996 y febrero de 1999, no se utilizaría para determinar el valor normal de Sadia;

2) que la única información tenida en cuenta para establecer el valor normal correspondiente a Sadia en la determinación definitiva correspondería a la información sobre las transacciones escogida mediante las muestras tomadas por la DCD y respecto de las cuales se había presentado documentación justificante;

3) cuál era el motivo por el cual la DCD no tendría en cuenta la información presentada por Sadia correspondiente a todas las ventas en el mercado interno comunicadas;

4) que la única información que se tendría en cuenta para determinar el valor normal correspondiente a Avipal sería la información correspondiente a las transacciones respecto de las cuales se presentó documentación justificante;

---

[60] *Véanse* la Prueba documental BRA-24 y las páginas 29 y 49 de la Prueba documental BRA-15.

[61] *Véase* la página 75 de la Prueba documental BRA-15.

[62] *Véanse* la Prueba documental BRA-25 y las páginas 38 y 39 de la Prueba documental BRA-15.

[63] *Véase* la página 75 de la Prueba documental BRA-15.

5) cuál era el motivo por el cual la DCD no tendría en cuenta la información facilitada por Avipal correspondiente a todas las ventas en el mercado interno comunicadas;

6) que ninguna parte de la información sobre el valor normal presentada por Frangosul y Catarinense se tendría en cuenta para determinar el valor normal y un margen de dumping individual correspondiente a esos dos exportadores;

7) cuál era el motivo por el cual la DCD no tendría en cuenta la información sobre el valor normal facilitada por Frangosul y Catarinense;

8) por qué la información presentada por todos los exportadores brasileños no se tendría en cuenta a los fines de determinar el precio de exportación FOB; y

9) por qué la descripción del producto presentada por los exportadores en la investigación no se tendría en cuenta para evaluar si se justificaba el ajuste del valor normal a fin de tener en cuenta las diferencias en las características físicas.

88. El Brasil ratifica su posición en el sentido de que los exportadores no podían conocer simplemente mediante el examen del expediente de la investigación que las pruebas presentadas por el solicitante y obtenidas de fuentes secundarias, y no los hechos comunicados por los exportadores, se utilizarían como base principal para la determinación de la existencia y el alcance del dumping. Al no explicar los motivos por los que tal información se rechazaba, la autoridad investigadora denegó a los exportadores la oportunidad de defender sus intereses en el sentido del párrafo 9 del artículo 6 del Acuerdo.

89. Como se expresó en la Primera comunicación, en el caso de que la Argentina presentase información o documentos no divulgados a los exportadores durante la investigación como medio de justificar su actuación durante la investigación, el Brasil sostiene que esa falta de divulgación de hechos esenciales también debe considerarse como una violación del párrafo 9 del artículo 6 del Acuerdo.[64]

VI. RECLAMACIONES RELACIONADAS CON LA REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING Y LA DETERMINACIÓN DEFINITIVA POSITIVA

Párrafo 4 del artículo 2, párrafos 1, 4 y 5 del artículo 3 y párrafo 2.2 del artículo 12

Reclamación 26 - Carga no razonable impuesta a los exportadores

90. La DCD impuso una carga no razonable a los exportadores brasileños Sadia, Avipal y Frangosul al permitir que los exportadores presentasen información sobre el valor normal y el precio de exportación correspondientes a los años 1996 a 1999, cuando posteriormente se determinó que el período de investigación del dumping iba desde enero de 1998 hasta enero de 1999. La autoridad investigadora también impuso una carga excesiva a los exportadores brasileños al solicitarles que presentasen copia de la factura de cada una de las transacciones de venta en el mercado interno a fin de considerar todas las ventas comunicadas para determinar el valor normal y, en consecuencia, hacer una "comparación equitativa".

91. La Argentina reconoce que intencionalmente no definió el período de recolección de datos sobre el dumping.[65] Como justificación, manifestó que el Acuerdo no define el período de

[64] Primera comunicación del Brasil, párrafo 350.

[65] Primera comunicación de la Argentina, párrafo 243.

recolección de datos como tampoco el de objeto de investigación, y que la autoridad de aplicación tiene discrecionalidad para solicitar la documentación que considere necesaria a los efectos de la determinación del dumping, y puede requerir mayor información, en tanto la misma sea necesaria para garantizar el debido proceso a las partes interesadas.[66]

92. El Brasil no alcanza a comprender por qué la información sobre el valor normal y el precio de exportación correspondiente al período transcurrido entre enero de 1996 y diciembre de 1997 era necesaria para determinar la existencia de dumping en el período que va desde enero de 1998 hasta enero de 1999. De igual modo, el Brasil no alcanza a comprender por qué la información sobre el valor normal y el precio de exportación correspondiente al período transcurrido entre enero de 1996 y diciembre de 1997 era necesaria para garantizar el debido proceso de ninguna parte interesada en la investigación.

93. La Argentina trata de esgrimir el argumento de que la reclamación del Brasil es contradictoria porque algunas veces sostiene que la autoridad investigadora no pidió mayor información.[67] La Argentina sostiene asimismo que "allí donde la Autoridad de Aplicación requirió más información a efectos de lograr un resultado preciso, Brasil se queja de la información solicitada aduciendo que se trata de una 'carga excesiva para los exportadores'".[68]

94. Existe una diferencia obvia entre el tipo pertinente de información que la autoridad investigadora debe requerir en una investigación y la información que no es pertinente para la investigación.

95. Por ejemplo, la descripción del producto es el tipo de información que era pertinente en esta investigación. El párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo exigía a las autoridades que introdujeran ajustes en la comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal. Si las autoridades no sabían con certeza si tales ajustes se debían realizar, ya que había exportadores que no comunicaban ninguna diferencia entre el producto vendido en el Brasil y el vendido a la Argentina, la autoridad investigadora debía requerir más información. Sin embargo, no lo hizo. La introducción del ajuste cabeza/patas tenía efectos directos sobre el valor normal y sobre el margen de dumping definitivo. Se trataba del tipo de información que resultaba pertinente en esta investigación y que la autoridad estaba obligada a solicitar.

96. Sin embargo, la información sobre el valor normal y el precio de exportación correspondiente a un período ajeno al período de investigación que, desde luego, no fue ni siquiera utilizado para determinar el margen de dumping, **no** era el tipo de información pertinente para la investigación. Por lo tanto, solicitar la presentación de esta información y su documentación justificante constituía una carga excesiva para los exportadores.

97. Con respecto a esta reclamación, las CE sostienen que el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo no se refiere a la cuestión planteada por el Brasil.[69] Sobre este particular, las CE recuerdan el informe del Grupo Especial en el asunto *Egipto - Acero*, que estableció que el párrafo 4 del artículo 2 se refiere exclusivamente a la comparación entre el valor normal y el precio de exportación y que, por tanto, no se aplica a la determinación del valor normal y el precio de exportación.[70]

---

[66] *Idem*.

[67] Primera comunicación de la Argentina, párrafo 244.

[68] *Idem*.

[69] Comunicación de tercero presentada por las CE, párrafo 27.

[70] *Idem*.

98. El Brasil considera que la interpretación de la expresión "carga que no sea razonable" del párrafo 4 del artículo 2 formulada en ese informe es incorrecta en tanto el Grupo Especial constató que el requisito de la carga se aplica sólo a la comparación entre el precio de exportación y el valor normal, mediante varios ajustes según corresponda, y no a la determinación del valor normal.

99. El Brasil considera que el párrafo 4 del artículo 2 establece cómo debe realizarse una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal. Más concretamente, la última frase del párrafo 4 del artículo 2 dispone que "las autoridades indicarán a las partes afectadas qué información se necesita para garantizar una comparación equitativa y no les impondrán una carga probatoria que no sea razonable". Siendo esto así, la información sobre el valor normal **está** incluida en la información necesaria para garantizar una comparación equitativa. Si las autoridades no indican exactamente qué información se necesita para determinar el valor normal, ¿cómo se podrá realizar una comparación equitativa?

100. En este caso particular, la información sobre el valor normal y el precio de exportación correspondiente al período que va desde enero de 1996 hasta diciembre de 1997 **no** era una información necesaria para establecer una comparación equitativa. Por ende, al solicitar esa información, la autoridad investigadora impuso a los exportadores una carga no razonable.

Reclamación 32 - No utilización del mismo período para evaluar los factores enumerados en el párrafo 4 del artículo 3

101. El Brasil presentó como Prueba documental BRA-14 la determinación definitiva positiva de la existencia de daño realizada por la CNCE. En esa determinación, la CNCE declaró que el período de daño objeto de análisis correspondía al período transcurrido entre enero de 1996 y diciembre de 1998.[71] Sin embargo, sólo respecto de algunas variables, tales como la producción nacional, los precios, las importaciones, las exportaciones y el consumo aparente, la CNCE incluyó en sus análisis datos correspondientes al primer trimestre de 1999.[72]

102. El hecho de que algunos de los factores indicados en el párrafo 4 del artículo 3 fueran evaluados con respecto a un determinado período mientras que otros factores fueran evaluados en relación con un período diferente, indica que se utilizaron distintos parámetros de evaluación. Esto demuestra que el examen de los efectos de las importaciones objeto de dumping sobre los productores nacionales no fue objetivo y, por tanto, fue incompatible con el requisito del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo.

103. La Argentina ha alegado que en los casos de amenaza de daño, como el presente, "tanto la normativa internacional como la práctica concordante en la materia" prevén la posibilidad de analizar **más allá del período de la investigación** a efectos de indagar la existencia o no de una tendencia creciente de las importaciones y, en consecuencia, dar un mayor sustento fáctico a la investigación.[73]

104. Esta no es la cuestión planteada ante el Grupo Especial. El Brasil no impugna si en un caso de amenaza de daño la autoridad investigadora puede o no analizar datos de un período más allá del período objeto de la investigación. Lo que estamos impugnando es que en esta investigación la CNCE consideró un determinado período para el análisis del daño en el caso de algunos factores y consideró otro período para otros factores. Si la CNCE hubiera decidido analizar datos sobre **todos** los factores indicados en el párrafo 4 del artículo 3 en un período **más allá** del período objeto de

[71] *Véase* la página 9 de la Prueba documental BRA-14.

[72] *Idem*.

[73] Primera comunicación de la Argentina, párrafo 252.

investigación, el examen de los efectos de las importaciones objeto de dumping sobre los productores nacionales hubiese sido, al menos, objetivo en el sentido del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo. No fue esto lo que sucedió.

105. El análisis de la existencia de daño examinó los datos de los factores producción, precios, importaciones, exportaciones y consumo aparente correspondientes al período transcurrido entre 1996 y junio de 1999. El Grupo Especial puede verificarlo examinando las páginas siguientes del análisis de la existencia de daño en la determinación definitiva: **producción** (página 9 y cuadro 1 de la Prueba documental BRA-14); **precios del producto en el mercado interno** (página 14 y cuadros 15b - 16 de la Prueba documental BRA-14); **volumen y valor de las importaciones** (páginas 15 y 16 y cuadros 22 a 29 de la Prueba documental BRA-14); **exportaciones** (página 10 y cuadro 5 de la Prueba documental BRA-14); y **consumo aparente** (página 25 y cuadros 30 y 31 de la Prueba documental BRA-14).

106. Para todos los demás factores indicados en el párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo, la CNCE consideró en su análisis datos correspondientes al período transcurrido entre 1996 y diciembre de 1998.

107. En su Comunicación de tercero, los Estados Unidos parecen discrepar de la afirmación del Brasil de que un análisis de períodos diferentes no puede ser objetivo y que en sí mismo infringe el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo.[74]

108. Para respaldar su opinión, los Estados Unidos mencionan el informe del Grupo Especial que intervino en el asunto *Estados Unidos - Acero laminado en caliente*. En esa investigación, el Japón había alegado que la USITC se había centrado en dos de los tres años del período de investigación.[75] Entendemos que en esa investigación los Estados Unidos reunieron información sobre **todos los factores económicos pertinentes que tenían relación con la situación de la rama de producción nacional durante todo el período de tres años objeto de investigación**, y analizaron todos esos factores sobre la base de los datos que abarcaban ese período. También en este caso, el Japón **reconoció** que la USITC reunió datos correspondientes a todo el período de tres años y que esos datos fueron mencionados en el informe de la USITC en varios cuadros y anexos.[76]

109. El caso mencionado por los Estados Unidos no guarda ninguna relación con el caso presente. Consideramos que los hechos de esa investigación y los hechos y la alegación de infracción presentada en el caso presente por el Brasil son muy diferentes. En primer lugar, en aquella investigación no se discutió el período de investigación. Aparentemente, se reunieron y analizaron datos correspondientes a todo el período trienal de la investigación. En el caso presente, la autoridad investigadora **no** reunió información sobre todos los factores durante el mismo período, esto es, desde enero de 1996 hasta diciembre de 1998. Como se afirmó anteriormente, respecto de los factores producción nacional, precios, importaciones, exportaciones y consumo aparente, el período de análisis del daño fue el de enero de 1996 hasta junio de 1999. En segundo lugar, en aquella investigación la USITC analizó **todos** los factores económicos pertinentes correspondientes a la totalidad del período trienal de la investigación. En el caso presente, la autoridad investigadora argentina **no**

[74] Comunicación de tercero presentada por los Estados Unidos, párrafo 12.

[75] *Estados Unidos - Medidas antidumping sobre determinados productos de acero laminado en caliente procedentes del Japón*, 28 de febrero de 2001, WT/DS184/R, párrafo 7.226 (*Estados Unidos - Acero laminado en caliente*). Esta cuestión no fue apelada. *Estados Unidos - Medidas antidumping sobre determinados productos de acero laminado en caliente procedentes del Japón*, 24 de julio de 2001, WT/DS184/AB/R, párrafo 240 (adoptado el 23 de agosto de 2001) (*OA - Estados Unidos - Acero laminado en caliente*).

[76] *Idem*.

evaluó **todos** los factores enumerados en el párrafo 4 del artículo 3 para el mismo período de análisis de la existencia de daño.

110. Al parecer, los Estados Unidos alegan que, respecto de un período determinado del análisis de la existencia de daño, la autoridad investigadora puede comparar datos correspondientes a determinados años sin examinar **explícitamente** los datos de otros años. Sin embargo, todos los factores se analizan respecto de un determinado período de análisis de la existencia de daño. En el caso presente, a diferencia del caso citado por los Estados Unidos, las autoridades argentinas decidieron que, respecto de determinados factores, el período para el análisis de la existencia de daño iría desde enero de 1996 hasta diciembre de 1998, y que para otros factores, el período de análisis de la existencia de daño sería el de enero de 1996 hasta junio de 1999.

111. Si una autoridad investigadora establece un determinado período para el análisis de la existencia de daño en el caso de algunos factores y otro período para ese análisis en el caso de otros factores, dicha autoridad no ha realizado un examen objetivo de los efectos de las importaciones objeto de dumping en los productores nacionales en el sentido del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo.

Reclamación 38 - No evaluación de todos los factores enumerados en el párrafo 4 del artículo 3

112. Al examinar los efectos de las importaciones objeto de dumping en la situación de la rama de producción nacional, la autoridad investigadora está obligada a evaluar **todos** los factores e índices económicos pertinentes enumerados en el párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo. En la determinación definitiva de la existencia de daño, la CNCE no evaluó los siguientes factores económicos pertinentes enumerados en el párrafo 4 del artículo 3: la disminución real y potencial de la productividad; los factores que afectan a los precios internos; la magnitud del margen de dumping, y los efectos negativos reales o potenciales en el flujo de caja ("cash flow"), el crecimiento y la capacidad de reunir capital o la inversión.

113. La Argentina alega que los solicitantes presentaron información sobre las "condiciones de productividad" del sector durante el curso de la investigación.[77] La Argentina sostiene que esta información se reflejó en la determinación definitiva sobre la existencia de daño (páginas 12, 13, 14 y 20) y en el Informe Técnico (páginas 26, 28, 29, 30 y 95). Solicitamos al Grupo Especial que verifique esta información. El Brasil ha constatado que en esas páginas se presenta un análisis de los factores siguientes: capacidad de producción; utilización de la capacidad; empleo; salarios; estructura de los costos, y ventas en el mercado interno, pero no se facilita ninguna información para el período objeto de análisis ni evaluación alguna correspondiente a ese período para el factor productividad.

114. En lo que respecta a los factores que afectan a los precios internos, la Argentina afirma que la CNCE consideró adecuadamente todos los factores que, en adición a las importaciones, pudieron tener algún efecto sobre los precios del producto interno.[78] Para respaldar esta afirmación, la Argentina remite al Grupo Especial al cuadro 16 del Informe Técnico.[79] El cuadro 16 presenta el promedio de los ingresos de las ventas por kilogramo de pollos frescos o refrigerados. El Brasil no ve ninguna relación entre la información que figura en el cuadro 16 y los factores que afectan a los precios internos.

[77] Primera comunicación de la Argentina, párrafo 275.

[78] Primera comunicación de la Argentina, párrafo 292.

[79] *Idem*.

115. Con respecto a la magnitud del margen de dumping, la Argentina propone hacer la evaluación que estaba previsto hacer en la determinación definitiva de la existencia de daño en su Primera comunicación.[80] En consecuencia, la Argentina no indica en qué parte de su determinación definitiva de la existencia de daño la autoridad evaluó la magnitud del margen de dumping. Afirmamos una vez más que la autoridad no evaluó ni pudo evaluar la magnitud del margen de dumping porque la determinación definitiva de la existencia de dumping, con el margen de dumping, se emitió el 23 de junio de 2000, es decir, seis meses después de que se dictara la determinación definitiva de la existencia de daño. No obstante, la Argentina alega en su Primera comunicación que márgenes entre el 8 y el 14 por ciento son significativos y así fueron evaluados por la autoridad debido a su impacto potencial sobre la producción argentina.[81] En primer lugar, no se hizo tal evaluación en la determinación definitiva de la existencia de daño. En segundo lugar, incluso si la CNCE hubiera considerado, cosa que no hizo, márgenes entre el 8 y el 14 por ciento en la determinación definitiva de la existencia de daño, esos márgenes se referían a los márgenes utilizados para iniciar la investigación[82] y no tenían en cuenta la información sobre el valor normal o el precio de exportación presentada durante la investigación.

116. Con respecto al factor flujo de caja, la Argentina expresa, por primera vez, que el requisito del análisis del flujo de caja no era relevante ni resultaba factible debido a las características particulares del mercado argentino.[83] El Brasil hace notar que no se ofreció ninguna explicación de este tipo en la determinación definitiva de la existencia de daño, en la que este factor ni siquiera se mencionó. Con respecto a los factores crecimiento y capacidad de reunir capital o inversión, la Argentina no indica de ningún modo en su Primera comunicación si estos factores fueron evaluados, y cuándo, en el análisis de la existencia de daño de la determinación definitiva.

Reclamación 40 - Omisión de dar un aviso definitivo adecuado

117. Al parecer, los Estados Unidos coinciden con el Brasil en que el Acuerdo Antidumping exige que la autoridad investigadora evalúe **todos** los factores enumerados en el párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo.[84] Sin embargo, los Estados Unidos han afirmado que la omisión de mencionar un determinado factor en la determinación publicada no infringe necesariamente el párrafo 2.2 del artículo 12 del Acuerdo.[85]

118. Los Estados Unidos interpretan que el párrafo 2 del artículo 12 sólo exige que las autoridades expongan "con suficiente detalle las constataciones y conclusiones a que se haya llegado sobre todas las cuestiones de hecho y de derecho *que la autoridad investigadora considere pertinentes*".[86] Los Estados Unidos alegan que, si bien es preciso evaluar todos los factores enumerados, no todos ellos son necesariamente pertinentes en un caso determinado.[87]

---

[80] Primera comunicación de la Argentina, párrafo 294.

[81] Primera comunicación de la Argentina, párrafo 295.

[82] *Véase* la página 12 de la Prueba documental BRA-2.

[83] Primera comunicación de la Argentina, párrafo 299.

[84] Comunicación de tercero presentada por los Estados Unidos, párrafo 14.

[85] Comunicación de tercero presentada por los Estados Unidos, párrafo 15.

[86] *Idem*.

[87] *Idem*.

119. El Brasil ha demostrado que en la determinación definitiva de la existencia de daño la Argentina ni siquiera ha enumerado todos los factores del párrafo 4 del artículo 3, y mucho menos los ha evaluado. El Brasil entiende que si el Grupo Especial constata que la Argentina ha omitido evaluar todos los factores económicos indicados en el párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo (Reclamación 38), el Grupo Especial no necesita abordar la alegación del Brasil relativa a la omisión de la Argentina de dar una explicación adecuada de la evaluación de esos factores en el aviso definitivo (Reclamación 40). Entendemos que un aviso puede dar una explicación adecuada en la determinación formulada, pero si la determinación era sustancialmente incompatible con los requisitos del Acuerdo, la suficiencia del aviso carece de importancia. No obstante, si el Grupo Especial no constatase que la Argentina ha omitido evaluar todos los factores del párrafo 4 del artículo 3, el Grupo Especial debe abordar la alegación del Brasil relativa a la omisión de dar aviso adecuado (Reclamación 40).

120. Los Estados Unidos también han expresado que, sin embargo, debería desprenderse de la determinación publicada que la autoridad ha evaluado todos los factores enumerados en el párrafo 4 del artículo 3.[88] A ese respecto, el Brasil observa que la evaluación de **todos** los factores de daño enumerados en el párrafo 4 del artículo 3 es **obligatoria** y que, como tal, esta evaluación es una cuestión de hecho y de derecho intrínsecamente pertinente. Incluso si un factor determinado no tiene un efecto pertinente en la determinación de la existencia de daño, la autoridad **no puede** considerar que su evaluación no es pertinente y la misma se debe presentar en el aviso definitivo. Por lo tanto, la determinación definitiva debe necesariamente indicar si todos los factores se evaluaron en la investigación y de qué modo y, como mínimo, ha de explicar por qué un factor determinado no se consideró pertinente.

VII. RECLAMACIONES RELACIONADAS CON LA IMPOSICIÓN Y RECAUDACIÓN DE DERECHOS ANTIDUMPING COMO RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING

Párrafos 2 y 3 del artículo 9 y párrafo 2.2 del artículo 12

Reclamaciones 28 y 29 - Derecho que excede del margen de dumping

121. En lo que respecta a las alegaciones de infracción de los párrafos 2 y 3 del artículo 9 y del párrafo 2.2 del artículo 12 del Acuerdo, relativos a los derechos antidumping específicos que deben percibirse como la diferencia absoluta entre el precio FOB facturado en cualquier envío y un "precio mínimo de exportación" determinado, hemos tenido en cuenta los argumentos esgrimidos por la Argentina[89] y por las CE y el Canadá en sus Comunicaciones de tercero[90] para preparar el siguiente análisis de la cuestión.

122. Comenzaremos por examinar el texto del artículo 9 del Acuerdo, que establece de qué modo se deben imponer y recaudar los derechos antidumping. Concretamente, la parte pertinente del párrafo 2 del artículo 9 del Acuerdo establece:

> *"Cuando se haya establecido un derecho antidumping con respecto a un producto, ese derecho se percibirá en la cuantía apropiada en cada caso y sin discriminación sobre las importaciones de ese producto, cualquiera que sea su procedencia, declaradas objeto de dumping y causantes de daño [...]."* (Sin cursivas en el original.)

---

[88] Comunicación de tercero presentada por los Estados Unidos, párrafo 16.

[89] Primera comunicación de la Argentina, párrafos 305 a 321.

[90] Comunicación de tercero presentada por las CE, párrafos 29 a 37; Comunicación de tercero presentada por el Canadá, párrafos 1 a 18.

123. El párrafo 3 del artículo 9 del Acuerdo establece asimismo:

> *"La cuantía del derecho antidumping no excederá del margen de dumping establecido de conformidad con el artículo 2."* (Sin cursivas en el original.)

124. Del texto de estas dos disposiciones se desprende que el requisito del párrafo 2 del artículo 9 (percepción de derechos antidumping en una cuantía apropiada) debe relacionarse estrechamente con el requisito del párrafo 3 del artículo 9 del Acuerdo (los derechos no deben exceder del margen de dumping establecido de conformidad con el artículo 2). En otros términos, si la cuantía del derecho antidumping excede del margen establecido de conformidad con el artículo 2, el derecho antidumping, en consecuencia, se habrá percibido en una cuantía no apropiada. Siendo así, la infracción del párrafo 2 del artículo 9 depende enteramente de la infracción del párrafo 3 del artículo 9 del Acuerdo.

125. Por consiguiente, examinaremos con atención el párrafo 3 del artículo 9 del Acuerdo.

126. El párrafo 3 del artículo 9 del Acuerdo impone un límite a la cuantía del derecho antidumping. Ese límite es el margen de dumping constatado en la investigación, según lo establecido en el artículo 2 del Acuerdo. Este artículo se refiere a la determinación del dumping. Consideramos que, en virtud del artículo 2, la **única** disposición que define de qué modo se deben establecer los márgenes de dumping es el párrafo 2 del artículo 4 de ese artículo. La parte pertinente del párrafo 4.2 del artículo 2 establece:

> *"A reserva de las disposiciones del párrafo 4 que rigen la comparación equitativa, la existencia de márgenes de dumping durante la etapa de investigación se establecerá normalmente sobre la base de una comparación entre un promedio ponderado del valor normal y un promedio ponderado de los precios de todas las transacciones de exportación comparables o mediante una comparación entre el valor normal y los precios de exportación transacción por transacción [...]."* (Sin cursivas ni subrayado en el original.)

127. En el caso presente, el margen de dumping establecido de conformidad con el artículo 2 del Acuerdo fue el establecido durante la etapa de investigación. Se trata, pues, del margen de dumping basado en los datos sobre el valor normal y el precio de exportación facilitados por los exportadores durante la investigación, correspondientes al período transcurrido entre enero de 1998 y enero de 1999, y que fueron utilizados por la autoridad investigadora en la determinación definitiva.[91] Desde el momento en que se impone el derecho antidumping hasta que se realiza un examen de la imposición de ese derecho, el único margen de dumping disponible, calculado de conformidad con el artículo 2, es el margen evaluado en la investigación, que figura en la determinación definitiva y se comunica a todas las partes interesadas mediante un aviso público, según lo establecido en el párrafo 2 del artículo 12 del Acuerdo. A este respecto, el párrafo 2.2 del artículo 12 exige que el aviso público de la conclusión de una investigación contenga la información siguiente:

> *"[...] iii) los márgenes de dumping establecidos y una explicación completa de las razones que justifican la metodología utilizada en la determinación y comparación del precio de exportación y el valor normal con arreglo al artículo 2; [...]"* (Sin cursivas en el original.)

128. El "precio mínimo de exportación" determinado en la Resolución Nº 574/2000 no reúne los requisitos del margen de dumping establecidos con arreglo al artículo 2, ya que no refleja el valor normal y el precio de exportación facilitados por los exportadores y examinados por la autoridad en su investigación.

---

[91] *Véanse* las páginas 102 a 104 de la Prueba documental BRA-15.

129. A ese respecto, el Canadá ha expresado en su Comunicación en calidad de tercero que el párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo no parece pertinente inmediatamente en el caso presente[92], ya que al determinar el "margen de dumping" a los fines del párrafo 3 del artículo 9, el artículo 2 se debe examinar en su totalidad.[93] Al hacerlo, el Canadá alega que el **margen de dumping** es simplemente la diferencia entre el precio de exportación y "el precio comparable [...] en el país exportador", según lo establecido en el párrafo 1 del artículo 2.[94]

130. Recordamos al Grupo Especial que el párrafo 1 del artículo 2 no define y ni siquiera hace referencia al modo en que el margen de dumping se debe determinar. El párrafo 1 del artículo 2 simplemente define el dumping. En rigor, la única disposición del Acuerdo que explica concretamente cómo se ha de establecer el margen de dumping es el párrafo 4.2 del artículo 2.

131. Tanto la Argentina como el Canadá parecen interpretar que el margen de dumping constatado en el curso de la investigación inicial no limita la cuantía de los derechos antidumping que se pueden imponer a las futuras importaciones.[95] El Canadá alega asimismo que, cuando las importaciones futuras son objeto de dumping con un margen mayor que el que se determinó que existía en el momento de la determinación definitiva, el Miembro importador puede imponer medidas antidumping en una cuantía equivalente a ese margen.[96]

132. Al formular esta afirmación, el Canadá no tiene en cuenta que este presunto "mayor margen de dumping" causado por importaciones futuras sólo consideraría los precios de importación de la mercancía en cuestión, omitiendo cualquier posible cambio de los precios en el mercado interno. No es improbable que los cambios en las condiciones del mercado o una mejora de la productividad del exportador creen una situación en la que el precio del producto disminuya, tanto en el mercado interno como en el mercado de exportación. Aparentemente, el Canadá no considera la posibilidad de que tal situación pudiera ocurrir, ya que propone que los derechos antidumping pueden variar basándose únicamente en las importaciones futuras.

133. Además, si supusiéramos, sobre la base del argumento del Canadá, que el "margen de dumping" que se ha de imponer y percibir se refiere simplemente a la diferencia entre el precio de exportación y el precio comparable en el país exportador **en cualquier período dado**, ¿cuál sería el propósito del "margen de dumping" constatado en una determinación definitiva? Obviamente, el margen de dumping constatado en la determinación definitiva de una investigación es el establecido sobre la base del valor normal y el precio de exportación facilitados durante la investigación. En ese sentido, el margen de dumping es el constatado en el período objeto de investigación.

134. Contrariamente a la posición del Canadá, consideramos que el párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo es **sumamente** importante para interpretar el texto del párrafo 3 del artículo 9 del Acuerdo.

---

[92] Comunicación de tercero presentada por el Canadá, párrafo 11.

[93] Comunicación de tercero presentada por el Canadá, párrafo 10.

[94] *Idem*.

[95] Declaración oral de la Argentina, párrafo 60; Comunicación de tercero presentada por el Canadá, párrafo 17.

[96] Comunicación de tercero presentada por el Canadá, párrafo 17.

135. El mismo razonamiento se aplica a los argumentos de las CE relativos a la interpretación del párrafo 3 del artículo 9. En particular, las CE sostienen que "[...] del hecho de que el párrafo 4.2 del artículo 2 se aplique a la etapa de investigación no se deduce que la aplicación de todas las demás disposiciones del artículo 2 se restrinja también a esa etapa".[97]

136. Señalamos a la atención del Grupo Especial el hecho de que el Brasil **nunca** afirmó ni sugirió que todas las demás disposiciones del artículo 2 se limitan a la etapa de investigación. Lo que hemos alegado es que el margen de dumping se establece sobre la base de la información reunida y examinada durante la investigación y, en ese sentido, los márgenes de dumping se limitan al período de investigación, según se establece en el párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo.

137. En lo que respecta a esta cuestión, se impone una aclaración. El párrafo 4 del artículo 2 establece cómo debe realizarse una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal (en el mismo nivel comercial, sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible, posibilidad de tener en cuenta las diferencias, etc.). Esta disposición es válida para realizar una comparación equitativa en cualquier procedimiento, ya que el párrafo 1 del artículo 2 define el dumping a los fines del Acuerdo, esto es, en las investigaciones y los exámenes. De igual modo, las disposiciones del artículo 2 relativas al valor normal y el precio de exportación también son aplicables a cualquier procedimiento (investigaciones y exámenes). No obstante, el método para determinar el margen de dumping se establece en el párrafo 4.2 del artículo 2 y **se** limita a las investigaciones.

138. Las CE expresan asimismo que la interpretación del Brasil está en contradicción con el contexto inmediato del párrafo 3 del artículo 9.[98] Al esgrimir este argumento, las CE manifiestan que "el párrafo 3.1 del artículo 9 prevé la posibilidad de percibir derechos de forma retrospectiva, lo que, por definición, supone la posibilidad de calcular los márgenes de dumping sobre la base de datos correspondientes a envíos individuales o períodos no comprendidos en el período de investigación".[99] Las CE también citan el párrafo 3.2 del artículo 9 del Acuerdo, que dispone que cuando "los derechos se fijen de forma prospectiva, las autoridades **devolverán** todo derecho 'pagado en exceso del margen de dumping'".[100] Según las CE, ese "margen de dumping" **no** es el margen establecido para el período de investigación, sino el margen establecido para envíos individuales o períodos **posteriores a** la imposición de los derechos.[101] Esta parece también ser la interpretación de la Argentina en su Primera comunicación.[102]

139. No podemos estar de acuerdo con esta interpretación.

140. El párrafo 3.1 del artículo 9 se refiere a los derechos calculados de forma prospectiva. En esos casos, un margen de dumping positivo, consecuencia de una investigación, no sólo autoriza la percepción de derechos sino que también sirve como base para el establecimiento del depósito realizado por los importadores hasta que se recaude ese derecho efectivamente. A los fines de la percepción, cuando se solicite, se realiza un examen administrativo para determinar el margen de dumping correspondiente a un nuevo período. Por ejemplo, durante el primer año de la puesta en vigor de la medida, los importadores depositan una cuantía equivalente al margen de dumping fijado

[97] Comunicación de tercero presentada por las CE, párrafo 32.

[98] Comunicación de tercero presentada por las CE, párrafo 33.

[99] Comunicación de tercero presentada por las CE, párrafo 33.

[100] *Idem.*

[101] *Idem.*

[102] Primera comunicación de la Argentina, párrafos 309 a 316.

en la investigación para cada transacción realizada (cantidad que deba satisfacerse). Al final de ese año, si así se solicita, se inicia un examen administrativo para determinar el valor normal y el precio de exportación correspondiente a ese año. La comparación entre este nuevo valor normal y este precio de exportación dará lugar a un margen de dumping que servirá como base para el derecho que se percibirá efectivamente y la nueva cantidad que deba satisfacerse el año siguiente.

141. El párrafo 3.2 del artículo 9 se refiere a la fijación de derechos de forma prospectiva. En esos casos, el derecho que ha de percibirse se determina y no puede exceder del margen de dumping establecido. Este derecho servirá de base para la recaudación hasta que se determine un nuevo margen de dumping (mediante un examen). Cuando se fija el derecho, existe la posibilidad de que se haya percibido una cantidad que exceda del margen determinado para transacciones específicas. Por ese motivo, el párrafo 3 del artículo 9 prevé la posibilidad de devoluciones. Sin embargo, la devolución tiene lugar sólo si un **importador** la solicita y no supone la modificación del derecho. Para que el derecho se modifique, tendría que determinarse un nuevo margen de dumping, que tendría en cuenta los datos facilitados por los exportadores (valor normal y precio de exportación) para un período diferente del considerado en la investigación.

142. Por lo tanto, en el sistema prospectivo, cuando se impone el derecho el único margen de dumping disponible que puede tenerse en cuenta para la fijación del derecho que se ha de percibir es el margen de dumping determinado en la investigación de conformidad con lo establecido en el artículo 2.

143. En lo que respecta a la devolución de los derechos pagados en exceso del margen de dumping, el Grupo Especial debería observar que esas devoluciones no suponen que un Miembro tiene facultades discrecionales (o el derecho) de percibir derechos en cualquier cuantía. Es también importante observar que incumbe al importador la carga de solicitar tal devolución. El objetivo de la devolución es garantizar que el importador no pagará en exceso del margen determinado en la investigación en los casos en que el margen de dumping relativo a una transacción determinada del importador sea inferior al margen de dumping establecido en la investigación. Observamos que el procedimiento de devolución no es inmediato porque requiere un nuevo cálculo del margen de dumping, y los plazos para realizar estos cálculos son equivalentes a los plazos en una investigación.

144. Concretamente y con respecto a los "valores mínimos de exportación" establecidos por la Argentina, no hay ningún límite para la cuantía de los derechos que se percibirán y, por tanto, en esencia esto no se ajusta al Acuerdo. Como se expresó anteriormente, no podemos compartir la opinión de que la referencia al margen de dumping contenida en el párrafo 3.2 del artículo 9 del Acuerdo no se refiere al margen de dumping establecido para el período de investigación.

145. Además, el párrafo 3.2 del artículo 9 no establece de qué modo el margen de dumping se establece sino que se refiere a los casos de devolución, según se explicó *supra*. No podemos presumir que el párrafo 3.2 del artículo 9 autoriza un examen permanente del derecho antidumping, en el que sólo se examina el precio de exportación y el valor normal permanece invariable (esto es, el valor normal determinado en la investigación). Como mínimo, ese nuevo margen de dumping no estaría en conformidad con el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo, ya que la comparación entre el precio de exportación y el valor normal no se haría con respecto a las ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible. Una comparación entre el precio corriente de exportación de una transacción concreta y un valor normal promedio basado en datos correspondientes a un año atrás no se ajusta a lo dispuesto en los párrafos 1 y 4 del artículo 2 (o sea, que los precios deben ser *comparables*).

146. Si el párrafo 3.2 del artículo 9 se interpretase de ese modo, ello significaría también que los exportadores, o sea las partes interesadas en la investigación que facilitaron los datos sobre el precio de exportación y el valor normal, **no** tendrían absolutamente ningún derecho de defensa con respecto a este "examen" previsto en el párrafo 3.2 del artículo 9, ya que corresponde al importador, y no al exportador, el solicitar devoluciones con arreglo al párrafo 3.2 del artículo 9. Repetimos que **el**

párrafo 3.2 del artículo 9 del Acuerdo no prevé un examen del margen de dumping establecido en la investigación. Si se justifica la realización de un examen, el Acuerdo prevé esta situación en el artículo 11. En ese caso, todas las partes interesadas, con inclusión del exportador, participan y pueden presentar nuevos datos sobre el precio de exportación y el valor normal y puedan defender sus intereses.

147. Por otra parte, cuando las CE afirman que el párrafo 4 del artículo 9 del Acuerdo **expresamente** prevé "la percepción de derechos variables en cuantía equivalente a la diferencia entre el valor normal establecido para el período de investigación y los precios de exportación de los envíos realizados después del establecimiento de los derechos"[103], de **ningún** modo podemos estar de acuerdo con esa posición.

148. Al examinar el argumento de las CE nos remitimos al texto pertinente del párrafo 4 del artículo 9:

> *"Cuando las autoridades hayan limitado su examen de conformidad con la segunda frase del párrafo 10 del artículo 6, los derechos que se apliquen a las importaciones procedentes de exportadores o productores no abarcados por el examen no serán superiores:*
>
> > *i) al promedio ponderado del margen de dumping establecido con respecto a los exportadores o productores seleccionados, o*
> >
> > *ii) cuando las cantidades que deban satisfacerse en concepto de derechos antidumping se calculen sobre la base del valor normal prospectivo, a la diferencia entre el promedio ponderado del valor normal correspondiente a los exportadores o productores seleccionados y los precios de exportación de los exportadores o productores que no hayan sido examinados individualmente, [...]."* (Sin cursivas ni subrayado en el original.)

149. El párrafo 4 del artículo 9 determina un límite máximo que la autoridad investigadora no deberá exceder al establecer un tipo para "todos los demás". Interpretamos que el párrafo 4 i) del artículo 9 se refiere a los casos en los que el derecho antidumping se establece de forma prospectiva (párrafo 3.2 del artículo 9) y el párrafo 4 ii) del artículo 9 se refiere a los casos en que los derechos se fijan de forma retrospectiva (párrafo 3.1 del artículo 9). Sabemos que esto es así porque el texto del párrafo 4 i) del artículo 9 **expresamente** se refiere al "margen de dumping", esto es, al "margen de dumping" establecido en la investigación.

150. Esta interpretación se ve corroborada por el criterio del Órgano de Apelación expresado en el asunto *Estados Unidos - Acero laminado en caliente:*

> *"Antes de centrarnos en el texto de la salvedad del párrafo 4 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping, hemos de recordar la interpretación dada al término "márgenes" que figura en el párrafo 4.2 del artículo 2 de este Acuerdo en* Comunidades Europeas - Ropa de cama. *En esa diferencia, el Grupo Especial constató, y nosotros hacemos nuestra esa constatación, que el término "márgenes" se refiere al margen de dumping individual determinado para cada productor o exportador* ***objeto de investigación*** *y para cada producto* ***objeto de investigación***. *Este margen refleja una comparación basada en el examen de todas las* ***transacciones*** *pertinentes en el* ***mercado interno*** *y en el* ***mercado de exportación***. *No consideramos que haya ninguna razón [...] para que interpretemos que en el*

[103] Comunicación de tercero presentada por las CE, párrafo 35.

> *párrafo 4 del artículo 9 el término "márgenes" tiene un sentido distinto del que tiene en el párrafo 4.2 del artículo 2. [...]"*[104] (Sin cursivas, negritas ni subrayado en el original.)

151. Como el párrafo 4 ii) del artículo 9 se refiere a las "cantidades que deban satisfacerse en concepto de derechos antidumping", entendemos que esa disposición se refiere a los derechos fijados de forma retrospectiva y no sobre una base prospectiva.

152. Dicho esto, el Brasil ha demostrado en su Primera comunicación que la Argentina impuso un derecho antidumping variable que puede exceder del margen de dumping constatado en la determinación definitiva[105] y, por tanto, puede ser percibido en cuantías no apropiadas.

Reclamación 30 - Omisión de indicar el modo en que se estableció el "valor mínimo de exportación"

153. Como observación final, las CE manifestaron en su Comunicación que no resulta claro el método preciso utilizado por las autoridades argentinas para calcular los "valores mínimos de exportación".[106] Según las CE, no resulta claro si esos "valores mínimos de exportación" guardan relación, y de ser así cómo, con los valores normales establecidos durante la investigación.[107]

154. Tampoco resulta claro para el Brasil de qué modo la autoridad investigadora determinó los "valores mínimos de exportación". Ésta es precisamente nuestra alegación de infracción del párrafo 2.2 del artículo 12 del Acuerdo. En la determinación definitiva y en la Resolución Nº 574/2000 no se ofreció ninguna explicación acerca del modo en que la Argentina calculó los "valores mínimos de exportación". Hemos alegado en nuestra Primera comunicación que la Argentina no facilitó información pertinente por las que no se aplicó el margen establecido en la determinación definitiva y sobre la forma en que se calculó el "valor mínimo de exportación".[108] Consideramos que la aplicación de medidas antidumping constituye información pertinente que se debe incluir en el aviso público en el que se comunica la imposición de un derecho definitivo. Los exportadores tienen el derecho de conocer cómo fueron considerados por la autoridad investigadora la información y los argumentos presentados durante la investigación, y cómo esa información se utilizó para llegar a la medida antidumping.

155. A este respecto, incluso si el "valor mínimo de exportación" fuera equivalente o inferior a los valores normales pertinentes determinados durante la investigación, la Argentina omitió indicar en la determinación definitiva sobre la existencia de dumping o en la Resolución Nº 574/2000 las razones por las que no se aplicó el margen establecido en la determinación definitiva y cómo se calculó el "valor mínimo de exportación", según lo exigido por el párrafo 2.2 del artículo 12 del Acuerdo.

---

[104] *Estados Unidos - Medidas antidumping sobre determinados productos de acero laminado en caliente procedentes del Japón*, 24 de julio de 2001, WT/DS184/AB/R, párrafo 118 (adoptado el 23 de agosto de 2001) (*OA - Estados Unidos - Acero laminado en caliente*).

[105] Primera comunicación del Brasil, párrafos 520 a 531.

[106] Comunicación de tercero presentada por las CE, párrafo 37.

[107] *Idem.*

[108] Primera comunicación del Brasil, párrafo 542.

VIII. CONCLUSIÓN Y PETICIONES

A. CONCLUSIÓN

156. El Brasil ha planteado en esta diferencia 41 reclamaciones. Estas reclamaciones han sido presentadas detalladamente en la Primera comunicación del Brasil, que también incluyó 34 pruebas documentales que respaldan las diversas alegaciones del Brasil. El Brasil planteó y presentó otras pruebas y argumentos relativos a las 41 reclamaciones en su primera declaración oral, así como en la presente comunicación. Por lo tanto, no se debe interpretar que el Brasil ha renunciado a ninguna de las reclamaciones que no se hubieran abordado en la presente comunicación.

157. El Brasil estima haber tratado todos los puntos planteados por el Grupo Especial, la Argentina y los terceros en esta diferencia, y considera que es posible que se presenten cuestiones o consideraciones adicionales relativas a los argumentos aquí presentados. En tal caso, el Brasil agradecerá la oportunidad de presentar sus opiniones y argumentos en esa ocasión.

B. PETICIONES

158. Por las razones expresadas durante la presente diferencia, el Brasil reitera respetuosamente su petición, presentada en la Primera comunicación, de que el Grupo Especial constate que la Argentina ha actuado de forma incompatible con el Acuerdo Antidumping en lo que respecta a los párrafos 2, 3, 7 y 8 del artículo 5, párrafo 1 del artículo 12, párrafos 1.1, 1.2, 1.3, 2 y 8 del artículo 6, párrafos 3, 5, 6 y 7 del Anexo II, párrafos 9 y 10 del artículo 6, párrafos 4 y 4.2 del artículo 2, párrafo 2.2 del artículo 12, párrafos 1, 2, 4 y 5 del artículo 3, párrafo 1 del artículo 4 y párrafos 2 y 3 del artículo 9.

159. En consecuencia, el Brasil también reitera su petición de que el Grupo Especial recomiende que el OSD solicite a la Argentina que ponga estas medidas en conformidad con el GATT de 1994 y el Acuerdo Antidumping y que, al hacerlo, el Grupo Especial utilice su derecho de formular recomendaciones sobre el modo en que la Argentina podría aplicar las recomendaciones del Grupo Especial, según lo establecido en el párrafo 1 del artículo 19 del ESD.

160. A la luz de las numerosas infracciones del Acuerdo Antidumping, generadoras de consecuencias, solicitamos que el Grupo Especial sugiera que la Argentina derogue inmediatamente la Resolución Nº 574/2000 por la que se impusieron derechos antidumping.

ANEXO A-4

LISTA DE PREGUNTAS A LAS PARTES

Primera reunión sustantiva, 25 de septiembre de 2002

RESPUESTAS DEL BRASIL

Reclamación 1

A ambas partes

2. A juicio de las partes, ¿cuáles son las obligaciones derivadas del párrafo 2 del artículo 5? Además, ¿estarían de acuerdo las partes en que el párrafo 2 del artículo 5 impone obligaciones al solicitante y no a la autoridad investigadora, como se expresó en *Guatemala - Cemento II*? Sírvanse explicarlo. En el caso de coincidir con las conclusiones de *Guatemala - Cemento II*, ¿qué recomendación debería formular un grupo especial en el caso de que se constatase una infracción del párrafo 2 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping? En particular, ¿sería apropiada una recomendación de que un Miembro ponga la medida en conformidad?

Respuesta

El párrafo 2 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping exige que la solicitud incluya pruebas de la existencia de dumping, daño y relación causal. Concretamente, la solicitud debe contener la información requerida en los apartados i) a iv) del párrafo 2 del artículo 5. Del texto del párrafo 2 del artículo 5 no podemos deducir que estas obligaciones se imponen al solicitante. La parte pertinente del párrafo 2 del artículo 5 establece:

> *"[...] No podrá considerarse que para cumplir los requisitos fijados en el presente párrafo basta una simple afirmación no apoyada por las pruebas pertinentes. [...]"*
> (Sin cursivas ni subrayado en el original.)

La **consideración** de que las pruebas son suficientes para cumplir los requisitos del párrafo 2 del artículo 5 está a cargo de la autoridad investigadora y no del solicitante. En efecto, no es el solicitante quien ha de considerar si la prueba presentada en la solicitud es suficiente para cumplir los requisitos del párrafo 2 del artículo 5.

Además, la OMC y sus Acuerdos prevén obligaciones y derechos de los **Miembros** de la OMC. En consecuencia, el Acuerdo Antidumping también impone obligaciones a los **Miembros** de la OMC y no a determinadas partes interesadas en una investigación. Por lo tanto, no podemos deducir que las obligaciones previstas en el párrafo 2 del artículo 5 son obligaciones del solicitante y no de la autoridad investigadora.

Con arreglo al párrafo 2 del artículo 5 del Acuerdo, la autoridad investigadora debe examinar la solicitud para determinar si incluye la información exigida en ese artículo. Para que una autoridad investigadora acepte una solicitud debe **considerar** si la información y las pruebas que contiene son suficientes para cumplir los requisitos establecidos en los apartados i) a iv) del párrafo 2 del artículo 5. En una etapa posterior, y después de que la autoridad haya considerado la solicitud y haya aceptado que reúne los requisitos del párrafo 2 del artículo 5, el párrafo 3 del mismo artículo del Acuerdo impone otra obligación a la autoridad investigadora. Esta obligación consiste en examinar la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas en la solicitud para determinar si son suficientes para justificar la iniciación de una investigación.

Al Brasil

3. ¿Exige el párrafo 2 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping que la solicitud incluya las pruebas que razonablemente se tengan al alcance sobre cualquier ajuste que deba realizarse si tal ajuste es pedido por el solicitante para alegar la existencia de "dumping"? A este respecto, ¿deben esas pruebas determinar:

a) que se requiere un ajuste;

b) la naturaleza y el alcance del ajuste;

c) la base/método para realizar tal ajuste?

Sírvanse explicarlo.

Respuesta

El párrafo 2 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping exige que la solicitud incluya pruebas del **dumping**. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo, el "dumping" consiste en la introducción de un producto en el mercado de otro país a un precio de exportación inferior al valor normal (precio comparable en el mercado del país exportador). Para probar la existencia de dumping o que hay un indicio de dumping, se debe realizar una comparación entre el precio de exportación y el valor normal. Al formular esta comparación, se realizan ajustes correspondientes a las diferencias que afecten a la comparabilidad de los precios. Por lo tanto, si un solicitante alega que se necesita un ajuste a fin de realizar una comparación equitativa y para que exista un indicio de dumping, las pruebas pertinentes de tal ajuste se **deben** incluir en la solicitud.

Teniendo en cuenta lo expuesto, entendemos que el párrafo 2 del artículo 5 del Acuerdo exige que la solicitud incluya las pruebas pertinentes que razonablemente se tengan al alcance sobre los ajustes que se han de realizar, especialmente si ese ajuste es tan importante que sin él el solicitante no podría haber alegado la existencia de dumping. Obviamente, no todos los ajustes tienen tal efecto para determinar la existencia del dumping. Sin embargo, no es éste el caso.

En el caso presente, si la autoridad investigadora no hubiese aceptado el ajuste del valor normal (9,09 por ciento) propuesto por el solicitante y hubiese considerado el precio de exportación para todas las transacciones y no sólo para las de precio inferior al valor normal, no habría habido indicio de la existencia de dumping y la investigación no se habría iniciado.

Para demostrarlo, hemos simulado un ejercicio a fin de demostrar que no habría habido indicio de dumping si las autoridades hubiesen considerado:

1. el promedio del precio f.o.b. para todas las transacciones de exportación, y no sólo para las de precios inferiores al valor normal al determinar el precio de exportación; y,

2. que no se justificaba un ajuste del valor normal porque el solicitante no presentó pruebas pertinentes que respaldaran ese ajuste.

Para el valor normal, hemos utilizado el precio publicado en JOX el 30 de junio de 1997, según se expresa en la solicitud, sin el ajuste del 9,09 por ciento en el valor normal. En esta hipótesis, el valor normal habría sido de **0,957** dólares EE.UU./kg.[1]

[1] *Véase* la página 9 de la prueba documental BRA-2.

Con respecto al precio de exportación, hemos considerado todos los datos facilitados por el solicitante correspondientes al período de enero a junio y agosto de 1997, en lugar de considerar sólo las transacciones de exportación realizadas a precios inferiores al precio en el Brasil de los pollos eviscerados. Usando este método, el precio de exportación para ese período hubiese sido de **1,014** dólares/kg.[2]

También con respecto al precio de exportación, hemos tenido en cuenta todos los datos de exportación facilitados por el organismo argentino Delegación II - Unidad de Informática ("DUI") para el período transcurrido entre agosto y octubre de 1996, en lugar de considerar sólo las transacciones de exportación realizadas a precios inferiores al precio de los pollos eviscerados en el Brasil. El precio de exportación de ese período hubiese sido de **1,091** dólar/kg.[3]

Comparando los precios de exportación indicados *supra* (**1,014** o **1,091** dólar/kg) con el valor normal no ajustado (**0,957** dólar/kg), el Grupo Especial podrá verificar que el valor normal fue inferior al de los precios de exportación y que, por lo tanto, **no** había indicios de que los pollos procedentes del Brasil estuvieran entrando en el mercado argentino a precios de dumping.

Este ejercicio sirve para mostrar al Grupo Especial cuán importante era que la autoridad investigadora hubiese considerado y exigido que las pruebas pertinentes contenidas en la solicitud identificaran e indicaran:

1) que se requería un ajuste;

2) la naturaleza y el alcance del ajuste;

3) la base/método para realizar tal ajuste.

El Brasil estima que se requieren pruebas de **tipo** pertinente cuando en un caso se desprende obviamente de la solicitud que el valor normal y el precio de exportación indicados en la solicitud requerirán ajustes significativos para que se pueda efectuar una comparación equitativa. Como mínimo, la autoridad investigadora, al examinar la solicitud, debería haber solicitado pruebas pertinentes para respaldar la alegación de que se justificaba un ajuste con tales efectos. Las pruebas pertinentes, esto es, la información derivada de un documento destinado a probar un hecho o una proposición, deben respaldar la necesidad de un ajuste (especialmente cuando las presuntas diferencias en las características físicas que dan lugar al ajuste afectan a la comparabilidad de precios) y el método adoptado para realizar tal ajuste.

4. ¿Estaba la información sobre los ajustes mencionada en los párrafos 70 y 71 de la Primera comunicación escrita del Brasil 'razonablemente al alcance' del solicitante en el momento de presentación de la solicitud? Sírvanse explicarlo.

Respuesta

Sí, estimamos que la información relativa a los pollos vendidos en el Brasil (con inclusión de sus características físicas) estaba razonablemente al alcance del solicitante en el momento en que se presentó la solicitud.

[2] *Véase* la página 10 de la prueba documental BRA-2 y el anexo de la prueba documental BRA-2 con datos de exportación para el período de enero a junio y agosto de 1997.

[3] *Véase* la última página de la prueba documental BRA-2, con datos de exportación correspondientes al período transcurrido entre agosto y octubre de 1996.

No nos proponemos indicar aquí de qué modo y cuándo el solicitante debería recabar tal información a fin de aportar las pruebas requeridas en una solicitud. No obstante, hemos comprobado que hay varias asociaciones y publicaciones avícolas (nacionales y regionales) en el Brasil, en las que el solicitante podría haber obtenido las pruebas necesarias. Mencionamos a ese respecto la publicación brasileña presentada por el importador Interamericana Comercial S.R.L. ("Interamericana"), la Folha de Londrina/Folha do Paraná.[4] Más concretamente, los exportadores brasileños también presentaron durante la investigación una publicación sobre precios de la Associação Nacional dos Abatedouros Avícolas ("ANAB") relativa a los pollos congelados vendidos en el mercado interno durante todo el año 1997 y los primeros siete meses de 1998.[5]

Reclamación 2

Al Brasil

14. ¿Depende la reclamación del Brasil fundada en el párrafo 3 del artículo 5, relativa al ajuste de los pollos congelados/refrigerados, de una constatación del Grupo Especial en el sentido de que la Argentina tuvo razón al realizar el ajuste cabeza/patas en el momento de la iniciación? En otros términos, ¿alega el Brasil que si la necesidad de un ajuste cabeza/patas se desprendía obviamente de la solicitud, lo mismo sucedía con la necesidad de un ajuste congelado/refrigerado?

Respuesta

La Reclamación 2 contenida en la comunicación del Brasil, relativa a la infracción del párrafo 3 del artículo 5 del Acuerdo, no es si la autoridad investigadora debería haber realizado el ajuste congelado/refrigerado. El argumento esgrimido en la Reclamación 2 consiste en que si las autoridades consideraron la información presentada en la solicitud de que se necesitaba un ajuste para compensar las diferencias cabeza/patas, entonces, como mínimo, la autoridad investigadora debería también haber realizado un ajuste para compensar las diferencias entre los pollos congelados/refrigerados.

Recordamos que la solicitud presentada por los solicitantes figura en la prueba documental BRA-1. Teniendo en cuenta esa prueba documental, el Grupo Especial podrá verificar que los datos sobre el precio de exportación facilitados por el solicitante y utilizados por la autoridad hacían referencia a pollos congelados (Nomenclatura Común MERCOSUR NCM 0207.12.00)[6], un producto diferente del correspondiente a la publicación de precios JOX utilizada para determinar el valor normal, que correspondía a los pollos refrigerados (NCM 0207.11.00).[7] Si la Argentina consideró que había allí pruebas suficientes para realizar el ajuste de cabeza y patas, debería también haber considerado, a partir de la información presentada en la solicitud, que se requería un ajuste entre pollos congelados y refrigerados.

Dicho esto, la Reclamación 2 del Brasil consiste en que **no** había pruebas suficientes en la información facilitada en la solicitud para que las autoridades argentinas hubiesen aceptado que era necesario un ajuste del valor normal para compensar las supuestas diferencias en las características físicas (cabeza/patas) entre los pollos vendidos a la Argentina y en el Brasil.

[4] *Véase* la página 13 de la prueba documental BRA-15.

[5] *Véanse* las páginas 16, 20 y 24 de la prueba documental BRA-15.

[6] *Véase* la página 6 de la prueba documental BRA-1.

[7] *Véase* la página 2 de la prueba documental BRA-1.

La información sobre el valor normal presentada en su solicitud por el solicitante era la información proporcionada por JOX y se refería exclusivamente a pollos refrigerados vendidos en São Paulo con cabeza, pies y menudos, en un día de 1997. La información contenida en la publicación sobre precios JOX no expresaba ni afirmaba que todos los pollos vendidos en el Brasil tenían cabeza, patas y menudos. La información presentada no correspondía a los precios a los que el producto en cuestión fue vendido cuando se destinó al consumo en el Brasil.

Entendemos que el solicitante trató de convertir los precios publicados en JOX correspondientes a los pollos refrigerados con cabeza y patas en una prueba de que todos los pollos vendidos en el Brasil eran refrigerados e incluían cabeza y patas. Eso no es cierto. A pesar de ello, la autoridad investigadora aceptó incorrectamente la información de JOX como prueba de que todos los pollos vendidos en el Brasil eran refrigerados y tenían cabeza y patas.

El solicitante alegó asimismo que era necesario compensar estas diferencias en las características físicas y presumió que esas diferencias afectaban a la comparabilidad de precios. Tampoco en este caso se presentaron en la solicitud pruebas para respaldar la alegación de que esas diferencias afectaban a la comparabilidad de precios.

Después, el solicitante presentó un cálculo de la compensación en el que la tasa de rendimiento de los pollos eviscerados vendidos en el Brasil es del 88 por ciento de los pollos vivos y la tasa de rendimiento de los pollos eviscerados vendidos en la Argentina es del 80 por ciento de los pollos vivos. En ninguna parte de la solicitud ni de la determinación de iniciar la investigación hay indicación alguna de algún documento que respalde la alegación de que la tasa de rendimiento de los pollos vendidos en el Brasil es del 88 por ciento y la de los vendidos en la Argentina es del 80 por ciento. Este cálculo y las tasas de rendimiento propuestos fueron aceptados por la autoridad investigadora a pesar de que no se presentó en la solicitud ninguna prueba justificante que respaldara esas alegaciones.

Reclamación 6

Al Brasil

21. El párrafo 136 de la Primera comunicación escrita del Brasil dice en la parte pertinente:

> **'Si [las autoridades] hubieran examinado la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas con la solicitud, las autoridades habrían exigido que el solicitante indicara el precio de los pollos durante todo el período objeto de análisis, para realizar correctamente una comparación equitativa con los precios de exportación en ese mismo período.'**
>
> **En opinión del Brasil, ¿cuál es 'todo el período objeto de análisis'?**

Respuesta

La respuesta del Brasil a esta pregunta no se refiere a si consideramos adecuado el período objeto de análisis establecido por la Argentina antes de la iniciación. El Brasil limitará su respuesta a lo que considera todo el período objeto de análisis sobre la base de los datos del valor normal y el precio de exportación utilizados por la autoridad en la iniciación.

Al determinar si en la solicitud hay pruebas suficientes de la existencia de dumping para justificar la iniciación, la autoridad investigadora no puede hacer caso omiso de las disposiciones del artículo 2 del Acuerdo Antidumping, que definen el dumping. En particular, el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo exige que se realice una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible.

Teniendo en cuenta que, a los fines de la iniciación, los datos considerados por la DCD para determinar el precio de exportación fueron los correspondientes al período transcurrido entre agosto y octubre de 1996 y entre enero y junio de 1997 y a agosto del mismo año[8], estimamos que para realizar una comparación equitativa la autoridad debería **por lo menos** haber considerado los datos sobre el valor normal correspondientes al mismo período, esto es, desde agosto hasta octubre de 1996 y desde enero a junio de 1997 y a agosto del mismo año. Esto no fue así.

El solicitante y la autoridad investigadora consideraron el valor normal a los fines de la iniciación sobre la base de un único día de 1997 (el 30 de junio). A ese respecto, sabemos, a raíz de la información facilitada por el solicitante antes de la iniciación y durante la investigación, que razonablemente estaba al alcance la información sobre el valor normal correspondiente a todo 1996 y 1997.

El 17 de febrero de 1998, antes de la iniciación de la investigación, el solicitante presentó a la autoridad una información adicional que incluía, entre otros datos, la publicación de precios de JOX respecto de los pollos refrigerados, con cabeza y patas, en el mercado brasileño, correspondiente a julio y diciembre de 1997 y enero y febrero de 1998.[9] Incluso con esta información, la autoridad prefirió iniciar la investigación basándose únicamente en la información sobre el valor normal de un único día de 1997.

Además, el 26 de julio de 1999, durante la investigación, el solicitante presentó nuevamente información actualizada sobre el valor normal correspondiente a tres días de cada uno de los 12 meses de 1998 y dos días de enero de 1999.[10]

De los hechos indicados precedentemente se desprende que la publicación de precios JOX estaba (y está) razonablemente al alcance del solicitante con respecto a cualquier período, y podría haber sido presentada en la solicitud. De igual modo, hemos demostrado que las autoridades no examinaron la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas con la solicitud (o la información adicional presentada por el solicitante) para determinar si eran suficientes para justificar la iniciación de una investigación.

Reclamación 9

A ambas partes

22. En el caso presente, ¿en virtud de qué instrumento jurídico se inició la investigación?

Respuesta

El Brasil entiende que la investigación se inició cuando el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos ("MEyOSP") dictó la Resolución Nº 11/1999, anunciando la iniciación de la investigación antidumping sobre las importaciones de pollos procedentes del Brasil.[11]

[8] *Véase* la página 12 de la prueba documental BRA-2.

[9] *Véase* la prueba documental BRA-4.

[10] *Véase* la prueba documental BRA-19.

[11] *Véase* la prueba documental BRA-7.

Dicho esto, el Grupo Especial debería tener en cuenta el hecho de que la **consideración** de las pruebas de la existencia de dumping y de daño que dieron lugar a la decisión de iniciar la investigación no se hizo simultáneamente. Con fines de aclaración, presentaremos la secuencia de hechos relacionados con esta reclamación para que el Grupo Especial verifique lo que hemos alegado.

1. El 7 de enero de 1998, la DCD emitió un informe relativo a la viabilidad de la iniciación de la investigación antidumping, determinando que había pruebas suficientes de la existencia de dumping en las transacciones de exportación de pollos a la Argentina procedentes del Brasil.[12]

2. El 7 de enero de 1998, la CNCE extendió el Acta Nº 405, determinando que la prueba del daño era **insuficiente** para justificar la iniciación de la investigación.[13]

3. El 17 de febrero de 1998, después de tener acceso al Acta Nº 405, el solicitante presentó a la autoridad información adicional.[14]

4. El 22 de septiembre de 1998, la CNCE extendió el Acta Nº 464, determinando que había pruebas suficientes de la amenaza de daño para justificar la iniciación de la investigación.[15]

5. El 29 de diciembre de 1999, la autoridad que tuvo a su cargo el análisis de la relación causal emitió un informe sobre ésta. En este documento, la autoridad expresó que la DCD había basado su informe en los elementos incluidos en la solicitud original, que se refería al período transcurrido entre enero y junio de 1997.[16] En la determinación de la relación causal se señaló también que el solicitante había presentado información adicional actualizada correspondiente a todo el año 1997 y el primer semestre de 1998.[17] No obstante, la DCD no realizó ni dio a conocer un nuevo análisis del dumping que tuviera en cuenta la información adicional presentada por el solicitante.

6. El 20 de enero de 1999, el MEyOSP dictó la Resolución Nº 11/1999, anunciando la iniciación de la investigación antidumping sobre las importaciones de pollos procedentes del Brasil.[18] Esta Resolución se publicó en el Boletín Oficial argentino el 25 de enero de 1999.

De la secuencia de hechos indicada precedentemente, podemos concluir que las pruebas de la existencia de dumping y de daño fueron examinadas en momentos diferentes. Las pruebas de la existencia de dumping fueron examinadas el 7 de enero de 1998 y las pruebas de la existencia de daño lo fueron el 22 de septiembre de 1998, más de ocho meses después del examen de las pruebas del dumping. Si el término "simultáneamente" se define como "occurring or operating at the same time" (que ocurre o actúa al mismo tiempo)[19] y el Grupo Especial interpreta que el párrafo 7 del artículo 5 exige que la autoridad examine las pruebas simultáneamente y no de forma secuencial, ¿cómo pudo la

[12] *Véase* la prueba documental BRA-2.

[13] *Véase* la prueba documental BRA-3.

[14] *Véase* la prueba documental BRA-4.

[15] *Véase* la prueba documental BRA-6.

[16] *Véase* la página 2 de la prueba documental BRA-20.

[17] *Véase* la página 4 de la prueba documental BRA-20.

[18] *Véase* la prueba documental BRA-7.

[19] *The Concise Oxford Dictionary*, novena edición, Oxford University Press, 1995, página 1294.

autoridad haber examinado simultáneamente las pruebas de la existencia de dumping y de daño si había una distancia de ocho meses entre ambos exámenes?

Para que la Argentina hubiese cumplido el requisito del párrafo 7 del artículo 5, se debería haber realizado el 22 de septiembre de 1998 un nuevo examen de la existencia de dumping teniendo en cuenta la información actualizada presentada por el solicitante, pero esto no sucedió. En este caso, el examen de la existencia de dumping y de daño no fue simultáneo.

Por consiguiente, aunque entendemos que el MEyOSP es la autoridad que dictó la decisión de iniciar la investigación, esa decisión se basó en las pruebas de la existencia de dumping examinadas por la DCD el 7 de enero de 1998 y en las pruebas de la existencia de daño examinadas por la CNCE el 22 de septiembre de 1998.

23. ¿Qué interpretación dan las partes a la siguiente cita del informe del Grupo Especial que examinó el asunto *Guatemala - Cemento II*: estimamos que el párrafo 7 del artículo 5 exige que la autoridad investigadora examine las pruebas sobre la existencia del dumping y del daño que tiene ante sí simultáneamente y no de forma secuencial?

Respuesta

En primer lugar, desearíamos señalar que consideramos que no es posible que una autoridad **examine** las pruebas de la existencia del dumping y del daño simultáneamente si las pruebas examinadas por las autoridades se refieren sin lugar a dudas a períodos distintos en el caso del dumping y en el caso del daño.

El Grupo Especial comprobará que el análisis de la relación causal, antes de la iniciación, se llevó a cabo el 29 de diciembre de 1999, y en ese análisis la autoridad expresó que la DCD realizó un análisis de la existencia del dumping basándose en los elementos que figuraban en la solicitud **inicial**, que tomó en cuenta el período transcurrido entre enero y junio de 1997.[20] En la determinación de la relación causal también se señaló que el solicitante presentó información actualizada adicional correspondiente a todo el año 1997 y el primer semestre de 1998.[21] Sin embargo, la DCD no **examinó** la información actualizada presentada por el solicitante y no efectuó un nuevo análisis de la existencia del dumping.

Por otra parte, en el primer análisis de la existencia de daño, el Acta Nº 405, se **consideró** que no había pruebas suficientes de la existencia de daño para justificar la iniciación de la investigación. Los datos reunidos para ese análisis de la existencia del daño correspondían al período transcurrido entre enero de 1994 y junio de 1997.[22] Ocho meses después del análisis de la existencia del dumping y el primer análisis de la existencia del daño, la CNCE realizó un segundo análisis de la existencia del daño, el Acta Nº 464, y consideró que había pruebas suficientes de la amenaza de daño para justificar la iniciación de la investigación. El segundo análisis de la existencia del daño se basó en los datos reunidos para el período transcurrido entre enero de 1994 y junio de 1998.[23]

[20] *Véase* la página 2 de la prueba documental BRA-20.

[21] *Véase* la página 4 de la prueba documental BRA-20.

[22] *Véase* la prueba documental BRA-3.

[23] *Véase* la prueba documental BRA-3.

Si en el primer análisis de la existencia del daño se estimó que el dumping constatado en junio de 1997 no causaba daño ni amenaza de daño en junio de 1997, ¿cómo pudo la Argentina haber constatado una amenaza de daño en junio de 1998 si las importaciones objeto de dumping en junio de 1997 no causaban daño en junio de 1997?

En segundo lugar, incluso si el texto del párrafo 7 del artículo 5 del Acuerdo pudiera interpretarse de conformidad con el criterio del Grupo Especial en *Guatemala - Cemento II* (examen simultáneo y no secuencial de las pruebas de la existencia del dumping y del daño), en este caso eso tampoco sucedió.

En nuestra respuesta a la pregunta 22, *supra*, se presentó la secuencia de hechos que indica claramente que las pruebas de la existencia del daño fueron examinadas ocho meses después del examen de las pruebas de la existencia del dumping. La diferencia de ocho meses entre estos dos exámenes no se ajusta a la interpretación que hizo el Grupo Especial en *Guatemala - Cemento II* del requisito del párrafo 7 del artículo 5 del Acuerdo.

Reclamación 10

A ambas partes

24. ¿Cuáles son las 'partes interesadas de cuyo interés tenga conocimiento la autoridad investigadora' a las que hace referencia el párrafo 1 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping?

Respuesta

La definición de las "partes interesadas", a los fines del Acuerdo Antidumping, se establece en el párrafo 11 del artículo 6 del Acuerdo. Incluye al exportador, el productor extranjero y el importador del producto objeto de investigación; al gobierno del Miembro exportador, y al productor del producto similar en el Miembro importador.

Basándonos en esa definición, entendemos que la frase "partes interesadas de cuyo interés tenga conocimiento la autoridad investigadora" significa las partes interesadas definidas en el párrafo 11 del artículo 6, cuyo interés en la investigación haya sido reconocido o identificado por la autoridad investigadora.

A ese respecto, recordamos al Grupo Especial que, antes de la iniciación de la investigación, el solicitante presentó, el 17 de febrero de 1998, información adicional que incluía listas de importaciones de pollos procedentes del Brasil, desglosadas por productor y exportador.[24] En esas listas se identificaban los nombres de 15 productores y 20 exportadores brasileños de pollos. Esas listas presentadas por el solicitante eran, de hecho, un documento procedente de dos organismos argentinos: *SENASA - Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria* ("*SENASA*") y la *Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Dirección de Ganadería* ("*Ganadería*").[25] En esas dos listas se identificaron a cinco productores/exportadores brasileños (Comaves, Minuano, Chapecó, Catarinense y Perdigão) de los siete productores/exportadores que fueron notificados de la investigación casi ocho meses después de su iniciación.[26] Entendemos que en ese momento, antes de la iniciación, el solicitante había identificado y proporcionado los nombres de los productores/exportadores brasileños de pollos a la autoridad investigadora.

[24] *Véase* la prueba documental BRA-4.

[25] *Véanse* los anexos 1 y 2 de la prueba documental BRA-4.

[26] *Véase* la Primera comunicación del Brasil, párrafos 192 a 201.

Además, en el informe relativo a la viabilidad de la iniciación de la investigación antidumping, el 7 de enero de 1998, la autoridad investigadora identificó a 10 exportadores brasileños de la mercancía en cuestión.[27] La identificación de esos exportadores brasileños fue efectuada por la **propia** autoridad investigadora antes de la iniciación de la investigación. Estos 10 exportadores eran "partes interesadas de cuyo interés [tenía] conocimiento la autoridad investigadora" en el sentido del párrafo 1 del artículo 12 del Acuerdo. Entre esos 10 exportadores identificados figuraban cinco (Comaves, Minuano, Chapecó, Catarinense y Perdigão) de los siete exportadores que fueron notificados de la investigación casi ocho meses después de su iniciación, y después de la realización de una determinación preliminar de la existencia de daño, dumping y relación causal.

Como observación final, consideramos que es bastante evidente que un exportador que exporta el producto objeto de una investigación tendrá sin duda interés en la investigación. Después de todo, las exportaciones de esas empresas podrían quedar sujetas, al final de la investigación, a la imposición de derechos antidumping.

Por lo tanto, de los hechos mencionados anteriormente se desprende que esos exportadores eran "partes interesadas de cuyo interés tenga conocimiento la autoridad investigadora" y deberían haber sido notificados de la investigación tan pronto como ésta se hubiera iniciado.

25. ¿Cuándo fueron notificadas de la iniciación de la investigación las siguientes partes:

el Gobierno del Brasil, Avipal, Seara, Frigorifico Nicolini, Sadia, Frangosul, Chapecó, Minuano, Perdigão, Catarinense, CCLP, Penabranca y Comaves?

Respuesta

El Gobierno del Brasil fue notificado de la iniciación de la investigación el 1º de febrero de 1999.[28]

Los exportadores brasileños Avipal, Seara, Nicolini, Sadia y Frangosul fueron notificados por la DCD de la iniciación y de la necesidad de presentar respuestas al cuestionario sobre el dumping el 10 de febrero de 1999.[29] Los mismos exportadores fueron notificados por la CNCE de la iniciación y de la necesidad de presentar respuestas al cuestionario sobre el daño el 16 de febrero de 1999.[30]

Los exportadores brasileños Chapecó, Minuano, Perdigão, Catarinense, CCLP, Penabranca y Comaves fueron notificados por la DCD de la iniciación de la investigación y de la necesidad de presentar respuestas al cuestionario sobre el dumping el 15 de septiembre de 1999[31], casi ocho meses después de la iniciación de la investigación. Estos exportadores nunca fueron notificados ni recibieron de la CNCE un cuestionario sobre el daño.

A este respecto, nos remitimos a la explicación de la Argentina de que el cuestionario relativo al daño fue enviado únicamente a ocho exportadores (cuando, en realidad, fue remitido a sólo cinco exportadores) porque el análisis de la existencia de daño examina básicamente el daño causado a la rama de producción nacional y, por tanto, no es necesario que todos los exportadores reciban el cuestionario relativo al daño y respondan al mismo.

---

[27] *Véanse* las páginas 4 y 5 de la prueba documental BRA-2.

[28] *Véase* la prueba documental ARG-III.

[29] *Véase* la prueba documental BRA-8.

[30] *Véase* la prueba documental BRA-9.

[31] *Véase* la prueba documental BRA-13.

Señalamos a la atención del Grupo Especial el hecho de que un análisis del daño toma en cuenta no sólo los efectos de las importaciones objeto de dumping en la rama de producción nacional (párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo) sino también el volumen de las importaciones presuntamente objeto de dumping (párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo) y el efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los precios en el mercado interno (párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo). Por consiguiente, la información sobre el volumen y el precio de las importaciones facilitada por los exportadores es importante y necesaria en un análisis sobre la existencia del daño.

Además, era importante y, de hecho, constituía un derecho de todos los exportadores el recibir el cuestionario relativo al daño y tener la oportunidad de responder a las preguntas formuladas por la CNCE. Si otros exportadores y las partes interesadas tuvieron la oportunidad de defender sus intereses respondiendo al cuestionario sobre el daño, estos siete exportadores también deberían haber tenido esa oportunidad. El responder o no al cuestionario sobre el daño era una decisión que debía ser tomada por los exportadores y no por la autoridad investigadora.

Reclamación 11

A ambas partes

27. ¿Cuál es el significado de la palabra 'cuestionarios' en el párrafo 1.1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping? A juicio de las partes, ¿se limita la palabra 'cuestionarios' únicamente a los cuestionarios proporcionados en la etapa inicial de la investigación?

Respuesta

El Brasil entiende que el término "cuestionarios" que figura en el párrafo 1.1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping se refiere a los cuestionarios proporcionados en la etapa inicial de la investigación. Si la autoridad investigadora requiere posteriormente información adicional y complementaria o aclaraciones de la información facilitada (por los exportadores, los importadores o la rama de producción nacional) en la respuesta a los cuestionarios, la autoridad investigadora solicitará tal información.

En particular, el término "cuestionarios" del párrafo 1.1 del artículo 6, utilizado en una investigación antidumping, se refiere al cuestionario sobre el dumping y también al cuestionario sobre el daño. Entendemos que algunos Miembros adoptan un sistema en el que dos organismos comparten la responsabilidad de administrar la legislación antidumping y los procedimientos de investigación. En este sistema, uno de los organismos tiene a su cargo la determinación de la existencia de dumping y el cálculo del margen de dumping, y el otro determina si la rama de producción nacional ha sufrido daño por las importaciones presuntamente objeto de dumping. Entendemos que la Argentina adopta un sistema de este tipo.

En consecuencia, la Argentina tampoco cumplió lo dispuesto en el párrafo 1.1 del artículo 6 del Acuerdo por no haber enviado el cuestionario sobre el daño a los exportadores brasileños CCLP, Comaves, Minuano, Chapecó, Catarinense, Perdigão y Penabranca.

Reclamación 12

A ambas partes

32. ¿Cuál es el significado de la expresión 'que intervengan' en el párrafo 1.2 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping? ¿Considerarían las partes que las empresas que conocen la existencia de una investigación en curso pero que no muestran interés en la misma son 'partes [...] que intervengan en la investigación'?

Respuesta

Participar significa ser parte o "*an essential member or constituent of anything*" (un miembro o elemento esencial de algo).[32] Un productor o exportador de un producto objeto de investigación es un miembro o elemento esencial de la investigación.

Las empresas que **conocen**, esto es, que tienen conocimiento de una investigación en curso, son "partes interesadas que intervengan en la investigación", aunque no muestren interés en la misma. La falta de interés de una parte interesada en una investigación no excluye ni disminuye la obligación de la autoridad investigadora de poner "inmediatamente" a su disposición las pruebas presentadas por escrito por otras partes interesadas. Las partes interesadas que no muestran interés en la investigación pueden tener interés en defender sus derechos en la misma, basándose en determinadas alegaciones o pruebas presentadas por otras partes.

Dicho esto, el Brasil reafirma que los exportadores brasileños CCLP, Catarinense, Chapecó, Minuano, Perdigão, Comaves y Penabranca **no conocieron** la investigación en curso hasta que fueron notificadas por las autoridades, ocho meses después de su iniciación.

33. ¿Cuál es el significado de la palabra 'inmediatamente' en el párrafo 1.2 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping?

Respuesta

Según la interpretación textual, el término "*inmediatamente*" significa "*to make or do readily or at once*" (hacer o realizar rápidamente o enseguida).[33] El Brasil considera que las pruebas presentadas por escrito por una parte interesada no se pudieron poner enseguida o rápidamente a disposición de los exportadores brasileños CCLP, Catarinense, Chapecó, Minuano, Perdigão, Comaves y Penabranca ya que estos exportadores fueron notificados de la investigación casi ocho meses después de su iniciación.

Subrayamos que esos siete exportadores no habían sido notificados de la iniciación de la investigación ni habían recibido los cuestionarios para dar sus respuestas durante ocho meses del transcurso de la investigación pero, en todo caso, fueron incluidos en la investigación porque exportaban la mercancía en cuestión a la Argentina en el período objeto de investigación.

Toda prueba presentada durante estos ocho meses no podía ser considerada como puesta "inmediatamente" a disposición de los exportadores si estos no conocían la existencia de esta investigación ni su necesidad de participar.

Reclamación 14

A ambas partes

34. ¿Qué significa 'exportadores que conozcan' en el párrafo 1.3 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping? En particular, ¿serían los productores del país exportador que han sido identificados como exportadores del producto en cuestión por el solicitante en la solicitud 'exportadores que conozcan' las autoridades?

[32] *The Concise Oxford Dictionary*, novena edición, Oxford University Press, 1995, página 995.

[33] *The Concise Oxford Dictionary*, novena edición, Oxford University Press, 1995, página 1096.

Respuesta

El Brasil desearía en primer lugar aclarar que la Argentina **nunca** facilitó el texto completo de la solicitud escrita al Gobierno del Brasil (autoridades del Miembro exportador) ni a ningún exportador (conocido o presuntamente conocido) del producto objeto de investigación.

Dicho esto, entendemos que la expresión "exportadores que conozcan" del párrafo 1.3 del artículo 6 del Acuerdo significa los exportadores que fueron reconocidos o identificados por la autoridad investigadora. La información presentada en las pruebas documentales del Brasil demuestra que la autoridad investigadora conocía, antes de la iniciación, la existencia de los exportadores brasileños CCLP, Catarinense, Chapecó, Minuano, Perdigão, Comaves y Penabranca.

Antes de la iniciación, el solicitante presentó, el 17 de febrero de 1998, información adicional que incluía listas de importaciones de pollos procedentes del Brasil, desglosadas por productor y exportador.[34] En estas listas se identificaba con sus nombres a 15 productores y 20 exportadores brasileños de pollos. Estas listas presentadas por el solicitante constituían, de hecho, un documento procedente de dos organismos argentinos: *SENASA – Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria* ("*SENASA*") y la *Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Dirección de Ganadería* ("*Ganadería*").[35] Aparecían identificados en esas dos listas cinco productores/exportadores brasileños (Comaves, Minuano, Chapecó, Catarinense y Perdigão) de los siete productores/exportadores que fueron notificados de la investigación casi ocho meses después de su iniciación.[36] Entendemos que en ese momento, antes de la iniciación, el solicitante había identificado y facilitado a la autoridad investigadora los nombres de los productores/ exportadores brasileños de pollos.

Siempre antes de la iniciación y en el informe relativo a la viabilidad de la iniciación de la investigación antidumping, el 7 de enero de 1998, la autoridad investigadora identificó a 10 exportadores brasileños de la mercancía en cuestión.[37] Señalamos que en este caso la identificación de estos exportadores brasileños fue llevada a cabo por la **propia** autoridad investigadora. Entre esos 10 exportadores identificados figuraban cinco (Comaves, Minuano, Chapecó, Catarinense y Perdigão) de los siete exportadores que fueron notificados de la investigación casi ocho meses después de su iniciación y después de la emisión de la determinación preliminar de la existencia de daño, dumping y relación causal. Estos 10 exportadores eran "exportadores que conozcan" las autoridades en el sentido del párrafo 1.3 del artículo 6 del Acuerdo.

35. ¿Estarían las partes de acuerdo con la constatación del Grupo Especial en *Guatemala - Cemento II* de que 'la expresión "tan pronto como" denota una considerable urgencia' y que "tan pronto como" e "inmediatamente" son sustituibles entre sí? Sírvanse explicarlo.

Respuesta

El Brasil observa que la cuestión en este caso no se refiere tanto a los aspectos temporales del párrafo 1.3 del artículo 6 sino al hecho de que las autoridades argentinas **nunca** facilitaron la solicitud escrita al Gobierno del Brasil y a los exportadores.

---

[34] *Véase* la prueba documental BRA-4.

[35] *Véanse* los anexos 1 y 2 de la prueba documental BRA-4.

[36] *Véase* la Primera comunicación del Brasil, párrafos 192 a 201.

[37] *Véanse* las páginas 4 y 5 de la prueba documental BRA-2.

Siendo así, el Brasil está de acuerdo con la constatación del Grupo Especial en *Guatemala - Cemento II* de que la expresión "tan pronto como" denota una considerable urgencia. En particular, entendemos que la siguiente conclusión de ese Grupo Especial es pertinente y se aplica al caso presente:

> *"Observamos que el párrafo 1.3 del artículo 6 no especifica dentro de cuántos días ha de facilitarse el texto de la solicitud, sino que dispone que el texto de la solicitud se facilitará "tan pronto como" se haya iniciado la investigación. A este respecto, la expresión "tan pronto como" denota una considerable urgencia. De hecho, se considera que los términos "inmediatamente" y "tan pronto como" son sustituibles entre sí. No consideramos que se cumpla el requisito del párrafo 1.3 de facilitar el texto "tan pronto como sea iniciada la investigación" facilitando el texto de la solicitud 24 o incluso 18 días después de la fecha de la iniciación."*[38] (Sin cursivas ni subrayado en el original.)

El acceso inmediato a la solicitud es importante para los exportadores a fin de preparar sus argumentos para defender sus intereses y concebir una estrategia respecto de las alegaciones formuladas por el solicitante en su solicitud.

Al Brasil

36. ¿Cuál es el significado de las palabras 'tan pronto como se haya iniciado la investigación' en el párrafo 1.3 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping? En el caso particular que nos ocupa, ¿cuándo se inició la investigación?

Respuesta

El Brasil hace notar una vez más el hecho de que las autoridades argentinas **nunca** facilitaron el texto de la solicitud escrita al Gobierno del Brasil y a los exportadores, según lo exigido por el párrafo 1.3 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping. Reiteramos que las autoridades argentinas **nunca** facilitaron el texto de la solicitud.

Entendemos que la Argentina alega que en la versión española del Acuerdo el término inglés "provide" aparece como "facilitar" y que, sobre la base de ese significado, las autoridades argentinas cumplieron el requisito del párrafo 1.3 del artículo 6 del Acuerdo cuando pusieron la solicitud escrita **a disposición** de las partes interesadas una vez que la investigación se había iniciado.[39] Estimamos incorrecta la posición de la Argentina de que el verbo "to provide" podía interpretarse en el sentido de que las autoridades sólo estaban obligadas a "make available" (poner a disposición) el texto completo de la solicitud escrita.

Reiteramos que el párrafo 1.3 del artículo 6 diferencia cuidadosamente la obligación que la autoridad investigadora tiene respecto de los exportadores y del Miembro exportador de la obligación que dicha autoridad tiene respecto de otras partes interesadas. En el primer caso, la autoridad investigadora debe facilitar ("provide") activamente el texto completo de la solicitud escrita al Miembro exportador y a los exportadores involucrados en la investigación. En el segundo caso, la autoridad investigadora debe poner a disposición ("make available"), cuando así se solicite, el texto completo de la solicitud escrita a las otras partes interesadas. El Brasil considera que, si se interpretara

[38] *Guatemala - Medida antidumping definitiva aplicada al cemento Portland gris procedente de México*, 24 de octubre de 2000, WT/DS156/R, párrafo 8.101 (adoptado el 17 de noviembre de 2000) (*"Guatemala - Cemento II"*).

[39] *Véase* la Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafo 164.

que el requisito impuesto a la autoridad investigadora es el mismo en el caso de los exportadores y el Miembro exportador que en el caso de las otras partes interesadas, no habría necesidad de utilizar un lenguaje diferente en el párrafo 1.3 del artículo 6 del Acuerdo.

El mismo razonamiento se aplica al texto español. El requisito impuesto a la autoridad investigadora, de "facilitar" el texto completo de la solicitud escrita a los exportadores y al Miembro exportador, es diferente del requisito impuesto a las autoridades, de que "pondrán a disposición" el texto completo de la solicitud escrita a las otras partes interesadas.

Además, el verbo "facilitar" significa "proporcionar o entregar", definición enteramente compatible con el verbo "provide" utilizado en la versión inglesa.[40]

Dicho esto, volvemos a la pregunta del Grupo Especial. La frase "tan pronto como se haya iniciado la investigación" en el párrafo 1.3 del artículo 6 del Acuerdo significa que la autoridad debe facilitar activamente el texto de la solicitud **inmediatamente** después de iniciada la investigación. Hacemos notar la urgencia exigida en el párrafo 1.3 del artículo 6. El Brasil observa que la investigación fue iniciada cuando el MEyOSP publicó, el 25 de enero de 1999, la Resolución Nº 11/1999, de 20 de enero de 1999. La Argentina notificó (pero no facilitó la solicitud) al Gobierno del Brasil la iniciación de la investigación el 1º de febrero de 1999[41], esto es, siete días después de la publicación de la iniciación.

Reclamación 15

Al Brasil

38. Con respecto a las pruebas documentales BRA-22, 23, 24 y 26, sírvanse indicar con precisión si los exportadores informaron que los pollos vendidos a la Argentina eran idénticos a los vendidos en el Brasil.

Respuesta

Sadia

La prueba documental BRA-22 incluye la sección A de la respuesta de Sadia al cuestionario, presentada el 20 de abril de 1999, y la sección A de la respuesta complementaria de Sadia, presentada el 28 de abril de 1999. En el anexo II (*"Identificación del producto denunciado"*) de la sección A, el cuestionario requiere una descripción completa del producto con especificaciones técnicas para cada modelo/tipo/código de la mercancía vendida en el mercado interno y exportada a la Argentina.[42]

En su respuesta de 20 de abril de 1999, Sadia describió el producto como pollos enteros, congelados y eviscerados, con menudos. Más concretamente, respecto del mercado interno, Sadia informó que el producto consistía en pollos enteros, congelados y eviscerados, con menudos, cajas de 18 kg y peso individual de 1,750 a 2,750 kg. Para el mercado argentino, Sadia informó que el producto estaba constituido por pollos enteros, congelados y eviscerados, con menudos, cajas de 18 kg y peso individual de 1,700 a 2,700 kg.[43] Además, Sadia presentó una descripción detallada de los pollos producidos por la empresa. En esta descripción, Sadia informó que se pone en la cavidad abdominal del animal una bolsa de menudos que contiene el corazón, el hígado, la molleja y el

[40] *Real Academia Española*, Editorial Espasa Calpe, S.A., 2001.

[41] *Véase* la prueba documental ARG-III.

[42] *Véase* la página 4 de la prueba documental BRA-22.

[43] *Véase* la página 4 de la prueba documental BRA-22.

pescuezo, previamente limpiados y refrigerados.[44] No se hace ninguna mención de la cabeza y las patas del pollo. De conformidad con la respuesta de Sadia, no había diferencias en las características físicas de los productos vendidos a la Argentina o en el Brasil.

En su respuesta complementaria de 28 de abril de 1999, Sadia indicó en el anexo V de la sección A que se vendieron pollos enteros, congelados y eviscerados, **sin menudos**, en el mercado interno, pero no a la Argentina, en el período transcurrido entre enero de 1996 y febrero de 1999.[45] Por lo tanto, los pollos sin cabeza ni patas se vendieron, de hecho, en el Brasil.

La DCD nunca pidió información adicional o aclaraciones acerca de la descripción del producto vendido a la Argentina y en el Brasil.

Avipal

La prueba documental BRA-23 incluye una carta de Avipal con la que presenta el cuestionario en un disquete el 21 de abril de 1999, y la parte no confidencial de la sección A de la respuesta de Avipal al cuestionario el 7 de mayo de 1999. En el anexo II (*"Identificación del producto denunciado"*) de la sección A, el cuestionario solicita una descripción completa del producto con especificaciones técnicas para cada modelo/tipo/código de la mercancía vendida en el mercado interno y exportada a la Argentina.[46]

En su respuesta, Avipal describió el producto como pollos enteros, congelados y eviscerados. Más concretamente, Avipal dividió el producto en dos tipos: i) **broiler** - entero, congelado y eviscerado, conteniendo una bolsa de plástico con pescuezo, **sin cabeza**, hígado y molleja; y ii) **griller** - entero, congelado y eviscerado, sin menudos.[47] En el anexo V de esa respuesta, Avipal informó que tanto el tipo broiler como el tipo griller de pollos se vendían a la Argentina y en el Brasil.[48] Según la respuesta de Avipal, no había diferencias en las características físicas del producto vendido a la Argentina y en el Brasil.

Recordamos también que durante la investigación la DCD nunca solicitó información adicional ni aclaraciones acerca de la descripción del producto.

Frangosul

La prueba documental BRA-24 incluye la sección A de la respuesta de Frangosul al cuestionario, presentada el 27 de abril de 1999. La prueba documental BRA-26 incluye la respuesta de Frangosul a la DCD con la traducción del folleto del producto al español, que se presentó el 19 de agosto de 1999. En el anexo II (*"Identificación del producto denunciado"*) de la sección A, el cuestionario solicita una descripción completa del producto con especificaciones técnicas para cada modelo/tipo/código de la mercancía vendida en el mercado interno y exportada a la Argentina.[49]

---

[44] *Véase* la página 12 de la prueba documental BRA-22.

[45] *Véase* la última página de la prueba documental BRA-22.

[46] *Véase* la página 7 de la prueba documental BRA-23.

[47] *Véase* la página 7 de la prueba documental BRA-23.

[48] *Véase* la página 11 de la prueba documental BRA-23.

[49] *Véase* la página 5 de la prueba documental BRA-24.

En su respuesta de 27 de abril de 1999, Frangosul describió el producto como pollo entero, congelado y eviscerado, con menudos (**tipo broiler**) y entero, congelado y eviscerado, sin menudos (**tipo griller**).[50] Tanto los pollos de tipo broiler como los de tipo griller se vendieron a la Argentina y en el Brasil.

En su respuesta de 19 de agosto de 1999, Frangosul adjuntó un folleto del producto (en inglés y en español) en el que se describían los tipos de productos vendidos. Según la descripción que figuraba en el folleto, el pollo tipo griller es fresco, congelado, de piel blanca o amarilla, totalmente eviscerado, **sin cabeza ni patas**, sin menudos; y el pollo tipo broiler es fresco, congelado, de piel blanca, totalmente eviscerado, **sin cabeza ni patas**, con menudos.[51]

También en este caso y durante toda la investigación, la DCD nunca pidió información adicional ni aclaraciones acerca de la descripción del producto vendido a la Argentina y en el Brasil.

Catarinense

La prueba documental BRA-25 incluye la sección A de la respuesta de Catarinense al cuestionario, presentada el 3 de noviembre de 1999. En el anexo II (*"Identificación del producto denunciado"*) de la sección A, el cuestionario solicita una descripción completa del producto, con especificaciones técnicas, para cada modelo/tipo/código de la mercancía vendida en el mercado interno y exportada a la Argentina.[52]

En su respuesta, Catarinense describió el producto como pollos enteros y congelados, con menudos (**tipo broiler**) y pollos enteros y congelados, sin menudos (**tipo griller**).[53] Para el mercado de exportación, los pollos tipo broiler (con menudos) contienen hígado, molleja y pescuezo.[54] Los pollos tipos griller vendidos a la Argentina y en el Brasil no contienen menudos.[55] Catarinense informó que vendía los pollos tipo broiler y también los pollos tipo griller en el mercado interno.

La DCD nunca pidió información adicional ni aclaraciones acerca de la descripción del producto vendido a la Argentina y en el Brasil.

Reclamación 19

Al Brasil

41. La Argentina afirma que los datos sobre el valor normal de Frangosul fueron presentados después de vencido el plazo. Sírvanse comentarlo.

[50] *Véanse* las páginas 5 y 6 de la prueba documental BRA-24.

[51] *Véase* la página 8 de la prueba documental BRA-26.

[52] *Véase* la página 8 de la prueba documental BRA-25.

[53] *Véase* la página 8 de la prueba documental BRA-25.

[54] *Véase* la página 9 de la prueba documental BRA-25.

[55] *Véanse* las páginas 10 y 36 de la prueba documental BRA-25.

Respuesta

A fin de responder a esta pregunta, consideramos necesario exponer y explicar la cronología de las respuestas presentadas por Frangosul y las solicitudes de prórroga para presentar esas respuestas, así como las solicitudes de información formuladas por la DCD.

1. El 16 de febrero de 1999, la DCD notificó a Frangosul la iniciación de la investigación y fijó como plazo el 29 de marzo de 1999 para que Frangosul respondiera al cuestionario sobre el dumping.[56]

2. El 15 de marzo de 1999, Frangosul solicitó una prórroga del plazo, para presentar la respuesta al cuestionario no más tarde del 20 de abril de 1999.[57]

3. El 26 de marzo de 1999, la DCD concedió la prórroga hasta el 20 de abril de 1999.[58]

4. El 27 de abril de 1999, Frangosul presentó la respuesta al cuestionario sobre el dumping.[59] En particular, Frangosul respondió a la sección C del cuestionario, relativa a las ventas en el mercado interno. Esta información incluía las ventas de pollos hechas en el Brasil (mercado interno) correspondientes a los años 1996, 1997, 1998 y los tres primeros meses de 1999, desglosadas por meses.[60] Hacemos notar especialmente que posteriormente la autoridad solicitó la documentación justificante de todas las transacciones de venta realizadas en el mercado interno durante ese período.[61] Aunque Frangosul presentó esta información siete días después del plazo del 20 de abril de 1999, de todos modos Frangosul facilitó esta información dentro de un plazo razonable para que la autoridad la examinara, especialmente teniendo en cuenta el volumen de los datos presentados, correspondientes a un período que excedía de lo necesario.

5. El 12 de julio de 1999, la DCD solicitó que Frangosul presentara información adicional. Esta información incluía la traducción de toda la documentación justificante correspondiente a las transacciones de exportación del producto objeto de investigación (a pesar de que la mayor parte de la información presentada en esas facturas ya estaba en español); información sobre las transacciones de exportación a los cinco mayores mercados de exportación (aparte de la Argentina) en los que se vendía el producto; la traducción del folleto del producto (a pesar de que este folleto ya se había presentado en español); y la documentación justificante de todas las transacciones de venta en el mercado interno correspondientes al período.[62] La DCD fijó un plazo de 10 días para que Frangosul presentara esta información.

---

[56] *Véase* la prueba documental BRA-9.

[57] *Véase* la página 28 de la prueba documental BRA-15.

[58] *Véase* la página 28 de la prueba documental BRA-15.

[59] *Véase* la página 29 de la prueba documental BRA-15.

[60] *Idem.*

[61] *Véanse* las páginas 29 y 30 de la prueba documental BRA-15.

[62] *Véase* la página 49 de la prueba documental BRA-15.

6. El 28 de julio de 1999, Frangosul solicitó una prórroga del plazo para presentar la información solicitada por la DCD.[63]

7. El 9 de agosto de 1999, la DCD concedió a Frangosul la prórroga pedida para presentar la información solicitada en el plazo de 15 días.[64]

8. El 19 de agosto de 1999, Frangosul presentó una traducción de las facturas correspondientes a algunas transacciones de exportación, como muestra de todas las transacciones de exportación sobre las que había informado; información sobre las transacciones de exportación a los cinco mayores mercados de exportación en el período 1996 a 1999; la traducción del folleto del producto con la descripción del mismo; y una explicación de que el gran volumen de ventas en el mercado interno no permitía que Frangosul presentara copias de las facturas de cada transacción.[65] Para respaldar su explicación, Frangosul indicó que cada año se emiten más de 320.000 facturas correspondientes a transacciones de ventas en el mercado interno, y que el 27 de abril de 1999 había presentado una lista de facturas correspondientes a las transacciones de ventas en el mercado interno. Frangosul expresó asimismo que las facturas estaban a disposición de la autoridad investigadora para una verificación *in loco* o para una selección de tales documentos correspondientes a determinadas transacciones, para ser utilizadas como muestras.[66]

9. El 12 de octubre de 1999, la DCD solicitó una nueva lista de facturas con las transacciones totales en el mercado interno para el período de enero de 1998 a enero de 1999, de modo que la DCD pudiera seleccionar una muestra estadística, y posteriormente solicitó la documentación justificante correspondiente a esa muestra.[67] En esta solicitud, la DCD también informó, por primera vez en la investigación, que la lista de facturas enviadas el 27 de abril de 1999 no incluían información específica necesaria para el análisis a cargo de la autoridad.[68] También señalamos a la atención del Grupo Especial el hecho de que ésta fue la primera vez que la autoridad investigadora informó a Frangosul cuál era el período de recopilación de datos correspondientes al dumping.

10. El 18 de noviembre de 1999, la DCD reiteró su solicitud de presentación de una lista de facturas correspondientes a las transacciones de ventas en el mercado interno en el período transcurrido entre enero de 1998 y enero de 1999, y de que Frangosul presentara esta información en un disquete dentro de los cinco días. No se hizo ninguna mención de la documentación justificante.[69]

11. El 30 de diciembre de 1999, Frangosul presentó en un disquete la lista de facturas correspondientes a las transacciones de venta en el mercado interno en el período transcurrido entre enero de 1998 y enero de 1999.[70]

---

[63] *Véase* la página 49 de la prueba documental BRA-15.

[64] *Véase* la página 49 de la prueba documental BRA-15.

[65] *Véase* la prueba documental BRA-26.

[66] *Véase* la prueba documental BRA-26.

[67] *Véase* la prueba documental BRA-26.

[68] *Idem*.

[69] *Véase* la prueba documental ARG-XXVIII.

[70] *Véase* la prueba documental BRA-26.

12. El 4 de enero de 2000, la DCD emitió un informe antes de la determinación definitiva (divulgación de hechos esenciales objeto de examen). En este informe no se menciona la lista de facturas presentada por Frangosul.[71]

13. El 5 de enero de 2000, la DCD notificó a Frangosul la finalización de la etapa de producción de pruebas de la investigación.[72]

Con respecto a la secuencia de hechos mencionada precedentemente, el Brasil desearía formular las consideraciones siguientes.

En primer lugar, el Grupo Especial no debe olvidar en qué circunstancias el párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo permite que una autoridad investigadora recurra a los hechos de que se tenga conocimiento. De conformidad con el párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo, cuando las partes interesadas no "entorpecen significativamente" la investigación, se puede recurrir a los hechos de que se tenga conocimiento **sólo** si una parte interesada omite presentar la **información necesaria** "dentro de un plazo prudencial". Si en realidad la información se presenta "dentro de un plazo prudencial", la autoridad no puede utilizar los hechos de que se tenga conocimiento y debe utilizar la información presentada por la parte interesada. En el caso que nos ocupa, Frangosul no incurrió en ninguna de las circunstancias establecidas en el párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo para que se pudiera recurrir a los hechos de que se tenga conocimiento.

Aunque Frangosul respondió al cuestionario siete días después de la fecha límite, de todos modos presentó sus respuestas "dentro de un plazo prudencial". A ese respecto, el Brasil recuerda que "un plazo prudencial" no equivaldrá necesariamente a los plazos establecidos por la autoridad investigadora. Nuestra interpretación del "plazo prudencial" está en consonancia con la interpretación hecha por el Grupo Especial en *Estados Unidos - Acero laminado en caliente*:

> *"[...] El Acuerdo Antidumping dispone que se puede utilizar información sobre los hechos de que se tenga conocimiento si no se facilita dentro de un plazo prudencial la información necesaria. Un "plazo prudencial" no corresponderá en todos los casos a unos plazos preestablecidos que se hayan fijado en reglamentaciones generales. Reconocemos que, para el buen funcionamiento de la administración, las autoridades investigadoras establecen, y de hecho tienen que establecer, tales plazos. Sin embargo, el rígido respeto de tales plazos no es suficiente en todos los casos para llegar a la conclusión de que la información no se presentó dentro de un plazo prudencial y de que, en consecuencia, se puede utilizar la información sobre los hechos de que se tenga conocimiento."*[73] (Sin cursivas ni subrayado en el original.)

[71] *Véase* la prueba documental BRA-28.

[72] *Véase* la prueba documental BRA-26.

[73] *Estados Unidos - Medidas antidumping sobre determinados productos de acero laminado en caliente procedentes del Japón*, 28 de febrero de 2001, WT/DS184/R, párrafo 7.154 (*"Estados Unidos - Acero laminado en caliente"*). El Órgano de Apelación confirmó las constataciones del Grupo Especial con respecto a la incompatibilidad de los Estados Unidos con el párrafo 8 del artículo 6 y el Anexo II del Acuerdo Antidumping en su aplicación a los hechos de que se tenga conocimiento. *Estados Unidos - Medidas antidumping sobre determinados productos de acero laminado en caliente procedentes del Japón*, 24 de julio de 2001, WT/DS184/AB/R, párrafo 240 (adoptado el 23 de agosto de 2001) (*"OA - Estados Unidos - Acero laminado en caliente"*).

No nos proponemos afirmar ni sugerir que el párrafo 8 del artículo 6 y el Anexo II del Acuerdo dan licencia para que las partes interesadas simplemente dejen de lado los plazos establecidos por la autoridad investigadora. Sin embargo, entendemos que la palabra "prudencial" del párrafo 8 del artículo 6 sugiere un grado de flexibilidad por parte de las autoridades, lo que supone la consideración de **todas** las circunstancias de un caso determinado.

En segundo lugar, el Brasil entiende que la aplicación del párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo también depende de las acciones de la autoridad investigadora en una investigación. Si esta autoridad no actúa de manera adecuada durante la investigación, no puede alegar que la parte interesada no ha cumplido los requisitos del párrafo 8 del artículo 6 y, por tanto, recurrir a la aplicación de los hechos de que se tenga conocimiento.

A este respecto, el Brasil se remite a lo expresado por el Grupo Especial en *Guatemala - Cemento II* sobre la interpretación de la aplicación del párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo:

> *"[...] No consideramos que el hecho de no cooperar equivalga necesariamente a entorpecer significativamente una investigación, ya que, a nuestro juicio, el Acuerdo Antidumping no exige que las partes interesadas cooperen a cualquier precio. Si bien el hecho de no cooperar con una autoridad investigadora tiene ciertas consecuencias (en virtud del párrafo 8 del artículo 6) para las partes interesadas, opinamos que esas consecuencias* ***sólo*** *son posibles si la propia autoridad investigadora ha actuado de forma razonable, objetiva e imparcial [...].*"[74]
> (Sin cursivas, negritas ni subrayado en el original.)

La secuencia de hechos presentada anteriormente demuestra que la autoridad investigadora no actuó en este caso de forma razonable, objetiva e imparcial. El hecho de que inicialmente se solicitara a Frangosul que presentase información sobre el valor normal y el precio de exportación correspondiente a un período excesivamente largo (enero de 1996 a marzo de 1999) y que más de ocho meses después de la iniciación la autoridad fijara un período mucho más reducido para la recopilación de datos sobre el dumping (enero de 1998 a enero de 1999) indica que en esta investigación la autoridad no fue razonable, objetiva e imparcial. Especialmente, si se tiene en cuenta que la autoridad, en una etapa posterior, solicitó documentación justificante correspondiente a todas las transacciones de ventas realizadas en el mercado interno durante el período transcurrido entre enero de 1996 y marzo de 1999. A este respecto, el Grupo Especial debería comprender que Frangosul dedicó una cantidad considerable de tiempo y de recursos a la recopilación y comunicación de información sobre el valor normal y el precio de exportación correspondiente a un período que tenía un exceso de tres años. En particular, recordamos que en el caso de Frangosul había más de 320.000 transacciones en el mercado interno en un solo año dado.

En tercer lugar, hasta el 12 de octubre de 1999 la DCD no informó a Frangosul de que la información presentada el 27 de abril de 1999 no era suficiente para realizar un análisis de la existencia de dumping. Fue también en ese momento que la DCD estableció el período para la recopilación de datos sobre el dumping. Por lo tanto, de conformidad con las instrucciones de la autoridad (más de ocho meses después de la iniciación), Frangosul tenía que presentar un conjunto nuevo y más específico de datos sobre el valor normal correspondientes a un nuevo período. Esto significaba que Frangosul tenía que volver a empezar y a reunir información específica correspondiente al período transcurrido entre enero de 1998 y enero de 1999, lo que en algunos casos significaba realizar una búsqueda manual de numerosas facturas (más de 320.000) para encontrar la información solicitada por la autoridad. Aunque esa información se presentó después del plazo establecido por la DCD, la presentación fue de todos modos anterior a la divulgación de los hechos esenciales objeto de examen y a la determinación definitiva.

[74] *Guatemala – Cemento II*, párrafo 8.251.

El Brasil estima que, a la luz de la naturaleza y la cantidad de la información presentada, la carga no razonable impuesta por la autoridad a lo largo de la información, y el hecho de que Frangosul invitó a la autoridad a verificar en sus locales todos los documentos de las transacciones de ventas (en el mercado interno y a la Argentina), la autoridad debería haber tenido en cuenta que la información se había presentado dentro de un "plazo prudencial" y debía haber utilizado esa información en la determinación definitiva.

Reclamación 19

Al Brasil

46 a). Sírvanse presentar una copia de la respuesta de Catarinense al cuestionario, de 3 de noviembre de 1999.

Respuesta

Hemos presentado, como prueba documental BRA-25, la respuesta de Catarinense a la sección A del cuestionario sobre el dumping. La respuesta completa de Catarinense a dicho cuestionario, con la lista de facturas correspondientes a todas las transacciones de ventas a la Argentina (sección B), con copias de las facturas, lista de las facturas correspondientes a todas las transacciones de ventas en el mercado interno (sección C) y desglose de costos (sección D) comprende más de 1.500 páginas. Consideramos que la recopilación y copia de tal volumen de información no sólo resultaría gravoso, sino que no sería demasiado útil, ya que entendemos que el objetivo del Grupo Especial no es determinar si la autoridad calculó erróneamente el valor normal y el precio de exportación correspondiente a Catarinense, sino que dicha autoridad **ni siquiera** examinó ninguna información presentada por el exportador.

No obstante, presentamos, como prueba documental BRA-37, la respuesta de Catarinense a la sección B del cuestionario, con una muestra de la lista de facturas de ventas a la Argentina para cada uno de los meses de 1998 y enero de 1999, así como una muestra de las facturas correspondientes a ventas en cada uno de los meses de 1998 y enero de 1999; la respuesta a la sección C del cuestionario, con una muestra de la lista de facturas de ventas en el mercado interno de cada mes de 1998 y enero de 1999; y la respuesta a la sección D del cuestionario.

Si el Grupo Especial considera que esta información es insuficiente para examinar las alegaciones presentadas por el Brasil, nos complacerá presentar el conjunto completo de la respuesta de Catarinense al cuestionario.

46 b). La Argentina afirma que los datos sobre el valor normal de Frangosul fueron presentados después de vencido el plazo. Sírvanse comentarlo.

Respuesta

Sírvanse consultar la respuesta a la pregunta 41, *supra*.

Reclamación 23

Al Brasil

49. ¿Cuándo solicitó Avipal por primera vez un ajuste del valor normal correspondiente a gastos de flete? ¿Presentó Avipal documentación justificante con esa petición? En caso afirmativo, sírvanse presentar una copia de esa documentación justificante.

Respuesta

El párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping impone a la autoridad investigadora la obligación de realizar una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal. Al realizar esta comparación equitativa, se deben tener en cuenta las diferencias que afecten a la comparabilidad de los precios. Entendemos que los gastos de flete se han de incluir en esos ajustes.

Observamos que la obligación del párrafo 4 del artículo 2 se impone a la autoridad investigadora y que el exportador no tiene que solicitar la realización de tal ajuste. Ahora bien, durante la investigación la DCD nunca solicitó a Avipal documentación justificante correspondiente a esos gastos de flete.

Siendo esto así, señalamos que, el 20 de abril de 1999, Avipal y otros exportadores presentaron a la DCD una carta en la que se expresaba, entre otras cosas, que a fin de comparar el valor normal propuesto por el solicitante (publicación de JOX) con el precio de exportación ex fábrica, era necesario realizar algunos ajustes. Avipal presentó una lista que incluía el valor de esos ajustes, en particular los impuestos, los **gastos de flete nacional** y el costo financiero.[75]

El 12 de octubre de 1999, la DCD determinó e informó a Avipal, por primera vez en la investigación, que el período para la recopilación de datos sobre el dumping se extendía entre enero de 1998 y enero de 1999.[76] En esta comunicación, la DCD también solicitó a Avipal que presentase una lista de facturas correspondientes a todas las ventas de pollos en el mercado interno durante ese período. La DCD no fijó a Avipal un plazo para presentar esta información.

El 21 de diciembre de 1999, Avipal presentó un disquete con una lista de facturas correspondientes a las ventas de pollos en el mercado interno en el período transcurrido entre enero de 1998 y enero de 1999, con inclusión de una planilla de cálculo electrónico correspondiente a impuestos (ICMS/PIS/COFINS), comisiones, **flete** y costos financieros incluidos en el valor normal que se debían deducir de una comparación ex fábrica con el precio de exportación.[77]

Entendemos que la Argentina considera que el ajuste correspondiente al flete tiene "un claro e importante impacto en la comparabilidad de precios".[78] No obstante, es interesante observar que, aunque la Argentina reconoce que este ajuste se justificaba y que es "claro e importante" para la comparación de precios, simplemente no lo realizó. Aunque no se presentó ninguna documentación justificante (que, en realidad, ni siquiera se solicitó), la Argentina aun podía haber utilizado una fuente secundaria de información para estimar tal deducción, como lo hizo con el ajuste del valor normal para compensar las presuntas diferencias de características entre los pollos vendidos a la Argentina y en el Brasil.

En ese sentido, recordamos al Grupo Especial que JOX presentó una respuesta a la solicitud de aclaraciones de la autoridad investigadora acerca de qué impuestos y cargas se habían incluido en los precios publicados y utilizados para determinar el valor normal.[79] La carta de JOX a la DCD, de 3 de agosto de 1999, explicaba que los precios publicados por JOX incluían impuestos (12 por ciento - ICMS; 2,65 por ciento - PIS/COFINS); costos financieros; comisión de ventas del 0,5

[75] *Véase* la prueba documental BRA-35.

[76] *Véase* la página 44 de la prueba documental BRA-15.

[77] *Véase* la prueba documental BRA-36.

[78] *Véase* la Primera comunicación de la Argentina, párrafo 211.

[79] *Véase* la prueba documental BRA-32.

por ciento al 1 por ciento sobre el valor de la venta; y **un flete variable por entrega**, en función de la ubicación geográfica del vendedor y el comprador.[80]

A pesar de disponer de esta explicación facilitada por JOX, la autoridad investigadora decidió no realizar los ajustes por flete en el valor normal de Avipal, necesarios para una comparación equitativa.

50. ¿Se limita el argumento del Brasil relativo al hecho de que la autoridad investigadora no utilizó la información presentada por los exportadores a los ajustes previstos en el párrafo 4 del artículo 2, o también a otros factores/reclamaciones?

Respuesta

Los argumentos del Brasil relativos al hecho de que la autoridad investigadora no utilizó la información presentada por los exportadores **no** se limita a los ajustes previstos en el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo. El Brasil alegó también el hecho de que la autoridad investigadora no utilizó la información presentada por los exportadores en las siguientes reclamaciones:

Reclamación 17 - La Argentina no tuvo en cuenta el precio de exportación presentado por los exportadores brasileños y, en cambio, recurrió a la información sobre el precio de exportación facilitada por el organismo argentino *Ganadería*[81];

Reclamación 19 - La Argentina no tuvo en cuenta toda la información sobre el valor normal presentada por los exportadores brasileños Frangosul y Catarinense y recurrió, en cambio, a la información facilitada por el solicitante[82]; y

Reclamación 27 - La Argentina no tuvo en cuenta todas las transacciones en el mercado interno enumeradas y comunicadas, correspondientes a los exportadores brasileños Sadia y Avipal, para determinar el valor normal y realizar una comparación equitativa, y usó, en cambio, sólo las transacciones en el mercado interno respecto de las cuales se habían presentado facturas.[83]

Reclamaciones 23 a 27

Al Brasil

51. Sírvanse explicar con precisión cuáles son las pruebas existentes en el expediente que, a su juicio, la autoridad investigadora no utilizó.

Respuesta

Nos remitimos a la respuesta a la pregunta 50, *supra*.

En lo que respecta a la **Reclamación 17**, Sadia facilitó información sobre el precio de exportación de los pollos vendidos a la Argentina en el período transcurrido entre 1996 y febrero de 1999.[84] Avipal facilitó información sobre el precio de exportación de los pollos vendidos a la

[80] *Véase* la prueba documental BRA-32.

[81] *Véase* la Primera comunicación del Brasil, párrafos 282 a 290.

[82] *Véase* la Primera comunicación del Brasil, párrafos 298 a 310.

[83] *Véase* la Primera comunicación del Brasil, párrafos 416 a 422.

[84] *Véanse* la prueba documental BRA-22 y las páginas 18 y 43 de la prueba documental BRA-15.

Argentina en el período que va desde 1996 hasta marzo de 1999.[85] Frangosul facilitó información sobre el precio de exportación de transacciones de exportación individuales de pollos vendidos a la Argentina entre enero de 1996 y marzo de 1999, con la documentación justificante respectiva.[86] Catarinense facilitó información sobre el precio de exportación de transacciones individuales correspondientes a pollos vendidos a la Argentina entre enero de 1998 y enero de 1999, con la documentación justificante respectiva.[87]

En la determinación definitiva, la DCD estableció el precio de exportación para todos los exportadores brasileños basándose en la información sobre importaciones del organismo argentino *Ganadería* y no tuvo en cuenta (sin justificación) todos los datos sobre precios de exportación facilitados por los exportadores brasileños.[88]

En lo que respecta a la **Reclamación 19**, sírvanse remitirse a las respuestas dadas a la pregunta 41 (Frangosul) y a la pregunta 46a) (Catarinense), *supra*. Concretamente, toda la información sobre el valor normal facilitada por esos dos exportadores fue dejada de lado en la determinación definitiva y la DCD utilizó, en cambio, el valor normal calculado para los demás exportadores. Observamos el hecho de que en la determinación definitiva el valor normal utilizado por la autoridad para los demás exportadores fue el presentado por el solicitante, sobre la base de los precios publicados en JOX para los pollos refrigerados, con cabeza y patas.

En lo que respecta a la **Reclamación 27**, lo que sucedió fue lo siguiente:

El 26 de agosto de 1999, Sadia envió una carta a la DCD con una lista de las facturas emitidas por las transacciones de venta en el mercado interno entre 1996 y 1998, y enero y febrero de 1999.[89] En esta carta, Sadia explicó que el gran volumen de las ventas realizadas en el mercado interno hacía imposible facilitar una copia de factura por cada transacción, e invitó a la DCD a verificar *in loco* las transacciones enumeradas o bien seleccionar una muestra de transacciones a fin de que Sadia pudiese presentar las facturas correspondientes.[90] El 3 de diciembre de 1999, la DCD remitió una carta a Sadia, solicitándole copias de las facturas de 372 transacciones de ventas seleccionadas que se habían realizado en el mercado interno, fijando un plazo de cinco días para presentar las copias de las facturas.[91] El 13 de enero de 2000, Sadia presentó las copias de facturas solicitadas por la DCD.[92]

En la determinación definitiva, la DCD estableció el valor normal correspondiente a Sadia basándose únicamente en la información respecto de la cual se había presentado documentación justificante, y no sobre la base de todas las transacciones realizadas en el mercado interno sobre las que se había informado.[93]

---

[85] *Véanse* la prueba documental BRA-23 y las páginas 22 y 45 de la prueba documental BRA-15.

[86] *Véanse* la prueba documental BRA-24 y las páginas 29 y 49 de la prueba documental BRA-15.

[87] *Véanse* la prueba documental BRA-25 y las páginas 38 y 39 de la prueba documental BRA-15.

[88] *Véanse* las páginas 76, 77 y 104 de la prueba documental BRA-15.

[89] *Véase* la prueba documental BRA-29.

[90] *Idem*.

[91] *Véase* la prueba documental BRA-30.

[92] *Véase* la página 62 de la prueba documental BRA-15.

[93] *Véanse* las páginas 62 y 63 de la prueba documental BRA-15.

El 12 de agosto de 1999, Avipal presentó una lista de transacciones de ventas realizadas en el mercado interno entre 1996 y 1999, con una muestra de facturas para cada mes de 1997 y 1998, y explicó que el gran volumen de ventas realizadas en el mercado interno hacía imposible presentar una copia de factura de cada transacción. En esta carta, Avipal invitó a la DCD a verificar *in loco* las transacciones enumeradas o a seleccionar muestras de transacciones a fin de que Avipal pudiese presentar las facturas correspondientes.[94] El 1º de septiembre de 1999, Avipal presentó la traducción de una factura modelo del portugués al español.[95] El 21 de diciembre de 1999, Avipal presentó un disquete con una lista de facturas correspondientes a las ventas de pollos en el mercado interno entre enero de 1998 y enero de 1999, con inclusión de deducciones e impuestos.[96] La DCD nunca seleccionó las transacciones respecto de las cuales Avipal había ofrecido facilitar copias de las facturas.

En la determinación definitiva, la DCD determinó el valor normal correspondiente a Avipal basándose únicamente en las transacciones respecto de las cuales Avipal había facilitado copias de las facturas y no tomando como base todas las transacciones realizadas en el mercado interno y respecto de las cuales se había informado.[97]

Como se ha indicado, Sadia y Avipal presentaron una lista de todas las transacciones realizadas en el mercado interno en el período. Se presentaron facturas sólo en el caso de algunas transacciones a fin de que la DCD verificase la exactitud de los datos presentados en las respuestas en su conjunto y no sólo en aquéllas respecto de las cuales se habían facilitado facturas. El Brasil entiende que la magnitud de la información presentada puede significar que no todos los datos se examinen exactamente; sin embargo, no excluye la validez de los datos presentados, particularmente si esos datos se podían verificar.

Es importante tener en cuenta no sólo que Sadia y Avipal informaron sobre transacciones realizadas en el período objeto de investigación (enero de 1998 a enero de 1999), sino que también facilitaron información sobre las transacciones de ventas realizadas fuera del período objeto de investigación (1996, 1997, 1998 y los datos disponibles de 1999). El imponer esa carga a los exportadores y el hecho de que después la autoridad investigadora haya utilizado sólo algunas de las transacciones de 1998 y enero de 1999 es contrario al modo en que se debe determinar el margen con arreglo al párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo.

Reclamación 25

Al Brasil

54. Sírvanse presentar todas las respuestas de los exportadores a las secciones B.2 y C.1.1 del cuestionario de la DCD (según lo indicado en los "folios" 8 y 9 de la prueba documental BRA-22).

Respuesta

En los documentos de la investigación a los que tuvo acceso, el Brasil no pudo identificar las respuestas a las secciones B.2 y C.1.1 del cuestionario sobre el dumping correspondientes a los exportadores brasileños Sadia, Avipal y Frangosul.

[94] *Véase* la prueba documental BRA-31.

[95] *Véase* la página 64 de la prueba documental BRA-15.

[96] *Idem*.

[97] *Idem*.

Si el Grupo Especial considera que la información sobre la descripción del producto facilitada por los exportadores en la investigación y, hasta ahora, presentada por el Brasil en la presente diferencia, no es suficiente para examinar esta reclamación, pedimos que el Grupo Especial solicite a la Argentina que presente las respuestas de esas empresas a las secciones B.2 y C.1.1 del cuestionario sobre el dumping. Entendemos que la autoridad investigadora argentina tiene todas las respuestas de los exportadores, confidenciales y no confidenciales, presentadas en la investigación, y estará en condiciones de facilitar al Grupo Especial la información solicitada.

No obstante, presentamos, como prueba documental BRA-38, las respuestas al cuestionario sobre el daño de los exportadores brasileños Sadia, Avipal y Frangosul, que también contienen información sobre la descripción del producto. También en la prueba documental BRA-38 el Grupo Especial hallará la respuesta de Catarinense a las secciones B.2 y C.1.1 del cuestionario sobre el dumping.

Reclamación 34

Al Brasil

61. Si las importaciones objeto de dumping se han de excluir a los fines del análisis de la existencia de daño previsto en el artículo 3, ¿no sugiere esto que la determinación de la existencia de dumping debe preceder a la determinación de la existencia de daño? Si fuese así, ¿cómo puede un Miembro asegurar que las pruebas de la existencia del dumping y del daño se examinarán simultáneamente, de conformidad con el párrafo 7 del artículo 5?

Respuesta

El párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo exige que la determinación de la existencia de daño se base en pruebas positivas y comprenda un examen objetivo del volumen, el efecto y la repercusión de las "**importaciones objeto de dumping**" sobre los productores nacionales. Entendemos que el análisis del daño, según lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo, debe excluir de las importaciones totales sometidas a la investigación las importaciones que **según se ha constatado, no son objeto de dumping**. A este respecto, encontramos varias indicaciones en las disposiciones relativas a las investigaciones antidumping que corroboran nuestra interpretación.

En primer lugar, el párrafo 1 del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio de 1994 ("GATT") establece que hay dumping cuando los **productos** de un país son introducidos en el comercio de otro país a un precio inferior a su valor normal. Así, si determinados productos de un país no son introducidos en el comercio de otro país a precios inferiores al valor normal, no existe dumping. En consecuencia, esos **productos** de ese país no pueden ser considerados "**importaciones objeto de dumping**".

De igual modo, el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping dispone que un **producto** se considerará **objeto de dumping** cuando el precio de exportación del producto exportado de un país a otro es inferior al precio comparable. El mismo razonamiento se aplica cuando el precio de exportación de un producto exportado de un país a otro no es inferior al precio comparable en el país exportador; en tal caso, esos productos no pueden considerarse como **objeto de dumping**.

Del texto de estas disposiciones se desprende claramente que la definición del dumping no se refiere a todas las exportaciones de un determinado país que entran en el comercio de otro, sino a las exportaciones de los **productos** de un determinado país que entran en el comercio de otro a precios inferiores al valor normal.

En segundo lugar, todo el artículo 3, con excepción de su párrafo 3, hace referencia a las "**importaciones objeto de dumping**" como las importaciones de las que **se ha constatado** que son objeto de dumping. Consideramos que esto es así porque los párrafos 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo 3 se refieren explícitamente a las "**importaciones objeto de dumping**" y no a las importaciones sujetas a una investigación.

Como la definición de las "**importaciones objeto de dumping**" del párrafo 1 del artículo 2 se utiliza a los efectos del Acuerdo, y no sólo a los efectos de ese artículo, entendemos que la expresión del artículo 3 tiene el mismo significado.

Concretamente, esto es más evidente en el párrafo 5 del artículo 3 del Acuerdo. El párrafo 5 del artículo 3 exige la demostración de que las "**importaciones objeto de dumping**", por los efectos del **dumping**, causan daño a la rama de producción nacional. Por lo tanto, el análisis de la existencia de relación causal exige una demostración de que las importaciones que tienen "**efectos de dumping**" son la causa del daño a la rama de producción nacional, y no todas las importaciones, que también incluyen las importaciones de las que se ha constatado que no son objeto de dumping. El párrafo 5 del artículo 3 exige asimismo que la demostración de la relación causal entre las "**importaciones objeto de dumping**" y el daño causado a la rama de producción nacional se base en el examen de todas las pruebas pertinentes de que dispongan las autoridades. Consideramos que las pruebas de que las importaciones procedentes de determinados productores/exportadores no se consideran objeto de dumping son parte de las pruebas pertinentes de que disponen las autoridades. Más importante aún, el párrafo 5 del artículo 3 exige que la autoridad investigadora examine **cualesquiera otros factores de que tenga conocimiento, distintos de las importaciones objeto de dumping**, que al mismo tiempo perjudiquen a la rama de producción nacional. Las importaciones del producto que no se han considerado objeto de dumping se incluyen entre los factores conocidos distintos de las "**importaciones objeto de dumping**". El párrafo 5 del artículo 3 incluso da ejemplos de los factores que pueden ser pertinentes a este respecto, tales como el volumen y los precios de las **importaciones no vendidas a precios de dumping**. En este sentido, el volumen y el valor de las importaciones procedentes de Nicolini y Seara eran un factor importante que la autoridad investigadora debería haber examinado en el análisis de la relación causal.

Como se indicó anteriormente, el párrafo 3 del artículo 3 es una excepción al artículo 3 del Acuerdo. El párrafo 3 del artículo 3 se refiere a los casos de acumulación, en los que la autoridad puede evaluar acumulativamente los efectos de las **importaciones** cuando las **importaciones** procedentes de más de un país sean objeto simultáneamente de una investigación antidumping. Es importante mencionar que no es esto lo que sucede en el caso que nos ocupa porque sólo fueron objeto de la investigación las importaciones procedentes de un país, pero además que el párrafo 3 del artículo 3 se refiere expresamente a las "**importaciones de un producto**" y no a las "**importaciones objeto de dumping**", entendiéndose que, en razón de la acumulación, se considerarán **todas las importaciones** y no sólo las que **son objeto de dumping**.

En tercer lugar, la cuestión se aclara aún más si examinamos el texto del párrafo 2 del artículo 9 del Acuerdo:

> *"Cuando se haya establecido un derecho antidumping con respecto a un producto, ese derecho se percibirá en la cuantía apropiada en cada caso y sin discriminación sobre las importaciones de ese producto, cualquiera que sea su procedencia, declaradas objeto de dumping y causantes de daño [...]."* (Sin cursivas ni subrayado en el original.)

El texto de esta disposición corrobora la idea de que sólo las importaciones de un producto, **declaradas objeto de dumping**, procedentes de un determinado productor/exportador, pueden ser consideradas como importaciones objeto de dumping. Insistimos en que no todas las importaciones del

producto quedan sujetas a derechos antidumping, sino únicamente los productos procedentes de productores/exportadores **declaradas** objeto de dumping.

Esta interpretación coincide con la del Grupo Especial en el asunto *CE - Ropa de cama*:

> *"[...] estimamos que el dumping es una determinación hecha con referencia a un* ***producto*** *de un* ***productor/exportador en particular****, y no con referencia a transacciones individuales. En otras palabras, la determinación del dumping se hace sobre la base de la consideración de transacciones de un producto en particular originario de* ***productores/exportadores en particular****. Si el resultado de esa consideración es la conclusión de que ese producto originario de* ***productores/exportadores en particular es objeto de dumping****, opinamos que la conclusión se aplica a todas las importaciones de ese producto* ***de esa fuente o fuentes****, al menos durante el período para el que se tuvo en cuenta la existencia de dumping. [...]"*[98] (Sin cursivas, negritas ni subrayado en el original.)

Ese Grupo Especial también concluyó que:

> *"[...] es posible que un cálculo realizado en forma compatible con el Acuerdo Antidumping llevara a la conclusión de que debía atribuirse a uno u otro productor de la India un margen de dumping cero o de minimis. En ese caso, nuestra opinión es que* ***las importaciones atribuibles a ese productor/exportador no pueden considerarse, a los efectos del análisis de la existencia de daño, como importaciones "objeto de dumping".*** *[...]"*[99](Sin cursivas, negritas ni subrayado en el original.)

De igual modo, estimamos que en la presente investigación el Grupo Especial debería llegar a la misma conclusión, esto es, que **sólo el total de las importaciones originarias de un productor/ exportador declaradas efectivamente objeto de dumping se deben considerar como "importaciones objeto de dumping"**. En consecuencia, las importaciones originarias de Nicolini y Seara no se deberían incluir en las "**importaciones objeto de dumping**" evaluadas de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo.

Dicho esto, entendemos que el análisis de la existencia de dumping en una investigación debe preceder siempre al análisis de la existencia de daño. Se debe proceder de este modo para que las disposiciones del Acuerdo tengan sentido.

Por ejemplo, en el párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo uno de los factores económicos pertinentes que se deben evaluar en el examen de los efectos de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional es la magnitud del **margen de dumping**. Si el análisis de la existencia de daño precede al análisis de la existencia de dumping, ¿de qué modo es posible que el análisis del daño evalúe la magnitud del margen de dumping?

Además, si el análisis de la existencia del daño precede al análisis de la existencia del dumping, las "**importaciones objeto de dumping**" en el análisis del daño siempre incluirán la totalidad de las importaciones y no sólo las importaciones que se han declarado objeto de dumping en

---

[98] *Comunidades Europeas - Derechos antidumping sobre las importaciones de ropa de cama de algodón originarias de la India*, 30 de octubre de 2000, WT/DS141/R, párrafo 6.136 (*"CE - Ropa de cama"*). Las CE no apelaron la interpretación del Grupo Especial de las "importaciones objeto de dumping" en los párrafos 1, 4 y 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping. *Comunidades Europeas - Derechos antidumping sobre las importaciones de ropa de cama de algodón originarias de la India*, 1º de marzo de 2001, WT/DS141/AB/R (adoptado el 12 de marzo de 2001) (*"OA - CE - Ropa de cama"*).

[99] *CE - Ropa de cama*, párrafo 6.138.

el análisis de la existencia del dumping. Por las razones indicadas anteriormente, no consideramos que el Acuerdo no prevea que las importaciones de las que se ha declarado **que no son objeto de dumping** se incluyan en la expresión "**importaciones objeto de dumping**" a efectos del análisis de la existencia de daño y de la relación causal.

El análisis de la existencia de daño depende de las constataciones del análisis de la existencia del dumping y, por lo tanto, no puede ser posterior a éste.

En la respuesta a la pregunta 23, *supra*, hemos presentado nuestra interpretación del párrafo 7 del artículo 5 del Acuerdo. Allí señalamos que no consideramos posible que una autoridad examine las pruebas de la existencia del dumping y del daño simultáneamente cuando las pruebas examinadas por las autoridades se refieren sin lugar a dudas a períodos no relacionados entre sí en lo que respecta al dumping y al daño. Los períodos diferentes examinados por la DCD y la CNCE para determinar si había pruebas suficientes de la existencia del dumping y del daño indican que las pruebas del dumping y del daño **no** se examinaron simultáneamente en la decisión relativa a iniciar o no la investigación. Entendemos que en la determinación de la existencia del dumping no es necesario considerar las tendencias a lo largo del tiempo, mientras que la determinación de la existencia del daño normalmente requerirá información que abarque más de un año, a fin de evaluar las modificaciones del volumen y los precios. No obstante, para que una autoridad examine simultáneamente las pruebas de la existencia del dumping y del daño, las pruebas del dumping y del daño deben, como mínimo, referirse al mismo período, a fin de que las pruebas puedan justificar la iniciación de una investigación. Reiteramos que las pruebas de la existencia del dumping y del daño no se pueden examinar simultáneamente si dichas pruebas se refieren a períodos diferentes.

A este respecto, nos remitimos a las consideraciones realizadas por los Estados Unidos respecto de esta reclamación. Los Estados Unidos afirman que la obligación prevista en el párrafo 7 del artículo 5 del Acuerdo consiste en examinar las pruebas de la existencia del dumping y el daño simultáneamente.[100] Según los Estados Unidos, el término "simultáneamente" está vinculado al término "examinarán" y no al término "pruebas".[101] Los Estados Unidos ofrecen como ejemplo de examen simultáneo el examen de las pruebas del dumping y del daño en "investigaciones coincidentes".[102]

El Brasil no cree que el "examen simultáneo" signifique el examen del dumping y del daño en investigaciones coincidentes. Obviamente, en todas las investigaciones las pruebas del dumping y del daño se tienen que examinar en investigaciones coincidentes, ya que de otro modo no se cumplirían los requisitos de los párrafos 2 y 3 del artículo 5. Si las pruebas de la existencia de daño se examinan en una investigación diferente de la investigación en la que se examinan las pruebas del dumping, ¿cómo se podría cumplir el requisito del párrafo 2 del artículo 5, de que la solicitud incluya pruebas de la existencia del dumping, el daño y la relación causal? De igual modo, ¿cómo podría la autoridad examinar la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas en la solicitud si las pruebas de la existencia del dumping se examinan en una investigación distinta de las pruebas de la existencia del daño? No consideramos que el término "simultáneamente" del párrafo 7 del artículo 5 del Acuerdo se refiere al examen de las pruebas de la existencia del dumping y del daño en investigaciones coincidentes.

Además, el Brasil entiende que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos ("USDOC"), responsable de las investigaciones en materia de dumping, y la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos ("USITC"), responsable de las investigaciones sobre la existencia

[100] *Véase* la comunicación de tercero presentada por los Estados Unidos, párrafo 3.

[101] *Idem.*

[102] *Idem.*

de daño, no emiten al mismo tiempo sus determinaciones sobre la existencia del dumping y del daño. En ese sentido, y de conformidad con la interpretación del término "simultáneamente" dada por el Grupo Especial en *Guatemala - Cemento II*, los exámenes de las pruebas de la existencia del dumping y del daño realizados por el USDOC y la USITC no se llevan a cabo simultáneamente.

Aunque se interpretara el párrafo 7 del artículo 5 del Acuerdo en el sentido de que requiere el examen simultáneo de las pruebas de la existencia del dumping y del daño, y no un examen secuencial, eso tampoco ocurrió en esta investigación. El Grupo Especial podrá verificar que la determinación definitiva positiva de la existencia del daño se emitió el 23 de diciembre de 1999[103] y que la determinación definitiva de la existencia del dumping se emitió el 23 de junio de 2000[104], exactamente seis meses después del examen de las pruebas del dumping. ¿Cómo podrían las autoridades haber examinado simultáneamente las pruebas de la existencia del dumping y del daño si había una separación de seis meses entre ambos exámenes?

Reclamación 41

Al Brasil

65. En relación con el párrafo 87 de su primera declaración oral, ¿alega el Brasil que la omisión de la Argentina en explicar por qué consideró que un porcentaje inferior al 50 por ciento era "una proporción importante" constituye una violación del párrafo 1 del artículo 4 o de alguna otra disposición del Acuerdo Antidumping? En caso afirmativo, sírvanse explicar cómo se incluye esta reclamación en el mandato del Grupo Especial.

Respuesta

El Brasil no considera que la determinación de la CNCE de que el 46 por ciento de la producción nacional total del producto similar constituía la "proporción importante" de la producción conjunta de los productores nacionales sea compatible con el párrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo. Recordamos al Grupo Especial que la cuestión es exactamente si el 46 por ciento de la producción nacional total de pollos de la Argentina constituye una "proporción importante" de la producción nacional total.

En nuestra Primera comunicación hemos indicado nuestra interpretación de la expresión "proporción importante" y, de conformidad con esa interpretación, entendemos que el párrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo establece que la rama de producción nacional puede estar representada por el 100 por ciento de los productores del producto similar o por aquéllos cuya producción, considerada conjuntamente, constituya más de la mitad de la producción nacional total. Entendemos que éste es un punto de referencia objetivo que deja poco margen para la confusión o el abuso. No cabe duda de que el 51 por ciento, el 60 por ciento o el 70 por ciento de la producción nacional total constituyen una "proporción importante" de la producción nacional total (100 por ciento).

Estimamos adecuado examinar aquí los argumentos presentados por los terceros con respecto a esta reclamación.

En primer lugar, Guatemala reconoce que el término "major" en la versión inglesa del Acuerdo podría implicar un nivel más alto de exigencia que el término "importante" en la versión española.[105] Sin embargo, Guatemala considera incorrectamente que el término "importante" no podría, **en ningún**

[103] *Véase* la prueba documental BRA-14.

[104] *Véase* la prueba documental BRA-15.

[105] *Véase* la comunicación de tercero presentada por Guatemala, párrafo 21.

caso, significar que constituye más de la mitad del total, como sostiene el Brasil.[106] No estamos de acuerdo en que el término "importante" no pueda interpretarse **en ningún caso** como más de la mitad de la producción total. Si seguimos el razonamiento de Guatemala, no podríamos considerar que la rama de producción nacional constituye una "proporción importante" en un caso en que dicha rama de producción nacional representase el 70 por ciento de la producción nacional total, que es claramente la mayoría de la producción total.

En segundo lugar, los Estados Unidos expresan, como cuestión inicial, que el párrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo es simplemente una definición y que, como tal, no impone una obligación independiente a los Miembros de la OMC.[107] Discrepamos respetuosamente de esa posición. El párrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo exige que la expresión "rama de producción nacional" se interprete en el sentido de que se refiere al conjunto de los productores nacionales o a aquéllos de entre ellos cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la producción nacional total. La expresión "rama de producción nacional" no puede interpretarse de otro modo que el establecido en el párrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo. Si la autoridad investigadora de un Miembro así lo hiciera, incumpliría lo establecido en el párrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo.

Además, los Estados Unidos se equivocan cuando afirman que el significado del término "major" no puede significar "la mayoría".[108] Hemos expresado en nuestra Primera comunicación que ese término puede tener tal connotación.[109]

Los Estados Unidos alegan asimismo que la interpretación del Brasil de que la expresión "proporción importante" significa "mayoría" "está directamente en contradicción con el hecho de que los redactores fueron bastante explícitos, en otras partes del Acuerdo, cuando pretendieron establecer el requisito de la mayoría con respecto a una obligación determinada".[110] Según los Estados Unidos, el párrafo 4 del artículo 5 impone claramente un requisito de "mayoría", mientras que el párrafo 1 del artículo 4 establece un requisito de "proporción importante", lo que constituye una norma diferente.[111]

Coincidimos con los Estados Unidos en que la norma del párrafo 4 del artículo 5 es diferente de la del párrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo. En el párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo, el requisito para que una solicitud sea considerada como presentada en nombre de la rama de producción nacional consiste en que la solicitud sea apoyada por los productores nacionales cuya producción conjunta represente más del 50 por ciento de la producción total producida por la rama de la producción nacional que manifieste su apoyo o su oposición a la solicitud, siempre que los productores que apoyen expresamente la solicitud representen al menos el 25 por ciento de la producción nacional total. El párrafo 4 del artículo 5 se refiere a la legitimidad de los productores que apoyan la solicitud, mientras que el párrafo 1 del artículo 4 se refiere a la definición de la "rama de producción nacional", con implicaciones acerca del análisis de la existencia de daño. De hecho, el umbral del párrafo 4 del artículo 5 es inferior al del párrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo, ya que ambos se refieren a normas diferentes.

---

[106] *Idem.*

[107] *Véase* la comunicación de tercero presentada por los Estados Unidos, párrafo 8.

[108] *Véase* la comunicación de tercero presentada por los Estados Unidos, párrafo 9.

[109] *Véase* la Primera comunicación del Brasil, párrafo 514.

[110] *Véase* la comunicación de tercero presentada por los Estados Unidos, párrafo 10.

[111] *Idem.*

En tercer lugar, a diferencia de los Estados Unidos, las Comunidades Europeas ("CE") respaldan el criterio de que la expresión "rama de producción nacional" tiene el mismo significado en todo el Acuerdo Antidumping.[112] En este caso, las CE parecen sugerir que la "proporción importante" se define mediante referencia a los requisitos de legitimidad del párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo, esto es, los productores que representan al menos el 25 por ciento de la producción nacional total. No podemos estar de acuerdo con la idea de que la expresión "proporción importante" del párrafo 1 del artículo 4, que se utiliza como alternativa al conjunto de los productores nacionales (100 por ciento), pueda significar el 25 por ciento de la producción nacional total. Ninguna disposición del Acuerdo Antidumping establece o sugiere que los "productores que apoyan expresamente la solicitud" sea equivalente a la "rama de producción nacional" en una investigación.

Nuestra opinión es que la expresión "proporción importante" del párrafo 1 del artículo 4 autoriza que se formulen determinaciones en situaciones en las que no se dispone de información correspondiente al conjunto de la rama de producción, siempre que la información se refiera a productores que representen más del 50 por ciento de la producción nacional total.

No obstante, si el Grupo Especial interpreta que el Acuerdo Antidumping no establece un punto de referencia específico de lo que constituye una "proporción importante" de la producción nacional total, entonces estimamos que la autoridad investigadora debe explicar cómo llegó a la conclusión de que un porcentaje inferior al 50 por ciento es una "proporción importante". De otro modo, la autoridad investigadora tendría facultades discrecionales tan amplias que le permitirían considerar que el 46 por ciento, el 25 por ciento o el 10 por ciento de la producción nacional total es suficiente para constituir una "proporción importante" del total de la rama de producción nacional. No podemos creer que esta sea la intención del Acuerdo.

En el mandato del Grupo Especial se incluye la cuestión de decidir si el 46 por ciento de la producción nacional de pollos en la Argentina constituye una "proporción importante" de la producción nacional total. Al dilucidar esta cuestión, el Grupo Especial debe examinar el significado de la expresión "proporción importante". Este examen debe establecer cuál es (o cuál debería ser) el razonamiento de la autoridad investigadora al determinar que la "proporción importante" es un porcentaje inferior al 50 por ciento de la producción nacional total.

Recordamos que en la Primera comunicación de la Argentina, el único argumento esgrimido era que la interpretación del Brasil de la expresión "proporción importante" es subjetiva.[113] Por el contrario, entendemos que sería subjetiva la conclusión de una autoridad investigadora de que un porcentaje inferior al 50 por ciento constituye una "proporción importante" de la producción nacional total. En consecuencia, consideramos que la autoridad investigadora debe explicar cómo, en esos casos, se puede considerar que esa proporción de la rama de producción nacional constituye una "proporción importante".

[112] *Véase* la comunicación de tercero presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 51.

[113] *Véase* la Primera comunicación de la Argentina, párrafo 302.

ANEXO A-5

SEGUNDA DECLARACIÓN ORAL DEL BRASIL

26 de noviembre de 2002

INTRODUCCIÓN

1. El Brasil acoge con satisfacción la oportunidad de volver a comparecer ante el Grupo Especial para exponer su posición sobre la diferencia relativa a la imposición por la Argentina de derechos antidumping definitivos sobre los pollos procedentes del Brasil. Deseamos expresar una vez más al Grupo Especial y a la Secretaría nuestro agradecimiento por el tiempo y los esfuerzos que han consagrado a esta cuestión.

2. Al igual que en la Primera declaración oral, el Brasil no reiterará los argumentos que ya se han expuesto en numerosas ocasiones en el curso del presente procedimiento, sino que se ocupará únicamente de algunas de las cuestiones principales planteadas al Grupo Especial a la luz de los argumentos y respuestas facilitados por la Argentina en su Segunda comunicación y en su respuesta a las preguntas del Grupo Especial en la primera reunión sustantiva.

3. Antes de exponer nuestros argumentos específicos, comentaremos brevemente la posición de la Argentina acerca de la resolución del Tribunal Arbitral Ad Hoc del MERCOSUR y de la aplicabilidad al presente caso del principio de buena fe y de la doctrina del *estoppel*.

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL AD HOC DEL MERCOSUR

4. La Argentina aduce que la conducta del Brasil de plantear la presente diferencia en el ámbito de la OMC es contraria al principio de buena fe, porque una controversia análoga se ha planteado, examinado y resuelto en el marco del MERCOSUR. Según la Argentina, el planteamiento de la presente diferencia ante el Grupo Especial configura un ejercicio de derecho por parte del Brasil que contraría el principio de buena fe, por lo que el Grupo Especial debería aplicar el principio del *estoppel* e impedir al Brasil prevalerse de sus derechos en el marco de la OMC.[1]

5. El Brasil se opone firmemente a la alegación de la Argentina y sostiene que el ejercicio de sus derechos en el marco de la OMC **no** es contrario al principio de buena fe.

6. A este respecto, recordamos que las reclamaciones de la diferencia planteada ante este Grupo Especial **no** son las mismas que se formularon ante el Tribunal del MERCOSUR. El Tribunal del MERCOSUR, al ocuparse de la controversia, examinó si las disposiciones que configuran el marco del MERCOSUR fueron interpretadas, aplicadas o cumplidas correctamente en la investigación antidumping que llevaron a cabo las autoridades de la Argentina.[2] Las reclamaciones formuladas en la solicitud de establecimiento de un grupo especial de la OMC presentada por el Brasil se refieren al incumplimiento por la Argentina de sus obligaciones en el marco de la OMC, y en especial de las derivadas del Acuerdo Antidumping.[3]

---

[1] Segunda comunicación de la Argentina, párrafo 6.

[2] *Véase* el artículo 1 del Protocolo de Brasilia.

[3] *Argentina - Derechos antidumping definitivos sobre los pollos procedentes del Brasil: Solicitud de establecimiento de un Grupo Especial presentada por el Brasil*, WT/DS241/3 (26 de febrero de 2002).

7. La alegación de la Argentina de que el Brasil no ha actuado de conformidad con el principio de buena fe al haber recurrido en primer lugar al mecanismo de solución de controversias del MERCOSUR y posteriormente al sistema de solución de diferencias de la OMC con respecto a la misma diferencia[4] no es correcta. Hemos puesto de manifiesto que se trata de diferencias distintas.

8. Además, el propio Tribunal del MERCOSUR constató que carecía de la competencia necesaria para examinar alegaciones de violación de las normas de la OMC. Recordamos que el Tribunal del MERCOSUR constató que normas antidumping del MERCOSUR para el comercio interregional no estaban realmente en vigor[5] y que los Estados miembros del MERCOSUR podían aplicar su legislación nacional antidumping con respecto al comercio regional.[6]

9. El Tribunal estableció además que no le correspondía aclarar aspectos como las discrepancias en relación con la existencia de los requisitos para la aplicación de derechos antidumping, es decir, la existencia o inexistencia de dumping, daño y una relación causal entre uno y otro.[7] En consecuencia, el propio tribunal reconoció las limitaciones de su competencia.

10. Además, entendemos que el artículo 23 del ESD establece la competencia exclusiva de ese texto legal en caso de violaciones de las normas de la OMC.

11. El párrafo 2 del artículo 3 del ESD declara que el sistema de solución de diferencias de la OMC "sirve para preservar los derechos y obligaciones de los Miembros en el marco de los acuerdos abarcados". En consecuencia, el Brasil tiene derecho a que el Grupo Especial examine las reclamaciones que le ha sometido y adopte una decisión al respecto. Cualquier otra interpretación menoscabaría los derechos del Brasil derivados de los acuerdos abarcados de la OMC.

12. Con respecto a la alegación de la Argentina de que debería recurrirse en la presente diferencia en el marco de la OMC al principio del *estoppel*, reiteramos que el simple hecho de que el Brasil haya sometido al Tribunal del MERCOSUR una controversia conexa, pero distinta, no implica que este país haya consentido en renunciar a su derecho a someter la diferencia que estamos examinando al Grupo Especial. Subrayamos que la diferencia sometida al presente Grupo Especial se basa en un fundamento jurídico distinto que la controversia sometida al Tribunal del MERCOSUR.

13. El Grupo Especial puede comprobar que, incluso con arreglo al criterio de la Argentina acerca de los elementos esenciales del *estoppel* -una declaración fáctica clara, inequívoca, voluntaria, incondicionada y autorizada en la que se confía de buena fe[8]- no se formuló en nombre del Brasil una declaración de esa naturaleza en la que este país renunciara a su derecho a someter una diferencia, basada en reclamaciones distintas, a la OMC.

14. Subsidiariamente, la Argentina parece aducir que el Grupo Especial, al examinar las reclamaciones formuladas por el Brasil en la presente diferencia, no puede prescindir de la resolución del Tribunal del MERCOSUR en virtud de las normas de derecho internacional aplicables en las relaciones entre las partes, de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados ("Convención de Viena") y conforme a lo dispuesto en el

[4] Segunda comunicación de la Argentina, párrafo 10.

[5] Laudo del cuarto Tribunal Arbitral Ad Hoc del MERCOSUR, 21 de mayo de 2001, párrafo 131.

[6] *Ibid.*, párrafo 153.

[7] *Ibid.*, párrafo 214.

[8] Segunda comunicación de la Argentina, párrafo 13.

párrafo 2 del artículo 3 del ESD.[9] En relación con esta alegación, son procedentes las consideraciones que se exponen a continuación.

15. En primer lugar, la Argentina solicita al Grupo Especial que tome en consideración, a los fines de interpretación de la presente diferencia en el ámbito de la OMC, las reglas comprendidas en el marco normativo del MERCOSUR aplicadas por el Tribunal del MERCOSUR.[10] No podemos asumir razonablemente que para interpretar las disposiciones del Acuerdo Antidumping, que vincula a más de 140 Miembros de la OMC que no son miembros del MERCOSUR, haya de utilizarse una resolución del Tribunal del MERCOSUR en la que ni siquiera se abordó ese Acuerdo.

16. En segundo lugar, el Brasil reafirma que el párrafo 2 del artículo 3 del ESD se refiere exclusivamente a la aclaración de las disposiciones vigentes del Acuerdo sobre la OMC. En su texto se manifiesta claramente que el sistema de solución de diferencias "sirve para preservar los derechos y obligaciones de los Miembros en el marco de los acuerdos abarcados y para aclarar las disposiciones vigentes de **dichos acuerdos**".

17. En contra de lo que entiende la Argentina[11], el párrafo 2 del artículo 3 del ESD se refiere de hecho únicamente a las normas de interpretación utilizadas para aclarar las disposiciones vigentes del Acuerdo sobre la OMC y no tiene ninguna conexión con la relación entre anteriores resoluciones de un tribunal internacional y los derechos y obligaciones de los Miembros de la OMC en el marco de los "acuerdos abarcados".

INICIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING

a) Párrafo 2 del artículo 5: Ausencia de pruebas en la solicitud

18. Según la Argentina, la publicación de JOX de 30 de junio de 1997, presentada con la solicitud, contenía información relativa al "pollo entero". Específicamente, la publicación indica el precio de los pollos refrigerados con cabeza, patas y menudos comercializados en São Paulo, Brasil.[12] La Argentina ha **afirmado** que esta diferencia en las "características físicas" tiene efectos sobre los precios y que la diferencia posee un valor equivalente al que la demanda del mismo ofrece en función de características de los mercados.[13]

19. Aun cuando alega que esas diferencias afectan a los precios, la Argentina no ha indicado en qué parte de la solicitud o de la determinación de apertura de la investigación se presentaban pruebas que apoyen esa alegación. De hecho, la Argentina **presume** que las diferencias alegadas tienen tales efectos basándose exclusivamente en la descripción del producto de la publicación de JOX.

20. La Argentina ha declarado también que las pruebas presentadas por el solicitante ante la autoridad contenían datos suficientes, en el sentido del párrafo 2 del artículo 5 del Acuerdo, de que: 1) existían diferencias en las características físicas del producto tomado como base para calcular el valor normal; 2) en tanto que esas diferencias afectaban al rendimiento comercial de los productos

[9] *Ibid.*, párrafo 7.

[10] *Ibid.*, párrafo 29.

[11] *Ibid.*, párrafo 23.

[12] Respuesta de la Argentina a las preguntas del Grupo Especial en la primera reunión sustantiva, pregunta 5.

[13] *Ibid.*

objeto de la comparación, tenían **indudablemente** un impacto en la comparabilidad de precios; y 3) esas diferencias ameritaban la realización de un ajuste que permitiera, previamente a la apertura de la investigación, efectuar una comparación equitativa, para lo que se presentó una metodología de ajuste.[14]

21. Al parecer, la Argentina **da por supuesto** que de los datos facilitados en la publicación de los precios de JOX una autoridad investigadora podría **inferir** que todos los pollos vendidos en el Brasil incluían cabeza y patas; que esas diferencias influían en la comparabilidad de los precios; que, por consiguiente, estaba justificado un ajuste y que la metodología propuesta por el solicitante estaba justificada. No obstante, una vez más, la Argentina no indica las **pruebas** presentadas con la solicitud que apoyarían las conclusiones de la autoridad investigadora de que el ajuste del solicitante, en los términos propuestos, era necesario para efectuar una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal.

22. Aun cuando parece coincidir con la definición de "pruebas" dada por el Brasil[15], la Argentina no indica qué "información extraída de un documento y que tiende a demostrar un hecho o una proposición"[16] se utilizó en apoyo de la alegación de que las diferencias en cuestión influían en la comparabilidad de los precios y justificaban la metodología utilizada para efectuar el ajuste del valor normal.

23. En respuesta a la pregunta del Grupo Especial acerca de si la Argentina consideraba que el precio publicado por JOX para un solo día (30 de junio) era toda la información "que tenía razonablemente a su alcance el solicitante" sobre el valor normal, la Argentina contestó que aunque el solicitante aportó el valor correspondiente a un solo día, ese valor indicaba la **tendencia** de los precios en el mercado, así como las causas de sus variaciones de existir.[17]

24. A este respecto, el Brasil no puede aceptar que pueda considerase razonablemente que el precio correspondiente a un solo día de 1997 publicado por JOX indique **una tendencia** de los precios del mercado en un período de seis meses.

25. A este respecto, la Argentina afirma que "la prueba aportada es un valor representativo que surge de una publicación especializada para un período determinado".[18] En respuesta a la pregunta acerca del significado de la expresión "un período determinado", la Argentina manifestó categóricamente que aunque la publicación de JOX expresa el precio vigente del día 30 de junio de 1997, puede leerse en el margen derecho de la misma que "la producción del mercado paralelo del interior de San Pablo es nítidamente menor, lo que viene manteniendo el precio en terreno muy firme".[19] Según la Argentina, ese dato refleja que el precio publicado por JOX no variaba

[14] Segunda comunicación de la Argentina, párrafo 36.

[15] Respuesta de la Argentina a las preguntas del Grupo Especial en la primera reunión sustantiva, pregunta 6.

[16] Primera comunicación del Brasil, párrafo 63.

[17] Respuesta de la Argentina a las preguntas del Grupo Especial en la primera reunión sustantiva, pregunta 7.

[18] Primera comunicación de la Argentina, párrafo 50.

[19] Respuesta de la Argentina a las preguntas del Grupo Especial en la primera reunión sustantiva, pregunta 12.

considerablemente y se había mantenido estable.[20] Entendemos que ese es el razonamiento en el que se basa la Argentina para no facilitar, al establecer el valor normal, los precios publicados por JOX para los demás meses de 1997.

26. A este respecto, señalamos a la atención del Grupo Especial que la información de la publicación de JOX que cita la Argentina se refiere al mercado de los pollos **vivos** y **no** al de los pollos congelados o refrigerados (pollos sacrificados), mercado cuya descripción en la misma publicación no contiene la referencia citada por la Argentina. Así pues, la Argentina trata de utilizar la aclaración que se da en la publicación de JOX respecto de un producto distinto, **los pollos vivos**, para justificar el hecho de que no se solicitaran ni utilizaran los precios correspondientes a más de un día de 1997 de los pollos refrigerados, producto que es completamente distinto de los pollos vivos. El Brasil no acepta que esta aclaración constituya una explicación razonable del establecimiento del valor normal sobre la base de un solo día de 1997.

27. Además, la publicación de JOX sobre los precios utilizada por el solicitante en la solicitud es una publicación diaria. Por ello, el Brasil ha presentado la Prueba documental BRA-19, que demuestra que la información sobre el valor normal correspondiente a la totalidad de los años 1996 y 1997 estuvo "razonablemente al alcance" del solicitante. Esa prueba documental pone de manifiesto que el solicitante podía haber adjuntado la información sobre los precios de los pollos publicada por JOX para todos los meses de 1997, pero que, en lugar de ello, optó por facilitar la correspondiente a un solo día de ese año.

28. Según la propia definición de la Argentina, la expresión "la información que razonablemente tenga a su alcance el solicitante" del párrafo 2 del artículo 5 se refiere a aquellas pruebas que el solicitante pueda obtener sin una carga probatoria excesiva que pudiera llegar a tornar imposible la presentación de la solicitud.[21]

29. El Brasil entiende que los precios correspondientes a todos los meses de 1997 publicados por JOX constituían una información que el solicitante podía haber obtenido sin una carga probatoria excesiva que hubiera hecho imposible la presentación de la solicitud.

30. La Argentina afirma también que la publicación relativa a los precios de JOX del 30 de junio de 1997 fue considerada la prueba del valor normal presentada con la solicitud y que la autoridad investigadora no requirió información adicional.[22] La Argentina entiende que la autoridad no consideró necesario solicitar información adicional con respecto a las diferencias entre las características físicas mencionadas en la solicitud y al ajuste indicado por el solicitante, teniendo en cuenta los estándares de información que han de ser considerados en dicha instancia de investigación (es decir en la etapa previa a la iniciación).[23]

31. Constatamos que esta manifestación prueba en realidad que la autoridad no examinó la exactitud y pertinencia de la información presentada con la solicitud. Este ajuste del valor normal tenía tal importancia que a falta del mismo el solicitante no podría haber alegado la existencia de dumping y, por consiguiente, no podría haberse iniciado la investigación. De la información facilitada con la solicitud se desprende con absoluta claridad que la autoridad investigadora, plenamente consciente de las consecuencias del ajuste, debería haber solicitado, y utilizado, información adicional.

---

[20] *Ibid.*

[21] Respuesta de la Argentina a las preguntas del Grupo Especial en la primera reunión sustantiva, pregunta 8.

[22] *Ibid.*, pregunta 9.

[23] *Ibid.*, pregunta 11.

32. En consecuencia, el Brasil entiende que la Argentina no tuvo en cuenta la repercusión de las posibles diferencias en la suficiencia de las pruebas presentadas con la solicitud ni, como ha confirmado la propia Argentina, solicitó más información.

b) Párrafo 3 del artículo 5: Exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas con la solicitud

33. El Brasil reitera su posición de que el método adoptado por la Argentina para establecer el precio de exportación, y por ende el margen de dumping, se basó exclusivamente en los precios de exportación inferiores al valor normal, lo que siempre dará como resultado un margen de dumping.[24] El Brasil ha afirmado también que la metodología adoptada por la autoridad de la Argentina es en realidad una metodología de "reducción a cero".[25]

34. La Argentina ha confirmado nuestra tesis de que al establecer el margen de dumping a los efectos de la iniciación de la investigación, la autoridad investigadora tomó todas las operaciones de exportación que estaban por debajo del valor normal, excluyendo aquellas que daban un margen de dumping negativo.[26] Por consiguiente, no cabe ninguna duda de que la metodología utilizada por la Argentina incrementó artificialmente el margen de dumping y aseguró la existencia de un margen de dumping.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING: REQUISITOS EN MATERIA DE PRUEBA Y AVISOS PÚBLICOS

a) Párrafo 1 del artículo 12: Notificación y aviso público de la iniciación

35. Con respecto a la reclamación relativa a la infracción del párrafo 1 del artículo 12 del Acuerdo, el Brasil ha demostrado ya que la autoridad investigadora **tenía conocimiento**, antes de la iniciación, de la existencia y del interés de al menos cinco de los siete exportadores a los que no se había notificado la investigación después de transcurridos casi ocho meses desde su iniciación.[27]

36. La Argentina parece dar a entender que la autoridad sólo debe efectuar la notificación correspondiente a aquellas partes que se consideren interesadas en la investigación, en los términos del párrafo 1.1 del artículo 6 del Acuerdo.[28] El razonamiento de la Argentina es insostenible: ¿cómo puede una parte presentarse como parte interesada si ni siquiera sabe que se ha iniciado una investigación? Esa es precisamente la razón por la que el párrafo 1 del artículo 12 obliga a la autoridad a notificar a las partes interesadas de cuyo interés tenga conocimiento.

37. Al explicar cómo concilia el hecho de que en el informe inicial de la investigación se citara (e identificara) a esos cinco exportadores y que sólo se hiciera a esos exportadores la notificación ocho meses después de iniciada la investigación, la Argentina confirma que tenía conocimiento de la existencia de esos exportadores pero que este hecho no constituía por sí una "identificación" que

[24] Primera declaración oral del Brasil, párrafos 24 y 25.

[25] *Ibid.*, párrafo 26.

[26] Respuesta de la Argentina a las preguntas del Grupo Especial en la primera reunión sustantiva, pregunta 11.b).

[27] Segunda comunicación del Brasil, párrafos 45 a 53.

[28] Respuesta de la Argentina a las preguntas del Grupo Especial en la primera reunión sustantiva, pregunta 24.

hiciera posible a la autoridad la remisión de los correspondientes cuestionarios.[29] Lo que la Argentina parece alegar es que no disponía de la dirección de esas empresas.

38. Una vez más, la Argentina trata de hacer compartir al Brasil la obligación de notificación impuesta a la autoridad investigadora, al manifestar que ésta solicitó la colaboración del Gobierno brasileño a efectos de esa identificación.[30] Esa afirmación es sencillamente falsa: el Brasil nunca recibió una comunicación de las autoridades argentinas en la que se solicitara tal información respecto de esos cinco exportadores **concretos** identificados en el informe.

b) Párrafo 1.1 del artículo 6: Plazos para las respuestas

39. En respuesta a la pregunta del Grupo Especial sobre la cuestión relativa al párrafo 1.1 del artículo 6, la Argentina ha manifestado expresamente que **no** aplica un sistema en el que inicialmente se conceda un plazo menor con tal de que el plazo total, incluidas las prórrogas, sea al menos de 30 días.[31] La Argentina, de hecho, confirma que el plazo de 30 días desde el principio es aplicable en todos los casos. No obstante, en las Pruebas documentales de la Argentina ARG-XLVI a ARG-LIII, comprobamos que el plazo establecido por la autoridad para dar respuesta al cuestionario era un plazo **no superior al de 20 días** a partir de la recepción de la notificación en cuestión.

40. Teniendo en cuenta la declaración de la Argentina, así como el hecho de que el plazo establecido por la DCD era un plazo no superior a 20 días y de que la CNCE nunca envió el cuestionario sobre el daño a los siete exportadores, es evidente que las autoridades investigadoras infringieron el párrafo 1.1 del artículo 6 del Acuerdo.

c) Párrafo 1.2 del artículo 6: "Las pruebas [...] se pondrán inmediatamente a disposición [...]"

41. El Brasil ha afirmado que la Argentina no puso inmediatamente a disposición de los siete exportadores brasileños a los que se notificó la investigación casi ocho meses después de que hubiera sido iniciada las pruebas presentadas por las otras partes interesadas en la investigación.[32]

42. De nuevo, la Argentina confunde el requisito del párrafo 1.2 del artículo 6, al explicar que entiende que las partes interesadas en la investigación son aquéllas que se acreditan en la investigación como tales manifestando un interés en participar en la misma.[33]

43. No coincidimos con la interpretación que hace la Argentina del párrafo 1.2 del artículo 6. En primer lugar, una parte no puede acreditarse como parte interesada en la investigación si no tiene noticia de ella. En segundo lugar, no es necesario que una parte se acredite en una investigación para ser parte en ella. En tercer lugar, la falta de interés de una parte en una investigación no anula o aminora la obligación de las autoridades investigadoras de poner inmediatamente a su disposición las pruebas presentadas por escrito por otras partes interesadas.

---

[29] *Ibid.*, pregunta 26.

[30] Respuesta de la Argentina a las preguntas del Grupo Especial en la primera reunión sustantiva, pregunta 26.

[31] *Ibid*, pregunta 31.

[32] Primera comunicación del Brasil, párrafos 215 a 220.

[33] Respuesta de la Argentina a las preguntas del Grupo Especial en la primera reunión sustantiva, pregunta 32.

44. La Argentina parece pensar que sólo se incorpora a una investigación a una parte interesada cuando ésta ha solicitado participar en ella.[34] Esa idea carece simplemente de sentido. No hay en el Acuerdo Antidumping ninguna disposición que obligue a las partes a solicitar su participación en una investigación para ser incorporadas a ella. Para que una parte sea incorporada a una investigación, basta con que sea productor o exportador del producto objeto de la investigación.

d) Párrafo 8 del artículo 6 y párrafo 2.2 del artículo 12: Utilización inadecuada de los hechos de que se tenía conocimiento

45. Con respecto al hecho de que la autoridad descartara las respuestas solicitadas por los exportadores brasileños acerca de la descripción del producto exportado a la Argentina y del producto vendido en el Brasil, la Argentina ha confirmado su posición de que la autoridad, al establecer el valor normal sólo utilizó la información aportada por los exportadores que iba acompañada de la correspondiente prueba documental.[35]

46. En su Segunda comunicación, el Brasil ha demostrado que la falta de respaldo documental que aduce la Argentina no facultaba a la autoridad para recurrir a los hechos de que se tenía conocimiento.[36] Como puede observar el Grupo Especial, Sadia, Avipal, Frangosul y Catarinense facilitaron en los cuestionarios respuestas acerca de la descripción del producto exportado a la Argentina y vendido en el Brasil.[37] Como puede observar también el Grupo Especial, en los cuestionarios no se **especificaba** que la información sobre la descripción del producto tuviera que ser respaldada documentalmente. Además, la autoridad investigadora en ningún momento de la investigación solicitó información concreta, aclaraciones o documentación justificativa de las respuestas presentadas por esos exportadores en relación con la descripción del producto.

47. Además, las autoridades investigadoras nunca informaron a esos exportadores de que la información que habían facilitado no sería aceptada y, en consecuencia, no dieron nunca a los exportadores la oportunidad de presentar explicaciones o documentación complementaria, conforme a lo previsto en el párrafo 6 del Anexo II del Acuerdo.

48. El Brasil entiende que el párrafo 1 del artículo 6 del Acuerdo obliga a las autoridades a dar a todas las partes aviso de la información que se exige. En consecuencia, si la autoridad investigadora no indica claramente cuál es la información que se exige, no puede recurrir a los hechos de que se tenga conocimiento y penalizar a la parte interesada por no presentar esa información. De forma análoga, el párrafo 1 del Anexo II del Acuerdo obliga también a las autoridades a especificar en detalle la información requerida de cualquier parte interesada.

49. Además, el Gobierno del Brasil impugnó específicamente el cálculo del ajuste realizado por la autoridad. No obstante, la autoridad de la Argentina efectuó el ajuste del valor normal sobre la base del ajuste propuesto en la solicitud, a pesar de que el solicitante no presentó documentación justificativa del ajuste propuesto.

50. A este respecto, entendemos que la autoridad no actuó con "especial prudencia", en el sentido del párrafo 7 del Anexo II, al aplicar el ajuste arbitrario del valor normal propuesto por el solicitante en la solicitud.

---

[34] Segunda comunicación de la Argentina, párrafo 50 (última frase).

[35] *Ibid.*, párrafo 54.

[36] Segunda comunicación del Brasil, párrafos 62 a 81.

[37] Pruebas documentales BRA-22, BRA-23, BRA-24, BRA-25 y BRA-26.

51. Además, en lo que respecta al párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo, la autoridad descartó también el precio de exportación facilitado por todos los exportadores brasileños y, en vez de atender a esa información, estableció el precio de exportación sobre la base de la información relativa a las importaciones obtenida del organismo argentino *Ganadería*.

52. En particular, la Argentina explica, por primera vez, que la información facilitada por Frangosul y Catarinense no se utilizó sencillamente porque en el caso de la primera la información aportada era insuficiente y se había presentado fuera de plazo y en el caso de la segunda porque la información se consideró insuficiente.[38]

53. Esta explicación parece estar en contradicción con la propia respuesta de la Argentina según la cual Frangosul presentó documentación justificativa de los precios de exportación comunicados en la investigación.[39] Merece la pena destacar que la Argentina no responde a la pregunta del Grupo Especial acerca de si la DCD contaba con datos suficientes sobre los precios de exportación en el caso de Frangosul y Catarinense.[40] La respuesta a esa pregunta sería que Frangosul y Catarinense no sólo facilitaron todos los datos sobre los precios de exportación solicitados por la autoridad dentro de un plazo prudencial sino que facilitaron también la correspondiente documentación justificativa.[41]

54. El Grupo Especial debería tomar nota asimismo de que los exportadores brasileños Sadia, Avipal, Frangosul y Catarinense facilitaron información sobre los precios de exportación de los pollos exportados a la Argentina en el período comprendido entre 1996 y 1999, como había solicitado la autoridad.[42]

e) Párrafo 10 del artículo 6: Margen de dumping correspondiente a cada exportador o productor

55. En lo que respecta a la reclamación relativa a la infracción del párrafo 10 del artículo 6, la Argentina parece justificar el hecho de no haber calculado márgenes individuales para Frangosul y Catarinense con el argumento de que la información sobre el valor normal facilitada por esas empresas no iba acompañada de respaldo documental.[43]

56. Hemos expuesto ya nuestras opiniones en lo que respecta a la utilización inadecuada por la Argentina de los hechos de que se tenía conocimiento basándose en la falta de respaldo documental. En el caso de Frangosul, la autoridad modificó el período de recopilación de datos a efectos del dumping después de transcurridos más de ocho meses desde la iniciación de la investigación y solicitó documentación justificativa respecto de todas las transacciones de venta en el mercado interno. Al hacerlo, la autoridad investigadora no actuó de forma razonable, objetiva e imparcial, y no podía recurrir a los hechos de que tenía conocimiento.[44] En el caso de Catarinense, la autoridad

[38] Segunda comunicación de la Argentina, párrafo 56.

[39] Respuesta de la Argentina a las preguntas del Grupo Especial en la primera reunión sustantiva, pregunta 45.

[40] *Ibid.*

[41] Páginas 29, 38, 39 y 49 de la Prueba documental BRA-15.

[42] Páginas 18, 22, 29, 38, 39, 43, 45 y 49 de la Prueba documental BRA-15.

[43] Respuesta de la Argentina a las preguntas del Grupo Especial en la primera reunión sustantiva, preguntas 44 y 45.

[44] Respuesta del Brasil a las preguntas del Grupo Especial en la primera reunión sustantiva, pregunta 41.

investigadora nunca solicitó documentación justificante de las transacciones de venta en el mercado interno comunicadas por la empresa.[45]

57. Además, hemos demostrado que tanto Frangosul como Catarinense facilitaron los datos sobre los precios de exportación requeridos con la correspondiente documentación justificativa, pero a pesar de ello la autoridad descartó esa información.

58. A este respecto, nos remitimos a la explicación de la Argentina, según la cual es evidente que la autoridad investigadora no contaba con los elementos necesarios para poder proceder al cálculo individual del margen de dumping.[46] Según la Argentina, este margen surge de la relación entre ambos valores, el precio de exportación y el valor normal; respecto del último no se presentó documentación justificativa.[47]

59. Señalamos al Grupo Especial que aunque la autoridad investigadora tampoco tuvo en cuenta la información sobre el precio de exportación presentada por los exportadores Sadia y Avipal, de todos modos calculó los márgenes de dumping individuales correspondientes a esas dos empresas. El Brasil no entiende el motivo por el cual la autoridad decidió obrar de manera diferente con respecto a la información facilitada por Frangosul y Catarinense.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING: DETERMINACIÓN POSITIVA DEFINITIVA

a) Párrafo 4 del artículo 2: Comparación equitativa

60. Con respecto a la reclamación relativa al hecho de que la Argentina no tuvo debidamente en cuenta los fletes al establecer el valor normal de los exportadores Sadia y Avipal, la Argentina admite que Sadia presentó en el anexo VIII los costos de los fletes internos correspondientes a las ventas efectuadas en el mercado interno.[48] La Argentina añade que este ajuste habría correspondido si Sadia hubiera aportado prueba documental que lo respaldara.[49]

61. Lo que no dice la Argentina es que después de que Sadia presentara los datos sobre el costo de los fletes internos en el anexo VIII de su respuesta al cuestionario, la autoridad investigadora no solicitó nunca información adicional, aclaraciones o documentación justificativa en relación con los costos de los fletes internos.[50]

[45] Primera comunicación del Brasil, párrafo 250.

[46] Respuesta de la Argentina a las preguntas del Grupo Especial en la primera reunión sustantiva, pregunta 45.

[47] *Ibid.*

[48] Segunda comunicación de la Argentina, párrafo 71.

[49] *Ibid.*

[50] Respuesta de la Argentina a las preguntas del Grupo Especial en la primera reunión sustantiva, pregunta 47, Prueba documental ARG-XLIV.

62. La Argentina, aun cuando coincide en que este ajuste tiene "un claro e importante impacto en la comparabilidad de precios"[51], sigue sosteniendo que la autoridad investigadora no hubiera actuado correctamente si hubiera efectuado este descuento específico.

63. Hemos demostrado ya que la autoridad podía haber utilizado una fuente secundaria de información para estimar esa deducción, como hizo en el caso del ajuste del valor normal para compensar las supuestas diferencias entre los pollos exportados a la Argentina y los pollos vendidos en el Brasil, pero optó por no hacerlo.[52]

64. Además, en la Prueba documental ARG-LVI figura una carta del abogado de Sadia y Avipal a la autoridad investigadora en la que se manifiesta expresamente que el valor normal establecido para Sadia y Avipal incluía indebidamente los costos de los fletes internos.[53] Aún así, la autoridad investigadora siguió sin efectuar el ajuste solicitado del valor normal de esas dos empresas en función de los fletes.

65. En lo que respecta a la reclamación relativa al hecho de que la Argentina no tuviera en cuenta en el valor normal establecido para todos los demás exportadores las diferencias de tributación, en los fletes y en los costos financieros, si la autoridad consideró que la información de JOX era fiable para efectuar ajustes en relación con las características físicas que no estaban justificados, ¿por qué no consideró fiable la información de JOX sobre tributación, fletes y costos financieros?

66. Subrayamos que la información de JOX sobre los ajustes en función de la tributación, los fletes y los costos financieros se facilitó a raíz de una solicitud formulada por la autoridad investigadora y no por una parte interesada en la investigación. Si la respuesta de JOX se facilitó en idioma portugués, las propias autoridades debían haber traducido esa información o solicitado a JOX que facilitara una traducción de ella. En lugar de ello, la autoridad investigadora optó por no tener en cuenta esa información y no efectuar los ajustes requeridos.

67. La Argentina aduce que la información de JOX no se tomó en cuenta porque hubiera dado lugar a una comparación incorrecta de un precio ex fábrica para el valor normal con un precio FOB de exportación. Según la Argentina, no se contaba con información simétrica respecto de los descuentos a realizar en los valores de exportación de la mercadería.[54]

68. El Brasil recuerda que el precio FOB incluye los fletes internos hasta el puerto de exportación, los seguros internos y los gastos de manipulación y carga. En cambio, no incluye los impuestos y costos financieros. En consecuencia, no procede efectuar ajustes del precio FOB de exportación en relación con los impuestos y los costos financieros. Dado que el precio FOB no incluye los impuestos y los costos financieros la autoridad debería, al menos, haber efectuado un ajuste del valor normal para excluir los impuestos y costos financieros (incluidos en los precios de JOX) al realizar una comparación equitativa. Al proceder de esa forma, la autoridad hubiera obtenido un valor normal que no era exactamente ex fábrica -puesto que seguiría incluyendo los fletes internos- pero la comparación se efectuaría en un nivel comercial más similar. Esas deducciones habrían permitido una comparación equitativa.

---

[51] Primera comunicación de la Argentina, párrafo 211.

[52] Primera declaración oral del Brasil, párrafo 53.

[53] Prueba documental ARG-LVI.

[54] Primera comunicación de la Argentina, párrafo 229.

69. En relación con la reclamación de que la autoridad investigadora impuso a los exportadores una "carga no razonable", el Brasil desea simplemente aclarar que la afirmación de la Argentina de que la autoridad investigadora no exigió durante la investigación que la presentación de todas las facturas es sencillamente incierta.[55]

70. La autoridad investigadora solicitó de hecho documentación justificativa respecto de todas las operaciones de venta realizadas en el Brasil y de las exportaciones la Argentina. El Grupo Especial puede comprobar este extremo en las páginas 18, 19, 22, 23, 27, 29 y 30 de la Prueba documental BRA-15. Hay que recordar que los exportadores Sadia, Avipal y Frangosul adujeron que esta exigencia era excesiva e imposible de cumplir debido al gran volumen de ventas en el mercado interno.[56]

b) Artículo 3: Determinación de la existencia de daño

71. En lo que respecta a las reclamaciones relativas a la infracción debida a la utilización de períodos distintos para evaluar los factores e índices económicos pertinentes enumerados en el párrafo 4 del artículo 3, la Argentina sostiene que la autoridad no está obligada a analizar ninguno de los factores fuera del período establecido como período de investigación.[57]

72. Coincidimos con la Argentina en que la autoridad no está obligada a examinar ninguno de los factores enumerados en el párrafo 4 del artículo 3 fuera del período de investigación. No obstante, no es eso lo que se plantea en el presente caso. En la investigación, la autoridad argentina consideró un determinado período a efectos del análisis del daño para los factores producción, precios, importaciones, exportaciones y consumo aparente y otro para los demás factores enumerados en el párrafo 4 del artículo 3.

73. Al explicar su posición, la Argentina manifiesta que la autoridad consideró algunos factores con la finalidad de ratificar las tendencias observadas durante el período investigado.[58] En este sentido, la autoridad investigadora evalúa determinados factores pertinentes respecto de un período determinado fuera del período de investigación a título de referencia.[59]

74. Como puede comprobar el Grupo Especial, no es esta la forma en que procedió la autoridad argentina en la investigación. El Brasil considera que si la autoridad investigadora hubiera examinado los factores producción, precios, importaciones, exportaciones y consumo aparente en el primer semestre de 1999 a título de referencia, lo habría declarado así en la determinación definitiva de existencia de daño, como hizo en el caso de los datos correspondientes al año 1995.[60]

---

[55] Respuesta de la Argentina a las preguntas del Grupo Especial en la primera reunión sustantiva, pregunta 52.

[56] Pruebas documentales BRA-29, BRA-31 y BRA-26.

[57] Respuesta de la Argentina a las preguntas del Grupo Especial en la primera reunión sustantiva, pregunta 59.

[58] *Ibid*.

[59] *Ibid*.

[60] Página 9 de la Prueba documental BRA-14.

75. En la determinación definitiva de la existencia de daño la autoridad declaró expresamente que había tenido en cuenta los datos correspondientes al año 1995 a título de referencia. Dado que los datos recopilados para 1995 se utilizaron únicamente a título de referencia y no se incluyeron en el examen de la autoridad, la autoridad investigadora ni siquiera mencionó el año 1995 en su evaluación narrativa de los factores del párrafo 4 del artículo 3. Como puede observar el Grupo Especial, respecto de todos los factores evaluados en la determinación de la existencia de daño, la autoridad comienza su evaluación con el año 1996. De forma análoga, en los cuadros que se adjuntan a la determinación definitiva de la existencia de daño, los datos de 1995 aparecen incluso en un sombreado distinto del resto de los datos, con una indicación al pie de cada cuadro según la cual el año 1995 se utiliza como período de referencia.

76. A diferencia de lo que ocurre con los datos correspondientes a 1995, la autoridad investigadora ha hecho una evaluación narrativa con respecto a los factores producción, precios, importaciones, exportaciones y consumo aparente en la que se tiene en cuenta el primer semestre de 1999.[61] Del mismo modo, los datos correspondientes al primer semestre de 1999 de los cuadros relativos a los factores producción, precios, importaciones, exportaciones y consumo aparecen sin ninguna diferencia de sombreado con los datos correspondientes al período comprendido entre enero de 1996 y diciembre de 1998[62], y no hay ninguna indicación de que los datos correspondientes al primer semestre de 1999 se utilicen únicamente a título de referencia.[63]

77. En lo que respecta a la no exclusión por la autoridad de las "importaciones objeto de dumping" de las procedentes de los exportadores brasileños Nicolini y Seara en el análisis del daño, hemos de señalar que, en lugar de citar la determinación definitiva para asegurar que se excluyeron las exportaciones que no eran objeto de dumping a los efectos del análisis del daño, la Argentina trata en su primera comunicación de explicar que dado que "los precios medios FOB del resto de las importaciones investigadas fueron inferiores a los de las empresas que no practicaron dumping, lógicamente, de su nacionalización hubieran resultado indefectiblemente precios internacionalizados, aún menores que los determinados por la CNCE en su determinación final de daño".[64]

78. No entendemos que esta explicación pruebe que las importaciones procedentes de Nicolini y Seara fueran excluidas **efectivamente** de las "importaciones objeto de dumping" totales en el análisis del daño.

79. Por el contrario, el Brasil ha puesto de manifiesto que en el análisis del daño de la determinación definitiva nunca se hizo referencia a la exclusión de las importaciones procedentes de esos dos exportadores brasileños.[65] La conclusión del Brasil se basa además en el hecho de que la determinación definitiva de la existencia de daño se formuló el 23 de diciembre de 1999, seis meses antes de que se formulara la determinara la determinación definitiva de la existencia de dumping, el 23 de junio de 2000.

[61] Páginas 9, 10, 14, 15, 16 y 25 de la prueba documental BRA-14.

[62] Cuadros 1, 5, 15b-16, 22-29 y 30-31 de la Prueba documental BRA-14.

[63] *Ibid*.

[64] Primera comunicación de la Argentina, párrafo 269.

[65] Prueba documental BRA-14.

80. Además, la Argentina manifiesta que en el momento de analizar la relación de causalidad la autoridad investigadora tuvo en cuenta la determinación de inexistencia de dumping para las exportaciones efectuadas por Nicolini y Seara.[66] Esta manifestación constituye por sí sola una clara indicación de que en el análisis del daño la autoridad no excluyó las importaciones que no eran objeto de dumping. De hecho, es en la determinación de la existencia de daño en la que las autoridades deben examinar el volumen, el efecto y las repercusiones de las "importaciones objeto de dumping".

81. Incluso si analizamos la determinación de la existencia de una relación causalidad, no encontramos en ella ninguna indicación de que se excluyeran de las "importaciones objeto de dumping" totales las procedentes de Nicolini y Seara.[67] Insistimos en que la determinación definitiva de la existencia de la relación de causalidad se limitó a reiterar lo ya establecido en la determinación definitiva de la existencia de dumping.

82. Nos ocupamos ahora de la alegación de la Argentina de que en la determinación definitiva de la existencia de daño se analizó específicamente el factor de la disminución real y potencial de la productividad.[68]

83. El Brasil no ha encontrado en la determinación definitiva un análisis específico del factor productividad en el período de investigación a efectos del daño. No hay tampoco en la determinación definitiva o en los cuadros anexos a esa determinación datos específicos que correspondan a un análisis expreso de ese factor. Lo que la Argentina ha presentado es la evaluación por la autoridad de los factores capacidad de producción, utilización de la capacidad, empleos, salario, estructura de costos y ventas en el mercado interno, pero no la evaluación del factor productividad.

84. A tal efecto, la Argentina indica que en la determinación se declara que "en términos generales, la relativa estabilidad del número de empleados frente a los incrementos observados en la producción, estarían indicando una mayor productividad física de la mano de obra, probablemente debido a la incorporación de tecnología antes mencionada".[69] No entendemos cómo puede considerarse que lo anterior constituye un análisis específico del factor productividad en el período de investigación a efectos del daño ni dónde figuran los datos relativos a la productividad en ese período.

85. Además, la Argentina indica que la autoridad investigadora se basó para evaluar el factor de la productividad en una carta presentada por el solicitante el 2 de diciembre de 1999.[70] A este respecto, el Brasil formula las siguientes observaciones.

86. En primer lugar, la carta presentada por el solicitante no incluía datos ni documentación justificativa de su alegación.[71] En segundo lugar, la Argentina cita un pasaje de la determinación definitiva que se refiere a los argumentos expuestos por las partes y no a la evaluación hecha por la autoridad de los factores en el examen de las repercusiones.[72] La autoridad se limitó simplemente a

[66] Primera comunicación de la Argentina, párrafo 266.

[67] Prueba documental BRA-16.

[68] Respuesta de la Argentina a las preguntas del Grupo Especial en la primera reunión sustantiva, pregunta 59.

[69] Página 13 de la Prueba documental BRA-14.

[70] Primera comunicación de la Argentina, párrafo 279.

[71] Prueba documental ARG-LX.

[72] Página 95 de la Prueba documental BRA-14.

incorporar a la determinación definitiva parte de la carta presentada por el solicitante y no evaluó ni examinó los datos relativos al factor productividad con respecto al período de investigación a efectos del daño.[73]

87. El Brasil subraya además que la Argentina no ha indicado en qué parte de la determinación definitiva se evaluó el factor de la magnitud del margen de dumping. A este respecto, la Argentina no ha respondido a la pregunta del Grupo Especial en la que se le pedía que comentara el párrafo 81 de la Primera declaración oral del Brasil.[74] Esa falta de respuesta no es sorprendente. El Brasil ha demostrado ya que la autoridad investigadora no evaluó ni podía haber evaluado este factor, ya que la determinación definitiva de la existencia de dumping, en la que se establecía el margen de dumping, se formuló seis meses después de que se hubiera formulado la determinación definitiva de la existencia de daño.

88. Además, la Argentina no ha indicado tampoco en qué parte de la determinación definitiva hay una evaluación **específica** de los datos correspondientes a los factores del flujo de caja, el crecimiento, la capacidad de reunir capital o la inversión en el período de investigación a efectos del daño.

89. Al examinar las reclamaciones 38 a 40, el Grupo Especial debería tener presente que aun cuando algunos factores puedan no haber sido pertinentes o no haber tenido un peso significativo en la decisión de la autoridad investigadora, la autoridad seguía estando obligada a explicar sus conclusiones en cuanto a la falta de pertinencia o importancia de esos factores y no podía limitarse a prescindir de ellos.

CONCLUSIÓN

90. Señalo a la atención de los miembros del Grupo Especial que la finalidad de la presente declaración es únicamente analizar algunos de los argumentos principales o nuevos expuestos por la Argentina en su segunda comunicación escrita y en su respuesta a las preguntas del Grupo Especial. Hemos intentado no reiterar los argumentos ya expuestos en etapas anteriores del presente procedimiento y ofrecer aclaraciones adicionales sobre los aspectos fundamentales de la presente diferencia. En esta declaración no nos hemos referido a las reclamaciones respecto de las cuales la segunda comunicación y las respuestas de la Argentina a las preguntas del Grupo Especial no incorporan argumentos nuevos o significativos.

91. Para terminar, solicitamos al Grupo Especial que constate que la Argentina ha actuado de forma incompatible con las disposiciones del Acuerdo Antidumping, conforme a lo expuesto en las 41 reclamaciones presentadas en la primera comunicación del Brasil. Les agradecemos el tiempo y la atención que nos han dedicado y responderemos con gusto a las preguntas que deseen plantearnos.

[73] *Ibid.*

[74] Respuesta de la Argentina a las preguntas del Grupo Especial en la primera reunión sustantiva, pregunta 59.

ANEXO A-6

SEGUNDA REUNIÓN SUSTANTIVA CON LAS PARTES - PREGUNTAS -

28 DE NOVIEMBRE DE 2002

RESPUESTAS DEL BRASIL

Preguntas al Brasil

Reclamación 22

90. En el párrafo 319 de la Primera comunicación escrita del Brasil se afirma que "Frangosul y Catarinense facilitaron la información requerida sobre el valor normal y el precio de exportación, que fue descartada sin ninguna explicación por la DCD". ¿Estaría de acuerdo el Brasil en que, si los datos presentados por Frangosul y Catarinense hubieran sido descartados de conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo Antidumping, la autoridad investigadora no habría estado obligada a calcular un margen de dumping individual para Frangosul y Catarinense? Sírvanse explicarlo.

Respuesta

En primer lugar, el Brasil desearía aclarar que en realidad, Frangosul y Catarinense sí facilitaron la información solicitada sobre el valor normal y el precio de exportación y que, por lo tanto, la autoridad investigadora no pudo haber descartado la información basándose en las disposiciones pertinentes del Acuerdo Antidumping. En consecuencia, la autoridad argentina, de hecho, debía calcular un margen de dumping individual para Frangosul y Catarinense.

Entendemos que la Argentina ha alegado que la autoridad investigadora no pudo calcular un margen de dumping individual para esas dos empresas porque la información sobre el valor normal que ellas presentaron no estaba acompañada de la documentación justificante.[1] A este respecto, presentamos, una vez más, la cronología de la información sobre el valor normal y el precio de exportación presentada por estas dos empresas y las razones por las que la DCD pudo y debió haber calculado un margen de dumping individual correspondiente a dichas empresas.

El valor normal de Frangosul

Respecto de los datos sobre el valor normal facilitados por Frangosul, el Grupo Especial puede verificar que el **27 de abril de 1999**, Frangosul respondió a la sección C del cuestionario concerniente a las ventas en el mercado interno. Esta información incluía las ventas de pollos en el Brasil correspondiente a los años 1996, 1997, 1998 y a los tres primeros meses de 1999, desglosados por meses.[2] El Grupo Especial también observará que, a continuación, la autoridad argentina solicitó la documentación justificante correspondiente a todas las ventas efectuadas en el mercado interno durante ese período.[3]

[1] Respuestas de la Argentina a las preguntas del Grupo Especial en la primera reunión sustantiva, preguntas 44 y 45.

[2] Página 29 de la Prueba documental BRA-15.

[3] Páginas 29 y 30 de la Prueba documental BRA-15.

El 19 de agosto de 1999, Frangosul envió una carta a la DCD, en la que explicaba que el gran volumen de ventas en el mercado interno le impedía facilitar las copias de las facturas correspondientes a cada transacción.[4] En esa carta, Frangosul señaló que en un año se emiten más de 320.000 facturas correspondientes a ventas en el mercado interno y que dichas facturas estaban a disposición de la autoridad investigadora para que las verificase *in loco* o para que realizase una selección de los documentos correspondientes a transacciones concretas para ser utilizados como muestra.[5]

El 12 de octubre de 1999, la DCD solicitó una nueva lista de facturas con el total de las transacciones en el mercado interno correspondientes al período de enero de 1998 a enero de 1999, a fin de que la DCD pudiese seleccionar una muestra y, a continuación, solicitar la documentación justificante de dicha muestra.[6] Esta fue la primera vez que la autoridad investigadora informó a Frangosul cuál era el período de recopilación de datos relativos al dumping.

El 30 de diciembre de 1999, Frangosul presentó un disquete con una lista de facturas correspondientes a las ventas en el mercado interno en el período de enero de 1998 a enero de 1999.[7] La autoridad investigadora nunca seleccionó las transacciones concretas respecto de las cuales se suponía que Frangosul debía facilitar la documentación justificante.

El 5 de enero de 2000, la DCD notificó a Frangosul la finalización de la etapa probatoria de la investigación.[8]

El Brasil entiende que la aplicación del párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo también depende de las acciones de la autoridad que lleva adelante una investigación. Si una autoridad investigadora no actúa de una manera apropiada durante la investigación, no puede alegar que la parte interesada no cumplió lo dispuesto en el párrafo 8 del artículo 6 y, por lo tanto, recurrir a los hechos de los que se tenga conocimiento. En apoyo de esta interpretación, transcribimos la consideración del Grupo Especial en el asunto *Guatemala - Cemento II*, respecto de la interpretación del párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo:

> "*(...) No consideramos que el hecho de no cooperar equivalga necesariamente a entorpecer significativamente una investigación, ya que, a nuestro juicio, el Acuerdo Antidumping no exige que las partes interesadas cooperen a cualquier precio. Si bien el hecho de no cooperar con una autoridad investigadora tiene ciertas consecuencias (en virtud del párrafo 8 del artículo 6) para las partes interesadas, opinamos que esas consecuencias* ***sólo*** *son posibles si la propia autoridad investigadora ha actuado de forma razonable, objetiva e imparcial. (…)*"[9]
> (Sin cursivas, subrayado ni negritas en el original.)

[4] Prueba documental BRA-26.

[5] *Id.*

[6] *Id.*

[7] *Id.*

[8] *Id.*

[9] *Guatemala - Medida antidumping definitiva aplicada al cemento Portland gris procedente de México,* 24 de octubre de 2000, WT/DS156/R, párrafo 8.251 (adoptado el 17 de noviembre de 2000) ("*Guatemala - Cemento II*").

Puesto que la autoridad argentina modificó la extensión del período de recopilación de datos relativos al dumping más de ocho meses después de que la investigación hubiese comenzado, y que, al inicio de la investigación, solicitó la documentación justificante de todas las transacciones en el mercado interno correspondientes a un período de más de tres años, creemos que la autoridad no actuó de forma razonable, objetiva e imparcial y no podía recurrir a los hechos de los que tenía conocimiento.

Valor normal de Catarinense

Con respecto a los datos sobre el valor normal facilitados por Catarinense, observamos que se notificó a Catarinense la investigación y la necesidad de contestar al cuestionario relativo al dumping el **15 de setiembre de 1999**, casi ocho meses después de que la investigación hubiese comenzado.[10] En esa notificación, la DCD estableció que la información sobre el valor normal y el precio de exportación que había de suministrarse era la correspondiente al período de enero de 1998 a enero de 1999.

El 3 de noviembre de 1999, Catarinense entregó las respuestas al cuestionario con la información sobre las ventas a la Argentina, desglosadas por operación, con la documentación justificante, como también la información sobre las ventas en el Brasil, desglosadas por operación, sin documentación justificante.[11] La autoridad argentina nunca solicitó la documentación justificante de las ventas de Catarinense en el mercado interno, ni seleccionó las transacciones concretas realizadas en el mercado interno para que Catarinense facilitase la correspondiente documentación justificante.

Aunque la autoridad notificó a Catarinense casi ocho meses después de que la investigación hubiese comenzado y de que se hubiese publicado una determinación preliminar de la existencia de dumping, daño y relación causal, Catarinense facilitó la información solicitada. Sin embargo, la DCD descartó la información sobre el valor normal presentada por el exportador.

Precio de exportación de Frangosul y Catarinense

Respecto del precio de exportación facilitado por Frangosul y Catarinense, el Grupo Especial observará que ambos exportadores entregaron los datos, desglosados por operación, conjuntamente con la documentación justificante.[12] Al parecer, incluso la Argentina está de acuerdo respecto de este hecho.[13]

Aunque Frangosul y Catarinense facilitaron la información solicitada sobre el precio de exportación conjuntamente con la documentación justificante, la autoridad argentina descartó de todos modos los datos sobre el precio de exportación suministrados por dichas empresas y recurrió a los hechos de los que tenía conocimiento.

En este punto, es importante observar que, aunque también descartó los datos sobre el precio de exportación facilitados por Sadia y Avipal, la autoridad argentina calculó, no obstante ello, los márgenes de dumping individuales para esas dos empresas. No estamos de acuerdo con el hecho de que la Argentina haya descartado la información sobre el precio de exportación facilitado por Sadia y

[10] Prueba documental BRA-13.

[11] Página 39 de la Prueba documental BRA-15.

[12] Páginas 29 y 39 de la Prueba documental BRA-15.

[13] Respuestas de la Argentina a las preguntas del Grupo Especial en la primera reunión sustantiva, pregunta 45.

Avipal, pero estimamos que la autoridad procedió correctamente al calcular, a pesar de ello, un margen de dumping individual para dichas empresas. No entendemos por qué, la autoridad investigadora procedió de forma diferente respecto de la información facilitada por Frangosul y Catarinense, y no podemos estar de acuerdo con ello. No existía sencillamente ninguna razón de conformidad con el párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo para que la autoridad argentina descartase el valor normal y el precio de exportación (con la correspondiente documentación justificante) proporcionados por estos dos exportadores.

Teniendo esto en cuenta, a la pregunta del Grupo Especial respondemos que sencillamente no había ningún fundamento en el Acuerdo para que la autoridad argentina descartase la información facilitada por los exportadores Frangosul y Catarinense.

Señalamos que, aunque los dos exportadores no hubiesen presentado la información apropiada y la autoridad la hubiese descartado correctamente, de acuerdo con las disposiciones pertinentes del Acuerdo la autoridad investigadora debió, aun así, calcular un margen de dumping individual para cada uno de los dos exportadores, como lo dispone el párrafo 10 del artículo 6 del Acuerdo. El hecho de que un exportador no haya facilitado la información pertinente y apropiada para establecer el valor normal y el precio de exportación no exime a la autoridad de la obligación que surge del párrafo 10 del artículo 6 de calcular un margen de dumping individual que corresponda a cada exportador. En nuestra respuesta a las preguntas 97 y 98 el Grupo Especial encontrará una respuesta más detallada respecto de la diferencia entre la obligación dimanante del párrafo 10 del artículo 6 y el recurso a los hechos de los que se tenga conocimiento en razón del párrafo 8 del artículo 6.

91. En el párrafo 324 de la Primera comunicación escrita del Brasil se afirma que "la DCD no dio ninguna explicación, ni en la determinación definitiva ni en ningún otro documento que conste en el expediente de la investigación, sobre las razones por las que no fue posible determinar en este caso un margen individual para Frangosul y Catarinense". ¿Estaría de acuerdo el Brasil en que, si la autoridad investigadora hubiera descartado los datos presentados por Frangosul y Catarinense de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones pertinentes del Acuerdo Antidumping, no habría estado obligada a explicar en la determinación definitiva ni en ningún otro documento que conste en el expediente de la investigación por qué motivo no se había calculado un margen de dumping individual para esos exportadores?

Respuesta

Hemos afirmado en la respuesta a la pregunta 90 que la autoridad investigadora no tenía ningún fundamento jurídico en las disposiciones del Acuerdo para descartar los datos sobre el valor normal y el precio de exportación facilitados por Frangosul y Catarinense y que, por lo tanto, la autoridad debió calcular un margen de dumping individual para cada uno de los dos exportadores.

Sin embargo, aunque la autoridad argentina podía haber descartado los datos facilitados por Frangosul y Catarinense de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo, es decir, de acuerdo con el párrafo 8 del artículo 6, la autoridad debió, aun así, explicar, antes de la determinación definitiva y en la determinación definitiva, por qué no había calculado un margen de dumping individual para esos exportadores.

En ese sentido, el párrafo 9 del artículo 6 del Acuerdo dispone que:

> "*Antes de formular una determinación definitiva, las autoridades informarán a todas las partes interesadas de los* ***hechos esenciales*** *considerados que sirvan de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas. Esa información deberá facilitarse a*

> *las partes con tiempo suficiente para que puedan defender sus intereses.*"
> (Sin cursivas, subrayado ni negritas en el original.)

El cálculo del margen de dumping es un hecho esencial que ha de ser considerado, como dispone el párrafo 9 del artículo 6 del Acuerdo. En consecuencia, si una autoridad decide calcular el margen de dumping para algunos exportadores basándose en una información distinta de la suministrada por los exportadores durante la investigación, ello también constituye un hecho esencial del que se debería haber informado antes de formular la determinación definitiva para que las partes pudieran defender sus intereses. Si las autoridades solamente expresan que la información fue descartada de acuerdo con las disposiciones pertinentes del Acuerdo pero no explican el motivo por el cual la información fue descartada y por qué razón no se calculó un margen de dumping individual, ¿cómo pueden los exportadores defender sus intereses, como lo dispone el párrafo 9 del artículo 6?

Del mismo modo, el párrafo 2.2 del artículo 12 exige que en los avisos públicos de conclusión de una investigación que incluyan la imposición de un derecho definitivo se haga constar "**toda la información pertinente** sobre las **cuestiones de hecho y de derecho y las razones** que hayan llevado a la imposición de medidas definitivas". En particular, el párrafo 2.2 del artículo 12, dispone que dicho aviso se debe hacer constar:

> "*(...) (iii) los márgenes de dumping establecidos y una explicación completa de las razones que justifican la metodología utilizada en la determinación y comparación del precio de exportación y el valor normal con arreglo al artículo 2 (…)*"
> (Sin cursivas ni subrayado en el original.)

El Brasil entiende que la razón por la cual la autoridad descartó el precio de exportación y el valor normal facilitados por los exportadores, así como el motivo por el cual no se calculó un margen de dumping individual para esos exportadores, se incluye en la **explicación completa** de las razones que justifican la metodología utilizada en la determinación del precio de exportación y el valor normal.

Reclamación 23

92. Sírvanse formular observaciones sobre el párrafo 210 de la Primera comunicación escrita de la Argentina.

Respuesta

La Argentina está de acuerdo en que la autoridad investigadora no realizó las reducciones correspondientes a los costos de flete exigidas en el valor normal de Sadia. Para justificar este error de la autoridad, la Argentina arguye que la autoridad no pudo haber efectuado el ajuste por no haber quedado debidamente documentado. La Argentina alega asimismo que en el anexo VIII de la respuesta al cuestionario de Sadia, el exportador presentó una estimación general en concepto de deducciones por costos de flete. Según la Argentina, la información utilizada para el cálculo del valor normal, fue la obtenida a partir del análisis de la totalidad de facturas aportadas por Sadia en base a la muestra realizada por la autoridad, y que dichas facturas no fueron acompañadas de ninguna aclaración respecto de los cargos por flete que correspondiera deducir.

Respecto de estas alegaciones, el Grupo Especial debería tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Es un hecho que Sadia presentó, en el anexo VIII de su respuesta al cuestionario de 20 de abril de 1999, los costos de flete en el mercado interno.[14] Si la Argentina considera que el ajuste en concepto de flete debería haberse efectuado, en el caso de haberse presentado la documentación justificante[15], ¿porqué la autoridad argentina no solicitó específicamente a Sadia que suministrase información adicional o suplementaria, aclaraciones o documentación justificante adicionales o suplementarias respecto de los costos del flete interno? El párrafo 1 del artículo 6 del Acuerdo exige que las autoridades den aviso de la información que las partes interesadas deben presentar. Del mismo modo, el párrafo 1 del Anexo II del Acuerdo **expresamente** dispone que "la autoridad investigadora deberá especificar en detalle la información requerida de cualquier parte directamente interesada". La autoridad argentina debería haber especificado que la documentación justificante de las deducciones correspondientes a costos de flete era el tipo de información que Sadia debía presentar. Al no haber indicado esto específicamente a Sadia, no había manera de que el exportador pudiese haber sabido que la información contenida en el anexo VIII no iba a ser utilizada.

El Brasil está convencido de que la Argentina tenía pleno conocimiento de la necesidad de efectuar los ajustes en concepto de flete en el valor normal de Sadia. En primer lugar, Sadia informó sobre los costos de flete en el mercado interno en el anexo VIII de su respuesta al cuestionario. En segundo lugar, la Prueba documental BRA-32 contiene una carta de JOX a la autoridad, donde se manifiesta que los precios citados en su publicación incluyen tributación, **fletes** y costos financieros. En tercer lugar, la Prueba documental ARG-LVI contiene una carta del abogado de Sadia y Avipal en la que se incluyen de manera errónea los costos de flete internos. Aunque la autoridad argentina tenía conocimiento de que el ajuste estaba justificado, aun así no solicitó a Sadia que facilitase dicha información.

Entendemos que si los costos de flete que Sadia facilitó no se consideraron fiables, la autoridad podía haber también utilizado una fuente de información secundaria para estimar dicha deducción, como hizo con el valor normal para compensar las supuestas diferencias de las características físicas entre los pollos vendidos a la Argentina y los vendidos en el Brasil.

Como observación final, es importante que el Grupo Especial tenga en cuenta que, aunque la autoridad sabía, y la Argentina lo admite, que el ajuste en concepto de flete tiene un "… claro e importante impacto en la comparabilidad de precios"[16], la Argentina aún considera que la autoridad investigadora habría actuado en forma inapropiada si hubiese efectuado ese descuento específico. En este punto, recordamos al Grupo Especial que el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo dispone que las autoridades tendrán debidamente en cuenta las diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios. Consideramos que el no haber efectuado los ajustes en concepto de flete en el valor normal de Sadia contraviene lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo.

Reclamación 24

93. Sírvanse formular observaciones sobre los párrafos 77 a 79 de la Segunda comunicación escrita de la Argentina.

[14] Segunda comunicación de la Argentina, párrafo 71.

[15] *Id.*

[16] Primera comunicación escrita de la República Argentina ("PCEA"), párrafo 211.

Respuesta

La Prueba documental BRA-32 contiene la carta de JOX dirigida a la autoridad investigadora, en la que se explica que los precios citados en su publicación, utilizados por la autoridad para establecer el valor normal de todos los exportadores, incluye el impuesto sobre el valor añadido (ICMS) del 12 por ciento; la contribución social sobre el ingreso (PIS/COFINS) del 2,65 por ciento; el costo financiero, según las condiciones de venta; la comisión de ventas, que oscila entre el 0,5 y el 1 por ciento del valor de la venta; y los costos de flete por la entrega, variables según la ubicación geográfica del vendedor y del comprador.

El párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo dispone que se realizará una comparación equitativa en el mismo nivel comercial, normalmente el nivel ex fábrica. Hemos demostrado que un precio ex fábrica es el precio sin inclusión de gastos, puesto que ello representa el precio en fábrica, al parecer, la Argentina no discute esto. En otras palabras, el comprador soporta todos los costos y riesgos inherentes en la retirada de las mercancías de las instalaciones del vendedor. También creemos que es razonable sostener que el precio de JOX no es un precio ex fábrica, habida cuenta de que incluye tributación, fletes y costo financiero.

Al parecer, la Argentina concuerda con el Brasil en que un precio f.o.b. incluye flete y seguros internos, manipuleo, carga y descarga y estiba.[17] Tampoco nos equivocamos al afirmar que un precio f.o.b. no incluye ni la tributación ni el costo financiero. Por lo tanto, no deben efectuarse ajustes en el precio f.o.b. de exportación respecto de la tributación y del costo financiero.

Nuestro argumento es que, habida cuenta de que el precio f.o.b. de exportación no incluye ni la tributación ni el costo financiero, la autoridad debería haber efectuado, como mínimo, un ajuste en el precio de JOX (valor normal), excluyendo la tributación y el costo financiero, al efectuar una comparación equitativa. Así, la autoridad obtendría aún un valor normal que no es ex fábrica porque aún incluiría los gastos en concepto de flete interno. Recordamos que el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo exige que la comparación se realice en el mismo nivel comercial, que normalmente es el nivel ex fábrica. Sin embargo, si no es posible realizar una comparación en un nivel ex fábrica, la comparación debe realizarse, de todas maneras, en el mismo nivel comercial. Las deducciones de la tributación y del costo financiero del precio de JOX habrían permitido realizar una comparación equitativa en el mismo nivel comercial, o al menos, en uno más similar.

El Grupo Especial debería observar que la autoridad investigadora, al calcular el valor normal correspondiente a los exportadores Sadia, Avipal, Nicolini y Seara, ajustó el valor normal de estos exportadores excluyendo el impuesto sobre el valor añadido (ICMS) del 12 por ciento y la contribución social sobre el ingreso (PIS/COFINS) del 2,65 por ciento.[18] En lo que respecta a Sadia y Avipal la autoridad investigadora también ajustó el valor normal excluyendo el costo financiero.[19] Las autoridades utilizaron este valor normal ajustado, sin tributación ni costo financiero, al realizar la comparación equitativa con el precio f.o.b. de exportación.[20] No vemos el motivo por qué la autoridad no podía haber realizado el mismo ajuste en el valor normal establecido para todos los demás exportadores. Este ajuste habría permitido realizar una comparación equitativa con los precios de exportación f.o.b.

[17] Segunda comunicación escrita de la Argentina, párrafo 77.

[18] Anexo de la Prueba documental BRA-15.

[19] *Id.*

[20] Páginas 63, 65, 67, 69, 102 y 103 de la Prueba documental BRA-15.

Reclamación 27

94. ¿Estima el Brasil que la autoridad investigadora habría infringido el párrafo 4.2 del artículo 2 si los exportadores hubieran acordado que la autoridad investigadora podía calcular el valor normal basándose en aquellas transacciones internas para las cuales se habían solicitado facturas?

Respuesta

El Brasil estima que la autoridad investigadora habría infringido el párrafo 4.2 del artículo 2 incluso aunque los exportadores hubiesen aceptado que la autoridad investigadora podía calcular el valor normal basándose en aquellas transacciones internas respecto de las cuales se habían solicitado facturas.

Recordamos al Grupo Especial que cuando se inició la investigación y la autoridad envió el cuestionario relativo al dumping a los exportadores Sadia, Avipal, Frangosul, Nicolini y Seara, la autoridad solicitó la información sobre el valor normal y el precio de exportación correspondientes a los años 1996, 1997, 1998 y a los meses de 1999 respecto de los que había datos disponibles.[21] Posteriormente, la autoridad investigadora solicitó la documentación justificante de todas las ventas efectuadas en el Brasil como también de aquéllas realizadas a la Argentina en ese mismo período.[22] Dado el enorme volumen de las ventas en el mercado interno, los exportadores se vieron forzados a enviar una carta a la autoridad, en la que explicaron que era imposible proporcionar una factura por cada venta efectuada en el mercado interno.[23] En esa carta, los exportadores recomendaron a la autoridad que verificase las transacciones *in loco* o que seleccionase una muestra de las transacciones para que se pudiese presentar la documentación justificante.[24]

La idea en que se basaba la sugerencia de los exportadores era ofrecer a la autoridad, mediante la muestra, la oportunidad de verificar la exactitud y veracidad del gran volumen de información sobre el valor normal que se suministró en la respuesta al cuestionario. El Grupo Especial no debe olvidar que los exportadores ya habían tenido que realizar el engorroso trabajo de recopilar y comunicar los datos relativos al valor normal y al precio de exportación correspondiente a varios años, que la autoridad no utilizó al formular la determinación definitiva. El Brasil entiende que el gran volumen de la información suministrada podría significar que, de hecho, no todos los datos sean analizados, pero ello no excluye la validez de todos los datos suministrados, especialmente si esos datos podrían ser verificados.

Además, entendemos que el establecimiento de un período de recopilación de datos relativos al dumping se encuentra intrínsecamente relacionado con el método utilizado para establecer el margen de dumping previsto en el párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo, que dispone que la existencia de márgenes de dumping "se establecerá normalmente sobre la base de una comparación entre un promedio ponderado del valor normal y un promedio ponderado de los precios de todas las transacciones de exportación comparables (…)". Normalmente, el promedio ponderado del valor normal se compara con el promedio ponderado del precio de exportación correspondiente a un producto comparable vendido durante el período de investigación. Es importante observar que el promedio ponderado de precios generalmente se calcula para todo el período de investigación. Esta

[21] Páginas 18, 22, 23, 26, 27 y 29 de la Prueba documental BRA-15.

[22] Páginas 18, 19, 22, 23, 27, 29 y 30 de la Prueba documental BRA-15.

[23] Prueba documental BRA-26, Prueba documental BRA-29 y Prueba documental BRA-31.

[24] *Id.*

comparación de precios de los productos vendidos durante un determinado período asegura un conocimiento más cabal de las pautas de precios en los mercados de exportación y los mercados internos. Entendemos que esta es una de las razones por las que el Comité de Prácticas Antidumping ha recomendado que el período de recopilación de datos relativos a las investigaciones antidumping sea normalmente de 12 meses, y en ningún caso de menos de 6 meses.[25] Un período limitado de recopilación de datos también significa un número limitado de transacciones a los efectos de la comparación y no puede remplazar a un análisis comparativo basado en todas las ventas efectuadas en la totalidad del período.

Del mismo modo, si una autoridad limita las transacciones que se utilizan en la comparación a las transacciones seleccionadas por la autoridad y respecto de las cuales se presentaron facturas, existe el riesgo de que los precios facilitados no reflejen las pautas de precios reales a lo largo de todo ese período.

Preguntas a ambas partes

Reclamación 21

95. ¿Qué son "hechos esenciales considerados que sirvan de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas" en el sentido del párrafo 9 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping? Concretamente, ¿abarcarían los "hechos esenciales" únicamente hechos o también argumentos que avalen una conclusión determinada?

Respuesta

El término "esencial" significa "absolutamente necesario, indispensable".[26] *"Fact"* ("hecho") es *"a thing that is known to have occurred, to exist, or to be true"*[27] (una cosa que se sabe que ha sucedido, que existe o que es verdad). Por lo tanto, los "hechos esenciales", en la acepción del párrafo 9 del artículo 6 del Acuerdo, son aseveraciones de algo que existe o que se ha hecho, que es indispensable que la autoridad considere a fin de formar la base para tomar la decisión de aplicar o no medidas definitivas. Los datos relativos a la determinación del valor normal y del precio de exportación, utilizados para calcular el margen de dumping, son hechos esenciales que es preciso tener en cuenta al formular la determinación definitiva.

Es importante observar que el término "hechos" aparece también en el párrafo 6 i) del artículo 17 del Acuerdo. De conformidad con el párrafo 6 i) del artículo 17, "al evaluar los **elementos de hecho** del asunto, determinará si las autoridades han establecido adecuadamente los **hechos** y si han realizado una evaluación imparcial y objetiva de ellos (…)". En el marco de dicho artículo, los "hechos" no son meramente los datos establecidos y evaluados por la autoridad sino también el razonamiento que respalda una conclusión determinada al establecer un hecho.

En consecuencia, entendemos que en el párrafo 9 del artículo 6 la expresión "hechos esenciales" abarca los datos recopilados y la justificación razonada de la conclusión a la cual llegó una autoridad al establecer los hechos. Dicha conclusión se relaciona con el establecimiento de los hechos por parte de la autoridad. Por ejemplo, no basta que una autoridad declare simplemente que ha

[25] Comité de prácticas antidumping - recomendación relativa a los períodos de recopilación de datos para las investigaciones antidumping, adoptada por el comité el 5 de mayo de 2000 - G/ADP/6 - 16 de mayo de 2000.

[26] *The Concise Oxford Dictionary*, novena edición, Oxford University Press, 1995, página 461.

[27] *The Concise Oxford Dictionary*, novena edición, Oxford University Press, 1995, página 482.

descartado el valor normal facilitado por un exportador determinado basándose en el párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo. La autoridad debe informar, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 8 del artículo 6, las razones por las que descartó una información determinada.

Esta es nuestra interpretación de la expresión "hechos esenciales" que figura en el párrafo 9 del artículo 6 del Acuerdo. Observamos que la primera frase del párrafo 9 del artículo 6 debería ser leída e interpretada conjuntamente con la segunda frase del párrafo 9 del artículo 6, es decir, que los "hechos esenciales" deberán facilitarse con tiempo suficiente para que las partes puedan **defender sus intereses**. En el sentido del párrafo 9 del artículo 6, la parte necesita conocer la justificación razonada de la conclusión a la que llegó una autoridad para poder esgrimir los argumentos y razones que sustenten su defensa. Si la expresión "hechos esenciales" se interpreta de otra manera, la segunda frase del párrafo 9 del artículo 6 carecerá de todo sentido.

96. En el párrafo 9.229 de su informe, el Grupo Especial que examinó el asunto *Guatemala - Cemento II* constató que:

> **"Una parte interesada no sabrá si un hecho particular es "importante" o no, a menos que la autoridad investigadora lo haya identificado expresamente como uno de los "hechos esenciales" que sirven de base para la decisión de la autoridad de imponer o no medidas definitivas."**
>
> **¿Estarían de acuerdo en la constatación anterior? Sírvanse explicarlo.**

Respuesta

El Brasil está de acuerdo con las constataciones del Grupo Especial en el asunto *Guatemala - Cemento II*, en el sentido de que una parte interesada no sabrá si un hecho particular es importante o no, a menos que la autoridad lo identifique expresamente como un "hecho esencial" que es preciso tener en cuenta para basar la decisión de la autoridad de imponer o no medidas definitivas. Destacamos que la obligación de la autoridad, de conformidad con el párrafo 9 del artículo 6, no es informar a todas las partes interesadas sobre cualquier "hecho", sino informar a las partes interesadas sobre los "hechos esenciales". En realidad, lo dispuesto en el párrafo 9 del artículo 6 es más específico aún. Las autoridades no deben informar tan sólo de los "hechos esenciales", sino de los "hechos esenciales" que servirán de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas.

Si una autoridad simplemente resume el gran volumen de información que se incorporó al expediente de la investigación sin indicar específicamente qué información es importante para servir de base para la decisión de la autoridad, ¿cómo puede saber un exportador qué "hechos esenciales" se utilizarán en la decisión de la autoridad de imponer o no medidas definitivas? Y, por tanto, ¿cómo puede defender un exportador sus intereses?

Por ejemplo, en el presente caso, Frangosul y Catarinense facilitaron información sobre el precio de exportación con la documentación justificante. Aunque la autoridad argentina así lo reconoció en el informe anterior a la finalización de la etapa probatoria de la investigación antidumping[28], la autoridad descartó esa información sobre el precio de exportación en la determinación definitiva. En el informe de divulgación anterior a la determinación definitiva, la autoridad no indicó ni expresó el motivo por el cual esa información sería descartada. Los exportadores no tenían motivos para sospechar que esa información no sería tenida en cuenta por la autoridad, y por tanto, no pudieron defender sus intereses.

[28] Páginas 29 y 38 de la Prueba documental BRA-28.

En ese sentido, estimamos útil citar también otro pasaje de las constataciones formuladas por el Grupo Especial en el informe sobre el asunto *Guatemala - Cemento II*:

> *"(...) Sin embargo, el problema que se planteará a una parte interesada que tenga acceso al expediente es que no sabrá si determinadas informaciones incluidas en el expediente han servido de base para la formulación de la determinación definitiva por la autoridad investigadora. Una de las finalidades del párrafo 9 del artículo 6 es resolver este problema a las partes interesadas. Esto ha sido reconocido por Guatemala, que ha afirmado que "el objeto y fin del párrafo 9 del artículo 6 es permitir que los exportadores tengan una oportunidad equitativa de formular observaciones sobre las cuestiones importantes de una investigación una vez que el expediente esté cerrado y no se puedan incluir en él nuevos hechos". Una parte interesada no sabrá si un hecho particular es "importante" o no, a menos que la autoridad investigadora lo haya identificado expresamente como uno de los "hechos esenciales" que sirven de base para la decisión de la autoridad de imponer o no medidas definitivas.*[29] (Sin cursivas ni subrayado en el original.)

El fin del párrafo 9 del artículo 6 es exactamente ese, permitir que las partes interesadas tengan la oportunidad de esgrimir sus argumentos y formular observaciones sobre las cuestiones importantes de una investigación después de que la etapa probatoria haya finalizado pero con anterioridad a la formulación de la determinación definitiva.

Reclamación 22

97. ¿Qué entienden las partes por las palabras "que corresponda a cada exportador o productor interesado del producto sujeto a investigación de que se tenga conocimiento" que figuran en la primera oración del párrafo 10 del artículo 6? A juicio de las partes, ¿exigiría la parte citada de la primera oración del párrafo 10 del artículo 6 el cálculo de un margen de dumping individual para cada exportador de que tenga conocimiento la autoridad investigadora? ¿Sucedería lo mismo cuando un exportador conocido no facilita la información pertinente solicitada por la autoridad investigadora? Sírvanse explicarlo.

Respuesta

La primera oración del párrafo 10 del artículo 6 del Acuerdo dispone que las autoridades determinarán el margen de dumping individual que corresponda a cada exportador o productor interesado del producto sujeto a investigación de que se tenga conocimiento. Por lo tanto, si la autoridad tiene conocimiento de un exportador, dicha autoridad debe, y el párrafo 10 del artículo 6 establece expresamente esto como regla, calcular un margen de dumping individual para ese exportador.

Si el exportador conocido facilita la información pertinente necesaria para calcular el margen de dumping individual, es indudable que la autoridad debe efectuar dicho cálculo. Eso fue lo que ocurrió en el caso de Frangosul y de Catarinense. Si el exportador conocido no facilita la información pertinente necesaria para calcular el valor normal y el precio de exportación, pero la autoridad tiene acceso a la información individual correspondiente a ese exportador, la autoridad investigadora debe de todos modos calcular el margen de dumping individual.

Es importante observar la diferencia existente entre aplicar los hechos de los que se tenga conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo, a un exportador específico y no calcular el margen de dumping individual de ese exportador. En los casos

[29] *Guatemala - Cemento II*, párrafo 8.229.

en que la autoridad cuenta con la información pertinente sobre el valor normal y el precio de exportación y la autoridad está facultada para recurrir a los hechos de los que tenga conocimiento, los hechos disponibles que se apliquen a un exportador específico quizá no sean los mismos que los hechos de los que tenga conocimiento aplicables a otro exportador. En consecuencia, el cálculo de los márgenes de dumping individuales para esos dos exportadores no será el mismo.

Por ejemplo, en la determinación definitiva la autoridad argentina descartó el precio de exportación facilitado por los exportadores Sadia, Avipal, Nicolini y Seara y aplicó el promedio ponderado del precio de exportación correspondiente a esos exportadores, facilitado por el organismo argentino *Ganadería.*[30] Sin embargo, respecto de Frangosul y Catarinense, la autoridad también descartó el precio de exportación facilitado por estos exportadores pero no utilizó el promedio ponderado del precio de exportación suministrado por *Ganadería*.[31] Como la autoridad no calculó un margen de dumping individual para Frangosul y Catarinense, la autoridad utilizó como precio de exportación correspondiente a estos dos exportadores el promedio ponderado del precio f.o.b. de exportación de 0,95992 dólares EE.UU. que tomó en cuenta el promedio ponderado del precio de exportación de todos los demás exportadores con escasa o ninguna participación en la investigación.[32] Este precio de exportación de 0,95992 dólares EE.UU. era inferior al promedio ponderado del precio de exportación individual suministrado por *Ganadería* respecto de Frangosul (1,0407 dólares EE.UU.) y respecto de Catarinense (1,0048 dólares EE.UU.).[33] Si la autoridad hubiese utilizado este promedio ponderado del precio de exportación individual para todos los demás exportadores, no habría habido un margen de dumping para Frangosul y Catarinense del 3,35 por ciento.

Sin embargo señalamos que, en este caso específico, Frangosul y Catarinense **sí** facilitaron la información solicitada sobre el precio de exportación con la documentación justificante, y la autoridad debería haber utilizado esa información para calcular el margen de dumping individual de esos dos exportadores.

Por lo tanto, en el presente caso la autoridad no solo descartó erróneamente la información facilitada por Frangosul y Catarinense durante la investigación y, por lo tanto, cometió un error al no calcular el margen de dumping individual, sino que la autoridad también tuvo acceso al promedio ponderado individual del precio de exportación correspondiente a esos dos exportadores suministrado por *Ganadería*, pero decidió aplicar el promedio ponderado del precio f.o.b. de exportación de todos los demás exportadores. En consecuencia, la autoridad aplicó erróneamente a Frangosul y Catarinense el margen de dumping correspondiente a todos los demás exportadores.

98. A juicio de las partes, ¿serían aplicables a los hechos de esta diferencia las constataciones que figuran en los párrafos 6.86 a 6.101 (ambos incluidos) del informe del Grupo Especial encargado del asunto *Argentina - Baldosas de cerámica*? Concretamente, ¿tendría pertinencia para la presente diferencia la siguiente constatación del Grupo Especial: "La base de la determinación del valor normal no guarda relación con la capacidad para calcular un margen de dumping individual correspondiente al productor cuyo valor normal esté en tela de juicio."? ¿La falta de información sobre el valor normal, el precio de exportación o el costo de producción permitiría automáticamente no calcular un margen de dumping individual de conformidad con el párrafo 10 del artículo 6? Sírvanse explicarlo, identificando y presentando apoyo fáctico pertinente al Grupo Especial.

---

[30] Páginas 76 y 77 de la Prueba documental BRA-15.

[31] *Id.*

[32] Página 103 y última página de la Prueba documental BRA-15.

[33] Páginas 76 y 77 de la Prueba documental BRA-15.

Respuesta

Aunque los hechos del asunto *Argentina - Baldosas de cerámica* son algo diferentes, el razonamiento del Grupo Especial en lo que respecta a la interpretación del párrafo 10 del artículo 6 sigue siendo válido.

En primer lugar, estamos de acuerdo con la opinión del Grupo Especial en el asunto *Argentina - Baldosas de cerámica* en el sentido de que el párrafo 10 del artículo 6 dispone que ha de determinarse un margen de dumping individual para cada exportador con respecto al producto sujeto a investigación. En la parte pertinente de dicho informe se expresa lo siguiente:

> *"La segunda frase del párrafo 10 del artículo 6, aunque autoriza a la autoridad investigadora a limitar su examen a ciertos exportadores o productores, no permite apartarse de la norma general de que hay que determinar márgenes individuales para los exportadores o productores que sean objeto de examen. Por el contrario, el párrafo 4 del artículo 9 dispone que, cuando las autoridades limiten su examen de conformidad con el párrafo 10 del artículo 6, los derechos antidumping que se apliquen a los exportadores o productores no abarcados por el examen no serán superiores a un nivel determinado sobre la base de los resultados del examen de los exportadores o productores abarcados por el examen. El hecho de que en el párrafo 4 del artículo 9 no se establezca ningún método para determinar el nivel de los derechos aplicables a los exportadores o productores abarcados por el examen confirma, a nuestro juicio, que la norma general que exige que se determinen márgenes individuales continúa siendo aplicable a esos exportadores o productores. También confirma esto el párrafo 10.2 del artículo 6, que dispone que, en general, hay que calcular un margen de dumping individual incluso con respecto a los productores o exportadores no incluidos inicialmente en la muestra, si presentan la información necesaria y si tal cálculo no es excesivamente gravoso. Si incluso los productores no incluidos en la muestra original tienen derecho a que se calcule para ellos un margen individual, evidentemente los productores incluidos en la muestra original tienen también ese derecho. De hecho, las partes parecen estar de acuerdo en que el párrafo 10 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping exige que, por regla general, se determine un margen de dumping individual para cada exportador con respecto al producto sujeto a investigación."*[34] (Sin cursivas ni subrayado en el original.)

Señalamos que en el presente caso la autoridad no limitó su examen de acuerdo con lo dispuesto en la segunda frase del párrafo 10 del artículo 6 del Acuerdo; por lo tanto, la autoridad debió determinar un margen de dumping individual para cada exportador o productor interesado de que se tuviera conocimiento.

En segundo lugar, hemos afirmado en la respuesta a la pregunta 90 *supra*, que Frangosul y Catarinense **sí** facilitaron la información solicitada sobre el valor normal y el precio de exportación durante la investigación. Concretamente, estos dos exportadores también facilitaron la documentación justificante con la información sobre el precio de exportación. El Brasil no alcanza a comprender la razón por la que la autoridad argentina no utilizó esa información para calcular el margen individual de dumping correspondiente a Frangosul y Catarinense.

---

[34] *Argentina - medidas antidumping definitivas aplicadas a las importaciones de baldosas de cerámica para el suelo procedentes de Italia*, 28 de septiembre de 2001, (WT/DS189/R), párrafo 6.90 (adoptado el 5 de noviembre de 2001) ("*Argentina - Baldosas de cerámica*").

En tercer lugar, estamos de acuerdo con la constatación del Grupo Especial en el asunto *Argentina - Baldosas de cerámica*, que expresó que *"(...) [l]a base de la determinación del valor normal no guarda relación con la capacidad para calcular un margen de dumping individual correspondiente al productor cuyo valor normal esté en tela de juicio*".[35] Hemos expresado en la respuesta a la pregunta 97 *supra*, que existe una diferencia entre la aplicación de los hechos de los que se tenga conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo, a fin de establecer el valor normal y el precio de exportación correspondiente a un exportador específico y el hecho de no calcular el margen de dumping individual para ese exportador. Al establecer el valor normal o el precio de exportación, la autoridad tiene el derecho de recurrir a los hechos de los que tenga conocimiento en circunstancias específicas. Sin embargo, ello no significa que la autoridad no deba calcular un margen de dumping individual.

Por ejemplo, los hechos de los que tenga conocimiento utilizados por una autoridad para determinar el valor normal de un exportador pueden variar respecto de los hechos de los que tenga conocimiento utilizados por la autoridad para determinar el valor normal de otro exportador. Otro ejemplo de ello sucede cuando una autoridad utiliza los hechos de los que tiene conocimiento para determinar el valor normal de un exportador pero utiliza el precio de exportación facilitado por el exportador, mientras que para otro exportador la autoridad utiliza los hechos de los que tiene conocimiento para determinar el precio de exportación y utiliza el valor normal facilitado por el exportador. En tales situaciones, la autoridad calculará de todos modos un margen de dumping individual para cada exportador o productor interesado de que tenga conocimiento con respecto al producto sujeto a investigación.

Por lo tanto, no estamos de acuerdo con la afirmación de que la falta de información sobre el valor normal, el precio de exportación o el costo de producción permite **automáticamente** no calcular un margen de dumping individual. Si esto se aceptase, se estaría violando lo dispuesto en la primera frase del párrafo 10 del artículo 6 del Acuerdo.

[35] *Argentina - Baldosas de cerámica*, párrafo 6.96.

ANEXO A-7

OBSERVACIONES DEL BRASIL SOBRE LAS RESPUESTAS
DE LA ARGENTINA A LAS PREGUNTAS DEL
GRUPO ESPECIAL - SEGUNDA REUNIÓN

(28 de noviembre de 2002)

Preguntas a la Argentina

Cuestiones preliminares

66. En cuanto al párrafo 13 de la Segunda comunicación de la Argentina, ¿cuál fue la "afirmación de hecho" (punto I) supuestamente formulada por el Brasil? Sírvanse explicar cómo se basó de buena fe la Argentina en esa supuesta afirmación (punto III).

Respuesta de la Argentina

En primer lugar, la República Argentina entiende que la conducta del Brasil de presentaciones sucesivas activando procedimientos de solución de controversias en ámbitos distintos, primero en ámbito MERCOSUR y en segundo término, en la OMC y aún más tomando en consideración los precedentes señalados en la Primera comunicación escrita de Argentina[1], es decir el recurso a la solución de controversias previsto en el Protocolo de Brasilia para resolver los conflictos surgidos con otros Estados partes del MERCOSUR, y el acatamiento del contenido y alcance de los laudos arbitrales en todas las disputas, la Argentina considera que están presentes en esta presentación del Brasil los argumentos de hecho y que los mismos reúnen los requisitos de ser claros, no ambiguos, voluntarios, incondicionales y autorizados, elementos esenciales del *estoppel* en los términos de la definición indicada en el párrafo 13 de la Réplica de Argentina.

En el párrafo 20 de su Réplica[2], la República Argentina puntualiza los elementos que en la actual presentación planteada por el Brasil en ámbito OMC se encuentran presentes. Entre los mismos cabe mencionar el punto III, *in fine*, de dicho párrafo en el cual se expresa "En consecuencia la conducta anterior del Brasil en materia de aceptación de laudos, confirmada mediante la firma del Protocolo de Olivos, tornan inoponible a la Argentina el reclamo que el Brasil pretende ahora articular en base al ESD".

Aún más, las conductas del Brasil de firmar el Protocolo de Olivos en fecha 18 de febrero de 2002 -en el cual el Brasil acepta expresamente la cláusula de opción de foro-, y siete días después, es decir el 25 de febrero de 2002, solicitar el establecimiento del Grupo Especial en la actual controversia, evidencia, a juicio de la Argentina que existe una contradicción en la conducta del Brasil en la cual la Argentina depositó una legítima confianza en tanto que ambos son Estados parte del MERCOSUR y de hecho ahora sufre las consecuencias negativas del cambio de posición por parte del Brasil.[3] Este hecho ha sido señalado también en las presentaciones de las CE[4] y Paraguay[5] en calidad de terceras partes.

---

[1] Primera comunicación escrita de la República Argentina, 29 de agosto de 2002, párrafos 18-22 y notas a pie correspondientes.

[2] Réplica de la Republica Argentina, 17 de octubre de 2002, párrafo 20.

[3] De hecho, la República Argentina ya ha aprobado el Protocolo de Olivos. El 9 de octubre de 2002 el Honorable Congreso Nacional aprobó el Protocolo de Olivos por Ley 25.663, que ha sido promulgada por el

Observaciones del Brasil

El Brasil entiende que la expresión "afirmación de hecho" significa "*the act or an instance of stating or being stated; expression in words*" (el acto o la situación de declarar o de ser declarado; expresión verbal)[6] de "a *thing that is known to have occurred, to exist, or to be true*" (algo que se sabe que ha ocurrido, existe o es verdad).[7] Teniendo en cuenta este significado, el Brasil reitera que nunca ha declarado que renunciaría a su derecho a plantear una diferencia, basada en reclamaciones diferentes, ante la OMC por el hecho de que una diferencia similar se hubiese planteado ante el Tribunal del MERCOSUR.

Recordamos que el Protocolo de Olivos sobre la Solución de Controversias, del MERCOSUR, no puede invocarse en el caso presente como consentimiento implícito o expreso del Brasil de abstenerse de plantear este caso ante el sistema de solución de diferencias de la OMC. En primer lugar, observamos que el objeto planteado ante el Tribunal del MERCOSUR era diferente del objeto planteado ante este Grupo Especial. En segundo lugar, el Protocolo de Olivos aún no ha entrado en vigor, e incluso si lo hubiese hecho, y si el objeto de la diferencia fuese el mismo, el Protocolo de Olivos establece que "las controversias en trámite, iniciadas de acuerdo con el régimen del Protocolo de Brasilia, se regirán exclusivamente por el mismo hasta su total conclusión".[8] El Protocolo estipula asimismo que "mientras las controversias iniciadas bajo el régimen del Protocolo de Brasilia no se concluyan totalmente y hasta tanto se concreten los procedimientos previstos en el artículo 49, continuará aplicándose, en lo que corresponda, el Protocolo de Brasilia".[9] Sobre la base de estas disposiciones, es correcto afirmar que el Protocolo de Olivos no se aplica a las diferencias que ya han concluido bajo el régimen del Protocolo de Brasilia. En tercer lugar, lo que la Argentina plantea ante este Grupo Especial es una situación en la que los Miembros del MERCOSUR pueden tener opiniones discrepantes sobre cuáles son sus derechos y obligaciones en el marco jurídico del MERCOSUR. Recordamos al Grupo Especial que el artículo 1 del ESD limita la jurisdicción de este Grupo Especial a las diferencias planteadas de conformidad con los "acuerdos abarcados", el "Acuerdo sobre la OMC" y el ESD, tomados aisladamente o en combinación con cualquiera otro. Las disposiciones del Protocolo de Brasilia y del Protocolo de Olivos no figuran en el artículo 1 del ESD. Por consiguiente, las normas y procedimientos del ESD no se aplican a las consultas ni a la solución de diferencias relativas a los derechos y obligaciones de los Miembros del MERCOSUR en el marco jurídico de éste.

67. En el párrafo 13 de su Segunda comunicación la Argentina afirma que el principio de *estoppel* es un principio general del derecho internacional. ¿Es el principio de *estoppel* una "norma[s] usual[es] de interpretación del derecho internacional público" en el sentido del párrafo 2 del artículo 3 del ESD? Sírvanse explicarlo. ¿Un principio general del derecho

---

Poder Ejecutivo mediante el Decreto 2091/02 del 18/10/2002 y publicados en el Boletín Oficial de la República Argentina Nº 30008, el 21/10/2002.

[4] Comunicación de tercera parte presentada por las Comunidades Europeas, 9 de septiembre de 2002, párrafo 17 y nota a pie número 17.

[5] Comunicación de tercera parte presentada por el Paraguay, 9 de septiembre de 2002, párrafo 8.

[6] *The Concise Oxford Dictionary*, novena edición, Oxford University Press, 1995, página 1361.

[7] *The Concise Oxford Dictionary*, novena edición, Oxford University Press, 1995, página 482.

[8] Artículo 50 del Protocolo de Olivos.

[9] Párrafo 2 del artículo 55 del Protocolo de Olivos.

internacional es lo mismo que una norma de interpretación del derecho internacional? Sírvanse explicarlo.

Respuesta de la Argentina

Las normas de interpretación de derecho internacional público a las cuales hace referencia el artículo 3.2 del ESD remiten al artículo 31 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.

En el artículo 31 de la Convención de Viena aparecen enunciadas las reglas que deben seguirse para la interpretación. Ahora bien, las reglas de interpretación se aplican a la solución de conflictos teniendo en todos los casos a la vista por el órgano juzgador las fuentes de derecho.

Las fuentes a las cuales puede recurrirse para la interpretación están enunciadas en el artículo 38 del estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Allí están enunciados con carácter de fuente principal los tratados, la costumbre internacional y los principios generales de derecho internacional.

Por lo tanto la República Argentina entiende que el principio del *estoppel* en cuanto principio general de derecho internacional constituye una fuente a la cual es legítimo recurrir por parte de todo tribunal internacional llamado a dirimir una controversia.

En la actual controversia, es en este sentido que la Argentina entiende que la argumentación del principio del *estoppel* debería ser tenido en cuenta por el Grupo Especial al desarrollar sus funciones conforme el ESD. Esto es de conformidad con la obligación del artículo 3.2 del Entendimiento, en el sentido de aclarar las obligaciones de los acuerdos de conformidad con las normas usuales de interpretación del Derecho Internacional Público.

Adicionalmente, la República Argentina reitera lo señalado en su Segunda comunicación escrita[10] en el sentido de que, con anterioridad, otros Grupos Especiales han examinado el principio del *estoppel* en las controversias: "*Comunidades Europeas - Amianto*" [11] y "*Guatemala - Cemento*".[12]

Observaciones del Brasil

No hay observaciones.

Reclamación 1

68. En respuesta a la pregunta 6, la Argentina se remite a la publicación *Aves & Ovos*. En caso de que el solicitante presentara más extractos de esa publicación de los que figuran en la Prueba documental BRA-1, sírvanse facilitar una copia de esos extractos adicionales. Sírvanse explicar con exactitud de qué manera la información procedente de la publicación *Aves & Ovos* como la presentó el solicitante, justificaba la necesidad de un ajuste del 9,09 por ciento al valor normal. Además, ¿en qué se basó la autoridad investigadora para asignar el mismo valor a la cabeza y las patas que a las demás partes del pollo?

[10] Segunda comunicación escrita de la República Argentina, 17 de octubre de 2002, párrafos 17, 18 y 19.

[11] WT/DS135/R, "*Comunidades Europeas - Medidas que afectan al amianto y a los productos que contienen amianto*", informe adoptado el 5 de abril de 2001, párrafo 8.60

[12] WT/DS156/R, "*Guatemala - Medida antidumping definitiva aplicada al cemento Portland gris procedente de México*", informe adoptado el 17 de noviembre de 2000, párrafo 8.23.

Respuesta de la Argentina

Se destaca que la publicación de la revista Aves & Ovos no suministra información referida al ajuste del 9,09 por ciento realizado. La mención de la publicación Aves & Ovos en la respuesta 6 de la República Argentina formulada por el Grupo Especial con posterioridad a la primera audiencia, se corresponde con la enumeración de la prueba acompañada por la peticionante en su solicitud. Con relación a la pregunta relativa a las bases sobre las cuales la Autoridad investigadora asignó el mismo valor a cabeza y patas respecto de otras partes, es necesario aclarar una vez más que no se consideró que las cabezas y las patas tuvieran el mismo valor que el resto de las partes del animal a los efectos de evaluar el ajuste. Muy por el contrario, el ajuste del 9,09 por ciento surgió de una evaluación del recupero específico de cabezas y patas.

Observaciones del Brasil

Señalamos que la Argentina confirma que la autoridad investigadora **no** consideró si el valor de la cabeza y las patas era el mismo que el de otras partes de los pollos a los efectos de evaluar los ajustes necesarios. Sobre la base de la Prueba documental BRA-1[13], el Grupo Especial puede verificar que esas supuestas diferencias afectaban a la comparabilidad de los precios, que la tasa de rendimiento propuesta por el solicitante era adecuada y que, por lo tanto, el método de ajuste presentado se justificaba.

Reclamación 2

69. En cuanto a la respuesta de la Argentina a la pregunta 12, el Grupo Especial observa que el extracto del documento de JOX citado por la Argentina se incluye bajo el encabezamiento "Frango Vivo". ¿Existe una declaración similar para el pollo eviscerado? ¿Qué quiere decir la frase "lo que viene manteniendo el precio en terreno muy firme"?

Respuesta de la Argentina

No, la publicación de JOX indica específicamente referencias al pollo vivo. No obstante ello, la mención a lo expresado respecto a que "la producción del mercado paralelo del interior de San Pablo es nítidamente menor, lo que viene manteniendo el precio en terreno muy firme", se relaciona con el hecho de que el pollo vivo constituye el insumo fundamental y principal del producto objeto de investigación. Por lo tanto, es válida en esta etapa previa a la apertura de investigación, el considerar que si el precio del insumo se mantiene sin alteraciones significativas se deduce que el precio del producto final -objeto de la investigación- no variaría sustancialmente.

En ese sentido, la expresión "lo que viene manteniendo el precio en terreno muy firme", significa que el precio permanecería, sin alteraciones significativas constituyendo por lo tanto un elemento adecuado en esta etapa previa a la investigación.

Observaciones del Brasil

La Argentina confirma que la cita del documento de JOX se refiere a los pollos **vivos** y que no existe una afirmación similar en la publicación de JOX respecto de los pollos **eviscerados**.[14]

[13] Respuesta de la Argentina a las preguntas del Grupo Especial en la segunda reunión sustantiva, pregunta 68.

[14] *Idem*, pregunta 69.

No estamos de acuerdo con la Argentina en que la referencia de la publicación de JOX a los pollos **vivos** sea suficiente para determinar la tendencia de los precios del valor normal de los pollos **eviscerados** (que es un producto diferente), porque los pollos **vivos** constituyen la materia prima del producto objeto de la investigación.[15] El Grupo Especial debería observar que el extracto de la publicación de JOX que figura bajo el encabezamiento "Frango Vivo" (pollo **vivo**) sigue los cambios diarios del mercado y no es posible utilizarlos para indicar las tendencias de los precios durante un período más prolongado. Además, el Grupo Especial debería tener en cuenta que en la publicación de JOX hay otro epígrafe titulado "Frango Abatido" (pollo faenado). Bajo este encabezamiento se indica que, "el volumen de las ventas de pollos faenados y cortes de pollos no ha registrado ninguna recuperación al final de la semana. Las empresas de almacenamiento refrigerado (congeladores) siguen tratando de obtener precios más altos, sin éxito, dado el actual exceso de oferta. Aunque falta poco para el comienzo del mes, será difícil superar los ajustes mientras la oferta siga siendo insuficiente.[16] Aunque el "Frango Abatido" (pollo faenado) es también un producto obtenido a partir del pollo **vivo**, la cita de la publicación de JOX relativa a los pollos faenados indica la imposibilidad de incrementar los precios debido al exceso del volumen de los pollos ofrecidos en el mercado brasileño.

Es también interesante observar que la Argentina estima válido, al comienzo de la etapa de investigación, que la autoridad considere como prueba suficiente para determinar el valor normal el precio de los pollos en un único día de 1997, mientras que el precio de exportación se determinó sobre la base de un período de seis meses. Hemos demostrado que el informe de JOX utilizado para determinar el valor normal es una publicación diaria, que estaba razonablemente al alcance del solicitante. En consecuencia, éste pudo y debió haber presentado los precios de la publicación de JOX correspondientes a un período de no menos de seis meses en 1997, pero prefirió no hacerlo.

Reclamación 3

70. ¿Cuándo recibió el Secretario el Acta Nº 405 de la CNCE (de fecha 7 de enero de 1998)? ¿Cuándo recibió el Secretario el informe del APCDS (también de fecha 7 de enero de 1998)?

Respuesta de la Argentina

El Señor Secretario de Industria, Comercio y Minería recibió el Acta Nº 405 el día 9 de enero de 1998, recibiendo el Informe de dumping de la DCD el día 27 de enero de 1998.

Observaciones del Brasil

No hay observaciones.

71. Con respecto a la primera oración del tercer párrafo de la respuesta de la Argentina a la pregunta 16, ¿qué significa la frase "de los requisitos de la solicitud con fecha 17 de febrero de 1998"? ¿Cuáles son exactamente los "requisitos de la solicitud"?

Respuesta de la Argentina

Los requisitos de la solicitud son los contenidos en el formulario 349 presentado en el anexo ARG-XXXIX. El sentido de la frase señalada es que, con fecha 17 de febrero de 1998, los peticionantes, presentaron información actualizada sobre la base de lo requerido en el formulario 349

[15] *Idem.*

[16] Prueba documental BRA-1.

citado. Esta información, en base a un dictamen legal del Area pertinente del Ministerio, y conforme la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 19549, fue girada a la CNCE con la indicación de ser analizada. El análisis de la misma determinó la emisión por parte de la CNCE del Acta 464 y del Informe Técnico respectivo.

Observaciones del Brasil

No hay observaciones.

Reclamación 10

72. ¿Cómo y cuándo obtuvo la autoridad investigadora las direcciones de los exportadores brasileños con los que se estableció contacto en febrero de 1999? Si dichas direcciones se obtuvieron de un documento que conste en el expediente de la investigación, sírvanse facilitar una copia de ese documento.

Respuesta de la Argentina

La dirección de los productores-exportadores notificados en febrero de 1999, fue provista telefónicamente a través de importadores interesados en la investigación, que habiendo tomado conocimiento del inicio de investigación por el Boletín Oficial, tomaron contacto con la autoridad investigadora y proveyeron dichas direcciones.

Observaciones del Brasil

Según la Argentina, la autoridad investigadora obtuvo las direcciones de los exportadores brasileños, con los que entró en contacto en febrero de 1999, a través de importadores interesados en la investigación.[17] Después de que la iniciación de la investigación se publicó, estos exportadores se pusieron en contacto con la autoridad investigadora y facilitaron dicha información.[18]

El Brasil recuerda que la autoridad investigadora conocía, antes de la iniciación, la existencia y el interés de al menos cinco de los siete exportadores brasileños que no fueron notificados de la investigación hasta el 15 de septiembre de 1999.[19] Si la autoridad investigadora conocía la existencia de esos exportadores antes de la iniciación de la investigación pero no disponía de los datos para establecer contactos con ellos, ¿por qué no solicitó la autoridad a los importadores interesados, en febrero de 1999, las direcciones de esos exportadores brasileños? En particular, si la autoridad investigadora sólo pudo establecer contacto con los siete exportadores brasileños después de que el importador Interamericana Comercial ("Interamericana") facilitara sus direcciones[20], ¿por qué no solicitó al importador Interamericana, en febrero de 1999, las direcciones de esos siete exportadores? Del mismo modo, la autoridad podría también haber solicitado al Gobierno brasileño que le facilitara la información de contacto de los exportadores **concretos** identificados en el informe relativo a la viabilidad de la investigación.

[17] Respuesta de la Argentina a las preguntas del Grupo Especial en la segunda reunión sustantiva, pregunta 72.

[18] *Idem.*

[19] Páginas 4 y 5 de la Prueba documental BRA-2.

[20] Respuesta de la Argentina a las preguntas del Grupo Especial en la primera reunión sustantiva, preguntas 26 y 28.

También con respecto a la respuesta de la Argentina, el Brasil se pregunta si es un procedimiento normal que una autoridad argentina espere a que los importadores se pongan en contacto con ella y le faciliten las direcciones de los exportadores a fin de que la autoridad pueda entonces cursar la notificación a los exportadores interesados conocidos por los importadores. Si ese es el procedimiento normal, ¿qué sucede cuando los importadores interesados no se ponen en contacto con la autoridad y facilitan las direcciones de los exportadores conocidos? En tales casos, ¿significa ello que los exportadores interesados conocidos por las autoridades no reciben la notificación?

73 Sírvanse formular observaciones sobre el párrafo 36 de la segunda declaración oral del Brasil.

Respuesta de la Argentina

En relación con el párrafo 36 del Brasil se remite a lo ya manifestado por la Argentina respecto del artículo 6.1.1 en el sentido que se ha dado amplia oportunidad de participación de las partes interesadas en la investigación, atendiendo los pedidos de prórroga presentados.

Observaciones del Brasil

No hay observaciones.

Reclamación 11

74. En relación con la respuesta de la Argentina a la pregunta 29, ¿se envió toda la información incluida en la solicitud a la DCD y a la CNCE, o recibieron sólo aquellas partes de la solicitud que tratan del dumping y el daño respectivamente?

Respuesta de la Argentina

Ambos organismos recibieron la misma solicitud, con la misma información. La solicitante, al presentar una petición de inicio de investigación, debía completar el formulario aprobado por la Resolución de la Ex Secretaría de Industria y Comercio Nº 349 del 12 de noviembre de 1991, ante la Ex - Subsecretaría de Comercio Exterior (ex SSCE). En concordancia con lo dispuesto por los artículos 36 a 40 del Decreto Nº 2121/94, la solicitud se presentaba ante la ex SSCE, la cual remitía una copia completa de la misma a la CNCE a efectos que este último organismo determinase la existencia de daño.

En este sentido, la CNCE recibió, con fecha 9 de septiembre de 1997 copia de la solicitud de inicio de la investigación presentada por CEPA ante la SSCE el día 2 de septiembre de 1997. Ambas presentaciones son idénticas y la obrante ante la CNCE se encuentra en el Cuerpo I del expediente CNCE Nº 43/1997 (fs. 2 a 284). En consecuencia, ambos organismos contaron con la solicitud de aplicación de medidas presentada por CEPA en forma completa.

Observaciones del Brasil

No hay observaciones.

Reclamación 15

75. En cuanto a la segunda oración de la respuesta de la Argentina a la pregunta 39, ¿cuál es exactamente el "procedimiento" (para la documentación justificante) seguido por la autoridad investigadora? ¿Cómo podía saber una parte interesada qué información justificante tenía que aportar? ¿Dónde se ha especificado exactamente el "procedimiento"? ¿Dónde se

establece exactamente la petición de información justificante? Sírvanse facilitar copias de las fuentes pertinentes.

Respuesta de la Argentina

Respecto del procedimiento seguido por la Autoridad de Aplicación para conseguir información respaldatoria se señala que con el cuestionario se encuentra adjunto un instructivo en el cual se explica cómo debe completarse el cuestionario y qué información debe ser acompañada de documentación respaldatoria. Simultáneamente se indica que en caso de no ser posible acompañar la documentación repaldatoria, se deberá indicar la fuente de donde la obtuvo. Cuando se habla de documentación respaldatoria la Autoridad pretende que se respalde los dichos o argumentaciones de las partes interesadas. A modo de ejemplo, si pretende que la Autoridad de Aplicación efectúe un ajuste en concepto de flete sería deseable que la parte interesada adjuntara el contrato con la empresa de transporte o cualquier otra documentación que obre en poder de la empresa donde conste el valor o porcentaje de flete que debe descontarse.

El mencionado instructivo se encuentra en la primera parte del cuestionario a ser completado por el exportador.

Se acompaña como anexo ARG-LXIII, Cuestionario del exportador en blanco.

Observaciones del Brasil

El párrafo 1 del artículo 6 y el párrafo 1 del Anexo II del Acuerdo prescriben que las autoridades deben dar aviso e indicar detalladamente la información que exijan de las partes interesadas. Observamos que el cuestionario relativo al dumping no exigía concretamente que los importadores presentaran la documentación justificante relativa a la descripción del producto. El Grupo Especial debería examinar las páginas 19 y 21 de la Prueba documental BRA-22, en las que figuran las instrucciones para completar el cuestionario dirigido a los productores/exportadores.[21] De estas instrucciones generales se desprende que no había información suficiente sobre la documentación justificante que se solicitaba específicamente a los exportadores. Además, el hecho de que la autoridad nunca solicitara aclaraciones ni documentación justificante de la información comunicada por los exportadores indicaba que la información presentada sería aceptada. En ese sentido, la autoridad nunca informó a los exportadores que la información relativa a la descripción del producto que habían presentado era insuficiente o inaceptable. Al obrar de este modo, la autoridad actuó de forma incompatible con el párrafo 6 del Anexo II del Acuerdo.

Reclamación 20

76. Con respecto a la pregunta 43, sírvanse indicar con precisión qué datos sobre el valor normal se solicitaron a Catarinense. Sírvanse especificar el documento (o los documentos) en que se hizo la petición. Además, ¿para qué plazo se solicitaron a Catarinense los correspondientes datos sobre el valor normal?

Respuesta de la Argentina

La información solicitada a la empresa Catarinense fue la requerida a través de la Nota DCD Nº 273-001065/99 que ha sido acompañada por el Brasil bajo la Prueba documental BRA-13 y allí puede observarse que la información requerida fue para el período 1998 - enero 1999. En ese sentido, se recuerda que con independencia de la documentación requerida y a través de la última nota

[21] Segunda comunicación escrita del Brasil, párrafo 73.

remitida por la Autoridad de Aplicación - Nota DCD Nº 273-001321/99 presentada bajo la Prueba documental BA-27-, se les recordó que debían cumplir con los requisitos de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, particularmente en lo atinente a la acreditación de personería, requisito fundamental para que una parte pueda ser considerada en una investigación.

Observaciones del Brasil

No hay observaciones.

77. Con respecto a los datos de Catarinense sobre el valor normal, la Argentina afirma que esos datos se presentaron en forma agregada. Sin embargo, en la sección VII.3.2 de la determinación definitiva de la existencia de dumping al parecer se afirma que Catarinense había presentado información sobre las ventas efectuadas en el mercado interno correspondientes al año 1998 y enero de 1999 desagregadas por operación. Sírvanse explicarlo.

Respuesta de la Argentina

Tal como señala en la sección VII.3.2 del Informe Final de Determinación del Margen de Dumping se mencionó sobre el anexo VIII: "Ventas efectuadas en el mercado interno correspondientes al año 1998 y enero de 1999, desagregadas por operación" a fojas 3023 del informe citado. Es decir que Catarinense sobre valor normal para el período solicitado presentó un listado de las operaciones de venta en el mercado interno, sin acompañar la documentación respaldatoria y sin el soporte magnético. Finalmente, se reitera que la firma Catarinense en ningún momento acreditó personería no obstante haber sido requerido mediante Nota DCD 273-001321/99.

En el Informe de Determinación Final del Margen de Dumping en la sección VIII.1.3.3.5 a fs. 3053/3054 se indica que los valores transcriptos en la fs. 3054 surgen de la información de la firma exportadora en forma agregada en los anexos V y VI del Cuestionario del exportador y que la misma abarcaba un período mayor al requerido por la Autoridad de Aplicación. En ese sentido, del procesamiento de la información que aparece en los anexos V y VI surgen los valores detallados en el cuadro que consta a fs. 3054. Cabe señalar que como se indica al pie de los anexos V y VI, en el caso del año 1999 la información era acumulada hasta septiembre de ese año. Se acompaña a tal efecto, como anexo ARG-LXIV copia del anexo V y VI, tal como fuera presentado por la firma Catarinense.

Observaciones del Brasil

La Argentina confirma que el exportador brasileño Catarinense facilitó información sobre las ventas realizadas en el mercado interno en 1998 y enero de 1999, desglosada por transacción.[22] Recordamos que Catarinense fue notificada de la investigación y de la necesidad de responder al cuestionario sobre el dumping sólo el 15 de septiembre de 1999.[23] A pesar de que Catarinense fue notificada de la investigación casi ocho meses después de su iniciación, esa empresa presentó la respuesta al cuestionario con información completa sobre las transacciones de venta a la Argentina, desglosada por transacción, con su documentación justificante, así como una información completa sobre las transacciones de venta realizadas en el Brasil, desglosada por transacción, sin la documentación justificante.[24] A este respecto, las autoridades argentinas nunca solicitaron la documentación justificante de las transacciones de venta de Catarinense en el mercado interno, ni

[22] Respuesta de la Argentina a las preguntas del Grupo Especial en la segunda reunión sustantiva, pregunta 77.

[23] Prueba documental BRA-13.

[24] Página 39 de la Prueba documental BRA-15.

pidieron que la información se facilitara en un disquete. Además, las autoridades nunca seleccionaron determinadas transacciones en el mercado interno, como hicieron con otros exportadores, para que Catarinense presentara la documentación justificante correspondiente.

Durante la investigación, Catarinense facilitó datos completos sobre el valor normal y el precio de exportación, que deberían haber sido utilizados por la autoridad para determinar el margen de dumping individual del exportador.

78. Sírvanse formular observaciones sobre las dos primeras oraciones del párrafo 53 de la segunda declaración oral del Brasil.

Respuesta de la Argentina

En relación a las dos primeras oraciones del párrafo 53, no existe contradicción alguna tal como pretende señalar el Brasil ya que la Argentina dijo que la información de precio de exportación fue acompañada, pero como no pudo realizarse la determinación del valor normal por las circunstancias ya expuestas, los precios de exportación informados no pudieron ser considerados. En ese sentido, la Argentina tenía información oficial de los precios de exportación de ambas empresas que fueron los que se utilizaron en la determinación final.

Observaciones del Brasil

La Argentina confirma que los datos sobre el precio de exportación facilitados por los exportadores Frangosul y Catarinense estuvieron en realidad acompañados por la documentación justificante.[25] No obstante ello, la Argentina alega que, como no pudo determinar el valor normal correspondiente a estos dos exportadores, la autoridad no estuvo en condiciones de considerar los datos sobre el precio de exportación facilitados por ellos.[26] No estamos de acuerdo con la alegación de la Argentina en el sentido de que la información sobre el valor normal correspondiente a Frangosul y Catarinense no se pudo determinar. Sin embargo, aunque esto fuese cierto, ello no excluye el hecho de que la autoridad podía y debería haber utilizado los datos de los precios de importación correspondientes a Frangosul y Catarinense y debería haber calculado un margen de dumping individual para esos dos exportadores. En este sentido, recordamos al Grupo Especial que, aunque las autoridades argentinas no tuvieron en cuenta los datos sobre el precio de exportación presentados por los exportadores Sadia y Avipal, calcularon un margen de dumping individual para esas dos empresas. Entendemos que las autoridades argentinas deberían haber procedido de igual modo con respecto a Frangosul y Catarinense. El hecho de que la autoridad no disponga de información sobre el valor normal o el precio de exportación respecto de un determinado exportador no excluye su obligación, en virtud del párrafo 10 del artículo 6, de calcular un margen de dumping individual para ese exportador.

Es verdad que la Argentina disponía de información oficial sobre el precio de exportación correspondiente a Frangosul y Catarinense.[27] Sin embargo, **no** es cierto que la autoridad utilizara esa información en la determinación definitiva. En ésta, las autoridades de la Argentina no tuvieron en cuenta el precio de exportación facilitado por los exportadores Sadia, Avipal, Nicolini y Seara y aplicaron el precio exportación individual medio y ponderado correspondiente a esos exportadores, según los datos facilitados por el organismo argentino *Ganadería*.[28] No obstante, en el caso de

[25] Respuesta de la Argentina a las preguntas del Grupo Especial en la segunda reunión sustantiva, pregunta 78.

[26] *Idem.*

[27] *Idem.*

[28] Páginas 76 y 77 de la Prueba documental BRA-15.

Frangosul y Catarinense, las autoridades también hicieron caso omiso del precio de exportación facilitado por esos exportadores, pero no utilizaron el precio de exportación individual medio ponderado que había sido facilitado por *Ganadería*.[29] Como las autoridades no calcularon un margen de dumping individual para Frangosul y Catarinense, utilizaron como precio de exportación de esos dos exportadores un precio de exportación f.o.b. medio ponderado de 0,95992 dólares EE.UU., que tuvo en cuenta el precio de exportación medio ponderado de todos los demás exportadores, con escasa o ninguna participación en la investigación.[30] Este precio de exportación de 0,95992 dólares era inferior al precio de exportación individual medio ponderado facilitado por *Ganadería* correspondiente a Frangosul (1,0407 dólares) y Catarinense (1,0048 dólares).[31] Si las autoridades hubiesen utilizado este precio de exportación individual medio ponderado en lugar del precio de exportación medio ponderado para todos los demás exportadores, habría habido un margen de dumping negativo en el caso de Frangosul y un margen de dumping de 3,35 por ciento en el caso de Catarinense. Insistimos, no obstante, en el hecho de que Frangosul y Catarinense **sí** facilitaron la información requerida sobre el precio de exportación junto con la documentación justificante, y las autoridades deberían haber utilizado esa información para calcular el margen de dumping individual correspondiente a esos dos exportadores.

Reclamación 21

79. Del párrafo 185 de la Primera comunicación escrita de la Argentina parecería deducirse que las partes fueron informadas de los "hechos esenciales" mediante el Informe de Relevamiento de lo Actuado, de 4 de enero de 2002. ¿Podría confirmar la Argentina que este es el único documento que consta en el expediente de la investigación mediante el cual la autoridad investigadora informó a las partes interesadas de los "hechos esenciales"?

Respuesta de la Argentina

Si, el Informe de Relevamiento de lo Actuado es el documento por el cual la autoridad investigadora informó de los hechos esenciales a las partes interesadas. En ese sentido, la Argentina reafirma lo expuesto en el párrafo 185 de su Primera comunicación escrita.

Observaciones del Brasil

No hay observaciones.

80. El Grupo Especial hace notar la respuesta de la Argentina a la pregunta 47 a). Como pregunta complementaria el Grupo Especial agradecería que la Argentina respondiera a las siguientes preguntas:

1) En la investigación de que se trata, ¿cuáles fueron los "hechos esenciales" que la autoridad investigadora comunicó a las partes interesadas?

2) ¿Dónde puede encontrarse, si es que se puede, la información mencionada en los párrafos 340 a 350 de la Primera comunicación escrita del Brasil y en el párrafo 87 de la Segunda comunicación escrita del Brasil?

[29] *Idem.*

[30] Página 103 y última página de la Prueba documental BRA-15.

[31] Páginas 76 y 77 de la Prueba documental BRA-15.

Al responder a estas preguntas se ruega a la Argentina que señale con precisión el párrafo o el número de página donde figura la información en el expediente de la investigación, en su caso, y que facilite una copia de los documentos pertinentes.

Respuesta de la Argentina

Los hechos esenciales son los que se reflejan a lo largo de todo el Informe de Relevamiento de lo Actuado de fecha 4 de enero de 2000 (fs. 2757).

No obstante, y a efectos de puntualizar en lo atinente a valor normal y precio de exportación, a modo de ejemplo se cita el punto VIII.1 y VIII.1.3.3 del informe pertinente, en donde puede observarse, para el caso de Sadia, la metodología utilizada para el cálculo de valor normal. Idénticos comentarios corresponden a la firma AVIPAL en el punto VIII.1.3.3.2. Se detalla la información y metodología aplicada al cálculo de valor normal para la empresa AVIPAL S.A. Y de esta forma, también para la firma NICOLINI (fs. 2819 y 2820) y para la firma SEARA (fs. 2821).

Por consiguiente, lo expresado por el Brasil en los párrafos 340-350 de su FWS no resulta ajustado a la realidad toda vez que se dio amplia oportunidad a las partes interesadas para que expusieran sus puntos de vista respecto a los hechos esenciales que la autoridad consideraría para el cálculo de valor normal y precio de exportación.

Respecto de la copia del informe de hechos esenciales, ver Prueba documental BRA-28.

Observaciones del Brasil

El Brasil considera que la Argentina no ha indicado, en su respuesta a la pregunta 80 2), en qué parte precisa del informe anterior a la determinación definitiva (Prueba documental BRA-28), puede encontrarse la información mencionada en los párrafos 340 a 350 de la Primera comunicación escrita del Brasil y el párrafo 87 de la Segunda comunicación escrita del Brasil.

Reclamación 23

81. En el párrafo 73 de su Segunda comunicación escrita la Argentina sugiere que el exportador tuvo amplia oportunidad de informar a la DCD de cualquier ajuste que hubiera que efectuar cuando envió las facturas requeridas por la DCD. ¿Por qué debería haber solicitado Sadia un ajuste por concepto de flete cuando envió sus facturas si ya había solicitado dicho ajuste en su respuesta al cuestionario?

Respuesta de la Argentina

La Argentina reafirma lo dicho en los párrafos 210 y 211 de su primera presentación escrita. En ese sentido, se indica que SADIA contestó en el cuestionario el ítem referido a flete interno, pero en ningún momento presentó documentación respaldatoria de este ítem. Tampoco surge de las facturas presentadas el porcentaje y/o monto que correspondería a este ajuste.

En otras palabras, si bien en el anexo X SADIA informó un valor correspondiente a $EE.UU./t a descontar en concepto de flete y lo mismo hizo en el anexo VIII - ventas al mercado interno- cabe señalar que esos valores fueron presentados en forma anualizada, sin ningún tipo de documentación respaldatoria que permitiera a la Autoridad verificar que los valores allí consignados se correspondían con la realidad a fin de que la Autoridad procediera a efectuar tal ajuste.

En ese sentido, se acompaña nota fiscal de SADIA de la cual surge claramente que en el casillero correspondiente al valor del flete no aparece monto alguno. Y en el casillero que dice "frete por conta" aparece indicado "1" que se corresponde con "emitente".

La documentación respaldatoria a la que hacemos referencia en este caso hubiera sido por ejemplo, un contrato de SADIA con empresa transportista u otra documentación de la empresa de la que surgiera fehacientemente el importe del flete a descontar. En este sentido insistimos en que la única documentación fueron notas fiscales en las cuales no se evidenciaba el monto indicativo del pretendido ajuste.

Se acompaña como anexo ARG-LXV, fotocopia de factura, fotocopia de los anexos VIII y X del Cuestionario para el Exportador.

Observaciones del Brasil

No hay observaciones

82. La Argentina ha afirmado que no aceptó la solicitud de Sadia de ajuste por concepto de flete porque no justificó su solicitud con pruebas documentales. Sírvanse indicar exactamente (números de página, de párrafo y de línea) en qué parte de su determinación definitiva, o en cualquier otro documento preparado por la autoridad investigadora en el momento de formular su determinación, explicó la autoridad investigadora el motivo para rechazar la solicitud de Sadia. Si el Grupo Especial no tiene ya una copia del documento pertinente, sírvanse facilitarla.

Respuesta de la Argentina

La explicación pertinente se encuentra en el punto VIII.1.3.3.1 del Informe de Relevamiento de lo Actuado. Sobre el particular, en el mencionado informe la DCD detalló cual era la información que tomaría para la determinación del valor normal y de ella no surgía el ajuste por flete.

Observaciones del Brasil

Solicitamos que el Grupo Especial examine el punto VIII.1.3.3.1 del informe anterior a la determinación definitiva[32] y el punto VIII.1.3.3.1 de la determinación definitiva de la existencia de daño[33], a fin de verificar que la autoridad investigadora **no** dio ninguna explicación del hecho de haber rechazado el ajuste por costos de flete correspondiente a Sadia.

Reclamación 22

83. Sírvanse formular observaciones sobre el párrafo 59 de la segunda declaración oral del Brasil.

Respuesta de la Argentina

En principio, respecto de lo manifestado por el Brasil de por qué no se procedió de la misma manera con CATARINENSE y con FRANGOSUL, cabe señalar que CATARINENSE nunca acreditó personería, es decir, no cumplió con un requisito esencial que debe cumplimentar toda parte interesada que desea participar en la investigación, de acuerdo a los requerimientos de la Ley

[32] Páginas 58 a 62 de la Prueba documental BRA-28.

[33] Páginas 59 a 63 de la Prueba documental BRA-15.

Nacional de Procedimientos Administrativos -Ley Nº 19.549-, que resulta de aplicación supletoria en los procedimientos de investigación tal como surge del artículo 76 del Decreto Nº 2121/94.

Cabe señalar que esta ley ha sido notificada ante el Comité Antidumping de la OMC oportunamente. Motivo por el cual en la última nota remitida a CATARINENSE, que figura en la Prueba documental BRA-27, se le informó que debía cumplimentar los requisitos exigidos por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Sin embargo, la exportadora Catarinense no continuó efectuando ninguna presentación en el expediente ni, como ya mencionamos, acreditó personería.

Por otra parte, con relación a FRANGOSUL cabe destacar que a pesar de las sucesivas prórrogas concedidas y de las numerosas solicitudes de información realizadas por la Autoridad de Aplicación - tal como se aprecia en el cuadro resumen para la empresa en cuestión, que fuera suministrado a ese Grupo Especial acompañando las respuestas de la República Argentina a las preguntas efectuadas con posterioridad a la primera audiencia, no se contó con la información vinculada a las operaciones de venta al mercado interno con las cuales la Autoridad hubiera necesitado contar a los fines de la determinación individual del margen de dumping.

En ese sentido, se recuerda, tal como surge del cuadro resumen del exportador FRANGOSUL, que por medio de la Nota DCD Nº 273-001181/99 del 12 de octubre de 1999 y Nota DCD Nº 273-001412/99 del 18 de noviembre de 1999, por última vez la Autoridad de Aplicación requirió que acompañaran los listados de ventas en el mercado interno. Para ello, en la última nota citada, se le otorgó un plazo no mayor a cinco días. Este plazo fue concedido a efectos que la Autoridad de Aplicación contara con el tiempo suficiente para analizar y procesar la información requerida.

Sin embargo, FRANGOSUL, vencido el plazo otorgado para la presentación de la información, presentó, únicamente en soporte magnético (diskette), el listado de notas fiscales. Asimismo, se señala que FRANGOSUL no acompañó el listado en forma impresa de acuerdo a lo establecido por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos que exige tal requisito. Esta Ley se aplica supletoriamente a los procedimientos por dumping de acuerdo a lo establecido por el artículo 76 del Decreto Nº 2121/94.

A mayor abundamiento se transcribe el artículo 7º y 15 del Decreto Nº 1759/72 reglamentario de la Ley citada.

"Artículo - La identificación con que se inicie un expediente será conservada a través de las actuaciones sucesivas cualesquiera fueren los organismos que intervengan en su trámite. Todas las unidades tienen la obligación de suministrar información de un expediente en base a su identificación inicial.

En la carátula deberá consignarse el órgano con responsabilidad primaria encargado del trámite, y el plazo para su resolución".

"Artículo 15 - Los escritos serán redactados a máquina o manuscritos en tinta en forma legible, en idioma nacional ... Llevarán en la parte superior una suma o resumen del petitorio. Serán suscriptos por los interesados, sus representantes legales o apoderados. En el encabezamiento de todo escrito, sin más excepción que el que iniciare una gestión, debe indicarse la identificación del expediente a que corresponda y en su caso, contendrá la indicación precisa de la representación que se ejerza...".

El procedimiento administrativo en la Argentina es escrito.

Una vez más la Argentina quiere llamar la atención del Grupo Especial de los numerosos requerimientos efectuados por la Autoridad de Aplicación a las empresas exportadoras sobre la documentación que debían presentar. En ese sentido, queda a disposición de ese Grupo Especial para acompañar toda la documentación que considere pertinente.

Observaciones del Brasil

Con respecto a la respuesta de la Argentina, cabe formular la siguiente observación. Consideramos que la Argentina no ha respondido a la pregunta del Grupo Especial, esto es, formular observaciones sobre la segunda declaración oral del Brasil. El párrafo 59 dice lo siguiente:

> "*Señalamos al Grupo Especial que, aunque la autoridad investigadora tampoco tuvo en cuenta la información sobre el precio de exportación presentada por los exportadores Sadia y Avipal, de todos modos calculó los márgenes de dumping individuales correspondientes a esas dos empresas. El Brasil no entiende el motivo por el cual la autoridad decidió obrar de manera diferente con respecto a la información facilitada por Frangosul y Catarinense.*"

Ya hemos establecido, y la Argentina lo confirma, que los datos sobre el precio de exportación facilitados por Frangosul y Catarinense eran datos completos y estaban acompañados por la documentación justificante. La autoridad podía y debería haber utilizado esa información para determinar los datos de los precios de exportación correspondientes a esos dos exportadores. Consideramos que la autoridad debería también haber utilizado la información sobre el valor normal facilitada por Frangosul y Catarinense en la investigación. No obstante, incluso si la autoridad hubiese estado autorizada para hacer caso omiso de la información sobre el valor normal correspondiente a esos dos exportadores, que no lo estaba, de todos modos podía haber determinado para ellos un margen de dumping individual. Esto es exactamente lo que hizo la autoridad con respecto a los exportadores Sadia y Avipal. Aunque aceptó la información sobre el valor normal y no tuvo en cuenta los datos sobre el precio de exportación facilitados por esos exportadores, de todos modos calculó los márgenes de dumping individuales correspondientes a Sadia y Avipal. La Argentina **no** explicó por qué la autoridad obró de manera diferente con respecto a Frangosul y Catarinense.

El Grupo Especial debería tener en cuenta que esta es la primera vez en este procedimiento que la Argentina esgrime el argumento de que la autoridad investigadora no aceptó la información facilitada por Catarinense debido a que esta empresa no acreditó su personería. Observamos que en ninguna parte del informe anterior a la determinación definitiva[34] ni en ésta[35] la autoridad ofreció esa explicación como motivo para haber hecho caso omiso de la información presentada por Catarinense.

Reclamación 24

84. Con respecto a la alegación 24, sírvanse indicar exactamente (números de página, de párrafo y de línea) dónde expuso la autoridad investigadora las razones para no haber efectuado los distintos ajustes a los datos de JOX sobre los precios internos, ya fuera en la determinación definitiva de la autoridad investigadora o en cualquier otro documento preparado por ella en el momento de formular su determinación. Si el Grupo Especial no tiene ya una copia del documento pertinente, sírvanse facilitarla.

[34] Prueba documental BRA-28.

[35] Prueba documental BRA-15.

Respuesta de la Argentina

A fojas 3040 del Informe de Determinación Final del apartado VIII.1.3 se aclaran las circunstancias del pedido de información efectuado por la autoridad de aplicación al Presidente de la publicación JOX.

Observaciones del Brasil

Al responder a la pregunta del Grupo Especial, la Argentina hace referencia al apartado VIII.1.3 de la determinación final[36], en el que supuestamente la autoridad investigadora expuso las razones para no haber efectuado los distintos ajustes a los datos de JOX sobre los precios internos. Observamos que el pasaje mencionado por la Argentina simplemente expresa que la autoridad argentina pidió a JOX, el 25 de junio y el 27 de julio de 1999, que ofreciera una explicación acerca de los impuestos incluidos en los precios publicados, así como sobre las condiciones generales aplicables a los precios. Dicho pasaje indica asimismo que, el 28 de julio y el 3 de agosto de 1999, JOX facilitó la información solicitada, en portugués. El Grupo Especial observará que en la determinación final la autoridad investigadora **no** indicó que no se introducirían en los datos sobre los precios internos los diversos ajustes mencionados por JOX ni expuso las razones para no haber efectuado tales ajustes.

85. ¿Pidió la autoridad investigadora a JOX que presentara una traducción al español de su carta de 3 de agosto de 1999 mediante la cual había facilitado información en portugués? Si es así, sírvanse facilitar una copia del documento que contiene dicha petición.

Respuesta de la Argentina

No fue solicitada la traducción en el entendimiento de que las partes que intervienen en los procedimientos por dumping, a las cuales se aplica la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos en forma supletoria, conocen las exigencias que la misma establece.

Observaciones del Brasil

La Argentina confirma que la autoridad investigadora no solicitó a JOX que facilitara una traducción al español de su carta de 3 de agosto de 1999.[37] La Argentina justifica la omisión de la autoridad de haber solicitado la traducción invocando el hecho de que las partes que intervienen en un procedimiento por dumping conocen las exigencias de presentar tal información.[38]

En lo que respecta a la justificación esgrimida por la Argentina, recordamos al Grupo Especial lo siguiente. En primer lugar, la información facilitada por JOX fue el resultado de una solicitud formulada por la autoridad investigadora y no por los exportadores brasileños ni por el solicitante. Es importante que el Grupo Especial tenga en cuenta que JOX es una entidad privada, no relacionada con el Gobierno del Brasil ni con ninguno de los exportadores brasileños objeto de la investigación. Por ende, según la definición de "partes interesadas" del párrafo 11 del artículo 6 del Acuerdo, JOX no puede ser calificada como parte interesada en el procedimiento de la investigación y no estaba obligada a responder a las autoridades argentinas, y mucho menos a facilitar una traducción al español de su respuesta. En segundo lugar, incluso después de que JOX facilitara información

[36] Página 56 de la Prueba documental BRA-15.

[37] Respuesta de la Argentina a las preguntas del Grupo Especial en la segunda reunión sustantiva, pregunta 85.

[38] *Idem*.

sobre los diversos ajustes a los precios internos publicados, la autoridad no solicitó la traducción. Señalamos que la autoridad podía y debería haber solicitado la traducción o haber traducido por sí misma la información. El Brasil considera que si la autoridad argentina decidió utilizar la información de JOX para determinar el valor normal correspondiente a todos los demás exportadores, debería haber tenido en cuenta la explicación de JOX sobre los impuestos, descuentos financieros, comisiones de ventas y flete en relación con los precios publicados. En tercer lugar, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo, la autoridad investigadora está obligada a tener debidamente en cuenta las diferencias en una comparación equitativa. Si la autoridad sabe que existen diferencias entre el precio de exportación y el valor normal que afectan a la comparabilidad de los precios, está obligada a introducir ese ajuste. Después de que JOX indicó que sus precios internos publicados incluían impuestos, costos financieros, condiciones de ventas y fletes, la autoridad estaba obligada a introducir dichos ajustes.

86. Sírvanse formular observaciones sobre el párrafo 68 de la segunda declaración oral del Brasil.

Respuesta de la Argentina

Se comparten los términos del Brasil desde el punto de vista teórico en el sentido de que para realizar una comparación justa deben realizarse todos los ajustes que resulten procedentes tanto en el valor normal y precio de exportación.

Sin embargo, en el presente caso, respecto a la publicación de JOX, la información que hubiera permitido efectuar algunos de los ajustes que menciona el Brasil no cumplía con los requisitos de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19549, vinculados a que la documentación extranjera debe ser traducida al español por traductor matriculado, de conformidad con el artículo 28 del Decreto Nº 1759/72 reglamentario de la Ley citada.

Observaciones del Brasil

Aparentemente, la Argentina coincide con el Brasil en que, a fin de realizar una comparación equitativa, se deben realizar todos los ajustes necesarios en el valor normal y el precio de exportación.[39] No obstante, la Argentina no hace referencia al párrafo 68 de la segunda declaración oral del Brasil, en las que explicamos por qué la autoridad debería, por lo menos, introducir un ajuste en el valor normal para excluir los impuestos y los costos financieros incluidos en los precios de JOX, a fin de realizar una comparación equitativa. En nuestra respuesta a las preguntas del Grupo Especial en la segunda reunión sustantiva[40] se ofreció una explicación más detallada acerca de por qué la autoridad debería haber excluido los impuestos y los costos financieros de los precios internos publicados por JOX.

Reclamación 32

87. Sírvanse indicar exactamente (números de página, de párrafo y de línea) dónde explicó la autoridad investigadora los motivos por los que examinó los datos de 1999 únicamente para determinados factores de daño y no para otros, ya sea en la determinación definitiva de la autoridad investigadora o en cualquier otro documento preparado por ella en el momento de su

[39] Respuesta de la Argentina a las preguntas del Grupo Especial en la segunda reunión sustantiva, pregunta 86.

[40] Respuesta del Brasil a las preguntas del Grupo Especial en la segunda reunión sustantiva, pregunta 93.

determinación. Si el Grupo Especial no tiene ya una copia del documento pertinente, sírvanse facilitarla.

Respuesta de la Argentina

En el Acta Nº 576, de fecha 23 de diciembre de 1999, obrante en el Expediente CNCE Nº 43/1997 (fs. 7313), en su punto V ("Condición de la industria nacional"), segundo párrafo, líneas primera a sexta, se dijo claramente que:

> "El período bajo análisis" corresponde al transcurrido entre enero de 1996 y diciembre de 1998. Para algunas variables como producción nacional, precios, importaciones, exportaciones nacionales y consumo aparente, se incluyen datos correspondientes al primer semestre de 1999. Se exponen los datos correspondientes al año 1995 a título de referencia. Las variaciones del primer semestre de 1999 se corresponden contra igual período del año anterior". (El subrayado es propio.)

No obstante ello, la Argentina reitera lo manifestado en sus dos presentaciones anteriores y a efectos de una mejor comprensión en el contexto total se reitera la réplica de la Argentina:

> "En primer lugar, no resulta obligatorio el análisis de ningún indicador fuera del período establecido por las autoridades como período de investigación."
>
> Conforme prácticas internacionales llevadas a cabo por algunos países, la Argentina consideró algunas variables de acceso público con la finalidad de ratificar las tendencias observadas durante el período investigado. Pretender, como en este caso pareciera intenta el Brasil, una actualización constante durante la investigación de todos los indicadores, resultaría en una investigación sin final, lo cual por otra parte -se reitera- no es el objetivo del Acuerdo Antidumping, como tampoco la práctica de aquellos países que, como la Argentina, analizan ciertos indicadores pertinentes a título referencial."

Cabe señalar que la determinación de amenaza de daño se basó en el período enero de 1996 a diciembre de 1998. Los demás datos conforme se ha señalado en respuestas anteriores y en el Acta en cuestión fueron tomados a título referencial.

Observaciones del Brasil

Al responder a la pregunta del Grupo Especial, la Argentina no ha indicado en qué lugar la autoridad investigadora explicó por qué examinó los datos de 1999 con respecto a algunos factores de daño y no con respecto a otros. El pasaje mencionado por la Argentina señala claramente que los datos correspondientes al año 1995 se utilizan a título referencial.[41] Sin embargo, ese pasaje **no** establece que los datos correspondientes al primer semestre de 1999 se utilizan a título referencial. Lo que se indica en el pasaje es que los datos correspondientes a las variables de producción nacional, precio, importaciones, exportaciones nacionales y consumo aparente correspondientes al primer semestre de 1999 se incluyeron[42] en el período de análisis de la existencia de daño. Si la autoridad hubiese tenido el propósito de utilizar los datos del primer semestre de 1999 sólo a modo de referencia, lo hubiera señalado claramente en la determinación definitiva, como lo hizo con respecto a los datos del año 1995. En la investigación, la autoridad argentina consideró un período determinado

[41] Respuesta de la Argentina a las preguntas del Grupo Especial en la segunda reunión sustantiva, pregunta 87 y página 9 de la Prueba documental BRA-14.

[42] *Idem*.

del análisis de la existencia de daño respecto de los factores producción, precios, importaciones, exportaciones y consumo aparente, y otro período para el resto de los factores indicados en el párrafo 4 del artículo 3.

Reclamación 38

88. Sírvanse explicar con precisión de qué manera el cuadro 16 del Acta Nº 576 (párrafo 292 de la Primera comunicación escrita de la Argentina) constituye una evaluación de los "factores que afecten a los precios internos" en el sentido del párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping. Sírvanse ofrecer una explicación más detallada que la que se expone en el párrafo 74 de la segunda declaración oral de la Argentina.

Respuesta de la Argentina

El cuadro Nº 16, que pertenece al informe técnico GEGE/ITDF Nº 03/99 y forma parte integrante del Acta Nº 576, presenta el ingreso medio por ventas de 1 kg de pollo eviscerado fresco o refrigerado y los precios relativos del producto comparable, respecto al conjunto de bienes industriales y de la carne vacuna, representados, respectivamente, por el índice de precios industrial mayorista de productos manufacturados y por el promedio simple de los índices de precios al consumidor para la carne vacuna fresca, cortes traseros y delanteros.

Al respecto, la comparación efectuada en relación con el Índice de Precios Industrial Mayorista de Productos Manufacturados responde a la necesidad de evaluar si el precio del producto en cuestión siguió la tendencia del resto de los productos manufacturados.

Por otra parte, en relación al segundo índice, la República Argentina ha sido tradicionalmente un consumidor de carnes rojas, por lo que se consideró pertinente utilizar este índice para analizar los efectos que sus variaciones podrían tener sobre la carne de pollo, a partir de un cierto grado de sustitución entre la carne vacuna y la carne aviar.

De esta manera, según surge de dicho cuadro en los dos precios relativos analizados se observa la misma tendencia que en los ingresos medios por ventas del producto en cuestión, aunque en el caso del precio relativo al promedio simple de la carne vacuna las variaciones anuales muestran una disminución de mayor intensidad en 1998 como consecuencia del incremento de los precios de la carne vacuna en ese año. En efecto, tal como se indica en la sección de mercado del informe técnico GEGE/ITDF Nº 03/99, punto VI.5. "Evolución reciente del mercado", fs. 7371, tercer párrafo "Durante 1998 se observó un incremento adicional en la demanda de pollo originado en el efecto sustitución que siguió a los fuertes incrementos observados en el precio de la carne vacuna, precio que alcanzó su pico a mediados del año 1998. Con la posterior caída de estas cotizaciones, no se observó una retracción en el consumo de pollo. Esta situación se debería a que la percepción del mercado es que el nivel de precios de los pollos es tan bajo que, incluso, estaría incidiendo en la disminución del precio de la carne vacuna."

En consecuencia, resulta claro que la disposición del artículo 3.4 ha sido considerada respecto de lo que dispone en el sentido de que: "El examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional de que se trate incluirá una evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes que influyan en el estado de esa rama de producción, incluidos … los factores que afecten a los precios internos … ."

Observaciones del Brasil

No hay observaciones.

89. En cuanto a la respuesta de la Argentina a la pregunta 59 relativa al párrafo 80 de la primera declaración oral del Brasil, sírvanse facilitar citas exactas (por ejemplo, números de página, de párrafo y de línea) de los distintos extractos del Acta Nº 576.

Respuesta de la Argentina

Respecto de las citas a las que hace referencia el párrafo 80:

- En cuanto a "Se realizó un ejercicio econométrico que muestra, para el período enero de 1995 - junio de 1999, que el precio del producto en el mercado interno es función del volumen de importaciones del mes anterior, del precio del producto importado y del precio de la carne vacuna. La inclusión del precio del maíz en el modelo mencionado no arrojó resultados satisfactorios, lo cual indica que la importante variabilidad del precio del pollo eviscerado entero no se condice con la evolución del precio del maíz. No obstante ambas variables presentan tendencias similares", la misma se encuentra en el punto VIII (CONDICIONES DE COMPETENCIA ENTRE EL PRODUCTO SIMILAR Y EL IMPORTADO), punto 1, fs. 7328 último párrafo y 7329, 1er párrafo.

- Respecto de "La recesión económica no afectó mayormente el consumo de pollos eviscerados enteros, ya que el mismo continuó aumentando (en 1998 aumentó 14 por ciento)", la misma se encuentra en el punto VIII (CONDICIONES DE COMPETENCIA ENTRE EL PRODUCTO SIMILAR Y EL IMPORTADO), punto 1, fs. 7329, 2º párrafo.

- En cuanto a "… respecto al precio del conjunto de bienes industriales y de la carne vacuna, representados, respectivamente, por el Índice de Precios Industrial Mayorista de Productos Manufacturados y por el promedio simple de los Índices de Precios al Consumidor para la carne vacuna fresca, cortes traseros y delanteros muestran la misma tendencia que la registrada en los ingresos por ventas descripta, aunque en el caso del segundo precio relativo, las variaciones anuales muestran una diminución de mayor intensidad en 1998, como consecuencia del incremento de los precios de la carne vacuna de ese año", la misma se encuentra en el punto V (CONDICIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL), fs. 7318, último párrafo.

Observaciones del Brasil

No hay observaciones.

Preguntas a ambas partes

Reclamación 21

95. ¿Qué son "hechos esenciales considerados que sirvan de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas" en el sentido del párrafo 9 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping? Concretamente, abarcarían los "hechos esenciales" únicamente hechos o también argumentos que avalen una conclusión determinada?

Respuesta de la Argentina

Son los hechos sobre los cuales la Autoridad de Aplicación basa sus conclusiones.

Observaciones del Brasil

No hay observaciones.

96. En el párrafo 9.229 de su informe, el Grupo Especial que examinó el asunto *Guatemala - Cemento II* constató que:

> **"Una parte interesada no sabrá si un hecho particular es 'importante' o no, a menos que la autoridad investigadora lo haya identificado expresamente como uno de los 'hechos esenciales' que sirven de base para la decisión de la autoridad de imponer o no medidas definitivas."**

¿Estarían de acuerdo con la constatación anterior? Sírvanse explicarlo.

Respuesta de la Argentina

La Argentina está de acuerdo con la posición del Grupo Especial en *Guatemala - Cemento II* porque todo aquello que se informa en el Informe de Relevamiento de lo Actuado conforma los hechos sobre los cuales la autoridad se basará para tomar su decisión, poniendo la Autoridad de Aplicación en conocimiento de las partes interesadas tal circunstancia.

Observaciones del Brasil

La Argentina sostiene que toda la información contenida en el informe anterior a la determinación definitiva (Prueba documental BRA-28) conforma los hechos sobre los cuales la autoridad se basará para tomar su decisión de imponer o no medidas definitivas.[43] No estamos de acuerdo con esta afirmación de la Argentina. El Grupo Especial debería examinar cuidadosamente la Prueba documental BRA-28 a fin de verificar que la autoridad **no** identificó explícitamente cuáles fueron los hechos considerados "hechos esenciales" en los que se basaría su decisión de imponer o no medidas definitivas. En realidad, lo que se presenta en la Prueba documental BRA-28 es un resumen de la información facilitada por las diversas partes interesadas en el expediente de la investigación. Al no haber indicado explícitamente a las partes interesadas cuáles eran los "hechos esenciales" objeto del examen, la autoridad no ofreció a los exportadores la oportunidad de defender sus intereses.

Reclamación 22

97. ¿Qué entienden las partes por las palabras "que corresponda a cada exportador o productor interesado del producto sujeto a investigación de que se tenga conocimiento" que figuran en la primera oración del párrafo 10 del artículo 6? A juicio de las partes, ¿exigiría la parte citada de la primera oración del párrafo 10 del artículo 6 el cálculo de un margen de dumping individual para cada exportador de que tenga conocimiento la autoridad investigadora? ¿Sucedería lo mismo cuando un exportador conocido no facilita la información pertinente solicitada por la autoridad investigadora? Sírvanse explicarlo.

Respuesta de la Argentina

Con relación a la pregunta 97 se indica que la determinación individual del margen de dumping por exportador requiere como condiciones que el exportador sea conocido y, además, que presente la documentación necesaria para posibilitar dicha determinación.

[43] Respuesta de la Argentina a las preguntas del Grupo Especial en la segunda reunión sustantiva, pregunta 96.

Observaciones del Brasil

Según la Argentina, a fin de que la autoridad determine un margen de dumping individual se requieren dos condiciones: 1) que el exportador sea conocido por la autoridad; y 2) que el exportador presente la documentación necesaria para hacer posible el cálculo del margen individual.[44]

Debemos señalar que nada en el párrafo 10 del artículo 6 del Acuerdo exige que el exportador presente la documentación necesaria como condición para que la autoridad determine un margen de dumping individual. De conformidad con el párrafo 10 del artículo 6, la autoridad debe determinar el margen de dumping que corresponda a cada exportador o productor interesado del producto sujeto a investigación de que se tenga conocimiento. En este sentido, los exportadores Frangosul y Catarinense eran exportadores/productores del producto sujeto a investigación de que se tenía conocimiento. Ambas empresas facilitaron información sobre el valor normal del precio de exportación durante la investigación, y los datos sobre el precio de exportación facilitados por esos exportadores estuvieron acompañados de la documentación justificante. En consecuencia, la autoridad estaba obligada a determinar un margen de dumping individual para esos dos exportadores.

Sin perjuicio de ello, hemos expresado asimismo que el hecho de que un exportador no hubiese facilitado la información pertinente o apropiada para establecer el valor normal o el precio de exportación no excluye la obligación de la autoridad, establecida en el párrafo 10 del artículo 6, de determinar un margen de dumping correspondiente a ese exportador.[45] Si el exportador de que se tiene conocimiento no facilita la información pertinente necesaria para calcular el valor normal o el precio de exportación, pero la autoridad tiene acceso a la información que corresponda a ese exportador, la autoridad investigadora está obligada a calcular el margen de dumping individual. Insistimos en que hay una diferencia entre la utilización de los hechos de que se tenga conocimiento, según lo establecido en el párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo, a un exportador determinado, y el hecho de no calcular el margen de dumping que corresponda a ese exportador. En los casos en que la autoridad no dispone de los datos pertinentes sobre el valor normal o el precio de exportación y la autoridad está facultada para utilizar los hechos de que tenga conocimiento, los hechos disponibles aplicados a un determinado exportador pueden ser diferentes de los hechos disponibles aplicables a otro exportador. En consecuencia, el cálculo de los márgenes de dumping que correspondan a cada uno de esos dos exportadores será también diferente.

98. A juicio de las partes, ¿serían aplicables a los hechos de esta diferencia las constataciones que figuran en los párrafos 6.86 a 6.101 (ambos incluidos) del informe del Grupo Especial encargado del asunto *Argentina - Baldosas de cerámica*? Concretamente, ¿tendría pertinencia para la presente diferencia la siguiente constatación del Grupo Especial: "La base de la determinación del valor normal no guarda relación con la capacidad para calcular un margen de dumping individual correspondiente al productor cuyo valor normal esté en tela de juicio."? ¿La falta de información sobre el valor normal, el precio de exportación o el costo de producción permitiría automáticamente no calcular un margen de dumping individual de conformidad con el párrafo 10 del artículo 6? Sírvanse explicarlo, identificando y presentando apoyo fáctico pertinente al Grupo Especial.

[44] Respuestas de la Argentina a las preguntas del Grupo Especial en la segunda reunión sustantiva, pregunta 97.

[45] Respuestas del Brasil a las preguntas del Grupo Especial en la segunda reunión sustantiva, preguntas 90, 97 y 98.

Respuesta de la Argentina

No se aplica al presente caso dado que en las argumentaciones de ese caso la autoridad investigadora tuvo en cuenta circunstancias para el cálculo del margen de dumping que consistía en: "en los casos en que el número de exportadores, productores, importadores o tipos de productos sea tan grande que resulte imposible efectuar esa determinación ...". Es decir, las consideraciones que efectuó el Grupo Especial/panel tenían que ver con que la autoridad argentina había decidido determinar el margen de dumping sobre la base de "un número prudencial de partes interesadas... utilizando muestras que sean estadísticamente válidas sobre la base de la información de que dispongan en el momento de la selección, ...". En ese sentido, las mismas no resultan aplicables al presente caso.

Observaciones del Brasil

Si bien en el asunto *Argentina - Baldosas de cerámica* la autoridad argentina calculó el margen de dumping basándose en la segunda frase del párrafo 10 del artículo 6, que limita el examen de la autoridad a determinados productores y exportadores, el razonamiento del Grupo Especial con respecto a la interpretación del párrafo 10 del artículo 6 es, empero, correcto y aplicable al caso que nos ocupa.

En particular, citamos el pasaje siguiente de dicho informe:

> *"[…] el párrafo 4 del artículo 9 dispone que, cuando las autoridades limiten su examen de conformidad con el párrafo 10 del artículo 6, los derechos antidumping que se apliquen a los exportadores o productores no abarcados por el examen no serán superiores a un nivel determinado sobre la base de los resultados del examen de los exportadores o productores abarcados por el examen. El hecho de que en el párrafo 4 del artículo 9 no se establezca ningún método para determinar el nivel de los derechos aplicables a los exportadores o productores abarcados por el examen confirma, a nuestro juicio, que la norma general que exige que se determinen márgenes individuales continúa siendo aplicable a esos exportadores o productores. También confirma esto el apartado 10.2 del artículo 6, que dispone que, en general, hay que calcular un margen de dumping individual incluso con respecto a los productores o exportadores no incluidos inicialmente en la muestra, si presentan la información necesaria y si tal cálculo no es excesivamente gravoso. Si incluso los productores no incluidos en la muestra original tienen derecho a que se calcule para ellos un margen individual, evidentemente los productores incluidos en la muestra original tienen también ese derecho. De hecho, las partes parecen estar de acuerdo en que el párrafo 10 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping exige que, por regla general, se determine un margen de dumping individual para cada exportador con respecto al producto sujeto a investigación."*[46] (sin cursivas en el original)

Por consiguiente, si aquel Grupo Especial concluyó que los productores que estuviesen incluidos o no en una muestra, en los casos en que la muestra era necesaria, tenían derecho al cálculo de un margen individual, este Grupo Especial debería también llegar a la conclusión de que en el caso presente los productores objeto de examen, en los casos en que no se necesitaba una muestra, también tenían derecho al cálculo de un margen individual.

[46] Argentina - Medidas antidumping definitivas aplicadas a las importaciones de baldosas de cerámica para el suelo procedentes de Italia, 28 de septiembre de 2001, WT/DS189/R, párrafo 6.90 (adoptado el 5 de noviembre de 2001) ("*Argentina - Baldosas de cerámica*").

RESPUESTAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA A LAS PREGUNTAS DEL BRASIL

1. y 2. El período de recolección de datos fue informado a los exportadores brasileños en la instancia de determinación preliminar de la investigación.

Como puede observarse, ya en los anexos del Informe de Determinación Preliminar la autoridad de aplicación había acotado el período investigado a enero de 1998 - enero 1999.

Todas las empresas exportadoras claramente podían observar cuál era el período objeto de investigación que la autoridad estaba analizando. En el caso de AVIPAL, SADIA y FRANGOSUL, a través de los requerimientos de documentación efectuados por la DCD surgían indicaciones acerca de cuál sería el período objeto de investigación que se analizaría.

A mayor abundamiento se remite al Cuadro Resumen que se adjuntó como complemento a las respuestas de la Argentina al Cuestionario remitido por el Grupo Especial finalizada la Primera Reunión del grupo Especial con las Partes.

3. La autoridad para determinar el período objeto de investigación se basó en que la información a presentar correspondiera a un período lo más próximo posible a la apertura de investigación.

Observaciones del Brasil

El Grupo Especial debe observar que la autoridad investigadora argentina en la determinación preliminar no estableció clara y concretamente que el período de recopilación de datos sobre el dumping iba desde enero de 1998 hasta enero de 1999.[47] Es también importante observar que la autoridad investigadora envió una carta al solicitante el 1º de junio de 1999, pidiéndole que actualizase la información relativa al valor normal en el Brasil correspondiente al período transcurrido entre enero de 1998 y enero de 1999.[48] La autoridad no remitió una carta análoga a los exportadores brasileños antes de la determinación preliminar. En rigor, la autoridad investigadora no utilizó ninguno de los datos sobre el valor normal y el precio de exportación facilitados por los exportadores brasileños y correspondientes a los años 1996 a 1999 en la determinación preliminar de la existencia de dumping. Sólo el 12 de octubre y el 18 de octubre de 1999 la autoridad remitió una carta a Avipal, Frangosul, Sadia, Nicolini y Seara en la que les solicitaba que presentaran una lista de las transacciones y facturas de las ventas realizadas en el mercado interno entre enero de 1998 y enero de 1999. Nueve meses después de la iniciación de la investigación y después de que se emitiese la determinación preliminar, la autoridad decidió establecer y comunicar a los exportadores brasileños el período de recopilación de datos correspondiente a la investigación sobre el dumping.

Sólo el 15 de septiembre de 1999 la autoridad envió una carta a los exportadores brasileños CCLP, Catarinense, Chapecó, Minuano, Perdigão, Comaves y Pena Branca notificándoles la investigación e invitándolos a presentar respuestas al cuestionario.[49]

Por último, si la autoridad determinó el período de la investigación basándose en la información correspondiente al período más próximo a la iniciación, ¿por qué solicitó datos sobre el valor normal y el precio de exportación correspondientes a los años 1996 a 1999, y por qué no estableció el período de investigación tan pronto como se hubo iniciado la investigación?

[47] Prueba documental BRA-11.

[48] Página 10 de la Prueba documental BRA-11.

[49] Prueba documental BRA-13.

ANEXO B

Argentina

Índice		Página
Anexo B-1	Primera comunicación escrita de la Argentina	B-2
Anexo B-2	Intervención de la República Argentina en la reunión del Grupo Especial con las Partes	B-70
Anexo B-3	Segunda comunicación escrita de la Argentina	B-83
Anexo B-4	Lista de preguntas a las partes - Primera reunión sustantiva - Respuestas de la Argentina	B-98
Anexo B-5	Intervención de la República Argentina en la reunión del Grupo Especial con las Partes	B-124
Anexo B-6	Segunda reunión sustantiva con las Partes - Preguntas - Respuestas de la República Argentina	B-142
Anexo B-7	Respuestas de la Argentina a las preguntas del Brasil - Segunda reunión	B-156
Anexo B-8	Observaciones de la Argentina sobre las respuestas del Brasil a las preguntas del Grupo Especial - Segunda reunión	B-157
Anexo B-9	Observaciones de la Argentina sobre la Segunda declaración oral del Brasil	B-161

ANEXO B-1

PRIMERA COMUNICACIÓN ESCRITA
DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Ginebra, 29 de agosto de 2002

ÍNDICE

Página

INTRODUCCIÓN B-4

I. ANTECEDENTES B-4

II. ARGUMENTOS PRELIMINARES: NORMAS Y PRINCIPIOS DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO RELEVANTES Y DE APLICACIÓN EN ESTE PROCEDIMIENTO B-5

II.1 ESTANDARD DE REVISIÓN B-5

II.2 OTROS PRINCIPIOS Y NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO APLICABLES AL CASO B-6

II.3 PETITORIO DERIVADO DE ESTA SECCIÓN B-9

III. RECLAMOS SUSTANTIVOS B-9

III.1 INICIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN B-9

III.1.1 RECLAMOS 1 Y 5: CONSISTENCIA CON EL ARTÍCULO 5.2 ..... B-9

III.1.2 RECLAMOS 2, 4, 6 Y 8: CONSISTENCIA CON EL ARTÍCULO 5.3 ..... B-14

III.1.3 RECLAMO 9: CONSISTENCIA CON EL ARTÍCULO 5.7 ..... B-19

III.1.4 RECLAMOS 3, 7 Y 31: CONSISTENCIA CON EL ARTÍCULO 5.8 ..... B-20

III.2 CONDUCCIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN APROPIADA - EVIDENCIA Y REQUISITOS DE AVISO PUBLICO B-22

III.2.1 RECLAMO 10 - CONSISTENCIA CON EL ARTÍCULO 12.1 ..... B-22

III.2.2 RECLAMOS 11 A 14: CONSISTENCIA CON EL ARTÍCULO 6 ..... B-24

III.2.2.1 RECLAMO 11: CONSISTENCIA CON EL ARTÍCULO 6.1.1 ..... B-25

III.2.2.2 RECLAMO 12: CONSISTENCIA CON EL ARTÍCULO 6.1.2 ..... B-29

III.2.2.3 RECLAMO 13: CONSISTENCIA CON EL ARTÍCULO 6.2 ..... B-31

III.2.2.4 RECLAMO 14: CONSISTENCIA CON EL ARTÍCULO 6.1.3 ..... B-33

III.2.3 RECLAMOS 15, 16, 17 y 21: CONSISTENCIA CON LOS ARTÍCULOS 6.8 (ANEXO II); 6.9; 12.2.2 ..... B-35

III.2.4 RECLAMOS 18, 19, 20 Y 22: CONSISTENCIA CON LOS ARTÍCULOS 12.2.2, 6.8 (ANEXO II) Y 6.10 ..... B-38

Página

III.3 CONDUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y DE LA DETERMINACIÓN FINAL B-44

III.3.1 RECLAMO 23: CONSISTENCIA CON EL ARTÍCULO 2.4 ..... B-44

III.3.2 RECLAMO 24: CONSISTENCIA CON EL ARTÍCULO 2.4 ..... B-46

III.3.3 RECLAMO 25: CONSISTENCIA CON EL ARTÍCULO 2.4 ..... B-48

III.3.4 RECLAMO 26: CONSISTENCIA CON EL ARTÍCULO 2.4 ..... B-49

III.3.5 RECLAMO 27: CONSISTENCIA CON EL ARTÍCULO 2.4.2 ..... B-50

III.3.6 RECLAMOS 32 Y 33: CONSISTENCIA CON LOS ARTÍCULOS 3.1, 3.4, 3.5 Y 12.2.2 ..... B-51

III.3.7 RECLAMOS 34, 35, 36 Y 37: CONSISTENCIA CON LOS PÁRRAFOS 1, 2, 4 Y 5 DEL ARTÍCULO 3 ..... B-54

III.3.8 RECLAMOS 38, 39 Y 40: CONSISTENCIA CON LOS PÁRRAFOS 4 Y 1 DEL ARTÍCULO 3 Y ARTÍCULO 12.2.2. ..... B-58

III.3.9 RECLAMO 41: CONSISTENCIA CON EL ARTÍCULO 4.1 ..... B-63

III.4 IMPOSICIÓN Y RECAUDACIÓN DE DERECHOS ANTIDUMPING COMO RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING..... B-64

III.4.1. RECLAMOS 28, 29 Y 30: CONSISTENCIA CON LOS ARTÍCULOS 9.2, 9.3 Y 12.2.2 ..... B-64

IV. PETITORIO B-68

INTRODUCCIÓN

Esta comunicación Argentina rechaza los cuestionamientos que Brasil formula a la Resolución 574/2000 del Ministerio de Economía de la República Argentina en base a distintas consideraciones de hecho y de derecho que se agrupan en las dos secciones principales que conforman la misma. Esto es, sección II, en la que se trata el standard de revisión y las normas y principios de derecho internacional público aplicables al caso y, sección III, que refuta los argumentos sustantivos contenidos en los cuarenta y un reclamos de Brasil.

I. ANTECEDENTES

1. El 21 de julio de 2000 el Ministerio de Economía de la República Argentina dictó la Resolución N° 574 por la cual se imponían medidas antidumping definitivas a la importación de pollos procedentes de Brasil clasificados en la línea tarifaria 0207.11.00 y 0207.12.00 del MERCOSUR, por un período de tres años. La Resolución fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 24 de julio de 2000.

2. El 30 de agosto de 2000, Brasil solicitó a la Argentina, de acuerdo a lo previsto en el artículo 2° del Protocolo de Brasilia, el inicio de negociaciones directas por Aplicación de derechos antidumping sobre exportaciones brasileñas de pollos (Resolución ME 574/00).

3. El 24 de enero de 2001 Brasil comunicó su intención de iniciar el procedimiento arbitral previsto en el artículo 7° del Protocolo de Brasilia.

4. El 21 de mayo de 2001 se resolvió la controversia a través del Laudo del Tribunal Arbitral Ad Hoc del MERCOSUR constituido para decidir sobre la *Controversia entre la República Federativa de Brasil y la República Argentina sobre "Aplicación de Medidas Antidumping contra la exportación de pollos enteros, provenientes de Brasil, (Res. 574/2000) del Ministerio de Economía de la República Argentina*". Conforme al artículo 22 del Protocolo de Brasilia, con posterioridad a la emisión del laudo, el Tribunal Arbitral emitió una Aclaración del mismo con fecha 18 de junio de 2001.

5. El 7 de noviembre de 2001 la República Federativa de Brasil solicitó consultas a la Argentina de conformidad con el artículo 4 del "Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por el que se rige la solución de diferencias" (ESD), el artículo XXII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT de 1994), el artículo 17 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 (Acuerdo Antidumping), incluido el párrafo 4 del artículo 17 de este último y el artículo 19 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994 (Acuerdo sobre Valoración en Aduana) de la OMC, respecto de la Resolución ME 574/00.

6. El 10 de diciembre de 2001 se celebraron consultas en Ginebra entre las Delegaciones de ambos países.

7. EL 25 de febrero de 2002 el Gobierno de Brasil, de acuerdo con el artículo XXII del GATT de 1994, el artículo 6 del ESD y el artículo 17 del Acuerdo Antidumping, solicitó el establecimiento de un Grupo Especial.

8. EL 17 de abril de 2002 el Órgano de Solución de Diferencias estableció el Grupo Especial que se encargaría de examinar las reclamaciones del Gobierno de Brasil. El Grupo Especial quedó constituido el 27 de junio de 2002.

II. ARGUMENTOS PRELIMINARES: NORMAS Y PRINCIPIOS DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO RELEVANTES Y DE APLICACIÓN EN ESTE PROCEDIMIENTO

II.1 ESTANDARD DE REVISIÓN

9. La República Argentina comparte la existencia de un estándar distinto a los fines de revisión[1] en el caso del artículo 17.6 del Acuerdo Antidumping. Sin embargo, el reconocimiento de un estándar distinto no puede ser entendido en el sentido de admitir la existencia de la presunción de mala fe en las relaciones internacionales y aún menos de habilitar a Brasil a realizar una imputación invocando dicha presunción en contra de la Argentina. Por el contrario el principio de buena fe "Informa las disposiciones del Acuerdo Antidumping y de los demás acuerdos abarcados".[2]

10. Contrariamente a lo afirmado por Brasil[3], la República Argentina no ha obrado con mala fe sino que se conduce en sus relaciones internacionales conforme al principio "omnipresente"[4] de la buena fe que subyace a todos los tratados.

11. Brasil desarrolla una argumentación de carácter genérico sin identificar aquellos aspectos de la investigación de Argentina en los que a juicio de Brasil no se habría actuado de buena fe y sin probar sus afirmaciones al respecto. Una imputación de carácter genérico carece de relevancia en un procedimiento OMC en el que en definitiva debe aplicarse el derecho a los hechos identificados del caso.

12. La Argentina entiende que la argumentación de Brasil debe ser rechazada pues no aparece fundamentada en ninguno de los párrafos correspondientes al punto "*Anti-Dumping Agreement Standard of Review*", limitándose Brasil a incluir alegaciones que carecen de elaboración.

---

[1] La particularidad del Acuerdo Antidumping en cuanto a ser el único que contiene una norma específica a los fines de revisión de medidas antidumping provisionales o definitivas o acuerdos de precios, cuando las mismas son cuestionadas bajo el ESD ha sido reconocida en el informe del Grupo Especial WT/DS24/R de fecha 8 de noviembre de 1996: "Señalamos que el ATV no establece una norma de examen para los grupos especiales, a diferencia de, por ejemplo, el Acuerdo de la OMC relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, cuyo artículo 17, párrafo 6 define la norma de examen que los grupos especiales han de aplicar al examinar los casos planteados en el marco de ese Acuerdo: Observemos además que el ESD no contiene ninguna disposición que imponga una norma de examen determinada", párrafo 7.8, página 87.

En el mismo sentido en el informe del Órgano de Apelación, en el asunto *Argentina - Medidas de salvaguardia impuestas a las importaciones de calzado*, WT/DS121/AB/R de fecha 14 de diciembre de 1999, se afirma que "Hemos declarado en más de una ocasión, que en relación con todos los acuerdos abarcados, con una sola excepción, en el artículo 11 del ESD se enuncia la norma de examen apropiada para los grupos especiales. La única excepción es el acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre aranceles aduaneros y comercio de 1994, en el cual una disposición concreta, el párrafo 6 del artículo 17 que establece una norma de examen especial para las diferencias relativas a dicho acuerdo".

[2] Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Medidas Antidumping sobre determinados productos de acero laminado en caliente procedentes del Japón* (*Estados Unidos- Acero laminado en caliente*), WT/DS184/AB/R, adoptado el 23 de agosto de 2001, párrafo 101.

[3] Primera comunicación escrita de Brasil, párrafo 31.

[4] Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Trato fiscal aplicado a las "empresas de ventas en el extranjero"*, WT/DS108/AB/R, adoptado el 20 de marzo de 2000, párrafo 166. "... Esta es otra manifestación específica del principio de buena fe que, como hemos señalado, es a la vez un principio general de derecho y un principio general del derecho internacional. Este principio omnipresente exige que tanto el Miembro reclamante como el Miembro demandado cumplan con las prescripciones del ESD (y de las prescripciones conexas establecidas en otros acuerdos abarcados) de buena fe ..."

13. La Argentina rechaza, también, la argumentación de Brasil[5] en el sentido de que el Gobierno Argentino ha establecido los hechos, de forma impropia, y que ha realizado una evaluación no objetiva y sesgada de los mismos en favor de los intereses de la industria local, de manera inconsistente con las previsiones del Acuerdo Antidumping. Tampoco en este caso Brasil aporta pruebas que permitan acreditar su afirmación de que la evaluación "no ha sido objetiva" o calificar dicha investigación como sesgada.

14. Asimismo, la Argentina destaca que conforme lo dispuesto en el inciso ii) del párrafo 6 del artículo 17, el Grupo Especial "… interpretará las disposiciones pertinentes del Acuerdo de conformidad con las reglas consuetudinarias del derecho internacional público". O sea que, siguiendo la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, debe procederse analizando el sentido corriente de la disposición en su contexto y a la luz de su objeto y fin. El principio de buena fe contrariamente a lo afirmado sin fundamentar por Brasil[6], es un principio que está en la base de la norma *pacta sunt servanda* , es decir que los tratados deben ser cumplidos por las Partes de acuerdo al principio de buena fe.

15. Asimismo, la Argentina entiende que la no identificación por parte de Brasil de la práctica de mala fe atribuida a la Argentina, compromete gravemente las posibilidades de defensa en virtud de lo dispuesto en el párrafo 10 del artículo 3 del ESD. De acuerdo con esta disposición, si surge una diferencia, las Partes deben entablar un procedimiento de solución de diferencias "de buena fe y esforzándose por resolverla". Así, en *Estados Unidos - Trato fiscal aplicado a las "empresas en el extranjero"*[7], el Órgano de Apelación sostuvo que: "Mediante el cumplimiento de buena fe, los Miembros reclamantes proporcionan a los Miembros demandados toda la protección y oportunidad para defenderse que prevé la letra y el espíritu de las normas de procedimiento. En virtud del mismo principio de buena fe, los Miembros demandados deben señalar oportuna y prontamente las deficiencias de procedimiento alegadas a la atención del Miembro reclamante, así como a la del OSD o del Grupo Especial, de manera que, en caso necesario, éstas puedan corregirse para solucionar las diferencias."

II.2 OTROS PRINCIPIOS Y NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO APLICABLES AL CASO

16. La reclamación de Brasil también contradice principios generales del derecho internacional e ignora normas relevantes en materia de interpretación de las obligaciones OMC: en tal sentido, la República Argentina desea señalar que el principio de Buena Fe en la observancia de los acuerdos y en la conducta de los Estados, se contradice con la conducta de Brasil que omite toda referencia al laudo arbitral sobre el mismo reclamo en ámbito MERCOSUR y que resultó desfavorable para sus pretensiones. En esta oportunidad Brasil pretende revertir ese resultado negativo reargumentado su caso bajo el Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD) de la Organización Mundial del Comercio.

17. Asimismo, Argentina se pregunta si Brasil al omitir toda referencia a que el hecho había sido previamente debatido y resuelto en el ámbito MERCOSUR no ha incurrido en un ejercicio abusivo de los derechos que le corresponden en virtud de los Acuerdos sobre la OMC.

---

[5] Primera comunicación escrita de Brasil, párrafo 28.

[6] Primera comunicación escrita de Brasil, párrafo 31.

[7] Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Trato fiscal aplicado a las "empresas de ventas en el extranjero"*, WT/DS108/AB/R, adoptado el 20 de marzo de 2000, párrafo 166".

18. Argentina y Brasil no son sólo Estados Miembros de la OMC sino también Estados Partes del MERCOSUR y en calidad de tales, no pueden hacer abstracción de la normativa jurídica y la relación particular creada por el proceso de integración. La existencia de esta normativa y las adjudicaciones ("*adjudications*") de su sistema de solución de controversias, deben ser tenidas en cuenta por el Grupo Especial al desarrollar sus funciones conforme el ESD. Esto es de conformidad con la obligación del artículo 3.2 del Entendimiento, en el sentido aclarar las obligaciones de los acuerdos de conformidad con las normas usuales de interpretación del Derecho Internacional Público

19. Tanto la Argentina como Brasil en su carácter de Estados Parte del MERCOSUR han contraído una serie de compromisos con base en el Tratado de Asunción para la Constitución del Mercado Común del Sur y del Protocolo de Brasilia para la Solución de Controversias - "Protocolo de Brasilia"[8] para la resolución de conflictos entre los Estados Partes. En particular, estos instrumentos adquieren relevancia ya que el reclamo de Brasil contra la Argentina en este caso ya ha sido objeto de tratamiento[9] y resolución a través del procedimiento regulado por dichos acuerdos regionales.

20. El haber decidido Brasil recurrir al mecanismo del *Protocolo de Brasilia* como instancia apropiada para la solución de la controversia, sumado al hecho de que no se trataba de la primera vez en que se aplicaba la solución de controversias a nivel regional -tres laudos ya habían sido dictados con anterioridad[10] entre Argentina y Brasil-, implica una aceptación plena de la normativa MERCOSUR y del procedimiento para resolver controversias *in totum*, incluido el carácter inapelable y definitivo de los laudos.[11] Argentina entiende que la conducta desarrollada por Brasil ha sido

---

[8] Tratado para la Constitución de un Mercado Común entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental Del Uruguay, firmado el 26 de marzo de 1991, que entró en vigencia el 29 de noviembre de 1991 y que fuera notificado en ámbito GATT/OMC, el 5 de marzo de 1992. Protocolo de Brasilia para la Solución de Controversias, firmado el 17 de diciembre de 1991. Normativa disponible en: http:/ www.mercosur.org.uy.

[9] Laudo del Tribunal Arbitral Ad Hoc del MERCOSUR constituido para decidir sobre Controversia entre la República Federativa de Brasil y la República Argentina sobre "Aplicación de Medidas Antidumping contra la exportación de pollos enteros, provenientes de Brasil, (Res. 574/2000) del Ministerio de Economía de la República Argentina. Fecha: 21 de mayo de 2001.

[10] I. Laudo del Tribunal Arbitral Ad Hoc del MERCOSUR constituido para la Controversia sobre Comunicados Nº 37 del 17 de diciembre de 1997 y Nº 7 del 20 de febrero de 1998 del Departamento de Operaciones de Comercio Exterior (Decex) de la Secretaría de Comercio Exterior (Secex): Aplicación de Medidas Restrictivas al Comercio Recíproco. Fecha: 28 de abril de 1999.

II. Laudo del Tribunal Arbitral Ad Hoc del MERCOSUR constituido entender en la Reclamación de la República Argentina a la República Federativa del Brasil, sobre Subsidios a la Producción y Exportación de Carne de Cerdo. Fecha: 27 de septiembre de 1999.

III. Laudo del Tribunal Arbitral Ad Hoc del MERCOSUR constituido para decidir sobre Aplicación de Medidas de Salvaguardia sobre Productos Textiles (Res. 861/99) del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Fecha: 10 de marzo de 2000.

Normativa disponible en: http:/ www.mercosur.org.uy.

[11] Artículos 8 y 21 del Protocolo de Brasilia:

"Artículo 8: Los Estados Partes declaran que reconocen como obligatoria, ipso facto y sin necesidad de acuerdo especial, la jurisdicción de Tribunal Arbitral que en cada caso se constituya para conocer y resolver todas las controversias a que se refiere el presente Protocolo."

Artículo 21:

1. Los laudos del Tribunal Arbitral son inapelables, obligatorios para los Estados Partes en la controversia a partir de la recepción de la respectiva notificación y tendrán respecto de ellos fuerza de cosa juzgada.

consecuente y reiterada, aceptando al sistema para la solución de controversias del ámbito MERCOSUR y a sus consecuencias, los laudos arbitrales. No se trata de una práctica aislada sino de un procedimiento reglado por un Protocolo vigente y que ha sido aplicado desde 1999 hasta la actualidad en un total de ocho casos[12], estando en siete de los cuales involucrado Brasil y en cinco de ellos resolviéndose controversias entre Argentina y Brasil. El Grupo Especial no puede ignorar este hecho y su consecuencia normativa, esto es un laudo arbitral de tribunal internacional.

21. La República Argentina afirma que la reclamación de Brasil en el ámbito OMC contraría: a) la práctica constante de Brasil, en tanto Estado Parte del MERCOSUR desde 1991 hasta el presente, de cumplir los compromisos asumidos y recurrir al procedimiento para la solución de controversias previsto en el Protocolo de Brasilia y afianzado a través de la firma del Protocolo de Olivos[13]; b) un comportamiento constante e inequívoco de Brasil en el sentido de aceptar el alcance

---

2. Los laudos deberán ser cumplidos en un plazo de quince días (15) días, a menos que el Tribunal Arbitral fije otro plazo." (Se acompaña Anexo ARG-XXXII).

[12] I. Laudo del Tribunal Arbitral Ad Hoc del MERCOSUR constituido para la Controversia sobre Comunicados Nº 37 Del 17 de diciembre de 1997 y Nº 7 del 20 de febrero de 1998 del Departamento de Operaciones de Comercio Exterior (Decex) de la Secretaría de Comercio Exterior (Secex) : Aplicación de Medidas Restrictivas al Comercio Recíproco. Fecha: 28 de abril de 1999.

II. Laudo del Tribunal Arbitral Ad Hoc del MERCOSUR constituido entender en la Reclamación de la República Argentina a la República Federativa del Brasil, sobre Subsidios a la Producción y Exportación de Carne de Cerdo. Fecha: 27 de septiembre de 1999

III. Laudo del Tribunal Arbitral Ad Hoc del MERCOSUR constituido para decidir sobre Aplicación de Medidas de Salvaguardia sobre Productos Textiles (Res. 861/99) del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Fecha: 10 de marzo de 2000.

IV. Laudo del Tribunal Arbitral Ad Hoc del MERCOSUR constituido para decidir sobre Controversia entre la República Federativa de Brasil y la República Argentina sobre "Aplicación de Medidas Antidumping contra la exportación de pollos enteros, provenientes de Brasil, (Res. 574/2000) del Ministerio de Economía de la República Argentina. Fecha: 21 de mayo de 2001.

V. Laudo del Tribunal Arbitral Ad Hoc del MERCOSUR constituido para entender de la controversia presentada por la República Oriental del Uruguay a la República Argentina sobre "Restricciones de Acceso al Mercado Argentino de Bicicletas de Origen Uruguayo". Fecha: 29 de septiembre de 2001.

VI. Laudo del Tribunal Arbitral Ad Hoc del MERCOSUR constituido para entender de la controversia presentada por la República Oriental del Uruguay a la República Federativa del Brasil sobre "Prohibición de Importación de Neumáticos Remoldeados (Remolded) Procedentes de Uruguay". Fecha: 9 de enero de 2002.

VII. Laudo Arbitral del Tribunal Arbitral Ad Hoc de MERCOSUR constituido para entender en la controversia presentada por la República Argentina a la República Federativa del Brasil Sobre "Obstáculos al ingreso de productos fitosanitarios argentinos en el mercado brasileño. No incorporación de las Resoluciones GMC Nº 48/96, 87/96, 149/96, 156/96 y 71/98 lo que impide su entrada en vigencia en el MERCOSUR". Fecha: 19 de abril de 2002.

VIII. Laudo del Tribunal Arbitral Ad hoc de MERCOSUR constituido para decidir en la controversia entre la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay sobre la aplicación del IMESI (Impuesto específico interno) a la comercialización de cigarrillos. Fecha: 21 de mayo de 2002.
Textos completos de los laudos mencionados en: http:/ www.mercosur.org.uy

[13] Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el MERCOSUR firmado el 18 de febrero de 2002 entre los cuatro Estados Partes del MERCOSUR -aún no vigente-. Texto completo del Protocolo de Olivos en: http:/ www.mercosur.org.uy.

de los laudos arbitrales, existiendo hasta la fecha ocho laudos y habiendo participado Brasil en siete de los ocho, ya sea como actor o como demandado.

22. La República Argentina concluye que:

- a los efectos de aclarar el alcance de las obligaciones *in casu*, debe tenerse en cuenta el marco normativo y las consecuencias que se derivan de haberse aplicado el Protocolo de Brasilia a la disputa en cuestión, y;

- subsidiariamente es aplicable a esta controversia el principio del *estoppel* y las consecuencias que de éste se derivan, ya que hubo de parte de Brasil un comportamiento constante e inequívoco que creó una convicción en la Argentina en materia de resolución de las controversias comerciales entre ambas Partes en el ámbito MERCOSUR y del respeto del alcance de las decisiones.

II.3 PETITORIO DERIVADO DE ESTA SECCIÓN

23. Como ha sido señalado por la Argentina, la omisión de toda referencia por parte de Brasil acerca de que la diferencia ha sido previamente debatida y resuelta por otro Tribunal Internacional, hace evidente que la actual presentación en el ámbito OMC, implica un ejercicio abusivo de derechos por parte de Brasil

24. Adicionalmente, teniendo en cuenta los compromisos internacionales vigentes, la conducta y práctica anteriores y subsecuentes de Brasil de aceptar el ámbito MERCOSUR para debatir y resolver las controversias comerciales con la Argentina, en tanto Estados Parte del MERCOSUR y dados los términos en los cuales ha sido planteada, la reclamación de Brasil en el ámbito OMC configura una situación de *estoppel* oponible a Brasil bajo el ESD.

25. Por las razones expuestas en los párrafos anteriores y considerando especialmente que el reclamo de Brasil conlleva un cuestionamiento de idéntica medida tanto en la actual presentación en ámbito OMC como en la controversia concluida en el ámbito MERCOSUR, la República Argentina solicita que el Grupo Especial no se pronuncie acerca de los 41 reclamos sobre alegaciones de inconsistencia de la normativa Argentina con el Acuerdo Antidumping, contenidas en el párrafo 549 de la Primera comunicación escrita de Brasil y consecuentemente rechace las peticiones del párrafo 550 de la misma comunicación.

26. Si el Grupo Especial rechazara este petitorio y considerara que debe pronunciarse sobre las reclamaciones de Brasil, Argentina fundamenta sustantivamente en la Sección siguiente sobre todos los reclamos presentados.

III. RECLAMOS SUSTANTIVOS

III.1 INICIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

III.1.1 RECLAMOS 1 Y 5: CONSISTENCIA CON EL ARTÍCULO 5.2

27. Brasil alega que la información acompañada por el CEPA en su solicitud de apertura de investigación -en relación al ajuste a efectuar al valor normal por las diferencias de características físicas- no se encontraba respaldada por documentación (Reclamo 1), y que el valor normal y el precio de exportación fueron calculados en base a diferentes períodos (Reclamo 5).

Texto del artículo 5.2

En su parte relevante, el artículo 5.2 establece:

> *Con la solicitud a que se hace referencia en el párrafo 1 se incluirán pruebas de la existencia de: a) dumping; b) un daño en el sentido del artículo VI del GATT de 1994 según se interpreta en el presente Acuerdo y c) una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el supuesto daño. No podrá considerarse que para cumplir los requisitos fijados en el presente párrafo basta una simple afirmación no apoyada por las pruebas pertinentes. La solicitud contendrá la información que razonablemente tenga a su alcance el solicitante sobre los siguientes puntos: (Subrayado añadido.)*
>
> *(...)*
>
> *iii) datos sobre los precios a los que se vende el producto de que se trate cuando se destina al consumo de los mercados internos del país o países de origen o de exportación (o, cuando proceda, datos sobre los precios a los que se venda el producto del país o países de origen o de exportación a un tercer país o a terceros países, o sobre el valor reconstruido del producto) así como sobre los precios de exportación o, cuando proceda, sobre los precios a los que el producto se revenda por primera vez a un comprador independiente en el territorio del Miembro importador;*
>
> *iv) datos sobre la evolución del volumen de las importaciones supuestamente objeto de dumping, el efecto de esas importaciones sobre los precios del producto similar en el mercado interno y la consiguiente repercusión de las importaciones en la rama de la producción nacional, según vengan demostrados por los factores e índices pertinentes que influyan en el estado de la rama de producción nacional, tales como los enumerados en los párrafos 2 y 4 del artículo 3.*

Alegación argentina

28. Contrariamente a lo sostenido por Brasil en sus reclamos 1 y 5, la peticionante acompañó toda la prueba necesaria relacionada con el valor normal y el valor de exportación, así como las pruebas pertinentes para efectuar los ajustes necesarios a fin de realizar una comparación equitativa entre el valor normal y el valor de exportación.

29. Estamos de acuerdo con Brasil, atento que así lo exige el artículo 5.2, que la peticionante debe aportar pruebas -y no meras alegaciones o aseveraciones, de la existencia del dumping, el daño a la rama de la producción nacional, así como de la relación de causalidad, pruebas respecto a estos tres elementos que se encuentran explicitados en los literales del párrafo 2 del artículo 5.

30. Sin embargo, el mismo artículo 5.2 establece que la peticionante debe acompañar en su solicitud la información que razonablemente tenga a su alcance respecto a: solicitante y rama de la producción nacional cuando corresponda (artículo 5.2 i), producto similar (artículo 5.2 ii), datos sobre precios -valor normal y valor de exportación- (artículo 5.2 iii) y datos sobre evolución de importaciones objeto de dumping, su impacto, repercusión e influencia, tanto en el daño como en la relación de causalidad (artículo 5.2 iv).

31. A juicio de la Argentina, cuando el artículo 5.2 establece: "La solicitud contendrá la información que razonablemente tenga a su alcance el solicitante ...", está previendo las dificultades que pueden encontrar los productores nacionales en la búsqueda de documentación probatoria de la situación que denuncian.

32. Cabe indicar que la peticionante presentó con su solicitud la documentación que estaba a su alcance. En ese sentido, no es dable que la autoridad de aplicación exija a los productores nacionales un nivel de requisitos tal que implicaría no permitirles a los productores el acceso a este tipo de procedimientos. La previsión del artículo 5.2 aludida anteriormente permite a los peticionantes el

acceso a este tipo de procedimientos en concordancia con el respeto del derecho de defensa de las partes, situación que no sería posible si se les exigiera a los peticionantes pruebas que están más allá de su alcance.

33. En ese sentido, la Argentina considera que los estándares de pruebas a presentar en la instancia que va desde la solicitud hasta la declaración de apertura de investigación, serán complementados en las instancias posteriores del procedimiento acorde con la posibilidad de contar con la participación de los productores-exportadores involucrados y demás partes interesadas.

34. Es decir que el solicitante de apertura de una investigación no está obligado a probar de forma indubitable la existencia del dumping, el daño y la relación causal, atento a que la determinación definitiva de la existencia de estos elementos es competencia de la autoridad investigadora, que completará exhaustivamente la investigación una vez decretada la apertura de la misma. Como establece el Acuerdo, no basta la simple afirmación de la existencia de dumping, daño y relación causal si no se encuentra apoyada en pruebas pertinentes condicionadas a la información que razonablemente tenga a su alcance el solicitante. La autoridad las evaluará y examinará su exactitud y pertinencia, al solo efecto de determinar si se justifica el inicio de la investigación. A partir de la apertura, tendrán derecho de defensa las empresas denunciadas, así como los importadores, en todas las etapas del procedimiento.

35. Si el Acuerdo Antidumping otorga a los Miembros un plazo tan amplio como el de 12 a 18 meses para llevar a cabo una investigación es, entre otras razones, por la complejidad y detalle de la investigación a llevar a cabo, analizando, verificando y evaluando objetivamente las pruebas que deben aportar todos los participantes durante el procedimiento a fin de determinar la pertinencia de aplicar o no derechos antidumping de conformidad con dicho Acuerdo.

36. Es decir que durante el transcurso del procedimiento, las pruebas inicialmente aportadas por la solicitante y aquellas aportadas *a posteriori* serán confrontadas con aquellas acompañadas por las empresas denunciadas y demás partes interesadas, y verificadas *in situ*, de ser necesario, por la autoridad de aplicación a fin de realizar una evaluación objetiva y arribar a conclusiones razonadas.

37. Conforme al Acuerdo existen claramente dos niveles de exigencia distintos en cuanto, por un lado, a la calidad y cantidad de las pruebas que deben ser aportadas. Por una parte, aquellas aportadas con la solicitud de apertura que, a tenor del Acuerdo son aquellas que razonablemente tenga a su alcance la solicitante, y por otro, aquellas que deben ser acompañadas una vez que se inicia la etapa de la investigación. De igual modo, debe ser evidentemente diferente y así está reglado en el propio Acuerdo, el nivel de examen de las pruebas que debe efectuar la autoridad para decretar la apertura de una investigación, de aquella evaluación y análisis que debe efectuar dicha autoridad de las pruebas aportadas por todas las partes interesadas durante toda la investigación vis-a-vis los requisitos sustanciales para arribar a la conclusión de la existencia de dumping, de daño y de la relación de causalidad durante la etapa de la investigación.

38. Cabe aquí recordar lo señalado por el Grupo Especial[14] en el asunto *Guatemala - Cemento I*, al citar el asunto *Estados Unidos - Medidas que afectan a las importaciones de madera blanda procedentes del Canadá*[15], donde el Grupo Especial observó lo siguiente:

> "Al analizar más a fondo el significado de la expresión "pruebas suficientes", el Grupo Especial observó **que el peso y la calidad de las pruebas que deben exigirse**

[14] *Guatemala - Investigación antidumping sobre el cemento Portland procedente de México* (WT/DS60/R) informe del Grupo Especial, párrafos 7.55 y 7.56.

[15] SCM/162.

> **de una autoridad investigadora antes de iniciar una investigación necesariamente han de ser menores que las exigidas de esa autoridad en el momento de pronunciar una determinación definitiva** …".[16] (Negritas agregadas.)

39. El Acuerdo no exige que la peticionante aporte pruebas en la solicitud que no están razonablemente a su alcance ya que, en definitiva, las pruebas por excelencia sobre valor normal y valor de exportación se encuentran en poder de las empresas denunciadas y sus importadores. Por lo tanto, tampoco el Acuerdo exige a la autoridad que evalué pruebas que aún no están en su poder, ya que las mismas serán acompañadas durante el curso del procedimiento.

40. Asimismo, no debe olvidarse que aunque el artículo 5.2 establezca que la peticionante debe acompañar pruebas de la existencia de dumping, daño y de la relación causal, no implica que dicha prueba aportada de por sí determine la existencia de dumping, daño y de la relación causal, sino que la prueba, aunque no lo diga el propio artículo, es la de la **existencia presunta** de dumping, daño y causalidad **que configura una base mínima que viabiliza una apertura de investigación**. Esta interpretación se deriva del análisis del contexto del artículo y del objeto y fin del Acuerdo. Lo contrario implicaría que una investigación no seria necesaria ya que las pruebas aportadas con la solicitud serían definitivas, lo que carece de lógica y se contradice con el propio Acuerdo.

41. En este sentido, el artículo 1 del Acuerdo Antidumping establece como principios que informan a dicho Acuerdo que: "Sólo se aplicarán medidas antidumping en las circunstancias previstas en el artículo VI del GATT de 1994 y en virtud de investigaciones iniciadas y realizadas de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo ...".

42. Necesariamente, los requisitos de "iniciadas" deben ser diferentes a los requisitos para aplicar una medida definitiva. Esta es la razón por la que puede iniciarse una investigación, aplicarse derechos provisorios y eventualmente decidirse no imponer una medida definitiva.

43. Asimismo, cabe destacar que la autoridad de aplicación argentina pone a disposición de los solicitantes de apertura de investigación de presunto dumping un **"formulario modelo"** que establece todas las pruebas que la peticionante debe aportar conforme lo exige el artículo 5.2 del Acuerdo Antidumping. La normativa argentina ha internalizado en su totalidad el Acuerdo Antidumping. En ese sentido, los formularios modelos reúnen los requisitos establecidos en el artículo 5.2 y sus literales. La peticionante contestó el formulario y acompañó en anexos las pruebas requeridas.

44. Al respecto, la Argentina recuerda lo señalado por el Grupo Especial en el asunto *México - Investigación Antidumping sobre el jarabe de maíz con alta concentración de fructosa (JMAF) procedente de los Estados Unidos*, en el sentido que:

> "… en el párrafo 2 del artículo 5 **no se requiere que las solicitudes contengan un análisis sino más bien que contengan datos, en el sentido de pruebas, para apoyar las alegaciones**. Aunque reconocemos que un cierto análisis que pusiera en relación los datos y las alegaciones sería útil para estimar el fondo de una solicitud, **no podemos interpretar que el texto del párrafo 2 del artículo 5 requiere que se realice un análisis de ese tipo en la propia solicitud**."[17] (Resaltado agregado.)

45. Por lo tanto, la Argentina reitera que, contrariamente a lo sostenido por Brasil en sus reclamos 1 y 5, la peticionante acompañó toda la prueba necesaria relacionada con valor normal y valor de exportación, así como las pruebas pertinentes para efectuar los ajustes necesarios, a fin de realizar una comparación equitativa entre ambos valores.

---

[16] *Idem.*, párrafo 332.

[17] WT/DS132/R, informe del Grupo Especial, párrafo 7.76.

46. En lo que respecta al valor normal, las pruebas fueron suministradas por el CENTRO DE EMPRESAS PROCESADORAS AVICOLAS -el CEPA- a partir de una publicación (JOX) con valores correspondientes al producto en el mercado interno brasileño, de los que se deriva un cálculo efectuado por el mismo para homogeneizar el producto que se comercializa en el mercado doméstico de Brasil y el que se vende a nuestro país, al cual se le extrae la cabeza y las patas.

47. A los efectos de tener en cuenta las diferencias que inciden en la comparabilidad de precios, se tuvo en cuenta lo informado por la solicitante, tal como fuera explicado en el informe técnico pertinente.

48. En el Cuerpo I, fs. 27 a 34, 37, 38, 43 y 44[18] la peticionante presenta información sobre precios de pollos (con patas, cabeza y menudos) vigentes en San Pablo, con su respectiva relación peso-carne (transcripto en el informe de apertura de investigación de la Dirección).

49. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5.2, la autoridad efectuó todos los ajustes necesarios de acuerdo a la información y documentación acompañada por la peticionante en su solicitud, que era la que "razonablemente tenía a su alcance".

50. Es decir que la peticionante acompañó información que razonablemente tenía a su alcance en relación al valor normal, adjuntando una publicación de JOX Asesoría Agropecuaria. La prueba aportada es un valor representativo que surge de una publicación especializada para un período determinado. Acompañar una publicación especializada como evidencia es totalmente válido atento que sería al menos difícil suponer que el CEPA pudiera haber acompañado facturas de venta de los exportadores brasileños al mercado interno de Brasil en las exactas condiciones de comparación que el propio acuerdo exige. Los importadores argentinos son en su mayoría distribuidores, mayoristas o grandes mayoristas. Fue por ello que el CEPA acompañó prueba mediante los datos contenidos en la mencionada publicación especializada y de reconocida seriedad, sobre valor normal que reflejaba -con un nivel de aproximación aceptable en esta instancia- los mismos niveles comerciales de venta.[19]

51. El haber aportado una prueba en la solicitud con un nivel de aproximación adecuado suministrando un precio comparable de un producto similar destinado al consumo en el país de origen, hizo innecesario realizar ajuste alguno en relación con los mercados a fin de efectuar una comparación equitativa, ya que los datos de los precios que constituían la prueba ofrecida como valor normal y los precios de exportación acompañados por la peticionante correspondían al mismo nivel comercial. Ambos precios se refieren al punto inicial de la cadena de comercialización con lo cual, en relación a este punto, no se vio afectada la comparabilidad de los mismos, encontrándose cubiertos los requerimientos del Acuerdo a efectos de la determinación de existencia de dumping en la etapa previa a la apertura de la investigación.

52. La peticionante aportó un informe de JOX Asesoría Agropecuaria donde se destaca que "... *las cotizaciones de pollos según constan en nuestro boletín informativo, se refiere a pollos enfriados con patas, cabeza y menudos*".[20]

53. Consecuentemente, y atento que a la Argentina se exporta el pollo sin patas ni cabeza, el CEPA acompañó un anexo a la Nota 220/97 donde adjunta el cálculo necesario para efectuar un ajuste equitativo entre el pollo con patas y cabeza vendido en el mercado interno del Brasil y aquel exportado al territorio argentino.

---

[18] Anexo ARG-I.

[19] Ver folio 170 del Expediente.

[20] Ver folio 180 del Expediente.

54. Cabe destacar que ninguno de los literales del artículo 5.2 establece que la peticionante deba acompañar en la solicitud de apertura de investigación la totalidad de las pruebas exigidas en los artículos 2 y 3.

55. Al respecto cabe citar lo sostenido por el Grupo Especial en el asunto *Guatemala - Cemento II*, en el sentido que:

> "... **Naturalmente, no pretendemos sugerir que la autoridad investigadora haya de contar en el momento en que inicia una investigación con pruebas de la existencia de dumping, en el sentido del artículo 2, en la cantidad y de la calidad que serían necesarias para apoyar una determinación preliminar o definitiva.** Una investigación antidumping es un proceso en el que se llega gradualmente a la certidumbre de la existencia de todos los elementos necesarios para adoptar una medida, conforme avanza la investigación ...
>
> ... En consonancia con nuestro análisis anterior, **consideramos que, aunque esas disposiciones del artículo 2 no son "aplicables", como tales, a las determinaciones relativas a la iniciación,** son sin duda pertinentes a la consideración por las autoridades investigadoras de la existencia o no de pruebas suficientes de dumping que justifican la iniciación de una investigación."[21] (Resaltado agregado.)

56. El artículo 5.2 no exige que la peticionante aporte pruebas sobre valor normal respecto a todo el período acompañado como prueba sobre valor de exportación, atento a que es obvio que cualquier peticionante tendrá razonablemente a su alcance la información publicada por los organismos oficiales de su país sobre importaciones (precio de exportación). En otras palabras, es claro y razonable que **la peticionante no haya tenido a su alcance la misma cantidad y calidad de información sobre el valor normal de venta en el mercado interno del país de origen de investigación por dumping, que sobre el precio de exportación**.

57. Por lo expuesto, la Argentina afirma que de conformidad con los precedentes GATT/OMC, la peticionante acompañó las pruebas necesarias a los efectos de la apertura en relación al dumping, el daño y la relación causal, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.2 del AD y, en consecuencia, que los reclamos 1 y 5 de Brasil carecen de fundamento.

III.1.2 RECLAMOS 2, 4, 6 Y 8: CONSISTENCIA CON EL ARTÍCULO 5.3

58. Brasil alega que al aceptar el cálculo de ajuste del valor normal presentado por la peticionante (Reclamo 2), al establecer precios de exportación basados sólo en exportaciones cuyos precios eran inferiores al valor normal (Reclamo 4), al calcular márgenes de dumping entre el valor normal y el precio de exportación basados en ventas que no habían sido hechas en períodos lo más cercanos posibles (Reclamo 6) y dado que los datos sobre dumping y daño abarcaban diferentes períodos (Reclamo 8), todo ello habría llevado, según Brasil, a que la Argentina actuara de manera inconsistente con el artículo 5.3 del Acuerdo Antidumping.

Texto del artículo 5.3

> *Las autoridades examinarán la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas con la solicitud para determinar si existen pruebas suficientes que justifiquen la iniciación de una investigación.*

[21] *Guatemala - Medida Antidumping definitiva aplicada al cemento Portland gris procedente de México* (WT/DS156/R), informe del Grupo Especial, párrafos 8.35 y 8.36.

Alegación argentina

59. Contrariamente a lo que Brasil señala en relación a los reclamos 2, 4, 6 y 8, la Argentina afirma que la Autoridad de Aplicación examinó la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas por la peticionante y concluyó que las mismas eran suficientes para determinar la apertura de la investigación.

60. El párrafo 3 del artículo 5 sólo exige que la autoridad investigadora examine la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas por la peticionante. En otras palabras, la autoridad investigadora debe examinar la exactitud y pertinencia en cuanto a que las pruebas procedan de una fuente que se encuentre avalada por documental respaldatoria y que las mismas sirvan como evidencia de la existencia de los requisitos establecidos en el artículo 5.2 del AD, de forma tal que permitan a la Autoridad de Aplicación determinar la existencia de **pruebas suficientes que justifiquen la iniciación de una investigación**.

61. Es decir, el artículo 5.3 del AD no impone a la autoridad la obligación de llevar adelante una investigación exhaustiva en esta etapa, en el sentido de comprobar la existencia de dumping, daño y causalidad, sino la obligación de examinar las pruebas aportadas en cuanto a su exactitud y pertinencia.

62. Una vez iniciada la investigación, conforme el Acuerdo, la autoridad tiene 12 meses o como máximo 18 meses para confrontar las pruebas aportadas por la peticionante con las pruebas aportadas por todas las partes interesadas, y verificar la veracidad de las mismas.

63. No debe perderse de vista que el procedimiento que va desde la solicitud de apertura de una investigación hasta que se determina la pertinencia de la misma, es un procedimiento *inaudita parte* donde no se ha dado aún participación a los denunciados, ni éstos han podido aportar pruebas en contra de las acompañadas por la peticionante.

64. Asimismo, cabe destacar que el nivel de pruebas "suficientes" para justificar la iniciación de una investigación es considerablemente inferior al nivel exigido para la determinación de la aplicación de una medida preliminar o definitiva.

65. Conforme lo manifestado por el Presidente del Grupo Especial que examinó el asunto *Estados Unidos - Medidas que afectan a las exportaciones canadienses de madera blanda* que fuera citado por el Grupo Especial que trató el asunto *Guatemala - Cemento I*:

> "*... Surgieron varias cuestiones acerca de determinados aspectos de las pruebas consideradas por el Departamento del Comercio de los Estados Unidos. ...* ***Sin embargo, el Grupo Especial tuvo que tener en cuenta que no examinaba una determinación de la existencia de subvención, daño y causalidad, sino una constatación en el sentido de que había suficientes elementos probatorios de la existencia de esos elementos para justificar una investigación ... habida cuenta del umbral exigido por el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo para la iniciación de una investigación sobre derechos compensatorios, no podía considerar que la iniciación iniciada por los Estados Unidos en este asunto fuera incompatible con dicho artículo, teniendo en cuenta la norma aplicable de examen***."[22] (Resaltado añadido.)

[22] Carta del Presidente del Grupo Especial al Presidente del Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias del GATT, SCM/163, 19 de febrero de 1993.

66. Nuevamente, en el asunto *Guatemala - Cemento I* el Grupo Especial citó el asunto *Estados Unidos - Madera blanda*, observando lo siguiente:

> "*Al analizar más a fondo el significado de la expresión "pruebas suficientes", el Grupo Especial observó* ***que el peso y la calidad de las pruebas que deben exigirse de una autoridad investigadora antes de iniciar una investigación necesariamente han de ser menores que las exigidas de esa autoridad en el momento de pronunciar una determinación definitiva ….***[23]

- **En relación a la alegación de Brasil acerca de que la Autoridad de Aplicación habría actuado de manera inconsistente con el artículo 5.3 al aceptar el cálculo de ajuste del valor normal presentado por la peticionante (Reclamo 2), cabe formular las siguientes consideraciones:**

67. La Resolución ex-SCI N° 349/91, relativa al formulario de presentación para una solicitud de inicio de investigación por dumping, otorga el carácter de Declaración Jurada a la información de la solicitante contenida en la misma. En relación a este punto resulta oportuno señalar que la Autoridad de Aplicación procedió al análisis de la información obrante en las actuaciones al momento de propiciarse la apertura de investigación. Prueba de ello, lo constituye la intención por reunir elementos adicionales a partir de registros oficiales de las operaciones de importación, teniendo en cuenta los datos allí detallados y reflejando en su Informe técnico el análisis de dicha información.

68. De modo adicional, se recuerda lo estipulado en el artículo 5.2 del Acuerdo en cuanto que "*la solicitud contendrá la información que razonablemente tenga a su alcance el solicitante ...*" Conforme a ello, la Argentina procedió de conformidad con los artículos 2 y 5.3 del Acuerdo Antidumping. Se tuvieron en cuenta en la comparabilidad de precios los ajustes sobre los cuales se disponía de elementos que permitían su consideración, realizándose los ajustes en esa instancia del procedimiento en función a los elementos obrantes en las actuaciones.

69. Una vez declarada admisible la solicitud y ya en la etapa anterior a la apertura de investigación, los organismos técnicos procedieron al análisis de toda la documentación presentada.

70. Ahora bien, con relación a la prueba de valor normal tomada para la apertura de investigación, se indica que se trata de una publicación de la Asessoria JOX del 30 de junio de 1997 (Cuerpo I, fs. 27)[24] correspondientes a pollos con patas, cabeza y menudos, por lo cual se refiere a precios de venta en el mercado interno del producto objeto de investigación, estando la misma dentro del período analizado en esa instancia.

71. En relación a lo que Brasil señala en el párrafo 77 de su comunicación acerca de que la información provista por JOX se refiere exclusivamente a pollos enfriados vendidos en San Pablo con cabeza, pies y menudos para un día de 1997, cabe destacar que la Autoridad de Aplicación, al examinar la exactitud y pertinencia de dicha prueba tuvo en cuenta, en primer lugar, que JOX es una publicación especializada que aporta un valor representativo promedio que refleja el estado del mercado de San Pablo. Dicho mercado es uno de los más representativos de Brasil, que puede compararse con Buenos Aires como un gran centro urbano que refleja las pautas de consumo nacional.

72. El acuerdo establece la pertinencia de utilizar a los efectos de la comparación productos idénticos o similares. Para el caso de productos similar, de corresponder, deberán tenerse en cuenta posibles ajustes. Sin embargo la pertinencia final de los ajustes es parte del proceso de investigación.

---

[23] WT/DS60/R, informe del Grupo Especial, párrafo 7.55.

[24] Ver fs. citada en Anexo ARG-I.

En efecto en el articulo 2.4 *in fine* establece que la autoridad de aplicación indicaran a las partes afectadas que información se necesita para garantizar una comparación equitativa.

73. Es en este sentido en el cual deben considerarse las mencionadas diferencias físicas entre el pollo vendido en el mercado de San Pablo respecto del cual se contó con pruebas de su valor suficientes para la apertura de la investigación y el valor comparable para la determinación de la existencia probable de dumping que indicara, juntamente con la existencia de daño y la relación de causalidad, la pertinencia de abrir la investigación.

74. Asimismo, la utilización de datos provenientes de una publicación especializada sobre un producto similar en el mercado de origen representativo (pollo con cabeza y con patas en el mercado de San Pablo) es suficiente y adecuada como prueba a los efectos de considerar la apertura de la investigación solicitada. Esta evidencia no pretende (ni debe hacerlo) probar que la totalidad del producto en el mercado de origen es idéntico al informado, sino concordante con lo dispuesto en el Acuerdo, suministrar información adecuada y comparable a efectos de probar la existencia de elementos que ameriten desde el punto de vista del dumping la apertura de la investigación.

75. Las diferencias físicas entre el producto en el mercado de origen y el producto exportado hacia Argentina ameritaban, a criterio de la Autoridad de Aplicación, la realización de un ajuste a efecto de eliminar posibles diferencias que hicieran a la comparabilidad de los precios, tal como lo establece el articulo 2.4 del Acuerdo. Es por ello que la Autoridad de Aplicación consideró que era necesario hacer un ajuste equitativo entre el pollo vendido en San Pablo con patas y cabeza y el exportado por Brasil hacia la Argentina, sin patas ni cabeza.

76. Asimismo, es atribución de la Autoridad de Aplicación -tal como lo establece el artículo 5.3 del Acuerdo-, determinar si las pruebas aportadas constituían pruebas suficientes que justificaran el inicio de la investigación. En este sentido, la Autoridad de Aplicación, contemplando las disposiciones del Acuerdo en lo pertinente a ajustes y comparabilidad de precios, consideró que teniendo en cuenta que el artículo 5.3 del AD no define el significado de "pruebas suficientes", la determinación de la existencia de que las pruebas aportadas para esta etapa del procedimiento constituían "pruebas suficientes" dependía de que la misma satisficiera a la Autoridad de Aplicación, entendiendo que dicha prueba se encontraba sujeta a la condición suspensiva que surgiera del resultado positivo del examen global ejecutado.

- **En relación a la alegación de Brasil acerca de que la Autoridad de Aplicación habría actuado de manera inconsistente con el artículo 5.3 al establecer precios de exportación basados sólo en exportaciones cuyos precios eran inferiores al valor normal (Reclamo 4), cabe formular las siguientes consideraciones:**

77. El artículo 5.3 del Acuerdo establece la obligación de examinar la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas con la solicitud, para determinar si son suficientes para iniciar la investigación. La Autoridad de Aplicación, como ha sido explicado precedentemente, actuó de manera consistente con el requerimiento del articulo 5.3.

78. No es cierta la afirmación de Brasil de que la selección de datos efectuada por la Argentina fue inapropiada y sesgada a los efectos de establecer precios de exportación y posteriormente compararlos con el valor normal para establecer la existencia de un presunto dumping que, junto con los atributos de daño y causalidad, justificaran la apertura de la investigación. La Autoridad de Aplicación analizó las operaciones de importación buscando precisar aquellas que más se adecuaban al producto objeto de la investigación, y lo hizo con el único objetivo de realizar un cálculo del precio de exportación lo más ajustado y comparable posible en esta etapa previa a la apertura. Más aún, de las operaciones adecuadas, realizó un promedio de las mismas, sin realizar por ende elecciones que pudieran sesgar la diferencia entre el valor de exportación y el valor normal.

79. El área técnica interviniente, a partir de las operaciones de importación identificadas en la respectiva fuente, buscó precisar aquellas que se adecuaban al producto objeto de investigación de modo tal que el cálculo del precio de exportación resultara tan preciso como fuera posible.

80. En el Informe de Apertura de Investigación, Cuerpo IV, fs. 471 a 518[25], figuran los márgenes de dumping establecidos los que resultan del promedio de las operaciones de exportación hacia la República Argentina del producto que fuera objeto de investigación. En ese sentido, se consideró el promedio de exportación para el período enero-agosto de 1997. Al respecto, se indica que los presuntos márgenes de dumping determinados en los puntos 3, 4 y 7 del citado informe, fueron efectuados a fin de hacer un análisis adicional del caso planteado.

81. Tal análisis no modifica las conclusiones sobre las presunciones de dumping a las que arribara el organismo técnico. Finalmente, habiendo aplicado la metodología establecida en el Acuerdo Antidumping, la misma no se vio modificada por el análisis adicional que Brasil cuestiona.

- **En relación a la alegación de Brasil acerca de que la Autoridad de Aplicación habría actuado de manera inconsistente con el artículo 5.3 al calcular márgenes de dumping entre el valor normal y el precio de exportación basados en ventas que no habían sido hechas en períodos lo más cercanos posibles (Reclamo 6), y dado que los datos sobre dumping y daño abarcaban diferentes períodos (Reclamo 8), cabe formular las siguientes consideraciones:**

82. El articulo 5.3 requiere de la Autoridad de Aplicación un examen de la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas con la solicitud a efectos de determinar si son suficientes para proceder al inicio de la investigación. Nada indica respecto de requisitos de temporalidad entre los precios de exportación y el valor normal.

83. La Autoridad de Aplicación argentina actuó de manera consistente con el requerimiento de comparación equitativa del articulo 2.4 del Acuerdo, a los efectos de determinar -con el nivel exigido para una apertura de investigación-, la posible existencia de dumping que ameritara, de cumplirse los requisitos de existir pruebas suficientes de daño y causalidad, proceder a la apertura de la investigación.

84. La base de comparación se realizó considerando las pruebas que razonablemente tenía a su alcance la solicitante y considerando que las mismas eran pertinentes para proceder a una apertura. Abierta la investigación y mediante la concurrencia de las pruebas de las restantes partes interesadas, la Autoridad de Aplicación tuvo la oportunidad de acceder a elementos acordes con los requerimientos del Acuerdo a efectos de realizar sus determinaciones provisorias y definitivas.

85. En lo atinente a la temporalidad entre los datos sobre dumping y daño, la interpretación de Brasil es al menos sesgada y tendenciosa.

86. La Autoridad, siguiendo el criterio establecido en el artículo 5.2, examinó las pruebas presentadas por la peticionante, que estaban a su alcance. La interpretación que tiene Argentina sobre el artículo 5.3 , es que este exige proceder al examen de la documentación presentada y determinar si resulta suficiente, dentro de los estándares exigidos en dicha instancia. No cabe requerir de la autoridad un grado de exigencia, respecto a este examen, similar al que debe realizarse una vez abierta la investigación.

[25] Ver anexo BRA-2.

87. En dicha instancia, la Autoridad de Aplicación tiene la facultad de acudir al procedimiento de verificaciones *in situ* de la información presentada por los exportadores. Este procedimiento no está previsto en la etapa anterior a la apertura de investigación; además, la autoridad se encuentra limitada por el artículo 5.5 del Acuerdo Antidumping que, salvo la notificación de la existencia de una solicitud al gobierno del origen denunciado, no permite su divulgación antes de declarada la apertura de investigación. En ese sentido, la autoridad ve acotada sus facultades investigativas pudiendo caer en una violación del artículo 5.5 del Acuerdo Antidumping.

88. Por último cabe señalar que, de los elementos que exige el Acuerdo Antidumping para dar inicio a una solicitud de investigación, el dumping se encontró probado tal como consta en el Informe de Viabilidad de Apertura de la DCD de fecha 7 de enero de 1998, Cuerpo IV, fs. 471[26] y así, una vez reunidos los tres elementos, esto es, daño, dumping y relación casual, se procedió a emitir el correspondiente Acto Administrativo, efectivizado mediante Resolución SICyM N° 11 del 20 de enero de 1999[27], publicada en el Boletín Oficial con fecha 25 de enero de 1999, que dispuso la apertura de la investigación.

III.1.3 RECLAMO 9: CONSISTENCIA CON EL ARTÍCULO 5.7

89. Brasil alega que la Argentina actuó de manera inconsistente con el artículo 5.7 al no considerar simultáneamente, en el momento de decidir si se iniciaba o no la investigación, las pruebas de la existencia del dumping y del daño

Texto del artículo 5.7

En su parte relevante, el artículo 5.7 establece que:

> *Las pruebas de la existencia del dumping y del daño se examinarán simultáneamente: a) en el momento de decidir si se inicia o no una investigación ...*

Alegación argentina

90. La determinación de la existencia de daño por importaciones en condiciones de dumping debe ser basada sobre pruebas objetivas y debe comprender un examen objetivo de la "consiguiente repercusión de esas importaciones sobre los productores nacionales de tales productos". Brasil fuerza el elemento de simultaneidad que puede derivar de las disposiciones del Acuerdo. La diferencia de tiempo entre el momento de ingreso de importaciones con dumping y la existencia de impacto evaluable como daño o amenaza de daño (en la secuencia indicada) es función de las características que lleven a las empresas productoras del producto similar al importado a reaccionar frente al ingreso de importaciones con dumping, características que pueden implicar la existencia de un desfasaje temporal que no invalida sino confirma el potencial de la acción de competencia desleal.

91. En este caso, la Argentina se encontraba ante una apertura por amenaza de daño donde la existencia de un precio de importaciones en condiciones de dumping determinaba la existencia de parámetros que indicaban la existencia de los extremos requeridos para una determinación positiva de amenaza de daño en la faz previa a la apertura de investigación.

92. Tal como se desarrolla en el informe técnico previo a la apertura, el ciclo de negocios de esta industria -la avícola- es de aproximadamente seis meses (incluyendo el período de incubación de pollitos BB), por lo que señales de precios y cantidades ocurridas en el primer semestre de 1997 impactan sobre los indicadores de la rama en los meses posteriores a ese período.

---

[26] *Idem.*

[27] Ver anexo BRA-7.

93. Así, mientras los precios de la industria nacional hasta el primer semestre de 1997 (en el período que se había demostrado dumping) no mostraban afectaciones significativas, los precios de la muestra de empresas nacionales, con posterioridad a junio de 1997, mostraron disminuciones constantes, sin que existieran otros factores más que la brecha de precios que existía entre los precios nacionalizados de las importaciones y el precio del producto similar nacional y la persistente caída en los precios medios FOB de importación desde Brasil a partir de 1997.

94. Además, el Acta del Directorio de la CNCE Nº 464[28] previa a la apertura de la investigación resalta que "*Los precios de la muestra de empresas nacionales presentan para 1997 una disminución que deberá ser analizada, en el caso de iniciada una investigación, en un contexto actual de disminuciones en el precio de los insumos y de fluctuaciones en los productos sustitutos como por ejemplo la carne bovina*".

95. *También se menciona que* "lo que pudo causar que hasta 1997, las ventas nacionales habían aumentado a pesar del dumping de ese año, pero ya en el primer semestre de 1998 ese aumento de las ventas fue con una menor tasa de crecimiento"[29], *en un contexto de cuota de mercado de las importaciones brasileñas con tendencia creciente.*

III.1.4 RECLAMOS 3, 7 Y 31: CONSISTENCIA CON EL ARTÍCULO 5.8

96. Brasil alega que la Argentina incumplió el artículo 5.8 al no rechazar la solicitud que, conforme Brasil, no estaba basada en prueba de dumping, conforme a los reclamos 1 y 2 (Reclamo 3) y conforme a los reclamos 5 y 6 (Reclamo 7), y al no rechazar la apertura de investigación tan pronto como la CNCE determinó la no existencia de daño en el Acta N° 405 (Reclamo 31).

Texto del artículo 5.8

En su parte relevante, el artículo 5.8 establece que:

> *5.8 La autoridad competente rechazará la solicitud presentada con arreglo al párrafo 1 y pondrá fin a la investigación sin demora en cuanto se haya cerciorado de que no existen pruebas suficientes del dumping o del daño que justifiquen la continuación del procedimiento relativo al caso ...*

Alegación argentina

97. Teniendo en cuenta lo señalado precedentemente en relación a los reclamos 1, 2, 5 y 6, los argumentos vertidos por Brasil en los reclamos 3 y 7 carecen de fundamento, ya que no correspondía a la Autoridad de Aplicación rechazar la solicitud dado que la peticionante presentó toda la documentación que estaba a su alcance, la cual fue examinada en cuanto a su exactitud y pertinencia.

98. Se trataba de pruebas pertinentes y no meras alegaciones o conjeturas como intenta demostrar Brasil. La autoridad competente tuvo en cuenta la documentación presentada, la cual fue debidamente analizada por los organismos técnicos competentes. De modo adicional, se recuerda lo estipulado en el artículo 5.2 del Acuerdo en cuanto que "*la solicitud contendrá la información que razonablemente tenga a su alcance el solicitante ...*".

[28] Ver anexo BRA-6, punto V, página 4.

[29] *Idem.*

99. En este sentido, resulta válido destacar que, tal como se menciona oportunamente, la Autoridad de Aplicación tuvo en consideración la información y documentación obrante en las actuaciones al momento de estimar el inicio del presente procedimiento.

100. En relación a lo alegado por Brasil acerca de que la Argentina debió rechazar la apertura de la investigación, cabe señalar que el artículo 38 del Decreto 2121/94 faculta a la Autoridad de Aplicación a otorgar, en el supuesto de existir errores u omisiones en la solicitud, un plazo al peticionante para que subsane o complete la misma. Esta facultad de la Autoridad se deriva entonces del hecho que una solicitud puede carecer de determinada información necesaria o presentar algún error material. Es en este supuesto que la Autoridad de Aplicación informa de estas carencias o falencias la peticionante para que ésta, en un plazo determinado, proceda a rectificar o subsanar las mismas.

101. En este caso particular, Brasil señala que la Argentina, ante la determinación efectuada por la CNCE en el Acta Nº 405 debió, por aplicación del artículo citado, proceder al archivo de las actuaciones. Conforme surge de lo explicitado respecto de lo que significa el artículo 38 invocado por Brasil y de las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación se señalarán, en modo alguno correspondió el archivo de las actuaciones, actuando la Argentina conforme a derecho.

102. La peticionante, y así surge del expediente, presentaron información actualizada de los requisitos de la solicitud con fecha 17 de febrero de 1998. Como resultado de ello, el área jurídica del MEyOSP determinó que "… *teniendo en cuenta que la información presentada por el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas -el CEPA- mediante Expte. Nº 061-001196/98 no ha sido evaluada por la Comisión Nacional de Comercio Exterior al expedirse sobre la existencia de daño a la producción nacional mediante el Acta de Directorio 405/98, esta Dirección General considera que correspondería, previo a todo trámite, solicitar la nueva intervención de la citada Comisión Nacional a fin de que se expida sobre los elementos aportados* ..." (Fs. 2302 del Expte. CNCE Nº 43/97).[30]

103. El examen de la nueva información presentada, lejos de apartarse de la legislación argentina, constituye un presupuesto expresamente previsto por el artículo 60 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (RLNPA) que dispone que el órgano competente (en este caso y por involucrar el daño, la CNCE) intervenga nuevamente en las actuaciones si ocurriere o llegare a su conocimiento un hecho nuevo. En este marco, la presentación adicional de la peticionante introduce en las actuaciones nuevos elementos de mérito que hicieron pertinente una nueva intervención de la CNCE, solicitada por los órganos competentes y todo ello ajustado a estricto derecho.

104. Debe destacarse también que en la etapa previa a la apertura de la investigación no se afectan los derechos de terceras partes existiendo solamente una relación entre la parte peticionante y la Autoridad de Aplicación. En este sentido, Brasil que resultó parte interesada en la investigación, y que por lo tanto tuvo acceso a todas y cada una de las fojas que conforman el expediente, habrá podido observar que durante el lapso que medió entre la presentación del solicitante y la resolución de apertura hubieron distintas actuaciones. El pretendido pase a archivo de las actuaciones, en función de los antecedentes señalados, hubiese sido un acto contrario a derecho de la administración y que hubiese lesionado derechos subjetivos de la peticionante con las consecuencias que un acto de tal naturaleza para la administración conlleva.

105. En este sentido, resulta también de aplicación lo dispuesto en el AD en el apartado 5 del artículo 5 que dispone: "A menos que se haya adoptado la decisión de iniciar una investigación, las autoridades evitarán toda publicidad acerca de la solicitud de iniciación de una investigación …".

[30] Se acompaña Anexo ARG-II.

106. Por lo tanto, el artículo 38 citado resulta de aplicación en el supuesto que ante errores u omisiones detectados por la Autoridad de Aplicación, ésta intime a la peticionante a que los subsane o complete. Si la peticionante no lo efectúa en el plazo indicado la Autoridad procede al archivo de las actuaciones.

107. Distinto es el supuesto bajo análisis, que ante determinado lapso transcurrido, la peticionante acompañó información actualizada que ameritó su análisis resultando en la determinación plasmada en el Acta Nº 469.

108. En consecuencia, y en el marco de las normas citadas, hasta tanto la autoridad competente no se expida expresamente sobre la apertura o no de la investigación en base a un análisis global de todas y cada una de las actuaciones, no es procedente el archivo de las mismas.

III.2 CONDUCCIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN APROPIADA - EVIDENCIA Y REQUISITOS DE AVISO PUBLICO

III.2.1 RECLAMO 10 - CONSISTENCIA CON EL ARTÍCULO 12.1

109. Brasil alega en el párrafo 188 de su comunicación que la Argentina incumplió en notificar a siete exportadores brasileños cuando encontró que había suficiente evidencia que justificaba el inicio de una investigación antidumping. Brasil alega que al no haber notificado a estos exportadores cuando se inició la investigación, Argentina habría actuado de manera inconsistente con el artículo 12.1 del Acuerdo Antidumping.

Texto del artículo 12.1

> *Cuando las autoridades se hayan cerciorado de que existen pruebas suficientes para justificar la iniciación de una investigación antidumping con arreglo al artículo 5, lo notificarán al Miembro o Miembros cuyos productos vayan a ser objeto de tal investigación y a las demás partes interesadas de cuyo interés tenga conocimiento la autoridad investigadora, y se dará el aviso público correspondiente. (Subrayado añadido.)*

Conforme establece el artículo 6.11, las "partes interesadas" incluyen:

> *i) los exportadores, los productores extranjeros o los importadores de un producto objeto de investigación, o las asociaciones mercantiles, gremiales o empresariales en las que la mayoría de los miembros sean productores, exportadores o importadores de ese producto;*
>
> *ii) el gobierno del Miembro exportador; y*
>
> *iii) los productores del producto similar en el Miembro importador o las asociaciones mercantiles, gremiales o empresariales en las que la mayoría de los Miembros sean productores del producto similar en el territorio del Miembro importador.*

Alegación argentina

110. Argentina afirma que el requisito establecido por el artículo 12.1 de dar aviso público y notificar a las partes interesadas (exportadores o productores extranjeros) de cuyo interés se tenía conocimiento, así como al gobierno de Brasil, Miembro exportador, ha sido cumplimentado por las autoridades investigadoras. En efecto, se destaca que hubiera resultado imposible notificar a partes cuyo interés en la investigación se desconocía.

111. Por medio de la Resolución SICyM Nº 11/99 del 20 de enero de 1999, publicada en el Boletín Oficial el 25 de enero de 1999, el Sr. Secretario de Industria, Comercio y Minería declaró procedente la **apertura de investigación** (*Cuerpo VI, fs. 712 a 715*).[31]

112. Por medio de la Nota SSCE Nº 121 de fecha 1 de febrero de 1999[32], se notificó la apertura de la presente investigación al Sr. Encargado de Negocios de la República Federativa del Brasil en la República Argentina, solicitando en dicha oportunidad su colaboración "*a efectos de identificar a los productores-exportadores interesados en la presente investigación, y facilitarles los requerimientos de información que se adjuntan a la presente, a fin de que los mismos remitan los datos solicitados respecto del producto objeto de investigación al Gobierno argentino*" (*Cuerpo VI, fs. 729 a 731*).

113. Asimismo, se informó que "*con el objetivo de evacuar consultas respecto de los alcances de la investigación en curso y hacer entrega de cuestionarios a los presentes, se realizará una audiencia el 25 de febrero de 1999 .... El Gobierno de la REPUBLICA ARGENTINA hace extensiva la invitación a esa representación diplomática a los efectos de que la misma tome acabado conocimiento de las actuaciones de la referencia*". Finalmente, se manifestó que quedaba a entera disposición del Gobierno brasileño a fin de la ampliación de la información expuesta en esa oportunidad.

114. Mediante Notas SSCE Nº 122/99 y 123/99[33] de fecha 1 de febrero de 1999, la Subsecretaría de Comercio Exterior también notificó al Sr. Subsecretario de Integración Económica Americana y al Sr. Subsecretario de Negociaciones Económicas Internacionales, la apertura de la presente investigación a fin de poner en conocimiento a nuestra Representación Diplomática en la República Federativa del Brasil y a la Misión Permanente de la República Argentina ante los Organismos Internacionales en Ginebra, Suiza, a efectos de presentar ante el Comité respectivo la mencionada Resolución (*Cuerpo VI, fs. 736 a 747*).

115. Por otra parte, el 16 de febrero de 1999 por Notas DCD Nº 273-000139/99, Nº 273-000138/99, Nº 273-000144/99, Nº 273-000137/99, Nº 273-000140/99 y 273-000141/99[34], las firmas productoras exportadoras **Avipal S.A. Avicultura e Agropecuaria**, **Frigorífico Nicolini Ltda., Seara Alimentos S.A.**, **Frangosul S.A. Agro Avícola Industrial,** fueron invitadas a ofrecer todas las pruebas que las mismas consideraran pertinentes a los fines de la mejor prosecución de la investigación (*Cuerpo VI, fs. 759 y 760; Cuerpo VI, fs. 757, 758, 769 y 770; Cuerpo VI, fs. 755 y 756;* y *Cuerpo VI, fs. 761 a 764*, respectivamente).

116. Finalmente, el 25 de febrero de 1999 se realizó una **audiencia informativa**, invitándose a la misma a las partes que pudieran estar interesadas en participar del procedimiento, en la que funcionarios de la Dirección de Competencia Desleal respondieron a las consultas presentadas por los concurrentes.

117. Se destaca que a pesar de lo detallado precedentemente, no asistió representación alguna del Gobierno de la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL a la Audiencia en cuestión, tal cual consta en el acta labrada el día 25 de febrero de 1999 (Cuerpo VI, fojas 828).[35]

---

[31] Ver anexo BRA-7.

[32] Se acompaña Anexo ARG-III.

[33] Se acompaña Anexo ARG-IV.

[34] Se acompaña Anexo ARG-V.

[35] Se acompaña Anexo ARG-VI.

118. Por otra parte, es necesario subrayar que la Argentina recién tomó conocimiento del interés de las otras siete empresas exportadoras que Brasil señala en el párrafo 190 de su comunicación (Cooperativa Central de Laticinios do Parana -CCLP-, Catarinense, Chapecó, Minuano, Perdigão, Comaves y Penabranca), a través del cuestionario que respondió la empresa INTERAMERICANA COMERCIAL S.R.L., en el que solicitaba se pidiera información también a dichas empresas.[36]

119. Es por ello que por considerarlo pertinente a la investigación, se hizo lugar a lo solicitado por la firma importadora INTERAMERICANA COMERCIAL S.R.L .. Mediante Notas DCD Nº 273-001062/99, Nº 273-001063/99, DCD Nº 273-001064/99, Nº 273-001065/99, Nº 273-001066/99 y DCD Nº 273-001067/99 del 15/9/99[37], la DCD solicitó a las empresas productoras brasileñas Chapecó, Minuano, Perdigão, Catarinense, CCLP y Comaves que tuvieran a bien informar sobre el precio del kg. de pollo efectivamente pagado en el mercado brasileño a nivel mayorista, para el período enero 1998-enero 1999. A efectos de facilitar el ordenamiento de la información a remitir, se les envió un Cuestionario del Productor-Exportador con las correspondientes instrucciones para su llenado, contrariamente a lo que señala Brasil en su reclamo 11, párrafo 202, el cual se analiza separadamente. (*Cuerpo LIII, fs. 2369 y 2370; Cuerpo LII, fs. 2367 y 2368; Cuerpo LII, fs. 2361 y 2362; Cuerpo LII, fs. 2363 y 2364*).

120. Es por ello que la alegación brasileña que pretende colocar a Argentina en condición de incumplimiento de sus obligaciones de notificación a los exportadores, carece de fundamento y es absolutamente tendenciosa.

III.2.2 RECLAMOS 11 A 14: CONSISTENCIA CON EL ARTÍCULO 6

121. A modo introductorio y respecto al cuestionamiento de violación al artículo 6 del Acuerdo, es preciso señalar que, a los efectos de orientar la participación de las firmas y partes interesadas, la Autoridad de Aplicación suministra oportunamente cuestionarios y formularios. A través de los mismos se precisa la información y documentación que resulta de utilidad a los fines de la investigación.

122. Tanto es así que, aún no contando con la identificación de determinados exportadores por parte del Gobierno brasileño, la Autoridad de Aplicación, procurando la plena participación de los productores/exportadores, y habiendo determinado la pertinencia de la solicitud efectuada por la empresa importadora INTERAMERICANA COMERCIAL S.R.L., por Expediente N° 061-003264 del 21 de abril de 1999 solicitó, entre otros puntos, se realicen pedidos de informes a determinadas empresas e instituciones brasileñas respecto a las ventas reales, precios del kg de pollo efectivamente pagado, etc., entre las que figuraban Comaves, Catarinense, Minuano, Chapecó y Perdigão. (Cuerpo X, fs. 1007[38]). A fin de dar cumplimiento a este trámite la Dirección de Competencia Desleal solicitó por medio de nota DCD N° 273-000832/99 a la firma INTERAMERICANA COMERCIAL .R.L., la remisión del listado de direcciones de aquellas empresas mencionadas. (Cuerpo, XXIV, fs. 2000[39]).

[36] Se acompaña Anexo ARG-VII.

[37] Se acompaña Anexo ARG-VIII.

[38] Ver Anexo ARG-VII.

[39] Se acompaña Anexo ARG-IX.

123. Así, la mencionada empresa a través del Expediente N° 061-007231/99 del 12 de agosto de 999, presentó los listados con los datos y el domicilio de las empresas en cuestión (Cuerpo VII, fs. 296[40]).

124. De ese modo, se efectuaron pedidos de informes a las siguientes firmas exportadoras: (Cuerpo LII, fs. 2361, 2363, 2365, 2367, 2369 y 2371[41]).

- COOPERATIVA CENTRAL DE LATICINIOS DO PARANA, mediante Nota DCD N° 273-001066/99
- COOPERATIVA CENTRAL OESTE CATARINENSE LTDA., mediante Nota DCD N° 273-001065/99
- CHAPECO CIA INDUSTRIAL, mediante Nota DCD N° 273-001062/99
- CIA MINUANO DE ALIMENTOS, mediante Nota DCD N° 273-001063/99
- PERDIGÃO INDUSTRIAL, mediante Nota DCD N° 273-001064/99
- COMAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., mediante Nota DCD N° 273-001067/99

Por lo expuesto, corresponde señalar que la Autoridad de Aplicación procuró brindar la más amplia oportunidad de participación, otorgando además sucesivos plazos adicionales a quienes así lo solicitaban en forma justificada y pertinente y considerando las diversas observaciones manifestadas por los participantes en cuanto a dificultades en los ofrecimientos de medidas de prueba y materialización de la producción de los mismos.

III.2.2.1 RECLAMO 11: CONSISTENCIA CON EL ARTÍCULO 6.1.1

125. Brasil alega que la Argentina incumplió lo establecido en el artículo 6.1.1 al no otorgar al menos 30 días para responder a los cuestionarios de dumping provistos por la DCD a siete exportadores brasileños. Asimismo, Brasil alega que la CNCE nunca notificó a esos siete exportadores y nunca les proveyó los cuestionarios de daño.

Texto del artículo 6.1.1

> *Se dará a los exportadores o a los productores extranjeros a quienes se envíen los cuestionarios utilizados en una investigación antidumping un plazo de 30 días como mínimo para la respuesta. Se deberá atender debidamente toda solicitud de prórroga del plazo de 30 días y, sobre la base de la justificación aducida, deberá concederse dicha prórroga cada vez que sea factible.*

Alegación argentina

126. Argentina afirma que no ha incurrido en una violación del artículo 6.1.1, toda vez que no sólo otorgó a los exportadores brasileños un **plazo de más de 30 días** para responder a los cuestionarios de la DCD, sino que además atendió debidamente sus solicitudes de prórrogas y concedió dichas prórrogas cada vez que ello fue factible.

[40] Se acompaña Anexo ARG-X.

[41] Ver Anexo ARG-VIII.

127. En relación a los siete exportadores que Brasil menciona en su comunicación, cabe reiterar que las autoridades investigadoras les remitieron un Cuestionario del Productor-Exportador con las correspondientes instrucciones para su llenado, contrariamente a lo que Brasil alega.

128. El 25 de febrero de 1999 se realizó una **audiencia informativa**, invitándose a la misma a las partes que pudieran estar interesadas en participar del procedimiento, en la que funcionarios de la Dirección de Competencia Desleal respondieron a las consultas presentadas por los concurrentes.

129. Para la presentación de los formularios y cuestionarios correspondientes como así también para el ofrecimiento de las medidas de prueba por parte de las firmas intervinientes, se estableció el día 29 de marzo de 1999 como fecha para su remisión a la Dirección de Competencia Desleal.

130. A continuación se detalla, a modo de ejemplo, sucesivas solicitudes de otorgamiento de plazo adicional para la presentación de medidas de prueba[42], a saber:

- Solicitud de ampliación de plazos por parte de SADIA S.A. para la presentación de su cuestionario y otorgamiento por parte de la DCD (Expediente Nº 061-002094/99 del 15 de marzo de 1999 - fojas 930).

- Solicitud de ampliación de plazos por parte de FRANGOSUL S/A para la presentación de su cuestionario y otorgamiento por parte de la DCD (Expediente Nº 061-002101/99 del 15 de marzo de 1999 - fojas 931).

- Solicitud de ampliación de plazos por parte de FRIGORIFICO NICOLINI LTDA. para la presentación de su cuestionario y otorgamiento por parte de la DCD (Expediente Nº 061-002102/99 del 15 de marzo de 1999 - fojas 934).

- Solicitud de ampliación de plazos por parte de AVIPAL S.A. para la presentación de su cuestionario y otorgamiento por parte de la DCD (Expediente Nº 061-002140/99 del 16 de marzo de 1999 - fojas 935).

131. La mención precedente no solo documenta la firme voluntad que las autoridades manifestaron durante el procedimiento por otorgar a las partes interesadas la más amplia posibilidad de participación como así también de reunir documentación que habilitara a acceder a una correcta determinación final.

132. Al vencimiento del nuevo plazo otorgado para la presentación de los mencionados cuestionarios remitidos por la DCD, así como del ofrecimiento de las medidas de prueba que considerasen convenientes, las firmas intervinientes en la presente investigación presentaron la documentación que fue volcada en el Informe de Proveído de las medidas de prueba ofrecidas, previo a la etapa de producción de pruebas (*Cuerpo XXII, fs. 1771 a 1806*).

133. Asimismo y en relación a las otras siete empresas productoras brasileñas CCLP, Catarinense, Chapecó, Minuano, Perdigão, Comaves y Penabranca a las que se les remitieron los cuestionarios mediante Notas DCD Nº 273-001062/99; Nº 273-001063/99; Nº 273-001064/99; Nº 273-001065/99; Nº 273-001066/99 y Nº 273-001067/99 del 15/9/99, respondiendo a un pedido de la firma INTERAMERICANA COMERCIAL S.R.L.[43], cabe señalar que las respuestas obtenidas fueron las siguientes:

[42] Se acompaña Anexo ARG-XI.

[43] Ver Anexo ARG-VIII.

Respondiendo a la requisitoria de la DCD, la Coop. Central de Laticinios Do Parana Ltda., informó el 18/10/99, mediante Expediente Nº 061-009759/99, que durante el período enero de 1998 y enero de 1999 **no** realizó exportaciones del producto denunciado a la Rep. Argentina (*Cuerpo LIII, fs. 2387*[44]).

A través del Expediente Nº 061-010463/99, COOPERATIVA OESTE CATARINENSE LTDA. solicitó una prórroga para remitir información adicional. Asimismo, presentó siguiente documentación (*Cuerpo LIII a LIX, fs. 2405*[45]):

Anexo I - Identificación del productor/exportador. Presta conformidad para la verificación de información.

Anexo II - Identificación del producto denunciado. Se acompañan informaciones técnicas del producto y copias de etiquetas del mismo.

Anexo III - Listado de importadores en la República Argentina y terceros países de la mercadería sujeta a investigación.

Anexo IV - Información sobre el mercado del productor/exportador. Unidad de medida tonelada.

Anexo V - Resumen de ventas del productor/exportador. Pollo eviscerado entero congelado. Unidad de medida: toneladas.

Anexo VI - Resumen de ventas del productor/exportador. Pollo eviscerado entero congelado. Unidad de medida: U$S Mil.

Asimismo se acompaña información sobre: Historia de la Cooperativa, perfil, objetivo social, listados de direcciones de casa matriz y filiales, principales proveedores de insumos, aspectos de organización y gerenciamiento, cuadro de las funciones de la Dirección de la Cooperativa, canales de distribución en el mercado interno, externo y argentino, listado de los productos elaborados por la compañía, especificaciones técnicas de los productos denunciados y Balances Patrimoniales de los ejercicios 1997 y 1998.

Anexo VII - Exportaciones efectivamente realizadas a la República Argentina por operación, con prueba documental.

Anexo VIII - Ventas efectuadas en el mercado interno correspondientes al año 1998 y enero de 1999, desagregadas por operación.

Anexo IX - Exportaciones a terceros países.

Anexo X - Estructura de Costos de la mercadería importada.

Anexo XI - Estructura de Costos de la mercadería exportada.

Presenta información de carácter confidencial y no confidencial. Presenta resumen no confidencial.

[44] Se acompaña Anexo ARG-XXVI.

[45] Se acompaña Anexo ARG-XII.

Adicionalmente, presentan descripción del proceso de fabricación del producto denunciado y un fluxograma.

Atento al pedido de prórroga efectuado, se le concedió el plazo solicitado (*Cuerpo LIX, fs. 2416 y 2417*[46]).

Por su parte, CHAPECO COMPANHIA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS -planta Cascavel-, comunicó a la DCD el 28/10/99, mediante Expediente Nº 061-010656/99, que **no** realizó ventas para la Rep. Argentina durante el período investigado (*Cuerpo LIX, fs. 2418*[47]).

Asimismo, el 9/11/99, MINUANO DE ALIMENTOS mediante Expediente Nº 061-010773/99, solicitó una prórroga para la remisión de la información (*Cuerpo LIX, fs. 2419*[48]). La DCD, mediante Nota DCD Nº 273-001409/99 del 18/11/99, concedió una prórroga hasta el 22/11/99 (*Cuerpo LIX, fs. 2429 y 2430*[49]). **Finalizado el plazo establecido, la empresa brasileña no presentó información al respecto.**

El 18/11/99, mediante Expediente Nº 061-011200/99, COMAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. solicitó una prórroga para la remisión de la información (*Cuerpo LIX, fs. 2446*[50]). La DCD, mediante Nota DCD Nº 273-001487/99 del 7/12/99, concedió una prórroga hasta el 13/12/99 (*Cuerpo LIX, fs. 2487 y 2488*[51]). **Cabe señalar que al vencimiento del plazo otorgado, la empresa brasileña no remitió información al respecto.**

Mediante Expediente Nº 061-010864/99 del 11/11/99, la firma exportadora brasileña PENABRANCA solicitó una prórroga para la remisión de la información referida al precio del kg del pollo efectivamente pagado en el mercado brasileño (*Cuerpo LIX, fs. 2421*[52]). La DCD, mediante Nota DCD Nº 273-001406/99 del 18/11/99, concedió una prórroga hasta el 29/11/99 (*Cuerpo LIX, fs. 2423 y 2424*[53]). **Finalizado el plazo establecido, no fue remitida información alguna por la mencionada empresa.**

Por su parte, la empresa brasileña PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL nunca respondió siquiera solicitando prórroga.

Asimismo, a través de las Notas DCD Nº 273-001309/99, Nº 273-001317/99 y Nº 273-001318/99 del 4/11/99; Nº 273-001319/99 y Nº 273-001321/99 del 8/11/99[54]; se informó a las empresas brasileñas COOPERATIVA CENTRAL OESTE

[46] Se acompaña Anexo ARG-XIII.

[47] Se acompaña Anexo ARG-XIV.

[48] Se acompaña Anexo ARG-XV.

[49] Se acompaña Anexo ARG-XVI.

[50] Se acompaña Anexo ARG-XVII.

[51] Se acompaña Anexo ARG-XVIII.

[52] Se acompaña Anexo ARG-XIX.

[53] Se acompaña Anexo ARG-XX.

[54] Se acompaña Anexo ARG-XXI.

> CATARINENSE LTDA., CHAPECO CIA INDUSTRIAL, CIA MINUANO DE ALIMENTOS, PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL, y COMAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS sobre lo dispuesto por el Régimen de Procedimientos Administrativos Ley Nº 19.549 y Decretos Reglamentarios 1759/72 y 1883/91, en relación a las presentaciones efectuadas ante la Administración Pública Nacional.

134. Por lo anteriormente expuesto, la Argentina afirma que, contrariamente a lo señalado por Brasil en el párrafo 211 de su comunicación, las autoridades investigadoras dieron a los exportadores brasileños un plazo mayor que el establecido en el Acuerdo para responder a los cuestionarios de la DCD, atendiendo debidamente sus solicitudes de prórrogas y concediendo dichas prórrogas cada vez que ello fue factible, cumplimentando de ese modo lo dispuesto en el artículo 6.1.1.

135. En relación a lo que Brasil señala en el párrafo 212 de su comunicación en el sentido de que 7 exportadores nunca recibieron el cuestionario de daño de la CNCE, cabe señalar que este organismo remitió dicho cuestionario solamente a 8 exportadores en total conformidad con lo dispuesto por el artículo 6.1, al que Brasil pareciera otorgar un alcance excesivo. En efecto, conforme surge del Acta Nº 576[55] que en lo pertinente se transcribe "*Por otra parte, las exportaciones hacia la Argentina informadas por la empresas brasileñas que respondieron al cuestionario "Cuestionario para el Exportador" de la CNCE representaron más de la mitad del total de las importaciones de pollos eviscerados enteros originarios de Brasil ...*".

136. Por lo tanto, Argentina considera que la Autoridad de Aplicación cumplimentó lo requerido por el artículo 6.1.1. Por otra parte, cabe destacar que Brasil nunca cuestionó la circunstancia que ahora reclama en sus distintas intervenciones durante el desarrollo de la investigación.

III.2.2.2 RECLAMO 12: CONSISTENCIA CON EL ARTÍCULO 6.1.2

137. Brasil alega que Argentina incumplió lo dispuesto en el artículo 6.1.2 al no poner inmediatamente a disposición de las demás partes interesadas que intervenían en la investigación las pruebas presentadas por escrito por las otras partes interesadas.

Texto del artículo 6.1.2

> *A reserva de lo prescrito en cuanto a la protección de la información de carácter confidencial, las pruebas presentadas por escrito por una parte interesada se pondrán inmediatamente a disposición de las demás partes interesadas que intervengan en la investigación.*

Alegación argentina

138. Contrariamente a lo alegado por Brasil, las autoridades argentinas actuaron de manera consistente con la obligación establecida en el artículo 6.1.2, toda vez que éstas pusieron inmediatamente a disposición de las partes interesadas que intervenían en la investigación las pruebas presentadas por escrito por las demás partes interesadas. Prueba de ello es que, una vez abierta la investigación, las autoridades argentinas pusieron a disposición de las partes interesadas -entre ellos exportadores, importadores y autoridades del país involucrado-, las actuaciones que generaron el procedimiento que se cuestiona. De ese modo, las partes interesadas acreditadas tuvieron oportunidad de tomar vista del expediente y acceder a una copia del mismo en todo momento, no solo de la solicitud sino de todas las actuaciones que lo integran.

[55] Ver anexo BRA-14.

139. En ese sentido, es falsa la afirmación de Brasil en el párrafo 216 de su comunicación en el sentido de que hubo siete exportadores brasileños que participaron de la investigación sin saberlo y que sólo fueron notificados de la misma luego de ocho meses de iniciada. Tal como la Argentina señaló respecto de la consistencia con el artículo 12.1 (Reclamo 10), las autoridades investigadoras recién tomaron conocimiento del interés de las otras siete empresas exportadoras que Brasil señala en el párrafo 216 de su comunicación (Cooperativa Central de Laticinios do Parana -CCLP-, Catarinense, Chapecó, Minuano, Perdigão, Comaves y Penabranca), a través del cuestionario que respondió la empresa INTERAMERICANA COMERCIAL S.R.L., en el que solicitaba se pidiera información también a esas empresas.

140. Mal podrían entonces las autoridades argentinas haber puesto a disposición de esos siete exportadores brasileños las pruebas presentadas por escrito por las otras partes interesadas que intervenían en la investigación, no siendo aquéllos parte de la investigación. En efecto, la Argentina sólo tenía la obligación de poner inmediatamente a disposición de las demás partes interesadas que intervenían en la investigación las pruebas presentadas por escrito por una parte interesada, y así lo hizo.

141. Argentina lamenta que el Gobierno de Brasil, quien sí tuvo conocimiento previo a la apertura de la investigación y que fuera parte interesada en la misma desde el inicio, no haya comunicado a las Autoridades argentinas el interés de estas empresas, ni haya recomendado a aquéllas de la conveniencia de participar en el procedimiento.

142. Aun así la Argentina, inmediatamente después de haber tomado conocimiento de lo anterior, en defensa del debido proceso y en la búsqueda de la información pertinente a efecto de que sus decisiones se encuadraran totalmente en las disposiciones legales vigentes, solicitó a las empresas productoras brasileñas CCLP, Catarinense, Chapecó, Minuano, Perdigão y Comaves que tuvieran a bien informar sobre el precio del kg de pollo efectivamente pagado en el mercado brasileño a nivel mayorista, para el período enero 1998-enero 1999, remitiéndoles un Cuestionario del Productor-Exportador con las correspondientes instrucciones para su llenado, a efectos de facilitar el ordenamiento de la información. (*Cuerpo LIII, fs. 2369 a 2372; Cuerpo LII, fs. 2365 a 2368; fs. 2361 y 2362; fs. 2363 y 2364*[56]).

143. Adicionalmente, y de manera contraria a lo que Brasil alega[57], cabe subrayar que de las respuestas obtenidas de esos exportadores se desprende claramente que dos de las siete empresas (CCLP y CHAPECO) no realizaron exportaciones a la Argentina durante el período investigado, mientras que otras cuatro (MINUANO, COMAVES, PENABRANCA y PERDIGÃO) demostraron no tener interés en la investigación.

144. En efecto, respondiendo a la requisitoria de la DCD, la Coop. Central de Laticinios Do Parana Ltda. -CCLP- y CHAPECO COMPANHIA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS -planta Cascavel-, informaron el 18/10/99 la primera y el 28/10/99 la segunda, mediante Expedientes Nº 061-009759/99 y Nº 061-010656/99, respectivamente, que durante el período enero de 1998 y enero de 1999 **no** realizaron exportaciones del producto denunciado a la República Argentina (*Cuerpo LIII, fs. 2387*[58] *y Cuerpo LIX, fs. 2418*[59]).

---

[56] Ver Anexo ARG-VIII.

[57] Comunicación de Brasil, párrafo 219: "... they exported the subject merchandise to Argentina in the period of investigation ...".

[58] Ver Anexo ARG-XXVI

[59] Ver Anexo ARG-XIV.

145. Por su parte, MINUANO DE ALIMENTOS, COMAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. y PENABRANCA solicitaron -mediante Expedientes Nº 061-010773/99, Nº 061-011200/99 y Nº 061-010864/99 del 9/11/99, 18/11/99 y 11/11/99[60], respectivamente- una prórroga para la remisión de la información. La DCD, mediante Notas DCD Nº 273-001409/99 del 18/11/99, Nº 273-001487/99 del 7/12/99, y Nº 273-001406/99 del 18/11/99, concedió las prórrogas solicitadas hasta el 22/11/99 en el primer caso, hasta el 13/12/99 en el segundo caso y hasta el 29/11/99 en el último caso.[61] **Sin embargo, finalizados los plazos establecidos, las empresas no remitieron información alguna**. Asimismo, la empresa brasileña PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL nunca respondió siquiera solicitando prórroga.

146. Argentina considera que ha dado así a todas las partes interesadas la oportunidad de presentar por escrito todas las pruebas que consideraran pertinentes. Sin embargo, si las partes que presuntamente tenían interés en la investigación no participaron, fueron ellas y no la autoridad de aplicación quienes dejaron de defender sus propios intereses.

147. Es por ello que la Argentina sostiene que mal pueden las autoridades de investigación haber puesto inmediatamente a disposición de estas empresas las pruebas presentadas por las partes interesadas dado que las mismas ni siquiera se constituyeron como partes interesadas. De este modo, la Argentina afirma haber actuado de manera consistente con el artículo 6.1.2.

III.2.2.3 RECLAMO 13: CONSISTENCIA CON EL ARTÍCULO 6.2

148. Brasil alega que Argentina incumplió lo dispuesto en el artículo 6.2 ya que, según Brasil, las partes interesadas no tuvieron plena oportunidad de defender sus intereses.

Texto del artículo 6.2

La parte relevante del artículo 6.2 establece que:

> *Durante toda la investigación antidumping, todas las partes interesadas tendrán plena oportunidad de defender sus intereses* ...

Alegación argentina

149. Contrariamente a lo alegado por Brasil, todas las partes interesadas tuvieron plena oportunidad de defender sus intereses durante toda la investigación, cumplimentando las autoridades investigadoras de ese modo la obligación establecida en el artículo 6.2.

150. Argentina coincide con Brasil cuando señala, en el párrafo 222 de su comunicación, que el artículo 6.2 no provee una guía específica sobre los pasos que las autoridades de investigación deben poner en práctica. En ese sentido, por los hechos que más abajo se describen, la Argentina considera que ha cumplimentado la obligación establecida en dicho artículo.

151. Tal como se señala respecto al cumplimiento del artículo 6.1.3 (Reclamo 14), una vez abierta la investigación, la Argentina puso a disposición de las partes interesadas, entre ellos exportadores, importadores y autoridades del país involucrado, las actuaciones que generaron el procedimiento que se cuestiona. De ese modo, las partes interesadas acreditadas tuvieron oportunidad de tomar vista del expediente y acceder a una copia del mismo en todo momento, no solo de la solicitud sino de todas las actuaciones que lo integran y además se brindaba la oportunidad de que toda otra parte que se

[60] Ver anexos ARG-XVII y XIX.

[61] Ver anexos ARG-XVIII y XX.

considerara interesada se presentara en la investigación manifestando esta circunstancia. Específicamente, en el caso de los exportadores, la práctica indica que son los gobiernos de sus países y sus clientes importadores quienes actúan como informadores natos de la existencia de un proceso Antidumping en el país de origen del producto investigado.

152. Es claro entonces que la manera en que las autoridades argentinas facilitaron el acceso de las partes interesadas al procedimiento, no cercenó en modo alguno el derecho de acceso a las actuaciones y menos aún su derecho de defensa. Es por ello que la Argentina estima improcedente los argumentos de Brasil en relación a su reclamo por el artículo 6.2 acerca del "cercenamiento del derecho de defensa".

153. Además de lo manifestado precedentemente, la firme voluntad que las autoridades manifestaron durante el procedimiento por otorgar a las partes interesadas la más amplia posibilidad de participación como así también de reunir documentación que habilitara a acceder a una correcta determinación final, surge del relevamiento efectuado de las presentaciones de las firmas participantes y las conclusiones arribadas a partir de las distintas participaciones. Es así que, en base a la información aportada por los exportadores, SADIA S.A., AVIPAL S.A., FRIGORIFICO NICOLINI LTDA. y SEARA ALIMENTOS S.A., se efectuó una determinación de sus respectivos márgenes de dumping individuales.

154. Se destaca la tarea del Area técnica a fin de recabar y reunir dicha documentación a través de las siguientes notificaciones, a saber[62]:

- Nota DCD Nº 273-001460/99 del 3 de diciembre de 1999 - SEARA ALIMENTOS S.A.
- Nota DCD Nº 273-001461/99 del 3 de diciembre de 1999 - FRIGORIFICO NICOLINI LTDA.
- Nota DCD Nº 273-001462/99 del 3 de diciembre de 1999 - SADIA S.A.

155. En el resto de los casos, la Autoridad de Aplicación debió recurrir a información disponible a partir de otras fuentes.

156. Respecto del resto de las firmas analizadas por la autoridad de aplicación, DA GRANJA AGROI, SADIA CONCORDIA, ACAUA INDUSTRIA, FELIPE AVICOLA, VENETO, y LITORAL ALIMENT, se reitera que no se ha contado con información adicional o con respaldo documental suficiente, a pesar de los numerosos pedidos efectuados a través de notas enviadas por la Autoridad de Aplicación donde se solicitaba tal información. A modo de ejemplo, se detallan las siguientes, a saber[63]:

- N° de Nota DCD 273-001319/99 PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL
- N° de Nota DCD 273-001406/99 PENABRANCA AVICULTURA S.A.
- N° de Nota DCD 273-001409/99 COMPANHIA MINUANO DE ALIMENTOS
- N° de Nota DCD 273-001487/99 COMAVES IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA.

[62] Se acompañan como Anexo ARG-XXII.

[63] Ver anexos ARG-XXI, XX, XVI, XVIII y XIII.

- Expediente N° 061-008834/99 de la COOP. CENTRAL OESTE CATARINENSE solicitando una prórroga.

157. En líneas generales se precisa que, si bien el análisis integral de los cuestionarios permite disponer de una aproximación a la operatoria comercial de las empresas, es la documentación respaldatoria la que constituye la fuente básica de determinación de precios, ajustes impositivos y niveles comerciales. Asimismo, a partir de la misma la Autoridad de Aplicación se encuentra habilitada a implementar una verificación in situ.

158. Por otra parte, Brasil señala sin fundamento en el párrafo 222 de su comunicación, que la Argentina incumplió el artículo 6.2 por haber notificado la investigación y haber pedido respuesta a los cuestionarios ocho meses después del inicio de la investigación, lo cual es falso. Obviamente, la afirmación de Brasil del párrafo 222 se refiere nuevamente a los siete exportadores que Brasil aduce que tenían interés en la investigación.

159. Al respecto cabe señalar que, por un lado, la obligación de dar aviso público y notificar a las partes interesadas (exportadores o productores extranjeros) se establece sólo para aquellas partes de cuyo interés se tenga conocimiento (la Argentina reitera en este sentido lo manifestado en relación al artículo 12.1; Reclamo 10). En efecto, se destaca que hubiera resultado imposible notificar a partes cuyo interés en la investigación se desconocía. Y se reitera que el propio Brasil era quien tuvo la oportunidad más clara de hacer conocer a la totalidad de sus productores la existencia de esta investigación y/o de comunicar al gobierno argentino la existencia de tales productores. La apertura de la investigación se realiza sobre la base del conocimiento de cada exportador o productor extranjero conocido que informa el solicitante y, a posteriori de que la misma es pública, el esfuerzo para que la totalidad de los potenciales actores intervengan en la investigación no es atribución única de la autoridad de aplicación.

160. En los casos de dumping donde lo que se analiza es la conducta competitiva de productores extranjeros y/o exportadores, las notificaciones previas a la apertura del gobierno del Miembro exportador interesado tiene como directa consecuencia la posibilidad de que pueda ser cubierto el conocimiento del universo de productores extranjeros. El espíritu de esta aseveración está plasmado en el artículo 6.1.3, entre otros.

161. Por otro lado, el interés de esos siete exportadores no era tal, conforme la Argentina ha constatado detallada y documentadamente en relación al cumplimiento del artículo 6.1.2 (Reclamo 12). Es por ello que, en función de lo anteriormente expuesto, la Argentina considera que las autoridades investigadoras han cumplimentado la obligación establecida en el artículo 6.2.

III.2.2.4 RECLAMO 14: CONSISTENCIA CON EL ARTÍCULO 6.1.3

162. Brasil alega que la Argentina incumplió lo establecido en el artículo 6.1.3 al no facilitar el texto de la solicitud escrita a los exportadores brasileños y al Gobierno de brasil, tan pronto como se inició la investigación.

Texto del artículo 6.1.3

> *Tan pronto como se haya iniciado la investigación, las autoridades facilitarán a los exportadores que conozcan* y a las autoridades del país exportador el texto completo de la solicitud escrita presentada de conformidad con el párrafo 1 del artículo 5 y lo pondrán a disposición de las otras partes interesadas intervinientes que lo soliciten. Se tendrá debidamente en cuenta lo prescrito en cuanto a la protección de la información confidencial, de conformidad con las disposiciones del párrafo 5.* (Subrayado añadido.)

* En la nota al pie, se establece que:

Queda entendido que, si el número de exportadores de que se trata es muy elevado, el texto completo de la solicitud escrita se facilitará solamente a las autoridades del Miembro exportador o la asociación mercantil o gremial competente.

Alegación argentina

163. Contrariamente a lo alegado por Brasil, las autoridades argentinas cumplieron con los requisitos establecidos en el artículo 6.1.3 al facilitar a los exportadores brasileños y al Gobierno de Brasil el texto completo de la solicitud escrita, tan pronto como se inició la investigación.

164. Brasil señala que las autoridades argentinas no actuaron de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1.3 dado que no proveyeron la petición a los exportadores conocidos y a las autoridades del país exportador. Al respecto, se subraya que en su versión en español dicho artículo establece la obligación de "facilitar". En ese sentido, las autoridades argentinas cumplieron con el requisito de "facilitar" cuando pusieron las actuaciones a disposición de las partes interesadas acreditadas. Es por ello que no resulta comprensible la conclusión a la cual arriba Brasil, en cuanto a que el término "facilitar" significaría enviar. La Argentina considera que la interpretación de Brasil es errónea.

165. Se destaca que Argentina, una vez abierta la investigación puso a disposición de las partes interesadas, entre ellos exportadores, importadores y autoridades del país involucrado, las actuaciones que generaron el procedimiento que se cuestiona. De ese modo, las partes interesadas acreditadas tuvieron oportunidad de tomar vista del expediente y acceder a una copia del mismo en todo momento, no solo de la solicitud sino de todas las actuaciones que lo integran.

166. Es por ello que la Argentina estima improcedente el argumento que Brasil presenta en el párrafo 230 de su comunicación acerca del "cercenamiento del derecho de defensa", atento que en todo momento la Representación de Brasil en nuestro país tuvo a su disposición la totalidad de las actuaciones producida la apertura y durante toda la investigación, en cumplimiento del artículo 6.1.3.

167. Es más, la apertura de investigación es un acto administrativo de carácter general, razón por la cual se publica en el Boletín Oficial y dicha publicación es notificación suficiente que reviste alcance general. A partir de la publicación en el Boletín Oficial, las partes interesadas, previo acreditar *su condición, tuvieron oportunidad de acceder inmediatamente a las actuaciones.*

168. Es claro entonces que la manera en que las autoridades argentinas prevén la facilitación de la solicitud escrita y el acceso de las partes interesadas al procedimiento, no cercena el derecho de acceso a las actuaciones y menos aún su derecho de defensa.

169. Aún más, una vez resuelta por parte de las Autoridades argentinas la apertura de la investigación en cuestión, se procedió a notificar de tal circunstancia al Encargado de Negocios de la República Federativa de Brasil en la Argentina, por Nota ex-SSCE N° 121/99 del 1º de febrero de 1999[64], en cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 del Acuerdo Antidumping. En ese sentido, se resalta se resalta que a través de la misma se hacía evidente la esperada colaboración del Gobierno de Brasil "*a efectos de identificar a los productores-exportadores interesados en la presente investigación, y facilitarles los requerimientos de información que se adjuntan a la presente, a fin de que los mismos remitan los datos solicitados respecto del producto objeto de investigación al Gobierno argentino*".

[64] Ver Anexo ARG-III.

170. Asimismo, se informó que "*con el objetivo de evacuar consultas respecto de los alcances de la investigación en curso y hacer entrega de cuestionarios a los presentes, se realizará una audiencia el 25 de febrero de 1999 .... El Gobierno de la REPUBLICA ARGENTINA hace extensiva la invitación a esa representación diplomática a los efectos de que la misma tome acabado conocimiento de las actuaciones de la referencia*". Finalmente, se manifestó que quedaba a entera disposición del Gobierno brasileño a fin de la ampliación de la información expuesta en esa oportunidad.

171. No obstante, se destaca que a pesar de lo detallado precedentemente, no asistió representación alguna del Gobierno de Brasil a la Audiencia en cuestión, tal cual consta en el acta labrada el día 25 de febrero de 1999 (Cuerpo VI, fojas 828)[65] ni existen constancias de que alguna parte interesada se hiciera presente en la mencionada Audiencia. Mal puede Brasil alegar ahora que vio menoscabado su derecho a defensa.

172. Por otra parte la Argentina no logra comprender el modo en que el Gobierno Brasileño pretende computar los plazos para la notificación de la apertura de la investigación, ya que la Resolución SICyM N° 11/99 del 20 de enero de 1999 fue publicada en el Boletín Oficial el 25 de enero de 1999, fecha a partir de la cual deben contarse los días.

173. Si se tiene en cuenta que la notificación a las autoridades brasileñas se efectuó el 1 de febrero de 1999, puede comprobarse que transcurrieron 5 días hábiles y no 12 como erróneamente sostiene Brasil en el párrafo 237 de su comunicación.

174. Una vez más, sorprende a la Argentina la forma reiterada en que Brasil intenta inducir a error al Grupo Especial, tergiversando no solo interpretaciones del Acuerdo sino acciones concretas de la autoridad de aplicación argentina.

III.2.3 RECLAMOS 15, 16, 17 y 21: CONSISTENCIA CON LOS ARTÍCULOS 6.8 (ANEXO II); 6.9; 12.2.2

175. Brasil alega que la Argentina habría actuado de manera inconsistente con el artículo 6.8 y el Anexo II al no tener en cuenta las respuestas acompañadas por los exportadores brasileños en relación a la descripción del producto vendido a la Argentina y el vendido en Brasil, utilizando el ajuste de valor normal calculado por la peticionante (Reclamo 15). Asimismo, Brasil alega que la Argentina habría actuado de manera inconsistente con el artículo 12.2.2 ya que, según Brasil, la Argentina no habría explicado adecuadamente en su determinación final su decisión de dejar de lado la información provista por los exportadores respecto a la descripción del producto y haber utilizado en su lugar el valor normal ajustado propuesto por el peticionante (Reclamo 16). Por otra parte, Brasil alega que la Argentina habría actuado de manera inconsistente con el artículo 6.8 y el Anexo II al no tener en cuenta el precio de exportación provisto por los exportadores brasileños y haber recurrido a la información sobre precio de exportación provista por la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación (Reclamo 17). Por último, Brasil alega que la Argentina habría actuado de manera inconsistente con el artículo 6.9 al no haber informado a los exportadores brasileños de los hechos esenciales (Reclamo 21).

Texto del artículo 6.8

> *En los casos en que una parte interesada niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite dentro de un plazo prudencial o entorpezca significativamente la investigación, podrán formularse determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de los hechos de que se tenga conocimiento. Al aplicar el presente párrafo se observará lo dispuesto en el Anexo II.*

[65] Ver Anexo ARG-VI.

Texto del Anexo II, párrafos 3, 6 y 7

En su parte relevante, el párrafo 3 establece:

3. Al formular las determinaciones deberá tenerse en cuenta toda la información verificable, presentada adecuadamente de modo que pueda utilizarse en la investigación sin dificultades excesivas, facilitada a tiempo y, cuando proceda, en un medio o lenguaje informático que hayan solicitado las autoridades ...

6. Si no se aceptan pruebas o informaciones, la parte que las haya facilitado deberá ser informada inmediatamente de las razones que hayan inducido a ello y deberá tener oportunidad de presentar nuevas explicaciones dentro de un plazo prudencial, teniendo debidamente en cuenta los plazos fijados para la investigación. Si las autoridades consideran que las explicaciones no son satisfactorias en cualesquiera determinaciones que se publiquen se expondrán las razones por las que se hayan rechazado las pruebas o las informaciones.

7. Si las autoridades tienen que basar sus conclusiones entre ellas las relativas al valor normal, en información procedente de una fuente secundaria, incluida la información que figure en la solicitud de iniciación de la investigación, deberán actuar con especial prudencia. En tales casos, y siempre que sea posible, deberán comprobar la información a la vista de la información de otras fuentes independientes de que dispongan -tales como listas de precios publicadas, estadísticas oficiales de importación y estadísticas de aduanas- y de la información obtenida de otras partes interesadas durante la investigación. Como quiera que sea, es evidente que si una parte interesada no coopera, y en consecuencia dejan de comunicarse a las autoridades informaciones pertinentes, ello podría conducir a un resultado menos favorable para esa parte que si se hubiera cooperado.

Texto del artículo 6.9

Antes de formular una determinación definitiva, las autoridades informarán a todas las partes interesadas de los hechos esenciales considerados que sirvan de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas. Esa información deberá facilitarse a las partes con tiempo suficiente para que puedan defender sus intereses.

Texto del artículo 12.2.2

12.2.2 En los avisos públicos de conclusión o suspensión de una investigación en la cual se haya llegado a una determinación positiva que prevea la imposición de un derecho definitivo o la aceptación de un compromiso en materia de precios, figurará, o se hará constar de otro modo mediante un informe separado toda la información pertinente sobre las cuestiones de hecho y de derecho y las razones que hayan llevado a la imposición de medidas definitivas o a la aceptación de compromisos en materia de precios, teniendo debidamente en cuenta lo prescripto en cuanto a la protección de la información confidencial. En el aviso o informe figurará en particular la información indicada en el apartado 2.1, así como los motivos de la aceptación o rechazo de los argumentos o alegaciones pertinentes de los exportadores e importadores, y la base de toda decisión adoptada en virtud del apartado 10.2 del artículo 6.

Alegación argentina

176. Contrariamente a lo alegado por Brasil, la DCD basó sus conclusiones en "… toda la información verificable, presentada adecuadamente …", conforme lo establecido en el párrafo 3 del Anexo II del Acuerdo Antidumping.

177. A los efectos de considerar la información, las autoridades argentinas remiten cuestionarios conteniendo todos los elementos necesarios para efectuar un correcto análisis a fin de determinar la existencia o inexistencia de dumping, además de especificar la necesidad de contar con documentación respaldatoria, de modo de avalar la información contenida en el mismo, y de dar la oportunidad reiteradamente para que quienes contesten los cuestionarios agreguen todos aquellos aspectos que consideren de interés. Similar derecho mantienen las partes durante todo el proceso de investigación.

178. Es obviamente imposible que sin la documentación respaldatoria susceptible de ser verificada, la autoridad de aplicación considere las alegaciones de las partes. Considerando que "verificable" significa "comprobable", ello es posible si se cuenta con documentación respaldatoria, susceptible de ser verificada.

179. En particular, Brasil cuestiona el ajuste efectuado al valor normal del 9,09 por ciento que fuera utilizado por la autoridad en su determinación final. En tal sentido, es cierto que el mismo se sustenta en la metodología de cálculo suministrada por la entidad peticionante, pero tal hecho fue avalado por la ausencia de oposiciones apoyadas no por meras alegaciones sino por pruebas susceptibles de verificaciones. En este sentido, los escritos adjuntados durante el procedimiento por varias firmas brasileñas el 20 de abril de 1999, a través del Expediente N° 061-003243/99 (Cuerpo IX, fs. 999)[66] y por la Representación de la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL constituyen meros argumentos, no adjuntándose aval técnico alguno. Asimismo, de dichos escritos se desprende la pertinencia del citado ajuste, toda vez que no se cuestiona que el mismo debía ser efectuado.

180. Tampoco se dispuso de sustento material alguno en relación a la incidencia del congelado y/o enfriado al momento de la determinación del Valor Normal del producto en cuestión, a pesar de las consideraciones vertidas a través de la presentación realizada por ABEF por Expediente N° 061-012582/99 (Cuerpo LXVI, fs. 2507)[67], las cuales constituyen, una vez más, meras declaraciones en relación a los conceptos vertidos.

181. Por lo expuesto, la Argentina considera que el Grupo Especial debería rechazar las alegaciones de Brasil, quien parecería tener una visión sesgada de la investigación. Prueba de la acción conducente y de conformidad con los acuerdos seguida por la Autoridad Argentina es la determinación que culminó con la exclusión de la medida Antidumping aplicada a las firmas exportadoras Frigorífico Nicolini y Seara, precisamente porque dichas firmas, no solo alegaron que no realizaban dumping, sino que también -y esto es lo importante- aportaron toda la información requerida con su correspondiente documentación respaldatoria.

182. De igual manera, respecto a las firmas productoras/exportadoras Sadia y Avipal se pudo determinar un margen individual de dumping de conformidad con los datos por ellos aportados y corroborados.

183. La Autoridad de Aplicación no efectuó, por ende, ningún tipo de discriminación entre las firmas, sino que por el contrario primó en su accionar ajustarse a la letra del Acuerdo Antidumping.

---

[66] Ver Anexo ARG-XXIII.

[67] Se acompaña como Anexo ARG-XXIV.

184. Por lo tanto, no se explica el reclamo de Brasil en cuanto al incumplimiento del artículo 12.2.2 en tanto éste establece "… *figurará o se hará constar de otro modo mediante un informe separado, toda la información pertinente sobre las cuestiones de hecho y de derecho y las razones que hayan llevado a la imposición de medidas definitivas* …", toda vez que tanto el Informe de Relevamiento de lo Actuado como el Informe de Determinación Final del Margen de Dumping, a lo largo de su contenido, desarrollado en diferentes tópicos, se particularizó en cada una de las presentaciones de las empresas productoras/exportadoras, para arribar a la conclusión fundamentada de cuáles fueron los motivos por los cuales la Autoridad de Aplicación descartó aquellas que carecieron de respaldo documental o fueron presentadas fuera de término.

185. En cuanto al artículo 12.2.2 cabe señalar que, mediante el Informe de Relevamiento de lo Actuado con anterioridad al cierre de la etapa probatoria de fecha 4 de enero de 2002 (Cuerpo LXIII, fs. 2757), la DCD puso a disposición de las partes todos los hechos esenciales sobre los cuales basaría su decisión final. Prueba de ello, son las Notas de la DCD de fecha 5 de enero de 2000 (Cuerpo LXII, fs. 2860 a 2880[68]) por las que se comunicó a todas las partes el cierre de la etapa probatoria, invitándose a tomar vista de las actuaciones y si lo deseaban a presentar alegatos, dándose de tal manera, cumplimiento a lo exigido por el Acuerdo.

III.2.4 RECLAMOS 18, 19, 20 Y 22: CONSISTENCIA CON LOS ARTÍCULOS 12.2.2, 6.8 (ANEXO II) Y 6.10

186. Brasil alega que la Argentina habría actuado de manera inconsistente con el artículo 12.2.2 ya que, según Brasil, la Argentina no habría explicado adecuadamente en su determinación final su decisión de dejar de lado la información provista por los exportadores respecto al precio de exportación y haber recurrido al provisto por la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación (Reclamo 18). Asimismo, Brasil alega que la Argentina habría actuado de manera inconsistente con el artículo 6.8 y Anexo II, párrafos 3, 5 y 7 al no tomar en cuenta toda la información de valor normal remitida por Frangosul y Catarinense, y recurrir a la información provista por el peticionante (Reclamo 19). Por otra parte, Brasil alega que la Argentina habría actuado de manera inconsistente con el artículo 12.2.2 al no explicar adecuadamente en su determinación final su decisión de no tomar en cuenta toda la información sobre valor normal remitida por Frangosul y Catarinense, y recurrir a la información provista por el peticionante (Reclamo 20). Finalmente, Brasil alega que la Argentina habría actuado de manera inconsistente con el artículo 6.10 al no establecer márgenes individuales de dumping para Frangosul y Catarinense (Reclamo 22).

Texto del artículo 6.8

> *En los casos en que una parte interesada niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite dentro de un plazo prudencial o entorpezca significativamente la investigación, podrán formularse determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de los hechos de que se tenga conocimiento. Al aplicar el presente párrafo se observará lo dispuesto en el Anexo II.*

Texto del Anexo II, párrafos 3, 5 y 7

> En su parte relevante, el párrafo 3 establece:
>
> *3. Al formular las determinaciones deberá tenerse en cuenta toda la información verificable, presentada adecuadamente de modo que pueda utilizarse en la investigación sin dificultades excesivas, facilitada a tiempo y, cuando proceda, en un medio o lenguaje informático que hayan solicitado las autoridades ...*

[68] Se acompaña como Anexo ARG-XXV.

5. Aunque la información que se facilite no sea óptima en todos los aspectos, ese hecho no será justificación para que las autoridades la descarten, siempre que la parte interesada haya procedido en toda la medida de sus posibilidades.

7. Si las autoridades tienen que basar sus conclusiones entre ellas las relativas al valor normal, en información procedente de una fuente secundaria, incluida la información que figure en la solicitud de iniciación de la investigación, deberán actuar con especial prudencia. En tales casos, y siempre que sea posible, deberán comprobar la información a la vista de la información de otras fuentes independientes de que dispongan -tales como listas de precios publicadas, estadísticas oficiales de importación y estadísticas de aduanas- y de la información obtenida de otras partes interesadas durante la investigación. Como quiera que sea, es evidente que si una parte interesada no coopera, y en consecuencia dejan de comunicarse a las autoridades informaciones pertinentes, ello podría conducir a un resultado menos favorable para esa parte que si se hubiera cooperado.

Texto del artículo 12.2.2

12.2.2 En los avisos públicos de conclusión o suspensión de una investigación en la cual se haya llegado a una determinación positiva que prevea la imposición de un derecho definitivo o la aceptación de un compromiso en materia de precios, figurará, o se hará constar de otro modo mediante un informe separado toda la información pertinente sobre las cuestiones de hecho y de derecho y las razones que hayan llevado a la imposición de medidas definitivas o a la aceptación de compromisos en materia de precios, teniendo debidamente en cuenta lo prescripto en cuanto a la protección de la información confidencial. En el aviso o informe figurará en particular la información indicada en el apartado 2.1, así como los motivos de la aceptación o rechazo de los argumentos o alegaciones pertinentes de los exportadores e importadores, y la base de toda decisión adoptada en virtud del apartado 10.2 del artículo 6.

Texto del artículo 6.10

Por regla general, las autoridades determinarán el margen de dumping que corresponda a cada exportador o productor interesado del producto sujeto a investigación de que se tenga conocimiento. En los casos en que el número de exportadores, productores, importadores o tipos de productos sea tan grande que resulte imposible efectuar esa determinación, las autoridades podrán limitar su examen a un número prudencial de partes interesadas o de productos, utilizando muestras que sean estadísticamente válidas sobre la base de la información de que dispongan en el momento de la selección, o al mayor porcentaje del volumen de las exportaciones del país en cuestión que pueda razonablemente investigarse.

Alegación argentina

187. A efectos de la determinación final del margen de dumping la Autoridad de Aplicación analizó y consideró toda la información obrante en las actuaciones que se ajustaba a los principios emanados del propio Acuerdo, es decir, aquella que fue presentada en tiempo y forma y acompañada de los elementos probatorios adecuados.

188. Ello resulta concordante con lo expresado precedentemente en cuanto al relevamiento de las presentaciones de las firmas participantes y las conclusiones arribadas a partir de las distintas participaciones. Es así, que la información aportada por los exportadores resultó en el caso de SADIA

S.A., AVIPAL S.A., FRIGORIFICO NICOLINI LTDA. y SEARA ALIMENTOS S.A., la fuente informativa a la cual se recurrió en la determinación de sus respectivos márgenes de dumping.

189. En el caso de la información aportada por la firma productora exportadora COOPERATIVA CENTRAL OESTE CATARINENSE LTDA., y como fuera señalado oportunamente -el Informe Final-, la misma se presentó en forma agregada y sin respaldo documental.

190. En el caso de la exportadora FRANGOSUL, y si bien son aplicables los conceptos vertidos en los párrafos siguientes, se precisa que a través de diversas notificaciones (Nota DCD Nº 273-001181/99 del 12/10/99 y Nota DCD Nº 273-001182/99 del 12/10/99[69]) se solicitó la remisión de los listados de notas fiscales a fin de realizar un muestreo estadístico detallando las formalidades exigibles por Ley de Procedimientos Administrativos para su cumplimiento. El 18 de noviembre de 1999 - Nota DCD Nº 273-001412/99 y Nota DCD Nº 273-001413/99[70] -se reitera la presentación de dicha información. Sin embargo, en fecha posterior a la establecida se procedió a incorporar dos disquetes, sin respaldo.

191. Respecto del resto de las firmas analizadas por la autoridad de aplicación, COMAVES, DA GRANJA AGROI, SADIA CONCORDIA, MINUANO DE ALIMENTOS, ACAUA INDUSTRIA, FELIPE AVICOLA, PERDIGÃO AGROIN, VENETO, CHAPECO CL y LITORAL ALIMENT, se reitera que no se ha contado con información adicional o con respaldo documental suficiente, a pesar de los numerosos pedidos efectuados a través de notas enviadas por la Autoridad de Aplicación donde se solicitaba tal información.

192. En líneas generales se precisa que, si bien el análisis integral de los cuestionarios permite disponer de una aproximación a la operatoria comercial de las empresas, la fuente básica de determinación de precios, ajustes impositivos y niveles comerciales lo constituye la documentación respaldatoria.

193. Corresponde hacer especial mención respecto de la incorporación del informe en el cual se detalla el relevamiento de las actuaciones con anterioridad al cierre de la etapa probatoria a través del cual se puntualizó el estado de situación de la información obrante en las actuaciones.

194. Finalmente, respecto al cuestionamiento formulado con relación al período analizado para determinar el margen de dumping, cabe señalar que es una facultad de la autoridad solicitar toda aquella documentación que entienda, resultará conducente para esclarecer los hechos investigados, sin perjuicio de recordarse que todo lo incorporado a las actuaciones es objeto de análisis por parte de la Autoridad de Aplicación.

195. La Argentina actuó en concordancia con lo prescripto por el Acuerdo en el Anexo II, y aún más de conformidad con el párrafo 7 del mencionado Anexo, obró con "… especial prudencia" al basar sus conclusiones en "*comprobar la información a la vista de la información de otras fuentes independientes de que se dispongan, tales como … estadísticas oficiales de importación* ...".

196. Por último, y a modo de recordar y demostrar nuevamente la voluntad de la Autoridad por recabar los elementos que las firmas exportadoras fueron agregando, es que se transcribe, respecto de Frangosul y Catarinense, las presentaciones efectuadas y las notas solicitando información y/o aclaraciones por la DCD, a saber[71]:

---

[69] Se acompaña como Anexo ARG-XXVII.

[70] Se acompaña como Anexo ARG-XXVIII.

[71] Se acompañan como Anexo ARG-XXIX. Ver asimismo Anexo ARG-XXVII.

- El 27 de abril de 1999 FRANGOSUL presenta bajo expediente 061-003502/99 Poder en portugués, el cuestionario correspondiente, **faltando el anexo VIII correspondiente a ventas en el mercado interno de Brasil**, perfil de la empresa, proceso de producción, balances. También presenta ventas al mercado interno correspondientes a un listado mensual por filial indicando factura inicial y final, sin especificar fechas, montos unitarios y totales, kilogramos, tipo de mercadería, etc. (Cuerpo 11, fs. 1022).

- Presenta con dicho cuestionario, solamente **facturas de exportación hacia el mercado argentino**, correspondiéndose estas con una elección propia de la empresa y no atendiendo a las requeridas por la DCD (Cuerpos 11,12,13,14,15).

- Por Expediente Nº 061-003924/99 del 10 de mayo de 1999, FRANGUSOL presenta traducción del poder que había entregado (Cuerpo 21, fs. 1618).

- El día 11 de mayo de 1999 por Expediente Nº 061-003952/99, FRANGOSUL presentó balances de la empresa (Cuerpo 21, fs. 1620).

- Mediante Nota DCD Nº 273-000837/99 del 12 de julio de 1999, se solicitó a la firma FRANGOSUL la presentación de la información que a continuación se detalla: (Cuerpo 25, fs. 2076 y 2077).

    1. Traducción de la prueba documental correspondiente a las exportaciones realizadas a la Argentina (ANEXO VII).

    2. Documentación respaldatoria de ventas al mercado interno (ANEXO VIII).

    3. Exportaciones a terceros países.

    4. Traducción de folleteria de FRANGOSUL.

- Por medio del Expediente Nº 061-006626/99 del 28 de julio de 1999, FRANGOSUL presento un pedido de prorroga. (Cuerpo 26, fs. 2107). La misma fue otorgada mediante Nota DCD Nº 273-000912/99. En la misma se señalaba que el plazo otorgado era de 15 días de forma improrrogable (Cuerpo 27, fs. 2274).

- El día 19 de agosto de 1999, mediante Expediente Nº 061-007466/99 FRANGOSUL presenta la siguiente información (Cuerpo 28, fs. 2304):

    1. Traducción de facturas comerciales (prueba documental) correspondiente a las exportaciones efectivamente realizadas a la República Argentina (anexo VII).

    2. Exportaciones a terceros países (anexo IX) para los cinco mercados más importantes de la mencionada mercadería.

    3. Traducción de la folletería de nuestros productos (nueva folletería).

    4. Respecto de las facturas de ventas al mercado interno de Brasil, FRANGOSUL expone en su presentación lo siguiente: "*Documentación respaldatoria de las ventas efectuadas en el mercado interno (anexo VIII). En virtud de la cantidad de facturas que emitimos todos los días en nuestras sucursales de ventas gira, alrededor de más de 140 y más de 320.000 durante el año, no es viable enviar copias de todas las facturas de ventas efectuadas en el mercado interno. En tal sentido, hemos presentado con fecha 27 de abril de 1999 por medio del expediente Nº 061-003502 un listado de facturas*

> *de nuestras ventas en mercado interno. Las facturas encuéntranse a disposición de las autoridades argentinas sea para una verificación sea para que soliciten documentos seleccionados para una verificación por muestreo*".

- El día 1º de septiembre de 1999 por Expediente Nº 061-007964/99 FRANGOSUL presenta facturas de ventas al mercado argentino (Cuerpo 52, fs. 2326).

- Mediante Nota DCD Nº 273-001181/99 y Nota DCD Nº 273-001182/99 del 12 de octubre de 1999 se requirió un listado de facturas ya que el presentado era incompleto (no poseía fecha, cantidad, precio, etc). Cuerpo 53, fs. 2382 a 2385. En dicha nota la DCD aclara:

  "*En relación a los mencionados listados, cabe señalar que los mismos indican sólo los números de Notas Fiscales correspondientes al período investigado, detallando mes y sucursal, pero no constando en los mismos datos como fecha, cantidad, precio, descuentos, impuesto, fletes, etc, los cuales resultan de suma utilidad para la prosecución de las presente actuaciones*".

  "*Es de destacar que, atento la dificultad que se presenta para poder informar y respaldar la totalidad de las operaciones efectuadas durante el período investigado, debido al gran volumen diario de las mismas, se solicita a usted la remisión de los listados de Notas Fiscales de donde surja la totalidad de las operaciones realizadas durante el período enero de 1998-enero de 1999, inclusive. De esta forma se podrá realizar un muestreo estadístico y posteriormente solicitar a usted la documentación respaldatoria de la muestra*".

197. Si bien la Nota de la DCD Nº 273-001181/99 -mencionada en el párrafo anterior- no fijaba plazo para la presentación de la documentación solicitada, en tales casos se aplica en forma supletoria la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos, de acuerdo a lo establecido por el artículo 76 del Decreto Nº 2121/94 "*El procedimiento para la aplicación de derechos antidumping y compensatorios ante las autoridades de aplicación previstas en la presente reglamentación se regirá supletoriamente por la Ley de Procedimientos Administrativos y su reglamentación*". Sobre el particular, el artículo 1º inciso e) apartado 4 de la Ley 19.549 determina: "*Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, vistas e informes, aquél será de diez días*".

- Por medio de Nota DCD Nº 273-001412/99 y Nota DCD Nº 273-001413/99 la DCD reiteró el pedido efectuado en la Nota DCD Nº 273-001181/99 (Cuerpo 59, fs. 2435 a 2438).

- Finalmente, el día 30 de diciembre de 1999 FRANGOSUL presentó mediante Expediente N° 061- 012882/99 un disquetes, conteniendo según sus dichos, listado de notas fiscales (Cuerpo 63, fs. 2756).[72]

198. De lo expuesto surge que la firma FRANGOSUL no presentó documentación relativa a precios de venta en el mercado interno brasileño. Con la presentación del cuestionario acompañó un listado con números de facturas correspondientes a determinadas filiales de la empresa, pero incompleto en cuanto a la información necesaria para poder analizar las ventas en el mercado interno brasileño. En ese sentido no contestó ninguno de los ítems requeridos por el anexo VIII del

[72] Se acompaña como Anexo ARG-XXX.

cuestionario del exportador. Tal es así que la DCD requirió la presentación de tal información. FRANGOSUL contestó a dicho requerimiento de la siguiente manera: "*En virtud de la cantidad de facturas que emitimos todos los días en nuestras sucursales de ventas gira, alrededor de más de 140 y más de 320.000 durante el año, no es viable enviar copias de todas las facturas de ventas efectuadas en el mercado interno. En tal sentido, hemos presentado con fecha 27 de abril de 1999 por medio del expediente Nº 061-003502 un listado de facturas de nuestras ventas en mercado interno. Las facturas encuéntranse a disposición de las autoridades argentinas sea para una verificación sea para que soliciten documentos seleccionados para una verificación por muestreo*".

199. A modo de ejemplo, se transcribe parte de la información que fuera remitida por FRANGOSUL con su cuestionario como respuesta al anexo VIII relativo a las ventas de mercado interno brasileño.

MES DE DICIEMBRE DE 1998

Facturas	Filial 01	Filial 02	Filial 04	Filial 13	Filial 42	Filial 43	Filial 59	Filial 67	Filial 69	Filial 71	Filial 72	Filial 73
Inicial	32239/S	38204/S	5425/S	35090/S	19552/S	22439/S	19657/S	37618/S		1762/s	908/M1	801/M1
Final	35373/S	42179/S	5501/S	38332/S	21838/S	24337/S	21940/S	43064/S		1963/s	1192/M1	1017/M1

200. FRANGOSUL se contradice con sus dichos al manifestar su imposibilidad de presentar las facturas de ventas en el mercado interno de Brasil debido a la cantidad de facturas que emiten por día todas sus sucursales. En ese sentido, corresponde señalar que SI BIEN NO PRESENTARON NI SIQUIERA UNA FACTURA DE VENTA EN EL MERCADO INTERNO DE BRASIL, SÍ PUDIERON PRESENTAR ALREDEDOR DE 600 FACTURAS DE EXPORTACION HACIA LA REPUBLICA ARGENTINA.

201. Por lo expuesto resulta que la mencionada firma nunca presentó documentación respaldatoria de ventas de mercado interno y su última presentación fue efectuada fuera de término para permitir su análisis, teniendo en cuenta que, el Informe de Relevamiento de lo Actuado es de fecha 4 de enero de 2002.

202. En relación con la presentación efectuada por la firma CATARINENSE, mediante Expediente Nº 061-010463/99 -Cuerpos LIII a LIX, fs. 2405 (fl. 1 a 1198)[73], de fecha 3 de noviembre de 1999, cabe resaltar que no acreditó personería de conformidad con la Ley Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos. Debe señalarse que en dicha presentación, la mencionada firma solicitó una prórroga para la presentación de la información de 20 días -Cuerpo LIII, fs. 2405, fl. 3-. A través de la Nota DCD N° 273-001321/99 -Cuerpo LII, fs. 2416 y 2417[74]- la prórroga fue concedida y, con posterioridad, no se registraron pedidos de prórroga adicionales por parte de esa exportadora.

203. Finalmente, con respecto a esta presentación, se resalta que el anexo VIII no fue contestado-correspondiente a ventas en el mercado interno brasileño-; como documentación respaldatoria sólo acompañó listado de facturas y facturas de exportación a la Argentina. Se destaca que la firma CATARINENSE sólo realizó esta presentación sin realizar ninguna otra con posterioridad a esa. Respecto a la notificación tardía del cuestionario a dicha firma, se remite a las alegaciones argentinas en relación a los reclamos 10 a 14.

[73] Ver Anexo ARG-XII.

[74] Ver Anexo ARG-XIII.

204. Por lo anteriormente expuesto, queda demostrado que a lo largo del procedimiento las firmas productoras-exportadoras brasileñas nunca efectuaron planteos formales, mucho menos efectuaron la presentación de documentación respaldatoria que indicara supuestas desavenencias con la Dirección de Competencia Desleal, con lo cual estarían avalando la descripción realizada.

205. Como última observación a los reclamos de Brasil se señala que la verificación *in situ* es facultativa para la Autoridad investigadora, ya que el Acuerdo Antidumping no la impone, si no que exige la obligación de arbitrar los medios para corroborar la exactitud de la información y documentación remitida, impulsando así el procedimiento investigativo. Además, no siendo el único modo de constatar la información agregada a las actuaciones, entran entonces en la órbita discrecional de la Autoridad las verificaciones *in situ*, evaluando la necesidad y pertinencia que exija el caso en cuestión.

206. Finalmente y en ese sentido, en el caso de FRANGOSUL tampoco resultaba viable la realización de una verificación *in situ*, ya que la documentación presentada no merecía la realización de dicho procedimiento o bien, tal como en el caso de documentación de ventas en el mercado interno de Brasil, no había sido presentada documentación alguna, con lo cual la verificación *in situ* resultaba inviable.

III.3 CONDUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y DE LA DETERMINACIÓN FINAL

III.3.1 RECLAMO 23: CONSISTENCIA CON EL ARTÍCULO 2.4

207. Brasil alega que la Argentina actuó de manera inconsistente con el artículo 2.4, al no haber tenido debidamente en cuenta las diferencias en concepto de flete para la determinación del Valor normal en el caso de SADIA y AVIPAL

Texto del artículo 2.4

En su parte relevante, el artículo 2.4 establece:

> *... Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias particulares, las diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios, entre otras, las diferencias en las condiciones de ventas, las de tributación, las diferencias en los niveles comerciales, en las cantidades y en las características físicas, y cualesquiera otras diferencias de las que también se demuestre que influyen en la comparabilidad de los precios ...*

Alegación argentina

208. Respecto de la comparación efectuada para la empresa SADIA SA. cabe formular las siguientes observaciones:

209. Brasil alega en los párrafos 372 a 374 de su comunicación que la Argentina no tuvo en cuenta la información que se había suministrado con fecha 20 de abril de 1999, al momento de devolver el cuestionario del exportador, y que como tal había sido consignada en el anexo VIII al mencionado cuestionario. Específicamente en el párrafo 374, el reclamo de Brasil dice "... *in its normal value calculation, the DCD failed to make the freight deductions as reported in Sadia's 20 April 1999 response to the questionnaire*".

210. Es verdad que la DCD no hizo las deducciones correspondientes a valores de flete indicados por la parte. Sin embargo, no hubo error u omisión en la actuación de la Autoridad de Aplicación en este caso. En ese sentido, no pudo efectuarse el ajuste por flete toda vez que no quedó debidamente documentado. SADIA había presentado en el anexo VIII del Cuestionario del Exportador una

estimación general en concepto de deducciones por flete, y con carácter meramente indicativo. Sin embargo, la información utilizada para el cálculo del Valor normal, fué la obtenida a partir del análisis de la totalidad de facturas aportadas por la empresa en base al muestreo realizado por la Autoridad de Aplicación, y que no fué acompañada por ninguna aclaración respecto de cargos por flete que correspondiera deducir, ni como anexo que acompañara la presentación de las facturas ni como ítem que formara parte de ellas.

211. Por lo tanto, hubiera sido incorrecto por parte de la DCD efectuar un descuento específico -con claro e importante impacto en la comparabilidad de precios- que :

a) no constaba en la prueba documental presentada;

b) había sido presentado -si bien como un valor deducible del valor unitario de la mercadería- de manera general, y representando más bien un promedio para un período extendido de tiempo, esto es un año como mínimo y tal como consta en el anexo VIII que acompaña al Cuestionario del Exportador de SADIA, que como el valor cierto que correspondería cargar o deducir a la mercadería, para la cual sí existía respaldo documental en debida forma.

212. Respecto de la comparación para la empresa AVIPAL SA. cabe formular las siguientes observaciones:

213. La DCD utilizó la mejor información disponible para efectuar la comparación de ambos precios para el caso de esta empresa, habida cuenta de que para la determinación del valor normal, utilizó la información provista por la misma en su presentación del día 12/08/1999 (Cuerpo 27, Fojas 2297[75]). Luego de la mencionada presentación, la autoridad de aplicación solicitó el día 12/10/1999 a la firma AVIPAL SA que aportara datos de operaciones y respaldo documental de las mismas mediante Nota Nº 273-001180/99[76] (Cuerpo 53, Fojas 2380).

214. Hay que señalar sin embargo, que la información solicitada por la Autoridad de Aplicación, fue presentada no sólo con demora el 21/12/1999 -esto es, dos meses más tarde, sino que además fue presentada sólo de manera parcial- (Cuerpo 60, Fojas 2505[77]). En efecto, en su presentación de la fecha mencionada, la empresa aportó el listado de operaciones solicitadas en soporte magnético (notas fiscales enero 98-enero 99) junto con una planilla en la que figuran las deducciones que debían practicarse a los precios. Sin embargo, no sólo se remitió la información sin la debida traducción exigida por las formas establecidas en la ley de procedimientos administrativos (Ley 19.549, artículo 28), sino que además no se acompañó del respaldo documental que hubiera permitido a la DCD comprobar la veracidad de lo que se afirmaba.

215. Pero además, la misma demora en la que incurrió la parte en el envío del listado, inhabilitó a la DCD a requerir las facturas que pudieran ser necesarias a partir de una muestra, tal como se había realizado con SADIA.

216. En consecuencia, la Autoridad procedió a utilizar aquella información para la que sí existía prueba documental, que eran facturas aportadas por la empresa en la presentación mediante Expediente Nº 061-007241/99 del 12 de agosto de 1999 -Cuerpo 27, Fojas 2297[78]-.

---

[75] Se acompaña Anexo ARG-XXXIII.

[76] Ver Anexo ARG-XXXI.

[77] Se acompaña Anexo ARG-XXXIV.

[78] Ver Anexo ARG-XXXIII.

217. Es importante destacar que la información utilizada fue entonces la provista por la empresa, que podría haber decidido enviar no sólo en tiempo la información requerida, sino que además podría haber acompañado tal información con el consiguiente respaldo documental, tal como lo había hecho anteriormente.

218. En base a lo expuesto, la Argentina considera que carece de fundamento la alegación de Brasil respecto a que la Autoridad de Aplicación no tomó debidamente en cuenta los ajustes que hubiera que haber hecho, así como que también carece de fundamento la afirmación de que las empresas SADIA y AVIPAL demostraron de manera fehaciente la necesidad de hacerlo.

219. Asimismo, la DCD ha actuado no sólo dentro de lo dispuesto claramente por la letra del artículo 2.4, sino que además a lo largo de la investigación fue dejando debidamente en claro el criterio utilizado.

220. Conforme establece el artículo 2.4: "... *Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, **según sus circunstancias particulares**, las diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios* ...". Claramente puede advertirse que la obligación impuesta a la parte que realiza una investigación, de tener debidamente en cuenta todas las diferencias que pudieran afectar la comparabilidad de precios, no es una obligación absoluta. La misma está condicionada a que los distintos factores y circunstancias alegados por las partes con el objeto de influir en la comparación entre precios que realiza la agencia investigadora, *tengan los méritos* suficientes para ser tomados en cuenta, dejando a criterio de la autoridad la determinación de la pertinencia o no de los factores que ante ella se presentan.

III.3.2 RECLAMO 24: CONSISTENCIA CON EL ARTÍCULO 2.4

221. Brasil alega que la Argentina habría actuado de manera inconsistente con el artículo 2.4 al no tomar debidamente en cuenta las diferencias en impuestos, fletes y costos financieros en el valor normal establecido para el resto de los exportadores.

Texto del artículo 2.4

En su parte relevante, el artículo 2.4 establece:

> *... Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias particulares, las diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios, entre otras, las diferencias en las condiciones de ventas, las de tributación, las diferencias en los niveles comerciales, en las cantidades y en las características físicas, y cualesquiera otras diferencias de las que también se demuestre que influyen en la comparabilidad de los precios ...*

Alegación argentina

222. Brasil alega que la DCD habría enviado dos notas a la firma JOX Assesoría Agropecuaria, solicitándole aclaraciones respecto de los impuestos incluidos en la publicación utilizada para realizar la determinación preliminar y que, pesar de la insistencia demostrada por obtener esa información, habría más tarde decidido no utilizar la misma para efectuar las deducciones de precios que -según Brasil- hubiera correspondido practicar sobre el valor normal.

223. La Argentina cree conveniente aclarar -antes de responder a la alegación brasileña- que, si bien es cierto que la DCD envió a JOX las dos notas mencionadas por Brasil pidiendo aclaración sobre los impuestos y otras condiciones comerciales incluidas en la publicación aportada al expediente, no se trata, sin embargo, de dos notas del mismo tenor, tal como Brasil afirma.

224. La primera nota a la que Brasil hace referencia -del 25/6/1999- Cuerpo 22, Fs. 1808, Nota Nº 273-000788/99 -es la nota original por la que se solicita aclaración, mientras que la segunda- de un mes más tarde -27/7/1999- Nota DCD Nº 273-000883/99 -Cuerpo 25, Fs. 2091[79]-, es una nota en respuesta a otra de JOX de fecha 2/7/1999, por la que esta última solicita que la DCD les remita una copia de la nota sobre la que se necesita aclaración.

225. La Argentina cree necesario reiterar el criterio que utiliza para interpretar la obligación de prestar la debida consideración a las diferencias que pudieran afectar la comparabilidad de precios en un procedimiento, establecidas en el artículo 2.4.

226. Como ya se ha expresado al contestar el reclamo 23, la Argentina considera que el artículo 2.4 establece los criterios que deben utilizarse a fin de asegurar que, las comparaciones entre el precio de exportación y el valor normal, sean realizadas de manera justa y equitativa.

227. La primera obligación para las partes está contenida en la primera oración del artículo, y si bien la Argentina considera que no hay una jerarquía entre las distintas oraciones del mismo, sí estas tienen distintos grados de precisión que, siguiendo una línea que iría de lo general a lo más específico, va desgranando los criterios que deben ser tenidos en cuenta en la comparación.

228. Así el artículo 2.4 en su primera oración estipula que la comparación debe ser equitativa. La segunda oración, prosigue de manera más específica, estableciendo el criterio mínimo que deberá tener esa comparación a fin de cumplimentar el requisito exigido: deberán compararse valores que representen el mismo nivel de comercio, normalmente nivel ex-fábrica. A continuación, el artículo prescribe que en base a una evaluación particular de cada caso, se tomen debidamente en cuenta las diferencias que pudieran afectar la comparabilidad de precios, describiendo algunos de los factores que deberán ser tenidos en cuenta, sin pretensión de agotar la enumeración de los mismos, y cumpliendo con la condición de que quede demostrada la necesidad de tomar en cuenta esas diferencias por su capacidad para influir en la comparabilidad de los precios.

229. Precisamente por que la comparación debe ser realizada de manera equitativa, y para ello es conveniente comparar el mismo nivel de comercio, es que no se tomaron en cuenta los descuentos informados por JOX. De haberlo hecho se hubiera comparado -incorrectamente- un precio ex-fábrica para el Valor Normal con un precio FOB de exportación, ya que no se contaba con información simétrica respecto de los descuentos a realizar a los valores de exportación de la mercadería.

230. En relación a lo que Brasil alega en el párrafo 392 de su comunicación, cabe señalar que en este caso la información que presentaron cinco exportadores el 26 de agosto de 1999, fue desechada por la DCD ya que no era exacta. En efecto, el cuadro presentado por los exportadores, no es correcto. Esto es claramente comprobable con sólo intentar reconstruir el precio final a partir del precio que resulta luego de practicadas las deducciones sugeridas.

231. Por todo lo expuesto, creemos que el Grupo Especial debe rechazar el reclamo de Brasil respecto de que la Argentina actuó inconsistentemente con el artículo 2.4 al no tomar debidamente en cuenta las diferencias en impuestos, fletes y costos financieros en el valor normal establecido para el resto de los exportadores, ya que la Argentina actuó no sólo dentro de los límites que le imponía la legislación vigente, sino que consideró y sopesó toda la información que le acercaron las partes, evaluando en cada caso y tal como lo prescribe el mismo artículo 2.4 la pertinencia de cada pieza de información de acuerdo a su mérito, con especial énfasis en la existencia de pruebas que permitieran verificar cada una de ellas.

[79] Se acompaña Anexo ARG-XXXV.

III.3.3 RECLAMO 25: CONSISTENCIA CON EL ARTÍCULO 2.4

232. Brasil alega que la Argentina habría actuado de manera inconsistente con el artículo 2.4 al tomar incorrectamente en cuenta las pretendidas diferencias físicas entre el producto vendido en Brasil y aquél exportado a la Argentina a fin de establecer el valor normal.

Texto del artículo 2.4

En su parte relevante, el artículo 2.4 establece:

> *... Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias particulares, las diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios, entre otras, las diferencias en las condiciones de ventas, las de tributación, las diferencias en los niveles comerciales, en las cantidades y en las características físicas, y cualesquiera otras diferencias de las que también se demuestre que influyen en la comparabilidad de los precios ...*

Alegación argentina

233. Brasil basa el presente reclamo en el hecho de que la DCD tomó en cuenta lo afirmado por el CEPA (peticionante) en la solicitud de apertura, respecto a que el pollo vendido en ambos países era diferente del que se exportaba a la Argentina, el cual no tenía patas ni cabeza, mientras que el que se destinaba para el mercado interno sí las tenía, sin verificar la veracidad de la información que se le había presentado.

234. Por lo tanto, Brasil sostiene que al haber efectuado un ajuste donde no era necesario, la DCD se habría extralimitado en su obligación de tomar debidamente en cuenta la información que le sometían las partes, sin evaluar su exactitud y pertinencia.

235. Argentina alega que, una vez mas, el reclamo de Brasil atinente a la aplicación del artículo 2.4 se basa en alegaciones apoyadas de manera parcial en el desarrollo de la investigación, a la que tuvieron acceso irrestricto tanto el propio gobierno de Brasil como los exportadores y demás partes interesadas, durante el tiempo que llevó sustanciar la misma. En consecuencia, las empresas exportadoras de Brasil, no podían ignorar que parte de la presentación de la peticionante era el anexo a la Nota 220/97, en la que se exponían las diferencias entre los productos que se comercializaban en ambos países, junto con una propuesta acerca de qué tipo de ajuste se debería realizar a fin de poder compararlos en un pie de igualdad.

236. Por lo tanto, en caso que los productores-exportadores brasileños hubieran estimado que las alegadas diferencias no eran tales, éstos tuvieron sobradas oportunidades a lo largo de todo el procedimiento administrativo por medio del cual se sustanció la investigación para dejar constancia del error de manera inequívoca, lo cual no hicieron.

237. Por otra parte, existen aclaraciones de JOX Assesoria Agropecuaria, en el sentido de que el pollo enfriado que se vende en la zona de San Pablo es generalmente un producto que incluye patas y cabeza, tal como se observa en la nota de fecha 1/8/97, incorporada al expediente en folio 177 y que forma parte del anexo Prueba documental BRA-1. Pero además, la misma empresa JOX, mediante nota de 23 de junio de 1999[80], informa a la Autoridad de Aplicación en el segundo punto del segundo párrafo que:

[80] Prueba documental BRA-32.

"*El pollo enfriado comercializado en el Estado de San Pablo, a menos que se indique lo contrario, en cuyo caso los precios deben ser alrededor de 10 por ciento superiores, incluyen cabeza y pies*".

238. Argentina estima en consecuencia, que:

a) en tanto a la autoridad que conducía la investigación le había sido presentada una prueba respecto de una diferencia física que claramente tenía una incidencia en la comparabilidad de precios que debía realizar como parte del procedimiento,

b) que además esa prueba era acompañada por un método adecuado para realizar el ajuste necesario para efectuar la comparación y, mas importante aún,

c) que no hubo durante la investigación por parte de los exportadores brasileños, ni rechazos realizados de manera expresa a la existencia de diferencia física entre ambos productos, ni tampoco al método propuesto para realizar el ajuste, el que sí fue criticado por los exportadores que, sin embargo, no ofrecieron en ningún momento razones para la crítica ni propuestas alternativas para realizarlo,

la Autoridad de Aplicación cumplió con el artículo 2.4 del AD que dispone que deberán tomarse debidamente en cuenta todas las diferencias que pudieran afectar una comparación equitativa, al efectuar el ajuste en base al método propuesto.

239. En base a lo expuesto, la Argentina estima que correspondía efectuar un ajuste a fin de poder comparar ambos precios, estimación que encuentra, tal como se ha reseñado, apoyo en los boletines y notas aclaratorias de JOX, que formaron parte desde un principio de la prueba aportada al expediente, y sobre la cual de haberse considerado pertinente, los exportadores brasileños podrían haber sugerido correcciones, cosa que no hicieron.

240. Se solicita por consiguiente al Grupo Especial que halle improcedente el reclamo de Brasil respecto de que Argentina habría actuado inconsistentemente con el artículo 2.4, por no existir una diferencia que afectara la comparabilidad, toda vez que, como ha quedado demostrado, era necesario realizar un ajuste que permitiera la equitativa comparabilidad de precios y que, a pesar de haber tenido sobradas oportunidades para hacerlo, en ningún momento las partes interesadas cuestionaron la necesidad de realizar el ajuste por diferencias físicas en el producto; sólo cuestionaron la metodología -sin ofrecer metodología alternativa alguna- pero no la necesidad de realizarlo.

III.3.4 RECLAMO 26: CONSISTENCIA CON EL ARTÍCULO 2.4

241. Brasil alega que la Argentina habría actuado de manera inconsistente con el artículo 2.4 al imponer una carga irrazonable de prueba a SADIA, AVIPAL y FRANGOSUL, al no delimitar el período de la investigación y al permitir a los exportadores remitir información acerca del dumping para los años 1996 a 1999, cuando el período de investigación fue más tarde delimitado entre enero de 1998 y enero de 1999.

Texto del artículo 2.4

En su parte relevante, el artículo 2.4 establece:

... Las autoridades indicarán a las partes afectadas qué información se necesita para garantizar una comparación equitativa y no les impondrán una carga probatoria que no sea razonable ...

Alegación argentina

242. Argentina no comparte los dichos de Brasil en el reclamo en consideración, y rechaza totalmente la supuesta imposición por parte de la Argentina, de una carga irrazonable de prueba para sus exportadores, reclamo este que Brasil intenta sustentar en los puntos siguientes:

a) no haber delimitado de manera automática al momento del inicio de la investigación el período bajo investigación;

b) considerar el valor normal sólo en base a las facturas aportadas por las partes, lo cual, considerando el enorme nivel de ventas en el mercado interno, tuvo el efecto de imponer una excesiva carga de prueba sobre los exportadores brasileños.

243. El AD no define el período de recolección de datos como tampoco el de objeto de investigación. La Autoridad de Aplicación en ese sentido, tiene discrecionalidad para solicitar la documentación que considere necesaria a los efectos de la determinación de dumping, pudiendo requerir mayor información, en tanto la misma sea necesaria para garantizar el debido proceso a las partes interesadas. Llama la atención que este cuidado de los intereses de las partes, sea utilizado como un argumento en el sentido de que se trataría de una "carga excesiva", con una referencia implícita a la búsqueda de un perjuicio para los exportadores.

244. En ese sentido, el argumento de Brasil es contradictorio con lo manifestado a lo largo del presente escrito ya que, en determinados casos se queja de que la Autoridad de Aplicación no pidió mayor información. En cambio, allí donde la Autoridad de Aplicación requirió más información a efectos de lograr un resultado preciso, Brasil se queja de la información solicitada aduciendo que se trata de una "carga excesiva para los exportadores".

245. A modo de ejemplo del especial cuidado puesto por la Autoridad de Aplicación en este punto, sirve resaltar que, precisamente atendiendo a la observación formulada por las partes respecto que, habida cuenta el gran nivel de operaciones que registran las empresas en el mercado local se hacía dificultoso para ellas proveer prueba registral de todas las transacciones, es que la Autoridad procedió a solicitar el aporte de pruebas sólo para aquellas operaciones seleccionadas en base al muestreo estadístico realizado, a fin de no imponer una carga excesiva sobre los exportadores.

246. De todos modos, los productores-exportadores brasileños, a lo largo de todo el procedimiento, no se quejaron de la carga de información solicitada por la DCD, en el marco de lo establecido por el artículo 6.1.3 del AD.

247. El difícil equilibrio en que Brasil pretende colocar a Argentina delimitando el volumen y tipo de información a requerir no parece en línea con un artículo como el 6 en sus párrafos 1 y 2 y otros relacionados en los que el Acuerdo busca brindar a las partes el derecho de legítima defensa que Argentina se cuidó de brindarles en este procedimiento.

III.3.5 RECLAMO 27: CONSISTENCIA CON EL ARTÍCULO 2.4.2

248. Brasil alega que la Argentina habría actuado de manera inconsistente con el artículo 2.4.2 al establecer de manera incorrecta el VALOR NORMAL para SADIA, AVIPAL y FRANGOSUL, basándose sólo en las transacciones de mercado interno para las cuales fueron presentadas facturas, en lugar de hacerlo para todas las transacciones que constaban en la lista remitida a la DCD. Brasil alega asimismo que la DCD estableció el margen de dumping para SADIA y AVIPAL en base a una comparación del Promedio ponderado (PP) de una muestra estadística con un PP de los precios de todas las transacciones de exportaciones.

Texto del artículo 2.4.2

En su parte relevante el artículo 2.4.2 establece:

> *A reserva de las disposiciones del párrafo 4 que rigen la comparación equitativa, la existencia de márgenes de dumping durante la etapa de investigación se establecerá normalmente sobre la base de una comparación entre un promedio ponderado del valor normal y un promedio ponderado de los precios de todas las transacciones de exportación comparables o mediante una comparación entre el valor normal y los precios de exportación transacción por transacción ...*

Alegación argentina

249. Si bien la Autoridad estableció una medida para AVIPAL y SADIA en base a una muestra, se ha demostrado que dicha muestra era -por haber sido calculada en base a una metodología/fórmula estadística correcta- representativa del universo de las operaciones de venta en el mercado interno. Dicha muestra fue acompañada de la documentación respaldatoria pertinente.

250. Por lo tanto, no se entiende el perjuicio alegado por Brasil ya que para la muestra se tomó la documentación presentada por las empresas.

III.3.6 RECLAMOS 32 Y 33: CONSISTENCIA CON LOS ARTÍCULOS 3.1, 3.4, 3.5 Y 12.2.2

251. Brasil alega que Argentina habría actuado de manera inconsistente con el artículo 3, párrafos 1, 4 y 5 al utilizar diferentes períodos para evaluar los factores económicos relevantes y los índices listados en el párrafo 4 lo cual, según Brasil, viciaría la determinación final de daño basado en una evidencia positiva y una evaluación objetiva (Reclamo 32). Asimismo, Brasil alega que la Argentina habría actuado de manera inconsistente con el artículo 12.2.2 al no haber explicado en la determinación final por qué se basó en diferentes períodos para evaluar los factores económicos relevantes y los índices listados en el párrafo 4 del artículo 3 (Reclamo 33).

Texto del artículo 3, párrafos 1, 4 y 5 y del artículo 12.2.2

> *3.1 La determinación de la existencia de daño a los efectos del artículo VI del GATT de 1994 se basará en pruebas positivas y comprenderá un examen objetivo: a) del volumen de las importaciones objeto de dumping y del efecto de éstas en los precios de productos similares en el mercado interno y b) de la consiguiente repercusión de esas importaciones sobre los productores nacionales de tales productos.*
>
> *3.4 El examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional de que se trate incluirá una evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes que influyan en el estado de esa rama de producción, incluidos la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el volumen de producción, la participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de las inversiones o la utilización de la capacidad; los factores que afecten a los precios internos; la magnitud del margen de dumping; los efectos negativos reales o potenciales en el flujo de caja ("cash flow"), las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir capital o la inversión. Esta enumeración no es exhaustiva, y ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva.*

3.5 Habrá de demostrarse que, por los efectos del dumping que se mencionan en los párrafos 2 y 4, las importaciones objeto de dumping causan daño en el sentido del presente Acuerdo. La demostración de una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño a la rama de producción nacional se basará en un examen de todas las pruebas pertinentes de que dispongan las autoridades. Estas examinarán también cualesquiera otros factores de que tengan conocimiento, distintos de las importaciones objeto de dumping, que al mismo tiempo perjudiquen a la rama de producción nacional, y los daños causados por esos otros factores no se habrán de atribuir a las importaciones objeto de dumping. Entre los factores que pueden ser pertinentes a este respecto figuran el volumen y los precios de las importaciones no vendidas a precios de dumping, la contracción de la demanda o variaciones de la estructura del consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los productos extranjeros y nacionales y la competencia entre unos y otros, la evolución de la tecnología y los resultados de la actividad exportadora y la productividad de la rama de producción nacional.

12.2.2 En los avisos públicos de conclusión o suspensión de una investigación en la cual se haya llegado a una determinación positiva que prevea la imposición de un derecho definitivo o la aceptación de un compromiso en materia de precios, figurará, o se hará constar de otro modo mediante un informe separado toda la información pertinente sobre las cuestiones de hecho y de derecho y las razones que hayan llevado a la imposición de medidas definitivas o a la aceptación de compromisos en materia de precios, teniendo debidamente en cuenta lo prescripto en cuanto a la protección de la información confidencial. En el aviso o informe figurará en particular la información indicada en el apartado 2.1, así como los motivos de la aceptación o rechazo de los argumentos o alegaciones pertinentes de los exportadores e importadores, y la base de toda decisión adoptada en virtud del apartado 10.2 del artículo 6.

Alegación argentina

252. La apertura de la investigación se enmarcó en el concepto de amenaza de daño. Por ende, la CNCE consideró, conforme práctica habitual, la posibilidad de analizar el comportamiento de las importaciones para el primer semestre de 1999. Al respecto, debe destacarse que tanto la normativa internacional como la práctica concordante en la materia prevén, para los casos de amenaza de daño, la posibilidad de analizar más allá del período de la investigación a efectos de indagar la existencia o no de una tendencia creciente de las importaciones y, en consecuencia, dar un mayor sustento fáctico a la investigación. (Por ejemplo, la legislación mexicana contempla expresamente la posibilidad de extender el período de investigación con posterioridad al inicio de la misma.)

253. En tal sentido, la Comisión Nacional de Comercio Exterior, respecto del período objeto de la investigación, utiliza información correspondiente a los tres años completos y los meses correspondientes anteriores a la apertura de la investigación para la determinación del daño, y para el análisis de la existencia de amenaza de daño, solicita datos correspondientes a los meses posteriores a la resolución de apertura de la investigación con el fin de observar tendencias, en este caso en particular, la evolución de las importaciones y su impacto en cuotas de mercados y precios.

254. Por otro lado, la vigencia de un acuerdo voluntario entre las partes entre los meses de octubre de 1998 y marzo de 1999 implicó la necesidad de analizar las importaciones sin los efectos de ese acuerdo, por lo cual se extendió dicho análisis hasta el mes de junio de 1999, tanto para las importaciones como para todas las variables del consumo aparente.

255. Como sustento jurídico de lo afirmado y refutando de antemano la objeción planteada por Brasil, cabe citar la propia Acta Nº 576, donde la Comisión oportunamente manifestó: "… *Cabe señalar que de no haber existido el acuerdo de volúmenes y precios realizado entre los exportadores de Brasil y los productores de Argentina, las importaciones de 1998 hubiesen registrado mayores aumentos y, con posterioridad al período investigado, en el primer semestre de 1999, hubiesen continuado su tendencia ascendente* …".

256. En el párrafo 427 de su comunicación Brasil sostiene que Argentina no respetó el artículo 3.1 del Acuerdo y que la determinación de daño no estuvo basada en un examen objetivo de los factores enumerados en dicho artículo. Acto seguido, realiza toda una serie de consideraciones lingüísticas a través de las cuales pretende -en base al texto en inglés del artículo- desvirtuar el análisis realizado por la CNCE señalando que éste tuvo carácter subjetivo.

257. Al respecto, cabe formular las siguientes consideraciones:

a) Retomando también las acepciones de los términos empleados, "objetivo" es algo "perteneciente o relativo al objeto en sí y no nuestro modo de pensar o de sentir"[81], en tanto que subjetivo es algo "relativo a nuestro modo de pensar o de sentir, y no al objeto en sí mismo".[82] De lo expuesto se desprende que la Argentina coincide con esta distinción terminológica.

b) Sin embargo, en modo alguno resulta posible aceptar que la determinación de la Comisión resultó "imaginaria", "parcial", "distorsionada" o discrecional. Tampoco que se utilizaron distintos parámetros para el análisis de los indicadores, conforme surge de los distintos instrumentos resultantes del procedimiento de la investigación.

258. En relación a lo que Brasil señala en los párrafos 432 y 433, cabe afirmar que la Argentina dio estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12.2.2 mediante el Aviso público a través de la publicación de la Res. MEyOSP en el Boletín Oficial.

259. En efecto, además del acto de la administración denominado Resolución, mediante el que se da a conocimiento público la decisión adoptada, tanto todo informe emanado de los organismos técnicos competentes como las determinaciones adoptadas en su consecuencia, se encuentran a disposición de todas las partes interesadas en la investigación que se hayan presentado y acreditado en el expediente.

260. A fin de ilustrar lo expresado, cabe señalar por ejemplo que en el caso bajo examen, el Acta Nº 576 tiene 30 fojas que sumadas a las 122 del Informe Técnico correspondiente (GEGE/ITDF Nº 03/99) alcanzan a 152 fojas. Es por ello que la Argentina, conforme lo requerido en el artículo 12.2.2, hace pública en el Boletín Oficial las resoluciones en las que, en sus considerandos, transcriben las conclusiones de los distintos organismos intervinientes en la investigación.

261. Esta metodología argentina fue hecha pública en diversas oportunidades ante la OMC (en especial, en el Grupo *ad hoc* sobre Aplicación) y apoyada por numerosos Miembros en el sentido de la imposibilidad de la publicación en un medio oficial de la totalidad de instrumentos e informes elaborados por los organismos técnicos que sirven de base para la adopción de las decisiones finales de las autoridades superiores.

---

[81] Ver "Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española", vigésima primera edición, Madrid, 1992, página 1.459.

[82] Ver "Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española", vigésima primera edición, Madrid, 1992, página 1.911.

262. También debe destacarse como antecedente relevante en la materia lo manifestado por el Grupo Especial en el asunto *Guatemala - Cemento*, donde se puede leer que:

> "*México alega que el aviso de iniciación de Guatemala no cumple el criterio relativo a la "debida información" porque no contiene la debida información sobre la base de la alegación de dumping formulada en la solicitud, ni la debida información en que se resuman los factores en los que se basa la alegación de daño, en este caso de amenaza de daño importante, como requiere el párrafo 1.1 del artículo 12.*"
>
> "*Guatemala responde que el aviso público complementado por un informe técnico de la Dirección de 17 de noviembre de 1995, es adecuado para llenar los requisitos del párrafo 1.1 del artículo 12. Dado que el expediente estaba a disposición del público, Guatemala considera que el informe de la Dirección de Integración Económica estaba a disposición de México y contenía la información pertinente, en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 1.1 del artículo 12.*"[83]

III.3.7 RECLAMOS 34, 35, 36 Y 37: CONSISTENCIA CON LOS PÁRRAFOS 1, 2, 4 Y 5 DEL ARTÍCULO 3

263. Brasil alega que, al no excluir del análisis de daño a las importaciones de dos exportadores brasileños, la Argentina no consideró adecuadamente el volumen, el efecto sobre los precios y la repercusión de las importaciones objeto de dumping en la producción nacional, por lo que la Argentina habría actuado de manera inconsistente con el artículo 3.2 (Reclamo 34) y con el artículo 3.4 (Reclamo 36). Asimismo, Brasil alega que la evaluación de las importaciones objeto de dumping indicaría que la determinación final de daño no se basó en una evidencia positiva y una evaluación objetiva, conforme lo requerido por el artículo 3.1 (Reclamo 35). Luego Brasil alega que, dado que no se excluyeron a las importaciones de esos dos exportadores brasileños de las importaciones objeto de dumping, Argentina habría actuado de manera inconsistente con el artículo 3.5, al no considerar adecuadamente el daño conforme lo prescrito en el artículo 3.1 y, consecuentemente, no habría demostrado adecuadamente la relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño a la rama de producción nacional, conforme lo prescrito en el artículo 3.5 (Reclamo 37).

Texto de los artículos

> *3.1 La determinación de la existencia de daño a los efectos del artículo VI del GATT de 1994 se basará en pruebas positivas y comprenderá un examen objetivo: a) del volumen de las importaciones objeto de dumping y del efecto de éstas en los precios de productos similares en el mercado interno y b) de la consiguiente repercusión de esas importaciones sobre los productores nacionales de tales productos.*
>
> *3.2 En lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de dumping, la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido un aumento significativo de las mismas, en términos absolutos o en relación con la producción o el consumo del Miembro importador. En lo tocante al efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los precios, la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido una significativa subvaloración de precios de las importaciones objeto de dumping en comparación con el precio de un producto similar del Miembro importador, o bien si el efecto de tales importaciones es hacer bajar de otro modo los precios en medida significativa o impedir en medida significativa la subida que en otro caso se*

[83] *Guatemala - Medida Antidumping definitiva aplicada al cemento portland gris procedente de México (WT/DS156/R);* informe del Grupo Especial, párrafos 8.90 y 8.91.

hubiera producido. Ninguno de estos factores aisladamente o varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva.

3.4 El examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional de que se trate incluirá una evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes que influyan en el estado de esa rama de producción, incluidos la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el volumen de producción, la participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de las inversiones o la utilización de la capacidad; los factores que afecten a los precios internos; la magnitud del margen de dumping; los efectos negativos reales o potenciales en el flujo de caja ("cash flow"), las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir capital o la inversión. Esta enumeración no es exhaustiva, y ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva.

3.5 Habrá de demostrarse que, por los efectos del dumping que se mencionan en los párrafos 2 y 4, las importaciones objeto de dumping causan daño en el sentido del presente Acuerdo. La demostración de una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño a la rama de producción nacional se basará en un examen de todas las pruebas pertinentes de que dispongan las autoridades. Estas examinarán también cualesquiera otros factores de que tengan conocimiento, distintos de las importaciones objeto de dumping, que al mismo tiempo perjudiquen a la rama de producción nacional, y los daños causados por esos otros factores no se habrán de atribuir a las importaciones objeto de dumping. Entre los factores que pueden ser pertinentes a este respecto figuran el volumen y los precios de las importaciones no vendidas a precios de dumping, la contracción de la demanda o variaciones de la estructura del consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los productos extranjeros y nacionales y la competencia entre unos y otros, la evolución de la tecnología y los resultados de la actividad exportadora y la productividad de la rama de producción nacional.

Alegación argentina

264. Con respecto a la participación en el total del volumen exportado por Brasil de los exportadores de dicho país en los cuales no se encontró margen de dumping significativo, se debe señalar que la principal relación entre volumen de importaciones y daño se refleja tanto en la cuota de mercado como en la relación importaciones y producción. La relevancia y la sensibilidad de estos indicadores en la determinación de daño se expone a continuación.

265. La CNCE analizó el volumen total de las importaciones investigadas concluyendo "… *que la industria nacional de pollos eviscerados enteros sufre daño importante causado por las importaciones en condiciones de presunto dumping originarias de la República Federativa del Brasil*".

266. Sobre el particular, Brasil parte de una premisa errónea al suponer que la Autoridad de Aplicación no efectuó los análisis correspondientes. En efecto, al momento de analizar la relación de causalidad, la autoridad competente, contrariamente a lo expuesto por Brasil, tuvo en cuenta la determinación de inexistencia de dumping para las exportaciones hacia la República Argentina efectuadas por las empresas brasileñas NICOLINI y SEARA.

267. Según puede constatarse en las fojas 4564 y 3469 del Expediente CNCE Nº 43/97 y en el ITDF Nº 03/99[84], existe información aportada por las empresas NICOLINI y SEARA en los Cuestionarios para el Exportador de la CNCE. Según surge de dicha información, los precios medios FOB de las citadas empresas fueron sustancialmente superiores a los correspondientes al resto de las exportaciones del origen investigado y para las cuales la autoridad competente determinó la existencia de la práctica desleal. Asimismo, se observa que el volumen de las exportaciones correspondientes a las mencionadas empresas se ubicó en niveles de participación lejanos a la mayoría de las exportaciones originarias de Brasil a lo largo de período analizado por la CNCE.

268. El Acta Nº 576 de la CNCE concluyó respecto de los precios que "*las importaciones investigadas se han hecho presentes en el mercado a precios tales que han dañado los precios del producto nacional similar. Los precios de los pollos eviscerados enteros en el mercado interno disminuyeron a lo largo del período y las importaciones investigadas incidieron en esa reducción. La evidencia obtenida durante la investigación indica que el precio es factor decisivo en el mercado y su reducción, a lo largo del período, estuvo asociada a la presencia de las importaciones investigadas y a sus precios*".

269. Por lo tanto, dado que los precios medios FOB del resto de las importaciones investigadas fueron inferiores a los de las empresas que no practicaron dumping, lógicamente, de su nacionalización hubieran resultado indefectiblemente precios internacionalizados, aún menores que los determinados por la CNCE en su determinación final de daño.

270. A fin de brindar una sucinta lectura de lo expresado precedentemente, se adjunta al final del presente punto III.3.7, un cuadro y su correspondiente gráfico, donde se observa que los precios medios FOB de las importaciones sin dumping (NICOLINI y SEARA) superaron en un 13 por ciento en los años 1997 y 1998 al del resto de las importaciones investigadas. Esta situación se repitió mes a mes según surge del gráfico mencionado, en el que, además, se observa que los precios medios FOB mensuales de las importaciones desde cada una de las empresas se mantuvieron en todos los meses, con excepción del mes de octubre de 1997, para la empresa NICOLINI, por encima de los precios medios FOB de las operaciones para las cuales se determinó la existencia de dumping.

271. Por último, el hecho que las exportaciones de NICOLINI y SEARA no fueran mayoritarias en ningún año del período investigado por la CNCE implicaba que no pudieran esperarse cambios sustanciales en el volumen y participación del resto de las importaciones investigadas. En este sentido, en los cuadros de consumo aparente (los cuales también se acompañan al final del presente punto III.3.7 se observa que las importaciones con dumping fueron claramente mayoritarias, llegando en 1998 a casi 40.000 toneladas, frente a las 56.000 del total de importaciones del origen investigado, y que crecieron a un ritmo similar al del total de importaciones del origen investigado e incluso más aceleradamente durante 1998 (45 por ciento en el caso de las importaciones con dumping y 40 por ciento en el total de las importaciones originarias de Brasil).

272. De esta forma, la participación en el consumo aparente de las importaciones con dumping creció, desplazando a las ventas internas del producto nacional similar.

273. A modo de conclusión, Argentina señala que lo expuesto precedentemente surge de los expedientes, en los que tanto el Gobierno de la República Federativa de Brasil como las empresas productoras exportadoras de dicho país fueron partes interesadas y, por lo tanto, tuvieron acceso a toda esta información, careciendo, en consecuencia, de fundamento los reclamos que se efectúan.

[84] Ver Prueba documental BRA-14.

PRECIOS MEDIOS FOB DE LAS IMPORTACIONES DE POLLOS EVISCERADOS ENTEROS FRESCOS O REFRIGERADOS Y CONGELADOS

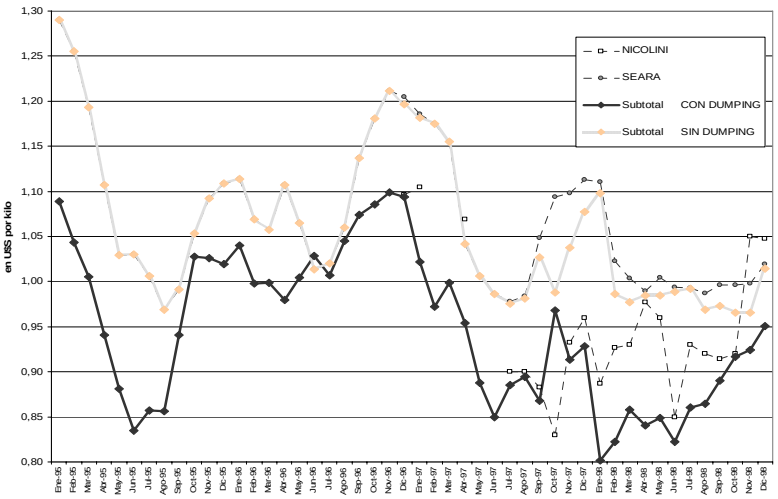
En dólares por kilogramo

PERIODO	BRASIL			RESTO DE ORÍGENES	TOTAL ORÍGENES
	TOTALES	Sub total SIN DUMPING (NICOLINI + SEARA)	Subtotal CON DUMPING		
Ene-95	1,12	1,29	1,09	1,13	1,12
Feb-95	1,09	1,26	1,04	1,17	1,09
Mar-95	1,05	1,19	1,01	1,21	1,05
Abr-95	0,98	1,11	0,94		0,98
May-95	0,92	1,03	0,88		0,92
Jun-95	0,89	1,03	0,83		0,89
Jul-95	0,88	1,01	0,86		0,88
Ago-95	0,89	0,97	0,86		0,89
Sep-95	0,95	0,99	0,94	1,14	0,96
Oct-95	1,03	1,05	1,03	1,14	1,04
Nov-95	1,04	1,09	1,03	1,14	1,05
Dic-95	1,04	1,11	1,02	1,14	1,05
Ene-96	1,06	1,11	1,04	0,99	1,05
Feb-96	1,02	1,07	1,00	1,10	1,03
Mar-96	1,01	1,06	1,00	1,15	1,02
Abr-96	1,01	1,11	0,98	1,12	1,01
May-96	1,02	1,06	1,00		1,02
Jun-96	1,02	1,01	1,03	1,07	1,02
Jul-96	1,01	1,02	1,01	1,07	1,02
Ago-96	1,05	1,06	1,05	1,07	1,06
Sep-96	1,09	1,14	1,07	1,07	1,09
Oct-96	1,12	1,18	1,09	2,00	1,12
Nov-96	1,13	1,21	1,10		1,13
Dic-96	1,12	1,20	1,09	1,03	1,12
Ene-97	1,07	1,18	1,02		1,07
Feb-97	1,04	1,18	0,97		1,04
Mar-97	1,05	1,16	1,00		1,05
Abr-97	0,98	1,04	0,95		0,98
May-97	0,93	1,01	0,89		0,93
Jun-97	0,88	0,99	0,85		0,88
Jul-97	0,91	0,98	0,88		0,91
Ago-97	0,91	0,98	0,89		0,91
Sep-97	0,90	1,03	0,87		0,90
Oct-97	0,98	0,99	0,97		0,98
Nov-97	0,95	1,04	0,91	1,00	0,95
Dic-97	0,98	1,08	0,93	0,93	0,98
Ene-98	0,87	1,10	0,80	1,00	0,88
Feb-98	0,90	0,99	0,82	1,00	0,90
Mar-98	0,91	0,98	0,86	1,00	0,91
Abr-98	0,90	0,98	0,84		0,90
May-98	0,91	0,98	0,85		0,91
Jun-98	0,86	0,99	0,82		0,86
Jul-98	0,89	0,99	0,86		0,89
Ago-98	0,89	0,97	0,86	0,94	0,89
Sep-98	0,91	0,97	0,89	1,01	0,91
Oct-98	0,93	0,97	0,92	0,91	0,93
Nov-98	0,95	0,97	0,92	0,91	0,95
Dic-98	0,97	1,01	0,95	0,91	0,97
1995	1,01	1,10	0,99	1,14	1,02
1996	1,06	1,12	1,04	1,07	1,06
1997	0,96	1,05	0,92	0,94	0,96
1998	0,91	0,99	0,88	0,96	0,91
Var. % 96/95	5	2	5	-6	4
Var. % 97/96	-9	-6	-11	-12	-9
Var. % 98/97	-5	-5	-5	2	-5

Período de referencia.

Fuente: CNCE sobre la base de información del INDEC

Precio medio FOB de las importaciones por exportador



CONSUMO APARENTE DE POLLOS EVISCERADOS ENTEROS

En toneladas

Período	Ventas de producción nacional al mercado interno	Importaciones (1)					Consumo aparente
		Brasil			Resto de orígenes	Total	
		Total BRASIL	Brasil SIN dumping	Brasil CON dumping			
1995	688.725	15.317	3.660	11.657	622	15.939	704.664
1996	667.402	22.544	6.517	16.027	1.843	24.386	691.788
1997	693.641	40.128	12.845	27.283	320	40.448	734.089
1998	782.850	56.291	16.803	39.487	316	56.606	839.457
Var.% 96/95	-3	47	78	37	196	53	-2
Var.% 97/96 (2)	4	78	97	70	-83	66	6
Var.% 98/97	13	40	31	45	-1	40	14

Período de referencia

(1) Netas de la variación de existencias informada por los importadores.

(2) Sólo a partir del último cuatrimestre de 1994, las importaciones de NICOLINI superaron las 100 toneladas mensuales.

ESTRUCTURA DEL CONSUMO APARENTE DE POLLOS EVISCERADOS ENTEROS

En porcentajes

Período	Ventas de producción nacional al mercado interno	Importaciones					Consumo aparente
		Brasil			Resto de orígenes	Total	
		Total BRASIL	Brasil SIN dumping	Brasil CON dumping			
1996	96,5	3,3	0,9	2,3	0,3	3,5	100
1997	94,5	5,5	1,7	3,7	0,0	5,5	100
1998	93,3	6,7	2,0	4,7	0,0	6,7	100

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total a causa de diferencias en el redondeo.

Fuente: CNCE en base a información de INDEC y suministrada en el expediente de referencia.

III.3.8 RECLAMOS 38, 39 Y 40: CONSISTENCIA CON LOS PÁRRAFOS 4 Y 1 DEL ARTÍCULO 3 Y ARTÍCULO 12.2.2.

274. Brasil alega que la Argentina habría actuado de manera inconsistente con el artículo 3.4 al no haber evaluado todos los factores económicos relevantes e índices listados en el párrafo de dicho artículo (Reclamo 38) y, por lo tanto, ante el alegado incumplimiento anterior, habría asimismo actuado de manera inconsistente con el artículo 3.1 al no haber basado, según Brasil, la determinación de daño en evidencia positiva y en una evaluación objetiva (Reclamo 39). Asimismo, Brasil alega que la Argentina habría actuado de manera inconsistente con el artículo 12.2.2 al no haber considerado en la determinación final la evaluación de todos los factores económicos relevantes e índices listados en el artículo 3.4 (Reclamo 40).

Texto del artículo 3, párrafos 4 y 1

> *3.4 El examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional de que se trate incluirá una evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes que influyan en el estado de esa rama de producción, incluidos la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el volumen de producción, la participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de las inversiones o la utilización de la capacidad; los factores que afecten a los precios internos; la magnitud del margen de dumping; los efectos negativos reales o potenciales en el flujo de caja ("cash flow"), las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir capital o la inversión. Esta enumeración no es exhaustiva, y ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva.*
>
> *3.1 La determinación de la existencia de daño a los efectos del artículo VI del GATT de 1994 se basará en pruebas positivas y comprenderá un examen objetivo: a) del volumen de las importaciones objeto de dumping y del efecto de éstas en los precios de productos similares en el mercado interno y b) de la consiguiente repercusión de esas importaciones sobre los productores nacionales de tales productos.*

Texto del artículo 12.2.2

> *12.2.2 En los avisos públicos de conclusión o suspensión de una investigación en la cual se haya llegado a una determinación positiva que prevea la imposición de un derecho definitivo o la aceptación de un compromiso en materia de precios, figurará, o se hará constar de otro modo mediante un informe separado toda la información pertinente sobre las cuestiones de hecho y de derecho y las razones que hayan llevado a la imposición de medidas definitivas o a la aceptación de compromisos en materia de precios, teniendo debidamente en cuenta lo prescripto en cuanto a la protección de la información confidencial. En el aviso o informe figurará en particular la información indicada en el apartado 2.1, así como los motivos de la aceptación o rechazo de los argumentos o alegaciones pertinentes de los exportadores e importadores, y la base de toda decisión adoptada en virtud del apartado 10.2 del artículo 6.*

Alegación argentina

275. Argentina actuó en forma consistente con las disposiciones del Acuerdo Antidumping al haber evaluado, en materia de daño, todos los factores enumerados en el artículo 3.4, así como su impacto en los precios del producto similar doméstico y su impacto en la rama de la industria nacional.

276. Las alegaciones brasileñas respecto a la ausencia de análisis o evaluación alguna sobre factores tales como productividad, variables que afecten el precio del producto doméstico, la magnitud del margen de dumping, efectos actuales y potenciales en el cash flow de las empresas peticionantes, crecimiento y la capacidad para reunir capital no son fundadas.

277. En primer término las empresas peticionantes presentaron, en el desarrollo de la investigación, información referente a las condiciones de productividad del sector que reflejaban, en base a los indicadores relevantes para este tipo de industria, que la producción avícola argentina se encontraba, al inicio de la investigación realizada por las autoridades argentinas, en un pie de igualdad tanto respecto de su par brasileña como de los principales productores a nivel mundial.

278. Ello está reflejado en el Acta 576 a fojas 12, 13, 14, 20 y en el Informe Técnico a fojas 26, 28, 29, 30 y 95. En tal sentido, dichos apartados básicamente explican la mejora en términos de productividad que resultó del proceso de reestructuración productiva que encaró el sector desde principios de la década del 90, como respuesta al cambio que se estaba dando en las condiciones de mercado resultantes tanto de la apertura unilateral de nuestro país para el período citado como del proceso de integración entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil.

279. Esto está asimismo corroborado por el hecho de que las alegaciones del CEPA en el sentido de los párrafos anteriores no fueron cuestionadas durante el desarrollo de la investigación, ni por las empresas exportadoras brasileñas ni por las importadoras en el mercado argentino. Al respecto, el CEPA confirmó que los principales indicadores de productividad, tales como la cantidad de huevos por gallina para ser incubados por ciclo, la cantidad de pollitos BB que nacen, la ganancia de peso diario de los pollos en crianza, la cantidad de alimento balanceado para producir un kilo de carne, en una lista no exhaustiva, son similares a los de la industria brasileña e incluso en algunos casos, como la ganancia de peso diario de los pollos en crianza, superiores.

280. Adicionalmente, la lectura de algunos indicadores reflejados en el anexo están relacionados directamente con la productividad, como es el caso de la cantidad de mano de obra empleada y de ciertos rubros de los costos medios unitarios vis-á-vis el aumento sostenido de la producción (Ver cuadros 1, 11, 12, 13 y 14 del anexo I del Informe Técnico).[85]

281. La industria argentina tiene actualmente costos comparables a los productores más competitivos internacionalmente. Esto último fué el resultado de un significativo programa de reconversión y adecuación productiva que tuvo como pilar un cronograma de inversiones por más de 270 millones de dólares, las que se llevaron a cabo entre los años 1994 y 1998.[86] La mayor parte de las mismas estuvieron orientadas a la renovación, ampliación y equipamiento de plantas frigoríficas así como al equipamiento y construcción de granjas (básicamente para reproducción), habiéndose asimismo mejorado la capacidad de silos, la incorporación de nueva tecnología en fábricas de alimento balanceado, a la adquisición de incubadoras y a la automatización de equipos de subproductos y tratamientos de efluentes, a la capacitación de personal, a la adquisición de rodados, etc.

282. Muchos de estos procesos de inversión se vieron afectados por la incertidumbre que genera en el mercado local la entrada del producto brasileño, que utiliza al mercado argentino como mercado alternativo de ajuste ante problemas de demanda local o externa, afectando negativamente el proceso de recuperación de los precios toda vez que se da un ciclo sostenido de demanda en nuestro país.

- **Características del mercado avícola argentino:**

283. El sector avícola en la Argentina se ha caracterizado históricamente por abastecer localmente y tener un bajo coeficiente de exportación. El consumo de este tipo de carnes tradicionalmente ha tenido una marcada estacionalidad en los meses de noviembre y diciembre, motivada esencialmente por las fiestas de fin de año. El perfil de la demanda para la carne aviar está, en adición al precio del producto en sí, fuertemente condicionado al de la carne roja o vacuna, su principal sustituto dadas las características del mercado argentino, siendo el comportamiento comparativo de precios con dicho producto una de las variables clave para analizar el comportamiento del consumo en el sector avícola.

[85] Ver Prueba documental BRA-14.

[86] Se acompaña Anexo ARG-XXXVI.

284. *Ceteris paribus* este último elemento, y teniendo en cuenta que no existen diferencias significativas en términos de calidad con el pollo del Brasil, la competencia se da primordialmente vía precio en un mercado que, por las características que se describirán a continuación, es altamente sensible a pequeñas variaciones en la oferta y a la luz de lo cual debe evaluarse tanto la amenaza de daño como el daño propiamente dicho.

285. Esto se debe básicamente a:

a) Tratarse de un mercado con una demanda relativamente estable, la cual registró un crecimiento importante del consumo a partir de la década del 90.

b) La magnitud de la capacidad brasileña de producción y generación de excedentes exportables que hace que Brasil fácilmente pueda reorientarse a terceros mercados ante desequilibrios domésticos o externos, a pesar del considerable tamaño de su mercado interno.[87]

c) La marginalidad, en términos relativos, del mercado avícola argentino vis-á-vis el brasileño, lo que configura una alta potencialidad para discriminar precios subsidiando en forma cruzada en función del mercado doméstico y de terceros mercados (En este último sentido, ver cuadro en página 21 del Acta 576[88]).

d) La proximidad del mercado brasileño, lo que implica un *lead-time* efectivo de 72 horas en términos del principal mercado de consumo, el de la Capital Federal y su área conurbana.

e) La inexistencia de barreras significativas en acceso para este producto a partir del acuerdo del MERCOSUR, así como la estabilidad cambiaria que caracterizó toda la década del 90 como resultado de aplicar una caja de conversión que fijó una paridad 1 a 1 del peso argentino con el dólar estadounidense.

f) El impacto de las importaciones brasileñas como fijadoras de precio en el mercado argentino, aún con volúmenes relativamente bajos debido a la enorme potencialidad de poder incrementar los embarques en muy corto plazo.

g) Las restricciones, tanto técnicas como de índole financiera, para mantener *stocks* por tiempos prolongados (páginas 92/94 del Informe Técnico).

286. A la luz de lo expuesto precedentemente, y teniendo en cuenta que por las características de comercialización del producto, la fijación del precio doméstico está fuertemente influenciada por el precio resultante en el mercado de importación, los desequilibrios derivados de excesos de oferta en el mercado de origen y las importaciones en condiciones de dumping, necesariamente derivaron en ajustes vía precio para el sector doméstico.

287. Este mecanismo implicó, para la industria avícola argentina, pérdidas en términos efectivos y potenciales, por cuanto la entrada inmediata del producto brasileño en función del ciclo favorable del mercado local y en condiciones de dumping afectó significativamente los precios, deprimiéndolos y así afectando el retorno de una industria que había realizado inversiones importantes para el mejoramiento de su productividad.

[87] Ver apartado VI.2 "MERCOSUR" del Informe Técnico (Prueba documental BRA-14).

[88] Ver Prueba documental BRA-14.

288. La depresión de los precios domésticos, en un contexto de crecimiento sostenido del consumo aparente por un cambio de hábito en el consumo, no puede sino explicarse por la existencia de importaciones en condiciones de competencia desleal.

289. Al respecto, se desprende claramente la enorme capacidad del Brasil para volcar excedentes exportables en condiciones de competencia desleal en el mercado argentino que, dada su proximidad geográfica, es el de más fácil acceso.[89] Por ejemplo, para el período agosto/septiembre de 1997, cuando tuvo lugar la crisis del sudeste asiático, se incrementaron los volúmenes exportados a nuestro país en un 115 por ciento, es decir que en un período de tres meses se pasó de un volumen de 2.349 toneladas a 5.082, cifra esta última que equivale aproximadamente al 10 por ciento de la producción nacional de un mes o a la producción total de un mes de empresas como San Sebastián o Rasic SA.

290. Asimismo, cabe señalar que dicho incremento se dio, tal y como ha sido consistentemente alegado por la Argentina, por la vía de orientar excedentes que no pudieron canalizarse en los mercados tradicionales del Brasil hacia mercados alternativos como la Argentina, que en ese momento registraba una clara recuperación de los precios, la cual no pudo ser sostenida en el tiempo por el efecto depresivo de las importaciones del Brasil en condiciones de dumping.

291. Brasil por su parte, cuya industria avícola registró pérdidas entre el 20 por ciento y el 25 por ciento incrementó sus ventas a la Argentina, en variación porcentual anual, **un 70,52 por ciento en 1997 y un 113,35 por ciento en 1998**.

- **Otros Factores que afecten el precio del producto doméstico:**

292. La CNCE consideró adecuadamente todos los factores que, en adición a las importaciones, pudieran tener algún efecto sobre los precios del producto doméstico. A tal efecto, se analizó la evolución de los índices de precios de los productos sustitutos, básicamente las carnes rojas, así como el nivel general de actividad y los índices de precios de los sectores más importantes en este último sentido (Ver cuadro Nº 16 del Informe Técnico[90]). En líneas generales, los argumentos esgrimidos por los productores-exportadores y por Brasil no se sustentan, por cuanto a pesar de la recesión en la Argentina el consumo aparente de carne aviar se incrementó sostenidamente, de forma tal que aquella variable mal podría explicar el efecto depresivo sobre los precios. La competencia de los pollos preparados tampoco tendría mayor fundamentación, al tratarse no solo de dos productos distintos, sino que también son producidos por las mismas empresas que venden pollo refrigerado o fresco.

293. Adicionalmente, tampoco cabrían consideraciones por el lado de cambios en el perfil de la demanda que hiciesen necesario políticas de precios agresivas para retener porciones de mercado, por cuanto el incremento ya citado en el consumo aparente se debe justamente a una tendencia originada desde mediados de los años 80 hacia la sustitución creciente de carnes magras por sus mejores propiedades alimenticias y de salud vis-á-vis las carnes rojas.

- **Consideraciones respecto a los efectos derivados del margen del dumping:**

294. En un contexto de tipo de cambio fijo y recesión, sumado a las consideraciones ya expuestas respecto a las características del mercado argentino, los efectos de prácticas desleales como el dumping se potencian aún con márgenes poco significativos. Esto es, por otra parte, doblemente válido en *commodities* como el producto de referencia, donde la competencia se da primordialmente por la variable precio.

---

[89] Se acompaña Anexo ARG-XXXVII.

[90] Ver Prueba documental BRA-14.

295. En tal sentido, y recordando lo ya expuesto respecto a la potencialidad del Brasil en términos de volcar excedentes en condiciones de competencia desleal, márgenes entre el 8 por ciento y 14 por ciento son significativos y así fueron evaluados, por su impacto potencial sobre la producción argentina, por la autoridad investigadora.

- **Consideraciones respecto a la falta de análisis sobre cash flow y la capacidad para reunir capital:**

296. En primer lugar cabe señalar, a juicio de la Argentina, una consideración de contexto respecto a las modalidades de financiamiento de las empresas en nuestro país. En tal sentido, el mercado de capitales nunca ha sido una fuente de significación, con algunas esporádicas excepciones como ha sido parte de la década del 90, lo cual se refleja en gran medida en la normativa contable vigente.

297. Normativamente, en virtud del artículo 299 de la Ley 19550 las empresas están obligadas a presentar el "Estado de Origen y Aplicación de Fondos" que, a diferencia del *cash flow* en el sentido estricto de contabilidad financiera, no es una desagregación detallada del estado de flujo de efectivo sino meramente un detalle sintético de los conceptos que han aumentado o disminuidos los fondos. En consecuencia, estas partidas no permiten concluir en ningún sentido respecto de la evolución del flujo de caja.

298. En virtud de lo expuesto en el punto anterior, los indicadores que por aproximación permitirían efectuar algún tipo de análisis en términos de la variable de referencia serían los de liquidez y punto de equilibrio, los cuales han sido analizados en forma consistente en el Informe Técnico adjunto al Acta 576.

299. Finalmente, y en consonancia con lo dicho en el párrafo 296 *supra*, así como respecto de los mecanismos de financiación del sector, ninguna de las empresas peticionantes cotiza en bolsa ni ha recurrido nunca al mercado de capitales, en virtud de lo cual e independientemente de las normas vigentes en la materia el requerimiento del análisis del *cash flow* no es relevante ni tampoco factible de efectuar.

300. Atento las consideraciones de hecho y de derecho desarrolladas precedentemente en relación a los reclamos 38, 39 y 40, Argentina considera que ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en los artículos 3.1, 3.4 y 12.2.2, es decir, que ha tenido debidamente en cuenta en su determinación final la evaluación efectuada de todos los factores económicos relevantes e índices listados en el artículo 3.4.

III.3.9 RECLAMO 41: CONSISTENCIA CON EL ARTÍCULO 4.1

301. Brasil alega que la Argentina habría actuado de manera inconsistente con el artículo 4.1 al considerar que el 46 por ciento constituía la mayor proporción del total de la producción doméstica de pollos en la Argentina.

Texto del artículo 4.1

En su parte relevante, el artículo 4.1 establece:

> *A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "rama de producción nacional" se entenderá en el sentido de abarcar el conjunto de los productores nacionales de los productos similares, o aquellos de entre ellos cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la producción nacional total de dichos productos ...*

Alegación argentina

302. La definición de la rama de la producción nacional se ajustó a la normativa OMC, en el sentido que para la Argentina "una proporción importante" es el 46 por ciento de la producción total. La pretensión de Brasil de que "una proporción importante" sólo está constituida por al menos el 50 por ciento de la producción nacional es una apreciación subjetiva, sin base en el artículo 4 del Acuerdo Antidumping.

303. De acuerdo al Acta Nº 576 las empresas relevadas representaron el 46,2 por ciento de la producción nacional para el año 1998, por lo que la CNCE consideró cumplimentado el requisito del artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping.

304. Para la República Argentina, como para otros países Miembros de la OMC (conforme concordantes antecedentes en la materia), el 46,2 por ciento constituye una proporción importante, en tanto que no resulta casual el hecho que el Acuerdo Antidumping no haya establecido un porcentaje taxativo acerca de qué se debe entender por "proporción importante".

III.4 IMPOSICIÓN Y RECAUDACIÓN DE DERECHOS ANTIDUMPING COMO RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING

III.4.1. RECLAMOS 28, 29 Y 30: CONSISTENCIA CON LOS ARTÍCULOS 9.2, 9.3 Y 12.2.2

305. Brasil alega que la Argentina habría actuado de manera inconsistente con el artículo 9.2 al haber impuesto derechos antidumping variables que podrían llevarla a cobrar un monto inapropiado (Reclamo 28). Por la misma razón Brasil alega que el derecho antidumping impuesto podría ser superior al margen de dumping establecido en la determinación final (Reclamo 29). Por último, Brasil alega que la Argentina habría actuado de manera inconsistente con el artículo 12.2.2 al no haber explicado cómo fue establecido el precio mínimo de exportación (Reclamo 30).

Texto del artículo 9.2

> *9.2 Cuando se haya establecido un derecho antidumping con respecto a un producto, ese derecho se percibirá en la cuantía apropiada en cada caso y sin discriminación sobre las importaciones de ese producto, cualquiera que sea su procedencia, declaradas objeto de dumping y causantes de daño, a excepción de las importaciones procedentes de fuentes de las que se hayan aceptado compromisos en materia de precios en virtud de lo establecido en el presente Acuerdo. Las autoridades designarán al proveedor o proveedores del producto de que se trate. Sin embargo, si estuviesen implicados varios proveedores pertenecientes a un mismo país y resultase imposible en la práctica designar a todos ellos, las autoridades podrán designar al país proveedor de que se trate. Si estuviesen implicados proveedores pertenecientes a más de un país, las autoridades podrán designar a todos los proveedores implicados o, en caso de que esto sea impracticable, todos los países proveedores implicados.*

Texto del artículo 9.3

> *9.3 La cuantía del derecho antidumping no excederá del margen de dumping establecido de conformidad con el artículo 2.*

Texto del artículo 12.2.2

> *12.2.2 En los avisos públicos de conclusión o suspensión de una investigación en la cual se haya llegado a una determinación positiva que prevea la imposición de un*

derecho definitivo o la aceptación de un compromiso en materia de precios, figurará, o se hará constar de otro modo mediante un informe separado toda la información pertinente sobre las cuestiones de hecho y de derecho y las razones que hayan llevado a la imposición de medidas definitivas o a la aceptación de compromisos en materia de precios, teniendo debidamente en cuenta lo prescripto en cuanto a la protección de la información confidencial. En el aviso o informe figurará en particular la información indicada en el apartado 2.1, así como los motivos de la aceptación o rechazo de los argumentos o alegaciones pertinentes de los exportadores e importadores, y la base de toda decisión adoptada en virtud del apartado 10.2 del artículo 6.

Alegación argentina

306. Argentina actúo en forma consistente con el artículo 9.2, 9.3 y 12.2.2 de Acuerdo Antidumping y en la reglamentación de la Ley 24425, Decreto Nº 2121/94.

307. En efecto, la Autoridad de Aplicación, luego de analizar y considerar toda la información reunida durante el procedimiento, a diferencia de la postura del Gobierno Brasileño cuando manifiesta que la Argentina no cumplió con el artículo 9.2 y 9.3 del Acuerdo determinó para quienes aportaron en tiempo y forma las pruebas pertinente conteniendo todos los elementos necesarios. En este sentido procedió a excluir de la medida antidumping a las firmas productoras/exportadoras brasileñas NICOLINI Y SEARA y fijó un margen individual de dumping para las firmas exportadoras AVIPAL y SADIA.

308. Si bien el Acuerdo en el artículo 9 no aborda el tema de las modalidades que pueden aplicarse para el cobro de los derechos antidumping, es decir no fija metodología o indicaciones similares a las que el propio Acuerdo fija para otros temas, en la práctica, los Miembros de la OMC aplican los derechos antidumping bajo tres modalidades : a) fijos con respecto a una tasa *ad valorem*, b) fijos con respecto a un monto específico y c) variables.

309. El artículo 9.3 indica que "*la cuantía del derecho antidumping no excederá del margen de dumping establecido de conformidad con el artículo 2*". Este principio se desarrolla de manera detallada en los artículos 9.3.1 y 9.3.2. Específicamente en el 9.3.2 se indica que "*cuando la cuantía del derecho antidumping se fije de forma prospectiva, se preverá la pronta devolución, previa petición, de todo derecho pagado en exceso del margen de dumping*" (lo subrayado es propio). En el presente caso, siendo de aplicación plena el articulo citado ya que Argentina utiliza el sistema prospectivo, no existió una petición de las empresas exportadoras que ameritara la revisión tendiente a la devolución del presunto derecho pagado en exceso.

310. La devolución del posible derecho cobrado en exceso estuvo habilitada ya desde la Ronda Tokio en el artículo 8.3 del Código Antidumping así como en el artículo 8 c) del Código Antidumping de Ronda Kennedy, que son las disposiciones predecesoras del artículo 9.3 del Acuerdo actual. En el 9.3 del AD vigente, se puntualiza el requerimiento de la **previa petición** al tiempo que indica que el "importador del producto sometido al derecho antidumping haya presentado una petición de devolución apoyada por pruebas " (lo subrayado es propio).

311. La Argentina reitera que esta petición no existió, así como tampoco Brasil -en los reclamos en consideración- aporta pruebas de sus dichos referidos al exceso en el cobro de derechos antidumping.

312. Sin perjuicio de lo expuesto que por su propia entidad es concluyente, Argentina considera pertinente aclarar algunos conceptos. El sistema de cobro de derechos antidumping por montos variables utilizado por Argentina (la diferencia entre el valor normal, y el FOB declarado en el embarque de que se trate) está precisamente a criterio de la autoridad de aplicación dirigido a evitar que el derecho antidumping efectivamente cobrado sea superior al margen de dumping determinado,

así por ejemplo si en el proceso de aplicación de los derechos, el margen de dumping desapareciera por haberse alineado el precio de exportación al valor normal, bajo este sistema el derecho a pagar sería cero. Como puede advertirse esto concuerda perfectamente con el principio enunciado en el artículo 9.3.

313. Si, por efectos de tal aplicación, se generara una situación en la que el derecho percibido fuera superior al margen de dumping determinado en la investigación, el exportador tiene pleno derecho a solicitar la pronta devolución, previa petición debidamente fundada para el análisis de la cual, la autoridad de aplicación, procederá a la pertinente revisión. Se destaca por lo tanto que el propio acuerdo en los artículos 9.3.1 y 9.3.2 brinda el "remedio" al eventual del pago excesivo por medio de llevar a cabo una revisión que puede generar el pago de un reembolso por el monto del pago en exceso, por lo cual, el propio Acuerdo acepta la posible existencia de un pago en exceso de un derecho antidumping.

314. Si lo que se pretende con la posición expuesta por Brasil es inducir a que se adopte de manera única el sistema de cobro por un tasa fija *ad valorem* -situación que el Acuerdo no prevé- cabría resaltar que tal sistema tienen similares inconvenientes como a efectos de ejemplo exponemos a continuación: Así aplicando el sistema cobro por tasa fija *ad valorem* bajo el esquema prospectivo, aún si el margen de dumping desapareciera por haberse alineado el precio de exportación al valor normal, el derecho antidumping seguiría cobrándose, con la expectativa de que el pago en exceso se reembolse una vez que se lleve a cabo una revisión. Más aún , la combinación del precio alineado a valor normal con el pago del derecho *ad valorem* sobre una base más alta (el precio de exportación alineado a valor normal) pueden llevar al exportador a quedar fuera de mercado, y bajo esta situación ya no se generarían nuevas importaciones y no habría tampoco la posibilidad de activar una revisión que resulte en un reembolso. Por el contrario, bajo la misma situación, el sistema de pago de derechos antidumping por un monto variable no daría lugar a un pago en exceso, y por ello sería mucho más justo para el exportador.

315. Como ya se ha sostenido, en la práctica los Miembros de la OMC aplican derechos antidumping a) fijos con respecto a una tasa *ad valorem*, b) fijos con respecto a un monto específico y c) por montos variables. Canadá también aplica derechos antidumping por montos variables. Por lo tanto, la metodología adoptada por la República Argentina está de conformidad con el Acuerdo Antidumping de la OMC.

316. En concordancia con lo dispuesto por el artículo 9.3 se fijó como medida antidumping un FOB mínimo de exportación equivalente y en algunos casos inferior al valor normal determinado, con lo cual "La cuantía del derecho antidumping no excederá del margen de dumping establecido …", tal como se ilustra a continuación:

Exportador	**Valor Normal US$/kg**	**Precio FOB Promedio U$S/kg**	**Margen de Dumping por ciento**	**Medida Antidumping FOB mínimo U$S/kg**
	A	**B**	**(A-B)/B**	
Sadia	0,9294	0,80883	14,91	0,92
Avipal	1,0896	0,94355	15,48	0,98
Resto	1,0385	0,95992	8,19	0,98

317. Finalmente, se adjunta un simple ejercicio (Tablas 1, 2 y 3), donde se demuestra que el cálculo del derecho antidumping a recolectar también puede encontrarse por encima (o por debajo) del margen de dumping determinado, cuando este es calculado como una fracción del precio FOB facturado, es decir cuando una medida es fijada en forma "*Ad valorem*".

- ***TABLA 1***

	A	B	C	D	E
Exportador	Valor Normal [U$S/KG]	Precio FOB Promedio [U$S/KG]	Margen de Dumping (A-B)/B [por ciento]	Margen de Dumping (A-B) [U$S/KG]	Derecho Antidumping (A-B) [U$S/KG]
Sadia	0,93	0,81	14,91 por ciento	0,12	0,12
Avipal	1,09	0,94	15,48 por ciento	0,15	0,15
Los demás	1,04	0,96	8,19 por ciento	0,08	0,08

- ***TABLA 2***

	A	B	C
Exportador	*Ad valorem** (Tabla 1.C)	Precio FOB Ejemplo [U$S/KG]	Derecho Antidumping (A*B) [U$S/KG]
Sadia	14,91 por ciento	1,20	0,18
Avipal	15,48 por ciento	1,20	0,19
Los demás	8,19 por ciento	1,20	0,10

* El "*Ad valorem*" se supuso igual al Margen de Dumping expresado en forma porcentual.

- ***TABLA 3***

	A	B	C
Exportador	Derecho Antidumping (Tabla 2.C) [U$S/KG]	Derecho Antidumping (Tabla 1.E) [U$S/KG]	Diferencia (A-B) [U$S/KG]
Sadia	0,18	0,12	0,06
Avipal	0,19	0,15	0,04
Los demás	0,10	0,08	0,02

En el presente ejercicio se supuso que las empresas exportadoras brasileñas deciden exportar sus productos a un precio superior (U$S 1,20 por kilogramo).

Como resultado de esta práctica se observa claramente que, al aplicar una medida antidumping en forma "*Ad valorem*", los derechos antidumping a recolectar ascienden de U$S 0,12 por kilogramo a U$S 0,18 por kilogramo, para el caso de Sadia; de U$S 0,15 por kilogramo a U$S 0,19 por kilogramo, para el caso de Avipal y de U$S 0,08 por kilogramo a U$S 0,10 por kilogramo, para los demás exportadores (Tabla 3).

De esta forma también se estaría supuestamente excediendo el margen de dumping establecido en la determinación final (Tabla 1.D), con la diferencia que, en este caso, se continuaría cobrando un derecho a aquella empresa que desee discontinuar la práctica de comercio desleal equiparando sus precios de exportación con los de venta en el mercado interno, tal como fuera señalado precedentemente.

318. Por lo tanto, resulta claro que se está en presencia de sistemas que, por sus características son susceptibles de generar diferencias o derechos pagados en exceso. El propio Acuerdo tiene presente y regula con esta situación y ofrece los "remedios" apropiados. La no utilización de los mismo no puede ser imputada a la autoridad de aplicación como causante de perjuicios o violaciones de los acuerdos vigentes.

319. Con respecto a los cuestionamientos vertidos por Brasil en relación al artículo 12.2.2 del Acuerdo Antidumping, Argentina cumplimentó las exigencias del Acuerdo, toda vez que tanto el Informe de Relevamiento de lo Actuado como el Informe de Determinación Final del Margen de Dumping, a lo largo de su contenido, desarrollado en diferentes tópicos, se particularizó en cada una de las presentaciones de las empresas productoras/exportadoras, para arribar a la conclusión fundamentada de cuáles fueron los motivos por los cuales la Autoridad de Aplicación determinó las medidas a aplicar, incluyendo la exclusión de las empresas que reunieron los requisitos para esta decisión.

320. Mediante el Informe de Relevamiento de lo Actuado con anterioridad al cierre de la etapa probatoria de fecha 4 de enero de 2002 (Cuerpo LXIII, fs. 2757), la DCD puso a disposición de las partes todos los hechos esenciales sobre los cuales basaría su decisión final y sobre esos hechos la autoridad e aplicación fijó un valor mínimo.

321. Brasil presenta, tal como la Argentina ha demostrado, simples alegaciones en este reclamo no habiendo probado la existencia de incumplimiento del artículo en cuestión por parte de Argentina, quien efectúo las determinaciones sobre la base de la documentación agregada a las actuaciones y en concordancia con las disposiciones del Acuerdo.

IV. PETITORIO

322. Sobre la base de las argumentaciones desarrolladas en las secciones precedentes, la República Argentina solicita respetuosamente al Grupo Especial lo siguiente:

1) Que, conforme los argumentos desarrollados en la sección II y tal como se adelantó en los párrafos 23, 24 y 25 de esta comunicación, la República Argentina solicita que el Grupo Especial no se pronuncie sobre las 41 alegaciones de inconsistencias con diversas disposiciones del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo Antidumping), presentadas por Brasil.

Si el Grupo Especial decidiera no hacer lugar a la anterior petición de la República Argentina, tal como se indica en el párrafo 26 de esta comunicación y a la luz de las argumentaciones desarrolladas en la sección III, respetuosamente se solicita:

2) Que se rechacen las reclamaciones de Brasil en el sentido que la Resolución 574/2000 del Ministerio de Economía de la República Argentina es inconsistente con:

- Los artículos 5.2, 5.3, 5.7 y 5.8 del Acuerdo Antidumping;

- El artículo 12.1 del Acuerdo Antidumping;

- Los artículos 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2 y 6.8, así como con los párrafos 5, 6, y 7 del Anexo II, y con los artículos 6.9, y 6.10 del Acuerdo Antidumping;
- Los artículos 2.4, 2.4.2, del Acuerdo Antidumping;
- Los artículos 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 del Acuerdo Antidumping;
- El artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping;
- Los artículos 9.2, 9.3 del Acuerdo Antidumping;
- Así como los distintos reclamos relacionados con el artículo 12.2.2.

3) Rechace la petición de revocación inmediata de la Resolución 574/2000 que impuso los derechos antidumping definitivos.

ANEXO B-2

INTERVENCIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN LA
REUNIÓN DEL GRUPO ESPECIAL CON LAS PARTES

(25 de septiembre de 2002)

I. INTRODUCCIÓN

1. La República Argentina agradece la posibilidad de poder argumentar ante el Grupo Especial, a la luz de la Comunicación escrita de Brasil de fecha 8 de agosto de 2002, a fin de rechazar los cuestionamientos que Brasil formula a la Resolución 574/2000 del Ministerio de Economía de la República Argentina en base a distintas consideraciones de hecho y de derecho que se agrupan en las dos secciones principales que conforman la misma. Esto es, sección II, en la que se trata el estándar de revisión y las normas y principios de derecho internacional público aplicables al caso y, sección III, que refuta los argumentos sustantivos contenidos en los cuarenta y un reclamos de Brasil.

II. ARGUMENTOS PRELIMINARES: NORMAS Y PRINCIPIOS DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO RELEVANTES Y DE APLICACIÓN EN ESTE PROCEDIMIENTO

II.1. ESTÁNDAR DE REVISIÓN

2. La República Argentina reitera que comparte la existencia de un estándar distinto a los fines de revisión[1] en el caso del artículo 17.6 del Acuerdo Antidumping -AD-. Sin embargo, ante las alegaciones que formulara Brasil en los párrafos 26, 27 y 28 de su primera presentación escrita[2], la Argentina desea cuestionar que en todos los casos una presunta infracción del párrafo 6 i) del artículo 17 pueda ser objeto de una alegación por una parte en una diferencia.

3. A juicio de la República Argentina, el artículo 17.6 i) del AD, interpretado a partir del sentido literal de sus términos, establece las normas para los exámenes que debe aplicar un grupo especial cuando determina si la autoridad investigadora estableció los hechos en forma adecuada y si su evaluación fue imparcial y objetiva. El texto del artículo no está dirigido a las Partes del Acuerdo sino al Grupo Especial y por lo tanto existen dudas acerca de la posibilidad de reconocer derechos a las partes para alegar infracciones respecto del mismo, excepto que se configurará una situación de "*due process*".

4. En este mismo sentido se expreso el Grupo Especial en el Informe del caso "*Egipto - Acero*":[3]

> "*Además, aunque al haber rechazado esta alegación por motivos de procedimiento no necesitamos determinar si una infracción del párrafo 6 i) del artículo 17 puede ser objeto de una alegación por una parte en una diferencia, tenemos serias dudas a este respecto. Lo que está claro, no obstante, y en cualquier caso, es que el párrafo 6 i) del artículo 17 establece las normas que* ***un grupo especial debe aplica****r cuando examina la cuestión que se le ha remitido en virtud del párrafo 5 del artículo 17 del Acuerdo Antidumping. En este sentido, estamos por supuesto obligados a aplicarlas a nuestro examen de las alegaciones de esta diferencia*". (Resaltado añadido.)

---

[1] Primera comunicación escrita de la República Argentina, 29 de agosto de 2002, párrafo 9.

[2] Primera comunicación escrita de Brasil, 8 de agosto de 2002.

[3] Informe del Grupo Especial "*Egipto - Medidas Antidumping Definitivas aplicadas a las barras de refuerzo de acero procedentes de Turquía*", WT/DS211/R, 8 de agosto de 2002, párrafo 7.142.

II.2. OTROS PRINCIPIOS Y NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO APLICABLES AL CASO

II.2.1. Contenido del Reclamo Argentino

5. Respecto de la Primera comunicación escrita de las CE la Argentina estima oportuno rebatir algunos de los argumentos expresados en su comunicación por las CE acerca de la noción de cosa juzgada[4], y formular algunas aclaraciones y precisiones.

6. En primer lugar, la Argentina entiende que es inexacta la afirmación de las CE acerca de que "*this Panel need not reach this issue because it is plain that, in any event, the requirements for the existence of res judicata are not met*".[5]

7. Sin perjuicio de reiterar que la República Argentina no ha argumentado, primariamente, la aplicación de la doctrina de la "*Res judicata*", Argentina entiende que la afirmación de la CE debería indudablemente fundamentarse en la demostración de que los requerimientos para dicha doctrina no están reunidos en este caso. En el caso "*India - Autos*" [6], el Grupo Especial sostuvo[7], respecto de la aplicación de la doctrina de la cosa juzgada que, en primer lugar, procedería a examinar la aplicabilidad de la doctrina en la OMC y en segundo término, de constatarse lo anterior, era necesario observar si los hechos de la controversia satisfacían los requerimientos de la doctrina.

8. Como bien reconocen las CE, "*The measure before this Panel is the same as the measure in dispute before MERCOSUR Ad Hoc Arbitral Tribunal*".[8] La República Argentina entiende necesario, sin perjuicio de la aplicabilidad de la doctrina, señalar los requerimientos que sí se encuentran presentes en este caso:

- **La identidad de partes** en ambas oportunidades es indiscutible con un "valor agregado" pues se trata de Estados Partes de un proceso de integración, el MERCOSUR. En calidad de tales, Argentina y Brasil han diseñado una estructura orgánica y aceptado dirimir sus controversias a través del procedimiento contemplado en el Protocolo de Brasilia, aceptando asimismo el alcance de los laudos como argumentó la República Argentina[9] y ratificó Paraguay, otro Estado parte del MERCOSUR; en su Primera Comunicación Escrita.[10]

[4] Comunicación de tercero presentada por las Comunidades Europeas, 9 de septiembre de 2002, párrafo 5.

[5] Comunicación de tercero presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 6.

[6] WT/DS 146/R, WT/DS175/R, *India - Medidas que afectan al sector del automóvil*, 21 de diciembre de 2001.

[7] WT/DS 146/R, WT/DS 175/R, párrafo 7.55.

[8] Comunicación de tercero presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 7.

[9] Primera comunicación escrita de Argentina, párrafos 18 y 19.

[10] Comunicación de tercera parte presentada por el Paraguay, párrafo 7.

- **La identidad de la medida objeto de reclamo**: la Resolución 574/2000 del Ministerio de Economía de la República Argentina como expresara la República Argentina en su primera Comunicación Escrita[11] y reconociera también la CE.[12]

- **La identidad de la base legal del reclamo**: en el ámbito MERCOSUR, la estructura de la demanda presentada por Brasil presenta en la Sección II.(denominada FUNDAMENTAÇAO JURIDICA), dos partes: en la parte A (ASPECTOS PRELIMINARES), Brasil incluye un punto 4 denominado "*Evolução das normas do Mercosul sobre antidumping e normas aplicáveis à utilização de medidas antidumping no comercio intrazona*" y allí enuncia la Decisión N°11/97 que como el mismo Brasil reconoce "*o texto incorpora, portanto, todas as disciplinas da OMC sobre a matéria (não podería ser diferente)*"[13] y luego ratifica que "*Desde 1997, a aplicação de medidas antidumping no comércio intrazona, repita-se, deve dar-se em conformidade com o Marco Normativo, o qual reflete o entendimento comum alcancado pelos Estados Parte a respeto das regras e procedimentos estabelecidos pelo Acordo Antidumping da OMC*"[14], en otros términos Brasil entendía fundar su reclamo sobre las supuestas inconsistencias de la medida argentina con el AD de la OMC y esto puede corroborarse en el punto IIB "*DAS INCONSISTÊNCIAS LEGAIS" y en el punto 6."O Processo de Investigação e a Aplicação do Direito Antidumping*". A lo largo de la sección II.B. de la presentación de Brasil en ámbito MERCOSUR se ratifica por parte de Brasil que la base jurídica de su presentación reside en la presunta incompatibilidad de la medida argentina con la normativa OMC.

9. Cabe destacar que la presentación de Paraguay, otro Estado Parte del MERCOSUR, **es concluyente** acerca de la importancia que otorga al actual reclamo de Brasil en ámbito OMC al afirmar que: "El Paraguay considera que de conformidad con los principios generales del Derecho internacional Público, el caso en autos tiene carácter de "cosa juzgada"[15], al haber sido sometido con anterioridad al procedimiento de solución de diferencias establecido en el marco del MERCOSUR, en particular al desarrollado en el Protocolo de Brasilia." y que Paraguay ratifica en cuanto al alcance en los siguientes términos: "Por cuanto antecede, el Paraguay considera que el caso en autos ya fue objeto de un procedimiento de solución de diferencias anterior, reconocido por ambas partes y cuya resolución tiene carácter vinculante y obligatorio para las mismas, razón por la cual no debería ser abordado en este Grupo Especial, ya que si así lo hiciera, se estarían violando y normas del Derecho Internacional Público e incumpliendo mandatos de instituciones del MERCOSUR, en este caso, el Laudo Arbitral Ad Hoc establecido en virtud del Protocolo de Brasilia."[16]

10. La Argentina desea reiterar que la conducta de Brasil al omitir toda referencia al laudo arbitral sobre el mismo reclamo en ámbito MERCOSUR y que resultó desfavorable para sus pretensiones implica una inobservancia del **principio de buena fe respecto de la observancia y aplicación de los**

[11] Primera comunicación escrita de Argentina, párrafo 16.

[12] Comunicación de tercero presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 7.

[13] Presentación de Brasil el 16 de marzo de 2001 ante el Tribunal Arbitral Ad Hoc del MERCOSUR, página 22.

[14] Presentación de Brasil el 16 de marzo de 2001 en ámbito MERCOSUR, página 25.

[15] Comunicación de tercera parte presentada por el Paraguay, párrafo 5.

[16] Comunicación de tercera parte presentada por el Paraguay, párrafo 10.

acuerdos internacionales <u>simultáneamente en dos ámbitos</u>: de los tratados y protocolos suscriptos, en primer lugar en ámbito MERCOSUR, y en segundo lugar en la OMC.[17]

11. En ámbito de la OMC, el significado del principio de buena fe fue aclarado en el caso *Estados Unidos - Camarones*, en el cual el Órgano de Apelación sostuvo que: "... Este principio, que es a la vez un principio general del derecho y un principio general del derecho internacional, regula el ejercicio de los derechos por los Estados. Una aplicación de este principio general, aplicación que se conoce corrientemente como la doctrina del abuso de derecho, prohíbe el ejercicio abusivo de los derechos de un Estado y requiere que siempre que la afirmación de un derecho interfiera con la esfera abarcada por una obligación dimanante de un tratado, ese derecho debe ser ejercido de buena fe, es decir, en forma razonable. El ejercicio abusivo por parte de un Miembro del derecho que le corresponde en virtud de un tratado da lugar a una violación de los derechos que corresponden a los otros Miembros en virtud de ese tratado y, asimismo, constituye una violación de la obligación que le corresponde a ese Miembro en virtud del tratado …".[18]

12. Por otra parte, la Argentina entiende que la actual controversia planteada por Brasil en ámbito OMC viola no sólo el artículo 21 del Protocolo de Brasilia, hecho señalado en la Presentación de Paraguay[19], sino que implica que Brasil incurre en una violación del principio de buena fe en ámbito OMC. Pues, "no se puede permitir a un Estado beneficiarse de las ventajas de un tratado cuando éste le convenga y repudiarlo cuando su cumplimiento se vuelva oneroso. Tiene muy pocas consecuencias si dicha regla está basada en lo que el derecho inglés conoce como el principio del *estoppel* o en el requisito de la buena fe. El primero no es más que uno de los aspectos de la última."[20]

13. Este binomio *estoppel*-buena fe también ha sido destacado Georg Scwarzenberger, al sostener que el quebrantamiento de un tratado implica una infracción del principio de buena fe, imperante en las relaciones internacionales.

14. La República Argentina reitera[21] que la reclamación de Brasil en el ámbito OMC contradice: a) la práctica constante de Brasil, en tanto Estado Parte del MERCOSUR desde 1991 hasta el presente, de cumplir los compromisos asumidos y recurrir al procedimiento para la solución de controversias previsto en el Protocolo de Brasilia y afianzado a través de la firma del Protocolo de Olivos, b) un comportamiento constante e inequívoco de Brasil -y de los restantes Estados Partes del MERCOSUR- en el sentido de aceptar el alcance de los laudos arbitrales, existiendo hasta la fecha ocho laudos y habiendo participado Brasil en siete de los ocho, ya sea como actor o como demandado.

15. En este sentido la conducta de Brasil al plantear la actual controversia en ámbito OMC presenta los rasgos comunes del "*estoppel*" -que como se ha señalado, está íntimamente vinculado con el principio de la buena fe- "... de una parte, una consagración de la responsabilidad nacida de las apariencias creadas; de otra, y consecuentemente, la obligación, por parte del sujeto a tal

---

[17] Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafo 16 y 17.

[18] Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Prohibición de las importaciones de determinados camarones y productos del camarón* ("*Estados Unidos - Camarones*"), WT/DS58/AB/R, adoptado el 6 de noviembre de 1998, párrafo 158.

[19] Comunicación de tercera parte presentada por el Paraguay, párrafos 6 y 10.

[20] Lauterpacht Hersch, citado por Enrique Pecourt García en El principio del *estoppel* en Derecho Internacional Público. Revista Española de Derecho Internacional Público, Madrid, 1962, páginas 107-108.

[21] Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafo 21.

responsabilidad, de asumir el riesgo de las reacciones que su actitud o su actividad pueden provocar en otra persona".[22]

16. El efecto inhabilitante del ***estoppel*** **anula**, en consecuencia, **la validez o efectividad de las alegaciones que contradicen declaraciones o actos propios.**

17. Asimismo, la República Argentina entiende oportuno señalar que la conducta de Brasil, evidenciada en ámbito MERCOSUR, hasta el establecimiento de este Grupo Especial refuerza la configuración del *estoppel*. En este sentido, los Estados Partes del MERCOSUR -incluido obviamente Brasil- transitaron todas las etapas conducentes a la celebración de un tratado firmando el 18 de febrero de 2002 el Protocolo de Olivos cuyo objeto es la solución de controversias en el ámbito MERCOSUR. En este Protocolo se incorpora una cláusula de opción de foro. Como la CE advierte en su presentación[23] y lo ratifica también Paraguay[24], el compromiso asumido por Brasil con la firma de Protocolo de Olivos, el 18 de febrero de 2002, no se condice con la solicitud del establecimiento del Grupo Especial en esta controversia realizada por Brasil en ámbito OMC el día 25 de febrero de 2002.[25]

18. En síntesis, la Argentina concluye que existió por parte de Brasil un comportamiento constante en ámbito MERCOSUR en cuanto a someter sus conflictos comerciales con los otros Estados Partes al procedimiento de solución de controversias previsto en el Protocolo de Brasilia. Asimismo, Brasil ha respetado con anterioridad y posterioridad al Laudo Arbitral sobre Pollos el alcance que el mismo Protocolo de Brasilia otorga a los laudos. En tercer lugar, un nuevo signo de este comportamiento fue evidenciado por Brasil al negociar y firmar el Protocolo de Olivos en febrero 2002. Obviamente, Brasil a partir de su comportamiento generó derechos y alentó expectativas y más aún una firme convicción en los restantes Estados Partes del MERCOSUR en materia de la aceptación, por parte de Brasil, del ámbito, de la sustanciación del proceso y del alcance de los laudos de acuerdo a los instrumentos jurídicos del MERCOSUR. En cuarto lugar, la Argentina destaca que no se encuentra previsto en ningún instrumento del ámbito subregional posibilidad alguna de someter a instancias sucesivas -judiciales o arbitrales- en ámbito MERCOSUR u otro distinto, una controversia ya resuelta. Por último, la Argentina reitera[26] que la conducta de Brasil no puede ser considerada como aislada o esporádica sino que existe un número significativo de laudos en los cuales Brasil tomó parte ya sea en calidad de actor o demandado aceptando en todos los casos el carácter del laudo.

19. A juicio de la Argentina, en cualquier interpretación que el Grupo Especial realice acerca de la controversia planteada por Brasil, en virtud de la aplicación del principio de buena fe[27], **no puede**

---

[22] Enrique Pecourt García en op. cit., página 100.

[23] Comunicación de tercero presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 17 y nota 18.

[24] Comunicación de tercera parte presentada por el Paraguay, párrafos 8.

[25] Documento WT/DS241/3, 26 de febrero de 2002.

[26] Primera comunicación escrita de la Argentina párrafo 20 y nota 12.

[27] "*Il n´en reste pas moins que les diverses méthodes d´interprétation se rattachent toutes à une règle essentielle: celle de l´interprétation de bonne foi, formulée par l´article 31, paragraphe 1, de la Convention de Vienne. Ce principe fondamental est à l´origine des divers moyens et règles utilisés pour interpréter les traités et c´est en fonction de cette exigence foindamentale que le choix entre ces différentes méthodes doit être effectué*." Dinh Nguyen Quoc, Daillier Patrick et Pellet Alain, Droit International Public, cuarta edición, LGDJ, París, 1992, página 252.

hacer abstracción de la existencia del laudo arbitral[28] a través del cual fuera zanjada la disputa en ámbito MERCOSUR y a **la especial relación que los tratados y protocolos de integración** regional, existentes en ámbito MERCOSUR, crean entre Argentina y Brasil en cuanto Estados Partes. La República Argentina sostiene, conforme a lo argumentado en cuanto a "las normas usuales de interpretación del derecho internacional público" en los casos *"Estados Unidos - Pautas para la Gasolina Reformulada"*[29] *y "Japón - Bebidas Alcohólicas*"[30], que la interpretación debe tomar en consideración a los fines de un examen completo y en función del contexto, todos los hechos y factores relacionados con el caso en los términos del artículo 31 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.[31]

II.2.2. Petitorio de esta Sección

20. A la luz de lo anterior, la República Argentina reitera, respetuosamente, lo solicitado en su Primera comunicación escrita en el sentido que el Grupo Especial debe concluir, con fundamento en la omisión en la cual ha incurrido Brasil acerca de que la misma medida ha sido previamente debatida y resuelta por otro Tribunal Internacional, que la actual presentación en el ámbito OMC, implica un ejercicio abusivo de derechos por parte de Brasil

21. Asimismo, la República Argentina reitera que el Grupo Especial no puede omitir en su pronunciamiento que los compromisos internacionales vigentes, la conducta y práctica anteriores y subsecuentes de Brasil de aceptar el ámbito MERCOSUR para debatir y resolver las controversias

---

[28] Laudo del Tribunal Arbitral Ad Hoc del MERCOSUR constituido para decidir sobre Controversia entre la República Federativa de Brasil y la República Argentina sobre "Aplicación de Medidas Antidumping contra la exportación de pollos enteros, provenientes de Brasil, (Res. 574/2000) del Ministerio de Economía de la República Argentina. Fecha: 21 de mayo de 2001.

[29] Informe del Grupo de Apelación en el caso "*Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional*", WT/DS2/AB/R, adoptado el 20 de mayo de 1996.

[30] Informe del Grupo Especial en el caso "*Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas*", WT/DS8/R, WT/DS10/R, WT/DS11/R., 11 de julio de 1996.

[31] Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados

Artículo 31.- Regla de interpretación

1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuanta su objeto y fin.

2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos:

a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado;

b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por los demás como instrumento referente al tratado.

3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta:

a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones;

b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado;

c) toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes.

Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes."

comerciales con la Argentina, en tanto Estados Parte del MERCOSUR y dados los términos en los cuales ha sido planteada la controversia actual, la reclamación de Brasil en el ámbito OMC configura una situación de *estoppel* oponible a Brasil bajo el ESD.

22. Por las razones expuestas en los párrafos anteriores y considerando especialmente que el reclamo de Brasil conlleva un cuestionamiento de idéntica medida tanto en la actual presentación en ámbito OMC como en la controversia concluida en el ámbito MERCOSUR, la República Argentina solicita que el Grupo Especial no se pronuncie acerca de los 41 reclamos sobre alegaciones de inconsistencia de la normativa Argentina con diversas disposiciones del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo Antidumping), contenidas en el párrafo 549 de la Primera comunicación escrita de Brasil y consecuentemente rechace las peticiones del párrafo 550 de la misma Comunicación.

23. Si el Grupo Especial rechazara este petitorio y considera que debe pronunciarse sobre las reclamaciones de Brasil, Argentina argumenta en la sección siguiente acerca de la consistencia de la Resolución 574/00 con la normativa OMC.

III. LA FORMA EN QUE SE CONDUJO LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING

III.1 GENERAL

24. La Argentina sostiene que a lo largo de la investigación, cumplió con lo dispuesto por las disposiciones relevantes del AD, en todos los aspectos, pero particularmente respecto de aquellos referidos a la "debida consideración" que debe otorgarse a todos los factores que pueden tener efecto en la comparabilidad de precios, así como respecto de aquellas disposiciones que establecen la obligación de examinar debidamente toda la información aportada por las partes en el procedimiento y cumplir con las obligaciones del Acuerdo respecto de notificaciones a las Partes.

25. A través de las distintas etapas del procedimiento, la Argentina cumplió en notificar a los exportadores brasileños y al Gobierno de ese país de las distintas actuaciones que iban teniendo lugar.

III.2 NOTIFICACIONES

26. En tal sentido, la Argentina afirma que las alegaciones de Brasil respecto de se habría incumplido con las notificaciones a siete exportadores brasileños, que no se habría otorgado a las partes el tiempo suficiente como para responder los cuestionarios o que no se habría facilitado el texto de la solicitud a los exportadores y al Gobierno de Brasil tan pronto iniciada la investigación, no son ciertas.

27. A lo largo de todo el proceso, la Autoridad de Aplicación demostró de manera constante su disposición a facilitar por todos los medios a su alcance y en la medida de sus posibilidades, el derecho de defensa de las partes involucradas.

28. Prueba de ello es que, a medida que se iban desarrollando las distintas etapas del procedimiento, no sólo concedió todas las prórrogas que le fueron solicitadas por las partes, tal como consta a modo de ejemplo en la Primera comunicación escrita de la República Argentina en el párrafo 130, sino que además se les dio a los exportadores brasileños un plazo mayor al de 30 días que estipula el acuerdo para responder los cuestionarios.

29. La Argentina desea poner de resalto que, tan pronto como la Autoridad de Aplicación tuvo conocimiento de la existencia de los siete exportadores respecto de los cuales la firma INTERAMERICANA COMERCIAL S.R.L., solicitó se les diera participación, esto así fue hecho, lo que constituye una clara muestra de la voluntad de facilitar la participación en el procedimiento de

todas las partes y de manera que condujera a la mejor obtención de información que permitiera llegar a una correcta determinación.

30. Pero rechaza la alegación formulada por Brasil de que tal acción constituya un incumplimiento del Acuerdo, ya que hubiera sido ilógico pretender que la Autoridad hubiera enviado a esos exportadores los correspondientes cuestionarios del exportador, si no tenía conocimiento de su existencia.

31. En opinión de la Argentina, tal situación podría haber sido subsanada de manera temprana durante la investigación, de haber el Gobierno de Brasil, decidido su participación en la investigación tan pronto como fuera invitado y notificado, esto es, desde el inicio de la misma, aún antes de las notificaciones en el marco de la OMC, y de las consultas en el marco del acuerdo regional.

32. Igual consideración cabe hacer respecto del tratamiento que dio a la información presentada por las partes durante la investigación.

33. Contrariamente a lo que Brasil sostiene, la Argentina otorgó la debida consideración a la distinta información que las partes aportaron durante la investigación, respecto de diversos aspectos. Esto se hizo, teniendo presente tal como lo prescribe el artículo 2.4, la pertinencia de la información aportada para el procedimiento, y en base a la evaluación que sobre la autenticidad/verificabilidad de la misma, hiciera la Autoridad.

34. Cumpliendo con lo establecido por el literal 4 del artículo 2, a cada una de las partes se le indicó expresamente qué información requería la Autoridad de Aplicación para la investigación de marras, dejando en claro que la misma debería ser acompañada de prueba documental que facilitara su uso, y permitiera acreditar de manera fehaciente el contenido de la misma.

35. En este sentido, la Argentina desea dejar en claro que, en tanto la información que las Partes acercaron a la Autoridad de Aplicación fuera susceptible de ser utilizada, esta así lo hizo, habida cuenta de que la misma pudiera ser verificable.

36. Brasil sin embargo considera que, ante el incumplimiento de la solicitud de la Autoridad de adjuntar la prueba documental requerida, esta debería haber procedido a efectuar una verificación *in situ*, aparentemente como única alternativa viable para subsanar esa falta.

37. La Argentina no niega la posibilidad prevista en el Acuerdo de realizar verificaciones. Sin embargo, quiere dejar en claro, que interpreta esta posibilidad, de manera algo distinta respecto de lo que aparentemente, lo hace Brasil.

38. Es así que la Argentina estima que, tal como está previsto en el mismo Acuerdo, este mecanismo permite un método de verificación de la información aportada al expediente durante una investigación, que no necesariamente debe ser el recurso de la Autoridad cuando necesita constatar la veracidad y/o pertinencia de una prueba, más aún cuando el sector privado no accedió al requerimiento de envío de información efectuado por la autoridad de aplicación.

39. La posibilidad de efectuar verificaciones del tipo que propone Brasil, está prevista por el Acuerdo en el artículo 6.7, que establece que:

> "*a fin de verificar la información provista, u obtener mayores detalles, las autoridades <u>podrán</u> efectuar investigaciones en el territorio de otro Miembro ...*". (Resaltado añadido.)

40. Argentina reitera que, en base a su interpretación, de la letra del mismo artículo se desprende que la decisión de efectuar verificaciones en territorio del Miembro bajo investigación, es una facultad discrecional de la autoridad, y no una obligación prevista en el Acuerdo.

III.3 HECHOS ESENCIALES

41. La Argentina considera que no ha habido infracción a la obligación de informar a las partes interesadas "de los hechos esenciales considerados que sirvan de base para la decisión de aplicar o no medidas antidumping", conforme al artículo 6.9 -AD-. Por el contrario, ya en casos anteriores, la jurisprudencia OMC definió claramente el alcance de la obligación contenida en el artículo 6.9 -AD-, y la Argentina considera haber cumplido acabadamente con las prescripciones de ese artículo y su alcance tal como fue definido por la jurisprudencia OMC.[32]

42. En sentido de lo expresado, se concuerda en que la mera "puesta a disposición" del expediente de investigación a las partes no cumplimentaba el precepto del artículo 6.9 AD, el cual busca que las partes interesadas puedan defender sus intereses a partir del debido acceso a la información relevante. La República Argentina no contravino dicha finalidad en el presente caso, por cuanto en ningún momento de la investigación se suprimió el trabajo adicional de trabajar sobre el expediente y extraer la información pertinente en un informe separado y poner éste a disposición de las partes interesadas.

43. Contrariamente a lo señalado por Brasil, la Argentina sostiene que la información pertinente estuvo debidamente desglosada y puesta a disposición de las partes interesadas a través del "*Relevamiento de lo Actuado con Anterioridad al Cierre de la Etapa probatoria*", de fecha 4 de enero de 2002. La obligación del artículo 6.9 -AD- consiste en efectuar un trabajo adicional de desagregado de información pertinente y suficiente en debido tiempo, a fin de que las partes puedan acceder a aquellos datos que fueron efectivamente utilizados. Con ello se asegura el debido manejo de la información y el derecho de defensa de las partes.

---

[32] Informe del Grupo Especial en *Guatemala - Medida antidumping definitiva aplicada al cemento Portland gris procedente de México*, WT/DS156/R, de fecha 24 de octubre de 2000, párrafo 8.230:

"No aceptamos una interpretación del párrafo 9 del artículo 6 que de hecho reduzca sus prescripciones sustantivas a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 6. A nuestro juicio, una autoridad investigadora debe hacer más que dar simplemente "a su debido tiempo a todas las partes interesadas la oportunidad de examinar toda la información pertinente para la presentación de sus argumentos […] y que [las] autoridades utilicen […]", con el fin de informar "a todas las partes interesadas de los hechos esenciales considerados que sirvan de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas"".

Asimismo, en el informe del Grupo Especial en *Argentina - Medidas antidumping definitivas aplicadas a las importaciones de baldosas de cerámica para el suelo procedentes de Italia* (*"Argentina - Baldosas")*, WT/DS189/R, de fecha 28 de septiembre de 2001, párrafo 6.125 se afirmó:

"... la prescripción de que se informe a todas las partes interesadas de los hechos esenciales considerados puede cumplirse de diversas formas. El párrafo 9 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping no prescribe la manera en que la autoridad ha de cumplir esa obligación de informar. El requisito de que se revelen los "hechos esenciales considerados" puede muy bien cumplirse, por ejemplo, presentando un documento especialmente preparado en el que se resuman los hechos esenciales considerados por la autoridad investigadora o incluyendo en el expediente documentos -tales como informes sobre las verificaciones, una determinación preliminar o la correspondencia intercambiada entre las autoridades investigadoras y los diferentes exportadores- en los que efectivamente se revelen a las partes interesadas los hechos esenciales considerados que las autoridades prevén serán aquellos que constituirán la base para decidir si han de aplicarse medidas definitivas. Esta opinión se basa en nuestro entendimiento de que el párrafo 9 del artículo 6 prevé que se hará una determinación definitiva y que las autoridades han identificado y están considerando los hechos esenciales en los que esa decisión debe basarse. Con arreglo al párrafo 9 del artículo 6, esos hechos deben divulgarse para que las partes puedan defender sus intereses, por ejemplo comentando si los hechos esenciales considerados son completos."

44. Este es el valor que la Argentina asigna al *"Relevamiento de lo Actuado con Anterioridad al Cierre de la Etapa probatoria"*, al considerarlo como una paso procesal adicional -esto es, un paso positivo ("*active step*", tal como lo calificara la CE en su comunicación)[33]-, por el cual la autoridad de aplicación dispuso que el conjunto de información recolectada -que no sería ya ampliada- debía ser debidamente procesada, desagregada y ordenada señalando los hechos esenciales, para luego informar a las partes interesadas que la documentación pertinente estaba a su disposición (Notas de la DCD del 5 de enero de 2000). Las partes interesadas tuvieron, de esta forma, debidamente resguardado el derecho de defensa de sus intereses.

45. La Argentina cree haber cumplimentado debidamente la obligación del artículo 6.9 -AD- mediante el "Relevamiento de lo Actuado con Anterioridad al Cierre de la Etapa probatoria", al haber efectuado la debida identificación de los hechos esenciales, en una etapa procesal diferenciada, y en debido tiempo y forma a fin de que las partes interesadas pudiesen defender sus intereses.

III.4 PROPORCIÓN IMPORTANTE DE LA INDUSTRIA

46. Con respecto a la alegación brasileña en el sentido que el artículo 4.1 -AD-, al referirse a "una proporción importante de la producción nacional" estaría refiriéndose a una proporción superior al 50 por ciento, la Argentina desea señalar que no comparte este punto de vista.

47. Consideramos que una categórica afirmación de que el artículo 4.1 -AD- se refiere necesariamente a un porcentaje del 50 por ciento o superior no puede ser válidamente aceptada por la OMC, y que adicionalmente, no puede hablarse aquí de incumplimiento del artículo 4.1 -AD- por parte de la Argentina.

48. En primer lugar, el mismo artículo 4.1 en su versión castellana se refiere a "una proporción importante", y no a "la proporción más importante", o a "la mayor proporción", o a "la mayoría". Concordamos con la apreciación de la CE, al señalar respecto de la versión inglesa que el artículo 4.1 habla de "*a major proportion*" y no de "*the major proportion*".[34]

49. Tanto la versión castellana como la inglesa del artículo 4.1 -AD- utiliza términos más acotados que la categórica afirmación de "mayoría" o "superior al 50 por ciento" que pretende introducir Brasil. La Argentina entiende que el significado de las palabras utilizadas en el artículo 4.1 -AD- no puede ser puesto en el mismo nivel que, por ejemplo, las prescripciones del artículo 5.4 -AD- (que establece un porcentaje expreso de "más del 50 por ciento" de la producción total).

50. Finalmente, aún coincidiendo la Argentina con Brasil en que un 46 por ciento ciertamente no constituye "una mayoría" -por muy poco-, nos atrevemos a sugerir que Brasil difícilmente podrá negar que un 46 por ciento sí constituye, en cambio, una "proporción importante que no es mayoría". En tal sentido la Argentina cree haber cumplido acabadamente con las prescripciones del artículo 4.1 -AD-, cuyo propósito es el de definir el alcance de la expresión "rama de la producción nacional".

III.5 RESPECTO DEL AJUSTE

51. La Argentina afirma que el ajuste realizado por la Autoridad en base a la metodología aportada por la Peticionante, no debe ser considerado sino como otra prueba de el grado en que el presente procedimiento se ajustó a lo prescripto por el AD.

---

[33] Comunicación de tercero presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 23.

[34] Comunicación de tercero presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 49.

52. Respecto de este punto, la Argentina desea dejar en claro, su posición que ya fuera de todas maneras expresada en su comunicación escrita al Grupo Especial. En tanto existían evidencias en el sentido de que el pollo que se comercializa en la ciudad de São Paulo, y que fuera tomado como base para la apertura de la investigación, incorpora la cabeza y las patas, en tanto el que se exporta no, la Autoridad de Aplicación se hallaba obligada a efectuar el ajuste en tanto las patas y las cabezas constituyen un factor que -no puede negarse- tiene influencia en la comparación de precios.

53. En ningún momento los exportadores brasileños objetaron la necesidad del ajuste. Pero además, respondiendo a un pedido de aclaración efectuado por la Autoridad, la empresa JOX envió una nota[35] que convalida el porcentaje de ajuste indicado por la peticionante. A falta de información que demostrara ser más adecuada, y que durante la investigación podría haber sido incorporada a la misma si los exportadores brasileños estimaban que la utilizada no era correcta, ésta fue utilizada por la Autoridad de Aplicación.

III.6 RESPECTO DEL CÁLCULO DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING

54. La República Argentina reitera que el sistema que utilizó para imponer los derechos antidumping es consistente con el artículo 9 del AD, y que es el mismo Acuerdo y la práctica de los miembros de la OMC, que dan sustento a la posibilidad de aplicar, en base a la decisión de la Autoridad de Aplicación, derechos antidumping en la forma de:

a) fijos con respecto a una tasa *ad valorem*, b) fijos con respecto a un monto específico y c) por montos variables.

55. El sistema de montos variables por el cual Argentina fija de forma prospectiva los derechos antidumping (la diferencia entre el valor normal, y el FOB declarado en el embarque de que se trate) -artículo 9.3.2 AD- está precisamente dirigido a evitar que el derecho antidumping efectivamente cobrado sea superior al margen de dumping determinado. Así por ejemplo si en el proceso de aplicación de los derechos, el margen de dumping desapareciera por haberse alineado el precio de exportación al valor normal, bajo este sistema el derecho a pagar sería cero. Como puede advertirse esto concuerda perfectamente con el principio enunciado en el artículo 9.3.

56. De igual modo, en tanto la aplicación de los derechos pudiera dar eventualmente origen a una situación en la que, los derechos percibidos fueran superiores al margen de dumping establecido, el acuerdo en los artículos 9.3.1 y 9.3.2 establece el modo de corregir esa situación, no pudiendo inferirse de modo alguno que en virtud del sistema aplicado por la Argentina, esta posibilidad pudiera ser denegada a las partes interesadas que impulsaran la solicitud de devolución de los derechos pagados en exceso, por la vía y de la manera prevista por la normativa aplicable.

57. Sí se desea dejar sentado de manera inequívoca, que sin perjuicio de lo expresado de manera general respecto al sistema aplicado por la Argentina, en el presente caso los valores mínimos de exportación fijados a cada uno de los exportadores para los que se determinó un margen de dumping individual, al igual que el fijado para el resto de los exportadores comprendidos en la determinación general, es menor al Valor normal determinado para cada caso durante la investigación. De esta manera, en tanto los márgenes de dumping determinados por la Autoridad de Aplicación durante la investigación fueron de 14,91 por ciento para SADIA SA, 15,48 por ciento para AVIPAL SA, y 8,19 por ciento para el Resto, los valores mínimos de exportación que quedaron fijados en USD 0,92, USD 0,98 y USD 0,98, respectivamente, representan una diferencia de 13,74 por ciento, 10,05 por ciento y 5,63 por ciento en cada caso particular, respecto de los valores FOB determinados para cada uno durante el procedimiento.

[35] Primera comunicación escrita de Brasil, Prueba documental BRA-32.

58. El artículo 9.3 establece que "*la cuantía del derecho antidumping no excederá del margen de dumping establecido en el artículo 2* ..." . por lo expuesto en el punto precedente, y a la luz de la disposición pertinente del Acuerdo, puede advertirse que la Argentina ha procedido de manera consistente con el mismo.

59. La imposición de derechos antidumping, es el remedio que en circunstancias particulares, un Miembro tiene a su disposición para corregir una práctica de comercio desleal que, en base a las constataciones que resultan de una investigación previa enmarcada en los términos del AD, causa daño a un sector de su industria doméstica.

60. La obligación contenida en el artículo 9.3 para el Miembro que impone los derechos, es la de que esos derechos no superen la cuantía del margen establecido en el artículo 2, sin que este sea necesariamente el establecido en función de lo dispuesto por el artículo 2.4.2, tal como pretende Brasil. En este sentido, la Argentina comparte lo expresado por Canadá, en el sentido de que el margen de dumping encontrado durante la investigación no impone un límite al derecho que puede aplicarse a las futuras importaciones.[36]

61. Como puede advertirse, la alegada inconsistencia no es tal en tanto:

a) el AD no estipula QUÉ sistema debe utilizarse para el cobro de los derechos antidumping;

b) el mismo AD prevé la posibilidad de ocurrencia de que el derecho cobrado pueda en alguna circunstancia desviarse respecto del margen establecido, incluyendo también el remedio para corregir tal circunstancia; y

c) nada permite inferir que, en el presente caso, tal derecho pudiera ser denegado a los exportadores brasileños.

62. La Argentina desea llamar la atención del Grupo Especial respecto de una situación que podría eventualmente ocurrir, si se interpretara el alcance de las previsiones del AD en materia de imposición de derechos antidumping de una manera incorrecta, que es a todas luces la que pretende inducir Brasil.

63. Si se interpretara que el sistema de derechos variables es inconsistente con el AD sólo porque en determinada circunstancia -prevista por otra parte en el AD, así como su remedio- los derechos cobrados pudieran ser superiores al margen establecido, un determinado Miembro podría fácilmente lograr que una medida impuesta con el objeto de corregir las distorsiones de una práctica desleal de comercio, fuera desafiada por inconsistente, con sólo profundizar la práctica desleal, esto es ampliando el margen de dumping en el que incurre.

64. De esta manera, el objetivo del artículo VI quedaría por completo carente de contenido.

IV. CONCLUSIÓN

65. Sobre la base de las argumentaciones desarrolladas en las secciones precedentes, la República Argentina solicita respetuosamente al Grupo Especial lo siguiente:

1) Que, conforme los argumentos desarrollados en la sección II y tal como se adelantó en los párrafos 20, 21 y 22 de esta Comunicación, la República Argentina solicita que el Grupo Especial no se pronuncie sobre las 41 alegaciones de inconsistencias con

[36] Comunicación de tercero presentada por el Canadá como tercera parte, página 4.

diversas disposiciones del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo Antidumping), presentadas por Brasil.

66. Si el Grupo Especial decidiera no hacer lugar a la anterior petición de la República Argentina, tal como se indica en el párrafo 23 de esta comunicación y a la luz de las argumentaciones desarrolladas en la Sección III, respetuosamente se solicita:

2) Que se rechacen las reclamaciones de Brasil en el sentido que la Resolución 574/2000 del Ministerio de Economía de la República Argentina es inconsistente con:

- Los artículos 5.2, 5.3, 5.7 y 5.8 del Acuerdo Antidumping;
- El artículo 12.1 del Acuerdo Antidumping;
- Los artículos 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2 y 6.8, así como con los párrafos 5, 6, y 7 del Anexo II, y con los artículos 6.9, y 6.10 del Acuerdo Antidumping;
- Los artículos 2.4, 2.4.2, del Acuerdo Antidumping;
- Los artículos 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 del Acuerdo Antidumping;
- El artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping;
- Los artículos 9.2, 9.3 del Acuerdo Antidumping;
- Así como los distintos reclamos relacionados con el artículo 12.2.2.

3) Rechace la petición de revocación inmediata de la Resolución 574/2000 que impuso los derechos antidumping definitivos.

ANEXO B-3

SEGUNDA COMUNICACIÓN ESCRITA
DE LA ARGENTINA

(17 de octubre de 2002)

El Gobierno de la República Argentina agradece a los miembros del Grupo Especial la posibilidad de someter a su consideración la réplica a los argumentos expuestos por el Gobierno de Brasil a lo largo de este procedimiento.

I. INTRODUCCIÓN

1. *"Las normas del AD-OMC -**Acuerdo Antidumping de la OMC**- fueron traídas al acervo normativo comunitario por la DEC CMC N° 11/97 (Marco Normativo, MN). Siendo el MN por definición del artículo 1 conforme al AD-OMC, no cumplir con aquél implica no cumplir con éste. Además, aunque las disciplinas del MN no fueran aplicables por alguna fundamentación jurídica que lo excluyera, serían aplicables las normas del AD-OMC en virtud del artículo 19 del Protocolo de Brasilia (PB) como "principios y disposiciones del derecho internacional aplicables en la materia". Las normas del AD-OMC son obligatorias para los miembros de la OMC entre los cuales se encuentran los EPM -**Estados Partes del MERCOSUR**- (resaltado añadido).*

2. La República Argentina entiende que este párrafo de la presentación de Brasil (punto 30 del Laudo[1]) ante el Tribunal Arbitral Ad Hoc del MERCOSUR permite comprender que la "insistencia" de Brasil por reclamar en el ámbito regional y a través del procedimiento previsto en el Protocolo de Brasilia a sabiendas de que no existía normativa MERCOSUR vigente para la regulación de Dumping intrazona pone en evidencia que eligió esa vía, a pesar de las reiteradas aclaraciones de Argentina para desestimar el ámbito MERCOSUR para la resolución del conflicto[2], pues pretendía alcanzar una definición de la controversia en el ámbito regional y sólo luego, del pronunciamiento desfavorable en este ámbito es que decidió reclamar en el ámbito OMC.

3. El propio Tribunal Ad Hoc constituido para entender y solucionar la controversia planteada en ámbito MERCOSUR resolvió que "En esta situación el AD OMC (Acuerdo Antidumping de la OMC) proporciona una referencia a la que cabe acudir no solo a título de normativa MERCOSUR, que no lo es, sino a través del artículo 19 del PB[3] -Protocolo de Brasilia- como principio de derecho internacional en la materia (cfr. Segundo Tribunal Arbitral, párrafos 59 y siguientes, para esclarecer el

[1] "*Laudo sobre pollos*"- Laudo del Tribunal Arbitral Ad Hoc del MERCOSUR constituido para decidir sobre Controversia entre la República Federativa de Brasil y la República Argentina sobre "Aplicación de Medidas Antidumping contra la exportación de pollos enteros, provenientes de Brasil, (Res. 574/2000) del Ministerio de Economía de la República Argentina". Fecha: 21 de mayo de 2001.

[2] *Idem*., párrafo 80.

[3] El Protocolo de Brasilia fue suscripto entre los cuatro Estados Partes del MERCOSUR el 17 de diciembre de 1991y en su artículo 19 dispone:

"1. El Tribunal Arbitral decidirá la controversia sobre la base de las disposiciones del Tratado de Asunción, de los acuerdos celebrados en el marco del mismo, de las decisiones del Consejo del Mercado Común, de las resoluciones del Grupo Mercado Común, como así también de los principios y disposiciones del derecho internacional aplicables en la materia

2. La presente disposición no restringe la facultad del Tribunal Arbitral de decidir una controversia *ex aequo et bono*, si las partes así lo convinieren."

concepto de subsidios), en este caso para ilustrar sobre el sentido y fin de los procedimientos antidumping."[4]. (Notas añadidas.)

4. La República Argentina solicita, respetuosamente, al Grupo Especial que evalúe en el análisis del caso, las presentaciones sucesivas realizadas por Brasil, primero en el ámbito MERCOSUR y que, a la luz del resultado desfavorable, llevó a ese país a traer la disputa al ámbito OMC.

5. Dado que dichas presentaciones por parte de Brasil ponen en evidencia la intención de revertir un pronunciamiento desfavorable anterior, la República Argentina reitera[5] que el Grupo Especial debería tener presente para la resolución de este caso que Argentina y Brasil no son sólo Estados miembros de la OMC sino también Estados Partes del MERCOSUR y en calidad de tales deben respetar los compromisos asumidos en ambos ámbitos. Ambos ámbitos generan un conjunto de relaciones jurídicas que vinculan a las partes en términos de Derecho Internacional Público.

6. En síntesis, la República Argentina entiende que la conducta de Brasil de plantear la controversia en forma sucesiva en ámbitos diversos, primero en MERCOSUR y luego, ante la OMC, y aún más, la argumentación jurídica de Brasil en su presentación ante el Tribunal Arbitral Ad hoc en ámbito regional, basada no sólo en las normas MERCOSUR sino también en las disposiciones del Acuerdo Antidumping de la OMC[6], configura un ejercicio de derecho que contraria el principio de buena fe y que *in casu* posibilita invocar el instituto del *estoppel*.

7. Para el caso que, el Grupo Especial desestimara la base del reclamo argentino en los términos del párrafo anterior, subsidiariamente la República Argentina alega que el Grupo Especial no puede soslayar, en la consideración y sustanciación de la actual controversia planteada por Brasil, los antecedentes de lo actuado en ámbito MERCOSUR en función de la norma de derecho internacional relevante aplicable en las relaciones entre las partes, conforme el artículo 31.3 c) de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, a tenor de los dispuesto en el artículo 3.2 del ESD.

8. Tal como fuera argumentado en su Primera comunicación escrita, la República Argentina rechaza los cuestionamientos que Brasil formula a la Resolución 574/2000 del Ministerio de Economía en base a distintas consideraciones de hecho y de derecho que se agrupan en las dos secciones principales que conforman esta presentación. Esto es la sección II, en la que se tratan las normas y principios de derecho internacional publico aplicables al caso y la sección III, en la cual se refutan los argumentos sustantivos contenidos en los 41 reclamos de Brasil.

II. ARGUMENTOS PRELIMINARES: PRINCIPIOS Y NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL APLICABLES AL CASO

II.a Buena Fe - Principio de *estoppel*

9. En el ámbito MERCOSUR, Brasil y Argentina han asumido derechos y obligaciones. En opinión de la República Argentina, el Grupo Especial llamado a decidir en la actual controversia no puede sustraerse del hecho que la controversia fue debatida y resuelta previamente.

---

[4] "*Laudo sobre pollos*". Párrafo 159.

[5] Primera comunicación escrita de la República Argentina 29 de agosto de 2002, párrafo 18 y Comunicación de tercera parte presentada por Paraguay, 9 de septiembre de 2002, párrafo 7.

[6] Presentación de Brasil en ámbito MERCOSUR (puntos 30, 31, 32, 33,34,35,3,6,37,38,39 y 40 del "*Laudo sobre pollos*").

10. En adición, en el ámbito MERCOSUR, existe una práctica constante por parte de todos los miembros -obviamente incluido Brasil- de aceptar las obligaciones derivadas del marco normativo vigente, incluidos el Tratado de Asunción y el Protocolo de Brasilia. En opinión de la Argentina no procede conforme al principio de buena fe un Estado parte si en primer lugar recurre al mecanismo del proceso de integración para solucionar su controversia con otro Estado Parte y no satisfecho con el resultado, plantea la misma causa en forma sucesiva en un ámbito distinto, agravando aún más su conducta, al omitir referencia alguna al anterior planteo y a su resultado. La anterior conducta de Brasil, corroborada por el hecho de la aceptación pacífica del resultado de anteriores laudos, sumado al hecho de que dichos laudos en algunos casos se han articulado en sus conclusiones en base al *estoppel* no puede ser ignorado por el Grupo Especial.

11. La República Argentina, contrariamente a lo afirmado por EE.UU.[7], no alega en su Primera comunicación escrita una violación del Protocolo de Brasilia por parte de Brasil a los fines de que el Grupo Especial desestime sus reclamos, sino que la Argentina pone en evidencia que el reclamo existió, que Brasil lleva la actual controversia al ámbito OMC con total conocimiento de ello y en virtud del resultado desfavorable de su planteo en el ámbito regional; y que omite cualquier referencia al tema.

12. Asimismo, la República Argentina disiente con la alegación de los EE.UU., en el sentido de que "*The United States also disagrees with Argentina that the Panel may apply what Argentina calls the principle of estoppel. The fact that Argentina cites no textual basis for its request reflects the fact that Members have not consented to provide for the application of any such principle of estoppel in WTO dispute settlement. The term estoppel appears nowhere in the text nor does Argentina cite to any provision which in substance provides Argentina the type of defense it asserts*."[8]

13. La República Argentina reitera[9] que los elementos esenciales del *estoppel* son "*I) a statement of fact which is clear and unambiguous; II) this statement must be voluntary, unconditional, and authorized, III) there must be reliance in good faith upon the statement or the advantage of the party making the statement*"[10]. Asimismo *"A considerable weight of authority supports the view that estoppel is a general principle of international law, resting on principles of good faith and consistency, and shorn of the technical features to be found in municipal law.(...). Thus before a tribunal the principle may operate to resolve ambiguities and as a principle of equity and justice: here it becomes a part of the evidence and judicial reasoning.*"[11]

14. En primer lugar, acerca de la posibilidad de que el Grupo Especial pueda aplicar el principio del *estoppel*, la República Argentina no encuentra provisión o disposición alguna que prohiba a un Grupo Especial examinar y, en el caso, que lo juzgara pertinente aplicar dicho principio.

---

[7] Declaración orla de los Estados Unidos en la reunión de los terceros con el Grupo Especial, 26 de septiembre de 2002, párrafo 4.

[8] *Idem*., párrafo 5.

[9] Intervención de la República Argentina en la reunión del Grupo Especial con las Partes, 25 de septiembre de 2002, párrafos 12, 13,14,15,16.

[10] Brownlie Ian, "Principles of Public International Law", Cuarta edición, Clarendon Press. Oxford, 1990, página 641.

[11] *Idem*., párrafo 641.

15. Asimismo, en opinión de la República Argentina, en el caso "*Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada*"[12], el informe ha dejado establecido que:

> "Estas directrices son en cierta medida consecuencia del reconocimiento de que no debe leerse *el Acuerdo* General aislándolo clínicamente del derecho internacional público."[13]

16. Es decir que el GATT y la OMC están sujetos a las reglas generales del derecho internacional. El Órgano de Apelación ha reconocido en "*Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada*" que la legislación del GATT/OMC forma parte del derecho internacional y de allí que los principios generales de derecho internacional se aplican en la tarea de los grupos especiales y del Órgano de Apelación.

17. Entre los argumentos esgrimidos por los EE.UU. se menciona el hecho de que hasta el presente ningún Grupo Especial haya aplicado el principio del *estoppel.*[14] A juicio de la Argentina, este argumento carece de sustentación legal y es refutable empíricamente. Carece de sustentación legal porque los grupos especiales están llamados a aplicar derecho internacional público para resolver las disputas que se les someten. Empíricamente, ya que los propios EE.UU.[15], en su intervención oral señalan dos casos[16] en los cuales, expresamente, se planteó el alcance del *estoppel*.

18. En el caso "*Comunidades Europeas - Amianto*"[17]:

> "Desde el punto de vista jurídico, la cuestión parece consistir en si hay preclusión *(estoppel*) de las CE por el hecho de que éstas notificasen el Decreto o por las declaraciones que han realizado, particularmente en el marco de las consultas. Tal sería el caso si se determinase que el Canadá había depositado una legítima confianza en la notificación del Decreto y sufriese ahora las consecuencias negativas del cambio de posición de las CE:"

19. En el caso "*Guatemala - Cemento*"[18]:

> "En apoyo de este argumento Guatemala utiliza los conceptos de "acquiescencia" y "congruencia con los actos propios (*estoppel*)". Cabe señalar que "acquiescencia" equivale a un "silencio cualificado", que permite interpretar el silencio frente a

---

[12] Informe del Órgano de Apelación en el caso "*Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional*", adoptado el 20 de mayo de 1996.

[13] *Idem*., página 20.

[14] Declaración oral de los Estados Unidos en la reunión de los terceros con el Grupo Especial, 26 de septiembre de 2002, párrafo 6.

[15] *Idem*., párrafo 6.

[16] WT/DS135/R, "*Comunidades Europeas - Medidas que afectan al amianto y a los productos que contienen amianto*", informe adoptado el 5 de abril de 2001 y WT/DS156/R, "*Guatemala - Medida Antidumping definitiva aplicada al cemento Portland gris procedente de México*", informe adoptado el 17 de noviembre de 2000.

[17] WT/DS135/R, "*Comunidades Europeas - Medidas que afectan al amianto y a los productos que contienen amianto*", párrafo 8.60.

[18] WT/DS156/R, "*Guatemala - Medida Antidumping definitiva aplicada al cemento Portland gris procedente de México*", párrafo 8.23.

> acontecimientos que requieren algún tipo de reacción como consentimiento presunto. El concepto de congruencia con los propios actos, en el que también se basa Guatemala en apoyo de su argumento, es similar al de acquiescencia. La premisa de este principio es que cuando una parte ha sido inducida a actuar por las seguridades dadas por otra en una forma tal que resultaría perjudicada si la otra parte modificara posteriormente su posición, ese principio impide a esta última modificarla." (Notas a pie 789 y 790 omitidas.)

20. La República Argentina, respetuosamente solicita al Grupo Especial, que examine el caso a la luz del *estoppel* pues en la actual controversia planteada por **Brasil en ámbito OMC** se encuentran presentes los siguientes elementos:

i) **la contradicción en llevar su planteo contra Argentina primero, en ámbito MERCOSUR entendiendo que se trataba de una controversia bilateral en el marco de un esquema de integración regional en el cual se aplicaba la normativa del AD OMC y luego sostener que la misma controversia superaba dicho ámbito**,

ii) **sacar provecho de sus propias contradicciones** luego de haber reclamado en MERCOSUR y habiendo obtenido un resultado adverso, Brasil acudió a la OMC para revertir el resultado desfavorable a su pretensión en el laudo arbitral invocando la misma normativa, pero contrariando su anterior conducta de respetar los laudos derivados del Protocolo de Brasilia;

iii) **con anterioridad**[19] **y posterioridad**[20] **a este caso**, Brasil por su conducta y/o silencio ha mantenido una actitud manifiestamente favorable a aceptar el alcance de las obligaciones dimanantes del ámbito MERCOSUR y ha creado **en los otros Estados Partes una expectativa favorable acerca del comportamiento que era razonable** esperar de ese país por los restantes tres Estados Partes. **En consecuencia, la conducta anterior de Brasil en materia de aceptación de laudos, confirmada mediante la firma del Protocolo de Olivos, tornan inoponible a la Argentina el reclamo que Brasil pretende ahora articular en base al ESD.**

21. Finalmente, la República Argentina refuta las argumentaciones de Brasil[21] y las CE[22] y reitera[23] que no ha argumentado, primariamente, la aplicación de la doctrina de la "Res Judicata".

II.b. Prueba

22. En aras del principio de transparencia y para posibilitar el análisis objetivo del Grupo Especial en los términos del artículo 11 del ESD, la República Argentina adelanta al Grupo Especial que está dispuesta a presentar sus escritos en las actuaciones en el ámbito MERCOSUR e invita a

[19] Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafo 20 y nota 12.

[20] La firma del Protocolo de Olivos incluyendo expresamente una cláusula de opción de foro.

[21] Declaración oral del Brasil. Primera reunión con el Grupo Especial, 25 de septiembre de 2002, párrafo 4.

[22] Comunicación de terceros presentada por las Comunidades Europeas, 9 de septiembre, párrafo 5.

[23] Intervención de la República Argentina en la reunión del Grupo Especial con las Partes, 25 de septiembre de 2002, párrafo 7.

Brasil a proceder de la misma manera con la finalidad de ofrecer al Grupo Especial, la prueba completa de lo actuado en ámbito MERCOSUR respecto del objeto de la actual controversia.[24]

II.c. Norma pertinente de derecho internacional público - artículo 31 c) Convención de Viena

23. En primer lugar, la República Argentina no coincide con lo sostenido por los EE.UU. en cuanto a que "*By its plain terms, Article 3.2 is limited to the rules of interpretation used to clarify the existing provisions of the WTO Agreement*".[25]

24. La República Argentina sostiene que el artículo 3.2 del ESD propone una regla de interpretación para el Grupo Especial y la práctica legal OMC ha consolidado la misma remitiendo a los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.

25. El artículo 31.3 c) de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados específicamente estatuye que, a los fines de interpretación, se deberá tomar en consideración "... *toda norma pertinente de Derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes*".

26. En opinión de Jiménez de Arechaga[26], "*Esta disposición significa que un tratado debe ser interpretado* ***dentro del marco de las reglas de Derecho internacional en vigor entre las partes***."

27. Asimismo, el mismo autor refiere a una Resolución de 1975 del Instituto de Derecho Internacional[27] en la cual se sostuvo que: "*La interpretación de un tratado debe tomar en cuenta todas las normas pertinentes de Derecho internacional aplicables entre las partes en el momento de aplicación*".

28. La República Argentina entiende que el marco normativo del MERCOSUR y las consecuencias legales derivadas de la aplicación del Protocolo de Brasilia por el Tribunal Arbitral Ad Hoc en el caso en cuestión, constituyen normas pertinentes de derecho internacional público en el sentido del artículo 31 3 c) de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.

29. La República Argentina solicita, respetuosamente, al Grupo Especial que tome en consideración a los fines de interpretación de la actual controversia en el ámbito OMC y en los términos del párrafo precedentemente expuesto, las reglas comprendidas en el marco normativo del MERCOSUR conforme a las cuales resolviera el Tribunal Ad Hoc en ámbito MERCOSUR.

II.d. Síntesis

30. En síntesis, la República Argentina sostiene que, *in casu*, es inoponible a la Argentina la actual demanda de Brasil en ámbito OMC, pues la conducta de Brasil no sólo contradice el principio de buena fe; sino que configura un *estoppel*.

---

[24] Anexo ARG-LXII - Cuadro comparativo entre controversia en MERCOSUR vis-a-vis controversia OMC.

[25] Declaración oral de los Estados Unidos en la reunión de los terceros con el Grupo Especial, 26 de septiembre de 2002, párrafo 7.

[26] Jiménez de Arechaga, Eduardo, "El derecho internacional contemporáneo", Editorial Tecnos, Madrid, 1980, página 61.

[27] *Idem*., página 63.

31. Por lo expuesto en el párrafo anterior, la figura del *estoppel* que los Estados Unidos definen como argumento procesal y que como tal ha sido reconocido en la OMC y que la doctrina más amplia considera como una defensa sustantiva, debería, en opinión de la Argentina, llevar al Grupo Especial a abstenerse de pronunciarse en el caso de referencia. Aun si el Grupo Especial considera que el *estoppel* en la OMC sólo es aplicable como defensa procesal, es más que suficiente para rechazar los argumentos sustantivos de Brasil.

32. Subsidiariamente, si el Grupo Especial rechazara el argumento de los párrafos anteriores, la República Argentina entiende que el Grupo Especial, de todos modos, debería desestimar la formulación de constataciones y conclusiones acerca de la consistencia y compatibilidad de la Resolución 574/2002 vis-à-vis el Acuerdo Antidumping dado que el marco normativo MERCOSUR, que incluye el Protocolo de Brasilia y las consecuencias legales derivadas del laudo arbitral, son norma pertinente de derecho internacional aplicable entre las Partes conforme el artículo 31.3 c) de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.

III. ASPECTOS SUSTANTIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

III.a. Artículo 5.2 del Acuerdo Antidumping (AD)

33. La Argentina reafirma lo sostenido oportunamente en su PCE, respecto de que, la prueba que debe acompañar la solicitante al inicio de la investigación debe ser la que esta tenga razonablemente a su alcance. Por parte de la Autoridad de Aplicación, la obligación para ella contenida en este artículo, es la de determinar, que las pruebas que acompañan la solicitud sean suficientes para disponer la apertura de la investigación. La condición de suficiencia así establecida, se refiere a que las pruebas deben contener indicios de que la práctica de dumping se ha configurado causando daño a la rama de la producción doméstica. Pero el nivel de detalle respecto de los hechos alegados, es siempre menor a aquél que, en virtud de la investigación surge en una etapa posterior.

34. En tal sentido, el nivel de pruebas exigido, debe ser aquel que haga posible la apertura de la investigación basada en esa misma prueba. Tal como se ha afirmado en el párrafo 32 de su PCE, la Argentina sostiene que, exigirles a los productores nacionales un nivel de detalle y conocimiento, en las pruebas que deben presentar que esté fuera del alcance material de sus posibilidades, implicaría lisa y llanamente denegarles toda posibilidad de acceso al procedimiento. Respecto de los distintos niveles de exigencia requeridos para las pruebas que serán aportadas durante las distintas etapas del procedimiento, la Argentina recuerda lo señalado por los Grupos Especiales que trataron los asuntos "*Estados Unidos - Medidas que afectan a las importaciones de madera blanda procedentes de Canadá*"[28], y "*México - Investigación antidumping sobre el jarabe de maíz con alta concentración de fructosa procedente los Estados Unidos*"[29], haciendo referencia a los párrafos 38 y 44 de su Primera comunicación escrita de fecha 29 de agosto 2002.

35. Brasil, que dice estar de acuerdo con este argumento de Argentina[30], sostiene sin embargo que en el presente caso se habría infringido el artículo 5.2 ya que la prueba que habría presentado la peticionante no era suficiente para determinar que:

i) el producto que se comercializaba en Brasil era físicamente diferente del comercializado en la Argentina;

---

[28] WT/DS 236, párrafo 332.

[29] WT/DS132/R, párrafo 7.76.

[30] PCE BR, párrafo 15.

ii) que esas diferencias tenían influencia en la comparabilidad de precios; y

iii) que las diferencias de rendimiento alegadas por la peticionante eran correctas.[31]

36. Esto no es así. La prueba que fue presentada por la peticionante ante la Autoridad investigadora, contenía datos suficientes en el sentido del artículo 5.2 AD, de que:

i) contrariamente a lo afirmado por Brasil, existían diferencias físicas entre el producto (pollo entero) tomado como base para calcular el valor normal;

ii) que en tanto esas diferencias afectaban el rendimiento comercial de los productos objeto de la comparación, tenían indudablemente impacto en la comparabilidad de precios; y

iii) que estas diferencias, ameritaban la realización de un ajuste que permitiera -previa a la apertura de la investigación- efectuar la comparación de manera equitativa, para lo que se proveyó también una metodología de ajuste a tal efecto.

III.b. Artículo 5.7. del Acuerdo Antidumping (AD)

37. Respecto de las alegaciones de Brasil acerca de que la Argentina habría incumplido las disposiciones de este artículo del AD, al no haber considerado, en la decisión de iniciar la investigación la evidencia sobre dumping y daño, de manera simultánea, la Argentina sostiene que esto no es cierto, tal como lo había hecho en su PCE.

38. El artículo 5.7 establece que, las pruebas de la existencia de dumping y daño, se examinarán simultáneamente **en el momento de decidir iniciar o no una investigación.**

39. Aún cuando en su PCE[32], Brasil intenta demostrar que simplemente porque el informe que demuestra la existencia de dumping y el correspondiente a la existencia del daño no tienen la misma fecha, la Argentina habría incumplido con el AD, esto de ninguna manera significa que la Autoridad, al momento de tomar la decisión respecto de la Apertura de la Investigación, no haya considerado simultáneamente la evidencia contenida en ambos informes.

40. La Argentina trae a la atención del Grupo Especial, respecto de esta cuestión, lo expresado por los Estados Unidos en su Primera comunicación escrita, donde sostiene que: "Brasil parece creer que este lenguaje (el del artículo 5.7) obliga a los Miembros a asegurarse que sus autoridades investigadoras consideren la información concerniente a dumping y daño para períodos simultáneos (esto es, idénticos). Analizado en contexto, sin embargo, el término "simultáneamente", está vinculado al término "considerada", no al término "evidencia"".[33]

41. La Argentina comparte los conceptos expresados por los Estados Unidos, y reitera en esta oportunidad, lo sostenido en su PCE, acerca de que el Brasil fuerza el elemento de simultaneidad contenido en las disposiciones del AD, haciendo una interpretación de las obligaciones contenidas en el artículo referido, que simplemente no es correcta.

---

[31] PCE BR, párrafo 17.

[32] Primera comunicación escrita de Brasil, párrafo 171.

[33] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 3. Traducción propia, del original en idioma inglés.

42. Nuevamente se reitera lo ya dicho, que para tomar la decisión de proceder a la apertura, la Autoridad de Aplicación tomó en cuenta simultáneamente los análisis de daño, dumping y la relación de causalidad entre ambos.

III.c. Artículo 5.8 del Acuerdo Antidumping (AD)

43. Acerca de la alegación de Brasil de que la Argentina debería haber rechazado la solicitud de apertura, en tanto que en esa instancia no se había demostrado la existencia de daño, la Argentina reitera lo sostenido en PCE y reafirmado ante el Grupo Especial en ocasión de la Primera Audiencia con las Partes . También, nos remitimos a la respuesta a la pregunta número 16, formulada por el Grupo Especial, reiterando que, al haberse producido por parte de la peticionante la presentación de información actualizada respecto de los requisitos de la solicitud, correspondía el análisis de esa nueva información, a fin de determinar su mérito para la actuación que se llevaba a cabo.

44. Tal como se ha indicado en la respuesta mencionada, el examen de la nueva información presentada constituye un presupuesto expresamente previsto por el artículo 60 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (RLNPA - aprobado por Decreto Nº 1759/72, Texto Ordenado por Decreto Nº 1883/91), legislación oportunamente notificada a los comités pertinentes de la OMC, que dispone que el órgano competente (en este caso y por involucrar el daño, la CNCE) intervenga nuevamente en las actuaciones si ocurriere o llegare a su conocimiento un hecho nuevo. En este sentido, la presentación adicional de la peticionante introduce en las actuaciones nuevos elementos de mérito que hicieron necesaria una nueva intervención de la CNCE, conforme fuera solicitada por los órganos competentes y ajustado a estricto derecho.

45. Especial énfasis se desea poner en las siguientes cuestiones traídas oportunamente a la atención del GE respecto de este punto:

1) Que la información aportada por la peticionante era información complementaria de la aportada con el inicio del expediente. Este aporte adicional de datos, se hizo con el objeto de proveer a la Autoridad de aquellos datos que no se habían incorporado en la presentación inicial, y que le permitieron llegar a la CNCE a una determinación positiva.

2) Que en la etapa previa a la apertura, no se ven afectados los derechos de terceros.

3) Que la acción pretendida por Brasil, de archivar las actuaciones en esta etapa de la investigación, y ante la presencia de la información complementaria, hubiera significado conculcar los derechos de la peticionante, como resultado de un acto contrario a derecho.

III.d. Artículo 12.1 del Acuerdo Antidumping(AD)

46. En este punto, Argentina simplemente remitirá a lo expuesto en su PCE, deseando señalar que se cumplió con la obligación de notificar a todas las partes de las que tenía conocimiento la autoridad investigadora. A tal efecto, se recuerda lo expresado por la Argentina en los párrafos 112, 113 y 114 de la PCE, a fin de permitir al GE corroborar los distintos instrumentos y acciones utilizadas por la Argentina para cumplir con lo dispuesto por este artículo.

47. Se desea además, resaltar que respecto de los exportadores a los que no se habría notificado sino, hasta ocho meses más tarde de iniciada la investigación, esto no hubiera sido posible debido a que, no fue sino hasta que la firma INTERAMERICANA COMERCIAL por medio de su presentación permitió a la Autoridad tener conocimiento de estas empresas. Lo mismo cabe decir de la alegación hecha por el Brasil bajo el artículo 6.1.2. No puede pretenderse que la Autoridad haya incumplido sus obligaciones respecto de empresas que nunca se presentaron como partes interesadas.

III.e. Artículo 6.1.1 del Acuerdo Antidumping (AD)

48. Tal como consta en la PCE de la Argentina, la Autoridad investigadora concedió todos los plazos estipulados en el AD a todas las partes interesadas en la investigación. Pero además de los plazos procesales establecidos, la Argentina demostró la mejor voluntad respecto de permitir a todos los exportadores contar con tiempo suficiente a fin de que tuvieran oportunidad de cumplir con el aporte de información requerido para garantizar la mejor defensa de sus intereses. Esto se puede comprobar a través de las sucesivas prórrogas que en cada caso accedió a conceder la Autoridad, tal como se desprende de la lectura de los párrafos 126 a 136 de la PCE.

III.f. Artículo 6.2 del Acuerdo Antidumping (AD)

49. Nuevamente en este caso, Brasil se refiere a los ocho exportadores incorporados a la investigación a partir de solicitud de la firma INTERAMERICANA COMERCIAL, para basar sus alegaciones de incumplimiento por parte de la Argentina.

50. Argentina, remite una vez más a lo ya expresado en los párrafos 148 a 161 de su PCE respecto de este punto. Sin embargo, desea además, reiterar enfáticamente que en tanto el gobierno de Brasil había sido notificado desde el mismo inicio de la investigación, solicitando su colaboración "*a efectos de identificar a los productores-exportadores interesados en la presente investigación, y facilitarles los requerimientos de información que se adjuntan a la presente* ..."[34], este no informó acerca del supuesto interés[35] de las firmas cuya oportunidad de defensa la Argentina habría supuestamente menoscabado, y que sólo son incorporadas a la investigación a partir de solicitud de una de las partes.

III.g. Artículos 6.8 y 12.2.2. del Acuerdo Antidumping (AD)

51. Respecto de distintas alegaciones que hace Brasil acerca del uso que la Autoridad habría dado a la información aportada por los exportadores durante la investigación, y la falta de explicaciones adecuadas acerca de por qué en algunos casos, cierta información no habría sido utilizada, la Argentina ha detallado in extenso en su PCE[36] la diferente información aportada por cada una de las empresas durante la investigación, y el uso que se fue dando a la misma, caso que esta resultara susceptible de ser utilizada en el procedimiento y cumpliera con los requisitos formales exigidos por la legislación argentina, requisitos que eran de conocimiento de cada una de las partes.

52. Sin embargo, creemos necesario reiterar una vez ciertas cuestiones que, respecto del uso de la información y la posibilidad de verificación de la misma, han sido planteadas por Brasil de manera reiterada.

53. El Brasil alega que los exportadores brasileños habrían cumplido con el aporte de toda la información solicitada por la Autoridad de investigación, y que esta habría decidido aparentemente sin razón, descartar esa información y utilizar sólo la provista por la peticionante.

54. Esto no ha sido así. La Argentina ha demostrado que, toda vez que la información aportada por los exportadores fue acompañada de la correspondiente prueba documental que permitiera al menos corroborar los datos aportados, esta información fue utilizada.

---

[34] Primera comunicación escrita de Argentina, párrafo 112.

[35] Ver PCE , párrafo 147.

[36] Argentina PCE, párrafos 187-206.

55. Respecto de la información utilizada para los precios de exportación, Brasil alega que la Argentina usó la información aportada por la peticionante. Sin embargo, Brasil parece obviar el hecho que la información que realmente utilizó la Argentina en este caso, es la información oficial proveniente del registro que sobre todas las operaciones de comercio exterior lleva el organismo encargado de la supervisión y control de esas operaciones, la Administración General de Aduanas. Este registro, sirve de base de datos para otros organismos oficiales, y privados, y se compone de la información más detallada y certera, respecto de los valores y precios involucrados en cada operación. La información que los agentes económicos -exportadores o importadores- presentan ante la Aduana, tiene carácter de declaración jurada.

56. En otros casos, tales como los de FRANGOSUL y CATARINENSE, la información no se utilizó, sencillamente por que en el caso de la primera, la información aportada fue insuficiente y fuera de los plazos que podrían haber permitido su uso[37], y en el caso de la segunda, porque la información aportada fue insuficiente.[38]

57. Aún a riesgo de ser redundantes, la Argentina reitera entonces que, cada vez que la información que le aportaron las partes hubiera cumplido con los plazos y formas establecidos por la normativa, esta fue utilizada, debiendo recurrir a otras fuentes de información para aquellos casos en que la información adoleciera de alguna de estas características.

58. Además, el Brasil alega que la autoridad debería haber concurrido a los establecimientos de los exportadores a fin de verificar la información, en tanto estos ofrecieron tal posibilidad durante el procedimiento.

59. Respecto de este punto, la Argentina ya ha expresado de manera reiterada, que la posibilidad de efectuar verificaciones *in situ*, es una facultad de la Autoridad de investigación, y no una obligación contenida en el AD. Sin embargo, estimamos conveniente repetir lo expresado en la Intervención de la República Argentina ante el Grupo Especial y las Partes, llevada a cabo el día 25 de septiembre ppdo.

60. La Argentina no niega la posibilidad prevista en el Acuerdo de realizar verificaciones. Sin embargo, quiere dejar en claro, que interpreta esta posibilidad, de manera algo distinta respecto de lo que aparentemente, lo hace Brasil.

61. La posibilidad de efectuar verificaciones del tipo que propone Brasil, está prevista por el Acuerdo en el artículo 6.7, que establece que:

> "*...las autoridades <u>podrán</u> efectuar investigaciones en el territorio de otro Miembro* ..." (subrayado añadido).

62. Es así que la Argentina estima que, tal como está previsto en el mismo Acuerdo, este mecanismo permite un método de verificación de la información aportada al expediente durante una investigación, que no necesariamente debe ser el recurso de la Autoridad cuando necesita constatar la veracidad y/o pertinencia de una prueba, más aún cuando el sector privado no accedió al requerimiento de envío de información efectuado por la autoridad de aplicación.

63. Según la Argentina, esta parece ser la interpretación más correcta que surge de la lectura del párrafo 1, del Anexo I, que detalla los procedimientos aplicables a esta previsión del artículo 6.7, cuando establece que:

---

[37] Argentina PCE, párrafos 187-200.

[38] Argentina PCE, párrafo 203.

> "*Al iniciarse una investigación, se deberá informar a las autoridades del Miembro exportador y a las empresas de las que se sepa están interesadas de la intención de realizar investigaciones* in situ*" (subrayado añadido).*

64. Como puede advertirse, de la lectura conjunta de la disposición del artículo 6.7, y el párrafo 1 del Anexo I del AD, se desprende claramente el carácter discrecional que el acuerdo otorga a este recurso, despejando cualquier duda acerca del carácter de obligatoriedad que se quisiera otorgar al mismo. Esta característica se ve además reforzada por la disposición del párrafo 3 del mismo Anexo, que requiere de parte de las empresas que fueran eventualmente a ser visitadas, el otorgamiento de consentimiento expreso, como requisito para que esta visita tenga lugar.

65. Pero además Brasil aparentemente interpreta que esta posibilidad contiene una obligación de carácter supletorio al envío de la información solicitada por la Autoridad en tiempo y forma.

66. Hacemos referencia entonces al párrafo 8 del citado Anexo, que indica en su parte pertinente:

> "*Como la finalidad principal de la investigación in situ es verificar la información recibida u obtener más detalles, esa investigación se deberá realizar después de haberse recibido la respuesta al cuestionario ...; además, se deberá considerar práctica normal indicar a las empresas interesadas, con anterioridad a la visita, la naturaleza general de la información que se trata de verificar y que otra información es preciso suministrar ...*."

67. Como puede apreciarse, el recurso de efectuar investigaciones *in situ*, no releva a las partes interesadas de su obligación de aportar la información que requiera la Autoridad investigadora, menos aún en caso de que la Autoridad decidiera efectuar esa visita de verificación. En otras palabras, mal puede el Brasil alegar incumplimiento por parte de la Argentina de una disposición de una norma específica del Acuerdo, cuando los propios exportadores brasileños no cumplieron con las obligaciones que el mismo impone para facilitar la tarea que el Brasil reclama incumplida.

III.h. Artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping (AD)

68. Brasil alega que Argentina habría incumplido con la obligación de efectuar una comparación equitativa de precios contenida en este artículo, y que esta infracción de la Argentina se verificaría a través de distintas acciones a las que hacemos referencia a continuación, llevadas a cabo durante la investigación. Aún bajo este artículo, Brasil alega que la Argentina habría impuesto una carga irrazonable sobre los exportadores brasileños, al no haber definido desde el inicio el período para el cual se requería información.

69. La Argentina reitera, que a lo largo de la investigación cumplió con la obligación impuesta de efectuar una comparación equitativa, contenida en el artículo 2.4 AD.

70. La Argentina ya ha contestado in extenso estas alegaciones en su PCE. En tal sentido, se reitera lo expresado ya en ese documento, respecto de que Argentina efectuó todos los ajustes que consideró pertinente realizar, en tanto existiera constancia de que estos,

a) debían ser realizados; y

b) pudiera constarse que los valores correspondientes a esos ajustes eran exactos y no meras cifras representativas de un rubro general para un período de tiempo.

71. Así, en el caso del ajuste que en concepto de flete Brasil reclama que la Argentina debería haber hecho en el caso de la empresa SADIA, Argentina concuerda con Brasil que tal ajuste habría correspondido, pero sólo en caso de que se hubiera aportado a la Autoridad investigadora en tiempo y

forma, prueba documental que respaldara ese ajuste. También estamos de acuerdo con Brasil, que en el Anexo VIII del Cuestionario del Exportador, la empresa había presentado un estimación respecto de este concepto. Sin embargo, esta estimación era de carácter general y agregado para un período de un año.

72. Para el cálculo del valor normal, la Argentina tomó los valores correspondientes a una serie de facturas elegidas en base al método estadístico de muestreo al azar. Esos documentos, que fueron oportunamente solicitados a la empresa exportadora, no contenían indicación alguna acerca de los valores que habría deducir ni de los conceptos sobre los que debían practicarse esas deducciones.

73. Es por ese motivo, que la autoridad no hizo el descuento que Brasil reclama, en el entendimiento de que, haber practicado un descuento que representa un promedio, de carácter general para una etapa de la investigación, hubiera introducido una distorsión respecto del precio que debía ser utilizado. En todo caso, el exportador en el momento de enviar las facturas requeridas, tuvo amplia oportunidad para indicar a la Autoridad, los conceptos y valores que correspondiese deducir o agregar, en caso de que considerase necesario hacerlo, y teniendo en cuenta las características específicas de las operaciones cubiertas por esos documentos.

74. Respecto de los ajustes que, siempre según Brasil, hubiera correspondido hacer sobre el Valor Normal calculado para los "Otros Exportadores", a la Argentina le llama la atención la advertencia que Brasil hace al Grupo Especial, para que no se deje confundir por los aparentemente "engañosos" argumentos de Argentina.[39]

75. Argentina está de acuerdo con el objetivo de que el Grupo Especial no se vea confundido, y a tal efecto cree necesario realizar ciertas aclaraciones respecto de este punto, a fin de que el Grupo Especial no se deje confundir con los argumentos de Brasil.

76. Lo primero que llama la atención es que, si bien a lo largo de su presentación Brasil ha alegado que Argentina no debería haber utilizado la información provista por JOX, en su intervención oral parece contradecirse al afirmar que, respecto del mencionado ajuste, la Argentina debería haber utilizado igualmente la información provista por la consultora.

77. El segundo argumento que llama también la atención es el que hace Brasil cuando afirma que si Argentina hubiera efectuado la deducción referida sobre el precio para calcular Valor Normal, aún cuando reconoce que el valor FOB incluye conceptos tales como fletes y seguros internos, manipuleo, carga y descarga y estiba, se estarían comparando precios a un mismo nivel comercial.[40]

78. La Argentina no alcanza a entender en qué basa Brasil tal afirmación. Es cierto que tal como lo indica el Brasil, los precios para exportación no incluyen los impuestos domésticos. Pero el mero hecho de que estos impuestos no estén incluidos, o que en caso de estarlo pudieran ser deducidos, no resuelve la cuestión relativa a lo prescripto por el Acuerdo respecto de que la comparación se deberá hacer a nivel ex-fábrica, preferentemente.

79. En otras palabras, Brasil parece creer que a fin de efectuar una comparación equitativa en términos del artículo 2.4, bastaba con sólo realizar un ajuste sobre el Valor Normal, y no sobre el valor FOB a fin de obtener dos precios representativos del mismo nivel de comercio. Sin embargo, si Argentina hubiera hecho esto, habría estado comparando un valor ex-fábrica (valor de venta de la mercadería en depósito del vendedor), con un FOB (valor en depósito, más los conceptos expresados en párrafo 44).

---

[39] Declaración oral del Brasil - Primera reunión con el Grupo Especial, párrafo 54.

[40] Declaración oral del Brasil - Primera reunión con el Grupo Especial, párrafo 59.

80. Respecto de la alegación que hace Brasil, de que se habría impuesto una carga irrazonable de prueba para sus exportadores, la Argentina remite a los párrafos 242 a 247 de su PCE.

III.i. Artículos 9.2. y 9.3 del Acuerdo Antidumping(AD)

81. Los derechos antidumping impuestos por Argentina, se ajustan a lo prescripto por el AD en sus artículos 9.2 y 9.3., que establecen que estos derechos serán cobrados "en la cuantía apropiada en cada caso", y teniendo en cuenta que "no excederán del margen de dumping establecido en el artículo 2".

82. Tal como Argentina ha sostenido, tanto en su PCE como en su Intervención oral del día 25 de septiembre, la Argentina utiliza el sistema de montos variables para fijar en forma prospectiva los derechos antidumping.

83. Mientras que el AD no establece en el artículo 9, cuáles son las modalidades que pueden aplicarse para establecer los derechos, la práctica de los Miembros de la OMC reconoce el sistema utilizado por la Argentina como uno de los posibles. Por otra parte, el artículo 9.3 del AD, establece la posibilidad de fijar estos derechos de manera retrospectiva o prospectiva, estableciendo además las vías a través de las que se deberán corregir los cobros en exceso que pudieran haber tenido lugar.

84. En el presente caso, Brasil alega que al haber impuesto derechos antidumping en la forma de montos variables, la Argentina violaría los artículos 9.2 y 9.3.

85. Para la violación del artículo 9.2, Brasil parte de un supuesto en el cual los exportadores brasileños, si decidieran exportar su producto a la Argentina con un margen de dumping mayor al determinado durante la investigación, estas exportaciones serían gravadas con un derecho superior al establecido. Esto sin embargo no es así, ya que según el artículo 2.1 del AD:

> "... Se considerará que un producto es objeto de dumping, es decir que se introduce en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal, cuando su precio de exportación al exportarse de un país a otro sea menor que el precio comparable, en el curso de operaciones comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo en el país exportador".

86. Argentina desea dejar en claro, en línea a lo expuesto por Canadá, en su Comunicación como Tercera Parte, que esto no encuentra sustento en las disposiciones del artículo 9.2, que simplemente establece que los derechos serán cobrados en "la cuantía apropiada", quedando para el artículo 9.3, establecer las condiciones que le dan al cobro tal carácter.

87. El artículo 9.3, como ya se expresara, establece que el derecho antidumping no deberá exceder el margen establecido de acuerdo al artículo 2 considerado en conjunto, y no como erróneamente pretende el Brasil al artículo 2.4.2., que se ocupa del margen de dumping sólo durante la investigación.

88. Argentina ha establecido los derechos antidumping y los cobra, de manera consistente con el Acuerdo, esto es, éstos fueron fijados en base al margen de dumping establecido en base al artículo 2, y son percibidos de acuerdo a los artículos 9.2 y 9.3. Respecto de la alegación de que el margen puede ser excedido, la Argentina no niega esta posibilidad. Pero que la posibilidad exista, no es base suficiente para alegar que ha actuado de manera inconsistente, toda vez que si esto hubiera ocurrido, los exportadores podrían haber solicitado en base al artículo 9.3, de considerarlo pertinente, la devolución de los derechos percibidos en exceso, y no lo hicieron.

89. Por lo tanto, y en base a lo expuesto, la Argentina reitera su pedido al Grupo Especial, que desestime la solicitud de Brasil de inconsistencias bajo estos artículos.

IV. PETITORIO

90. Sobre la base de las argumentaciones desarrolladas en las secciones precedentes, la República Argentina solicita respetuosamente al Grupo Especial lo siguiente:

1) Que, conforme los argumentos desarrollados en la Sección II y tal como se adelantó en los párrafos 30, 31 y 32 de esta Comunicación, la República Argentina solicita que el Grupo Especial no se pronuncie sobre las 41 alegaciones de inconsistencias con diversas disposiciones del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo Antidumping), presentadas por Brasil.

Si el Grupo Especial decidiera no hacer lugar a la anterior petición de la República Argentina, tal como se indica en la sección II.d) de esta comunicación y a la luz de las argumentaciones desarrolladas en la sección III, respetuosamente se solicita:

2) Que se rechacen las reclamaciones de Brasil en el sentido que la Resolución 574/2000 del Ministerio de Economía de la República Argentina es inconsistente con:

- Los artículos 5.2, 5.3, 5.7 y 5.8 del Acuerdo Antidumping;
- El artículo 12.1 del Acuerdo Antidumping;
- Los artículos 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2 y 6.8, así como con los párrafos 5, 6, y 7 del Anexo II, y con los artículos 6.9, y 6.10 del Acuerdo Antidumping;
- Los artículos 2.4, 2.4.2, del Acuerdo Antidumping;
- Los artículos 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 del Acuerdo Antidumping;
- El artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping;
- Los artículos 9.2, 9.3 del Acuerdo Antidumping;
- Así como los distintos reclamos relacionados con el artículo 12.2.2.

3) Rechace la petición de Brasil de revocación inmediata de la Resolución 574/2000 que impuso los derechos antidumping definitivos.

ANEXO B-4

LISTA DE PREGUNTAS A LAS PARTES

Primera reunión sustantiva, 25 de septiembre de 2002

Respuestas de la Argentina

Párrafo 2 del artículo 18 del ESD

A la Argentina

1. La Argentina dijo en la reunión de esta mañana que no se oponía, como cuestión de principio, a que el Brasil hubiera puesto a disposición del público su Primera comunicación escrita. Lo que le preocupaba más bien a la Argentina era el momento en que lo había hecho el Brasil. ¿Significa esto que la Argentina acepta que un Miembro pueda poner en algún momento a disposición del público sus comunicaciones escritas dirigidas al Grupo Especial sin infringir el párrafo 2 del artículo 18 del ESD? ¿Infringiría el Brasil el párrafo 2 del artículo 18 del ESD si pusiera sus comunicaciones escritas a disposición del público después de que el Grupo Especial emitiera su informe definitivo?

Respuesta a la primera parte de la pregunta

Sí, de conformidad con las disposiciones del párrafo 2 del artículo 18 del ESD.

Respuesta a la segunda parte de la pregunta

No.

Alegación 1

A las dos partes

2. A juicio de las partes, ¿cuáles son las obligaciones previstas en el párrafo 2 del artículo 5? Además, ¿estarían las partes de acuerdo en que el párrafo 2 del artículo 5 impone obligaciones al solicitante y no a la autoridad investigadora, como se afirmó en el asunto *Guatemala - Cemento II*? Sírvanse explicarlo. En caso de conformidad con las conclusiones formuladas en el asunto *Guatemala - Cemento II*, ¿qué recomendación debería hacer un grupo especial en caso de que se constate una infracción del párrafo 2 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping? Concretamente, ¿sería adecuada una recomendación de que un Miembro ponga la medida en conformidad?

Respuesta

Argentina entiende que el Acuerdo establece obligaciones para los Miembros. En ese sentido el párrafo 2 del artículo 5 en principio establece una obligación para los Miembros respecto a los requerimientos de información que deben ser presentados con la solicitud de inicio de investigación. Es decir, el párrafo 2 del artículo 5 establece los requisitos que debe acompañar con la petición de inicio de investigación el sector interesado al hacer una presentación solicitando la apertura de una investigación.

Cabe señalar que el párrafo 2 del artículo 5 debe ser leído conjuntamente con el párrafo 3 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping, ya que en este último se fija la obligación de la autoridad de analizar la exactitud y pertinencia de las pruebas aportadas por el solicitante.

Al Brasil

3. ¿Exige el párrafo 2 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping que la solicitud contenga pruebas pertinentes que razonablemente se tengan al alcance sobre cualquier ajuste que haya que efectuar si dicho ajuste es necesario para que el solicitante alegue "dumping"? En este sentido, ¿deberían indicar esas pruebas:

a) que se necesita un ajuste;

b) el carácter y el alcance del ajuste;

c) el criterio o la metodología para realizar dicho ajuste?

Sírvanse explicarlo.

4. ¿La información sobre los ajustes mencionados en los párrafos 70 y 71 de la Primera comunicación escrita del Brasil estuvo "razonablemente al alcance" del solicitante cuando presentó la solicitud? Sírvanse explicarlo.

A la Argentina

5. ¿Incluía la solicitud pruebas para justificar que: 1) los pollos vendidos en el Brasil eran físicamente diferentes de los vendidos a la Argentina; 2) las supuestas diferencias en las características físicas influyen en la comparabilidad de precios; y 3) las diferencias de rendimiento alegadas por el solicitante entre los pollos vendidos en el Brasil y a la Argentina eran correctas? Si la respuesta es afirmativa, sírvanse facilitar las pruebas incluidas en la solicitud.

Respuesta

La publicación de JOX de fecha 30 de junio de 1997 -Anexo ARG-I - contiene información relativa a "pollo entero". Específicamente la misma publicación indica que los precios corresponden a pollo enfriado comercializado en la ciudad de San Pablo (Brasil) expresado en reales e incluyendo patas, cabeza y menudos. Estas diferencias "físicas" tienen efectos sobre los precios ya que las diferencias poseen un valor equivalente al que la demanda del mismo ofrece en función de características de los mercados. Asimismo respecto de los productos exportados a la República Argentina, de la información obrante en el expediente surge que se trata de pollos eviscerados.

6. Sírvanse formular observaciones sobre la definición de la palabra "prueba" que se expone en los párrafo 63 y 64 de la Primera comunicación escrita del Brasil. Sírvanse hacerlo concretamente sobre la afirmación del Brasil que figura en el párrafo 64 de que "la información facilitada en la solicitud sin documentación justificante no reúne los requisitos para ser considerada como prueba". Sírvanse explicar el fundamento de su respuesta con referencia específica a este caso.

Respuesta

En lo atinente a la evidencia requerida, su presentación es un requisito explicitado en la legislación vigente y adicionalmente establecido en el Formulario N° 349 vigente desde el 12 de

noviembre de 1991. Estos requisitos son los que deben ser cumplimentados por los denunciantes de una supuesta práctica de dumping.

En este sentido, y haciendo especifica referencia al caso en cuestión, el CEPA presentó:

a) informe SYSDEC correspondiente a importaciones del período enero a junio de 1997 cuya fuente era la Dirección General de Aduana del producto objeto de investigación;

b) copia del informe de la asesoría JOX conteniendo precios del pollo enfriado en San Pablo expresado en reales y con patas, cabeza y menudos según lo aclara la misma publicación. Dado que explicitan también la existencia de diferencias tales que requieren ajustes a los efectos de la comparación de precios, adjuntan a tales efectos copia de estadística de precios de exportación de pollos publicada por la revista Aves & Ovos de la Asociación Paulista de Avicultura de abril y mayo de 1997. Asimismo adjuntan elementos de prueba que acredita la personería del CEPA y datos del SENASA sobre la representatividad del CEPA respecto a la producción nacional de pollos.

Asimismo, el CEPA acompañó la correspondiente traducción y legalización de toda aquella documentación presentada en idioma extranjero, conforme lo exige el Régimen de Procedimientos Administrativos Nacional, Ley N° 19.549 y decreto reglamentario aplicable supletoriamente a los procedimientos por presunto dumping o subvenciones. En consecuencia fueron cumplimentados los requisitos exigidos por la Autoridad de Aplicación para la solicitud de inicio de una investigación

En ese sentido, la Argentina coincide con la definición de "prueba" dada por el Brasil en los párrafos 63 y 64 de su Primera comunicación escrita, teniendo en cuenta que los elementos aportados por el CEPA constituyen prueba documental suficiente para dar inicio a una investigación. Específicamente los elementos aportados como pruebas de valor normal se corresponden con publicaciones pertenecientes a revistas especializadas y a una asesoría de notoria y pública trayectoria, los que constituyen pruebas suficientes que permiten tener una referencia exacta de los valores a que se comercializa el producto en cuestión.

Como consecuencia de ello, es evidente que la Autoridad de Aplicación cumplió con la obligación impuesta por el párrafo 3 del artículo 5 examinando la "... exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas con la solicitud ...".

Alegación 2

A la Argentina

7. ¿Podría aclarar la Argentina qué entiende por información que "razonablemente tenga a su alcance" un solicitante de conformidad con el párrafo 2 del artículo 5? En este caso, teniendo en cuenta que JOX es una asesoría que al parecer publica periódicamente datos sobre los precios de los pollos, ¿considera la Argentina que la información de JOX sobre los precios internos del Brasil correspondientes solamente a un día era toda la información sobre el valor normal que "razonablemente ten[ía] a su alcance el solicitante" en el sentido del párrafo 2 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping? Sírvanse explicarlo.

Respuesta

La expresión que incluye el párrafo 2 del artículo 5 "... razonablemente tenga a su alcance", conlleva el concepto de que el solicitante aporte aquellos elementos de prueba que estén disponibles a su alcance y que permitan demostrar su presunción. Estos elementos serán los que la peticionante pueda obtener en ese momento con los medios disponibles que se encuentran a su alcance. El CEPA

aportó JOX, publicación esta que le permitía demostrar los valores a los cuales se vendía el producto en cuestión y que, amén de aportar el valor puntual de un día indicaba la tendencia de los precios en el mercado, así como las causas de sus variaciones de existir.

Asimismo, se reiteran los conceptos vertidos en la Primera comunicación escrita formulada por la Argentina en el párrafo 71 y en la respuesta precedente en el sentido que la Autoridad de Aplicación, al examinar la exactitud y pertinencia de la prueba aportada por el CEPA, tuvo en cuenta, en primer lugar, que JOX es una publicación especializada que aporta un valor representativo promedio reflejo del estado del mercado de San Pablo. Dicho mercado es uno de los más representativos del Brasil, que puede compararse con Buenos Aires como un gran centro urbano que refleja las pautas de consumo nacional.

8. Nos remitimos a la siguiente parte del párrafo 32 de la Primera comunicación escrita de la Argentina:

> **"La previsión del artículo 5.2 aludida anteriormente permite a los peticionantes el acceso a estos tipos de procedimientos en concordancia con el respeto del derecho de defensa de las partes, situación que no sería posible si se les exigiera a los peticionantes pruebas que están más allá de su alcance."**

¿Qué significado tienen para la Argentina las palabras "más allá de su alcance"? En el presente asunto, ¿qué información estaba "más allá del alcance" del solicitante?

Respuesta

Argentina entiende que lo que exige el Acuerdo Antidumping para la petición de inicio de la investigación, es decir, "aquello que razonablemente tenga a su alcance el solicitante", amén de lo manifestado precedentemente, son aquellas pruebas que se puedan obtener sin implicar por parte de la solicitante un carga excesiva probatoria que pudiera llegar a tornar imposible la presentación de una solicitud ni de colocarlo en la situación de que el conocimiento de su búsqueda de información pueda implicar una divulgación de la investigación que se propone solicitar con las implicancias que ello podría traerle desde el punto de vista comercial. Adicionalmente se entiende que el sentido de la expresión del Acuerdo es recoger la dificultad que plantea la obtención de pruebas especialmente de valor normal, en esta instancia, la que puede acentuarse en función de las características de los mercados y las posibilidades de los peticionantes. A mayor abundamiento, si el peticionante tuviera que recurrir a la contratación de una consultora para obtener precios del mercado interno del país de que se trate, o bien recurrir a algún artilugio carente de ética para la obtención de tales valores, dejaría de tener sentido o aplicación práctica el procedimiento de dumping.

9. Sírvanse explicar el proceso utilizado por la Argentina para recibir y evaluar una solicitud, con referencia especial a toda información adicional que pueda ser aportada por el solicitante. Sírvanse explicar con referencia concreta a este asunto, si:

a) la autoridad investigadora solicitó (o recibió) más información, en especial sobre el valor normal, para decidir sobre la iniciación;

b) en qué etapa de la investigación se solicitó/recibió información adicional;

c) se utilizaron las pruebas adicionales para determinar el valor normal a los efectos de la evaluación prevista en el párrafo 3 del artículo 5;

d) si la respuesta a la pregunta c) *supra* es negativa, ¿se utilizaron las pruebas adicionales sobre el valor normal en alguna etapa posterior para determinar el valor normal?

Respuesta

Con la presentación de una petición de apertura de investigación, el peticionante debía cumplimentar el formulario N° 349. En el mismo constan todos los datos que los peticionantes deben informar de conformidad con lo exigido por el párrafo 2 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping. Asimismo, los peticionantes deben aportar toda la documentación respaldatoria de la información volcada en el formulario indicado, a efectos de que la Autoridad de Aplicación examine la exactitud y pertinencia de las "pruebas presentadas". En ese sentido en lo que en materia de valor normal se refiere, fue considerada la prueba de la publicación JOX del 30 de junio de 1997 acompañada con la presentación de la solicitud, no existiendo requerimientos adicionales por parte de la Autoridad de Aplicación al respecto.

10. Sírvanse facilitar una copia del formulario modelo que se menciona en el párrafo 43 de la Primera comunicación escrita de la Argentina.

Se adjunta como Anexo ARG-XXXIX el formulario Nº 349/1.

11. Sírvanse formular observaciones sobre los siguientes párrafos de la primera declaración oral del Brasil:

a) Los párrafos 21 a 23, que se remiten a un informe de un Grupo Especial y en los que se alega que la autoridad investigadora no tomó en consideración en este caso la repercusión de las posibles diferencias en la suficiencia de las pruebas presentadas con la solicitud, ni recabó más pruebas, lo que era claramente necesario.

Respuesta a la pregunta 11 a)

El ajuste efectuado por la Autoridad de Aplicación en virtud de las diferencias entre el pollo vendido en el Brasil y el que se vendía en la Argentina fue suministrado por la peticionante al momento de presentar la solicitud y aplicado por la Autoridad desde la apertura de la investigación, en el entendimiento de que dicha información era la que razonablemente tenía al alcance el peticionante y que la misma era razonable sin que estuvieran en conocimiento de la Autoridad de Aplicación elementos contrarios a su consideración. Evaluada dicha información la Autoridad no consideró necesario solicitar información adicional al respecto, teniendo en cuenta los estándares de información que han de ser considerados en dicha instancia de investigación.

b) Los párrafos 24 a 25 en los que se alega que el método utilizado por la Argentina para determinar el precio de exportación y consiguientemente el margen de dumping se basó únicamente en precios de exportación inferiores al valor normal, lo que a su vez "siempre daría lugar a un margen de dumping". En esta respuesta sírvanse explicar la metodología utilizada por la Argentina en el presente caso.

Respuesta a la pregunta 11 b)

La metodología seguida por la Argentina para establecer el margen de dumping se puede explicar de la siguiente manera: se tomaron todas las operaciones de exportación que estuvieran por debajo del valor normal, excluyéndose aquellas que daban margen de dumping negativo. Esta metodología ha sido también utilizada por otros Miembros de la OMC. Por otra parte, la etapa previa a la apertura requiere de evidencias suficientes de la existencia de dumping. El cálculo efectuado no introduce efectos económicos sobre el mercado. Se requiere por lo tanto conocer que han existido operaciones con dumping que justifiquen desde este aspecto el inicio de una investigación.

12. Nos remitimos a la parte siguiente del párrafo 50 de la Primera comunicación escrita de la Argentina:

> **"La prueba aportada es un valor representativo que surge de una publicación especializada para un período determinado."**

¿Qué quiere decir la Argentina con las palabras "un período determinado"? Se refiere al período de un día o a uno superior? Sírvanse responder haciendo referencia concreta a este caso.

Respuesta

La Argentina, por tal expresión entiende que es un momento en el período de análisis considerado por la Autoridad de Aplicación. Asimismo, si bien la publicación de JOX expresa el precio vigente del día 30 de junio de 1997, puede leerse en el margen derecho de la misma en su traducción aportada por el CEPA que "... la producción del mercado paralelo del interior de San Pablo es nítidamente menor, lo que viene manteniendo el precio en terreno muy firme ...", lo que refleja que la cotización no variaba considerablemente, manteniéndose estable. (Sin subrayar en el original.)

13. Nos remitimos a la parte siguiente del párrafo 50 de la Primera comunicación escrita de la Argentina:

> **"Fue por ello que el CEPA acompañó prueba mediante los datos contenidos en la mencionada publicación especializada y de reconocida seriedad, sobre valor normal que reflejaba -con un nivel de aproximación aceptable en esta instancia- los mismos niveles comerciales de venta."**

¿Qué significa para la Argentina la expresión "con un nivel de aproximación aceptable"?

Respuesta

Cuando la Argentina manifestó "... con un nivel de aproximación aceptable en esta instancia", quiso indicar que los valores tomados para la comparación exigida por el Acuerdo Antidumping se encontraban en el mismo nivel comercial, es decir que tanto el valor normal como el precio de exportación eran precios a nivel mayorista. Dado el carácter de la instancia previa a la apertura, no es de esperar el logro de una exacta aproximación en lo que respecta a los niveles de comercialización. La investigación posterior, de producirse, permitirá verificar la equivalencia o no de los niveles de comercialización y los ajustes requeridos, los que deberán surgir principalmente de la información aportada por las partes.

Al Brasil

14. ¿Depende la alegación del Brasil fundada en el párrafo 3 del artículo 5, relativa al ajuste correspondiente al pollo congelado/refrigerado, de una constatación del Grupo Especial en el sentido de que la Argentina tuvo razón al realizar en el momento de la iniciación el ajuste relativo a cabeza/patas? Es decir, ¿sostiene el Brasil que si la necesidad de un ajuste relativo a cabeza/patas se deducía claramente de los términos de la solicitud, también lo era la necesidad de efectuar el ajuste relativo al pollo congelado/refrigerado?

Alegación 3

A la Argentina

15. Sírvanse explicar qué autoridad (autoridades) están facultadas para:

a) Aceptar/rechazar una solicitud

b) Iniciar una investigación

c) Llevar a cabo la investigación

d) Decidir sobre la aplicación del derecho

Respuesta

Conforme al Decreto reglamentario vigente a la fecha de la presente investigación, Nº 2121/94, se señala:

a) La ex Subsecretaría de Comercio Exterior (en la actualidad la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial) es la autoridad competente para expedirse sobre la procedencia formal de la petición de inicio de investigación.

b) La Secretaría de Industria, Comercio y Minería es la autoridad competente para expedirse acerca de la procedencia de apertura de investigación.

c) La instrucción del procedimiento está a cargo de la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial y de la Comisión Nacional de Comercio Exterior en lo que al daño se refiere.

d) Es Autoridad de Aplicación para la aplicación de derechos antidumping el Ministerio de la Producción. A la fecha de la presente investigación, la Autoridad competente era el ex Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos.

16. Tras la constatación de la CNCE que consta en el Acta Nº 405 de que no había ninguna indicación de la existencia de daño o amenaza de daño sufrido por la rama de producción nacional, ¿rechazó la autoridad investigadora la solicitud? Dicho de otro modo, ¿puso fin efectivamente el Acta Nº 405 al expediente de solicitud? Sírvanse explicarlo.

Respuesta

El Acta Nº 405 no es un instrumento *per se* válido para cerrar la investigación, ni la CNCE está facultada para proceder al archivo de las actuaciones.

Asimismo, cabe señalar que el Acta Nº 405 citada se expidió en base a la información presentada por la peticionante obrante hasta la fecha de su dictado.

En consonancia con lo ya expresado por escrito y conforme surge del expediente, los peticionantes presentaron información actualizada de los requisitos de la solicitud con fecha 17 de febrero de 1998. Ante este hecho el área jurídica del MEyOSP y a solicitud del entonces Subsecretario de Comercio Exterior determinó que "… teniendo en cuenta que la información presentada por el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas -el CEPA- mediante Expediente Nº 061-001196/98 no ha sido evaluada por la Comisión Nacional de Comercio Exterior al expedirse sobre la existencia de daño a la producción nacional mediante el Acta de Directorio Nº 405/98, esta

Dirección General considera que correspondería, previo a todo trámite, solicitar la nueva intervención de la citada Comisión Nacional a fin de que se expida sobre los elementos aportados..." (fs. 2302 del Expediente CNCE Nº 43/97).

El examen de la nueva información presentada constituye un presupuesto expresamente previsto por el artículo 60 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (RLNPA - aprobado por Decreto Nº 1759/72, texto ordenado por Decreto Nº 1883/91), legislación oportunamente notificada a los comités pertinentes de la OMC, que dispone que el órgano competente (en este caso y por involucrar el daño, la CNCE) intervenga nuevamente en las actuaciones si ocurriere o llegare a su conocimiento un hecho nuevo. En este sentido, la presentación adicional de la peticionante introduce en las actuaciones nuevos elementos de mérito que hicieron necesaria una nueva intervención de la CNCE, conforme fuera solicitada por los órganos competentes y ajustado a estricto derecho.

Asimismo, debe reiterarse también que en la etapa previa a la apertura de la investigación no se afectan los derechos de terceras partes existiendo solamente una relación entre la parte peticionante y la Autoridad de Aplicación. En este sentido, el Brasil, que resultó parte interesada en la investigación, y que por lo tanto tuvo acceso a todas y cada una de las fojas que conforman el expediente, habrá podido observar que durante el lapso que medió entre la presentación del solicitante y la resolución de apertura hubo distintas actuaciones. El pretendido pase a archivo de las actuaciones, en función de los antecedentes señalados, hubiese sido un acto contrario a derecho de la administración y que hubiese lesionado derechos subjetivos del peticionante con las consecuencias que un acto de tal naturaleza para la administración conlleva.

En este sentido, resulta también de aplicación lo dispuesto en el Acuerdo Antidumping en el párrafo 5 del artículo 5 que dispone: "A menos que se haya adoptado la decisión de iniciar una investigación, las autoridades evitarán toda publicidad acerca de la solicitud de iniciación de una investigación … ."

En el supuesto bajo análisis, el peticionante acompañó información actualizada que ameritó su análisis redundando en la determinación plasmada en el Acta Nº 469.

En consecuencia, y en el marco de las normas citadas, el Acta Nº 405 de la CNCE no constituye en modo alguno un acto de la autoridad competente que archivaba la solicitud presentada y por ende fue procedente, conforme la legislación argentina, su nueva intervención.

17. ¿A qué plazo se refiere la palabra "sin demora" que se utiliza en el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping? Sírvanse responder haciendo referencia a este caso.

Respuesta

El párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping dispone que "La autoridad competente rechazará la solicitud presentada con arreglo al párrafo 1 y pondrá fin a la investigación **sin demora** en cuanto se haya cerciorado de que no existen pruebas suficientes del dumping o del daño que justifiquen la continuación del procedimiento relativo al caso …."

Así, debe destacarse que la Argentina no incumplió lo dispuesto por el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping en tanto y en cuanto hasta que la Autoridad de Aplicación (entonces el Secretario de Industria, Comercio y Minería) no disponga mediante una resolución la apertura de la investigación (que se publica en el Boletín Oficial de la Nación), la actividad de las autoridades no se corresponde técnicamente con el concepto de "investigación". Las dos Actas de la CNCE previas a la apertura de la investigación no podían de ninguna manera poner fin sin demora ("*promptly*") a una investigación que no era tal. Es por ello que el alcance que le da la Argentina al término "sin demora" del párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping es el que le da la legislación nacional en la

materia y en cuyos aspectos jamás fue objetado por los Miembros de la OMC con motivo de las diversas notificaciones efectuadas.

En consecuencia, el término "*promptly*" debe ser interpretado en el contexto de una investigación abierta, para lo cual deben darse los pasos administrativos necesarios para el cierre de una investigación, cuando la autoridad tenga la certeza de la no existencia del dumping o del daño que justifiquen la continuación del procedimiento.

Alegación 4

A la Argentina

18. En el párrafo 80 de su Primera comunicación escrita, la Argentina afirma que:

> **"En el Informe de Apertura de la Investigación … figuran los márgenes de dumping establecidos los que resultan del promedio de las operaciones de exportación hacia la República Argentina del producto que fuera objeto de investigación. En ese sentido, se consideró el promedio de exportación para el período enero-agosto de 1997. Al respecto, se indica que los presuntos márgenes de dumping determinados en los puntos 1, 3 y 4 del citado informe, fueron efectuados a fin de hacer un análisis adicional del caso planteado."**

El Grupo Especial desea formular las preguntas siguientes con respecto a este párrafo:

- **¿Podría explicar la Argentina el método utilizado para calcular los precios de exportación FOB que se indican en los puntos 1 y 2 de la sección 7 (Margen de dumping) del informe relativo a la viabilidad de la iniciación de la investigación antidumping? Con respecto al cálculo del dumping que figura en el punto 2 de la sección 7, ¿podría la Argentina confirmar que las operaciones de importación que se tuvieron en cuenta para calcular el precio de exportación promedio fueron las que figuran en las páginas 489 a 492 del expediente (ambas incluidas)?**

Respuesta

La Argentina en el punto 1 sección 7, y en esta instancia previa a la apertura de la investigación, tomó el precio f.o.b. de exportación promedio para el período agosto-octubre de 1996. Asimismo, y siguiendo la misma metodología utilizada para el punto 2, se tomaron todas las operaciones que estaban por debajo de 1,04, tal como obran detalladas a fs. 508, 509 y cuadro inferior de fs. 509.

Con respecto al punto 2 de la sección 7, la Argentina, para el cálculo del precio de exportación consideró aquellas operaciones de importación que estaban por debajo del valor normal, las que arrojaban un precio FOB de exportación de 0,90454.

Para la confección del cuadro 2 de la sección 7, se utilizó el detalle de las operaciones de exportación que se encuentran en el anexo contenido a fs. 485 a 488. Asimismo, se señala que la información con la que se calculó el precio FOB de exportación para el punto 2 se encuentra incluida en el anexo que va de fs. 489 a 492.

- **¿Contiene el cuadro incluido en la página 10 de la sección 6 del informe mencionado *supra* todas las importaciones del producto objeto de investigación procedentes del Brasil durante el período comprendido entre enero y mayo de 1997 y el mes de agosto del mismo año? ¿Es la cantidad total que se facilita**

en ese cuadro (1.014,75 dólares estadounidenses por TM) el precio FOB de exportación promedio correspondiente al producto en cuestión importado a la Argentina desde el Brasil durante el período comprendido entre enero y mayo de 1997 y el mes de agosto del mismo año? Sírvanse explicarlo.

Respuesta

Sí, la tabla contenida en la sección 6 incluye todas las importaciones del producto objeto de investigación, con precios que van desde los 700 dólares EE.UU. a 1.330 dólares EE.UU. por tonelada.

- **Al parecer el cuadro que figura en la página 10 de la sección 6 del informe (folio 480) incluye datos sobre los precios FOB de exportación facilitados por el solicitante para el período comprendido entre *enero y mayo de 1997 y el mes de agosto del mismo año*. En la página 12 de la sección 7 (página 482 del expediente) punto 2) se indica "teniendo en cuenta los datos relativos al precio FOB de exportación facilitados por el solicitante para el período comprendido entre *enero y junio de 1997 y el mes de agosto del mismo año*". En el párrafo 80 de su Primera comunicación escrita la Argentina afirma que "se consideró el promedio de exportación para el período enero-agosto de 1997". ¿Tendría la Argentina la amabilidad de aclarar qué período se utilizó para calcular el precio FOB de exportación promedio durante 1997?**

Respuesta

Al respecto, se indica que el período utilizado para la determinación del precio FOB de exportación fue enero a junio de 1997 y agosto de 1997. El mes de julio no fue considerado porque de la fuente oficial Argentina -Unidad de Monitoreo de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería- no surgían importaciones. Es decir, si bien el período considerado fue enero a agosto de 1997, no se registraron importaciones en el mes de julio de 1997.

19. Nos remitimos al párrafo 79 de la Primera comunicación escrita de la Argentina:

> **"El área técnica interviniente, a partir de las operaciones de importación identificadas en la respectiva fuente, buscó precisar aquellas que se adecuaban al producto objeto de investigación de modo tal que el cálculo del precio de exportación resultara tan preciso como fuera posible."**

¿Qué entiende la Argentina por las operaciones que "se adecuaban al producto objeto de investigación"?

Respuesta

En su análisis la Argentina buscó detectar aquellas importaciones que se correspondían con los productos que estaban bajo investigación, poniendo el énfasis en las características físicas del producto investigado.

Alegación 5

A la Argentina

20. Teniendo en cuenta las declaraciones del Brasil que figuran en el párrafo 124 de su Primera comunicación escrita, ¿tenía el solicitante "razonablemente a su alcance" información sobre el valor normal distinta a la correspondiente al 30 de junio de 1997?

Respuesta

La Autoridad de Aplicación solicitó mediante Nota 273-000887/99 del 29 de julio de 1999 cuerpo 26 foja 2103 (ver Anexo ARG-XL) mayor información respecto al valor normal a la peticionante, en el entendimiento de que, iniciada la investigación, ésta podría , y así lo hizo, aportar datos. Esto no invalida el hecho de que, previo a la apertura, entendió que la prueba de fecha 30 de junio de 1997 era la prueba que la peticionante razonablemente tenía a su alcance.

Alegación 6

Al Brasil

21. En el párrafo 136 de la Primera comunicación escrita del Brasil se indica en la parte pertinente:

> **"si las autoridades hubieran examinado la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas con la solicitud habrían exigido que el solicitante facilitara los precios del pollo correspondientes a todo el período objeto de análisis con el fin de realizar correctamente una comparación equitativa con los precios de exportación del mismo período".**
>
> **A juicio del Brasil, ¿cuál es "todo el período objeto de análisis"?**

Alegación 9

A las dos partes

22. En el caso que nos ocupa, ¿en virtud de qué instrumento legal se inició la investigación?

Respuesta

La investigación se inició mediante Resolución de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería Nº 11/99 publicada en el Boletín Oficial el 25 de enero de 1999.

23. ¿Cómo interpretan las partes el siguiente pasaje del informe del Grupo Especial sobre el asunto *Guatemala - Cemento II*: Consideramos que el párrafo 7 del artículo 5 obliga a la autoridad investigadora a examinar las pruebas de que disponga sobre la existencia del dumping y del daño simultáneamente y no de forma consecutiva?

Respuesta

Como ya lo ha expresado la Argentina, bajo lo estipulado por el párrafo 7 del artículo 5, el análisis simultáneo se refiere a que ambos análisis se realicen al mismo tiempo y que los elementos que ambos consideren se correspondan con un período adecuadamente coincidente, teniendo en cuenta las diferencias de investigación que presupone por una parte la existencia de dumping y por otra la de daño.

Alegación 10

A las dos partes

24. ¿Qué son "partes interesadas de cuyo interés tenga conocimiento la autoridad investigadora" en el sentido del párrafo 1 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping?

Respuesta

El párrafo 1 del artículo 12 indica que la Autoridad de Aplicación notificará "al Miembro o Miembros ... y a las demás partes interesadas de cuyo interés tenga conocimiento la autoridad investigadora y se dará el aviso público correspondiente".

Por su parte el artículo 5.2 ii) entre los elementos que contendrá la información a aportar por el solicitante de una investigación, se indica "los nombres del país o países de origen o exportación de que se trate, la identidad de cada exportador o productor extranjero conocido y una lista de las personas que se sepa importan el producto de que se trate".

En este sentido la Argentina entiende que deberá notificar a aquellas partes que se consideren interesadas en los términos del artículo 6.11, de las que tenga conocimiento y estén identificadas de manera que permita tal notificación e identificadas como partes interesadas. Se entiende que tanto la notificación al país Miembro como el aviso público son requisitos que buscan complementar el conocimiento que *per se* o por indicación expresa y fundada de terceros tenga la Autoridad de Aplicación.

25. ¿Cuándo se notificó la iniciación de la investigación a cada una de las partes siguientes: el Gobierno del Brasil, Avipal, Seara, Frigorífico Nicolini, Sadia, Frangosul, Chapeco, Minuano, Perdigão, Catarinense, CCLP, Penabranca y Comaves?

Respuesta

La Argentina, a efectos de la contestación de la pregunta 25, remite a la información presentada en los cuadros que se adjuntan como anexos: ARG-XLI, ARG-XLII, ARG-XLIII, ARG-XLIV, ARG-XLV, ARG-XLVI, ARG-XLVII, ARG-XLVIII, ARG-XLIX, ARG-L, ARG-LI y ARG-LXI. Este último detalla además las notificaciones cursadas por la DCD a las distintas partes, divididas en dos etapas : la primera, una vez formalizada la investigación; la segunda, a partir de la presentación realizada por la firma Interamericana Comercial.

A la Argentina

26. ¿Cómo concilia la Argentina el hecho de que mientras que en el informe de 7 de enero de 1998 relativo a la viabilidad de la iniciación de la investigación antidumping se enumeró a los exportadores, parece que no se les hizo la notificación?

Respuesta

La Argentina había obtenido indicaciones de los nombres de exportadores, sin que este hecho constituya por si una "identificación" que haga posible la remisión de los correspondientes cuestionarios. En este sentido, solicitó para su notificación la colaboración del Gobierno brasileño, quien por otra parte se encontraba en conocimiento de la petición con anterioridad al inicio de la investigación (nos remitimos al párrafo 112 de la Primera comunicación escrita de la Argentina). Lamentablemente no fue aportada información al respecto hasta que, avanzado el proceso de investigación, tales exportadores pudieron ser notificados en virtud de la información suministrada por la firma importadora Interamericana Comercial, tal como se explicó en la Primera comunicación escrita de la Argentina (párrafos 118 y 119).

Asimismo se remite a las fs. 3020 y 3021 del Informe de Determinación Definitiva del Margen de Dumping del 23 de junio de 2000. Si bien es cierto que existe la obligación de notificar a las partes interesadas, la Argentina realizó las acciones tendientes a lograrlo mediante la notificación directa de aquellos exportadores identificados en la forma apropiada para notificarlos y solicitando al país exportador Miembro su colaboración. Esto no significa de ninguna manera transferir la carga

sobre el Brasil, sino lograr por su intermedio la participación de los exportadores brasileños durante la investigación y desde su inicio tal como el propio Acuerdo lo contempla.

Alegación 11

A las dos partes

27. ¿Cuál es el sentido de la palabra "cuestionarios" que figura en el párrafo 1.1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping? Según las partes, ¿está limitada la palabra "cuestionarios" a los cuestionarios facilitados únicamente en la etapa inicial de la investigación?

Respuesta

El párrafo 1 del artículo 6 indica la obligación de dar a las partes aviso de la información requerida y oportunidad para presentar por escrito todas las pruebas pertinentes. El párrafo 1.1 del artículo 6 indica la existencia de cuestionarios a enviar a los exportadores o productores extranjeros, hecho que podrá hacer en forma directa o facilitarlo a través de las representaciones del país Miembro exportador e indica el término de 30 días como plazo mínimo para otorgar a la respuesta de los mismos, indicando la preferente atención a las solicitudes de prórroga.

En este sentido la práctica de la Argentina indica, conforme a la legislación vigente, el envío de cuestionarios al inicio de la investigación, a los que se otorga el plazo indicado y si, a consecuencia del procedimiento se requiriera información adicional o complementaria, el plazo otorgado a las mismas estará en relación directa al contenido del requerimiento, atendiéndose también en este caso solicitudes de prórroga.

A la Argentina

28. ¿Qué carácter tienen las solicitudes que se dirigieron a determinados exportadores brasileños el 15 de septiembre de 1999? Concretamente, ¿son esas solicitudes cuestionarios originales? ¿Se trata de los mismos cuestionarios que se enviaron a los demás exportadores al principio de la investigación? Sírvanse explicarlo.

Respuesta

La Autoridad de Aplicación tomó conocimiento de elementos que le permitieron contactarse con otros exportadores brasileños a través de la firma importadora Interamericana Comercial en una etapa avanzada del procedimiento y a consecuencia de una solicitud de pruebas a proveer. En este sentido la autoridad procedió a requerir tales pruebas consistentes, entre otros, en precios de venta en el mercado interno, precios de exportación, costos, y acompañó, al solo efecto de aportar una forma de respuesta adecuada a los requerimientos generales y para permitir que los exportadores adjuntaran toda otra información considerada importante, copia de los formularios enviados en carácter de cuestionarios al inicio de la investigación.

A mayor abundamiento, se remite a lo expuesto en los párrafos 118 y 119 de la Primera comunicación escrita de la Argentina.

29. Nos remitimos al párrafo 135 de la Primera comunicación escrita de la Argentina:

> **"… cabe señalar que este organismo [la CNCE] remitió dicho cuestionario solamente a 8 exportadores en total conformidad con lo dispuesto por el artículo 6.1 …".**

¿Cuáles son los ocho exportadores a los que la CNCE remitió el cuestionario relativo al daño? ¿Cuándo se remitieron estos cuestionarios a dichos exportadores? ¿Cómo y cuándo obtuvo la CNCE las direcciones de estos ocho exportadores? Sírvanse facilitar copias de las comunicaciones de la CNCE a estos exportadores.

Además, el cuestionario de la DCD se remitió a cinco exportadores: ¿por qué no se remitió el cuestionario de la DCD a los ocho exportadores a los que la CNCE remitió su cuestionario?

Respuesta

Sobre la última pregunta se indica que la Dirección de Competencia Desleal y la Comisión Nacional De Comercio Exterior son organismos distintos, teniendo el primero competencia en la determinación de la existencia de dumping y el segundo en la determinación de daño.

Conforme al procedimiento legal argentino, la DCD y la CNCE actúan en forma independiente en la esfera de sus respectivas competencias.

Por otra parte, el 10 de febrero de 1999 se remitió el "Cuestionario para el Exportador" de la CNCE a las empresas brasileñas Sadia, Frangosul, Avipal, Frigorífico Nicolini y Seara (se acompañan copias de las respectivas notas, cuyos originales obran a fs. 3092 a 3096 del Expediente CNCE Nº 43/97 - Anexo ARG-LII) las que, conforme se explica en el Acta Nº 576 "… las exportaciones hacia la Argentina informadas por las empresas brasileñas que respondieron el 'cuestionario para el exportador' de la CNCE representaron más de la mitad del total de las importaciones de pollos eviscerados enteros originarias del Brasil en los años 1995, 1996, 1997 y 1998 …".

La lista de las empresas que contestaron a dichos cuestionarios, entre el 22 de febrero y el 3 de mayo, con indicación de las respectivas fojas del Expediente CNCE Nº 43/97, se consigna en la siguiente tabla:

CUESTIONARIO PARA EL EXPORTADOR	**RESPONDIÓ**
Seara	Sí (fs. 3464/82)
Frigorífico Nicolini	Sí (fs. 4556/68)
Avipal	Sí (fs. 4868/896)
Sadia	Sí (fs. 5296/308)
Frangosul	Sí (fs. 4904/61)

30. ¿Figuraba la dirección de Comaves Industrial en las facturas que se adjuntan a la comunicación que presentó Interamericana Comercial S.R.L. a la DCD el 21 de abril de 1999 (Argentina - Prueba documental 7)? ¿Pueden facilitar copias de dichas facturas?

Respuesta

Si bien la Autoridad de Aplicación tuvo a la vista una factura presentada por la firma importadora que contenía una presunta dirección de la empresa Comaves Industrial, (Cp. 27, fs. 2296, folio 4), no surgía claramente que se trataba de una firma productora-exportadora y que ese fuese su domicilio actual. Se adjunta copia de la mencionada factura como Anexo ARG-LIII.

31. Nos remitimos a la declaración que figura en el párrafo 134 de la Primera comunicación escrita de la Argentina en el sentido de que "las autoridades investigadoras dieron a los exportadores brasileños un plazo mayor que el establecido en el Acuerdo para responder a los cuestionarios de la DCD." ¿Debería darse desde el principio el plazo de 30 días previsto en el párrafo 1.1 del artículo 6, cuando se envía por primera vez el cuestionario, o basta con dar un plazo menor al principio, siempre y cuando el plazo total dado para responder sea como mínimo de 30 días?

Respuesta

La Argentina, a efectos de la contestación de la pregunta 31, remite a la información presentada en los cuadros presentados como anexos XLI a LI, y LXI.

Sin perjuicio de lo expuesto, se aclara que la Argentina otorga a los exportadores los 30 días que indica el Acuerdo Antidumping para la entrega de los formularios, hecho que consta en el mismo. Los exportadores tienen el derecho a los 30 días y ellos se otorgan. La diferencia analizada por el Grupo Especial en el sentido de un otorgamiento inicial por menos días y su ampliación mínima a 30 luego, no es el sistema aplicado por la Argentina. Lo que la Autoridad de Aplicación ha manifestado es que amén de los 30 días, se otorgaron las prórrogas solicitadas. Se entiende que los plazos deben otorgarse en la respuestas a los requerimientos en función del carácter y la complejidad de los mismos. Por esta razón es pertinente la base de 30 días para las respuestas al cuestionario total y base de la investigación a su inicio.

Alegación 12

A las dos partes

32. ¿Cuál es el sentido de las palabras "que intervengan" que figura en el párrafo 1.2 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping? ¿Considerarían las partes que las empresas que saben que hay una investigación en curso pero que no se muestran interesadas en ella pueden ser consideradas "partes [] que intervengan en la investigación"?

Respuesta

La Argentina solicita se amplíen los términos de esta pregunta a efectos de posibilitar su respuesta. No obstante, se entiende que las partes interesadas son aquellas que se acreditan en la investigación como tal manifestando tener un interés en participar en la misma.

33. ¿Cuál es el sentido de la palabra "inmediatamente" que figura en el párrafo 1.2 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping?

Respuesta

Para la respuesta a esta pregunta, nos remitimos al último párrafo de la respuesta 35.

Alegación 14

A las dos partes

34. ¿Qué significan las palabras "exportadores que conozcan" en el sentido del párrafo 1.3 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping? Concretamente, ¿podrían ser considerados como "exportadores que conozcan" los exportadores del país exportador que han sido identificados por el solicitante en la solicitud como exportadores del producto considerado?

Respuesta

La Argentina entiende que "exportadores conocidos" son aquellos de los cuales se tiene conocimiento del domicilio y todos aquellos datos necesarios para identificarlos y para cursar las notificaciones pertinentes. La autoridad del país Miembro que inicia una investigación no tiene obligatoriamente que poseer información completa de los exportadores. Esto está contemplado en el Acuerdo Antidumping cuando introduce la participación del país Miembro exportador como el vehículo apropiado para obtener toda la información que permita hacer conocer a sus productores la existencia de la investigación e incluso la documentación necesaria para participar activamente en la misma.

35. ¿Estarían las partes de acuerdo con la constatación del Grupo Especial en el asunto *Guatemala - Cemento II* en el sentido de que "la expresión 'tan pronto como' denota una considerable urgencia" y que los términos "tan pronto como" e "inmediatamente" pueden ser considerados sustituibles entre sí? Sírvanse explicarlo.

Respuesta

El Grupo Especial encargado del asunto *Guatemala - Cemento II* indica que el "tan pronto como" (*as soon as*) denota una considerable urgencia. En este sentido agrega que los términos "tan pronto como" e "inmediatamente" son sustituibles entre sí. A este respecto la Argentina entiende que la interpretación del Grupo Especial debe hacerse en el contexto en que fuera planteada la misma pero de ninguna manera puede obviarse la evaluación de los términos en el contexto completo de la legislación aplicable y de los procedimientos internos. Esta legislación y procedimientos en el caso de Argentina fueron puestos en conocimiento de los países Miembros sin que recibieran cuestionamientos.

Una diferencia que hace a la interpretación y a la conclusión de términos "sustituibles" entre sí es el sentido entero del contexto en que se encuentran insertos. En este aspecto el contexto y la finalidad en el caso de *Guatemala II* no es igual al que estamos analizando en este caso.

En el caso que nos ocupa, el objetivo de esta acción es propender a la no existencia de impedimentos injustificados al comercio entre países. Es decir el no mantenimiento de medidas o investigaciones en curso cuando se adquiere el conocimiento que no son pertinentes en el marco de las disposiciones de Acuerdo Antidumping.

En este caso, y existiendo derechos protegidos por las legislaciones, el "tan pronto como" debe considerar y ser consecuente con, por un lado, la mayor prontitud y, por el otro, el cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes.

Al Brasil

36. ¿Cuál es el sentido de las palabras "tan pronto como se haya iniciado la investigación" que figuran en el párrafo 1.3 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping? En el caso concreto que nos ocupa, ¿cuándo se inició la investigación?

A la Argentina

37. Sírvanse formular observaciones sobre los párrafos 42 y 43 de la primera declaración oral del Brasil.

Respuesta

Respecto del párrafo 42 de la primera intervención oral del Brasil, la Argentina entiende que la expresión "facilitar" sobre la base del significado aceptado por nuestro idioma es el de permitir el acceso a alguna cosa o elemento que es de interés de la otra parte. Es decir, que nuestra interpretación no es sustancialmente diferente a la que indica el Brasil ni a la que es utilizada por diversos Estados Miembros en el tema especifico que nos ocupa. La diferencia que se pretende introducir es aplicable al modo en que el acceso a ese elemento es "facilitado". La copia de la solicitud está a disposición de las partes interesadas y del gobierno del país exportador desde el inicio de la investigación, como también se facilita en forma permanente el acceso de las mismas, debidamente acreditadas conforme a la legislación argentina, al expediente en forma permanente y en tanto y en cuanto sea posible.

Con relación al párrafo 43 cabe indicar, de la documentación aportada por Sadia y Frangosul (Cp. X, fs. 1012, folio 4) que, por ejemplo, si bien Sadia explica que las especificaciones técnicas para los productos comercializados en el Brasil y la Argentina serían las mismas, en el Cp. IX, fs. 999 -Anexo ARG-XXIII de la Primera comunicación escrita de la República Argentina- el apoderado de la firma Sadia, que a su vez es el apoderado de Frangosul, Seara y Avipal, cuestiona, de alguna manera, el ajuste efectuado pero no dice cómo hacer el ajuste.

Es por ello que no basta para la Argentina con las simples alegaciones del apoderado sino que las mismas deberían haberse documentado para posibilitar la verificación de sus dichos.

Alegación 15

Al Brasil

38. En cuanto a Brasil - Pruebas documentales 22, 23, 24 y 26, sírvanse indicar exactamente dónde comunicaron los exportadores que el pollo vendido a la Argentina era idéntico al vendido en el Brasil.

A la Argentina

39. El Brasil ha afirmado que las autoridades investigadoras no pidieron documentación justificante para toda la información solicitada a los exportadores. Sírvanse explicarlo.

Respuesta

Las expresiones del Brasil en este tema presentan confusiones que se entienden parecen surgir de una interpretación de los procedimientos bajo la particularidad con que este país los aplica y no de una lectura ordenada y sistémica del proceder de la Autoridad de Aplicación argentina. En primer lugar cabe aclarar que la Autoridad de Aplicación sigue un procedimiento que es puesto en conocimiento de las partes a través de sus disposiciones legales y de los instructivos que acompañan a los requerimientos de información. En este sentido la autoridad requirió como es habitual y parte de su procedimiento, la documentación respaldatoria de sus argumentaciones en tanto y en cuanto dichas argumentaciones se basaran en documentación que se encuentra en poder sustancialmente de esta parte. Esta metodología se aplica en forma concurrente para todas las partes intervinientes, no siendo por ende un elemento discriminatorio ni oculto para los exportadores.

La Argentina no requirió copias de todas las facturas, sólo requirió la documentación respaldatoria de sus argumentaciones. En ese sentido, a partir de la información que aportan las partes a lo largo del procedimiento, la autoridad procede a evaluar la posibilidad de precisar mayor documentación, sin perjuicio de la ya solicitada en el cuestionario del exportador.

Alegación 17

A la Argentina

40. ¿En qué parte de su determinación definitiva, o de cualquier otro documento puesto a disposición de las partes interesadas, explica la DCD las razones por las que rechazó los datos sobre los precios de exportación de los exportadores pertinentes?

Respuesta

En el Informe de Relevamiento de lo Actuado (fs. 2757, Cp. 63) -Prueba documental BRA-28- se encuentra detallada cuál es la información presentada a lo largo del procedimiento que la Argentina tomaría para su determinación final. Asimismo, en el Informe de Determinación Final (Prueba documental BRA-15) también se indican las causas por las cuales no se realizó la determinación individual del margen de dumping.

Conforme se indica precedentemente, y es de conocimiento de las partes, la información que se presenta debe hacerse cumpliendo los requisitos de la legislación argentina en sus aspectos formales y de fondo, así como aquellos aspectos que se indican específicamente en los requerimientos de información. La inobservancia del cumplimiento de estos aspectos, no permite a la Autoridad de Aplicación una correcta y legal utilización a los efectos de sus determinaciones.

Alegación 19

Al Brasil

41. La Argentina afirma que los datos de Frangosul sobre el valor normal se presentaron fuera de plazo. Sírvanse explicarlo.

Alegación 20 (entre otras)

A la Argentina

42. En relación con el párrafo 190 de la Primera comunicación escrita de la Argentina, sírvanse facilitar copias de las "diversas notificaciones" que se enviaron a Frangosul en las que "se solicitó la remisión de los listados de notas fiscales". ¿Cuál fue el plazo para que Frangosul presentara los datos sobre el valor normal?

Respuesta

Respecto a las copias de las "numerosas notas" fiscales requeridas a Frangosul, las mismas ya fueran presentadas en el primer escrito de la Argentina como anexos 27 y 28. No obstante ello, se acompaña el Anexo ARG-XLV, conteniendo un cuadro que detalla todas las notas remitidas a Frangosul. Asimismo, se acompaña como Anexo ARG-LIV copias de las notas requeridas.

El último plazo otorgado a la firma Frangosul fue dado por Nota DCD Nº 273-001413/99 en la cual se le otorgó "un plazo no mayor a los cinco días a partir de la recepción de la presente". Se adjunta como Anexo ARG-LV. Vencido el plazo otorgado -que vencía el 29 de noviembre de 1999, la firma realizó una presentación específicamente el 30 de diciembre de 1999 en la cual presenta un disquete. Es decir, en un plazo mayor al otorgado por la DCD.

43. ¿Cuáles fueron exactamente los datos sobre el valor normal que solicitó la DCD a Catarinense? Sírvanse facilitar documentación justificante.

Respuesta

A fin de que el Grupo Especial pueda tener una mayor comprensión del tema, se informa que respecto de Catarinense en el Informe de Determinación Final, a fs. 3053/3054 de dicho informe, se indica que la información presentada sobre valor normal fue en forma agregada en los anexos V y VI correspondiendo a un período mayor. Asimismo se señaló que la misma no había sido documentada. La circunstancia de que haya sido presentada en forma agregada, imposibilitó a la Autoridad de Aplicación que pudiera tomar solo aquella que se correspondiera con el periodo investigado.

44. Sírvanse indicar en qué parte de la determinación definitiva de la DCD se exponen las razones para no haber calculado márgenes de dumping individuales para Frangosul y Catarinense.

Respuesta

Nuevamente se indica que en relación a Catarinense en el Informe de Determinación Final (Prueba documental BRA-15), a fs. 3053/3054 de dicho informe se indica que la información presentada sobre valor normal fue en forma agregada en los anexos V y VI correspondiendo a un período mayor. Asimismo se señaló que la misma no había sido documentada.

Asimismo, en el informe final a fs. 3087 se especifica: "finalmente se destaca en el caso de la firma Catarinense Limitada, Frangosul, Comave, Da Granja Agroi, Sadia Concordia, Minuano de Alimentos, Acaua Industria, Felipe Avícola, Agroi, Veneto, Chapeco y Litoral Alimen, la Autoridad de Aplicación no ha contado con información adicional o con respaldo documental suficiente que la habilite a proceder a la determinación final individual del margen de dumping con la misma. En tal sentido, cabe al respecto remitir a lo establecido por la legislación vigente en la materia, considerándose a tal fin la mejor información recabada por la Autoridad de Aplicación en instancias precedentes del presente trámite ...".

45. Sírvanse indicar en qué parte de la determinación definitiva de la DCD, o en cualquier otro documento preparado entonces por la DCD, se dan las razones para no haber calculado márgenes de dumping individuales para Frangosul y Catarinense. ¿Contaba la DCD con datos suficientes sobre el precio de exportación respecto de estos dos exportadores?

Respuesta

Nuevamente, se destaca que en el Informe de Determinación Final de la DCD (Prueba documental BRA-15), a fs. 3087 se especifica que "finalmente se destaca en el caso de la firma Catarinense Limitada, Frangosul, Comave, Da Granja Agroi, Sadia Concordia, Minuano de Alimentos, Acaua Industria, Felipe Avícola, Agroin, Veneto, Chapeco y Litoral Alimen, la Autoridad de Aplicación no ha contado con información adicional o con respaldo documental suficiente que la habilite a proceder a la determinación final individual del margen de dumping con la misma. En tal sentido, cabe al respecto remitir a lo establecido por la legislación vigente en la materia, considerándose a tal fin la mejor información recabada por la Autoridad de Aplicación en instancias precedentes del presente trámite ...".

Respecto de Frangosul, sólo fue presentada documentación de precios de exportación pero no información relativa a los precios de venta en el mercado interno. Es a todas luces evidente que la Autoridad de Aplicación no contaba con los elementos necesarios para poder proceder al cálculo individual del margen de dumping considerando como surge del Acuerdo que este margen surge de la relación entre ambos valores y que específicamente la información sobre los precios de venta en el mercado interno se encuentra en cabeza del propio exportador. Para el caso de Catarinense, se remite a lo expuesto en la pregunta 43.

Alegación 19

Al Brasil

46.a) Sírvanse facilitar una copia de la respuesta de Catarinense al cuestionario, de 3 de noviembre de 1999.

46.b) La Argentina afirma que los datos de Frangosul sobre el valor normal se presentaron fuera de plazo. Sírvanse explicarlo.

Alegación 21

A la Argentina

47.a) En los párrafos 340 a 350 de su Primera comunicación escrita, el Brasil afirma que no se facilitó determinada información a los exportadores. Sírvanse indicar exactamente dónde se puede encontrar esta información, si es que se puede, en el informe de la autoridad de 4 de enero de 2000.

Respuesta

En el Informe de Relevamiento de lo Actuado (Prueba documental BRA-28) se indicó claramente cuál es la información que había sido presentada por cada uno de los exportadores a lo largo del procedimiento y, de la misma, cuál era la documentación que se iba a tomar y cuál no para la determinación final del margen de dumping. En especial, resultan aplicables los apartados VIII, VIII.1 y VIII.3 y subsiguientes.

No obstante para una mayor comprensión del tema en cuestión se remite a los cuadros que se adjuntan como Anexos XLI a LI, y LXI.

Alegación 23

A la Argentina

47.b) ¿Pidió la DCD a Sadia que presentara información adicional sobre su solicitud de ajuste por "flete interno" (es decir, después de que Sadia presentara los datos indicados en el anexo VIII de su respuesta al cuestionario)?

Respuesta

La Argentina, a efectos de la contestación de la pregunta 47, remite a la información del cuadro presentado como Anexo XLIV.

48. Sírvanse facilitar una copia del Expediente Nº 061-000739/2000, que se menciona en la página 95 de la determinación definitiva de la existencia de dumping de la DCD (Brasil - Prueba documental 15). Sírvanse facilitar asimismo una copia del Expediente Nº 061-000663/2000, mencionado en la página 97 de ese mismo documento.

Respuesta

Se remite como Anexo ARG-LVI copia del Expediente Nº 061-000739/2000, y como Anexo ARG-LVII el Expediente Nº 061-000663/2000.

Al Brasil

49. ¿Cuándo solicitó por primera vez Avipal un ajuste al valor normal por concepto de flete? ¿Aportó Avipal con su solicitud documentación justificante ? Si es así, sírvanse facilitar una copia de dicha documentación.

50. El argumento del Brasil relativo a que la autoridad investigadora no utilizó información presentada por los exportadores ¿se limita a los ajustes a efectos del párrafo 4 del artículo 2 o también a otros factores/alegaciones?

Alegaciones 23 a 27

Al Brasil

51. Sírvanse explicar con exactitud qué pruebas obraban en el expediente que a su juicio no utilizó la autoridad investigadora.

A la Argentina

52. Sírvanse formular observaciones sobre los párrafos 61 y 65 de la primera declaración oral del Brasil.

Respuesta

La primera cuestión a dilucidar sería a criterio de los Miembros qué se entiende por "carga excesiva". La dimensión del contenido de este concepto podría *in extremis*, llegar a invalidar la solicitud de información a las partes. La información solicitada pudo tener un peso proporcional para cada exportador en función de su importancia relativa en el comercio, pero es equivalente a la información que se solicita a todas las partes, en todas las investigaciones, información que es aportada como lo fue en este caso por algunos de los productores exportadores. De cualquier forma, los exportadores como cualquiera otra de las partes interesadas pudieron presentarse a la Autoridad de Aplicación exponiendo el hecho de considerar "excesiva" la prueba a aportar (en calidad y cantidad) justificando adecuadamente esta solicitud. Este uso de facultades que el propio procedimiento les acuerda no fue utilizada durante la investigación por las partes, "omisión" que se intenta transferir ante el Grupo Especial como un accionar inadecuado de la Autoridad de Aplicación. Adicionalmente la Argentina quiere aclarar al Grupo Especial que en ningún momento solicitó y menos exigió la presentación de la "totalidad de las facturas". La Argentina no ha podido ubicar en el expediente la parte a la que el Brasil hace referencia en este sentido, lo que es lógico ya que la Argentina no lo solicitó.

Sin perjuicio de ello, respecto del párrafo 61 se señala que la Argentina no consideró como una carga excesiva la solicitud de información efectuada a los productores-exportadores toda vez que existen presentaciones de determinados exportadores que sí cumplimentaron los requerimientos de la DCD. Asimismo, en el caso que determinados exportadores hubieran considerado excesiva la prueba a aportar, los mismos deberían haber informado tal circunstancia a la autoridad y la imposibilidad de presentarla. Sin embargo, en ningún momento expusieron tal circunstancia ante la autoridad.

Por otra parte, en relación al párrafo 65, sería deseable que el Brasil indique en qué parte del expediente la Argentina exigió la presentación de "todas las facturas de venta de mercado interno". No obstante de la información contenida en los cuadros que se adjuntan como Anexos XLI a LI y LXI, puede observarse cuáles fueron las solicitudes de información por parte de la Argentina.

Alegación 24

A la Argentina

53. Algunos datos (relativos a los ajustes) presentados por JOX parecen haber sido rechazados porque los presentó en portugués. Si fue así, ¿por qué aceptó la DCD otros datos de JOX que también se presentaron en portugués (Brasil - Pruebas documentales 19 y 32 en lo que se refiere a datos sobre el valor normal y el ajuste por diferentes características físicas)?

Respuesta

En relación a la información de JOX presentada por la firma el CEPA por Expediente Nº 61-006544/99 (Cp. 25 - fs. 2096) (Prueba documental BRA-19) se informa que la misma fue traducida como consecuencia de un requerimiento efectuado por la Autoridad de Aplicación a través de la Nota Nº 273-000887/99 (fs. 2103 - Cp. 26), ver Anexo ARG LVIII. En ese sentido, la traducción fue acompañada mediante Expediente Nº 061:006874/99 (fs. 2115 - Cp. 26), ver Anexo LIX.

Como puede advertirse, la Autoridad de Aplicación consideró la prueba de valor normal que se encontraba traducida de conformidad con lo establecido por la Ley de Procedimientos Administrativos y su Decreto reglamentario.

Alegación 25

Al Brasil

54. Sírvanse facilitar todas las respuestas de los exportadores a las secciones B.2 y C.1.1 del cuestionario de la DCD (que se indican en los "folios" 8 y 9 de Brasil - Prueba documental 22).

Alegación 26

A la Argentina

55. ¿Se basó la DCD en los datos adicionales sobre el valor normal presentados por el CEPA el 26 de julio de 1999 (Brasil - Prueba documental 19) para formular una determinación definitiva de la existencia de dumping?

Respuesta

Sí, se consideró dicha información en la instancia de determinación final tal como surge del Informe de Relevamiento de lo Actuado con anterioridad al cierre de la etapa probatoria de fecha 4 de enero de 1999 (fojas 2809 a 2811) apartado VIII.1.2.2 y en la Determinación Final del Margen de Dumping (fojas 3038 a 3040) apartado VIII.1.2.2.

56. Sírvanse formular observaciones sobre el párrafo 59 de la declaración oral del Brasil.

Respuesta

La Autoridad de Aplicación realizó los ajustes en tanto y en cuanto los mismos fueron documentados por pruebas en las condiciones que la legislación argentina en conocimiento de las partes, exige para tal fin. En ese sentido, resulta aplicable a los procedimientos por dumping en forma supletoria, tal como lo indica el Decreto reglamentario de la Ley 24425, la Ley de Procedimiento Administrativo y su Decreto reglamentario Nº 1759/72. El mencionado Decreto Nº 1759/72 de la Ley de Procedimientos Administrativos en su artículo 28 dispone que los documentos de extraña

jurisdicción deben ser presentados con la traducción pertinente al idioma español efectuada por traductor público. Por aplicación de la mencionada legislación y toda vez que la documentación aportada por JOX Asesoría ante un requerimiento adicional de la Autoridad de Aplicación no fuera presentada con la pertinente traducción y que ninguno de los exportadores lo hiciera, no se tomaron los mencionados ajustes por flete interno e impuestos.

La Autoridad de Aplicación ha puesto en evidencia que toda vez que tiene conocimiento de la existencia de posibles factores de ajuste, requiere la información sustentada por las pruebas pertinentes y, si esta cumple con los requisitos exigidos por la legislación vigente, los considera en sus determinaciones. Otro obrar la haría incurrir en violaciones a la legislación argentina, al propio Acuerdo y a los derechos de legítima defensa y de equidad que poseen todas las partes intervinientes. Lo expresado precedentemente se pone en evidencia en el caso presente en tanto y en cuanto exportadores brasileños como Sadia, Avipal, Nicolini y Ceara presentaron la documentación pertinente y la misma fue considerada para realizar la determinación individual del margen de dumping.

Alegación 27

A la Argentina

57. Sírvanse explicar exactamente por qué la muestra de la DCD de operaciones internas (utilizada para calcular el valor normal) fue estadísticamente válida. ¿Hay alguna explicación en tal sentido en la documentación definitiva de la DCD o en cualquier otro documento facilitado a las partes interesadas? Si es así, ¿dónde se encuentra?

Respuesta

Una muestra es estadísticamente válida con un margen de error aceptable. El no trabajar con el universo de información tiene su justificativo en una imposibilidad de acceso a la totalidad de la misma, en los tiempos de procesamiento o en reducir errores propios de procesar grandes cantidades de datos. Por tal motivo el uso de la estadística busca realizar inferencias de parámetros poblacionales a partir de estadísticas muestrales. En tal sentido el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 prevé la utilización de métodos estadísticos para la determinación del valor normal.

En ese sentido se remite a la explicación dada por la DCD en el Informe de Determinación Final (Prueba documental BRA-15) a fs. 3046/3047.

Alegaciones 28 a 30

A la Argentina

58. Con respecto a la afirmación que figura entre paréntesis en la segunda línea del párrafo 55 de la primera declaración oral de la Argentina, ¿el "precio mínimo de exportación" fijado para cada exportador (a los efectos del derecho antidumping variable) fue inferior, equivalente o superior al valor normal calculado respectivamente (durante la investigación) para cada exportador?

Respuesta

La Argentina buscó tal como lo sugiere el Acuerdo Antidumping utilizar un valor menor al margen de dumping en las condiciones que el mismo Acuerdo indica buscando que el comercio entre Miembros se desenvuelva en condiciones de competencia sin perjuicio para la rama de producción nacional.

En ese sentido, en el caso de Avipal se tomó un valor apenas inferior al valor normal determinado en la investigación. En el caso de Sadia fue menor ya que el valor normal determinado fue de 0,94 y se aplicó 0,92. Para el resto fue menor ya que se determinó un valor normal de 1,0385 y se aplicó un valor mínimo de exportación de 0,98.

Alegaciones 32 a 40

A la Argentina

59. Sírvanse formular observaciones sobre los párrafos 69 y 70 y 79 a 82 de la primera declaración oral del Brasil.

Respuesta

Párrafos 69-70

En primer lugar, no resulta obligatorio el análisis de ningún indicador fuera del período establecido por las autoridades como período de investigación.

Conforme prácticas internacionales llevadas a cabo por algunos países, la Argentina consideró algunas variables de acceso público con la finalidad de ratificar las tendencias observadas durante el período investigado. Pretender, como en este caso pareciera intenta el Brasil, una actualización constante durante la investigación de todos los indicadores, resultaría en una investigación sin final, lo cual por otra parte -se reitera- no es el objetivo del Acuerdo Antidumping, como tampoco la práctica de aquellos países que, como la Argentina, analizan ciertos indicadores pertinentes a título referencial.

Comentarios sobre los párrafos 79-82

Párrafo 79

La Argentina reitera lo señalado en su Primera comunicación escrita -párrafos 277 a 282-. La Argentina quiere aclarar al Grupo Especial que la evolución del factor productividad fue analizada en forma particular en el Acta CNCE Nº 576, tal como se hizo con todos los factores que establece el Acuerdo Antidumping. En efecto, en el Acta mencionada se señaló que "...la relativa estabilidad del número de empleados frente a los incrementos observados en la producción, estarían indicando una mayor productividad física de la mano de obra, probablemente debido a la incorporación de tecnología antes mencionada". El Brasil llama la atención del Grupo Especial con relación al hecho de que los datos presentados -producción, empleo, salarios y estructura de costos- no se refieren específicamente al factor productividad. En este sentido, la Argentina se pregunta con qué objeto el Brasil llama la atención al Grupo Especial sobre este tema ya que los mencionados factores son aquellos que permitieron el análisis de la CNCE.

Párrafo 80

La Argentina reitera lo señalado en su Primera comunicación escrita, párrafo 292. En cuanto a que el Brasil no encuentra una evaluación sobre otros factores que afectaron el precio del pollo eviscerado entero durante el período investigado, dicha evaluación se efectuó tanto en el Acta CNCE Nº 576 como en el Informe Técnico. En efecto, sobre la evolución del precio de un producto sustituto -carnes rojas- en el Acta mencionada se señaló lo siguiente: "Se realizó un ejercicio econométrico que muestra, para el período enero de 1995 a junio de 1999, que el precio del producto en el mercado interno es función del volumen de importaciones del mes anterior, del precio del producto importado y del precio de la carne vacuna. La inclusión del precio del maíz en el modelo mencionado no arrojó resultados satisfactorios, lo cual indica que la importante variabilidad del precio del pollo eviscerado

entero no se condice con la evolución del precio del maíz. No obstante ambas variables presentan tendencias similares ... ." Este análisis se basó en los elementos presentados en el Informe Técnico a fs. 7371/2 y fs. 7491/507. En el Acta CNCE Nº 576 también se contempla el análisis de la evolución del nivel general de actividad señalándose que "La recesión económica no afectó mayormente el consumo de pollos eviscerados enteros, ya que el mismo continúo aumentando (en 1998 aumentó 14 por ciento)". Por último, con relación a los precios relativos en el Acta CNCE Nº 576 se menciona que "...respecto al precio del conjunto de bienes industriales y de la carne vacuna, representados, respectivamente, por el Índice de Precios Industrial Mayorista de Productos Manufacturados y por el promedio simple de los Índices de Precios al Consumidor para la carne vacuna fresca, cortes traseros y delanteros muestran la misma tendencia que la registrada en los ingresos por ventas descripta, aunque en el caso del segundo precio relativo, las variaciones anuales muestran una disminución de mayor intensidad en 1998, como consecuencia del incremento de los precios de la carne vacuna de ese año". El análisis anterior se sustentó en la información presentada en el Informe Técnico, en particular en el cuadro Nº 16 de fs. 7474 y su descripción a fs. 7410. Con relación al cuadro Nº 16 del Informe Técnico, llama la atención de la Argentina que el Brasil señalara que dicho cuadro solamente contiene el ingreso medio por ventas de pollos cuando además se presentan los precios relativos mencionados anteriormente.

Párrafo 82

La Argentina evaluó las cuentas específicas de las empresas y las principales variables económicas y financieras contenidas en los instrumentos contables y financieros exigibles en relación a las características societarias de las empresas. Estos factores son los que indican -entre otros elementos- la capacidad de obtención de capital y por ende de crecimiento e inversiones. Esta explicación, contrariamente a lo expresado por el Brasil en el párrafo 82 de su intervención oral de fecha 25 de septiembre de 2002, está contenida en el Informe Técnico GEGE/ITDF 03/99 y en el Acta Nº 576.

60. Sírvanse comentar también la afirmación del Brasil que figura en el párrafo 74 de su primera declaración oral de que "no es cierto" que la CNCE no tuviera en cuenta las importaciones de Nicolini y Seara a los efectos de su determinación de la existencia de daño.

Respuesta

Respecto de dicha observación, se reitera lo manifestado por la República Argentina en su Primera comunicación escrita, párrafos 269 a 273.

Alegación 34

Al Brasil

61. Si las importaciones que no son objeto de dumping han de ser excluidas a los efectos del análisis del daño previsto en el artículo 3, ¿acaso no sugiere esto que la determinación de la existencia de dumping debe ser anterior a la determinación de la existencia de daño? Si es así, ¿cómo puede cerciorarse un Miembro de que las pruebas de la existencia del dumping y del daño serán examinadas simultáneamente de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 7 del artículo 5?

Alegación 34

A la Argentina

62. Sírvanse explicar cómo se cercioraron las autoridades investigadoras de que las importaciones que no eran objeto de dumping quedaban excluidas a los efectos de la determinación de la existencia de daño.

Respuesta

Para responder a esta pregunta, la Argentina remite a la respuesta 60.

Alegación 38

A la Argentina

63. En el párrafo 278 de su Primera comunicación escrita la Argentina se remite a una serie de páginas de referencias. Sírvanse indicar exactamente a qué documentos se remiten estos números de páginas. Sírvanse indicar asimismo los números de página correspondientes del expediente (por ejemplo, la página 1 del Acta Nº 576 (Brasil - Prueba documental 14) es la página 7303 del expediente). Sírvanse indicar además con exactitud a qué extractos de esas páginas se remite la Argentina.

Respuesta

Las referencias realizadas por la Argentina en el párrafo 278 de su primera presentación, relativas a mejoras en la productividad del sector, son las siguientes:

a) Acta 576: página 12 (párrafo 2), página 13 (párrafo 4), página 14 (párrafo 1), página 20 (párrafos 3 y 4)

b) Informe Técnico: página 26 (párrafo 5), página 28 (párrafos 5 y 7), página 29, página 30 (párrafo 2) y página 95 (párrafos 3 y 4).

64. Por lo que se refiere al párrafo 279 de la Primera comunicación escrita de la Argentina, sírvanse indicar en qué documento "el CEPA confirmó que los principales indicadores de productividad … son similares a los de la industria brasileña".

Respuesta

La frase exacta del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (el CEPA) fue "… desde hace varios años no tenemos diferencias en los resultados productivos con la avicultura brasileña …" en su escrito obrante a fs. 7135 del Expediente CNCE Nº 43/97, presentado el 2 de diciembre de 1999 (escrito post audiencia) y cuya copia se acompaña como Anexo ARG-LX.

Alegación 41

Al Brasil

65. Con respecto al párrafo 87 de su primera declaración oral, ¿alega el Brasil que el hecho de que la Argentina no explicara por qué consideró un porcentaje inferior al 50 por ciento "una proporción importante" constituye una infracción del párrafo 1 del artículo 4 o de alguna otra disposición del Acuerdo Antidumping? Si es así, sírvanse explicar de qué manera está comprendida esta alegación en el mandato del Grupo Especial.

ANEXO B-5

INTERVENCIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN LA REUNIÓN DEL GRUPO ESPECIAL CON LAS PARTES

Ginebra, 26 de noviembre de 2002

I. INTRODUCCIÓN

1. La República Argentina agradece la posibilidad de poder argumentar ante el Grupo Especial, a la luz de la Segunda comunicación escrita (Réplica) del Brasil de fecha 17 de octubre de 2002.

2. En esta etapa del procedimiento, la Argentina quiere subrayar -en forma sintética- y responder a algunos argumentos que el Brasil señaló en su última presentación.

II. ARGUMENTOS PRELIMINARES

3. La República Argentina reitera que, en su opinión, no es procedente una imputación de carácter genérico de mala fe[1] como la que el Brasil realizó en su Primera comunicación escrita (PCE) y, en consecuencia, que el Grupo Especial debe desestimar los argumentos contenidos en el segundo párrafo de la sección "*Antidumping standard of Review*" de la Segunda comunicación escrita del Brasil.

4. En tal sentido, la Argentina realmente no comprende cómo puede ser suficiente para desestimar el carácter de "genérico" la pretendida justificación del Brasil que alega[2] que la enunciación de los 41 reclamos que el Brasil realiza en los párrafos 3 y 4 de la Primera comunicación escrita y aún menos que los párrafos 11 a 544 de la misma otorguen un mayor grado de precisión a la imputación de mala fe.

5. A juicio de la Argentina, se deben distinguir por una parte, los reclamos y las fundamentaciones jurídicas de los mismos respecto de los cuales el Brasil afirma que "*the identification of these claims, the related facts and legal arguments are **not** general in nature and are **not** without relevance in this WTO proceeding*"[3] y por otra parte la imputación de mala fe. Las supuestas inconsistencias imputadas a la Resolución 574/2000 de la Argentina con la normativa OMC no tienen relación con el principio de mala fe.

II.2. LA DOCTRINA DE LA COSA JUZGADA

6. Contrariamente a lo afirmado por el Brasil[4] en el sentido que "*it appears, in fact, that Argentina is suggesting that the ruling by the MERCOSUR Tribunal has the effect of* res judicata*.*

---

[1] Primera comunicación escrita del Brasil, párrafo 28, página 11.

[2] Réplica del Brasil, sección III - "*Ruling by the MERCOSUR Ad Hoc Arbitral Tribunal*", párrafo 12, página 5.

[3] Primera comunicación escrita del Brasil, párrafo 28, página 11.

[4] Réplica del Brasil, sección III - "*Ruling by the MERCOSUR Ad Hoc Arbitral Tribunal*", párrafo 18, página 6.

*In the event that Argentina **is** alleging the application of* res judicata ...", la Argentina reitera[5] que no ha argumentado la aplicación de la doctrina de "*res judicata*".

7. Sin embargo, la Argentina estima oportuno rebatir los argumentos en tal sentido expresados por el Brasil en su Réplica y formular algunas aclaraciones.

8. En el asunto *India - Autos*[6], el Grupo Especial sostuvo que procedería a examinar la aplicabilidad de la doctrina en la OMC y, en segundo término, que era necesario observar si los hechos de la controversia satisfacían los requerimientos de la doctrina.

9. No obstante la Argentina señala que el examen de la doctrina de la cosa juzgada en el asunto *India - Autos* se basó en aspectos distintos a los de la controversia planteada por el Brasil.

10. En *India - Autos* el tratamiento de cosa juzgada se refería a dos asuntos sucesivos: *India - Restricciones cuantitativas*[7] e *India - Autos* , ambos dirimidos en ámbito OMC. Mas aún, la nota 333 del informe del Grupo Especial en el asunto *India - Autos* se detiene en el examen de dos controversias planteadas en ámbito OMC. En ellas fueron considerados reclamos que demandaron el establecimiento de grupos especiales sucesivos concernientes al mismo hecho. Los dos asuntos referidos fueron *India - Patentes*[8] y *Australia - Cuero para automóviles II.*[9] En ambos asuntos se trataba de controversias planteadas en ámbito OMC y en las cuales la *res judicata* fue juzgada irrelevante pues no existía identidad entre las partes de la controversia (*India - Patentes*[10]), o existía un vacío en la decisión anterior del Grupo Especial con respecto a la materia objeto de la controversia (*Australia - Cuero para automóviles II*[11]).

---

[5] Intervención de la República Argentina en la Reunión del Grupo Especial con las Partes, 25 de septiembre de 2002, párrafo 7.

[6] *India - Medidas que afectan al sector automóvil* (WT/DS146/R, WT/DS175/R), 21 de diciembre de 2001, párrafo 7.55.

[7] *India - Restricciones cuantitativas a la importación de productos agrícolas, textiles e industriales* (WT/DS90/R). Con posterioridad fueron planteados los reclamos de los EE.UU. y las CE en el asunto *India - Medidas que afectan al sector del automóvil* (WT/DS146/R y WT/DS175/R).

[8] *India - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la Agricultura* (WT/DS79), reclamo presentado por las CE.

[9] *Australia - Subvenciones concedidas a los productores y exportadores de cuero para automóviles* (WT/DS126/R), informe adoptado el 16 de junio de 1999.

[10] Asunto WT/DS79. Con anterioridad, los Estados Unidos habían realizado un reclamo en igual sentido. Asunto *India - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la Agricultura*" (WT/DS50).

[11] En el asunto de *Australia - Cuero para automóviles II* (WT/DS126/R), párrafo 9.14. Australia pidió al Grupo Especial que interprete el ESD en el sentido que el mismo contiene una prohibición implícita del establecimiento de varios Grupos Especiales entre las mismas partes y sobre el mismo asunto, prohibición que no está contenida en el texto del ESD. Sin embargo, el Grupo Especial resolvió que "Tampoco es este asunto en el que el demandante haya tratado de que se establezca un segundo grupo especial antes de que un primer grupo especial haya dado cima a su labor con respecto al mismo asunto por no estar satisfecho de lo que estaba ocurriendo en el primer grupo especial. Aunque en este asunto se estableció un primer Grupo Especial, nunca se le dio una composición y, por consiguiente, ese Grupo Especial nunca empezó sus trabajos."

11. Como la Argentina argumentó, la controversia que el Brasil ha iniciado contra la Argentina en el ámbito OMC no se adecua a ninguno de los tres asuntos en los cuales precedentemente los grupos especiales tuvieron oportunidad de examinar el alcance de la teoría de la cosa juzgada.

12. La República Argentina entiende necesario, sin perjuicio de no haber invocado la aplicabilidad de la doctrina, señalar las diferencias sustanciales entre la actual controversia y los asuntos citados por las CE y el Brasil en sus respectivas comunicaciones.

- **No se trata de reclamos sucesivos en el mismo ámbito**: En el presente caso existe un laudo arbitral emitido por un tribunal constituido a requerimiento del Brasil en el ámbito MERCOSUR, y no de un pronunciamiento anterior en ámbito OMC.

- **La identidad de partes**, no ofrece dudas si se establece la comparación entre la causa deducida en ámbito MERCOSUR y la actual en ámbito OMC. Además como ha destacado la Argentina tiene un "valor agregado" pues ambos estados son estados parte del mismo proceso de integración, el MERCOSUR.[12]

- **La identidad de la medida objeto del reclamo**, esto es, la Resolución ME 574/2000, conforme lo expresado en la PCE[13], y reconocido asimismo por las CE.[14]

- **La identidad de la base legal del reclamo**: Respecto de esta coincidencia, la República Argentina ha ya señalado[15] el alto grado de correspondencia entre las argumentaciones efectuadas en el ámbito MERCOSUR y en el ámbito OMC. A tal efecto se ha incluido un cuadro comparativo en el Anexo ARG-LXII en el cual quedan en evidencia las mencionadas coincidencias en las presentaciones sucesivas del Brasil en ambos foros.

13. En síntesis, a pesar de las diferencias que la actual controversia planteada por el Brasil tiene con los asuntos ya resueltos en el ámbito OMC en los cuales se invocó la Doctrina de Cosa Juzgada, la República Argentina ha decidido no argumentar la aplicación de esta doctrina por dos motivos fundamentales: en primer lugar, porque la Argentina reconoce que ante la ausencia de normativa MERCOSUR aplicable a la materia, cada Estado parte del MERCOSUR se rige por las normas del Acuerdo Antidumping.[16] En segundo lugar, a pesar de esta constatación y a sabiendas de esta situación, el Brasil recurrió al ámbito MERCOSUR y el Tribunal Ad Hoc procedió a examinar el asunto y a resolverlo teniendo a la vista, porque el propio Brasil los incluyó en el marco normativo, tanto en la fundamentación jurídica como en las inconsistencias legales, **los artículos del Acuerdo Antidumping que a juicio de Brasilia la Resolución ME 574/2000 de la República Argentina infringía**.

14. En consecuencia, en opinión de la República Argentina, el proceso sustanciado en ámbito MERCOSUR y el Laudo Arbitral obtenido a instancias de la presentación realizada por el Brasil, no puede ser soslayado ya no en virtud de cosa juzgada sino por la relevancia de la conducta desarrollada por el Brasil con sus sucesivas presentaciones y en carácter de norma pertinente aplicable al asunto,

---

[12] Intervención de la Argentina en la primera reunión del Grupo Especial con las Partes, párrafo 8.

[13] PCE de la Argentina, párrafo 16.

[14] Comunicación escrita de las CE como Tercera Parte, párrafo 7.

[15] Intervención de la República Argentina en la reunión del Grupo Especial con las partes, párrafo 8.

[16] Ver Réplica de la Argentina, párrafo 2 y punto 18 de esta Intervención de la República Argentina en la segunda reunión del Grupo Especial con las Partes.

en términos del artículo 31.3.c de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados que tiene el marco normativo del MERCOSUR.

II.3. OTRAS NORMAS Y PRINCIPIOS DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO APLICABLES

15. La República Argentina desea realizar algunas precisiones acerca de los argumentos expresados por el Brasil en la sección "*Ruling By the MERCOSUR Ad Hoc Arbitral Tribunal*" de su Replica.

16. En primer lugar, si bien como sostiene el Brasil[17], el artículo 1 del Protocolo de Brasilia señala el ámbito de aplicación de dicho Protocolo, la argumentación de la Argentina se orienta en el sentido de poner en conocimiento del Grupo Especial que la controversia planteada por el Brasil en ámbito OMC, ha sido tratada anteriormente en el ámbito regional, y esto debe tener consecuencias legales en el presente procedimiento.

17. Aún mas el Grupo Especial tiene el derecho a ser informado de todos los antecedentes del asunto y, en tal sentido, la Argentina destaca que fue el Brasil quien eligió recurrir al ámbito MERCOSUR para dirimir la controversia, que invocó y fundamentó sus reclamos en la normativa OMC en la sustanciación del proceso en ámbito MERCOSUR y que omitió toda referencia a los antecedentes en la Solicitud de Consultas, el pedido de Establecimiento de Grupo Especial, la solicitud de constitución del Grupo Especial y en la Primera presentación escrita en la OMC.

18. La República Argentina ha planteado entre los "Argumentos preliminares" de la Primera comunicación escrita[18] ante el Tribunal Ad Hoc del MERCOSUR que "*de concordar con la posición argentina de que no hay normas MERCOSUR que le den competencia al Tribunal para revisar los procedimientos sobre dumping y la aplicación de derechos antidumping intrazona regidos y aplicados íntegramente por el derecho nacional de un Estado parte, el Tribunal de por terminada su actuación*". O sea que la República Argentina, a lo largo de la sustanciación del proceso hizo saber al Brasil su disidencia acerca de que no se trataba del ámbito natural para dirimir la cuestión.

19. No obstante el Brasil, a sabiendas de que el marco normativo del MERCOSUR no contenía disposición expresa sobre el tema, llevó adelante su controversia en ese ámbito y luego de conocer el resultado desfavorable inició el procedimiento en la OMC.

20. La República Argentina coincide con el Brasil en cuanto a que el Tribunal Ad Hoc constituido para resolver el asunto que el Brasil planteo en ámbito MERCOSUR debía aplicar normativa MERCOSUR, pero en este asunto precisamente es el propio Brasil quien decide incluir en su presentación en ese ámbito -tanto en la fundamentación jurídica como en las inconsistencias legales- las supuestas infracciones que la Resolución 574/2000 implicaría vis-á-vis el Acuerdo Antidumping de la OMC. En este sentido, el Brasil alegó que "*Las normas del AD-OMC fueron traídas al acervo normativo comunitario por la DEC CMC Nº 11/97 (Marco Normativo- MN). Siendo el MN por definición del artículo 1 conforme al AD-OMC, no cumplir con aquél implica no cumplir con éste. Además aunque las disciplinas del MN no fueran aplicables por alguna fundamentación jurídica que lo excluyera, serían aplicables las normas del AD-OMC en virtud del artículo 19 del PB como "principios y disposiciones del derecho internacional aplicables en la*

[17] Réplica del Brasil, sección III. "*Ruling by the MERCOSUR Ad Hoc Arbitral Tribunal*", párrafo 23.

[18] Laudo Arbitral (punto 50).

materia". *Las normas de AD-OMC son obligatorias para los miembros de la OMC entre los cuales se encuentran los EPM -Estados Partes del MERCOSUR-*."[19] (Subrayado añadido.)

21. A juicio de la Argentina, tiene particular importancia en este caso observar que "*El Tribunal afirma la procedencia de aplicar el PB -Protocolo de Brasilia- en el asunto de autos*"[20] *y además que "El Tribunal deberá decidir la controversia en el marco del objeto señalado. A tal fin se propone atender y dilucidar por su orden las cuestiones siguientes: (...) b. Si no hay normas MERCOSUR que regulen expresamente esa materia .¿Cuál es la consecuencia? ¿Que régimen jurídico se aplica?*[21]" De allí que el mismo Tribunal señale que recurre al Acuerdo Antidumping de la OMC -AD- dado que "*En esta situación el AD-OMC proporciona una referencia a la que cabe acudir no a título de normativa MERCOSUR, que no lo es, sino a través del artículo 19 del PB como principios de derecho internacional en la materia (cfr. Segundo Tribunal Arbitral, párrafos 59 y siguientes, para esclarecer el concepto de subsidios), en este caso para ilustrar sobre el sentido y fin de los procedimientos antidumping.*"[22]

22. En conclusión, la Argentina reitera que la conducta del Brasil al plantear sucesivamente el mismo reclamo en ámbitos distintos -primero, en ámbito MERCOSUR y ante el resultado adverso, el recurso a la OMC-, imputando infracciones a las mismas normas del Acuerdo Antidumping de la OMC en ambos casos, vulnera el principio de buena fe conforme al cual deben cumplirse los tratados -tanto los contraídos en el ámbito MERCOSUR como los compromisos de la OMC- y configura que la conducta del Brasil genera una situación de *estoppel*.[23]

23. En este sentido, la República Argentina rechaza los argumentos que el Brasil realizara acerca del Protocolo de Olivos.[24] En tal sentido la República Argentina reitera[25] que el Protocolo de Olivos confirma la conducta anterior del Brasil en materia de aceptación de laudos y del alcance de los mismos, y que desde esta perspectiva se toma inoponible a la Argentina el reclamo que el Brasil pretende ahora articular en base al ESD.

II.4. NORMA PERTINENTE DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

24. La Argentina reitera[26] que la normativa MERCOSUR y las consecuencias legales derivadas de la aplicación del Protocolo de Brasilia por el Tribunal Arbitral Ad Hoc en el asunto en cuestión, constituyen normas pertinentes de derecho internacional público en el sentido del artículo 31.3.c) de la *Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados*.

---

[19] Presentación del Brasil en ámbito MERCOSUR (referencia al punto 30 del Laudo Arbitral).

[20] Laudo Arbitral (punto 101).

[21] *Idem.*, párrafo 109.

[22] *Idem.*, párrafo 159.

[23] Réplica de la Argentina, párrafo 20.

[24] Réplica del Brasil, sección "*Ruling by the MERCOSUR Ad Hoc Arbitral Tribunal*", párrafos 32, 33 y 34".

[25] Réplica de la Argentina, párrafo 20, nota 20.

[26] *Idem.* párrafos 28 y 29.

25. La República Argentina solicita respetuosamente al Grupo Especial que tome en consideración las actuaciones y la **normativa sustanciada en ámbito MERCOSUR** dado que el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los acuerdos abarcados en la OMC no pueden considerarse en forma aislada[27], sino como una pieza más del sistema normativo de derecho internacional que rige entre los Miembros OMC, en este caso, a la vez Estados Partes del MERCOSUR.

26. La República Argentina entiende que, en especial, las secciones y párrafos del Laudo Arbitral en las cuales se efectúan "*Conclusiones*" y "*Decisión*"[28] tienen significativa importancia pues implican un pronunciamiento acerca de los reclamos y alegaciones realizados por el Brasil que el Grupo Especial debería tener en cuenta al determinar el alcance, *in casu*, de las obligaciones argentinas vis-á-vis el AD, no pronunciándose sobre las mismas.

III. ASPECTOS SUSTANTIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

III.1. INICIO DE LA INVESTIGACIÓN

27. La Argentina reitera que la prueba que fue presentada por la peticionante ante la Autoridad investigadora contenía pruebas suficientes en el sentido del artículo 5.2 del AD y que la misma fue aquella que la peticionante tenía razonablemente a su alcance.

28. Asimismo, la Argentina reitera en esta oportunidad que la peticionante de apertura de una investigación no esta obligada a probar de forma indubitable la existencia del dumping, el daño y la relación causal, atento a que la determinación definitiva de la existencia de estos elementos es competencia de la autoridad investigadora, quien completara exhaustivamente la investigación una vez decretada la apertura de la misma.

29. También se reitera la existencia de diferentes niveles de exigencia respecto a las pruebas que deben ser aportadas durante las distintas etapas del procedimiento. En ese sentido, la Argentina recuerda lo señalado por los Grupos Especiales que trataron los asuntos *Estados Unidos - Medidas que afectan a las importaciones de madera blanda procedentes del Canadá*[29], y *México - Investigación antidumping sobre el jarabe de maíz con alta concentración de fructosa procedente los Estados Unidos*[30], lo cual consta en nuestra PCE, párrafos 38 y 44.

30. Por lo tanto, y atento que la Autoridad de Aplicación evaluó la exactitud y pertinencia de la prueba aportada, verificando que la misma contenía indicios de la configuración de la práctica de dumping y que este causaba daño a la rama de la producción domestica, concluyo que la misma era suficiente para declarar el inicio de la investigación.

31. En tal sentido, la Argentina reitera que el artículo 5.3 no impone la obligación de llevar adelante una investigación exhaustiva en esta etapa, ya que el nivel de pruebas "suficientes" exigidas para justificar la iniciación de una investigación es considerablemente inferior al nivel exigido para la determinación de la aplicación de una medida preliminar o definitiva.

---

[27] Ver Réplica de la Argentina, párrafo 15.

[28] Laudo Arbitral, "III. Conclusiones " y "IV. Decisión".

[29] WT/DS236, párrafo 332.

[30] WT/DS132/R, párrafo 7, punto 76.

32. En relación a la alegación del Brasil respecto de que la Autoridad de Aplicación habría incumplido con el artículo 5.7 del AD simplemente porque el informe que demuestra la existencia de dumping y el correspondiente a la existencia del daño no tienen la misma fecha, cabe reiterar que la diferencia en las fechas de ninguna manera significa que la Autoridad no haya considerado simultáneamente la evidencia contenida en ambos informes al momento de tomar la decisión respecto de la Apertura de la Investigación.

33. En cuanto a lo que el Brasil alega en el sentido que la Argentina habría incumplido con el artículo 5.8 del AD porque debería haber rechazado la solicitud de apertura atento que en una primera evaluación no se había demostrado la existencia de daño, la Argentina remite a lo sostenido al respecto en sus comunicaciones escritas, en su intervención oral yen su respuesta a las preguntas 16 y 17 del Grupo Especial.

34. En ese sentido, se reitera que ante la existencia de nueva prueba aportada y conforme a la legislación argentina en la materia, la Autoridad competente se encuentra obligada a intervenir nuevamente en las actuaciones si ocurriere o llegare a su conocimiento un hecho nuevo. Por lo tanto, la presentación adicional de la peticionante introdujo nuevos elementos de mérito que hicieron necesaria una nueva intervención de la CNCE, conforme fuera solicitada por los órganos competentes y ajustado a estricto derecho.

III.2. CONDUCCIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN APROPIADA-EVIDENCIA y REQUISITOS DE AVISO PÚBLICO

ARTÍCULO 12.1

35. La Argentina reafirma que las autoridades investigadoras han obrado conforme el requisito establecido por el artículo 12.1 al dar aviso publico y notificar a las partes interesadas de cuyo interés se tenía conocimiento, así como al Gobierno del Brasil. En efecto, la Argentina reitera que hubiera resultado imposible notificar a partes cuyo interés en la investigación se desconocía. Al respecto, cabe remitir a las respuestas argentinas a las preguntas 25 y 26 del Grupo Especial.

36. La Argentina reitera que a lo largo de este procedimiento se ha presentado evidencia respecto a la solicitud efectuada al Gobierno del Brasil, a través de su Encargado de Negocios en nuestro país[31], a fin de que colaborara en la identificación de los productores-exportadores interesados en la investigación. Del mismo modo, la Argentina dejo constancia de que en la audiencia informativa realizada el 25 de febrero de 1999, a la que se invitaron a las partes, que pudieran estar interesadas en participar del procedimiento y en la que funcionarios de la Dirección de Competencia Desleal respondieron a las consultas presentadas por los concurrentes, no asistió representación alguna del Gobierno de la República Federativa del Brasil, a pesar de que también había sido invitada[32], ni existen constancias de que alguna parte interesada se hiciera presente en la mencionada Audiencia.

37. Es por ello que no se entiende como el Brasil puede intentar deslindar responsabilidades al respecto, al señalar en el párrafo 50 de su Replica que la Argentina nunca requirió su cooperación en proveer las direcciones o información para contactar a empresas cuyo interés en la investigación se desconocía, por mas que se tuvieran indicaciones de nombres de exportadores, lo cual de por sí no constituye una "identificación" que hiciera posible la remisión de los cuestionarios. Conforme la respuesta argentina a la pregunta 26 del Grupo Especial, lo anterior no implica transferir la carga sobre el Brasil, sino lograr por su intermedio la participación de los exportadores brasileños durante la investigación y desde su inicio tal como el propio Acuerdo lo contempla.

[31] Nota SSCE Nº 121, de fecha 1º de febrero de 1999, que se acompañó como Anexo ARG-III.

[32] Acta labrada el día 25 de febrero de 1999, Anexo ARG-VI.

38. En ese sentido, cabe reafirmar que sólo a través de la solicitud de la empresa INTERAMERICANA COMERCIAL S.R.L. la Argentina tomo conocimiento del interés de las otras siete empresas exportadoras que el Brasil señala.[33] Tanto fue así que, una vez determinada la pertinencia de la mencionada solicitud, procurando la plena participación de los productores/exportadores, y aun sin contar con la identificación de determinados exportadores por parte del Gobierno brasileño, la Autoridad de Aplicación solicito informes a determinadas empresas e instituciones brasileñas (Comaves, Catarinense, Minuano, Chapeco y Perdigão) respecto a las ventas reales, precios del kg de pollo efectivamente pagado, etc.[34], solicitando a la firma INTERAMERICANA COMERCIAL S.R.L. la remisión del listado de direcciones de aquellas empresas.[35]

ARTÍCULO 6.1.1

39. Conforme la evidencia ya presentada, la Argentina reafirma que otorgo a los exportadores brasileños un plazo de mas de 30 días para responder a los cuestionarios de la DCD. Prueba de ello es que dichos cuestionarios se entregaron en la audiencia informativa realizada el 25 de febrero de 1999 y se fijo el día 29 de marzo de ese año para la presentación de los mismos a la Dirección de Competencia Desleal. Asimismo, como ha sido documentado, se atendieron debidamente las solicitudes de prorrogas, las cuales fueron concedidas cada vez que ello fue factible.[36]

40. En relación a las alegaciones brasileñas contenidas en los párrafos 59 y 60 de su Replica, la Argentina coincide con el Brasil en que debido al gran volumen de información requerida en los cuestionarios, los exportadores y productores confían en el plazo mínimo de 30 días a fin de disponer de los recursos necesarios para responder.

41. Sin embargo, la Argentina no entiende como el Brasil puede aducir al respecto que hubo siete exportadores que no gozaron del derecho de defensa cuando, conforme lo señalado en el párrafo 143 de la PCE de la Argentina, se desprende claramente de las respuestas contenidas en los cuestionarios de estos exportadores, que dos de ellos (CCLP y CHAPECO)[37] no realizaron exportaciones a la Argentina durante el período investigado, mientras que otros cuatro (MINUANO, COMAVES, PENABRANCA Y PERDIGÃO) demostraron no tener interés en la investigación, ya que no remitieron información alguna, ni aún después de expirado el plazo de la prórroga que se les había concedido.[38]

42. Es por ello que, contrariamente a lo alegado por el Brasil, la Argentina reafirma que las autoridades investigadoras dieron a los exportadores brasileños un plazo mayor que el establecido en el Acuerdo para responder a los cuestionarios de la DCD, atendiendo debidamente sus solicitudes de prórrogas y concediendo dichas prórrogas cada vez que ello fuese factible, cumplimentando de ese modo lo dispuesto en el artículo 6.1.1.

43. Cabe asimismo reafirmar que la CNCE remitió el cuestionario de daño a cinco exportadores, en total conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1, ya que las exportaciones hacia la Argentina informadas por las empresas brasileñas que respondieron al cuestionario "Cuestionarios para el

---

[33] Anexo ARG-VII.

[34] *Idem.*

[35] Anexos ARG-VIII, IX y X.

[36] PCE, párrafos 130 a 132, y Anexo ARG-XI.

[37] Ver anexos ARG-XXVI y XIV.

[38] Ver anexos ARG-VIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX y PCE , párrafo 133.

exportador" de la CNCE representaron más de la mitad del total de las importaciones de pollos eviscerados enteros originarios del Brasil, por lo que la alegación brasileña contenida en el párrafo 35 de su Réplica resulta absolutamente infundada.

44. De este modo, más allá de subrayar que el Brasil nunca cuestionó durante el desarrollo de la investigación las circunstancias que ahora reclama en sus distintas intervenciones, la Argentina reafirma que la Autoridad de Aplicación actuó en total conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1.1.

ARTÍCULO 6.1.2

45. La Argentina reafirma que las autoridades actuaron de manera consistente con la obligación establecida en el artículo 6.1.2, toda vez que las pruebas presentadas por escrito por las partes interesadas se pusieron inmediatamente a disposición de las demás partes interesadas que intervenían en la investigación, quienes en todo momento tuvieron oportunidad de tomar vista del expediente y acceder a una copia del mismo.

46. Es por ello que la Argentina reafirma que si las partes que presuntamente tenían interés en la investigación, no participaron -conforme lo señalado precedentemente-, y fueron ellas y no la Autoridad de Aplicación quienes dejaron de defender sus propios intereses. En efecto, las autoridades de investigación nunca podrían haber puesto las pruebas presentadas por las partes interesadas a disposición de estas siete empresas que el Brasil menciona, dado que dichas empresas ni siquiera se constituyeron como partes interesadas. De este modo la Argentina afirma haber actuado de manera consistente con el artículo 6.1.2.

ARTÍCULO 6.2

47. Conforme lo anterior, la Argentina reafirma que todas las partes interesadas tuvieron plena oportunidad de defender sus intereses durante toda la investigación, facilitándoseles el acceso al procedimiento, no cercenando en modo alguno el derecho de acceso a las actuaciones y menos aun el derecho de defensa, cumplimentando las Autoridades investigadores de este modo la obligación establecida en el artículo 6.2. Es más, las autoridades brindaron en todo momento la oportunidad de que toda otra parte que se considerara interesada se presentará en la investigación manifestando esta circunstancia.

48. Esa voluntad de las autoridades por otorgar a las partes interesadas la más amplia posibilidad de participación durante el procedimiento, como así también de reunir documentación que habilitara arribar a una correcta determinación final, surge del relevamiento efectuado de las presentaciones de las firmas participantes y las conclusiones a que se llegó a partir de las distintas participaciones, destacándose la tarea del área técnica a fin de recabar y reunir documentación.[39]

49. Es por ello que la Argentina considera que las Autoridades investigadoras han cumplimentado la obligación establecida en el artículo 6.2.

ARTÍCULO 6.1.3

50. La Argentina reafirma que las autoridades competentes cumplieron con los requisitos establecidos en el artículo 6.1.3 al facilitar a los exportadores brasileños y al Gobierno del Brasil el texto completo de la solicitud escrita, tan pronto como se inició la investigación. En ese sentido, las autoridades argentinas cumplieron con el requisito de facilitar cuando pusieron las actuaciones a disposición de las partes interesadas acreditadas. Es más las partes interesadas, previo acreditar su

[39] Ver Anexo ARG-XXII y anexos ARG-XXI, XX, XVI, XVIII y XIII.

condición de tales tuvieron oportunidad de acceder inmediatamente a las actuaciones a partir de la publicación de la apertura de investigación en el Boletín Oficial.

51. En adición y no obstante lo anterior, una vez resuelta la apertura de la investigación, las autoridades argentinas notificaron tal circunstancia al Encargado de Negocios de la República Federativa del Brasil en la Argentina[40], en cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 del Acuerdo Antidumping.

ARTÍCULOS 6.8 y 12.2.2

52. En cuanto al tratamiento de la información aportada por los exportadores durante la investigación la Argentina ha señalado reiteradamente a lo largo de este procedimiento que la misma ha sido utilizada conforme la misma cumpliera con los requisitos formales exigidos por la legislación argentina, los cuales eran de conocimiento de cada una de las partes.

53. Al respecto la Argentina reitera una vez más que no es cierta la alegación brasileña en cuanto a que los exportadores de ese país cumplieron con el aporte de toda la información solicitada por la autoridad de investigación y que esta habría decidido sin razón, descartar esa información y utilizar sola la provista por la peticionante. La Argentina ha demostrado que, toda vez que la información aportada por los exportadores fue acompañada por la correspondiente prueba documental -que permitiera al menos corroborar los datos aportados-, esta información fue utilizada.

54. Con relación a la información utilizada para los precios de exportación, la Argentina reafirma que esta fue la oficial proveniente de la Administración General de Aduanas, organismo encargado de la supervisión y control de todas las operaciones de comercio exterior. Asimismo, y en casos tales como los de CATARINENSE y FRANGOSUL, cabe reiterar que la información no se utilizó, sencillamente porque en el caso de la primera, la información aportada fue insuficiente[41], mientras que en el caso de la segunda la información, además de insuficiente fue presentada fuera de los plazos que podrían haber permitido su uso.[42]

55. Adicionalmente, la Argentina ya ha manifestado reiteradamente que en relación a que la Autoridad debería haber concurrido a los establecimientos de los exportadores a fin de verificar la información, ello constituye una facultad de la Autoridad de investigación de carácter discrecional, y no una obligación contenida en el Acuerdo Antidumping.

III.3. COMPARACIÓN EQUITATIVA, DAÑO, RELACIÓN DE CAUSALIDAD Y AVISO PÚBLICO

ARTÍCULOS 2.4, 3.1, 3.4, 3.5 y 12.2.2

Carga excesiva de prueba para los exportadores

56. Con relación a la alegación del Brasil en el sentido que la Autoridad de Aplicación impuso a los exportadores una excesiva carga probatoria, la Argentina desea reiterar lo ya manifestado en su primera comunicación escrita.

57. En tal sentido el argumento del Brasil es contradictorio ya que, en ciertos casos la reclamante se queja de que la Autoridad de Aplicación no pidió mayor información y en otros se queja del exceso de la información solicitada. Cabe resaltar que si la autoridad de aplicación requirió más información

[40] Ver Anexo ARG-III.

[41] Primera comunicación escrita de la República Argentina, párrafo 203.

[42] *Idem.*, párrafos 187 a 200.

fue a los efectos de lograr un resultado preciso respecto de la determinación del valor normal y valor de exportación.

58. Asimismo, cabe recordar que, la Autoridad de Aplicación atendió la observación formulada por las partes respecto a que sería dificultoso para ellas proveer prueba documental de todas las transacciones habida cuenta del gran nivel de operaciones que registran las empresas en el mercado local, por lo cual la Autoridades a fin de no imponer una carga excesiva sobre los exportadores, procedió a solicitar el aporte de pruebas sólo para aquellas operaciones seleccionadas en base al muestreo estadístico realizado, para lo cuál era imprescindible contar con la base que permitiera dicho muestreo.

59. En relación a lo manifestado por el Brasil en el punto 94 del Reclamo 26 de su Réplica, pareciera ser que el Brasil considera más relevante la información sobre como efectuar la comparación equitativa que las pruebas para poder determinar un preciso valor normal y valor de exportación que debe efectuarse previamente a efectuar una comparación equitativa. Sin pruebas de valor normal y valor de exportación aportadas por los exportadores es imposible que se pueda efectuar una correcta comparación equitativa por las diferencias físicas que afectan la comparabilidad de los precios.

60. Asimismo, y en relación con lo manifestado por el Brasil en el punto 95 del reclamo 26 de su Réplica, en el sentido que no se le solicitó información a fin de efectuar una comparación equitativa por diferencias físicas, la Argentina desea manifestar que los exportadores negaron que en el Brasil el pollo se vendiera con cabeza y patas pero en ningún momento aportaron prueba al expediente que invalidara la comparación equitativa propuesta y probada por la peticionante. Asimismo, cabe resaltar que en una investigación las partes pueden acompañar toda la información y las pruebas que ellos consideren pertinentes sin necesidad que las mismas sean requeridas por la Autoridad de Aplicación.

61. Con relación a la alegación del Brasil respecto a que se impuso una carga excesiva a los exportadores porque se les requirió información respecto de años no comprendidos en el período de investigación, la Argentina reitera que el Acuerdo no define ni limita el período de recolección de datos, así como tampoco define ni limita el período objeto de la investigación. En este sentido, la Autoridad de Aplicación tiene discrecionalidad para solicitar la documentación que considere pertinente a los efectos de determinar la existencia de dumping pudiendo requerir mayor información, en tanto la misma sea necesaria para garantizar el debido proceso a las partes interesadas.

62. En conclusión, deseamos señalar que los requerimientos de información efectuados por al autoridad se encuentran avalados por las exigencias que le imponen los párrafos 1 y 2 del artículo 6, es decir, garantizar a las partes el derecho de legítima defensa. Asimismo, los párrafos citados del artículo 6 del Acuerdo Antidumping permiten a las partes interesadas aportar todas las pruebas que consideren pertinentes durante el curso de la investigación, es decir, esto es un derecho de las partes interesadas.

63. En relación a lo manifestado por el Brasil respecto a la opinión de la CE en el punto 97 del Reclamo 26 de su Réplica, la Argentina señala que coincide plenamente con la interpretación de las Comunidades y consecuentemente entendemos que el Brasil ha errado en alegar la inconsistencia con el artículo 2.4 respecto a su reclamo 26.

64. Ahora bien, con relación al ajuste efectuado por la Autoridad de Aplicación la Argentina desea reiterar que el mismo, se efectuó correctamente y sobre la base de la prueba y la metodología aportada por la peticionante. Basándose en la prueba aportada el ajuste era evidentemente necesario -pollo con cabezas y patas vendido en el mercado de San Pablo y pollo exportado a la Argentina sin cabeza y patas-. Asimismo, como manifestamos más arriba los exportadores brasileños no aportaron prueba en contrario. Tampoco los exportadores brasileños en ningún momento del procedimiento de

investigación, objetaron la metodología del ajuste. Cabe reiterar que a petición de la autoridad la empresa JOX envió una nota que convalida el porcentaje de ajuste realizado por la peticionante.

Utilización de diferentes períodos para analizar los factores de daño

65. En relación a lo que el Brasil alega en el sentido que la Autoridad de Aplicación utilizo distintos períodos para evaluar algunos de los factores de dado, la Argentina reitera que el haber utilizado para el análisis de algunos factores -ante una investigación con amenaza de daño- un período mas largo que para el de otros factores no implica, *per se* que la Autoridad haya efectuado una evaluación no objetiva de las pruebas. La posición argentina coincide con la manifestada por los Estados Unidos en su comunicación escrita que se encuentra respaldada por lo sostenido por el Grupo Especial en el asunto *Estados Unidos - Acero laminado en caliente.*[43]

66. Contrariamente a lo sostenido por el Brasil, la Argentina considera que la CNCE actuó con particular recaudo. Reiteramos lo manifestado en la Primera comunicación escrita Argentina, en el sentido que, la CNCE decidió efectuar un análisis del comportamiento de las importaciones para el primer semestre de 1999, fundándose para ello, tanto en la normativa internacional como la práctica concordante en la materia que prevén, para los casos de amenaza de daño, la posibilidad de analizar más allá del período de la investigación a efectos de indagar la existencia o no de una tendencia creciente de las importaciones y, en consecuencia, dar un mayor sustento fáctico a la investigación.

67. Recordamos que la vigencia de un acuerdo voluntario entre las partes entre los meses de octubre de 1998 y marzo de 1999 implicó la necesidad de analizar las importaciones sin los efectos de ese acuerdo, por lo cual se extendió dicho análisis basta el mes de junio de 1999, tanto para las importaciones como para todas las variables del consumo aparente.

68. En tal sentido, el Acta N° 576, donde la Comisión oportunamente manifestó que de no haber existido dicho acuerdo entre los exportadores y los productores argentinos, "... *las importaciones de* 1998 *hubiesen registrado mayores aumentos y, con posterioridad al período investigado, en el primer semestre de* 1999, *hubiesen continuado su tendencia ascendente* ...".

Evaluación de todos los factores

69. La Argentina reitera lo manifestado a lo largo de este procedimiento en el sentido que la Autoridad de Aplicación actuó en forma consistente con las disposiciones del Acuerdo Antidumping al haber evaluado, en materia de daño, todos los factores enumerados en el artículo 3.4, así como su impacto en los precios del producto similar doméstico y su impacto en la rama de la industria nacional.

70. En ese sentido, cabe recordar que, conforme lo ya manifestado en el párrafo 277 de la Primera comunicación escrita de la Argentina, las empresas peticionantes presentaron información referente a las condiciones de productividad del sector que reflejaban que la producción avícola argentina se encontraba, al inicio de la investigación, en un pie de igualdad tanto respecto de su par brasileña como de los principales productores a nivel mundial[44], lo cual no fue cuestionado durante el desarrollo de la investigación, ni por las empresas exportadoras brasileñas ni por las importadoras en el mercado argentino.

[43] WT/DS184.

[44] Acta 576 a fojas 12,13,14,20, y en el Informe Técnico, a fojas 26,28,29,30 y 95, y cuadros 1,11,12,13 y 14 del anexo I del Informe Técnico (Prueba documental BRA-14).

71. Asimismo, cabe reiterar que la industria argentina tiene costos comparables a los productores más competitivos internacionalmente, lo cual fue el resultado de un vasto programa de reconversión y adecuación productiva[45], el cual se vio afectado por la entrada del producto brasileño que genera incertidumbre en el mercado local, máxime cuando el Brasil utiliza al mercado argentino como alternativa de ajuste ante problemas de demanda local o externa. En ese, sentido, cabe reiterar la capacidad brasileña de producción y generación de excedentes exportables, lo cual hace que el Brasil pueda fácilmente reorientarse a terceros mercados ante desequilibrios domésticos o externos, a pesar del considerable tamaño de su mercado interno.[46]

72. En relación a lo manifestado precedentemente, la Argentina da por reproducidos los párrafos 283 a 285 de nuestra Primera comunicación escrita, en donde detallamos las características que presenta el sector avícola en la Argentina en cuanto a coeficiente de exportación, consumo, demanda, perfil de la demanda, comportamiento comparativo de precios[47], sensibilidad frente a pequeñas variaciones en la oferta, etc., así como la posición del Brasil como fijador de precios en el mercado argentino, aún con volúmenes relativamente bajos debido a la enorme potencialidad de poder incrementar los embarques en muy corto plazo, todo lo cual necesariamente derivo en ajustes vía precio para el sector doméstico.

73. Es por ello que la Argentina reitera que la depresión de los precios domésticos, en un contexto de crecimiento sostenido del consumo aparente por un cambio de hábito en el consumo, no puede sino explicarse por la existencia de importaciones en condiciones de competencia desleal.[48]

74. En relación a la alegación brasileña contenida en el párrafo 113 de su Replica (Reclamo 38), no se entiende como el Brasil no ve la conexión entre la información contenida en el cuadro Nº 16 del Informe Técnico y los factores que afectan los precios domésticos, en tanto dicho cuadro presenta la evolución de los índices de precios de los productos sustitutos, básicamente las carnes rojas, así como el nivel general de actividad y los índices de precios de los sectores mas importantes.[49]

75. En ese sentido, la Argentina reitera que la CNCE consideró adecuadamente todos los factores que, en adición a las importaciones, pudieran tener algún efecto sobre los precios del producto doméstico. Del mismo modo, se reitera que dado el impacto potencial sobre la producción argentina, teniendo en cuenta las características del mercado doméstico y el brasileño, la autoridad investigadora evaluó correctamente que márgenes de dumping entre el 8 por ciento y 14 por ciento son significativos.

Aviso publico de la determinación final

76. La Argentina reitera que el aviso publico de la determinación final cumple con todos los requisitos exigidos por el Acuerdo. En tal sentido, la Argentina señala que el artículo 12.2 -que informa al párrafo 12.2.2 del Acuerdo Antidumping- determina que deberán ser publicados con suficiente detalle las constataciones y conclusiones que la Autoridad considere pertinentes. Es decir, el texto del artículo 12.2 no exige que todas las constataciones y conclusiones deban ser publicadas. Adicionalmente, queda a discreción de la Autoridad la decisión de cuáles son las constataciones y conclusiones pertinentes a los fines de ser publicados. En ese sentido, la Argentina coincide

[45] Ver Anexo ARG-XXXVI.

[46] Ver apartado VI.2 "MERCOSUR", del Informe Técnico (Prueba documental BRA-14).

[47] Ver cuadro en página 21 del Acta 576 (Prueba documental BRA-14).

[48] Ver Anexo ARG-XXXVII.

[49] Ver Prueba documental BRA-14.

plenamente con la interpretación efectuada por los Estados Unidos[50]; en el sentido que no todos los factores prescritos en el artículo 3.4 deben ser publicados.

III.4 PERCEPCIÓN DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING

ARTÍCULOS 9.2 y 9.3

77. La Argentina reitera que, tal como ha sostenido a lo largo de distintas etapas del procedimiento, la manera en que aplica y percibe los derechos antidumping, se ajusta a las prescripciones del Acuerdo.

78. Sin embargo, a la luz de las alegaciones hechas por el Brasil en su Réplica, se considera necesario realizar distintas consideraciones a fin de permitir al Grupo Especial contar con toda la información necesaria que le permita arribar a una conclusión fundamentada respecto de esta cuestión.

79. Con el objeto de realizar una exposición más ordenada, creemos conveniente separar las argumentaciones respecto de este punto en dos partes:

a) por un lado contestaremos a las distintas alegaciones que el Brasil realiza en el sentido de que una violación del artículo 9.2 es enteramente dependiente de una violación del artículo 9.3;

b) por otra parte demostraremos que la alegación del Brasil acerca de que la Argentina aplica los derechos antidumping de manera inconsistente con el Acuerdo Antidumping carece por completo de fundamento.

80. Comenzando por el punto a) la Argentina coincide con el Brasil respecto de la estrecha relación existente entre los artículos 9.2 y 9.3 del Acuerdo Antidumping.[51] En lo que la Argentina no concuerda es en que una violación del artículo 9.2 depende por completo de una violación del artículo 9.3 del Acuerdo Antidumping.

81. La obligación contenida en el artículo 9.2 dispone de manera expresa que los derechos deberán ser "*percibidos en la cuantía apropiada*", en tanto el artículo 9.3 dispone que estos "*no excederá del margen de dumping establecido de conformidad con el artículo* 2". Puede por lo tanto ocurrir que en algún caso hipotético, el derecho antidumping percibido lo fuera en una cuantía inapropiada, violando en consecuencia el artículo 9.2, pero sin sobrepasar el margen de dumping establecido de conformidad con el artículo 2, sin por lo tanto, violar el artículo 9.3.

82. El análisis que hace el Brasil y que lo lleva a concluir que toda violación del artículo 9.2 depende de que se incumpla con el límite establecido con el artículo 9.3, parte de su interpretación de que el margen a que hace referencia este último artículo, es el determinado en virtud del subliteral 2 del literal 4 del artículo 2, que establece el método que se utilizará **durante la fase de investigación** para determinar la existencia de los márgenes de dumping, concluyendo el Brasil en consecuencia que la referencia del artículo 9.2 a cuantía apropiada no sería otra que el margen de dumping determinado en esa etapa del procedimiento.

[50] Comunicación escrita de los Estados Unidos como Tercera Parte, párrafo 15.

[51] Segunda comunicación escrita del Brasil, sección VII - "*Claims related to the imposition and collection of antidumping duties as a result of the antidumping investigation*", párrafo 124, página 27.

83. La Argentina no concuerda con esta interpretación, y esto nos lleva directamente a la segunda parte -(b)- de nuestra argumentación. Es cierto que el artículo 2.4.2 contiene la única especificación detallada de como debe calcularse el margen de dumping. Pero no menos cierto es también que, el mismo artículo limita la aplicación de la disposición contenida a un período determinado, que es **durante la fase de investigación**.

84. Pareciera que el Brasil, al concentrarse exclusivamente en los artículos 9.2 y 9.3 y 2.4.2, olvidara otras disposiciones relevantes de la normativa antidumping que no sólo deben ser analizadas a fin de determinar la violación alegada por el Brasil, sino que además son las que realmente contienen las obligaciones que el Brasil alega que la Argentina habría incumplido.

85. Existe -a contrario de lo que sostiene el Brasil[52]- una diferencia entre el margen de dumping determinado durante la fase de investigación y el derecho antidumping finalmente establecido como consecuencia de la misma. Esta diferencia se aprecia de la lectura e interpretación del artículo que debe hacerse de manera completa y consistente con su contexto, siendo este último no sólo el Acuerdo Antidumping en su totalidad sino también el artículo VI del GATT 1994, del cual el Acuerdo Antidumping contiene las disposiciones detalladas relativas a su aplicación.

86. El artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping dispone que: "*A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que un producto es objeto de dumping, es decir que se introduce en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal, cuando su precio de exportación al exportarse de un país a otro sea menor que el precio comparable, en el curso de operaciones comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo en el país exportador*".

87. El artículo VI del GATT 1994, en el párrafo 1, define al dumping de manera similar a la del artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping. Asimismo, el párrafo VI.2, establece en su parte pertinente que "*... A los efectos de la aplicación de este artículo, se entiende por margen de dumping la diferencia de precio determinada de conformidad con las disposiciones del párrafo 1*".

88. Por su parte, el artículo 9.1 del Acuerdo Antidumping establece que: "*La decisión de establecer o no un derecho antidumping en los casos en que se han cumplido todos los requisitos para su establecimiento, y la decisión de fijar la cuantía del derecho antidumping en un nivel igual o inferior a la totalidad del margen de dumping, habrán de adoptarlas las autoridades del Miembro importador. Es deseable que el establecimiento del derecho sea facultativo en el territorio de todos los Miembros y que el derecho sea inferior al margen si ese derecho inferior basta para eliminar el daño a la rama de producción nacional*".

89. Como puede apreciarse, de la lectura de los artículos hasta aquí reproducidos surge una cuestión que resulta de gran importancia para evaluar las alegaciones que hace el Brasil respecto de la dependencia que existiría entre los artículos 9.2 y 9.3 del Acuerdo Antidumping. El margen de dumping determinado durante la etapa de la investigación, no tiene necesariamente que ser igual al derecho antidumping finalmente establecido. En la decisión de adoptar la imposición de derechos antidumping, la autoridad de aplicación no sólo debe tornar en cuenta la existencia fehacientemente demostrada de que la practica desleal ha tenido lugar, sino que además debe tomar en cuenta que el derecho impuesto como resultado de la investigación permita erradicar el daño atribuible al dumping que se haya causado a la rama de la producción. Si en la imposición de los derechos antidumping definitivos hubiera de considerarse solamente el margen de dumping determinado durante el curso de la investigación, el análisis del daño se tornaría irrelevante, careciendo en consecuencia de sustancia las disposiciones del artículo VI del GATT de 1994 y las propias del artículo 9.1 del Acuerdo Antidumping.

[52] *Idem.*, párrafo 127.

90. Por otra parte el Brasil alega en los párrafos 131 y siguientes de su segunda comunicación escrita, que tanto la Argentina como el Canadá incurrirían en un error al interpretar que el derecho antidumping percibido no tendría límites. Esto no es cierto. La Argentina reconoce que el límite efectivo para la aplicación de los derechos antidumping, es aquel establecido en las disposiciones del artículo 9.3, y nada en la comunicación escrita del Canadá pareciera permitir inferir la interpretación que hace el Brasil.

91. En lo que tanto la Argentina como el Canadá concuerdan, y el Brasil disiente, es en que nada en el Acuerdo Antidumping obliga a los Miembros a imponer derechos limitados al margen de dumping determinado en virtud del artículo 2.4.2, esto es durante la fase de investigación, y si al hacerlo, como ya hemos aclarado, la Autoridad de Aplicación debe analizar el artículo en su conjunto, a la luz de los objetivos contenidos en el artículo 9.1 del Acuerdo Antidumping y el artículo VI del GATT 1994.

92. Respecto de la hipótesis que utiliza el Brasil para refutar lo expresado por el Canadá de que cambios en las condiciones de mercado o mejoras en la productividad de los exportadores pueden dar como resultado una situación donde se reduzcan los precios en ambos mercados -interno del exportador y el del importador-, esto es cierto. Pero no menos cierto es que, tal hipótesis no deja de ser eso, una hipótesis, entre muchas otras susceptibles de ocurrir, que por otra parte no contesta ni da respuesta a la situación -también muy probable- que tanto el Canadá como la Argentina plantearan en la que, de aceptarse lo que el Brasil sostiene acerca de que los derechos antidumping están limitados al margen de dumping encontrado durante la etapa de la investigación, un exportador con gran capacidad para discriminar precios a nivel internacional, podría fácilmente tomar irrelevante el intento de otro Miembro de detener la practica desleal, y al mismo tiempo tomar inconsistente la medida impuesta para ello, con sólo profundizar su practica de dumping. La Argentina por lo tanto, no encuentra nada en el AD que de sustento a la posición del Brasil.

93. En definitiva, la situación que plantea el Brasil, podría ser fácilmente remediable a través de las propias disposiciones que el AD contiene para tratarlas. Si se diera un cambio de circunstancias, en sentido de que tanto los precios en el mercado del exportador como del importador se redujeran tal como el Brasil propone en su ejemplo, al artículo 11.2 provee el procedimiento por el cual tal situación podría ser subsanada. El artículo 9.3.2 por su parte, habilita a los exportadores a solicitar la devolución de todos los derechos abonados en exceso.

94. Por otra parte, el Brasil en su Replica sostiene en el párrafo 41, que los precios mínimos de exportación determinados en la Resolución 574/2000, no califican como derechos antidumping ya que no reflejan el valor normal y los precios de exportación provistos por los exportadores y examinados por la Autoridad de investigación.

95. La Argentina no entiende en que basa el Brasil una alegación tal. Por un lado, el Brasil mismo ha aportado como anexo a su Primera comunicación escrita[53], los distintos informes técnicos elaborados por los Organismos encargados de la investigación y que sirvieran como base a la Autoridad de Aplicación para determinar los derechos aplicables.

96. Por otra parte la Argentina además ha demostrado que, en línea con 1o dispuesto por los artículos VI.2 del GATT 1994 y el artículo 9.1 del AD, los precios mínimos fijados para cada uno de los exportadores para los que se fijó derechos antidumping individuales como para los que se

[53] Ver Prueba documental BRA-15 principalmente.

agruparon en la categoría "Resto", lo fueron en una cuantía que da como resultado que sean inferiores al margen de dumping determinado como resultado de la investigación.[54]

97. Lo que el Brasil pareciera nuevamente querer hacer, es inducir al Grupo Especial a determinar que el sistema que utiliza la Argentina -por montos variables de manera prospectiva- es inconsistente con las disposiciones del AD.

98. La Argentina por lo tanto, se ve obligada a reiterar que el AD no contiene disposiciones acerca de como deben fijar los Miembros sus derechos antidumping y que en la práctica, estos utilizan cualquiera de tres sistemas.[55] Mas aún, el artículo 9, cuyo título es "*Establecimiento y percepción de los derechos antidumping*", contiene disposiciones relativas a la forma en que podrían ser percibidos esos derechos (prospectiva o retrospectiva), y nada dice acerca del sistema que deben utilizar los Miembros a tal fin.

99. Lo que si dice el artículo 9 en su literal 1, es que: "*Es deseable que el establecimiento del derecho sea facultativo en el territorio de los Estados Miembros, y que ese derecho sea inferior al margen si ese derecho inferior basta para eliminar el daño a la rama de la producción nacional*".

100. A modo de síntesis y sobre la base de lo expuesto, la Argentina desea claramente señalar:

i) Que en tanto el artículo VI del GATT 1994 y el artículo 2 del AD definen qué es dumping, definen también a que se debe considerar margen de dumping, en tanto que el segundo no es mas que una forma de expresar al primero, excepto para aquellas disposiciones especificas que se aplican a etapas puntuales tal como la contenida en el artículo 2.4.2 del Acuerdo Antidumping.

ii) Que por 1o tanto, el límite impuesto por el artículo 9.3 del AD a la imposición de los derechos antidumping hace referencia al artículo 2 en su totalidad y no al 2.4.2 como pretende el Brasil.

iii) Que el derecho antidumping impuesto como consecuencia de una investigación realizada en los términos del AD no tiene que ser necesariamente igual al margen de dumping determinado durante la fase de investigación.

iv) Que la práctica de los Miembros de la OMC, a falta de disposiciones especificas en el Acuerdo Antidumping, ha consagrado la utilización de tres sistemas para la aplicación de derechos antidumping, siendo uno de ellos el sistema de montos variables que utiliza la Argentina.

101. En consecuencia, se solicita con todo respeto al Grupo Especial, que determine que la Argentina ha actuado de manera consistente con el Acuerdo Antidumping de la OMC al fijar y percibir los derechos impuestos en el presente caso y que desestime la solicitud de inconsistencia con los artículos 9.2 y 9.3 alegada por el Brasil.

IV. PETITORIO

103. Sobre la base de las argumentaciones desarrolladas en las secciones precedentes, la República Argentina solicita respetuosamente al Grupo Especial lo siguiente:

---

[54] Ver PCE de la Argentina, párrafo 316, e Intervención de la Argentina en la primera reunión del Grupo Especial con las Partes, párrafo 57.

[55] Ver PCE de la Argentina, párrafo 315, e Intervención de la Argentina en la primera reunión del Grupo Especial con las Partes, párrafo 54.

1) Que, conforme los argumentos desarrollados en la sección II y tal como se adelanto en el párrafo 26 de esta comunicación, no se pronuncie sobre las 41 alegaciones de inconsistencias con diversas disposiciones del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo Antidumping), presentadas por el Brasil.

104. Si el Grupo Especial decidiera no hacer lugar a la anterior petición de la República Argentina, tal como se indica en la sección II.26 de esta comunicación y a la luz de las argumentaciones desarrolladas en la sección III, respetuosamente se solicita:

2) Que se rechacen las reclamaciones del Brasil en el sentido que la Resolución 574/2000 del Ministerio de Economía de la República Argentina es inconsistente con:

- Los artículos 5.2,5.3,5.7 y 5.8 del Acuerdo Antidumping; El artículo 12.1 del Acuerdo Antidumping;

- Los artículos 6.1.1,6.1.2,6.1.3,6.2 y 6.8, así como con los párrafos 5,6, y 7 del Anexo II, y con los artículos 6.9, y 6.10 del Acuerdo Antidumping;

- Los artículos 2.4, 2.4.2, del Acuerdo Antidumping;

- Los artículos 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 del Acuerdo Antidumping; El artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping;

- Los artículos 9.2,9.3 del Acuerdo Antidumping;

Así como los distintos reclamos relacionados con el artículo 12.2.2.

105. Rechace la petición del Brasil de revocación inmediata de la Resolución 574/2000 que impuso los derechos antidumping definitivos.

ANEXO B-6

SEGUNDA REUNIÓN SUSTANTIVA CON LAS PARTES - PREGUNTAS

28 DE NOVIEMBRE DE 2002

Respuestas de la República Argentina

Nota: El Grupo Especial se ha remitido a los números de las alegaciones únicamente para facilitar la consulta.

Preguntas a la Argentina

Cuestiones preliminares

66. En cuanto al párrafo 13 de la Segunda comunicación de la Argentina, ¿cuál fue la "afirmación de hecho" (punto I) supuestamente formulada por el Brasil? Sírvanse explicar cómo se basó de buena fe la Argentina en esa supuesta afirmación (punto III).

Respuesta

En primer lugar, la República Argentina entiende que la conducta del Brasil de presentaciones sucesivas activando procedimientos de solución de controversias en ámbitos distintos, primero en el ámbito del MERCOSUR y en segundo término, en la OMC y aún más tomando en consideración los precedentes señalados en la primera comunicación escrita de la Argentina[1], es decir el recurso a la solución de controversias previsto en el Protocolo de Brasilia para resolver los conflictos surgidos con otros Estados Partes del MERCOSUR, y el acatamiento del contenido y alcance de los laudos arbitrales en todas las disputas, la Argentina considera que están presentes en esta presentación del Brasil los argumentos de hecho y que los mismos reúnen los requisitos de ser claros, no ambiguos, voluntarios, incondicionales y autorizados, elementos esenciales del *estoppel* en los términos de la definición indicada en el párrafo 13 de la Réplica de la Argentina.

En el párrafo 20 de su Réplica[2], la República Argentina puntualiza los elementos que en la actual presentación planteada por el Brasil en el ámbito de la OMC se encuentran presentes. Entre los mismos cabe mencionar el punto III, *in fine*, de dicho párrafo en el cual se expresa "En consecuencia la conducta anterior del Brasil en materia de aceptación de laudos, confirmada mediante la firma del Protocolo de Olivos, tornan inoponible a la Argentina el reclamo que el Brasil pretende ahora articular en base al ESD".

Aún más, las conductas del Brasil de firmar el Protocolo de Olivos en fecha 18 de febrero de 2002 -en el cual el Brasil acepta expresamente la cláusula de opción de foro-, y siete días después, es decir el 25 de febrero de 2002, solicitar el establecimiento del grupo especial en la actual controversia, evidencia, a juicio de la Argentina, que existe una contradicción en la conducta del Brasil en la cual la Argentina depositó una legítima confianza en tanto que ambos son Estados Parte del MERCOSUR y de hecho ahora sufre las consecuencias negativas del cambio de posición por parte

[1] Primera comunicación Escrita de la República Argentina, 29 de agosto de 2002, párrafos 18-22 y notas a pie correspondientes.

[2] Réplica de la República Argentina, 17 de octubre de 2002, párrafo 20.

de Brasil.[3] Este hecho ha sido señalado también en las presentaciones de las CE[4] y el Paraguay[5] en calidad de terceras partes.

67. En el párrafo 13 de su Segunda comunicación la Argentina afirma que el principio de *estoppel* es un principio general del derecho internacional. ¿Es el principio de *estoppel* una "norma[s] usual[es] de interpretación del derecho internacional público" en el sentido del párrafo 2 del artículo 3 del ESD? Sírvanse explicarlo. ¿Un principio general del derecho internacional es lo mismo que una norma de interpretación del derecho internacional? Sírvanse explicarlo.

Respuesta

Las normas de interpretación del derecho internacional público a las cuales hace referencia el párrafo 2 del artículo 3 del ESD remiten al artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

En el artículo 31 de la Convención de Viena aparecen enunciadas las reglas que deben seguirse para la interpretación. Ahora bien, las reglas de interpretación se aplican a la solución de conflictos teniendo en todos los casos a la vista por el órgano juzgador las fuentes del derecho.

Las fuentes a las cuales puede recurrirse para la interpretación están enunciadas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Allí están enunciados con carácter de fuente principal los tratados, la costumbre internacional y los principios generales del derecho internacional.

Por lo tanto, la República Argentina entiende que el principio del *estoppel* en cuanto principio general del derecho internacional constituye una fuente a la cual es legítimo recurrir por parte de todo tribunal internacional llamado a dirimir una controversia.

En la actual controversia, es en este sentido que la Argentina entiende que la argumentación del principio del *estoppel* debería ser tenido en cuenta por el Grupo Especial al desarrollar sus funciones conforme el ESD. Esto es, de conformidad con la obligación del párrafo 2 del artículo 3 del Entendimiento, en el sentido de aclarar las obligaciones de los acuerdos de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional público.

Adicionalmente, la República Argentina reitera lo señalado en su Segunda comunicación escrita[6] en el sentido de que, con anterioridad, otros Grupos Especiales han examinado el principio del *estoppel* en las controversias: "Comunidades Europeas - Amianto"[7] y "Guatemala - Cemento".[8]

---

[3] De hecho, la República Argentina ya ha aprobado el Protocolo de Olivos. El 9 de octubre de 2002 el Honorable Congreso Nacional aprobó el Protocolo de Olivos por Ley 25.663, que ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 2091/02 del 18 de octubre de 2002 y publicados en el Boletín Oficial de la República Argentina Nº 30008, el 21/10/2002.

[4] Comunicación de tercera Parte presentada por las Comunidades Europeas, 9 de septiembre de 2002, párrafo 17 y nota 17.

[5] Comunicación de tercera Parte presentada por Paraguay, 9 de septiembre de 2002, párrafo 8.

[6] Segunda comunicación escrita de la República Argentina, 17 de octubre de 2002, párrafos 17, 18 y 19.

[7] WT/DS135/R, "Comunidades Europeas - Medidas que afectan al amianto y a los productos que contienen amianto", informe adoptado el 5 de abril de 2001, párrafo 8.60

Alegación 1

68. En respuesta a la pregunta 6, la Argentina se remite a la publicación Aves & Ovos. En caso de que el solicitante presentara más extractos de esa publicación de los que figuran en Brasil - Prueba documental 1, sírvanse facilitar una copia de esos extractos adicionales. Sírvanse explicar con exactitud de qué manera la información procedente de la publicación Aves & Ovos, como la presentó el solicitante, justificaba la necesidad de un ajuste del 9,09 por ciento al valor normal. Además, ¿en qué se basó la autoridad investigadora para asignar el mismo valor a la cabeza y las patas que a las demás partes del pollo?

Respuesta

Se destaca que la publicación de la revista Aves & Ovos no suministra información referida al ajuste del 9,09 por ciento realizado. La mención de la publicación Aves & Ovos en la respuesta 6 de la República Argentina formulada por el Grupo Especial con posterioridad a la primera audiencia, se corresponde con la enumeración de la prueba acompañada por la peticionante en su solicitud. Con relación a la pregunta relativa a las bases sobre las cuales la Autoridad investigadora asignó el mismo valor a cabeza y patas respecto de otras partes, es necesario aclarar una vez más que no se consideró que las cabezas y las patas tuvieran el mismo valor que el resto de las partes del animal a los efectos de evaluar el ajuste. Muy por el contrario, el ajuste del 9,09 por ciento surgió de una evaluación del recupero específico de cabezas y patas.

Alegación 2

69. En cuanto a la respuesta de la Argentina a la pregunta 12, el Grupo Especial observa que el extracto del documento de JOX citado por la Argentina se incluye bajo el encabezamiento "Frango Vivo". ¿Existe una declaración similar para el pollo eviscerado? ¿Qué quiere decir la frase "lo que viene manteniendo el precio en terreno muy firme"?

Respuesta

No, la publicación de JOX indica específicamente referencias al pollo vivo. No obstante ello, la mención a lo expresado respecto a que "la producción del mercado paralelo del interior de San Pablo es nítidamente menor, lo que viene manteniendo el precio en terreno muy firme", se relaciona con el hecho de que el pollo vivo constituye el insumo fundamental y principal del producto objeto de investigación. Por lo tanto, es válida en esta etapa previa a la apertura de investigación el considerar que si el precio del insumo se mantiene sin alteraciones significativas se deduce que el precio del producto final -objeto de la investigación- no variaría sustancialmente.

En ese sentido, la expresión "lo que viene manteniendo el precio en terreno muy firme", significa que el precio permanecería sin alteraciones significativas, constituyendo por lo tanto un elemento adecuado en esta etapa previa a la investigación.

Alegación 3

70. ¿Cuándo recibió el Secretario el Acta Nº 405 de la CNCE (de fecha 7 de enero de 1998)? ¿Cuándo recibió el Secretario el informe del APCDS (también de fecha 7 de enero de 1998)?

---

[8] WT/DS156/R, "Guatemala - Medida antidumping definitiva aplicada al cemento Portland gris procedente de México", informe adoptado el 17 de noviembre de 2000, párrafo 8.23.

Respuesta

El Señor Secretario de Industria, Comercio y Minería recibió el Acta Nº 405 el día 9 de enero de 1998, recibiendo el informe de dumping de la DCD el día 27 de enero de 1998.

71. Con respecto a la primera oración del tercer párrafo de la respuesta de la Argentina a la pregunta 16, ¿qué significa la frase "de los requisitos de la solicitud con fecha 17 de febrero de 1998"? ¿Cuáles son exactamente los "requisitos de la solicitud"?

Respuesta

Los requisitos de la solicitud son los contenidos en el formulario 349 presentado en el Anexo ARG-XXXIX. El sentido de la frase señalada es que, con fecha 17 de febrero de 1998, los peticionantes presentaron información actualizada sobre la base de lo requerido en el formulario 349 citado. Esta información, en base a un dictamen legal del área pertinente del Ministerio, y conforme a la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 19549, fue girada a la CNCE con la indicación de ser analizada. El análisis de la misma determinó la emisión por parte de la CNCE del Acta 464 y del informe técnico respectivo.

Alegación 10

72. ¿Cómo y cuándo obtuvo la autoridad investigadora las direcciones de los exportadores brasileños con los que se estableció contacto en febrero de 1999? Si dichas direcciones se obtuvieron de un documento que conste en el expediente de la investigación, sírvanse facilitar una copia de ese documento.

Respuesta

La dirección de los productores-exportadores notificados en febrero de 1999 fue provista telefónicamente a través de importadores interesados en la investigación, que habiendo tomado conocimiento del inicio de investigación por el Boletín Oficial, tomaron contacto con la autoridad investigadora y proveyeron dichas direcciones.

73. Sírvanse formular observaciones sobre el párrafo 36 de la segunda declaración oral del Brasil.

Respuesta

En relación con el párrafo 36 del Brasil se remite a lo ya manifestado por la Argentina respecto del artículo 6.1.1 en el sentido que se ha dado amplia oportunidad de participación de las partes interesadas en la investigación, atendiendo los pedidos de prórroga presentados.

Alegación 11

74. En relación con la respuesta de la Argentina a la pregunta 29, ¿se envió toda la información incluida en la solicitud a la DCD y a la CNCE, o recibieron sólo aquellas partes de la solicitud que tratan del dumping y el daño respectivamente?

Respuesta

Ambos organismos recibieron la misma solicitud, con la misma información. La solicitante, al presentar una petición de inicio de investigación, debía completar el formulario aprobado por la Resolución de la ex Secretaría de Industria y Comercio Nº 349 del 12 de noviembre de 1991, ante la ex Subsecretaría de Comercio Exterior (ex SSCE). En concordancia con lo dispuesto por los

artículos 36 a 40 del Decreto Nº 2121/94, la solicitud se presentaba ante la ex SSCE, la cual remitía una copia completa de la misma a la CNCE a efectos que este último organismo determinase la existencia de daño.

En este sentido, la CNCE recibió, con fecha 9 de septiembre de 1997, copia de la solicitud de inicio de la investigación presentada por el CEPA ante la SSCE el día 2 de septiembre de 1997. Ambas presentaciones son idénticas y la obrante ante la CNCE se encuentra en el Cuerpo I del expediente CNCE Nº 43/1997 (fs. 2 a 284). En consecuencia, ambos organismos contaron con la solicitud de aplicación de medidas presentada por el CEPA en forma completa.

Alegación 15

75. En cuanto a la segunda oración de la respuesta de la Argentina a la pregunta 39, ¿cuál es exactamente el "procedimiento" (para la documentación justificante) seguido por la autoridad investigadora? ¿Cómo podía saber una parte interesada qué información justificante tenía que aportar? ¿Dónde se ha especificado exactamente el "procedimiento"? ¿Dónde se establece exactamente la petición de información justificante? Sírvanse facilitar copias de las fuentes pertinentes.

Respuesta

Respecto del procedimiento seguido por la Autoridad de Aplicación para conseguir información respaldatoria se señala que con el cuestionario se encuentra adjunto un instructivo en el cual se explica cómo debe completarse el cuestionario y qué información debe ser acompañada de documentación respaldatoria. Simultáneamente se indica que en caso de no ser posible acompañar la documentación respaldatoria, se deberá indicar la fuente de donde la obtuvo. Cuando se habla de documentación respaldatoria la Autoridad pretende que se respalden los dichos o argumentaciones de las partes interesadas. A modo de ejemplo, si pretende que la Autoridad de Aplicación efectúe un ajuste en concepto de flete sería deseable que la parte interesada adjuntara el contrato con la empresa de transporte o cualquier otra documentación que obre en poder de la empresa donde conste el valor o porcentaje de flete que debe descontarse.

El mencionado instructivo se encuentra en la primera parte del cuestionario a ser completado por el exportador.

Se acompaña como Anexo ARG-LXIII, cuestionario del exportador en blanco.

Alegación 20

76. Con respecto a la pregunta 43, sírvanse indicar con precisión qué datos sobre el valor normal se solicitaron a Catarinense. Sírvanse especificar el documento (o los documentos) en que se hizo la petición. Además, ¿para qué plazo se solicitaron a Catarinense los correspondientes datos sobre el valor normal?

Respuesta

La información solicitada a la empresa Catarinense fue la requerida a través de la Nota DCD Nº 273-001065/99 que ha sido acompañada por el Brasil bajo Prueba documental BRA-13 y allí puede observarse que la información requerida fue para el período 1998 - enero 1999. En ese sentido, se recuerda que con independencia de la documentación requerida y a través de la última nota remitida por la Autoridad de Aplicación -Nota DCD Nº 273-001321/99 presentada bajo Prueba documental BRA-27-, se les recordó que debían cumplir con los requisitos de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, particularmente en lo atinente a la acreditación de personería, requisito fundamental para que una parte pueda ser considerada en una investigación.

77. Con respecto a los datos de Catarinense sobre el valor normal, la Argentina afirma que esos datos se presentaron en forma agregada. Sin embargo, en la sección VII.3.2 de la determinación definitiva de la existencia de dumping al parecer se afirma que Catarinense había presentado información sobre las ventas efectuadas en el mercado interno correspondientes al año 1998 y enero de 1999 desagregadas por operación. Sírvanse explicarlo.

Respuesta

Tal como se señala en la sección VII.3.2 del Informe Final de Determinación del Margen de Dumping se mencionó sobre el anexo VIII: "Ventas efectuadas en el mercado interno correspondientes al año 1998 y enero de 1999, desagregadas por operación" a fojas 3023 del informe citado. Es decir que Catarinense sobre valor normal para el período solicitado presentó un listado de las operaciones de venta en el mercado interno, sin acompañar la documentación respaldatoria y sin el soporte magnético. Finalmente, se reitera que la firma Catarinense en ningún momento acreditó personería no obstante haber sido requerida mediante Nota DCD 273-001321/99.

En el Informe de Determinación Final del Margen de Dumping en la sección VIII.1.3.3.5 a fs. 3053/3054 se indica que los valores transcriptos en la fs. 3054 surgen de la información de la firma exportadora en forma agregada en los anexos V y VI del cuestionario del exportador y que la misma abarcaba un período mayor al requerido por la Autoridad de Aplicación. En ese sentido, del procesamiento de la información que aparece en los anexos V y VI surgen los valores detallados en el cuadro que consta a fs. 3054. Cabe señalar que como se indica al pie de los anexos V y VI, en el caso del año 1999 la información era acumulada hasta septiembre de ese año. Se acompaña a tal efecto, como Anexo ARG-LXIV, copia del anexo V y VI, tal como fuera presentado por la firma Catarinense.

78. Sírvanse formular observaciones sobre las dos primeras oraciones del párrafo 53 de la segunda declaración oral del Brasil.

Respuesta

En relación a las dos primeras oraciones del párrafo 53, no existe contradicción alguna tal como pretende señalar el Brasil ya que la Argentina dijo que la información de precio de exportación fue acompañada, pero como no pudo realizarse la determinación del valor normal por las circunstancias ya expuestas, los precios de exportación informados no pudieron ser considerados. En ese sentido, la Argentina tenía información oficial de los precios de exportación de ambas empresas que fueron los que se utilizaron en la determinación final.

Alegación 21

79. Del párrafo 185 de la Primera comunicación escrita de la Argentina parecería deducirse que las partes fueron informadas de los "hechos esenciales" mediante el Informe de Relevamiento de lo Actuado, de 4 de enero de 2002. ¿Podría confirmar la Argentina que éste es el único documento que consta en el expediente de la investigación mediante el cual la autoridad investigadora informó a las partes interesadas de los "hechos esenciales"?

Respuesta

Sí, el Informe de Relevamiento de lo Actuado es el documento por el cual la autoridad investigadora informó de los hechos esenciales a las partes interesadas. En ese sentido, la Argentina reafirma lo expuesto en el párrafo 185 de su Primera comunicación escrita.

80. El Grupo Especial hace notar la respuesta de la Argentina a la pregunta 47 a). Como pregunta complementaria el Grupo Especial agradecería que la Argentina respondiera a las siguientes preguntas:

1) En la investigación de que se trata, ¿cuáles fueron los "hechos esenciales" que la autoridad investigadora comunicó a las partes interesadas?

2) ¿Dónde puede encontrarse, si es que se puede, la información mencionada en los párrafos 340 a 350 de la Primera comunicación escrita del Brasil y en el párrafo 87 de la Segunda comunicación escrita del Brasil?

Al responder a estas preguntas se ruega a la Argentina que señale con precisión el párrafo o el número de página donde figura la información en el expediente de la investigación, en su caso, y que facilite una copia de los documentos pertinentes.

Respuesta

Los hechos esenciales son los que se reflejan a lo largo de todo el Informe de Relevamiento de lo Actuado de fecha 4 de enero de 2000 (fs. 2757).

No obstante, y a efectos de puntualizar en lo atinente al valor normal y el precio de exportación, a modo de ejemplo se cita el punto VIII.1 y VIII.1.3.3. del informe pertinente, en donde puede observarse, para el caso de Sadia, la metodología utilizada para el cálculo del valor normal. Idénticos comentarios corresponden a la firma AVIPAL en el punto VIII.1.3.3.2. Se detalla la información y metodología aplicada al cálculo del valor normal para la empresa AVIPAL S.A. Y de esta forma, también para la firma NICOLINI (fs. 2819 y 2820) y para la firma SEARA (fs. 2821).

Por consiguiente, lo expresado por el Brasil en los párrafos 340-350 de su Primera comunicación escrita no resulta ajustado a la realidad toda vez que se dio amplia oportunidad a las partes interesadas para que expusieran sus puntos de vista respecto a los hechos esenciales que la autoridad consideraría para el cálculo del valor normal y el precio de exportación.

Respecto de la copia del informe de hechos esenciales, ver Prueba documental BRA-28.

Alegación 23

81. En el párrafo 73 de su Segunda comunicación escrita la Argentina sugiere que el exportador tuvo amplia oportunidad de informar a la DCD de cualquier ajuste que hubiera que efectuar cuando envió las facturas requeridas por la DCD. ¿Por qué debería haber solicitado Sadia un ajuste por concepto de flete cuando envió sus facturas si ya había solicitado dicho ajuste en su respuesta al cuestionario?

Respuesta

La Argentina reafirma lo dicho en los párrafos 210 y 211 de su Primera presentación escrita. En ese sentido, se indica que SADIA contestó en el cuestionario el ítem referido a flete interno, pero en ningún momento presentó documentación respaldatoria de este ítem. Tampoco surge de las facturas presentadas el porcentaje y/o monto que correspondería a este ajuste.

En otras palabras, si bien en el anexo X SADIA informó un valor correspondiente a $EE.UU./t a descontar en concepto de flete y lo mismo hizo en el anexo VIII -ventas al mercado interno- cabe señalar que esos valores fueron presentados en forma anualizada, sin ningún tipo de documentación respaldatoria que permitiera a la Autoridad verificar que los valores allí consignados se correspondían con la realidad a fin de que la Autoridad procediera a efectuar tal ajuste.

En ese sentido, se acompaña nota fiscal de SADIA de la cual surge claramente que en el casillero correspondiente al valor del flete no aparece monto alguno. Y en el casillero que dice "frete por conta" aparece indicado "1" que se corresponde con "emitente".

La documentación respaldatoria a la que hacemos referencia en este caso hubiera sido, por ejemplo, un contrato de SADIA con una empresa transportista u otra documentación de la empresa de la que surgiera fehacientemente el importe del flete a descontar. En este sentido insistimos en que la única documentación fueron notas fiscales en las cuales no se evidenciaba el monto indicativo del pretendido ajuste.

Se acompaña como Anexo ARG-LXV, fotocopia de factura, fotocopia de los anexos VIII y X del cuestionario para el exportador.

82. La Argentina ha afirmado que no aceptó la solicitud de Sadia de ajuste por concepto de flete porque no justificó su solicitud con pruebas documentales. Sírvanse indicar exactamente (números de página, de párrafo y de línea) en qué parte de su determinación definitiva, o en cualquier otro documento preparado por la autoridad investigadora en el momento de formular su determinación, explicó la autoridad investigadora el motivo para rechazar la solicitud de Sadia. Si el Grupo Especial no tiene ya una copia del documento pertinente, sírvanse facilitarla.

Respuesta

La explicación pertinente se encuentra en el punto VIII.1.3.3.1. del Informe de Relevamiento de lo Actuado. Sobre el particular, en el mencionado informe la DCD detalló cual era la información que tomaría para la determinación del valor normal y de ella no surgía el ajuste por flete.

Alegación 22

83. Sírvanse formular observaciones sobre el párrafo 59 de la segunda declaración oral del Brasil.

Respuesta

En principio, respecto de lo manifestado por el Brasil de por qué no se procedió de la misma manera con CATARINENSE y con FRANGOSUL, cabe señalar que CATARINENSE nunca acreditó personería, es decir, no cumplió con un requisito esencial que debe cumplimentar toda parte interesada que desea participar en la investigación, de acuerdo a los requerimientos de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos -Ley Nº 19.549-, que resulta de aplicación supletoria en los procedimientos de investigación tal como surge del artículo 76 del Decreto Nº 2121/94.

Cabe señalar que esta Ley ha sido notificada ante el Comité Antidumping de la OMC oportunamente. Motivo por el cual en la última nota remitida a CATARINENSE, que figura en Prueba documental BRA-27, se le informó que debía cumplimentar los requisitos exigidos por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Sin embargo, la exportadora Catarinense no continuó efectuando ninguna presentación en el expediente ni, como ya mencionamos, acreditó personería.

Por otra parte, con relación a FRANGOSUL cabe destacar que a pesar de las sucesivas prórrogas concedidas y de las numerosas solicitudes de información realizadas por la Autoridad de Aplicación -tal como se aprecia en el cuadro resumen para la empresa en cuestión, que fuera suministrado a ese Grupo Especial acompañando las respuestas de la República Argentina a las preguntas efectuadas con posterioridad a la primera audiencia-, no se contó con la información vinculada a las operaciones de venta al mercado interno con las cuales la Autoridad hubiera necesitado contar a los fines de la determinación individual del margen de dumping.

En ese sentido, se recuerda, tal como surge del cuadro resumen del exportador FRANGOSUL, que por medio de la Nota DCD Nº 273-001181/99 del 12 de octubre de 1999 y Nota DCD Nº 273-001412/99 del 18 de noviembre de 1999, por última vez la Autoridad de Aplicación requirió que acompañaran los listados de ventas en el mercado interno. Para ello, en la última nota citada se le otorgó un plazo no mayor a cinco días. Este plazo fue concedido a efectos de que la Autoridad de Aplicación contara con el tiempo suficiente para analizar y procesar la información requerida.

Sin embargo, FRANGOSUL, vencido el plazo otorgado para la presentación de la información, presentó, únicamente en soporte magnético (disquete), el listado de notas fiscales. Asimismo, se señala que FRANGOSUL no acompañó el listado en forma impresa de acuerdo a lo establecido por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos que exige tal requisito. Esta Ley se aplica supletoriamente a los procedimientos por dumping de acuerdo a lo establecido por el artículo 76 del Decreto Nº 2121/94.

A mayor abundamiento se transcribe el artículo 7 y 15 del Decreto Nº 1759/72 reglamentario de la Ley citada.

ARTÍCULO 7. "La identificación con que se inicie un expediente será conservada a través de las actuaciones sucesivas cualesquiera fueren los organismos que intervengan en su trámite. Todas las unidades tienen la obligación de suministrar información de un expediente en base a su identificación inicial.

En la carátula deberá consignarse el órgano con responsabilidad primaria encargado del trámite, y el plazo para su resolución."

ARTÍCULO 15. "Los escritos serán redactados a máquina o manuscritos en tinta en forma legible, en idioma nacional ... Llevarán en la parte superior una suma o resumen del petitorio. Serán suscritos por los interesados, sus representantes legales o apoderados. En el encabezamiento de todo escrito, sin más excepción que el que iniciare una gestión, debe indicarse la identificación del expediente a que corresponda y en su caso, contendrá la indicación precisa de la representación que se ejerza ... ."

El procedimiento administrativo en la Argentina es escrito.

Una vez más la Argentina quiere llamar la atención del Grupo Especial sobre los numerosos requerimientos efectuados por la Autoridad de Aplicación a las empresas exportadoras sobre la documentación que debían presentar. En ese sentido, queda a disposición de ese Grupo Especial para acompañar toda la documentación que considere pertinente.

Alegación 24

84. Con respecto a la alegación 24, sírvanse indicar exactamente (números de página, de párrafo y de línea) dónde expuso la autoridad investigadora las razones para no haber efectuado los distintos ajustes a los datos de JOX sobre los precios internos, ya fuera en la determinación definitiva de la autoridad investigadora o en cualquier otro documento preparado por ella en el momento de formular su determinación. Si el Grupo Especial no tiene ya una copia del documento pertinente, sírvanse facilitarla.

Respuesta

A fojas 3040 del Informe de Determinación Final del apartado VIII.1.3. se aclaran las circunstancias del pedido de información efectuado por la autoridad de aplicación al presidente de la publicación JOX.

85. ¿Pidió la autoridad investigadora a JOX que presentara una traducción al español de su carta de 3 de agosto de 1999 mediante la cual había facilitado información en portugués? Si es así, sírvanse facilitar una copia del documento que contiene dicha petición.

Respuesta

No fue solicitada la traducción en el entendimiento de que las partes que intervienen en los procedimientos por dumping, a las cuales se aplica la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos en forma supletoria, conocen las exigencias que la misma establece.

86. Sírvanse formular observaciones sobre el párrafo 68 de la segunda declaración oral del Brasil.

Respuesta

Se comparten los términos del Brasil desde el punto de vista teórico en el sentido de que para realizar una comparación justa deben realizarse todos los ajustes que resulten procedentes tanto en el valor normal y precio de exportación.

Sin embargo, en el presente caso, respecto a la publicación de JOX, la información que hubiera permitido efectuar algunos de los ajustes que menciona el Brasil no cumplía con los requisitos de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19549, vinculados a que la documentación extranjera debe ser traducida al español por traductor matriculado, de conformidad con el artículo 28 del Decreto Nº 1759/72 reglamentario de la Ley citada.

Alegación 32

87. Sírvanse indicar exactamente (números de página, de párrafo y de línea) dónde explicó la autoridad investigadora los motivos por los que examinó los datos de 1999 únicamente para determinados factores de daño y no para otros, ya sea en la determinación definitiva de la autoridad investigadora o en cualquier otro documento preparado por ella en el momento de su determinación. Si el Grupo Especial no tiene ya una copia del documento pertinente, sírvanse facilitarla.

Respuesta

En el Acta Nº 576, de fecha 23 de diciembre de 1999, obrante en el Expediente CNCE Nº 43/1997 (fs. 7313), en su punto V ("Condición de la industria nacional"), segundo párrafo, líneas primera a sexta, se dijo claramente que:

"El período bajo análisis" corresponde al transcurrido entre enero de 1996 y diciembre de 1998. Para algunas variables como producción nacional, precios, importaciones, exportaciones nacionales y consumo aparente, se incluyen datos correspondientes al primer semestre de 1999. Se exponen los datos correspondientes al año 1995 a título de referencia. Las variaciones del primer semestre de 1999 se corresponden contra igual período del año anterior". (El subrayado es propio.)

No obstante ello, la Argentina reitera lo manifestado en sus dos presentaciones anteriores y a efectos de una mejor comprensión en el contexto total se reitera la réplica de la Argentina "En primer lugar, no resulta obligatorio el análisis de ningún indicador fuera del período establecido por las autoridades como período de investigación."

Conforme prácticas internacionales llevadas a cabo por algunos países, la Argentina consideró algunas variables de acceso público con la finalidad de ratificar las tendencias observadas

durante el período investigado. Pretender, como en este caso pareciera intenta el Brasil, una actualización constante durante la investigación de todos los indicadores, resultaría en una investigación sin final, lo cual por otra parte -se reitera- no es el objetivo del Acuerdo Antidumping, como tampoco la práctica de aquellos países que, como la Argentina, analizan ciertos indicadores pertinentes a título referencial.

Cabe señalar que la determinación de amenaza de daño se basó en el período enero de 1996 a diciembre de 1998. Los demás datos conforme se ha señalado en respuestas anteriores y en el Acta en cuestión fueron tomados a título referencial.

Alegación 38

88. Sírvanse explicar con precisión de qué manera el cuadro 16 del Acta Nº 576 (párrafo 292 de la Primera comunicación escrita de la Argentina) constituye una evaluación de los "factores que afecten a los precios internos" en el sentido del párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping. Sírvanse ofrecer una explicación más detallada que la que se expone en el párrafo 74 de la segunda declaración oral de la Argentina.

Respuesta

El Cuadro Nº 16, que pertenece al informe técnico GEGE/ITDF Nº 03/99 y forma parte integrante del Acta Nº 576, presenta el ingreso medio por ventas de un kilogramo de pollo eviscerado fresco o refrigerado y los precios relativos del producto comparable, respecto al conjunto de bienes industriales y de la carne vacuna, representados, respectivamente, por el índice de precios industrial mayorista de productos manufacturados y por el promedio simple de los índices de precios al consumidor para la carne vacuna fresca, cortes traseros y delanteros.

Al respecto, la comparación efectuada en relación con el Índice de Precios Industrial Mayorista de Productos Manufacturados responde a la necesidad de evaluar si el precio del producto en cuestión siguió la tendencia del resto de los productos manufacturados.

Por otra parte, en relación al segundo índice, la República Argentina ha sido tradicionalmente un consumidor de carnes rojas, por lo que se consideró pertinente utilizar este índice para analizar los efectos que sus variaciones podrían tener sobre la carne de pollo, a partir de un cierto grado de sustitución entre la carne vacuna y la carne aviar.

De esta manera, según surge de dicho cuadro en los dos precios relativos analizados se observa la misma tendencia que en los ingresos medios por ventas del producto en cuestión, aunque en el caso del precio relativo al promedio simple de la carne vacuna las variaciones anuales muestran una disminución de mayor intensidad en 1998 como consecuencia del incremento de los precios de la carne vacuna en ese año. En efecto, tal como se indica en la sección de mercado del informe técnico GEGE/ITDF Nº 03/99, punto VI.5. "Evolución reciente del mercado", fs. 7371, tercer párrafo "Durante 1998 se observó un incremento adicional en la demanda de pollo originado en el efecto sustitución que siguió a los fuertes incrementos observados en el precio de la carne vacuna, precio que alcanzó su pico a mediados del año 1998. Con la posterior caída de estas cotizaciones, no se observó una retracción en el consumo de pollo. Esta situación se debería a que la percepción del mercado es que el nivel de precios de los pollos es tan bajo que, incluso, estaría incidiendo en la disminución del precio de la carne vacuna."

En consecuencia, resulta claro que la disposición del artículo 3.4 ha sido considerada respecto de lo que dispone en el sentido de que: "El examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional de que se trate incluirá una evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes que influyan en el estado de esa rama de producción, incluidos … los factores que afecten a los precios internos … ."

89. En cuanto a la respuesta de la Argentina a la pregunta 59 relativa al párrafo 80 de la primera declaración oral del Brasil, sírvanse facilitar citas exactas (por ejemplo, números de página, de párrafo y de línea) de los distintos extractos del Acta Nº 576.

Respuesta

Respecto de las citas a las que hace referencia el párrafo 80:

- En cuanto a "Se realizó un ejercicio econométrico que muestra, para el período enero de 1995 - junio de 1999, que el precio del producto en el mercado interno es función del volumen de importaciones del mes anterior, del precio del producto importado y del precio de la carne vacuna. La inclusión del precio del maíz en el modelo mencionado no arrojó resultados satisfactorios, lo cual indica que la importante variabilidad del precio del pollo eviscerado entero no se condice con la evolución del precio del maíz. No obstante ambas variables presentan tendencias similares", la misma se encuentra en el punto VIII (CONDICIONES DE COMPETENCIA ENTRE EL PRODUCTO SIMILAR Y EL IMPORTADO), punto 1, fs. 7328 último párrafo y 7329, 1er párrafo.

- Respecto de "La recesión económica no afectó mayormente el consumo de pollos eviscerados enteros, ya que el mismo continúo aumentando (en 1998 aumentó 14 por ciento)", la misma se encuentra en el punto VIII (CONDICIONES DE COMPETENCIA ENTRE EL PRODUCTO SIMILAR Y EL IMPORTADO), punto 1, fs. 7329, 2º párrafo.

- En cuanto a "… respecto al precio del conjunto de bienes industriales y de la carne vacuna, representados, respectivamente, por el Índice de Precios Industrial Mayorista de Productos Manufacturados y por el promedio simple de los Índices de Precios al Consumidor para la carne vacuna fresca, cortes traseros y delanteros muestran la misma tendencia que la registrada en los ingresos por ventas descripta, aunque en el caso del segundo precio relativo, las variaciones anuales muestran una diminución de mayor intensidad en 1998, como consecuencia del incremento de los precios de la carne vacuna de ese año", la misma se encuentra en el punto V (CONDICIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL), fs. 7318, último párrafo.

Preguntas al Brasil

Alegación 22

90. En el párrafo 319 de la Primera comunicación escrita del Brasil se afirma que "Frangosul y Catarinense presentaron la información requerida sobre el valor normal y el precio de exportación, que fue descartada sin explicación por la DCD". ¿Estaría de acuerdo el Brasil en que, si los datos presentados por Frangosul y Catarinense hubieran sido descartados de conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo Antidumping, la autoridad investigadora no habría estado obligada a calcular un margen de dumping individual para Frangosul y Catarinense? Sírvanse explicarlo.

91. En el párrafo 324 de la Primera comunicación escrita del Brasil se afirma que "la DCD no dio ninguna explicación, ni en la determinación definitiva ni en ningún otro documento que conste en el expediente de la investigación, sobre las razones por las que no fue posible determinar en este caso un margen individual para Frangosul y Catarinense". ¿Estaría de acuerdo el Brasil en que, si la autoridad investigadora hubiera descartado los datos presentados por Frangosul y Catarinense de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones pertinentes

del Acuerdo Antidumping, no habría estado obligada a explicar en la determinación definitiva ni en ningún otro documento que conste en el expediente de la investigación por qué motivo no se había calculado un margen de dumping individual para esos exportadores?

Alegación 23

92. Sírvanse formular observaciones sobre el párrafo 210 de la Primera comunicación escrita de la Argentina.

Alegación 24

93. Sírvanse formular observaciones sobre los párrafos 77 a 79 de la Segunda comunicación de la Argentina.

Alegación 27

94. ¿Estima el Brasil que la autoridad investigadora habría infringido el párrafo 4.2 del artículo 2 si los exportadores hubieran acordado que la autoridad investigadora podía calcular el valor normal basándose en aquellas transacciones internas para las cuales se habían solicitado facturas?

Preguntas a las dos partes

Alegación 21

95. ¿Qué son "hechos esenciales considerados que sirvan de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas" en el sentido del párrafo 9 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping? Concretamente, abarcarían los "hechos esenciales" únicamente hechos o también argumentos que avalen una conclusión determinada?

Respuesta

Son los hechos sobre los cuales la Autoridad de Aplicación basa sus conclusiones.

96. En el párrafo 8.229 de su informe, el Grupo Especial que examinó el asunto *Guatemala - Cemento II* constató que:

> **"Una parte interesada no sabrá si un hecho particular es 'importante' o no, a menos que la autoridad investigadora lo haya identificado expresamente como uno de los 'hechos esenciales' que sirven de base para la decisión de la autoridad de imponer o no medidas definitivas."**
>
> **¿Estarían de acuerdo con la constatación anterior? Sírvanse explicarlo.**

Respuesta

La Argentina está de acuerdo con la posición del Grupo Especial en *Guatemala - Cemento II* porque todo aquello que se informa en el Informe de Relevamiento de lo Actuado conforma los hechos sobre los cuales la autoridad se basará para tomar su decisión, poniendo la Autoridad de Aplicación en conocimiento de las partes interesadas tal circunstancia.

Alegación 22

97. ¿Qué entienden las partes por las palabras "que corresponda a cada exportador o productor interesado del producto sujeto a investigación de que se tenga conocimiento" que figuran en la primera oración del párrafo 10 del artículo 6? A juicio de las partes, ¿exigiría la parte citada de la primera oración del párrafo 10 del artículo 6 el cálculo de un margen de dumping individual para cada exportador de que tenga conocimiento la autoridad investigadora? ¿Sucedería lo mismo cuando un exportador conocido no facilita la información pertinente solicitada por la autoridad investigadora? Sírvanse explicarlo.

Respuesta

Con relación a la pregunta 97 se indica que la determinación individual del margen de dumping por exportador requiere como condiciones que el exportador sea conocido y, además, que presente la documentación necesaria para posibilitar dicha determinación.

98. A juicio de las partes, ¿serían aplicables a los hechos de esta diferencia las constataciones que figuran en los párrafos 6.86 a 6.101 (ambos incluidos) del informe del Grupo Especial encargado del asunto *Argentina - Baldosas de cerámica*? Concretamente, ¿tendría pertinencia para la presente diferencia la siguiente constatación del Grupo Especial: "La base de la determinación del valor normal no guarda relación con la capacidad para calcular un margen de dumping individual correspondiente al productor cuyo valor normal esté en tela de juicio."? ¿La falta de información sobre el valor normal, el precio de exportación o el costo de producción permitiría automáticamente no calcular un margen de dumping individual de conformidad con el párrafo 10 del artículo 6? Sírvanse explicarlo, identificando y presentando apoyo fáctico pertinente al Grupo Especial.

Respuesta

No se aplica al presente caso dado que en las argumentaciones de ese caso la autoridad investigadora tuvo en cuenta circunstancias para el cálculo del margen de dumping que consistía en: "en los casos en que el número de exportadores, productores, importadores o tipos de productos sea tan grande que resulte imposible efectuar esa determinación ...". Es decir, las consideraciones que efectuó el Grupo Especial/panel tenían que ver con que la autoridad argentina había decidido determinar el margen de dumping sobre la base de "un número prudencial de partes interesadas... utilizando muestras que sean estadísticamente válidas sobre la base de la información de que dispongan en el momento de la selección, ...". En ese sentido, las mismas no resultan aplicables al presente caso.

ANEXO B-7

RESPUESTAS DE LA ARGENTINA A LAS PREGUNTAS DEL
BRASIL - SEGUNDA REUNIÓN

26 de noviembre de 2002

Preguntas del Brasil a la Argentina

El Brasil tiene entendido que inmediatamente después de que se iniciara la investigación la DCD envió cuestionarios a los exportadores brasileños Sadia, Avipal, Frangosul, Seara y Nicolini en los que se solicitaban datos sobre el precio de exportación y el valor normal correspondientes a los años 1996, 1997, 1998 y los meses de 1999 respecto a los cuales hubiera datos disponibles. El 15 de septiembre de 1999 la DCD envió las notificaciones de la investigación y los cuestionarios a los exportadores brasileños CCLP, Catarinense, Chapecó, Minuano, Perdigão, Comaves y Penabranca, solicitando datos sobre el dumping correspondientes al período comprendido entre 1998 y enero de 1999. Teniendo esto en cuenta, sírvanse indicar:

1. ¿Cuándo decidió la autoridad investigadora que el período de recopilación de datos relativos al dumping para Sadia, Avipal y Frangosul sería el período comprendido entre enero de 1998 y enero de 1999, y no los años 1996, 1997 y 1998?

2 ¿Cuándo notificó la autoridad investigadora a Sadia, Avipal y Frangosul que el período de recopilación de datos relativos al dumping sería el comprendido entre enero de 1998 y enero de 1999, y no los años 1996, 1997 y 1998?

Respuestas 1 y 2

El período de recolección de datos fue informado a los exportadores brasileños en la instancia de determinación preliminar de la investigación.

Como puede observarse, ya en los anexos del Informe de Determinación Preliminar la autoridad de aplicación había acotado el período investigado a enero de 1998-enero 1999.

Todas las empresas exportadoras claramente podían observar cuál era el período objeto de investigación que la autoridad estaba analizando. En el caso de AVIPAL, SADIA y FRANGOSUL, a través de los requerimientos de documentación efectuados por la DCD surgían indicaciones acerca de cuál sería el período objeto de investigación que se analizaría.

A mayor abundamiento se remite al Cuadro Resumen que se adjuntó como complemento a las respuestas de Argentina al Cuestionario remitido por el Grupo Especial finalizada la Primera Reunión del grupo Especial con las Partes.

3. ¿Qué criterio utilizó la autoridad investigadora para elegir el período comprendido entre enero de 1998 y enero de 1999 como el período de recopilación de datos a efectos del dumping, y no el período comprendido entre 1996 y 1998 que se indica en los cuestionarios sobre el dumping enviados a Sadia, Avipal y Frangosul?

Respuesta 3

La autoridad para determinar el período objeto de investigación se basó en que la información a presentar correspondiera a un período lo más próximo posible a la apertura de investigación.

ANEXO B-8

OBSERVACIONES DE LA ARGENTINA SOBRE LAS
RESPUESTAS DEL BRASIL A LAS PREGUNTAS
DEL GRUPO ESPECIAL - SEGUNDA REUNIÓN

(28 de noviembre de 2002)

Preguntas al Brasil

Reclamación 22

90. En el párrafo 319 de la primera comunicación escrita del Brasil se afirma que Frangosul y Catarinense "facilitaron la información solicitada sobre el valor normal y el precio de exportación, que fue descartada sin ninguna explicación por la DCD". ¿Estaría de acuerdo el Brasil en que, si los datos presentados por Frangosul y Catarinense hubieran sido descartados de conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo Antidumping, la autoridad investigadora no habría estado obligada a calcular un margen de dumping individual para Frangosul y Catarinense? Sírvanse explicarlo.

En relación con la respuesta de Brasil a la pregunta 90, Argentina desea señalar una vez más que dicho país incurre un error de apreciación cuando argumenta que FRANGOSUL y CATARINENSE presentaron toda la información, por lo que entiende que la Autoridad de Aplicación debió efectuar una determinación individual del margen de dumping. En ese sentido, se remite a lo manifestado por la Argentina en la respuesta 83 del reclamo 22.

Argentina desea resaltar que no surge de la respuesta de Brasil la contestación a la pregunta efectuada por el Panel. No obstante ello, Brasil intenta justificar que la Autoridad de Aplicación debería haber efectuado una determinación individual del margen de dumping intentando hacer una analogía con el tratamiento dispensado por la Autoridad de Aplicación a la información presentada por las firmas SADIA y AVIPAL.

En ese sentido, desde el punto de vista de Argentina, esta comparación no resulta procedente toda vez que la información aportada por SADIA y AVIPAL reunía los requisitos necesarios para que la misma fuera considerada en oportunidad de la determinación final. Cabe señalar que ni SADIA ni AVIPAL en su alegato objetaron la metodología del cálculo del margen de dumping particularmente en lo que respecta al precio de exportación, por lo cual no se entiende por qué Brasil a esta altura insiste en manifestar su no entendimiento y desacuerdo respecto del tratamiento otorgado para SADIA y AVIPAL respecto del precio de exportación.

Es decir, cuando las partes tuvieron oportunidad de presentar sus observaciones respecto de la metodología utilizada por Argentina respecto de la determinación del precio de exportación nada dijeron SADIA y AVIPAL al respecto.

Finalmente, se advierte que Brasil no responde la pregunta del Panel por lo que siguiendo el razonamiento expuesto, Brasil debería explicar, tal como se lo solicita el Panel en la pregunta 90, la metodología que pretende debería utilizarse en la determinación individual del margen de dumping cuando la desconsideración de la información obedece a que la misma no fue presentada de conformidad a los requerimientos establecidos en el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, su Decreto Reglamentario Nº 2121/94, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario Nº 1759/72, habiéndose notificado todos ellos al Comité de Prácticas Antidumping de la OMC.

91. En el párrafo 324 de la primera comunicación escrita del Brasil se afirma que "la DCD no facilitó ninguna explicación, en la determinación definitiva o en cualquier otro documento incorporado al expediente de la investigación, de las razones por las que, en el presente caso, no era posible determinar el margen correspondiente a Frangosul y a Catarinense". ¿Estaría de acuerdo el Brasil en que, si la autoridad investigadora hubiera descartado los datos presentados por Frangosul y Catarinense de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones pertinentes del Acuerdo Antidumping, no habría estado obligada a explicar en la determinación definitiva ni en ningún otro documento que conste en el expediente de la investigación por qué motivo no se había calculado un margen de dumping individual para esos exportadores?

No parecería tener sentido que la Autoridad de Aplicación informe que no va a hacer una determinación individual del margen de dumping si ya se explicó que la información de valor normal y precio de exportación no iba a tomarse en cuenta en virtud de las falencias que la documentación presentaba. En ese sentido, era obvio que no se procedería a realizar una determinación individual del margen de dumping con lo cual, las argumentaciones de Brasil al respecto no tienen razón de ser.

Reclamación 23

92. Sírvanse formular observaciones sobre el párrafo 210 de la primera comunicación escrita de la Argentina.

Sobre el particular, se llama la atención del Panel a efectos que tenga a bien considerar la respuesta de Argentina a la pregunta 81, reclamo 23.

Reclamación 24

93. Sírvanse formular observaciones sobre los párrafos 77 a 79 de la segunda comunicación de la Argentina.

Al respecto, se solicita al Panel tenga a bien considerar la respuesta de la Argentina a la pregunta 86 del reclamo 24.

Reclamación 27

94. ¿Estima el Brasil que la autoridad investigadora habría infringido el párrafo 4.2 del artículo 2 si los exportadores hubieran acordado que la autoridad investigadora podía calcular el valor normal basándose en aquellas transacciones internas para las cuales se habían solicitado facturas?

Brasil incurre en un error cuando sostiene que la determinación de valor normal podría haberse visto distorsionada debido a la utilización de una muestra estadísticamente válida de facturas presentadas por las exportadoras que respaldaban las operaciones de venta en el mercado interno a fin de la determinación del valor normal.

En segunda instancia sorprende una vez más la posición de Brasil en esta instancia cuando en el transcurso de la investigación este argumento no fue presentado por dicho Gobierno. Tampoco lo presentó el Gobierno de Brasil en su alegato final. Por su parte, los exportadores tampoco alegaron que la metodología del cálculo de valor normal, sobre la base de la información presentada por las exportadoras sería, según la apreciación actual del Gobierno de Brasil, desacertada, o que la misma no estaría de conformidad con el párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.

Reclamación 21

95. ¿Qué son "hechos esenciales considerados que sirvan de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas" en el sentido del párrafo 9 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping? Concretamente, ¿abarcarían los "hechos esenciales" únicamente hechos o también argumentos que avalen una conclusión determinada?

Sobre el particular Argentina reitera lo manifestado oportunamente en esta pregunta.

96. En el párrafo 9.229 de su informe, el Grupo Especial que examinó el asunto *Guatemala - Cemento II* constató que:

> **"Una parte interesada no sabrá si un hecho particular es 'importante' o no, a menos que la autoridad investigadora lo haya identificado expresamente como uno de los 'hechos esenciales' que sirven de base para la decisión de la autoridad de imponer o no medidas definitivas."**
>
> **¿Estarían de acuerdo con la constatación anterior? Sírvanse explicarlo.**

Respecto de las alegaciones de Brasil, en relación a la información presentada por Frangosul y Catarinense en la investigación, nuevamente equivoca su razonamiento en ese sentido. Al respecto, cabe señalar que en el Informe de Relevamiento de lo Actuado, se expresaron las falencias que presentaba la información acompañada por Frangosul y Catarinense. Asimismo, en ningún momento se cercenó el derecho de defensa de las partes toda vez que la firma Frangosul efectuó observaciones al contenido de dicho informe en su alegato final.

Finalmente, corresponde señalar que el párrafo del *Guatemala - Cemento II* que indica Brasil resulta redundante ya que la Argentina cumplió en poner a disposición de todas las partes interesadas el informe de hechos esenciales correspondiente.

Reclamación 22

97. ¿Qué entienden las partes por las palabras "que corresponda a cada exportador o productor interesado del producto sujeto a investigación de que se tenga conocimiento" que figuran en la primera oración del párrafo 10 del artículo 6? A juicio de las partes, ¿exigiría la parte citada de la primera oración del párrafo 10 del artículo 6 el cálculo de un margen de dumping individual para cada exportador de que tenga conocimiento la autoridad investigadora? ¿Sucedería lo mismo cuando un exportador conocido no facilita la información pertinente solicitada por la autoridad investigadora? Sírvanse explicarlo.

Resultaría importante que Brasil explique la forma en que realiza las determinaciones individuales del margen de dumping cuando la información presentada, como en el caso de Frangosul y Catarinense, no está de conformidad con las exigencias del Acuerdo Antidumping, o como en el caso particular de Catarinense cuya presentación contaba con el agravante de nunca haber acreditado personería en el expediente tal como lo exige la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, aplicable en forma supletoria a los procedimientos de investigaciones por dumping y que fuera notificada oportunamente ante la OMC.

98. A juicio de las partes, ¿serían aplicables a los hechos de esta diferencia las constataciones que figuran en los párrafos 6.86 a 6.101 (ambos incluidos) del informe del Grupo Especial encargado del asunto *Argentina - Baldosas de cerámica*? Concretamente, ¿tendría pertinencia para la presente diferencia la siguiente constatación del Grupo Especial: "La base de la determinación del valor normal no guarda relación con la capacidad para calcular un

margen de dumping individual correspondiente al productor cuyo valor normal esté en tela de juicio."? ¿La falta de información sobre el valor normal, el precio de exportación o el costo de producción permitiría automáticamente no calcular un margen de dumping individual de conformidad con el párrafo 10 del artículo 6? Sírvanse explicarlo, identificando y presentando apoyo fáctico pertinente al Grupo Especial.

Actualmente Brasil menciona cuestiones que a lo largo de la investigación no fueron planteadas. Además insiste continuamente en manifestar su punto de vista respecto de la información presentada por Frangosul y Catarinense. En ese sentido, confunden al Panel con consideraciones que no resultan procedentes ya que no se corresponden con las preguntas del Panel. Además, Argentina demostró ampliamente y en reiteradas oportunidades cuál es la calidad y qué falencias padecía la información presentada por estas dos exportadoras, durante la investigación y a lo largo del presente procedimiento.

Finalmente, nuevamente se reitera la necesidad de que Brasil explique cómo se realizaría la determinación individual del margen de dumping cuando la información no está de conformidad con el Acuerdo Antidumping.

La respuesta de Brasil no aplica al párrafo citado dado que el análisis realizado por dicho Panel está referido a la muestra y la información presentada en dicha muestra por parte de los exportadores.

Finalmente, resulta sorprendente que a partir de las numerosas explicaciones que Argentina dio a lo largo de todas sus respuestas, Brasil aún no comprenda la situación planteada, mucho más cuando tales circunstancias no fueron advertidas por Brasil en el transcurso de la investigación.

ANEXO B-9

OBSERVACIONES DE LA ARGENTINA SOBRE LA SEGUNDA DECLARACIÓN ORAL DEL BRASIL

(26 de noviembre de 2002)

I. INTRODUCCION

1. La República Argentina agradece al Grupo Especial la posibilidad de efectuar comentarios a la luz de la intervención oral del Brasil en la segunda reunión del Grupo Especial con las Partes.

2. La República Argentina realizará -en forma sintética- algunos comentarios acerca de la intervención oral del Brasil en la segunda reunión con el Grupo Especial.

II. ARGUMENTOS PRELIMINARES

3. En primer lugar, la República Argentina desea realizar algunas precisiones acerca de los argumentos expresados por el Brasil en la Sección "*Ruling by the Mercosur Ad Hoc Arbitral Tribuna*l"

4. Asimismo, la Argentina realizará aclaraciones respecto de los conceptos vertidos por el Brasil acerca de la actual controversia planteada ante la OMC y que, como ya han reconocido ambas Partes es "similar"[1] respecto de la anteriormente planteada en el ámbito del MERCOSUR.

5. El propio Brasil reconoce que el objeto de su reclamo es la supuesta inconsistencia de la medida de la Argentina con el Acuerdo Antidumping de la OMC.[2] Sin embargo omite señalar que, con anterioridad, en su presentación ante el Tribunal Tribunal Ad Hoc del MERCOSUR, incluyó en el marco normativo del MERCOSUR, la referencia al Acuerdo Antidumping de la OMC.[3]

6. Como ha sido señalado por la República Argentina[4], el Tribunal Ad Hoc constituido para entender y solucionar la controversia planteada en el ámbito del MERCOSUR, en el laudo arbitral indica que el Acuerdo Antidumping de la OMC proporciona una referencia "(...) a través del artículo 19 del Protocolo de Brasilia como principio de derecho internacional en la materia (...), en este caso para ilustrar sobre el sentido y fin de los procedimientos antidumping".[5]

---

[1] Intervención oral del Brasil en la segunda reunión con el Grupo Especial, 26 de noviembre de 2002, párrafo 4.

[2] Intervención oral del Brasil en la segunda reunión con el Grupo Especial, 26 de noviembre de 2002, párrafo 6.

[3] "*Laudo sobre pollos*" - Laudo del Tribunal Arbitral Ad Hoc del MERCOSUR constituido para decidir sobre Controversia entre la República Federativa de Brasil y la República Argentina sobre "Aplicación de Medidas Antidumping contra la exportación de pollos enteros, provenientes del Brasil, (Resolución 574/2000) del Ministerio de Economía de la República Argentina, de 21 de mayo de 2001, párrafo 30.

[4] Réplica de la República Argentina, 17 de octubre de 2002, párrafo 3.

[5] "Laudo sobre pollos", párrafo 159 *in fine*.

7. La República Argentina rechaza los argumentos del Brasil[6] en el sentido de que "*We have shown that the disputes are not the same*" y reitera[7] que la controversia se refiere a la misma medida y que la fundamentación jurídica alegada por el Brasil en ambos ámbitos es la misma.

8. La República Argentina señala que la lectura del laudo arbitral -en forma completa- permite aclarar el alcance de los párrafos del laudo citados por Brasil.[8] A juicio de la Argentina deben ser leídos en el contexto del texto íntegro del laudo y en especial, en el punto II-F-3-c) titulado "Conclusiones sobre el modo como ha sido llevado el procedimiento antidumping."

9. Asimismo la República Argentina rechaza el argumento del Brasil[9] respecto del principio del *estoppel* y ratifica que la conducta del Brasil al plantear sucesivamente el mismo reclamo en ámbitos distintos -primero, en ámbito del MERCOSUR y ante el resultado adverso, el recurso a la OMC-, imputando infracciones a las mismas normas del Acuerdo Antidumping de la OMC en ambos foros, vulnera el principio de buena fe conforme al cual deben cumplirse los tratados y configura que la conducta del Brasil genere una situación de *estoppel*.

10. La República Argentina rechaza los argumentos del Brasil[10] y ratifica que el proceso sustanciado en ámbito del MERCOSUR y el laudo arbitral tienen relevancia dado que el marco normativo del MERCOSUR -del cual forman parte el Protocolo de Brasilia y el laudo emitido por el Tribunal Ad Hoc- tienen carácter de norma pertinente aplicable al caso, en términos del artículo 3.2 del ESD y del artículo 31.3.c) de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.

---

[6] Intervención oral del Brasil en la segunda reunión con el Grupo Especial, 26 de noviembre de 2002, párrafos 7 y 12.

[7] Intervención oral de la Argentina en la primera reunión con el Grupo Especial, 25 de septiembre de 2002, párrafo 8.

[8] Intervención oral del Brasil en la segunda reunión con el Grupo Especial, 26 de noviembre de 2002, párrafo 8.

[9] Intervención oral del Brasil en la segunda reunión con el Grupo Especial, 26 de noviembre de 2002, párrafo 12.

[10] Intervención oral del Brasil en la segunda reunión con el Grupo Especial, 26 de noviembre de 2002, párrafos 14, 15 y 16.

ANEXO C

Comunicaciones en calidad de tercero

Índice		Página
Anexo C-1	Comunicación de tercero presentada por el Canadá	C-2
Anexo C-2	Comunicación de tercero presentada por las Comunidades Europeas	C-5
Anexo C-3	Comunicación de tercera parte presentada por Guatemala	C-18
Anexo C-4	Comunicación de tercera parte presentada por Paraguay	C-22
Anexo C-5	Comunicación de tercero presentada por los Estados Unidos	C-24
Anexo C-6	Presentación de Paraguay	C-39
Anexo C-7	Intervención de Chile	C-32
Anexo C-8	Declaración oral de los Estados Unidos en la reunión de los terceros con el Grupo Especial	C-33
Anexo C-9	Comunicación oral del Canadá en calidad de tercero	C-35
Anexo C-10	Declaración oral de las Comunidades Europeas en calidad de tercero	C-36
Anexo C-11	Respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas del Grupo Especial	C-39
Anexo C-12	Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas del Grupo Especial a los terceros	C-41

ANEXO C-1

COMUNICACIÓN DE TERCERO PRESENTADA POR EL CANADÁ

(5 de septiembre de 2002)

I. INTRODUCCIÓN

1. En una carta de fecha 24 de abril de 2002 dirigida al Excmo. Sr. Carlos Pérez del Castillo, Presidente del Órgano de Solución de Diferencias, el Canadá manifestaba su deseo de participar como tercero en el asunto *Argentina - Derechos antidumping definitivos sobre los pollos procedentes del Brasil* (WT/DS241). El Canadá presenta esta comunicación de conformidad con el párrafo 2 del artículo 10 del *Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias* (ESD). En este momento, las observaciones del Canadá se ceñirán a la interpretación del párrafo 3 del artículo 9 del *Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994* (Acuerdo Antidumping). No obstante, el Canadá puede presentar comunicaciones adicionales sobre esta y otras cuestiones jurídicas en la reunión sustantiva del Grupo Especial con los terceros.

II. ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

A. ARGUMENTOS DEL BRASIL

2. En sus reclamaciones 28 y 29, expuestas y desarrolladas en su Primera comunicación escrita, el Brasil aduce que el establecimiento por la Argentina de un "derecho antidumping variable" infringe los párrafos 2 y 3 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping.

3. Según el Brasil, el derecho variable en litigio es un derecho antidumping equivalente a la "diferencia absoluta entre el precio FOB facturado en un envío y un denominado 'valor mínimo de exportación' designado, también FOB [...]". Debido a que la cuantía del derecho es variable, el resultado puede ser una imposición sobre cada envío de derechos que "pueden exceder del margen de dumping establecido en la determinación definitiva". En su Primera comunicación escrita, el Brasil no realiza un análisis jurídico suficiente de las disposiciones pertinentes del Acuerdo Antidumping. Se limita a afirmar que los derechos antidumping no se perciben "en la cuantía apropiada" como exige el párrafo 2 del artículo 9 e infringen además el párrafo 3 de ese mismo artículo porque exceden del margen de dumping "establecido en la determinación definitiva".

B. COMUNICACIÓN DEL CANADÁ

1. Ámbito de la presente comunicación

4. El Canadá está interesado en garantizar que el Grupo Especial llegue a una correcta interpretación jurídica de los párrafos 2 y 3 del artículo 9 porque la consecuencia de la aceptación por el Grupo Especial de las alegaciones del Brasil sería un grave debilitamiento de los derechos de los Miembros de la OMC en virtud del Acuerdo Antidumping.

5. El Canadá no se pronuncia acerca de la aplicación de las disposiciones en litigio a las circunstancias concretas del presente caso.

2. Cuantía apropiada: párrafo 2 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping

6. El Brasil aduce que con respecto a la cuantía de los derechos antidumping, los Miembros de la OMC están sujetos a *dos* obligaciones: la impuesta por el párrafo 2 del artículo 9, que exige la

percepción "en la cuantía apropiada" y la establecida en el párrafo 3 del artículo 9 que limita la "cuantía" del derecho antidumping al "margen de dumping establecido de conformidad con el artículo 2".

7. El Brasil no explica cuál sería una cuantía "apropiada" a los efectos del párrafo 2 del artículo 9, pero el contexto del artículo 9 en su conjunto es una prueba concluyente de que el carácter apropiado de la cuantía a que se refiere el segundo párrafo de dicho artículo ha de determinarse de conformidad con los criterios establecidos en el tercero. Es lisa y llanamente inconcebible que pueda considerarse que una "cuantía" a la que se haya llegado siguiendo las instrucciones detalladas del párrafo 3 del artículo 9 (en conexión con el artículo 2) no es "apropiada" en el sentido del párrafo 2 de dicho artículo. En consecuencia, salvo que el Brasil pueda demostrar lo contrario, el Grupo Especial debe partir en su análisis del hecho de que una cuantía admisible con arreglo al párrafo 3 del artículo 9 es "apropiada" en el sentido del párrafo 2 de dicho artículo.

3. Margen de dumping: párrafo 3 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping

8. El párrafo 3 del artículo 9 declara que la "cuantía del derecho antidumping" no debe exceder del "margen de dumping establecido de conformidad con el artículo 2". Basándose en el párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping, el Brasil aduce que "el margen de dumping establecido de conformidad con el artículo 2 del Acuerdo Antidumping es el establecido *durante la etapa de investigación*" (sin cursivas en el original). Así pues, el Brasil parece sostener que, aun en el caso de que los exportadores brasileños exporten pollos a precios de los que se derive un margen de dumping *de mayor magnitud* que durante la etapa de investigación la Argentina sólo puede imponer derechos antidumping si su cuantía no excede del margen de dumping inicial.

9. El párrafo 3 del artículo 9 no contiene una prescripción de esa naturaleza. De hecho, la propia situación fáctica expuesta por el Brasil en su comunicación pone de relieve la falta de lógica de la interpretación propuesta por ese país.

10. Al determinar el "margen de dumping" a los efectos del párrafo 3 del artículo 9, el Grupo Especial debe examinar el artículo 2 en su integridad. Con arreglo a ese artículo, en el curso de las operaciones comerciales normales, el margen de dumping es simplemente la diferencia entre el precio de exportación y el "precio comparable [...] en el país exportador", como se expone en el párrafo 1 del artículo 2. Los precios han de ser *comparables* en el sentido del párrafo 4 del artículo 2; la comparación ha de hacerse en el mismo nivel comercial y *en fechas lo más próximas posible*. No hay en el artículo 2 ninguna disposición que limite el margen de dumping a una cuantía invariable constatada durante el período de investigación. En realidad, esa interpretación parece estar en contradicción directa con la exigencia de una comparación equitativa del párrafo 4 del artículo 2.

11. El Brasil cita el párrafo 4.2 del artículo 2 en apoyo de su posición de que el "margen de dumping" está fijado en el tiempo. No obstante, ese párrafo se refiere al supuesto de que sea necesario establecer *durante la etapa de investigación* un margen medio de dumping ponderado. En ninguna disposición se vincula el "margen de dumping" al constatado en esa etapa. El párrafo 4.2 del artículo 2 no parece directamente pertinente al caso que examinamos.

12. Por último, la interpretación del Brasil está en contradicción esencial con el objeto y fin del artículo VI del GATT de 1994 y del Acuerdo Antidumping.

13. En el párrafo 1 del artículo VI se declara que:

> Las partes contratantes reconocen que el dumping, que permite la introducción de los productos de un país en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal, *es condenable* cuando causa o amenaza causar un daño grave [...] (sin cursivas en el original).

14. El objeto y fin del Acuerdo Antidumping, como se desprende del párrafo 1 del artículo VI y de los propios términos del Acuerdo Antidumping, consiste en establecer un mecanismo para hacer frente a situaciones comerciales no equitativas en las que los productos se venden a precios inferiores a su "valor normal" en el mercado de exportación. Ese objetivo puede lograrse mediante la imposición de derechos antidumping en cuantía equivalente a la diferencia entre ambos precios (margen de dumping), o mediante compromisos en materia de precios. La interpretación del Brasil, de aceptarse, tendría la consecuencia perversa de que un exportador podría socavar los derechos antidumping legítimamente establecidos por un país importador haciendo dumping con márgenes aún *mayores* que los constatados durante el período de investigación. No hay en el Acuerdo Antidumping ninguna disposición que impida a un Miembro establecer derechos antidumping en una cuantía equivalente al margen real de dumping, para evitar precisamente que se produzca esa consecuencia.

15. El "margen de dumping" a que se refiere el párrafo 3 del artículo 9 es la diferencia de precios indicada en el artículo 2, y en este caso, en el párrafo 1 del artículo 2. Por definición ese margen varía en función de la estrategia de precios de un exportador cuyo dumping se ha constatado. Un precio de exportación igual o superior al valor normal no da lugar a un derecho antidumping. Al mismo tiempo, un precio de exportación inferior al valor normal dará lugar a un derecho en una cuantía equivalente a la diferencia entre el valor normal y el precio de exportación de los productos de que se trate (es decir, el margen real de dumping). Aunque los Miembros, por sus propias razones, puedan optar por aplicar un derecho cuyo tipo equivalga al margen de dumping constatado en la investigación inicial, no hay ninguna disposición en el párrafo 3 del artículo 9 que les obligue a hacerlo.

III. CONCLUSIÓN

16. La interpretación de los párrafos 2 y 3 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping que hace el Brasil es una interpretación viciada y debe rechazarse porque:

- la "cuantía apropiada" a que se refiere el párrafo 2 del artículo 9 es la cuantía constatada con arreglo al párrafo 3 del artículo 9, y el párrafo 2 de ese artículo no impone a los Miembros una obligación adicional en relación con su cálculo;

- el "margen de dumping" del párrafo 3 del artículo 9, interpretado en su contexto, no se reduce al margen constatado durante el período de investigación; y

- la interpretación del Brasil vicia gravemente el derecho de los Miembros a lograr que las medidas antidumping contrarresten el margen real de dumping.

17. Uno de los elementos necesarios para la imposición de medidas antidumping es la formulación de una determinación de la existencia de dumping de conformidad con el artículo 2. No obstante, el margen de dumping constatado en el curso de la investigación inicial no limita la cuantía de los derechos antidumping que puedan imponerse cuando se produzcan futuras importaciones. Cuando esas importaciones futuras sean objeto de dumping con un margen mayor que el que se determinó que existía en el momento de la determinación definitiva, el Miembro importador puede imponer medidas antidumping en una cuantía equivalente a ese margen.

18. El Canadá hace hincapié en que no se pronuncia acerca de la aplicación de las disposiciones del Acuerdo Antidumping a las circunstancias concretas del presente caso. El Canadá podría formular observaciones adicionales sobre este y otros aspectos de la presente diferencia en la reunión sustantiva del Grupo Especial con los terceros.

ANEXO C-2

COMUNICACIÓN DE TERCERO PRESENTADA POR
LAS COMUNIDADES EUROPEAS

(9 de septiembre de 2002)

I. INTRODUCCIÓN

1. Las Comunidades Europeas ("CE") intervienen en la presente diferencia debido a su interés sistémico en la interpretación correcta del *Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 ("Acuerdo Antidumping").*

2. Muchas de las reclamaciones presentadas por el Brasil plantean cuestiones fácticas sobre las que las CE no están en condiciones de formular observaciones. En consecuencia, en la presente comunicación, las CE se limitarán a exponer sus opiniones con respecto a varias cuestiones de interpretación jurídica a las que atribuyen especial importancia. De forma más concreta, las CE sostendrán en la presente comunicación que:

- en la medida en que se plantea esta cuestión en conexión con la reclamación 21, el Grupo Especial debería confirmar la interpretación que dio al párrafo 9 del artículo 6 el Grupo Especial en el asunto *Guatemala - Cemento II* en el sentido de que no basta simplemente permitir el acceso al expediente para cumplir la obligación de información impuesta por esa disposición;

- el párrafo 4 del artículo 2 no se refiere a la cuestión planteada por el Brasil en su reclamación 24;

- en contra de lo que pretende el Brasil en sus reclamaciones 28 y 29, el establecimiento de derechos variables en una cuantía equivalente a la diferencia entre el valor normal establecido en el curso de la investigación y los precios de exportación de los envíos realizados después del establecimiento de los derechos no es incompatible con los párrafos 2 y 3 del artículo 9;

- en contra de lo que pretende el Brasil en sus reclamaciones 32, 33, 34, 35 y 36, puede interpretarse que la expresión "importaciones objeto de dumping" del artículo 3 se refiere a todas las importaciones procedentes del país en cuestión; y

- en contra de lo que sostiene el Brasil en su reclamación 41, la expresión "proporción importante" del párrafo 1 del artículo 4 no significa el 50 por ciento al menos de la producción nacional, sino una proporción importante de ella, que puede ser inferior al 50 por ciento.

3. Antes de ocuparse de las cuestiones indicadas, las CE formularán observaciones sobre la objeción preliminar planteada por la Argentina sobre la base de la existencia de un laudo dictado por un Tribunal Arbitral Ad Hoc establecido de conformidad con el Acuerdo del MERCOSUR en relación con la misma medida.

II. OBJECIÓN PRELIMINAR

A. PERTINENCIA DEL LAUDO DEL TRIBUNAL ARBITRAL AD HOC DEL MERCOSUR CON RESPECTO A LA MISMA MEDIDA

4. La medida antidumping en litigio en la presente diferencia ha sido ya objeto de otra controversia ante un Tribunal Arbitral Ad Hoc establecido a petición del Brasil de conformidad con el artículo 7 del *Protocolo de Brasilia*[1] del *Tratado de Asunción* por el que se constituye el MERCOSUR[2], el cual dictó el 21 de mayo de 2001 un laudo arbitral en el que rechazaba la reclamación del Brasil.[3]

5. La Argentina, refiriéndose a la existencia del laudo arbitral mencionado, ha solicitado al Grupo Especial que desestime la reclamación del Brasil. No obstante, los motivos en que se basa esa petición no son demasiado claros. En síntesis, la Argentina parece alegar lo siguiente:

- la diferencia ha sido previamente "debatida y resuelta".[4] Esa alegación indica que la Argentina considera que el laudo arbitral produce efectos de *res iudicata* entre las partes. No obstante, la Argentina no invoca expresamente ese principio;

- el laudo arbitral forma parte del "marco normativo"[5] pertinente y debe ser tenido en cuenta[6] por el Grupo Especial de conformidad con la última parte de la segunda frase del párrafo 2 del artículo 3 del *ESD* (que declara que el mecanismo de solución de diferencias sirve para "aclarar las disposiciones vigentes de [los acuerdos abarcados] de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional público")[7];

- al plantear la presente diferencia, el Brasil ha incurrido en un ejercicio abusivo de los derechos que le corresponden en virtud del *Acuerdo sobre la OMC*[8];

- dada la anterior decisión del Brasil de someter la misma diferencia a un Tribunal Arbitral Ad Hoc del MERCOSUR, así como su práctica anterior de recurrir exclusivamente al mecanismo de solución de diferencias del MERCOSUR, el Brasil

---

[1] Protocolo de Brasilia para la solución de controversias de 17 de diciembre de 1991 ("Protocolo de Brasilia").

[2] Tratado para la Constitución de un Mercado Común entre la República de la Argentina, la República Federativa del Brasil, la República de Paraguay y la República Oriental del Uruguay de 26 de marzo de 1991 ("Tratado del MERCOSUR").

[3] Laudo del Tribunal Arbitral Ad Hoc del MERCOSUR constituido para decidir sobre la Controversia entre la República Federativa del Brasil y la República Argentina sobre la "Aplicación de Medidas Antidumping contra la exportación de pollos enteros provenientes del Brasil (Res. 574/2000) del Ministerio de Economía de la República Argentina" de 31 de mayo de 2001.

[4] Comunicación de la Argentina, párrafos 23 y 17.

[5] Comunicación de la Argentina, párrafo 22. Véase también el párrafo 18.

[6] *Ibid.*

[7] *Ibid.*, párrafo 18.

[8] *Ibid.*, párrafos 17 y 23.

> no puede, en virtud del principio del *estoppel*, someter este asunto a un grupo especial de la OMC.[9]

a) Res iudicata

6. La aplicabilidad del principio de *res iudicata* a las diferencias planteadas en el marco del *Acuerdo sobre la OMC* ha sido examinada por el Grupo Especial que se ocupó del asunto *India - Automóviles*[10], el cual, no obstante, no consideró necesario pronunciarse sobre la cuestión. De forma análoga, el presente Grupo Especial no necesita ocuparse de la cuestión porque es evidente que, en todo caso, no concurren los requisitos necesarios para que haya *res iudicata*. Como señaló el Grupo Especial que se ocupó del asunto *India - Automóviles*,

> para que el principio de *res iudicata* sea de algún modo aplicable en la solución de diferencias en la OMC debe haber, como mínimo, una identidad fundamental entre el asunto anteriormente resuelto y el presentado al siguiente grupo especial. Esto exige que haya identidad tanto entre las medidas como entre las alegaciones relativas a ellas.[11]

7. La medida sometida a este Grupo Especial es la misma medida objeto de la controversia sometida al Tribunal Arbitral Ad Hoc del MERCOSUR, pero las alegaciones son diferentes porque tienen un fundamento jurídico distinto. Las alegaciones planteadas por el Brasil ante este Grupo Especial se basan en el *Acuerdo Antidumping*. En cambio, las alegaciones objeto de la resolución del Tribunal Arbitral Ad Hoc del MERCOSUR se basaban en el ordenamiento jurídico del MERCOSUR.

8. De hecho, la competencia del mecanismo de solución de controversias establecido por el *Protocolo de Brasilia* se limita a las controversias relativas a la aplicación e interpretación de las normas del MERCOSUR. El artículo 1 del *Protocolo de Brasilia* establece a este respecto lo siguiente:

> Las controversias que surjan entre los Estados Partes sobre la interpretación, aplicación o incumplimiento de las disposiciones contenidas en el Tratado de Asunción, de los acuerdos celebrados en el marco del mismo, así como de las Decisiones del Consejo del Mercado Común y de las Resoluciones del Grupo del Mercado Común, serán sometidas a los procedimientos de solución establecidos en el presente Protocolo.

9. El Brasil sostuvo ante el Tribunal Arbitral Ad Hoc que puesto que todos los Estados partes en el MERCOSUR eran partes en el *Acuerdo sobre la OMC*, el *Acuerdo Antidumping* formaba parte de la legislación pertinente del MERCOSUR.[12] No obstante, el Tribunal Arbitral Ad Hoc rechazó esta pretensión y se abstuvo de pronunciarse sobre la compatibilidad de la medida en litigio con el *Acuerdo Antidumping*.[13]

---

[9] *Ibid.*, párrafos 22 y 24.

[10] Informe del Grupo Especial, *India - Medidas que afectan al sector del automóvil*, WT/DS146/R, WT/DS175/R ("*India - Automóviles*").

[11] *Ibid.*, párrafo 7.66.

[12] Laudo arbitral, párrafo 30.

[13] *Ibid.*, párrafos 127-130.

b) Párrafo 2 del artículo 3 del ESD

10. La pertinencia del párrafo 2 del artículo 3 del *ESD* a la petición de la Argentina resulta difícil de entender. El texto del párrafo 2 del artículo 3 en el que se basa este país trata exclusivamente de la interpretación del *Acuerdo sobre la OMC*, y no de las fuentes del derecho de la OMC. Sin embargo, lo que la Argentina parece sostener no es que el laudo del Tribunal Arbitral Ad Hoc sea un elemento pertinente a efectos de la interpretación que haga este Grupo Especial del *Acuerdo Antidumping*, sino que la existencia de ese laudo impediría que este Grupo Especial hiciera esa interpretación.

11. En todo caso, es difícil comprender cómo la interpretación de las disposiciones del ordenamiento jurídico del MERCOSUR hecha por el Tribunal Arbitral Ad Hoc podría ser pertinente, de conformidad con las normas establecidas en los artículos 31 y 32 de la *Convención de Viena*, a la interpretación de las disposiciones del *Acuerdo Antidumping* en litigio en la presente diferencia.

c) Ejercicio abusivo de los derechos y estoppel

12. Aunque la Argentina ha expuesto separadamente esos dos argumentos, ambos plantean esencialmente las mismas cuestiones. Por ello, las CE los analizará conjuntamente.

13. Como ha recordado la Argentina, el párrafo 10 del artículo 3 del *ESD* declara que

> si surge una diferencia, todos los Miembros entablarán este procedimiento de buena fe y esforzándose por resolverla [...]

14. En *Estados Unidos - EVE*, el Órgano de Apelación se basó en el párrafo 10 del artículo 3 para llegar a la conclusión de que los Estados Unidos no podían plantear en la etapa de apelación una defensa a la que no habían recurrido oportunamente en el curso del procedimiento del Grupo Especial.[14] Este caso pone de manifiesto que el párrafo 10 del artículo 3 del *ESD* no es una mera exhortación. Los Miembros están positivamente obligados a ejercitar sus derechos de procedimiento en el marco del *ESD* de buena fe y si no lo hacen esos derechos pueden decaer.

15. Las CE no consideran necesario pronunciarse sobre la cuestión de si un Miembro ejercitaría abusivamente su derecho a recurrir a un grupo especial de conformidad con el *ESD* y, por ende, actuaría de forma incompatible con el párrafo 10 del artículo 3, si solicitara el establecimiento de un grupo especial violando el principio de congruencia con los propios actos (*estoppel*).[15] En realidad, este Grupo Especial no necesita pronunciarse sobre esta cuestión porque, en cualquier caso, el comportamiento del Brasil no es contrario a ese principio.

16. Como señaló el Grupo Especial en *CE - Banano I*, la preclusión sólo puede "resultar del consentimiento expreso, o en casos excepcionales, implícito de [las partes reclamantes]".[16] Ese mismo Grupo Especial señaló especialmente que,

---

[14] Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Trato fiscal aplicado a las "empresas de ventas en el extranjero"*, WT/DS108/AB/R, párrafo 166.

[15] El Grupo Especial que se ocupó del asunto *India - Automóviles* (en la nota 364) sugería la posibilidad de que la preclusión impidiera a un Miembro solicitar el establecimiento de un grupo especial con respecto a un asunto que hubiera sido objeto de una solución mutuamente convenida.

[16] Informe del Grupo Especial sobre los *Regímenes de importación del banano de algunos miembros de la CEE*, DS32/R ("*CEE (Estados miembros) - Banano I*") (no adoptado), párrafo 361. Véase también el informe del Grupo Especial sobre *Guatemala - Medida antidumping definitiva aplicada al cemento Portland gris procedente de México*, WT/DS156/R, nota 791, ("es evidente que no cabe considerar que todo silencio implique un consentimiento").

> Por tanto, no puede darse por supuesto razonablemente que la decisión de una parte contratante de no invocar un derecho frente a otra parte contratante en un momento determinado sea una decisión de liberar a esa otra parte contratante de las obligaciones que le corresponden en virtud del Acuerdo General.[17]

17. Los hechos alegados por la Argentina no bastan para llegar a la conclusión de que el Brasil ha "consentido", expresa o implícitamente, en no plantear la presente diferencia ante la OMC. No hay en el *Protocolo de Brasilia* ninguna disposición que limite de algún modo el derecho de las partes a solicitar el establecimiento de un grupo especial de conformidad con el *Acuerdo sobre la OMC* con respecto a una medida que haya sido ya objeto de una controversia en el marco del Protocolo.[18] En consecuencia, el mero hecho de que el Brasil solicitara anteriormente el establecimiento de un Tribunal Arbitral Ad Hoc de conformidad con el *Protocolo de Brasilia* no equivale a una renuncia a ejercitar una acción de solución de diferencias de conformidad con el *Acuerdo sobre la OMC*.

18. De forma análoga, no cabe interpretar el mero hecho de que el Brasil no considerara necesario ejercitar una acción en el ámbito de la solución de diferencias de conformidad con el *Acuerdo sobre la OMC* con posterioridad a los laudos arbitrales dictados en varios de los demás casos citados por la Argentina como una renuncia tácita del Brasil al derecho que le confiere el *Acuerdo sobre la OMC* a ejercitar tal acción en el presente caso.

III. RECLAMACIONES

A. RECLAMACIÓN 21: PÁRRAFO 9 DEL ARTÍCULO 6

19. El Brasil alega que el informe publicado por la DCD antes de la determinación definitiva (el denominado "*Relevamiento de lo Actuado con Anterioridad al Cierre de la Etapa probatoria*") no facilitó suficiente información con respecto a determinados hechos que el Brasil considera hechos esenciales que sirvieron de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas.[19] El Brasil alega que, al no facilitar esa información a los exportadores, la Argentina infringió el párrafo 9 del artículo 6.

---

[17] Informe del Grupo Especial, *CEE (Estados miembros) - Banano I*, párrafo 362.

[18] A diferencia del más reciente *Protocolo de Olivos sobre la Solución de Controversias*, que en el párrafo 2 de su artículo 1 establece lo siguiente:

> Las controversias comprendidas en el ámbito de aplicación del presente Protocolo que puedan también ser sometidas al sistema de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio o de otros esquemas preferenciales de comercio que sean parte individualmente de los Estados Parte del MERCOSUR, podrán someterse a uno u otro foro a elección de la parte demandante. Sin perjuicio de ello, las partes en la controversia podrán, de común acuerdo, convenir el foro.
>
> Una vez iniciado un procedimiento de solución de controversias de acuerdo al párrafo anterior, ninguna de las partes podrá recurrir a los mecanismos establecidos en los otros foros respecto del mismo objeto. [...]

El Protocolo de Olivos se firmó el 18 de febrero de 2002 y no ha entrado aún en vigor. Puede plantearse la cuestión de si la solicitud del establecimiento de un grupo especial presentada por el Brasil el 25 de febrero de 2002, es decir después de la firma del Protocolo de Olivos, es compatible con la obligación que impone al Brasil el artículo 18 de la Convención de Viena de no frustrar el objeto y el fin de un tratado antes de su entrada en vigor. No obstante, del artículo 50 del Protocolo de Olivos parece desprenderse que el Protocolo no se aplica a controversias ya resueltas de conformidad con el Protocolo de Brasilia.

[19] Comunicación del Brasil, párrafo 342.

20. Las CE no desean expresar ninguna opinión con respecto a las cuestiones, en gran medida de carácter fáctico, de si la Argentina facilitó o no la información en cuestión y de si la información omitida, en su caso, se refería a "hechos esenciales" en el sentido del párrafo 9 del artículo 6.

21. No obstante, las CE desearían reafirmar su posición, sobradamente conocida, con respecto al alcance de la obligación de información impuesta por el párrafo 9 del artículo 6. El Brasil se ha basado[20] en el informe del Grupo Especial en *Argentina - Baldosas de cerámica*.[21] Las CE consideran que la interpretación que se hace en ese informe del párrafo 9 del artículo 6 no es correcta, en la medida en que el Grupo Especial constató que las prescripciones impuestas por esa disposición en relación con la revelación de hechos podía cumplirse

> incluyendo en el expediente documentos -tales como informes sobre las verificaciones, una determinación preliminar o la correspondencia intercambiada entre las autoridades investigadoras y los diferentes exportadores- en los que efectivamente se revelen a las partes interesadas los hechos esenciales considerados que las autoridades prevén serán aquellos que constituirán la base para decidir si han de aplicarse medidas definitivas.[22]

22. Las CE coinciden con el Grupo Especial que se ocupó del asunto *Argentina - Baldosas de cerámica* en que el párrafo 9 del artículo 6 "no prescribe la manera en que la autoridad ha de cumplir esa obligación de informar".[23] Así, por ejemplo, las autoridades pueden cumplirla enviando a los exportadores un documento de información, celebrando una audiencia informativa, o incorporando al expediente un documento informativo.

23. No obstante, las CE consideran que el párrafo 9 del artículo 6 exige que, con independencia de la forma en que se revele la información, las autoridades tomen medidas activas para identificar e indicar a los exportadores los "hechos esenciales" pertinentes. En consecuencia, el mero hecho de dar acceso al expediente no basta para cumplir las prescripciones del párrafo 9 del artículo 6, a no ser que el expediente contenga un documento informativo elaborado específicamente por las autoridades en el que se identifiquen claramente los "hechos esenciales".

24. Por las razones expuestas, las CE consideran que se formula una interpretación más correcta del párrafo 9 del artículo 6 en el informe del Grupo Especial sobre *Guatemala - Cemento II*.[24] En particular, las CE coinciden con las siguientes opiniones expuestas por el Grupo Especial que entendió en ese asunto e instan al presente Grupo Especial a hacerlas suyas:

> Pasamos ahora a examinar el argumento de Guatemala de que el Ministerio reveló los "hechos esenciales" al poner a disposición de las partes interesadas copia del expediente. Hacemos notar que es probable que el expediente de la autoridad investigadora tenga cantidades enormes de información, parte de la cual tal vez no pueda servir de base para la decisión de la autoridad investigadora de aplicar o no

---

[20] Comunicación del Brasil, párrafos 346 y 347.

[21] Informe del Grupo Especial, *Argentina - Medidas antidumping definitivas aplicadas a las importaciones de baldosas de cerámica para el suelo procedentes de Italia*, WT/DS189/R ("*Argentina - Baldosas de cerámica*").

[22] *Ibid.*, párrafo 6.125.

[23] *Ibid.*

[24] Informe del Grupo Especial, *Guatemala - Medida antidumping definitiva aplicada al cemento Portland gris procedente de México*, WT/DS156/R, párrafos 8.229 y 8.230.

> medidas definitivas. Por ejemplo, el expediente puede contener información presentada por una parte interesada, información que, una vez verificada, haya resultado ser inexacta. Si bien esa información seguirá formando parte del expediente, no servirá de base para la decisión de la autoridad investigadora de aplicar o no medidas definitivas. Sin embargo, el problema que se planteará a una parte interesada que tenga acceso al expediente es que no sabrá si determinadas informaciones incluidas en el expediente han servido de base para la formulación de la determinación definitiva por la autoridad investigadora. Una de las finalidades del párrafo 9 del artículo 6 es resolver este problema a las partes interesadas. Esto ha sido reconocido por Guatemala, que ha afirmado que el objeto y fin del párrafo 9 del artículo 6 es permitir que los exportadores tengan una oportunidad equitativa de formular observaciones sobre las cuestiones importantes de una investigación una vez que el expediente esté cerrado y no se puedan incluir en él nuevos hechos. Una parte interesada no sabrá si un hecho particular es "importante" o no, a menos que la autoridad investigadora lo haya identificado expresamente como uno de los "hechos esenciales" que sirven de base para la decisión de la autoridad de imponer o no medidas definitivas.
>
> Además, si la divulgación de los "hechos esenciales" de conformidad con el párrafo 9 del artículo 6 pudiera consistir únicamente en facilitar acceso a toda la información del expediente, en la práctica habría poca o ninguna diferencia entre los párrafos 9 y 4 del artículo 6. Guatemala alega efectivamente que se atuvo en lo dispuesto en el párrafo 9 del artículo 6 al cumplir lo dispuesto en el párrafo 4 de ese artículo, es decir, al dar "a su debido tiempo a todas las partes interesadas la oportunidad de examinar toda la información pertinente para la presentación de sus argumentos [...] y que [las] autoridades utilicen [...]". No aceptamos una interpretación del párrafo 9 del artículo 6 que de hecho reduzca sus prescripciones sustantivas a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 6. A nuestro juicio, una autoridad investigadora debe hacer más que dar simplemente "a su debido tiempo a todas las partes interesadas la oportunidad de examinar toda la información pertinente para la presentación de sus argumentos [...] y que [las] autoridades utilicen [...]", con el fin de informar "a todas las partes interesadas de los hechos esenciales considerados que sirvan de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas". A la luz de estas consideraciones, no estimamos que el Ministerio pudiera cumplir el requisito de informar "a todas las partes interesadas de los hechos esenciales considerados que sirvan de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas" al ofrecer simplemente proporcionar a las partes interesadas copia de toda la información contenida en el expediente.

25. Las CE señalan que en su primera comunicación, la Argentina parece aducir que informó de los "hechos esenciales" al dar traslado a los exportadores del antes mencionado *"Relevamiento de lo Actuado con Anterioridad al Cierre de la Etapa probatoria"*.[25] Así pues, en este caso, a diferencia de lo ocurrido en *Argentina - Baldosas de cerámica*, la Argentina no parece adoptar la posición de que la simple concesión de acceso al expediente puede bastar para cumplir el párrafo 9 del artículo 6. En caso de que se confirme lo anterior, el Grupo Especial no necesitaría abordar la cuestión que se analiza en los párrafos anteriores. Así pues, las observaciones formuladas *supra* se presentan para el caso de que, en comunicaciones posteriores, la Argentina expusiera la opinión de que, al examinar la reclamación del Brasil, el Grupo Especial puede tener en cuenta no sólo el "*Relevamiento de lo Actuado con Anterioridad al Cierre de la Etapa probatoria*" sino también cualesquiera otros hechos "revelados" en otros documentos incorporados al expediente.

[25] Comunicación de la Argentina, párrafo 185.

B. RECLAMACIÓN 26: PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO 2

26. El Brasil alega que la DCD no estableció el período de recopilación de datos a efectos de la investigación del dumping hasta nueve meses después de que se iniciara la investigación.[26] El Brasil aduce que, al obrar así, la Argentina actuó de forma incompatible con el párrafo 4 del artículo 2 que dispone que las autoridades "indicarán a las partes afectadas qué información se necesita para garantizar una comparación equitativa y no les impondrán una carga probatoria que no sea razonable".

27. Las CE opinan que el párrafo 4 del artículo 2 no aborda la cuestión planteada por el Brasil. Como ha recordado recientemente en su informe el Grupo Especial que se ocupó del asunto *Egipto - Barras de refuerzo de acero*[27], el párrafo 4 del artículo 2 se refiere exclusivamente a la comparación entre el valor normal y el precio de exportación y no se aplica a la determinación del valor normal y del precio de exportación.

28. Las CE se permiten indicar que las disposiciones pertinentes para examinar la cuestión planteada por el Brasil son el párrafo 1 del artículo 6, según el cual

> se dará a todas las partes interesadas en una investigación antidumping aviso de la información que exijan las autoridades [...]

y el primer párrafo del Anexo II, conforme al cual

> lo antes posible de haber iniciado la investigación, la autoridad investigadora deberá especificar en detalle la información requerida de cualquier parte directamente interesada y l amanera en que ésta deba estructurarla en su respuesta.

C. RECLAMACIONES 28 Y 29: PÁRRAFOS 2 Y 3 DEL ARTÍCULO 9

29. Las autoridades argentinas han impuesto derechos antidumping en forma de derechos específicos en cuantía equivalente a la diferencia entre el precio FOB facturado en un envío y un "valor mínimo de exportación" designado, también FOB.

30. El Brasil alega que los derechos impuestos por la Argentina son incompatibles con los párrafos 2 y 3 del artículo 9 del *Acuerdo Antidumping* porque pueden llevar a la percepción de derechos en una cuantía que exceda del margen de dumping (un porcentaje del precio de exportación) establecido para el período de investigación.

31. Las CE consideran que la reclamación del Brasil relativa al párrafo 3 del artículo 9 (y, en consecuencia, también su reclamación relativa al párrafo 2 del artículo 9, que parece depender totalmente de la existencia de una infracción del párrafo 3 del artículo 9) se basa en una interpretación inadecuada de esa disposición. El párrafo 3 del artículo 9 establece que "la cuantía del derecho antidumping no excederá del margen de dumping establecido de conformidad con el artículo 2" y no que ese margen deba ser el margen establecido para el período de investigación, lo que tampoco exige el artículo 2.

32. El Brasil sugiere que el "margen de dumping" a que se hace referencia en el párrafo 3 del artículo 9 es el margen establecido para el período de investigación porque el párrafo 4.2 del artículo 2 es aplicable a efectos de determinar "la existencia de márgenes de dumping durante la etapa de investigación". Se trata de un evidente *non-sequitur*. Del hecho de que el párrafo 4.2 del artículo 2

[26] Comunicación del Brasil, párrafo 407.

[27] Informe del Grupo Especial, *Egipto - Medidas antidumping definitivas aplicadas a las barras de refuerzo de acero procedentes de Turquía*, WT/DS211/R, párrafo 7.335 (aún no adoptado).

se aplique a la fase de investigación no se deduce que la aplicación de todas las demás disposiciones del artículo 2 se restrinja también a esa etapa. El párrafo 4.2 del artículo 2 no implica tampoco que los márgenes de dumping sólo puedan calcularse para el período de investigación.

33. El contexto inmediato del párrafo 3 del artículo 9 contradice la interpretación del Brasil. El párrafo 3.1 del artículo 9 prevé la posibilidad de percibir derechos de forma retrospectiva, lo que, por definición, supone la posibilidad de calcular los márgenes de dumping sobre la base de datos correspondientes a envíos individuales o períodos no comprendidos en el período de investigación. De forma análoga, el párrafo 3.2 del artículo 9 establece que cuando los derechos se fijen de forma prospectiva, las autoridades devolverán todo derecho "pagado en exceso del margen de dumping". Ese "margen de dumping" no es el margen establecido para el período de investigación, sino el margen establecido para envíos individuales o períodos posteriores a la imposición de los derechos.

34. Además, de la reclamación del Brasil parece inferirse que la aplicación de derechos antidumping variables, o en realidad la aplicación de cualquier tipo de derechos específicos es contraria *per se* al párrafo 2 del artículo 9. Las CE discrepan firmemente de esa tesis. El *Acuerdo Antidumping* no requiere que el margen de dumping se exprese en un porcentaje del precio de exportación (excepto a efectos de establecer si ese margen es *de minimis*[28]), ni prescribe un tipo determinado de derechos.

35. La percepción de derechos variables en cuantía equivalente a la diferencia entre el valor normal establecido para el período de investigación y los precios de exportación de los envíos realizados después del establecimiento de los derechos está expresamente prevista en el párrafo 4 del artículo 9 del *Acuerdo Antidumping*, que en la parte pertinente establece lo siguiente:

> Cuando las autoridades hayan limitado su examen de conformidad con la segunda frase del párrafo 10 del artículo 6, los derechos que se apliquen a las importaciones procedentes de exportadores o productores no abarcados por el examen no serán superiores:
>
> [...]
>
> ii) cuando las cantidades que deban satisfacerse en concepto de derechos antidumping se calculen sobre la base del valor normal prospectivo, a la diferencia entre el promedio ponderado del valor normal correspondiente a los exportadores o productores seleccionados y los precios de exportación de los exportadores o productores que no hayan sido examinados individualmente.

36. El párrafo 4 ii) del artículo 9 establece reglas para calcular el tipo correspondiente a "todos los demás" cuando los derechos aplicados a los exportadores incluidos en la muestra se calculen sobre la base del valor normal prospectivo. Por consiguiente, se supone que la utilización de esos valores normales prospectivos no es incompatible *per se* con el *Acuerdo Antidumping*, incluidos los párrafos 2 y 3 de su artículo 9.

37. No resulta claro a las CE el método preciso utilizado por las autoridades argentinas para calcular los denominados "valores mínimos de exportación". En especial, no resulta claro si esos "valores mínimos de exportación" guardan relación, y de ser así cómo, con los valores normales establecidos durante la investigación. Las CE observan, no obstante, que los "valores mínimos de exportación" indicados en el cuadro incluido en las páginas 112 y 113 de la comunicación del Brasil parecen ser inferiores a los valores normales correspondientes indicados en el cuadro de la página 111. A juicio de las CE, de confirmarse que los "valores mínimos de exportación" aplicados

[28] Cf. El párrafo 8 del artículo 5 del *Acuerdo Antidumping*.

por la Argentina son iguales o inferiores a los valores normales pertinentes establecidos durante la investigación, la percepción de un derecho variable en cuantía equivalente a la diferencia entre esos "valores mínimos de exportación" y los precios de exportación de los envíos realizados después de la imposición de los derechos no sería incompatible con los párrafos 2 y 3 del artículo 9 del *Acuerdo Antidumping*.

D. RECLAMACIONES 34, 35, 36 Y 37: PÁRRAFOS 1, 2, 4 Y 5 DEL ARTÍCULO 3

38. La DCD constató que las importaciones procedentes de dos exportadores (Nicolini y Seara) no eran objeto de dumping.[29] El Brasil aduce que la CNCE no excluyó esas importaciones de las "importaciones objeto de dumping" analizadas en la determinación de la existencia de daño.[30] El Brasil alega que, al no excluirlas, la Argentina infringió los párrafos 1, 2, 4 y 5 del artículo 3 del *Acuerdo Antidumping*.

39. La Argentina parece sostener que, de hecho, excluyó de la determinación de la existencia de daño las importaciones provenientes de Nicolini y Seara.[31] Las observaciones que figuran a continuación se formulan para el supuesto de que el Grupo Especial constatara que, en contra de lo que pretende la Argentina, las importaciones procedentes de esos exportadores se incluyeron en el análisis del daño.

40. Por las razones que se exponen a continuación, las CE consideran que la Argentina tenía derecho a tratar todas las importaciones procedentes del Brasil como "importaciones objeto de dumping" a los efectos de la determinación del daño y que, por consiguiente, no actuó de forma incompatible con las disposiciones invocadas por el Brasil.

41. El *Acuerdo Antidumping* se refiere al dumping entre países, como se refleja en la definición de dumping del párrafo 1 del artículo VI del *GATT* y del párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo Antidumping*, así como en las siguientes características básicas de las investigaciones antidumping:

- las investigaciones se inician con respecto a países y no a exportadores individuales, como hace patente el párrafo 1 del artículo 12 que establece que en el aviso de iniciación figurará "el nombre del país o países exportadores";

- una vez iniciada la investigación, deben examinarse todas las exportaciones del producto procedente del país cuyo nombre figure en el anillo para determinar la existencia de dumping y de daño, a reserva de la posibilidad de utilizar muestras de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 10 del artículo 6;

- aunque el párrafo 10 del artículo 6 establece que por regla general, debe determinarse el margen de dumping que corresponda a cada exportador (entre otras razones para garantizar la efectividad de la medida), siempre hay normalmente un derecho general (el derecho "residual" o correspondiente a "todos los demás") aplicable a todos los exportadores no designados expresamente, por país. Esta práctica está avalada por el párrafo 2 del artículo 9 que establece que cuando se haya establecido un derecho, si resultase imposible en la práctica designar a todos los proveedores pertenecientes a un mismo país, las autoridades podrán designar el país proveedor de que se trate.

[29] Comunicación del Brasil, párrafo 445.

[30] Comunicación del Brasil, párrafos 450 y 451.

[31] Comunicación de la Argentina, párrafos 266 a 273.

42. El texto del párrafo 3 del artículo 3 confirma que la noción de "importaciones objeto de dumping" utilizada en el artículo 3 se refiere a todas las importaciones del producto considerado correspondientes a cada país afectado. Ese párrafo establece lo siguiente:

> Cuando las importaciones de un producto procedentes de más de un país sean objeto simultáneamente de investigaciones antidumping, la autoridad investigadora sólo podrá evaluar acumulativamente los efectos de esas importaciones si determina que a) el margen de dumping establecido en relación con las importaciones de cada país proveedor es más que *de minimis*, según la definición que de ese término figura en el párrafo 8 del artículo 5, y el volumen de las importaciones procedentes de cada país no es insignificante y b) procede la evaluación acumulativa de los efectos de las importaciones a la luz de las condiciones de competencia entre los productos importados y el producto nacional similar.

43. No hay normas equivalentes sobre la acumulación de importaciones procedentes de varios exportadores, a pesar de que ello sería necesario si se considerara que el término "importaciones objeto de dumping" exige la consideración separada de las importaciones procedentes de diferentes exportadores.

44. También apoya esta idea el párrafo 7 del artículo 5 del *Acuerdo Antidumping*, que establece que el dumping y el daño deben examinarse simultáneamente en el curso de la investigación. Dado que el daño ha de investigarse antes de que se determine que los exportadores hacen dumping, es evidente que el término "importaciones objeto de dumping" utilizado en conexión con las disposiciones sobre el daño del artículo 3 se refiere a todas las importaciones del producto objeto de investigación (aunque naturalmente la constatación de daño esté supeditada a que se constate la existencia de dumping).[32]

E. RECLAMACIÓN 41: PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 4

45. El Brasil alega que la evaluación de las repercusiones de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional se basó en los datos facilitados por diez productores nacionales que respondieron a los cuestionarios de la CNCE, de los trece que habían apoyado la solicitud.[33] Según el Brasil, esos 10 productores representaban en 1998 el 46 por ciento de la producción nacional total.[34]

---

[32] Además, las CE desearían señalar que esta interpretación está también justificada dado que cuando se realizan paralelamente un procedimiento antidumping y un procedimiento sobre subvenciones que conciernen al mismo país es posible e incluso está justificado un análisis conjunto del daño. El Grupo Especial sobre el salmón ha reconocido que cabe efectuar conjuntamente para ambos procedimientos el análisis del daño (véanse los párrafos 572 y 573 del informe del Grupo Especial sobre *Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a las importaciones de salmón fresco del Atlántico procedente de Noruega*, ADP/87, adoptado el 27 de abril de 1994). En realidad, dado que el punto de partida de ese análisis es el volumen y los precios de las exportaciones en cuestión (y no el nivel de dumping o de subvención), no parece apropiado establecer una distinción a nivel de empresa. De no aceptarse la interpretación de las CE, habrían de llevarse a cabo dos exámenes distintos del daño si se constatara que una empresa hace dumping pero no está subvencionada o viceversa. Esto haría con frecuencia inviables los exámenes del daño, lo que no puede haber sido el propósito de los redactores del *Acuerdo Antidumping*.

[33] Comunicación del Brasil, párrafo 509.

[34] *Ibid.*, párrafo 510.

46. El Brasil alega que el 46 por ciento de la producción nacional total no constituye una "proporción importante" de la producción nacional total en el sentido del párrafo 1 del artículo 4 del *Acuerdo Antidumping*. Según el Brasil, "una proporción importante" significa al menos el 50 por ciento de la producción total.[35]

47. Como se explica a continuación, las CE discrepan de la interpretación de la expresión "una proporción importante" que hace el Brasil. A juicio de las CE, "una proporción importante" no significa la mayoría de la producción nacional, sino una parte importante de ella, que puede ser inferior al 50 por ciento. En todo caso, aun suponiendo que "una proporción importante" significara al menos el 50 por ciento de la producción nacional, ello no implicaría que la determinación de la existencia de daño hubiera basarse necesariamente en datos correspondientes a los productores nacionales que representaran esa proporción.

a) El sentido de "una proporción importante"

48. El Brasil afirma que el sentido corriente de la expresión "major proportion" (proporción importante) es "la mayoría".[36] En realidad, esa es una de las acepciones corrientes del término inglés "major", pero no la única. El *New Shorter Oxford Dictionary* da otro significado de "*major*": "*unusually important, serious or significant*" (especialmente importante, considerable o significativo).[37] De forma análoga, *Le Petit Robert* define el término "*majeur*" como "*très grand, très important*" (muy grande, muy importante).[38]

49. Las CE sostienen que en el contexto del párrafo 1 del artículo 4, la expresión "una proporción importante" no significa "la mayoría", sino una parte importante. El párrafo 1 del artículo 4 alude a "*a* major proportion" y no a "*the* major proportion". La utilización del artículo indefinido "a" (una) indica que puede haber más de una "major proportion" (proporción importante) y, en consecuencia, que no es necesario que "una proporción importante" constituya "la mayoría" de la producción nacional. El texto de la versión española del *Acuerdo Antidumping*, en la que al término inglés "major" corresponde el término "importante" así lo corrobora.

50. La interpretación de las CE está apoyada por el párrafo 4 del artículo 5, que establece que no se iniciará una investigación si las autoridades no han determinado que una solicitud ha sido hecha "por o en nombre de la rama de producción nacional". El párrafo 4 del artículo 5 añade lo siguiente:

> La solicitud se considerará hecha "por la rama de producción nacional o en nombre de ella" cuando esté apoyada por productores nacionales cuya producción conjunta represente más del 50 por ciento de la producción total del producto similar producido por la parte de la rama de producción nacional que manifieste su apoyo o su oposición a la solicitud. No obstante, no se iniciará ninguna investigación cuando los productores nacionales que apoyen expresamente la solicitud representen menos del 25 por ciento de la producción total del producto similar producido por la rama de producción nacional.

51. Así pues, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 5, podrá considerarse que una solicitud ha sido hecha "por o en nombre de la rama de producción nacional" aun cuando los productores que apoyen la solicitud representen menos del 50 por ciento de la producción nacional. La expresión

[35] *Ibid.*, párrafos 512 a 519.

[36] Comunicación del Brasil, párrafo 514.

[37] The New Shorter Oxford Dictionary, Clarendon Press Oxford, 1993.

[38] Le Petit Robert, 1976.

"rama de producción nacional" tiene el mismo sentido en todo el *Acuerdo Antidumping*.[39] Si en determinadas circunstancias puede considerarse que un número de productores que representan menos del 50 por ciento de la producción nacional constituyen "una proporción importante" de la producción nacional a los efectos del párrafo 4 del artículo 5, lo mismo puede considerarse también a los efectos de las demás disposiciones del *Acuerdo Antidumping*.

52. Además, no sería lógico que se permitiera la iniciación de una investigación sobre la base de una solicitud presentada por productores que representaran menos del 50 por ciento de la producción nacional para que posteriormente sólo se pudiera llegar a la conclusión de que el daño sufrido por esos productores, debido al porcentaje de la producción nacional que representaban, no constituía un daño a la "rama de producción nacional".

b) ¿Es necesario que la determinación de la existencia de daño se base en datos relativos a los productores que representen una "proporción importante" de la rama de producción nacional?

53. El Brasil da por sentado que si la expresión "una proporción importante" significa al menos el 50 por ciento de la producción nacional, el hecho de basar el análisis del daño en datos correspondientes a productores que representen un porcentaje inferior implica necesariamente una infracción del párrafo 1 del artículo 4.

54. Como hemos explicado ya, las CE no comparten la premisa de la reclamación del Brasil, según la cual esa "proporción importante" significa al menos el 50 por ciento. En todo caso, las CE ponen también en tela de juicio la consecuencia que el Brasil infiere de esa premisa. Las CE sostienen que aun en el caso de que "una proporción importante" signifique al menos el 50 por ciento de la producción nacional, hay circunstancias en las que las autoridades podrían basar una constatación de la existencia de daño en datos correspondientes a productores que representaran un porcentaje inferior.

55. En primer lugar, en caso de que un productor nacional que forme parte de la rama de producción nacional no coopere en la investigación, como de hecho ha ocurrido en el caso que examinamos, las autoridades, de conformidad con las disposiciones del párrafo 8 del artículo 6 y del Anexo II pueden recurrir a los "hechos de que se tenga conocimiento" para determinar si ese productor ha sufrido daño. A tal fin, los "hechos de que se tenga conocimiento" pertinentes podrían incluir los datos obtenidos de otros productores que hubieran cooperado en la investigación.

56. En segundo lugar, al evaluar el estado de la rama de producción nacional, las autoridades pueden utilizar técnicas de muestreo. Dicho de otro modo, las autoridades investigadoras pueden considerar que los datos correspondientes a algunos productores nacionales son representativos del estado de toda la rama de producción nacional. La posibilidad de utilizar técnicas de muestreo está especialmente prevista en el párrafo 10 del artículo 6 con respecto a la determinación de la existencia de dumping. No hay ninguna razón para que no se permita utilizar también técnicas similares de muestreo a los efectos de la determinación de la existencia de daño, sin perjuicio del requisito general del párrafo 1 del artículo 3 según el cual la determinación de la existencia de daño debe basarse en "pruebas positivas" y comprender un "examen objetivo" de los hechos pertinentes.

[39] Cf. La cláusula introductoria del párrafo 1 del artículo 4 ("A los efectos del presente acuerdo [...]).

ANEXO C-3

COMUNICACIÓN DE TERCERA PARTE
PRESENTADA POR GUATEMALA

(9 de septiembre de 2002)

INTRODUCCIÓN

1. Guatemala formula esta comunicación de tercera parte por su interés sistémico en la interpretación correcta del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, "Acuerdo Antidumping").

2. El Gobierno de Guatemala entiende que, en su mayoría, los errores procesales que se generan en el curso de las investigaciones antidumping obedecen por lo general a la complejidad propia del procedimiento, con el cual no suelen estar familiarizados los Miembros que sólo la aplican de manera esporádica. Sin embargo, estimamos que al implementar dichas medidas, los Miembros deben garantizar, plenamente, la observancia de las normas de los Acuerdos de la OMC establecidas para dichos mecanismos.

3. Muchos de los temas objeto de la diferencia se refieren a cuestiones de hecho sobre las que Guatemala no está en condiciones de hacer observaciones. En consecuencia, Guatemala se limitará únicamente a una cuestión de interpretación jurídica que resulta de su interés. En todo caso, Guatemala se reserva el derecho de ampliar las opiniones expuestas en la presente comunicación.

ARTÍCULO 4.1 DEL ACUERDO ANTIDUMPING

4. El artículo 4.1 en su versión al español establece que:

> *" A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "rama de producción nacional" se entenderá en el sentido de abarcar el conjunto de los productores nacionales de los productos similares, o aquellos de entre ellos cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la producción nacional total de dichos productos."*

5. El artículo 4.1 en su versión al inglés establece que:

> *"For the purposes of this Agreement, the term "domestic industry" shall be interpreted as referring to the domestic producers as a whole of the like products or to those of them whose collective output of the products constitutes a major proportion of the total domestic production of those products".*

ARGUMENTOS DE BRASIL

6. En su primera comunicación escrita, Brasil señala que el artículo 4.1 define la "rama de producción nacional" como el conjunto de los productores nacionales de los productos similares, o aquellos de entre ellos cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la producción nacional total de dichos productos.[1]

[1] Párrafo 511 de la Primera comunicación escrita del Brasil.

7. Así mismo, señala que la cuestión que deberá resolver el Grupo Especial es la de si el 46 por ciento del total de la producción nacional de pollo en Argentina constituye una proporción importante en la producción nacional total de dicho producto.[2]

8. Más adelante, Brasil sugiere que para poder examinar este asunto, el Panel deberá interpretar el significado del término "proporción importante" del artículo 4.1 del Acuerdo.[3]

9. En el párrafo 514 de su Primera comunicación escrita, Brasil señala que:

> *"According to ordinary meaning interpretation, the term "major part[4]" is defined as "the majority[5]." "Majority" is understood to mean "the great number or part[6]." From these definitions, the phrase "major proportion" can be understood as the greater part in relation to the whole. If the whole in question is 100% of the total domestic production of the like product, 46% cannot be considered as the greater part in relation to the whole."*

10. Lo anterior lleva a Brasil a señalar que el artículo 4.1 prevé que la rama de producción nacional puede ser el 100 por ciento de los productores nacionales de los productos similares o aquellos de entre ellos cuya producción conjunta constituya más de la mitad de la producción nacional. Si el total de aquellos cuya producción nacional conjunta es menor del 50 por ciento del total de la producción nacional, los productores nacionales no cumplen con la definición del artículo 4.1 del Acuerdo.

11. En consecuencia, Brasil argumenta que la determinación de la CNCE de que el 46 por ciento del total de aquellos cuya producción conjunta del producto similar constituya una proporción importante del total de los productores nacionales es incompatible con el artículo 4.1 del Acuerdo.[7]

ARGUMENTOS DE ARGENTINA

12. Por su parte, Argentina señala en los párrafos 302-304 de su Primera comunicación escrita que:

> *"302. La definición de la rama de producción nacional se ajustó a la normativa OMC en el sentido que para la Argentina "una proporción importante" es el 46% de la producción total. La pretensión de Brasil de que una "proporción importante" sólo está constituida por al menos el 50% de la producción nacional es una apreciación subjetiva, sin base en el Artículo 4 del Acuerdo Antidumping.*
>
> *303. De acuerdo al Acta No. 576 las empresas relevadas representaron el 46.2% de la producción nacional para el año 1998, por lo que la CNCE consideró cumplimentado el requisito del artículo 4.1 del Acuerdo sobre Dumping.*

---

[2] Párrafo 512 de la primera comunicación escrita del Brasil.

[3] Párrafo 513 de la Primera comunicación escrita del Brasil.

[4] The terms "proportion" and "part" are viewed and used as synonyms. Concise Oxford Dictionary - novena edición, Oxford University Press, 1995, páginas 995 y 1098.

[5] Concise Oxford Dictionary - novena edición, Oxford University Press, 1995, página 822.

[6] Concise Oxford Dictionary - novena edición, Oxford University Press, 1995, página 822.

[7] Párrafo 519 de la Primera comunicación escrita del Brasil.

304. Para la República Argentina, como para otros países Miembros de la OMC (conforme concordantes antecedentes en la materia), el 46% constituye una proporción importante, en tanto que no resulta causal el hecho que el Acuerdo sobre Dumping no haya establecido un porcentaje taxativo acerca de qué se debe entender por "proporción importante"."

COMUNICACIÓN DE GUATEMALA

13. Guatemala comparte lo señalado por Brasil en el párrafo 517 de su Primera comunicación escrita, en cuanto a que el establecimiento de la rama de producción nacional es importante, particularmente con respecto al análisis del daño. Dado que el examen del daño toma en cuenta el efecto de las importaciones objeto de dumping en la rama de producción nacional, si la rama de producción nacional no se constituye debidamente, el examen de los efectos de daño puede ser equivocado.

14. Así mismo, estimamos que el requisito de emitir una determinación de daño a la rama de producción nacional leído en conjunto con la definición de rama de producción nacional del artículo 4.1, implica que el daño debe ser analizado con respeto al total de los productores nacionales o de aquellos de entre ellos cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la producción nacional total de dicho producto.

15. Puesto que el criterio de daño constituye uno de los factores necesarios para adoptar medidas antidumping, la iniciativa de estas medidas debe amparar lógicamente a los productores que sean o estimen verse perjudicados con prácticas de dumping, de allí la importancia del artículo 4.1 al definir qué se entiende por "rama de producción nacional".

16. Existe una diferencia entre las versiones en español y en inglés del párrafo 1 del artículo 4. En efecto, las palabras "proporción importante" que figuran en el primero de estos textos se han traducido en el segundo por "*major proportion*".

17. De acuerdo a la interpretación de Brasil, el término "*major proportion*" se define como "*majority*", lo cual se entiende como el "mayor número o parte".

18. Según dicha interpretación, la frase se entiende como la mayor parte con relación a un "todo". Brasil sugiere que el "todo" en cuestión es el 100 por ciento del total de la producción nacional de los productos similares.

19. En otras palabras, Brasil entiende que el artículo 4.1 prevé que la rama de producción nacional puede ser el 100 por ciento de los productores nacionales de productos similares o aquellos de entre ellos cuya producción conjunta constituya más de la mitad de la producción nacional. Así, si el total de aquellos cuya producción nacional conjunta es menor del 50 por ciento del total de la producción nacional, los productores nacionales no cumplen con la definición del artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping

20. Guatemala entiende el término "*major*" como "muy importante, serio, a fondo"[8]. Así mismo, entendemos que el término "importante" se define como algo que tiene importancia, es decir, que reviste la "cualidad de lo importante, de lo que es muy conveniente o interesante, o de mucha entidad o consecuencia (...)".[9]

21. De lo expuesto, Guatemala reconoce que el concepto "*major*" utilizado en la versión en inglés podría implicar un grado de exigencia más alto que el que implica el término "importante" utilizado en la versión en español. Sin embargo, consideramos que en ningún caso podría definirse el término

[8] Oxford Spanish Dictionary. Oxford University Press, 2001. Página 1.293.

[9] Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, XXII Edición, 2001. Página 1.255.

"importante" contemplado en la versión al español del artículo 4.1, como que constituya más de la mitad de un "todo", tal como lo sugiere Brasil.

22. Guatemala considera que esta diferencia no debería ser interpretada de la forma expuesta por Brasil porque hacerlo tendría repercusiones prácticas significativas.

23. En todo caso, cualquier solución tendría que empezar por basarse en el reconocimiento de que el articulo en cuestión no contempla expresamente ningún porcentaje que sugiera una "proporción importante" o una "*major proportion*"

24. Argentina por su parte señala que para ellos, así como para otros Miembros de la OMC (conforme concordantes antecedentes en la materia), el 46 por ciento constituye una proporción importante. Al respecto, Guatemala estima que la práctica de los Miembros no es un hecho que acredite por sí solo la compatibilidad de una medida con el Acuerdo de la OMC.

25. Guatemala entiende que la norma citada contempla cierto margen de discreción para que la autoridad determine, con respecto a los hechos y a la luz de las circunstancias especiales de cada industria, qué se entiende por la expresión "rama de producción nacional". Así mismo, estimamos que se trata de una expresión que está expuesta a mucho más que la definición de un porcentaje.

26. Así mismo, en el informe del *Grupo de Expertos que examinó los derechos antidumping y los derechos compensatorios* se dice además lo siguiente:

> *"El Grupo ha examinado después la expresión "(rama de) producción nacional" con relación a la noción de... (daño),y ha estimado que, a pesar de que cada caso debe evidentemente plantear problemas particulares, procede definir un principio general, a saber, que la determinación de ese ...(daño) importante ha de efectuarse en relación con la totalidad o una parte considerable de la producción nacional del producto similar (...)*[10] *(el subrayado es nuestro).*

27. Nos parece que el artículo 4.1 establece la facultad de la que disponen las autoridades investigadoras para que, dependiendo la complejidad del caso, puedan establecer qué se entiende por la frase "*aquellos de entre ellos cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la producción nacional total de dichos productos*." Sin embargo, no se trata de una facultad abierta, puesto que la autoridad investigadora no podría limitarse únicamente a invocar dicho concepto.

28. Así mismo, entendemos que esta disposición no tiene por objeto otorgar a las autoridades investigadoras una discreción ilimitada en la determinación de rama de producción nacional y que claramente, dicha determinación debe necesariamente analizarse con relación a la noción de daño y sin perjuicio de que se reúnan los demás supuestos que deberán verificarse para la determinación definitiva de la existencia de daño.

29. Por lo tanto, Guatemala insta al Grupo Especial a abstenerse de dar a entender en cualquier contexto que la referencia a una proporción importante del párrafo 1 del artículo 4 exige que se cumpla con el porcentaje de 50 por ciento.

30. En cualquier caso, El Grupo Especial puede evaluar, de acuerdo a la norma de examen contemplada en el artículo 17.6. del Acuerdo Antidumping, el fundamento de la decisión de la autoridad argentina al grado en que la misma se conforme con la que una autoridad objetiva e imparcial hubiera realizado en el presente caso.

---

[10] L/978, adoptado el 13 de mayo de 1959, 8S/161, párrafo 18.

ANEXO C-4

COMUNICACIÓN DE TERCERA PARTE
PRESENTADA POR PARAGUAY

(9 de septiembre de 2002)

Antecedentes

1. En su reunión de 17 de abril de 2002, el OSD estableció un Grupo Especial de conformidad con el artículo 6 del ESD para que examinara el asunto sometido al OSD por el Brasil (WT/DS241/3).

2. En esa reunión, las partes en la diferencia acordaron asimismo que el Grupo Especial se estableciera con el mandato uniforme. El mandato es, en consecuencia, el siguiente:

> "Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes de los acuerdos abarcados que ha invocado el Brasil en el documento WT/DS241/3, el asunto sometido al OSD por el Brasil en ese documento y formular conclusiones que ayuden al OSD a hacer las recomendaciones o dictar las resoluciones previstas en dichos acuerdos."

3. Asimismo, en la mencionada reunión el Paraguay se reservó el derecho conferido en el Artículo 10 del ESD, de participar en calidad de "tercero" en el procedimiento establecido.

4. En esta presentación, el Paraguay desea hacer conocer sus puntos de vista preliminares en relación al caso en cuestión, al margen de cualquier otra presentación, sea oral o escrita, que haga en ocasión de la Sesión Sustantiva del Grupo Especial con los terceros.

Normas y Principios de Derecho Internacional Público relevantes y de aplicación en el caso de autos

5. El Paraguay considera que de conformidad con los principios generales del Derecho Internacional Público, el caso en autos tiene carácter de "cosa juzgada", al haber sido sometido con anterioridad al procedimiento de solución de diferencias establecido en el marco del MERCOSUR, en particular al desarrollado en el Protocolo de Brasilia.

6. En este sentido, el Protocolo de Brasilia establece claramente en su artículo 21[1] el carácter inapelable y obligatorio de los laudos del Tribunal Arbitral Ad Hoc, al considerarlos "... fuerza de cosa juzgada", principio que debe prevalecer en el tratamiento del caso en cuestión.

7. Conforme se puede observar en el párrafo 20 de la presentación escrita de Argentina, al haber recurrido los Estados Partes del MERCOSUR al mecanismo establecido en el Protocolo de Brasilia, se demuestra su plena aceptación por parte de los mismos como normativa del MERCOSUR y como procedimiento de solución de controversias *in totum*, razón por la cual, debería considerarse que el

[1] **ARTÍCULO 21**
1. Los Laudos del Tribunal Arbitral son inapelables, obligatorios para los Estados Partes en la controversia a partir de la recepción de la respectiva notificación y tendrán respecto de ello fuerza de cosa juzgada.
2. Los Laudos deberán ser cumplidos en un plazo de quince (15) días, a menos que el Tribunal Arbitral fije otro plazo.

Laudo del Tribunal Arbitral Ad Hoc del MERCOSUR[2], confiere carácter de cosa juzgada al caso en autos.

8. El Paraguay considera además pertinente mencionar la firma del "Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el MERCOSUR" entre los cuatro Estados Partes del MERCOSUR, que aunque no esté aún vigente, en su artículo 1.2 establece que *" ... Las controversias comprendidas en el ámbito de aplicación del presente Protocolo que puedan también ser sometidas al sistema de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio o de otros esquemas preferenciales de comercio de que sean parte individualmente los Estados Partes del MERCOSUR, podrán someterse a uno u otro foro a elección de la parte demandante. Sin perjuicio de ello, las partes en la controversia podrán, de común acuerdo, convenir el foro.*

Una vez iniciado un procedimiento de solución de controversias de acuerdo al párrafo anterior, ninguna de las partes podrá recurrir a los mecanismos establecidos en los otros foros respecto del mismo objeto[3], ...".

Este instrumento, negociado y firmado por los Estados Partes del MERCOSUR, faculta a estos a elegir el foro en el cual desean dirimir las diferencias, con una limitante particular que es la de cláusula excluyente en virtud de la cuál, una vez iniciado un procedimiento en un foro, no se podrá recurrir a otro de los foros previstos en el Protocolo.

9. El Paraguay desea asimismo mencionar al Grupo Especial una norma del Derecho Internacional Público vigente, se trata del artículo 18 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que establece que:

> "Un Estado deberá abstenerse[4] de actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y el fin de un tratado:
>
> a) si ha firmado el tratado o ha canjeado instrumentos que constituyen el tratado a reserva de ratificación, aceptación o aprobación, mientras no haya manifestado su intención de no llegar a ser parte en el tratado; o
>
> b) ...".

10. Por cuanto antecede, el Paraguay considera que el caso en autos ya fue objeto de un procedimiento de solución de diferencias anterior, reconocido por ambas partes y cuya resolución tiene carácter vinculante y obligatorio para las mismas, razón por la cual no debería ser abordado en este Grupo Especial, ya que si así se hiciera, se estarían violando principios y normas del Derecho Internacional Público e incumpliendo mandatos de instituciones del MERCOSUR, en este caso, el Laudo de un Tribunal Arbitral Ad Hoc establecido en virtud del Protocolo de Brasilia.

---

[2] Laudo del Tribunal Arbitral Ad Hoc del MERCOSUR constituido para decidir sobre Controversia entre la República Federativa de Brasil y la República Argentina sobre "Aplicación de Medidas Antidumping contra la exportación de pollos enteros, provenientes de Brasil", (Res. 574/2000) del Ministerio de Economía de la República Argentina. Fecha: 21 de mayo de 2001.

[3] Resaltado agregado.

[4] Resaltado agregado.

ANEXO C-5

COMUNICACIÓN DE TERCERO PRESENTADA
POR LOS ESTADOS UNIDOS

(9 de septiembre de 2002)

ÍNDICE

Página

I. Introducción C-25

II. El párrafo 7 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping no obliga a los Miembros que deciden si se inicia o no una investigación antidumping a evaluar datos sobre el dumping y el daño correspondientes a períodos "simultáneos" C-25

III. La expresión "una proporción importante" de la definición de la rama de producción nacional del párrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo no significa "la mayoría" C-26

IV. La decisión de un Miembro de evaluar determinados factores enumerados en el párrafo 4 del artículo 3 utilizando un período diferente del utilizado para evaluar otros factores no constituye *per se* una infracción del párrafo 13 del artículo 3. .....C-27

V. El hecho de que una autoridad investigadora no analice un factor determinado enumerado en el párrafo 4 del artículo 3 no constituye necesariamente una infracción del párrafo 2.2 del artículo 12.....C-28

VI. El Grupo Especial no debe exponer opiniones sobre la interpretación apropiada del párrafo 2 del artículo 18 del ESD C-29

VII. Conclusión C-29

I. INTRODUCCIÓN

1. Los Estados Unidos acogen con satisfacción la oportunidad de exponer sus opiniones en el presente procedimiento sobre *Argentina - Derechos antidumping definitivos sobre los pollos procedentes del Brasil* (DS241). Las observaciones de los Estados Unidos se ceñirán a determinadas cuestiones relativas a la interpretación jurídica adecuada de varios artículos del *Acuerdo relativo a la Aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994* ("Acuerdo Antidumping").[1]

II. El párrafo 7 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping no obliga a los Miembros que deciden si se inicia o no una investigación antidumping a evaluar datos sobre el dumping y el daño correspondientes a períodos "simultáneos"

2. El Brasil alega que la Argentina infringió el párrafo 7 del Acuerdo Antidumping porque las autoridades investigadoras evaluaron datos sobre el dumping y sobre el daño que no abarcaban períodos idénticos en el momento de decidir si se iniciaba la investigación impugnada.[2] El argumento del Brasil se basa en una interpretación errónea del término "simultáneamente" utilizado en el párrafo 7 del artículo 5.

3. El párrafo 7 del artículo 5 establece que en el momento de decidir si se inicia o no una investigación, "las pruebas de la existencia del dumping y del daño se examinarán simultáneamente […]". El Brasil parece entender que el texto obliga a un Miembro a velar por que sus autoridades investigadoras examinen información sobre el dumping y el daño correspondiente a períodos simultáneos (es decir idénticos). No obstante, el término "simultáneamente", considerado en su contexto, se refiere a "se examinarán" y no a "pruebas". En consecuencia, la obligación que impone el párrafo 7 del artículo 5 es la de *examinar* las pruebas del dumping y del daño simultáneamente (por ejemplo, en investigaciones coincidentes) y no la de examinar *las pruebas* de la existencia de dumping y de daño reunidas en períodos simultáneos (idénticos).

4. Como ha reconocido el Comité de Prácticas Antidumping, el Acuerdo Antidumping "no establece ningún período concreto de investigación, ni directrices para determinar un período de investigación apropiado para el examen del dumping o del daño".[3] No obstante, el Comité ha adoptado una recomendación no vinculante, en la que se pide que el período de investigación para el análisis del dumping sea de 12 meses, y el período de investigación para los análisis del daño de tres años.[4] De los términos de la recomendación del Comité se desprende que no existe ninguna base para exigir a los Miembros que examinen información sobre el dumping y sobre el daño correspondiente a períodos "simultáneos". La falta de coincidencia en los períodos recomendados refleja las diferencias intrínsecas de naturaleza entre el análisis que realizan las autoridades administradoras para determinar la existencia de dumping y el que llevan a cabo para determinar la existencia de daño.

5. Por ejemplo, normalmente no es necesario que en la determinación de la existencia del dumping formulada por un Miembro se examinen las tendencias en el curso del tiempo. Por el contrario, una determinación de la existencia de daño requerirá normalmente que la autoridad

---

[1] Los Estados Unidos no han tenido oportunidad de examinar plenamente la comunicación escrita de la Argentina en la presente diferencia y por tanto se limitan en este momento a la comunicación escrita del Brasil. Los Estados Unidos abordarán la primera comunicación escrita de la Argentina, según proceda, en la primera reunión del Grupo Especial.

[2] *Véase*, por ejemplo, el párrafo 168 de la primera comunicación del Brasil.

[3] Comité de Prácticas Antidumping, *Recomendación relativa a los períodos de recopilación de datos para las investigaciones antidumping*, G/ADP/6, adoptada por el Comité el 5 de mayo de 2000.

[4] *Id.*

investigadora recopile información que abarque más de un año a fin de evaluar las variaciones del volumen y de los precios. El examen por el Miembro importador de si hay o no pruebas suficientes en relación con el daño, tales como si ha habido o no un aumento significativo, en términos absolutos o relativos, del volumen de las importaciones objeto de dumping debe realizarse en el contexto de un marco temporal apropiado, que casi siempre será mayor que el período de investigación para efectuar el cálculo del dumping.[5]

6. No obstante, no hay que entender que, con las opiniones expuestas sobre esta cuestión, los Estados Unidos sugieran que una autoridad investigadora puede examinar datos sobre el dumping y sobre el daño correspondientes a períodos entre los que no exista ninguna relación. El párrafo 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping establece claramente la obligación del Miembro de demostrar la existencia de una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño a la rama de producción nacional.[6] Es perfectamente posible que los períodos concretos que decida examinar un Miembro en una determinada investigación pongan en tela de juicio que el Miembro haya demostrado la existencia de esa relación causal. No obstante, el párrafo 7 del artículo 5 no se refiere a esa cuestión.

III. La expresión "una proporción importante" de la definición de la rama de producción nacional del párrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo no significa "la mayoría"

7. Según el párrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo Antidumping, la expresión "la rama de producción nacional" se entenderá en el sentido de abarcar:

> *el conjunto* de los productores nacionales de los productos similares, *o* aquellos de entre ellos cuya producción conjunta constituya *una proporción importante* de la producción nacional total de dichos productos […] (sin cursivas en el original).

El Brasil alega que "una proporción importante" es sinónimo de "la mayoría" y que la Argentina infringió el párrafo 1 del artículo 4 porque la autoridad investigadora de ese país examinó datos correspondientes al 46 por ciento de la rama de producción nacional, proporción que es inferior a la mayoría.[7] Los Estados Unidos manifiestan respetuosamente que el argumento del Brasil se basa en una interpretación errónea del párrafo 1 del artículo 4.

8. En primer lugar, el párrafo 1 del artículo 4 es sólo una definición y, como tal, no impone a los Miembros de la OMC una obligación independiente.[8] Por esa sola razón, hay que considerar que no existe base para la alegación del Brasil de que el análisis del daño realizado por la Argentina infringió el párrafo 1 del artículo 4.

---

[5] De hecho, los efectos del aumento del volumen de las importaciones o de la subvaloración de los precios tardan frecuentemente más de un año en alcanzar un nivel significativo, y la repercusión de esos efectos en el estado de la rama de producción nacional puede tardar aún más en hacerse patente. Además, el hecho de que en algunos sectores la ejecución de las operaciones de venta pueda requerir hasta un año, y de que en algunas industrias las ventas se efectúen con arreglo a contratos anuales constituye una prueba más de la conveniencia de que en las investigaciones sobre el daño se examine un período de varios años.

[6] De forma análoga, el párrafo 2 del artículo 5 exige que con la solicitud de investigación se incluyan pruebas de la existencia de dumping, de daño y de una relación causal.

[7] Primera comunicación del Brasil, párrafos 511 a 519.

[8] *Véase* el informe del Órgano de Apelación sobre *Estados Unidos - Trato fiscal aplicado a las "empresas de ventas en el extranjero", Recurso de las Comunidades Europeas al párrafo 5 del artículo 21 del ESD*, WT/DS108/AB/RW, adoptado el 29 de enero de 2002, párrafo 85, (en el que se declara que la definición de "subvención" del párrafo 1 del artículo 1 del *Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias* "no impone […] una obligación a los Miembros por lo que respecta a las subvenciones que define").

9. No obstante, aunque no fuera así, la alegación del Brasil no podría encontrar apoyo en el texto del párrafo 1 del artículo 4. En primer lugar, el Acuerdo Antidumping no define el término inglés "major", y conforme a su sentido corriente, ese término "*is designing the greater or relatively greater of […] two things*" (designa la mayor, *o relativamente mayor* de […] dos cosas), por oposición a "minor" (menor).[9] También puede significar "*unusually important, serious or significant*" (especialmente importante, considerable o significativo").[10] Ninguno de esos sentidos tiene necesariamente la connotación de "la mayoría".

10. En segundo lugar, el argumento del Brasil de que "una proporción importante" significa realmente "la mayoría" está directamente en contradicción con el hecho de que los redactores fueron bastante explícitos, en otras partes del Acuerdo, cuando pretendieron establecer el requisito de la mayoría con respecto a una obligación determinada. En concreto, el párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo declara que una solicitud se considerará hecha "por la rama de la producción nacional o en nombre de ella" cuando esté apoyada por productores nacionales cuya producción conjunta represente "más del 50 por ciento" de la producción total de la parte de la rama de producción nacional que en él se especifica. A diferencia del párrafo 1 del artículo 4, el párrafo 4 del artículo 5 exige claramente la mayoría. El párrafo 1 del artículo 4 establece una referencia distinta: "una proporción importante".

11. La conclusión de que con la expresión "una proporción importante" no se pretendió establecer la exigencia de la mayoría está avalada también por su contexto. La expresión figura en el párrafo 1 del artículo 4 como alternativa al "conjunto" de los productores nacionales. La definición refleja el hecho de que en muchas investigaciones antidumping no resultará posible obtener la información requerida de todos los productores nacionales del producto similar, y confirma que el simple hecho de que una autoridad investigadora no pueda obtener información de todos ellos no invalidará una determinación de la existencia de daño. El Acuerdo Antidumping no establece una referencia cuantitativa respecto de lo que constituye una proporción "importante" de una rama de producción nacional. Esa proporción variará según los casos.

IV. La decisión de un Miembro de evaluar determinados factores enumerados en el párrafo 4 del artículo 3 utilizando un período diferente del utilizado para evaluar otros factores no constituye *per se* una infracción del párrafo 13 del artículo 3.

12. El Brasil alega que el hecho de que la Argentina evaluara determinados factores enumerados en el párrafo 4 del artículo 3 utilizando el período comprendido entre enero de 1996 y junio de 1999 y otros factores utilizando el período comprendido entre enero de 1996 y diciembre de 1998 constituyó *per se* una infracción del párrafo 1 del artículo 3.[11] Los Estados Unidos no se pronuncian acerca de si la decisión de la Argentina de basar su análisis en dos períodos diferentes supuso en el presente caso una infracción de sus obligaciones, pero discrepan de la tesis del Brasil de que un análisis de períodos diferentes *no puede* ser objetivo y por ello infringe *per se* el párrafo 1 del artículo 3.

13. El informe del Grupo Especial en *Estados Unidos - Acero laminado* resulta esclarecedor a este respecto.[12] En la investigación realizada en ese asunto, los Estados Unidos recopilaron información sobre todos los factores correspondiente a todo el período de investigación de tres años y

[9] *The New Shorter Oxford English Dictionary*, volumen I, 1670 (1993) (sin cursivas en el original).

[10] *Id.*

[11] *Véanse* los párrafos 425 a 430 de la Primera comunicación escrita del Brasil.

[12] Informe del Grupo Especial sobre *Estados Unidos - Medidas antidumping sobre determinados productos de acero laminado en caliente procedentes del Japón*, WT/DS184/R, adoptado el 23 de agosto de 2001 ("*Estados Unidos - Acero laminado*").

evaluaron en varios casos los distintos factores con respecto al período de tres años.[13] En cambio, en el caso de determinados factores relativos a la repercusión, los Estados Unidos compararon los datos correspondientes a 1998 con los datos de 1997, sin mencionar expresamente las cifras correspondientes a 1996.[14] El Grupo Especial llegó a la conclusión de que "a la luz de su análisis y de las explicaciones facilitadas, el mero hecho de que [los Estados Unidos] no se ocupara[n] expresamente de [los datos correspondientes a] 1996 no menoscaba en tal grado la idoneidad de la evaluación realizada por [los Estados Unidos] de los factores económicos pertinentes que su examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional resulte incompatible con el Acuerdo Antidumping".[15] La constatación del Grupo Especial es congruente con la opinión de los Estados Unidos de que la utilización de períodos diferentes para evaluar el daño no implica *per se* que la autoridad investigadora no haya realizado un examen objetivo.

V. El hecho de que una autoridad investigadora no analice un factor determinado enumerado en el párrafo 4 del artículo 3 no constituye necesariamente una infracción del párrafo 2.2 del artículo 12

14. El Brasil afirma (reclamaciones 38-40) que la Argentina no evaluó varios de los factores enumerados en el párrafo 4 del artículo 3 ni hizo referencia a ellos y que por ello infringió los párrafos 1 y 4 del artículo 3 y el párrafo 2.2 del artículo 12 del Acuerdo.[16] Los Estados Unidos coinciden con el Brasil en que el Acuerdo Antidumping obliga a la autoridad investigadora a evaluar cada uno de los factores enumerados en el párrafo 4 del artículo 3, y no nos pronunciamos acerca de si de hecho la Argentina evaluó o no los factores en la investigación impugnada.

15. Los Estados Unidos no comparten, sin embargo, la opinión de que el hecho de que en la determinación publicada no se haga referencia a un factor determinado constituye necesariamente una infracción del párrafo 2.2 del artículo 12. El párrafo 2 del artículo 12 solamente obliga a las autoridades a exponer "con suficiente detalle las constataciones y conclusiones a que se haya llegado sobre todas las cuestiones de hecho y de derecho *que la autoridad investigadora considere pertinentes*".[17] Aunque es preciso evaluar todos los factores, no todos ellos han de ser necesariamente pertinentes en un caso determinado.

16. No obstante, dada la obligación de evaluar todos los factores enumerados en el párrafo 4 del artículo 3, es necesario que de la determinación publicada pueda desprenderse que la autoridad los ha evaluado. Puede considerarse cumplida esta obligación cuando una determinación, mediante la exposición de las razones por las que las autoridades se basaron en los factores concretos que consideraron pertinentes en ese caso, hace patentes las razones por las que se atribuyó menor peso a otros factores sobre los que no formularon constataciones específicas o se consideró que dichos factores no eran pertinentes en absoluto. "Las prescripciones del Acuerdo se cumplen si la falta de

[13] *Id.*, párrafo 7.227.

[14] *Id.*, párrafo 7.228.

[15] *Id.*, párrafo 7.234.

[16] Primera comunicación escrita del Brasil, párrafos 475 a 507.

[17] *Véase* el párrafo 2 del artículo 12 (sin cursivas en el original).

pertinencia o importancia de los factores que no son esenciales para la decisión puede al menos deducirse implícitamente de la determinación final".[18]

VI. El Grupo Especial no debe exponer opiniones sobre la interpretación apropiada del párrafo 2 del artículo 18 del ESD

17. En una carta de fecha 8 de agosto de 2002, el Brasil manifestó al Grupo Especial su intención de hacer pública una versión no confidencial de su primera comunicación escrita. El 15 de agosto de 2002, la Argentina remitió una carta en la que exponía la opinión de que la acción que se proponía el Brasil sería incompatible con el párrafo 2 del artículo 18 del ESD. El 21 y el 23 de agosto de 2002, respectivamente, el Brasil y el Canadá enviaron sendas cartas en las que manifestaban su disconformidad con las opiniones de la Argentina. Por último, el 27 de agosto de 2002, la Argentina envió una segunda carta apoyando el espíritu de transparencia y recabando las opiniones del Grupo Especial sobre la interpretación apropiada del párrafo 2 del artículo 18.

18. Los Estados Unidos coinciden con el Brasil y el Canadá en que ninguna disposición del párrafo 2 del artículo 18 del ESD impide a un Miembro hacer públicas sus propias comunicaciones en el marco de la OMC. Nosotros hemos procedido a hacerlo sin reservas en bastantes ocasiones, y acogeríamos con satisfacción una decisión de la Argentina en el mismo sentido. La Argentina no necesita autorización para hacer públicas sus propias comunicaciones. No obstante, preocupa a los Estados Unidos el hecho de que la petición de la Argentina de que el Grupo Especial exponga sus opiniones al respecto equivale, en esencia, a una petición de dictamen consultivo, ya que no se le ha sometido ninguna medida. Además el párrafo 2 del artículo 18 excede del ámbito del mandato del Grupo Especial. Los Estados Unidos señalan que en la medida en que la Argentina esté pidiendo al Grupo Especial que interprete el párrafo 2 del artículo 18, su petición sería incompatible con la facultad exclusiva de interpretar el Acuerdo sobre la OMC atribuida a la Conferencia Ministerial y al Consejo General por el párrafo 2 del artículo IX del *Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio*. Solicitamos respetuosamente al Grupo Especial que rechace la petición de la Argentina de que el Grupo exponga sus opiniones acerca de la interpretación apropiada del párrafo 2 del artículo 18.

VII. Conclusión

19. Los Estados Unidos agradecen al Grupo Especial que les haya dado la oportunidad de formular observaciones sobre las cuestiones en litigio en el presente procedimiento, y confían en que sus observaciones hayan sido útiles.

[18] Informe del Grupo Especial sobre *Comunidades Europeas - Derechos antidumping sobre las importaciones de ropa de cama de algodón procedentes de la India*, WT/DS141/R, adoptado el 12 de marzo de 2001, párrafo 6.163.

ANEXO C-6

PRESENTACIÓN DE PARAGUAY

(26 de septiembre de 2002)

Señor Presidente,

En esta presentación, el Paraguay, como uno de los cuatro Estados Parte del MERCOSUR, desea hacer conocer sus puntos de vista en relación al caso en cuestión, defendiendo las instituciones de integración creadas en virtud del Tratado de Asunción de 1991, tal como lo mencionáramos en nuestra comunicación escrita de tercera parte semanas atrás.

Señor Presidente, el Paraguay considera que de conformidad con los principios generales del Derecho Internacional Público, el caso en autos tiene ya carácter de "cosa juzgada", al haber sido sometido con anterioridad al procedimiento de solución de diferencias establecido en el marco del MERCOSUR, en particular al desarrollado en el Protocolo de Brasilia.

En este sentido, el Protocolo de Brasilia establece claramente en su Artículo 21 el carácter inapelable y obligatorio de los laudos del Tribunal Arbitral Ad Hoc, al considerarlos "... fuerza de cosa juzgada", principio que mi delegación considera que debe prevalecer en el tratamiento del caso en cuestión.

Conforme se puede observar en el párrafo 20 de la presentación escrita de Argentina, al haber recurrido los Estados Partes del MERCOSUR al mecanismo establecido en el Protocolo de Brasilia, se demuestra su plena aceptación por parte de los mismos como normativa del MERCOSUR y como procedimiento de solución de controversias *in totum*, razón por la cual, debería considerarse que el Laudo del Tribunal Arbitral Ad Hoc del MERCOSUR, confiere carácter de cosa juzgada al caso en autos.

El Paraguay considera además pertinente mencionar la firma del "Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el MERCOSUR" entre los cuatro Estados Partes del MERCOSUR, que aunque no esté aún vigente, en su Artículo 1.2 establece que, y cito" **... Las controversias comprendidas en el ámbito de aplicación del presente Protocolo que puedan también ser sometidas al sistema de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio o de otros esquemas preferenciales de comercio de que sean parte individualmente los Estados Partes del MERCOSUR, podrán someterse a uno u otro foro a elección de la parte demandante. Sin perjuicio de ello, las partes en la controversia podrán, de común acuerdo, convenir el foro.**

> **Una vez iniciado un procedimiento de solución de controversias de acuerdo al párrafo anterior, ninguna de las partes podrá recurrir a los mecanismos establecidos en los otros foros respecto del mismo objeto, ...",** fin de cita.

Este instrumento, negociado y firmado por los Estados Partes del MERCOSUR, faculta a estos a elegir el foro en el cual desean dirimir las diferencias, con una limitante particular que es la de cláusula excluyente en virtud de la cuál, una vez iniciado un procedimiento en un foro, no se podrá recurrir a otro de los foros previstos en el Protocolo.

El Paraguay desea asimismo mencionar al Grupo Especial la norma del Derecho Internacional Público vigente en la que mi delegación fundamenta los argumentos esgrimidos en esta presentación, se trata del Artículo 18 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que establece que, y cito:

"Un Estado deberá abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y el fin de un tratado:

a) **si ha firmado el tratado o ha canjeado instrumentos que constituyen el tratado a reserva de ratificación, aceptación o aprobación, mientras no haya manifestado su intención de no llegar a ser parte en el tratado;"**, fin de cita.

Por cuanto antecede, el Paraguay considera que el caso en autos ya fue objeto de un procedimiento de solución de diferencias anterior, reconocido por ambas partes y cuya resolución tiene carácter vinculante y obligatorio para las mismas, razón por la cual no debería ser abordado en este Grupo Especial, ya que si así se hiciera, se estarían violando principios y normas del Derecho Internacional Público e incumpliendo mandatos de instituciones del MERCOSUR, en este caso, el Laudo de un Tribunal Arbitral Ad Hoc establecido en virtud del Protocolo de Brasilia.

Finalmente Señor Presidente,

El Paraguay espera que este Grupo Especial se pronuncie respecto de los argumentos expresados tanto por mi delegación como por la de la República Argentina, ya que el gobierno de mi país le atribuye vital importancia a las instituciones creadas por los acuerdos y tratados internacionales de los cuales es parte, y en este caso particular, a las instituciones del MERCOSUR. El respeto y reconocimiento de las mismas fortalece y otorga previsibilidad y seguridad a los Miembros en general y en particular al Sistema Multilateral de Comercio.

Muchas gracias.

ANEXO C-7

INTERVENCIÓN DE CHILE

(26 de Septiembre de 2002)

Gracias señor presidente:

1. Chile agradece al Grupo Especial la posibilidad de presentar sus puntos de vista en esta controversia. Hacemos uso del derecho contemplado en el artículo 10 del Entendimiento sobre Solución de Diferencias, por un interés sistémico en la correcta aplicación de las disposiciones del Articulo VI del GATT de 1994 y del Acuerdo Antidumping para evitar el uso abusivo de medidas antidumping como barreras proteccionistas al comercio.

2. En esta oportunidad no quisiéramos pronunciarnos sobre los múltiples reclamos del Brasil, la mayoría de los cuales se refieren a aspectos procesales que nos obligaría a estudiar con más calma la investigación llevada a cabo por los autoridades de Argentina.

3. En cambio, Chile quisiera referirse a uno de los argumentos preliminares de Argentina en su primera comunicación escrita, y es el hecho de que un tribunal internacional se habría pronunciado sobre este mismo asunto, lo cual inhabilitaría al presente Grupo Especial para conocer del reclamo brasileño.

4. Sin conocer detalles del proceso arbitral seguido por ambas partes litigantes bajo las normas de solución de diferencias del MERCOSUR, Chile entiende que por un lado, el Tribunal Arbitral falló en contra del Brasil por no existir disciplinas en materia Antidumping en el marco del MERCOSUR. Y por otro lado, no existen antecedentes de que Brasil haya renunciado a sus derechos ante la OMC, específicamente a invocar el mecanismo de solución de diferencias de este organismo, como podría haber sido el caso si estuviese en aplicación el Protocolo de Olivos que consagra una cláusula sobre opción excluyente de foro.

5. En ese entendido, y no existiendo identidad jurídica, Brasil legítimamente planteó su posterior reclamo en el foro donde existen disciplinas sobre antidumping que imponen obligaciones a Argentina y Brasil y al resto de los miembros de la OMC.

6. En esta disputa se ha invocado la violación o incumplimiento de reglas de la OMC, que es un sistema normativo distinto y que impone derechos y obligaciones propias a sus miembros. Diferentes a los derechos y obligaciones que impone un Acuerdo Bilateral.

7. En consecuencia, Chile estima que el reclamo preliminar de Argentina no tiene fundamento toda vez que Brasil ha invocado ante la OMC, y en particular ante este Grupo Especial, la violación de obligaciones asumidas por Argentina dentro del marco de los Acuerdos de la OMC, en especial el ADA y el GATT de 1994. Y no obligaciones contraídas bajo MERCOSUR. En ese sentido, es este Grupo Especial el foro con competencia para conocer del reclamo presentado por Brasil en su solicitud de establecimiento de Grupo Especial y en su primera comunicación escrita.

ANEXO C-8

DECLARACIÓN ORAL DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LA REUNIÓN
DE LOS TERCEROS CON EL GRUPO ESPECIAL

(26 de septiembre de 2002)

Señor Presidente y miembros del Grupo Especial:

1. Tengo el honor de comparecer ante ustedes para exponer las opiniones de los Estados Unidos como tercero en el presente procedimiento. Como recordará el Grupo Especial, los Estados Unidos han presentado ya una comunicación de tercero en la presente diferencia. Mis observaciones se ceñirán hoy a la petición preliminar de la Argentina de que el Grupo Especial no se pronuncie sobre ninguna de las reclamaciones del Brasil. Nos sometemos de buen grado a las preguntas que el Grupo Especial pueda formularnos en relación con nuestra comunicación escrita o con nuestra intervención de hoy.

Objeción preliminar

2. En su primera comunicación escrita, la Argentina aduce que el Grupo Especial debería abstenerse de formular constataciones respecto de las reclamaciones que el Brasil ha planteado en la presente diferencia. A juicio de los Estados Unidos, no hay en el ESD ninguna base para que el Grupo Especial acepte la petición de la Argentina.

3. La Argentina argumenta que el Grupo Especial debería negarse a formular constataciones respecto de las reclamaciones del Brasil porque este país ha impugnado la medida de la Argentina en el marco de las normas de solución de controversias del MERCOSUR. A juicio de la Argentina, el Grupo Especial debe tener en cuenta esas normas y analizar las consecuencias de la decisión del Brasil de recurrir a ellas. Subsidiariamente, la Argentina aduce que el Grupo Especial debe aplicar el principio de congruencia con los propios actos (*estoppel*) porque el Brasil ha aceptado, con anterioridad, el ámbito de esas normas. Ninguno de esos argumentos proporciona una base para que el Grupo Especial se abstenga de formular constataciones respecto de las reclamaciones del Brasil.

4. En primer lugar, en lo que respecta al primero de los argumentos de la Argentina, los Estados Unidos sostienen respetuosamente que las normas de solución de controversias del MERCOSUR exceden del ámbito del mandato del Grupo Especial. El párrafo 1 del artículo 7 del ESD establece muy claramente que la función de un grupo especial en una diferencia es formular constataciones a la luz de las disposiciones pertinentes de los "acuerdos abarcados" de que se trate. El *Protocolo de Brasilia* no es un acuerdo abarcado, y la Argentina no ha alegado que los actos del Brasil en relación con el *Protocolo* infrinjan una disposición de un acuerdo abarcado, sino que lo que parece alegar es que los actos del Brasil pueden considerarse incompatibles con los términos del *Protocolo*. La alegación de una infracción del *Protocolo* excede del ámbito del mandato del Grupo Especial, y no hay razones para que éste examine esa cuestión, sin perjuicio de que la Argentina pueda plantear la reclamación correspondiente en el marco del sistema de solución de controversias del MERCOSUR.

5. En cuanto al segundo argumento de la Argentina, en el que solicita una constatación de estoppel en contra del Brasil, los Estados Unidos observan en primer lugar que esta alegación subsidiaria parece referirse a las obligaciones del Brasil en el marco del MERCOSUR, y no a una disposición del ESD o a los demás acuerdos abarcados. En consecuencia, la cuestión no está comprendida en el ámbito del mandato del Grupo Especial, y éste carece de base para formular la constatación solicitada. Los Estados Unidos discrepan asimismo de la opinión de la Argentina de que el Grupo Especial puede aplicar lo que este país denomina el principio del estoppel. El hecho de que

la Argentina no cite el texto de ninguna disposición apoyo de su petición se debe a que los Miembros no han convenido en prever la aplicación de ese principio en el sistema de solución de diferencias de la OMC. El término en cuestión no aparece en ningún lugar del texto de ninguna disposición, ni la Argentina cita una disposición cuyo contenido le reconozca la posibilidad de recurrir al tipo de defensa que reivindica.

6. Los Estados Unidos señalan además que la inexistencia de una base en los textos legales se refleja en el hecho de que hasta la fecha ningún grupo especial ha aplicado el principio del estoppel. Además, no existe ninguna base para trasladar al procedimiento de solución de diferencias de la OMC conceptos jurídicos que no tienen su fundamento en el ESD. La inexistencia de una descripción coherente del concepto en los casos en que los grupos especiales han tenido ocasión de analizarlo en el pasado es otro elemento más que pone de relieve que ese concepto carece de base en un texto legal. En *Bananos I*, por ejemplo, el Grupo Especial manifestó que la preclusión (estoppel) sólo podía "resultar del consentimiento expreso o, en casos excepcionales, implícito, de [las partes reclamantes]".[1] En cambio, en *Amianto* y en *Guatemala - Cemento*, los respectivos Grupos Especiales declararon que el principio es pertinente cuando una parte deposita una legítima confianza en seguridades dadas por otra parte y sufre luego las consecuencias negativas derivadas de un cambio de posición de la última.[2] Esa falta de coherencia pone de relieve los riesgos que entraña el intento de identificar conceptos jurídicos supuestamente convenidos fuera de la única fuente *convenida* por todos los Miembros, el texto del propio ESD.

7. Por último, la remisión de la Argentina al párrafo 2 del artículo 3 del ESD en apoyo de su posición está fuera de lugar. Según se declara en él expresamente, el párrafo 2 del artículo 3 se refiere únicamente a las normas *de interpretación* utilizadas para aclarar las disposiciones vigentes del *Acuerdo sobre la OMC*. La petición de la Argentina de que el Grupo Especial se abstenga de examinar las reclamaciones del Brasil no plantea una cuestión relativa a la interpretación adecuada de una disposición del *Acuerdo sobre la OMC*.

8. Por las razones expuestas, los Estados Unidos instan respetuosamente al Grupo Especial a que desestime la petición de la Argentina de que el Grupo no examine las reclamaciones del Brasil.

Conclusión

9. Con esto finalizo mi exposición. Muchas gracias por esta oportunidad de exponer nuestras opiniones.

[1] *Véase* la *Comunicación de tercero presentada por las Comunidades Europeas*, en la que se cita el informe del Grupo Especial sobre los *Regímenes de importación del banano de algunos Estados miembros de la CEE*, DS/32/R, informe no adoptado, párrafo 361.

[2] *Véanse* el informe del Grupo Especial sobre *Comunidades Europeas - Medidas que afectan al amianto y a los productos que contienen amianto*, WT/DS135/R, adoptado el 5 de abril de 2001, párrafo 8.60 (no se reproducen las citas), e informe del Grupo Especial sobre *Guatemala - Medida antidumping definitiva aplicada al cemento Portland gris procedente de México*, WT/DS156/R, adoptado el 17 de noviembre de 2000, párrafos 8.23 y 8.24. Cabría también afirmar que esos Grupos Especiales describen el concepto de "perjuicio derivado de la legítima confianza".

ANEXO C-9

COMUNICACIÓN ORAL DEL CANADÁ EN CALIDAD DE TERCERO

(26 de septiembre de 2002)

Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, deseo expresar el reconocimiento del Canadá a los miembros del Grupo Especial y agradecerles que hayan aceptado asumir la responsabilidad de ayudar a las partes a resolver la presente diferencia.

El Canadá presentó el 5 de septiembre una comunicación escrita de tercero en el presente asunto. En esa comunicación, los argumentos del Canadá se ceñían a la interpretación de los párrafos 2 y 3 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping.

Además, el 23 de agosto, el Canadá remitió al Presidente una carta, en la que exponía su posición con respecto a la cuestión de procedimiento que se había planteado entre las partes en relación con la publicación por una parte de sus propias comunicaciones escritas.

Como se recordará, en su comunicación escrita de tercero, el Canadá indicaba que tal vez deseara plantear otras cuestiones sustantivas en un momento posterior. Sin embargo, el Canadá ha decidido limitar sus comunicaciones de tercero en el presente asunto a lo ya expuesto en sus dos anteriores comunicaciones escritas al Grupo Especial.

No obstante, a pesar de que no desea plantear en este momento otras cuestiones sustantivas, el Canadá está dispuesto a someterse de buen grado a las preguntas del Grupo Especial o de las partes acerca de su posición.

Muchas gracias, señor Presidente.

ANEXO C-10

DECLARACIÓN ORAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
EN CALIDAD DE TERCERO

26 de septiembre de 2002

I. INTRODUCCIÓN

1. Las Comunidades Europeas (las "CE") agradecen al Grupo Especial esta oportunidad de exponer oralmente su postura en la presente diferencia.

2. En su comunicación escrita, las CE han limitado sus observaciones a determinadas cuestiones de interpretación jurídica. Más concretamente, las CE han alegado que:

- el Grupo Especial debería rechazar la objeción preliminar de la Argentina basada en la existencia de un laudo arbitral dictado por un Tribunal Arbitral Ad Hoc del MERCOSUR en relación con la misma medida antidumping;

- en la medida en que se plantee la cuestión relativa a la **Reclamación 21**, el Grupo Especial debería confirmar la interpretación del párrafo 9 del artículo 6 realizada por el Grupo Especial que examinó el asunto *Guatemala - Cemento II*, en el sentido de que la obligación de informar establecida en esa disposición no puede cumplirse simplemente dando acceso al expediente;

- el párrafo 4 del artículo 2 no aborda la cuestión planteada por el Brasil en la **Reclamación 24**;

- contrariamente a las **Reclamaciones 28 y 29** del Brasil, la imposición de un derecho variable igual a la diferencia entre el valor normal establecido durante la investigación y los precios de exportación de los envíos realizados tras la imposición de los derechos no es incompatible con los párrafos 2 y 3 del artículo 9;

- la expresión "importaciones objeto de dumping" del artículo 3 puede entenderse referida a todas las importaciones del país en cuestión, contrariamente a las **Reclamaciones 32, 33, 34, 35 y 36** del Brasil; y

- contrariamente a la **Reclamación 41** del Brasil, el término "proporción importante" del párrafo 1 del artículo 4 no significa un mínimo del 50 por cierto de la producción nacional, sino una proporción significativa de la misma, que puede ser inferior al 50 por ciento.

3. En nuestra declaración de esta mañana no repetiremos las observaciones ya realizadas en nuestra comunicación escrita. En lugar de ello, comentaremos brevemente algunos de los argumentos planteados por los otros terceros en esta diferencia.

II. ARGUMENTO

A. EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 18 DEL ESD

4. Las CE coinciden con el Canadá[1] y con los Estados Unidos[2] en que el párrafo 2 del artículo 18 del *ESD* no impide al Brasil poner sus comunicaciones escritas a disposición del público.

5. No obstante, las CE recuerdan que el derecho de todo Miembro a hacer públicas sus comunicaciones está sujeto a la tercera oración del párrafo 2 del artículo 18, que dispone que "[l]os Miembros considerarán confidencial la información facilitada al grupo especial [...] por otro Miembro a la que éste haya atribuido tal carácter". Por tanto, en la medida en que la comunicación de un Miembro incorpore o haga referencia a información confidencial facilitada al grupo especial por otra parte en la diferencia, tal información debería omitirse en la versión hecha pública o sustituirse por un resumen no confidencial solicitado por la parte en cuestión de acuerdo con la cuarta oración del párrafo 2 del artículo 18. Entendemos, con todo, que esta cuestión no se plantea aquí, pues la reclamación de la Argentina se refería a la primera comunicación del Brasil al Grupo Especial.

6. Asimismo, en la medida en que la comunicación del Brasil incluyera información facilitada con carácter confidencial por las autoridades investigadoras argentinas al Gobierno del Brasil durante la investigación inicial, el Gobierno del Brasil estaría obligado a atenerse a las disposiciones pertinentes de la legislación argentina que protejan tal confidencialidad. No obstante, entendemos que esta cuestión tampoco se plantea en la presente diferencia. En cualquier caso, no sería de la competencia del Grupo Especial el hacer cumplir las disposiciones de la legislación argentina en materia de confidencialidad.

7. Por último, las CE coinciden también con los Estados Unidos[3] en que el Grupo Especial debería rechazar la solicitud de la Argentina de que el Grupo Especial exprese sus "opiniones" sobre la correcta interpretación del párrafo 2 del artículo 18 del *ESD*.[4] Como señalaron los Estados Unidos[5], emitir tal opinión consultiva excedería del ámbito del mandato del Grupo Especial.

B. "LA COSA JUZGADA" Y EL ARTÍCULO 18 DE LA CONVENCIÓN DE VIENA

8. El Paraguay ha aducido que, en virtud del *Protocolo de Brasilia*, el laudo de un Tribunal Arbitral Ad Hoc es vinculante para las partes en el arbitraje y tiene fuerza de "cosa juzgada" entre éstas, por lo que al Brasil no le estaría permitido plantear la presente diferencia.[6]

9. Como explicamos en nuestra comunicación escrita, las CE no comparten esa opinión. La existencia de "cosa juzgada" exige la identidad entre las reclamaciones. La medida examinada en esta diferencia coincide con la abordada por el Tribunal Arbitral Ad Hoc en el caso citado por la Argentina y el Paraguay, pero las reclamaciones son diferentes porque entrañan fundamentos jurídicos distintos. Las reclamaciones planteadas ante este Grupo Especial están basadas en el *Acuerdo sobre*

---

[1] Carta del Canadá al Grupo Especial de 23 de agosto de 2002.

[2] Comunicación de los Estados Unidos, párrafo 18.

[3] *Ibid*.

[4] Carta de la Argentina al Grupo Especial de 27 de agosto de 2002.

[5] Comunicación de los Estados Unidos, párrafo 18.

[6] Comunicación del Paraguay, párrafo 7.

la OMC. En cambio, las alegaciones sobre las que se pronunció el Tribunal Arbitral Ad Hoc se basaban en la normativa del MERCOSUR.

10. Además, las CE recuerdan que, según el párrafo 1 del artículo 23 del *ESD*:

> Cuando traten de reparar el incumplimiento de obligaciones u otro tipo de anulación o menoscabo de las ventajas resultantes de los acuerdos abarcados, o un impedimento al logro de cualquiera de los objetivos de los acuerdos abarcados, los Miembros recurrirán a las normas y procedimientos del presente Entendimiento, que deberán acatar.

11. Esto sugiere que los Miembros de la OMC no tienen libertad para someter a un órgano ajeno a la OMC la resolución de una diferencia relativa a sus derechos y obligaciones con arreglo al *Acuerdo sobre la OMC*. Por tanto, aunque el artículo 25 del *ESD* permite a los Miembros recurrir al arbitraje como medio alternativo de solución de diferencias, esa disposición prevé que tal arbitraje tendrá lugar "en" la OMC.

12. El Paraguay sugiere también que, al plantear esta diferencia, el Brasil habría actuado en contravención del artículo 18 de la *Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados*, puesto que el *Protocolo de Olivos* (que, en el párrafo 2 de su artículo 1, requiere que el reclamante elija entre plantear la diferencia ante un grupo especial de la OMC o ante un Tribunal Arbitral del MERCOSUR) se había firmado antes de que el Brasil planteara la presente diferencia, aunque todavía no ha entrado en vigor.[7] No obstante, como señalamos en nuestra comunicación escrita, parece que, incluso si el *Protocolo de Olivos* hubiera entrado ya en vigor, no sería aplicable a los hechos en cuestión. El artículo 50 de ese Protocolo establece que:

> Las controversias en trámite iniciadas de acuerdo con el régimen del Protocolo de Brasilia se regirán exclusivamente por el mismo hasta su total conclusión.

13. Parece que, siguiendo la misma lógica, e incluso *a fortiori*, a partir de la fecha de su entrada en vigor, el *Protocolo de Olivos* no puede aplicarse a diferencias que ya han sido resueltas en virtud del *Protocolo de Brasilia* a la fecha de entrada en vigor del *Protocolo de Olivos*. Si el *Protocolo de Olivos*, incluido el párrafo 2 de su artículo 1, no resulta aplicable a la presente diferencia, está claro que, al plantearla ante este Grupo Especial, el Brasil no puede frustrar el objeto y fin de ese Protocolo. Las CE consideran que, en vista de lo anterior, no es necesario que este Grupo Especial aborde la cuestión de si, al plantear una diferencia en contravención del artículo 18 de la *Convención de Viena*, la actuación de un Miembro sería incompatible con el párrafo 10 del artículo 3 del *ESD*.

C. EL PÁRRAFO 7 DEL ARTÍCULO 5 DEL ACUERDO ANTIDUMPING

14. Las CE coinciden con los Estados Unidos en que el mero hecho de que el período de referencia usado a los efectos de la determinación de la existencia de daño no coincida con el usado para la determinación de la existencia de dumping no constituye *per se* una violación del párrafo 7 del artículo 5 del *Acuerdo Antidumping*.[8] Esa disposición se refiere exclusivamente al momento en que se realiza el examen de la existencia de dumping y de daño, y no al alcance de tal examen.

Gracias por la atención prestada.

---

[7] *Ibid*., párrafo 9.

[8] Comunicación de los Estados Unidos, párrafos 2 a 6.

ANEXO C-11

RESPUESTAS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS A
LAS PREGUNTAS DEL GRUPO ESPECIAL

3 de octubre de 2002

Pregunta 1

Sírvanse comentar la distinción que se hace aparentemente entre las expresiones "comunicaciones por escrito" ("*written submissions*") y "sus posiciones" ("*statements of [a Member's] own positions*") que figuran en las dos primeras frases del párrafo 2 del artículo 18 del ESD.

Respuesta

El *ESD* no restringe de ninguna manera la forma, el contenido ni la extensión de las "posiciones" a que se hacen referencia en la segunda frase del párrafo 2 del artículo 18. En consecuencia, un Miembro es libre de presentar sus "posiciones" revelando el contenido de las comunicaciones por escrito presentadas al grupo especial.

Pregunta 2

Sírvanse explicar cómo trata su autoridad investigadora las importaciones a efectos de la investigación de la existencia de daño. En particular, ¿presume su autoridad investigadora desde el comienzo que todas las importaciones son objeto de dumping? Si fuese así, ¿cuál es el fundamento de esta presunción, y permite dicha presunción la prueba en contrario en algunas circunstancias? Por ejemplo, ¿equivale a una prueba en contrario de dicha presunción el hecho de que la autoridad constate que las importaciones originarias de un determinado exportador no son objeto de dumping?

Si su autoridad investigadora no presume desde el comienzo que todas las importaciones son objeto de dumping, ¿cómo distingue esa autoridad entre las importaciones objeto de dumping y las que no son objeto de dumping durante la investigación sobre la existencia de daño?

Si su autoridad investigadora determina que las importaciones originarias de un determinado exportador no son objeto de dumping, ¿se excluyen las importaciones originarias de ese exportador a efectos de la determinación de la existencia de daño conforme al artículo 3?

Respuesta

De conformidad con el párrafo 7 del artículo 5 del *Acuerdo Antidumping*, las autoridades de las CE examinan simultáneamente la existencia del dumping y del daño. El examen del daño debe, si es necesario, basarse en el supuesto de que todas las importaciones sujetas a la investigación son objeto de dumping. Si las autoridades no partiesen de ese supuesto, sería imposible examinar la existencia del daño simultáneamente con el examen de la existencia del dumping. En cambio, las autoridades tendrían que esperar hasta que el examen de la existencia del dumping hubiese concluido y se hubiese formulado una determinación definitiva respecto de la existencia del dumping antes de comenzar el examen de la existencia del daño.

Si, como resultado del examen de la existencia del dumping, las autoridades de las CE formulan una determinación negativa de la existencia del dumping respecto de un país, se pondrá fin a

la investigación respecto de ese país y las importaciones originarias de ese país "se separarán" de las importaciones de los otros países sujetos a investigación a efectos de la determinación de la existencia del daño.

Como se explica en los párrafos 41 a 44 de la primera comunicación de las CE, éstas consideran que la determinación de la existencia del dumping se formula respecto a países y, por lo tanto, las autoridades tienen derecho de tratar todas las importaciones procedentes de un determinado país como "importaciones objeto de dumping" a los efectos del artículo 3, incluso si se determina que uno o más exportadores no hacen dumping.

La exclusión del examen de la existencia del daño de las importaciones originarias de los exportadores que se ha constatado que no practican el dumping, usualmente requeriría un nuevo examen sustancial de la existencia del daño, en contravención de lo dispuesto en el párrafo 7 del artículo 5. Ello constituye una razón adicional para considerar que, como arguyen las CE, la expresión "importaciones objeto de dumping" del artículo 3 debe interpretarse en el sentido de que incluye todas las importaciones originarias de un país.

Pregunta 3

¿Es posible excluir las importaciones que no son objeto de dumping a efectos de una investigación sobre la existencia de daño y al mismo tiempo cumplir la obligación prevista en el párrafo 7 del artículo 5 de examinar las pruebas de la existencia del dumping y del daño "simultáneamente"? Sírvanse explicarlo. ¿Significa la palabra "simultáneamente" del párrafo 7 del artículo 5 que la determinación de la existencia del dumping y del daño se debe realizar exactamente en el mismo momento? Sírvanse explicarlo.

Respuesta

Véase la respuesta a la pregunta 2, *supra*.

ANEXO C-12

RESPUESTAS DE LOS ESTADOS UNIDOS A LAS PREGUNTAS
DEL GRUPO ESPECIAL A LOS TERCEROS

17 de octubre de 2002

Pregunta 1

Sírvanse comentar la distinción que se hace aparentemente entre las expresiones "comunicaciones por escrito" ("*written submissions*") y "sus posiciones" ("*statements of [a Member's] own positions*") que figuran en las dos primeras frases del párrafo 2 del artículo 18 del ESD.

1. La segunda frase del párrafo 2 del artículo 18 del *Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias* ("ESD") reconoce que los Miembros tienen derecho a hacer públicas sus posiciones ("*statements*"). Esa disposición no establece ningún límite a la forma o la manera en que un Miembro puede hacerlo, inclusive haciendo públicas íntegramente sus "comunicaciones" ("*submissions*"). La divulgación pública de las comunicaciones contribuye a una mejor comprensión pública del sistema de solución de diferencias de la OMC y al apoyo al mismo.

2. El significado corriente del término inglés "*statement*" respalda la interpretación de los Estados Unidos. El *New Shorter Oxford English Dictionary* define ese término, en la parte pertinente, como "A formal written or oral account, setting down facts, an argument, a demand, etc.; *esp.* an account of events made to the police or in a court of law" (una descripción formal, escrita u oral, en la que se establecen hechos, un argumento, una petición, etc.; especialmente una descripción de hechos formulada ante la policía o ante un tribunal).[1] Esto es, en lo esencial, lo que un Miembro hace cuando prepara una comunicación en una diferencia en el marco de la OMC: presenta una descripción formal por escrito en la que se exponen argumentos en apoyo de su posición. El hecho de que estas "statements" también constituyan "*submissions*" ("comunicaciones") cuando los Miembros las presentan ante grupos especiales no significa que dejen de ser "*statements*" que pueden darse a conocer al público.

3. Por último, vale la pena observar que habitualmente los grupos especiales adjuntan las comunicaciones escritas de las partes (o resúmenes detallados de las mismas) a las versiones finales de sus informes escritos, antes de dar a conocer los informes al público. Si la interpretación que hace la Argentina del párrafo 2 del artículo 18 fuese correcta, los grupos especiales habrían infringido el párrafo 2 del párrafo 18 del ESD cada vez que han hecho esto.

Pregunta 2

Sírvanse explicar cómo trata su autoridad investigadora las importaciones a efectos de la investigación de la existencia de daño. En particular, ¿presume su autoridad investigadora desde el comienzo que todas las importaciones son objeto de dumping? Si fuese así, ¿cuál es el fundamento de esta presunción, y permite dicha presunción la prueba en contrario en algunas circunstancias? Por ejemplo, ¿equivale a una prueba en contrario de dicha presunción el hecho de que la autoridad constate que las importaciones originarias de un determinado exportador no son objeto de dumping?

[1] The New Shorter Oxford English Dictionary 3037 (1993).

Si su autoridad investigadora no presume desde el comienzo que todas las importaciones son objeto de dumping, ¿cómo distingue esa autoridad entre las importaciones objeto de dumping y las que no son objeto de dumping durante la investigación sobre la existencia de daño?

Si su autoridad investigadora determina que las importaciones originarias de un determinado exportador no son objeto de dumping, ¿se excluyen las importaciones originarias de ese exportador a efectos de la determinación de la existencia de daño conforme al artículo 3?

4. La autoridad investigadora de los Estados Unidos no establece ninguna presunción respecto de si las importaciones son objeto de dumping (o están subvencionadas) al comienzo de la investigación. En la determinación preliminar de la existencia de daño, la autoridad investigadora de los Estados Unidos formula una determinación respecto de las importaciones *presuntamente* objeto de dumping, sin suponer que las importaciones son de hecho objeto de dumping. En la determinación definitiva sobre la existencia de daño, la autoridad investigadora de los Estados Unidos excluye del volumen de las importaciones objeto de dumping las mercancías respecto de las cuales se ha determinado que tienen un nivel de dumping cero o *de minimis*.

Pregunta 3

¿Es posible excluir las importaciones que no son objeto de dumping a efectos de una investigación sobre la existencia de daño y al mismo tiempo cumplir la obligación prevista en el párrafo 7 del artículo 5 de examinar las pruebas de la existencia del dumping y del daño "simultáneamente"? Sírvanse explicarlo. ¿Significa la palabra "simultáneamente" del párrafo 7 del artículo 5 que la determinación de la existencia del dumping y del daño se debe realizar exactamente en el mismo momento? Sírvanse explicarlo.

5. El párrafo 7 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping establece:

> Las pruebas de la existencia del dumping y del daño se examinarán simultáneamente: a) en el momento de decidir si se inicia o no una investigación y b) posteriormente, en el curso de la investigación, a partir de una fecha que no será posterior al primer día en que, de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo, puedan aplicarse medidas provisionales.

6. Abordaremos en primer lugar la segunda pregunta del Grupo Especial: la utilización del término "simultáneamente" en el párrafo 7 del artículo 5 no significa que un Miembro deba realizar sus determinaciones de la existencia del dumping y del daño en el mismo momento. La obligación prevista en el párrafo 7 del artículo 5 consiste en "examinar" simultáneamente las pruebas de la existencia del dumping y del daño, y no en formular "determinaciones" simultáneas de la existencia del dumping y del daño. El término "determinación" ni siquiera aparece en el párrafo 7 del artículo 5. Además, la obligación de examinar simultáneamente tanto la existencia del dumping como la de daño se limita a la decisión de iniciar o no una investigación, y luego aparece nuevamente sólo después de la fecha en la que pueden aplicarse medidas provisionales.

7. Con respecto a la primera pregunta del Grupo Especial, sí es posible excluir importaciones que no son objeto de dumping a efectos de la determinación de la existencia del daño sin dejar de cumplir la obligación del párrafo 7 del artículo 5 de examinar "simultáneamente" las pruebas de la existencia del dumping y del daño. Es inherente a la exclusión de las importaciones que no son objeto de dumping a efectos de la determinación de la existencia del daño el hecho de que la determinación definitiva de la existencia del dumping se realice antes de la determinación definitiva de la existencia del daño. No obstante, el hecho de que las *determinaciones* se efectúen en momentos diferentes no impide el *examen* simultáneo de las pruebas de la existencia del dumping y del daño "en el curso de la

investigación". Si la autoridad investigadora de un Miembro examina simultáneamente las pruebas de la existencia del dumping y del daño "en el curso de la investigación", la autoridad cumple el requisito del párrafo 7 del artículo 5. Como se observó en la respuesta a la pregunta 2, no hay una obligación adicional de formular simultáneamente las determinaciones de la existencia del dumping y del daño.

_____

. /.